CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

2000

LDA. MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
PRESIDENTA

SALA PRIMERA (CIVIL)

LDO. ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK
PRESIDENTE

DR. ELIGIO A. SALAS **LDO. JOSÉ A. TROYANO**

LDA. SONIA F. DE CASTROVERDE
SECRETARIA

SALA SEGUNDA (PENAL)

LDO. CÉSAR PEREIRA BURGOS
PRESIDENTE

LDO. JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. **LDA. GRACIELA J. DIXON C.**

LDO. MARIANO E. HERRERA E.
SECRETARIO

SALA TERCERA (CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y LABORAL)

LDA. MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
PRESIDENTA

DR. ARTURO HOYOS **LDO. ADÁN ARNULFO ARJONA L.**

LDA. JANINA SMALL
SECRETARIA

SALA CUARTA (NEGOCIOS GENERALES)

LDA. MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
PRESIDENTA

LDO. ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK **LDO. CÉSAR PEREIRA BURGOS**

DR. CARLOS H. CUESTAS G.
SECRETARIO GENERAL

ÍNDICE

ÍNDICE I

PLENO 1

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 2

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LICENCIADO EDWIN CEDEÑO RODRÍGUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE DULCÍSIMA DALILA CASTILLO DE LEÓN, CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE REFORMA AGRARIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 2

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LICENCIADO ALEJANDRO QUINTERO DIXON, EN REPRESENTACIÓN DE ETELVINA MORENO GONZALEZ, CONTRA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FABREGA P. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 3

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR BERRIOS Y BERRIOS EN REPRESENTACIÓN DE VICTOR LUIS BERRIO ANDERSON CONTRA EL JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL (APELACION). MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 4

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LCDO. RANDOLF LAWSON EN REPRESENTACION DE DILIAM BEATRIZ SYRES DE HERRERA CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN EL RESUELTO DE 26 DE ABRIL DE 2000 EMITIDO POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 6

ACCION DE AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA LCDA. ALMA L. CORTES A., EN REPRESENTACION DE PROCESADORA MARPESCA S. A., CONTRA EL MINISTRO DE DESARROLLO AGRPECUARIO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 7

ACCION DE AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR BERRIOS Y BERRIOS, EN REPRESENTACION DE GABRIEL ARIEL LAWSON, CONTRA EL JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CTO. JUDICIAL, APELACION. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 9

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR MORGAN & MORGAN, EN REPRESENTACIÓN DE HAMILTON TELECOMMUNICATIONS LIMITED, CONTRA EL JUEZ DÉCIMO DE CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, TRES (3) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 12

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LCDO. JOSE E. HERRERA, EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE MARCELINA MURILLO VEGA, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCION N° APL-026-RA-2000 DE 23 DE MAYO DE 2000, EMITIDA POR EL MINISTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRES (3) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 15

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR SOLÍS, ENDARA, DELGADO Y GUEVARA, EN REPRESENTACIÓN DE GANADERA EL TECAL S. A., CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 28 DE ENERO DE 2000, EMITIDA POR EL JUEZ DÉCIMO TERCERO DE CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, TRES (3) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 16

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA FIRMA FORENSE MARTÍNEZ BARSALLO Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE BEVERLY TRADING INC., CONTRA LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN NO. 2. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 19

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LCDO. ANTONIO VARGAS, EN REPRESENTACION DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMA, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). . . 20

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA FIRMA ASESORES JURÍDICOS ASOCIADOS, EN REPRESNTACIÓN DE MIGDALIA EDITH ORTEGA DE MENDOZA E ISMAEL CARLOS MENDOZA RUÍZ, CONTRA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO GONZÁLEZ R. PANAMÁ, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000). 24

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA FIRMA PADILLA Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACION DE CORPORACION UNIVERSAL DE NFORMACION (JMJ), S. A. CONTRA LA JUNTA DE CONCILIACION Y DECISION N° 6. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). . . 30

ACCION DE AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO LA LICENCIADA MARIA EDUARDA CORDOBA CHEN, EN REPRESENTACION DE CLEMENTE MALCA DWEK, CONTRA EL JUEZ DECIMOCUARTO DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CTO. JUDICIAL, APELACION. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CUATRO (4) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 32

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR BERRIOS Y BERRIOS, EN REPRESENTACIÓN DE BANCO SANTANDER (PANAMA), S. A. CONTRA EL JUEZ QUINTO DE CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 35

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LICENCIADO ABILIO ROLANDO RODRIGUEZ, EN REPRESENTACION DE PRODUCTOS IBIS, S. A. CONTRA EL TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 37

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LICENCIADO ROGELIO CRUZ RÍOS, EN BENEFICIO DE JOSÉ CASTRILLON HENAO CONTRA EL ÓRGANO EJECUTIVO Y EL MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 38

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LICENCIADO DAVID ELIO CUEVAS, EN REPRESENTACIÓN DE FRANCISCO SOLÍS GÓMEZ, CONTRA EL JUEZ OCTAVO DE CIRCUITO, PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). . . . 39

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR CABLE & WIRELESS PANAMÁ, S. A., CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA PJ-6- N° 20-2000, FALLO ORAL INMEDIATO DEL 9 DE MAYO DE 2000 DE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 6. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ M. FAUNDES R. PANAMÁ, DIEZ (10) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 41

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR MONCADA & MONCADA, EN REPRESENTACIÓN DE SAVOY LINE FILMS INC., CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA PJ-4 N° 19-2000, DEL 24 DE ABRIL DE 2000, EMITIDA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 4. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIEZ (10) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 43

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR CARLOS G. QUIROS

A. EN REPRESENTACIÓN DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, JOAQUINA H. DE TORRIJOS R. L. CONTRA LA JUNTA DE CONCILIACION Y DECISION N° 8 DE COCLE Y VERAGUAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, ONCE (11) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 44

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PRESENTADO POR EL LCDO. HÉCTOR ZAVALA, EN REPRESENTACIÓN DE DAMARIS ZAVALA DE QUINTERO, CONTRA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN PROVIDENCIA DE 11 DE FEBRERO DE 2000, EMITIDA POR EL FISCAL SEGUNDO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, CATORCE (14) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 46

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR CANDANEDO & CANDANEDO, EN REPRESENTACIÓN DE VENTAS Y MERCADEO, S. A. CONTRA EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, DIECISEIS (16) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). . . . 46

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA LICENCIADA INDIRA ANAYANSI BERRÍOS DÍAZ, EN REPRESENTACIÓN DE BANCO SANTANDER DE PANAMA, S. A., CONTRA EL JUEZ QUINTO DE CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 48

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR MONCADA & MONCADA, EN REPRESENTACIÓN DE SAVOY LANE FILMS, CONTRA LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 16. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 50

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LIC. ORLANDO RAMOS SÁNCHEZ, EN REPRESENTACIÓN DE SONIA BALLESTEROS, CONTRA EL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000). 52

ACCION DE AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LICDO. JUAN MANUEL CEDEÑO, EN REPRESENTACION DE MEJUCAL INVESTMENT S. A., CONTRA ORDEN DE HACER PROFERIDA POR EL ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 53

ACCION DE AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES, PRESENTADO POR LA FIRMA CARRERA Y ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE IBERAMICA S. A., CONTRA LA DIRECTORA REGIONAL DE TRABAJO DE PANAMÁ OESTE. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 55

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR MENDOZA, VALLE & CASTILLO EN REPRESENTACIÓN DE COMPAÑÍA MARITIMA DE PANAMA, S. A. CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 57

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LIC. RAMÓN FRANCISCO CASTELLANOS, EN REPRESENTACIÓN DE PADAFRONT LINEA DE TRANSPORTE Y TURISMO, S. A., CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N 86 DE 7 DE ABRIL DE 2000, EMITIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000). 62

RECURSO DE HABEAS CORPUS 64

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ROBERTO ANTONIO FACIO MORENO CONTRA LA FISCAL DELEGADA DE DROGAS DE HERRERA Y LOS SANTOS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 64

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAV0R DE CUTBER ANDERSON BOXILL CONTRA EL FISCAL

CUARTO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000). 67

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS ANTONIO PANEZO THOMAS CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 71

HABEAS CORPUS DE EYBAR JOSUÉ ALABARCA CONTRA EL JUEZ SEGUNDO DE CIRCUITO PENAL DE COLÓN. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, DOS (2) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 72

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE YAIRCINIO ABDIEL FLETCHER DE LA ESPADA CONTRA LA FISCAL PRIMERA DE CIRCUITO DE COLÓN, APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO GONZÁLEZ. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000). . . . 73

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE NICOLÁS BONILLA BOLAÑOS CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). . . . 76

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE LU (USUAL) LI KAM LUN KIN LUN CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 76

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALFREDO VICENTE LAMMIE GRAHAM CONTRA EL FISCAL SEGUNDO SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRES (3) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 77

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE BLADIMIR LEAL ALVARADO CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, TRES (3) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 80

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MIGUEL A. LEDEZMA CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TRES (3) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 82

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE SAUL ANTONIO APARICIO DEL ROSARIO CONTRA DEL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 83

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE SIEGRID MCKEE Y SHEILA MCKEE CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIAZADO EN DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 83

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE AROSEMENA STANZIOLA MARTINEZ CONTRA FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 86

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EPIFANIO ALBERTO CORELLA CONTRA EL JUEZ DE LA ÑINEZ Y ADOLESCENCIA DE CHIRIQUI, APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO GONZÁLEZ. PANAMÁ, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000). 88

HÁBEAS CORPUS INTERPUESTO A FAVOR DE GRACIELA CORTEZ CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 89

HABEAS CORPUS PRESENTADO A FAVOR DE JUAN CARLOS GODOY EN PROCESO QUE SE LE SIGUE POR HOMICIDIO Y LESIONES PERSONALES EN PERJUICIO DE CARLOS ANTONIO ROUSE LOZANO, ESTON AURELIO DELGADO ALFONSO Y AVELARDO CHARLES. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL

(2000). 91

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ELI GARCIA CERVANTES Y TOMAS RODRIGUEZ PEREZ CONTRA EL FISCAL SEGUNDO DE CIRCUITO DE CHIRIQUI, APELACION. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 92

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS ENRIQUE RENTERIA GRANADOS CONTRA EL JUEZ SEGUNDO PENAL DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA, APELACION. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 94

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RICARDO MARÍN AMORES CONTRA EL FISCAL PRIMERO DE CIRCUITO DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL, CON SEDE EN CHORRERA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIEZ (10) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 96

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE JIMMY IVAN SAUCEDO CONTRA EL FISCAL DELEGADO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS DE HERRERA Y LOS SANTOS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, DIEZ (10) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 99

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MARIA EUGENIA CORDOBA CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, ONCE (11) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 101

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FRANCISCO THOMPSON CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, ONCE (11) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). . . 105

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARMEN ADAMES CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 108

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ZULEYCA FALCON CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 110

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JAVIER A. GONZALEZ TESSIS CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICIA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000). 111

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE APOLINAR BATISTA BIDO, CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, DIEZ (10) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 112

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ERWIN RUJANO AROSEMENA CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÈ MANUEL FAÙNDES. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 113

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ABILIO GONZÁLEZ PERALTA CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 114

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EUSTORGIO RIVERA PELAEZ Y DIOMEDES A. MONTENEGRO CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FABREGA Z. PANAMA, VEINTIDOS (22) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 115

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RIGOBERTO RODRIGUEZ CONTRA LA FISCALIA

SEGUNDA DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CHIRIQUI (APELACION). MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTITRES (23) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 118

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FERNANDO LÓPEZ ESCOBAR CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 120

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ELIECER JAVIER LEREN VEGA CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 122

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE HIPÓLITO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, ELIGIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ Y JULIO ELÍAS JALLER GONZÁLEZ, CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 124

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS PRESENTADA POR MARTÍN CAICEDO MARTÍNEZ A FAVOR DE ELCELIO ESPINO CONTRA LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGA. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 125

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FERNANDO ALBERTO CRUZ BRAVO CONTRA LA JUEZ PRIMERA DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA DE PANAMA. APELACION. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 126

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE HECTOR MANUEL AROSEMENA CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 127

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LIZ EVELYN SANTAMARIA CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 127

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CLARA BEATRÍZ ATENCIO CONTRA LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ, APELACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000). 131

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ELIZABETH CUESTA CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000). 133

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 136

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LCDO. ROGELIO CRUZ RIOS CONTRA EL ARTÍCULO 2508-A DEL CODIGO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, PRIMERO (1) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 136

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LCDO. JORGE MAXIMINO SANTOS VEGA CONTRA EL ARTICULO 1399 DEL CODIGO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 144

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LCDO. JUAN MATERNO VASQUEZ DE LEON CONTRA EL DECRETO LEY NO. 8 DE 2 DE JULIO DE 1997. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 145

DEMANDAS DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADAS POR LOS LICENCIADOS JOSÉ HERRERO VICTORIA Y NELSON HERBERT CONTRA LAS FRASES "EL CUAL NO PODRÁ SER INFERIOR AL DEL AÑO ANTERIOR", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY 7 DE 1997 Y "Y NO PODRÁN SER INFERIOR AL MONTO TOTAL DE LAS PARTIDAS DEL AÑO ANTERIOR" CONTENIDA EN EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY 11 DE 1981. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, NUEVE (9) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 146

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR EL LCDO. MIGUEL ROBERTO VANEGAS EN CONTRA DE VARIAS DISPOSICIONES DE LA LEY 14 DE 26 DE MAYO DE 1993, QUE INSTITUYEN LOS DENOMINADOS "CUPOS" O "CERTIFICADOS DE OPERACION". MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIEZ (10) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 155

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR EL LCDO. CARLOS R. AYALA, EN REPRESENTACION DE FREDESVINCO CAMARGO, CONTRA LA RESOLUCION NO. 122 DE 27 DE OCTUBRE DE 1999, EMITIDA POR EL CONSEJO DE GABINETE. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, ONCE (11) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 164

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR AROSEMENA & AROSEMENA, EN REPRESENTACIÓN DE JUDITH DE LOS RÍOS BAZÁN, CONTRA EL ARTÍCULO 1977-A DEL CÓDIGO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000). 165

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ROGELIO CRUZ RÍOS, EN NOMBRE PROPIO, CONTRA DOS FRASES DEL ARTÍCULO 2508-A DEL CÓDIGO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 166

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR TILE & ROSAS, EN REPRESENTACIÓN DE PRODUCTOS DE PRESTIGIO, S. A. CONTRA LOS ARTÍCULOS 9 Y 10 DEL DECRETO EJECUTIVO N 89 DE 8 DE JUNIO DE 1993, QUE REGLAMENTA LA LEY 24 DE 1992. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000). 167

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LCDO. ROGELIO GALVEZ, EN REPRESENTACION DE COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. CONTRA LA RESOLUCION DISTINGUIDA COMO AUTO N 2914 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 1999, PROFERIDA POR EL JUEZ TERCERO DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 168

TRIBUNAL DE INSTANCIA 174

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA FIRMA ROSAS Y ROSAS, EN REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACION PANAMEÑA DE HOTELES (APATEL), CONTRA EL ARTICULO 24 DEL DECRETO EJECUTIVO NO.73 DE 8 DE ABRIL DE 1995, SGUN LA MODIFICACION INTRODUCIDA POR EL DECRETO EJECUTIVO NO. 197 A DE 6 DE OCTUBRE DE 1995. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FABREGA. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 174

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES A FAVOR DE DOMITILA PINTO CONTRA EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, AUTO N°357 DE 27 DE AGOSTO DE 1999. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, TRES (3) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 175

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LCDO. CARLOS SUMOSA, EN REPRESENTACION DE MARIA BAGATELAS DE PAPADIMITRIU, CONTRA LA ORDEN DE NO HACER VERBAL DICTADA POR LA JUEZ OCTAVA DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA, EN APELACION. (MANIFESTACION DE IMPEDIMENTO). MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS

MIL (2000). 176

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LCDO. AGUSTIN SANJUR OTERO, EN REPRESENTACION DE MARIA DE LOURDES BARB, CONTRA EL JUEZ SEXTO DE CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL, APELACION. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 177

SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN SEGUIDAS CONTRA EL DOCTOR ARTURO ULISES VALLARINO BARTUANO, POR EL SUPUESTO DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL (HOMICIDIO CULPOSO) EN PERJUICIO DE PEDRO AÑINO AGRAZAL. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 178

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA PROCURADORA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PARA CONOCER DE LA QUERELLA CRIMINAL PROMOVIDA POR EL SIGLO, S. A. CONTRA EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, POR EL SUPUESTO DELITO DE INJURIA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIEZ (10) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 182

INCIDENTE POR DESACATO PRESENTADO POR EL LICENCIADO CARMELO GONZÁLEZ, ENB REPRESENTACIÓN DE LESBIA PITANO CONTRA EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DENTRO DEL AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR SU REPRESENTADO CONTRA EL DECRETO DE PERSONAL N°9 DE 4 DE FEBRERO DE 2000, DICTADO POR ESE MINISTERIO. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 183

DILIGENCIA DE TRANSITO ENTRE SEBASTIAN RODRIGUEZ ROBLES, MAGISTRADO DEL TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, Y EL SEÑOR JORGE EDUARDO CARRASCO. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 184

QUEJA PRESENTADA POR EL LICENCIADO FERGUSON MARTINEZ CONTRA EL MAGISTRADO NODIER JARAMILLO, DEL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMA, VEINTINUEVE (29) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 185

SALA PRIMERA DE LO CIVIL 189

ACLARACIÓN DE SENTENCIA 190

HOTELERA EL PANAMA, S. A. RECURRE EN CASACION EN EL, PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE RICARDO A. LANDERO. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, CATORCE (14) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 190

APELACIÓN EN PROCESO MARÍTIMO 190

ESTACIÓN JAVILLO APELA CONTRA EL AUTO N°95, DE 3 DE MARZO DE 2,000, DICTADO POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO EN EL PROCESO ESPECIAL DE EJECUCIÓN DE CRÉDITO MARÍTIMO PRIVILEGIADO QUE LE SIGUE A M/N "CHENCHITO". MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, CUATRO DE (4) AGOSTO DE DOS MIL (2000). 190

APELACION INTERPUESTA POR TRANSPORTE Y TURISMO BOCATOREÑO, S. A. Y ATLANTIC TOURIST INVESTMENT, S. A. CONTRA LOS AUTOS DEL 30 DE JUNIO DE 1999 Y 5 DE JULIO DE 1999 DICTADOS POR EL TRIBUNAL MARITIMO EN EL PROCESO ORDINARIO MARITIMO QUE LE SIGUE A FERRYS INTERNATIONAL, S. A. TUGS & BARGES (PANAMA) LTDA. INC., EXPORT & IMPORT CONSULT, S. A. FERRYS BOCAS DEL TORO, S. A. ARTHUR ROBINSON. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 196

TRANSPORTE Y TURISMO BOCATOREÑO, S. A. Y ATLANTIC TOURIST INVESTMENT, S. A. APELAN CONTRA LOS AUTOS DEL 30 DE JUNIO DE 1999 Y 5 DE JULIO DE 1999

DICTADOS POR EL TRIBUNAL MARITIMO EN EL PROCESO ORDINARIO MARITIMO QUE LE SIGUE A FERRYS INTERNATIONAL, S. A., TUGS & BARGES (PANAMA) LTD., INC, EXPORT & IMPORT CONSULT, S. A., FERRY DE BOCAS DEL TORO, S. A. Y ARTHUR ROBINSON. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMA, TREINTA (30) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 198

M/N "FALCON" APELA CONTRA LA SENTENCIA NO.11, DEL 18 DE MAYO DE 1998 DICTADA POR EL TRIBUNAL MARITIMO EN EL PROCESO ESPECIAL DE EJCUCION DE CREDITO MARITIMO PRIVILEGIADO QUE LE SIGUE MARCELINO LASSO. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 200

AUTO APELADO 204

APELACION INTERPUESTA POR LOS LICENCIADOS ELIGIO ANDERSON ALLEN Y DARIO E. CARRILLO CONTRA EL AUTO DE 4 DE OCTUBRE DE 1999 DICTADO POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL INCIDENTE DE NULIDAD POR FALTAS DE COMPETENCIA E ILEGITIMIDAD PRESENTADO POR LA PARTE DEMANDADA DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO (RECONVENCIÓN) INCOADO POR ISAAC DAVID MIZRACHI Y PROYECCIONES DE ULTRAMAR, S. A. CONTRA JOSUE LEVY LEVY, RUBEN LEVY LEVY Y DOV BINDER. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, TRES (3) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 204

RECURSO DE CASACIÓN CIVIL 208

DILIAM BEATRIZ SYRES CAROL RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO QUE LE SIGUE A FINANCIERA METRO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMA, DOS (2) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 208

LA FISCALIA TERCERA SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMA CONSORCIO VAN DAM SOSA Y BARBERO RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ARBITRAL PRESENTADO POR LA NACION Y CONSORCIO VAN DAM SOSA Y BARBERO. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMA, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 209

LUIS B. PIMENTEL MARIN RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO DE OPOSICION QUE LE SIGUE A LETICIA E. PIMENTEL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMA, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 213

JULIO CESAR MORALES LINCK RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE SUCESIÓN TESTADA DE JULIO CESAR MORALES SAENZ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 214

ISAÍAS MARISCAL MEDINA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A ELICENIA MARISCAL DE KIRSCH, EFIGENIA MARISCAL DE CEDEÑO, SILVIA MARISCAL DE RIVERA, ELENA MARISCAL DE PÉREZ, PEDRO MARISCAL MEDINA, ANGELA MARISCAL MEDINA, ISIDRO MARISCAL MEDINA, JUAN MARISCAL DE PÉREZ Y FELIPE MARISCAL M. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 216

INMOBILIARIA SITTON, S. A., RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A INVERSIONES PUEBLA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 222

SUPLIDORA PANAMERICANA, S. A., MARQUELA DE BALLESTEROS, CONRADO OTTO R. JIMENEZ Y FELICIANO BALLESTEROS RECURREN EN CASACION EN LA EXCEPCION DE PAGO PRESENTADA POR LA PARTE DEMANDADA DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO QUE EMMA, S. A. LE SIGUE A SUPLIDORA PANAMERICANA, S. A., MARQUELA DE BALLESTEROS, CONRADO OTTO R. JIMENEZ Y FELICIANO BALLESTEROS. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, NUEVE (9) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 223

INVERSIONES VADY, S. A. Y ARIEL ARMANDO FACEY RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO QUE LE SIGUEN A ASAMBLEA GENERAL DE COPROPIETARIOS DE P.H.

APARTHOTEL COSTA DEL SOL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, DIEZ (10) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 227

YAPELO, S. A., RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A LEONARDO CIPPONERI MARTINICO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, DIEZ (10) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 228

MIGUEL AMADOR DUQUE RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO QUE LE SIGUE A CONFEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO (COLAC). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, DIEZ (10) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 229

JORGE LUIS DE PUY GARCIA RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A ANDRES FERNANDO DE PUY FARUGIA, SUCESION DE ANDRES FERNANDO DE PUY FARRUGIA Ó SUCESORES DE ANDRES FERNANDO DE PUY FARRUGIA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, ONCE (11) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 231

MIGUEL ANGEL RIGGS RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO (SECUESTRO) QUE KE SIGUE A DIONISIO SAKIS LIMBEROPULOS KARNAKIS Y/O CAROL CITY INVESTMENT, S. A. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, CATORCE (14) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 231

BANCO GENERAL, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO EJECUTIVO (EXCEPCIONES) QUE LE SIGUE A GLORIA GONZALEZ RODRIGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 237

ADRIAN E. CASTILLERO LANGE RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A MARTA NEMESIA CASTILLERO Y LOS SUCESORES DE MANUELA CASTILLERO PIMENTEL Y LIBRADA CASTILLERO PIMENTEL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 238

IVONNE FABREGA DE SUCRE RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE LE SIGUE A DELSA LORENA FABREGA DE DOWELL, LUMY FABREGA DE ARIAS E INES MARIA FABREGA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 239

EMMA PORCEL DE TEJEIRA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO QUE LE SIGUE JAVIER TEJEIRA MUÑOZ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 243

MARIA BAGATELAS DE PAPADIMITRIU (HEREDERA AB-INTESTATO DE BASILIO BAGATELAS O BASILIO GEORGE BAGATELA) RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A CONSTANTINO JUAN LEKAS Y MANUEL GRAVILIDES O MANUEL GAVRILIDES. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMA, DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 244

LEONIDAS ABREGO TORRES RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A RAFAEL ANGEL CASTRELLON R. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FABREGA Z. PANAMA, VEINTIDOS (22) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 247

MARIA LUISA BRAVO ZUÑIGA RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A SUCESIÓN TSETADA Y/O INTESTADA DE LUISA SANCHEZ SAMPERO Y LOS DEMÁS HEREDEROS DECLARADOS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, VEINTIDOS (22) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 248

NONAME CORP., S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE SECUESTRO PRESENTADO POR LA PARTE DEMANDADA DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO INCOADO POR NONAME CORP., S. A. Y/O JAIME CUCALÓN D`ANELLO CONTRA PATRICIO CLERECI. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, VEINTITRES (23) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 249

SUSANA HERNÁNDEZ RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A

LUISA GUEVARA DE BECERRA Y ALEJANDRO BECERRA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA Z. PANAMA, VEINTITRES (23) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). . . . 250

KAREN MARCELA SIERRA RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO DE FILIACION QUE LE SIGUE JUAN CARLOS SILVA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FABREGA Z. PANAMA, VEINTITRES (23) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 252

BANCO FEDPA, S. A. y EDILBERTO B. ESQUIVEL MOLTO RECURREN EN CASACION EN LA EXCEPCIÓN DE INEXSISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN QUE SE DEMANDA, PRESENTADA POR LA PARTE DEMANDADA EN EL PROCESO EJECUTIVO INCOADO POR BANCO FEDPA, S. A. CONTRA EDILBERTO ESQUIVEL MOLTO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, VEINTITRES (23) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 261

TEODORA ROBLES DE LEON, INDALECIA ROBLES DE CHICO, JOSE ZACARIAS ROBLES LEON, FELICIDAD ROBLES LEON, ALBERTO ROBLES DE LEON, ENRIQUEZ ROBLES DE LEON, MARIA CLAUDINA ROBLES DE VASQUEZ, SIXTA ROBLES DE ZURITA, RECURREN EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUEN A JOSE CORNELIO ROBLES DE LEON. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FABREGA Z. PANAMA, VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 262

BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A CONSTRUCCIONES CASTRO, S. A. Y CONSTRUCTORA NOVA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 264

PRESBÍTERO JENKINS GÓNDOLA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE FILIACIÓN QUE LE SIGUE ALBA ESTHER CEBALLOS ROMERO, A FAVOR DEL MENOR HENRY ANTONIO CEBALLOS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 265

RANCHO MODELO, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA QUE LE SIGUE A LETICIA REBOLLEDO DE QUINTERO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 266

HORACIO MARQUEZ NUÑEZ RECURRE EN CASACION EN LA EXCEPCIÓN DE PAGO PARCIAL QUE PROPONE DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO INCOADO POR FERTILIZANTES DE CENTRO AMERICA (PANAMA), S. A. CONTRA HORACIO MARQUEZ NUÑEZ, ERICK OMAR MARQUEZ VILLARREAL Y MAGDALENA VILLARREAL DE MARQUEZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FABREGA Z. PANAMA, VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 268

MIGUEL AMADOR DUQUE RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO QUE LE SIGUE A CONFEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO (COLAC). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 269

JOSE MARIA LOPEZ Y JUDI ESTHER SERRANO DE LOPEZ RECURREN EN CASACION EN EL PROCESO SUMARIO DE INTERDICTO POSESORIO DE PERTURBACION DE LA POSESION QUE LE SIGUE A TODOS LOS COPROPIETARIOS DEL EDIFICO P.H. GLAMOUR TOWER. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMA, TREINTA (30) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 271

CATALINO RODRIGUEZ GONZALEZ RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A NESTOR BONILLA CEDEÑO. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 271

CONFLICTO DE COMPETENCIA 273

CONFLICTO DE COMPETENCIA SUSCITADO ENTRE EL JUZGADO SEPTIMO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMA, RAMO DE LO CIVIL Y EL JUZGADO DECIMO DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA, RAMO CIVIL EN EL PROCESO ORDINARIO DE MENOR CUANTÍA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR INSTAURADO POR PAN YU CUAN

CONTRA DISTIRBUIDORA YALE, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, CATORCE (14) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 273

IMPEDIMENTO 276

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO JOSÉ A. TROYANO DENTRO DEL RECURSO DE CASACIÓN EN EL PROCESO DE QUIEBRA QUE LE SIGUE A BANCO AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PANAMÁ, S. A. (BANAICO). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, OCHO (8) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 276

CARLA MIGDALIA REGNO FRANCUCCI RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A THE CHASE MANHATTAN BANK. CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAG. FÁBREGA ZARAK. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 277

RECURSO DE HECHO 278

DARIO E. CARRILLO RECURRE DE HECHO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 31 DE MAYO DE 2000 DEL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN LA EJECUCIÓN DEL LAUDO ARBITRAL PROPUESTO POR INVERSIONES FATIMA, S. A. CONTRA PROYECTOS URBANISTICOS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, CATORCE (14) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 278

LEOVIGILDO CASTILLO RECURRE DE HECHO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL 11 DE JULIO DE 2000 DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL PROCESO ORDINARIO PROPUESTO POR GOTCHA SPORT COMPANY, S. A. CONTRA TOBIAS TURGMAN GRSTMAN. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 279

SALA SEGUNDA DE LO PENAL 281

ACLARACIÓN DE SENTENCIA 282

SOLICITUD PARA QUE SE ACLARE LA SENTENCIA DE 26 DE JUNIO DE 2000, PROFERIDA POR SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, ONCE (11) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 282

AUTO APELADO 282

AUTO APELADO PRESENTADO POR EL LICDO. ALDO AYALA M. EN SU CONDICIÓN DE APODERADO DEL SEÑOR GUILLERMO ANTONIO BULA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, TRES (3) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 282

AUTO DE ENJUICIAMIENTO APELADO 284

AUTO DE PROCEDER APELADO POR LA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD Y EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, (UNO) 1 DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). . . . 284

AUTO APELADO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A CHEN WAI KUIN CHEN SINDICADO POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000). 285

AUTO DE SOBRESEIMIENTO APELADO 289

AUTO APELADO EN PROCESO QUE SE LE SIGUE A ESTEBAN ANTONIO LASSO GUEVARA Y OTROS POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE GABINO JARAMILLO QUINTANAR. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, TRES (3) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 289

RECURSO DE CASACIÓN PENAL 293

RECURSO DE CASACION INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A MARTIN CANO CHAVEZ POR DELITO DE CONTRA EL PUDOR Y LA LIBERTAD SEXUAL EN PERJUICIO DE LA MENOR KHRIS TATIANA NAVARRO H. MAGISTRADO PONENTE: JOSE MANUEL FAUNDES. PANAMÁ, PRIMERO (1) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 293

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN INTERPUESTO A FAVOR DE EDGAR SOLÍS GARCÍA, SINDICADO POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE VENTA ILÍCITA DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, DIEZ (10) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 294

RECURSO DE CASACIÓN PRESENTADO POR LA DEFENSA TÉCNICA DE AMINTA ITZEL CORCHO MONTEMAYOR, SINDICADA POR EL DELITO DE ROBO. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 295

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO EN EL PROCESO SEGUIDO A LEIDY ISELDA ARROYO GONZÁLEZ, IMPUTADA POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, DIECISEIS (16) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 296

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A FRANCISCO CHÁVEZ PINEDA SINDICADO POR DELITO CONTRA EL PUDOR Y LA LIBERTAD SEXUAL EN PERJUICIO DE FÉLIX ROQUE ACOSTA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000). 298

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A JOSE JORGE AGUIRRE SALDAÑA, SINDICADO POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN PERJUICIO DE CHONG KEE KAM. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000). 300

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A HOLMI GUERRA PITTY Y OTROS, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA (DROGAS). MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000). 302

RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA PRESENTADO POR LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO CONTRA LA SENTENCIA DE 20 DE JULIO DE 1999, PROFERIDA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 314

RECURSO DE CASACIÓN FORMULADO POR LA DEFENSA TÉCNICA DE LUIS PLÁCIDO ARIZALA ARANGO, SINDICADO POR EL DELITO DE POSESIÓN AGRAVADA DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTITRES (23) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 317

RECURSOS DE CASACION INTERPUESTOS DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JOSE MANUEL DE LEON FLORES Y JAVIER HILARIO DE ARRIBA SAMUDIO SINDICADOS POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN PERJUICIO DE FULVIA RIOS DE FIERRO Y MILAGROS DEL CARMEN RIOS FIERRO. MAGISTRADO PONENTE: JOSE MANUEL FAUNDES. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 318

RECURSO DE CASACION DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ROLANDO EVARISTO CLARKE Y OTROS, SINDICADOS POR EL DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000). 321

SE ADMITE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO A FAVOR DE ARIEL ACEVEDO, PROCESADO POR EL DELITO DE LESIONES PERSONALES. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 323

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL INCIDENTE DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL,

DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A DAVID SIMMONS, ROGELIO DE GRACIA Y MIGUEL PEÑALBA POR DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000). 324

CONFLICTO DE COMPETENCIA 328

SOLICITUD DE DECLARATORIA DE CONFLICTO DE COMPETENCIA, ENTRE EL JUZGADO TERCERO NOCTURNO DE PANAMÁ Y EL JUZGADO UNDÉCIMO DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA, FORMULADA POR JOSÉ E. DUTARY PUGA Y TEOFANES LOPEZ ROJAS. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000). 328

INCIDENTE 331

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN PROFERIDA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL QUE RECHAZA POR IMPROCEDENTE EL INCIDENTE DE NULIDAD PRESENTADO POR EL DEFENSOR DE OFICIO DE DULIO ULISES CEBALLOS CÓRDOBA, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE HUMBERTO GARIBALDI. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 331

QUERELLA 332

QUERELLA PRESENTADO POR EL LICENCIADO DIÓGENES AROSEMENA GRIMALDO, CONTRA EL DOCTOR GUSTAVO GARCÍA DE PAREDES, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, POR LA COMISIÓN DE DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD E INFRACCIÓN DE LOS DEBERES DE SERVIDORES PÚBLICOS. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, VEINTIDOS (22) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 332

QUEJA PRESENTADA POR ELIAS SAMUEL SOLIS DOMINGUEZ EN CONTRA DEL LIC. DULIO ARROCHA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000). 333

RECURSO DE REVISIÓN 334

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR JOSÉ DEL CARMEN RAMOS SMITH, SANCIONADO POR DELITO DE HOMICIDIO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 334

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR CELESTINO PÉREZ DE GRACIA, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, NUEVE (9) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 335

SEGUNDO ANTONIO MENDOZA SOLICITA SE REVISE LA SENTENCIA CONDENATORIA CALENDADA 9 DE DICIEMBRE DE 1998, PROFERIDA POR EL JUZGADO DE CIRCUITO PENAL DE BOCAS DEL TORO. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 335

PEDRO ANGEL ORTEGA SOLICITA RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO QUINTO DE CIRCUITO PENAL. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 336

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR JORGE LUIS GARCIA SANCIONADO POR DELITO DE ROBO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 337

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR CARLOS SUÁREZ GONZÁLEZ, SINDICADO POR DELITO DE ROBO AGRAVADO COMETIDO EN PERJUICIO DE GUILLERMO WONG MARTINELLI. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 338

RECURSO DE REVISIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A FRANCISCO ELÍAS ATENCIO

FLORES, SANCIONADO POR UN DELITO CONTRA EL PUDOR Y LA LIBERTAD SEXUAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 341

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO A FAVOR DE ROSENDO ANTONI MORALES PLANES. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 342

SENTENCIA APELADA 342

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA A FAVOR DE DANIEL DÍAZ DE LEÓN, SINDICADO POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA EN DETRIMENTO DE RANFIS JAÉN CHALMER. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, 1 (UNO) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 342

AUTO APELADO EN PROCESO QUE SE LE SIGUE A ELIADES EVELIO CEDEÑO VERA POR DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE JUSTA VALDES DE MARTÍNEZ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, PRIMERO (1) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 344

SENTENCIA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A DARINEL MORENO HIDALGO Y OTROS, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL. MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO GONZALÉZ. PANAMÁ, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000). 346

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A LUCY MARLENY BATISTA SOLANO, SINDICADA POR DELITO DE HOMICIDIO. MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO GONZÁLEZ R. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000). 348

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA DENTRO DEL PROCESO QUE SE LE SIGUE A EVERARDO BROCE GARCÍA POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL COMETIDO EN PERJUICIO DE ORLANDO CAMPOS PÉREZ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 354

SENTENCIA APELADA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A FRANCISCO LOUBON LANDECHO, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL, EN PERJUICIO DE JORGE LUIS ACOSTA SÁNCHEZ. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, ONCE (11) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000). 356

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA A FAVOR DE INDALECIO RUDAS TOCAMO Y FÉLIX CASTELLANO APARICIO, SINDICADOS POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ROBINSON MOSQUERA VIVEROS. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, DIECISEIS (16) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 359

SENTENCIA APELADA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ISMAEL URRIOLA RODRÍGUEZ, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000). 361

RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR EL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO Y POR LA DEFENSA DE HILARIO JAVIER PEÑALOZA, CONTRA LA SENTENCIA NO. 18 DEL 9 DE MARZO DE 2000, PROFERIDA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 364

TRIBUNAL DE INSTANCIA 368

SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN INICIADAS EN VIRTUD DE QUERELLA PRESENTADA POR RAYMOND ARTHUR BUITRAGO, CONTRA ELITZA A. CEDEÑO, OSCAR CEVILLE Y MARIBLANCA STAFF WILSON. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, DIEZ (10) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 368

SALA TERCERA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y LABORAL 370

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE INTERPRETACIÓN 371

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE INTERPRETACION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DONATILO BALLESTEROS EN REPRESENTACION DEL TESORERO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMA, PARA QUE LA SALA SE PRONUNCIE SOBRE EL SENTIDO Y ALCANCE DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN EL OFICIO NO. 959 DE 22 DE OCTUBRE DE 1999, EXPEDIDO POR EL ALCALDE DEL DISTRITO DE PANAMA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 371

PETICIÓN DE PRONUNCIAMIENTO, INTERPUESTA POR EL LCDO. VÍCTOR ALDANA EN REPRESENTACIÓN DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, PARA QUE LA SALA SE PRONUNCIE Y ESTABLEZCA LA VALIDEZ JURÍDICA DE LA RESOLUCIÓN N°15-105-97-J.D. DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 1997, EXPEDIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).
. 376

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN 381

DEMANDA DE INDEMNIZACIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. BORIS BARRIOS, EN REPRESENTACIÓN DE CRISTOBAL A. CAÑIZALES MONTOTO, POR LA SUMA DE B/.28,886.66, CORRESPONDIENTE DESDE LA FECHA DE SU SEPARACIÓN DEL CARGO COMO ALCALDE DEL DISTRITO DE ARRAIJÁN, HASTA LA FECHA DE SU REINTEGRO. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FABREGA P. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 381

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JULIO JOVANÉ DEL CID, EN REPRESENTACIÓN DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y GEOTÉCNICA, S. A. (INEG, S. A.) PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 790- 98 D.G. DE 30 DE DICIEMBRE DE 1998, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN NO. 546-99 D.G. DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 1999, AMBAS EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, SU ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA LÓPEZ. PANAMÁ, TRES (3) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 382

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO SERGIO GONZÁLEZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE MARÍA MIRANDA DE AGUILAR, PAR QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL NO. 4, DE 2 DE FEBRERO DE 2000, DICTADO POR EL MINISTRO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL, ACTO CONFIRMATORIO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRES (3) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 384

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTARTIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA FIRMA BERRÍOS Y BERRÍOS, EN REPRESENTACIÓN DE VIRGINIA BURGOS GUERRA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL RESUELTO N°1-205 DE 30 DE OCTUBRE DE 1999, DICTADO POR EL GERENTE GENERAL DEL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 385

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA EN REPRESENTACIÓN DE ABEL RAMÍREZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO CONTENIDO EN LA NOTIFICACIÓN NO. 09269, DE 25 DE SEPTIEMBE DE 1997, EFECTUADA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CUATRO (4) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 386

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL

LICENCIADO ERNESTO CEDEÑO ALVARADO, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE JOSEFA MARÍA ALVARADO DE CEDEÑO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 088-98, DE 24 DE JUNIO DE 1998, EXPEDIDA POR EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS, ACTO CONFIRMATORIO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CUATRO (4) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 387

DEMANDA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA, EN REPRESENTACIÓN DE ANTONIO SAMANIEGO, PARA QUE SE DECLARE NULOS, POR ILEGALES, EL DECRETO EJECUTIVO N° 71 DE 11 DE ABRIL DE 2000 Y EL ACTO CONFIRMATORIO, DICTADOS POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CUATRO (4) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 393

DEMANDA CONENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA, EN REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORA CARMEN SÁNCHEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO CONTENIDO EN LA NOTFICACIÓN NO. 09318, DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, EFECTUADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CUATRO (4) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 393

DEMANDA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE VALDÉS, MIRANDA, LEZCANO BASO, EN REPRESENTACIÓN DE D.R.D. ENTERPRISES, INC., PARA QUE SE DECLARE NULAS, POR ILEGALES, LA RESOLUCIÓN N° 108-98-DSL-MCH DE 1° DE JUNIO DE 1998, DICTADA POR LA ALCALDESA DEL DISTRITO DE PANAMÁ Y LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CUATRO (4) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 394

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RICARDO RAMIRO ARANGO, EN REPRESENTACIÓN DE R & R ARANGO Y ASOCIADOS, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN ADMR-PM-011-00, DE 26 DE ABRIL DE 2000, DICTADA POR LA ADMINISTRADORA REGIONAL DE PANAMÁ METROPOLITANA, DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE, SU ACTO CONFIRMATORIO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 398

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ORLANDO RAMOS, EN REPRESENTACIÓN DE SONIA BALLESTEROS, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA NO. 03-2000, DE 6 DE ENERO DE 2,000, DICTADA POR EL GERENTE GENERAL DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, SU ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 400

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA, EN REPRESENTACIÓN DE WILFREDO ARIAS, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO CONTENIDO EN LA NOTIFICACIÓN N° 04010 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, REALIZADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 401

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA, EN REPRESENTACIÓN DE ERIC SANCHEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO CONTENIDO EN LA NOTIFICACIÓN N° 03170 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, EMITIDO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y

PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 401

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA, EN REPRESENTACIÓN DE MAIRA RUIZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO CONTENIDO EN LA NOTIFICACIÓN N° 09305 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, REALIZADA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 402

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA, EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS RODRIGUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO CONTENIDO EN LA NOTIFICACIÓN N° 09286 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, REALIZADA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 403

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA, EN REPRESENTACIÓN DE JACINTO GONZALEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO CONTENIDO EN LA NOTIFICACIÓN N° 09142 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, REALIZADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 403

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA, EN REPRESENTACIÓN DE ARACELY HOO, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO CONTENIDO EN LA NOTIFICACIÓN N° 04086 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, REALIZADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 404

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA, EN REPRESENTACIÓN DE JOSE MANUEL FIGUEROA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO CONTENIDO EN LA NOTIFICACIÓN N° 50156 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, REALIZADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 405

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS MOSQUERA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO CONTENIDO EN LA NOTIFICACIÓN N° 03124 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, EMITIDO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 405

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS R. AYALA EN REPRESENTACIÓN DE JUAN B. ABREGO, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA DP-DOPA 341 DEL PRIMERO DE FEBRERO DE 2000, DICTADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 406

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICDO. CARLOS AYALA EN REPRESENTACIÓN DE CARMEN C. DE CASTILLO, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL ACTO CONTENIDO EN LA NOTIFICACIÓN N° 50406 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, REALIZADA POR EL DIRECTOR NACIONAL DE CONTROL

FISCALDE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 407

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA LICENCIADA SOFIA J. COHEN EN REPRESENTACIÓN DE JAIME FABREGA QUELQUEJEU, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° AR-OR-04-317 DE 14 DE ABRIL DE 1997, EXPEDIDA POR EL ADMINISTRADOR REGIONAL DE ADUANAS, ZONA ORIENTAL DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, Y LA RESOLUCIÓN NO. 704-04-23 DE 14 DE ENERO DE 1998, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 408

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. CARLOS AYALA EN REPRESENTACIÓN DE FABIAN POLANCO, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO S/N° NOTIFICADO MEDIANTE NOTA N°OIRH-316 DE 15 DE FEBRERO DE 2000, SUSCRITO POR LA JEFA DE LA OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, OCHO (8) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 414

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICDO. CARLOS AYALA MONTERO, EN REPRESENTACIÓN DE PEDRO RODRIGUEZ PARDO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA DP-DOPA-339 DEL 1° DE FEBRERO DEL 2000, DICTADA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, OCHO (8) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 415

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICDO. CRISTÓBAL GARRIDO, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA ORDEN VERBAL EMITIDA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL DE CHITRÉ, PROVINCIA DE HERRERA, EL LUNES 13 DE MARZO DEL 2000, EL ACTO CONFIRMATORIO Y LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO DE EDUACCIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, OCHO (8) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 416

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA LCDA. MARLENE B. DE FÁBREGA, EN REPRESENTACIÓN DE JAIME E. BETEGON, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 98-02.021 EXPEDIDA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 417

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA FIRMA ALEMÁN, CORDERO, GALINDO & LEE, EN REPRESENTACIÓN DE CABLE & WIRELESS, S. A., PARA QUE SE DECLAREN NULOS, POR ILEGALES, LOS ARTÍCULOS PRIMERO Y SEGUNDO DE LA RESOLUCIÓN NO. JD-1824 DE 8 DE FEBRERO DE 2000, DICTADA POR EL ENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 420

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LCDO. ERICK NORMAN BARRIOS, EN REPRESENTACIÓN DE CALEB ORTEGA SOLIS, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N°02-99 DE 28 DE JULIO DE 1999, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARRENDAMIENTO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 422

DEMANDA CONTENCI0SO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL

LCDO. TOMÁS VEGA CADENA EN REPRESENTACIÓN DE REFORESTADORA MADRID, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° DN-030-96 DE 3 DE MAYO DE 1996, DICTADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 423

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTARTIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO OVIDIO GÓMEZ, EN REPRESENTACIÓN DE PROYECTOS MORALES, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLCUIÓN N° 721-99 D.G. DE 6 DE DICIEMBRE DE 1999, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CAJA DE SEGUROS SOCIAL, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 429

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LCDO. MANUEL SALVADOR HERRERA, EN REPRESENTACIÓN DE EDILBERTO FONSECA CHAVEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 758-06 SIN FECHA, EXPEDIDA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 429

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION INTERPUESTA POR EL LICDO. CARLOS AYALA EN REPRESENTACION DE SANTIAGO MORALES, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA NO. 042-2000 DE 7 DE ABRIL DE 2000, DICTADA POR EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 434

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION INTERPUESTA POR EL LICDO. CARLOS AYALA EN REPRESENTACION DE TIRSO SOLIS DE LEON, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO NO. 71 DE 11 DE ABRIL DE 2000, DICTADA POR EL MINISTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 435

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ENOCH RODRIGUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE RICAURTE SAUL POLANCO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA DE 17 DE DICIEMBRE DE 1999, SUSCRITA POR LA JEFA DE LA OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 436

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA DE ABOGADOS PADILLA Y ASOCIADOS, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE SOLI ESTER PÉREZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 102-2000 (D), DE 14 DE ENERO DE 2000, DICTADA POR EL GERENTE GENERAL DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, ACTOS CONFIRMATORIOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 437

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO SIMEÓN GONZÁLEZ, EN REPRESENTACIÓN DE ALEJANDRO GAITAN JUSTAVINO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO.001 DEL JURADO DE ELECCIONES DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE COCLÉ. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, ONCE (11) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 438

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA LICENCIADA VELVITT SALMON, EN REPRESENTACIÓN DE FABIAN POLANCO, PARA QUE

SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. ALP-072-2000 DE 15 DE FEBRERO DE 2000, DICTADA POR EL MINISTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, ONCE (11) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 440

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DARÍO E. CARRILLO G. EN REPRESENTACIÓN DE UNIVERSAL PLYWOOD INC., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N°477-DGT-00 DE 5 DE MAYO DE 2000, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO LABORAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, CATORCE (14) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 441

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA BOTELLO, APARICIO Y ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE MELVIN TORRES MÉNDEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N°29-99 DE 21 DE JULIO DE 1999, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 442

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LCDO. RAMÓN DE LA O. FERNÁNDEZ, EN REPRESENTACIÓN DE JORGE EDGARDO QUINTERO QUIROS, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N°ADM050 DE 14 DE FEBRERO DE 2000, DICTADA POR EL ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISEIS (16) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 443

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LCDO. ALEX GONZÁLEZ FRANCO, EN REPRESENTACIÓN DE TEONILO SANTAMARIA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 1 DE 22 DE FEBRERO DE 1999, DICTADA POR LA DIRECTORA ENCARGADA DE LA ESCUELA DE NUEVO VEDADO, DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ, ACTO CONFIRMATORIO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISEIS (16) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 444

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA EN REPRESENTACIÓN DE EMMA VALDERRAMA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTIFICACIÓN NO. 09345 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, REALIZADA POR EL DIRECTOR DE ESTADÍSTICA Y CENSO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 445

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA EN REPRESENTACIÓN DE BENJAMIN RODRIGUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTIFICACIÓN NO. 09285 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, REALIZADA POR EL DIRECTOR DE ESTADÍSTICA Y CENSO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 449

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA EN REPRESENTACIÓN DE ESMERALDA VERGARA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTIFICACIÓN NO. 09358 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, REALIZADA POR EL DIRECTOR DE ESTADÍSTICA Y CENSO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 454

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL

LICENCIADO CARLOS AYALA EN REPRESENTACIÓN DE MIRIAM DE RANGEL, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTIFICACIÓN NO. 09273 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, REALIZADA POR EL DIRECTOR DE ESTADÍSTICA Y CENSO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 458

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA EN REPRESENTACIÓN DE ARIEL RUIZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTIFICACIÓN NO. 09307 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, REALIZADA POR EL DIRECTOR DE ESTADÍSTICA Y CENSO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISEIS (16) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 462

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA EN REPRESENTACIÓN DE STELLA EVANS, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTIFICACIÓN NO. 09225 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, REALIZADA POR EL DIRECTOR DE ESTADÍSTICA Y CENSO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 467

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA EN REPRESENTACIÓN DE GLADYS FIGUEROA DE ARONATEGUI, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTIFICACIÓN NO. 50641 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, REALIZADA POR EL DIRECTOR NACIONAL DE CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 471

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA EN REPRESENTACIÓN DE MARLENIS DE QUIÑONES, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTIFICACIÓN NO. 50330 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, REALIZADA POR EL DIRECTOR NACIONAL DE CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DEL AÑO DOSMIL (2000). 475

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA EN REPRESENTACIÓN DE MARIBEL DE PEREZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTIFICACIÓN NO. 50058 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, REALIZADA POR EL DIRECTOR NACIONAL DE CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DEL AÑO DOSMIL (2000). 480

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA EN REPRESENTACIÓN DE NIDIA DE VEGA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTIFICACIÓN NO. 50250 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, REALIZADA POR EL DIRECTOR NACIONAL DE CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 484

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA EN REPRESENTACIÓN DE ONILDA DE HENRIQUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTIFICACIÓN NO. 04083 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, REALIZADA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE CONTABILIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA.

PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 489

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LCDA. ALMA L. CORTÉS EN REPRESENTACIÓN DE PROCESADORA MARPESCA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA N°DM-1069-2000 DE 29 DE MAYO DE 2000, EMITIDA POR EL MINISTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE 2000. 493

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA MONTERO EN REPRESENTACIÓN DE ANGEL ALBERT VANELA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA DP-DOPA-1094 DEL 7 DE FEBRERO DE 2000, DICTADA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 494

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA MONTERO EN REPRESENTACIÓN DE OSCAR CONCEPCIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, LA NOTA DP-DOPA-346 DEL 20 DE ENERO DE 2000, DICTADA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 495

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA MONTERO EN REPRESENTACIÓN DE MARQUISELDA ONEYRA GARCÍA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA DP-DOPA-345 DEL 1° DE FEBRERO DE 2000, DICTADA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 497

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA, EN REPRESENTACIÓN DE MAURA SANTANDER DE CAMARENA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA NO. DNP-DOPA-1080 DE 7 DE FEBRERO DE 2000, DICTADA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIDOS (22) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 498

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA, EN REPRESENTACIÓN DE ANGEL MARTINEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA NO. DNP-DOPA-1017 DE 7 DE FEBRERO DE 2000, EXPEDIDA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIDOS (22) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 499

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LCDO. CÉSAR RUILOBA, EN REPRESENTACIÓN DE EDUARDO SMALL, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 78-99 DE 6 DE OCTUBRE DE 1999, DICTADA POR EL COMANDANTE PRIMER JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE PANAMÁ Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIDOS (22) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 500

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA EN REPRESENTACIÓN DE SIBILA DE BENJAMIN, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTIFICACIÓN NO. 04021 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, REALIZADA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE CONTABILIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 501

DEMANDA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CANDELARIO SANTANA, EN REPRESENTACIÓN DE JUAN DOMÍNGUEZ BATISTA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 1-46-99 DE 1 DE JUNIO DE 1999, DICTADO POR EL GERENTE GENERAL DEL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO EN QUE INCURRIÓ EL COMITÉ EJECUTIVO DE DICHO BANCO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 505

DEMANDA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA, EN REPRESENTACIÓN DEL YIRABEL DE FLORES, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 152 DE 16 DE DICIEMBRE DE 1999, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 507

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA EN REPRESENTACIÓN DE ECBERTO MORALES, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN EL RESUELTO N° 035-99 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1999, EMITIDO POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 507

DEMANDA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JERÓNIMO MEJÍA, EN REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORA BALBANEDA MEJÍA DE PÉREZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN C.F.C. N° 3532 DE 24 DE DICIEMBRE DE 1999, DICTADA POR LA COMISIÓN DE FONDO COMPLEMENTARIO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 509

DEMANDA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA LICENCIADA VELVITT SALMON, EN REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORA EVILA CANDANEDO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA N° 307-2000 DE 15 DE FEBRERO DE 2000, DICTADA POR LA JEFA DE LA OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 510

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA EN REPRESENTACIÓN DE LUZMILA HERRERA DE CUBILLA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTIFICACIÓN NO. 03042 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, REALIZADA POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 511

DEMANDA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE ROSAS Y ROSAS, EN REPRESENTACIÓN DE MARINO PALACIOS Y JORGE CARRILLO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO DE LA VICE-MINISTRA DE ECONOMÍA Y FINANZAS AL NO ORDENAR EL PAGO DE 12 PARTIDAS DEL XIII MES CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 1983 A 1988 Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 515

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN PRESENTADA POR EL LICENCIADO BASILIO CHONG GÓMEZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR SAÚL QUIROZ PACHECO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO, LA RESOLUCIÓN NO. 222, DE 1O. DE ABRIL DE

2000, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 517

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION INTERPUESTA POR EL LICDO. MIGUEL GONZALEZ EN REPRESENTACION DE AMERICA FOOD INDUSTRIES CORP., PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, LA RESOLUCION NO. ADMR-PM-016-00 DE 26 DE ABRIL DE 2000, DICTADA POR LA ADMINISTRACION NACIONAL DEL AMBIENTE PANAMA METROPOLITANA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 518

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAÚL MONTENEGRO, EN REPRESENTACIÓN DE DANIA JUANA LANDAU DE LOKEE, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 877, DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 1998, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACIÓN ESPECIAL (I.P.H.E.), ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000). 519

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA MONTERO EN REPRESENTACIÓN DE LUIS ALBERTO CARRERA GONZÁLEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA DP-DOPA-2411 DEL 22° DE MARZO DE 2000, DICTADA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 520

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LCDO. CARLOS AYALA, EN REPRESENTACIÓN DE JULIO SANTAMARIA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN R. L.C.S. NO. 027 DE 27 DE OCTUBRE DE 1999, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 521

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION INTERPUESTA POR LA LICDA. SONIA ALMENGOR EN REPRESENTACION DE RICAURTER NOEL PITTI MORALES, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCION NO. 80 DE 30 DE MARZO DE 2000, DICTADA POR EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA REGION INTEROCEANICA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 522

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURIDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CÉSAR RODRÍGUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LEOVIGILDO BERROA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. C.F.C.2040 DE 27 DE JULIO DE 1999, DICTADA POR LA COMISIÓN DEL FONDO COMPLEMENTARIO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 523

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. CARLOS A. ESPINOSA EN REPRESENTACIÓN DE EVILA G. DE CANDANEDO, PARA QUE DE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA N°OIRH-307 DE 15 DE FEBRERO DE 2000 SUSCRITA POR LA JEFA DE LA OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 524

DEMANDA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAÚL ADRARE, EN REPRESENTACIÓN DE RAHAMIN R. PRETTO, PARA QUE SE DECLARE NULOS, POR ILEGALES, EL RESUELTO N° 306 DE 10 DE JUNIO DE 1999,

DICTADO POR EL DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DEL NIÑO Y LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 526

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. MANUEL E. BERMÚDEZ MEANA EN REPRESENTACIÓN DE GABRIEL ENRIQUE CARRILLO CARRILLO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N°7198 DEL 20 DE MAYO DE 1998, DICTADA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, TREINTA (30) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 527

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO NIBARDO ELÍAS CABRERA, EN REPRESENTACIÓN DE JORGE EDING PALIS, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 015-98 DE 3 DE JUNIO DE 1998, EXPEDIDA POR LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 528

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD 528

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR ALVARADO, LEDEZMA & DE SANCTIS, EN REPRESENTACIÓN DE OCTAVIO GARCÍA, PATRICK DILLON, ALLAN BAITEL, TETEL DE CONTRERAS, SHANINA CONTRERAS, JULIO CONTRERAS, JOSÉ CHIRINO, MARÍA DE CHIRINO, SOUHAILA CHIRINO, LUIS CHIRINO, FRANCISCO ALVARADO, MARIELA CALDERÓN, AVELINA DE CALDERÓN, RICARDO SOTO, CECILIA ALMENGOR, ROSA ELVIRA DE ROMERO, JAVIER ROMERO, ANNETTE DE ROMERO, YOLANDA MARCO SERRA, LUIS CASCANTE Y RAQUEL DE CASCANTE, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL RESUELTO NO. 122 DE 20 DE MAYO DE 1998, DICTADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, Y PARA SE DICTEN OTRAS DISPOSICIONES EN SU REEMPLAZO. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 529

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ELIO CAMARENA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE MARGARITA RODRÍGUEZ BÁRCENAS O LUZ MARGARITA BÁRCENAS DE JOHNSON, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 4-9, DE 21 DE MAYO DE 1999, EMITIDA POR EL MUNICIPIO DE ARRAIJÁN, EL CONTRATO NO. 22-99, DE 28 DE ENERO DE 1999, Y LA ESCRITURA PÚBLICA NO. 8823, DE 19 DE AGOSTO DE 1999. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 531

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ALEJANDRO FERRER, EN REPRESENTACION DE ELEKTRA NORESTE S. A. PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACUERDO NO. 101-40-32 DE 1 DE DICIEMBRE DE 1998, DICTADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLON. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CUATRO (4) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 532

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL DOCTOR LUIS A. PALACIOS, EN REPRESENTACION DE VICTOR WEIGANDT BECKMANN PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES, LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION DE 8 DE MARZO DE 1990 Y DE 22 DE DICIEMBRE DE 1994 OTORGADOS EN FAVOR DE FELIX BERROCAL, POR EL INGENIERO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PENONOME. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CUATRO (4) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 533

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. JOSE ANTONIO HERNANDEZ, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLAREN NULOS, POR ILEGALES, LOS ACUERDOS NOS.8 DE 4 DE FEBRERO DE 1998

Y EL NO. 28 DE 13 DE MAYO DE 1998, AMBOS DICTADOS POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE DAVID. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, ONCE (11) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 537

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. BENEDICTO DE LEÓN, EN REPRESENTACIÓN DE OCTAVIO LUSIA Y OTROS, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN DE 1° DE AGOSTO DE 1999, DICTADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE BARÚ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 538

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTARTIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA GUERRA Y GUERRA, EN REPRESENTACIÓN DE JORGE ALEXIS LASSO, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACUERDO N°39 DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 1999, DICTADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE REPRESENTANTES DE CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE LA CHORRERA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 539

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA ROSAS & ROSAS, EN REPRESENTACIÓN DE DIANA ROSA CARLES ROVIRA Y RUY CARLOS RIBA CARLES, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL RESUELTO NO. 205, DE 9 DE JULIO DE 1999, PROFERIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000). 540

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA LCDA. ALMA L. CORTÉS, EN REPRESENTACIÓN DE PROCESADORA MARPESCA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA N° DM-1060-2000 DE 29 DE MAYO DE 2000, DICTADA POR EL MINISTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RELACIONADA CON LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS FITO-ZOOSANITARIAS DE IMPORTACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 542

INCIDENTE 543

INCIDENTE DE NULIDAD, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO MIGUEL QUIROZ EN REPRESENTACIÓN DE TRANSPORTE Y EQUIPO BARRERA, S. A., DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR JURISDICCIÓN COACTIVA QUE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE COCLÉ LE SIGUE. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CUATRO (4) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 543

JURISDICCIÓN COACTIVA 548

INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE SECUESTRO, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO FRANCISCO ESPINOSA CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE INVERSIONES TANYA, S. A., DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL LE SIGUE A INVERSIONES TANYA, S. A., Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 548

EXCEPCION DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION, FALTA DE IDONEIDAD DE TITULO EJECUTIVO Y DE PRESCRIPCION ACUMULADAS, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO FRANCISCO ESPINOSA, EN REPRESENTACIÓN DE INVERSIONES TANYA, S. A., DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 552

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDUARDO SUERO CASTRO, EN REPRESENTACIÓN DE ANGELA COLLADO BAEZ, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO QUE POR COBRO COACTIVO LE SIGUE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000). 554

INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE SECUESTRO, INTERPUESTO POR LA FIRMA CASTRO & CASTRO EN REPRESENTACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO, S. A., DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL LE SIGUE A LA EMPRESA ADMINISTRADORA DE RESTAURANTE, S. A. (RESTAURANTE CHINA TOWN EXPRESS). MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 556

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL 558

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL PRESENTADO POR EL LICENCIADO FELIPE WAISOME, ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LUIS CÓRDOBA, CONTRA LA SENTENCIA DE 31 DE MAYO DE 2000, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: VENTAS Y MERCADEO, S. A. Y COCA COLA DE PANAMÁ, CÍA. EMBOTELLADORA, S. A. VS. LUIS CÓRDOBA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, ONCE (11) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000). 558

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO HERNANDO CORNO EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS ESCARTIN CONTRA LA SENTENCIA DE 2 DE DICIEMBRE DE 1999, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: ACERO PANAMA, S. A. -VS- CARLOS ESCARTIN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISEIS (16) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 561

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL INTERPUESTA POR EL LCDO. FERNANDO STAPF GÓMEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LAZARO ARCIA CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EL 25 DE MAYO DE 2000, POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: LAZARO ARCIA VS IBETH MENDOZA RODRIGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 563

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO HOMERO IVAN COPARROPA, EN REPRESENTACIÓN DE EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA METRO OESTE, S. A. CONTRA LA SENTENCIA DE 7 DE FEBRERO DE 2000, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL. EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA METRO OESTE, S. A. -VS- JUAN MANUEL DIAZ SAUCEDO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTITRES (23) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 568

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR LA FIRMA VILLALAZ Y ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS EDUARDO DUQUE ZERR, CONTRA LA SENTENCIA DE 27 DE DICIEMBRE DE 1999, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: CARLOS EDUARDO DUQUE -VS- THE STAR AND HERALDO CO. Y/O ERCINA, S. A. Y/O DUTIGRAFIA IMPRESORES, S. A. Y/O DUALTY HOLDING THE COMPANY. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTITRES (23) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 569

SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES 572

EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA 573

EUSEBIO MUÑOZ SHOEEN SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA DICTADA POR EL JUZGADO DE LA TERCERA VARA DE FAMILIA DE LA CAPITAL, ESTADO DE PRENAMBRUCO, BRASIL, POR LA CUAL SE DECLARA DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE LO MANTIENE UNIDO A LA SEÑORA COSETE LOURDES LEAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, ONCE (11) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 573

LA FIRMA FORENSE BOUTIN LAW FIRM, SOLICITA LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA DEL 8 DE JUNIO DE 1999, PROFERIDA POR EL COMITÉ DEL TRIBUNAL DE DISTRITO DE MALOJA, CH-7503, SUIZA, COMO REPRESENTANTES LEGALES DE KPMG FIDES DEL DR. IUR HUBERT ACHERMAN Y DORIS SUSSI. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA Z. PANAMÁ, ONCE (11) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 574

ELEUTERIO SANTOS ROSALES, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO DICTADA POR EL JUGADO TERCERO DE FAMILIA DE MANIZALES, COLOMBIA, POR LA CUAL SE DECLARA DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE MANTIENE CON LA SEÑORA MARIA NOHELIA BERRIO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 577

LINDA TARAZI HARARI, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DICTADA POR EL JUGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE SAN JOSÉ, REPÚBLICA DE COSTA RICA, POR LA CUAL SE DECLARA DISUELTO EL MATRIMONIO QUE LA MANTIENE UNIDA AL SEÑOR LUIS SCHACHTEL KAVER. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 578

EXHORTOS 579

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL NO. 3 DE LA CAPITAL FEDERAL, DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA DENTRO DE LA CAUSA CARATULADA NO. 3412/00 "KORZIN MANUEL Y OTROS" S/EXTORSIÓN Y CON INTERVERNCIÓN DE LA FISCALÍA FEDERAL NO. 6. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, ONCE (11) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). . . 579

EXHORTO LIBRADO POR EL TRIBUNAL REGIONAL DE VADUZ, EN EL PRINCIPADO DE LIECHTENSTEIN DENTRO DE LA CAUSA PROPUESTA POR CENE BANKIERS NV. CONTRA LA SOCIEDAD DICORY OVERSEAS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, ONCE (11) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 582

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, COSTA RICA, DENTRO DEL PROCESO PENAL, POR EL DELITO DE FALSEDAD IDEOLÓGICA EN PERJUICIO DE DANILO PALMA GÓMEZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 583

TRIBUNAL DE INSTANCIA 585

DENUNCIA PRESENTADA POR LOS SEÑORES NURIA CONCHA BARRÍA, DESIDERIO ARROCHA G., ALFONSO ÁLVAREZ, ISIDORO RODRÍGUEZ, MARIO CASTILLO Y HERIBERTO QUIÑONEZ EN CONTRA DEL LICENCIADO ALPINO ZURITA SALCEDO POR FALTAS A LA ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ABOGADO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, ONCE (11) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 585

AUTO DE MEJOR PROVEER DICTADO DENTRO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LAURA DE BARRIO CONTRA EL LICENCIADO LUCIO BERNAL POR FALTAS A LA ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ABOGADO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 586

DENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR ANTONIO DEL ROSARIO ACOSTA CONTRA EL LICENCIADO OMAR RODRÍGUEZ MUÑOZ POR FALTAS A LA ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ABOGADO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 587

NIEVES HERNÁNDEZ INTERPONE DENUNCIA POR FALTAS A LA ÉTICA PROFESIONAL DE ABOGADO CONTRA EL LICENCIADO ARTURO MCTAGGART ESCARTIN. MAGISTRADO PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). 587

YADIRA JIMÉNEZ ORTEGA, INTERPONE DENUNCIA ANTE EL TRIBUNAL DE HONOR POR FALTAS A LA ETICA Y RESPONSABILIDAD DEL ABOGADO CONTRA LA LICENCIADA MARICELA CEBALLOS DE RUDAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000). . . . 589

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PLENO

AGOSTO 2000

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LICENCIADO EDWIN CEDEÑO RODRÍGUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE DULCÍSIMA DALILA CASTILLO DE LEÓN, CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE REFORMA AGRARIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Edwin Cedeño Rodríguez, actuando en nombre y representación de Dulcísima Dalila Castillo De León, ha concurrido ante el Pleno de esta Corporación de Justicia a interponer acción de amparo de garantías constitucionales contra la Resolución D.N. 082-98 de 5 de agosto de 1998, emitida por el Director Encargado de la Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, confirmada por la Resolución No. ALP 017-ra-00 de 17 de abril de 2,000.

Mediante la Resolución D.N. 082-98 de 5 de agosto de 1998, el Director encargado de Reforma Agraria, anuló la solicitud No. 7-28-91 de 1ro de noviembre de 1991 de Dulcísima Dalila Castillo De León, para la adjudicación a título oneroso de una parcela de terreno de aproximadamente 14 héctareas, ubicada en Jobo Dulce, Corregimiento de Llano Largo, Distrito de Los Santos. En este mismo acto, y como consecuencia de la anterior declaración, se ordenó al Departamento de Mensura y Demarcación de Tierras, la anulación del plano No. 72-09-5053 y la continuación de los trámites de adjudicación No. 177 de 10 de mayo de 1993, de Rubén Darío Samaniego Nieto (fs. 1 a 3).

En esta fase del proceso, corresponde a esta Superioridad revisar la acción incoada a fin de determinar si cumple con los requisitos legales para su admisión.

Esta Superioridad observa el recurso interpuesto no es admisible, que el acto cuya revocación se pide es un acto administrativo, emitido por el Director Nacional, encargado, de Reforma Agraria, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, y este tipo de actos es susceptible de ser impugnado ante la via contencioso administrativo.

Ha sido objeto de copiosa jurisprudencia que compete preferentemente a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa examinar la legalidad o ilegalidad de las acciones emanadas de autoridad administrativa. Por ello, esta acción constitucional de naturaleza jurídica extraordinaria no procede cuando existen otros medios de impugnación consagrados en el ordenamiento jurídico.

El contenido del acto que se pretende examinar a través de esta acción constitucional, el derecho tutelado y los hechos en que se fundamenta el recurso, son materia de discusión por vía de una acción de legalidad, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, no al Pleno de la Corte por via de amparo.

En virtud de lo expuesto, lo pertinente es negarle curso a la acción presentada, y a ello procede esta Superioridad.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la acción de Amparo de Garantías Constitucionales presentada por el licenciado Edwin Cedeño Rodríguez, en representación de Dulcísima Dalila Castillo De León, contra el Director Nacional, encargado, de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Notifiquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) ROBERTO GONZALEZ R. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JORGE FABREGA P. (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LICENCIADO ALEJANDRO QUINTERO DIXON, EN REPRESENTACIÓN DE ETELVINA MORENO GONZALEZ, CONTRA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FABREGA P. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Alejandro Quintero, actuando en calidad de apoderado judicial de la señora ETELVINA MORENO GONZALEZ, ha interpuesto acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer contenida en la sentencia de 4 de abril del 2000, expedida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial.

La referida resolución judicial revocó la sentencia PJ-04-99 de 25 de enero de 1999, proferida por la Junta de Conciliación y Decisión No.7, que había declarado injustificado el despido de una trabajadora. En su lugar, la sentencia del Tribunal Superior de Trabajo declaró justificado el despido de la trabajadora y absolvió a la empresa de las reclamaciones impetradas en la demanda.

La Corte procede en primer término al examen del libelo presentado, en vías de determinar si éste cumple con los requisitos que hagan procedente su admisión.

En este punto se advierte que las razones invocadas por el amparista para fundamentar la supuesta conculcación de las garantías constitucionales a la señora ETELVINA MORENO GONZALEZ, se centran de manera medular, en el argumento de que el Tribunal de la causa fundamentó su decisión primordialmente en una pieza probatoria que no se ajusta al debido trámite, vulnerando el debido trámite y el debido proceso. Conforme a este argumento, se aduce que la sentencia expedida resulta violatoria del debido proceso legal y de los artículos 60, 64, 65, 70, 73, 74 y 75 de la Carta Fundamental.

En ese sentido, debemos recordar que la Corte Suprema ha sido enfática al indicar, que la finalidad de las acciones de amparo no es la de erigirse en una tercera instancia que valore el juicio crítico externado por un tribunal jurisdiccional en lo relativo a la ponderación y valoración del caudal probatorio, dado que el debate de fondo de aquella materia es ajena a la acción de amparo, por no tener la categoría de cuestión constitucional.

Dentro de ese orden de ideas, tenemos que el amparo, como acción independiente, tiene a reparar violaciones directas a los derechos constitucionales infringidos, razón por la cual no puede convertirse en una instancia adicional para valorar circunstancias propias de la apreciación del juzgador al ponderar las pruebas y elementos que se allegaron al proceso, y que fueron evaluadas conforme a la sana razón y al conocimiento experimental de las situaciones que rodeaban el negocio.

Por otro lado, entre los requisitos que debe cumplir una acción de amparo de garantías constitucionales está el de expresar el concepto de la infracción, pues, cada artículo o precepto constitucional invocado como violado debe ser acompañado del concepto de la infracción, que no es más que la determinación clara de la forma en que se produjo dicha infracción, y en el caso in examine la

parte actora no indica el concepto de la violación.

La Corte ha manifestado en múltiples ocasiones, que para cumplir con este requisito es preciso que el demandante enuncie formalmente cual es el concepto de la violación, es decir, la infracción de las garantías fundamentales que puede darse por violación directa, interpretación errónea o indebida aplicación.

Ante este escenario jurídico, no le es dable a la Corte contrariar por vía extraordinaria del Amparo de Garantías Constitucionales la evaluación objetiva de las pruebas efectuadas por el Tribunal Superior de Trabajo, y además la acción presentada no cumple con el requisito de indicar el concepto de la infracción, razón por la cual, no puede ser admitida.

Como corolario de lo antes expresado, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por el licenciado Alejandro Quintero, actuando en calidad de apoderado judicial de la señora ETELVINA MORENO GONZALEZ.

Notifíquese y Cúmplase,

(fdo.) JORGE FABREGA P.
(fdo.) CESAR PEREIRA B. (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) ROBERTO E. GONZALEZ R. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR BERRIOS Y BERRIOS EN REPRESENTACIÓN DE VICTOR LUIS BERRIO ANDERSON CONTRA EL JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL (APELACION). MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense BERRIOS Y BERRIOS, en nombre y representación de VICTOR LUIS BERRIO ANDERSON, ha interpuesto recurso de apelación contra la Resolución de 9 de junio de 2000 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, mediante la cual no admite la acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra la orden de hacer contenida en la Resolución de 23 de marzo de 2000 dictada por el Juez Primero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito de Panamá.

El amparista impugna la supuesta orden de hacer contenida en la Resolución de 23 de marzo de 2000 en la que el Juez Primero de Circuito Penal decide abrir causa criminal contra VICTOR LUIS BERRIO ANDERSON Y OTROS, como presuntos infractores de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo I, Título VI, Libro II del Código Penal, es decir, por el Delito Genérico de Falsificación de Documentos en General.

El Primer Tribunal Superior de Justicia del Segundo Distrito Judicial no admitió el amparo de garantías propuesto, básicamente, por lo siguiente:

"..... ..... Siendo por tanto el auto de enjuiciamiento un mero acto facultativo de calificación preliminar del sumario, cuya calificación definitiva corresponde al juzgador penal en el plenario, su naturaleza no es

dable en este caso que sea atacado(sic)por vía de amparo de garantías constitucionales, considerando que los cargos que se le formulan se dirigen contra tan sólo una diligencia previa de la etapa sumarial ejecutada por funcionario distinto al acusado, siendo éste el agente de instrucción que tuvo a su cargo la realización de las pesquisas legales para su posterior remisión y consideración por el juez.

.....
....."

(Foja 32)

Por su parte, el apelante sostiene que ni la Constitución ni el Código Judicial distinguen si la orden impugnada debe estar contenida en una resolución interlocutoria o en una sentencia para que sea admitida una acción de amparo.

Agrega que "si bien es cierto en el libelo de la acción de amparo se censuran acciones u omisiones del funcionario instructor, no hay que perder de vista que el Juez de la causa, una vez concluido el sumario, es el funcionario encargado de subsanar o no estas acciones u omisiones, y es responsable de toda omisión o acción que ejecute al calificar el sumario, por medio del cual se permita (sic) o se violen garantías fundamentales del procesado".

En los hechos octavo y noveno del libelo de demanda el amparista expresó su inconformidad con la manera en que al señor BERRIO ANDERSON le fue tomada una declaración jurada por parte del funcionario instructor, así como con la forma en que el juez de la causa procedió posteriormente respecto a una declaración indagatoria, situación que fue reclamada mediante el incidente de nulidad interpuesto en su momento.(Fs.2 a 3)

En reiterada jurisprudencia la Corte ha precisado la naturaleza jurídica del proceso de amparo de derechos fundamentales. En esa labor, siempre ha sido descartada la posibilidad de que esta institución de garantía pueda ser empleada como un recurso ordinario tendiente a revisar la actuación del juez en relación con la valoración de los medios de prueba o la interpretación que se le haya dado a la ley. Se ha mantenido, en cambio consistentemente, que la acción de amparo guarda relación con la tutela de derechos y garantías consagrados por la propia Constitución que resulten lesionados por verdaderas órdenes de hacer o no hacer expedidas o ejecutadas por servidores públicos, pertenezcan estos a la esfera administrativa o a la jurisdiccional. Es por ello que resulta necesario determinar, como cuestión previa, si la resolución atacada contiene una orden de hacer arbitraria que conlleve la violación de derechos o garantías contempladas en la Constitución.

Se ha dejado sentado en la jurisprudencia que, contra el auto de llamamiento a juicio, no procede la acción de amparo, por cuanto el enjuiciamiento no representa una orden de hacer. El auto de proceder es un acto jurisdiccional de naturaleza formal, declarativa, interlocutoria, cuyo objeto es dilucidar si concurren o no los presupuestos que se exigen para la celebración del juicio oral, es decir, si han sido acreditadas en las sumarias la existencia del hecho punible y la identidad de su presunto autor, para poder así dar inicio a la fase plenaria del proceso.

El Pleno, luego de examinar el expediente, coincide con las consideraciones elaboradas por el Primer Tribunal Superior al no admitir el amparo, en virtud de que esta clase de resoluciones -el llamamiento a juicio- no tienen la naturaleza ni la forma de los actos que son susceptibles de ser atacados por vía de amparo. Se trata de actos que, como en numerosas ocasiones se ha expresado, no admiten ser cuestionados por medio de la vía constitucional empleada en el presente caso.

En consecuencia, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución de 9 de junio de 2000 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia mediante la cual NO ADMITE la acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra LA ORDEN DE HACER contenida en la

Resolución de 23 de marzo de 2000 dictada por el JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO DE PANAMÁ.

Cópiese, Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) ROBERTO GONZALEZ R. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JORGE FABREGA PONCE (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LCDO. RANDOLF LAWSON EN REPRESENTACION DE DILIAM BEATRIZ SYRES DE HERRERA CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN EL RESUELTO DE 26 DE ABRIL DE 2000 EMITIDO POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado RANDOLPH A. LAWSON R., en nombre y representación de DILIAM BEATRIZ SYRES DE HERRERA, ha interpuesto acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra la orden de no hacer contenida en la resolución de 26 de abril de 2000, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia dentro del Proceso Ejecutivo Hipotecario propuesto por FINANCIERA METRO, S. A. contra la amparista.

La Corte procede a determinar si en este caso se cumplen los presupuestos necesarios para la procedencia de la acción de amparo de garantías constitucionales.

Lo que se impugna es el Resuelto de 26 de abril de 2000, toda vez que, a juicio del amparista, reviste la forma de una orden o acto de no hacer, ya que el Primer Tribunal Superior decidió declararse inhibido de conocer la apelación interpuesta contra el Auto 2219 de 16 de febrero de 2000, dictado por el Juzgado Tercero de Circuito que decreta ampliación de embargo dentro del Proceso Ejecutivo Hipotecario propuesto por FINANCIERA METRO, S. A. contra DILIAN BEATRIZ SYRES DE HERRERA.

Esta Corporación observa que el acto impugnado no cumple con algunas condiciones necesarias para la viabilidad del amparo. El acto impugnado no contiene una orden de no hacer, ya que la imposición de un NO HACER al gobernado constituye, ante todo, un mandato prohibitivo emanado de la autoridad. Sin embargo, se considera que cuando el sentenciador se inhibe de conocer un negocio no está impartiendo ninguna orden, sino que está señalando que no le compete conocer de lo que se le está planteando. En este sentido, la jurisprudencia ha señalado:

> "Considera la Corte que lo más importante es que no estamos en presencia de una orden de no hacer, como pretende el amparista. La Junta de Conciliación y Decisión cuando se inhibe de conocer un negocio no está impartiendo ninguna orden, lo que está sosteniendo es que a ella no le corresponde el conocimiento de un asunto legal y señalando a quien la ley le atribuye la competencia para el caso puesto en su conocimiento"
> (Sentencia de 14 de febrero de 1991 - Eric Jaramillo contra la Junta de Conciliación y Decisión No.1)

Adicionalmente, a juicio de la Corte, la resolución contra la cual se ha presentado el amparo (mediante la cual el Tribunal Superior se inhibe de conocer apelación interpuesta por la demandada contra el auto que decreta ampliación del embargo) es producto del trámite que se debe seguir dentro del proceso ejecutivo, de manera que no se puede calificar como arbitraria, ya que no ha sido dictada por voluntad caprichosa del sentenciador sino con fundamento en la ley. Así vemos que entre las consideraciones que se exponen en la misma, cuya copia autenticada figura a fojas 6 del este expediente, el Tribunal señaló:

> "El auto que decreta embargo no aparece entre las resoluciones susceptibles de ser impugnadas mediante el recurso de apelación; por lo que si el a-quo erró al conceder tal apelación, este Tribunal cometería mayor error al atenderla".

Como sostuvo el ex Magistrado Molino Mola en su ponencia titulada "LOS ACTOS SUJETOS A LA ACCION DE AMPARO" (publicada en el Registro Judicial de septiembre de 1995), la jurisprudencia se ha pronunciado en algunos casos sosteniendo que no estamos en presencia de una orden o que los requisitos que debe cumplir la orden no se dan, entre los cuales se enumeró el relativo a las medidas cautelares, ya que las mismas se dictan inoída parte, de modo que no se pueden suspender ni interrumpir, "ni aún por un amparo de garantías constitucionales, salvo que se trate de un caso excepcional y de manifiesta violación de un derecho constitucional" (Sentencia de 26 de abril de 1993). Sobre este particular en otros casos la Corte ha sostenido que "No cabe amparo contra auto de embargo y venta judicial" (Sentencias de 14 de junio de 1993 y 7 de diciembre de 1992).

Aunado a lo expuesto, en este caso, el amparista tampoco ha probado que interpuso recurso de hecho ante el superior contra la resolución atacada en amparo, que entraña la negativa a conceder la apelación, conforme a los artículos 1121 y 1132 del Código Judicial. Por tanto, no se consideran agotados los medios de impugnación disponibles, previa la utilización del amparo.

Por las consideraciones expuestas, el amparo resulta manifiestamente improcedente.

Consecuentemente, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el amparo de garantías constitucionales propuesto por DILIAM BEATRIZ SYRES contra la orden de no hacer contenida en la resolución de 26 de abril de 2000, emitida por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) ROBERTO GONZALEZ R. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JORGE FABREGA P. (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA LCDA. ALMA L. CORTES A., EN REPRESENTACION DE PROCESADORA MARPESCA S. A., CONTRA EL MINISTRO DE DESARROLLO AGRPECUARIO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia conoce de la acción de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesta por la Licda. ALMA CORTES en representación de la sociedad PROCESADORA MARPESCA S. A., contra la Nota No. DM-1069-2000 de 29 de mayo de 2000, expedida por el Ministro de Desarrollo Agropecuario.

Se observa que la controversia traída a nuestro conocimiento, se origina en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), a raíz de la presentación por parte de la empresa PROCESADORA MARPESCA S. A., de una solicitud para la entrada al país de camarones congelados procedentes de Asia, solicitud que aparentemente ha sido negada por la administración.

Así, consta a foja 2 del expediente la Nota DM-1069-2000 de 29 de mayo del 2000 (acto impugnado), en la que el Señor Ministro de Desarrollo Agropecuario informa al Vice-presidente de la Compañía Procesadora Marpesca S. A., que ese Ministerio se veía "imposibilitado de otorgar permiso para la importación de camarones en cualquier estadío de vida, fescos o congelados, procedentes de zonas con patógenos exóticos a nuestro medio, como es el caso de los países asiáticos afectados por la enfermedad de la Cabeza Amarilla y Baculovirus Monodom, entre otras"

Una vez recibida esta comunicación, la apoderada legal de la empresa afectada se apersonó al Ministerio de Desarrollo Agropecuario en compañía de Notario Público, a fin de que se le certificara sobre la decisión administrativa que había recaído en relación a la solicitud No. 10773 de licencias Fito-Zoosanitarias de Importación y Tránsito de crustáceos presentadas por PROCESADORA MARPESCA S. A.

En la diligencia notarial realizada el 5 de julio de 2000, cuya transcripción consta a foja 3 del expediente, se recoge la circunstancia de que el MIDA, a través del Médico Veterinario Ariel Castillo, "devolvió el formulario de Solicitud de Licencias Fito-Zoosanitarias de Importación y Tránsito" presentada por PROCESADORA MARPESCA S. A.

Se dejó además consignado, que el funcionario del Ministerio de Desarrollo Agropecuario había hecho la siguiente anotación en el formulario de licencia: "Observación: No se permite el procesamiento de crustáceos procedentes de Asia para Panamá por la presencia del cabeza amarilla en ese Continente."

El acta notarial se concluye con el siguiente comentario:

> "Dejó (sic) constancia que en esta diligencia no se le presentó a la Licenciada ALMA LORENA CORTES, ningún expediente para su notificación formal y sólo se expresó verbalmente la negativa de la solicitud presentada en el formulario número diez mil setecientos setenta y tres (10773), con la explicación expresa que transcribimos con anterioridad." (destacado es nuestro)

De lo supra transcrito parece desprenderse, que se produjo agotamiento de la vía gubernativa por silencio administrativo en el caso de las licencias fitozoosanitarias gestionadas por la empresa PROCESADORA MARPESCA, toda vez que el MIDA devolvió sin resolver de manera formal, aunque aparentemente negativa, las solicitudes de licencia de importación y tránsito de crustáceos.

Por la forma en que viene planteado este proceso constitucional subjetivo, pareciera existir en este caso una dualidad de actos recurridos, esto es, que se impugna la Nota del Ministro de Desarrollo Agropecuario, y a la vez se ataca la negativa por silencio administrativo, en relación a las licencias Fito-Zoosanitarias solicitadas por PROCESADORA MARPESCA S. A.

Aunque tal proceder constituye un defecto formal en los procesos de Amparo, la Corte ha de manifestar que en el negocio sub-júdice carece de relevancia, toda vez que cualquiera que fuese el acto realmente recurrido, ambos son actos de

naturaleza administrativa, perfectamente impugnables ante la Sala Tercera de la Corte.

Profusa jurisprudencia de este Máximo Tribunal de Justicia categóricamente ha señalado, que en estos casos opera el principio de preferencia de la vía contencioso-administrativa sobre la constitucional, y que de acuerdo a lo previsto en el artículo 2606 numeral 2° del Código Judicial, el agotamiento de todos los medios de impugnación que la ley ha previsto para enervar actos de carácter administrativo, es presupuesto fundamental para la presentación de Amparos de Garantías Constitucionales, presupuesto que evidentemente no se ha cumplido en este caso.

Por ende, lo pertinente es negarle curso legal a la acción presentada.

De consiguiente, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la acción de Amparo de Garantías Constitucionales presentada por la licenciada ALMA CORTES, actuando en virtud de poder otorgado por la empresa PROCESADORA MARPESCA S. A.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JOGE FÁBREGA P. (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) ROBERTO GONZÁLEZ R.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES R.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR BERRIOS Y BERRIOS, EN REPRESENTACION DE GABRIEL ARIEL LAWSON, CONTRA EL JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CTO. JUDICIAL, APELACION. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación conoce este Máximo Tribunal de Justicia, de la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesta por el licenciado JAIME CHOY GARCIA en representación de TRANS TURBO S. A., contra el Auto Vario No. 77 de 26 de marzo de 1999 expedido por el Juzgado Noveno del Circuito Penal de Panamá.

I. ANTECEDENTES

Esta iniciativa de rango constitucional, tiene su origen dentro del proceso penal que por la presunta comisión de un delito contra la salud pública relacionado con drogas, se sigue a EZRA ANGEL BENZION.

Dentro de aquel proceso se ordenó, con base en el artículo 29 de la Ley 23 de 1986 modificada por la Ley 13 de 1994, la aprehensión provisional de un automóvil del sindicado BENZION, que había sido vendido a éste, con retención de dominio, por la compañía TRANS TURBO S. A.

Por aprehendido el vehículo, TRANS TURBO solicitó al Juez Noveno Penal que se le entregara la custodia y administración del bien, aduciendo que dicha compañía era la legítima propietaria del vehículo aprehendido.

Esta solicitud fue negada por el Juez Noveno Penal a través del Auto No. 77 de 26 de marzo de 1999, contra el cual se encausó la presente acción de amparo.

Cabe destacar, que el Auto No. 77 de 26 de marzo de 1999 fue apelado y confirmado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, al considerar que existían elementos probatorios que acreditaban que EZRA BENZION era quien utilizaba el automóvil en cuestión, y que a la fecha no había podido descartarse que el bien se hubiese adquirido con dineros vinculados o provenientes de la actividad ilícita que se le imputa.

II. LA RESOLUCION DE PRIMERA INSTANCIA

La alzada ha sido dirigida contra la resolución de 23 de junio del 2000 proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, que denegó la acción de amparo presentada por la empresa TRANS TURBO S. A.

La motivación fundamental que sustenta la sentencia recurrida, recae en el hecho de que el Juez Noveno Penal, en el auto impugnado mediante amparo, no violó el derecho de propiedad privada al amparista, y decidió conforme a sus facultades legales, negar a TRANS TURBO S. A., la administración y custodia del bien: vehículo marca Toyota Land Crusier, con placa No.8-092343, toda vez que dicho vehículo pertenece en propiedad a EZRA ANGEL BENZION, sujeto que actualmente está siendo procesado por dicho Juzgado, por la presunta comisión de delitos contra la salud pública relacionados con drogas.

En la parte medular de la resolución judicial apelada, el Primer Tribunal Superior de Justicia, al momento de decidir sobre el mérito del Amparo de Garantías, destacó:

> "De lo anterior emerge que no resulta infringido el artículo 44 de la Constitución Política que garantiza la propiedad privada e invocado por la amparista, toda vez que por su contenido, la resolución acusada de arbitraria en modo alguno resuelve sobre la propiedad del automóvil marca Toyota Land Crusier, color rojo y negro del año 1987, con placa No. 8-092343, sino, sobre la solicitud de custodia y administración de dicho bien, solicitud formulada por TRANS TURBO S.A. al Juez Noveno del Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, quien negó tal solicitud, al concluir que el sindicado EZRA ANGEL BENZION está siendo investigado por el Delito contra la Salud Pública, situación que lo enmarca dentro del artículo 29 de la Ley 13 de 1994; y siendo como es, la autoridad competente para mantener aprehendido el bien, el tribunal de Amparo, debe concluir que debe denegar la acción de Amparo de Garantías Constitucionales."

III. ARGUMENTOS DEL APELANTE

Al sustentar la alzada, el apelante insiste en el mérito de la pretensión constitucional subjetiva, arguyendo que la empresa TRANS TURBO S. A. aparece registrada en Municipio de Panamá como la propietaria del automóvil, y que si bien éste fue vendido a EZRA BENZION, la enajenación se realizó con retención de dominio hasta que el bien fuese completamente pagado.

Añade, que negarse la administración y custodia de dicho vehículo a su propietario, y permitir que otras personas utilicen el automóvil en forma negligente, constituye una violación al derecho de propiedad contenido en el artículo 44 de la Constitución Nacional.

IV. DECISION DEL TRIBUNAL AD-QUEM

El artículo 44 de la Constitución Nacional garantiza el respeto a la propiedad privada, en todas sus formas. Tal garantía se dice violada en el negocio sub-júdice, al negarse a la empresa TRANS TURBO S. A., la custodia y administración de un bien mueble (automóvil), que aduce le pertenece en propiedad.

Queda visto que el Tribunal de primera instancia ha desestimado el cargo de violación, señalando básicamente que el acto recurrido mediante amparo no resuelve sobre la propiedad del automóvil provisionalmente aprehendido, sino sobre la solicitud de custodia y administración presentada por TRANS TURBO S. A.

Por examinado el acto recurrido, esta Superioridad observa que en efecto, el Auto Penal No. 77 de 26 de marzo de 1999 no decide quién ha de ejercer el derecho real de propiedad sobre el automóvil cautelado.

Si la empresa amparista consideraba, como se desprende del libelo, que se le ha negado el uso y disfrute de un bien que le pertenece, y que no tiene vinculación alguna con el ilícito investigado, el ordenamiento procesal penal prevé un remedio específico para excluir dicho bien de la masa de bienes aprehendidos, a través de la figura del tercero incidental, regulada en la Sección Octava del Capítulo III, Título I, Libro Tercero del Código Judicial.

Siendo que el amparista optó por solicitar la custodia y administración del bien cautelado, tal petición se encuentra regida por el artículo 29 de la Ley 23 de 1986 modificada por la Ley 13 de 1994, que dispone que el juzgador de la causa tiene en estos casos, una potestad discrecional para decidir favorable o negativamente, la solicitud presentada.

A este respecto, el artículo 29 de la Ley 23 de 1986 claramente preceptúa:

> "Los instrumentos, dineros, valores y demás bienes empleados en la comisión de delitos relacionados con drogas y los productos derivados de dicha comisión serán aprehendidos provisionalmente por el funcionario instructor, quedando fuera del comercio y serán puestos a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, hasta tanto la causa sea decidida, en forma definitiva, por el tribunal jurisdiccional competente. Cuando resulte pertinente, la orden de aprehensión provisional será inscrita en el Registro Público.
>
> Cuando la aprehensión provisional recaiga sobre vehículos a motor o establecimientos de propiedad de terceros no vinculados al hecho punible, el Tribunal competente, previa opinión del funcionario instructor, podrá designar como depositarios a sus propietarios otorgándoles la tenencia provisional y administrativa del bien hasta que se decida la causa.
>
> A quien se le haya autorizado la tenencia o administración provisional de un bien mueble o inmueble, está obligado a cumplir respecto a ellos todas las obligaciones de un buen padre de familia y sólo responderá del deterioro o daño sufrido por culpa o negligencia." (el resaltado es nuestro)

Del texto citado se desprende sin mayor esfuerzo, que la designación de un tercero que se encargue de la tenencia y administración de un bien provisionalmente aprehendido conforme a la Ley 23 de 1986, es potestativa del juez de la causa penal, incluso en el caso de que dicho tercero sea el propietario.

En vías de que lo resuelto por el juez no se considere una decisión arbitraria, ésta debe encontrarse sustentada con lógica-jurídica, que permita conocer qué razonamientos o parámetros orientaron la decisión jurisdiccional. Tal presupuesto concurre en este caso, al constatarse que una vez recibida la solicitud de custodia, el juzgador penal le imprimió el trámite establecido en el texto legal citado ut supra, y previa audiencia de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas en su calidad de agente instructor, decidió no entregar la administración del automóvil aprehendido a TRANS TURBO S. A.

Esta negativa aparece motivada con suficiencia, y es congruente con los

elementos que reposan en la investigación (cfr. cuadernillo adjunto contentivo de la solicitud de custodia), destacándose que aunque TRANS TURBO S. A. aparece aún registrada como propietaria del vehículo, por haberse pactado la venta del automóvil con retención de dominio, la propia empresa aceptó que el bien había sido adquirido por EZRA BENZION, y según se desprende del proceso adelantado, aún no se ha esclarecido la licitud de los fondos con que se realizó dicha adquisición.

Coincide este Tribunal con las apreciaciones del A-quo, quien consideró que la actuación del Juez Noveno Penal se encuentra enmarcada dentro de sus facultades legales, y no era violatoria del artículo 44 de la Constitución Nacional. Por ende, la resolución apelada ha de ser confirmada por el Ad-quem.

De consiguiente, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA EN TODAS SUS PARTES, la resolución de 23 de junio de 2000, emitida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, que DENEGO el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por el licenciado JAIME CHOY GARCIA en representación de TRANS TURBO S. A.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JORGE FÁBREGA P. (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) ROBERTO GONZÁLEZ R.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES R.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR MORGAN & MORGAN, EN REPRESENTACIÓN DE HAMILTON TELECOMMUNICATIONS LIMITED, CONTRA EL JUEZ DÉCIMO DE CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, TRES (3) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense Morgan & Morgan, en representación de HAMILTON TELECOMMUNICATIONS LIMITED, ha presentado recurso de apelación contra la resolución emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá el 9 de junio de 2000, mediante la cual se decidió no acoger el amparo de garantías constitucionales propuesto contra el Juez Décimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial.

El apelante presentó ante el Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, demanda de amparo para que se revoque la orden contenida en el Auto No. 406 de 1° de marzo de 2,000, proferido por el Juez Décimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial, mediante el cual admitió la demanda ordinaria de mayor cuantía presentada por 123 Multimedia Ltd. contra Hamilton Telecommunications Limited (fs. 62 y reverso).

Como sustento de la alzada en lo medular se argumentó lo siguiente:

> "1-No es posible que siendo clara la incompetencia de un Tribunal, que el propio Juzgador está obligado a advertir ad-initio, como deber de oficio, sea necesario esperar que se tramite un largo proceso incidental, para impugnar una actuación viciada de nulidad, tras la cual se ampara una medida cautelar que causa daños patrimoniales y comerciales de incalculable valor a la parte

demandada, practicada como medio de coacción para forzar a la demandada a aceptar condiciones onerosas para la solución de un eventual conflicto del cual tendría que conocer un Juez inglés, no uno panameño.

2-Si la falta de competencia está a la vista y es un deber del Juzgador revisarla como requisito de previo cumplimiento para la admisión de una demanda (como se desprende de lo previsto en los art. 702 y 199, ords. 6, 9 y 11 del Código Judicial), entonces el Juez no puede negarse a hacer ese reconocimiento y a tomar las medidas a que ello da lugar, so pretexto de que estas decisiones que son de obligación, sólo puede adoptarla por vía incidental y a petición de parte.

3-Se comprende que el Señor Juez demandado se niegue a inadmitir la demanda y obligue a la parte a incidentar, cuando el vicio denunciado en la demanda, no constituye un requisito de previo cumplimiento para la admisión de la misma, que le Señor Juez tiene el deber oficioso de revisar antes de emitir el Auto admisorio de la demanda. Pero, habiendo sido advertido claramente por una de las partes el incumplimiento de uno de tales requisitos, por vía de reconsideración contra el Auto admisorio de la demanda, no puede negarse el Juzgador a revisar la admisión de la demanda, invocando, como pretexto para no cumplir con los deberes que le atañen, un formalismo procesal que evidentemente resulta contrario a los principios procesales de simplificación de los trámites, economía procesal y ausencia de formalismos, reconocidos en el artículo 212 de la Constitución Nacional.

4-También resulta inaceptable el argumento contenido en la pieza apelada, en el sentido que la petición que realizamos al Señor Juez demandado en nuestro recurso de reconsideración, de que ejerciera la facultad oficiosa contemplada en el artículo 702 del Código Judicial y la solicitud contenida en el incidente de nulidad, aunque son diferentes, conllevan el mismo fin, porque la finalidad de la primera, es precisamente, que el Juez cumpla con el deber y la obligación que le señala el artículo 199, ordinal 11, del Código Judicial, en cuanto a evitar o prevenir la nulidad procesal o la realización de una cadena de actos nulos y el fin de la segunda, es anular lo ya actuado inválidamente; ..."

El apelante alega que, contra la resolución que resuelve un recurso de reconsideración del auto admisorio de la demanda, no existe otra vía de impugnación más que el amparo de garantías constitucionales, por lo cual está en desacuerdo con el Tribunal Superior cuando señala que "la amparista no ha demostrado que ha agotado todos los medios o trámites previstos en la Ley para la impugnación de la resolución objeto de esta acción de amparo"

En el expediente consta el proceso ordinario de mayor cuantía propuesto por 123 Multimedia, Ltd. contra Verity International Limited, ahora Hamilton Telecommunications Limited, recibida por el Juzgado Décimo de Circuito, Ramo Civil, el día 23 de febrero de 2000 (fs. 44 a 58).

El 1ro de marzo de 2000 se presentó ante este Juzgado la solicitud de Hamilton Telecommunications Limited, por vía de apoderada judicial, para que el tribunal se inhiba de conocer de la demanda propuesta por 123 Multimedia, Ltd., por carecer de competencia, conforme lo dispuesto en los artículos 234, 254, 255 y 258 del Código Judicial, pues la empresa demandada es una sociedad extranjera con domicilio en el Reino Unido y no en Panamá, donde no está establecida, ni tiene oficinas ni establecimientos y tampoco cuenta con un representante autorizado (fs. 59 a 61).

Con fecha 1ro de marzo de 2000, fue emitido por el Juzgado Décimo Civil del

Primer Circuito Judicial de Panamá, el Auto No. 406 (acto objeto del recurso de amparo), mediante el cual se admite la demanda ut supra y, a su vez, se ordena notificar a Hamilton Telecommunications Limited vía exhorto o carta rogatoria, como lo ordena el artículo 999 del Código Judicial, para lo cual da traslado por el término de 40 días (fs. 62 y reverso).

Notificada la admisión de la demanda a la apoderada judicial de Hamilton Telecommunications Limited, ésta presentó recurso de reconsideración (fs. 63 a 74), el cual fue negado mediante el Auto No. 588 de 3 de abril de 2000 (fs. 75 y 76). En lo medular el juzgador a cargo manifestó lo siguiente:

> "Tal argumentación no puede servir de sustento en un recurso de reconsideración, pues la falta de competencia como tal, esta concebida en la ley procesal como una cuestión accesoria y controversial que requiere de un pronunciamiento especial, según lo establecen los artículos 686, 687, 722, numeral 2 y 741, todos del Código Judicial. Lo anterior es conocido por el ahora recurrente, pues unido a este recurso presentó la incidencia a la que hacemos referencia, la cual se tramita como accesoria a este expediente principal y, actualmente, se encuentra pendiente de notificación a la representación judicial de la parte actora (ver. fs. 8 del incidente)"

Tal como se expresó líneas atrás, el actor presentó acción de amparo de garantías constitucionales contra el auto admisorio, por violación al debido proceso; acción que no fue acogida por el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

El quid de la discusión se centra en la falta de jurisdicción del juez a-quo para conocer de la demanda que ha sido entablada contra Hamilton Telecommunications Limited, porque este litigio debería llevarse ante los estrados de un tribunal inglés, sostiene el amparista, en consideración a que Hamilton Telecommunications Limited no está domiciliada en Panamá ni realiza negocios ni cuenta con un representante autorizado en este país.

El demandante invoca una serie de principios, como citamos, el de simplificación de trámites, economía procesal y ausencia de formalismos; además, de hacer alusión a los elevados costos que representan la continuación del comentado proceso ante un juez que evidentemente no es competente para conocer de la reclamación.

El recurso de amparo de garantías constitucionales es una figura creada para la tutela y garantía de la fiel observancia de los derechos y garantías consagrados en la Carta Magna.

Sin embargo, la interposición de este recurso extraordinario está condicionado por algunos requisitos, entre ellos, la procedencia únicamente cuando se hayan agotado los medios y trámites previstos en la ley, mediante los cuales se pueda impugnar la orden de que se trate (ver numeral 2 del artículo 2606 del Código Judicial).

En este caso se observa, y así lo dejó consignado el juez acusado en el Auto No. 588 de 3 de abril de 2,000, que el demandado presentó un incidente de nulidad para que sea reconocida la incompetencia que reclama, es decir, que simultáneamente con la interposición del recurso de reconsideración, presentó también la comentada incidencia.

La ley exige como presupuesto de procedibilidad el que se hayan agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación judicial de que se trate (artículo 2606, numeral 2, del Código Judicial).

Lo que discute el amparista es la presunta falta de competencia del tribunal para conocer de la controversia por razón del domicilio del demandado.

Esta cuestión puede ser, en efecto, atacada por intermedio de los recursos ordinarios, en este caso, la reconsideración contra la resolución admisoria de la demanda, y también con mayor especificidad, a través del incidente de nulidad por falta de competencia, consagrado en el artículo 722, numeral 2 del Código Judicial. Lo expresado revela que, si el incidente de nulidad por falta de competencia es uno de los medios y trámites que pueden ser ejercitados para impugnar la competencia de un tribunal respecto de una controversia, al no haberse surtido el agotamiento de este trámite, evidentemente aún no se ha cumplido una de las condiciones o exigencias técnico-procesales necesarias para la admisión de un amparo de garantías constitucionales.

La sola promoción del recurso de reconsideración ensayado es claro que no ha agotado los medios previstos por la ley para atacar la competencia del juez ordinario, pues, como se indicó, se encuentra pendiente de tramitación y decisión definitiva el incidente de nulidad propuesto por la firma que apodera a la recurrente.

Las razones anteriormente expuestas, le confirman a este Colegiatura que, efectivamente, no se han agotado los medios ordinarios de impugnación y que la actuación que se acusa de atentatoria contra la garantía fundamental del debido proceso es susceptible de ser revisada y enmendada por la vía incidental y, tal como ha señalado el juez de la causa, el amparista ha hecho uso de este recurso, lo cual es un reconocimiento obvio de esta situación. Por tanto, la revisión del auto admisorio de la demanda ordinaria de mayor cuantía propuesta por 123 Multimedia, Ltd. contra Verity International Limited, ahora Hamilton Telecommunications Limited, a través de la presente acción de amparo no es viable, ya que esta pendiente de resolverse sobre esta controversia el incidente interpuesto por la amparista.

En mérito a lo expuesto, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la Resolución dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 9 de junio de 2,000, mediante la cual no acoge la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por la firma forense Morgan & Morgan, en representación de HAMILTON TELECOMMUNICATIONS LIMITED, contra el Juez Décimo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) ROBERTO GONZÁLEZ R. (fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LCDO. JOSE E. HERRERA, EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE MARCELINA MURILLO VEGA, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCION N° APL-026-RA-2000 DE 23 DE MAYO DE 2000, EMITIDA POR EL MINISTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRES (3) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado José E. Herrera C., actuando en nombre y representación de MARCELINA MURILLO VEGA, ha interpuesto acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer contenida en la Resolución N°APL-026-RA-2000 de 23 de mayo de 2000, emitida por el Ministro de Desarrollo

Agropecuario.

En la demanda se le solicita a la Corte que revoque la orden de hacer contenida en la Resolución N°APL-026-RA-2000 de 23 de mayo de 2000, emitida por el Ministro de Desarrollo Agropecuario, por medio de la cual se confirma en todas sus partes la Resolución No. D-N-393-99 de 11 de octubre de 1999 y se advierte a las partes que con esta resolución se agota la vía gubernativa. La Resolución No. D-N-393-99 de 11 de octubre de 1999 resuelve reconocer derechos posesorios a la Junta de la Comunidad de Los Montes de Río de Jesús, sobre un globo de terreno de aproximadamente doscientos (200) metros cuadrados, ubicada en la localidad de Los Montes, Corregimiento de Cabecera, Distrito de Río de Jesús, Provincia de Veraguas; anular la solicitud No.9-0645 de 19 de noviembre de 1998, a nombre del señor José de la Cruz Vega Vergara y autorizar a la Junta Local de la comunidad de los Montes de Río de Jesús a que inicie los trámites de titulación en la oficina correspondiente.

La Corte observa que el amparista pretende enervar un acto confirmatorio mediante la interposición de esta acción extraordinaria. Esta Corporación ha señalado en reiterada jurisprudencia que todo amparo debe presentarse contra la resolución de primera instancia no modificada, que contenga la orden de hacer original y no contra actos confirmatorios.

Aunado a lo anterior, cabe destacar que no pueden ser recurridos a través del amparo actos o resoluciones que puedan ser impugnados mediante otras vías procesales. En este caso se observa que la Resolución N°APL-026-RA-2000 de 23 de mayo de 2000, emitida por el Ministro de Desarrollo Agropecuario, además de ser un acto confirmatorio es un acto administrativo el cual es susceptible de ser impugnado en la vía contencioso administrativa ante la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia.

Por otra parte, la Corte advierte que la demanda infringe el artículo 2610 del Código Judicial, pues se aprecia que la resolución contentiva de la orden de hacer impugnada consiste en una copia simple que no ha sido autenticada por el ente administrativo a cuyo cargo corresponde la custodia del documento original, es decir, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Por las razones expuestas la demanda es manifiestamente improcedente y no debe admitirse, conforme a lo dispuesto en el artículo 2611 del Código Judicial.

En consecuencia, el PLENO de la Corte Suprema administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales propuesto por el licenciado José E. Herrera C., actuando en nombre y representación de MARCELINA MURILLO VEGA, contra la orden de hacer contenida en la Resolución N°APL-026-RA-2000 de 23 de mayo de 2000, emitida por el Ministro de Desarrollo Agropecuario.

Notifiquese y Cumplase

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) ROBERTO E. GONZALEZ R. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR SOLÍS, ENDARA, DELGADO Y GUEVARA, EN REPRESENTACIÓN DE GANADERA EL TECAL S. A., CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 28 DE ENERO DE 2000, EMITIDA POR EL JUEZ DÉCIMO TERCERO DE CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, TRES (3) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Raúl Maldonado Leary, actuando como apoderado especial del licenciado Juan José Morales Fruto, Juez Décimotercero de Circuito del Primer Circuito Judicial, Ramo Civil, ha interpuesto ante el Pleno de la Corte Suprema recurso de apelación contra la resolución judicial de 31 de mayo de 2000 proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, en virtud de la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por la firma forense Solís, Endara, Delgado y Guevara, apoderada judicial de la Sociedad Ganadera El Tecal S. A., contra la orden de hacer contenida en la resolución de 28 de enero de 2000, emitida por el apelante, que ordena llevar a cabo la práctica de una inspección judicial.

DECISION DE PRIMERA INSTANCIA

La medida jurisdiccional censurada concedió el amparo de garantías propuesto y, en consecuencia, revocó la resolución calendada el 28 de enero de 2000, dictada dentro del cuaderno de pruebas de la parte actora en el Proceso Ordinario que le sigue ALAQUA CORP. contra GANADERA EL TECAL, S. A. y mediante la cual se ordenó practicar una inspección judicial el día 22 de febrero de 2000 a las 8:00 a. m." (f.124). Esta decisión se adoptó, tras considerar que "cuando el Juez demandado dictó la orden atacada, el término de evacuación de pruebas señalado ya se encontraba vencido y por tanto mal podía señalarse ese día fecha para la práctica de una diligencia", situación que "implica una violación a la garantía constitucional del debido proceso consagrada en el artículo 32 de la Constitución Política" (f.122).

RAZONES DEL APELANTE

El recurrente plantea, en primera instancia, que el término del período de práctica de pruebas no había vencido, puesto que se trata de un término "judicial" y no "legal", que por razón de un recurso de reconsideración impetrado contra la resolución que admite la prueba del actor, suspendió el término de práctica de la misma, por lo que "el término comenzará desde la fecha en que se notificó a las partes la resolución que comunica el destino de la misma, lo que hace que el día 28 de enero de 2000 e incluso el día 22 de febrero del mismo año, estén dentro de dicho término" (f.129).

De otra parte, la defensa técnica argumenta que no existió un daño grave e inminente, ya que "El Amparo de Garantías fue interpuesto el día 23 de febrero, un día después de la fecha fijada para la práctica de la prueba. Si la amparista consideraba gravemente dañosa y arbitraria la orden, la actitud correcta era impugnarla mediante el recurso de amparo, antes del término la fecha fijada para la práctica de pruebas, esto es, antes del 22 de febrero, mas lo que ocurre es que comparece a la práctica de la prueba ese día, se pone de acuerdo con la contraparte para practicarla, incumple luego tal acuerdo y solo luego de haber ocurrido todo eso interpone la demanda de amparo, al día siguiente o sea el 23 de febrero" (fs.130-131).

DECISION DE LA CORTE

Corresponde en este momento procesal entrar a decidir el fondo del presente negocio. La Corte considera que el argumento central de la censura, radica en que el término fijado para practicar la inspección judicial, decidida en la resolución de 28 de enero de 2000, no había vencido. Para resolver este reparo, se atienden las siguientes consideraciones.

El examen de las constancias procesales permite conocer que, dentro del proceso incoado por ALAQUA CORP. contra GANADERA EL TECAL S. A., el Juez Décimotercero de Circuito del Primer Circuito Judicial, Ramo Civil, profirió auto N° 849 calendado 27 de octubre de 1999, mediante el cual admitió la prueba de

inspección judicial aducida por la parte actora y concedió un término de 30 días para la práctica de la prueba (fs.46-48). Este es un término común a las partes, por lo que para determinar cuándo empieza a correr, resulta preciso considerar lo preceptuado en el artículo 515 del Código Judicial, según el cual "Si un término fuere común a varias partes, se contará desde el día siguiente a aquél en que la última persona ha sido notificada".

El comentado auto N° 849 de 27 de octubre de 1999 le fue notificado a la firma de abogados Guerra & Guerra, apoderada judicial de la parte actora, el 18 de noviembre de 1999 (f.49) y a la firma forense Solís, Endara, Delgado y Guevara, el 30 de noviembre de 1999 (f.48). Con esta información, se colige que el término para evacuación de pruebas, establecido por el juez en 30 días, iniciaba el 1° de diciembre de 1999 y vencía el 14 de enero de 2000, de acuerdo al citado artículo 515.

Así las cosas, se podría deducir, prima facie, que la resolución de 28 de enero de 2000, emitida por el Juez Décimotercero de Circuito del Primer Circuito Judicial, Ramo Civil, mediante la cual se ordena practicar la inspección judicial, para el 22 de febrero de 2000 a las 8:00 a. m. (que constituye el acto atacado con la iniciativa constitucional), fue dictada cuando el término de evacuación de pruebas se encontraba vencido.

No obstante lo anterior, resulta importante destacar el hecho de que el mencionado auto N° 849 de 27 de octubre de 1999, fue censurado por la firma forense Solís, Endara, Delgado y Guevara, mediante la interposición de un escrito de reconsideración (fs.51-54); negado por el Juez de la causa, mediante Auto N° 93 de 7 de enero de 2000, notificado a la firma Solís, Endara, Delgado y Guevara, el 27 de enero de 2000 (f.57 vuelta).

De acuerdo a lo establecido en el artículo 504 del Código Judicial, "El recurso de reconsideración suspende los efectos de la resolución recurrida, salvo que esta se refiera a términos señalados por ministerio de la Ley".

Del texto transcrito, se pudiera inferir, a primera vista, que los efectos del auto N° 849 de 27 de octubre de 1999, quedaron suspendidos por la interposición del escrito de reconsideración, lo que consecuentemente, impediría sostener que el término de evacuación de pruebas, para cuando se profirió el acto atacado con el amparo, había vencido. Sin embargo, la norma citada establece una excepción con relación a la suspensión de los efectos de la resolución, y es en el caso de que el auto impugnado se refiera a términos señalados por ministerio de la ley. Siendo esa la realidad, lo que corresponde es determinar si el término referente a la evacuación de pruebas, contenido en el auto N° 849 de 27 de octubre de 1999, reviste tal carácter.

En esa labor, resulta oportuno adelantar que en materia procesal, los plazos o términos son períodos cronológicos que determinan la existencia jurídica de los actos y procedimientos, cuya inobservancia puede ocasionar consecuencias de cierta gravedad como la prescripción, la nulidad, la preclusión, la inadmisibilidad o la caducidad. La doctrina clasifica los términos en judiciales, convencionales y legales; y se señala que "Términos judiciales es el señalado por el tribunal cuando la ley lo autoriza o cuando la ley no lo haya fijado; convencional es el que fijan de común las partes y que tiene efectividad judicial; y legal, es el fijado expresamente por la ley" (FABREGA P., Jorge. Estudios Procesales, Tomo I, Editora Jurídica Panameña, 1ª Edición, Panamá, 1998, pág.384). Este mismo autor, en otra obra jurídica, explica que "Términos Judiciales son los señalados por el tribunal cuando la ley los autoriza o cuando la ley no los haya fijado específicamente...Convencional es el que fijan de común acuerdo las partes y que tiene efectividad judicial; y legal, es el fijado expresamente por la ley (corren por Ministerio de la ley sin necesidad de que el Juez exprese su duración...El término para practicar pruebas es judicial -ya que si bien la Ley señala parámetros, el juez ha de concretizarlo" (FABREGA P., Jorge. Instituciones de Derecho Procesal Civil, 2da. Edición, corregida, Editora Jurídica Panameña, Panamá, 1999, pág.236).

El artículo 1255 del Código Judicial establece el período concerniente a la evacuación de pruebas, el cual responde al siguiente tenor:

> Artículo 1255. Surtido el traslado de la demanda o de la reconvención en su caso, se abrirá el proceso a pruebas en cuatro períodos así:
>
> El primero, de cinco días improrrogables, para que éstas propongan en uno o varios escritos, todas las pruebas que estimen convenientes;
>
> El segundo, de tres días improrrogables, que comenzará a correr el día hábil siguiente al en (sic) que se vence el anterior, para presentar contrapruebas;
>
> El tercero, de tres días improrrogables, para objetar las pruebas o contrapruebas, que corre sin que se haya de dictar providencia, y
>
> El cuarto, de ocho hasta treinta días, también improrrogables para evacuar todas las pruebas que hubiesen propuesto las partes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 795.

El análisis de la doctrina expuesta y del texto citado, nos lleva a la conclusión que el período de evacuación de pruebas es un término "judicial" y no "legal", pues requiere que el juzgador exprese su duración, al establecer un lapso que oscila entre 8 y 30 días; y finalmente, le corresponde al juez de la causa fijar, dentro de ese intervalo, el término para cumplir con la formalidad procesal de practicar pruebas.

Siendo que el término de evacuación de pruebas es judicial, se concluye que los efectos del auto N° 849 de 27 de octubre de 1999, quedaron suspendidos por la interposición del escrito de reconsideración, tal como lo establece el artículo 504 del Código Judicial.

Por las consideraciones señaladas, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA, la sentencia de 31 de mayo de 2000, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, venida en grado de apelación, y DENIEGA el amparo de garantías constitucionales demandado por la firma de abogados Solís, Endara, Delgado y Guevara, actuando en nombre y representación de la sociedad Ganadera El Tecal S. A.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) ROBERTO GONZALEZ
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) JOSE MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA FIRMA FORENSE MARTÍNEZ BARSALLO Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE BEVERLY TRADING INC., CONTRA LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN NO. 2. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema acción de amparo de derechos fundamentales formulado por la firma forense Martínez, Barsallo & Asociados, en representación de Beverly Trading Inc., contra la Sentencia No. 30 del 14 de junio de 2000, dictada por la Junta de Conciliación y Decisión No. 2, que "Niega la solicitud de corrección de la demanda laboral, dentro del proceso seguido a Beverly Trainding Inc, interpuesto por Alejandro Palm" (f. 2).

En la parte medular de su escrito el amparista sostiene que se vulnera el debido proceso contenido en el artículo 32 de la Constitución vigente, toda vez que negó la corrección de la demanda solicitada por Beverly Trading Inc, omitiendo los requisitos mínimos que debe contener una demanda laboral (Cfr. f. 19).

Corresponde en este momento examinar si la acción presentada cumple con los requisitos de procedibilidad que exigen tanto la ley como la jurisprudencia del Pleno de la Corte Suprema sobre la materia.

En primer lugar, la acción de amparo de garantías constitucionales puede ejercerse contra toda clase de acto que vulnere o lesione los derechos o garantías fundamentales que consagra la Constitución que revistan la forma de una orden de hacer o no hacer, cuando por la gravedad e inminencia del daño que representan requieren de una revocación inmediata, por lo que llama la atención el hecho de que el amparista en el hecho undécimo de la demanda afirma que "...sobre el resto de la parte resolutiva de la SENTENCIA NUMERO 30-JCD-6-2000 FECHADA 14 DE JUNIO DEL 2000 PROFERIDA POR LA JUNTA DE CONCILIACION Y DECISION NUMERO (2), se anunció el recurso de apelación..."(Cfr. f. 19 cuaderno de amparo).

Sobre el particular, es necesario recordar que el recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la actuación del a-quo lo que conlleva implícitamente a que el a-quem revise la sentencia No. 30 , proferida por la Junta de Conciliación y Decisión No. 2.

De otra parte, el recurrente anuncia una pretensión extraña a la acción de amparo de derechos fundamentales cuando solicita que la sentencia número 30-JCD-6-2000 del 14 de junio de 2000, sea "...REVOCADA EN TODAS SUS PARTES Y EN SU DEFECTO SE ORDENE LA CORRECCION DE LA DEMANDA LABORAL INTERPUESTA POR ALEJANDRO PLAM (sic) EN CONTRA DE BEBERLY TRAIDING INC Y SE DECRETE LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO..."(Cfr. f. 13).

Cabe recordar que, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, como máximo tribunal de las garantías constitucionales, no es una instancia intraprocesal adicional. De allí que no puedan las partes en un proceso pretender que la Corte se convierta en tribunal de apelaciones de la jurisdicción ordinaria, pretendiendo la revisión integral de la actuación de juez de la causa.

Las anteriores consideraciones, en su conjunto, indican que esta iniciativa constitucional es manifiestamente improcedente, lo que imposibilita de su admisión.

Por las razones antes expuestas, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE, la demanda de amparo de derechos fundamentales propuesta por la firma forense Martínez, Barsallo & Asociados en representación de Beverly Trading Inc.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) CESAR A. PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) ROBERTO GONZALEZ R.
(fdo.) ROGELIO A. FABRAGA ZARAK (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRACESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.

Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LCDO. ANTONIO VARGAS, EN REPRESENTACION DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMA, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado ANTONIO A. VARGAS, en su condición de apoderado judicial del SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y SIMILARES (SUNTRACS), ha interpuesto acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra la ORDEN DE HACER contenida en el Auto No. 100-DGT-00 de 25 de abril de 2000, proferido por la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Admitida la demanda, se solicitó a la autoridad demandada un informe acerca de los hechos materia de este amparo, debido a lo cual el funcionario en cuestión remitió el expediente contentivo de toda la actuación y la nota que a continuación se transcribe:

"..... ....

La orden aludida fue dada en virtud de una solicitud de Autorización de Despido por Causas Económicas, que hizo la Persona Jurídica denominada Ingenieros Civiles Asociados Panamá, el día 9 de febrero de 2000.

Cumplidas las exigencias legales, la Dirección General de Trabajo entró a estudiar e investigar la petición rogada, encontrando la solicitud de la empresa, apegada a Derecho en su forma y su fondo.

El Amparista acusa a la Dirección General de Trabajo, de no haberlo notificado según la formalidad prescrita en el artículo 216 de nuestro Código de Trabajo, es decir, que no le notificamos personalmente la solicitud de autorización de despido que por causas económicas hizo la empresa Ingenieros Civiles Asociados Panamá.

Señor Magistrado, es nuestro criterio que el Despacho sí actuó en Derecho en la forma como notificamos al señor Genaro López en su calidad de Representante Legal del Sindicato Unico Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS).

Lo anterior lo explicamos muy sucintamente así:
En fecha de 9 de febrero de 2000, la empresa solicitó ante esta Dirección General de Trabajo autorización para despedir a 98 trabajadores del Corredor Sur, por causas económicas como consecuencia de la terminación de la obra, fundamentándose en el artículo 21 de la Ley 72 de 1975.

Una vez acogida la solicitud, el Despacho al investigar la misma solicitó a la Dirección Nacional de Inspección realizara revisión sobre la obra que va desde el entronque que está frente a Atlapa, hasta el final del proyecto frente al Colegio San Agustín en la Avenida Balboa.

Tal como nos ordena la Ley hay que darle traslado a los trabajadores cuando no son organizados, y cuando lo son al Representante Legal del Sindicato, de la solicitud hecha por la Empresa.

En fecha de 16 de febrero, se inició la búsqueda del señor Genaro López para notificarlo de la resolución que acoge la solicitud de autorización de despido presentada el 9 de febrero, se hizo el primer intento de notificar al señor Genaro López, dijo su secretaria que no estaba en la ofician.

En fecha de 17 de febrero, se hizo el segundo intento de notificar al señor Genaro López, dijo su secretaria que no estaba en las oficinas y se le dejó el mensaje.

En fecha de 22 de febrero, se hizo el tercer intento de notificar al señor Genaro López, dijo su secretaria que se encontraba en la Provincia de Chiriquí.

En fecha de 23 de febrero, se hizo el cuarto intento de notificar al señor Genaro López, dijo su secretaria que no se encontraba, se le dejó el mensaje.

En fecha de 29 de febrero, se hizo el quinto intento de notificar al señor Genaro López, dijo su secretaria que no estaba en su oficina, se le dejó mensaje.

En fecha de 2 de marzo, se hizo el sexto intento de notificar al señor Genaro López, dijo su secretaria que no se encontraba, se le dejó mensaje.

En fecha de 10 de marzo, se hizo el séptimo intento de notificar al señor Genaro López, dijo su secretaria y el dirigente sindical del SUNTRACS, Fernando Tiubeut, que no se encontraba, se le dejó el mensaje.

En fecha de 22 de marzo a las 2:00 p. m., el señor Genaro López, compareció personalmente a las oficinas de Conciliación Individual del Ministerio de Trabajo, y se aprovecho la oportunidad para notificar al mismo la supracitada resolución, negándose manifiestamente a notificarse.

Como consecuencia de estos fallidos intentos, por notificar al señor Genaro López, y tal como la detallamos a fojas 23 del expediente, el Despacho recurrió a lo preceptuado en el artículo 886 del Código de Trabajo que nos dice:

`Artículo 886. En todo caso en que la parte excuse una notificación personal manifiestamente o no quiera o no sepa firmar el secretario o el portero se hará acompañar de un testigo, quien firmará la diligencia anotándose así en el expediente esa circunstancia con expresión de la fecha, y se tendrá por hecha la notificación para todos los efectos legales'.

Una vez dada por notificada la Resolución N°34-DGT-53-99 de 23 de diciembre de 1999. la Dirección General de Trabajo, emitió su fallo negando la solicitud de autorización de despido presentada por Ingenieros Civiles Asociados Panamá, S. A.

En fecha de 7 de abril, el fallo fue notificado por edicto en los estrados del Tribunal con fecha 11 de abril, la empresa interpuso recurso de reconsideración con apelación en subsidio.

En fecha 25 de abril, la reconsideración fue resuelta por este

Despacho autorizando a Ingenieros Civiles Asociados de Panamá, S. A. el despido de 98 trabajadores, por razones económicas.

En fecha de 28 de abril quedó esta resolución por medio del edicto N°31.

En fecha 8 de mayo, el señor Genaro López, apela de la solicitud de despido, del 7 de abril, rechazándola el Despacho por extemporánea.

En todo caso aún le quedaba al representante de los trabajadores recurrir de hecho ante nuestro Superior, cosa que no hizo y por lo tanto no agotó las instancias del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

..... (fs.12-15)

Al examinar la demanda, esta Corporación observa que el amparista menciona como orden impugnada: el Auto No.100-DGT-00 de 25 de abril de 2000, proferido por la Dirección General de Trabajo, a través del cual se reconsidera la resolución 24-DGT-00 de 7 de abril de 2000 y autoriza a INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS PANAMA, S. A. (ICA) a despedir 98 trabajadores, todos afiliados al SUNTRACS.

Al revisar el libelo de demanda, que fue acompañado con copia autenticada del respectivo expediente, se observa, tanto en los hechos que la fundamentan como en el concepto de infracción de la garantía que se dice violada (art. 32 C.N.), que lo realmente impugnado es la indebida notificación a los trabajadores de la solicitud de autorización de despido formulada por la empresa ICA, pues, según la censura, la autoridad administrativa desatendió el artículo 216 del Código de Trabajo al dejar de surtir la notificación a los trabajadores, "como se observa a fojas 10 del expediente", haciéndosela al señor GENARO LOPEZ en representación de éstos, sin que en el expediente existiera prueba de que GENARO LOPEZ era el representante legal del SUNTRACS. Por ello se viola el artículo 877 del citado Código, indicador de que se ha de notificar personalmente la resolución donde se ordena dar traslado de la demanda, en concordancia con los artículos 581 y 889 del mismo cuerpo legal, donde se establece que cualquier notificación hecha en forma distinta a la prevista por ley será nula. Se alega que otra violación al debido proceso radica en que la resolución que se impugna, o sea el auto de 25 de abril de 2000, tampoco se notificó personalmente a las partes, ya que se hizo por vía de edicto, con lo cual también se viola la ley.

Según se ha podido apreciar en el expediente contentivo del proceso, presentado por el propio amparista así como por el funcionario demandado, la providencia de 9 de febrero de 2000 por la cual se acoge la solicitud de autorización de despido presentada por la empresa ICA fue notificada al señor Genaro López el día 22 de marzo de 2000 a través de un testigo, con fundamento en el artículo 886 del Código de Trabajo, debido a la renuencia de éste a ser notificado (Ver foja 10 vuelta). Lo anterior se puede comprobar en los múltiples informes de notificación que constan de fojas 16 a 22 y, especialmente, en el visible a fojas 23 del expediente.

En efecto, las constancias de autos revelan la evidente actitud de renuencia a ser notificado asumida por el Secretario General de SUNTRACS, lo que condujo a la realización de dicho acto conforme al procedimiento previsto en estos casos por la ley. De manera que no encuentra el Pleno que se haya conculcado el debido proceso en perjuicio del amparista a causa de la forma en que fueron notificadas la solicitud de autorización de despido y las demás resoluciones que consecuentemente se dictaron.

En contra de lo sostenido por el accionante, conviene aclarar la inexistencia de violación al debido proceso en razón de la ausencia de la prueba de que GENARO LOPEZ ostenta el cargo de Secretario y representante legal del SUNTRACS, con fundamento en el artículo 581 del Código de Trabajo, como alega el amparista. El contenido de esta norma no puede hacerse extensivo al caso que nos

ocupa, pues esta disposición claramente se refiere a supuestos de demandas contra empresas o personas jurídicas cuya existencia y representación legal consten en el Registro Público que no es el caso de las organizaciones sociales (sindicatos). Como se sabe, la existencia y la representación legal de las organizaciones sociales o sindicatos consta en el correspondiente registro de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (art. 351 del Código de Trabajo). En ese sentido, es lógico que la autoridad de trabajo está en capacidad de verificar quién es el Secretario General de un sindicato antes de hacer efectiva una notificación, aunado al hecho de que en este caso los diversos intentos de notificación se hicieron en las oficinas del SUNTRACS donde labora su Secretario General, Genaro López, persona a quien tenía que hacérsele.

Si bien se han dado situaciones donde se evidencian flagrantes arbitrariedades en el acto de notificación de alguna actuación procesal y en base a ello la Corte ha concedido demandas de amparo, hay otras, como la presente, donde se comprueba la utilización de este remedio constitucional con la única finalidad de dilatar la culminación del proceso.

En ese orden de ideas se ha reiterado el señalamiento de que, para impugnar el acto de notificación que se considera violatorio de derechos legales, el interesado tiene a su alcance un remedio dentro de la vía ordinaria laboral que es el incidente de nulidad, de conformidad con el artículo 889 del Código de Trabajo.

En jurisprudencia sentada en un caso similar, el Pleno se pronunció en los siguientes términos:

> "Ante tales circunstancias, observamos que el demandante más que impugnar la resolución dictada por la Dirección General de Trabajo, se refiere a la ilegalidad de la notificación de la misma a través del edicto N°86 de 19 de septiembre de 1996, lo que resulta incompatible con la finalidad del amparo, que consiste en obtener la invalidación de un acto -orden de hacer o de no hacer- que afecta al impugnante, con el propósito, como hemos dicho, de enervarlo por violatorio de las garantías constitucionales.
>
> Aunado a lo anterior, la existencia de un remedio jurisdiccional en la vía ordinaria del proceso laboral, siendo éste el incidente de nulidad, que según el artículo 889 del Código de Trabajo, es el medio idóneo para solicitar la nulidad de las notificaciones realizadas de manera distinta a la establecida en los artículos 877 y siguientes del Código Laboral, la cual sólo procede en caso de agravio o perjuicio procesal al que la alega, salvo las nulidades insubsanables en las que media un interés público. En este caso, de considerar el interesado que el acto de notificación no había alcanzado el fin al cual estaba destinado, el demandante debió agotar la vía ordinaria para impugnar el acto que consideraba violatorio de sus derechos legales, y así cumplir con el principio de la definitividad del amparo como elemento procesal indispensable para su procedencia.
> Sobre el particular son consultables los fallos de 21 de octubre de 1994; 16 de febrero de 1995; 24 de febrero de 1995; 2 de marzo de 1995; 31 de marzo de 1995; 25 de abril de 1996; 26 de julio de 1996; 5 de agosto de 1996; y 14 de agosto de 1996, entre otros." (Reg. Jud. dic. 1996; págs. 20 y 21)

Conforme a lo que se tiene dicho, la argumentada violación al debido proceso no tiene que ver con el contenido de la resolución objeto de amparo, sino con la notificación de la providencia que acoge la solicitud de autorización de despido y le corre traslado de la misma a los trabajadores para que la contesten, contra la cual, además, no se señala el cargo o infracción de rango constitucional, siendo evidente, por otra parte, que dicha actuación no vulnera ninguna disposición legal establecida en el Código de Trabajo.

Por las consideraciones expuestas, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CONCEDE la acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesta por el SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION Y SIMILARES contra la orden de hacer contenida en el AUTO No.100-DGT-00 de 25 de abril de 2000 proferida por la Dirección General de Trabajo.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) ROBERTO GONZALEZ R. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA FIRMA ASESORES JURÍDICOS ASOCIADOS, EN REPRESNTACIÓN DE MIGDALIA EDITH ORTEGA DE MENDOZA E ISMAEL CARLOS MENDOZA RUÍZ, CONTRA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO GONZÁLEZ R. PANAMÁ, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense ASESORES JURIDICOS ASOCIADOS, actuando en nombre y representación de los señores ISMAEL CARLOS MENDOZA RUIZ y MIGDALIA EDITH ORTEGA DE MENDOZA presentó acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra la orden de hacer contenida en la Resolución No.4.P.- C.- de 5 de mayo de 2000, proferida por el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, dentro del proceso de Protección que a favor del infante EDUARDO JURADO adelanta el Juzgado Primero de Niñez y Adolescencia de Panamá.

ANTECEDENTES:

El niño EDUARDO JURADO nació el 7 de febrero de 1997, al ser abandonado por su madre SARA JURADO, quedó bajo los cuidados del Hogar Del Carmen de la Cruz Roja Panameña.

El 14 de abril de 1999 (foja 50 de los antecedentes), el ciudadano francés BERNARD GASTON EMILE HULOT se presentó voluntariamente al Juzgado Primero de Niñez y Adolescencia a manifestar su deseo de adoptar al infante EDUARDO JURADO, y constituirse en el hogar sustituto del mismo.

Posteriormente a folios 122 y siguientes se incorporan al proceso las entrevistas de los esposos MENDOZA, quienes manifiestan igualmente su interés de integrar el hogar sustituto y adoptivo del menor JURADO.

La juzgadora de primera instancia a través de resolución No.093 S. A. de 3 de febrero de 2000, ubicó al niño en el hogar conformado por la pareja MENDOZA ORTEGA, decisión que fue apelada por la representación legal del señor EMILE HULOT ante el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia.

El Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia a través de la resolución judicial No. 4 P.-C.- de 5 de mayo de 2000, modificó la decisión proferida en primera instancia y resolvió en el punto tercero: "UBICAR al menor EDUARDO JURADO, hijo de SARA MARÍA JURADO, nacido el 7 de febrero de 1997, bajo los cuidados y protección del señor BERNARD GASTON EMILE HULOT, en calidad de Hogar Sustituto, con el requisito de impedimento de salida del menor del país hasta que el Sr. Hulot demuestre que es un solicitante adecuado y apto para adoptar de

conformidad con las normas internacionales aprobadas por nuestro país."

FUNDAMENTO DEL AMPARISTA:

El amparista presentó su acción constitucional el pasado 13 de junio del año en curso y en su libelo expresó, que ha sus representados le han sido vulnerados los derechos contenidos en los artículos 32 y 52 de nuestra Constitución Política, relativos al debido proceso y a la obligación del Estado de proteger al menor de edad.

Manifiesta el peticionario que la resolución impugnada vulnera el debido proceso de los esposos MENDOZA ORTEGA, en concepto de violación directa por omisión, al indicar el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia que el ad-quo valoró de manera extemporánea las aptitudes de éstos para conformar el hogar sustituto del infante EDUARDO JURADO, aunado al hecho que la formalización para constituirse en hogar sustituto careció de la mediación de un profesional del derecho.

Continúa expresando el accionante, que el menor EDUARDO JURADO fue ubicado en el hogar de los esposos MENDOZA ORTEGA, luego de contar con las recomendaciones favorables del grupo interdisciplinario del tribunal de la causa, del defensor del menor y de la representación del Ministerio Público, cumpliéndose con el procedimiento establecido en el Código de la Familia para la ubicación de los menores en circunstancias especialmente difíciles y en las que se le otorga al juzgador amplias facultades para adoptar su decisión.

Concluye indicando que la garantía constitucional contenida en el artículo 32 ha sido vulnerada porque:

> "... legalmente no existe un término para comparecer, ni existe preferencia por quien declare su intención de adoptar primero, pues el Juez estará a lo que se determine a través del grupo interdisciplinario como lo más conveniente para el mejor (sic), pues es siempre el interés superior del menor lo que debe privar".

Según expone el amparista el artículo 52 de la Constitución, que consagra la obligación del Estado de proteger la salud física, mental y moral de los menores, fue transgredido en concepto de violación directa por omisión, ya que la resolución proferida por el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia desconoce las recomendaciones allegadas al proceso y otorga la custodia en calidad de hogar sustituto al señor HULOT, por lo que se aparta del contenido del liberal b del artículo 21 de la Convención de los Derechos del Niño que en materia de adopción indica, que cuando el menor no pueda ser colocado en un hogar o familia en su país de origen se considerará la adopción en otro país.

Finalmente el peticionario expresó a foja 31 de este cuadernillo que:

> "Existiendo pues un Hogar Sustituto en vías de adopción favorable para el menor EDUARDO JURADO, mismo que se encuentra conformado de manera íntegra (padre y madre), situado además en su país de origen con la ventaja de un idioma en común, el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia vuelve a violar las garantías fundamentales que consagra nuestra Constitución, esta vez en lo estatuido en el artículo 52 citado, pues deja de lado su obligación primordial de velar por el interés superior del niño, so pretexto de respetar el derecho del ciudadano francés en haber solicitado la condición de hogar sustituto primero, cuando esto no se trata de quien llega primero, sino de quien ofrece las mejores condiciones, para lo cual el juzgador debe considerar las recomendaciones y evaluaciones hechas por los expertos en estos temas."

RESPUESTA DEL FUNCIONARIO ACUSADO:

La Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, licenciada MILIXA HERNÁNDEZ DE ROJAS manifestó que la resolución No. 4. P.-C.- fue sustanciada por el magistrado ROGERIO DE MARÍA CARRILLO y contó con su salvamento de voto.

En su conciso informe manifestó, que el proceso de Protección al Menor ingresó al Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia el pasado 7 de abril de 2000 para conocer el recurso de Apelación interpuesto por la representación judicial del señor BERNARD GASTON EMILE HULOT, contra la resolución No. 093 de 3 de febrero de 2000, proferida por el Juzgado Primero de Niñez y Adolescencia de Panamá.

Indicó la magistrada MILIXA HERNÁNDEZ DE ROJAS, que la resolución No. 4 P.-C.- de 5 de mayo de 2000 suspendió de manera definitiva los derechos de patria potestad de la señora SARA MARINA JURADO y ubicó al menor EDUARDO JURADO bajo los cuidados y protección del ciudadano BERNARD GASTON EMILE HULOT en calidad de hogar sustituto, "... con el requisito de impedimento de salida del país hasta que el señor HULOT demuestre que es un solicitante adecuado y apto para adoptar de conformidad con las normas internacionales aprobadas por nuestro país."

Manifestó que, desde el pasado 17 de mayo de 2000 el proceso se encuentra radicado en el Juzgado Primero de Niñez y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de Panamá.

CONSIDERACIONES DEL PLENO:

Presentadas las generalidades de esta acción constitucional, corresponde al Pleno de esta Corporación de Justicia determinar, si han sido transgredidos los artículos 32 y 52 de la Constitución Política de la República de Panamá, así como el artículo 21, literal b) de la Convención de los Derechos del Niño, tal cual afirma el amparista.

En consecuencia, con respecto al artículo 32 que regula lo relativo al debido proceso, y la alegada desatención del artículo 496 del Código Judicial el Pleno considera que dicha disposición le otorga facultades discrecionales al juez minoril en la ubicación de los menores en circunstancias especialmente difíciles.

El artículo 496 del Código de la Familia y el Menor establece, que en los casos de menores en circunstancias especialmente difíciles, el juzgador podrá ubicarlos en colocación familiar u hogar sustituto, hasta por un máximo de seis meses, o bien, podrá entregar a los menores en adopción, una vez sea declarado su estado de abandono, para lo cual deberá contar con la orientación del equipo interdisciplinario.

Lo que significa que, frente a las dos facultades discrecionales del juzgador (entrega del menor a un hogar sustituto y/o en adopción) la ley le señala como requisito, contar con la orientación del comité interdisciplinario.

Siendo ello así la resolución proferida por el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia ciertamente se apartó del procedimiento establecido en el artículo 496 del Código de la Familia, ya que al revocar la decisión de primera instancia proferida por el Juzgado Seccional de Niñez y Adolescencia se alejó de lo consignado en la referida norma positiva, pues el espíritu de la misma consiste en que el juzgador debe apoyarse en los conocimientos técnicos de los expertos interdisciplinarios, conformado por trabajadores sociales, psicólogos, etc., quienes atienden la problemática de los menores desde una óptica distinta a la jurídica, pero que se complementa con ésta, en el mejor interés del menor. Por ende se vulneró lo dispuesto en el artículo 32 del texto constitucional, toda vez que el procedimiento señalado en el artículo 496 del Código de la Familia y el Menor no fue atendido.

Con respecto al artículo 770 del Código de la Familia y el Menor, la Corte considera que no se ha vulnerado el artículo 32 de la Constitución relativo al

Debido Proceso en virtud de que la norma indica que: "Salvo las excepciones señaladas en la ley, el Ministerio Público y el Defensor del Menores serán oídos en todos los procesos y actuaciones sobre asuntos de familia y de menores respectivamente.", y en este expediente de Protección al Menor EDUARDO JURADO, han sido incorporados los criterios del Ministerio Público y del Defensor del Menor.

A fojas 140 -145 reposa la opinión del Ministerio Público y de folios 166 - 167 se encuentra incorporada la opinión del Defensor del menor EDUARDO JURADO, por lo que, reiteramos, el procedimiento establecido en el artículo 770 del Código de la Familia y el Menor ha sido observado por el ente jurisdiccional.

Por otra parte, también manifiesta el amparista que ha sido transgredido el artículo 32 del texto constitucional por cuanto la resolución No. 4 P.-C.- proferida por el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia indicó, que la solicitud de hogar sustituto presentada por los esposos MENDOZA ORTEGA careció de la mediación de un apoderado legal.

Sobre el particular el Pleno debe manifestar, que solicitudes de las familias que integran el banco de datos de hogares sustitutos no requieren de abogados para que sean tomadas en cuenta al momento de que se les coloque un menor en dicha calidad (hogar sustituto). Situación distinta se produce al momento en que dichas familias se constituyen en parte dentro del proceso de Protección al Menor, o en el Proceso de Adopción, para lo cual resulta indispensable contar con los servicios de un profesional del derecho que los represente y salvaguarde sus intereses para garantizar de manera efectiva el debido proceso.

Por otro lado, el amparista indica como infringido en concepto de violación directa por omisión, el artículo 52 de nuestra Carta Constitucional, ya que pese a la obligación del Estado de proteger al menor y garantizarle las condiciones más favorables para su desarrollo integral, el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia desconoció las recomendaciones de los especialistas y le otorgó la custodia en calidad de hogar sustituto al señor HULOT, en circunstancias que con anterioridad, dicha custodia le había sido concedida a los esposos MENDOZA ORTEGA.

Paralelamente a lo establecido en el artículo 52 de la Constitución, expresa el accionante que fue transgredido el artículo 21 literal b de la Convención de los Derechos del Niño.

Por considerarlo pertinente se procederá a transcribir lo pertinente de las normas arriba indicadas:

Artículo 52 de la Constitución Política de la República de Panamá:

"El Estado protege el matrimonio, la maternidad y la familia. La Ley determinará lo relativo al estado civil.

El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores y garantizará el derecho de éstos a la alimentación, la salud, la educación y la seguridad y previsión sociales.
..."

Artículo 21, literal b de la Convención de los Derechos del Niño, ratificado por nuestro país a través de la Ley No. 15 de 6 de noviembre de 1990.

"ARTICULO 21. Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial y:
a) ...

b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada

como otro medio de cuidar del niño, en el caso de que éste no pueda ser colocado en un hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o no pueda ser atendida de manera adecuada en el país de origen."

Es importante precisar, que si bien es cierto, el artículo 21, literal b) de la Ley No. 15 de 6 de noviembre de 1990 no constituye parte literal de la redacción constitucional de nuestro país, el mismo adquiere rango constitucional por virtud de la doctrina del Bloque de la Constitucionalidad, la que ha sido tantas veces reconocida por nuestra jurisprudencia.

Así mediante fallo de 20 de marzo de 1996 el Pleno manifestó que:

"... En cuanto a los principios rectores del Derecho de Menores que se invocan, cabe establecer, ... el articulado de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por nuestro país e incorporada a la legislación interna mediante Ley No. 15 de 1990, tiene rango constitucional conforme a la doctrina del bloque de constitucionalidad." (Registro judicial de Marzo de 1996).

En este mismo orden, en sentencia de 22 de julio de 1998, esta Corporación de Justicia indicó que:

"La Corte ha señalado sobre la protección constitucional de los derechos de los menores, que estos forman parte de los Derechos Humanos de segunda generación mencionados de manera general en el artículo 52 de nuestra Carta Política, pero sin llegar a precisar los principios y derechos que les asisten en el ámbito procesal y, por ello, el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño constituye un complemento a ese texto constitucional, al preceptuar que en todas las medidas que se adopten institucionalmente, por autoridades o tribunales concernientes a niños, debe prevalecer el interés superior del menor.

Este concepto de interés superior del menor, implica el derecho del niño a una protección especial y a la primacía de sus intereses." (Registro Judicial de 22 de julio de 1998)

Siendo, que el interés superior del infante EDUARDO JURADO es el derecho a tener una familia, a crecer en un hogar que goce de un clima de felicidad, amor y comprensión que lo prepare para una vida independiente en sociedad, que le permita moldear su personalidad dentro de los patrones de conducta en un medio armónico y adecuado, tal cual se encuentra establecido en la Convención de la Haya en Materia de Adopción, así como en el artículo 52 del texto constitucional y la Ley 15 de 6 de noviembre de 1990 que integra el bloque de la constitucionalidad, esta Corporación de Justicia estima, que las adopciones por parte de parejas extranjeras se encuentran supeditadas a la no existencia de parejas nacionales en capacidad de ofrecer un hogar sustituto al menor en su país de origen.

Tras la revisión minuciosa del expediente, se observa que existen abundantes elementos que acreditan el interés de un hogar conformado por nacionales panameños en capacidad, y con voluntad de constituirse en hogar sustituto y proceder a la adopción del menor EDUARDO JURADO, lo cual es cónsono con lo dispuesto en la referida Convención de los Derechos del Niño y el artículo 51 de la Constitución.

En consecuencia, luego de analizar las explicaciones presentadas por el amparista, con relación a la infracción de las normas arriba descritas, y examinar las normas de rango constitucional en las que sustenta sus alegaciones, el Pleno constata que la resolución proferida por el Tribunal Superior de la Niñez y Adolescencia, al otorgarle la calidad de hogar sustituto del menor EDUARDO JURADO, al señor EMILE HULOT, e indicar, que éste debe formalizar los

documentos para proceder con su adopción, viola el artículo 52 de nuestra Carta Magna, en concordancia con el artículo 21, literal b) de la Ley 15 de 6 de noviembre de 1990 que ratifica la Convención de los Derechos del Niño, por cuanto que, el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, ha debido aplicar la Ley No. 33 de 28 de mayo de 1998 en la medida que no se contravenga lo dispuesto en el artículo 21, literal b de la Ley 15 de 1990 relativa a los Derechos del Niño que establece la procedencia de la adopción en país extranjero, cuando el menor no pueda ser adoptado en el país de origen.

Siendo ello así, la Corte concluye que se ha vulnerado el artículo 52 de la Constitución y el 21, literal b) de la Ley 15 de 1990, ya que en el interés superior del menor EDUARDO JURADO, habiéndose recibido la manifestación de una familia panameña en cuanto a su interés de constituirse en el hogar sustituto y adoptar posteriormente al infante; y, como quiera que en el expediente se cuenta con el informe del equipo interdisciplinario del Juzgado Primero de Niñez y Adolescencia (fojas 122 y siguientes), el informe psicológico efectuado a la pareja de nacionales panameños por parte del Instituto de Medicina Legal (fojas 189 y siguientes), así como los conceptos favorables del Defensor del Menor EDUARDO JURADO y del Ministerio Público, en el sentido de que los esposos MENDOZA ORTEGA se encuentran en capacidad de constituir el hogar sustituto del infante JURADO, aún cuando el trámite y la recepción de documentación de los señores ISMAEL MENDOZA y MIGDELIA EDITH ORTEGA DE MENDOZA en un inicio no contó con la formalidad de la presentación de abogado, esta pretermisión no constituye una transgresión procesal que vicie de irregular y extemporánea la solicitud, como se indica en la resolución atacada, por cuanto que, como se ha dicho, para constituirse en hogar sustituto, nuestra legislación de familia no exige la intervención de abogado. Cosa distinta es, cuando se pretenda intervenir como parte en el proceso de Protección del Menor o en Proceso de Adopción, tal como en efecto se hizo, mediante la incorporación de poder especial que reposa a foja 210 de los antecedentes, otorgado a la licenciada MARÍA CECILIA MATA ALVAREZ por los señores ISMAEL MENDOZA y MIGDALIA ORTEGA DE MENDOZA para que los represente en el proceso de protección del niño EDUARDO JURADO.

"DECISIÓN DE LA CORTE"

Por lo que antecede, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONCEDE el amparo de garantías constitucionales presentado y en consecuencia REVOCA la resolución No. 4.P.-C.- de 5 de mayo de 2000, proferida por el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia en su punto tercero relativo a la ubicación del menor EDUARDO JURADO bajo el hogar sustituto integrado por BERNARD GASTON EMILE JULOT.

Notifiquese,

(fdo.) ROBERTO GONZÁLEZ R.
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA (fdo.) JOSÉ MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ ANDRÉS TROYANO (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA FIRMA PADILLA Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACION DE CORPORACION UNIVERSAL DE NFORMACION (JMJ), S. A. CONTRA LA JUNTA DE CONCILIACION Y DECISION N° 6. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense Padilla y Asociados, interpuso ante el Pleno de la Corte Suprema, acción de amparo de garantías constitucionales en representación del señor JAIME PADILLA BÉLIZ, representante legal de la sociedad CORPORACIÓN UNIVERSAL DE INFORMACIÓN (JMJ), S. A., contra la orden de hacer contenida en la sentencia PJ-6 N°62-99 de 18 de junio de 2000, dictada por la Junta de Conciliación y Decisión N° 6, y que fue confirmada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, mediante sentencia de 28 de junio de 2000.

Por encontrarse el negocio en etapa de admisión, procede verificar el cumplimiento de los requisitos legales para poder resolver el fondo del mismo.

Es evidente que el libelo cumple los requisitos normados por el artículo 2610 del Código Judicial, pues menciona de manera expresa la orden impugnada, identifica al funcionario que impartió la orden, expone los hechos en que se funda la acción, expresa la garantía constitucional que considera infringida y el concepto de dicha infracción, cumple también los requisitos generales para las demandas, contenidos en el artículo 654 de la excerta en estudio, así como el agotamiento de los medios impugnativos tal como lo manda el numeral 2° del artículo 2606 del Código Judicial.

Empero, la acción adolece de un defecto que, por razones de economía procesal, es pertinente exponer en esta etapa del procedimiento; el vicio consiste, en resumen, en que el amparo se fundamenta en la valoración que los juzgadores de ambas instancias hicieron de las pruebas presentadas por la amparista, ello se puede observa con claridad meridiana, tanto en los hechos en que fundamenta la acción, como en el concepto de la presunta infracción constitucional.

En este sentido, los hechos quinto, sexto, séptimo y octavo de la acción, son del siguiente tenor:

> "QUINTO: Decimos a la velocidad de la luz, ya que la Junta de Conciliación y Decisión No. 6, sin tomarse el trabajo de analizar y estudiar las pruebas aportadas por nuestra representada, concluye en forma contundente, que los Memorandos internos que sirvieron de base al despido, son 'sanciones disciplinarias'; específicamente los calificaba como 'amonestaciones escritas', y que por ende probaban la excepción de caducidad contra la empresa.
> SEXTO: En término oportuno, nuestra representada interpuso Recurso de Apelación contra la Orden impugnada, ante el Tribunal Superior de Trabajo, quienes el día 28 de Junio de 2000 confirman la sentencia, sin embargo concluyen que no se trataba de la excepción de 'caducidad', sino de que 'lo sucedido en el presente proceso es que la empresa ha pretendido utilizar para despedir los mismos hechos que suscitaron los llamados de atención hacia el trabajador, lo cual contraviene lo dispuesto en el párrafo final del artículo 13 del Código de Trabajo, que establece que la imposición de una sanción disciplinaria al trabajador excluye la posibilidad de despedirlo o solicitar autorización de despido, con base en el mismo hecho".
> SEPTIMO: Es de advertir, que el contenido del Memorando del 21 de septiembre de 1998, más que una mal calificada amonestación, llevaba implícito una orden específica, al cumplimiento de las obligaciones del trabajador demandante. ello es así, porque el memorando era referido a un trabajo de investigación que el trabajador, como parte de sus funciones como periodista, debía efectuar en un determinado período de tiempo.
> OCTAVO: De los hechos que hemos enunciado y de la actuación de los Magistrados del Tribunal Superior de Trabajo, se denota evidentemente que se ha desnaturalizado el contenido de los Memorandos o 'llamados de atención', en que se basó la empresa para el despido del trabajador, todo lo cual se concatena en una serie de actos con la única motivación de trastocar la garantía del debido proceso, de nuestra representada." (Subraya de la Corte).

Como evidencian los hechos transcritos, el esfuerzo impugnativo del amparista va dirigido a la valoración probatoria del proceso.

Lo mismo ocurrió con el concepto de la presunta infracción del artículo 32 Constitucional, del cual señaló el actor que:

> 1) Al desnaturalizar la esencia de las pruebas que sirvieron de sustento para el despido, sin ninguna base procesal aceptable, ya que las convierten en 'amonestaciones escritas', cuando en realidad son simples 'llamados de atención' que prevenían el tener que aplicar una de las tres sanciones, contempladas en el Reglamento Interno de la institución.
> 2) La violación al precepto constitucional se amplía, ya que la demandada en esta Acción, al desnaturalizar las pruebas, aplica la excepción de Caducidad en contra de nuestra representada, ya que a los Memorandos de 'llamados de atención' les da la connotación de 'sanciones disciplinarias' aplicadas al trabajador, cuando estos llamados eran observaciones que le hacía su superior sobre la conducta del trabajador que podrían incurrir en despido o en la aplicación de una sanción disciplinaria de la que contiene el Reglamento Interno de la empresa, como lo es a) amonestación verbal, b) suspensión por tres días y c) despido.
> 3) Al desnaturalizar la esencia y contenido de las pruebas en forma de Memorandos y todos bajo la designación de 'llamados de atención', la Junta de Conciliación y Decisión No. 6, trastoca el debido proceso, pues convierte a las pruebas que sustentaban el justo despido, en contrapruebas desfavorables a la empresa y que tal alteración al debido proceso, es la causa del daño grave e irreversible que la Junta ha infringido a la empresa con tal proceder antijurídico." (Negrilla de la Corte)

Al igual que en los hechos, es fehaciente el hecho de que los descargos hechos contra la sentencia impugnada, se fundan en la valoración probatoria de que decidió la causa, lo que -como ya se señaló- no puede ser estudiada en este amparo.

La abundante jurisprudencia desarrollada por esta Corporación de Justicia ha establecido que no concierne al amparo de garantías constitucionales cuestionar ni estimar la operación valorativa realizada por los juzgadores, porque ello convertiría al amparo de garantías constitucionales en una tercera instancia, finalidad ésta ajena a la de la iniciativa constitucional que nos ocupa.

Es oportuno exponer lo considerado por este Pleno en la sentencia de 24 de enero de 2000, bajo la Ponencia del Magistrado Eligio Salas, y que fue del siguiente tenor:

> "Resulta evidente que en este caso se busca utilizar el amparo como una tercera instancia, ya que se pretende que la Corte, como tribunal constitucional, entre a evaluar una de las pruebas aducidas por una de las partes (el amparista), porque, a juicio de ésta, no fue debidamente apreciada por el juzgador en la resolución atacada, sosteniendo que por tal motivo la decisión final le fue adversa. En reiterada jurisprudencia se ha expresado que, respecto a la violación del debido proceso legal en cuanto al derecho de presentar pruebas y contradecirlas, lo que se tutela mediante la acción de amparo es el derecho de aducirlas y practicarlas, pero la labor de darles mérito legal corresponde sólo al sentenciador dentro del proceso ordinario, ya que en el proceso extraordinario de amparo dicha evaluación es completamente extraña a su naturaleza. (Cfr. Fallos de 15 de enero de 1993 y 30 de diciembre de 1996).

El examen y el valor que a las pruebas le otorga el tribunal natural en uso

de sus facultades legales, no tiene que ver violaciones a garantías constitucionales, de allí que la acción constitucional que nos ocupa resulta manifiestamente improcedente."

De igual manera se expresó la sentencia de 15 de enero de 1993, bajo la Ponencia del ex-Magistrado Edgardo Molino Mola, que señaló lo siguiente:

> "La Corte ha sostenido en innumerables fallos, que la acción de amparo no es una tercera instancia en la que se pueda entrar a evaluar las pruebas aducidas por las partes para el reconocimiento de sus pretensiones procesales. La acción de amparo es una acción autónoma, de naturaleza constitucional, tendiente a tutelar los derechos individuales y sociales consagrados en la Constitución Nacional. En lo que respecta al cumplimiento del debido proceso en relación con el derecho de presentar pruebas y contradecirlas, lo que se protege es el derecho de aducirlas y practicarlas, pero la labor de darles el mérito legal, dentro del proceso le corresponde sólo al proceso ordinario, y como ya se ha dicho, en el proceso extraordinario de amparo la evaluación probatoria es completamente extraña a su naturaleza"

En consecuencia, pues, no es posible debatir mediante la acción que nos ocupa, la valoración probatoria que hicieron los juzgadores en ambas instancias, pues era a ellos a quien correspondía hacerlo, y no a la Corte, por ser extraña a la naturaleza de esta iniciativa constitucional.

Por lo tanto, no le queda alternativa a esta Corporación de Justicia, que negar lo pedido.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por la firma forense Padilla y Asociados en representación de la sociedad denominada CORPORACIÓN UNIVERSAL DE INFORMACIÓN (JMJ), S. A. contra la orden de hacer contenida en la sentencia PJ-N° 62-99 de 18 de junio de 2000, dictada por la Junta de Conciliación y Decisión N° 6.

Cópiese, Notifíquese y Archívese

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA — (fdo.) ROBERTO GONZALEZ R.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. — (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA — (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS — (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO LA LICENCIADA MARIA EDUARDA CORDOBA CHEN, EN REPRESENTACION DE CLEMENTE MALCA DWEK, CONTRA EL JUEZ DECIMOCUARTO DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CTO. JUDICIAL, APELACION. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CUATRO (4) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación conoce este Máximo Tribunal de Justicia, de la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesta por la licenciada María Córdoba en representación de CLEMENTE MALCA DWEK, contra la supuesta orden de hacer contenida en el Auto Enc. No. 33 de 23 de diciembre de 1999, dictada por el Juez

Decimocuarto de Circuito de Panamá, Ramo Penal.

I. LA RESOLUCION DE PRIMERA INSTANCIA

La alzada ha sido dirigida contra la resolución de 29 de junio del 2000 proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, que negó la admisión de la acción de amparo presentada en beneficio de CLEMENTE MALCA.

La motivación fundamental en que descansa la inadmisión de la acción propuesta, recae en el hecho de que el auto penal recurrido abre causa criminal contra el amparista, por la supuesta comisión de delito genérico contra la fe pública, acto que por su naturaleza jurídica no es recurrible mediante la acción extraordinaria de Amparo de Garantías Constitucionales.

El Tribunal A-quo reproduce el criterio externado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia a través de diversos pronunciamientos jurisprudenciales, en que reitera que el auto que abre causa criminal no constituye una orden de hacer o no hacer dirigida a un particular, y que por ende, no violenta garantías constitucionales.

En la parte medular de la resolución apelada, el Primer Tribunal Superior de Justicia destacó:

> "A este respecto, se ha de indicar que, si bien, en dicha acción se le ha dado cumplimiento a las exigencias formales consignadas en el artículo 2610 del Código Judicial, la misma enfrenta un obstáculo, en este caso, de orden o carácter jurisprudencial que imposibilita su admisibilidad.
>
> Y es que, como se dejó reproducido, el amparo que nos ocupa está endilgado contra un auto donde el Juez demandado dispone abrir causa criminal al amparista, materia esta que el Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia ha declarado, de forma categórica, no puede ser impugnada por vía de la acción extraordinaria de amparo de garantías constitucionales.
>
> Prueba del anterior criterio jurisprudencial, lo constituye la Sentencia de fecha 16 de noviembre de 1992 dictada con motivo de la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por el señor ANGEL LAM ARCHER contra el Juez Primero del Circuito de Colón, Ramo Penal, donde nuestro máximo Tribunal de Justicia, dejó expresado:
> .....
> .....
> `No debe perderse de vista que el auto de enjuiciamiento es interlocutorio por excelencia, es decir, que no decide el fondo del negocio y no entra por tanto a considerar la inocencia o culpabilidad del procesado, que sigue conservando a su favor el principio de presunción de inocencia, aparte de que no es necesario esperar el auto de enjuiciamiento para tomar medidas cautelares contra el imputado. El auto de proceder tiene por objeto calificar el sumario, es decir, ponderar si existe algún indicio racional de criminalidad en contra de determinada persona y esta apreciación es una facultad inherente a la de juzgar, a fin de declarar si se abre o no la fase plenaria del proceso penal
> .....
> .....
>
> Este criterio fue reiterado en sentencia de fecha 30 de octubre de 1998 dictada por el mismo augusto tribunal."

II. ARGUMENTOS DEL APELANTE

Al sustentar la alzada, el apelante ha insistido en la procedencia de la acción de amparo, arguyendo que ni la Constitución ni la Ley, eximen a los actos judiciales de carácter interlocutorio de ser revisados por esta vía extraordinaria, razón por la cual disiente del criterio sostenido por esta Corporación Judicial en relación al auto de encausamiento.

Se añade, que si el libelo cumplía con los presupuestos formales previstos en el artículo 2610 del Código Judicial, era procedente su admisión, sin entrar en otras consideraciones.

Finalmente arguye, que aunque la calificación legal del sumario sea un acto inherente al juzgador, ello no significa que se encuentre desprovisto de acciones para impugnarlo, particularmente cuando dicho acto pueda vulnerar garantías constitucionales.

III. DECISION DEL TRIBUNAL AD-QUEM

El análisis de rigor a la resolución apelada y a los argumentos que sustentan la alzada, permite a este Tribunal externar lo siguiente:

La decisión proferida por el A-quo en este proceso, se sustenta en jurisprudencia sentada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que de manera uniforme ha reiterado que la decisión de un juzgador de llamar a juicio a un imputado, no puede ser considerada, en estricto derecho, como una orden de hacer susceptible de ser impugnada por vía extraordinaria de amparo de garantías.

En número plural de ocasiones (v.g. resoluciones de 10 de diciembre de 1993; 28 de junio de 1994 y 9 de noviembre de 1995, entre otras), esta Superioridad ha señalado que la naturaleza meramente interlocutoria del acto jurisdiccional atacado, que tiene por objeto asegurar la secuela del proceso, impide la configuración del concepto de orden de hacer requerido como presupuesto fundamental para la interposición de acciones de amparo.

Hemos de indicar al recurrente, como lo hemos manifestado en ocasiones anteriores, que la posición de la Corte a este respecto no responde al designio caprichoso de excluir cierta categoría de actos jurisdiccionales del control constitucional por vía de Amparo de Garantías. Por el contrario, la postura del Tribunal encuentra sustento en razonamientos de sólida base jurídica, que evidencian que el auto de proceder es un acto declarativo, que no determina la culpabilidad de un sindicado (de ello se ocupa el plenario), siendo su finalidad inmediata la calificación del sumario y verificar las exigencias del artículo 2222 del Código Judicial, abriendo la fase plenaria.

El amparista arguye que conforme a esta postura, la expedición de un auto de proceder que viole flagrantemente las garantías constitucionales de un ciudadano, quedaría sin posibilidades de ser enmendado.

Esta apreciación carece de fundamento, toda vez que la Corte ha aceptado -excepcionalmente-, conocer de acciones de Amparo de Garantías Constitucionales contra autos de llamamiento a juicio, en situaciones especialísimas. Tal fue el caso de la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales presentado por EDGAR LENIS GARRIDO contra el Juez Cuarto de Circuito Penal de Panamá, que por su singularidad mereció un examen de fondo, en interés de una tutela constitucional efectiva, toda vez que el Tribunal advirtió de manera clara e inmediata, que la persona contra la cual se abría causa criminal tenía absoluta desvinculación con los hechos criminosos imputados, afectando flagrantemente el principio "in dubio pro reo" contenido en el artículo 22 de nuestro Estatuto Fundamental, actuación que sí constituye un acto susceptible de enmienda por vía extraordinaria de Amparo de Garantías.

No obstante, esta circunstancia excepcional no se presenta en el negocio que nos ocupa, por cuanto el juzgador penal ha motivado de manera razonable y congruente, la posible vinculación del amparista al hecho punible, al ser

CLEMENTE MALCA la persona que presuntamente giró cheques sin suficiente provisión de fondos en nombre de la empresa LAFA S. A. en perjuicio de la Compañía Interamericana Guillette S. A.

Lo anterior pone de manifiesto, que la jurisprudencia sentada por este Máximo Tribunal de Justicia, y en la que se apoyara el Tribunal A-quo para negar la admisión del Amparo, tiene plena cabida en el negocio sub-júdice. Verificada la improcedencia de la acción, debía negarse curso legal a la misma, aunque el libelo cumpliera con las formalidades contenidas en el artículo 2610 del Código Judicial, razón por la cual la actuación recurrida se ajusta a derecho y debe ser confirmada.

De consiguiente, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA EN TODAS SUS PARTES, la resolución de 29 de junio de 2000, emitida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) ROBERTO GONZÁLEZ R.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES R.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR BERRIOS Y BERRIOS, EN REPRESENTACIÓN DE BANCO SANTANDER (PANAMA), S. A. CONTRA EL JUEZ QUINTO DE CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la acción de amparo de garantías constitucionales propuesto por la firma BERRÍOS Y BERRÍOS en representación de BANCO SANTANDER (PANAMA), S. A. en contra de la orden de no hacer, contenida en el Auto N°509, de 29 de febrero del 2000 dictada por el Juez Quinto de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

El texto de la orden de no hacer impugnada es el siguiente:

> "...con ocasión del proceso de rendición de cuentas, en estado de ejecución, que YAKIMA INTERNACIONAL, S.A., le sigue BANQUE ANVAL, S.A., cuyos activos y pasivos fueron transferidos a BANCO COMERCIAL, S.A., NO ACCEDE a las solicitudes presentadas por el apoderado judicial de la parte actora en el sentido de notificar personalmente a BANCO SANTANDER (PANAMA), S.A., el Auto N°3256 de fecha 2 de diciembre de 1999 (fs. 954 a 957) dictado por este Tribunal."

Mediante resolución de 6 de junio del 2000, el Primer Tribunal Superior no admitió la acción de amparo de garantías constitucionales propuesto, señalando, en síntesis, lo siguiente:

> "..... ..... en la resolución judicial atacada por vía de la presente acción de amparo de garantías constitucionales, el Juez Quinto de Circuito de

lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá (Suplente) no ha expedido orden alguna en contra de la proponente de esta acción de carácter extraordinaria.

Muy por el contrario, de la lectura serena del texto de la aludida resolución judicial, en realidad se extrae que, en todo caso, de existir, en vías de discusión una orden de no hacer en dicha resolución judicial, ella estaría endilgada contra la parte actora del proceso al cual accede el Auto N°509 de fecha 29 de febrero del año 2000, es decir, contra la persona jurídica de nombre YAKIMA INTERNACIONAL, S.A., a quien el Juez demandado le negó la petición o solicitud de "notificar personalmente a BANCO SANTANDER (PANAMA), S.A."

Frente a la decisión del referido Tribunal colegiado, la parte afectada recurrió ante el Pleno de la Corte señalando su inconformidad.

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados entran a conocer de la alzada.

Coincidimos en la decisión expuesta por el Primer Tribunal Superior dado que efectivamente el Auto que declara no acceder a la solicitud de una parte en el proceso de notificar personalmente a otra en el proceso sumario de rendición de cuentas en ese despacho, no constituye una orden de hacer o de no hacer susceptible de amparo, sino un acto de mero trámite dentro de un proceso que no contiene mandato imperativo, prohibición o abstención.

Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación judicial ha sostenido reiteradamente que los actos de mero trámite o de impulso procesal no pueden ser atacados mediante la acción de amparo de derechos fundamentales, al igual que aquellas decisiones que no contengan orden de hacer o de no hacer contra el afectado. (Ver sentencias de 3 de mayo de 1994, Registro Judicial de mayo de 1994, págs. 5-6; de 24 de abril de 1996, Registro Judicial de abril de 1996, págs. 12-14; y, de 4 de marzo de 1997, Registro Judicial de Marzo de 1997, págs. 2-4).

Por otra parte, las notificaciones son actos en que la Corte Suprema no le ha dado el carácter de que sean susceptibles de amparo. En este sentido esta Corporación de Justicia ha señalado en fallos anteriores que se está en presencia de una orden de o de no hacer "cuando un acto administrativo o jurisdiccional contiene en su parte dispositiva o resolutiva un mandato imperativo al afectado o que debe cumplir o ejecutar alguna autoridad pública y que de ese acto positivo se deriva un virtual o actual o desconocimiento de derechos fundamentales objetivos del amparista." (Resolución de mayo de 1994).

Por lo expuesto, este Pleno considera que lo procedente es confirmar la resolución.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución de 6 de junio del 2000 expedida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, por medio de la cual NO SE ADMITE la demanda de amparo de garantías constitucionales interpuesto por la firma forense BERRIOS Y BERRIOS en nombre y representación de BANCO SANTANDER (PANAMA), S. A..

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) ROBERTO GONZALEZ R.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.

Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LICENCIADO ABILIO ROLANDO RODRIGUEZ, EN REPRESENTACION DE PRODUCTOS IBIS, S. A. CONTRA EL TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

PRODUCTOS IBIS, S. A., por conducto de su apoderado judicial, el licenciado ABILIO RODRIGUEZ, ha presentado amparo de garantías constitucionales contra el Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, quien expidió la sentencia de 18 de mayo de 2000, que desató la apelación promovida por la sentencia n° 20, de 2 de febrero de 2000 dictado por el JUEZ NOVENO DEL CIRCUITO, por estimar que dicha sentencia ha vulnerado el derecho fundamental al debido proceso, instituído por el artículo 32 de la Constitución Política. Corresponde en la actual etapa procesal, pronunciarse sobre la admisibilidad de la demanda de amparo de garantías constitucionales, a lo que procede el Pleno. Advierte el Pleno que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2610 del Código Judicial, si bien se aprecia en la estructuración de la demanda una extrema vaguedad y confusión en el demandante, con respecto a los requisitos que, sobre estructuración de las demandas de este tipo de procesos constitucionales, tiene sentado el ordenamiento procesal vigente.

Una lectura de la compleja demanda de amparo denota que la misma no puede ser admitida, aún a pesar de que cumple con los requisitos señalados por el artículo 2610 del Código Judicial.

La demanda, al exponer los hechos y las disposiciones constitucionales infringidas, refleja que el propósito de la misma es obtener una revisión de la actuación de las dos instancias que han precedido este proceso marcario y una revisión del material probatorio de que se valieron, tanto el Juzgado 9° del Circuito como el Tercer Tribunal Superior. Esta finalidad, en el amparo, desborda claramente su finalidad al tratar de convertir el proceso marcario ya decidido en una suerte de tercera instancia, que este Pleno, en reiteradas ocasiones ha señalado que no es posible realizar por medio de la acción constitucional de amparo de garantías constitucionales (sentencias de 5 de mayo de 1999, 21 de mayo de 1999, 26 de abril de 1999, 15 de marzo de 1999 y 24 de enero de 2000, entre las mas recientes).

Ha de reiterar el Pleno que los procesos constitucionales de amparo de garantías constitucionales constituyen procesos autónomos y especialísimos, cuya finalidad última y única es la tutela de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política, entre los cuales se encuentra en posición descollante el derecho al debido proceso, cuando estos derechos fundamentales resultan ser violados por un acto oficial o jurisdiccional. No puede ni debe convertirse en una nueva apertura de la discusión acaecida en las dos instancias que se han surtido en el proceso marcario, como una suerte de revisión extraordinaria sobre los méritos o desperfectos o desajustes de la sentencia proferida en segunda instancia, sino, como ya se ha dicho, en un proceso autónomo cuya única finalidad es tutelar los derechos fundamentales cuando éstos han sido lesionados por un acto de autoridad o acto jurisdiccional, contentivo de una orden de hacer o de no hacer. Tampoco tiene como objeto entrar a volver a analizar los esfuerzos del tribunal de la causa encaminados a una labor interpretativa de las normas legales que gobiernan los procesos marcarios, sino contraerse a la finalidad que les es propia, y que ya ha sido expuesta, es decir, el medio constitucional de tutela de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política.

Por lo antes expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el amparo de garantías constitucionales interpuesto por el licenciado ABILIO ROLANDO RODRIGUEZ, en representación de PRODUCTOS IBIS, S. A. contra el TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) ROBERTO GONZALEZ R.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LICENCIADO ROGELIO CRUZ RÍOS, EN BENEFICIO DE JOSÉ CASTRILLON HENAO CONTRA EL ÓRGANO EJECUTIVO Y EL MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha promovido acción de amparo de garantías constitucionales el licenciado Rogelio Cruz, actuando, según dice, en nombre propio y en representación del ciudadano colombiano José Castrillón Henao, acción constitucional extraordinaria que va dirigida a revocar el decreto ejecutivo n° 127, de 29 de mayo de 1998, dictado con fundamento en el artículo 2508-A cl Código Judicial.

Corresponde en esta etapa procesal determinar si la demanda de amparo cumple con los requisitos que estructura el artículo 2610 y con la jurisprudencia en sede de amparo que ha dictado este Pleno.

Es para el Pleno evidente que el amparo no puede ser admitido en la presente coyuntura, por las razones que se pasan a externar.

En primer lugar, a pesar de actuar en representación de José Castrillón Henao, según afirma, no se aprecia en el expediente que haya sido apoderado para instaurar esta acción constitucional por parte del señor Castrillón Henao, poderdante.

La finalidad del amparo está destinada a que sea revocado un acto eminentemente administrativo, por lo que el principio de definitividad que gobierna esta acción constitucional no se ha presentado. Es evidente, por lo tanto, que la acción deviene prematura, pues el actor ha debido promover la correspondiente acción contencioso-administrativa contra el acto administrativo contentivo de la orden que supuestamente lesiona garantías constitucionales del poderdante del peticionario.

No basta, ciertamente, que el demandante le aclare al Pleno que no persigue una pretensión de legalidad sino de constitucionalidad, toda vez que para que estas pretensiones de amparo prosperen, es preciso que se haya dado cumplimiento al principio de definitividad o de subsidiariedad, en cuya virtud el emparo sólo puede prosperar cuando todas las acciones, en vía gubernativa, hayan sido utilizadas en forma correcta, que incluye las acciones contencioso-administrativas de nulidad o de plena jurisdicción, que son competencia de la Sala 3ª de este Pleno, como ha sentado en copiosa jurisprudencia este Pleno, y que se ha denominado por este Pleno "principio de preferencia a la vía contencioso-ad administrativa".

A este respecto pueden traerse a colación un infinito número de resoluciones judiciales del Pleno en el sentido apuntado, A título de ejemplo, tomense en cuenta las sentencias de 17 de diciembre de 1999, 30 de octubre de 1998, 21 de enero de 2000 y 5 de febrero de 1999, entre muchos otros.

Para concluir, se observa que el acto impugnado, el Decreto Ejecutivo N° 127 de 29 de mayo de 1998 tiene cerca de dos años de haber sido expedido, por lo que no se cumple, tampoco, con la inminencia de la lesión constitucional, que es necesaria en los casos como el que nos ocupe, que también ha sido constante jurisprudencia de esta Sala.

Por lo antes expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el amparo de garantías constitucionales presentado por el licenciado ROGELIO CRUZ RÍOS, en beneficio de JOSÉ CASTRILLON HENAO contra el ÓRGANO EJECUTIVO y el MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) ROBERTO GONZALEZ R.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LICENCIADO DAVID ELIO CUEVAS, EN REPRESENTACIÓN DE FRANCISCO SOLÍS GÓMEZ, CONTRA EL JUEZ OCTAVO DE CIRCUITO, PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha llegado a conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de amparo de derechos fundamentales propuesta por el licenciado David Elio Cuevas González, actuando en nombre de Francisco Solís Gómez, contra la resolución de 23 de febrero de 1995 expedida por el Juzgado Octavo del Circuito Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá.

La alzada se dirige contra la sentencia de 17 de julio de 2000, proferida por el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante la cual no admite la iniciativa procesal propuesta. Según explica el tribunal a quo la orden atacada por esta vía constitucional, es decir la resolución de 23 de febrero de 1995, en cuya virtud el Juzgado Octavo de Circuito Penal, abre causa criminal contra Francisco Solís Gómez, como supuesto infractor de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo I, Título VIII, Libro II del Código Penal, relativa al delito de Falsificación de Documentos en General (f. 57), fue objeto de los medios ordinarios de impugnación, mediante incidente de nulidad y que la Sala Segunda de lo Penal, profirió la Sentencia 16 de agosto de 1999, "...donde CASA la resolución del 14 de marzo de 1997, emitido por el Tribunal Superior del Primer Circuito Judicial de Panamá y Confirma en todas sus partes la resolución del 12 de noviembre de 1996, dictada por el Juzgado Octavo de Circuito de lo Penal, que declara improcedente el incidente de nulidad y se ordena proceder a la celebración de la audiencia plenaria en esta causa ..." (Cfr. f. 53).

Por lo que concluye el Tribunal, que no se puede admitir el recurso de amparo en virtud del artículo 204 Constitucional, "...que señala que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia o de sus salas no caben recursos de

amparo de garantías constitucionales, circunstancias que se produce en esta oportunidad y que hace manifiestamente improcedente la presente demanda... (f. 53).

En la sustentación de la alzada el amparista afirma que "...existen número plural de expedientes que han sido tramitados y archivados por los mismos hechos materiales que supuestamente determinaron la orden de hacer acusada..."(Cfr. f. 60).

Agrega que "...la imposibilidad del doble juzgamiento es garantía constitucionalmente establecida como parte esencial del debido proceso..."(Cfr. f. 62).

DECISION DE LA CORTE

Por anunciado y sustentado el recurso de apelación en tiempo, corresponde al Pleno de esta Corporación decidir lo que en derecho corresponda.

En primer, lugar debe la Corte señalar que la resolución atacada en sede constitucional ha sido objeto de diversos recursos de impugnación como fue el de apelación (f. 27, vuelta), incidente de nulidad (f. 28), recurso de casación en el fondo (f. 40), todos resueltos a través de estas vías.

La lectura del libelo permite advertir que no cumple con los requisitos exigidos para su admisibilidad, tal como señaló el a quo. Ello es así cuando, de las constancias recabadas en el cuaderno de amparo, a fojas 40-46 consta la sentencia de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, del 17 de noviembre de 1998, en la cual al conocer de recurso de casación en el fondo la Sala manifestó:

> "Por tanto, la Sala segunda de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA el auto de 14 de marzo de 1997, proferido por el Segundo Tribunal de Justicia y de acuerdo a lo normado en el artículo 2453 del Código Judicial procedemos a dictar la parte resolutiva que debe reemplazarlo como sigue:
>
> Se CONFIRMA en todas sus partes la resolución de 12 de noviembre de 1996, emitida por el Juzgado Octavo del Circuito Penal. Se decreta la sustracción de materia de los incidentes pendientes por haber sido rechazada la solicitud de acumulación por la Sala. Se ORDENA proceder a la celebración de la audiencia plenaria en esta causa..."(Subraya la Corte).

En ese mismo orden de ideas la Sala de lo Penal, de la Corte Suprema, mediante sentencia de 16 de agosto de 1999, al resolver solicitud de aclaración de la sentencia de 17 de noviembre de 1998, expresó:

> "...Por lo antes expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ACLARA el fallo de 17 de diciembre de 1998 emitido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2453 del Código Judicial se dicta la parte resolutiva que debe reemplazarlo como sigue: SE CONFIRMA en todas sus partes la resolución de 12 de noviembre de 1996 dictada por el Juzgado Octavo de Circuito de lo Penal y se ORDENA proceder a la celebración de la audiencia plenaria en esta causa..."(subraya la Corte).

El artículo 2606 del Código Judicial numeral 3, establece que "...no se admitirá la demanda en un proceso de amparo contra las decisiones jurisdiccionales expedidas por el Tribunal Electoral, la Corte Suprema de Justicia o cualquiera de sus Salas..."

Hecho confirmado por la Constitución Política Nacional en su artículo 204 que establece:

> Artículo 204: No se admitirán recursos de inconstitucionalidad ni de amparo de garantías constitucionales contra los fallos de la Corte Suprema de Justicia o sus Salas (destaca la Corte).

Sobre este tema existe profusa jurisprudencia que es posible consultar en las sentencias de 15 de febrero de 2000, 24 de febrero de 2000, 20 de diciembre de 1999, entre otras.

De otra parte, en el libelo de amparo se observa que el amparista omitió el requisito número 4 del artículo 2610 que establece que, la demanda de amparo de garantías constitucionales deberá contener:

> Artículo 2610. Además de los requisitos comunes a todas las, la de amparo deberá contener:
> 1...
> 2...
> 3...
> 4. Las garantías fundamentales que se estimen infringidos y el concepto en que lo han sido (resalta la Corte).

La Corte ha manifestado en relación a este requisito "...que el amparista al exponer el concepto de la violación debe expresar la forma en que han sido violados los derechos constitucionales invocados como infringidos, lo que requiere de una explicación que permita al Pleno evaluar el fondo de la vulneración que se invoca, pero ello ha sido obviado por el peticionario y con respecto al concepto de la infracción no ha indicado si, la vulneración fue en concepto de violación directa, interpretación errónea o indebida aplicación..."(Cfr. Sentencia del Pleno del 15 de febrero de 2000).

Concluye el Pleno de esta Corporación de Justicia, que el recurso de amparo de garantías constitucionales, propuesto es manifiestamente improcedente.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución de 17 de julio de 2000, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CESAR A. PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) ROGELIO A. FABRAGA ZARAK (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRACESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR CABLE & WIRELESS PANAMÁ, S. A., CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA PJ-6- N° 20-2000, FALLO ORAL INMEDIATO DEL 9 DE MAYO DE 2000 DE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 6. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ M. FAUNDES R. PANAMÁ, DIEZ (10) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada Lizza Marie Jaén, actuando en representación de Cable & Wireless Panamá, S. A., solicita aclaración de la sentencia dictada por el Pleno

de la Corte Suprema el 6 de julio de 2000, para resolver el recurso de amparo de garantías constitucionales promovido contra el fallo oral inmediato de 9 de mayo de 2000, de la presidenta de la Junta de Conciliación y Decisión N° 6.

En su escrito la apoderada de la amparista manifestó, entre otras consideraciones relacionadas a la actuación procesal de la Presidenta de la Junta de Conciliación y Decisión N° 6 y de la parte motiva de la resolución dictada por el Pleno cuya aclaración se pide, lo siguiente:

> "TERCERO: Lo que motivó que interpusiera este recurso, tenía como objetivo la invalidación de un acto que afecta al impugnante por ser violatorio de una garantía constitucional, ya que en ningún momento he señalado que se me negó la posibilidad de aportar pruebas, por el contrario en la presentación en donde fundamento los hechos del Amparo de Garantía, señaló que el Juez ad-quo no practica las pruebas solicitadas...
>
> CUARTO: La juzgadora no evacuó las pruebas solicitadas en la EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE LA RELACIÓN DE TRABAJO, las cuales fueron ratificadas en el acto de audiencia, dejando a mi representada en un estado de indefensión.
>
> QUINTO: Se ha infringido la garantía fundamental del debido proceso legal consagrado en el artículo 32 de la Constitución...
>
> SEXTO: No se tomó en cuenta la regla de la Sana Crítica establecida en el Código de Trabajo..." (fs. 54 y 55).

La única solicitud que hace la licenciada Jaén en su escrito, en referencia a la parte resolutiva de la resolución de 6 de julio de 2000, se lee a foja 56, donde dice que: "La presente solicitud de aclaración de sentencia pretende esclarecer la parte resolutiva de la declaración no viable de la acción de Amparo de Garantías Constitucionales."

En la parte resolutiva a la que hace referencia la letrada en su escrito de aclaración, esta Corporación de Justicia dispuso lo siguiente:

> "En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE la acción de amparo de garantías interpuesta por la Licda. Lizza Marie Jaén, en nombre y representación de CABLE & WIRELESS PANAMÁ, S.A." (f. 50)

El Pleno considera que la parte resolutiva de la resolución que dictó el 6 de julio de 2000, no tiene partes oscuras o errores que deban ser corregidos, puesto que es muy clara al declarar no viable la acción propuesta.

En este sentido esta Corporación explicó en resolución del 5 de febrero de 1993, en relación a la declaratoria de no viabilidad lo siguiente:

> "En materia de Amparo de Garantías Constitucionales también se requiere la presencia y concurrencia de determinados presupuestos para que se entienda válida la relación procesal y se pueda obtener un dictamen de mérito.
>
> Por ello, cuando el funcionario ante quien se presenta un Amparo de Garantías Constitucionales advierte que falta un presupuesto procesal indispensable, simple y sencillamente se debe limitar a declarar inadmisible la acción, pues en esta materia no existe el despacho saneador, según lo ha reconocido la jurisprudencia de este supremo tribunal.
>
> Pero puede suceder que tal advertencia ocurra una vez la demanda ha

> sido admitida y sustanciada hasta el punto de que el proceso se encuentra en estado para decidir. En estos casos, y en otros como veremos adelante, donde la Corte ha utilizado la frase 'declara no viable' para expresar que resulta imposible la emisión de un pronunciamiento de fondo, toda vez que falta un presupuesto procesal, tal como el que la vía ordinaria no ha sido agotada previamente y/o que el acto recurrido sea manifiestamente improcedente, entre otros." (Págs. 28 a 31 del Registro Judicial de septiembre de 1993).

Ante la diáfana declaración de no viabilidad de la demanda de amparo presentada y de la lectura de los artículo 986 del Código Judicial, específicamente su párrafo segundo, y del artículo 1108 ibídem, lo pertinente es declarar que no es procedente la aclaración, por cuanto que toda petición que se haga en ese sentido debe circunscribirse a lo dispuesto en la parte resolutiva de la decisión, cuando se estime que contiene frases oscuras o de doble sentido, contradictorias o ambiguas, que no es la situación que motivó la presentación del escrito de aclaración del que se conoce, por cuanto que lo expuesto en la parte resolutiva de la decisión pronunciada resulta muy claro.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA DE PLANO, por improcedente, la solicitud de aclaración de la sentencia de 6 de julio de 2000, formulada por la licenciada Lizza Marie Jaén, en representación de CABLE & WIRELESS PANAMÁ, S. A., dentro del amparo de garantías constitucionales interpuesto contra el fallo oral inmediato de 9 de mayo de 2000, proferido por la Presidenta de la Junta de Conciliación y Decisión N° 6.

Notifíquese

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FABREGA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR MONCADA & MONCADA, EN REPRESENTACIÓN DE SAVOY LINE FILMS INC., CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA PJ-4 N° 19-2000, DEL 24 DE ABRIL DE 2000, EMITIDA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 4. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIEZ (10) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense Moncada & Moncada, actuando en nombre y representación de Savoy Lane Films Inc., presentó demanda de amparo de garantías constitucionales contra la Sentencia PJ-4 N° 19-2000, proferida por la Junta de Conciliación y Decisión N° 4 el 24 de abril de 2000, mediante la cual declaró injustificado el despido del señor Vicente Rojas por parte de la empresa Savoy Lane Films, Inc. (Cine Alhambra Chanis) y ordenó que ésta le pagara al trabajador B/.593.07 de indemnización y B/.1,173.00 correspondientes a tres meses de salarios caídos.

Antes de admitir la presente demanda de amparo de garantías constitucionales es necesario comprobar si la misma reúne los requisitos de toda demanda, los señalados en el artículo 2610 del Código Judicial, y además si no es manifiestamente improcedente.

Considera la parte actora que la resolución impugnada viola el debido proceso contemplado en el artículo 32 de la Constitución Nacional, específicamente en referencia al derecho a ser juzgado conforme a los trámites legales, porque a su juicio, en el presente proceso se interpretaron y aplicaron erróneamente, disposiciones que regulan los presupuestos procesales del derecho de trabajo (fs. 47 a 54).

Luego el apoderado de la amparista hace algunas consideraciones sobre los criterios utilizados por el juzgador para calcular el monto del salario mensual del trabajador y otras acerca de la condena "ULTRA PETITA", en virtud que se le condenó a pagar indemnización sin que lo solicitara el trabajador en la audiencia. Posteriormente, hace un análisis de los hechos ocurridos en la relación laboral y que dieron origen al proceso laboral que culminó con la sentencia ahora demandada.

En el presente caso el Pleno observa que según la actora indica, la Sentencia de la Junta de Conciliación y Decisión N° PJ-4 N° 19-2000 violó el debido proceso, pero no señala ni explica cuáles normas procedimentales fueron infringidas o en qué sentido el juzgador desconoció el procedimiento legalmente establecido.

A este respecto, esta Corporación de Justicia ha señalado en reiterados pronunciamientos que en esta clase de procesos no puede hacerse una revisión de los aspectos relativos a valoraciones y juicios propios del ejercicio jurisdiccional que sirven de fundamento a determinada resolución, puesto que de hacerlo así, estaría asumiendo la posición de un tribunal de instancia, rebasando su atribución específica de control constitucional que presupone la confrontación de la orden impugnada con las normas constitucionales contentivas de las garantías que se consideran vulneradas.

Además, es conveniente señalar que el acto impugnado fue expedido por la Junta de Conciliación y Decisión N° 4 el 24 de abril de 2000 y no fue sino hasta más de dos meses después, el 7 de julio de 2000, que se recurrió contra la misma mediante el amparo de garantías constitucionales, con lo cual se evidencia la falta de inminencia del daño o perjuicio que se alega. Por el contrario, de la lectura del escrito de amparo se deduce que el mismo pretende evitar la materialización del pago de las prestaciones a favor del trabajador.

A este último respecto, esta Superioridad ha dicho que admitir una demanda de amparo contra una resolución que no representa un daño grave e inminente contra el demandante, sería desvirtuar la finalidad para la cual fue concebido.

Por lo antes señalado, como la presente demanda es manifiestamente improcedente, no debe admitirse en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 2611 del Código Judicial.

Por las razones que anteceden, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda de amparo de garantías constitucionales interpuesta por la firma forense MONCADA & MONCADA en representación de SAVOY LANE FILMS, INC. contra la Sentencia PJ-4 N° 19-2000 proferida el 24 de abril de 2000, por la Junta de Conciliación y Decisión N° 4.

Notifíquese

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FABREGA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR CARLOS G. QUIROS A. EN REPRESENTACIÓN DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, JOAQUINA H. DE TORRIJOS R. L. CONTRA LA JUNTA DE CONCILIACION Y DECISION N° 8 DE COCLE Y VERAGUAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, ONCE (11) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado CARLOS G. QUIROS A., actuando en nombre y representación de la COOPERATIVA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, JOAQUINA H. DE TORRIJOS, R. L., ha interpuesto acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra la ORDEN DE HACER contenida en la sentencia No.28 de 29 de junio de 2000, dictada por la Junta de Conciliación y Decisión No.8, dentro del proceso laboral instaurado por ITZA URIETA DE JARAMILLO contra la COOPERATIVA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, JOAQUINA H. DE TORRIJOS, R. L.

Seguidamente se pasa a determinar si la presente demanda de amparo cumple con los presupuestos necesarios para su procedencia.

Se expresa que la orden impugnada está contenida en la sentencia de 29 de junio de 2000, por medio de la cual la Junta de Conciliación y Decisión No.8 de Coclé y Veraguas "Declara Injustificado el despido de la Señora ITZA URIETA DE JARAMILLO y Condena a la COOPERATIVA DE SERVICIOS DE TRANSPORTES JOAQUINA H. DE TORRIJOS a reintegrar a la trabajadora, al pago de los salarios caídos a favor de ésta, a los recargos e intereses determinados por ley".

En los hechos que fundamentan la pretensión, de que sea revocada la resolución judicial, se señala lo siguiente:

> **"..... ..... PRIMERO: La empresa que represento despidió a la trabajadora ITZA URIETA DE JARAMILLO, por reiterados faltantes de dinero, previo a que había sido suspendida por el mismo hecho en fecha anterior.**
>
> **SEGUNDO: El despacho público demandado consideró que si se cometió la falta, es decir, se acreditó la causal de despido; pero que el faltante de dinero es muy baja(sic), por lo que es una falta leve que amerita una sanción más benigna, lo que hace imposible que se perfeccione como causal de despido.**
>
> **TERCERO: Que la orden impugnada viola normas constitucionales y legales, que fijan la seguridad jurídica en el sistema judicial patrio y que establece la certeza judicial de las decisiones jurisdiccionales.**
> **..... ....."**

Se estima vulnerado el artículo 70 de la Constitución, porque a juicio del demandante, no hay congruencia entre la parte motiva y resolutiva de la sentencia, ya que a pesar de que "se comprobó la existencia de faltantes de dinero, la cual constituye falta de probidad," sin embargo, aún cuando en la resolución se reconoce ese hecho, al decidir la causa indica "que la cantidad de dinero es muy baja para que sea considerada falta de probidad".

Estima la Corte, que en este caso se pretende utilizar el amparo de garantías constitucionales como un recurso ordinario, pues resulta evidente que lo que se está cuestionando es la forma en que el juzgador evaluó los hechos de la controversia en relación a la decisión finalmente adoptada. En ningún momento

se alude a la omisión de alguna formalidad legal, de carácter fundamental, dentro del proceso en perjuicio del amparista.

No se puede considerar que se ha violado una garantía constitucional, por el hecho que una de las partes no comparte el criterio del sentenciador contenido en el fallo judicial que le fue adverso.

En innumerables fallos la Corte ha dicho que la acción de amparo no es otra instancia del proceso, en la que se pueda entrar a revisar los hechos controvertidos y las pruebas aducidas por las partes para el reconocimiento de sus pretensiones procesales. El amparo es una acción autónoma, de naturaleza constitucional, tendiente a tutelar los derechos individuales y sociales que consagra la Constitución Nacional.

Consecuentemente, en vista que lo planteado mediante este amparo no tiene rango constitucional, el mismo resulta manifiestamente improcedente.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesta por la COOPERATIVA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, JOAQUINA H. DE TORRIJOS R. L. contra la ORDEN DE HACER contenida en la sentencia No.28 de 29 de junio de 2000, dictada por la JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN NO.8 DE COCLÉ Y VERAGUAS.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PRESENTADO POR EL LCDO. HÉCTOR ZAVALA, EN REPRESENTACIÓN DE DAMARIS ZAVALA DE QUINTERO, CONTRA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN PROVIDENCIA DE 11 DE FEBRERO DE 2000, EMITIDA POR EL FISCAL SEGUNDO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, CATORCE (14) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Héctor Zavala, actuando en nombre y representación de DAMARIS ZAVALA DE QUINTERO, ha presentado ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, Amparo de Garantías Constitucionales, contra la Orden de Hacer contenida en Providencia de 11 de febrero de 2000, emitida por el Fiscal Segundo Superior del Primer Distrito Judicial.

Mediante escrito la parte actora presentó desistimiento del presente recurso ante la Secretaría General, el día 4 de agosto de 2000, por lo que el Pleno procede a determinar su admisibilidad.

A juicio de esta Superioridad el desistimiento presentado por el recurrente es procedente y debe acogerse, conforme a lo perceptuado en el artículo 1073 del Código Judicial, el cual es del tenor siguiente:

> "Artículo 1073. Toda persona que haya entablado una demanda, promovido un incidente o interpuesto un recurso, puede desistir expresa o tácitamente.

El desistimiento una vez presentado al Juez, es irrevocable. ..."

En mérito de lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el desistimiento interpuesto por el Lcdo. Héctor Zavala, en representación de DAMARIS ZAVALA DE QUINTERO y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) YANIXA YUEN
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR CANDANEDO & CANDANEDO, EN REPRESENTACIÓN DE VENTAS Y MERCADEO, S. A. CONTRA EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, DIECISEIS (16) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la acción de amparo de garantías constitucionales propuesto por la firma CANDANEDO & CANDANEDO MONTENEGRO ABOGADOS en representación de VENTAS Y MERCADEO, S. A. en contra de la Sentencia de 19 de julio del año 2000 dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial.

El texto de la Sentencia impugnada es el siguiente:
"..... ..... En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, en Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE la acción de amparo de garantías constitucionales, interpuesta por la firma forense Candanedo & Candanedo Montenegro Abogados en representación de Ventas y Mercadeo, S.A. en contra del Gobernador de la Provincia de Chiriquí."

Mediante resolución de 19 de julio del 2000, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial declaró no viable la acción de amparo de garantías constitucionales propuesto, señalando, en síntesis, lo siguiente:

"..... ..... tenemos que es abundante la jurisprudencia nacional al señalar que cuando la resolución de la gobernación modifica o revoca la decisión de la alcaldía la acción de amparo prospera contra el gobernador, de lo contrario sería contra la Alcaldía Municipal. Sin embargo, en el caso que nos ocupa el amparo es interpuesto por una tercera persona que se considera agraviada al no haber sido informada de la audiencia realizada ante la Alcaldía Municipal del distrito de Barú, por lo que la acción de amparo de garantías constitucionales no es viable contra la gobernación porque lo que se objeta en la acción de amparo, es un supuesto agravio realizado en la Alcaldía Municipal. Ello es así, porque de prosperar el amparo contra el gobernador quedaría vigente la de la Alcaldía Municipal en donde supuestamente

según el amparista es que se viola el debido proceso.
.....
.....
Además debemos manifestar que el artículo 2606 del Código Judicial, señala uno de los elementos fundamentales del amparo es la existencia de un daño grave o inminente que requiere una revocación inmediata. En el presente caso se trata de una resolución calendada 20 de septiembre del año pasado, situación que evidentemente refleja que han transcurrido más de seis meses de proferida y notificada la misma, por lo que ha desaparecido dicho elemento.
.....
....."
(Subraya el Pleno)

Frente a la decisión del referido Tribunal colegiado, la parte afectada recurrió ante el Pleno de la Corte señalando su inconformidad.

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados entran a conocer de la alzada.

Coincidimos en la decisión expuesta por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial dado que efectivamente la presente acción de amparo de garantías constitucionales debía ser dirigida contra el Alcalde Municipal del Distrito de Barú, toda vez que fue este funcionario quien impartió la orden de hacer alegada en su inconformidad el recurrente.

Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación judicial ha sostenido reiteradamente que la orden contra la cual debe ir enderezada la demanda de amparo de garantías constitucionales es la orden originaria y no la orden decisoria del medio de impugnación utilizado por el titular del derecho fundamental supuestamente lesionado. Es evidente, por lo tanto, que la orden que se impugna no constituye el acto originario, tal como lo ha manifestado el accionante de este recurso constitucional cuando expresa en su libelo de apelación que: "Y es que el supuesto agravio realizado en la Alcaldía Municipal, es avalado y por tanto asumido, por la Gobernación de la Provincia de Chiriquí".

Por otra parte, en cuanto a la orden de hacer por la que se impugna, el Pleno es del criterio que no es dable efectuar mayores pronunciamientos con respecto a la presente acción constitucional, toda vez que ha quedado claramente establecido que la sociedad anónima VENTAS Y MERCADEO, S. A. no es parte debidamente constituida en el proceso administrativo ventilado en la Alcaldía Municipal del Distrito de Barú, por lo que carece de legitimidad activa para asumir a nombre propio, los efectos jurídicos de una decisión que resuelve un proceso de accidente vehicular.

Entre las bases técnicas fundamentales de esta acción de control constitucional es indispensable que el acto sometido al amparo de garantías constitucionales cause al promotor un agravio o perjuicio en sus intereses jurídicos, protegidos por la Carta Magna y la petición formal debe hacerla la persona directamente perjudicada, a quienes el ordenamiento jurídico considera titulares de la situación o de la relación controvertida.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución de 19 de julio del 2000 expedida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, por medio de la cual DECLARA NO VIABLE la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesto por la firma forense CANDANEDO & CANDANEDO MONTENEGRO ABOGADOS representación de VENTAS Y MERCADEO, S. A.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) YANIXSA YUEN
Secretaria General Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA LICENCIADA INDIRA ANAYANSI BERRÍOS DÍAZ, EN REPRESENTACIÓN DE BANCO SANTANDER DE PANAMA, S. A., CONTRA EL JUEZ QUINTO DE CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada Indira Anayansi Berríos Díaz, actuando en nombre y representación de BANCO SANTANDER DE PANAMÁ, S. A., interpuso recurso de apelación contra la resolución dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, el 7 de junio de 2000, mediante la cual no admitió el amparo de garantías constitucionales presentado contra el auto N° 1060 de 23 de mayo de 2000, proferido por el Juzgado Quinto de Circuito Civil del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Mediante el auto N° 1060 de 2000 se ordenó poner en conocimiento de la sociedad Banco Santander (Panamá), S. A., que la firma forense Berríos & Berríos, actuando en nombre y representación de la sociedad Banque Anval, S. A., cuyos activos y pasivos fueron transferidos al Banco Comercial Antioqueño, S. A., ahora llamado Banco Santander (Panamá), S. A., ha interpuesto recurso de apelación contra el Auto N° 991 de 15 de mayo de 2000. En dicho auto también se indicó que si pasado el término de tres días desde la notificación, la sociedad Banco Santander (Panamá), S .A. no pide la anulación de lo actuado en nombre de ella, se entenderá que convalida lo actuado y admite expresamente que el que ha venido haciéndolo sin personería suficiente representa sus derechos en el proceso.

El Primer Tribunal Superior decidió no admitir el amparo de garantías constitucionales, porque la recurrente no agotó todos los medios y trámites disponibles para impugnar la resolución judicial en comento. En este sentido el tribunal de primera instancia agregó que para poder acoger y resolver el fondo de la demanda de amparo presentada, es necesario que la parte señalada en el auto impugnado, se notifique del mismo y que objete ante la jurisdicción ordinaria dicha notificación, haciendo uso de los recursos legales procedentes para ello. Agotados los medios de impugnación, es posible demandar a través del recurso extraordinario de amparo de garantías constitucionales (fs. 24 a 26).

Al sustentar la alzada, la apoderada de la amparista pidió que se revoque la resolución recurrida y que en su lugar se admita la acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer contenida en el auto N° 1060 de 23 de mayo de 2000. Fundamentó su petición en las siguientes razones:

> **"El artículo 2606, numeral 2, del Código Judicial establece que la acción de amparo sólo procede 'cuando se hallan agotado los medios y trámites previstos en la Ley para impugnación judicial de que se trate'. Evidentemente, el requisito señalado sólo puede exigirse cuando la resolución dictada afecta a una de las partes de la controversia judicial, esto es, la exigencia de cumplir con éste requisito no alcanza a quienes no tiene (sic) la condición de partes en un proceso tal como ocurre en el caso en el que se ha dictado el auto 1060 del 23 de mayo de 2000. En otras palabras ésta exigencia no opera para quien no es parte en un proceso cuando se pretende contra viento y marea la existencia de una sucesión procesal negada.**

b) La supuesta sucesión procesal en que se apoya el auto atacado.

El auto atacado se apoya en la parte motiva del auto 509 del 29 de febrero de 2000 en que se alude a una supuesta sucesión procesal y que, dicho sea de paso fue negada por los autos N° 61 del 19 de enero de 1994 dictado por el Juez de la causa y por el auto de 23 de junio de 2000 proferido por la Sala de lo Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia. En otras palabras, en autos no existe ninguna resolución que en su parte resolutiva haya declarado la existencia de una sucesión procesal al tenor del párrafo final del artículo 600, del Código Judicial. Este artículo ha sido estirado arbitrariamente por el Juez de la causa para englobar situaciones que escapan al mandato expreso de la norma adjetiva in comento y la cual sólo admite el instituto de la sucesión procesal en caso de fusión o extinción de sociedades. Ni lo uno ni lo otro ha ocurrido en el proceso sumario de rendición de cuentas, en estado de ejecución, incoado por Yakima Internacional, S.A., contra Banque Anval, S.A.

c) La resolución cuestionada se lleva de calle el mandato contenido en el artículo 1018, del Código Judicial..."(f. 29)

Advierte esta Superioridad que la resolución impugnada fue adoptada por el juez de la causa, porque los activos y pasivos de Banque Anval, S. A. fueron transferidos a Banco Comercial Antioqueño, S. A., el cual cambió su nombre y en la actualidad se llama Banco Santander (Panamá), S. A.

Es evidente que la resolución que se impugna mediante la presente acción constitucional de amparo de garantías, aún cuando constituye una medida procesal para proteger los intereses de la amparista haciendo de su conocimiento un hecho que indiscutiblemente le afecta; no ha podido serle notificada porque ella misma lo ha estado evitando, hasta el punto de interponer la presente acción extraordinaria de amparo en la que se hace conocedora de la medida.

Tal como lo señaló el Primer Tribunal Superior, la amparista pudo y debió darse por enterada del auto N° 1060 de 2000 y posteriormente objetarlo utilizando los remedios legales que dentro del proceso, contempla el Código Judicial.

Antes del agotamiento de todos los remedios legales al alcance de la amparista, no corresponde el uso de la acción extraordinaria de amparo, la que procede sólo en caso de violación directa de los derechos y garantías constitucionales, que no encuentran ningún otro remedio disponible en la vía ordinaria, y que además se constituyan en un perjuicio grave e inminente, circunstancias que definitivamente no concurren en el presente caso.

Por las anteriores consideraciones, debe confirmarse la resolución apelada contenida en la resolución dictada el 7 de junio de 2000, por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el fallo de 7 de junio de 2000, proferido por el Primer Tribunal Superior de Justicia que NO ADMITE el amparo de garantías constitucionales promovido en representación de Banco Santander (Panamá), S. A., por la licenciada Indira Anayansi Berríos Díaz, contra el auto N° 1060 de 23 de mayo de 2000 proferido por el Juzgado Quinto de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Notifíquese y Devuélvase

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FABREGA

(fdo.) YANIXA YUEN
Secretaria General, Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR MONCADA & MONCADA, EN REPRESENTACIÓN DE SAVOY LANE FILMS, CONTRA LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 16. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense Moncada & Moncada, en representación de Savoy Lane Films Inc., interpuso demanda de amparo de garantías constitucionales contra la resolución N° PJ-16-N-44-00 de 26 de mayo de 2000, emitida por la Junta de Conciliación y Decisión N° 16, mediante la cual declara injustificado el despido del señor Nathaniel Carrión y condena a la empresa al pago de B/.744.78 en concepto de indemnización.

El Pleno considera que la presente demanda de amparo de garantías constitucionales no debe admitirse porque adolece de defectos de forma y de fondo.

En primer lugar, debe indicarse que la apoderada judicial de la parte actora dirigió su escrito al "Honorable señor Magistrado Presidente del Primer Tribunal Superior de Justicia, del Primer Distrito Judicial de Panamá, E.S.D.:" (f. 32), en vez de hacerlo a la Honorable Magistrada Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, tal como lo establece el artículo 102 del Código Judicial. Este error constituye un desconocimiento de lo establecido en el artículo 2610 del Código Judicial, según el cual la demanda de amparo, entre otros requisitos, debe reunir los comunes a todas las demandas que se encuentran listados en el artículo 654 del Código Judicial.

Además, en cuanto a la pretensión de la actora, observa esta Superioridad que consiste en que se revisen aspectos relativos a los juicios o razonamientos en que se apoyó la autoridad demandada para dictar la resolución que aquí se impugna.

En efecto, una detenida lectura de los hechos de la demanda y del concepto de la violación de los artículos 70, 73 de la Constitución Política, que se consideran infringidos, demuestra que la inconformidad de la amparista con la resolución impugnada radica en que:

> "...fija y centra su decisión en el numeral 6° de ese artículo 213 (ci, Cód. Trab.), IGNORANDO por completo la mención que esa carta de despido hace (sic) mención, no sólo del numeral 6°, sino, y medularmente, del numeral 7° que viene a ser el verdaderamente aplicable por cuanto que la irresponsabilidad que se le dedujo al empleado no se basa en el tipo intencional o doloso, (odinal 6°), sino en el tipo de culpa `por imprudencia y descuido inexcusable', (ordinal 7°), siendo éste último ordinal el que se ajusta a la conducta reprochada al empleado para ordenar elementos normativos que configuran la JUSTA CAUSA PARA DESPEDIRLO.
>
> Inexplicablemente, por decir lo menos, el Tribunal, a pesar de afirmar que 'hizo una valoración de pruebas conforme a derecho tomando en consideración las reglas de la sana crítica', y de que 'analizadas las constancias procesales que reposan en el presente infolio', no entendemos entonces el por qué afirma que solamente fue el numeral 6° del artículo 213 el invocado por el empleador para

ordenar el despido" (fs. 40 y 41).

Tal como se aprecia, aunque se citan como violados los artículos 70 y 73 de la Constitución, el concepto de infracción gira en torno a la indebida aplicación del artículo 213 del Código de Trabajo.

Como es sabido, en esta clase de procesos la Corte no puede revisar los aspectos de hecho y de derecho que sirvieron de fundamento al tribunal competente para emitir un fallo en un negocio determinado, puesto que con ello esta Corporación de Justicia asumiría la posición de tribunal de instancia y rebasaría su atribución específica de control constitucional que debe circunscribirse a la confrontación de la orden impugnada con los preceptos constitucionales que contienen las garantías que se estiman violadas.

La parte actora indicó además que la autoridad demandada violó el artículo 32 de la Constitución Nacional, porque no permitió la aclaración y negó de hecho la posibilidad de recurrir, ya que al momento de transcribir la resolución atacada, lo hizo como proveído de mero obedecimiento, omitiendo la palabra "NOTIFÍQUESE".

En este sentido, observa el Pleno que el hecho de que en la resolución N° PJ-16-N44-00 de 26 de mayo de 2000 se haya omitido la palabra "NOTIFÍQUESE", antes de la palabra "CÚMPLASE", no es prueba de que la autoridad demandada negó a la amparista la interposición de algún recurso, sea de aclaración o cualquier otro. Esta aseveración de la actora no ha sido acreditada con el amparo presentado y si así hubiera sido, cualquier resolución de la Junta de Conciliación y Decisión que niegue o no admita algún recurso propuesto, constituye un acto que debe ser demandado por separado y no mediante el amparo en que se ataca la resolución que ahora examinamos.

Por último, se observa que la apoderada judicial de la empresa Savoy Lane Films Inc., citó como violados los artículos 70 y 73 de la Constitución Política, los cuales no contienen a favor de su representada garantías constitucionales susceptibles de ser violadas por la orden que se impugna.

Por todas las razones expuestas, la presente demanda es manifiestamente improcedente y no debe admitirse en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 2611 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por la firma MONCADA & MONCADA, en representación de la empresa SAVOY LANE FILMS, INC., contra la resolución N° PJ-N-44-00 dictada el 26 de mayo de 2000, por la Junta de Conciliación y Decisión N° 16.

Notifíquese

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FABREGA
(fdo.) YANIXSA YUEN
Secretaria General, Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LIC. ORLANDO RAMOS SÁNCHEZ, EN REPRESENTACIÓN DE SONIA BALLESTEROS, CONTRA EL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado ORLANDO RAMOS SÁNCHEZ, actuando en nombre y representación de SONIA BALLESTEROS ha interpuesto acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra la orden de hacer contenida en la resolución No. 03-2000 de 6 de enero de 2000, proferida por el Banco Hipotecario Nacional.

Esta acción constitucional procede contra órdenes de hacer o no hacer proferidas por funcionarios públicos que lesionen o vulneren los derechos o garantías constitucionales, siempre que la orden requiera de una revocación inmediata por entrañar un daño grave e inminente.

Indicado lo anterior, procede el Pleno de esta Corporación de Justicia a determinar la admisibilidad de la acción, para lo cual se resolverá en atención a las disposiciones que regulan la materia, así como por los criterios jurisprudenciales, que sobre el particular se han proferido.

El libelo cumple con las exigencias comunes a toda demanda (artículo 654 del Código Judicial) y con los requisitos contenidos en el artículo 2610 del referido cuerpo legal.

No obstante, al verificar el cumplimiento de las exigencias contenidas en el artículo 2606 del Código Judicial, el Pleno constata que la resolución, cuyos efectos desea el amparista sean suspendidos, da relación de un acto administrativo proferido por el Banco Hipotecario Nacional, en el que ordena a los señores SONIA BALLESTEROS y ORLANDO ORTEGA el desalojo de la vivienda No. B-28 ubicada en la barriada Fuentes del Chase, corregimiento de Colón, distrito de La Chorrera, provincia de Panamá.

En la referida resolución administrativa los interesados fueron informados de los medios de impugnación que les concedía la ley para oponerse a la referida resolución (Reconsideración y Apelación), pero, pese a hacer uso de ellos las autoridades administrativas confirmaron lo dispuesto en la Resolución No. 03-2000 de 6 de enero de 2000.

Siendo ello así el Pleno observa, que agotada la vía gubernativa, corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa conocer de la presente controversia y no a la esfera constitucional, como pretende el amparista a través de la presentación de esta acción de Amparo de Garantías Constitucionales.

En atención al principio de Preferencia, la controversia que nos ocupa debe ser dilucida en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa. Sobre el particular se transcribe jurisprudencia de 12 de febrero de 1999, que indica lo siguiente:

> "... el Pleno ha determinado que las resoluciones definitivas causadas dentro de un proceso administrativo, tienen a su alcance la vía contencioso administrativa, para reparar el agravio que se les haya inferido y por tanto el amparo de garantías constitucionales no es la vía correcta para atacarlas.
>
> Este criterio se ha sostenido en virtud de que a través de la jurisprudencia de lo contencioso administrativo se garantizan mayores oportunidades procesales de participación y defensa que preserven los mejores intereses del accionante, toda vez que en aquella instancia se pueden practicar pruebas pertinentes y examinarse con mayor profundidad la actuación del funcionario acusado, ya que cuando se sigue una vía procesal que no es la pertinente, para el caso que se juzga, se puede colocar a una de las partes en una situación desfavorable ..." (Registro Judicial de febrero de 1999).

En consecuencia, el Pleno concluye, que no procede la admisión de la acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesta por el licenciado ORLANDO RAMOS SANCHEZ.

PARTE RESOLUTIVA

Por lo que antecede, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley NO ADMITE la acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por el licenciado ORLANDO RAMOS en representación de SONIA BALLESTEROS.

Notifiquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA (fdo.) JOSÉ ANDRÉS TROYANO
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LICDO. JUAN MANUEL CEDEÑO, EN REPRESENTACION DE MEJUCAL INVESTMENT S. A., CONTRA ORDEN DE HACER PROFERIDA POR EL ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia conoce de la acción de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesta por el Licdo. JUAN MANUEL CEDEÑO en representación de la sociedad MEJUCAL INVESTMENT S. A., contra la Resolución No. JD-2006 de 31 de mayo de 2000, expedida por el Ente Regulador de los Servicios Públicos.

La controversia traída a nuestro conocimiento, se origina en la denuncia presentada ante el Ente Regulador de los Servicios Públicos por la empresa CABLE & WIRELESS S. A., contra MEJUCAL INVESTMENT S. A., por la presunta utilización de las líneas telefónicas de esta última, para realizar llamadas internacionales del exterior hacia la República de Panamá y viceversa, evadiendo o sin utilizar, la red de comunicaciones internacionales de Cable & Wireless S. A., única concesionaria estatal para prestar los servicios de telecomunicaciones en la República de Panamá.

El proceso investigativo adelantado por el Ente Regulador, en el que tuvo oportunidad de ejercer su defensa la empresa MEJUCAL INVESTMENT S. A., concluyó que en las instalaciones de la empresa antes mencionada, efectivamente operaba un equipo de telecomunicaciones que prestaba un servicio no otorgado en concesión, y que se encontraba interconectado a la Red Conmutada Internacional sin la autorización correspondiente, lo que le hacía merecedora de la sanción prevista por Ley.

La sanción impuesta por el Ente Regulador a MEJUCAL INVESTMENT en la Resolución 2006 de 31 de mayo de 2000 fue una multa de diez mil balboas, y en dicho acto, notificado a la firma que ejercía la representación de MEJUCAL INVESTMENT S. A., se dejó constancia de que lo resuelto era recurrible en la vía gubernativa a través del recurso de reconsideración, y posteriormente ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. (cfr. foja 8 del expediente de Amparo)

Con vista a lo anterior, la Corte ha de manifestar que el acto impugnado a través de esta acción extraordinaria, es de naturaleza administrativa y perfectamente impugnable ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, como lo contempló la parte resolutiva de la propia Resolución 2006 de 31 de mayo de 2000.

La jurisprudencia de este Máximo Tribunal de Justicia ha sido reiterativa y categórica al señalar, que en estos casos opera el principio de preferencia de la vía contencioso-administrativa sobre la constitucional, y que de acuerdo a lo previsto en el artículo 2606 numeral 2° del Código Judicial, el agotamiento de todos los medios de impugnación que la ley ha previsto para enervar actos de carácter administrativo, es presupuesto fundamental para la presentación de Amparos de Garantías Constitucionales, exigencia que evidentemente no se ha cumplido en este caso, en que el propio amparista manifiesta no haber agotado los recursos de ley. (cfr. foja 19 del expediente)

La Corte sostiene el criterio comentado, reiterando que la acción de amparo no debe ser utilizada como un medio impugnativo ordinario tendiente a debatir cuestiones de carácter legal acerca de las decisiones de los funcionarios administrativos, lo que desvirtúa el propósito de esta acción autónoma y extraordinaria, que es el de tutelar directamente los derechos individuales y sociales consagrados en la Constitución Nacional.

Sin perjuicio de lo anotado, hemos de manifestar que el agotamiento de los medios impugnativos no sólo asegura el cumplimiento de los presupuestos de admisibilidad establecidos para las acciones de tutela constitucional subjetiva, sino que orienta a los presuntos afectados por actos expedidos por la autoridad, hacia la utilización de la vía procesal más idónea para ventilar una litis, que no sólo permita la revisión integral de toda la actuación demandada, sino también la práctica de pruebas y realizar todos los trámites tendientes a satisfacer la pretensión del demandante, lo que no es posible en las acciones sumarias de Amparo.

Es por ello, que la Corte ha señalado que cuando se utiliza un remedio que no es el más efectivo para el caso que se juzga, se puede colocar a las partes en situación de desventaja procesal.

El defecto anotado impide por sí solo, el curso legal de esta acción. No obstante, el Pleno advierte que el libelo también ha sido deficientemente presentado en sus aspectos formales, al omitirse algunas de las menciones establecidas en el artículo 2610 del Código Judicial, pues no se plantea en concreto y en su renglón correspondiente "lo que se demanda", ni se presentan claramente las garantías constitucionales que se estiman infringidas y el concepto en que lo han sido.

El acto impugnado tampoco fue incorporado al proceso de manera idónea, pues la resolución atacada por vía de amparo se adjunta en copia fotostática simple, de otra copia a la que se había impuesto sello de autenticación.

Finalmente, se observa que el libelo fue dirigido de manera global a todos los Magistrados que integran el Pleno de esta Máxima Corporación Judicial, cuando lo pertinente era dirigir la demanda a la Magistrada Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, a tenor de lo previsto en el artículo 102 del Código Judicial.

Con fundamento en estas razones, debe negarse curso legal a la acción presentada.

De consiguiente, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la acción de Amparo de Garantías Constitucionales presentada por el licenciado Juan Manuel Cedeño, en representación de la empresa MEJUCAL INVESTMENT S. A.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES R.
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES, PRESENTADO POR LA FIRMA CARRERA Y ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE IBERAMICA S. A., CONTRA LA DIRECTORA REGIONAL DE TRABAJO DE PANAMÁ OESTE. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma Carrera y Asociados, actuando en representación de IBERAMICA S. A., ha presentado recurso de apelación contra la resolución expedida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 30 de junio de 2000, en la que no se admite la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por la parte actora contra la Resolución de 20 de septiembre de 1999, proferida por la Directora Regional de Trabajo del Sector Oeste de la Provincia de Panamá, mediante la cual acoge la demanda por diferencia de salario mínimo presentada por Agustín Barría y Otros contra IBERAMICA, S. A.

En la demanda se formula pretensión consiste en una petición dirigida al Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, para que de conformidad con lo previsto en los artículos 2611 y 2612 del Código Judicial, el Tribunal requiera la actuación, la que se encuentra en el Juzgado Cuarto de Trabajo de la Primera Sección, se suspenda la ejecución de la Resolución N° 51-DRT-PO-99 de 11 de octubre de 1999, proferida por la Directora Regional de Trabajo de Panamá Oeste en ocasión de la demanda por salario mínimo presentada dentro del proceso laboral antes mencionado, a fin de que decida el recurso propuesto.

El Primer Tribunal Superior de Justicia no admitió la acción de amparo en estudio por considerar por un lado, que el amparista dejó de ejercitar los medios de impugnación que le otorga la Ley, expresamente el artículo 16 de la Ley N°53 de 28 de agosto de 1975, y, por el otro lado, que la acción no está revestida de gravedad e inminencia, en cuanto a los daños que pueda causar al amparista. El amparista por su parte, al sustentar el recurso de apelación, afirma que la resolución de 20 de septiembre de 1999, es una resolución inimpugnable puesto que no decide el asunto ni le pone fin al proceso. En cuanto a la inexistencia de la gravedad e inminencia del daño que señala el Primer Tribunal Superior de Justicia, la parte actora advierte que el Juez Cuarto de Trabajo de la Primera Sección, mediante el Auto N° 317 de 18 de noviembre de 1999, modificado por el Auto N°29 de 4 de febrero de 2000, elevó a la categoría de embargo el secuestro decretado y está para llevar a remate bienes de la empresa, por lo que sí se advirtió la gravedad e inminencia del daño.

Como la acción de amparo de garantías que nos ocupa es contra una resolución judicial, procede el Pleno a verificar si dicha acción extraordinaria cumple con los requisitos legales necesarios. En ese sentido, el artículo 2606 del Código Judicial que fue reformado por el Decreto de Gabinete N°50 de 20 de febrero de 1990, es claro al enunciar que la acción de amparo de garantías constitucionales puede ejercerse contra toda clase de actos que revista la forma de hacer o no hacer, "cuando por la gravedad e inminencia del daño que representan requieran de una revocación inmediata", y, entre las reglas contempladas en la misma disposición, para los efectos de la viabilidad de la acción, figura que el proponente haya agotado los medios y trámites previstos en

la Ley para la impugnación de la resolución judicial de que se trate.

Luego de efectuar el análisis de la documentación que reposa en el expediente, el Pleno observa que, efectivamente, el amparista con la acción presentada no logró demostrar la gravedad e inminencia del daño que representa la orden cuya revocación inmediata persigue, si se toma en cuenta que la inminencia del daño significa que se trate de un perjuicio "actual", de modo que el elemento fundamental del amparo es la "urgencia" en la protección del derecho constitucional que se estima conculcado (Véase sentencia de 14 de agosto de 1996). En ese sentido advierte el Pleno que la Resolución de 20 de septiembre de 1999, expedida por la Directora Regional de Trabajo de Panamá Oeste, acogió la demanda por diferencia de Salario Mínimo y también fijó fecha de audiencia tal como lo prevé el artículo 8 de la Ley 53 de 1975; la resolución en mención fue notificada al amparista el 27 de septiembre del mismo año, como se aprecia a foja 12 y vta. del expediente. Según el acta de audiencia que es visible de fojas 17 a 33 del expediente, el amparista no asistió a la misma, luego de lo cual la Dirección Regional de Trabajo de Panamá Oeste, expidió la Resolución N° 51-DRT-PO-99 de 11 de octubre de 1999, que es visible de fojas 34 a 38 y vta. del expediente, en la que resolvió condenar a la empresa IBERAMICA S. A., al pago de sesenta y un mil doscientos ochenta y siete con ochenta y seis centésimos (B/.61, 287.86), en concepto de incumplimiento del artículo 215 del Código de Trabajo. Conforme se aprecia en el expediente, la mencionada Resolución N° 51-DRT-PO-99 fue notificada a las partes, por lo que el amparista dejó de ejercitar los medios de impugnación que le otorga la Ley, en este caso el artículo 16 de la Ley 53 de 1975.

Es evidente, conforme a lo planteado, que la presente acción no está revestida de gravedad e inminencia en cuanto al daño que la orden impartida pueda causar al amparista. Así, pues, coincide el Pleno con lo expuesto por el Primer Tribunal Superior de Justicia para no admitir la acción de amparo de garantías constitucionales que nos ocupa, en la medida que después de surtido todo un proceso, luego de la expedición de la resolución acusada que fue expedida en el 20 de septiembre de 1999, pretenda el amparista alegar un agravio con la admisión de la demanda, razón que es suficiente para que, a criterio del Pleno, se estime que la acción de amparo no se ajusta a este requerimiento formal.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución expedida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial el 30 de junio de 2000, que NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales presentada por la firma Carrera y Asociados en representación de IBERAMICA S. A., contra la Directora Regional de Trabajo de Panamá Oeste.

Notifiquese y Cumplase

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR MENDOZA, VALLE & CASTILLO EN REPRESENTACIÓN DE COMPAÑÍA MARITIMA DE PANAMA, S. A. CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense, MENDOZA, VALLE & CASTILLO, en carácter de apoderada judicial de la empresa COMPAÑIA MARITIMA DE PANAMA, S. A., ha promovido acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra la Orden de Hacer de fecha 22 de junio de 2000, proferida por el DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO.

Admitida la acción constitucional, el Magistrado Sustanciador, mediante providencia de 18 de junio de 2000 (f.36), solicitó a la autoridad demandada el envío de la actuación a esta Superioridad, o en su defecto, rinda un informe acerca de los hechos materia de esta acción, dentro del término de dos (2) horas, contados a partir del recibo de la nota en su Despacho.

Consta a fojas 113-114, la Nota N°751-DGT-00 de 19 de julio de 2000, remitida por el señor DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO, adjuntando un cuadernillo de 20 fojas útiles.

ORDEN IMPUGNADA

La Orden de Hacer impugnada consistió en ordenar que se corriera traslado del pliego de peticiones presentado por el Sindicato de Trabajadores de COMPAÑIA MARITIMA DE PANAMA, S. A., a la empresa COMPAÑIA MARITIMA DE PANAMA, S. A. (PAMAR, S. A.), emitida por el DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO, que es del tenor siguiente:

"MINISTERIO DE TRABAJO Y
DESARROLLO LABORAL
DIRECCION GENERAL DE TRABAJO

PANAMÁ, 22 DE JUNIO DE DOS MIL (2000)

Cumpliendo con disposiciones legales contenidas en el artículo 435 del Código de Trabajo, se hace entrega personal a las Empresas: COMPAÑÍA MARITIMA DE PANAMA, S. A. (PAMAR, S.A.).

de un ejemplar del pliego de peticiones presentado en debida forma el día 19 de JUNIO DE DOS MIL (2000) por el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA COMPAÑÍA MARITIMA DE PANAMA.

Se advierte a la empresa, que de acuerdo con lo que establece el Artículo 436 del Código de Trabajo, tiene (5) días hábiles para dar contestación al Pliego de Peticiones, los cuales se comenzarán a contar al día siguiente de haber recibido la notificación. Al contestar deberá:

1. Dar respuesta a cada una de las peticiones;
2. Especificar cuales acepta y cuales rechaza;
3. Indicar las razones por las cuales se opone a las mismas;
4. Expresar las contra ofertas que considere razonables para resolver el conflicto;
5. Proporcionar todos los datos e informaciones que atañen al negocio y a los trabajadores, que según su criterio sean de utilidad para la conciliación;
6. Designar el delegado o delegados para la conciliación y si la estima conveniente un asesor legal.

CUMPLASE,

LIC. LUIS CEDEÑO M.
Director General de Trabajo". (f.2)

HECHOS EN QUE SE FUNDAMENTA LA
PRETENSION DEL AMPARISTA

La fundamentación fáctica de la presente acción constitucional, considera el Pleno transcribir textualmente:

"PRIMERO: El día 22 de junio de 2000, el Director General de Trabajo, ordenó, de manera ilegal, que se procediera a correr traslado, a nuestra mandante, del pliego de peticiones presentado por el Sindicato de Trabajadores de COMPAÑIA MARÍTIMA DE PANAMÁ, S.A.

SEGUNDO: La ilegalidad de las órdenes en referencia consiste en lo siguiente:

A. El pliego de peticiones presentado por el Sindicato de Trabajadores de COMPAÑÍA MARITIMA DE PANAMA, se interpuso usando como marco legal el Código de Trabajo y no el Decreto Ley No.8 de 26 de febrero de 1998, que rige las relaciones laborales marítimas que se verifican en la empresa, tal como lo señaló, claramente, la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de 13 de Enero de 2,000.

B. El Director General de Trabajo no es el idóneo para fungir como funcionario conciliador en los casos en que se aplique el Decreto Ley 8, ya que dicho cuerpo legal señala que los conflictos laborales se manejan a través de un funcionario conciliador de la Autoridad Marítima de Panamá. En todo caso, la Autoridad Marítima de Panamá, mantiene el Departamento de Asuntos Laborales Marítimos de Panamá que se encarga de atender los reclamos de los trabajadores, tal como lo señala el artículo 76 del Decreto Ley 8 de febrero de 1998.

C. La orden impugnada viola el debido proceso al requerir a nuestra mandante la negociación de un pliego de peticiones basado en el Código de Trabajo, cuando la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de 13 de enero de 2,000, dictada como consecuencia de Amparo de garantías constitucionales, presentado contra el Director General de Trabajo, determinó que la ley aplicable a nuestra mandante es el Decreto Ley 8 de febrero de 1998.

D. Los conflictos colectivos que se originen en empresas que, como nuestra mandante, están sujetas al imperio del Decreto Ley 8, no se resuelven en base a la legislación laboral ordinaria, como pretende el Director General de Trabajo, sino por las normas, usos y costumbres generalmente aceptados por el comercio y el transporte marítimo, tal como lo señalan los Artículos 78 y 2 del Decreto Ley 8 de febrero de 1998.

E. De lo anterior se colige que cualquier pliego o reclamo que presenten los trabajadores, deben ajustarse a lo señalado por el Decreto Ley 8 de febrero de 1998.

TERCERO: El pliego de peticiones que motiva este amparo y la notificación del mismo a nuestra mandante, atentan contra la seguridad jurídica que debe existir en el país. No es posible que se desconozca, flagrantemente, lo dictaminado por la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de 13 de enero de 2,000." (fs.30-31)

Como disposiciones infringidas, se señalan los artículos 17 y 32 de la Constitución Nacional.

ESCRITO DE OPOSICION A LA ACCION DE AMPARO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑIA MARITIMA DE PANAMA

En escrito obrante de fojas 39 a 42 del expediente principal, el apoderado judicial del sindicato de trabajadores arriba mencionado, estima que es improcedente la acción constitucional planteada, al considerar que se trata de un conflicto colectivo de carácter jurídico en derecho y no un conflicto económico o de interés, dado que no se pide la celebración de una Convención Colectiva, sino lo que se solicita es el cumplimiento de normas de carácter sustantivo y material que forman parte del ordenamiento laboral.

Que existen precedentes, señalando en particular, en que la propia empresa, conviene con los miembros, hoy sindicalizados, en un acta de fecha 29 de abril de 1999, originada a raíz de un conflicto de carácter colectivo jurídico de derecho presentado por un grupo de trabajadores no organizados.

Estima el opositor que la actuación del Director General de Trabajo está apegada a derecho, expresando que, como ha señalado esta máxima autoridad de Justicia, las empresas no están obligadas a negociar Convenciones Colectivas, pero que no es menos cierto, que sí están obligadas a cumplir con la legislación laboral vigente.

Por otra parte, manifiesta el opositor que el Decreto Ley 8 establece mecanismo "muy mal aplicado por cierto para el trámite de las conciliaciones, pero por ninguna parte expresa el trámite a seguir en las mediaciones para la solución de los conflictos colectivos de carácter jurídico o de derecho (observar el Artículo 76 del Decreto Ley 8 de 1998), (f.41). Argumenta también el opositor que es falso que los conflictos de carácter colectivo hayan sido regulados por el mencionado Decreto Ley 8, citando al respecto conflictos atendidos ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, como el caso de trabajadores no organizados de la empresa Luxford Corporation, S. A., el Sindicato de Remolcadores La Barcaza Chilibre, indicando que en este último se declaró la legalidad de una huelga.

RESUMEN DEL INFORME RENDIDO POR EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO

0bserva el PLENO, de fojas 113-114, del expediente principal, la Nota N°751-DGT-00 de 19 de julio de 2000, dirigida a esta Corporación de Justicia por el señor Director General de Trabajo, adjuntando un cuadernillo de 20 fojas útiles.

En primer lugar se refiere a que la providencia de notificación obrante a foja 14, cumple con las formalidades establecidas en el artículo 435 del Código de Trabajo, en virtud de que el Pliego de Peticiones presentado por el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA COMPAÑIA MARITIMA DE PANAMA, reúne las exigencias legales, así como de formalidad.

Señala el funcionario que si bien el Pliego de Peticiones se presentó aduciéndose la violación del artículo 128 del Código de Trabajo, la propia Ley 8 de 1998, acepta la aplicación supletoria de las normas laborales, por lo que estima que no existe impedimento para aceptar pliegos de peticiones, que tienen como fundamento el cumplimiento de los derechos de los trabajadores.

Expresa, además, el señor DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO que la Corte Suprema de Justicia, ha sostenido que si bien no existe obligatoriedad para las empresas que se dedican a las actividades marítimas, el hecho de negociar y suscribir convenio colectivo, "nada impide que se presente contra éstos pliegos de peticiones" (f.113).

Finalmente se refiere a que, si bien no es idóneo para atender este tipo de conflicto, ya que la Corte Suprema de Justicia ha señalado que la Ley 8 "no

dice nada al respecto" (f.114), estima, a su vez, que pueden aplicarse supletoriamente lo normado en el Código de Trabajo, haciendo mención a la sentencia de 13 de enero de 2000 que resolvió el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por la firma MENDOZA, VALLE Y CASTILLO, en representación de la COMPAÑIA MARITIMA DE PANAMA, S. A, contra la orden contenida en la Resolución S/N de 25 de agosto de 1999, proferida por el Director General de Trabajo.

POSICION DEL PLENO

Como se desprende de la demanda de amparo, el amparista señala como infringidos los artículos 17 y 32 de la Constitución Política. De ellos, el Pleno entrará directamente a analizar si ha existido una vulneración al derecho al debido proceso, toda vez que el artículo 17, con arreglo a constante jurisprudencia de este Pleno, no constituye una norma de la cual deriven derechos subjetivos, sino, por el contrario, una norma guía, una norma programática que, por sí sola, no es susceptible de producir una violación al derecho fundamental que nos ocupa.

Constituye el derecho al debido proceso un derecho de múltiples contenidos, todos ellos señalados por el Pleno desde su instauración en la Constitución, y que constituye un derecho fundamental de larga tradición en el constitucionalismo panameño. La garantía del debido proceso que incorpora la Constitución Política en su artículo 32, tiene un rancio abolengo como institución fundamental garantizadora de los derechos fundamentales, en todas nuestras Cartas Constitucionales, y ha sido objeto de copiosísima jurisprudencia por parte de este Pleno. Consiste, como ha puntualizado el Magistrado ARTURO HOYOS, en "una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso -legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas- oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por el contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por ley contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos" (ARTURO, Hoyos, "El Debido Proceso", Editorial Temis, S. A.. Santa Fé de Bogotá-Colombia, 1996, pág.54).

Parte medular de este derecho de contenido múltiple lo constituye, como se desprende de lo que antes se ha dicho, el derecho a ser juzgado por tribunal o autoridad que tenga a su cargo competencia para decidir la materia objeto del conflicto.

Deviene fundamental determinar si los conflictos de órden colectivo son competencia del Director General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, o, por el contrario, son materia que deben resolverse de conformidad con las reglas derivadas del Decreto-Ley 8, de 26 de febrero de 1996, y por las autoridades que la legislación delegada determina. El demandante tiene razón en determinar o sostener que dicho Decreto-Ley regula la materia del trabajo en el mar, y no el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, como tuvo ocasión de señalar la Corte, y lo recuerda el demandante, en conclusión que el Pleno reitera, en asuntos relacionados con la aplicación de convenciones colectivas y con conflictos de orden colectivo. Y es que, a pesar de que el artículo 1° del Decreto-Ley 8° de 1998 reserva para dicha normativa todo lo relacionado con el trabajo en el mar y vías navegables, no es menos cierto que el artículo 78 de la referida legislación, en materia de solución de conflictos colectivos, sean de orden jurídico de derecho, remite el artículo 2° del Decreto-Ley 8° de 1998, que es una norma que regula lo relativo a las lagunas que puedan encontrarse en la tantas veces mencionada legislación laboral marítima, refiriendo, en primer término, a los convenios internacionales y, seguidamente, a lo que denomina la "legislación complementaria" que el Pleno estima que es el Código de Trabajo, y sus modificaciones, que regula todo lo concerniente a la

solución de este tipo de conflictos ante la autoridad administrativa del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, singularmente el Director General de Trabajo, por lo que, en materia de solución de conflictos colectivos, que no son objeto de regulación minuciosa por el Decreto-Ley n° 8 de 1998, es competencia de la Dirección General de Trabajo.

Resulta conveniente reproducir los artículos citados del Decreto-Ley N°8 de 1998:

"ARTICULO 2. Los hechos o supuestos no previstos en este Decreto Ley, en los convenios internacionales ratificados por la República de Panamá, o en las disposiciones legales complementarias, se resolverán de acuerdo con las normas, usos y costumbres generalmente aceptados en el comercio y transporte marítimo.

ARTICULO 78. Para la solución de los conflictos colectivos, de orden tanto jurídico como económico, las partes se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 2 del presente Decreto Ley."

La sentencia de esta Corte, de 13 de enero de 2000, dijo lo que se transcribe:

> "Por otra parte, considera el Pleno, que el Director General de Trabajo es la autoridad competente para intervenir en este tipo de conflictos, pues el Decreto Ley N° 8 no dice nada al respecto, por lo que, en este caso se aplicarán, supletoriamente las normas del Código de Trabajo, mismas que le atribuyen tal facultad al mencionado Director."

Por lo antes expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DENIEGA el amparo de garantias constitucionales presentado por MENDOZA, VALLE & CASTILLO en representación de COMPAÑÍA MARITIMA DE PANAMA, S. A. contra el DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LIC. RAMÓN FRANCISCO CASTELLANOS, EN REPRESENTACIÓN DE PADAFRONT LINEA DE TRANSPORTE Y TURISMO, S. A., CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N 86 DE 7 DE ABRIL DE 2000, EMITIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado RAMON CASTELLANOS, actuando en nombre y representación de PADAFRONT, LINEA DE TRASNPORTE Y TURISMO S. A. ha interpuesto acción de Amparo de garantías Constitucionales contra la orden de hacer contenida en la resolución No. 086 de 7 de abril de 2000, proferida por la Dirección General de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.

ANTECEDENTES:

Mediante Resolución No. 88 de 14 de mayo de 1996, la Dirección de Tránsito y Transporte Terrestre le adjudicó a la empresa TRANSPORTE Y TURISMO PANAFROM, S. A. trece cert6ificados de operación de la ruta David-Frontera-Panamá y viceversa. Contra esa resolución administrativa se interpuso una demanda Contencioso Administrativa de Nulidad, que fue resuelta el 30 de noviembre de 1998 en la que se declaró, que la Resolución No. 88 de 14 de mayo de 1996 no era ilegal.

A través de la Resolución No. 41 de 15 de abril de 1997, la Dirección de Tránsito y Transporte Terrestre aprueba la solicitud de la empresa TRANSPORTE Y TURISMO PANAFROM, S. A. para traspasar trece certificados de operación a la sociedad PADAFRONT, LINEA DE TRANSPORTE Y TURISMO, S. A.

Posteriormente por medio de escrito presentado el 27 de mato de 2000, la empresa TRANSPORTE Y TURISMO PANAFROM, S. A. sustenta recurso de reconsideración contra la resolución No. 41 de 15 de abril de 1997, ya que a criterio del recurrente la Dirección del tránsito se encontraba imposibilidad para proferir esa resolución, toda vez que el recurso de Nulidad presentado ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia fue concedido en el efecto suspensivo.

El recurso de reconsideración fue acogido por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre a través de la resolución No. 86 de 7 de abril de 2000, revocándose en todas sus partes la resolución No. 41 de 15 de abril de 1997.

FUNDAMENTO DEL AMPARISTA

El licenciado RAMON CASTELLANOS expresa, que la Resolución No. 41 de 15 de abril de 1997 fue notificada al apoderado judicial de la empresa TRANSPORTE Y TURISMO PANAFROM, S. A., de allí que al no ser recurrida dentro del término procesal correspondiente, la misma quedó ejecutoriada y no puede presentarse, ahora, recurso de reconsideración contra la misma.

Continúa señalando el amparista, que la Autoridad del Tránsito de manera ilegal e inconstitucional mediante resolución No. 86 de 7 de abril de 2000 acogió el recurso de reconsideración y revocó en todas sus partes la resolución de 1997, negándosele todo tipo de información, así como copia del acto que impugnan a través de esta acción constitucional, aunado al hecho que no se les ha notificado la misma.

El licenciado CASTELLANOS expresa, que a su representada le ha sido vulnerado el artículo 32 de nuestra Carta Constitucional en concepto de violación directa por omisión, ya que, "El funcionario acusado, al entrar a considerar y decidir sobre la resolución No. 41 de 15 de abril de 1997, la cual había quedado ejecutoriada desde abril de 1997, toda vez que las partes interesadas habían sido notificadas, contraviene el debido proceso y la seguridad jurídica ..."

Finalmente indicó el amparista, que no han podido hacer uso de los recursos administrativos de ley, toda vez que el presidente de la sociedad no ha sido notificado de la referida resolución administrativa, por lo que ante "... la eminencia y gravedad de los efectos nocivos de la resolución nos vemos avocado (sic) al presente recurso como medio para evitar graves y más daños y perjuicios."

RESPUESTA DEL FUNCIONARIO ACUSADO

El licenciado CARLOS A. HARRIS, en su calidad de Director General de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre remitió copia de la actuación que se lleva en esa dependencia, señalando que, a través de la resolución No. 215 de 28 de julio de 2000 fueron suspendidos temporalmente los efectos de la resolución No. 86 de 7 de abril de 2000.

Señaló además el funcionario acusado que:

> "En el caso particular del licenciado Castellanos, no se debe entender que existe hermetismo o negativa de esta institución a otorgarle acceso a los expedientes, sino que por razones que escapan al control de la Autoridad, en el momento en que se ha solicitado, no se ha podido cumplir inmediatamente, pero se le ha hecho la observación de que en el instante en que se pueda se le facilitará en el acto ..."

Expresó igualmente, que la resolución No. 86 de 7 de abril de 2000, objeto de impugnación a través de esta acción de Amparo de garantías Constitucionales "se encuentra en etapa de notificar a las partes."

DECISION DEL PLENO

La doctrina y nuestra jurisprudencia han establecido, que el amparo tiene el propósito de obtener la revocatoria de una orden de hacer o de no hacer, expedida por cualquier funcionario publico que vulnere los derechos y garantías que consagra la Constitución Política de la República de Panamá, tal cual lo consagra el artículo 50 del referido estatuto constitucional.

Para que esta acción prospere resulta indispensable que se vulneren derechos constitucionales a través de una orden de hacer o no hacer, que por la gravedad o inminencia del daño se requiera de una revocación inmediata para lo cual deberán agotarse los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución de que se trate, la que deberá ser expedida por un funcionario con mando y jurisdicción.

En esta oportunidad, el Pleno consideró importante analizar los hechos planteados por el amparista aplicando el principio denominado in dubio pro libertate, con el fin de esclarecer las circunstancias que rodearon la orden impugnada y determinar, si efectivamente le fueron conculcadas las garantías constitucionales al amparista.

En consecuencia, revisados los antecedentes así como el informe de conducta presentado por el funcionario demandado, la Corte considera que nos encontramos ante una resolución proferida dentro de un proceso administrativo que se ventila en la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, por lo que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa es la competente para atender la controversia que presenta el amparista a través de esta acción constitucional.

En tal sentido existe copiosa jurisprudencia que reitera el criterio arriba indicado, parea lo cual se cita la sentencia de 12 de febrero de 1999, que expresa lo siguiente:

> "... El Pleno ha determinado que las resoluciones definitivas causadas dentro de un proceso administrativo, tienen a su alcance la vía contencioso administrativa, para reparar el agravio que se les haya inferido y por tanto el amparo de garantías constitucionales no es la vía correcta para atacarlas.
>
> Este criterio se ha sostenido en virtud de que a través de la jurisprudencia de lo contencioso administrativo se garantizan mayores oportunidades procesales de participación y defensa que

preserven los mejores intereses del accionantes, toda vez que en aquella instancia se pueden practicar las pruebas pertinentes y examinarse con mayor profundidad la actuación del funcionario acusado, ya que cuando se sigue una vía procesal que no es la pertinente, para el caso que se juzga, se puede colocar an una de las partes en una situación desfavorable ..." (Registro Judicial de febrero de 1999).

Ahora bien , la resolución No. 86 de 7 de abril de 2000 establece en su último párrafo que "Se le advierte a los interesados que contra esta resolución procede el recurso de Reconsideración y apelación (sic) en subsidio de presentarse uno o ambos, podrá hacerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación". Siendo ello así y observando que le funcionario acusado indicó, que la referida resolución se encuentra en etapa de notificación, el Pleno concluye que el amparista no ha agotado la vía gubernativa para acceder a la jurisdicción contencioso administrativa.

PARTE RESOLUTIVA

Por lo que antecede, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA NO VIABLE la presente acción de Amparo de Garantías Constitucionales presentado por el Licenciado RAMON CASTELLANOS en representación de PADAFRONT, LINEA DE TRANSPORTE Y TURISMO, S. A.

Notifiquese,

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ ANDRÉS TROYANO (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ROBERTO ANTONIO FACIO MORENO CONTRA LA FISCAL DELEGADA DE DROGAS DE HERRERA Y LOS SANTOS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado MOISES ESPINO BRAVO ha interpuesto acción de Habeas Corpus a favor de ROBERTO ANTONIO FACIO MORENO (a) CHICHI MOTA, contra el FISCAL DELEGADO DE DROGAS DE HERRERA Y LOS SANTOS.

Librado el mandamiento de habeas corpus, la autoridad demandada remitió el siguiente informe:

"..... .....
A. Sí, es cierto que ordenamos mediante Resolución calendada 19 de junio del año 2000, consultable de folios 132 a 136 del Cuaderno Penal la detención preventiva del señor ROBERTO ANTONIO FACIO MORENO.

B. Los motivos y fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la limitación temporal de la libertad del señor ROBERTO ANTONIO FACIO MORENO fueron las diversas informaciones que por parte de la Oficina

de Narcóticos de las Provincias Centrales en donde se establecían las actividades de venta de drogas por parte del señor JUAN MIGUEL BAZAN BARRIOS.

En base de ello tenemos que la Oficina de Narcóticos con oficio fechado 1 de junio de los corrientes nos peticionó una autorización judicial para llevar a cabo una diligencia de Compra Vigilada de Drogas al BAZAN BARRIOS y adjuntó a la misma ciertas informaciones que se manejaban sobre las actividades ilícitas de venta de drogas a las que el mismo se venía dedicando en el área de la ciudad de Chitré, Barriada Renacimiento o El Cartón de la ciudad de Chitré, en donde también señalaban varios sujetos que se venían conjuntamente con BAZAN dedicándose a esas acciones ilícitas, entre esos señores específicamente se señala a el señor ROBERTO ANTONIO FACIO MORENO (A) CHICHI MOTA, tal cual se aprecia a folios 43,47-48 y 51 del sumario. La Fiscalía en la Resolución visible de folios 52 y 53 del proceso dispuso llevar adelante esta Operación y designó en ese momento los billetes que debían ser utilizados en la misma que era la suma de veinticinco balboas (B/.25.00) para realizar compras previas y la vigilada de narcóticos (ver fojas 54 a 58).

Estas operaciones se dieron con los acontecimientos de realizar compras previas hasta la que correspondía con Diligencia de Allanamiento y Registro el día 3 de junio del año dos mil, en donde al llegar a la residencia se ubica entre sus ocupantes al señor FACIO MORENO (A) CHICHI MOTA, así como también se localizan veinte (20) sobres con drogas, así como en poder del señor de apellido BAZAN, gran cantidad de dinero entre los que se encontraban parte de los autorizados por la Fiscalía para esas diligencias.

Las pruebas de campo de las sustancias objeto de investigación se verificaron y las mismas resultaron que eran positivas para la sustancia estupefaciente conocida como cocaína.

De acuerdo a lo expresado, consideró el suscrito que la actividad de venta de drogas estaba prima facie corroborada, por lo cual, peticionó la indagatoria de FACIO MORENO, quien negó los hechos imputados en su contra pero, señaló conocimiento de hechos y circunstancias relacionadas directamente con la investigación, por lo cual, aunado con su oportunidad y presencia física en el lugar donde se llevó a cabo la operación de compra de droga y en donde se encontró drogas ilícitas, (a pesar de lo expuesto por BAZAN a folios 146-149), se decidió decretarle su detención preventiva.

Recientemente y luego de lo anterior ha llegado a esta Agencia de Instrucción la documentación visible de folios 177 a 250, en donde los informes provenientes de la Subdirección de Información e Investigación Policial de la Policía de Herrera, en donde se detallan las actividades de tráfico local de drogas en la comunidad de Chitré, por parte de varios sujetos entre los que se señala al señor FACIO MORENO (A) CHICHI MOTA.

Por estas exposiciones consideramos que la participación de FACIO MORENO en el acto contrario al orden penal es por el momento aún indiciariamente corroborable, siendo este una actividad ilícita que sobrepasa los dos (2) años de prisión y atenta Contra la Salud Pública, por lo cual, estimamos que se encuentran reunidos los presupuestos contemplados en los artículos 2147 y 2148 del Código Judicial, reformado este último por la Ley 42 de 27 de agosto de 1999, para decretar la detención preventiva del mismo, ya que, en nuestro concepto en estas actuaciones existe la posibilidad que se siga atentando contra la salud de las personas.

> C. El señor ROBERTO ANTONIO FACIO MORENO (A) CHICHI MOTA, se encuentra detenido a nuestras órdenes en la Cárcel Pública de Los Santos, pero, desde este momento se pone a órdenes de esa Superioridad para lo que sea de lugar.
> .....
> ....."
> (Fs.10 a 12)

En este momento corresponde determinar si la medida cautelar de carácter personal atacada cumple con los requisitos establecidos en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

El Pleno observa a fojas 43, de 47 a 48, a 51, de 177 a 183, a 218, y de 228 a 232 del expediente, los informes de inteligencia elaborados por las autoridades de la Oficina de Narcóticos de la Policía Técnica Judicial de las Provincias Centrales y Azuero y de la Zona de Policía de Herrera que señalan que, a través de llamadas telefónicas, entrevistas y fuentes de entero crédito se ha conocido que el señor ROBERTO ANTONIO FACIO, (A) CHICHI MOTA, y OTROS se están dedicando a la venta y distribución de sustancias ilícitas en el área de Chitré.

Consta, de fojas 174 a 176 de las sumarias, la declaración jurada del detective ALCIBIADES NOEL GONZALEZ quien se ratifica del informe de comisión suscrito el 31 de mayo de 2000, donde manifiesta que tenía conocimiento, por informaciones recabadas por el despacho, que los señores JUAN MIGUEL BAZAN BARRIOS (A) FEO; RODRIGUEZ GONZALEZ (A) SANTA, ROBERTO ANTONIO FACIO MORENO (A) CHICHI MOTA y DEL RIO PEREZ (A) CHOLO se venían dedicando a la venta de cocaína. El Pleno observa, a foja 52 del antecedente, la resolución de 1 de junio de 2000, mediante la cual la Fiscalía Delegada Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Herrera y Los Santos autoriza la realización de tres operativos sucesivos de compra controlada - vigilada de drogas en la residencia del señor JUAN MIGUEL BAZAN BARRIOS (A) FEO, a efectuarse los días 1, 2 y 3 de junio y para las cuales se usó dinero previamente marcado

Dichas compras controladas se efectuaron y resultaron positivas, como se desprende de las fojas 62 a 69 y 78, por lo cual se realiza el 3 de junio diligencia de allanamiento y registro a la residencia del señor BAZAN BARRIOS, ubicada en la Barriada Renacimiento o El Cartón, y en la cual son aprehendidos los señores JUAN MIGUEL BAZAN BARRIOS, (A) FEO, MARIA DE LOS SANTOS RODRIGUEZ, JULIO ISAAC CHEN VEGA, LUIS EDUARDO DEL RIO MORENO, ROBERTO ANTONIO FACIO MORENO y dos menores de edad.

En el allanamiento se decomisaron 20 sobrecitos de plásticos contentivos de un polvo blanco presumiblemente cocaína, dinero fraccionado y previamente marcado en poder de BAZAN BARRIOS, y dinero fraccionado en poder de DE LOS SANTOS RODRIGUEZ, CHEN VEGA y DEL RIO MORENO. A FACIO MORENO no se le decomisaron sustancias ilícitas ni dinero en efectivo. (fs.74 A 76).

Al rendir declaración indagatoria FACIO MORENO niega dedicarse a la venta de drogas, señala que es enemigo de BAZAN BARRIOS y que estaba en el lugar del allanamiento porque fue a la casa de su cuñada MARIA DE LOS SANTOS RODRIGUEZ (esposa de BAZAN BARRIOS) con el fin de no mojarse con la lluvia. Al respecto manifiesta lo siguiente:

> "Señor Fiscal, hasta donde tengo entendido FEO BAZAN vende y consume droga y se la da a guardar a MARIA RODRIGUEZ, LUIS DEL RIO PEREZ la trae de Panamá y la procesa ahí mismo, en cuanto a JULIO CHEN VEGA no tengo conocimiento de si consume o vende, pero en cuanto a los otros mientras yo me encontraba ahí viendo televisión en la casa de mi cuñada sí me di cuenta de las movidas que había, yo deseaba irme pero como estaba lloviendo no podía irme...Ahí el movimiento que se estaba moviendo o sea la droga era cocaína."

Mediante resolución de 6 de junio de 2000 la Fiscalía Delegada

Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Herrera y Los Santos decreta la detención preventiva de ROBERTO ANTONIO FACIO MORENO y OTROS por su vinculación con Delitos Contra la Salud Pública (Drogas). (Fs.132 a 136)

Una vez efectuado un análisis objetivo de los elementos probatorios allegados al expediente para la comprobación del hecho punible, el Pleno observa que contra ROBERTO ANTONIO FACIO, (A) CHICHI MOTA, obran los numerosos informes de inteligencia recabados por los agentes los cuales son coincidentes en señalar a FACIO MORENO como uno de los sujetos que, conjuntamente con JUAN MIGUEL BAZAN y otros, se dedican a la venta de sustancias ilícitas en la región; consta igualmente la declaración jurada del agente ALCIBIADES GONZALEZ, además de su presencia en el momento del allanamiento de la residencia de BAZAN, donde se decomisaron sustancias ilícitas, dinero fraccionado y parte del dinero marcado previamente por la Fiscalía de Drogas; indicios suficientes que lo vinculan con el delito que se le imputa, por lo cual resulta viable la detención preventiva a la que está sujeto, pese a no habérsele encontrado en su poder droga ni dinero fraccionado. Considera el Pleno que al dictarse la medida cautelar no se ha infringido el debido proceso establecido por la Constitución Nacional y en las leyes de la República, ni tampoco las normas jurídicas que regulan la detención preventiva, por lo que lo procedente es declarar legal la detención..

En virtud de lo expresado, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de ROBERTO ANTONIO FACIO MORENO (A) CHICHI MOTA y DISPONE que el detenido sea puesto a órdenes de las autoridades correspondientes.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) ROBERTO GONZALEZ R. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JORGE FABREGA PONCE (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAV0R DE CUTBER ANDERSON BOXILL CONTRA EL FISCAL CUARTO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado JUAN PAULINO RODRIGUEZ ha presentado, ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, acción de habeas corpus a favor de CUTHBERT ANDERSON BOXILL contra EL FISCAL CUARTO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL.

Una vez acogida la presente acción se libró el mandamiento de habeas corpus contra dicha autoridad quien, a través del Oficio No.1129 de 27 de junio de 2000, rinde el siguiente informe:

"..... .....

1. Esta Agencia del Ministerio Público no dispuso ordenar la detención del señor CUTBER ANDERSON BOXILL. Dicha medida privativa de la libertad fue emitida por la Fiscalía Auxiliar de la República mediante providencia fechada 22 de febrero del año dos mil (2000). Dicha medida cautelar fue mantenida por esta Agencia del Ministerio Público mediante providencia de fecha 1 de

marzo del año actual.

2. Los motivos o fundamentos de hecho que se tuvo para adoptar esta medida privativa de la libertad sobre la persona de CUTBER ANDERSON BOXILL, es su vinculación al homicidio perpetrado en perjuicio de ROBERTO FLORES. Dicho homicidio se encuentra debidamente acreditado en el expediente a través de la Diligencia de Reconocimiento de un cadáver llevado a cabo por el Secretario de la Fiscalía Auxiliar de la República, así como a través de las vistas fotográficas tomadas durante esta diligencia, así como en la práctica de la autopsia de rigor.

Igualmente se cuenta en el expediente con el Protocolo de Necropcia practicado al cadáver por parte de la Dra. GENEVA RODRIGUEZ, quien respecto de las causas de muerte establece lo siguiente:

CAUSAS DE LA MUERTE

A. HERIDA PERFORANTE POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO EN EL TORAX.

En lo que respecta a la vinculación del sindicado ANDERSON BOXILL, existe el señalamiento directo que le formula la joven BLEIXIN MERCEDES CALDERON BERMUDES que lo vinculan con la comisión de este hecho de sangre, en el sentido de que éste luego de un intercambio de palabras con el hoy occiso saca un arma de fuego y le efectúa varias detonaciones, que a la postre le causan la muerte.

En lo que se refiere el abogado defensor de que la testigo CALDERON BERMUDES se contradice no estamos de acuerdo. Dicha testigo ha ampliado en diversas ocasiones la declaración que rindiese en primera instancia ante la Policía Técnica Judicial e incluso ha sido repreguntada por la defensa técnica. En su primera declaración esta testigo manifiesta lo siguiente:

"... de repente tres sujetos que se encontraban en la misma cera (sic) por donde yo iba caminando con mi primo (hoy occiso), de los cuales uno llamó por su apodo de TOTITO, ya que a mi primo le llamaban así, entonces yo me quedé parada y mi primo ROBERTO caminó con dirección hacia donde se encontraban estos tres sujetos, de repente yo escuché una discusión y observe que uno de estos tres sujetos caminó donde la luz de un poste le daba y fue entonces que me dí cuenta que se trataba del apodado FLACO, luego mi primo ROBERTO FLORES le dijo al apodado FLACO "HAZ LO QUE TU QUIERAS" y fue entonces que FLACO sacó un arma de fuego por debajo de una sudadera que tenía y empezó a efectuarle tiros a mi primo y luego mi primo cayó al suelo ..."

En su ampliación esta testigo explica lo siguiente:

... Vi que se suscitó una discusión y solo escuche que cuando ROBERTO FLORES le dice a FLACO HAZ LO QUE TU QUIERAS y vi cuando FLACO sacó un arma de fuego oculta debajo de su sudadera y le empieza a disparar a ROBERTO FLORES y lo tomo en mis brazos y le pregunté que QUE PASO, es decir que yo quería saber porque FLACO le había disparado y ROBERTO solo me dijo FUE FLACO,

posteriormente se quejó y cerró los ojos".(fs.71-72)

En posteriores ampliaciones esta testigo se reitera en los cargos que formulara con anterioridad al sujeto apodado FLACO, quien resulta ser CUTBER ANDERSON BOXILL, tal como él mismo lo acepta en su declaración indagatoria, por lo cual conceptuamos no existen las contradicciones que aduce la defensa técnica en la presente acción- La testigo es clara en sus señalamientos en contra del sujeto FLACO (ANDERSON BOXILL), lo cual ratifica a través de DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO FOTOGRAFICO (Ver.fs.58-58).

En cuanto a lo manifestado en el expediente por parte del sindicado en el sentido de que al hoy occiso lo estaban buscando por un caso de Homicidio, es pertinente aclarar que esta Agencia de Instrucción adelanta un sumario por el homicidio de RODNEY FRANCIS, en el cual se mencionó la sujeto TOTITO, pero no se emitió orden alguna de detención preventiva sobre el mismo al no existir los méritos para ello.

No estamos de acuerdo con los señalamientos esgrimidos por el Licdo. JUAN PAULINO RODRIGUEZ, en el sentido de que la orden de detención atacada a través de esta acción no cumple con las exigencias consignadas en el artículo 2159 del Código Judicial, toda vez que en el presente sumario se encuentra plenamente acreditado el hecho punible, y existen elementos de convicción que involucran al sumariado ANDERSON BOXILL con el homicidio de ROBERTO FLORES, por lo cual se cumplen a cabalidad con las formalidades y requisitos que contempla nuestra legislación par la adopción de una medida privativa de la libertad, aunado al hecho de que el delito que se le imputa tiene contemplada una penalidad superior a los dos años de prisión, y existe peligro de que el sindicado se de a la fuga o cometa graves delitos con uso de armas como lo establece el artículo 2147-C del Código Judicial, ya que el sindicado fue capturado en Chorrera, luego de que se le vinculara a un caso de robo.

Los motivos o fundamentos de derecho que tuvo la Fiscalía Auxiliar de la República para ordenar la detención preventiva del sindicado están consignadas en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial que establecen los requisitos y formalidades para adoptar una medida privativa de la libertad sobre una determinada persona dentro de la etapa sumarial.

3. Actualmente el sindicado CUTBER ANDERSON BOXILL se encuentra detenido en la Cárcel de La Chorrera a órdenes de esta Agencia del Ministerio Público y a partir de la fecha será puesto a disposición de esa Corporación de Justicia en virtud del mandamiento de habeas corpus.

.....
....."

(Fs. 9-13)

Por su parte, el Licenciado Rodríguez sostiene que la resolución que ordena la detención preventiva de CUTHBERT A. BOXILL no reúne los presupuestos exigidos por el artículo 2159 del Código Judicial, toda vez que los elementos probatorios no son suficientes para aplicar la medida adoptada.

Corresponde examinar este Tribunal de habeas corpus si la medida cautelar de carácter personal atacada cumple con los requisitos que al efecto establecen los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

Según consta en antecedentes, la noche del 28 de enero de 2000, en el Sector de San Miguel, un sujeto armado le disparó al señor Roberto César Flores Pérez, causándole la muerte.

Consta de fojas 96 a 100 el protocolo de necropsia, donde se señala que la causa de muerte fue una herida perforante por proyectil de arma de fuego en el tórax y a foja 102 el certificado de defunción expedidos por la Dirección del Registro Civil, por lo que se comprueba debidamente el hecho punible.

El Pleno observa, de fojas 54 a 57, de 71 a 72 y de 124 a 126 del expediente, las declaraciones juradas debidamente ratificadas y las ampliaciones de la testigo presencial BLEIXIN MERCEDES CALDERON BERMUDES que vinculan a CUTHBERT ANDERSON BOXILL SAMUELS con el hecho punible. En ellas se manifiesta lo siguiente:

> "... de repente tres sujetos que se encontraban en la misma cera (sic) por donde yo iba caminando con mi primo (hoy occiso), de los cuales uno llamó por su apodo de TOTITO, ya que a mi primo le llamaban así, entonces yo me quedé parada y mi primo ROBERTO caminó con dirección hacia donde se encontraban estos tres sujetos, de repente yo escuché una discusión y observe que uno de estos tres sujetos caminó donde la luz de un poste le daba y fue entonces que me dí cuenta que se trataba del apodado FLACO, luego mi primo ROBERTO FLORES le dijo al apodado FLACO "haz lo que tu quieras" y fue entonces que FLACO sacó un arma de fuego por debajo de una sudadera que tenía y empezó a efectuarle tiros a mi primo y luego mi primo cayó al suelo..." (fs.54 a 57)

> "Vi que se suscitó una discusión y solo escuche que cuando ROBERTO FLORES le dice a Flaco haz lo que tu quieras y vi cuando Flaco sacó un arma de fuego oculta debajo de su sudadera y le empieza a disparar a ROBERTO FLORES y lo tomo en mis brazos y le pregunté que pasó, es decir que yo quería saber porque FLACO le había disparado y ROBERTO solo me dijo fue FLACO, posteriormente se quejó y cerró los ojos".(fs.71-72)

Visible a foja 58 de las sumarias se observa la Diligencia de Reconocimiento Fotográfico efectuada por CALDERON BERMUDES en la cual señala que las características físicas de BOXILL SAMUELS coinciden con la persona descrita en su declaración como la que participó del homicidio bajo investigación.

Consta de fojas 65 a 67 la Resolución de 22 de febrero de 2000, mediante la cual la Fiscalía Auxiliar de la República ordena la detención preventiva de CUTHBERT ANDERSON BOXILL por el delito contra la Vida y la Integridad Personal en perjuicio de ROBERTO FLORES.

Por último, se observa en las sumarias la declaración indagatoria rendida por CUTHBERT ANDERSON BOXILL SAMUELS donde niega los cargos formulados en su contra y haber estado presente en el lugar de los hechos.

Una vez efectuado un análisis objetivo de los elementos probatorios allegados al expediente para la comprobación del hecho punible, el Pleno estima que existen indicios suficientes para vincular a ANDERSON BOXILL en el delito que se le imputa. Y dado que el delito de homicidio tiene fijada pena de prisión mínima superior de dos años, considera la Corte que en la detención preventiva decretada no se ha infringido el debido proceso establecido en la Constitución Nacional y en las leyes de la República, ni tampoco las normas jurídicas que regulan la detención preventiva, por lo que lo procedentes es declarar legal la detención.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de CUTHBERT ANDERSON BOXILL SAMUELS y por lo tanto DISPONE que el detenido sea puesto de inmediato a órdenes de la autoridad demandada.

Copiese, Notifiquese y Cúmplase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) ROBERTO GONZALEZ R. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JORGE FABREGA PONCE (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS ANTONIO PANEZO THOMAS CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La señora AMÉRICA ESTHER THOMAS MARTÍNEZ ha interpuesto acción de habeas corpus a favor de LUIS ANTONIO PANEZO THOMAS y contra el Director de la Policía Técnica Judicial.

Acogido el recurso en mención, se libró mandamiento de habeas corpus contra el Director de la Policía Técnica Judicial quien, mediante la nota A.L. 0587-00 de 27 de julio de 2000, informó lo siguiente:

> "1. No es cierto que hemos ordenado la detención del señor LUIS ANTONIO PANEZO THOMAS.
>
> 2. No tiene razón de ser sobre la base del punto anterior.
>
> 3. El prenombrado LUIS ANTONIO PANEZO THOMAS, no se encuentra en nuestras Instalaciones, ya que la Fiscalía Octava de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá y actualmente se encuentra en el Centro Penitenciario La Joya."

Frente a la situación planteada, se deduce que el negocio sometido a consideración en esta oportunidad, la Corte Suprema carece de competencia para conocer del mismo, como quiera que según lo establece el numeral 2 del artículo 2602 del Código Judicial, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, son competentes para conocer de la acción de habeas corpus por actos que procedan de autoridades o funcionarios con mando y jurisdicción en una provincia, lo cual es aplicable a la acción de habeas corpus que se examina, ya que según lo expresa el Director de la Policía Técnica Judicial, el señor LUIS ANTONIO PANEZO THOMAS se encuentra a órdenes de la Fiscalía Octava de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SE INHIBE del conocimiento de la acción de habeas corpus presentada a favor de LUIS ANTONIO PANEZO THOMAS y DECLINA su conocimiento en el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, para que se le de el trámite que la ley establece.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.

(fdo.) ROBERTO GONZÁLEZ R. (fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JORGE FÁBREGA P. (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS DE EYBAR JOSUÉ ALABARCA CONTRA EL JUEZ SEGUNDO DE CIRCUITO PENAL DE COLÓN. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, DOS (2) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado a conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de habeas corpus presentada por el licenciado Javier Antonio Quintero Rivera a favor de Eybar Josué Alabarca, quien se encuentra detenido a órdenes del Juez Segundo del Circuito Penal de Colón. La alzada se dirige contra la sentencia de 30 de junio de 2000, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante la cual se declara legal la privación de libertad impuesta a Alabarca.

ANTECEDENTES DEL CASO

El examen de las constancias procesales permite conocer que Eybar Josué Alabarca fue declarado penalmente responsable por el delito de violación carnal, cometido en perjuicio de la menor Yamileth Trejos y condenado a sufrir la pena de 24 meses de prisión (fs.204-211 de los antecedentes).

De igual manera, se constata que la defensa técnica del sentenciado Eybar Josué Alabarca, presentó solicitud de suspensión de ejecución de la pena, la que fue resuelta por el Juez Segundo del Circuito Penal de Colón mediante resolución de 31 de mayo de 2000, en el sentido de reemplazar la pena de prisión impuesta por 75 días-multa, a razón de 15 balboas el día-multa, lo que totaliza la suma de 1,125 balboas (fs.12-15 del cuaderno de suspensión de la ejecución de la pena). Contra esta decisión jurisdiccional, la Fiscalía Cuarta del Circuito Penal de Colón, anunció recurso de apelación.

DECISION DE LA CORTE

Por anunciado el recurso dentro del término de ley, procede el Pleno de la Corte resolver lo que en derecho corresponda.

Esta Superioridad observa que la censura del recurrente gira en torno a dos puntos específicos: 1) que resulta improcedente presentar un recurso de apelación contra la resolución que reemplaza la pena de prisión, y 2) que en caso de que se acogiera el medio de impugnación, "debe surtirse en el efecto devolutivo" (f.2 del cuaderno de habeas corpus).

Con relación al primer aspecto, la Corte debe adelantar que el auto que decidió la solicitud de suspensión de ejecución de la pena formulado por el abogado de la defensa, puede ser censurado mediante la interposición de un recurso de apelación, tal como lo autoriza el ordinal 2 del artículo 2429 del Código Judicial. Esta disposición legal preceptúa que se da la apelación contra "La resolución que decide o concede la suspensión de la ejecución de la pena". Por consiguiente, resulta correcto el acto procesal de anuncio de recurso de apelación presentado por el funcionario del Ministerio Público.

De otra parte, en cuanto a los efectos del recurso anunciado, la Corte comparte el criterio del Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial,

en el sentido de que los subrogados penales dictados, luego de una sentencia condenatoria ejecutoriada, afectan a ésta y transforman sus consecuencias; por lo que "el recurso de apelación presentado...debe surtirse en cuanto a sus efectos, por aquellos que tienen que ver con la sentencia, esto significa de efecto suspensivo" (fs.16-17 del cuaderno de habeas corpus).

Frente a tales circunstancias, esta Corporación de Justicia concluye que como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por el agente del Ministerio Público, los efectos del auto que reemplaza la pena de prisión impuesta, quedan suspendidos, lo que consecuentemente, conlleva a declarar legal la detención que sufre el procesado Eybar Josué Alabarca.

Por las consideraciones que anteceden, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de 30 de junio de 2000, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, venida en grado de apelación, mediante la cual se declara legal la detención de Eybar Josué Alabarca

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) ROBERTO GONZALEZ
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) JOSE MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) JORGE FABREGA PONCE
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE YAIRCINIO ABDIEL FLETCHER DE LA ESPADA CONTRA LA FISCAL PRIMERA DE CIRCUITO DE COLÓN, APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO GONZÁLEZ. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor SAMUEL MATHEWS presentó a favor de YAIRCINIO FLETCHER DE LA ESPADA acción de Hábeas Corpus y en contra de la Fiscal Primera de Circuito de Colón, la que al ser resuelta por el Segundo Tribunal Superior de Justicia consideró, que la detención era legal, decisión que ha sido apelada por el licenciado GASPAR DE PUY BARRANCO, por lo que entra el Pleno de esta Corporación de Justicia a revisar la actuación atacada.

ANTECEDENTES:

El ciudadano YAIRCINIO ABDIEL FLETCHER DE LA ESPADA se encuentra privado de su libertad desde el pasado 7 de junio del año actual, cuando fue detenido por miembros de la Policía Nacional dentro de un herbazal en el sector de Puerto Real, Puerto Pilón, provincia de Colón.

De acuerdo a las constancias procesales el señor FLETCHER DE LA ESPADA se encuentra procesado por la presunta comisión de delitos Contra el Patrimonio, de los contenidos en el Libro II, Título IV, Capítulo II del Código Penal, (ROBO) en perjuicio de la señora DILCIA MARIELA RODRIGUEZ DE MARIEROSE.

Los hechos que originaron la privación de libertad del imputado guardan relación con el delito de robo cometido en la residencia de la señora RODRIGUEZ DE MARIEROSE, en la que tres sujetos con armas, (dos con armas de fuego y uno con arma blanca) penetraron a su domicilio, amenazaron y golpearon a las personas que se encontraban en la misma, a saber la empleada doméstica de nombre HILDA JUDITH ANDRION, y los trabajadores LUIS ORTIZ y SAUL RODRIGUEZ, pudiéndose apoderar

prendas de oro, dinero en efectivo, un celular, 150 discos compactos y un bolígrafo plateado con el logo de Texaco, entre otros bienes muebles.

Cometido el hecho punible las autoridades policiales fueron informadas de lo sucedido por lo que se emprendió la búsqueda de los antisociales, siendo encontrados dos de ellos en un área boscosa cercana al lugar de los hechos, específicamente entre San Mateo, Puerto Real y Don Bosco, provincia de Colón. Uno de ellos se identificó como YAIRCINIO ABDIEL FLETCHER.

FUNDAMENTO DE LA RESOLUCIÓN APELADA:

El Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante sentencia de 22 de junio de 2000 decretó legal la detención preventiva de YAIRCINIO ABDIEL FLETCHER, por considerar que en su contra militaban pruebas que lo vinculaban de manera directa con el ilícito cometido. Consideró aquél Tribunal Colegiado, que los aspectos objetivo y subjetivo fueron debidamente acreditados por el agente instructor, por lo que procedía decretar la privación de libertad ambulatoria del inculpado.

Indicó el Segundo Tribunal Superior de Justicia que el imputado FLETCHER fue encontrado en posesión del bolígrafo plateado con el logo de Texaco, descrito por la denunciate y ofendida como sustraído por las personas que se introdujeron a su vivienda.

Así a foja 14 del cuadernillo, el Segundo Tribunal Superior de Justicia señaló lo siguiente:

> "SEXTO: Ahora bien, esta Colegiatura al estudiar los testimonios de Isabel Ayala, Saúl Rodríguez, Luis Ortíz y (sic) Hilda Andrión, las declaraciones de los agentes del orden público, los informes de novedad y la resolución de 7 de junio de 2000, expedida por la señora Fiscal, concluye que la detención preventiva impuesta por autoridad competente, mediante resolución motivada, por un hecho punible tipificado en la ley Penal y, sancionado con pena de prisión mayor a los dos años, es decir, por un posible delito de Robo.
>
> PARTE RESOLUTIVA
>
> Por todo lo expuesto, el SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DECLARA LEGAL, la detención preventiva aplicada a Yaircinio Abdiel Fletcher de La Espada, sindicado por un delito Contra El Patrimonio, según denuncia suscrita por Dilcia Rodríguez."

CONSIDERACIONES DEL RECURRENTE:

El licenciado DE PUY BARRANCO se encuentra disconforme con la decisión proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia en base a las siguientes consideraciones. Veamos:

> "PRIMERO: No existe prueba elemental ni contundente para incriminar al joven YAIRCINIO FLETCHER DE LA ESPADA, con el supuesto delito de robo en la residencia ubicado (sic) en la provincia de Colón, en el corregimiento de Puerto Pilón, como dice el análisis de la sentencia proferida por el Tribunal Superior que dice que uno de los policía (sic) en su ampliación de aclaración señalan a YAIRCINIO FLETCHER DE LA ESPADA, a fojas 4849 (sic), cuando en realidad en dichas fojas reposa la orden de detención preventiva dictada por la fiscalía Primera del Circuito de Colón.
>
> SEGUNDO: El fiscal cuarto (sic) del Circuito de Colón Licenciado Cambell (sic), al recibir el expediente en regla de reparto de turno de parte de la Fiscalía Primera del Circuito de Colón, quienes realizaron la resolución que decreta de detención preventiva de

> YAIRCINIO FLETCHER DE LA ESPADA, y otro a fojas 4849 (sic), la Fiscalía Cuarta no realizó ningún tipo de resolución en la cual como en este caso (sic) autoridad competente que lleva la sumaria alguna orden en la cual se mantiene la detención preventiva de YAIRCINIO FLETCHER DE LA ESPADA"

El recurrente solicita, que esta Corporación de Justicia revoque la decisión proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia y, en su defecto declare, ilegal la privación de libertad proferida contra su representado.

CONSIDERACIONES DEL PLENO:

Analizado el cuadernillo de Hábeas Corpus, así como las copias debidamente autenticadas del sumario, observa el Pleno que la orden de privación de libertad proferida en contra de YAIRCINIO FLETCHER DE LA ESPADA por parte de la Fiscal Primera del Circuito de Colón se ajusta a derecho.

Esta acción constitucional, como lo ha indicado esta Corporación de Justicia, en reiteradas oportunidades, tiene por naturaleza salvaguardar la integridad física y la libertad corporal de todo individuo que es detenido fuera de los casos y la forma que prescriben la Constitución y la ley, utilizando para ello los parámetros contenidos en los artículos 21, 22 y 23 de la Carta Constitucional, así como las normas procesales penales contenidas en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

Siendo ello así, a foja 48 - 49 del sumario se acredita la providencia proferida por la Fiscalía Primera del Circuito de Colón en la que expresa de manera razonada los motivos y fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la detención preventiva de YAIRCINIO FLETCHER.

El agente instructor plasmó de una manera clara y precisa las pruebas que acreditan la existencia del hecho punible, así como las pruebas de vinculación que tiene el procesado con el ilícito. Por otro lado, FLETCHER DE LA ESPADA se encuentra sindicado por un delito cuya una pena mínima sobrepasa los dos años de prisión, razón por la cual no se constatan vicios de ilegalidad en la referida resolución judicial.

En otro orden de ideas el Pleno no comparte las aseveraciones formuladas por el recurrente al indicar, que no existe prueba elemental ni contundente para incriminar a FLETCHER DE LA ESPADA con el robo cometido en la residencia de la señora DILCIA MARIELA RODRIGUEZ DE MARIEROSE, puesto que constan los informes elaborados y ratificados por los agentes captores (Fojas 33-37, 44-45, 56 -57), aunado al hecho que el procesado fue encontrado en posesión de uno de los bienes denunciados como robado (bolígrafo con el logo de Texaco). Ver folio 34.

Con relación al segundo señalamiento que formula el recurrente, en el sentido que el Fiscal Cuarto del Circuito de Colón al recibir el sumario no profirió la resolución que mantiene la detención preventiva da YAIRCINIO FLETCHER DE LA ESPADA, el Pleno indica que, el artículo 2059 del Código Judicial ordena declarar abierta la investigación y la practica de la actividad procesal que consigna la ley, por lo que es claro que dentro de la actividad procesal que ordena la ley se encuentra lo relativo a la adopción de medidas cautelares de carácter personal por parte del funcionario instructor, entre las que se encuentra la detención preventiva.

La providencia a la que se refiere el artículo 2059 del Código Judicial reposa a foja 67 del sumario, y la referida norma procesal no determina que la ausencia de la providencia que mantiene la detención preventiva, por parte del Fiscal Cuarto del Circuito de Colón contravenga lo dispuesto en las normas constitucionales y legales que regulan la detención preventiva, toda vez que a fojas 48 y 49 del sumario, el agente instructor cumplió con las formalidades constitucionales y legales para decretar la privación de libertad del procesado, ajustándose a derecho la referida resolución.

En consecuencia, procede preservar el criterio proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia y mantener la detención preventiva de YAIRCINIO ABDIEL FLETCHER DE LA ESPADA.

PARTE RESOLUTIVA:

Por lo que antecede, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución de 22 de junio de 2000, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia y censurado por el abogado GASPAR DE PUY BARRANCO, defensor técnico del imputado YAIRCINIO ABDIEL FLETCHER DE LA ESPADA.

Notifiquese.

(fdo.) ROBERTO GONZÁLEZ R.
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) JORGE FÁBREGA PONCE
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ ANDRÉS TROYANO (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE NICOLÁS BONILLA BOLAÑOS CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El doctor José Rigoberto Acevedo ha interpuesto acción de habeas corpus a favor de NICOLÁS BONILLA BOLAÑOS y contra el Fiscal Auxiliar de la República.

Mediante auto dictado el 27 de julio de 2000 se libró el mandamiento de habeas corpus y se le requirió al funcionario demandado que, en el término de la Ley, rindiera un informe sobre las causas de la detención del señor NICOLÁS BONILLA BOLAÑOS.

El funcionario demandado contestó el mandamiento de habeas corpus librado, mediante Oficio N° 9294 fechado 27 de julio del presente año, y manifestó que el señor BONILLA BOLAÑOS se encontraba a órdenes de la Dirección Nacional de Migración y Naturalización del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Se libró nuevamente mandamiento de habeas corpus, esta vez contra Director Nacional de Migración y Naturalización el 31 de julio de 2000, no obstante, el doctor Rigoberto Acevedo desistió de la acción de hábeas corpus promovida mediante escrito presentado el día 1 de agosto de 2000 en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.

Como quiera que toda persona que haya entablado una demanda, promovido un incidente o interpuesto un recurso, puede desistir expresa o tácitamente conforme lo establece el primer párrafo del artículo 1073 del Código Judicial, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia considera que debe acogerse al desistimiento presentado.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO presentado por el doctor Rigoberto Acevedo dentro de la acción de habeas corpus promovida a favor de NICOLÁS BONILLA BOLAÑOS contra el Fiscal Auxiliar de la República y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JORGE FÁBREGA P. (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) ROBERTO GONZÁLEZ R.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES R.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE LU (USUAL) LI KAM LUN KIN LUN CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Dicky Reynolds O'Riley ha interpuesto acción de habeas corpus a favor de LI KAM LUN JIN LUN y contra el Director Nacional de Migración.

Mediante auto dictado el 31 de julio de 2000 se libró el mandamiento de habeas corpus y se le requirió al funcionario demandado que, en el término de la Ley, rindiera un informe sobre las causas de la detención del señor LI KAM LUN JIN LUN.

Posteriormente, el día 2 de agosto de 2000 el licenciado Aldo Ayala, debidamente autorizado por el poder que le fue otorgado (f. 7 del cuadernillo de hábeas corpus), desistió de la acción de habeas corpus promovida, mediante escrito presentado en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.

Como quiera que toda persona que haya entablado una demanda, promovido un incidente o interpuesto un recurso, puede desistir expresa o tácitamente conforme lo establece el primer párrafo del artículo 1073 del Código Judicial, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia considera que debe acogerse al desistimiento presentado.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO presentado por el licenciado Aldo Ayala dentro de la acción de habeas corpus promovida a favor de LI KAM LUN JIN LUN contra el Director Nacional de Migración y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JORGE FÁBREGA P. (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) ROBERTO GONZÁLEZ R.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES R.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALFREDO VICENTE LAMMIE GRAHAM CONTRA EL FISCAL SEGUNDO SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRES (3) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado César Guardia González ha interpuesto acción de habeas corpus a favor de ALFREDO VICENTE LAMMIE GRAHAM y contra el Fiscal Segundo Superior del Tercer Distrito Judicial.

Acogido el recurso, se libró mandamiento de habeas corpus contra el Fiscal Segundo Superior del Tercer Distrito Judicial quien, por medio del oficio de 11 de julio de 2000, informó lo siguiente:

> "A) La detención del recurrente la ordenó este Despacho mediante Providencia del 18 de octubre de 1999, que rola a fojas 136-139;
>
> B) Los fundamentos de hecho y de derecho que mantuvo esta Agencia de Instrucción para ordenar la detención preventiva aparecen en la providencia antes descrita;
>
> C) Actualmente el sindicado ALFREDO VICENTE LAMMIE GRAHAM, se encuentra bajo custodia del Sistema Penitenciario de David y está recluido en la Sala de Aislamiento del Hospital Regional, Rafael Hernández desde el día 3 de diciembre de 1999 hasta el 20 de febrero de 2000, ingresando nuevamente el 28 de febrero de 2000 hasta la fecha, a órdenes de este Despacho; y desde este momento será puesto a órdenes de la Honorable Corte Suprema de Justicia.
>
> Sin lugar a dudas, nos encontramos frente a un caso de notable gravedad y trascendencia. El día 13 de octubre de 1999, en horas del medio día falleció en la Clínica particular de ALFREDO VICENTE LAMMIE GRAHAM la joven señora YESSENIA LISBETH GOMEZ DE GRACIA. El protocolo de necropsia determinó como causa de muerte: Muerte por Inhibición, Manipulación de Genitales y Aborto Provocado. Todas las evidencias, incluyendo la muerte de esta persona en la Clínica de ALFREDO LAMMIE, Ubican al recurrente como el único responsable de esta muerte, no está de más, señalar que el día de los hechos por todos los medios el imputado trató de evitar la acción de la justicia penal recabando y confeccionando un certificado de defunción, comprando el ataúd, contratando el transporte para llevar el cadáver a Puerto Armuelles, Distrito de Barú en horas de la noche y consiguiendo los servicios de un sacerdote que acudió a su Clínica privada donde permaneció el cadáver por más de ocho horas.
>
> Finalmente , nos llama poderosamente la atención el hecho de que el imputado ALFREDO LAMMIE se encuentre hospitalizado desde el 28 de febrero de este año, cosa que llegó a nuestro conocimiento de manera casual hace unos días cuando fue requerido para la práctica de una diligencia judicial, en la que se ha negado en abierta rebeldía al sistema de Administración de Justicia.
>
> En la actualidad sólo queda confeccionar la ficha de identificación de este detenido para que el expediente sea sometido a la consideración del Tribunal Superior para su correspondiente mérito legal." (fs.9-11)

Por su parte, el licenciado Guardia sostiene que la detención preventiva de la cual es objeto el señor ALFREDO VICENTE LAMMIE GRAHAM es ilegal, toda vez que se ha demostrado fehacientemente que la hoy occisa JESSENIA LISBETH GOMEZ DE GRACIA no estaba embarazada, por lo que no se le puede seguir imputando el delito de aborto provocado con resultado de muerte.

El Pleno observa de fojas 136 a 139 de las sumarias la providencia de 18 de octubre de 1999, dictada por la Fiscalía Superior Especial, mediante la cual se decreta la detención preventiva de ALFREDO VICENTE LAMMIE GRAHAM "por los delitos CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL (HOMICIDIO Y ABORTO), en

perjuicio de YESSENIA LISBETH GOMEZ DE GRACIA".

El presente proceso se inicia a raíz de una llamada telefónica en la que se informó que en la clínica del doctor Alfredo Lammie, ubicada en la calle sexta de la ciudad de David, había fallecido una mujer, por lo que se efectuó la diligencia de inspección ocular, reconocimiento y levantamiento de cadáver en dicha clínica, en la que se encontró en un vagón "pick-up" de color blanco, marca Hyunday, un ataúd de madera color barniz, el cual estaba cerrado y que al proceder a abrirlo se encontró el cuerpo de una persona sin vida cubierta con una sábana de color rosado con diseños de Mickey Mouse. Al momento de practicar dicha diligencia se encontraba el señor Hermenegildo Lezcano Gómez quien dice ser el marido de la occisa la cual respondía la nombre de Jessenia Lizbeth Gómez.

El Pleno observa de fojas 35 a 39 y de 101 a 108 de las sumarias de la declaración jurada rendida por Lorena Isabel González, en la que manifiesta que acompañó a su amiga Jessenia Lisbeth Gómez De Gracia al consultorio del doctor Lammie. Señala que minutos después de que ésta ingresara a dicho consultorio, el doctor Lammie le informó que la misma había muerto porque le había suministrado un medicamento al que posiblemente era alérgica y que le ocasionó un "shock". Agrega que el doctor Lammie le pidió el teléfono del esposo de la señora Gómez para comunicarle lo sucedido y que también compró un ataúd para transportar a la occisa hacia Puerto Armuelles. Al ampliar su declaración (fs. 118 a 123) indica que con anterioridad el doctor Lammie le había practicado un aborto, por lo que cuando la señora Gómez le comentó que estaba embarazada y que no quería tener a la criatura porque no era de su esposo, le suministró el número telefónico del doctor Lammie para que la ayudase. También manifiesta que el día de los hechos, alrededor de la una y quince de la tarde llegó un taxista y el doctor Lammie salió con una sábana celeste envuelta, la cual se la entregó al taxista quien se retiró con la misma y regresó minutos después a buscar al doctor. Agrega que éste a su vez le dijo que iba a buscar el acta de defunción, la cual procedió a llenar una vez que llegó al consultorio y en la que hacía constar que la inyección que le puso, le había provocado un "shock" el cual le habia ocasionado la muerte.

Observa la Corte la declaración declaratoria rendida por Aníbal Martínez Franco (fs.85-90), en la que señala que el doctor Lammie le solicitó que transportara un cadáver a Puerto Armuelles. Agrega que salió con el doctor a una funeraria a comprar un ataúd y que al llegar a la clínica éste le pidió que lo ayudara a meter el cuerpo al ataúd, pero que cuando iban a subir el ataúd a su "pick-up" llegó la policía y la personera municipal. En la ampliación de la declaración jurada (fs.112-116) el señor Martínez indicó que el doctor Lammie le entregó una sábana de color celeste doblada y que presume que tenía algo porque se sentía un poco pesada cuando lo llevó a medicatura forense y lo dejó en la clínica. Añade que al día siguiente fue a la casa del doctor Lammie a devolverle las sábanas.

A fojas 226 reposa un resultado de pruebas de embarazo de sangre efectuadas por el Grupo en Formación en Cooperativa de Salud de Puerto Armuelles con fecha de 9 de octubre de 1999 y practicada a Jessenia Gómez, la cual arrojó resultados positivos. De igual forma a foja 227 consta otra prueba de embarazo en orina que le fue efectuada el mismo día y por la misma institución y la cual dio resultados negativos.

Reposa de foja 318 a 337 la declaración indagatoria rendida por Alfredo Vicente Lammie Graham en la que manifiesta que a las once y treinta de la mañana (11:30 a. m.) del día 13 de octubre de 1999, llegaron a su consultorio dos mujeres desconocidas y una de ellas decía que tenía un dolor en el abdomen. Agrega que la condujo al cuarto de examen y la acostó en la camilla para realizarle los exámenes físicos y ante el dolor que manifestaba procedió a administrarle vía intravenosa valium que es un tranquilizante y dolofor que es un analgésico, pero que al quitarle la jeringuilla notó que a la paciente le faltaba el aire e hizo enseguida un paro respiratorio y cardiaco, por lo que procedió a aplicarle adrenalina y maniobras de resucitación con masaje cardiaco externo y respiración boca a boca, siendo fallida la maniobra. También señala que

nunca tuvo comunicación con Yessenia Gómez, que al momento de su fallecimiento no llamó al Ministerio Público porque desconocía el procedimiento. Agrega que no le dio nada envuelto en una sábana al taxista, sino un accesorio de computadora envuelta en una tela para protegerlo.

A foja 60 de las sumarias reposa el acta de defunción de Jessenia Lisbeth Gómez De Gracia, suscrita por el doctor Alfredo Lammie, en la que se certifica que dicha señora murió el 13 de octubre de 1999 por un "shock" medicamentoso.

De fojas 424 a 428 de las sumarias la declaración jurada rendida por Siomar Abdiel Morales Atencio quien señala que su cuñada Jessenia Gómez le dijo el día 12 de octubre de 1999 que se había hecho dos exámenes de embarazo y que uno le salió positivo y el otro negativo, que tenía dos meses de embarazo y que iba viajar al día siguiente con su amiga Lorena a David para practicarse un aborto.

El Pleno advierte de fojas 802 a 809 de las sumarias el protocolo de necropsia No.99-234 efectuado por el Instituto de Medicina Legal de la Dirección Regional de Chiriquí-Bocas del Toro en el que se establece como las causas de muerte de la señora Jessenia Gómez muerte por inhibición, manipulación de genitales, reflejo vagal y aborto provocado. También señala el dicho protocolo que la prueba de embarazo resultó negativa y que los hallazgos encontrados en la autopsia y los resultados de laboratorio, descartan al "shock" anafiláctico como posible causa de muerte.

Consta a foja 814 de las sumarias el certificado de defunción suscrito por la doctora Silvia de Bandel, médico forense auxiliar del Instituto de Medicina Legal de David, en el que certifica que las causas de muerte de la señora Yessenia Lisbeth Gómez de Gracia son muerte por inhibición, manipulación de genitales, reflejo vagal y aborto provocado

Una vez efectuado un análisis exhaustivo del expediente, el Pleno concluye que el protocolo de necropsia No.99-234 efectuado por el Instituto de Medicina Legal de la Dirección Regional de Chiriquí-Bocas del Toro, las declaraciones juradas de Lorena Isabel González, Aníbal Martínez Franco y Siomar Abdiel Morales Atencio constituyen indicios suficientes que vinculan al señor ALFREDO VICENTE LAMMIE GRAHAM con los hechos que se le imputan. Lo anterior, aunado al hecho de que el delito de aborto provocado en el que sobreviene la muerte de la mujer tiene señalado pena mínima de prisión superior a los dos años, justifica la detención preventiva decretada por la Fiscalía Segunda Superior del Tercer Distrito Judicial por cuanto el artículo 2148 del Código Judicial es claro al señalar que la misma sólo procede por delitos que tengan señalada pena mínima de dos años de prisión, o cuando el autor o partícipe ha sido sorprendido en flagrante delito.

En razón de lo anterior, considera la Corte que en la detención preventiva del señor ALFREDO VICENTE LAMMIE GRAHAM no se ha infringido el debido proceso establecido en la Constitución Nacional y en las leyes de la República, ni tampoco las normas jurídicas que regulan la detención preventiva, por lo que lo procedente es declarar legal la detención.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor ALFREDO VICENTE LAMMIE GRAHAM y, por lo tanto, DISPONE que el detenido sea puesto de inmediato a órdenes de la FISCALIA SEGUNDA SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL.

Notifiquese y Cumplase

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CESAR PERERIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) ROBERTO E. GONZALEZ R. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE BLADIMIR LEAL ALVARADO CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, TRES (3) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de acción constitucional de habeas corpus presentada por el licenciado Danilo Montenegro, en favor de Bladimir Leal Alvarado y contra el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

El mandamiento de habeas corpus fue atendido por el Magistrado Joaquín Ortega, quien pone de manifiesto que la detención preventiva de Bladimir Leal Alvarado fue ordenada por el funcionario del Ministerio Público durante la etapa de instrucción sumarial y que a la fecha "se encuentra a órdenes de este Tribunal jurisdiccional, porque así lo dispuso la Fiscalía Segunda Superior del Primer Distrito Judicial, por habernos remitido el sumario para la valoración legal correspondiente" (f.16).

Procede la Corte a examinar si la medida restrictiva de la libertad que sufre Bladimir Leal Alvarado cumple con los requisitos consagrados en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, en concordancia con el artículo 21 de la Constitución Nacional.

A esos efectos, se comprueba que el hecho punible que se le atribuye al sumariado Leal Alvarado y por el cual ha sido llamado a juicio, es el de homicidio en grado de tentativa, cometido en perjuicio de Venancio Justavino Ramos (f.9 del cuaderno de habeas corpus). Ha sido una posición invariable de esta Corporación de Justicia, declarar ilegal la medida cautelar de detención preventiva cuando el comportamiento delictivo endilgado es el de homicidio en grado de tentativa, pues la sanción penal asignada a este delito no cumple con el requisito legal previsto en el artículo 2148 del Código Judicial, concerniente a que el ilícito tenga aparejada pena mínima de dos años de prisión. Esta postura surge del criterio de que si se toma en cuenta la penalidad del delito de homicidio (5 a 12 años de prisión) y se adecúa al texto del artículo 60 del Código Penal que reprime la tentativa con pena no menor de un tercio del mínimo; el intervalo penal mínimo para este delito resulta en 20 meses de prisión, es decir, 1 año y 8 meses (Cfr. Registro Judicial, mayo de 1996, pág.67 y Registro Judicial, febrero de 1998, pág.77).

No obstante este reconocimiento, no puede escapar a la ponderación de esta Superioridad dos circunstancias especiales, que justifican la aplicación de la medida cautelar personal acusada de ilegal. En primer término, del estudio de las constancias procesales surge la condición de peligrosidad de Bladimir Leal Alvarado, quien puede cometer delitos graves mediante el uso de armas u otros medios de violencia personal. Tal afirmación encuentra respaldo en el informe de investigación suscrito por agentes de la Policía Técnica Judicial, el que pone de manifiesto que Bladimir Leal Alvarado "vive en la esquina de la Abarrotería y que en esa casa se esconden todos los delincuentes de la ciudad, cuando cometen algún tipo de delito...que...pertenece a una Banda del área de San Miguel"; y que los residentes del área no brindaron mayor información "ya que alegan que esas personas son muy peligrosas y pueden tomar represalias contra ellos" (f.18 de las sumarias). Como se deduce de lo plasmado en este informe, la condición de peligrosidad de Bladimir Leal Alvarado emerge del hecho de pertenecer a una banda criminal que se dedica a cometer actos ilícitos y que tiene atemorizados a los residentes del vecindario.

En segundo lugar, se debe tomar en cuenta que Bladimir Leal Alvarado ha sido encausado criminalmente por el delito de homicidio en grado de tentativa, cometido en perjuicio de Venancio Justavino Ramos, mediante auto de 22 de diciembre de 1999, proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia; situación que trae consigo la inevitable posibilidad de que, en caso que se le otorgue la libertad, pueda ponerse fuera del alcance de las autoridades y evadir el cumplimiento de la sanción penal que eventualmente se le impondría.

En síntesis, la peligrosidad del imputado y la posibilidad de que se ausente en el juicio oral, constituyen circunstancias que justifican mantener la medida cautelar personal de detención preventiva aplicada a Bladimir Leal Alvarado, a los efectos de preservar la defensa social y evitar que el proceso penal se torne ilusorio, lo cual causaría graves perjuicios a la correcta administración de Justicia.

Por lo antes expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la orden de detención decretada contra Bladimir Leal Alvarado y ORDENA que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes del Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) ROBERTO GONZALEZ
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MIGUEL A. LEDEZMA CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TRES (3) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Manuel Cedeño, interpuso acción de habeas corpus a favor de Miguel A. Ledezma y contra la Fiscal Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

El apoderado del señor Ledezma señaló que su representado se encuentra detenido ilegalmente por la supuesta comisión del delito de posesión agravada de drogas y desde el 18 de febrero de 2000 permanece recluido en el Centro Penitenciario La Joya por orden de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, mantenida por el Juzgado Segundo de San Miguelito. En su escrito solicitó a este máximo tribunal, que en atención al artículo 23 de la Constitución Nacional, decrete la ilegalidad de la detención del señor Ledezma, en virtud que la misma desconoce preceptos constitucionales y legales (fs. 1 a 4).

Acogida la presente acción se libró el mandamiento de habeas corpus contra la funcionaria demandada. La licenciada Tulia Pardo, Fiscal encargada, rindió su informe mediante Oficio N° FD2-T09-2944-00 de 17 de julio de 2000, en los siguientes términos:

> "Se nos ha corrido traslado de la Acción de Habeas Corpus, interpuesta por el Licenciado MANUEL S. CEDEÑO, en favor del señor MIGUEL A. LEDEZMA y en contra del suscrito.

Tengo a bien informar al Honorable Magistrado, que las sumarias seguidas contra MIGUEL LEDEZMA, a la fecha se encuentra radicado en el Juzgado Segundo de Circuito, Ramo Penal." (f. 7)

El detenido dirigió su escrito de habeas corpus contra la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas por haber dictado la orden de detención e indicó que esta medida había sido mantenida por el Juzgado Segundo del Segundo Circuito Judicial de Panamá.

Como el detenido está a órdenes del Juzgado de Circuito mencionado, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia carece de competencia para conocer del presente habeas corpus y procede declinar su conocimiento al Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, de conformidad con los artículos 2602, numeral 2 y 2588 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA el conocimiento de la acción de habeas corpus interpuesto por el licenciado Manuel Cedeño, a favor de MIGUEL A. LEDEZMA, en el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Notifíquese

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) ROBERTO GONZÁLEZ R. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE SAUL ANTONIO APARICIO DEL ROSARIO CONTRA DEL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Víctor Manuel Caicedo, ha interpuesto acción de habeas corpus a favor SAUL ANTONIO APARICIO DEL ROSARIO, contra el Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, por considerar que la detención que ha sufrido el precitado es ilegal.

Acogida la acción, se libró el mandamiento de Habeas Corpus respectivo mediante providencia de 14 de julio de 2000, el cual fue contestado por el Fiscal Primero Especializados en Delitos con Drogas, mediante el Oficio FD-3052-00 de 17 de julio de 2000.

En momentos en que circulaba el proyecto de resolución judicial preparado por el Magistrado Sustanciador que resolvía la acción de habeas corpus, el licenciado Víctor Caicedo presentó escrito de desistimiento calendado 3 de agosto de 2000 ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.

Como quiera que "toda persona que haya entablado una demanda, promovido un incidente o interpuesto un recurso, puede desistir expresa o tácitamente" conforme lo establece el primer párrafo del artículo 1073 del Código Judicial, esta Superioridad considera que debe acogerse el desistimiento presentado.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO de la acción

de Habeas Corpus, presentado por el licenciado Víctor Caicedo.

Notifiquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) ROBERTO GONZALEZ R. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE SIEGRID MCKEE Y SHEILA MCKEE CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIAZADO EN DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado José Ramiro Fonseca, ha presentado acción de habeas corpus a favor de Sheila Mckee y Siegrid Mckee y contra el Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Señala el activador procesal que las detenidas Sheila Mckee se encuentra en estado de gestación y Siegrid Mckee tiene setenta (70) años de edad (f. 1 cuaderno de habeas corpus).

Agrega que "...resulta probado en autos el estado de preñez de la demandada y a pesar de ello, el Fiscal demandado la mantiene en cautiverio, pese a que existen múltiples fallos dictados por esa Corporación de justicia, en virtud de los cuales se han declarado ilegales las detenciones de mujeres embarazadas..."(Cfr. f. 2 cuaderno de habeas corpus).

Finalmente, solicita que se declaren ilegales las detenciones de las prenombradas dada las circunstancias señalas en el artículo 2147-D del Código Judicial (f. 3 cuaderno de habeas corpus).

Por admitida la presente acción constitucional se libro el correspondiente mandamiento de habeas corpus el cual fue contestado por la autoridad demandada mediante oficio No.FD1-T15-2829-2000 del 17 de junio del año en curso el cual señala que ordenó la detención preventiva de Sheila Mckee y Siegrid Mckee por medio de resolución calendada 15 de mayo del 2000 (vid. f. 6 cuaderno de antecedentes).

Señala la autoridad demandada que, el 14 de mayo del 2000 cuando iban saliendo en el vuelo de Lacsa, entre otros las encartadas fueron retenidas, "...toda vez que se les detectó adheridos a su cuerpo en unos panty faja unos paquetes que al realizarse la prueba de campo resultaron positivos para la determinación de cocaína..."(Cfr. f. 6 cuaderno de habeas corpus).

Agrega que si bien es cierto las imputadas Sheila Mckee se encuentra en estado de gravidez y Siegrid Mckee cuenta con setenta (70) años de edad, "...las mismas no residen en nuestro territorio y aún no contamos con sus deposiciones; amen de que debe tomarse en cuenta la cantidad de sustancia ilícita que las mismas tenían consigo y que la señora SHEILA no muestra problemas en su embarazo, lo que constituye exigencias de excepcional relevancia..."(Cfr. f. 7 cuaderno de habeas corpus).

DECISION DE LA CORTE

Procede la Corte Suprema, a determinar si la medida restrictiva de libertad personal impuesta a Sheila Mckee y Siegrid Mckee, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 2159 del Código Judicial y el artículo 21 de la Constitución Política Nacional.

En primer lugar se observa que nos encontramos frente a un delito "CONTRA LA SALUD PUBLICA" el cual tiene aparejada pena mínima superior a los dos años.

En cuanto a los elementos probatorios allegados para la comprobación del hecho punible, consta la diligencia de prueba de campo (vid. f. 43 y 45 antecedentes) y el informe del Laboratorio Técnico Especializado en Drogas el cual señala que las evidencias encontradas a Sheila A. Mckee de nacionalidad estadounidense "...dos (2) paquetes forrados con cinta adhesiva y conteniendo polvo blanco resultaron positivos para la determinación de COCAINA, en la cantidad de 2,910.34 gramos (Cfr. f. 243 antecedentes).

En cuanto al análisis realizado a la evidencia encontrada a Siegrid Ursula Lotte (Siegrid Mckee) de nacionalidad alemana revelan que "...tres paquetes de regular tamaño, conteniendo polvo blanco resultaron positivos para la determinación de COCAINA...con un peso equivalente a 3,324.64 gramos..."(Cfr. f. 257).

En las sumarias constan como elemento de prueba contra las sindicadas el hecho de que fueran retenidas cuando intentaban abordar el vuelo de Lacsa, con destino a Costa Rica, a las mismas se les encontró las evidencias señaladas en el panty faja, los cuales se disponían a sacar del país (Cfr. fs. 43-45 cuaderno de antecedentes).

Ahora bien en el caso sub júdice, la Corte debe pronunciarse en relación al estado de gravidez de la imputada y al estado avanzado de la edad de Siegrid Mckee, contemplados en el artículo 2147-D el cual es del tenor siguiente:

> Artículo 2147-D: ...
> Salvo que existan exigencias cautelares de excepcional relevancia, no se decretará la detención preventiva cuando la persona imputada sea una mujer embarazada, o que amamante a su propia prole, o una persona que se encuentre en grave estado de salud o que haya cumplido los sesenta y cinco años de edad..."(Subraya la Corte).

Observa la Corte que, si bien es cierto la norma en comento establece como casos excepcionales la necesidad de otorgar otra medida cautelar distinta a la detención preventiva en el caso de mujer embarazada y de personas que haya cumplido sesenta y cinco años de edad, es clara al establecer "...salvo que existan exigencias cautelares de especial relevancia...", por lo que en el presente caso las encartadas son extranjeras, las cuales no tienen acreditado domicilio en el país, no cuentan con un trabajo a fin de sufragar las necesidades básicas de alimentación y vivienda, por lo que si se les otorga otra medida cautelar distinta de la detención preventiva estaríamos desprotegiendo al "nasciturus", al no brindarsele el adecuado tratamiento médico y alimenticio que necesita una madre en estado de gestación, para garantizar el normal crecimiento y desarrollo del mismo en el seno de la madre.

El Código Civil en su artículo 43 y el Código Penal en su artículo 73, prevén mecanismos de sustitución de la pena, esta no se aplica en el presente caso y de darla estaríamos afectando las mismas, dada la condición de extranjeras, las cuales no cuentan con familiares ni residencia en nuestro país.

En ese sentido, el Centro Femenino de Rehabilitación deberá tomar las medidas necesarias a fin de garantizar la permanencia de las sumariadas en un adecuado ambiente que le brinde seguridad, alimentación y atención médica.

Por otra parte, tal y como señala la Fiscalía las sumariadas no han sido indagadas lo que obstaculizaría el desenvolvimiento de las investigaciones (f.

7 cuaderno de habeas corpus), toda vez que en el presente caso se trata de una investigación, que involucra a varios extranjeros en el ilícito (Cfr. f. 96 cuaderno de antecedentes).

Por otro lado, la Corte en Sentencia de habeas corpus del 29 de mayo de 2000, refiriéndose a ciudadanos extranjeros que no tengan acreditado domicilio en nuestro país, señaló que:

> "... En ese orden de ideas, debe tomarse en consideración lo dispuesto por el artículo 2147-C del Código Judicial, que abre expresamente la posibilidad de mantener una medida cautelar de carácter personal como lo es la detención preventiva, habida cuenta de la concurrencia de circunstancias especiales que en este caso ponen en evidencia la peligrosidad de que los imputados intenten por cualquier medio eludir la justicia panameña ..."(Subraya la Corte).

En las actuales circunstancias resulta cónsono con los intereses de la justicia mantener la medida cautelar impuesta a fin de salvaguardar los intereses de la sociedad en virtud del principio favor societatis.

Como quiera que, la orden de detención fue proferida por autoridad competente, mediante orden escrita y cumple con los requisitos establecidos por la Constitución Nacional y la ley procede la Corte a decretar su legalidad.

Por las razones anteriores la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL, la orden de detención impuesta a Sheila Mckee y Siegrid Mckee, y en consecuencia ORDENA que las detenidas sean puestas nuevamente a ordenes de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CESAR A. PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) ROBERTO GONZALEZ R.
(fdo.) ROGELIO A. FABRAGA ZARAK (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRACESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE AROSEMENA STANZIOLA MARTINEZ CONTRA FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada TERESA IBAÑEZ ha interpuesto acción de habeas corpus a favor de AROSEMENA STANZIOLA MARTINEZ contra el Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Librado el mandamiento exigido por la ley, el funcionario acusado mediante oficio No.FD2-T25-2194-2000 de 31 de mayo de 2000 sostiene lo siguiente:

> "PRIMERO: Esta Agencia del Ministerio Público, mediante resolución calendada 13 de abril del 2000 y consultable a fojas 24-27 del infolio, ordenó, entre otras cosas, la detención preventiva del señor AROSEMENA STANZIOLA MARTINEZ.
>
> SEGUNDO: En cuanto a los motivos o fundamentos de hecho, tenemos que

se realizó una diligencia de allanamiento en la residencia número 91, ubicada en el Sector 5 de Roberto Durán, La Paz, en la cual se logró el hallazgo de sustancia ilícita, dinero en efectivo y la retención de AROSEMENA STANZIOLA MARTINEZ y CLAUDIA VALENCIA MERCADO.

La diligencia, in comento, se realizó por posible tenencia de armas de fuego y sustancia ilícita.

Consta en autos, que en el cuarto habitado por el señor AROSEMENA STANZIOLA MARTINEZ, se encontró entre otras cosas, un arma de fuego sin permiso, sustancia ilícita y al mismo se le encontró dinero en efectivo. (F.8-9).

Reposa a fojas 12 del dossier, una diligencia de prueba de campo que resultó positiva para la determinación de piedra, marihuana y cocaína.

Se aprecia a fojas 19 del sumario, una vista fotográfica de parte de la evidencia encontrada en la casa allanada.
Al ser sometido a los rigores de la indagatoria, el señor AROSEMENA STANZIOLA MARTINEZ se acogió al derecho que le concede el artículo 22 de la Constitución Nacional.

Ahora bien, tenemos que nos encontramos frente a la comisión de un delito contra la Salud Pública Relacionado con Drogas, ya que contamos con una prueba de campo que resultó positiva, mas no así con la certificación del Laboratorio Técnico Especializado en Drogas de la Policía Técnica Judicial de Panamá dado lo incipiente de la investigación y en cuanto al señor AROSEMENA STANZIOLA MARTINEZ, pesa en su contra el hecho de que la sustancia perniciosa fue encontrada en el cuarto que habita y que se le encontró dinero fraccionado.

En cuanto a las razones de derecho, tenemos que la conducta investigada conlleva una pena mínima que sobrepasa los dos años de prisión por lo que le es aplicable el artículo 2148 del Código Judicial de Panamá ...”

Por su parte la apoderada judicial señala que la detención que sufre STANZIOLA MARTINEZ es ilegal por cuanto la orden de allanamiento incumplió expresas formalidades legales establecidas en la ley, porque fue emitida por un Corregidor, cuando la debió ordenar el funcionario de instrucción (Fiscal de Drogas), por lo cual se constituye en una actuación arbitraria e ilegal, porque no se atendió el orden de competencia que establece la ley.

También se alude a la falta de otras formalidades en la resolución que decretó el allanamiento, como la determinación precisa de la residencia donde se efectuó la misma, a pesar de que los policías sabían su exacta ubicación antes de efectuar esta diligencia, según reconoce el accionante,

Así, vemos que en este tipo de consideraciones, sobre la ilegalidad del allanamiento, el demandante fundamenta este habeas corpus citando como antecedente una jurisprudencia de la Corte, consistente en el fallo de 8 de mayo(sic) de 2000, bajo la ponencia de la Mag. Graciela Dixon.

En primer término, el Pleno de la Corte debe aclarar que en aquel caso, fallado en verdad el 28 de abril de 2000 (Habeas Corpus a favor de Sebastián De León Pineda), si bien es cierto que se analizó una orden de allanamiento y se determinó que no cumplía las formalidades legales, lo que se tuvo en cuenta para decretar la ilegalidad de la detención preventiva consistió en otro elemento. Este fue la condición de farmaco-abusador de marihuana y cocaína del detenido, debido a lo cual se ordenó su sometimiento a un programa de rehabilitación.

En el caso que nos ocupa, no se observa que el detenido presente el mismo padecimiento a que se refiere el fallo citado. Por tanto, la simple argumentación de que el allanamiento no fue ordenado por la autoridad correspondiente, no es razón suficiente para declarar que es ilegal la detención preventiva demandada, sobre todo, cuando en la providencia que ordena el allanamiento (fs.3) y en la resolución que ordena la detención (fs.24), se alude a que dicho allanamiento fue motivado por denuncia de agentes policiales que observaron, en la residencia allanada, la presunta actividad de venta de sustancias ilícitas.

Por tanto, si la medida cautelar de carácter personal satisface los presupuestos que determinan los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, se debe proceder a su confirmación. Seguidamente se hará el respectivo examen:

Este proceso tiene sus inicios cuando dos agentes policiales encontrándose en el Sector 5 de La Paz, a un costado de la casa 91, observaron cuando la ciudadana CLAUDIA VALENCIA MERCADO estaba haciendo entrega de un objeto por la puerta del mencionado inmueble. Al detenérsele tenía en su mano derecha un envoltorio de papel de aluminio contentivo de una sustancia sólida de color cremoso que se presume sea piedra.

Posteriormente las autoridades solicitan a la Corregiduría de Victoriano Lorenzo una orden para allanar dicha residencia con el objeto de buscar armas y sustancias ilícitas.

De acuerdo a la diligencia de allanamiento visible de fojas 4 a 7, dentro del inmueble se encontraba el señor AROSEMENA STANZIOLA MARTINEZ, a quien se le incautó la suma de B/.15.85 en forma fraccionada, una pistola calibre 25, un cargador, dos municiones vivas y, tirados en el piso, dos envoltorios de papel de color amarillo que en el interior contenía hierba seca presumiblemente marihuana. Además, del hueco del sanitario se lograron sacar dos bolsas plásticas transparentes, presumiblemente contentivas de cocaína y dentro de un tubo de pvc incrustado en la pared dos casquillos calibre 38 detonados.

Al ser sometido a la declaración indagatoria AROSEMENA STANZIOLA se acogió al derecho consagrado en el artículo 22 de la Constitución Nacional.(f.20)

A través del Oficio No.1146 de 7 de junio de 2000 la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia solicitó al Director de la Policía Técnica Judicial se remitiera el peso de la droga incautada y a foja 15 del cuadernillo se aprecia el Informe del Laboratorio Técnico Especializado en Drogas que señala que el peso total de la droga incautada es de 53.23 gramos, desglosados así: 51.97 de marihuana, 0.14 gramos de crack y 1.12 gramos de cocaína.

Mediante resolución de 13 de abril de 2000 la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas ordena la detención preventiva de AROSEMENA STANZIOLA por su vinculación con un delito contra la Salud Pública Relacionado con Drogas.

Una vez efectuado un análisis objetivo de los elementos probatorios allegados hasta el momento para la comprobación del hecho punible, el Pleno observa que contra su persona pesan los informes de los agentes policiales que observaron cuando de la vivienda que habitaba salía la ciudadana VALENCIA con droga en su poder; el allanamiento efectuado posteriormente en donde se decomisaron sustancias ilícitas que arrojaron un peso total de 53.23 gramos, y, aún cuando la investigación se encuentra en una etapa incipiente, estos elementos nos llevan a concluir que concurren indicios suficientes para vincular a AROSEMENA STANZIOLA con el delito investigado, por lo que procede declarar legal la detención preventiva ordenada, sin perjuicio de que allegados nuevos medios de convicción al proceso varíe su situación procesal.

Por lo antes expuesto considera la Corte que en la detención preventiva no se ha infringido el debido proceso establecido en la Constitución y en las leyes de la República, ni tampoco las normas jurídicas que regulan la detención

preventiva y, por lo tanto, lo procedente es declarar legal la medida cautelar aplicada.

En consecuencia, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de AROSEMENA STANZIOLA MARTINEZ y por lo tanto DISPONE que el detenido sea puesto de inmediato a órdenes de la autoridad correspondiente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) ROBERTO GONZALEZ R. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EPIFANIO ALBERTO CORELLA CONTRA EL JUEZ DE LA ÑINEZ Y ADOLESCENCIA DE CHIRIQUI, APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO GONZÁLEZ. PANAMÁ, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la acción de Habeas Corpus preventivo, solicitado por el Licdo. RODRIGO MIRANDA MORALES a favor de EPIFANIO ALBERTO CORELLA y contra el Juez de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Chiriquí.

DISCONFORMIDAD DEL ACCIONANTE

El Licdo. MIRANDA MORALES manifestó que el Juez de Menores y Adolescencia de la Provincia de Chiriquí, mediante resolución N° 130F de 29 de junio de 2000, dispuso que EPIFANIO ALBERTO CORELLA entregara a su menor hija ANGELINE CORELLA ULATE a esa autoridad so pena de ser sancionado con apremio corporal el día 30 de junio del año en curso, toda vez que la menor es objeto de un juicio de guarda y crianza entre el señor CORELLA y su ex-esposa FANY ZULEIKA ULATE JUSTAVINO.(F.9)

Considera el accionante que dicho apremio constituye un hecho abusivo pues no le ha sido notificada a su poderdante y vulnera lo dispuesto en los artículos 21 y 32 de la Constitución Nacional.(F.10)

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL A-QUO

El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial en resolución calendada 7 de julio de 2000, señaló que el señor EPIFANIO ALBERTO CORELLA, no se encuentra privado de su libertad y su abogado ha interpuesto un recurso de apelación en contra de la resolución que ordena el apremio corporal dispuesto por el Juez de Niñez y Adolescencia de Chiriquí, dentro de un proceso de guarda, crianza y educación, a través de una resolución escrita debidamente notificada a las partes, sin que pueda el tribunal entrar en el fondo sobre cuestiones propias del proceso especial de guarda y crianza, como tampoco a las circunstancias que motivan el apremio corporal, lo que se encuentra apelado, y ello es materia especial propia de la jurisdicción de la niñez y de la adolescencia.

Concluye el A-quo que en la materia propia de la acción de habeas corpus, no hay vulneración de las garantías constitucionales y legales en lo relativo al apremio corporal, lo que hace ajustado a derecho dicha decisión.(Fs.26-27)

CONSIDERACIONES DEL PLENO

Los Magistrados que integran el Pleno de la Corte Suprema de Justicia entran a resolver el fondo del presente recurso de apelación.

La acción de Habeas Corpus es un instrumento procesal idóneo para reclamar contra cualquier acto de autoridad que lesione la libertad ambulatoria de los ciudadanos, fuera de los casos y la forma que prescriben la Constitución y la Ley.

No obstante, los defectos procesales y vicios de injuridicidad señalados por el recurrente, se refieren al posible apremio corporal de que puede ser objeto su poderdante de no cumplir con la medida dispuesta por el Juez de Niñez y de Adolescencia de la Provincia de Chiriquí que conoce del proceso de guarda, crianza y educación de la infante ANGELINE CORELLA ULATE, lo que no es materia de una Acción de Habeas Corpus como bien señaló el Tribunal de primera instancia.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución de 7 de julio de 2000 proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ROBERTO GONZÁLEZ R.
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ ANDRÉS TROYANO (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HÁBEAS CORPUS INTERPUESTO A FAVOR DE GRACIELA CORTEZ CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Licenciada Nidia Castillo Del Valle solicitó verbalmente acción de Hábeas corpus a favor de la ciudadana GRACIELA CORTEZ en contra del Fiscal Primero Especializado en Delitos relacionados con drogas, ésta última detenida preventivamente en el Centro Femenino de Rehabilitación por presunta comisión de delito Contra la Salud Pública.

Relata la accionante que a la señora CORTEZ se le detuvo el día 21 de junio de 2000 por miembros de la corregiduría de Tocumen y desde la fecha se halla en el Centro Femenino de Rehabilitación sin que medie orden de detención en su contra (f. 1).

Al requerir el informe del funcionario instructor nos indica el Fiscal Segundo Especializado en Delitos relacionados con drogas, que si ordenó la detención de la señora GRACIELA ESTHER CORTEZ DELGADO mediante providencia de 22 de junio de 2000; que los fundamentos de hecho que motivaron dicha detención fue la diligencia de allanamiento realizada en su residencia el día 21 de junio del presente año y la entrega voluntaria de dos cajetillas de fósforos contentivas de unos envoltorios con una sustancia que se presumía droga; los fundamentos de derecho basados en el artículo 2148 y 2159 del Código Judicial; y que la misma

se halla a órdenes de su despacho en virtud de lo anterior.

Al analizar los antecedentes de la investigación, encontramos que se encuentran copias autenticadas de la orden de allanamiento y de la diligencia de allanamiento decretada por el corregidor de Tocúmen a la vivienda de la imputada confeccionadas a mano y máquina (fs. 2-5).

En los folios 9 y 10 se detalla la cantidad incautada de: veintitrés (23) sustancias sólidas cremosas "piedra", diez (10) pedazos de carrizos contentivos de una sustancia en polvo de color blanco los cuales se presumían como droga y la suma de veintiún balboas con setenta y cinco centésimos (B/.21.75) Foja 9 y 10.

A la diligencia de prueba de campo las sustancias incautadas resultaron positivo (foja 12).

En su declaración indagatoria, la imputada CORTEZ DELGADO sin la asistencia de defensor manifestó que la sustancia incautada la había entregado a los agentes de policía, que las "piedras" eran propiedad de un sujeto llamado Foster y los carrizos de su hijo Tomás Antonio Melgar, el cual la había ocultado en el cielo raso de la residencia (fs. 17-20).

Examinadas todas las piezas sumario, a este momento procesal, pese a que el hijo de la imputada CORTEZ, señor TOMÁS ANTONIO MELGAR acepta ser el dueño de la sustancia ilícita la cual poseía para su consumo (fs. 28); la Corte no encuentra elemento que permita inferir que la detención preventiva de la imputada tenga visos de ilegalidad.

Ello no significa que en el avance de las investigaciones, el funcionario instructor no pueda sustituir la detención de la sindicada si encuentra mérito para ello y no se acredita fehacientemente la supuesta venta de drogas.

Por lo anteriormente expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención de GRACIELA ESTHER CORTEZ DELGADO con cédula de identidad N°7-85-254, decretada por el Fiscal Segundo Especializado en Delitos relacionados con drogas.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) ROBERTO GONZÁLEZ R. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS PRESENTADO A FAVOR DE JUAN CARLOS GODOY EN PROCESO QUE SE LE SIGUE POR HOMICIDIO Y LESIONES PERSONALES EN PERJUICIO DE CARLOS ANTONIO ROUSE LOZANO, ESTON AURELIO DELGADO ALFONSO Y AVELARDO CHARLES. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Gaspar De Puy Barranco ha presentado acción de hábeas corpus a favor de JUAN CARLOS GODOY GUERRA, quien se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario La Joya, en virtud de proceso penal que se le sigue en el Segundo Tribunal Superior de Justicia por supuesto delito de Homicidio y Lesiones personales en perjuicio de Carlos Antonio Rouse Lozano, Eston Aurelio Delgado Alfonso y Avelardo Charles.

EL ACCIONANTE

Cuestiona la detención preventiva impuesta al imputado Godoy Guerra, en virtud de que el hecho de autos acaeció el día 30 de mayo de 1998 en horas de la noche y el mismo para ese entonces era menor de edad. Señala que el Código de la Familia establece en el artículo 548 que si el menor ha cometido un delito y cumple la mayoría de edad su conocimiento corresponde a la jurisdicción de menores.

AUTORIDAD DEMANDADA

Al responder al mandamiento de hábeas corpus librado mediante providencia de 17 de julio de 2000, el Magistrado Ponente de la causa respondió de la siguiente manera:

> "A)-No ordenamos la detención preventiva del señor JUAN CARLOS GODOY GUERRA.
>
> B)-Reiteramos que no fue este Tribunal quien dispuso la detención del señor GODOY GUERRA. Ese acto dispositivo emanó del Ministerio Público durante la etapa de instrucción del sumario relacionado con el delito de homicidio en perjuicio de CARLOS ANTONIO ROUSE LOZANO y ESTON AURELIO GUILES DELGADO.
>
> C)-A la fecha, el prenombrado JUAN CARLOS GODOY GUERRA se encuentra a órdenes de este Tribunal jurisdiccional, porque así lo dispuso la Fiscalía Segunda del Primer Distrito Judicial mediante oficio N°2118 de fecha 30 de noviembre de 1998, por habernos remitido el sumario para la valoración legal correspondiente.
>
> Respecto a lo anterior es bueno señalar que el proceso en mención ingresó a esta colegiatura el 4 de diciembre de 1998, se abrió causa criminal contra GODOY GUERRA Y OTROS, el 21 de diciembre del mismo año; y en la actualidad el sumario se encuentra pendiente de fijar fecha de audiencia, ya que la etapa de lectura, tal como lo consigna el artículo 2346 del Código Judicial, culminó el 14 de los corrientes." (fs. 28-29).

CONSIDERACIONES DEL PLENO

De acuerdo al dossier penal, el día 31 de mayo de 1998 se presentaron funcionarios de la Fiscalía Auxiliar de la República a la morgue del hospital Santo Tomás, a fin de reconocer los cadáveres de los señores Carlos Antonio Rouse y Estone Aurelio Delgado Alonso(fs. 7-8).

Dichos sujetos fallecieron a consecuencia de herida penetrante por proyectil de arma de fuego en el tórax y abdomen, y en la cabeza respectivamente (fs. 251 y 259).

Debemos hacer un llamado de atención letrado De Puy Barranco, quien aportó como elemento probatorio, certificado de nacimiento del sindicado Godoy Guerra y sostuvo en su memorial que al momento de la comisión del delito, éste era menor de edad.

Examinado dicho documento público, claramente se advierte que el sindicado nació el día 18 de agosto de 1979 y al 31 de mayo de 1998 fecha en que ocurrió el ilícito, tenía la edad de dieciocho años con nueve meses y trece días, y no la minoría de edad afirmada.

Uno de deberes de los abogados como auxiliares de la jurisdicción es ejercer la profesión apegado al Código de Etica y responsabilidad profesional del abogado y comportarse con lealtad y probidad durante el proceso (Artículo 462 del Código Judicial).

Toda vez que anteriormente esta Colegiatura mediante resolución de 13 de abril de 2000 resolvió acción de hábeas corpus a favor de dicho ciudadano, declarando legal la detención del mismo por haberse cumplido los requisitos legales procede a este momento procesal mantener dicha decisión.

En mérito de lo antes expuesto, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PLENO administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de JUAN CARLOS GODOY GUERRA sindicado por delito de Homicidio en perjuicio de Carlos Antonio Rouse Lozano y de Eston Aurelio Delgado Alfonso.

Póngase el detenido a órdenes del Segundo Tribunal Superior de Justicia.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES R.
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) ROBERTO GONZÁLEZ R. (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ELI GARCIA CERVANTES Y TOMAS RODRIGUEZ PEREZ CONTRA EL FISCAL SEGUNDO DE CIRCUITO DE CHIRIQUI, APELACION. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema, en grado de apelación, la acción de habeas corpus presentada por los señores ELI GARCÍA CERVANTES y TOMÁS RODRÍGUEZ PÉREZ, detenidos en la Cárcel Pública de David, en su propio nombre y representación, ante el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, contra el Fiscal Segundo de Circuito de la Provincia de Chiriquí, por la presunta comisión de los delitos contra el Patrimonio y contra la Fe Pública.

En su iniciativa constitucional, los señores GARCÍA y RODRÍGUEZ manifestaron que están siendo víctimas de "abuso de autoridad y extralimitaciones de funciones que se esta(sic) cometiendo contra nosotros".

Afirmaron que ninguna de las acusaciones contra ellos presentadas son verídicas, porque ellos solo estaban de paseo; que se les dijo el lunes 10 de julio que iban a ser investigados por 24 horas, y ya estaban a jueves 13, detenidos injustamente.

Los antecedentes del caso cuentan que los detenidos fueron "sorprendidos in fraganti" el 10 de julio, cuando los sumariados trataron de evadir la garita de Jacú, en el área próxima a la frontera con Paso Canoas a las 5:50 p. m., cuando el automóvil Mitsubishi Lancer con matrícula 318092, perteneciente a HERNÁN ARTURO FARRO RODRÍGUEZ, y manejado por TOMÁS RODRÍGUEZ PÉREZ, fue interceptado por unidades de la Policía Nacional, y al ser registrado el vehículo y sus ocupantes, encontraron nueve (9) pasaportes pertenecientes a personas, en el siguiente orden: de los peruanos BETTY VARGAS CARRILLO VDA. DE PASTOR -pasaporte N° 1756056-, MARITZA BETTY PASTOR VARGAS -pasaporte N° 0627689-, RUBÉN HUAYRA SOLANO -pasaporte N° 1032092-, WILLIAM MARINO INOCENTE PASTOR -pasaporte N° 1908001-, HERNÁN ARTURO GONZALO FARRO RODRÍGUEZ -pasaporte N° 1548736-; de los argentinos RICHARD MARTÍN SALCEDO FARRO -pasaporte N° 13-235-990-, CINTHYA YANETH SALCEDO FARRO -pasaporte N° 14-046303-, MARÍA TERESA DEL CARMEN FARRO RODRÍGUEZ -pasaporte N° 12-144-118-; y de la panameña MARIMAR PASTOR -pasaporte N° 8-912-752.

Además, se incautaron dos (2) libretas de ahorro del Banco de Iberoamérica, cuenta N° 5002-224276-1, a nombre de MARITZA PASTOR VARGAS, y otra de la Caja de Ahorros, cuenta N° 16.01-025243-0, a nombre de MARITZA BETTY PASTOR, además de una chequera del Banco General, expedida a favor de HERNÁN ARTURO FARRO RODRÍGUEZ contra la cuenta N° 03-23-01-000084-1.

Este hallazgo se realizó por medio de la diligencia de inspección ocular al vehículo en mención, por parte de los funcionarios de la Fiscalía Segunda de Circuito de Chiriquí, y los involucrados -según los agentes- no pudieron dar una explicación satisfactoria sobre la procedencias de la evidencia incautada.

También trataron de encontrar al señor HERNÁN ARTURO FARRO RODRÍGUEZ, pero no pudieron dar con su paradero.

Admitida la acción, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial libró el mandamiento de habeas corpus contra el Fiscal Segundo de Circuito de la Provincia de Chiriquí, quien lo contestó, señalando que sí ordenó la detención de los precitados; que los motivos o fundamentos de hecho y de derecho utilizados para ordenar dicha detención, se encuentran en la providencia a fojas 35-38 del cuadernillo contentivo de las sumarias, y que estriban en su vinculación con la presunta comisión de los delitos contra el Patrimonio y la Fe Pública.

Finalmente, manifestó el funcionario acusado, que los detenidos se encuentran en la Cárcel Pública de David, y que fueron puestos a órdenes de dicho Tribunal Superior de Justicia.

Por otro lado, mediante sentencia penal de 14 de julio de 2000, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, que en su opinión, existen graves indicios contra los justiciables que los vinculan a la presunta comisión del delito contra la fe pública, porque los documentos encontrados no son de su propiedad, ni pudieron justificar su procedencia.

Consideró el Tribunal que no era pertinente atribuir un delito contra el patrimonio, porque los ofendidos, es decir, los propietarios de los documentos, no han concurrido al proceso para comprobar la propiedad y preexistencia de los mismos.

También señaló que faltaban varias pruebas que practicar, y que había sido demostrada la existencia de peligro de fuga de los imputados, toda vez que fueron detenidos luego de evadir la garita de Jacú, en el área fronteriza.

Finalmente, conceptuó dicha Colegiatura que, aunado a lo anterior, la orden de detención preventiva cumplió cabalmente los requisitos de flagrancia establecidos en el artículo 2148 del Código Judicial, así como los del artículo 2159 de la misma excerta, por lo que dicha detención es legal.

Ambos sindicados evidenciaron su intención de apelar al notificarse del fallo, por lo que se surtió la alzada sin la sustentación de los petentes.

Empero, mientras se encontraba el proyecto de sentencia en trámite de lectura de los Magistrados que componen el Pleno de esta Corporación de Justicia, se recibió en la Secretaría General de esta Superioridad, vía fax, una carta remisoria procedente del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, y calendada y recibida el 27 de julio pasado, en la que ELI GARCÍA CERVANTES desistió de la apelación presentada, toda vez que el Sr. TOMÁS RODRÍGUEZ se hizo responsable de la droga incautada.

Además, se recibió Oficio N° 1286 de 28 de julio de 2000, enviado por la Secretaría del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, que remitió los escritos de desistimiento redactados por los dos detenidos.

Al observar que ambas peticiones fueron escritas por los propios sindicados, considera el Pleno que, en base a lo normado por el artículo 1070 del

Código Judicial, que autoriza a desistir del recurso tanto al representante legal como al propio interesado, en cualquier momento del proceso, no tiene la Corte ninguna objeción en conceder lo pedido, y así ha de declararlo.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el desistimiento manifestado por ELI GARCÍA CERVANTES y TOMÁS RODRÍGUEZ PÉREZ, del recurso de apelación contra la sentencia penal de 14 de julio de 2000, dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial,

Cópiese, Notifíquese y Archívese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) ROBERTO GONZALEZ R.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS ENRIQUE RENTERIA GRANADOS CONTRA EL JUEZ SEGUNDO PENAL DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA, APELACION. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Rafael Rodríguez presentó ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia, acción de habeas corpus a favor de LUÍS ENRIQUE RENTERÍA GRANADOS, detenido en el Centro Penitenciario La Joyita, dirigido simultáneamente contra el Juez Segundo del Circuito Penal del Tercer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, La Chorrera, y contra el Segundo Tribunal Superior de Justicia, cuyo Ponente es el Magistrado Wilfredo Sáenz.

El letrado fundó su acción en que el 24 de marzo de 2000, el Juez Segundo del Circuito Penal de la Chorrera, Suplente Especial, revocó una orden de detención que había dictado el Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, contra RENTERÍA GRANADOS y JAIME MIGUEL DONATO, mediante orden interlocutoria de libertad manifestada en el acto de audiencia plenaria celebrada el 24 de marzo de 2000.

El Fiscal de la causa apeló dicha orden de libertad, pero el Juez Segundo de Circuito Penal de La Chorrera la revocó por razón de ese recurso de apelación, mientras se estaba resolviendo en el Segundo Tribunal Superior de Justicia. Dicha revocatoria se hizo efectiva mediante Oficio N° 569 de 27 de marzo de 2000 -3 días después de la audiencia.

Afirmó el defensor, que medidas como la declaración de medidas cautelares, el mantenimiento de la detención preventiva, el nombramiento de abogados defensores, la orden de libertad, etc., son apelables en efecto devolutivo o diferido, cuando así lo indica la ley.

Que el artículo 2429 del Código Judicial no incluye dentro de las decisiones apelables en el plenario, el auto que decrete la libertad del imputado.

Consideró el letrado que la detención de LUÍS ENRIQUE RENTERÍA es ilegal porque el auto que decretó su libertad es apelable en efecto devolutivo o diferido, pero no en efecto suspensivo; y, porque dicho auto liberatorio se basó en razones de prueba, al considerar que se incorporaron pruebas ilícitas al

sumario, y "que los contra indicios y contra pruebas han dejado determinado que no existe méritos para mantener la detención de LUIS ENRIQUE RENTERÍA GRANADOS."

Por lo tanto -a su juicio- la detención es ilegal por razones de forma y de fondo.

También invocó el actor, el principio "favor libertatis", que ha sido adoptada por la jurisprudencia de la Corte Suprema y del Segundo Tribunal Superior de Justicia, según aduce el Licdo. Rodríguez, citando doctrina al respecto.

Luego de admitida la acción, el Segundo Tribunal Superior de Justicia libró el mandamiento de habeas corpus contra el Juez Segundo del Circuito Penal de La Chorrera, quien lo contestó mediante el Oficio N° 1244 de 29 de junio de 2000, y que dijo lo siguiente:

"1° Sí ordené la detención de LUÍS ENRIQUE RENTERIA GRANADO.

2° Las razones de hecho y de derecho que tuve para hacerlo se fundamenta en el recurso de apelación anunciado por la FISCALÍA SEGUNDA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS, contra la decisión tomada por mi suplente especial en el acto de audiencia Plenaria.

3° Si se encuentra a ordenes(sic) del suscrito.
....."

Luego, el Segundo Tribunal Superior de Justicia resolvió abstenerse de conocer el negocio, y ordenó remitirlo a esta Corporación de Justicia, por considerar que carecía de competencia funcional para conocer el caso, dado que la acción de habeas corpus que nos ocupa fue interpuesta simultáneamente contra el Juez Segundo de lo Penal de la Chorrera, y contra ese Tribunal, ante esta Corporación de Justicia.

Además, ese Tribunal Superior tuvo conocimiento de una acción previa de habeas corpus interpuesta directamente ante esta Colegiatura contra ellos, que se encontraba en trámite de ser resuelto.

Empero, se advierte que al momento de resolver esta acción, ya se resolvió ese habeas corpus previo interpuesto directamente contra el Segundo Tribunal Superior de Justicia, y cuyo fundamento es idéntico al que nos ocupa en esta ocasión.

En el fallo en referencia, calendado 19 de julio de 2000, señaló el Pleno que:

"Esta Corporación de Justicia debe señalar que la orden de libertad provisional a favor de RENTERÍA GRANADOS, fue dictada al margen de la Ley tal como lo expresa el Segundo Tribunal Superior. Esto es así, porque el Juez Suplente del Juzgado Segundo de Circuito Judicial de Panamá revocó la medida cautelar de detención preventiva decretada contra RENTERÍA GRANADOS mediante Resolución no motivada, que debió ser consultada al Superior jerárquico, antes de ejecutar la resolución, contrariando lo estipulado en el artículo 23 de la Resolución Ejecutiva N° 101 de 1994, que compendia las Leyes 23 de 1986 y 13 de 1994 (por medio de las cuales se reforman, modifican y adicionan artículos del Código Penal y del Código Judicial y se adoptan otras disposiciones especiales sobre delitos relacionados con drogas, para su prevención y rehabilitación) y, cuyo tenor literal es el siguiente:

"Artículo 23. Cuando se proceda por delitos relacionados con drogas, las medidas cautelares serán aplicadas por el tribunal competente,

a excepción de la contenida en el literal e) del artículo 2147B del Código Judicial. Estas medidas serán remitidas en grado de consulta al superior."

Tomando en consideración lo expuesto y que el recurso de apelación, interpuesto contra el fallo fechado 20 de junio de 2000, fue otorgado en efecto diferido y suspendió la orden de libertad provisional otorgada por el Juez Suplente del Juzgado Segundo de Circuito de lo Penal del Tercer Circuito Judicial de Panamá tal como lo señalara el Segundo Tribunal de Justicia, a juicio del Pleno de la Corte Suprema de Justicia lo procedente es declarar legal la revocatoria de la orden de libertad provisional decretada a favor de LUÍS RENTERÍA GRANADOS."

Como quiera que el fundamento de ambos recursos es idéntico, y que no han habido cambios en cuanto a la situación procesal de RENTERÍA GRANADOS, ni nuevas decisiones que modifiquen -en este caso- lo actuado por el Juzgador primario, es el criterio del Pleno que lo procedente es declarar legal la decisión del Segundo Tribunal Superior de Justicia.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL lo actuado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) ROBERTO GONZALEZ R.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RICARDO MARÍN AMORES CONTRA EL FISCAL PRIMERO DE CIRCUITO DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL, CON SEDE EN CHORRERA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIEZ (10) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado a esta Corporación de Justicia, en grado de apelación, la Sentencia dictada por el Segundo Tribunal Superior el 29 de junio de 2000, dentro de la acción de habeas corpus promovida por el licenciado Feliciano Ballesteros en representación de Ricardo Marín Amores contra el Fiscal Primero de Circuito del Tercer Circuito Judicial, con sede en Chorrera.

En la demanda de habeas corpus interpuesta ante el Segundo Tribunal Superior, el apoderado judicial de Marín Amores, afirmó que su detención es ilegal porque ha sido sometido a un sumario y privación de su libertad sin ninguna prueba contundente y sin causa justificada, violando el artículo 32 de la Constitución Nacional y el artículo 1966 del Código Judicial.

El Segundo Tribunal Superior de Justicia resolvió en primera instancia está acción y declaró legal la detención de Ricardo Marín Amores, fundamentado su sentencia en los siguientes términos:

"El Tribunal de hábeas corpus debe necesariamente tomar en consideración la fuerza de los elementos probatorios incorporados al expediente, con el objeto de ponderar la trascendencia de la prueba

> en cuanto demuestra al hecho punible y vincula al imputado tal y como lo exige el artículo 2159 del Código Judicial, para tener por válida esta medida cautelar personal. En esta tarea, no puede dejar de observarse que en este momento de la investigación, al ponderar la declaración indagatoria del procesado aflora una importante contradicción entre la versión de los hechos como los narra él y el aporte testimonial obrante en el expediente. La contradicción referida hace relación al papel que el sujeto llamado Michael desarrolló durante la secuencia de hechos investigados. Al decir de los testigos presenciales del hecho, tres fueron las personas que bajaron del vehículo taxi para cometer el hecho punible y al momento de emprender la fuga, una de estas tres personas se introdujo en el asiento del conductor y arrancó el vehículo (ver declaración de ELÍAS CASTILLO GONZÁLEZ a foja 40), mientras que al decir de MARÍN AMORES, Michael permaneció con él dentro del vehículo en los asientos delanteros, mientras que los tres que se bajaron se encontraban en la parte de atrás y, que al regresas los tres, fue Michael quien arrancó y condujo el vehículo en fuga (ver fs. 68). La anterior confrontación con el resto del material probatorio obrante en el expediente, se constituye en un vínculo que razonablemente permite en este momento tener por justificada la medida cautelar objeto de discusión; y como quiera que la medida adoptada fue dispuesta por funcionario competente cumplida las formalidades de ley, el Tribunal procederá a declarar su legalidad.” (fs. 22 y 23)

Esta Superioridad observa que la Fiscal Segunda de Circuito del Tercer Circuito Judicial decretó la detención preventiva de Ricardo Marín Amores mediante la resolución de 9 de mayo de 2000, como consecuencia de las investigaciones seguidas por su vinculación en el robo a mano armada perpetrado en la Abarrotería El Limón en la Chorrera el sábado 6 de mayo de 2000.

La denuncia del hecho fue presentada ante la Policía Técnica Judicial (Agencia de La Chorrera) por la señora Xiao Huan Zhong el 6 de mayo de 2000, quien indicó que los asaltantes se llevaron la caja del dinero y dos cartones de cigarrillo LM verde y rojo, grande y chico (fs. 1, 2 y 7 del expediente de las sumarias). Según el informe de investigación preliminar de esa fecha, el Detective I Favio Smith, dejó constancia que fue aprehendido un sujeto que viajaba en el auto con el que se trasladaron los asaltantes (f. 5 de expediente de las sumarias).

Consta el Oficio N° 322-2000 de 7 de mayo de 2000, del Director de la Zona de Policía de Panamá Oeste, en el que remite a la Policía Técnica Judicial al ciudadano detenido, Ricardo Marín Amores, y la evidencia encontrada en el taxi que este maneja, que incluye una serie de documentos y entre otras cosas, dos cartones de cigarrillos L&M, verde y rojo con 10 y 20 paquetes de cigarrillos cada uno; medio galón de Seco Herrerano; una pistola de juguete plateada con la empuñadura negra y un reloj de hombre marca Polo que el señor Marín dice que es de su propiedad.

Según el informe de robo de 6 de mayo de 2000, que se lee a foja 20 del expediente de las sumarias, consta que el propietario del vehículo o taxi utilizado en la perpetración del ilícito, señor Jorge Isaacs Dimas Collado, compareció ese día y señaló que hace dos días que no sabía de su carro ni del palanca del mismo, quien no había reportado cuenta.

En la resolución dictada el 9 de mayo de 2000 por la Fiscalía Segunda de Circuito del Tercer Circuito Judicial de Panamá, este despacho ordenó que se indagara al señor Ricardo Marín Amores con cédula de identidad personal N° 8-732-2404 por la supuesta infracción de las disposiciones contenidas en el Título IV, Capítulo II, Libro II del Código Penal (fs. 58 a 65 del expediente de las sumarias).

Al rendir su declaración indagatoria, el señor Marín Amores indicó que los

hechos que lo vinculan con la comisión del ilícito se dieron en virtud del engaño del cual fue víctima por los verdaderos autores, entre quienes se encuentra un sujeto de nombre Maiquel al cual conocía con anterioridad y que lo contrató, durante toda la noche, para que los llevara al Limón en la Chorrera, donde sin él tener conocimiento de lo que harían, le quitaron el carro con revolver en mano y posteriormente robaron la tienda El Limón. Agregó que aunque no lo encañonaron con las armas, no se atrevió a retirarse del lugar por temor y porque fue retenido, señaló que mientras estaba en el carro fue sometido por Maiquel con la cabeza hacia abajo y que cuando terminó el ilícito decidió ir hacia Panamá a poner la denuncia porque no conocía el sector donde se encontraba (fs. 66 a 72).

El mismo 9 de mayo de 2000, luego de la declaración indagatoria rendida por el señor Marín Amores, la Fiscalía Segunda de Circuito del Tercer Circuito Judicial de Panamá, ordenó su detención preventiva, por encontrarse acreditado el hecho punible y porque la investigación adelantada hasta el momento determina la vinculación subjetiva del señor Marín Amores al delito.

El 10 de mayo de 2000, el señor Marín Amores rindió declaración jurada para ratificarse de los cargos formulados contra el sujeto conocido como Maiquel, expresando que así lo hacía (fs. 86 y 87 del expediente de las sumarias).

El abogado defensor del señor Marín Amores pidió al fiscal que deje en libertad a su representado por no existir pruebas que demuestren que participó del delito (fs. 93 y 94), solicitud que fue resuelta negativamente por dicha autoridad por considerar que hasta la etapa en la que se encuentra la investigación, no ha variado la situación que sirvió de base para ordenar la detención preventiva.

Esta Sala Plena estima que no le asiste la razón al apelante cuando afirma que en el sumario instruido no hay elementos que vinculen a Marín Amores con el delito de robo investigado. Esto es así, porque de todas las constancias procesales que se han citado, no parece que el detenido fue forzado por los asaltantes a permanecer en el auto mientras ellos robaban la tienda.

Tal como lo afirmó la denunciante y los demás testigos del hecho, fueron tres los sujetos que se bajaron a la tienda mientras Marín Amores permanecía en el auto y el tal Maiquel fue descrito como uno de los sujetos que entró en la citada tienda, por lo cual es contradictorio con la versión de que éste lo mantuvo sometido mientras asaltaban el local comercial.

De estos hechos, tal como lo expresó el tribunal de habeas corpus en primera instancia, surgen indicios que vinculan al señor Ricardo Marín Amores con la comisión del delito contra el patrimonio, tipificado en el Capítulo II, Título IV del Libro II del Código Penal, sancionado con pena mínima de prisión cuyo mínimo excede de dos años. Además, como se ha acreditado en autos la existencia del delito investigado, es legal la detención preventiva decretada contra Ricardo Marín Amores de conformidad con los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, por lo cual el fallo apelado debe confirmarse.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de 29 de junio de 2000, dictada por el Segundo Tribunal Superior, mediante la cual declara LEGAL la detención preventiva del señor RICARDO MARÍN AMORES y ORDENA que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes del funcionario demandado.

Notifíquese

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FABREGA

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE JIMMY IVAN SAUCEDO CONTRA EL FISCAL DELEGADO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS DE HERRERA Y LOS SANTOS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, DIEZ (10) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Hipólito Manuel Consuegra, en su calidad de Defensor técnico, ha solicitado ante esta Corporación de Justicia, acción de hábeas corpus a favor de JIMMY IVAN SAUCEDO, sindicado por delito Contra la Salud Pública, contra el Fiscal Delegado Especializado en Delitos Relacionados con Drogas de Herrera y Los Santos.

ARGUMENTO DEL ACCIONANTE

Acusa el letrado que la detención de su patrocinado es ilegal y lo sustenta basado en cuatro hechos:

> "PRIMERO. Que el señor JIMMY IVAN SAUCEDO, se encuentra privado de su libertad corporal, desde el día siete de julio de dos mil (2,000).
>
> SEGUNDO. Que la detención se debió según consta en autos, a una compra controlada, que se le hizo al sindicado, mediante un cooperador anónimo, llamado El Justiciero, quien portaba billetes con denominaciones conocidas.
>
> TERCERO. Que para que se de una diligencia de allanamiento y esta cumpla con los requisitos de Ley, se tiene que aportar copia de la misma debidamente autenticada, de lo contrario resulta intracendente (sic)y carente de valor. (Segundo Tribunal de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, noviembre 26 de noviembre de 1990).
>
> CUARTO. Que el sindicado, JIMMY IVAN SAUCEDO, fue detenido en contravención de lo que establecen las normas jurídicas 2158 y 2159 del Código Judicial."

ARGUMENTO DE LA AUTORIDAD DEMANDADA

Al responder el cuestionario demandado el Fiscal Delegado Especializado en Delitos Relacionados con Drogas de Herrera y Los Santos, indicó:

> "A. Sí, es cierto que ordenamos mediante Resolución calendada 10 de junio del año 2,000, consultable de folios 81 a 84 del cuaderno Penal la detención preventiva del señor JIMMY IVAN SAUCEDO JIMENEZ.
>
> B. Los motivos y fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la limitación temporal de la libertad del señor SAUCEDO JIMENEZ, fueron las diversas Informaciones aportadas por parte de la Oficina de Narcóticos de las Provincias Centrales en donde se establecían las actividades de venta de drogas por parte del precitado señor SAUCEDO JIMENEZ.
> En base de ello tenemos que la Oficina de Narcóticos con Oficio fechado siete (7) de julio de los corrientes nos peticionó una autorización judicial para llevar a cabo una diligencia de Compra Vigilada de Drogas a SAUCEDO JIMENEZ y adjuntó a la misma ciertas

informaciones que se manejaban sobre las actividades ilícitas de venta de drogas a las que el mismo se venía dedicando en elárea de la ciudad de La Villa de Los Santos y lugares circunvecinos.

La Fiscalía en la Resolución visible de folios 32 y 33 del proceso dispuso llevar adelante esta Operación y designó en ese momento los billetes que debían ser utilizados en la misma que era la suma de veinte balboas (B/.20.00) para realizar la operación de Compra Controlada solicitada.

Esta Operación, luego de puesta en ejecución y transcurrido cierto período de tiempo, así como posterior al haber recibido la información por radio de parte de las Unidades que participaban del operativo de que la transacción de compra y venta de drogas por parte de un Informante de la Policía Judicial y el señor SAUCEDO JIMENEZ, había sido positiva, se procedió de inmediato a interceptarlo a fin de recuperar los dineros autorizados por la Fiscalía, ya que de antemano había sido recibido el producto de la transacción, siendo éstos, dos (2) sobrecitos de plásticos transparentes contentivos de polvo blanco que se presumía fuese la droga conocida como cocaína.

Luego de darse la aprehensión del señor SAUCEDO JIMENEZ, al realizarse el Registro y Allanamiento del mismo fueron ubicados en su poder los dineros autorizados por la Fiscalía para dicha operación, y además gran cantidad de dinero que portaba el prenombrado SAUCEDO, y al verificar la residencia de la madre de éste, ubicada en la Barriada La Rebelo de Los Santos, no fue ubicado nada ilícito, al igual que la residencia que mantiene alquilada en Pueblo Nuevo, sector de La Villa de Los Santos, donde reside con su esposa MARIANELA DONOSO JIMENEZ.

La prueba de campo de las sustancias objeto de investigación se verificaron y las mismas resultaron que era positiva para la sustancia conocida como cocaína.

De acuerdo a lo expresado, consideró el suscrito que la actividad de venta de drogas estaba prima facie corroborada, tomando en consideración la documentación recibida por parte de las Oficinas de Narcóticos, así como las diligencias de Allanamientos (43 a 46 y 52 a 53) por lo cual, peticionó la indagatoria de SAUCEDO JIMENEZ, quien negó los hechos imputados en su contra, y que el dinero que se ubicó en su poder, y que supuestamente era autorizado por la Fiscalía lo había recibido por la realización de unos trabajos de electricidad, lo cual por el momento no se ha acreditado.

Por estas exposiciones consideramos que la participación de SAUCEDO JIMENEZ en el acto contrario al orden penal fue corroborada, en momentos que son ubicados en su poder los dineros autorizados, siendo esta una actividad ilícita que sobrepasa los dos (2) años de prisión y atenta Contra la Salud Pública, por lo cual, estimamos que se encontraban reunidos los presupuestos contemplados en los artículos 2147 y 2148 del Código Judicial, este último reformado por la Ley 42 de 27 de agosto 1999, para decretar la detención preventiva del mismo, ya que, en nuestro concepto en estas actuaciones existe la posibilidad que se siga atentando contra la salud de las personas.

C. El señor JIMMY IVAN SAUCEDO JIMENEZ, se encuentra detenido a nuestras órdenes en la Cárcel Pública de Los Santos, pero, desde este momento se pone a órdenes de esa Superioridad para lo que sea de lugar." (fs. 10-12).

ANALISIS DE LA CORTE

Las investigaciones inician con solicitud formulada por el detective Manuel A. Reyes C., Jefe Encargado de la oficina de Narcóticos de las provincias centrales al fiscal Especializado en delitos relacionados con drogas de Herrera y Los Santos, para que autorice una compra vigilada de drogas al ciudadano SAUCEDO JIMENEZ (f. 1). Lo anterior en atención a que dicha dependencia de la Policía Técnica Judicial había recibido informes de que dicho ciudadano se dedicaba a la venta de drogas (f.31).

Autorizada la compra simulada de la sustancia ilícita, el ciudadano SAUCEDO JIMENEZ se la vende al agente encubierto, "El Justiciero" (fs. 38-40).

Consta en Diligencia de allanamiento y registro, que se requisó al imputado, y éste portaba la suma de dinero autorizada por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas para la compra simulada de la sustancia ilícita (fs. 43-46).

Diligencia de prueba de campo realizada a la sustancia ilícita resulta positiva evidenciando que la misma era cocaína (f. 58).

El sindicado JIMMY IVAN SAUCEDO JIMENEZ niega la comisión del delito que se le endilga (fs. 67-71).

Concluido el análisis de los elementos probatorios que reposan en el sumario hasta la fecha, la Corte encuentra que la detención preventiva del sindicado SAUCEDO JIMENEZ hasta este momento procesal se ajusta a los presupuestos legales.

Por las anteriores consideraciones, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención de JIMMY IVAN SAUCEDO JIMENEZ sindicado por delito Contra la Salud Pública.

Filíese al detenido a órdenes del Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas de Herrera y Los Santos.

Notífiquese y Devúelvase

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FABREGA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MARIA EUGENIA CORDOBA CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, ONCE (11) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor Uzziel Morán Toribio ha interpuesto acción de habeas corpus a favor de María Eugenia Córdoba Correa contra el Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Acogido el recurso se libró mandamiento de habeas corpus contra el Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas quien, mediante el

oficio DD1-T00-2940-2000 de 21 de julio de 2000, rindió el siguiente informe:

"PRIMERO: Sí, es cierto que esta agencia de instrucción ordenó la detención preventiva de la ciudadana MARIA CORDOBA CORREA, mediante resolución judicial emitida en forma escrita, fechada 14 de julio de 2000 y decretada por el Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

SEGUNDO: Antes de esbozarle los motivos o el fundamento de hecho en que basamos la detención preventiva de la señora MARIA EUGENIA CORDOBA CORREA, presunta infractora de un delito CONTRA LA SALUD PUBLICA, relacionada con drogas, expondremos en forma sucinta la génesis del delito infringido en esta ocasión:
"HECHOS QUE MOTIVAN LA INVESTIGACION"
"El pasado 12 de noviembre de 1999, aproximadamente a las 16_40 horas, unidades de la Policía Nacional, encontrándose de recorrido por los alrededores del Sector La Loma (Curundú), observaron la presencia en el área, de dos sujetos, entre éstos, una femenina la cual vestía sweters color rojo y pantalón jeans, y un ciudadano , el cual mantenía un paragua abierto, ya que se encontraba lloviendo. Al notar ambos la presencia policial en el área, mostraron actitud de nerviosismo, por lo que fueron retenidos y trasladados a la estación policial por los agentes captores. Al llegar a la Estación de Policía, la femenina (sic) de nombre LIZ EVELIN SANTAMARIA HERRERA, manifiesta que mantenía dentro del sweter (sic) entre el sostén, cierto (sic) cantidad de sustancia ilícita, por lo que procedió a sacárselo, tratándose de un cartucho plástico en (sic) cual contenía dentro un total de ciento cincuenta y dos (152) sustancias sólidas de color cremosa las cuales se presumían fueran drogas (PIEDRA). Posteriormente la joven de nombre LIZ EVELIN, manifiesta a las unidades captoras que la verdadera dueña de dicha sustancia era una joven que se encontraba en la tienda que da frente al cuartel de Policía de Curundú, quien vestía un juego de flores (sic) a colores de blusa y pantalón. Manifestó LIZ EVELIN, que la misma (MARIA EUGENIA CORDOBA) era la persona que le había mandado comprar la droga en dicho sector (Curundú). Al proceder las unidades policiales a retener a dicha ciudadana, la cual coincidía con las descripciones dadas por la informante, respondió al nombre de MARIA EUGENIA CORDOBA CORREA, quien al ser revisada mantenía en su poder la suma de veinticuatro ($24.00) balboas en efectivo. El sujeto retenido en compañía de SANTAMARIA HERRERA, resultó llamarse OMAR ALBERTO REINA SANCHEZ, el cual mantenía en su poder un cuchillo plateado de mesa, estos dos últimos no manifestaron nada al respecto."

Entre los elementos probatorios que motivaron al despacho a ordenarle la detención preventiva a la sindicada, MARIA EUGENIA CORDOBA CORREA, tenemos:

*Informe de novead, fechados 12 de noviembre de 1999, visible a fojas 3-4 del sumario.
*Señalamientos directos efectuados por los agentes captores, así como las sendas diligencias judiciales ejecutadas.
*Circunstancias de modo, tiempo y lugar, de las que se desprende el solo hecho de encontrarse la sumariada (MARIA CORDOBA) en radio de acción donde se dieron los hechos (Indicio de Presencia y Oportunidad).
*Mala justificación de la imputada MARIA EUGENIA CORDOBA CORREA, al momento de efectuar sus descargos. (ver ampliación indagatora a fojas 109-115)
*Diligencia de Careo entre LIZ SANTAMARIA (sindicada) y ROGELIO CAMPBELL (agente captor), en donde ambos señalan a CORDOBA CORREA como la presunta propietaria de mortal tóxico.
*Ampliación de LIZ EVELIN SANTAMARIA, la cual se retracta de su

declaración indagatoria y efectúa cargos contra la prenombrada CORDOBA (ver fojas 103-108)
*Diligencia de careo, entre MARIA EUGENIA CORREA y LIZ SANTAMARIA. (ver fojas 116-118)
*Aunado al Análisis de la Sustancia ilícita, la cual dio resultados positivos para la determinación de COCAINA en 31.00 gramos (ver fojas 66) y a los señalamientos del AGENTE HIPOLITO HERNANDEZ, en donde desvirtúa las versiones dadas por CORDOBA CORREA (ver fojas 123-124).

Pruebas estas, suficientes y determinantes para ordenar la detención preventiva de la sumariada MARIA CORDOBA, quien se encuentra vinculada con el delito in examine, toda vez que las circunstancias de modo, tiempo y lugar así lo indican."

Por su parte, el señor Uzziel Morán Toribio sostiene que independientemente de la posible vinculación de la señora MARIA EUGENIA CORDOBA CORREA con el hecho punible que se le pretende endilgar es evidente que se le están conculcando garantías constitucionales y legales, pues el artículo 2147-D del Código Judicial señala que no se ordenará la detención preventiva de una mujer en estado de embarazo o cuando amamante a su propia prole.

Mediante providencia de 14 de julio de 2000, visible a fojas 123 y 124 de las sumarias, la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas ordenó la detención preventiva de María Eugenia Córdoba Correa.

Observa el Pleno que se trata de un proceso iniciado de oficio, por cuanto que a la señora María Eugenia Córdoba Correa se le imputa delito contra la Salud Pública.

Consta de fojas 3 a 4 de las sumarias el informe de novedad de 12 de noviembre de 1999 suscrito por el Cabo 2do. 14526 Rogelio Campbell, de servicio en la Unidad de Control de Multitudes, cuarto pelotón, el que señala que estando en recorrido por los alrededores del sector La Loma observaron a una joven vestida con un "sweater" de color rojo y un pantalón jeans y que venía acompañada por un sujeto que llevaba un paraguas, pero ésta al notar la presencia policial se mostró nerviosa, razón por la cual se procedió a detenerla junto con su acompañante. Agrega que al llegar a la sala de guardia de la policía de Curundú, se le preguntó si llevaba una sustancia ilícita, a lo que la mujer respondió que sí y saco de su sostén un cartucho plástico que contenía 152 sustancias sólidas de color crema que se presumiblemente droga (piedra). Señala que también se le encontró cuatro balboas (B/.4.00) en billetes de un balboa (B/.1.00). Indica que la joven respondía al nombre de Liz Evelin Santamaría Herrera y que manifestó que una joven que vestía un conjunto de blusa y pantalón de flores rojo, blanco y azul era la que le había encomendado a comprar la sustancia ilícita. Añade que una vez encontrada la joven descrita por Liz Evelin SantaMaría, quien dice llamarse María Eugenia Córdoba Correa, se le llevó a la sala de guardia y a la misma se le encontró la suma de veinticuatro balboas (B/24.00) en efectivo los cuales estaban fraccionados en un billete de diez balboas (B/10.00), dos billetes de cinco balboas (B/.5.00) y cuatro billetes de un balboas (B/.1.00).

Reposa de foja 73 a 77 de las sumarias la declaración jurada rendida por Hipólito Hernández Chávez en la que señala que en el sector de la Loma vieron a una pareja a quien se les pidió sus documentos y como se encontraban en actitud sospechosa los trasladaron a la estación de policía. Agrega que estando en la estación la mujer sacó voluntariamente una bolsa plástica transparente que contenía 152 fragmentos de una sustancia sólida la cual se presumía que era droga (piedra) y manifestó que la droga era de una joven que vestía un juego de sweater y pantalón color blanco con flores azul y roja y que estaba en la tienda al frente de cuartel. Añade que se procedió a capturar a la mujer, la cual al percatarse de que habían detenido a Liz Evelin Santamaría, trató de irse y abandonar el lugar.

De fojas 102 a 106 de las sumarias reposa la ampliación de la declaración indagatoria de Liz Evelin Santamaría en la que manifiesta que acompañó a María Eugenia Córdoba a Curundú y estando en la entrada del área de transporte y talleres estaba Omar Reina a quien María Eugenia Córdoba le entregó una cantidad de plata en efectivo. Agrega que María Eugenia Córdoba le pidió el favor de que le buscara la droga porque le debía dinero a una muchacha del área y se la llevara a la tienda que estaba frente al cuartel de policía. Indica que estaba caminando con Omar Reina cuando vieron a unos policías y éste le entregó el paquete de droga.

Se observa de fojas 108 a 113 de las sumarias la declaración indagatoria de María Eugenia Córdoba en la que dice que su amiga Liz Evelin Santamaría le pidió que la acompañara a la casa de Xiomara Rodríguez a buscar una ropa, pero como le dolía el pie porque se había caído se quedó en la tienda que está en frente del cuartel de policía de Curundú. Agrega que comenzó a llover y alrededor de una hora después salió su amiga de una esquina, en la que se había metido, con un joven que llevaba un paraguas. Indica que su amiga le hizo señas para que fuera al cuartel y cuando se dirigía para el cuartel vino un policía a buscarla. Cuando llego al cuartel vio que Liz Santamaría se sacaba un paquete de los senos y le hacía señas de que el paquete era del muchacho. Finalmente señala que la droga no era suya, sino de Liz Evelin Santamaría y que a Omar Reina lo conoció el día que la detuvieron en el cuartel de policía.

De fojas 115 a 117 de las sumarias se observa la diligencia de careo entre Liz Evelin Santamaría y María Eugenia Córdoba en la que la señora Santamaría se ratifica en lo dicho en sus declaraciones, en el sentido de que la droga que se le encontró en su poder, era de María Eugenia Córdoba quien le pidió que se la fuera a buscar.

Consta igualmente, a foja 66 de las sumarias, la diligencia de prueba de campo practicada por la División de Estupefacientes de la Policía Técnica Judicial a las muestras incautadas, la cual dio resultado positivo para la determinación de cocaína en la cantidad de 31.00 gramos.

Una vez efectuado un análisis exhaustivo del expediente el Pleno considera que el informe de novedad de 12 de noviembre de 1999 suscrito por el Cabo 2do. 14526 Rogelio Campbell, la declaración jurada rendida por Hipólito Hernández Chávez, la declaración indagatoria de Liz Evelin Santamaría y la diligencia de prueba de campo practicada por la División de Estupefacientes de la Policía Técnica Judicial a las muestras incautadas, son indicios suficientes que vinculan a María Eugenia Córdoba con el hecho que se le imputa.

No obstante, advierte el Pleno que el Instituto de Medicina legal, mediante oficio No.007-20106 de 26 de julio de 2000 (f.10), certifica que la fecha última de parto de María Eugenia Córdoba fue el 8 de mayo de 2000 y está amamantando.

En relación al argumento planteado por el señor Uzziel Morán Toribio, observa el Pleno que, efectivamente, el artículo 2147D del Código Judicial no permite la detención preventiva de la mujer que amamante a su prole, siempre que no exista exigencia cautelar de excepcional relevancia.

Después del estudio de las circunstancias procesales, el Pleno concluye que en el presente caso no concurren tales exigencias cautelares, ya que no hay evidencias de que exista peligro de que la imputada intente darse a la fuga, debido a que se trata de una ciudadana panameña, con domicilio en este país.

Finalmente, es preciso indicar que el artículo 2595 del Código Judicial señala literalmente lo siguiente:

> "ARTICULO 2595. Quien haya sido puesto en libertad en cumplimiento de un mandamiento de Habeas Corpus, no podrá ser detenido nuevamente por los mismos hechos o motivos, salvo que se presenten nuevos elementos probatorios que así lo ameriten."

En el presente caso existen elementos de prueba que vinculan a la recurrente con el ilícito que se investiga. Consecuentemente, debe entenderse que la sustitución de la detención preventiva por otra medida cautelar distinta, no desvincula a la señora María Eugenia Córdoba de su posible responsabilidad en el delito que se investiga ni de que, posteriormente, se le llame a juicio por el mismo, si existieran méritos suficientes.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la orden de detención preventiva de MARIA EUGENIA CORDOBA y la SUSTITUYE por las medidas cautelares de carácter personal que establecen los literales a, b, y c del artículo 2147B del Código Judicial, consistentes en la prohibición a la imputada de abandonar el territorio de la República sin autorización judicial, la obligación de residir dentro de la jurisdicción del Distrito de Panamá y el deber de presentarse cada quince días ante el juez de la causa.

Notifiquese y Cumplase

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FRANCISCO THOMPSON CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, ONCE (11) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

Vistos:

La licenciada TERESA IBAÑEZ ha interpuesto acción de Habeas Corpus a favor de FRANCISCO THOMPSON contra el Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

La proponente de esta acción solicita que se declare ilegal la detención de su defendido debido a que de las sumarias se desprende que el delito que debe imputársele es el de posesión simple de drogas para fines de consumo, ya que no hay ninguna evidencia de que la droga encontrada estaba destinada a la venta o tráfico.

Librado el mandamiento de habeas corpus, la autoridad demandada remitió el siguiente informe:

"..... ....
Sí, es cierto que se ordenó la detención del ciudadano FRANCISCO THOMPSON, la misma fue emitida en forma escrita y decretada por el Fiscal Primero de Drogas, mediante Resolución de quince (15) de febrero del 2000.

El Fundamento de Hecho, tiene su génesis cuando la Policía del grupo de ciclistas del área A San Felipe, se encontraban de recorrido por el Corregimiento de Calidonia, sector de la renta 5, cuando observan a un sujeto que al notar la presencia de los agentes de la Policía, el mismo se dio a la fuga por las escaleras del mencionado inmueble, lo que motivó su persecución, fue cuando uno de los agentes observó

> que el sospechoso lanzó un pequeño bulto, que al ser verificado se trataba de un cartucho de plástico contentivo de 28 carrizos plásticos que en su interior mantenían cierta cantidad de polvo blanco presumible la droga COCAINA. También se le encontró en poder del ciudadano FRANCISCO THOMPSON, un cigarrillo de fabricación casera, presumible MARIHUANA.
>
> Al ser sometida la presunta droga a la diligencia de prueba de campo, arrojó resultados positivos a la droga COCAINA y MARIHUANA. En tanto que el análisis científico de la Policía Técnica Judicial, no ha sido incorporado a la investigación, hasta el momento de redactar el presente informe.
>
> Al ser cuestionado el sumariado sobre la evidencia ilícita, manifestó que el cigarrillo de MARIHUANA es de él, pero la otra droga no.
> En torno a lo anterior declaran los agentes captores CESAR GORDON CALDERON y ALEXIS ESCOBAR MORALES, quienes reiteran todos los cargos en contra del imputado.
>
> El fundamento de derecho para ordenar la detención preventiva del señor FRANCISCO THOMPSON, se encuentra consagrado en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.
>
> En la actualidad el señor FRANCISCO THOMPSON, se encuentra filiado en este despacho, posteriormente pasará, mediante Oficio No.FD1-T05-1579-2000 del día 11 de mayo de los corrientes, a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA."

En este caso los elementos probatorios que se tienen contra la persona detenida son: veintiocho (28) carrizos de polvo blanco que resultó ser cocaína con un peso de 3.08 gramos y un envoltorio en forma de cigarrillo que resultó ser marihuana en la cantidad de 0.38 gramos; y las declaraciones de los agentes policiales que señalan que FRANCISCO THOMPSON fue aprehendido con un cartucho contentivo de cocaína que lanzó desde las escaleras al momento de divisar a los agentes policiales en el área y un cigarrillo de marihuana.(fs 21 a 23 de los antecedentes).

Por su parte, el imputado al rendir indagatoria, de fojas 11 a 13 de las sumarias, niega que la cocaína encontrada por los agentes policiales le pertenezca, manifiesta que sí mantenía en su poder la marihuana y que era para su consumo ya que es consumidor desde los 11 años de edad. Al respecto manifiesta lo siguiente:

> "Señor Fiscal, el día jueves como a eso de las tres a cuatro de la tarde, se presentó un problema en el área de la Renta No.5, en donde al parecer los policías estaban correteando algunas personas, yo me encontraba dentro de mi casa con el propósito de fumarme "un bate" (con marihuana), yo acababa de salir del INAFORP, salí del cuarto para fumarme el "quenque" y en eso los policías me sorprendieron, me colocaron a una esquina del edificio y luego ellos me sacaron otra droga, de la cual desconozco, me enseñaron "pichi" dentro de unos carrizos los cuales estaban dentro de un cartuchito, como no encontraron al dueño de esa droga, me la quisieron asignar a mí, eso no era mio y sólo me sorprendieron con el cigarrillo de marihuana en la mano, ellos me revisaron cuando llegamos al cuartel, ya que en el lugar no lo hicieron."

Por su parte los agentes policiales CESAR GORDON y ALEXIS ESCOBAR, a fojas 22 y 23 de los antecedentes, al ratificar sus informes, son coincidentes en señalar que FRANCISCO THOMPSON al momento de ser aprehendido mantenía en su poder el cigarrillo de marihuana y lanzó el cartucho contentivo de 28 carrizos de cocaína escaleras abajo. Con relación a ello manifiestan lo siguiente:

".. El en todo momento negó la posesión de ese cartucho, pero sí aceptaba que fumaba ...".
"...él mantenía un envoltorio de hierba seca en forma de cigarrillo que fumaba..."

La Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, a través de los Oficios Nos.959 de 15 de mayo de 2000 y 1145 de 7 de junio de 2000, solicitó al Instituto de Medicina Legal nos remitiera el resultado del examen de dependencia psíquica o física de consumo de drogas, solicitado por el Fiscal Primero de Drogas el 11 de febrero del presente año; no obstante, a foja 14 del expediente consta el informe de 26 de junio del 2000 remitido por el Director Médico Forense en el que manifiesta que FRANCISCO THOMPSON no tiene expediente de examen físico, por lo cual no consta en las sumarias el mismo.

Como es sabido, en estos casos es importante la comprobación de uno o el otro supuesto de posesión de droga a que se refiere el artículo 260 del Código Penal, ya que mientras la posesión para el consumo se sanciona con prisión de 1 a 3 años y de 50 a 250 días multa, la posesión para tráfico se castiga con 5 a 10 años de prisión.

En este caso consta un buen número de elementos probatorios que razonablemente justifican mantener la detención preventiva. Tales elementos son los siguientes:

1. Cantidad de Droga retenida:

Al momento de su detención los agentes de la Policía le decomisaron al señor THOMPSON veintiocho (28) carrizos de cocaína que tenían un peso total de 3.46 gramos. Esta cantidad de droga excede la posología que ha determinado la Medicatura Forense para comsumidores habituales de esta sustancia ilícita. Esta circunstancia revela que no estamos ante una posesión simple de droga para el consumo, sino que el detenido la poseía probablemente para "... suministrarla en venta o traspaso a cualquier título para consumo legal..." , como lo describe el párrafo segundo del artículo 260 del Código penal.

2. Flagrancia:

En el caso que nos ocupa parece estar claro que nos encontramos ante una detención en condiciones de flagrancia, puesto que el señor THOMPSON fue detenido por la Policía luego de que éste al advertir la presencia de los agentes se dio a la fuga tirando en su huída los veintiocho (28) carrizos contentivos de cocaína, lo cual implica por sí sólo la comisión del hecho punible, pues poseía droga ilícita en cantidades que hacen deducir razonablemente que no eran para su consumo sino para la venta o traspaso a cualquier título (Cfr.artículo 2149 CJ.).

En circunstancias como las que ofrece este caso puede resultar excesivo exigir la presencia de otros elementos que denoten intención de comercialización de la droga (Vgr. pesas, máquina selladora de carrizos, papel, especial, etc.), puesto que el señor THOMPSON fue detenido cuando trataba de ponerse a cubierto de la acción de la autoridad. Es decir, no fue detenido en un recinto cerrado.

La jurisprudencia del Pleno ha sostenido que la forma de presentación de la droga acredita también el tipo penal (Vgr. Sentencia de 2 de julio de 1998 y 11 de julio de 1994).

Los señalamientos que anteceden parecen revelar que este imputado posía los veintiocho (28) carrizos de cocaína en una cantidad que desvirtúa la tesis del consumo personal, lo que, aunado a los indicios graves indicados, llevan a pensar que la medida de detención cumple las exigencias necesarias para conservar su legitimidad y legalidad.

Por tanto, a juicio de la Corte, la detención preventiva decretada es legal porque cumple con lo dispuesto en el artículo 2148 del Código Judicial. Sin embargo, se dispone que continúen las investigaciones del caso, a fin de obtener

pruebas que posteriormente pudiesen modificar la circunstancia que incide en la decisión adoptada.

En virtud de lo expresado, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República uy por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de FRANCISCO THOMPSON y ORDENA que sea puesto nuevamente a órdenes de la autoridad competente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARMEN ADAMES CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Los licenciados HUMBERTO MOSQUERA y DOMINGO MENDEZ QUINTERO presentaron demandas de Habeas Corpus a favor de CARMEN ADAMES contra la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

Debido a que fueron presentadas dos demandas a favor de la misma persona y contra la misma autoridad, en virtud de lo dispuesto por el artículo 710 del Código Judicial, se procedió a la acumulación de la acción de habeas corpus con entrada 517-00 a la que se presentó primeramente, con entrada 513-00, para que se sustancien y fallen en una sola sentencia.

Librado el mandamiento de habeas corpus, la autoridad demandada respondió lo que a continuación se transcribe:

> "1. Si es cierto que se ordenó la detención preventiva de las señoras CARMEN ADAMES y ANASILIA GARCIA BEDOYA, la misma fue decretada mediante Resolución de este Despacho, fechada 18 de Julio de 2000.
>
> 2. La orden decretada contra las señoras CARMEN ADAMES y ANASILIA GARCIA BEDOYA, surge luego de que unidades policiales que se encontraban realizando vigilancia a una residencia de madera sin número, ubicada en el Sector de Las Malvinas, Alcalde Días(sic) toda vez que tenía información que una joven que se mantiene en estado de gravidez, de nombre CARMEN, se dedicaba a la venta de sustancias ilícitas en dicho inmueble.
>
> Estando unidades policiales ocultas en unos matorrales, ubicados frente y en la parte trasera de la residencia, cuando observaron a sujetos con aspecto de adictos se acercaban a la residencia y dialogaban con CARMEN ADAMES y hacían intercambio de algo, luego de un rato unos de los sujetos logró observar a una unidades ocultas al frente del inmueble, dirigiéndose inmediatamente a la residencia de ANASILIA GARCIA BEDOYA, quien es vecina y amiga de CARMEN ADAMES y señaló hacia las unidades.

Posteriormente las referidas unidades visualizaron cuando ANASILIA GARCIA salía corriendo hacia donde CARMEN gritándole "JUEGA VIVO QUE ANDA LA DIIP POR ALLI", agarrando CARMEN un cartucho que mantenía entre sus piernas y ambas emprendieron su huída, en dirección a la parte trasera del inmueble, donde fueron retenidas por el grupo de unidades policiales.

CARMEN ADAMES DUARTE tenía en su poder un cartucho de color celeste que mantenía dentro de un monedero de cuero, que en su interior contenía cincuenta y tres (53) fragmentos de una sustancia sólida de color crema que se presume sea droga, un (1) envoltorio de plástico color blanco que contenía diecinueve (19) fragmentos como los anteriores, veintisiete (27) carrizos plásticos contentivos de un polvo blanco, que se presume sea cocaína y ciento cuarenta y cinco dólares con cuarenta y ocho centésimos ($145.48), la mayoría estaban en billetes de a uno.

Ante los hechos en comento, este Despacho consideró que existían suficientes méritos para ordenar la declaración indagatoria de las señoras CARMEN ADAMES DUARTE y ANASILIA GARCIA BEDOYA y que ADAMES DUARTE, se acogió al beneficio conferido por el artículo 22 de la constitución Nacional.

ANASILIA GARCIA BEDOYA, al momento de rendir indagatoria manifiesta que cuando venía de su casa subiendo una vereda se encontró con CARMEN y en eso llegó la Policía y CARMEN botó un cartucho del cual desconocía su contenido y que en ningún momento le avisó a CARMEN ADAMES que la Policía estaba por ahí.

La sustancia incautada fue remitida al Laboratorio Especializado de Análisis del Departamento de Criminalística de la Policía técnica Judicial, a fin de ser evaluadas y así determinar si se trata de sustancias ilícitas, pero hasta la fecha no ha llegado la respuesta.

Los fundamentos de derecho sobre los cuales se ha basado la detención preventiva de las señoras CARMEN ADAMES DUARTE y ANASILIA GARCIA BEDOYA, se encuentra consagrado en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial,

3. La señora CARMEN ADAMES DUARTE se encuentra recluida en el Centro Femenino de Rehabilitación, a órdenes de este Despacho, quien a partir de la fecha será puesta a órdenes de este Despacho, quien a partir de la fecha será puesta a órdenes de esa Alta Corporación de Justicia, mediante el OFICIO -FD2-T01-3101-00 de esta misma fecha.

Adjunto ala presente, remitimos copia debidamente autenticada del presente sumario." (fs.10,11)

El proponente de esta acción de habeas corpus indica que su defendida fue detenida el 14 de julio de 2000, por habérsele encontrado 72 piedras y 15 carrizos y la suma de ciento cincuenta balboas en efectivo. Que al ser indagada aceptó los cargos formulados en su contra. Sin embargo, informa que el 29 de junio del presente año, dio a luz mediante cesárea, por lo que tiene que amamantar a la recién nacida. Consecuentemente, en base a lo dispuesto por el artículo 2147-D, en el sentido que la detención preventiva no se decretará cuando la persona imputada sea una mujer embarazada o que amamante a su prole, solicita que dicha detención sea declarada ilegal o, en su defecto, se aplique alguna de las medidas cautelares contempladas en el artículo 2147-B, acápite a y b.

Con la presente demanda de habeas corpus se presentó la documentación que acredita que a CARMEN ADAMES se le practicó una cesárea el 29 de junio de 2000 en el Hospital San Miguel Arcángel, que nació producto femenino y que actualmente está en el período de lactancia (fs.4).

Como es sabido la Constitución le otorga protección a la mujer embarazada y al producto de la concepción (art.52,59 y 68), y el artículo 75 del Código Penal establece la posibilidad de diferir la pena de prisión si la mujer ha dado a luz recientemente "hasta cuando la criatura haya cumplido 6 meses".

En base a lo señalamientos que hace el funcionario de instrucción contra la detenida, los cuales pueden ser corroborados en el antecedente adjunto, y viendo que, según el proponente de esta acción, la misma acepta los cargos formulados en su contra, la detención preventiva que sufre es legal. Pero, por su condición especial de madre de un recién nacido en período de lactancia, se impone la sustitución de dicha detención por otra medida cautelar, entendiéndose que este reemplazo no la desvincula del delito que se le imputa y sin perjuicio de poder ser detenida nuevamente si incumple los deberes inherentes a la medidas cautelares que se le impongan.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva decretada contra CARMEN ADAMES mediante resolución de 18 de julio de 2000 proferida por el Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas; y, la SUSTITUYE por las medidas cautelares de carácter personal contenidas en los literales a), b) y c) del artículo 2147-B del Código Judicial, consistentes en la prohibición de abandonar el territorio de la República sin autorización judicial, la obligación de residir dentro de la jurisdicción del Distrito de Panamá y la obligación de presentarse cada quince días ante la autoridad que tramite la causa.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) YANIXSA YUEN
Secretaria General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ZULEYCA FALCON CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado José Manuel Restrepo Carrizo, promovió el 20 de julio del presente año, acción de habeas corpus a favor de ZULEIKA FALCON y contra el Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Mediante auto dictado el 21 de julio se libró mandamiento de habeas corpus y se le requirió al funcionario demandado que, en el término de la Ley, rindiera un informe sobre las causas de la detención.

Estando el proyecto en lectura, el licenciado José Manuel Restrepo Carrizo desistió de la acción de habeas corpus promovida mediante escrito fechado 7 de agosto de 2000, que fue presentado en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.

Como quiera que toda persona que haya entablado una demanda, promovido un incidente o interpuesto un recurso, puede desistir expresa o tácitamente conforme lo establece el primer párrafo del artículo 1073 del Código Judicial, el Pleno

de la Corte Suprema de Justicia considera que debe acogerse al desistimiento presentado.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO presentado por el licenciado José Manuel Restrepo Carrizo dentro de la acción de habeas corpus promovida a favor de ZULEIKA FALCÓN contra el Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES R.
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JAVIER A. GONZALEZ TESSIS CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICIA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor GILBERTO A. GONZALEZ ha interpuesto acción de habeas corpus a favor de JAVIER ANTONIO GONZALEZ TESSIS, y contra el Director de la Policía Nacional.

Una vez acogido el recurso en mención, se libró mandamiento de habeas corpus contra el Director de la Policía Nacional, quien mediante nota AL-2483 de 8 de agosto de 2000 informó que no ordenó la detención del ciudadano JAVIER GONZALEZ TESSIS y que el mismo fue puesto a órdenes de la Policía Técnica Judicial.

Como consecuencia, se libró mandamiento de habeas corpus ante el Director de la Policía Técnica Judicial, quien manifestó que el prenombrado se encuentra a órdenes de la Fiscalía Auxiliar.

Seguidamente se libró mandamiento de habeas corpus contra el Fiscal Auxiliar de la República, quien mediante Oficio No.10046 de 11 de agosto de 2000 señaló lo siguiente:

> "A) Si es cierto que se haya ordenado la detención preventiva del señor JAVIER ANTONIO GONZALEZ TESSIS, la cual fue ordenada en resolución motivada, de acuerdo a lo que establece el artículo 2159 del Código Judicial.
>
> B) Los motivos de hecho y de derecho que sirvieron de base a la resolución, son los siguientes:
>
> Primero: El señor ZOU HOU DING CHUNG CHU, pone en conocimiento de la Policía Técnica Judicial, Agencia de San Miguelito, del robo a mano armada del cual fue objeto el supermercado "CHOW", el día tres (3) de agosto de los corrientes. Este hecho es corroborado por el señor HORACIO SALAS GONZALEZ, al prestar testimonio juramentado, en el cual refiere que aproximadamente a las cinco y treinta de la tarde (5:30 p.m.) de la fecha antes indicada, tres sujetos ingresaron

entrando al local comercial donde labora, para encañonar a los presentes y llevarse dinero efectivo de la caja registradora y paquetes de cigarrillo, desplazándose hacia el Sector de Concepción en donde fueron aprehendidos.

Segundo: JAVIER ANTONIO GONZALEZ, fue aprehendido en la residencia de la familia "Aguilar", ubicada en el Sector de Concepción, Juan Díaz, en compañía de GUSTAVO ROSAS RODRIGUEZ y a éste último se le encontró en su poder un arma de fuego calibre 9 mm, marca Helwan, con serie 1123540, dinero en efectivo y artículos similares a los substraídos del local afectado (seis (6) paquetes de cigarrillo marca VICEROY), lo cual consta en declaración del agente de la Policía Nacional, JOSE MANUEL RODRIGUEZ RAMOS, visibles de fojas 12 a 14 del sumario.

Tercero: La señora QIU LI XIA DE CHUNG, en ampliación a su declaración jurada, afirma haber identificado a GUSTAVO RODRIGUEZ y JAVIER GONZALEZ, como participes del hecho criminoso denunciado por el señor CHUNG CHU, cuando los mismos fueran mostrados por agentes del Departamento de Investigación e Información Policial. De la Policía Nacional, declaración visible de fojas 54 a 55 del sumario.

Cuarto: De la conducta desplegada por los sujetos del delito, colegimos que se ubica en las disposiciones contenidas en el Capítulo II, Título IV del Libro Segundo del Código Penal, del Delito CONTRA EL PATRIMONIO, acto delictivo al que la norma penal le asigna una sanción mínima superior a los dos años de prisión, lo que permite decretar su detención preventiva, conforme a lo establecido en los artículos 2148 y 2149 del Código Judicial.

C) El señor JAVIER ANTONIO GONZALEZ TESSIS, no se encuentra bajo nuestras órdenes, ya que fue puesto a disposición de la Fiscalía Undécima de Circuito Judicial de Panamá, Agencia de Instrucción hacia la cual se envió el expediente, mediante Oficio No. 9870 del 8 de agosto del 2000."

Tal como se desprende del anterior informe, el señor JAVIER A. GONZALEZ TESSIS se encuentra a órdenes de la Fiscalía Undécima de Circuito Judicial, razón por la cual no le corresponde a esta Máxima Corporación de Justicia el conocimiento del presente recurso de habeas corpus, por lo que procede entonces declinar el conocimiento del mismo a favor del Segundo Tribunal Superior de Justicia, conforme a lo preceptuado en el artículo 2602, numeral 2 del Código Judicial.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SE INHIBE del conocimiento de la acción de habeas corpus presentada a favor de JAVIER A. GONZALEZ TESSIS y DECLINA su conocimiento en el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, para que se le de el trámite que la ley establece.

Notifiquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) YANIXSA YUEN
Secretaria General, Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE APOLINAR BATISTA BIDO, CONTRA EL DIRECTOR

NACIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, DIEZ (10) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial mediante resolución judicial calendada 11 de julio de 2000, ha remitido al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por razones de competencia funcional, la acción constitucional de habeas corpus formulada por el licenciado Carlos M. Herrera Morán, en favor de Apolinar Batista Bido, quien se encuentra pribvado de su libertad en la Cárcel Pública de La Chorrera, por la comisión de los delitos de violación carnal en grado de tentativa y posesión agravada de drogas.

Por recibida la acción constitucional subjetiva, se dictó mandamiento de habeas corpus contra la autoridad requerida, la Directora General del Sistema Penitenciario, quien contestó mediante Nota N° 2057-DGSP-al de 24 de julio de 2000. En el informe de conducta expresa que Batista Bido se encuentra "a órdenes de la Dirección General del Sistema Penitenciario, en cumplimiento de la pena de cincuenta y un (51) meses de prisión, por los delitos de Violación Carnal en Grado de Tentativa y Posesión Ilícita de Drogas Agravadas" (foja 22 del cuaderno de habeas corpus).

Cumplidos los trámites de rigor, se procede a decidir lo que en derecho corresponde.

La lectura del proceso permite conocer que, en efecto, Apolinar Batista Bido fue condenado por el Juzgado Primero de Circuito de lo Penal del Tercer Circuito Judicial de Panamá, mediante sentencia de 23 de noviembre de 1999, a la pena de 51 meses de prisión, por ser responsable de los delitos de posesión agravada de drogas y de violación en grado de tentativa, cometido en perjuicio de Shela Henríquez Mariano (fs.235-241); medida jurisdiccional que fue confirmada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante sentencia calendada 17 de febrero de 2000 (fs.278-284).

Lo anterior comprobación conduce a la conclusión de que estamos frente a una detención punitiva, debidamente fundamentada en una sentencia condenatoria que se encuentra ejecutoriada; lo que trae como consecuencia la no viabilidad de esta iniciativa constitucional, por no ser un remedio contra las decisiones de los tribunales ordinarios de la jurisdicción penal que deciden una sanción penal.

Por las consideraciones que anteceden, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE la acción de habeas corpus presentada en favor de Apolinar Batista Bido.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ERWIN RUJANO AROSEMENA CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÈ MANUEL FAÙNDES. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Herrera Morán ha presentado ante esta Superioridad, acción de habeas corpus a favor de ERWIN RUJANO AROSEMENA, contra el Fiscal Primero Especial en Delitos Relacionados con Drogas, por considerar que la privación de libertad que sufre es ilegal.

Una vez acogida la acción se libró el mandamiento de habeas corpus respectivo el 27 de julio de 2000.

El libramiento fue contestado por el señor Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas Encargado, mediante Oficio N° FD-1C-1244-2000 de 31 de julio de 2000 visible a foja 6 del expediente, en el cual señala que esa agencia instruyó un sumario al señor Erwin Rujano Arosemena por delito contra la Salud Pública, radicado en el Juzgado Décimo Primero Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, y que el 19 de julio del año en curso ingresó a su despacho para la notificación de la sentencia absolutoria, devolviéndose al juez de la causa.

Encontrándose el presente negocio en estado de resolver, fue recibido en la Secretaría General de la Corte el Oficio N° 1947 de 26 de julio de 2000 del Juzgado Décimo Primero de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá (f. 8), en el cual la señora Jueza comunica al Director del Centro Penitenciario Nueva Esperanza de Colón, que de no existir causas penales pendientes, deje en inmediata libertad al interno Erwin Rujano Arosemena, con cédula de identidad personal N° 8-259-925, porque el Segundo Tribunal Superior de Justicia revocó en su fallo de 12 de julio de 2000 la resolución dictada el 6 de enero de 2000, absolviéndolo de los cargos por delito contra la Salud Pública y ordenándo su inmediata libertad.

Como se colige de lo expuesto, en la actualidad no pesa orden de privación de libertad sobre la persona a cuyo favor se ha promovido la acción de habeas corpus, por lo que carece de objeto continuar con este procedimiento.

De consiguiente, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA CESE DE PROCEDIMIENTO en el presente negocio y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FABREGA
(fdo.) YANIXSA YUEN
Secretaria General, Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ABILIO GONZÁLEZ PERALTA CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, presentó el señor Edgar Zachrisson Mitre acción de habeas corpus a favor de ABILIO GONZÁLEZ PERALTA, contra el Director General de la Policía Nacional, Carlos Barés Weeden.

Librado el mandamiento de habeas corpus, el Director General de la Policía Nacional, rindió su informe de conducta mediante oficio No. AL-2455-00 de 7 de agosto de 2000, en los siguientes términos:

> "A. No es cierto que haya ordenado la detención del ciudadano Abilio González Peralta, ni por escrito ni verbalmente.
> B. Queda explicado en el literal anterior.
> C. No tengo bajo mi custodia ni a mis órdenes a la persona que se ha mandado presentar. El señor González fue aprendido (sic) el día 1 de agosto del año en curso, ya que el mismo se encontraba en compañía del señor Pablo Hernández (a) Payo, quien se encuentra vinculado en el robo al Supermercado El Rey de El Dorado e Industrias Lacteas (sic) Estrella Azul.
> El mismo se mantuvo en nuestras instalaciones por ordenes (sic) del Licenciado Vargas, Delegado de la Fiscalía Auxiliar de la República, y mediante oficio AID-439-00 fechado 4 de agosto de 2000, se ordena poner en libertad al señor Abilio González Peralta". (fs. 4-5).

De lo que se deja transcrito, claramente se aprecia que la persona en cuyo favor se interpuso la presente acción constitucional no se encuentra privada de su libertad, por cuanto que el funcionario acusado, ordenó su libertad, razón por la cual no se justifica proseguir con la tramitación del presente habeas corpus.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA EL CESE DEL PROCEDIMIENTO de la acción de habeas corpus interpuesta a favor de ABILIO GONZÁLEZ PERALTA, contra el Director General de la Policía Nacional, y en consecuencia DISPONE EL ARCHIVO del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FABREGA
(fdo.) YANIXA YUEN
Secretaria General, Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EUSTORGIO RIVERA PELAEZ Y DIOMEDES A. MONTENEGRO CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FABREGA Z. PANAMA, VEINTIDOS (22) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado JORGE ELIECER GUERRA FUENTES, ha interpuesto acción constitucional de habeas corpus a favor de los señores EUSTORGIO RIVERA PELAEZ y DIOMEDES ARIEL MONTENEGRO, para que se declare ilegal la detención preventiva ordenada por el Fiscal Auxiliar de la República, contra sus poderdantes.

Repartida la acción constitucional, ordenó el sustanciador librar el mandamiento correspondiente a la autoridad acusada, para que en el término de Ley, remitiera el informe solicitado.

Mediante Oficio N°9077, de 24 de julio de 2000, contestó el Fiscal Auxiliar de la República el informe solicitado en los términos que se dejan transcrito:

> "a. Si es cierto que se ordenó la detención preventiva y la misma se hizo por escrito mediante providencia de 14 de

julio de 2000.

b. Los fundamentos de hecho y de derecho se encuentran inmersos en la resolución que ordena su detención preventiva.

c. Actualmente los detenidos se encuentran bajo nuestras órdenes en el sistema transitorio de la Policía Técnica Judicial.

.....
A fojas 19 y 20 del sumario aparecen las imágenes de los sujetos que entraron y se llevaron las bolsas de depósitos del Super mercado el Rey. Una de ellas, la primera, concuerda con la descripción física de EUSTORGIO RIVERA PELAEZ.
.....
.....
En cuanto a la figura de DIOMEDES MONTENEGRO, éste acepta el vínculo Toyota Four Runner involucrado en los hechos es de propiedad de su hermana, pero que a la fecha de ocurrencia de los hechos lo mantenía en su poder. Este vehículo fue reconocido por los guardias de seguridad ORLANDO LEWIS y FEDERICO AMANTINE a 509 y 510.....
.....". (fs.11-14)

El proponente de la acción constitucional que se examina, básicamente lo que impugna de la orden de detención preventiva practicada en perjuicio de los detenidos, es la falta de elementos probatorios en el sumario instruido que vinculen a los beneficiados con el ilícito cuya comisión se les atribuye. En ese sentido, señala que la detención preventiva del señor EUSTORGIO RIVERA PELAEZ, se sustenta en llamadas anónimas erróneas, por que los datos que ofrecen los informantes no coinciden con los de su representado. Además, se refiere a la declaración indagatoria tomada al prenombrado RIVERA, quien asegura haberse encontrado el día y hora de los hechos en un restaurante de la localidad en compañía de su esposa, hijos y amigos.

En cuanto al señor DIOMEDES MONTENEGRO, manifiesta que fue detenido por haberse encontrado en la parte de afuera de su residencia, en un allanamiento practicado a la misma, una evidencia y, además, por los señalamientos de empleados de la empresa afectada con el delito que se instruye, que reconocen la camioneta que conducía el prenombrado MONTENEGRO el día de su detención, que es de color gris, como la que usaron los delincuentes el día del robo, que era de color negro, según declaran.

ANTECEDENTES

La presente encuesta penal, se inicia con la denuncia formulada por el representante legal de INMOBILIARIA SAN ANTONIO, S. A., propietaria del Supermercado El Rey del Dorado, em donde se perpetró un hurto el día 2 de julio de 2000 a las 8:15 de la noche. En la querella formalizada por la apoderada judicial de la empresa afectada, se indica que en las oficinas administrativas del Supermercado El Rey del Dorado se recibió una llamada teléfonica de la Compañía BRINKS PANAMA, S. A., para confirmar si estaban listas las bolsas de dinero que debía retirar dicha compañía para ser depositados.

Que a los cinco minutos de haberse recibido la llamada, se apersonaron dos sujetos al Supermercado identificándose como empleados de la compañía en mención, quienes portaban uniformes azul y demás señas que los caracterizaban como tales. Se indica, además, que la suma entregada a los supuestos empleados de BRINKS PANAMA, S. A., asciende a la cantidad de CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES BALBOAS CON CUARENTA Y OCHO CENTESIMOS (B/.105,573.48), lo cual consta en el informe de Auditoría obrante a foja 32 del expediente que contiene las sumarias.

En el Departamento de Investigación Criminales, División de Delitos contra

el Patrimonio, se recibió la declaración jurada del señor JORGE LUIS DIAZ MARTINEZ, quien labora en la empresa BRINKS PANAMA, S. A., y fue la persona que llamó al Supermercado El Rey del Dorado, para verificar si las bolsas de dinero se encontraban listas para ser retiradas. En dicha declaración deja constancia que las personas que se presentaron al establecimiento comercial no son trabajadores de la empresa BRINKS, ya que cuando llegó el personal de esta empresa, fue que se dieron cuenta del hurto que se había cometido. (fs.21-23)

De la incipiente investigación, surgen declaraciones, tanto del personal que labora en el Supermercado El Rey del Dorado, que estuvieron presente el día de los hechos, así como de los agentes de la empresa BRINKS PANAMA, S. A., quienes ilustran el mecanismo de servicio que ellos prestan. Así como también de las personas presuntamente vinculadas con el ilícito investigado.

El PLENO advierte que, hasta este momento aparecen en los informes de comisión que los señores JAVIER ENRIQUE MENDOZA (300) y ERICK PEREZ (f.308) se encuentran confesos en la participación del ilícito. Además, que éstos señalan a otros sujetos apodados KIKE, CHACA, TOÑO y ANGEL CACERES.

Por su parte, la Fiscalía Auxiliar de la República, en función de agencia delegada, dictó providencia de 11 de julio de 2000, por la cual somete a los rigores de indagatoria a los señores CLEMENTE CACERES (A) CHACA, EUSTORGIO RIVAS, JAVIER MENDOZA, ANGEL CACERES, ERICK PREZ, DIOMEDES ARIEL MONTENEGRO Y GILBERTO PINZON (A) KIKE, por el delito de Hurto, Robo y Asociación ilícita para delinquir en perjuicio de INMOBILIARIA DON ANTONIO, S. A. (fs.450-457).

RELACION DE LA SUPUESTA PARTICIPACION DE
EUSTORGIO RIVERA PELAEZ

Aprecia el Pleno a fojas 339-340, el "Informe de Información Obtenida", del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, en el cual se hace constar que en llamada telefónica anónima, se señala como sospechosos a JAVIER MENDOZA, encargado de los monitores del Supermercado El Rey; ERICK PEREZ, agente de seguridad de dicho establecimiento, GILBERTO PINZON RIOS quien lo califican como el autor intelectual y Eustorgio Rivera (a) TOÑO, residente en Chorrillo, Huerta Sandoval, Edificio Salomón.

En la declaración indagatoria rendida por EUSTORGIO RIVERA PELAEZ (fs.559-562), niega toda vinculación con el ilícito investigado. Manifiesta que el día de los hechos se encontraba en compañía de su esposa e hijos en un restaurante de la localidad. En cuanto a su vinculación con el señor DIOMEDES ARIEL MENDOZA, quien también se encuentra en investigación, señala que son conocidos desde hace mucho tiempo y que al momento de realizarse el allanamiento a su vivienda por las autoridades competentes, se encontraba este último en su casa, ya que le llevaba una placa de taxi que le estaba alquilando en B/.40.00 y de los cuales él (RIVERA PELAEZ) le había hecho un abono de B/.22.00.

Valga la pena anotar, que en la diligencia realizada a la vivienda de RIVERA PELAEZ se encontró un cartucho que contenía 12 municiones vivas calibre 357, dos (2) municiones vivas, calibre 38 especial, así como también un cargador de radio portatil marca Motorola, Modelo 2580955202, los cuales fueron decomisados, al expresar la esposa del sindicado que eran de propiedad de éste.

Considera el Pleno que si bien se ha comprobado con creces el hecho imputado, no existe, hasta este momento de la investigación, los elementos probatorios que vinculen al beneficiado con esta acción constitucional con el ilícito que se le sigue. Ello no impide que, si en el transcurso de la investigación surjan elementos suficientes contra el sindicado, ya que se encuentra pendiente la prueba caligráfica en torno a la firma que aparece en el libro de valores, que aparece como prueba dentro del expediente; así como también someterlo a la diligencia de rueda de presos, como así ha sido ordenada en providencia de 21 de julio de 2000 por la Fiscalía Auxiliar la República (II tomo) y, si el resultado fuere positivo, entonces si prosperaría la privación de

la libertad individual, ya que hasta este momento, tal medida no se ha justificado en la investigación que nos ocupa.

En consecuencia, el PLENO procede a la declaratoria de ilegalidad de detención decretada contra el señor EUSTORGIO RIVERA PELAEZ

RELACION DE LA PRESUNTA VINCULACION DE
DIOMEDES ARIEL MONTENEGRO

Respecto a la vinculación de DIOMEDES ARIEL MONTENEGRO, quien fuere detenido en la residencia de EUSTORGIO RIVERA PELAEZ, el día que se verificó el allanamiento antes mencionado. En su declaración coincide con lo expresado por RIVERA PELAEZ, sobre la relación que mantienen en el alquiler de una placa de taxi.

No obstante lo anterior, contra este sindicado gravitan señalamientos directos sobre el vehículo 4 Runner, de su propiedad, que le fuere incautado en este allanamiento y que responde a las características señaladas por los testigos oculares, como el vehículo en que se transportaron los dos supuestos agentes de la BRINKS, que cometieron el hurto en el Supermercado El Rey del Dorado.

Así tenemos, la declaración de ORLANDO ALFREDO LEWIS SALES (f.509): FEDERICO ROGELIO AMANTINE BASILE (f.510), quienes, además de coincidir con la descripción del vehículo utilizado por los delincuentes, tales como los rines, los vidrios oscuros, spoilers, etc.; relata el último nombrado (AMANATINE BASILE), a foja 223 del sumario, que el día de los hechos se encontraba en el estacionamiento del local afectado, donde labora como agente de seguridad, y vió salir del supermercado dos personas uniformadas de la BRINKS que llevaban un paso apresurado, por lo que verificó si estaba el camión blindado y como no vió ningún camión blindado, caminó hacia adelante cuando se percató de la salida de un vehículo cuatro por cuatro (4 RUNNER) color negro, en el que se presume se fueron los delincuentes.

Estima el Pleno que existen graves indicios contra el señor DIOMEDES ARIEL MONTENEGRO respecto a la participación con el ilícito que se le atribuye, por lo que se hace necesario mantener la detención en su contra.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ILEGAL la detención de EUSTORGIO RIVERA PELAEZ y, en consecuencia, ordena su inmediata libertad, de no existir otra causa pendiente en su contra. En cuanto a la persona del señor DIOMEDES ARIEL MONTENEGRO, DECLARA LEGAL la detención preventiva dictada en su contra y ORDENA sea puesto nuevamente a órdenes de la FISCALIA AUXILIAR DE LA REPUBLICA.

Notifiquese y Cumplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RIGOBERTO RODRIGUEZ CONTRA LA FISCALIA SEGUNDA DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CHIRIQUI (APELACION). MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTITRES (23) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado a esta Augusta Corporación de Justicia, para resolver en grado de apelación, la Acción de Hábeas Corpus interpuesta por el Licenciado ARLES H. MUÑOZ a favor del señor RIGOBERTO RODRÍGUEZ, en contra del Fiscal Segundo del Circuito de la Provincia de Chiriquí.

LA SENTENCIA APELADA

EL Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de Panamá, con sede en la Provincia de Chiriquí, al conocer en primera instancia la acción propuesta, decidió mediante Resolución de 21 de julio de 2000 declarar legal la medida cautelar personal aplicada al señor RIGOBERTO RODRÍGUEZ por la Fiscalía Segunda del Circuito de la Provincia de Chiriquí, agencia instructora que fundamentó su fallo en las siguientes consideraciones:

> "De acuerdo con el contenido en el escrito de formalización del hábeas corpus, el día 13 de julio se celebró diligencia de reconocimiento en rueda de detenidos, se dispuso la indagatoria del acusado y se dictó la resolución ordenando la detención, cuando ya que éste se encontraba detenido. Al respecto cabe agregar que tal como lo indica el demandante es cierto que para que esa fecha el prenombrado Rodríguez se encontraba detenido, a órdenes del licenciado José Didacio Pittí por el supuesto delito de violación carnal, es decir, que la detención era por otra causa penal y no por la que nos ocupa.
> Es importante destacar que en el transcurso de la investigación lo narrado por la ofendida ha quedado acreditado con la certificación médico legal, la cual coincide con los lugares del cuerpo donde señala fue objeto de violencia por parte del acusado.
> Ahora bien, no obstante que el señor Rodríguez niega al (sic) vinculación con el ilícito, ha der tenerse en cuenta que existe el señalamiento formulado por la menor quien desde el primer momento lo ubica como la persona que ejerció violencia contra ella para apoderarse del anillo.
> Como quiera que la resolución dictada por el funcionario de instrucción cumple con los requisitos legales ya que se ha acreditado el hecho punible con la certificación médico legal y la prueba de propiedad y preexistencia del bien, como también surge la vinculación del acusado con el señalamiento de la ofendida y el reconocimiento en rueda de detenidos, se debe declarar legal la detención."

DISCONFORMIDAD DEL APELANTE

Contra esta decisión apela el apoderado judicial del señor RIGOBERTO RODRÍGUEZ; recurso de apelación que se concede en el efecto suspendido y permite el ingreso del expediente ante el Pleno de esta Corporación de Justicia.

No obstante, el Licenciado ARLES H. MUÑOZ al cuestionar la orden de detención emitida por la Fiscalía Segunda del Circuito de la Provincia de Chiriquí señala que la misma es ilegal por cuanto se ordenó después de haberse practicado a su representado diligencia de reconocimiento en ruedas de presos e indagatoria, lo cual a su juicio violenta las garantías y derechos legales y constitucionales que le asisten al beneficiario de esta acción constitucional.

CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DEL PLENO

Del expediente original remitido por la Secretaría del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, observa esta Corporación que la génesis de la presente investigación se refiere al proceso que se le sigue al señor RIGOBERTO RODRÍGUEZ, como supuesto infractor de las disposiciones legales contenidas en el Libro II, Título IV, Capítulo II del Código Penal, que tipifica el delito

genérico Contra el Patrimonio (Robo).

Ahora bien, nos corresponde examinar las constancias procesales que constan en el infolio penal, a fin de verificar si la orden proferida por la autoridad demandada se ajusta a lo contemplado en nuestras normas legales y constitucionales.

La primera pieza procesal que tenemos es la denuncia por el robo de un anillo de oro con una piedra verde, que interpusiera la menor JUDITH ZULEMA TAYLOR PINEDA en presencia de su hermano, quien fungió como curador, ante la Fiscalía Segunda del Circuito, en la que señaló que el día 31 de mayo de 2000 en horas de la tarde se encontraba en la Policlínica del Seguro Social, que al ir bajando las escaleras el joven de nombre RIGOBERTO RODRÍGUEZ la abordó y le preguntó que por el teléfono de una amiga, que luego la invitó al lugar conocido como "Pío Pío" para que conversaran, por lo que ella se negó, pero el sujeto la haló por el brazo izquierdo y la llevó dentro del local, donde le dijo que era brujo, y que le habían echado una porquería, que la sortija se la iba a quitar, sacándole en esos momentos la sortija del dedo, causándole un pequeño arañazo. Agrega la denunciante que el sujeto también le pidió su ropa interior, por lo que al pedirle esto salió corriendo para el mercado de legumbres a tomar el bus. (Fs. 2-4 del sumario)

Las lesiones sufridas por la menor fueron evaluadas por la Doctora Forense Silvia de Bandell, quien dictaminó que la misma presentaba equimosis rojiza verdosa en el antebrazo izquierdo y excoriación de 1.0 centímetros en el dorso de la mano izquierda. (Fs. 6)

Se acreditó la propiedad y preexistencia del bien con la deposición jurada del señor Gustavo David Taylor Frago. (Fs. 9-12)

Para corroborar la denuncia que interpusiera la menor en contra del sindicado, la Fiscalía realizó una diligencia de reconocimiento en ruedas de detenidos (fs. 32-34), la cual dio resultados positivos ya que la víctima del presente delito reconoció a su agresor.

Por su parte, el sindicado RIGOBERTO RODRÍGUEZ al ser indagado niega los hechos que se le imputan, argumentando que no conoce a la muchacha, que por lo tanto él no actuó con violencia para quitarle ninguna sortija, que no comprende porque desde la primera vez la menor lo acusa.(Fs.40-45)

Es en atención a estos elementos que la Fiscalía Segunda del Circuito de la Provincia de Chiriquí, expide el 13 de julio de 2000, una resolución motivada en la que dispone aplicar a RIGOBERTO RODRÍGUEZ la medida cautelar de detención preventiva, por considerar que existen serios motivos de credibilidad que lo señalan como el autor del delito denunciado por la menor JUDITH ZULEMA TAYLOR PINEDA.

Luego de efectuado el análisis del expediente penal, resulta evidente entonces, que en el sumario si existen suficientes elementos de convicción que justifican procesal y legalmente la detención preventiva de RIGOBERTO RODRÍGUEZ con el delito que se le imputa ya que este tiene pena mínima superior a los dos años de prisión; por otro lado existe el señalamiento de la menor ofendida que desde el inicio de la investigación lo ha señalado como la persona que ejerció violencia contra ella para apoderarse del anillo; señalamiento este que es corroborado además con la diligencia de reconocimiento en ruedas de detenidos; por lo tanto no encuentra entonces esta Sala Plena razón alguna para no avalar la decisión de primera instancia, además de que no hallamos que el funcionario demandado haya pretermitido la aplicación de alguna garantía procesal al momento de aplicar la medida cautelar de detención preventiva.

Por las consideraciones que se dejan expuestas, esta Corporación de Justicia considera que la medida cautelar decretada contra el recurrente es legal y, por tanto, debe confirmarse la decisión proferida por el Tribunal Superior de

Justicia del Tercer Distrito Judicial.

En consecuencia, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de 21 de julio de 2000 proferida por el TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL, mediante la cual se DECLARA LEGAL la detención preventiva de RIGOBERTO RODRÍGUEZ.

Cópiese Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN
Secretaria General Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FERNANDO LÓPEZ ESCOBAR CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

A conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia a llegado acción de habeas corpus verbal presentada por el licenciado Mauro Octavio Pérez Cittadini a favor de Fernando López Escobar, quien se encuentra detenido en las instalaciones de la Fiscalía de Drogas, en el Edificio Avesa (f. 1 cuaderno de habeas corpus).

Señala el activador judicial que la detención de Fernando López Escobar es ilegal, toda vez que "...según se desprende de las investigaciones que adelanta la Fiscalía en mención, su compañero, el señor José Luis Vela...aceptó, expresa y llanamente la responsabilidad del hecho que se investiga..."(Cfr. f. 1 cuaderno de habeas corpus).

Por concedido el mandamiento de habeas corpus, la autoridad demandada remitió el informe de conducta a que se refiere el artículo 2582 del Código Judicial, para explicar que la detención de López Escobar fue decretada mediante resolución calendada 5 de julio de 2000, con indicación de las circunstancias de hecho y de derecho que dieron motivo a la aplicación de la medida restrictiva de la libertad corporal (f. 4 cuaderno de habeas corpus).

La Corte procede a determinar si la medida cautelar atacada cumple con los requisitos que establecen la Constitución y la ley.

Según la resolución que ordena la detención preventiva de López Escobar, la medida restrictiva de libertad se fundamenta en la presunta comisión de delitos contra la salud pública relacionados con drogas, que lleva aparejada pena mínima superior a los dos años de prisión (f. 13 antecedentes).

Como elemento allegado al expediente para la comprobación del hecho punible se tiene la incautación de 109 comprimidos al señor López Escobar y 90 comprimidos a Jorge Vela, los cuales se disponían transportarlos en el vuelo 310 de COPA con destino a Guatemala (vid f. 2 cuaderno de antecedentes).

Sometida a la prueba de campo resultó positiva para la determinación de heroína, (vid. f. 9 antecedentes).

Como elemento de prueba que milita en el expediente contra el sumariado, consta el hecho de que su equipaje contenía 109 comprimidos, contentivos de heroína (vid . f. 2 antecedentes).

No obstante, al rendir declaración indagatoria López Escobar niega su participación en el ilícito y manifiesta que Jorge Vela fue "...la persona que chequeo las MALETAS, y fue donde él CHEQUEO una maleta de él a mi nombre y les habia (sic) puesto JUGUETES a las MALETAS, con drogas cosa que no sabía, pero él fue la persona que llevó los JUGUETES, recuerdo que él si me hizo el comentario o sea JORGE VELA, de que le iban a dar una plata por llevar unos juguetes pero le conteste que no me prestaba para eso...porque me dio a entender que era droga..."(Cfr. f. 71 cuaderno de antecedentes, subraya la Corte).

Por otro lado, Jorge Vela al rendir indagatoria manifestó que los comprimidos con heroína se los entregaron aquí en Panamá, para transportarlos a Guatemala, pero en el aeropuerto chequearon una de sus maletas a nombre de Fernando López (vid f. 87 antecedentes) "...pero las dos maletas donde estaban los comprimidos eran mías..." (Cfr. f. 90 antecedentes). Agrega, que no le hizo comentarios a Fernando López de ninguna droga (Vid f. 90).

Se trata de una investigación en estado incipiente, pero en la misma ya se desprenden indicios de responsabilidad en contra de Fernando López Escobar.

La Corte ha señalado en reiterada jurisprudencia que "en materia de delitos contra la salud pública, los indicios antes mencionados revisten gravedad para la adopción de la medida cautelar de privación de la libertad, sin perjuicio de que en el curso de la investigación se incorporen otros medios probatorios que acrediten lo contrario y confirmen la versión de Fernando López Escobar (Cfr. Sentencias del Pleno de 9 de mayo de 1997, 22 de febrero de 2000 y 24 de abril de 2000).

Como quiera que la providencia que decreta la detención preventiva cumple con lo preceptuado por los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, corresponde entonces mantener la medida cautelar atacada.

Por las consideraciones anteriores, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención de Fernando López Escobar y en consecuencia ORDENA que sea puesto a órdenes del Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CESAR A. PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) ROGELIO A. FABRAGA ZARAK (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRACESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ELIECER JAVIER LEREN VEGA CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Mario Andrés Ballesteros Domínguez, presentó ante el Pleno de la Corte Suprema, acción de hábeas corpus a favor del Sr. ELIÉCER JAVIER LEREN VEGA, detenido preventivamente en el Centro Penitenciario La Joya, por la

presunta comisión de delito contra la Salud Pública, a órdenes del Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Los antecedentes del caso revelan que LEREN VEGA regresaba del entierro de un amigo, manejando un automóvil Toyota Corolla en compañía de su amigo ORLANDO GONZÁLEZ CASTILLO, cuando recogieron a dos jóvenes en la entrada de Santa Eduviges, una menor de 17 años de edad llamada DENISSE GÓMEZ NIETO "MOCHA", quien se sentó en la parte izquierda posterior del auto, y SIARA SULGEIS CHAVARRÍA CEDEÑO, mayor de edad, y conocida del detenido LEREN VEGA, quien se sentó en el lado derecho trasero del vehículo en cuestión.

Luego, por manejar "de manera sospechosa" fueron detenidos por los agentes de la Policía Metropolitana camino a Pedregal, quienes les hicieron bajar del auto, revisándolo y encontrando en el lado derecho del asiento posterior, una bolsita transparente contentiva de sesenta y cuatro (64) sustancias sólidas color crema, que presumieron era la droga conocida como "piedra"; entonces fueron conducidos al Cuartel de la Policía en Tocumen, donde fueron puestos a órdenes de la Fiscalía de Drogas, y la menor fue remitida a la Policía de Menores.

Sostiene el Licenciado Mario Ballesteros que su representado no está vinculado con el ilícito en investigación, sino que se le trata de vincular por haberse encontrado la droga en el asiento trasero del vehículo que conducía, donde se encontraban las dos jóvenes que había recogido para darles un "aventón"; empero, todos fueron liberados menos ELIÉCER LEREN, a quien se ha mantenido detenido por una presunción de responsabilidad.

Lo anterior, a su juicio, ha violado lo establecido por el artículo 22 de la Constitución Nacional, concerniente a la presunción de inocencia.

Recibida la acción, se libró inmediatamente el mandamiento de hábeas corpus contra el funcionario acusado, quien lo contestó mediante Oficio No. FD2-501-2902-00 de 10 de julio de 2000, señalando en él lo siguiente:

> "1. Sí es cierto que se ordenó la detención preventiva del señor ELIECER LEREN VEGA, la misma fue decretada mediante Resolución de este Despacho, fechada 23 de Junio de 2000.
>
> 2. La orden decretada contra el señor ELIECER LEREN VEGA, surge luego de que las autoridades policiales se encontraban de recorrido por el sector de Santa Eduviges, observaron un vehículo Toyota, Corolla de color azul, con matrícula 325487 que se desplazaba en actitud sospechosa, por lo que procedieron a su retención a la altura del Centro de Rehabilitación de Menores Gómez y Gómez, procedieron a bajar del vehículo a sus ocupantes y a verificar el mismo, encontrando debajo del puesto trasero lado derecho, una bolsita transparente que en su interior contenía sesenta y cuatro (64) sustancias sólidas de color crema, que se presume sea droga (piedra).
>
> Ante los hechos en comento, este Despacho consideró que existían suficientes méritos para ordenar la declaración indagatoria de los ciudadanos SIARA SULGEIS CHAVARRIA CEDEÑO, que manifestó que ella y la menor de edad DENISSE GOMEZ NIETO se encontraban sentadas en el asiento trasero del vehículo, cuando la policía los retuvo y que la menor se puso nerviosa y que fue la última en descender del automóvil y que la droga incautada le pertenece a la menor DENISSE GOMEZ NIETO y que mas(sic) nadie tenía conocimiento de que ella mantenía dicha droga.
>
> Al rendir declaración indagatoria ELIECER LEREN VEGA manifestó que el día de los hechos se encontraba en el vehículo con ORLANDO GONZALEZ CASTILLO y recogieron a SIARA CHAVARRIA CEDEÑO en compañía de una menor de edad, a la cual no conoce, pero que estando en la

jefatura la menor, le dijo aparte que no se preocupara que eso era de ella y que se iba hacer responsable de eso.

ORLANDO GONZALEZ CASTILLO, al momento de rendir indagatoria manifiesta que el día de los hechos sacaron del asiento de la parte de atrás del vehículo, un envoltorio del cual desconocía su existencia, ya que se encontraba sentado en la parte delantera del automóvil y no sabe a quien(sic) le pertenece la droga incautada, pero sí observó que la menor de edad estaba nerviosa.

Se giró Oficio al Ministerio de la Juventud, la Mujer, La Niñez y la Familia, pero aún no hemos recibido respuesta.

La sustancia incautada fue remitida al Laboratorio Especializado de Análisis del Departamento de Criminalística de la Policía Técnica Judicial, a fin de ser evaluadas y así determinar si se trata de sustancias ilícitas, pero aún no nos ha llegado el resultado.

Los fundamentos de derecho sobre los cuales se ha basado la detención preventiva del señor ELIECER LEREN VEGA, se encuentra consagrado en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

3. El señor ELIECER LEREN VEGA, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario La Joya, a órdenes de este Despacho, quien a partir de la fecha será puesto a órdenes de esa Alta Corporación de Justicia mediante el Oficio-FD2-T01-2903."

Ahora bien, como el Informe no reveló el peso de la sustancia ilegal incautada, el Magistrado Sustanciador ordenó al Secretario General de la Corte, que solicitara al Director de la Policía Técnica Judicial que remitiera la certificación del peso de la misma, información que presentó con la Nota N° SG-2421-00 de 19 de julio de 2000, y que reveló que el peso de los 64 fragmentos de la droga correspondía a 4.64 gramos de cocaína (crack).

Advierte la Corte que el único indicio que relaciona a ELIÉCER LEREN es el hallazgo por parte de las autoridades policiales, de la bolsita plástica transparente contentiva de los 64 trocitos de crack, encontrados en la parte central del asiento posterior del automóvil conducido por el detenido.

Todas las declaraciones son coincidentes en señalar que la sustancia era propiedad de la menor DENISSE GÓMEZ NIETO, y que ninguno de los otros ocupantes tenía conocimiento de la existencia de dicha sustancia.

Tanto ORLANDO GONZÁLEZ como ELIÉCER LEREN manifestaron no conocer a la menor, quien era amiga de SIARA CHAVARRÍA a quien conocían de poco tiempo; además, los tres coincidieron en que la droga era propiedad de la menor GÓMEZ NIETO, cuyo testimonio no se conoce en este expediente.

Por todas las consideraciones expuestas, considera el Pleno que los argumentos de la Fiscalía Segunda Especializada en Delitos Relacionados con Drogas no son suficientes para mantener la detención preventiva de ELIÉCER LEREN, por tanto, lo que procede es declarar ilegal tal medida.

Esta decisión no debe entenderse como un pronunciamiento de esta Magistratura que desvincule a la prenombrado del delito que se le imputa; quedando sujeto al resultado del proceso penal que se le sigue, y sin perjuicio de que sea detenido nuevamente si se presentan nuevos elementos que así lo ameriten.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ILEGAL la detención de ELIÉCER JAVIER LEREN VEGA, en consecuencia, ORDENA que sea puesto inmediatamente en libertad, siempre y cuando no sea parte de otro proceso penal

cuya participación amerite detención preventiva.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE HIPÓLITO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, ELIGIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ Y JULIO ELÍAS JALLER GONZÁLEZ, CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Donald D. Delgado C., interpuso el 10 de agosto de 2000, ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, acción de habeas corpus a favor de Hipólito Martínez González, Eligio Martínez González y Julio Elías Jaller González y contra el Director del Departamento Nacional de Migración, y el 17 de agosto de 2000, el licenciado Delgado presentó escrito de desistimiento de dicha acción de habeas corpus.

Como quiera que toda persona que haya entablado una demanda, promovido un incidente o interpuesto un recurso, puede desistir expresa o tácitamente conforme lo establece el primer párrafo del artículo 1073 del Código Judicial, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia considera que debe acogerse al desistimiento presentado.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO de la acción de habeas corpus presentada a favor de HIPÓLITO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, ELIGIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ y JULIO ELÍAS JALLER GONZÁLEZ, contra el Director Nacional de Migración y ordena el archivo del expediente.

Notifíquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES R.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS PRESENTADA POR MARTÍN CAICEDO MARTÍNEZ A FAVOR DE ELCELIO ESPINO CONTRA LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGA. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Martín Caicedo Martínez ha presentado acción de habeas corpus a favor de Elselio Espino Martínez y en contra del Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Droga.

Señala el activador judicial que su defendido fue detenido luego de bajar del autobús en Veracruz y al "...momento de su detención no se le encontró en su poder sustancia ilícita alguna..."(Cfr. f. 1 cuaderno de habeas corpus).

Agrega que Espino Martínez había sido revisado por los Agentes de la Policía Nacional, antes de subir al bus y no le encontraron nada en su poder por lo que se le permitió seguir, posteriormente los agentes le dieron persecución al bus logrando bajarlo del mismo y le informaron que "...habían encontrado cierta cantidad de sustancia ilícita y como él había pasado por el lugar, tenían que ser de su propiedad, a lo cual el sindicado se negó..."(Cfr. f. 1 cuaderno de habeas corpus).

Por admitida la acción constitucional se libro el mandamiento de habeas corpus el cual fue contestado por la autoridad requerida mediante oficio FD1-T00-3202-2000 del 10 de agosto de 2000, visible a fojas 5-7 del cuaderno de habeas, en la cual admite que ordenó la detención preventiva de Espino Martínez por medio de resolución de 26 de julio de 2000.

DECISION DE LA CORTE

Procede el Pleno de la Corte Suprema de Justicia a determinar si la medida restrictiva de carácter personal impuesta a Elselio Espino Martínez cumple con los requisitos que al efecto señalan la Constitución y la Ley.

Según se desprende de las constancias procesales, la medida restrictiva de libertad se fundamenta en el delito contra la Salud Pública el cual tiene aparejada pena mínima superior a los dos años de prisión (vid. f. 5 cuaderno de habeas corpus).

Como elemento allegado al expediente para la comprobación del delito se tiene el informe de novedad del Cabo Iro. 13403 Edwin Elías, del 24 de julio de 2000, donde informa que Elselio Espino Martínez se encontraba en forma sospechosa en la Represa cerca del tanque de agua en Veracruz, el cual al observar a la ronda de motorizados No. 049 "...arrojó un emboltorio (sic) de periódico que contenía una bolsita plástica que contenía 93 sustancias compactas y residuos de la misma la cual se presuma sea droga (piedra)..."(Cfr. f. 3 antecedentes).

Sometida a la prueba de campo, 93 sustancias sólidas cremosas, resultaron positiva para la determinación de cocaína-crack (vid f. 12 antecedentes).

Por su parte Elselio Espino Martínez en su declaración indagatoria niega su participación en el ilícito, manifestando que el se encontraba en un terreno en La Represa, al terminar se dirigió a su casa pero unos motorizados lo detuvieron y lo dejaron ir, luego cuando estaba en el bus los motorizados lo detuvieron y lo llevaron a la Sub-Estación de Veracruz (vid. f. 18 antecedentes).

Observa la Corte y tal como señala la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Droga, que se trata de una investigación en estado incipiente pero en la misma se evidencian graves indicios que vinculan a Elselio Espino Martínez como el autor del delito contra la salud pública.

Como quiera que la orden de detención fue proferida por autoridad competente y cumple con los requisitos que exigen tanto la Constitución como la Ley, procede la Corte a declarar su legalidad.

Por las razones anteriores la CORTE PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL, la orden de detención impuesta a Elselio Espino Martínez y ORDENA, que sea puesto nuevamente a ordenes de la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CESAR A. PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) ROGELIO A. FABRAGA ZARAK (fdo.) JOSE MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRACESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FERNANDO ALBERTO CRUZ BRAVO CONTRA LA JUEZ PRIMERA DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA DE PANAMA. APELACION. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación, ingresó al conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la acción de habeas corpus interpuesta por la firma de abogados CHUNG, RAMOS Y RIVERA, en favor del señor FERNANDO ALBERTO CRUZ, contra la Juez Primera de la Niñez y de la Adolescencia de Panamá.

Encontrándose el expediente de marras en el despacho de la Magistrada Sustanciadora, a fin de resolver el mérito de la alzada, el proponente ha desistido de la misma, en escrito recibido en la Secretaría General de la Corte Suprema, visible a foja 29 del expediente, que se añade al legajo.

Como quiera que "toda persona que haya entablado una demanda, promovido un incidente o interpuesto un recurso puede desistir expresa o tácitamente" conforme lo establece el primer párrafo del artículo 1073 del Código Judicial, esta Superioridad considera que debe acogerse el desistimiento presentado.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO del recurso de apelación propuesto dentro de la acción de Habeas Corpus presentada a favor de FERNANDO CRUZ BRAVO, y ORDENA que sea puesto nuevamente a órdenes del Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES R.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE HECTOR MANUEL AROSEMENA CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de acción de habeas corpus verbal

presentada por Benito Bethancourt a favor de Hector Manuel Arosemena contra el Director General de la Policía Nacional.

Señala el activador judicial que Arosemena se encuentra detenido en las instalaciones de la Policía Nacional, y desconoce las razones de su detención (vid f. 1).

Por acogida la iniciativa procesal se libro mandamiento de habeas corpus, el cual fue contestado por la autoridad demandada mediante nota AL-2656-00 del 22 de agosto de 2000 (f. 4).

En su informe la autoridad acusada señala que no ha ordenado la detención de Hector Manuel Arosemena ni por escrito ni verbalmente, por lo que no se encuentra bajo su custodia (vid. f. 4).

Por acreditada esta circunstancia es pertinente la aplicación del mandato del artículo 2572 del Código Judicial, a lo que se procede.

En consecuencia la CORTE SUPREMA, PLENO, en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA el CESE del procedimiento en esta causa.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA ZARAK (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LIZ EVELYN SANTAMARIA CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor Uzziel Morán Toribio ha interpuesto acción de habeas corpus a favor de Liz Evelyn Santamaría contra el Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Acogido el recurso se libró mandamiento de habeas corpus contra el Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas quien, mediante el oficio FD1-T00-3200-2000 de 8 de agosto de 2000, informó lo siguiente:

> "PRIMERO: Sí, es cierto que esta agencia de instrucción ordenó la detención preventiva de la ciudadana LIZ EVELIN SANTAMARIA HERRERA, mediante resolución judicial emitida en forma escrita, fechada 14 de julio de 2000 y decretada por el Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.
> SEGUNDO: Antes de esbozarle los motivos o el fundamento de hecho en que basamos la detención preventiva de la señora LIZ EVELIN SANTAMARIA HERRERA, presunta infractora de un delito CONTRA LA SALUD PUBLICA, relacionada con drogas, expondremos en forma sucinta la génesis del delito infringido en esta ocasión:
> "HECHOS QUE MOTIVAN LA INVESTIGACION"
> "El pasado 12 de noviembre de 1999, aproximadamente a las 16:40 horas, unidades de la Policía Nacional, encontrándose de recorrido por los alrededores del Sector La Loma (Curundú), observaron la

presencia en el área, de dos sujetos, entre éstos, una femenina la cual vestía sweters color rojo y pantalón jeans, y un ciudadano , el cual mantenía un paragua abierto, ya que se encontraba lloviendo. Al notar ambos la presencia policial en el área, mostraron actitud de nerviosismo, por lo que fueron retenidos y trasladados a la estación policial por los agentes captores. Al llegar a la Estación de Policía, la femenina (sic) de nombre LIZ EVELIN SANTAMARIA HERRERA, manifiesta que mantenía dentro del sweter (sic) entre el sostén, cierto (sic) cantidad de sustancia ilícita, por lo que procedió a sacárselo, tratándose de un cartucho plástico en (sic) cual contenía dentro un total de ciento cincuenta y dos (152) sustancias sólidas de color cremosa las cuales se presumían fueran drogas (PIEDRA). Posteriormente la joven de nombre LIZ EVELIN, manifiesta a las unidades captoras que la verdadera dueña de dicha sustancia era una joven que se encontraba en la tienda que da frente al cuartel de Policía de Curundú, quien vestía un juego de flores (sic) a colores de blusa y pantalón. Manifestó LIZ EVELIN, que la misma (MARIA EUGENIA CORDOBA) era la persona que le había mandado comprar la droga en dicho sector (Curundú). Al proceder las unidades policiales a retener a dicha ciudadana, la cual coincidía con las descripciones dadas por la informante, respondió al nombre de MARIA EUGENIA CORDOBA CORREA, quien al ser revisada mantenía en su poder la suma de veinticuatro ($24.00) balboas en efectivo. El sujeto retenido en compañía de SANTAMARIA HERRERA, resultó llamarse OMAR ALBERTO REINA SANCHEZ, el cual mantenía en su poder un cuchillo plateado de mesa, estos dos últimos no manifestaron nada al respecto."

Entre los elementos probatorios que motivaron al despacho a ordenarle la detención preventiva a la sindicada, LIZ EVELIN SANTA MARIA HERRERA, tenemos:

*Informe de novedad, fechados 12 de noviembre de 1999, visible a fojas 3-4 del sumario.

*Señalamientos directos efectuados por los agentes captores, así como las sendas diligencias judiciales ejecutadas.

*Circunstancias de modo, tiempo y lugar, de las que se desprende el solo hecho de encontrarse la sumariada (LIZ SANTAMARIA) en el radio de acción donde se dieron los hechos (Indicio de Presencia y Oportunidad), aunado a que la misma al momento de su retención mantenía en su poder el cuerpo del delito, el actual ascendió a 31.00.

*Mala justificación de la imputada LIZ EVELIN SANTAMARIA, al momento de efectuar sus descargos.

*Diligencia de Inspección Ocular en el lugar de los hechos, en el cual se corroboró la vinculación existente entre MARIA CORDOBA, OMAR REINA Y LIZ SANTAMARIA y la no existencia de la llamada XIONARA, persona ésta, a quien supuestamente SANTAMARIA había ido a visitar el pasado 12 de noviembre de 1999, en el barrio de Curundú.

*Diligencia de Careo, entre LIZ SANTAMARIA vs ROGELIO CAMPBELL (agente captor), de la cual se desprende que en efecto, las versiones dadas por los agentes captores son las correctas, ya que la sumariada LIZ SANTAMARIA, se retracta de todo lo dicho con anterioridad, externando que no había confesado lo realmente ocurrido en vista de que estaba en libertad, señalando de inmediato señalamiento contra MARIA EUGENIA CORDOBA CORREA, como la única dueña del mortal tóxico.

*Diligencia de careo, entre MARIA EUGENIA CORREA y LIZ SANTAMARIA. (ver fojas 116-118)

*Aunado al Análisis de la Sustancia ilícita, la cual dio resultados positivos para la determinación de COCAINA en 31.00 gramos (ver fojas 66) y a los señalamientos efectuados por los agentes HIPOLITO HERNANDEZ y ROGELIO CAMPBELL, en donde coinciden en manifestar que SANTAMARIA, al momento ser (sic) retenida en compañía de OMAR REINA, mantenía entre los bustos cierta cantidad de sustancia ilícita, presumiblemente droga (COCAINA).

Pruebas estas, suficientes y determinantes para ordenar la detención preventiva de la sumariada LIZ SANTAMARIA, quien se encuentra vinculada con el delito in examine, toda vez que las circunstancias de modo, tiempo y lugar así lo indican.
El fundamento de derecho para sustentar la detención preventiva de la sumariada LIZ EVELIN SANTAMARIA HERRERA, se encuentra consagrado en el artículo 2148 y 2159 del Código Judicial Patrio.
TERCERO: En la actualidad la sindicada LIZ EVELIN SANTAMARIA HERRERA, se encuentra filiada en este despacho, pero posteriormente, mediante oficio FD1-T00-3201-00 fechado 08 de agosto de los corrientes, quedará a órdenes de la Honorable Corte Suprema de Justicia." (fs.5-8)

Por su parte, el señor Uzziel Morán Toribio señala que independientemente de la posible vinculación de la señora LIZ EVELYN SANTAMARIA HERRERA con el hecho punible que se le pretende endilgar es evidente que se le están conculcando garantías constitucionales y legales, toda vez que el artículo 2147-D del Código Judicial señala que no se ordenará la detención preventiva de una mujer en estado de embarazo o cuando amamante a su propia prole.

Por medio de providencia de 14 de julio de 2000, visible a fojas 123 y 124 de las sumarias, la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas ordenó la detención preventiva de LIZ EVELYN SANTAMARÍA HERRERA.

Advierte el Pleno que se trata de un proceso iniciado de oficio, por cuanto que a la señora LIZ EVELYN SANTAMARÍA HERRERA se le imputa delito contra la Salud Pública.

Consta de fojas 3 a 4 de las sumarias el informe de novedad de 12 de noviembre de 1999 suscrito por el Cabo 2do. 14526 Rogelio Campbell, de servicio en la Unidad de Control de Multitudes, cuarto pelotón, el que señala que estando en recorrido por los alrededores del sector La Loma observaron a una joven vestida con un "sweater" de color rojo y un pantalón jeans y que venía acompañada por un sujeto que llevaba un paraguas, pero ésta al notar la presencia policial se mostró nerviosa, razón por la cual se procedió a detenerla junto con su acompañante. Agrega que al llegar a la sala de guardia de la policía de Curundú, se le preguntó si llevaba una sustancia ilícita, a lo que la mujer respondió que sí y saco de su sostén un cartucho plástico que contenía 152 sustancias sólidas de color crema que se presumiblemente droga (piedra). Señala que también se le encontró cuatro balboas (B/.4.00) en billetes de un balboa (B/.1.00). Indica que la joven respondía al nombre de Liz Evelyn Santamaría Herrera y que manifestó que una joven que vestía un conjunto de blusa y pantalón de flores rojo, blanco y azul era la que le había encomendado a comprar la sustancia ilícita. Añade que una vez encontrada la joven descrita por Liz Evelyn SantaMaría, quien dice llamarse María Eugenia Córdoba Correa, se le llevó a la sala de guardia y a la misma se le encontró la suma de veinticuatro balboas (B/24.00) en efectivo los cuales estaban fraccionados en un billete de diez balboas (B/10.00), dos billetes de cinco balboas (B/.5.00) y cuatro billetes de un balboas (B/.1.00).

De foja 73 a 77 de las sumarias reposa la declaración jurada rendida por Hipólito Hernández Chávez en la que señala que en el sector de la Loma vieron a una pareja a quien se les pidió sus documentos y como se encontraban en actitud sospechosa los trasladaron a la estación de policía. Agrega que estando en la estación la mujer sacó voluntariamente una bolsa plástica transparente que contenía 152 fragmentos de una sustancia sólida la cual se presumía que era droga (piedra) y manifestó que la droga era de una joven que vestía un juego de sweater y pantalón color blanco con flores azul y roja y que estaba en la tienda al frente de cuartel. Añade que se procedió a capturar a la mujer, la cual al percatarse de que habían detenido a Liz Evelyn Santamaría, trató de irse y abandonar el lugar.

De fojas 16 a 19 reposa la declaración indagatoria rendida por Liz Evelyn Santamaría en la que señala que el doce de noviembre de 1999 iba en compañía de

María Eugenia Córdoba a visitar a otra amiga que vive por el Chorrillo de nombre Xiomara, la cual vive en Curundú, pero que ésta no se encontraba. Agrega que su amiga María Eugenia Córdoba se quedó en una tienda esperándola y que cuando estaba caminando por una vereda se le acercó un hombre, el cual llevaba un cuchillo y la amenazó para que guardara el cartucho que contenía la droga. Por otro lado, en la ampliación de la declaración indagatoria de Liz Evelin Santamaría (fs.102-106), ésta manifiesta que acompañó a María Eugenia Córdoba a Curundú y estando en la entrada del área de transporte y talleres estaba Omar Reina a quien María Eugenia Córdoba le entregó una cantidad de plata en efectivo. Agrega que María Eugenia Córdoba le pidió el favor de que le buscara la droga porque le debía dinero a una muchacha del área y se la llevara a la tienda que estaba frente al cuartel de policía. Indica que estaba caminando con Omar Reina cuando vieron a unos policías y éste le entregó el paquete de droga.

Se observa de fojas 108 a 113 de las sumarias la declaración indagatoria de María Eugenia Córdoba en la que dice que su amiga Liz Evelin Santamaría le pidió que la acompañara a la casa de Xiomara Rodríguez a buscar una ropa, pero como le dolía el pie porque se había caído se quedó en la tienda que está en frente del cuartel de policía de Curundú. Agrega que comenzó a llover y alrededor de una hora después salió su amiga de una esquina, en la que se había metido, con un joven que llevaba un paraguas. Indica que su amiga le hizo señas para que fuera al cuartel y cuando se dirigía para el cuartel vino un policía a buscarla. Cuando llego al cuartel vio que Liz Santamaría se sacaba un paquete de los senos y le hacía señas de que el paquete era del muchacho. Finalmente señala que la droga no era suya, sino de Liz Evelin Santamaría y que a Omar Reina lo conoció el día que la detuvieron en el cuartel de policía.

De fojas 115 a 117 de las sumarias se observa la diligencia de careo entre Liz Evelin Santamaría y María Eugenia Córdoba en la que la señora Santamaría se ratifica en lo dicho en sus declaraciones, en el sentido de que la droga que se le encontró en su poder, era de María Eugenia Córdoba quien le pidió que se la fuera a buscar.

De igual forma, consta a foja 66 de las sumarias, la diligencia de prueba de campo practicada por la División de Estupefacientes de la Policía Técnica Judicial a las muestras incautadas, la cual dio resultado positivo para la determinación de cocaína en la cantidad de 31.00 gramos.

Del análisis del expediente el Pleno considera que el informe de novedad de 12 de noviembre de 1999 suscrito por el Cabo 2do. 14526 Rogelio Campbell, la declaración jurada rendida por Hipólito Hernández Chávez y la diligencia de prueba de campo practicada por la División de Estupefacientes de la Policía Técnica Judicial a las muestras incautadas, son indicios suficientes que vinculan a María Eugenia Córdoba con el hecho que se le imputa.

Sin embargo, advierte el Pleno que el Instituto de Medicina legal, mediante oficio No.007-20,008 de 25 de julio de 2000 (fs.11-12), certifica que Liz Evelyn Santamaría actualmente tiene un embarazo de más o menos 28/29 semanas y que la fecha probable de parto es el 23 de octubre de 2000.

Con respecto a lo expuesto por el señor Uzziel Morán Toribio, observa el Pleno que, efectivamente, el artículo 2147D del Código Judicial no permite la detención preventiva de la mujer que esté embarazada, siempre que no exista exigencia cautelar de excepcional relevancia.

Luego del análisis de las circunstancias procesales, el Pleno concluye que en el presente caso no concurren tales exigencias cautelares, toda vez que no hay evidencias de que exista peligro de que la imputada intente darse a la fuga, debido a que se trata de una ciudadana panameña, con domicilio en este país.

Cabe destacar que la sustitución de la detención preventiva por otra medida cautelar distinta, no desvincula a la señora LIZ EVELYN SANTAMARIA de su posible responsabilidad en el delito que se investiga ni de que, posteriormente, se le

llame a juicio por el mismo, si existieran méritos suficientes.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la orden de detención preventiva de LIZ EVELYN SANTAMARIA y la SUSTITUYE por las medidas cautelares de carácter personal que establecen los literales a, b, y c del artículo 2147B del Código Judicial, consistentes en la prohibición a la imputada de abandonar el territorio de la República sin autorización judicial, la obligación de residir dentro de la jurisdicción del Distrito de Panamá y el deber de presentarse cada quince días ante el juez de la causa.

Notifiquese y Cumplase

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CLARA BEATRÍZ ATENCIO CONTRA LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ, APELACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación, ingresa al Pleno de esta Corporación de Justicia, resolución de 12 de julio de 2000, proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, mediante la cual se declara legal la detención preventiva de CLARA BEATRÍZ DÍAZ ATENCIO, sindicada por delito Contra La Salud Pública.

Una vez notificada dicha resolución, la licenciada ODETT VALLE, defensora de la sindicada DÍAZ ATENCIO, apela, por lo que se concede en el efecto suspensivo a fin de que sea resuelta la alzada.

LA RESOLUCIÓN APELADA

El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, mediante resolución de 12 de julio de 2000, en su parte medular expuso lo siguiente:

> "Luego de conocer los argumentos de la demandante y confrontados con las constancias procesales de autos se puede advertir que la resolución dictada por la funcionaria acusada cumple con los requerimientos legales, ya que se encuentra debidamente motivada, proviene de una autoridad competente, se menciona el delito contra la salud pública, y se encuentran incorporados los elementos probatorios que la vinculan con el ilícito investigado, como el señalamiento que le formula el acusado Martín Hall y el testimonio de Anays de Espinoza quien la describe como la persona que en compañía de "Purro" le propusieron recoger el paquete de la pensión Fanita." (fs.)

CONSIDERACIONES DEL PLENO

El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial nos remite el sumario seguido a CLARA BEATRÍZ DÍAZ ATENCIO, sindicada por Delito Contra La Salud Pública, constantes de 81 fojas útiles, por lo que nos corresponde, como Tribunal

de Habeas Corpus, examinar la situación procesal de la beneficiada con la presente acción a fin de examinar si se han cumplido las garantías constitucionales y legales para mantenerla privada de su libertad corporal.

La génesis de este proceso tiene lugar a través de los informes de vigilancia y seguimiento (f. 2), realizados por la Dirección de Información e Investigación Policial, Departamento Anti-Drogas de la Policía Nacional, en donde se tiene conocimiento que un sujeto apodado "POLLI", de tez triguella, estatura mediana, contextura gruesa, y una mujer de nombre CLARA BEATRIZ DÍAZ, de aproximadamente 23 años de edad, semi obesa, con diente de oro y cabello amarillo, iban a viajar en un bus de la ruta PADAFRONT con dirección a la provincia de Chiriquí, con el fin de transportar sustancias ilícitas.

Dicha información fue corroborada por el cabo 2° 14440 OMAR GONZÁLEZ, cuando fue informado por unidades de turno del peaje de la autopista Arraiján-Chorrera, que aproximadamente a las 21:00 horas del 25 de mayo de 2000, una pareja con las descripciones dadas habían abordado en compañía de un menor de edad el auto bus de la empresa PADAFRONT con destino a Chiriquí. (f. 3)

El día 26 de mayo de los corrientes, la Fiscalía Delegada Especializada en Delitos Relacionados con Drogas a solicitud de la DIIP de la zona de Policía de Chiriquí, efectúan una diligencia de allanamiento en la Pensión Fanita, cuarto # 68, ubicada en la provincia de Chiriquí, el cual era ocupado por MARTÍN ENRIQUE HALL y CLARA BEATRÍZ DÍAZ ATENCIO. (f. 6)

Al efectuarse dicha operación, se logró encontrar debajo de una cama 3/4, un estuche para cassette de VHS, marca Sankey, que contenía cuatro (4) tortas de sustancias color crema, las cuales tres (3) de ellas estaban fragmentadas (fs. 7-10); luego al realizarse la prueba de campo, arrojó resultados positivos para la determinación de droga conocida como "cocaína". (f. 11)

Rinde declaración indagatoria el señor MARTÍN ENRIQUE HALL FLORES (fs. 32-35), manifestando, "yo alcancé a ver que CLARA habló algo con una señora gorda, de estatura mediana, piel blanca, cabello negro, esta señora le pasó a CLARA un cartucho de rayas rojas el cual cubrió con un periódico y lo entregó a CLARA quien se lo puso debajo del brazo, llevando al bebé en el otro brazo y camino hacía el taxi donde le dijo al chofer que nos llevara nuevamente a la Pensión donde estábamos hospedados."

Agrega, que al llegar a la pensión le dijo que iba a bañar al bebé, para luego hacer un mandado donde un sujeto apodado "PURRO".

Por otra parte, rinde declaración indagatoria la señora ANAYS HERNÁNDEZ DE ESPINOZA (fs. 27-31), señalando, que un sujeto apodado "CAMBRY", quien se encontraba en compañía de "PURRO" y una muchacha con un bebé, le propuso que si quería ganarse diez balboas (B/. 10.00) y "unas migas de crack", "le pregunté "que tengo que hacer" y me dijo que tenía que llegar con él a la Pensión "Fanita" y preguntar por un tal "HALL" y por el cuarto "68" y que si "HALL" no se encontraba pidiera la llave del cuarto..." (f. 29)

De lo expuesto, debemos señalar, que existen serios indicios que vinculan a la imputada DÍAZ ATENCIO con la supuesta comisión del delito investigado, toda vez que de los informes de vigilancia, la diligencia de allanamiento y las declaraciones de MARTÍN ENRIQUE HALL FLORES y ANAYS JENNIFER HERNÁNDEZ, se desprenden suficientes elementos probatorios que la ubican dentro de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la escena del ilícito junto al sujeto apodado "PURRO". Además, la procesada es descrita a lo largo del expediente por sus características físicas, aunado al hecho, de que siempre estaba en compañía de un bebé.

Por último, a foja 40-43, se observa, la orden de detención preventiva dictada contra DÍAZ ATENCIO, la cual cumple con los requisitos legales exigidos en el artículo 2148 y 2159 del Código Judicial.

Dadas las consideraciones expuestas, el Pleno de esta Corporación de Justicia, concluye, que existen serios indicios contra la señora CLARA BEATRÍZ DÍAZ ATENCIO para mantenerla privada de su libertad, por lo que la resolución objeto de apelación debe confirmarse.

PARTE RESOLUTIVA

Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución calendada 12 de julio de 2000, proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ ANDRÉS TROYANO (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ELIZABETH CUESTA CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la Acción de Habeas Corpus presentada por el Licdo. JOSÉ MANUEL RESTREPO CARRIZO a favor de ELIZABETH CUESTAS y contra el Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Droga.

EL ACCIONANTE

Señala el Licdo. RESTREPO CARRIZO que el 29 de junio del año que decurre, el Corregidor de Curundú ordenó el allanamiento de la casa 1408, ubicada en el Sector El Águila, Corregimiento de Curundú, Distrito de Panamá, porque se tenía información que en esa residencia había armas de fuego. En dicho inmueble se encontraban MANUEL BALOY y su esposa ELIZABETH CUESTAS.

En el acta de allanamiento se indica que en la cocina, se encontró un cartuchito de color amarillo que contenía en su interior 4 envoltorios transparentes y 6 envoltorios de papel aluminio, que contenía una sustancia de color blanco, que se presume sea cocaína. Además, se señala que una unidad de policía visualizó a una persona que arrojó desde el interior de la casa allanada una bolsa, la cual contenía una sustancia presuntamente la droga conocida como marihuana, sin dar nombre de quién pudo haber sido el responsable de dicha acción. (F.2)

MANUEL BALOY manifestó que la sustancia incautada era de su propiedad y fue detenido por las autoridades. Al día siguiente, 30 de junio de 2000, es detenida la señora ELIZABETH CUESTAS en los predios del Edificio Avesa, lugar donde se encontraba llevando alimentos y aseando a su esposo, quien está incapacitado por una herida que recibió en la pierna. La detención de la señora CUESTAS obedeció a un informe de policía que señala que ésta es la responsable de las sustancias ilícitas encontradas fuera del inmueble allanado el día 29 de junio y se había dado a la fuga. (F.2)

El accionante expresa que la señora CUESTAS al ser indagada por las autoridades desconoció los cargos en su contra, pues el día en que se efectuó el allanamiento ella se encontraba junto a su esposo, como consta en el acta de allanamiento y después de la detención de su cónyuge se acercó varias veces al cuartel de Policía de Curundú para llevarle alimentos y asearlo.

De otro lado, el abogado explica que en el acta de allanamiento no consta que un miembro de la Policía Nacional observó específicamente a su poderdante arrojar del interior de la casa una bolsa con sustancias ilícitas, que se haya dado a la fuga o que tuvo alguna participación o responsabilidad con la supuesta droga encontrada fuera de la residencia 1408. (Fs.3-4)

El accionante manifiesta que el informe confeccionado por los agentes de la Fuerza Pública de la Sub-estación de Curundú, no constituye evidencia suficiente que establezca la responsabilidad de su poderdante y ni en el acta de allanamiento ni en otro documento consta cargo alguno en su contra, por lo que no se cumple los requerimientos del artículo 2148 y 2159 del Código Judicial necesarios para mantener la medida cautelar que pesa contra ELIZABETH CUESTAS.

Finalmente, el accionante manifiesta que el Acta de allanamiento no cumple con lo establecido en los artículos 2185, 2191 y 2192 del Código Judicial, lo que contraviene el debido proceso consagrado en el artículo 32 de la Constitución Nacional y, por tanto, todas las pruebas que emanaron de esta diligencia de allanamiento resultan ilegales.

LA AUTORIDAD DEMANDADA

El Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Droga, al contestar el mandamiento de Habeas Corpus, manifestó que sí ordenó la detención de ELIZABETH DEL CARMEN CUESTAS RODRÍGUEZ, mediante resolución motivada de 3 de julio de 2000, en la que se indica que las razones de hecho que motivaron la privación de libertad de la prenombrada es porque su residencia fue allanada y se encontró una sustancia ilícita, presuntamente cocaína. Además, consta en informe de novedad suscrito por los agentes captores que la señora CUESTAS RODRÍGUEZ se dio a la fuga, arrojando por una abertura de la residencia un cartucho que contenía hierba seca, que se presume sea marihuana. (F.10)

De igual manera se refiere al contenido de las declaraciones indagatorias rendidas por ELIZABETH DEL CARMEN CUESTAS RODRÍGUEZ y MANUEL ANSELMO BALOY URRUTIA. (Fs.11-12)

Por último, el Fiscal señala que el fundamento de derecho para ordenar la detención preventiva de la señora ELIZABETH DEL CARMEN CUESTAS RODRÍGUEZ se encuentra consagrado en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial. (F.12)

CONSIDERACIONES DEL PLENO

Esta Superioridad procede al análisis de las constancias procesales contenidas en el cuadernillo de instrucción remitido por el Ministerio Público, en vías de determinar si la medida cautelar personal aplicada a ELIZABETH DEL CARMEN CUESTAS RODRÍGUEZ se ajusta o no enteramente a las exigencias legales correspondientes.

Primeramente, se tiene el acta de allanamiento en la cual se describe la diligencia llevada a cabo en la residencia de BALOY en la que se indica que "una unidad de policía visualizó a una persona que arrojó del interior de esta casa una bolsa hacia afuera", en cuyo interior se encontró unos envoltorio de color transparente que ascienden a la cantidad de 18 sobres con una sustancia blanca en su interior; 13 envoltorios en papel aluminio con una sustancia blanca en polvo; 1 bolsa plástica transparente en un papel aluminio contentiva de una sustancia en polvo color blanco; 1 cartucho de papel color chocolate que contiene una hierba de color chocolate que se presume sea marihuana. (F.4)

El Cabo I° MARCOS VELASCO, miembro de la Sub-DIIP, participó en la diligencia de allanamiento y manifestó en su informe de novedad que la señora ELIZABETH CUESTAS se encontraba en la residencia allanada y se le observó tirando un paquete por una abertura que tiene la pared de la cocina; el agente salió de la residencia y al revisar la parte posterior de la misma, exactamente a la altura de la cocina donde fue arrojado el paquete, encontró una bolsa plástica de rayas celestes y blancas, describiendo que en su interior contenía envoltorios con polvo blanco e hierba seca de color chocolate. (Fs.9-10)

Agrega el Cabo VELASCO que la señora CUESTAS aprovechó que se estaba revisando la residencia y desapareció de la misma. (F.10)

Lo anterior es corroborado por el Teniente RAFAEL ALVAREZ en informe de novedad que reposa de foja 7 a 9 de las sumarias.

La sustancia encontrada en el cartucho que fue arrojado del inmueble allanado fue sometida a la prueba de campo dando resultado positivo para la presencia de la droga "COCAÍNA" y "MARIHUANA". (F.17)

Por su parte, ELIZABETH DEL CARMEN CUESTAS RODRÍGUEZ al momento de hacer sus descargos manifestó que el día del allanamiento se encontraba en su casa aseando a su esposo que tiene ambas piernas enyesadas; en ese momento llegó la Policía y le dijeron que iban a efectuar un allanamiento, le mostraron los documentos y ella les permitió entrar. Al revisar la cocina encontraron unos pases de cocaína, los que eran para el consumo de su esposo, no se encontró nada más. (Fs.26-27)

Los funcionarios le dijeron a la señora CUESTAS RODRÍGUEZ que se tenían que llevar al señor BALOY porque era el responsable de la droga; mientras tanto, ella se quedó en la casa bañándose y luego se dirigió al cuartel de Policía donde se identificó como la señora BALOY, fue a atender a su esposo y solicitó autorización para llevarle unas almohadas. Afirma la indagada que estuvo varias veces en el cuartel y la policía nunca le dijo que la estaban buscando e incluso habló con el Corregidor para que le dejaran atender a su esposo. (F.27)

Luego, el señor BALOY fue trasladado a la Sub-Estación de Policía en la Avenida Justo Arosemena y posteriormente al Edificio Avesa, a donde ella le llevó alimentos y lo atendió; a eso de las 12:30 p.m. uno de los Agentes de la Policía Nacional que estaba custodiando a su esposo le pidió la cédula y le dijo que se iba a quedar detenida, la llevaron al cuartel y le hicieron un informe. (Fs.27-28)

La señora CUESTAS RODRÍGUEZ niega su vinculación con la sustancia incautada y expresa que estuvo en su casa durante todo el allanamiento por lo que cuestiona que se le haya detenido un día después de la diligencia. (Fs.29)

Lo anterior es corroborado por MANUEL BALOY URRUTIA en declaración indagatoria que consta de foja 31 a 37.

Luego de examinar los elementos probatorios, el Pleno concluye que en las presentes sumarias existen indicios de presencia y oportunidad que comprometan a ELIZABETH DEL CARMEN CUESTAS RODRÍGUEZ con el ilícito investigado, lo que se infiere del informe de novedad suscrito por el Agente de Policía en el que se señala que la prenombrada lanzó desde el interior de la residencia allanada una bolsa en cuyo contenido se encontró varios envoltorios con polvo blanco y un cartucho con hierba seca que ante la prueba de campo dieron como resultado positivo para la presunta droga "COCAÍNA" y "MARIHUANA". (Fs. 9 y 17 respectivamente).

En cuanto a la orden de detención preventiva dictada contra ELIZABETH DEL CARMEN CUESTAS RODRÍGUEZ, se debe señalar que la misma cumple con el requisito de haber sido decretada por autoridad competente, el Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Droga, mediante diligencia en la cual se expresó cuál

era el hecho imputado, los elementos probatorios allegados a la comprobación del hecho punible, así como los que figuran en el proceso contra la prenombrada CUESTAS RODRÍGUEZ, no se vulneran garantías constitucionales ni legales, por lo que se cumple con los requerimientos establecidos en el artículo 2148 y 2159 del Código Judicial.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo anterior, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva decretada contra el señor ELIZABETH DEL CARMEN CUESTAS RODRÍGUEZ mediante providencia fechada 3 de julio de 2000, y DISPONE que sea puesta nuevamente a órdenes del Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Droga.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) JOSÉ ANDRÉS TROYANO (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LCDO. ROGELIO CRUZ RIOS CONTRA EL ARTÍCULO 2508-A DEL CODIGO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, PRIMERO (1) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado ROGELIO CRUZ RIOS, en su propio nombre, ha formalizado demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2508-A del Código Judicial, introducido por el artículo 25 de la Ley 31 de 28 de mayo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial N°.23,553 de 29 de mayo de 1998.

Admitida la demanda por cumplir con las formalidades que establece la ley, se corrió traslado de la misma a la Procuradora de la Administración, quien emitió la Vista que corre de fojas 16 a 25, en la cual consideró que únicamente la palabra "expatriado", contenida en la frase final del artículo 2508-A, viola el artículo 30 de la Constitución, sin embargo, estima que el resto de la norma no vulnera las disposiciones fundamentales citadas por el demandante ni otra de la Carta Política de la República, por lo que recomienda a esta Corporación que solamente declare inconstitucional dicha palabra.

Veamos en primer lugar el contenido de la demanda:

En los hechos que fundamentan la demanda se expresa lo siguiente:

"..... ....."”
PRIMERO: ha sido una tradición legislativa en Panamá la de que nadie pueda ser juzgado en ausencia, salvo a partir de 1990.

SEGUNDO: El actual proyecto del Código Judicial pretende acabar con los juicios en ausencia del imputado.

TERCERO: La ausencia del imputado, aún cuando haya sido deseada por él, viola el derecho a la defensa, puesto que nadie puede defenderse no estando presente en su propio juicio.

CUARTO: Aún el imputado detenido en Panamá no lo puede estar en la cárcel fuera de la circunscripción o jurisdicción de su juez natural, competente para juzgarlo.

QUINTO: el envío de una persona imputada de un delito por parte del Estado que lo acusa, a otra jurisdicción o Estado, le impide a ese imputado el derecho a la defensa y viola el debido proceso que se le debe garantizar, puesto que, incluso, incomunica al imputado con su abogado defensor.

SEXTO: Así, la ausencia obligada por extradición, expatriación o simple entrega, condición o sin ella. o como se le llame; sobre todo, cuando el proceso en Panamá continúa, es violatorio de normas rectoras del Derecho Procesal Penal y de claras garantías y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y en convenciones internacionales sobre derechos humanos.

SEPTIMO: La entrega de un imputado en Panamá a otro Estado constituye, ni más ni menos, una abdicación de nuestra jurisdicción en favor de la de otro Estado y una burla a la justicia panameña.

OCTAVO: ya con anterioridad esa práctica fue prohibida mediante normas legales que aún se encuentran vigentes, como lo es el artículo 2126 y el 2212-A del Código Judicial.
Pero aún en el caso de la derogación del artículo 2212-A del Código Judicial, no es posible la entrega a otro Estado de un extranjero imputado de la comisión de un delito en Panamá.

NOVENO: En el peor de los casos, la norma legal acusada no tiene vigencia en delitos de drogas, puesto que en esta materia es le Ley 23 de 1986, con sus modificaciones, la que rige y no el Código Judicial.

DECIMO: Lo único que permite la ley de drogas en Panamá es el traslado provisional de detenidos (arts. 35 a 39 de la Ley 23 de 1986 y arts. 7.4 y 7.18 de la Convención de Viena sobre Narcotráfico), "siempre que medie el consentimiento expreso y por escrito del imputado, ..." "... hasta por el término de dos (2) meses, con el fin de que se practiquen diligencias procesales conducentes y pertinentes al esclarecimiento de dichos delitos cometido en el Estado requerido".

DECIMO PRIMERO: Tratándose de un extranjero acusado penalmente en Panamá, no es posible su extradición, por prohibirlo así expresamente los tratados de extradición respectivos y la Ley interna vigente.

DECIMO SEGUNDO: El artículo 2508-A del Código Judicial, introducido por el artículo 25 de la Ley 31, de veintiocho (28) de mayo de 1998, permite la extradición o la simple entrega de un extranjero acusado en Panamá de delitos en forma expresa y, en forma tácita, la simple entre, sin extradición, de cualquier extranjero que esté en Panamá, sin estar acusado de la comisión de delitos en Panamá.

DECIMO TERCERO: El artículo 2508A del Código Judicial otorga así al Presidente de la República, inconstitucionalmente, poderes omnímodos que anulan las facultades y funciones constitucionales del Organo Judicial y del Ministerio público, respecto a la extradición de extranjeros en Panamá.

....."

(fs.1,2,3)

La norma legal acusada de inconstitucional es el artículo 2508A del código Judicial, introducido por el artículo 25 de la Ley 31 de 28 de mayo de 1998, cuyo tenor es el siguiente:

> "ARTICULO 2508-A. Por razones de orden público e interés social y por vía de excepción podrá concederse la extradición o la entrega simple y condicionada de un extranjero al Estado requirente por parte del Organo Ejecutivo, a pesar de que medie proceso penal o ejecución de sentencia condenatoria en nuestro país, con el compromiso de que, una vez realizadas las diligencias judiciales para las cuales fue pedido, o cuando hubiere sido juzgado en el Estado requirente, ya sea que resulte absuelto o culpable, en este caso cumplida la pena, sea devuelto a Panamá, para que cumpla la pena que proceda, de ser el caso, o para continuar con el proceso penal si estuviere pendiente. En todo caso, el proceso penal que se siga en la República de Panamá continuará en ausencia del procesado entregado o expatriado, dándosele todas las garantías de representación judicial."

Las normas que se estiman infringidas son los artículos 21, 22, 30, 32, 17, 20, 2 y 4 de la Constitución. Adicionalmente se invoca el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En cuanto al concepto de infracción de estas normas fundamentales, el recurrente expresa, en síntesis, lo siguiente:

A)- El artículo 22 de la Constitución dispone lo siguiente:

> "ARTICULO 22. Toda persona detenida debe ser informada inmediatamente y en forma que le sea comprensible, de las razones de su detención y de sus derechos constitucionales y legales correspondiente.
>
> Las personas acusadas de haber cometido un delito tienen derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad en juicio público que le haya asegurado todas las garantías establecidas para su defensa. Quien sea detenido tendrá derecho, desde ese momento, a la asistencia de un abogado en las diligencias policiales y judiciales".

Se dice que esta norma ha sido violada porque la entrega simple y condicionada de un ciudadano extranjero, imputado de un delito en Panamá, a otro Estado, viola el derecho de defenderse personalmente o el de ser asistido por un abogado e su elección mientras dure el proceso en Panamá.

B)- Se estima vulnerada la segunda oración del segundo párrafo del artículo 21 de la Constitución, cuyo texto es el siguiente:

> "ARTICULO 21. ... Nadie puede ser detenido más de veinticuatro horas sin ser puesto a órdenes de la autoridad competente ...".

Se alega que un extranjero detenido en Panamá, acusado de un delito, debe estar siempre, desde su detención, a órdenes de la autoridad competente. Si es entregado por el Organo Ejecutivo a otro Estado, deja de estar a órdenes de la autoridad competente para ser juzgado en Panamá.

El demandante fundamenta la vulneración de esta norma en el ejemplo de que, si se interpone un habeas corpus a favor del susodicho extranjero y la orden de detención es declarada ilegal, no se podrá cumplir la orden de libertad expedida por la autoridad competente y, por ello, la norma es violada en concepto de

violación directa, por acción.

C)- La siguiente norma que se estima violada es el artículo 30 de la Constitución Nacional, cuyo texto es el siguiente:

> "ARTICULO 30. No hay pena de muerte, de expatriación, ni de confiscación de bienes." (Las negritas son del demandante)

Sostiene la censura que la norma legal acusada dispone que el proceso penal seguido en Panamá "seguirá en ausencia del procesado entregado o expatriado...". De esta manera, considera que dicha ley instituye la figura de la expatriación, la cual está prohibida por la Constitución. Por ello se viola la norma constitucional copiada, en forma directa por acción.

D)- Se cita el artículo 32 de la Constitución, que a la letra dice:

> "ARTICULO 32. Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria."
> (Las negritas son del demandante)

Se expresa que un extranjero imputado de un delito en Panamá, que haya sido entregado por el Organo Ejecutivo a otro Estado no podría hacer uso de su derecho a ser oído en audiencia pública (arts.2239 a 2245 del Código Judicial), por lo que no podría juzgársele conforme a los trámites legales garantizados por la Constitución.
De manera que la norma se ha violado en concepto de violación directa por acción.

E)- El artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que en la parte pertinente establece lo siguiente:

> "Artículo 8. garantías Judiciales.
>
> 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y tiene dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente o imparcial establecido con anterioridad por la Ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
>
> 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
>
> a)...
> b)...
> c) Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;
>
> d) Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor:
> e).....
> ....."
> (Las negritas son del demandante)

Sostiene el accionante que a un extranjero inculpado de un delito en Panamá que ha sido mandado por el Estado que lo acusa a otro Estado donde también permanece detenido, no se le pueden garantizar los derechos de preparar su defensa, de decidir cambiar de abogado defensor o bien de elegir defenderse personalmente, ya que ha sido expulsado del territorio jurisdiccional donde se

le juzga. Por tanto, las citadas garantías procesales, que forman parte del bloque de constitucionalidad, han sido violadas directamente por acción.

F)- El artículo 17 de la Constitución Nacional, que también se dice violado, establece lo siguiente:

> "Artículo 17. Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derecho y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley."

Se alega que esta norma programática ha sido violada en relación con las otras normas constitucionales a que se ha hecho referencia, en la medida en que la Asamblea Legislativa y el Organo Ejecutivo han aprobado y sancionado una norma violatoria de derechos y garantías fundamentales.

G)- Se cita el artículo 18 de la Constitución, cuyo tenor es el siguiente:

> "Artículo 18. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución o de la Ley. Los servidores públicos lo son por esas mismas causas y también por extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio de éstas."

Se aduce la violación de esta norma programática por la misma razón expresada en el concepto anterior, es decir, debido a la violación de las otras normas fundamentales previamente citadas.

H)- El artículo 20 de la Carta Política, que preceptúa:

> "Artículo 20. Los panameños y extranjeros son iguales ante la ley, pero ésta podrá, por razones de trabajo, de salubridad, moralidad, seguridad pública y economía nacional, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinadas actividades a los extranjeros en general. Podrán, asimismo, la Ley o las autoridades, según las circunstancias, tomar medidas que afecten exclusivamente a los nacionales de determinados países en caso de guerra o de conformidad con lo que se establezca en los tratados internacionales."

El demandante hace referencia a que la Ley panameña y los tratados internacionales disponen que la extradición de extranjeros se negará cuando, entre otras razones, "el extraditado tenga una causa penal pendiente en Panamá". Igualmente disponen que la extradición se tramita como un proceso "que le debe garantizar al extranjero el debido proceso y el derecho a la defensa" (el énfasis es del accionante).

A juicio de la censura, la norma legal acusada no le permite al extranjero escogido por el Organo Ejecutivo (pero a otros sí) el derecho a la defensa garantizado en los casos de extradición ni el debido proceso, por lo cual viola, en concepto de violación directa, la disposición constitucional citada.

De manera más concreta, se produce la violación al precepto constitucional, en la medida que la norma legal distingue o discrimina entre extranjeros, ya que el organo Ejecutivo puede, por vía de excepción y basado en indeterminadas y supuestas razones de orden público e interés social, "extraditar a un extranjero, sin proceso previo (el equivalente de la simple entrega; y no hacerlo, con el extranjero que no lo quiera" (énfasis del demandante).

I)- Se invoca el artículo 2 de la Carta Fundamental, que a la letra dice:

> "Artículo 2. El poder público sólo emana del pueblo. Lo ejerce el

> Estado conforme esta Constitución lo establece, por medio de los Organos Legislativos, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración." (Las negritas son del recurrente).

Se alega que la violación de esta norma es directa por acción, por el hecho de que la norma legal faculta al Organo Ejecutivo, por conducto del presidente y del Ministro respectivo, para conceder la extradición o entrega simple sin juicio previo, lo cual significa que le ha otorgado facultades propias del Organo Judicial, el cual finalmente es el que debe decidir si procede o lo la extradición de un extranjero cuando otro Estado la haya pedido. en el caso que nos ocupa el Presidente prácticamente hizo la ley, la aplica y la interpreta, sin ningún control judicial, aún cuando el extranjero tenga o no una causa criminal pendiente en Panamá.

J)- Finalmente se cita el artículo 4 de la Constitución, que es del siguiente tenor:

> "Artículo 4. La República de Panamá acata las normas de Derecho Internacional."

En relación a esta norma destaca la censura que los tratados de extradición, tanto bilaterales como multilaterales celebrados por Panamá, disponen que un extranjero que se encuentre en Panamá y que sea pedido en extradición por otro Estado tiene derecho al proceso de extradición correspondiente.

El artículo 4 previamente citado ha sido violado en concepto de violación directa, puesto que la norma legal acusada dispone que el presidente de la República, con el Ministro respectivo, pueden conceder la extradición o la simple entrega de un extranjero, sujeto a una causa penal o sin estarlo, sin el correspondiente juicio previo.

CRITERIO DE LA CORTE

La norma legal acusada de inconstitucional permite, de manera excepcional, al Organo Ejecutivo conceder la extradición o la entrega simple y condicionada de un extranjero, que esté siendo juzgado o haya sido condenado, a otro Estado, cuando medien razones de orden público o interés social.

La Constitución Política se refiere al tema de la extradición específicamente en el artículo 24, al indica que el Estado no podrá extraditar a sus nacionales ni a extranjeros por delitos políticos.

Otros artículos de la Carta Fundamental que se relacionan con el tema de extradición son el 4, que dice que Panamá, acata las normas de derecho internacional, siendo que nuestro país ha suscrito diversos tratados al respecto; y el artículo 30 que expresa que en Panamá no hay pena de muerte, de expatriación, no de confiscación de bienes.

A falta de convenios internacionales específicos sobre extradición se aplica lo que al respecto regule la ley, particularmente el Código Judicial (Libro Tercero, Título IX), y la Ley N°23 de 1986 sobre delitos relacionados con drogas (Capítulo III).

Luego de lo expuesto, el Pleno de la Corte procede a la confrontación de lo normado por el artículo 2508-A del Código Judicial con los preceptos constitucionales citados por el demandante.

En primer lugar se expresa que la norma legal viola el derecho de todo extranjero de defenderse personalmente o de ser asistido por un abogado de su elección mientras dure el proceso en Panamá, como está contemplado en el artículo 22 de la Constitución.

Considera la Corte, al apreciar el contenido del precepto acusado, que en ninguna parte éste incorpora algún tipo de impedimento para que un extranjero detenido tenga acceso a designar un abogado para que asuma su defensa. Por otra parte, si bien es cierto, como es lógico, que si no se encuentra el territorio nacional no podría asumir su defensa personal, la norma legal claramente enfatiza que si el proceso penal continúa en ausencia del procesado, se le darán al acusado "todas las garantías de representación judicial".

Igualmente, esta Corporación estima que es infundada la infracción que se denuncia del artículo 21 de la Carta Política, pues se dice que la misma consiste en que el extranjero deja de estar a órdenes de la autoridad competente panameña por el hecho de ser extraditado; en ese sentido, expresa por ejemplo que, si a través de un habeas corpus se declarar su libertad, no se podría cumplir dicha orden.

Según se desprende del precepto legal, para efectos del proceso penal que se sigue en nuestro territorio al extranjero entregado o extraditado, éste seguirá a órdenes de la autoridad competente, quien continuará la causa hasta que se dicte un veredicto. De manera que cuando se produzca el retorno de la persona a nuestro territorio, ésta cumplirá lo decidido y, en caso de que no haya concluido, se continuará con el proceso.

Consecuentemente, de producirse el supuesto indicado por el accionantes (que se de la expedición de una orden de libertad a favor del mismo, bien sea por motivo de un habeas corpus o de la sentencia que finaliza el proceso), esa decisión se hará cumplir por las respectiva autoridad, en el momento en que el extranjero sea devuelto a Panamá por el Estado requirente.

Como es natural, cuando el extranjero es extraditado deja de estar bajo la custodio de la autoridad competente panameña, pero, como se señaló, la norma legal en cuestión sólo se aplica en casos excepcionales, o sea, cuando medien razones de orden público e interés social, es decir, en casos donde se procure preservar intereses superiores relativos a la existencia del Estado y al bienestar y la seguridad general.

Por todo lo anterior, a juicio de la Corte, el precepto legal demandado no vulnera el artículo 21 de la Constitución.

Al referirse a la violación del artículo 32 de la Constitución Nacional y del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el accionante les atribuye un concepto de infracción casi idéntico, pues en ambos casos sostiene que cuando un extranjero, inculpado de un delito en Panamá, es entregado a otro Estado, se le priva de ser juzgado conforme a los trámites legales, ya que en esas circunstancias no se le pueden garantizar los derechos de preparar su defensa, de ser oído en la audiencia y defenderse personalmente.

Esta Corporación señaló con anterioridad que el artículo 2508-A del Código Judicial es una norma que se aplica en casos especiales, con el objeto de preservar la seguridad y proteger la seguridad del Estado, la seguridad colectiva de los asociados y amparar debidamente a los sectores desvalidos. por razones de orden público e interés social la norma legal permite al Organo Ejecutivo autorizar la extradición de un extranjero que tenga un proceso penal pendiente en Panamá, pero sin dejar de precisar expresamente que se le otorgarán "todas las garantías de representación judicial" durante el proceso que se desarrolla en nuestro país. A juicio de la Corte, la norma legal contempla el respeto a las garantías procesales del extranjero extraditado, de allí que no es viable la acusación formulada sobre la vulneración de los preceptos fundamentales previamente mencionados.

El artículo 20 de la Constitución se dice vulnerado porque la norma legal no le permite al extranjero escogido por el Organo Ejecutivo, mientras que a otros extranjeros sí, el derecho a la defensa ni el debido proceso.

Como se puede apreciar, el cargo formulado se concreta en una supuesta discriminación entre extranjeros, porque el Organo Ejecutivo puede extraditar a algunos de ellos sin juicio previo, mientras que con otros no sucede así.

Previamente se ha hecho referencia a que la disposición legal acusada constituye una excepción al procedimiento general de extradición, incluyendo la causal que determina el numeral 9 del artículo 2508 del Código Judicial consistente en que no se concederá (la extradición) si la persona reclamada está sometida a un proceso. Sin embargo, dicha excepción obedece a un interés superior consistente en la preservación del orden público y del interés social, pero sin dejar de brindar las correspondientes garantías procesales a favor del individuo.

Sobre el principio de igualdad ante la ley, consagrado en la Constitución, en la Vista del Ministerio Público se cita un fallo del Pleno de la Corte de fecha 11 de enero de 1991, donde se expresa:

> "... Con respecto al referido principio es preciso advertir que éste no puede entenderse ni aplicarse en forma condicionada y simplista ... De ahí que si se ha de dar un sentido razonable y real al principio de igualdad ante la ley es el de que todas las personas que se hallen en igualdad de circunstancias jurídicas deben recibir el mismo tratamiento jurídico".
> (fs.31

En este caso la igualdad de circunstancias jurídicas que tienen en común los extranjeros cuya extradición ordena el Organo Ejecutivo, es precisamente la razón de la extradición que consiste en salvaguardar el orden público y el interés social. Por tanto, dicho principio de igualdad no ha sido conculcado por la norma jurídica demandada.

Igualmente, no consideramos que ha sido vulnerado el artículo 2 de la Carta Fundamental pues, como anota la Procuraduría de la Administración, es la ley la que determina el procedimiento a cumplirse en el caso de las extradiciones, así como cuáles serían las autoridades que han de participar en el mismo, por lo que mal podría señalarse como inconstitucional lo que ha dispuesto el legislador sobre dicho proceso (el de extradición), a través de otra ley en la que faculta al Organo Ejecutivo para conceder la misma en casos excepcionales.

En cuanto al artículo 4 de la Carta Fundamental que dispone que Panamá acatará las normas de derecho internacional, esta Superioridad no comparte el criterio de la censura que considera infringido este artículo, partiendo de que con lo dispuesto por el precepto legal se desconocen los tratados de extradición suscritos por Panamá que dicen que el extranjero que se encuentre en Panamá será sometido al procedimiento de extradición correspondiente. Tanto en el artículo del Código judicial demandado, como en otras disposiciones del mismo Código, se encuentran regulados trámites diversos sobre el procedimiento de extradición. Las normas del Código Judicial relativas a este tema tienen aplicación supletoria en cuanto a lo dispuesto por los tratados internacionales suscritos por Panamá. En los convenios internacionales suscritos por nuestro país no existe norma que prohíba la extradición de un extranjero hacia el Estado requirente mientras se le está siguiendo una causa penal; ni siquiera porque éste haya sido condenado en el paría requerido. En ese orden de ideas, preciso es concluir que no cabe la pretendida violación del artículo 4 de la Constitución debido a lo dispuesto en el artículo 2508-A del Código Judicial. Por tanto, el aludido cargo no está justificado.

Finalmente, la Corte coincide con lo planteado por el Ministerio Público al considerar que la palabra expatriado, expresada en la parte final del artículo 2508-A del Código Judicial, es inconstitucional por violar el artículo 30 de la Constitución Política.

En el mencionado texto legal se dice: "... En todo caso, el proceso penal que se siga en la República de Panamá continuará en ausencia del procesado

entregado o expatriado, dándosele todas las garantías de representación judicial". (negritas de la Corte).

Aún cuando pareciera que el término expatriado fue utilizado por error, en el lugar del extraditado, el mismo pugna con lo dispuesto por el artículo 30 de la Constitución que preceptúa que "No hay pena de muerte, de expatriación, ni de confiscación de bienes", pues al utilizar dicho término, a primera vista, se entiende o se da a entender que en Panamá es posible imponer la pena de expatriación, la cual estrictamente sólo podría ser aplicada por las autoridades del país al cual pertenece como nacional una persona.

En relación con la violación de la norma constitucional previamente citada, se produce la infracción de las dos normas programáticas citadas por el demandante, que son los artículos 17 y 18 de la Constitución.

Por las consideraciones expuestas, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que es INCONSTITUCIONAL la palabra "expatriado" contenida en el último párrafo del artículo 2508-A del Código Judicial y DECLARA CONSTITUCIONAL el resto del artículo.

Notifíquese y Publíquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN A. ARJONA L.
(fdo.) ROBERTO GONZALEZ R. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JORGE FABREGA PONCE (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LCDO. JORGE MAXIMINO SANTOS VEGA CONTRA EL ARTICULO 1399 DEL CODIGO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la advertencia de inconstitucionalidad formulada por el licenciado Jorge Maximino Santos Vega, en nombre y representación de FRANCISCO RIOS contra el artículo 1399 del Código Judicial, dentro del proceso Lanzamiento por Intruso: La Nación y/o Ministerio de Educación (Priemer Ciclo de Zapotillo) -vs- El Asentamiento Campesino 5 de Mayo. La disposción constitucional que considera el advertidor ha sido infringida es el artículo 32 de la Constitución.

Mediante Nota de 27 de junio de 2000, la Alcaldesa del Municipio de las Palmas, Provincia de Veraguas remitió a esta Corporación Judicial el memorial contentivo de la advertencia mencionada para que, se procediera con lo conducente.

Frente a la advertencia de inconstitucionalidad propuesta por FRANCISCO RIOS, mediante procurador judicial, es importante recalcar que la norma cuya inconstitucionalidad se depreca, ya ha sido motivo de pronunciamiento por parte de esta Superioridad Judicial. Efectivamente el Pleno, por medio de la Sentencia de 10 de septiembre de 1993, a propósito de una advertencia de inconstitucionalidad propuesta por Basilio Chong dentro del proceso de lanzamiento por intruso interpuesto por OMAYRA MARIA MENDOZA AGUIRRE contra MIRSA MUÑOZ CORREA, declaró que no era inconstitucional el artículo 1399 del Código Judicial, puesto que no quebrantaba lo preceptuado en los artículos 2, 32, 44 y

52, ni ningún otro precepto de la Constitución Política. Esto impide ineludiblemente a este Tribunal volver a revisar el mismo asunto, acorde con lo que prevé la propia Constitución en el artículo 203 parte final, que las decisiones de la Corte en ejercicio de las atribuciones son finales, definitivas y obligatorias.

A continuación transcribimos lo que en esa ocasión se dijo en relación al artículo 1399 del Código Judicial:

> "Comparte la Corte, igualmente, el criterio del Procurador de la Administración cuando señala que no hay violación del artículo 32 constitucional, que consagra el debido proceso. Efectivamente, como ha señalado la Corte, el debido proceso consagra tres presupuestos, según los cuales todo proceso debe llevarse a cabo ante autoridad competente, de acuerdo a los trámites de la ley y que ninguna persona puede ser juzgada más de una vez por una misma causa. No ve el Pleno como puede el artículo 1399 del Código Judicial violar el debido proceso, si esa norma está delegando competencia en los Corregidores para que ventilen asuntos que tengan relación con lanzamientos"

Concluye el Pleno de la Corte que, definitivamente a la presente advertencia no debe imprimírsele el curso legal, en virtud de que la materia que se ha sometido a la revisión constitucional ya ha sido objeto de pronunciamiento judicial.

En otro punto, y por razones académicas queremos señalarle al advertidor que, las advertencias de inconstitucionalidad debe reunir los mismos requisitos formales que requiere una demanda de inconstitucionalidad, independientemente de que sea o no revisable el fondo, de acuerdo al artículo 2551 del Código Judicial. El artículo 2551 ibídem dice:

> "ARTICULO 2551. Además de los requisitos comunes a toda demanda, la de inconstitucionalidad debe contener:
>
> 1. Transcripción literal de la disposición, norma o acto acusados de inconstitucionales; y,
>
> 2. Indicación de las disposiciones constitucionales que se estimen infringidas y el concepto de la infracción." (Subrayado es del Pleno)

El señalamiento anterior obedece a que, en esta advertencia no se ha cumplido con la disposición transcrita, lo que evidencia la omisión de requisitos, que en otras circusntancias hubieran igualmente impedido conocer de dicho incidente constitucional.

Por las anteriores consideraciones los Magistrados que integran el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la advertencia de incostitucionalidad propuesta por el licenciado Jorge Maximino Santos Vega en nombre y representación de FRANCISCO RIOS, dado que se ha verificado el fenómeno jurídico de la COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL.

Notifiquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) ROBERTO GONZALEZ R. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JORGE FABREGA P. (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LCDO. JUAN MATERNO VASQUEZ DE LEON CONTRA EL DECRETO LEY NO. 8 DE 2 DE JULIO DE 1997. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Juan Materno Vásquez De León ha presentado ante el Pleno de esta Corporación de Justicia, acción de inconstitucionalidad contra ciertos artículos y frases del Decreto Ley No.8 de 2 de julio de 1997. El mencionado decreto, publicado en la Gaceta Oficial No.23,331 de 15 de julio de 1997, modifica el artículo 46 del Decreto de Gabinete No. 252 de 30 de diciembre de 1971 (Código de Trabajo) y se dictan otras disposiciones.

Encontrándose el negocio en el despacho del Magistrado Sustanciador en estado de resolver, fue emitida la Ley 51 de 30 de octubre de 1999, que "Deroga el Decreto Ley 8 de 1997 que estableció los días puentes, y modifica el artículo 46 del Código de Trabajo", la cual fue publicada en la Gaceta Oficial No. 23,921 de 1 de noviembre de 1999.

En ese sentido, el artículo primero de esta normativa deroga íntegramente el Decreto Ley 8 de 2 de julio de 1997, objeto de esta acción de inconstitucionalidad.

Estima la Corte que, en tal virtud, ha tenido lugar el fenómeno de sustracción de materia por la pérdida del objeto litigioso, ello por causas exógenas al proceso.

En cuanto a la sustracción de materia, el Pleno se ha pronunciado en los siguientes términos: "... Técnicamente se produce el fenómeno bajo examen con la desaparición del objeto procesal por voluntad del funcionario que emitió el acto, v. g. la autoridad administrativa revoca el acto que dictó o el parlamento modifica o elimina la Ley que expidió" (Cfr. Sentencia de 18 de julio de 1997).

En el caso in examine, la pérdida del objeto litigioso tiene lugar al resultar abrogado en su totalidad el cuerpo normativo que se ataca a través de esta acción extraordinaria, lo que produce la extinción de la pretensión por obsolescencia procesal.

Como corolario de lo antes expresado, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA que se ha producido el fenómeno jurídico de SUSTRACCIÓN DE MATERIA en la demanda de inconstitucionalidad que presentara el licenciado Juan Materno Vásquez De León contra ciertos artículos y frases del Decreto Ley No.8 de 2 de julio de 1997.

Notifíquese,

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) ROBERTO E. GONZALEZ R. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDAS DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADAS POR LOS LICENCIADOS JOSÉ HERRERO VICTORIA Y NELSON HERBERT CONTRA LAS FRASES "EL CUAL NO PODRÁ SER INFERIOR AL DEL

AÑO ANTERIOR", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY 7 DE 1997 Y "Y NO PODRÁN SER INFERIOR AL MONTO TOTAL DE LAS PARTIDAS DEL AÑO ANTERIOR" CONTENIDA EN EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY 11 DE 1981. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, NUEVE (9) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Los licenciados JOSÉ HERRERO VICTORIA y NELSON HERBERT actuando en su propio nombre y representación, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, han solicitado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante dos demandas de inconstitucionalidad que declare contrarias a la Carta Magna las expresiones "... el cual no podrá ser inferior al del año anterior...", del artículo 45 de la Ley 7 de 6 de febrero de 1997, que crea la Defensoría del Pueblo, publicada en la Gaceta Oficial N° 23.221 y "... y no podrán ser inferior al monto total de las partidas del año anterior ..." contenida en el numeral 1 del artículo 63 de la Ley 11 de 10 de junio de 1981 por la cual se reorganiza la Universidad de Panamá, publicada en la Gaceta Oficial N° 19.336, por considerar que ambas frases vulneran lo dispuesto en el artículo 268 de la Constitución Nacional.

Según informe secretarial visible a foja 46 del expediente contentivo de esta causa constitucional, se puso en conocimiento del magistrado ponente la similitud entre ambas demandas, y se ordenó la acumulación de acciones mediante resolución de 30 de septiembre de 1998 (vid. f. 49 del cuaderno de inconstitucionalidad, conforme a los artículos 463 y 1084 del Código Judicial).

Ambas acciones fueron reunidas en atención a los principios de economía procesal y seguridad jurídica, por lo que deben ser decididas en el mismo momento y en el mismo sentido, a fin de asegurar la uniformidad de la jurisprudencia y obtener los mejores resultados con el mínimo de tiempo, gastos, esfuerzos y actividad procesal.

NORMA VIOLADA Y CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

La norma atacada del artículo 45 de la Ley 7 de 1997, es del tenor siguiente:

> "Es obligación del Estado dotar a la Defensoría del Pueblo de un presupuesto anual suficiente para asegurar su funcionamiento efectivo, el cual no podrá ser inferior al del año anterior. La dotación económica necesaria para la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo constituirá una partida fija en el presupuesto anual de la Asamblea Legislativa (El resaltado corresponde a la frase impugnada).
>
> Por su parte, el artículo 63 de la ley 11 de 1981, preceptúa:
>
> "El patrimonio de la Universidad de Panamá estará constituido por:
>
> 1. Las partidas para funcionamiento que le sean asignadas en cada presupuesto nacional, las cuales deberán ser suficientes para garantizar la buena marcha de la Universidad y no podrán ser inferiores al monto total de las partidas del año anterior (La expresión atacada aparece en negritas).

De conformidad con los activadores procesales, las locuciones demandadas infringen en concepto de violación directa el artículo 268 de la Carta Política Fundamental, cuyo texto es el que sigue:

> Artículo 268. La Asamblea Legislativa podrá eliminar o reducir las partidas de los egresos previstos en el proyecto de Presupuesto,

> salvo las destinadas al servicio de la deuda pública, al cumplimiento de las demás obligaciones contractuales del Estado y al financiamiento de las inversiones públicas previamente autorizadas por la Ley.
>
> La Asamblea Legislativa no podrá aumentar ninguna de las erogaciones previstas en el proyecto de Presupuesto o incluir una nueva erogación, sin la aprobación del Consejo de Gabinete, ni aumentar el cálculo de los ingresos sin el concepto favorable del Contralor General de la República.
>
> Si, conforme a lo previsto en este artículo, se eleva el cálculo de los ingresos o si se elimina o disminuye alguna de las partidas de egresos, la Asamblea Legislativa podrá aplicar las cantidades así disponibles a otros gastos o inversiones, siempre que obtenga la aprobación del Consejo de Gabinete.

Al explicar el concepto de la infracción, los peticionarios afirman que las frases sometidas al control de constitucionalidad crean para la Universidad de Panamá y la Defensoría del Pueblo un presupuesto anual que no puede ser reducido por los órganos de gobierno que intervienen en las fases de su preparación, discusión, aprobación y ejecución, sino que en virtud de esos mandatos legales, están obligados a garantizar un presupuesto institucional igual o superior al del año anterior, aún cuando la situación de las finanzas públicas refleje una realidad divorciada totalmente del monto correspondiente" (vid. fs. 4 y 43).

OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Conforme a lo dispuesto en el artículo 2554 del Código Judicial, la demanda fue corrida en traslado al Procurador General de la Nación, quien se manifestó impedido para conocer del expediente. Una vez declarado legal dicho impedimento mediante resolución de 7 de octubre de 1998, se llamó a la procuradora suplente, licenciada MERCEDES ARAÚZ DE GRIMALDO, quien lo sustituyó y emitió su opinión mediante Vista Fiscal N° 34 de 30 de octubre de 1998.

Al expresar su criterio, la representante del Ministerio Público comparte el argumento de los demandantes en solicitar la declaratoria de inconstitucionalidad de las frases impugnadas, por considerarlas violatorias del artículo 268 de la Constitución Nacional.

Al respecto señala que el mandato impositivo que establecen las disposiciones bajo examen, en el sentido de que dichas instituciones no pueden ser inferiores al monto total de las partidas del año anterior "... va en contraposición de lo dispuesto en el artículo 268 de la Constitución Política que confiere la facultad de eliminar o reducir partidas de egresos previstos en el proyecto de Presupuesto a la Asamblea Legislativa..." (f. 61).

En su opinión, las mencionadas expresiones lesionan el principio de supremacía constitucional que coloca a la ley fundamental del Estado sobre las normas de rango legal. Estima que aunque la Universidad de Panamá es "... una institución autónoma con patrimonio propio y derecho de administrarlo, reconocida por la Constitución, ello no significa que se pueda establecer en una ley que su presupuesto no pueda ser inferior al del año anterior o igual, porque ello va en contra de las normas que rigen el presupuesto a nivel constitucional..." (Cfr. f. 62).

En cuanto a la Defensoría del Pueblo, expresa que, si bien se trata de una institución con plena autonomía funcional y financiera, fue creada y desarrollada mediante una ley, por lo cual tampoco puede desatender la posición jerárquica de la Constitución (f. 62).

FASE DE ALEGATOS

Surtidos los trámites procesales y luego de la última publicación del edicto que dispone el artículo 2555 del Código Judicial, se concedió un término de diez días para que los demandantes y todas las personas interesadas presentaran sus argumentos por escrito.

Hicieron uso de tal derecho los abogados Virgilio Vásquez Pinto, Simeón González, Alexis Jaén, Carlos A. Jones, Anays Alvarez Alvarez, Débora Fernández M., Luis R. García, Gabriel Rossanía V., Julio R. Arias V., Salvador Sánchez G. y Lourdes González.

Los letrados coinciden en señalar que no existe contradicción alguna entre las frases impugnadas y la Constitución Nacional, de modo que acceder a la pretensión de los recurrentes implicaría el desconocimiento de los principios que rigen la interpretación constitucional.

En relación con el numeral 1 del artículo 63 de la ley 11 de 1981, sostienen que la posición de los demandantes es el resultado de una interpretación literal o gramatical del artículo 268 de la Constitución, que ignora por completo el carácter autónomo y la naturaleza de las funciones desarrolladas por la Universidad de Panamá y la Defensoría del Pueblo.

Plantean, que en el caso sub iudice se impone una interpretación sistemática de la norma que se estima infringida, a la luz de los criterios que rigen la interpretación de la Norma Fundamental. En ese orden de ideas, encuentran que el artículo 100 de la Carta Fundamental obliga al Estado a dotar a la Universidad de Panamá de lo indispensable para su funcionamiento y desarrollo futuro, así como de patrimonio propio y los medios para acrecentarlo, lo que permite concluir que el aporte del Estado a la Universidad de Panamá debe ser proporcional a las necesidades de esta, a fin de garantizar el acceso a la Educación Universitaria.

En cuanto al artículo 45 de la ley 7 de 1997, quienes formulan los alegatos coinciden en que la Defensoría del Pueblo no sería plenamente independiente y eficaz si no puede contar con los recursos humanos, el equipo y la infraestructura necesarios para el impulso de su gestión.

En ese sentido, advierten que la razón teórica-práctica por la cual el Estado otorga un monto mínimo al presupuesto de ciertos órganos e instituciones del Estado está íntimamente ligado con la defensa del principio de autonomía funcional, lo cual en el caso bajo examen sólo puede lograrse si se garantiza a la Universidad de Panamá y la Defensoría del Pueblo que el presupuesto mínimo necesario para la realización de sus funciones estará exento de manipulaciones de cualquier naturaleza.

DECISIÓN DE LA CORTE

Cumplidos los trámites procesales, pasa la Corte a desatar el fondo de esta controversia constitucional, atendiendo a lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 203 de la Constitución Nacional.

Los demandantes sostienen que los vicios de inconstitucionalidad que se endilgan a las frases impugnadas limitan el ejercicio de las facultades que el artículo 268 de la Constitución le confiere a la Asamblea Legislativa.

En igual sentido apunta el concepto de la señora Procuradora de la Nación, a quien le correspondió la emisión de la vista, en atención a declaratoria de impedimento por parte del señor Procurador General de la Nación.

Señala la alta funcionaria del Ministerio Público, en lo pertinente, lo que se transcribe:

"...
En efecto, es evidente que el mandato impositivo que establecen

estas normas, en el sentido de que los presupuestos de dichas instituciones no pueden ser inferiores al monto total de las partidas del año anterior, van en contraposición de lo dispuesto en el artículo 268 de la Constitución Política que confiere la facultad de eliminar o reducir partidas de egresos previstos en el Proyecto de Presupuesto a la Asamblea Legislativa.

Según las frases en las disposiciones legales a las que hacemos referencia, la Asamblea Legislativa se vería impedida para reducir o modificar las partidas asignadas a las referidas instituciones pese a que los ingresos del Estado presenten un déficit crónico o endémico, que produzca consecuencias nocivas en el desarrollo económico del país.

Las normas que contienen las frases cuya inconstitucionalidad se demanda, desconocen la facultad que tiene la Asamblea Legislativa de eliminar, reducir o modificar las partidas de los egresos previstos en el Proyecto de Presupuesto, además de la facultad de preservación del equilibrio financiero, que en muchas ocasiones conlleva la reducción de partidas con la finalidad de su sostenimiento.

Resulta palpable que las frases contenidas en las normas legales antes señaladas se contraponen al principio de supremacía constitucional y a la subordinación en la que se encuentran las normas legales dentro del ordenamiento jurídico, que exige la primacía de la ley fundamental del Estado. En este caso, dichas frases son incompatibles con el texto constitucional examinado." (Fs.61-62)

El artículo constitucional que ha sido vulnerado por las dos normas legislativas impugnadas, es del siguiente tenor:

"ARTICULO 268.- La Asamblea Legislativa podrá eliminar o reducir las partidas de los egresos previstos en el proyecto de Presupuesto, salvo las destinadas al servicio de la deuda pública, al cumplimiento de las demás obligaciones contractuales del Estado y al financiamiento de las inversiones públicas previamente autorizadas por la Ley.

La Asamblea Legislativa no podrá aumentar ninguna de las erogaciones previstas en el proyecto de Presupuesto o incluir una nueva erogación, sin la aprobación del Consejo de Gabinete, ni aumentar el cálculo de los ingresos sin el concepto favorable del Contralor General de la República.

Si, conforme a lo previsto en este artículo, se eleva el cálculo de los ingresos o si se elimina o disminuye alguna de las partidas de egresos, la Asamblea Legislativa podrá aplicar las cantidades así disponibles a otros gastos o inversiones, siempre que obtenga la aprobación del Consejo de Gabinete."

Una lectura de la norma constitucional pone, en efecto, de manifiesto que las normas legales denunciadas impiden o restringen que la Asamblea Legislativa pueda modificar los presupuestos de ambas entidades autónomas, pues el Presupuesto General del Estado, ha de respetar, para atender el mandado contenido en las normas denunciadas, el Presupuesto de ellas del último año, que no puede decrecer, aún cuando la situación de las finanzas públicas y el Plan financiero del Estado, reflejado en el proyecto de Presupuesto que el Organo Ejecutivo presenta a la consideración de la Asamblea Legislativa, amerite reducciones presupuestarias con respecto a dicho presupuesto anterior, lo que ciertamente limita la función de aprobación del Presupuesto por parte de la Asamblea. Por dicha razón, este Pleno comparte la opinión de los demandantes y del Procurador General de la Nación.

Es sabido que el principio de universalidad de la Constitución hace necesario que el Pleno, al analizar una demanda de inconstitucionalidad, contraste las normas de inferior jerarquía con las normas constitucionales, sin limitarse a las disposiciones constitucionales que han sido denunciadas, sino cualesquiera otra que tenga relevancia constitucional en el proceso constitucional que ocupe al Pleno (art. 2557 del Código Judicial).

La Sala advierte que la norma legal que se estima ha vulnerado el artículo 268 de la Constitución Política, como efectivamente lo estima este Pleno, también vulnera, de manera directa, el artículo 264 de la Constitución Política. Dicha norma atribuye privativamente al Organo Ejecutivo la potestad de elaborar el proyecto de Presupuesto General del Estado, y someterlo a la consideración del Organo Legislativo, en cuya misión no puede encontrarse limitado a una norma legal que coloque bajo condición, la elaboración del proyecto de Presupuesto, como ocurre en el presente caso, que el Organo Ejecutivo, en la función de formulación del Presupuesto, ha de respetar, como límite mínimo, el Presupuesto de ambas entidades descentralizadas en el año inmediatamente anterior.

La esencia de la Ley de Presupuesto estriba en ser una ley sustancial, la ley que adopta y organiza la actividad financiera del Estado durante el período de su vigencia y que, por lo tanto, es norma de conducta obligatoria que deben acatar las diferentes entidades públicas para llevar a cabo el plan financiero contenido en la misma. Es, por lo tanto, incompatible la tesis de la Ley de presupuesto como legislación vinculada por la legislación sustancial, en atención precisamente a la misión de regulación financiera que cumple. La ley que aprueba el Presupuesto es una ley plena, la ley de ordenación jurídico-financiera del Estado en el ejercicio fiscal de que se trate, por lo que al momento de adoptarse y, aun prepararse, tiene preeminencia sobre la legislación sustantiva en materia relacionada con su naturaleza de ordenamiento financiera del Estado, debiendo mantener su contenido relacionado con la actividad administrativa de recaudación de percepción de ingresos, que opera como una autorización para su recaudación, pero en especial con la realización de gastos, los cuales, en el Presupuesto, tienen límite cualitativo, cuantitativo y temporal en cuanto a los egresos, con arreglo al principio contenido en el artículo 273 de la Constitución Política, es decir, como ordenación suprema de la actividad financiera del Estado. En dicha labor, debe el Organo Ejecutivo incluír aquellas erogaciones que sean necesarias para el funcionamiento de las entidades estatales, sin que la cuantificación propuesta pueda encontrar un límite en la legislación preexistente, por debajo del cual, no pueda proponerle al Organo Ejecutivo la ordenación financiera propuesta para el ejercicio fiscal de que se trate, sin que la existencia de normas legales que indiquen mínimos en su elaboración y aprobación, puedan operar como limitaciones al Organo Ejecutivo, a quien con arreglo al artículo 264 de la Constitución Política le corresponde la preparación del Presupuesto General del Estado, y al Organo Legislativo, su aprobación con arreglo a las normas que gobiernan la materia constitucional presupuestaria. Es evidente que una ley que disponga que el Presupuesto que tenga en un ejercicio determinado ha de operar como un límite mínimo por debajo del cual ni el Organo Ejecutivo en su preparación, ni el Orgalo Legislativo, no puede restringir las potestades que tienen los Organos del Estado que intervienen en su elaboración y aprobación, siendo por tanto excesivos los señalamientos de límites a esa labor en donde la Constitución no los pone.

La sentencia de inconstitucionalidad de 5 de octubre de 1992, se pronunció sobre el alcance de la Ley de Presupuesto, señalando:

> "...
> La Ley de Presupuesto, como ley formal que es, le permite a la Asamblea Nacional incorporar en ella cualquier regla que los legisladores consideren necesaria para el debido cumplimiento del Presupuesto, sólo limitada por las propias prohibiciones constitucionales, que no son el caso en este problema planteado...".
>
> (REGISTRO JUDICIAL, octubre, 1992, pág.19)

Esta limitación, naturalmente, no tiene razón de ser en sede constitucional, en aquellos casos en que es la propia Constitución quien establece un porcentaje mínimo a favor de un Organo del Estado, en cuyo caso el Organo Ejecutivo sí debe respetar el mínimo señalado en la Constitución, lo que, en la actual Constitución, sólo reza para el Ministerio Público y el Organo Judicial (artículo 211 de la Constitución Política).

Por las consideraciones anteriores, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DECLARA que SON INCONSTITUCIONALES las frases " ... el cual no podrá ser inferior al del año anterior...", contenida en el artículo 45 de la Ley N° 7 de 6 de febrero de 1997, y la frase " ... y no podrán ser inferior al monto total de las partidas del año anterior... " contenida en el numeral 1 del artículo 63 de la Ley 11 de 10 de junio de 1981.

Notifíquese y Publíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
ELIGIO A. SALAS (CON SALVAMENTO DE VOTO)
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA
(fdo.) GRACIELA J. DIXON
(CON SALVAMENTO DE VOTO)
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO
MAGISTRADA GRACIELA J. DIXON C.

Con el mayor de los respetos me permito disentir de la posición de mis colegas Magistrados, por cuanto soy del criterio que, la frase "... no podrá ser inferior al monto total de las partidas del año anterior..." contenida en el numeral 1 del artículo 63 de la ley 11 de 10 de junio de 1981 que reorganiza la Universidad de Panamá no es inconstitucional, por lo que expongo a continuación las causas que originan mi desacuerdo con la sentencia.

En la interpretación constitucional, la doctrina ha indicado que después del análisis hermenéutico del texto constitucional, es pertinente hacer uso de los principios que la dirigen. En tal sentido, me permito reproducir uno de estos criterios:

> "... los principios constitucionales constituyen después del texto constitucional, el segundo elemento de parámetro de constitucionalidad, indicando que se trata de las disposiciones de principios que se encuentra en la base misma de un determinado ordenamiento o que constituye una expresión jurídica de las valoraciones políticas que constituyen la estructura fundamental de un determinado ordenamiento
>
> (HERNANDEZ VALLE, Rubén. LA TUTELA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES; editorial Juricentro San José, Costa Rica, 1990, pag. 136)

En desarrollo de esta tesis doctrinal, el Pleno de esta Corporación de Justicia, en reiterada jurisprudencia, ha establecido la necesidad de apoyarse en los principios que rigen la interpretación constitucional, al proferir sus sentencias. Entre estos principios se destaca el de Universalidad Constitucional o de Interpretación Integral de la Constitución, cuyo sustento legal se encuentra contenido en el artículo 2557 del Código Judicial, que impone la obligación de confrontar la norma demandada con todos los preceptos constitucionales que le sean pertinentes.

Ampliando esta línea de pensamiento, en sentencia de 20 de mayo de 1999,

la Corte subrayó que:

> "Como es sabido, el Pleno, al analizar la procedencia de una pretensión de inconstitucionalidad ha de tomar en cuenta, no solamente la disposición que se denuncia como inconstitucional, sino otras que sean pertinentes interpretar por estar relacionadas con aquella " (R:J: de mayo de 1999)

Con fundamento en lo anterior, mi discrepancia, se basa en que las disposiciones constitucionales que de manera directa y específica se refieren a la Universidad de Panamá, son los artículos 99 y 100 de la Constitución, los cuales deben ser interpretados, a fin de procurar aplicar el principio de Universalidad de modo más integral.

En tal sentido, el artículo 99 de la Constitución Política consagra que "La Universidad Oficial de la República es autónoma. Se le reconoce personería jurídica, patrimonio propio y derecho de administrarlo".

Por su parte, el artículo 100 estatuye que:

> "Para hacer efectiva la autonomía económica de la Universidad, el Estado la dotará de lo indispensable para su instalación, funcionamiento y desarrollos futuros, así como del patrimonio de que trata el artículo anterior y de los medios necesarios para acrecentarlo". (Subrayado nuestro)

Como se observa, la frase contenida en el numeral 1 del artículo 68 de la Ley 11 de 1981 resulta apenas cónsona y por ende compatible con la norma constitucional específica que se refiere a la Universidad de Panamá, en tanto que se limita a desarrollar dichos textos constitucionales que otorgan autonomía económica a la Universidad de Panamá, con el objeto de asegurar el cumplimiento de sus fines y atender sus necesidades de funcionamiento y desarrollo futuros.

Esta Autonomía de la Universidad de Panamá ha sido reconocida por esta Corporación de Justicia en rango constitucional, tal como quedó consignado en fallo de 14 de enero de 1993 emitido por el Pleno en los términos siguientes:

> "El artículo 99 de la Constitución Política consagra la autonomía universitaria y la coloca como principio-guía en el encabezamiento de la propia norma fundamental para luego plasmar pautas generales en que esa autonomía debe desarrollarse, a saber, personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa" (R. J. de enero de 1993).

Por virtud de lo expresado, soy del criterio que la acusada violación del artículo 268 de la Constitución que otorga a la Asamblea legislativa la potestad de eliminar o reducir las partidas de los egresos previstos en el proyecto de presupuesto, no puede ser examinada al margen de las disposiciones que de manera específica y con rango constitucional definen los parámetros bajo los cuales se rige la Universidad de Panamá, como es el caso de los artículos 99 y 100 de nuestra Carta Fundamental.

Como se puede apreciar, por la línea de análisis constitucional que propongo, la facultad que confiere el referido artículo 268 de la Constitución a la Asamblea Legislativa, ha de ceder ante la excepción intrínseca que se desprende del sentido, letra y alcance de lo dispuesto por los artículos 99 y 100 de la Constitución.

En síntesis, sobre este aspecto específico de la resolución que motiva mi salvamento de voto, concluyo que la autonomía económica que consagra el artículo 99 y desarrolla el artículo 100 de la Constitución, debe ser respetada. Considerar que la frase "... el cual no podrá ser inferior al monto total de las partidas del año anterior..." contenida en el numeral 1 del artículo 63 de la Ley

11 de 10 de junio de 1981, es inconstitucional, constituye una inadecuada interpretación de la Constitución y la propia ley, ya que ello conduce, a mi criterio, a apartarse del Principio de Universalidad en la interpretación de las normas constitucionales, en perjuicio de las regulaciones específicas y la protección que las mismas otorgan a la Universidad de Panamá.

Como quiera que el criterio aquí esbozado no es compartido por la mayoría de los Magistrados integrantes del Pleno, de la manera más respetuosa SALVO EL VOTO.

FECHA UT SUPRA.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL
MAGISTRADO CESAR PEREIRA BURGOS

La mayoría de los Magistrados del Pleno ha decidido acoger las acciones presentadas por los letrados José Herrero Victoria y Nelson Herbert contra los artículos 63 de la Ley 11 de la Universidad de Panamá y 45 de la Ley 7 de 1977 de la Defensoría del Pueblo, que determinan la intangibilidad de sus presupuestos, al establecer que

Artículo 63: "El patrimonio de la Universidad de Panamá estará constituído por:

> 1. "Las partidas para funcionamiento que le sean asignadas en cada presupuesto nacional, las cuales deberán ser suficientes para garantizar la buena marcha de la Universidad y no podrán ser inferiores al monto total de las partidas del año anterior".
>
> Artículo 45: "Es obligación del Estado dotar a la Defensoría del Pueblo de un presupuesto anual suficiente para asegurar su funcionamiento efectivo, el cual no podrá ser inferior al del año anterior. La dotación económica necesaria para la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo constituirá una partida fija en el presupuesto anual de la Asamblea Legislativa."

Desde el mes de noviembre de 1999, la Corte conoció el proyecto presentado por el Magistrado Dr. Fabián Echevers, proyecto que fue objetado por algunos Magistrados, quienes repitieron sus argumentos frente al proyecto que presenté posteriormente. La similitud entre ambos proyectos no es mera coincidencia, porque deriva de una misma visión de la protección amplia de los derechos humanos, que nuestra Constitución permite mantener, mediante una lectura moderna y democrática, cónsona con las posiciones doctrinales y positivas de los regímenes más progresistas.

El Problema estriba en la superación de la normativa constitucional, por las normas positivas que, nuestro ordenamiento jurídico ha incorporado después de la vigencia de la actual Constitución. Esta circunstancia obliga a una interpretación constitucional amplia, más preocupada por los derechos de los ciudadanos que de los poderes omnímodos del Poder Ejecutivo. La preocupación no es sólo de nuestro país, porque las nociones de impunidad del Estado, de genocidio, de responsabilidad de los gobernantes, ha dejado de ser letra inaplicable, desde que la protección de los derechos humanos ha reemplazado la omnipotencia de los gobiernos.

Pese a los esfuerzos de los últimos años, los estamentos judiciales nacionales mantienen enquistada la idea del Gobierno todopoderoso, que desgraciadamente, termina siempre endiosando personajes y reprimiendo derechos.

En cuanto se refiere a la Universidad de Panamá, me adhiero a los conceptos expresados por la Magistrada Graciela Dixon en su Salvamento de Voto, porque considero que la norma que garantiza la intangibilidad del presupuesto universitario NO ES INCONSTITUCIONAL.

Como su salvamento no se refiere al caso del Defensor del Pueblo, deseo respetuosa constancia de mi opinión contrastante.

No encuentro que la norma impugnada viole el artículo 264 Constitucional.

La interpretación del artículo citado permite señalar que, la elaboración del Presupuesto General del Estado es un acto complejo, que consta de dos fases: una administrativa, que comprende los aspectos financieros correspondientes a la creación de las partidas presupuestarias y una legislativa, que consiste en su "examen, modificación, rechazo o aprobación" por parte de la Asamblea Legislativa.

El artículo 2 de la Ley 7 señala que "La Defensoría del Pueblo velará por la protección de los derechos establecidos en el Título III y demás derechos consagrados en la Constitución Política de la República de Panamá, así como los derechos previstos en los convenios internacionales de derechos humanos y la Ley,..."

Tímida pero claramente, en fallo del 2 de febrero de 1998, esta Corporación decidió que "si bien la figura del Defensor del Pueblo no está regulada constitucionalmente, la institución no es incompatible con nuestro ordenamiento constitucional, porque se trata de una garantía adicional de los derechos previstos en la Constitución y en las leyes, de conformidad con el principio de interpretación favorecedor de los derechos fundamentales y sus garantías (favor libertatis), que tanto los derechos como las garantía de los mismos previstos en la Constitución son mínimos y que pueden ser ampliados por la Ley o por la interpretación constitucional de la Corte Suprema". (Sentencia de Pleno de 2 de febrero de 1998).

Como estimo, que el principio de interpretación coherente de la Constitución desaconseja considerar aisladamente los artículos 264 y 268, sin relacionarlos con lo preceptuado por el Título III, si limitamos la independencia económica del Defensor del Pueblo, terminaremos sofocando la institución y convirtiéndolo en un instituto inoperante.

Cuando manifesté anteriormente que el fallo de 2 de febrero de 1998 pecaba de timido, quise decir, que si la Corte señaló que la Defensoría del Pueblo, sin estar taxativamente contemplada en la Carta Fundamental, tiene su puesto en la vida constitucional panameña, debió decir claramente que la institución y sus instrumentos tienen rango constitucional, con lo que habríamos evitado esta causa, que no beneficia la imágen democrática del país, sin tomar en cuenta, que los Acuerdos Internacionales suscritos por el Estado Panameño tienen rango constitucional.

En consecuencia y con el debido respeto, salvo mi voto.

FECHA DEL FALLO.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR EL LCDO. MIGUEL ROBERTO VANEGAS EN CONTRA DE VARIAS DISPOSICIONES DE LA LEY 14 DE 26 DE MAYO DE 1993, QUE INSTITUYEN LOS DENOMINADOS "CUPOS" O "CERTIFICADOS DE OPERACION". MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIEZ (10) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado MIGUEL ROBERTO VANEGAS, presentó en su propio nombre ante el Pleno de la Corte Suprema, acción de inconstitucionalidad contra el numeral 5° del artículo 5, y los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38, que instituyen los denominados "cupos" o "certificados de operación", de la Ley N° 14 de 26 de mayo de 1993, "Por la cual se Regula el Transporte Terrestre Público de Pasajeros y se Dictan Otras Disposiciones", por infringir el artículo 40 de la Constitución Nacional.

Los hechos más importantes de la demanda son los siguientes:

Que la Ley de marras estableció que por conducto de un Organismo llamado "Ente Regulador", el Estado otorgará "Cupos" o "Certificados de Operación" a las personas que quieran dedicarse al oficio de transporte terrestre público de pasajeros.

Que la Ley 14 no estableció requisitos de idoneidad o moralidad -permitidos constitucionalmente- para la expedición de dichos cupos o certificados de operación, dejando su emisión al "libre y caprichoso criterio del Ente Regulador", o sea, al Estado, por medio de la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (D.N.T.T.T.), del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Que el artículo 40 de la Constitución señala la libertad de toda persona para ejercer cualquier profesión u oficio, sujeta a los reglamentos legales en lo atinente a idoneidad, moralidad, previsión y seguridad sociales, colegiación, salud pública, sindicación y cotizaciones obligatorias, ni se impondrá impuesto o contribución para el ejercicio de las profesiones liberales, los oficios y las artes.

Que las normas impugnadas por inconstitucionales, atentan contra la libertad de profesión y oficio, que garantiza el citado artículo 40 Constitucional.

Que las normas acusadas no establecen requisitos para optar por los "cupos" o "certificados de operación", quedando su expedición al "absoluto arbitrio" del Ente Regulador.

Que en la práctica, el sistema de cupos o certificados de operación, además de inconstitucional, "es fuente constante de problemas", "arbitrariedades " y "escandalosas corruptelas".

En cuanto a la indicación de las normas constitucionales que se estiman violadas y concepto de la infracción, indicó el demandante que el artículo 40 Constitucional fue violado por todos los artículos impugnados de la Ley 14, en concepto de violación directa por acción, en la medida en que la obligación de contar con un cupo o certificado de operación expedido por el Estado, sin atender a ningún requisito constitucional, atenta -a su juicio- contra la libertad de profesión y de oficio garantizada en la Constitución Nacional.

Afirmó que la ley puede reglamentar requisitos de idoneidad, moralidad, sindicación etc., para las personas que deseen dedicarse al transporte terrestre público de pasajeros, pero no puede otorgar al Estado la potestad de conceder o no, a quien quiera, un Certificado de Operación o Cupo, porque ello impide la libertad del oficio del transportista terrestre colectivo o selectivo.

Admitida la demanda, se corrió traslado al Ministerio Público, correspondiéndole al Procurador General de la Nación, el turno para emitir su opinión sobre el presente negocio, lo que hizo mediante la Vista N° 3 de 8 de marzo de 1999.

En ella, manifestó el Jefe del Ministerio Público que, en términos generales, el actor no determinó ningún aspecto específico que considerara inconstitucional en las normas impugnadas.

Trajo a colación un fallo de esta Superioridad, de 25 de mayo de 1994, que declaró no inconstitucionales los ordinales 1, 5 y 6 del artículo 37, así como el artículo 38 de la ley de marras, produciéndose en cuanto a estas normas, el fenómeno procesal de cosa juzgada constitucional; por ello, el análisis de opinión se centró en las otras normas impugnadas.

Dijo que el servicio de transporte público de pasajeros constituye un servicio que pueden brindarlo tanto personas naturales como jurídicas, y que, debido a la naturaleza pública de la prestación, el Estado está obligado a crear un mecanismo que asegure la eficacia y la prestación del servicio, y que garantice los derechos y obligaciones de las partes -transportistas, conductores y usuarios.

Para ello, el Estado creó un sistema de concesiones a favor de determinada persona natural o jurídica para que preste el servicio público de transporte, inspirado en el bienestar social y el interés público.

En este sentido, la concesión de los "Certificados de Operación" o "Cupos" es efectuada por el Ente Regulador.

Consideró que, aunque ni la Ley 14 de 1993 ni el Resuelto N° 167 de 29 de junio de 1993 -que reglamenta el procedimiento para la concesión de los mencionados Certificados- establecieron requisitos que restringieran la cantidad de usuarios que aspiren a prestar el servicio, eso en vez de obstaculizar la libertad de profesión, ha permitido mayor acceso a todos los interesados para prestar el servicio, desacreditando el argumento del demandante, de que la expedición de los Cupos ha quedado al libre y caprichoso arbitrio del Ente Regulador, atentando contra la libertad de profesión.

Por otro lado, el señalamiento de que las concesiones "caprichosas" desatienden el contenido de los artículos que componen la Ley 14, señaló que el Ente Regulador tiene adscrito en cada provincia un organismo mixto denominado Consejo Técnico Provincial de Transporte, formado por representantes del Ente Regulador, de los transportistas de la respectiva provincia, y de representantes de los usuarios.

Que dichos Consejos tienen la facultad de vigilar la sujeción al procedimiento para obtener los Cupos, así como su traspaso y cambio de unidades. Si las recomendaciones del Consejo Técnico Provincial no son acogidas por el Ente Regulador, aquel puede -en virtud de los artículos 9 y 10 de la Ley 14- interponer los medios impugnativos ante la vía gubernativa, y la jurisdicción contencioso-administrativa.

Ello implica que el Ente Regulador no puede conceder los Certificados de Operación libre y caprichosamente, ya que está adscrito a un organismo que tiene, entre sus funciones, la de fiscalizar la concesión de los Cupos.

Además, el artículo 33 de la ley de marras -impugnado- señala que los Certificados de Operación serán concedidos de manera gratuita por el Ente Regulador, reconociendo los derechos de los poseedores de dichos Cupos anteriores, y estableciendo que los nuevos Certificados serían concedidos a los aspirantes seleccionados de las listas de espera de las líneas, rutas o piqueras vigentes, según el orden de prelación.

Todo esto -a juicio del Procurador- demuestra que los mecanismos de control para la concesión de los Certificados de Operación o Cupos, de una manera objetiva, están debidamente recogidos en la Ley, por lo que los argumentos del demandante constitucional carecen de fundamento, ya que ese control, en vez de violar el derecho de profesión establecido en el artículo 40 Constitucional,

busca garantizar que las concesiones sean otorgadas a personas que puedan cumplir su compromiso, en pro del interés público y el bienestar social.

En otro sentido, consideró el Jefe del Ministerio Público que los artículos 31 al 38 de la ley de marras, establecen los mecanismos de control para garantizar el interés público y el bienestar social, por lo que no infringe el artículo 40 de la Carta Política.

Luego de transcribir cada una de esas normas, dijo el Procurador que su estudio revela que las mismas protegen al usuario, al concesionario y al transportista, al establecer medidas de control para la concesión de los Cupos, lo que es necesario dada la naturaleza del servicio prestado, como el llevar registro de todos los Cupos otorgados, el reconocimiento de la titularidad anterior a la vigencia de la Ley 14, la concesión del plazo para sustituir el vehículo en caso de pérdida, para reducir los perjuicios ocasionados a los usuarios por la disminución de las unidades de transporte que prestan el servicio, así como la cancelación de los Cupos, de acuerdo al procedimiento legal.

Por lo tanto, reiteró el Opinador que las medidas señaladas en las normas impugnadas no perjudican a los dueños de los Cupos, al determinar las causales que originan la cancelación del Cupo.

Finalmente, en cuanto al numeral 5° del artículo 5 de la ley de marras -que define lo que es Cupo-, no limita la libertad de profesión, porque, en concordancia con la Ley, definió el Cupo como mecanismo creado por el Estado para cuidar y vigilar la concesión del derecho de prestar un servicio público de transporte de pasajeros, a todos los aspirantes que reúnan los requisitos para ello, no siendo posible -considera el Procurador- que la prestación de ese servicio público sea concedido sin que medie un procedimiento que asegure que se rinda el servicio con eficacia y seguridad.

Por todo ello, solicitó el Procurador General de la Nación que los numerales 1, 5 y 6 del artículo 37 y el artículo 38 de la Ley 14 de 1993 sean declarados como cosa juzgada constitucional, en virtud del fallo de 25 de marzo de 1994; y que se declare que los artículos 5, numeral 5°, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 36, numerales 2, 3, 4 y 7 de la misma ley, no violan el articulo 40 Constitucional ni ninguno otra de dicha excerta.

Devuelto el expediente a la Secretaría General de la Corte, se fijó en lista por el término de diez (10) días a partir de la última publicación de los Edictos, para que el demandante y todas personas interesadas presentaran argumentos por escrito respecto al caso.

Por lo tanto, cumplidas las ritualidades procesales establecidas para esta clase de negocio constitucional, se dispone la Corte a resolver el fondo del caso, para lo cual adelanta las siguientes consideraciones.

En primer lugar, concuerda el Pleno con el señalamiento del Procurador General de la Nación, cuando en su Vista, invocó la sentencia de 25 de marzo de 1994, en el que esta Corporación de Justicia declaró NO INCONSTITUCIONALES, los ordinales 1, 5 y 6 del artículo 37, así como el artículo 38 de la Ley 14 de 1993, por lo que, efectivamente, se verifica el fenómeno jurídico denominado SUSTRACCIÓN DE MATERIA CONSTITUCIONAL, ya que la jurisprudencia producida sobre el particular, ha establecido que cuando la Corte se ha pronunciado anteriormente sobre la constitucionalidad de una norma o un acto acusados de inconstitucional, la decisión sentada rige para las acciones interpuestas contra las mismas normas o actos impugnados, a menos que cambie de criterio.

Por lo tanto, el Pleno debe declarar COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL respecto a los ordinales 1°, 5 y 6 del artículo 37, y del artículo 38 de la Ley N° 14 de 1993, razón por la que no será ventilada la presunta inconstitucionalidad de dichas normas.

En cuanto al análisis de las restantes normas impugnadas por inconstitucionales, debemos, en primer lugar, transcribir la norma superior que presuntamente infringen:

> "ARTICULO 40: Toda persona es libre de ejercer cualquier profesión u oficio sujeta a los reglamentos que establezca la Ley en lo relativo a idoneidad, moralidad, revisión y seguridad sociales, colegiación, salud pública, sindicación y cotizaciones obligatorias.
>
> No se establecerá impuesto o contribución para el ejercicio de las profesiones liberales y de los oficios y las artes."

Afirmó el actor que la norma fue violada por todos los artículos por él impugnados, en concepto de violación directa por acción (comisión), porque la obligación de tener un Cupo, expedido por el Estado para poder ofrecer el servicio, atenta contra la libertad de profesión que garantiza la norma transcrita, porque, aparte de la reglamentación que debe hacerse cumplir en cuanto a colegiación, moralidad, idoneidad, sindicación para los que quieran explotar la actividad de transporte público de pasajeros, no puede el Estado reservarse el derecho de "conceder a quien quiera", los Cupos o Certificados de Operación, lo cual -a su juicio- coarta la libertad del oficio del transportista, tanto colectivo como selectivo.

Es decir, la esencia de la demanda estriba en que las normas impugnadas dejan al arbitrio del Ente Regulador, la concesión de los Cupos o Certificados de Operación para la explotación del servicio de transporte público, lo que ha producido abusos, injusticias, y coarta la libertad de oficio de los transportistas que aspiran a brindar el servicio.

El numeral 5° del artículo 5 de la Ley 14 de 1993 es del siguiente tenor:

> "Artículo 5. Para los efectos de esta ley, regirán las siguientes definiciones:
> ...
> 5. Cupo: Certificado de operación concedido por el Estado al propietario de un vehículo, que lo autoriza para prestar el servicio público de transporte terrestre en una ruta o zona determinada."

No logra comprender esta Corporación de Justicia, cómo ésta norma infringe la libertad de profesión, ya que, lo que la definición de "Cupo" o "Certificado de Operación" revela, es el mecanismo de concesión de Cupos por parte del Estado a los propietarios de vehículos en general, que los autoriza para prestar el servicio público de transporte terrestre en una ruta o zona determinada; pero no hace ninguna acepción conceptual en cuanto a los propietarios de vehículos, refiriéndose a todos en general.

Por lo tanto, no prospera la pretensión.

Por su parte, el artículo 31 dice lo siguiente:

> "Artículo 31. Todo vehículo destinado a la prestación del servicio de transporte terrestre público debe tener un certificado de operación o cupo, otorgado a su propietario, en el que se hace constar las características genéricas del vehículo, el número de su placa de circulación, las generales del propietario, la linea o ruta en que prestará el servicio y el concesionario responsable del mismo.
>
> El certificado de operación o cupo, así como el vehículo que éste ampara, pueden ser objeto de garantía, pudiendo el acreedor, en caso de que sea necesario, administrarlos o recibirlos en usufructo hasta tanto recupere su acreencia."

La primera parte de la norma revela la obligatoriedad de que todo vehículo dedicado a la actividad de transporte público de pasajeros, tenga el Cupo -o licencia- para explotar la actividad. Este requisito debe ser cumplido por todos los propietarios de vehículos destinados al transporte público colectivo y selectivo, con total independencia de quién sea el dueño del vehículo.

El segundo párrafo de la norma establece los requisitos que debe contener dicho Certificado de Operación, los cuales operan para todos los vehículos. También señala que, tanto el vehículo que presta el servicio, como su Cupo, son objeto de garantía para asegurar una obligación, y también pueden ser objeto de administración por parte del acreedor hasta que recupere su acreencia.

Esta medida tiende a defender a terceras personas que tengan derechos o intereses afectados por los propietarios de los vehículos y/o sus Cupos, por cualquier motivo -procesos legales por accidentes, etc.

Esta regla es aplicable por igual a todos los transportistas que exploten el servicio, razón por la que tampoco infringe la libertad de oficio, denunciada por el Licdo. VANEGAS.

El artículo 32 de la excerta, señala que:

> "Artículo 32. El Ente Regulador llevará un registro de todos los vehículos que presten el servicio de transporte terrestre público de pasajeros en el territorio nacional. Este registro contendrá el número del certificado de operación o cupo del vehículo, sus características, la línea, ruta o piquera donde presta el servicio, el nombre y generales del propietario del vehículo, y si contra el vehículo registrado pesa algún tipo de gravamen."

La norma señala que el organismo denominado Ente Regulador, tendrá el control de los registros de todos los vehículos que exploten la actividad de transporte público de pasajeros en Panamá, ya que es la entidad creada por el Estado para regir y controlar la actividad en nuestro país, porque, como es lógico, ésta debe ser supervisada por el Estado, precisamente, para evitar abusos.

Los elementos que debe contener dicho registro -número de Cupo del vehículo, sus características, la línea en la que presta el servicio, identificación del propietario y gravamen contra el vehículo- deben ser cumplidos por igual por todos los propietarios de los vehículos que explotan este servicio público, con la intención de identificar los vehículos de manera certera, así como a sus propietarios y la situación legal por la que atraviesan.

Tampoco se advierte allí, ninguna violación a la libertad de oficio garantizada por el artículo 40 Constitucional, porque la norma sólo está garantizando la fiscalización de la actividad por medio del Ente Regulador, quien controlará el registro de los vehículos, por lo que tampoco prospera esta impugnación.

El artículo 33 ibídem, es del siguiente tenor:

> "Artículo 33. El Ente Regulador concederá los certificados de operación o cupos para cada línea, ruta o piquera, gratuitamente, salvo el pago de los derechos de trámite establecidos por el Ente Regulador, previa consulta con los Consejos Técnicos Provinciales de Transporte.
>
> Para la prestación del servicio en líneas, rutas o piqueras, que se modifiquen por reestructuración, se seleccionará prioritariamente a los poseedores de certificados de operación o cupos vigentes de otras líneas, rutas o piqueras que hayan sido objeto de disminución de unidades. En segunda instancia, los nuevos certificados de

operación o cupos y los que hayan sido objeto de cancelación por las causales previstas en esta Ley, se concederán a los aspirantes seleccionados de las listas de espera de las líneas, rutas o piqueras vigentes, atendiendo al orden de prelación de las mismas.

Las listas a que se refiere este artículo serán confeccionadas en la primera Asamblea General de Propietarios de los vehículos de la línea, ruta o piquera correspondiente, de acuerdo a los años de servicios, el orden cronológico, la experiencia y los méritos de los aspirantes. Esta lista estará integrada, en primer lugar, por los conductores no propietarios de la línea, ruta o piquera correspondiente, y, en segundo lugar, po los propietarios de las mismas. La copia del acta y el listado aprobado por la Asamblea General de Propietarios, deben ser registrados ante el Ente Regulador y mantenerse en un lugar visible de la piquera o terminal correspondiente. Los nuevos interesados en la concesión de certificados de operación o cupos que surjan después de celebrada la primera Asamblea General de Propietarios, deben solicitar al concesionario de la línea, ruta o piquera de su interés, que los inscriba en la lista correspondiente, quedando el concesionario obligado a notificar inmediatamente al Ente Regulador esta inscripción. Los certificados de operación o cupos serán otorgados sólo a los nacionales panameños.

Parágrafo (Transitorio). Los poseedores de certificados de operación o cupos que no sean panameños, deben adecuarse a esta Ley dentro del período de los seis (6) meses, a partir de la entrada en vigencia de la misma.

Todas las transacciones realizadas con anterioridad a la vigencia de esta Ley, en la que estuviere involucrado el certificado de operación o cupo y/o el vehículo, deben ser registradas ante el Ente Regulador dentro del período de seis (6) meses, a partir de la entrada en vigencia de esta Ley."

El primer párrafo, sólo señala que los Cupos serán concedidos por el Ente Regulador para las líneas, rutas o piqueras de manera gratuita -a juicio de la Corte para evitar favoritismos- con la sola condición de que se paguen los derechos de trámite del Cupo que establezca el Ente Regulador, luego de consultados los Consejos Técnicos Provinciales de Transporte.

Es decir, que el ente estatal es quien concede los cupos de manera gratuita, excepto por los gastos de trámite, y que los requisitos para la obtención de dichos Cupos tienen que ser consultados con los Consejos Técnicos de Transporte, que a su vez está formado por representantes de todos los sectores; no observamos allí, ningún favoritismo en favor de algunas personas, ni limitación a libre ejercicio del oficio de transportista.

Lo que sucede es que, tal como señaló el representante del Ministerio Público, el ente estatal tiene que establecer algunos requisitos para garantizar la calidad y la continuidad del servicio al usuario, y ello es lo que refleja esta porción de la norma.

Ahora bien, el artículo en estudio también enseña -en su segundo párrafo- que en los casos de selección de piqueras, líneas o rutas que se estuvieran modificando por reestructuración -al momento de la implementación de esta Ley-, se preferiría entonces a las otras líneas, rutas o piqueras que tuvieran certificados vigentes, y que hubieran sufrido disminución de unidades.

Es decir, en el caso de las líneas, piqueras o rutas que no pudieran prestar el servicio por reestructuración, éstas serán suplidas o reemplazadas por otras líneas, piqueras o rutas que poseyeran Certificado de Operación y que estuvieran en inferioridad numérica de unidades, para así darles la oportunidad,

al momento de implementar la Ley 14, de una mayor participación para beneficiarlos.

Ello, a juicio del Pleno, no constituye ninguna violación a la libertad de oficio; por el contrario, la norma trata de garantizar la participación equitativa de todos.

La segunda parte del párrafo señala que los nuevos Cupos o Certificados de Operación que fuera a otorgar el Ente Regulador -al iniciar la vigencia de la Ley-, así como los Certificados que hubieran sido cancelados por causas establecidas en la Ley, se le concederían a los aspirantes que se seleccionarían de las listas de espera de las líneas, rutas o piqueras vigentes, según el orden de prelación.

Es decir, que los nuevos aspirantes a obtener los Cupos o Certificados de Operación ya existentes o nuevos, se seleccionarían de las listas de espera que -según el siguiente párrafo de la norma- serían confeccionadas por la primera Asamblea General de propietarios de vehículos de las líneas, rutas o piqueras correspondientes, "de acuerdo a los años de servicios, orden cronológico, experiencia y méritos de los aspirantes".

Ese orden de prelación que establece el artículo en estudio, está determinado por el tercer párrafo de la norma, cuando se refiere a la preferencia de los conductores no propietarios de vehículos, en primer lugar, y luego los propietarios, en segundo lugar, con la misma intención, de lograr una participación equitativa de los transportistas.

Luego establece el mecanismo de reconocimiento de candidatos a Cupos por el Ente Regulador, mediante copia de acta y listado proporcionado por la Asamblea General de Propietarios.

Todo esto denota un riguroso mecanismo de selección de candidatos para suplir las líneas, rutas o piqueras que no podían prestar el servicio al momento de aplicar la Ley 14, o de los nuevos aspirantes a los cupos libres o nuevos; cualquier persona puede ser aspirante a un Cupo o Certificado de Operación, siempre que cumpla los requisitos transcritos.

No constituye esta, ninguna violación a la libertad de oficio, ya que lo que revela la norma, es una regulación en las distintas circunstancias en que se pueden conceder los Cupos o Certificados de Operación; dicha reglamentación no afecta a ninguna piquera o propietario en particular, pues categoriza a los candidatos nuevos que deseen obtener el permiso para explotar la actividad.

No viola esta norma, el artículo 40 de la Constitución.

Por su parte, el artículo 34 de la excerta bajo análisis es del siguiente tenor:

> "Artículo 34. Después de noventa (90) días de promulgada la presente Ley, se entenderá por definitiva la titularidad del certificado de operación o cupo que conste en el Ente Regulador. Ningún otro documento público o privado será reconocido para tal efecto."

Esta norma establece el valor del cupo o certificado de operación reconocido y registrado en el Ente Regulador, al entenderse por definitiva su titularidad luego de 90 días de promulgada la Ley 14; enfatiza lo anterior al señalar que no se reconocerá otro documento público o privado para probar la autorización del Estado -Ente Regulador- para explotar la actividad de transporte público de pasajeros.

Esta valoración o titularidad documental se le reconoce al cupo o certificado de operación, y nada tiene que ver con su concesión por parte del Ente Regulador, ni el modo de otorgarlo, ni las características de los aspirantes

para obtenerlo.

Por lo tanto, tampoco prospera la impugnación contra esta norma legal.

En otro sentido, el artículo 35 íbidem, dice así:

> "Artículo 35. En caso de pérdida de un vehículo de transporte terrestre, el Ente Regulador concederá el plazo de un (1) año para el transporte colectivo; y de seis (6) meses, para el selectivo, contados a partir del momento en que ocurrió la pérdida, para el reemplazo de este vehículo, cuando así lo solicite el propietario del certificado de operación o cupo correspondiente. El Ente Regulador concederá una prórroga de seis (6) meses para el transporte colectivo; y de tres (3) meses, para el transporte selectivo, previa solicitud del interesado, y con la condición de que éste demuestre que tramita la compra o importación de un vehículo sustituto. En estos casos, el concesionario de la línea, ruta o piquera afectada por la pérdida tomará las providencias correspondientes, para satisfacer las necesidades del usuario."

Esta norma establece el mecanismo aplicable por el Ente Regulador, en caso de que cualquier línea, ruta o piquera pierda un vehículo, señalando plazos para el reemplazo de los mismos, así como sus prórrogas a petición de los propietarios, y requisitos para ello.

Tampoco observa el Pleno ninguna violación al principio constitucional de libertad de oficio, pues la norma establece un mecanismo para resolver una situación de carencia por parte de la línea, ruta o piquera de que se trate, en términos generales, lo que indica que es aplicable a todas las líneas, rutas o piqueras del país, de transporte colectivo o selectivo.

Por ser la norma, de aplicación general, no puede violar el principio esbozado por el actor; no prospera la pretensión.

En cuanto al artículo 36 íbidem, el mismo se expresa así:

> "Artículo 36. En caso de incumplimiento de las disposiciones legales o contractuales por parte de los propietarios de certificados de operación o cupos, el concesionario de la línea o ruta respectiva, por decisión de la Asamblea General de los Propietarios, solicitará al Ente Regulador la cancelación del certificado de operación o cupo respectivo, a fin de no ver afectada su concesión.
>
> Comprobada la causal de cancelación, el Ente Regulador quedará obligado a cancelar el certificado de operación o cupo correspondiente. No obstante, el Ente Regulador se reserva el derecho de cancelar en cualquier momento los certificados de operación o cupos por las causas establecidas en esta Ley y el Contrato de Concesión, aplicables al titular del certificado de operación o cupo."

Al igual que en el análisis de la norma anterior, el primer párrafo del artículo 36 establece una fórmula general de defensa para los concesionarios de las líneas o rutas involucradas, para que puedan solicitar al Ente Regulador la cancelación de los certificados o cupos de sus propietarios, y así proteger la concesión a su ruta, cuando éstos incumplan sus responsabilidades legales o contractuales.

Ello ocurre, en primer lugar, mediante acuerdo de la Asamblea General de Propietarios, quienes harán la solicitud al Ente Regulador quien, de comprobar la causal, hará la cancelación del cupo. Como vemos, el mecanismo es imparcial.

El segundo párrafo señala, de manera complementaria, que el Ente Regulador

está facultado, por sí solo, para cancelar los cupos o certificados de operación, si comprueba que el propietario -cualquiera que sea este- ha incurrido en incumplimiento legal o contractual.

También está autorizado para anular -en cualquier tiempo- dicha autorización para operar, cuando los propietarios de los cupos -cualquiera que ellos sean- hayan incurrido en alguna de las prohibiciones impuestas por la ley.

Este párrafo es también es de carácter general, y por ello no puede violar el artículo 40 Constitucional.

Por otro lado, en cuanto a la infracción por parte de los numerales 1 al 7 del artículo 37 de la Ley 14, no estudiaremos la acción contra los numerales 1, 5 y 6, ni la presunta infracción constitucional infringida por el artículo 38, por razón de la cosa juzgada constitucional producida respecto a estas normas, por razón del fallo de 25 de mayo de 1994, en el que el Pleno los declaró no inconstitucionales.

Los numerales pertinentes establecen los siguientes:

"Artículo 37. Los certificados de operación o cupos serán cancelados por las siguientes causales:
1. .....
2. Por actividades delictivas en las que el vehículo estuviera relacionado, con la participación o el conocimiento comprobado del transportista.
3. Por la suspensión total o parcial del servicio, sin causa justificada. Se entenderá por causa justificada la imposibilidad de prestar el servicio por daños mecánicos o medidas decretadas por la autoridad pública competente.
4. Por el uso indebido, en perjuicio del Fisco, de las exoneraciones y subsidios contemplados en la presente Ley.
5. .....
6. .....
7. ....."

Este artículo establece las causales por las que el Ente Regulador puede cancelar los cupos de marras; el numeral segundo señala que se suspenderá la autorización para explotar la actividad cuando el vehículo ha tenido relación con alguna actividad delictual, si el propietario participó en la misma o si tuvo conocimiento de que su vehículo estuvo relacionado con dicha actuación delictiva.

Nuevamente, nos encontramos con la constante de que la norma le concede al Ente Regulador la facultad para cancelar el cupo o certificado de operación de cualquier propietario, si su vehículo está involucrado en un hecho punible, si éste tenía conocimiento o participación de la comisión del delito.

El numeral tercero señala que el Ente Regulador puede cancelar el cupo, si el servicio que presta el propietario del mismo ha sido suspendido "sin causa justificada", entendiéndose por causa justificada que la suspensión por daño mecánico o por medidas que contra él haya decretado una autoridad pública.

Este numeral también es de aplicación general, ya que la cancelación que puede hacer el Ente Regulador, puede ser contra cualquier propietario de cupo que haya suspendido el servicio sin justificación legal; incluso, define los casos en que la suspensión se considera justificada.

El numeral cuarto, señala que el cupo o certificado de operación puede ser cancelado por el uso indebido de las exoneraciones y subsidios contemplados en esta Ley, si con ello se defrauda al Fisco.

Igual suerte que los anteriores corre este numeral, por cuanto el uso indebido de las exoneraciones y subsidios que establece esta Ley 14, y que

defrauden al Fisco, puede ser cometido por cualquier propietario de certificado de operación que goce de dichas exoneraciones y subsidios.

La norma es de aplicación general, y contrario a lo señalado por el accionante, de que "... el Estado se reserva el derecho a conceder o no a quien quiera dedicarse a esta actividad u oficio, un cupo o un certificado de operación, ..., lo que, al hacerse, impide la libertad del oficio de transportista, ...".

Ya se ha establecido que las normas analizadas establecen el procedimiento para la asignación de los cupos, así como las razones y circunstancias para cancelarlos, las cuales están determinadas por parámetros generales.

Además, en caso de que ocurrieran las situaciones expuestas por el Licdo. MIGUEL VANEGAS, ello obedecería a la aplicación de la Ley 14 de 1993, y no por su contenido.

Por consiguiente, es el criterio de esta Corporación de Justicia, que no prospera la presente demanda de inconstitucionalidad, no sin tomar en cuenta que en cuanto a los ordinales 1, 5 y 6 del artículo 37 y el artículo 38, opera el fenómeno jurídico denominado cosa juzgada constitucional.

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL respecto a los artículos 37 numerales 1, 5 y 6, así como el artículo 38, y que NO SON INCONSTITUCIONALES los artículos 5 numeral 5°, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37 numerales 2, 3, y 4 de la Ley N° 14 de 26 de mayo de 1993.

Cópiese, Notifíquese y Publíquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR EL LCDO. CARLOS R. AYALA, EN REPRESENTACION DE FREDESVINCO CAMARGO, CONTRA LA RESOLUCION NO. 122 DE 27 DE OCTUBRE DE 1999, EMITIDA POR EL CONSEJO DE GABINETE. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, ONCE (11) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Carlos R. Ayala, actuando en nombre y representación de FREDESVINCO CAMARGO, ha interpuesto advertencia de inconstitucionalidad contra la Resolución No. 122 de 27 de octubre de 1999, emitida por el Consejo de Gabinete.

Cabe señalar que después de practicado el reparto de rigor, elevó la Secretaría General de la Corte un informe al Pleno, comunicándole sobre la presentación de cuatro advertencias de inconstitucionalidad presentadas por el licenciado Carlos R. Ayala, en representación de Vielka de Kirton, Eduardo Arias, Emilio Gaitán y Manuel Ojo, todas contra la Resolución No. 122 de 27 de octubre de 1999, emitida por el Consejo de Gabinete, por lo que procedió el Pleno a acumularlas para que se sustancien y fallen en una sola sentencia. Mediante auto de 14 de julio de 2000, se acumularon las cuatro advertencias formuladas por el licenciado Ayala al expediente repartido a este sustanciador.

En este momento le corresponde a la Corte pronunciarse sobre la admisibilidad de la consulta, es decir, si cumple con los parámetros establecidos por el inciso segundo del numeral uno del artículo 203 de la Constitución Nacional y los artículos 2549, 2551 y 2552 del Código Judicial.

Observa el Pleno que la advertencia no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 2551 del Código Judicial que establece que además de los requisitos comunes a toda demanda, señalados en el artículo 654 del Código Judicial, la demanda de inconstitucionalidad debe contener la transcripción literal de la disposición, norma o actos acusados de inconstitucionales que se estimen infringidas y el concepto de la infracción. Esto es así, pues la parte actora se limita a indicar las disposiciones constitucionales que estima violadas y el concepto de la infracción, pero no señala los hechos que dieron lugar a la demanda, ni transcribe literalmente la resolución acusada de inconstitucionalidad.

Tampoco acompaña con su demanda copia autenticada de la resolución No. 122 de 27 de octubre de 1999, ni cita el número y fecha de la respectiva Gaceta Oficial, tal como lo exige el artículo 2552 del Código Judicial.

En consecuencia, EL PLENO de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE las advertencias de inconstitucionalidad interpuestas por el licenciado Carlos R. Ayala, actuando en nombre y representación de FREDESVINCO CAMARGO, VIELKA DE KIRTON, EDUARDO ARIAS, EMILIO GAITAN Y MANUEL OJO, contra la Resolución No. 122 de 27 de octubre de 1999, emitida por el Consejo de Gabinete.

Notifiquese,

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR AROSEMENA & AROSEMENA, EN REPRESENTACIÓN DE JUDITH DE LOS RÍOS BAZÁN, CONTRA EL ARTÍCULO 1977-A DEL CÓDIGO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma Arosemena & Arosemena ha presentado advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo 1977-A del Código Judicial, dentro del proceso instruido por delito contra el patrimonio (estafa), en perjuicio de Judith de los Ríos Bazán.

En esta etapa corresponde al Pleno examinar si la acción constitucional advertida cumple con los postulados legales y jurisprudenciales que hagan viable su admisión.

En ejercicio de esta función, observa el Pleno que la presente acción constitucional incoada presenta una serie de irregularidades que imposibilitan su admisión.

En primer lugar, el propio accionante indica que "la funcionaria encargada de la investigación ha ordenado el archivo del proceso, aprovechando el principio

de oportunidad, al aplicar al efecto el ordinal 1° del artículo 1977-A delCódigo Judicial", de lo que se desprende claramente que la advertencia ha sido enderezada contra una norma que ya ha sido aplicada. Ello se corrobora del Auto de 26 de abril de 2,000, de fojas 117 a 121, mediante el cual la señora Fiscal Décimo Cuarta del Primer Circuito Judicial de Panamá, aplicando el principio de oportunidad consagrada en la excerta que se advierte de inconstitucional, ordenó el archivo del sumario y su correspondiente salida del respectivo registro; además, fijó un período de 60 días hábiles para que el interesado presentara las objeciones correspondientes.

Reiterados han sido los pronunciamientos de esta Corporación, según los cuales la advertencia de inconstitucionalidad sólo procede cuando la norma o normas que se acusan aún no han sido aplicadas.

De este hecho deviene la extemporaneidad y consecuente improcedencia de la presente advertencia.

A este efecto son consultables las resoluciones de 15 de marzo de 1999 y 21 de enero de 2000.

Por otro lado, puede advertirse que, en la advertencia formulada, el proponente omitió indicar el número y fecha de la Gaceta Oficial donde fue publicada la Ley No. 39 de 26 de agosto de 1999, mediante la cual fue adicionado el artículo 1977-A del Código Judicial, que advierte de inconstitucional, por lo que incumple con los presupuestos del artículo 2552 del Código Judicial.

Ante estas circunstancias, no procede otra decisión más que declarar la inadmisibilidad de la advertencia formulada.

Por las consideraciones anteriores, la Corte Suprema de Justicia, en Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la advertencia de inconstitucionalidad propuesta por la firma forense Arosemena & Arosemena, en representación de JUDITH DE LOS RÍOS BAZÁN, contra el artículo 1977-A del Código Judicial.

Notifiquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) YANIXSA YUEN
Secretaria General, Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ROGELIO CRUZ RÍOS, EN NOMBRE PROPIO, CONTRA DOS FRASES DEL ARTÍCULO 2508-A DEL CÓDIGO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Rogelio Cruz Ríos interpuso ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de inconstitucionalidad contra las frases que a continuación se subrayan, contenidas en el artículo 2508-A del Código Judicial:

> "ARTICULO 2508-A. Por razones de orden público e interés social y por vía de excepción, podrá concederse la extradición o la entrega simple y condicionada de un extranjero al Estado requirente por

> parte del Órgano Ejecutivo a pesar de que medie proceso penal o ejecución de sentencia condenatoria en nuestro país ...
> .....
> En todo caso, el proceso penal que se siga en la República de Panamá continuará en ausencia del procesado entregado o expatriado, dándosele todas las garantías de representación judicial."

Encontrándose el negocio en estado de resolver se advierte que, mediante Sentencia de 1° de agosto de 2000, cuya copia autenticada consta en autos, se resolvió otra acción de inconstitucionalidad interpuesta por el propio licenciado Cruz Ríos contra la totalidad del citado artículo 2508-A del Código Judicial. En esta Sentencia, el Pleno declaró lo siguiente:

> "Por las consideraciones expuestas, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA que es INCONSTITUCIONAL la palabra "expatriado" contenida en el último párrafo del artículo 2508-A del Código Judicial y DECLARA CONSTITUCIONAL el resto del artículo."

Del hecho anotado se infiere que en el presente negocio existe cosa juzgada constitucional y así se procede a declararlo.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL en la demanda de inconstitucionalidad promovida por el licenciado Rogelio Cruz Ríos contra las frases arriba subrayadas del artículo 2508-A del Código Judicial.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES R.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR TILE & ROSAS, EN REPRESENTACIÓN DE PRODUCTOS DE PRESTIGIO, S. A. CONTRA LOS ARTÍCULOS 9 Y 10 DEL DECRETO EJECUTIVO N 89 DE 8 DE JUNIO DE 1993, QUE REGLAMENTA LA LEY 24 DE 1992. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Pleno de esta Corporación de Justicia mediante resolución de 16 de mayo de 2000, resolvió la Advertencia de Inconstitucionalidad formulada por la firma Tile y Rosas, en representación de Productos de Prestigio, S. A., contra los artículos 9 y 10 del Decreto Ejecutivo No. 89 de 8 de junio de 1993, que Reglamenta la Ley 24 de 1992. En la parte resolutiva del citado fallo, se decidió lo siguiente:

> "Por lo que antecede, La Corte Suprema PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE SON INCONSTITUCIONALES el segundo párrafo del artículo 9 del Decreto Ejecutivo No. 89 de 8 de julio de 1993 y el segundo párrafo del artículo 10 del Decreto Ejecutivo No. 89 de 8 de julio de 1993 que reglamentan la Ley 24 de 1992, impugnados dentro de las advertencias

de inconstitucionalidad presentadas por la firma Tile y Rosas actuando en representación de Falcon Security Investment, S.A., Productos de Prestigio, S.A., Rosendo González, Percy Nuñez Jauregui, Grant Thornton, Cheng y Asociados, Stimulus, S.A., Rodrigo Quiróz Batres, César Augusto Roberts Coronado, Seguros Nacionales, S.A., Megamotors, S.A., Corporación Global de Telecomunicaciones, S.A. y Rofer, S.A. acumuladas mediante autos de 22 de febrero y 3 de marzo de 1999, por violación del artículo 179 numeral 14 de la Constitución Nacional.

Notifíquese y Publíquese."

(El subrayado es nuestro)

De lo transcrito, advierte el Pleno, que se incurrió en un error de escritura, en cuanto a la fecha del Decreto Ejecutivo No. 89 de 1993, toda vez que se indicó que éste fue emitido en el mes de julio, correspondiendo en realidad al mes de junio.

Ahora bien, el artículo 986 del Código Judicial establece que toda decisión judicial, de cualquier naturaleza, es corregible en cualquier tiempo, sólo en su parte resolutiva, cuando se incurra "en un error pura y manifiestamente aritmético o de escritura o de cita"; por lo que procedemos a enmendar el error advertido.

PARTE RESOLUTIVA

Por lo que antecede, la Corte Suprema, Pleno, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA LA CORRECCIÓN de la Resolución de dieciséis (16) de mayo de dos mil (2000), la cual quedará así:

DECLARA QUE SON INCONSTITUCIONALES el segundo párrafo del artículo 9 del Decreto Ejecutivo No. 89 de 8 de junio de 1993 y el segundo párrafo del artículo 10 del Decreto Ejecutivo No. 89 de 8 de junio de 1993 que reglamentan la Ley 24 de 1992, impugnados dentro de las advertencias de inconstitucionalidad presentadas por la firma Tile y Rosas actuando en representación de Falcon Security Investment, S. A., Productos de Prestigio, S. A., Rosendo González, Percy Nuñez Jauregui, Grant Thornton, Cheng y Asociados, Stimulus, S. A., Rodrigo Quiróz Batres, César Augusto Roberts Coronado, Seguros Nacionales, S. A., Megamotors, S. A., Corporación Global de Telecomunicaciones, S. A. y Rofer, S. A. acumuladas mediante autos de 22 de febrero y 3 de marzo de 1999, por violación del artículo 179 numeral 14 de la Constitución Nacional.

Notifíquese y Publíquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA (fdo.) JOSÉ ANDRÉS TROYANO
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LCDO. ROGELIO GALVEZ, EN REPRESENTACION DE COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. CONTRA LA RESOLUCION DISTINGUIDA COMO AUTO N 2914 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 1999, PROFERIDA POR EL JUEZ TERCERO DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado ROGELIO GÁLVEZ actuando en representación de ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A., ha interpuesto demanda a fin de que el PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA declare la inconstitucionalidad de la resolución distinguida como Auto N° 2914 de 19 de noviembre de 1999, proferido por el Juez Tercero del Circuito, de lo Civil del Primer Distrito Judicial de Panamá, Licenciado JORGE LUIS LAU CRUZ, dentro del Proceso Ordinario Declarativo de Mayor Cuantía. Mediante dicho Auto, el Juez de la causa ordenó la práctica de pruebas de oficio consistentes en declaraciones de parte de los representantes legales de las sociedades demandadas y de los demandantes señores MARCIAGA, además de la ratificación de una prueba documental por parte de estos últimos.

Admitida como fue la demanda, se corrió en traslado a la Señora Procuradora de la Administración para que emitiera concepto, lo cual hizo mediante Vista N° 66 del 21 de febrero de 2000. Devuelto el negocio constitucional a la Secretaría General de la Corte, se llevo a cabo la publicación de los edictos que notificaba la concesión del término de diez (10) días para que el demandante y todos los interesados pudiesen presentar las alegaciones por escrito que estimasen convenientes, recibiéndose sólo alegato del propio demandante quien reitera los planteamientos contenidos en su demanda.

LA PRETENSIÓN Y SU FUNDAMENTO

Expresa el actor que el Auto N° 2914 del 19 de noviembre de 1999, mediante el cual se ordena la práctica de pruebas de oficio, conculca el principio del debido proceso, garantía constitucional consagrada en el artículo 32 de la Constitución Política, en concepto de violación directa por falta de aplicación del mismo.

El actor alega también que la Resolución en comento viola el debido proceso porque suple la inercia probatoria del demandante, quien es la persona que tiene el deber de cumplir lo establecido en el artículo 773 del Código Judicial, que en lo pertinente dice que "Incumbe a las partes probar los hechos o datos que constituyen el supuesto de hecho de las normas que le son favorables." Agrega que ese comportamiento del Tribunal A-Quo quebranta el principio de neutralidad indispensable en todo proceso judicial, por lo que solicita sea declarada inconstitucional la citada Resolución.

CONCEPTO DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

Contraria a la opinión del demandante, la Procuradora de la Administración al corrérsele traslado de la demanda de inconstitucionalidad, mediante Vista N° 66 del 21 de febrero de 2000 expresó, que el fundamento impreso por el Juzgador en el auto impugnado para ordenar la práctica de pruebas de oficio, no viola el artículo 32 que consagra el principio del debido proceso legal, el derecho de defensa de los demandados, ni ninguna otra disposición constitucional, toda vez que, conforme al artículo 782 del Código Judicial los jueces de primera instancia pueden ordenar la práctica de las pruebas necesarias, para verificar las afirmaciones de las partes y que es precisamente este supuesto en el cual se basó el Juez de la causa para ordenar las ratificaciones y las declaraciones de parte en el caso que nos ocupa.

CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DEL PLENO

Luego de haber expuesto someramente los argumentos del demandante y el concepto vertido por la Procuradora de la Administración, esta Superioridad se dispone a emitir su decisión, no sin antes verter las siguientes consideraciones.

En primer lugar, observa la Corte que el cargo que se le imputa a la resolución impugnada se funda en la supuesta violación de la garantía constitucional del debido proceso, la que a juicio del demandante rompe con el equilibrio procesal y el principio de Neutralidad, al pretender el juzgador

primario, por vía de pruebas de oficio, suplir la falta de actividad probatoria de la parte actora en total desmedro de los intereses de la contraparte.

Sobre el particular, ha dicho la Corte que el contenido de la garantía del debido proceso que incorpora la Constitución Política en su artículo 32, tiene un rango o abolengo como institución garantizadora de los derechos fundamentales, en todas nuestras Cartas Constitucionales, y ha sido objeto de múltiples jurisprudencia por parte de esta Corporación de Justicia. Consiste, como ha puntualizado el Magistrado ARTURO HOYOS, en "una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso -legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas- oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por ley contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos." (Hoyos, Arturo, "El Debido Proceso", Editorial Temis, S. A., Santa Fe de Bogotá-Colombia, 1996, pág. 54)

En base a lo anterior, considera el Pleno que no se evidencia una pretermisión del trámite procesal -como señala lo expuesto por el Magistrado Hoyos-, ni a contrario sensu, una extralimitación de funciones, como lo señala el actor, por los siguientes motivos.

Consideró el representante de ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. que el Juez Tercero de Circuito violó los principios de equilibrio procesal y neutralidad, al ordenar cuatro veces la práctica de las pruebas solicitadas y no practicadas por los demandantes, considerando que el juzgador se parcializó a favor de éstos, al tratar de suplir su inercia probatoria -lo que constituye la esencia del caso- lo que prohíbe el artículo 773 del Código Judicial, que a la letra dice:

> "ARTICULO 773. Incumbe a las partes probar los hecho o datos que constituyen el supuesto de hecho de las normas que le son favorables.
> ....." (Negrilla del Pleno)

La norma establece que la carga probatoria le corresponde a las partes; empero, ese es un principio general que tiene sus excepciones.

Una de las excepciones a dicho principio es el atinente a la facultad oficiosa del Juez para practicar pruebas, y que se encuentra expuesta en el primer párrafo del artículo 782 de la excerta en estudio:

> "ARTICULO 782. Además de las pruebas pedidas y sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones de este Código, el Juez de primera instancia debe ordenar, en el expediente principal y en cualquier incidencia que surja, en el período probatorio o en el momento de fallar, la práctica e todas aquellas que estime procedentes para verificar las afirmaciones de las partes y el de segunda practicará aquellas que sean necesarias para aclarar puntos oscuros o dudosos en el proceso.
> ....."

La norma expresa claramente la obligatoriedad del juez primario para ordenar pruebas por su propia iniciativa, "además de las pedidas", en el período probatorio o en etapa de fallar, las pruebas que estime convenientes para confirmar las afirmaciones de las partes.

En este sentido, el auto N° 2914 de 19 de noviembre de 1999 -f. 16-, atacado de inconstitucional señaló en su segundo párrafo, lo siguiente:

> "No obstante, frente a una serie de insuficiencias probatorias este

> Juzgador considera que es necesario incursionar en la práctica de unas pruebas de oficio a fin de tener la certeza necesaria para llegar a una conclusión definitiva sobre la materia de este proceso.
>
> En efecto, como quiera que lo pretendido tiene su base en la nulidad de Convenio o Acuerdo de Transacción o Finiquito que los demandantes suscribieron a favor de los demandados, siendo que, por una parte se alega que hubo maquinaciones fraudulentas para su producción y, por otra parte, se alega que no hubo tales maquinaciones sino que fue un acuerdo suscrito en correcta forma, debe este Juzgador en esta instancia agotar los intentos para lograr el esclarecimiento de esta situación y otras que surgen del proceso.
>
> En este sentido, este Juzgador conviene en utilizar la facultad contenida en los artículos 782 y 893 del Código Judicial, esto es, la producción de pruebas de oficio consistente en Declaraciones de Parte." (Negrilla de la Corte)

La motivación del auto impugnado, revela el convencimiento del Juez primario de la necesidad de practicar las pruebas que había solicitado la parte demandante; es decir, que las órdenes reiteradas por el Juez obedecieron a que consideró personalmente que debían practicarse las pruebas pedidas, independientemente de que la parte demandante no hubiera comparecido a practicarlas; por ello, es comprensible la reiteración del Juez, y entiende el Pleno que las pruebas ordenadas en el auto impugnado, obedecen a la iniciativa oficiosa del Juez, contenida en el expuesto artículo 782 del Código Judicial.

Ahora bien, esta iniciativa oficiosa no responde -como señala el actor- a una parcialidad del Juez Tercero, sino a la necesidad de recabar todas las pruebas necesarias para obtener la realidad material de los hechos, y que lo motivó a ordenar esas pruebas "de oficio" y no para complacer a los demandantes como pretende establecer el demandado.

Sobre el tema de la prueba oficiosa, establecida en el artículo 782 -y otros- del Código Judicial, se manifestó el Dr. Pedro Barsallo en su obra, "ARTICULOS Y CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE DERECHO PROCESAL CIVIL", justificándola de la siguiente manera:

> "La citada disposición sienta el principio general de la aportación de medios probatorios por el juzgador oficiosamente. Contrario al sistema anterior del juez espectador, el juez del proceso civil previsto en el nuevo Código Judicial está investido de amplias facultades y de ciertos deberes en relación con el aspecto de la aportación de medios probatorios, los cuales oportuna y juiciosamente empleados deben resultar en beneficio de una mejor justicia.
> .....
>
> En conclusión la nueva legislación que se puso en vigencia el 1o. de abril de 1987 mediante el Código Judicial marca el inicio del establecimiento de un proceso civil dirigido por un juez que tendrá amplias facultades en materia de recabar y aportar elementos probatorios para la decisión del proceso, de lo cual ha carecido hasta estos momentos.
>
> Si es cierto que en el proceso civil hay algo más que un interés particular involucrado ya que lo que está en juego, por encima de ese interés egoísta de las partes es un interés público en que lo que resulte de un proceso sea legal y sobre todo lo más cercano a la justicia, entonces la organización judicial y el procedimiento deben estar regulados de modo tal que se dote al juzgador de facultades, potestades y poderes y se le imponga al mismo tiempo el deber de investigar la verdad de los hechos sobre los cuales debe resolver.

> Si las pruebas son la piedra angular del proceso y su importancia es tan grande porque tienden a otorgar o producir el convencimiento del juez, éste debe necesariamente estar facultado para ordenarlas de oficio, en adición a las partes para cumplir mejor los fines de la jurisdicción y del proceso.
>
> Este es uno de los temas realmente novedosos del Código Judicial: La iniciativa probatoria del Juez.
>
> Dice MAURO CAPPELLETTI que mientras el dogma de que el juez debe juzgar según lo alegado por las partes permanece resistente, no sucede tal cosa con el también antiguo dogma según el cual el juez debía juzgar, exclusivamente, teniendo en cuenta lo probado por las partes. La abolición, aun total, del poder monopolístico de las partes respecto de las pruebas, es un aspecto -quizá el más importante- de la sustracción a las partes del poder de dirección formal del proceso.
>
> Y no deben abrigarse temores infundados al otorgamiento de estas facultades de aportación probatoria en favor de los jueces para que actúen oficiosamente. Algunos alegan superficialmente que ello va en contra de la imparcialidad del juzgador lo cual no es cierto otros sospechan que el juez va a exceder los límites que la prudencia aconseja en el uso de estos poderes y nada indica que ello deba ser así. En general los poderes del juez en lo relativo a la aportación oficiosa de medios probatorios no se pueden ni se deben calificar ni rechazar pensando o prejuzgando sobre el uso abusivo o indebido que los malos jueces puedan ejercer, sino que se han de contemplar en su justo valor, a través del uso correcto, oportuno y tremendamente eficaz para la buena función jurisdiccional que de ellos hagan los buenos jueces. Esperamos que así sea." (BARSALLO J., Pedro A. Artículos y Conferencias sobre Temas de Derecho Procesal Civil. Panamá, 1992, ps. 180-181.)

En síntesis, el citado autor justifica la facultad probatoria que el Código Judicial -artículo 782 y otros- otorga a los jueces, por la necesidad de que puedan alcanzar la certeza necesaria de los hechos que las partes pretenden probar, en virtud del interés social -superior a la de las partes- de que rija la legalidad en el proceso.

Sobre esta base, reiteramos que la lectura de la resolución tildada de inconstitucional, no revela que el juzgador de la causa haya pretermitido algún trámite procesal, considerado esencial por la ley, que haya dejado en estado de indefensión a la parte que presenta la acción de inconstitucionalidad y mucho menos que se haya extralimitado en sus funciones ya que su actuación se enmarca dentro de lo que la ley le autoriza.

No obstante, es atinado el criterio de la funcionaria del Ministerio Público cuando en su opinión expresa que el juez de primera instancia, al dictar la resolución impugnada, procedió conforme al deber y a la amplia facultad que nuestro ordenamiento jurídico procesal le otorga en materia de pruebas, facultad ésta que, como bien ha señalado la Corte en copiosísima jurisprudencia, no es de carácter absoluta e ilimitada, ya que, si bien las pruebas fueron aducidas por los demandantes, su práctica fue ordenada por iniciativa del juzgador por razones específicas y como un intento lógico tendiente a esclarecer y verificar lo afirmado en el proceso, de manera que sea la certeza y no la duda la que reluzca en la decisión final, tal cual lo revela la parte motiva del auto N° 2914 de 19 de noviembre de 1999, transcrito líneas antes.

En complemento a lo anterior, el artículo 782 del Código Judicial no establece cuáles pruebas puede practicar el Juez de oficio, por lo que su pronunciamiento respondió a una motivación debidamente justificada en el plano legal, ordenando las pruebas que consideró necesarias para alcanzar la verdad

material del proceso, plano legal, el cual se apoya en el artículo 32 Constitucional, que indica que los juicios se deben desarrollar "conforme a los trámites legales" establecidos, como garantía para la realización de la justicia.

El Pleno considera que hoy día, la delicada función de quien administra justicia va más allá de ser un simple observador del proceso, con la única responsabilidad de dictar sentencia, portándose indiferente si la decisión va a resultar huérfana del reconocimiento de los derechos sustantivos que invocan las partes, por el solo motivo de la falta de una real y efectiva participación del juzgador dirigida a estos fines, lo que a la sazón podría ser considerado como una auténtica denegación de justicia. Es por ello que con justa razón nació la oportunidad de convertir al juzgador, como sujeto del proceso, en un ente con participación activa, tal cual lo refleja, entre otras disposiciones, el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil que entró a regir en 1984.

En otro orden de cosas, la alegada inconstitucionalidad que se le atribuye al acto impugnado, se funda en hechos que guardan relación con la actuación del Juez Tercero de Circuito Civil dentro del proceso ordinario declarativo de mayor cuantía, propuesto por los señores MARCIAGA; nos referimos al hecho séptimo del libelo, que se refirió a que el Juez dictó y firmó, bajo su responsabilidad, los oficios N° 2623 y N° 2624, ambos de 22 de noviembre de 1999, mediante los cuales citó a los Sres. LORENZO ROMAGOZA y VICENTE PASCUAL BARQUERO, respectivamente, para que comparecieran el 14 de diciembre de 1999 a rendir declaración, empleando erróneamente -a juicio del demandante constitucional- el artículo 918 del Código Judicial, sin que el auto N° 2914 de 19 de noviembre de 1999, presuntamente inconstitucional, estuviera legalmente notificado.

Sobre el particular, considera el Pleno que éstos hechos parecieran orientarse más hacia una tercera instancia que hacia verdaderos cargos de inconstitucionalidad, toda vez este aspecto de la impugnación toca la materia de notificaciones, que si bien pudo haberse practicado al margen del procedimiento, no afecta el fondo del proceso, por lo que este aspecto de la impugnación no puede ser revisado por la Corte en este negocio constitucional.

En otro sentido, también alegó la accionante que los demandantes aportaron documentos no ratificados según lo dispone el artículo 910 del Código Judicial, circunstancia que fue advertida en el proceso por la demandada -según señala- mediante un recurso de reconsideración calendado 20 de enero de 1999.

Que, pese a haberse negado dicho recurso con condena en costas, mediante resolución de 3 de marzo de 1999, el Juez Tercero de Circuito Civil de Panamá, luego hizo que los demandantes concurrieran a ratificar los documentos que carecían de ese requisito, para ser valorados en el proceso, surtiéndose dicha ratificación el 14 de diciembre de 1999, y "substituyendo el Juez, indebidamente, de esta forma el deber procesal que tenía la parte demandante de llevar a cabo las diligencias pertinentes dentro de las fases establecidas para la práctica de pruebas."

En esta ocasión, coincide el criterio de este Pleno con el del Ministerio Público, en el sentido de que el representante legal de ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. no aportó, en este cuaderno constitucional, la prueba de que interpuso ese recurso de reconsideración que señala, ni del fallo que lo niega, por lo que no se evidencia la circunstancia expuesta, lo que induce a esta Colegiatura a desestimar el cargo.

La misma suerte corre el tercer cargo, atinente a que los demandantes fueron admitidos como testigos por el tribunal de la causa, sino que tiene que comparecer a rendir declaración de parte; entonces el Juez, que negó la reconsideración ya mencionada, que criticaba este hecho, "arregla" la comparecencia de los Sres. MARCIAGA -demandantes- no como testigos, sino como en declaración de parte.

Tampoco presentó el Licdo. Gálvez las pruebas que demuestren dichas

aseveraciones, situación que no permite a esta Superioridad ventilar la presunta inconstitucionalidad de la resolución rebatida, en este aspecto.

Otro señalamiento hecho por el actor, consiste en que fue perjudicado con un trato desigual, toda vez que el artículo 1261 del Código Judicial establece la prohibición de presentación de escritos de ningún género, luego de concluida la fase de alegatos, salvo en casos especiales -que no corresponden a la situación ventilada en este caso-, siendo que pese a lo anterior, los demandantes solicitaron al jugador primario que fijara edicto en puerta en sus oficinas -del Licdo. Rogelio Gálvez- "para llevar a cabo las 'pruebas de oficio' que implementa el señor Juez Tercero de Circuito Civil."

Afirmó la demandante constitucional que el Juez complació esas peticiones "como consta en las resoluciones emitidas el 20 de octubre y el 11 de noviembre de 1999."

Advierte esta Corporación de Justicia, que no existe tal constancia en el cuadernillo constitucional, pues el letrado no incorporó las probanzas procesales que demuestren estas aserciones, razón por la que no prosperan las mismas.

Luego de analizados los elementos fundamentales de esta acción constitucional el Pleno arriba al criterio de que el Juzgador no omitió ningún trámite procesal, ni que existe ninguna contradicción manifiesta entre el texto constitucional alegado y el acto de autoridad, sino que se trata más bien de cuestiones de fondo, que no pueden ser ventiladas por esta vía constitucional, por lo que lo pertinente es negar lo pedido.

En consecuencia, Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL el Auto N° 2214 de 19 de noviembre de 1999, proferido por el Juzgado Tercero Del Circuito De Lo Civil Del Primer Distrito Judicial De Panamá. Cópiese, Notifíquese y Públiquese en la Gaceta Oficial.

Cópiese, Notifíquese y Archívese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA FIRMA ROSAS Y ROSAS, EN REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACION PANAMEÑA DE HOTELES (APATEL), CONTRA EL ARTICULO 24 DEL DECRETO EJECUTIVO NO.73 DE 8 DE ABRIL DE 1995, SGUN LA MODIFICACION INTRODUCIDA POR EL DECRETO EJECUTIVO NO. 197 A DE 6 DE OCTUBRE DE 1995. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FABREGA. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Magistrado Rogelio Fábrega Zarak ha manifestado impedimento para conocer de la demanda de inconstitucionalidad formulada por la firma Rosas y Rosas, en representación de la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL), contra el Artículo 24 del Decreto Ejecutivo No.73 de 8 de abril de 1995, según la modificación introducida por el Decreto ejecutivo No. 197 A de 6 de octubre de 1995.

El Magistrado Fábrega Zarak fundamenta su impedimento en los siguientes términos:

"La fundamentación fáctica de mi impedimento obedece a que participé como asesor en la elaboración del Decreto Ejecutivo antes mencionado, cuando laboraba en el Ministerio de Hacienda y Tesoro. Derecho: Artículo 2562, numeral 2, del Código Judicial".

Observa el resto del Pleno, que la situación expuesta por el Magistrado Rogelio Fábrega Zarak se subsume en lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 2562 del Código Judicial, el cual pasamos a transcribir:

"ARTICULO 2562: Son causales de impedimentos:
1.....

2. Haber dictado el acto acusado o intervenido en su preparación o expedición."

Una vez configurada la causal de impedimento, lo procedente, es, pues, declarar legal el impedimento invocado por el Magistrado.

Como corolario de lo antes expuesto, el PLENO de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA que es LEGAL el impedimento invocado por el Magistrado Rogelio Fábrega Zarak para conocer de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta la firma Rosas y Rosas, en representación de la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL), contra el Artículo 24 del Decreto Ejecutivo No.73 de 8 de abril de 1995, según la modificación introducida por el Decreto ejecutivo No. 197 A de 6 de octubre de 1995.

Notifiquese y Cumplase,

(fdo.) JORGE FABREGA P.
(fdo.) CESAR PEREIRA B. (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) ROBERTO E. GONZALEZ R. (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES A FAVOR DE DOMITILA PINTO CONTRA EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, AUTO N°357 DE 27 DE AGOSTO DE 1999. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, TRES (3) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Magistrada Mirtza Angélica Franceschi de Aguilera ha presentado solicitud para que se le declare impedida y, en consecuencia se le separe del conocimiento de la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales a favor de DOMITILA PINTO contra el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de Panamá, Auto N°357 de 27 de agosto de 1999.

La Magistrada Franceschi de Aguilera sustenta su solicitud en el hecho de que su hijo, Juan Aguilera Franceschi, es el apoderado judicial de la Sociedad Compañía Interoceánica de Seguros, S. A., en la provincia de Chiriquí, la cual se opone al presente Amparo de Garantías Constitucionales promovido por DOMITILA PINTO contra el Auto N°357 de 27 de agosto de 1999, dictado por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de Chiriquí y Bocas del Toro.

La Magistrada de Franceschi de Aguilera fundamenta su petición en la casual contenida en el numeral 3 del artículo 2562 del Código Judicial, que a la letra dice:

"Artículo 2562. Son causales de impedimentos:
. . .
3. Tener el Magistrado, su cónyuge o cualquier pariente cercano dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, interés en la decisión del fallo." (El subrayado es nuestro)

En atención a la circunstancia señalada por la Magistrada De Aguilera, el Pleno de esta Corporación de Justicia considera que la misma se adecúa a la causal de impedimento consagrada en numeral 3 del artículo supra citado, por tanto, lo procedente es acceder a la petición formulada.

En mérito de lo expuesto, el resto de los Magistrados que integran el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DECLARAN LEGAL el impedimento manifestado por la Lcda. Mirtza Angélica Franceschi de Aguilera, en su condición de Magistrada Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 78 del Código Judicial se designa al suplente respectivo para reemplazar a la Magistrada impedida.

Notifiquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) ROBERTO GONZÁLEZ R. (fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAUNDES (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LCDO. CARLOS SUMOSA, EN REPRESENTACION DE MARIA BAGATELAS DE PAPADIMITRIU, CONTRA LA ORDEN DE NO HACER VERBAL DICTADA POR LA JUEZ OCTAVA DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA, EN APELACION. (MANIFESTACION DE IMPEDIMENTO). MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Honorable Magistrada MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA se ha declarado impedida para conocer, como integrante de este Pleno, la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por el Licdo. Carlos Sumosa en representación de la Sra. María Bagatelas de Papadimitriu, contra la orden verbal de no hacer dictada por la Juez Octava del Circuito Penal de Panamá, en grado de apelación.

La Magda. FRANCESCHI DE AGUILERA justificó su impedimento de la siguiente manera:

"Manifiesto a ustedes que estoy impedida para conocer del presente Amparo de Garantías Constitucionales presentado por el Licdo. Carlos Sumosa, en representación de María Bagatelas de Papadimitriu, contra la orden de no hacer verbal dictada por la Juez Octava de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, en apelación, porque me unen vínculos de consanguinidad, en primer grado, con el licenciado Juan Sebastián Aguilera Franceschi, quien actúa en

algunos procesos en tramitación como apoderado de Diamantis Papadimitriu, quien es uno de los imputados en el proceso penal que motivó la presente acción.

La causal de impedimento que invoco está contenida en el numeral 3 del artículo 2562 del Código Judicial que es del siguiente tenor:

"Artículo 2562: Son causales de impedimentos:
...
3. Tener el magistrado, su cónyuge o cualquier pariente cercano dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, interés en la decisión del caso."

En vista de lo expresado, solicito respetuosamente a los Honorables Magistrados, que se me declare impedida para conocer de este caso."

Pues bien, considera el Pleno que le asiste la razón a la Magistrada FRANCESCHI DE AGUILERA, por cuanto se verifica la causal tercera del artículo 2562 del Código Judicial, transcrita por la Petente, razón por la que el Pleno debe acceder a lo pedido.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por la Magistrada MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA, para asumir conocimiento de este caso; en consecuencia, LA SEPARA del conocimiento de la causa, y DISPONE llamar a su suplente para que conozca el caso.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) ROBERTO GONZALEZ R.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LCDO. AGUSTIN SANJUR OTERO, EN REPRESENTACION DE MARIA DE LOURDES BARB, CONTRA EL JUEZ SEXTO DE CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL, APELACION. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Magistrado ADÁN ARNULFO ARJONA ha solicitado al resto de los Magistrados que integran el Pleno de la Corte Suprema, que se le declare impedido para conocer la acción de amparo de garantías constitucionales presentado por el Licdo. Agustín Otero Sanjur en representación de MARÍA DE LOURDES BARB, contra el Juez Sexto de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Dicha solicitud se funda en lo siguiente:

"Es importante destacar, que dentro del Proceso Universal de Quiebra que dio origen a este negocio, representé a la firma Alfaro, Ferrer, Ramírez y Alemán, que funge como apoderada judicial de la parte demandada, en este caso PANABANK, S.A. (Ver fojas 55 y 56 del expediente)
En virtud de lo expresado, respetuosamente solicito a los Honorables Magistrados que integran el Pleno, me separen del conocimiento de la

presente acción, en razón de que, pese a que ya no formo parte de la citada firma de abogados, pues me separé desde el pasado 30 de diciembre de 1999, considero que esta circunstancia puede configurar un posible motivo de impedimento a tenor de lo que establecen los numerales 2, 5 y 12 del artículo 749 del Código Judicial, que a la letra disponen lo siguiente:

'Artículo 749: Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el cual esté impedido. Son causales de impedimento:
. . .
2. Tener interés debidamente acreditado en el proceso, el Juez o Magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes en los grados expresados en el ordinal anterior;
. . .
5. Haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados, en el proceso, como Juez, agente del Ministerio Público, testigo, apoderado, o asesor, o haber dictaminado por escrito respecto de los hechos que dieron origen al mismo;
. . .
12. Haber intervenido el Juez o Magistrado en la formación del acto o del negocio objeto del proceso;
. . .'
(El subrayado es nuestro)"

Considera esta Corporación de Justicia que, efectivamente la causal invocada por el Magistrado ARJONA configura la circunstancia contenida en el numeral 5° del artículo 749, pues figuró como apoderado de la parte demandada; además, intervino en el negocio objeto del proceso, tal como lo estatuye el numeral 12° de la misma norma.

Por consiguiente, considera la Corte que debe declarar la legalidad del citado impedimento.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por el Magistrado ADÁN ARNULFO ARJONA, para conocer el presente caso; en consecuencia, LO SEPARA del conocimiento del negocio y, ORDENA llamar a su suplente para que conozca el mismo.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ROBERTO GONZALEZ R. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN SEGUIDAS CONTRA EL DOCTOR ARTURO ULISES VALLARINO BARTUANO, POR EL SUPUESTO DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL (HOMICIDIO CULPOSO) EN PERJUICIO DE PEDRO AÑINO AGRAZAL. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Sala Segunda de lo Penal de esta Corporación de Justicia, por medio de resolución de 7 de abril de 2000, declinó, por razones de competencia al Pleno

de la Corte Suprema de Justicia, las sumarias en averiguación, instruidas, por el delito genérico contra la vida y la integridad personal, en detrimento de Pedro Añino Agrazal y en las que está presuntamente involucrado Arturo Ulises Vallarino Bartuano, Primer Vice-Presidente de la República.

BREVES ANTECEDENTES DEL CASO

Las constancias procesales dan cuenta que la noche del 21 de noviembre de 1998, en el distrito de Natá, provincia de Coclé, Pedro Añino Agrazal cruzaba la vía Panamericana cuando fue golpeado por el vehículo que conducía Arturo Ulises Vallarino, quien iba en dirección a la ciudad de Aguadulce.

Posteriormente cuando la víctima yacía en el pavimento, y pese a que Vallarino y otras personas intentaban desviar el tráfico, otro vehículo le pasó por encima, arrastrándolo varios metros hacia adelante "...por lo que al observar al peatón en peores condiciones procedió a trasladarlo al Hospital de Aguadulce..." (vid. f. 475), no obstante debido a la gravedad de las lesiones que presentaba fue trasladado a Panamá, donde falleció.

El protocolo de necropsia reveló los siguientes resultados:

"LESIONES EXTERNAS:
Excoriaciones en cara, área supraciliar derecha, nariz, mentón, cuello, hombro, cadera y antebrazo derecho.
LESIONES INTERNAS:
Fractura de base de cráneo.
Hemorragia cerebral.
Fracturas costales y clavicular izquierdas.
Lo más importante fue el daño a nivel cerebral...
CAUSAS DE LA MUERTE: TRAUMATISMO CRANEO-ENCEFALICO EN HECHO DE TRANSITO" (f. 92).

OPINION DEL PROCURADOR DE LA NACION

El Procurador General de la Nación remitió a la Sala Segunda de lo Penal, de esta Corporación de Justicia las sumarias en averiguación seguidas al Vice-Presidente de la República, para la calificación del mérito correspondiente, mediante Vista No. 107 de 3 de diciembre de 1999, visible a fojas 464-478.N

En su informe de rigor el Agente del Ministerio Público, solicita a esta Corporación de Justicia que "...dicte un sobreseimiento definitivo de carácter impersonal, conforme lo establece el artículo 2210 del Código Judicial..."(vid. f. 478).

La solicitud se fundamenta en que, según lo manifestado por los peritos, Pedro Añino Agrazal (q.e.p.d), no tomó las precauciones pertinentes para cruzar la vía interamericana, en consecuencia, la acción que realizó la víctima fue imprudente, lo que exonera de responsabilidad penal a Arturo Ulises Vallarino (vid. f. 476).

De otra parte son diversas las fuentes que aseveran la presencia de un segundo vehículo que arrastra al infortunado Añino Agrazal varios metros hacia adelante dejándolo inconsciente, hecho confirmado, por el médico Paulo Barrera, cuando indicó haber recibido al accidentado en un coma profundo (f. 477).

DECISION DE LA CORTE

Procede la Corte a determinar la calificación de las sumarias en averiguación, para lo cual se hace necesario examinar ciertos elementos probatorios obrantes en el cuaderno penal.

En la declaración jurada del Vice-Presidente de la República Arturo Vallarino, manifestó que "...la noche de los hechos llovía y había poca

visibilidad, por lo que manejaba a baja velocidad, de repente sentí un impacto en el retrovisor izquierdo (lado del conductor)..." (vid. f. 428).

Continua exponiendo el doctor Vallarino que "...detuve, el auto unos metros hacia adelante y al bajarme me percaté de que había una persona sobre el suelo quejándose de que había recibido un golpe..."(Cfr. f. 428)

No obstante agrega, que regresó a estacionar el vehículo correctamente y procedió a prestarle auxilio a la persona, "...pero no pude levantarlo, en ese momento se detuvieron otras personas para ayudarme, pero otro vehículo que viajaba a gran velocidad, le pasó por encima y lo arrastró varios metros hacia adelante..."(f. 429).

Por último, señala que trasladó a la víctima hasta el Hospital de Aguadulce, seguido del Legislador Peralta y del segundo vehículo que había pasado por encima del hoy occiso, pero al llegar al hospital estos habían desaparecido..." (f. 430). (fs.427-432).

De otra parte consta la declaración de Xiomara Del Rosario Pérez Agrazal, la cual manifestó que "...observó al señor Añino tambaleándose de un lado para otro, por lo que iba embriagado, y fue cuando sintió el trancazo (sic)..." (f. 203).

Posteriormente "...observé que el señor se bajaba del vehículo y hacía señales para que ningún carro pasara, pero en ese momento otro carro le pasó encima al señor(Añino)..." (f. 203).

Por otra parte, Lineth Katerina Muñoz Cruz, señaló que observó cuando un segundo vehículo le pasó por encima a Añino y lo arrastró más adelante, cuando Vallarino intentaba ayudarlo. Agrega la declarante, que en ese instante la víctima todavía estaba con vida (fs. 167-173). Estas declaraciones son corroboradas por Ricardo Moisés Martínez Racedo (fs. 298-303).

Otro elemento de convicción allegado al cuaderno penal es el informe de los peritos del Ministerio Público Rogelio Salinas y Rodrigo Rodríguez quienes, manifiestan que la causa del atropello de Añino "...se debió a la acción del peatón de internarse a la vía para atravesar la misma, de izquierda a derecha, de acuerdo a la dirección de Penonomé hacia Aguadulce, sin percatarse de la proximidad del vehículo...(Cfr. f. 412).

En consecuencia, la acción de la víctima es contraria al artículo 61 del Decreto Ejecutivo No. 160 de 7 de junio de 1993 (Reglamento de Tránsito), el cual establece:

> "Artículo No. 61: Antes de cruzar a la vía todo peatón esperará el momento en que no exista circulación vehícular, que esta se halle detenida, o que las distancias de los vehículos más próximos sea tal que pueda realizar el cruce a paso normal, con prudencia y sin peligro, operación que deberá efectuar en las esquinas o intersecciones de las calles, vías o avenidas,, utilizando preferentemente las líneas de seguridad si las hubiere." (resalta la Corte)

Observa el Pleno de esta Corporación de justicia que la conducta desplegada por Arturo Vallarino fue diligente al conducir su vehículo en el paño que le correspondía, a una velocidad prudente en horas nocturnas y actuando con todo el deber de cuidado que le incumbe a una persona responsable, circunstancia corroborada en el informe pericial.

No obstante, pese a la prudencia con la cual Arturo Vallarino conducía, ya que lo hacía a poca velocidad, tomando en consideración las condiciones climatológicas, le resultó imposible evitar el impacto con el cuerpo de la víctima, pues carecía de un buen campo de visibilidad y de maniobrabilidad.

Por lo antes expuesto no es posible atribuirle algún tipo de responsabilidad penal a Arturo Vallarino, ya que aún cuando tomó todas las precauciones, no pudo evitar el accidente.

Hay que destacar también que luego del accidente, la víctima aún se encontraba con vida, razón por la que Arturo Vallarino se aproximó a prestarle los primeros auxilios, pero esa tarea fue obstaculizada cuando Añino fue golpeado por otro vehículo que le pasó por encima.

Como quiera que se ha demostrado que Vallarino actúo de manera diligente, con la observancia del deber de cuidado que le incumbe a todo conductor, esta Superioridad comparte el criterio externado por el Procurador de la Nación, en el sentido de dictar un sobreseimiento definitivo de carácter impersonal, en base al numeral 2 del artículo 2210 del Código Judicial.

En consecuencia la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECRETA UN SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO E IMPERSONAL en las sumarias instruidas por la muerte de Pedro Añino Agrazal.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) CESAR ANTONIO PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA ZARAK Con salvamento de Voto)
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) LUIS CERVANTES DIAZ
(fdo.) JORGE FABREGA PONCE
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO MAGISTRADA GRACIELA J. DIXON C.

Como lo expresé en las observaciones que en su momento presenté, con el mayor de los respetos me permito disentir con la decisión de mis colegas magistrados, por cuanto soy del criterio que en la presente sumaria instruida por la muerte de Pedro Añino Agrazal, debe decretarse un sobreseimiento provisional e impersonal teniendo como fundamento legal el artículo 2211 numeral 1 del Código Judicial. Veamos.

Se refiere la investigación a la muerte por atropello del señor Pedro Añino Agrazal. En las sumarias hay dos vehículos involucrados, uno conducido por el señor Arturo Vallarino y el otro vehículo aún no se ha identificado.

Sin embargo, el informe pericial de la "Sección Técnica Forense de Hechos de Tránsito" (fs.399-412), signado por los peritos Rogelio Salinas y Rodrigo Rodríguez, se limita a establecer en cuanto al primer evento o primer atropello donde está involucrado el señor Vallarino, que la acción del peatón Pedro Añino Agrazal de atravesar la vía Panamericana de izquierda a derecha, es comprometedora porque es contraria a lo que establece el Reglamento de Tránsito en su artículo 61.

Sin embargo, en cuanto al segundo vehículo involucrado textualmente señala el informe:

> "En relación al segundo atropello que se refiere tanto el Doctor VALLARINO como dos testigos presenciales, en la que se vio involucrado un segundo vehículo impactando al hoy occiso al momento que se encontraba acostado sobre la vía, hemos identificado ciertas contradicciones que no permiten determinar claramente la cadena de eventos consecutivos antes, durante y después del segundo suceso ..." (fs.410-411)

Por otro lado los peritos señalan que no es posible determinar la velocidad

promedio del vehículo conducido por el señor Vallarino al momento del impacto, por falta de elementos técnicos, pero que de las afirmaciones del señor Vallarino "la persona quedó en el mismo lugar donde se da el atropello", se desprende que el movimiento de su vehículo debía ser a velocidad próxima o menos a la establecida, atendiendo a los parámetros descritos en los puntos D.1.2, e indican que se vea el Anexo No. 4 (f.416).

Afirman que otro aspecto que refuerza la condición del bajo movimiento del vehículo conducido por el señor Vallarino, contra los daños corporales del peatón, lo establecen las afirmaciones de las testigos Lineth Muñoz y Xiomara Del Rosario Pérez, quienes afirman que el atropellado estaba con vida.

Ahora bien, los Peritos Forenses respecto al segundo atropello determinan lo siguiente:

> "De haberse registrado el segundo atropello en donde el cuerpo del hoy occiso estuviese acostado sobre el pavimento en todo caso debía estar con la cabeza orientada hacia el carril izquierdo de acuerdo a la dirección Penonomé-Aguadulce, para lograr que se registrara las huellas de los restos del cuerpo del hoy occiso como relaciona el agente de tránsito. Sin embargo, no es posible definir a ciencia cierta lo ocurrido en este probable segundo evento dada la falta de elementos materiales que confirmen una u otra versión (f.411).

De lo expuesto lógicamente se concluye que de avalarse la versión de un segundo atropello por un vehículo no identificado y de cuya existencia hay contradicciones, tal como se consigna el Informe Pericial a que me he referido, ello significaría que la presente sumaria no debe cerrarse de manera definitiva, dado que ese segundo vehículo posiblemente si cometió una acción ilícita culposa.

De modo tal, que teniendo presente el cuadro fáctico presentado, a mi juicio no cabe ninguno de los presupuestos del sobreseimiento definitivo a que se refiere el artículo 2210 del Código Judicial, y menos afirmar "que el hecho investigado no constituye delito" (numeral 2), tal como se ha pronunciado la resolución objeto de mi disensión.

En consecuencia, lo prudente es cerrar la presente sumaria de manera provisional e impersonal, invocando lo normado en el numeral 1 artículo 2211 del Código Judicial el cual establece que será sobreseimiento provisional "Cuando los medios de justificación, acumulados en el proceso, no sean suficientes para comprobar el hecho punible".

Como el resto de los Magistrados integrantes del Pleno no comparten mi criterio, con todo respeto, Salvo Mi Voto.

Fecha: Ut Supra.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA PROCURADORA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PARA CONOCER DE LA QUERELLA CRIMINAL PROMOVIDA POR EL SIGLO, S. A. CONTRA EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, POR EL SUPUESTO DELITO DE INJURIA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIEZ (10) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mediante escrito fechado el 11 de julio de 2000, la señora Procuradora de

la Administración, licenciada Alma Montenegro de Fletcher, se ha manifestado impedida para conocer de la querella interpuesta por el representante legal de la sociedad El Siglo, S. A., contra el señor Procurador General de la Nación, LICENCIADO JOSÉ ANTONIO SOSSA RODRÍGUEZ, por el delito de injuria; ha solicitado que se declare legal el impedimento manifestado y se le separe de su conocimiento.

Expresa la señora Procuradora de la Administración que su manifestación de impedimento tiene como fundamento legal los artículos 388, 389, 754 y 749 numerales 10 y 17 del Código Judicial, y la sustentó de la siguiente manera:

> "Al exponer los hechos querellados que a su juicio constituyen el delito, hace referencia a la sanción de ocho (8) días, impuesta al señor Carlos Singares, Director del Diario, por parte del señor Procurador General de la Nación, al considerarlo responsable de una noticia aparecida en la página dos (2) , de la edición publicada el día 24 de mayo de 2000.
> ...
>
> El día 14 de enero del 2000, en mi condición de Procuradora de la Administración, solicité se investigara la actuación del Fiscal Noveno de Circuito, Roberto Murgas Torraza, por su actuación dentro del proceso por calumnia e injuria, instaurado contra el señor Marcelino Rodríguez, el cual guarda relación con la noticia a que se hace referencia en el Punto 2.
>
> De igual forma, mediante Resolución N° 50 de 23 de octubre de 1997, sancionamos con cuarenta y ocho (48) horas de arresto, al ciudadano Jaime Padilla Beliz, Presidente-Director para esa época, del Diario El Siglo, por una glosa publicada en el citado tabloide que constituía una ofensa contra mi dignidad, honra y decoro, el cual cumplió en su domicilio, una vez constituida la fianza a que se refiere el artículo 884 del Código Administrativo.
> ...
>
> A nuestro juicio, en el caso subjúdice, concurren los presupuestos contemplados en los artículos antes citados, ya que la querella instaurada por la persona jurídica denominada 'El Siglo, S.A.', en el cual nos corresponde intervenir como 'Funcionarios de Instrucción', de conformidad con lo normado en el numeral 12 del artículo 348 del Código Judicial, guarda relación directa con la investigación solicitada al señor Procurador de la Nación contra el ex Fiscal Murgas Torraza, a que anteriormente nos referimos.
>
> Es dable indicar, que el Proceso Penal seguido a Marcelino Rodríguez, por calumnia e injuria, se encuentra pendiente de audiencia." (fs. 27 a 29).

La señora Procuradora de la Administración adjuntó a su manifestación de impedimento copias autenticadas de la Resolución N° 50 de 23 de octubre de 1997, mediante la cual sancionó con arresto de 48 horas al señor Jaime Padilla Beliz; de la querella criminal contra el Procurador General de la Nación interpuesta por el Siglo, S. A., a través de su representante legal Jaime Padilla Beliz; y copia autenticada de la solicitud de investigación formulada contra el Fiscal Noveno de Circuito por su actuación dentro del proceso por calumnia e injuria instaurado por la suscrita contra Marcelino Rodríguez (fs. 1 a 25).

A juicio del Pleno de la Corte, hay mérito suficiente para separar a la señora Procuradora de la Administración del conocimiento de la presente querella, porque se ha acreditado en autos que previamente había solicitado la investigación de la actuación del Fiscal Noveno de Circuito, que guarda estrecha relación con la noticia publicada en el diario El Siglo y que originó la orden del señor Procurador de la Nación de arrestar al señor Carlos Singares; además,

también fue debidamente probado que la señora Procuradora de la Administración ordenó el arresto del Presidente-Director del Diario El Siglo, actual querellante, por considerarse ofendida e irrespetada por una publicación que se hizo en dicho periódico (ver fojas 13 a 25 del expediente de la manifestación de impedimento).

Tal como se ha expuesto, el Pleno considera que el impedimento legal alegado por la señora Procuradora de la Administración tiene fundamento legal en los precitados artículos 388, 389 y 749 numeral 10 y 17, y como existe el mérito suficiente para separar a la señora Procuradora de la Administración del conocimiento de la presente querella, debe procederse a ello.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por la señora Procuradora de la Administración para conocer de la querella criminal interpuesta por El Siglo, S. A. contra el Procurador General de la Nación, por el supuesto delito de injuria, LA SEPARA del conocimiento de la misma y para reemplazarla DESIGNA al suplente de la señora Procuradora de la Administración, licenciado José Juan Ceballos.

Notifíquese

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FABREGA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE POR DESACATO PRESENTADO POR EL LICENCIADO CARMELO GONZÁLEZ, ENB REPRESENTACIÓN DE LESBIA PITANO CONTRA EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DENTRO DEL AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR SU REPRESENTADO CONTRA EL DECRETO DE PERSONAL N°9 DE 4 DE FEBRERO DE 2000, DICTADO POR ESE MINISTERIO. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, incidente por desacato presentado por el licenciado Carmelo González, apoderado legal de Lesbia Pitano, contra Víctor Juliao, Ministro de Economía y Finanzas, por el supuesto incumplimiento de la resolución judicial de 15 de mayo de 2000, expedida por esta Corporación de Justicia, mediante la cual se concedió la acción de amparo de garantías constitucionales formulada a favor de Pitano y, consecuentemente, se revocó el Decreto de Personal N°9 de 4 de febrero de 2000, que ordenaba su destitución.

El licenciado Carmelo González plantea básicamente que el Ministro de Economía y Finanzas ha incumplido la decisión emitida por esta Superioridad, porque a Lesbia Pitano no se le han cancelado "los salarios dejados de percibir durante el tiempo que se hizo efectiva la destitución" (f.3).

A los efectos de resolver la pretensión, resulta conveniente aclarar que la resolución judicial calendada 15 de mayo de 2000, proferida por el Pleno de la Corte, mediante la cual se resolvió el amparo propuesto a favor de Lesbia Pitano, consideró que se había infringido el fuero de maternidad y que no existían causas justificadas para separar a Pitano del cargo que desempeñaba en el Ministerio de Economía y Finanzas. Esta conclusión trajo como única

consecuencia la revocatoria del Decreto de Personal N° 9 de 4 de febrero de 2000, que ordenaba su destitución (fs.14-17).

Ahora bien, del propio escrito presentado por el licenciado Carmelo González, se conoce que Lesbia Pitano "se reincorporó a su cargo el 15 de abril del 2000" (f.2); comprobación que permite concluir, sin mayor esfuerzo, que el Ministro de Economía y Finanzas sí cumplió con la decisión emitida por esta Superioridad, por lo que carece de asidero jurídico afirmar que se encuentra en desacato.

La Corte llama la atención de que no puede utilizarse un incidente por desacato, con el propósito de que el tribunal de amparo se pronuncie sobre el pago de los salarios que Pitano dejó de percibir durante su destitución. En innumerables ocasiones se ha sostenido que para dilucidar conflictos de ésta índole, deben utilizarse los recursos administrativos correspondientes, y posteriormente, la jurisdicción contencioso-administrativa.

Por las consideraciones que anteceden, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DESESTIMA el incidente por desacato presentado por el licenciado Carmelo González, apoderado legal de Lesbia Pitano, contra Víctor Juliao, Ministro de Economía y Finanzas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) YANIXSA YUEN
Secretaria General, Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DILIGENCIA DE TRANSITO ENTRE SEBASTIAN RODRIGUEZ ROBLES, MAGISTRADO DEL TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, Y EL SEÑOR JORGE EDUARDO CARRASCO. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Procedente de Juzgado Quinto de Tránsito del Distrito de Panamá, ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema, el proceso que por colisión de tránsito ocurrido el pasado 23 de junio de 2000, entre los ciudadanos JORGE EDUARDO CARRASCO y SEBASTIÁN RODRÍGUEZ ROBLES, en la Avenida Fernández de Córdoba.

Infiere esta Colegiatura que el caso fue remitido por el Juez de Tránsito a la Secretaría General de la Corte Suprema, mediante oficio N° 003 de 3 de agosto de 2000, porque el Sr. SEBASTIÁN RODRÍGUEZ ROBLES funge en la actualidad como Magistrado Interino del Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, siendo que el caso fue repartido al Despacho del Magistrado José A. Troyano.

Empero, advierte el Pleno que los numerales primero y segundo del artículo 95 del Código Judicial, establecen que la Sala de lo Penal es competente para conocer los casos referentes a los delitos o faltas -como en el presente caso- cometidas por los Magistrados y Fiscales de Distrito Judicial (numeral primero), y de delitos o faltas cometidas en cualquier tiempo por personas que, en el momento de su juzgamiento, desempeñen alguno de esos cargos (numeral segundo).

Por ello, es el criterio de esta Corporación de Justicia que lo que cabe

es declinar la competencia para conocer este negocio, a la Sala Segunda de lo Penal, para que continúe con la sustanciación y decisión del caso que nos ocupa.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLINA LA COMPETENCIA para conocer la diligencia de Tránsito entre el Magistrado Interino SEBASTIÁN RODRÍGUEZ ROBLES y el Sr. JORGE EDUARDO CARRASCO a la Sala Segunda de lo Penal de esta Corporación de Justicia.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

QUEJA PRESENTADA POR EL LICENCIADO FERGUSON MARTINEZ CONTRA EL MAGISTRADO NODIER JARAMILLO, DEL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMA, VEINTINUEVE (29) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Eduardo Ferguson Martínez interpuso queja disciplinaria contra el Magistrado del Primer Tribunal Superior de Justicia, licenciado Nodier Jaramillo, a quien acusa de haber irrogado graves perjuicios a su representada, señora María Lourdes de Barb, por incurrir en manifiesta morosidad al tramitar y resolver el amparo de garantías constitucionales interpuesto contra el auto N° 5 de 4 de enero de 1999, proferido por el Juzgado Sexto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, en el proceso universal de quiebra incoado por el Banco Bilbao Viscaya Panamá, S. A. contra Panagro, S. A. y otros, auto mediante el cual se ordenó la remisión de las copias conducentes a la Fiscalía de Circuito en turno para entablar el proceso criminal correspondiente, con fundamento en los artículos 1903 y 1905 del Código Judicial.

I. CONTENIDO DE LA QUEJA

En su escrito de queja el licenciado Ferguson Martínez señala que el licenciado Nodier Jaramillo ha incurrido en inexcusable morosidad para resolver la demanda de amparo de garantías constitucionales presentada por el licenciado Agustín Sanjur Otero, en representación de María de Lourdes Barb Pérez, contra el Juez Sexto del Primer Circuito Judicial de Panamá del Ramo Civil, fecha desde la cual han transcurrido más de nueve meses hasta la presentación de la queja el 8 de junio de 2000. Explica que esta conducta es contraria a lo establecido en el artículo 2615 del Código Judicial, según el cual el tribunal fallará dentro de los dos días siguientes denegando o concediendo el amparo, de acuerdo con las constancias procesales. En los hechos de su escrito de queja plantea que:

> "QUINTO: -En escrito del 17 de agosto de 1999 (devuelto por Secretaría) el Lic. Sanjur Otero, apoderado de la demandante en ese momento, comunicó a esta alta corporación judicial 'que el funcionario público acusado ha desatendido la nota número 99.1054 del 13 de los corrientes (fecha de presentación del amparo), pues no ha suspendido inmediatamente la ejecución del acto mientras se decide el recurso, de lo cual está obligado a dar enseguida cuenta de ello al triubnal del conocimiento'. Y, que 'el Ministerio Público

ha proseguido la tramitación del proceso penal respectivo, basado en un acto que vulnera los derechos constitucionales de mi representada, y cuya gravedad e inminencia del daño que representa amerita una revocación inmediata.'

SEXTO: -La prudencia indicaba que se accediera a lo pedido en el memorial devuelto, por razón de que la Fiscalía Quinta de Circuito de Panamá iniciaba las investigaciones ilegalmente ordenadas por el funcionario público acusado.

SÉPTIMO: -Por lo anterior, en varias ocasiones quien suscribe y el Lic. Sanjur comparecieron personalmente al Despacho del Magistrado, Lic. Jaramillo a objeto de agilizar el recurso extraordinario sin ningún resultado positivo, habida cuenta que la Secretaría no había recibido el memorial a que se refiere el hecho quinto.

OCTAVO: -Todavía la Fiscalía Quinta de Circuito de Panamá prosigue la tramitación del negocio criminal, a pesar que los demandantes en el proceso universal de quiebra han recibido a satisfacción el monto de sus créditos, mediante transacción aprobada por el Juzgado Sexto del Primer Circuito Judicial, Ramo Civil, por auto número 15 del 3 de enero de 2000 dictado en el proceso universal de quiebra, el cual se encuentra ejecutoriado; y

NOVENO: -De todo lo anterior se desprende rectamente que el funcionario acusado ha incurrido en manifiesta morosidad en la tramitación del amparo de garantías constitucionales lo que ha irrogado e irroga graves perjuicios a mi representada." (fs. 11 y 12).

II. INFORME DE CONDUCTA

Por su parte el Magistrado Nodier Jaramillo, el 30 de junio de 2000, al rendir su informe en relación con la presente queja, aceptó los hechos primero y segundo de la queja. Manifestó que a la fecha el Pleno del Tribunal ya había decidido la acción de amparo interpuesta, negándola mediante sentencia de 20 de junio de 2000. Los hechos quinto a noveno los contestó así:

"Quinto: La admisibilidad del amparo no conlleva la suspensión de la resolución acusada, sobre todo, cuando se trata de una investigación penal, en casos como éste el tribunal de amparo debe contribuir a que la investigación continúe sin interrupciones en beneficio de la administración de justicia; lo anterior no es un hecho sino una opinión del quejoso.

Sexto: Lo anterior no es un hecho es una opinión del quejoso, con el propósito de beneficiar el interés que representa.

Séptimo: No me consta ese hecho, por tanto niego lo afirmado por el quejoso.

Octavo: Desconozco si la Fiscalía Quinta del Circuito aún está investigando a la amparista, de ser cierto, considero que realiza actos propios de su competencia.

Noveno: Lo anterior es una opinión del quejoso, porque si bien transcurrió un tiempo considerable para atender el amparo, esto obedece al cúmulo de procesos en trámite en el despacho y en modo alguno ha existido intención manifiesta por retardar éste o cualquier otro proceso." (fs. 20 y 21).

Con su informe de conducta, el Magistrado Jaramillo acompañó copias autenticadas del expediente de la acción de amparo de garantías constitucionales

propuesto por María de Lourdes Barb contra el Juez Sexto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil; de la sentencia y demás piezas del proceso.

III. CONSIDERACIONES DEL PLENO

El presente proceso se inició por razón de la queja disciplinaria que el licenciado Eduardo Ferguson formuló contra el Magistrado Nodier Jaramillo. Tal como lo señaló el quejoso en su declaración jurada rendida ante la Secretaría General el 14 de junio de 2000, la finalidad de la queja es "exigir que se falle el Amparo de Garantías Constitucionales a que se refiere esta Queja" (f. 17).

Del estudio de las constancias aportadas al proceso, tanto por el quejoso como por el Magistrado Nodier Jaramillo, esta Superioridad ha podido constatar lo siguiente:

El amparo al que se ha venido haciendo alusión fue presentado por el licenciado Agustín Sanjur Otero ante la Secretaría del Tribunal Superior de Justicia el 13 de agosto de 1999.

Fue repartido al Magistrado Nodier Jaramillo para proveer ese mismo día, por lo cual se acogió, y se le ordenó al funcionario demandado que, dentro de las dos horas siguientes, enviara un informe de los hechos materia de la demanda de amparo presentada y una copia de la actuación. No se ordenó la suspensión de la actuación demandada.

Mediante Oficio N° 99.1054 de 13 de agosto de 1999, la Secretaria encargada del Primer Tribunal Superior de Justicia, solicitó al funcionario demandado, Juez Sexto de Circuito Judicial, el informe y copia de su actuación. Este informe fue rendido el 16 de agosto de 1999 y se adjuntaron las copias de la actuación surtida en relación al auto N° 5 de 4 de enero de 1999.

El 18 de mayo de 2000, se presentó ante la Secretaría del Tribunal Superior de Justicia, la sustitución de poder del licenciado Agustín Sanjur Otero al licenciado Eduardo Ferguson Martínez.

Mediante resolución dictada el 20 de junio de 2000, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, bajo la ponencia del Magistrado Nodier Jaramillo, denegó el amparo de garantías presentado el 13 de agosto de 1999 contra el auto N° 5 de 4 de enero de 1999, proferido por el Juez Sexto de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Consta que desde el 16 de agosto de 1999 que el expediente contentivo de la actuación mediante la cual se solicitó amparo contra la orden proferida por el Juzgado Sexto de Circuito de lo Civil, estaba listo para resolver, hasta que el mismo efectivamente fue fallado el 20 de junio de 2000, han transcurrido más de diez meses, tiempo que en materia de amparo de garantías constitucionales es evidentemente excesivo.

Esto es así, porque las instituciones de guarda de las garantías constitucionalmente establecidas, como lo son el habeas corpus y el amparo, tienen como propósito enmendar y prevenir agravios a los derechos más elementales y fundamentales consagrados por nuestra Carta Magna, de allí la obligación y conveniencia que esta clase de peticiones sean resueltas con prioridad al resto de los negocios que tramita un despacho jurisdiccional y que esta Corporación reconoce que en ocasiones son excesivos. No obstante, es deber de los juzgadores, luego que se ha tramitado una causa con la debida diligencia, resolverla en el menor tiempo posible, máxime si se trata de una institución de garantía que amerita la respuesta rápida y oportuna para prevenir, evitar, aminorar o enmendar los agravios ya causados o la conculcación de derechos fundamentales de los ciudadanos.

En el presente caso, aunque el amparo fue resuelto y denegado, es insoslayable que el tiempo que tomó en resolverse es excesivo y que esta

Superioridad, aún reconociendo que el Magistrado Jaramillo ha señalado que no tuvo intención en demorar su resolución, no encuentra suficiente justificación en el hecho de que la carga de negocios que tramita su despacho le impidió resolver con prontitud la acción de amparo a la que se hace referencia.

Se ha podido comprobar que a la fecha de la presentación de esta queja, 8 de junio de 2000, el Magistrado Jaramillo no había resuelto el amparo que le fue repartido, por tanto existen suficientes elementos que acreditan la injustificada dilación, conducta que es contraria a los deberes establecidos en los numerales 1 y 2 del artículo 199 y en el artículo 2615 del Código Judicial.

Sin embargo, en lo que respecta a lo alegado por el quejoso en cuanto a que el Magistrado Nodier Jaramillo no suspendió lo ordenado en el auto impugnado con la demanda de amparo, es necesario aclararle que según el numeral 1 del artículo 2606 del Código Judicial, la interposición de la demanda no suspenderá la tramitación del proceso en que se dictó la resolución judicial impugnada o su ejecución, salvo que el Tribunal lo considere indispensable para evitarle al demandante perjuicios graves y de difícil reparación. En el presente caso, el Tribunal de amparo no consideró que debía suspender la actuación judicial y por ello no lo hizo, decisión que está fundamentada en la citada norma legal.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley AMONESTA al Magistrado NODIER JARAMILLOS, dentro de la queja promovida en su contra por el licenciado Eduardo Ferguson.

Notifíquese

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAUNDES
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FABREGA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PRIMERA DE LO CIVIL

AGOSTO 2000

ACLARACIÓN DE SENTENCIA

HOTELERA EL PANAMA, S. A. RECURRE EN CASACION EN EL, PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE RICARDO A. LANDERO. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, CATORCE (14) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense Rubio, Alvarez, Solís & Abrego, apoderada especial de HOTELERA EL PANAMA, S. A., ha presentado escrito solicitando aclaración de la sentencia proferida por esta Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia el 26 de julio de 2000, que decidió el recurso de casación que interpusiera dicha sociedad dentro del proceso ordinario que le sigue RICARDO A. LANDERO M.

En dicho escrito se solicita que se aclare una supuesta incongruencia entre la parte motiva y la resolutiva de la citada resolución, "...en cuanto al análisis de los artículos 1116 y 1066 del Código Judicial", agregando que "...no comprendemos el alcance de la explicación de los mismos y lo que se sentencia finalmente". (F. 439)

Al respecto, el artículo 986 del Código Judicial indica que la sentencia no puede revocarse ni reformarse por el Juez que la pronuncie, en cuanto a lo principal; pero en cuanto a frutos, intereses, daños y perjuicios y costas, puede completarse, modificarse o aclararse de oficio o a solicitud de parte, dentro de los tres días siguientes a su notificación.

Esa misma disposición legal señala que el Juez que dictó una sentencia, puede aclarar las frases oscuras o de doble sentido, en la parte resolutiva, lo cual puede hacerse dentro de los términos señalados.

Al revisar la solicitud presentada en esta oportunidad, la Sala advierte que la aclaración que se pide guarda relación con las razones que tuvo esta corporación de justicia para no casar la sentencia contra la cual se interpuso recurso de casación. Es decir, el solicitante pretende que se estudie una vez más su pretensión, como si se tratara de una instancia más dentro del proceso; situación que es ajena a la naturaleza jurídica de la aclaración de sentencia que consagra el citado artículo 986 del Código Judicial, razón por la cual resulta improcedente dicha petición.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ACCEDE a la aclaración de la sentencia proferida por esta corporación judicial el 26 de julio de 2000, solicitada por la apoderada judicial de la parte demandada dentro del proceso ordinario instaurado por RICARDO A. LANDERO M. contra HOTELERA EL PANAMA, S. A.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ELIGIO MARIN C.
Secretario Encargado de la Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACIÓN EN PROCESO MARÍTIMO

ESTACIÓN JAVILLO APELA CONTRA EL AUTO N°95, DE 3 DE MARZO DE 2,000, DICTADO POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO EN EL PROCESO ESPECIAL DE EJECUCIÓN DE CRÉDITO MARÍTIMO PRIVILEGIADO QUE LE SIGUE A M/N "CHENCHITO". MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, CUATRO DE (4) AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Proveniente del Tribunal Marítimo de Panamá ha llegado a conocimiento de la Sala de lo Civil de la Corte, en grado de apelación, el presente proceso especial de ejecución de crédito marítimo privilegiado interpuesto por ERIC LARSEN, en representación de ESTACIÓN JAVILLO, contra la M/N "CHENCHITO", de registro panameño.

La competencia de la Sala para conocer de la presente causa se origina en el recurso de apelación presentado contra el Auto N°95, de tres de marzo de 2,000, dictado por el a-quo dentro del incidente de nulidad por indebida notificación presentado por la firma forense que apodera los intereses de la actora. El aludido recurso fue anunciado y sustentado en debida forma por la demandante, mediante escrito del 28 de marzo de 2,000. La resolución impugnada tiene la siguiente parte resolutiva:

> "...En mérito de lo expuesto, el suscrito Juez Marítimo de Panamá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LA NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN por edicto de la resolución de 10 de agosto de 1999; teniéndose como notificada a la actora, a la fecha del 11 de febrero de 2,000, mediante el memorial en el que consecuentemente anuncia en término su apelación...".

La presente causa se encuentra pendiente de resolver, a lo cual procede la Sala, previas las siguientes consideraciones jurídicas.

CRITERIO DEL TRIBUNAL MARÍTIMO

La firma forense Carreira Pittí P.C. ABOGADOS, apoderada judicial del señor Eric Larsen, planteó como tema al Juez Marítimo la nulidad de la notificación de la resolución que admite la prescripción, efectuada mediante edicto fijado el día 28 de enero de 2,000, por cuanto que, de acuerdo al artículo 400 del Código de Procedimiento Marítimo, una vez dictada la sentencia o resolución, el Tribunal debe esperar un término de cinco días contados a partir de la emisión de la decisión para que las partes comparezcan a notificarse por sí mismas; y, si ello no pasa, entonces notificarlas mediante edicto. Tal como se observa en la transcrita parte resolutiva de la resolución impugnada, la solicitud de la actora fue resuelta favorablemente por el Honorable Juez del Tribunal Marítimo, basado fundamentalmente en los siguientes razonamientos:

> "...Así, el Tribunal ha podido observar, que efectivamente, la resolución fechada 10 de agosto de 1999, se ha comunicado a la parte demandante mediante la notificación edictal (edicto N°62, de 28 de enero de 2000), no habiéndose concedido a la parte los cinco (5) días para que ella por sí, se apersonara a recibir la notificación, amén de que la resolución que se notificaba, fue proferida desde los estrados del Tribunal e incorporada al expediente cuando se hubo transcrito el acta de audiencia correspondiente.
>
> Por ello, como bien cita la parte actora la resolución de fecha 18 de enero de 2000, emitida en el caso MARINE OIL TRADING -VS- M/N SEA CHARM", indicando lo resuelto en aquella ocasión, podrían verse afectados los derechos de la parte:
>
> "Este hecho, pudiese causar algún tipo de indefensión para la parte, pues se estaría conculcando el derecho de defensa y por tanto del debido proceso, concediendo el plazo de los cinco (5) días para que ella se apersone voluntariamente a recibir la notificación y si en tal caso ello no se diera, entonces se puede proceder con la notificación edictal."

> Los hechos y argumentos expuestos, mueven al Tribunal, a decretar la nulidad de la notificación edictal atacada, para así dejar certeza en cuanto a la notificación, además de evitar agravios a la parte, y como observa, que a fojas 189, la actora anuncia apelación contra la resolución del 10 de agosto de 1999, esta conducta se tomará como la notificación personal de la mencionada resolución a la parte, tal como se deduce del artículo 1007 del Código Judicial, que resulta aplicable de manera supletoria, por no ser contraria a los principios que informan el proceso marítimo panameño.".

CONTENIDO DEL RECURSO

En lo fundamental, el impugnante plantea cuatro reparos a la sentencia impugnada, a saber:

1. Violación del artículo 118, párrafo segundo del Código de Procedimiento Marítimo: en este punto señala que en el proceso se produjo la nulidad sobre la notificación del auto que decretó prescripción parcial, consecuentemente, el anuncio de la apelación y el término para sustentar el recurso de apelación son actos posteriores pendientes de aquél, habida cuenta que constituyen los lapsos en los cuales el anuncio del recurso es válido o no. Seguidamente, indica que, la interposición de los recursos contra las resoluciones constituye un acto procesal que requiere de absoluta certeza, consecuentemente, para el acto de interposición de los recursos, la fecha de notificación de la resolución debe gozar de certeza y precisión. Por ello, dice que el auto N°95, de 3 de marzo de 2,000, debió decretar no sólo la nulidad de lo actuado, en cuanto a términos y notificaciones, sino que además, debió ordenar la notificación personal del auto que decretó la prescripción parcial porque el proceso se encontraba paralizado por más de treinta días.

2. Violación de lo dispuesto por el artículo 399, numeral 3, del Código de Procedimiento Marítimo: resulta pertinente transcribir lo medular de este punto. Dice así:

> "...Con el fin de impedir a la demandante el ejercicio oportuno de su derecho a recurrir contra la resolución, entonces el Tribunal, obviando el mandato contenido en el artículo 399 (3) del Código de Procedimiento, NOTIFICACIÓN PERSONAL, echa mano de la notificación personal ficta contenida en el artículo 1007 del Código Judicial, sin advertir que el presupuesto contenido en dicha norma NO ES APLICABLE a las resoluciones dictadas en audiencias orales ante el Tribunal Marítimo porque el propio Tribunal ha decidido que estas decisiones QUEDAN NOTIFICADAS EN EL ACTO DE LA AUDIENCIA, PERO EL TERMINO PARA ANUNCIAR APELACION Y SUSTENTAR LA MISMA, SÓLO CORRE A PARTIR DE LA INSERCIÓN DE LA TRANSCRIPCION EN EL EXPEDIENTE.".

3. Violación de lo dispuesto en el artículo 1,007 del Código Judicial: la infracción se produce, según el recurrente, por indebida aplicación, ya que a través del artículo 1,007 del Código Judicial el Tribunal Marítimo hizo una doble notificación del auto que declaró la prescripción parcial, el que ya se había notificado a las partes en el acto de audiencia.

4. Violación de los artículos 397 y 398 del Código de Procedimiento Marítimo: las normas citadas aquí se dicen infringidas por omisión. El recurrente no comparte el criterio del juzgador de primera instancia, dado que la actuación procesal realizada por la demandante quedó anulada y sin efecto desde el momento en que se decretó la nulidad de la notificación, habida cuenta que es un acto procesal que depende de ella e incluso no puede correr un término para sustentar la apelación si la resolución que decidió una cuestión accesoria de la cual se anunció apelación fue anulada y notificada vía edicto el 9 de marzo del 2,000. El auto que resolvió la nulidad fue notificado por edicto, sigue indicando el recurrente, casi un mes después de la fecha que el tribunal usa para iniciar el conteo del término para apelar.

Se afirma aquí, que la nulidad de la notificación, según el tenor del artículo 118 entrañó la de los actos posteriores por ser ellos dependientes de él; y en este caso, el escrito de anuncio de apelación presentado el 11 de febrero de 2,000 fue un acto procesal posterior que dependía de la notificación.

Como colofón de lo expuesto, los apoderados judiciales de la demandante solicitan a la Sala que revoquen el auto N°95, de tres (3) de marzo de 2,000 en la parte que da validez de la foja 189 del expediente en adelante, escrito de anuncio de apelación, y en su lugar decrete la nulidad de todo lo actuado a partir del edicto N°62, de 28 de enero de 2,000, y consecuentemente, ordenando la notificación personal a las partes.

CRITERIO DE LA CORTE

En primer lugar, cabe destacar que la notificación es un acto procesal de comunicación y que reviste importancia en el proceso por cuanto que: a. le da publicidad a los actos de los sujetos; b. le brinda la oportunidad a las partes de impugnar los actos procesales; y c. sirve de referencia para computar los términos.

En segundo lugar, que en materia de nulidades procesales rigen principios fundamentales como lo son: especificidad (no hay nulidad sin norma que lo establezca); trascendencia (sólo procede la declaratoria de nulidad en caso de agravio o perjuicio procesal al que la alega); la nulidad no conlleva la de los actos que sean independientes de él; y, la improcedencia de la nulidad cuando el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado.

En tercer lugar, que pese a que se citaron como violentados los artículos 118, numeral 2, 397, 398, 399, numeral 3 de la Ley Procedimental Marítima y 107 del Código Judicial, para lograr una mayor profundidad en la cuestión planteada es conveniente estudiar lo establecido en los artículos 131, 142 y 400 de la Ley 8ª, de 30 de marzo de 1982, reformada por la Ley 11, de 23 de mayo de 1986, al igual los artículos 1,008 y 1,013 del Código Judicial.

Tanto de las normas de derecho del Código de Procedimiento Marítimo como de las disposiciones del Código Judicial, aplicadas supletoriamente en el presente caso, se pone de manifiesto lo siguiente:

1. Que la nulidad de un acto no entraña la de los actos precedentes o posteriores que sean independientes de él.

2. Que, por regla general, ninguna resolución judicial puede comenzar a surtir los efectos que le son propios antes de haber sido notificada a las partes dentro del proceso.

3. Que la regla general en materia de notificaciones es la edictal, pero, que la ley marítima regula detalladamente las resoluciones que se notificarán personalmente.

4. Que surte todos los efectos de una notificación personal, si la persona a quien debe notificarse una resolución en escrito suyo se hace sabedora o interesada de ella por cualquier medio escrito, o hace gestión con relación a la misma.

5. Que, cuando ha vencido el plazo de cinco (5) días desde la fecha en que se dicte la resolución correspondiente sin que la persona que deba ser notificada concurra a tal notificación, se autoriza la notificación edictal de la manera que establece el artículo 398 de la ley marítima.

6. Que, si la parte que tiene derecho a pedir la anulación de lo actuado lo hiciere oportunamente, el Juez lo decretará y retrotraerá el proceso al estado que tenía cuando ocurrió el motivo de la nulidad. (El énfasis es de la Sala).

7. Que la nulidad se decretará cuando sea absolutamente indispensable para evitar indefensión, afectación de derechos de terceros o para restablecer el curso normal del proceso.

8. Que las notificaciones hechas en forma distinta de las expresadas en la ley son nulas; sin embargo, siempre que del expediente resultare que la parte ha tenido conocimiento de la resolución que la motivó, la notificación surtirá sus efectos desde entonces.

El tenor literal de las normas de derecho que establecen los principios que hemos dejado expuestos se reproducen a continuación, para una mejor comprensión.

Ley Procedimental Marítima:

"Artículo 118: Los actos procesales sólo podrán anularse por causas establecidas taxativamente en la Ley, y el Juez rechazará de plano la solicitud que no se funde en una de tales causales.
Numeral 2. La nulidad de un acto no entraña la de los actos precedentes o posteriores que sean independientes de él.".

Artículo 131: Si la parte que tiene derecho a pedir la anulación de lo actuado lo hiciere oportunamente, el Juez la decretará y retrotraerá el proceso al estado que tenía cuando ocurrió el motivo de la nulidad.

Artículo 142: La nulidad se decretará cuando sea absolutamente indispensable para evitar indefensión, afectación de derechos de terceros, para restablecer el curso normal del proceso.

Artículo 397: Ninguna resolución puede comenzar a surtir efecto antes de haber sido notificada a las partes, conforme se dispone en esta Ley.

Artículo 398: Las notificaciones a las partes deberán hacerse siempre por medio de edictos, salvo en los casos que más adelante se expresan.

El edicto contendrá la expresión del juicio en que ha de hacerse la notificación, la fecha, la parte resolutiva que haya de notificarse y la fecha de fijación del edicto.

El edicto, como regla general, será fijado en lugar visible del recinto del tribunal por el secretario o por quien éste designe, por escrito, por un plazo de cinco (5) días, y la notificación surtirá efectos desde la fecha y hora en que fuera desfijado por el secretario del tribunal o por quien éste designe.

En todo caso, el edicto, una vez desfijado, será agregado al expediente con expresión del día y hora de su fijación y desfijación.

Artículo 399: Las siguientes resoluciones se notificarán personalmente;
Numeral 3. La primera resolución que se dicte en un proceso que haya estado paralizado por treinta (30) días.

Artículo 1007 del Código Judicial: Si la persona a quien debe notificarse una resolución se refiere a dicha resolución en escrito suyo en otra forma se manifiesta sabedora o enterada de ella por cualquier medio escrito, o hace gestión con relación a la misma, dicha manifestación o gestión surgirá desde entonces, para la persona que la hace, los efectos de una notificación personal.

> El apoderado que deseara examinar un expediente y tuviera pendiente alguna notificación personal que directamente le atañe a él mismo, deberá previamente notificarse de la respectiva resolución. En este caso, el Secretario le requerirá que se notifique y si no lo hiciere dejará constancia de ello, en el expediente, con expresión de la resolución pendiente de notificación y procederá a hacerla por edicto en los estrados del Tribunal.
>
> El mismo procedimiento se seguirá en cualquier caso en que el apoderado rehuya una notificación personal sobre la cual le haya hecho requerimiento el secretario.
>
> Artículo 1013: Las notificaciones hechas en forma distinta de las expresadas en este Código son nulas, e incurrirá el Secretario que las haga o tolere en una multa de cinco (B/.5.00) a veinticinco (B/.25.00) que le impondrá el Juez del conocimiento con la sola constancia de la notificación ilegalmente hecha, y será responsable de los daños y perjuicios que con ello haya causado. Sin embargo, siempre que del expediente resultare que la parte ha tenido conocimiento de la resolución que la motivó, la notificación surtirá sus efectos desde entonces. El Secretario no quedará relevado de su responsabilidad.
>
> La petición de nulidad se tramitará por la vía de incidente.".

Bajo esta óptica, tenemos que los planteamientos que se recogen de los cuatro cargos que se esgrimen contra la resolución impugnada frente a los principios que contienen las normas antes transcritas no encuentran asidero jurídico, puesto que el Tribunal Marítimo de Panamá si cumplió con las normas procedimentales sobre notificación. Una revisión del expediente demuestra que la transcripción de la audiencia fue agregada al expediente el día 19 de enero de 2,000 (véase foja 152), siendo notificada la resolución por edicto el día 28 de enero del presente año, o sea, seis días después que se dictó la resolución correspondiente. En la misma fecha, mediante oficio N°084-00, se le comunicó a la firma forense Carreira Pittí P.C. ABOGADOS, la fijación del edicto N°062 (fojas 185 y 186) con un total apego a lo que dispone el artículo 400 de la Ley 8ª de 1982, reformada por la Ley 11, de 23 de mayo de 1986.

El día 11 de febrero de 2,000, la firma forense recurrente presenta memorial con el objeto de apelar la resolución que declara prescrita la acción en la presente causa. El artículo 484 de la citada ley es claro cuando señala que:

> "Artículo 484: La parte que se considere agraviada tiene derecho a apelar en el acto de notificación o dentro de los tres (3) días siguientes, pero deberá sustentar el recurso dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la resolución apelada." (Lo subrayado es de la Sala).

Significa lo anterior que nos encontramos ante un término legal, es decir, fijado expresamente por la ley, sin necesidad de que el Juez exprese su duración. Computando dicho término para el caso que nos ocupa, tenemos que vencía el día tres de marzo de 2,000, considerando la aplicación del artículo 1,007 y 1,013 del Código Judicial. Si se trataba de computar la notificación edictal entonces tenemos que vencía el día 25 de febrero del presente año. Aún cuando se hubiere interpuesto un incidente de nulidad solicitando se anulara la notificación hecha por vía edictal, el impugnante no podía correrse el riesgo de esperar las resultas del incidente que interpusiere. Recuérdese que se trata de un término legal, donde si la parte no ha hecho uso de su derecho se extingue su oportunidad y los trámites del proceso continúan.

La decisión tomada por el señor Juez Marítimo se ajusta a derecho. Se decretó la nulidad de la notificación edictal para tener certeza de la

notificación, pero en el expediente existe constancia que la firma forense que representa a la demandante se manifestó sabedora o enterada de ello mediante memorial presentado a la secretaría del Tribunal. Para los efectos legales, se trata de una notificación personal; y, a partir de este momento surte todos los efectos. Consecuentemente, la nulidad que se produce en la notificación edictal no afecta la notificación personal que corre a fojas 185 del presente expediente porque se trata de actos independientes no vinculados. Así lo consagra el artículo 118, numeral 2 cuando dice: "La nulidad de un acto no entraña la de los actos precedentes o posteriores que sean independientes de él.

Esta Sala de la Corte encuentra que el razonamiento realizado por el señor Juez del Tribunal Marítimo es consecuencia lógica de la realidad procesal; por consiguiente, procede confirmar el auto apelado.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala Primera, de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA en todas sus partes el Auto N°95, de tres (3) de marzo de 2,000, proferido por el señor Juez del Tribunal Marítimo de Panamá dentro del proceso especial de crédito marítimo privilegiado que ERIC LARSEN (en representación de Estación Javillo) le sigue a M/N "CHENCHITO".

Las costas, a cargo de la recurrente, se fijan en la suma de DOSCIENTOS BALBOAS (B/.200.00) solamente.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario de la Sala de lo Civil, Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACION INTERPUESTA POR TRANSPORTE Y TURISMO BOCATOREÑO, S. A. Y ATLANTIC TOURIST INVESTMENT, S. A. CONTRA LOS AUTOS DEL 30 DE JUNIO DE 1999 Y 5 DE JULIO DE 1999 DICTADOS POR EL TRIBUNAL MARITIMO EN EL PROCESO ORDINARIO MARITIMO QUE LE SIGUE A FERRYS INTERNATIONAL, S. A. TUGS & BARGES (PANAMA) LTDA. INC., EXPORT & IMPORT CONSULT, S. A. FERRYS BOCAS DEL TORO, S. A. ARTHUR ROBINSON. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La representación judicial de TRANSPORTE Y TURISMO BOCATOREÑO, S. A. y ATLANTIC TOURIST INVESTMENT, S. A. en el proceso ordinario marítimo que se le sigue a FERRYS INTERNATIONAL S. A., TUGS & BARGES (PANAMA) LTDA. INC., EXPORT & IMPORT CONSULT, S. A. FERRYS BOCAS DEL TORO, S. A. y ARTHUR ROBINSON, han interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de 30 de junio de 1999, complementada por el auto de 5 de julio de ese año, proferida por el Tribunal Marítimo y por medio de la cual se declaró probada la excepción de prescripción extintiva de la acción, alegada por la parte demandada en este juicio.

El juez de la causa estimó fundada la solicitud de los demandados, quienes adujeron que la acción para reclamar o exigir responsabilidad civil por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que trata el artículo 1644 del Código Civil prescribe en el término de un año, contado a partir del momento en que lo haya sabido el agraviado, según lo dispone el artículo 1706 del mencionado cuerpo de leyes.

Consideró el juez marítimo que la acción empleada por los demandantes está basada en el artículo 1644, o sea, que se deriva de la supuesta culpa o negligencia en que incurrieron los demandados sin que promediara la existencia

de un contrato entre las partes.

De acuerdo al relato de los hechos en que se fundamenta la demanda, el agravio es el producto del deterioro o la destrucción del muelle del Puerto de Chiriquí Grande ocasionado por un barco de propiedad o bajo al responsabilidad de los demandados, acontecimiento debido a la negligencia de éstos. Así mismo, sostiene la parte actora que los demandados incurrieron en el incumplimiento del contrato de concesión administrativa que celebraron con la Autoridad Portuaria Nacional al dejar de pagar los gastos o no reparar lo antes posible el muelle dañado que, por esa causa, quedó inutilizado para la navegación, haciendo, de esa manera, imposible su uso por parte de los otros concesionarios, entre los que se cuentan los demandantes que, a su vez, resultaron perjudicados por lo acontecido.

Por esa razón las empresas demandantes procedieron a invertir la suma de $53,383.86 dólares en la reparación del muelle de Chiriquí Grande, con el propósito de que el puerto pudiese seguir brindando sus servicios al transporte marítimo y para evitar que lo ocurrido siguiera causando perjuicios a los concesionarios del muelle inhabilitado por la acción negligente de las demandadas. En la demanda se solicita el reconocimiento de ese pago.

Además de la pretensión indicada, las demandantes reclaman el pago de otros supuestos daños que se dicen derivados de la conducta de la parte demandada.

Al sustentar la apelación, la parte actora rechaza la tesis del juzgador en la que se sostiene que la reclamación o pretensión tiene origen en la responsabilidad extracontractual derivada de culpa o negligencia. Entre los varios argumentos ensayados por la actora para rebatir las motivaciones de la sentencia atacada, a la Sala le merece atención aquel que se esgrime en el sentido de que la demanda se interpuso para reclamar el derecho que en favor del demandante emana a partir de lo dispuesto por el artículo 1045 del Código Civil y no en base al artículo 1644 ibídem. La norma dice lo siguiente:

> "Artículo 1045. Puede hacer el pago cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, o ya lo ignore el deudor
>
> El que pagare por cuenta de otro podrá reclamar del deudor lo que hubiese pagado, a no haberlo hecho contra su expresa voluntad. en este caso, sólo podrá repetir del deudor aquello en que le hubiera sido útil el pago."

Agrega la parte actora que la reparación de los daños causados al muelle averiado, hecha a sus costas, equivale al pago que, en virtud del contrato de concesión celebrado entre la demandada y la Autoridad Portuaria Nacional, le adeudaba la primera a la segunda. De allí que si los demandantes hicieron ese pago (por cuenta de otro), ellos tienen derecho a reclamar del deudor lo que, en efecto, por él han pagado.

Consecuencia de lo anterior resulta que el término para ejercer judicialmente la acción sin que ésta prescriba no se rige por lo dispuesto en el artículo 1706, sino por lo que indica el artículo 1701 del Código Civil.

> "Artículo 1701. Prescriben en siete años las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción."

Para la Sala, al margen del mérito que puedan o no tener las distintas reclamaciones demandadas por la parte actora en este proceso, es evidente que no cabe declarar extinguida la acción a consecuencia de la prescripción de un año alegada por los demandados, dado que la pretensión no tiene su origen en una presunta responsabilidad extracontractual basada en culpa o negligencia en que incurrieran las demandadas, sino en el pago hecho por un tercero de conformidad con lo que establece el artículo 1045 del Código Civil; pago que da origen a una acción personal que prescribe en el término de siete años según lo indica el

artículo 1701 del Código Civil.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA en todas sus partes la resolución de 30 de junio de 1999 y declara NO PROBADA la acción de prescripción extintiva de la acción alegada por la representación judicial de TRANSPORTE Y TURISMO BOCATOREÑO, S. A. y ATLANTIC TOURIST INVESTMENT, S. A. en el proceso ordinario marítimo que se le siguen a FERRYS INTERNATIONAL S. A. TUGS & BARGES (PANAMA) LTDA. INC. EXPORT & IMPORT CONSULT, S. A. FERRYS BOCAS DEL TORO, S. A. ARTHUR ROBINSON.

Las costas se fijan en la suma de MIL BALBOAS (B/.1,000.00) en total, contra los excepcionantes.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE ANDRES TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario de la Sala Civil, Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRANSPORTE Y TURISMO BOCATOREÑO, S. A. Y ATLANTIC TOURIST INVESTMENT, S. A. APELAN CONTRA LOS AUTOS DEL 30 DE JUNIO DE 1999 Y 5 DE JULIO DE 1999 DICTADOS POR EL TRIBUNAL MARITIMO EN EL PROCESO ORDINARIO MARITIMO QUE LE SIGUE A FERRYS INTERNATIONAL, S. A., TUGS & BARGES (PANAMA) LTD., INC, EXPORT & IMPORT CONSULT, S. A., FERRY DE BOCAS DEL TORO, S. A. Y ARTHUR ROBINSON. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMA, TREINTA (30) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense MORGAN & MORGAN, en su condición de apoderados de TUGS & BARGES (PANAMA) LTD., FERRY DE BOCAS DEL TORO, S. A. y ARTHUR ROBINSON, han presentado solicitud de Aclaración de la Sentencia de 4 de agosto de 2000 emitida por esta Corporación, en virtud de recurso de apelación interpuesto por TRANSPORTE Y TURISMO BOCATOREÑO, S. A. Y ATLANTIC TOURIST INVESTMENT, S. A. contra la sentencia de 30 de junio de 1999 proferida por el Tribunal Marítimo, que declaró probada la excepción de prescripción extintiva de la acción, alegada por la parte demandada en este juicio.

En el escrito de solicitud de aclaración de sentencia, que corre de foja 624 a 629, se plantea, entre otras consideraciones, lo siguiente:

"FUNDAMENTAMOS NUESTRA SOLICITUD ASI:

> La parte resolutiva del fallo del 4 de agosto de 2000 reza como a continuación se transcribe, a saber:
>
> Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA en todas sus partes la resolución de 30 de junio de 1999 y declara NO PROBADA la acción de prescripción de la acción alegada por la representación judicial de TRANSPORT Y TURISMO BOCATOREÑO, S. A. y ATLANTIC TOURIST INVESTMENT, S. A. en el proceso ordinario marítimo que se le siguen a FERRYS INTERNATIONAL S. A. TUGS & BARGES (PANAMA) LTDA. INC. EXPORT & IMPORT CONSULT, S. A. FERRYS BOCAS DEL TORO, S. A. ARTHUR ROBINSON.

Sin embargo, en el párrafo inmediatamente anterior, la Sala manifiesta lo siguiente:

> Para la Sala, al margen del mérito que puedan o no tener las distintas reclamaciones demandadas por la parte actora en este proceso, es evidente que no cabe declarar extinguida la acción a consecuencia de la prescripción de un año alegada por los demandados, dado que la pretensión no tiene su origen en una presunta responsabilidad extracontractual basada en culpa o negligencia en que incurrieran las demandadas, sino en el pago hecho por un tercero de conformidad con lo que establece el artículo 1045 del Código Civil; pago que da origen a una acción personal que prescribe en el término de siete años según lo indica el artículo 1701 del Código Civil.
>
> Lo anterior deja duda sobre el sentido estricto de la parte resolutiva del fallo, en cuanto a que se da a entender que solamente la reclamación de la parte actora en concepto del supuesto pago hecho a la Autoridad Portuaria Nacional (APN) por el supuesto daño al puerto de Chiriquí Grande escapa el término de prescripción de un año por responsabilidad extracontractual, puesto que sólo esta pretensión -entre las otras varias esgrimidas por las demandantes- tiene como base el artículo 1045 del Código Civil, a diferencia del artículo 1644 de dicho Código.
>
> En efecto, entendemos que en base a los dos antes citados párrafos, que sólo la pretensión de la parte actora por el supuesto pago hecho a la APN da origen a la llamada "acción personal". No así los otros rubros, por los que se reclama resarcimiento, los cuales no se fundan en el supuesto pago hecho a una autoridad del estado. A continuación listamos los supuestos daños sufridos por las demandantes en los cuales basan su pretensión, a saber:
>
> 1) ...
> 2) ...
> 3) ...
> 4) ...
> 5) ...
> 6) ...
> .....
> .....
> Dado que esta Sala fue enfática en el sentido de que la pretensión de la parte actora "... no tiene su origen en una presunta responsabilidad extracontractual ... sino en el pago hecho por un tercero de conformidad con lo que establece el artículo 1045 del Código Civil ...", que las demandadas solo hicieron un supuesto pago por US$53,383.86 a la APN para la reparación del supuesto daño al muelle de Chiriquí Grande, y quizá el pago de una supuesta multa a la APN por US$ 1,050.00, solamente estas dos pretensiones se podrían considerar, de acuerdo a los planteamientos de esta Honorable Sala, como acciones personales. Por lo tanto, el resto del reclamo de la parte actora (i.e. - US$296,616.14), siendo de naturaleza eminentemente extracontractual, estaría prescrito al tenor del artículo 1706 del Código Civil.
> .....
> ....."
> (Fs.624,625,627,628)

Para resolver lo de lugar, en primer término esta Sala debe citar la norma que regula lo relativo a la aclaración o modificación de una sentencia, la que, para efectos de este caso, es el artículo 394 del Código de Procedimiento Marítimo:

> "ARTICULO 394: La sentencia no puede revocarse ni reformarse por el tribunal que la dicte, en cuanto a lo principal; pero en cuanto a los intereses, daños y perjuicios y costas, puede complementarse,

modificarse o aclararse, de oficio, dentro de los tres días siguientes a su notificación, o a solicitud de parte hecha dentro del mismo término.

También puede el Juez que dictó una sentencia aclarar las frases obscuras o de doble sentido, en la parte resolutiva, lo cual puede hacerse dentro de los términos fijados en la primera parte de este artículo."

A juicio de la Sala, resulta evidente que lo pretendido por el proponente de esta aclaración de sentencia, consistente en que se declare prescrito parte del reclamo de la actora en cuanto a los demandados, no se ajusta a los supuesto que de acuerdo al precepto transcrito pueden ser aclarados, modificados o complementados dentro de la sentencia, pues no se trata de interese, daños y perjuicios o costas.

Tampoco existen frases oscuras o de doble sentido en la parte resolutiva del fallo, pues al haber el Tribunal Marítimo declarado probada la excepción de prescripción extintiva de acción, en términos generales sin dividir la pretensión en diversos rubros o puntos reclamados, esta Corporación, al resolver la apelación que sobre tal determinación se promovió, revocó dicho fallo "en todas sus partes" y en consecuencia declaró no probada la prescripción extintiva alegada.

Así las cosas, la aclaración no procede, toda vez que el pronunciamiento que nos ocupa no se enmarca en los supuestos de los artículos 394 y 395 del Código de Procedimiento Marítimo que permiten la aclaración o la corrección de las resoluciones judiciales.

Por tanto, el proceso debe continuar para todas las partes, a fin de que el Tribunal Marítimo pueda decidir el mérito de las distintas reclamaciones formuladas por la parte actora.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ACCEDE a la solicitud de Aclaración de Sentencia presentada por TUGS & BARGES (PANAMA) LTD., FERRY DE BOCAS DEL TORO, S. A. Y ARTHUR ROBINSON.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario de la Sala Civil, Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

M/N "FALCON" APELA CONTRA LA SENTENCIA NO.11, DEL 18 DE MAYO DE 1998 DICTADA POR EL TRIBUNAL MARITIMO EN EL PROCESO ESPECIAL DE EJCUCION DE CREDITO MARITIMO PRIVILEGIADO QUE LE SIGUE MARCELINO LASSO. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Ha ingresado a conocimiento de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, el recurso de apelación interpuesto por la firma forense Carreira Pittí P.C. Abogados, en su condición de apoderada judicial de M/N FALCON, contra la Sentencia N 11 proferida por el Tribunal Marítimo de Panamá el 18 de mayo de 1998, complementada por resolución fechada 3 de enero de 2000, ambas dictadas dentro del proceso especial de ejecución de crédito marítimo privilegiado instaurado por el señor MARCELINO LASSO contra la parte recurrente.

Dicha decisión condena a M/N FALCON a pagarle al señor LASSO lo siguiente: 1) La suma de dieciocho mil dólares (U.S.$18,000.00) en concepto de indemnización por incapacidad parcial permanente; 2) La suma de dos mil doscientos cincuenta dólares (U.S.$2,250.00) en concepto del salario correspondiente a la marea en la que participó el señor LASSO, hasta el momento en que se dieron los hechos generadores del presente proceso; 3) La suma de tres mil ciento noventa dólares (U.S.$3,190.00) en concepto de costas por el trabajo en derecho; y, 4) El cincuenta por ciento (50%) de los gastos del proceso en que haya incurrido el actor, los cuales serán calculados por secretaría.

Este fallo tiene origen en la demanda especial de ejecución de crédito marítimo privilegiado interpuesta por el señor MARCELINO LASSO contra M/N FALCON, de nacionalidad venezolana, con el objeto de que se le condenase, conforme a la ley sustantiva de ese país, al pago de U.S.$256,875.00 en concepto de capital, más la suma de U.S.$128,214.00 en la que estima el daño moral que le ocasionó el accidente de trabajo que sufrió el 22 de noviembre de 1996, mientras conducía la lancha rápida, "...que lo han dejado incapacitado absoluta y permanentemente para realizar las mismas labores que había venido realizando durante toda su hasta ahora vida productiva de diecisiete (17) años". (F. 2)

Una vez celebradas tanto la audiencia preliminar como la ordinaria y cumplidos los demás trámites procesales correspondientes, se dictó Sentencia N 11 el 18 de mayo de 1998 en la que se condenó a la nave demandada y se fijaron los parámetros que debían aplicarse para la determinación de las sumas líquidas de dicha condena, las cuales fueron establecidas en resolución fechada 3 de enero de 2000 en los términos expresados con anterioridad.

Inconforme con esta decisión, la apoderada judicial de M/N FALCON interpuso el recurso de apelación que nos ocupa, en el que se alega lo siguiente:

1) La violación de los artículos 36 y 989 del Código de Procedimiento Marítimo panameño, puesto que existe incongruencia entre lo pedido y lo fallado, toda vez que el Juez Marítimo condenó a M/N FALCON a indemnizar al señor LASSO "...por una enfermedad profesional y no por los daños y perjuicios presuntamente sufridos a consecuencia de las lesiones producidas por un accidente de trabajo" (fs. 1791-1792), incurriendo, como consecuencia, en extra petita, al conceder al actor más de lo pedido.

2) La violación del artículo 562 del Código Laboral de Venezuela, al considerar que la indemnización por la enfermedad profesional que padece el señor LASSO le correspondía a la demandada, quien, "...en modo alguno debe indemnizar al demandante ya que la enfermedad no fue adquirida en la nave si no que como se evidencia el mismo señor LASSO traía una condición preexistente, y al no adquirir la enfermedad abordo (sic) de la nave, y el juez a-quo al condenar a la misma al pago de una indemnización por una enfermedad originada en otro sitio a (sic) violado el texto del artículo 562...". (F. 1795)

3) La violación del artículo 573 del Código Laboral de Venezuela, al condenar al pago de la suma de U.S.$18,000.00 en concepto de indemnización por la incapacidad parcial permanente del señor LASSO, sin tomar en consideración que esa misma disposición legal establece que dicha indemnización no excederá de la cantidad equivalente a quince salarios mínimos, sea cual fuere la cuantía del salario; suma que en el caso que nos ocupa asciende a U.S.$2,484.00 según el cálculo del recurrente.

4) La aplicación indebida del artículo 434 del Código de Procedimiento Marítimo, cuando condenó al demandado recurrente al pago de las costas y del 50% de los gastos del proceso, sin percatarse de que la nave demandada tuvo que defenderse de una demanda injusta y excesiva cuya cuantía, incluso, se redujo de la suma original de U.S.$400,000.00 a la cantidad de U.S.$60.000,00, razón por la cual solicita que se le exonere del pago de costas y gastos del presente proceso.

En cuanto al primer cargo en el que la parte recurrente se refiere a la supuesta falta de congruencia entre lo pedido por el demandante y lo fallado por el Tribunal Marítimo, la Sala advierte que si bien la decisión apelada consideró que el señor MARCELINO LASSO sufre de una "enfermedad profesional" producto de su desempeño como conductor de las embarcaciones conocidas como "lanchas rápidas", también dejó claro que no existían dudas en cuanto al hecho de que el demandante "experimentó un accidente a bordo de la M/N FALCON en la cual laboraba, así lo manifiesta el propio Capitán de la embarcación y así también lo corroboró el señor GIANFRANCO, representante de los intereses de la nave aquí en Panamá y ciertas pruebas testimoniales" (f. 1763) y que fue a partir de dicho suceso que el señor LASSO empezó a sentir las molestias de salud que no le permitieron continuar con sus labores habituales.

En otras palabras, el Juez Marítimo concluyó que la indemnización a la que tiene derecho el señor LASSO por incapacidad parcial permanente, tiene su origen en el accidente que sufrió el 22 de noviembre de 1996, cuando laboraba en la nave demandada. Así se desprende del fallo impugnado cuando expresamente señala lo siguiente:

> "Por estas razones creemos que la fractura compresiva en que se fundamentaba la demanda no ha sido comprobada en este proceso ya que la existencia de la misma ha quedado desvirtuada por los galenos. No obstante, el Tribunal reconoce que el Señor MARCELINO LASSO sufrió un accidente mientras laboraba a bordo de la nave y de ahí en adelante él estuvo incapacitado y comenzó a manifestar dolores". (F. 1768) (Enfasis de la Sala)

En vista de lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que el Tribunal Marítimo no infringió los artículos 36 y 389 del Código de Procedimiento Marítimo, puesto que no existe incongruencia entre la pretensión del demandante y la sentencia, toda vez que la indemnización a la que fue condenada la nave demandada corresponde a la incapacidad parcial permanente que padece el señor LASSO como consecuencia del accidente que sufrió cuando laboraba para la M/N FALCON.

En segundo lugar la parte recurrente alega que la decisión de primera instancia violó el artículo 562 de la Ley Orgánica de Venezuela, que a la letra dice:

> "ARTICULO 562: Se entiende por enfermedad profesional un estado patológico contraído con ocasión del trabajo o por exposición al ambiente en que el trabajador se encuentre obligado a trabajar; y el que pueda ser originado por la acción de agentes físicos, químicos o biológicos, condiciones ergonómicas o meteorológicas, factores psicológicos o emocionales que se manifiestan por una lesión orgánica, trastornos enzimáticos o bioquímicos, temporales o permanentes. El Ejecutivo Nacional al reglamentar esta Ley o mediante Resolución especial podrá ampliar esta enumeración".

En esta oportunidad el recurrente argumenta que la indemnización a la que fue condenado es producto de una enfermedad profesional que el señor LASSO adquirió durante los años que laboró para otras empresas y no en la M/N FALCON, razón por la cual considera que el Tribunal Marítimo infringió la disposición anteriormente transcrita, cuando la condenó por una condición preexistente.

La Sala observa que este segundo cargo está íntimamente relacionado con el anterior, razón por la cual no existe la necesidad de pronunciarse nuevamente; bastando con repetir que si bien el Tribunal Marítimo manifestó que el señor LASSO padece una enfermedad profesional, aclaró que fue a partir del accidente que ocurrió mientras laboraba para la demandada, que éste empezó a sufrir dolores y que desarrolló la condición que lo mantiene incapacitado de manera parcial, pero permanente. En estas circunstancias, debe entenderse que la decisión apelada consideró que fue dicho accidente el que originó la obligación de la demandada

de pagar la indemnización a la que fue condenada.

Por tanto, la Corte estima que tampoco se ha violado el artículo 562 de la Ley Orgánica de Trabajo de Venezuela.

En tercer lugar, la demandada recurrente sostiene que el fallo impugnado violó el último párrafo del artículo 573 de la mencionada ley, el cual es del tenor siguiente:

> "ARTICULO 573: En caso de accidente o enfermedad profesional que produzca incapacidad parcial y permanente, la víctima del accidente tendrá derecho a una indemnización que se fijará teniendo en cuenta el salario y la reducción de la capacidad de ganancias causadas por el accidente, según el Reglamento.
>
> Esta indemnización no excederá del salario de un (1) año, ni de la cantidad equivalente a quince (15) salarios mínimos, sea cual fuere la cuantía del salario."

La recurrente alega que el juzgador de primer grado infringió la citada disposición cuando la condenó al pago de la suma de US$18,000.00, la cual corresponde al salario que devengaba el señor LASSO en un año, sin tomar en cuenta que dicha suma excede a la equivalente a quince salarios mínimos que establece como tope la última parte de la norma transcrita.

En relación con este punto el Juez Marítimo manifestó que para determinar la indemnización del señor LASSO primero había que calcular el producto de la marea en la cual trabajó, aunque sin completarla, cuando tuvo lugar el accidente, para, entonces, tomando como base dicha suma de dinero, poder calcular el salario correspondiente a un año, en vista de que tratándose de un trabajador eventual al que se le paga por viaje o marea, dicha indemnización debe obtenerse considerando también lo dispuesto en el artículo 576 de la Ley Orgánica de Trabajo de Venezuela, el cual prescribe lo siguiente:

> "ARTICULO 576: En los casos de trabajos por unidad de obra, por piezas o destajo o por tarea, el salario para calcular las indemnizaciones que deben pagarse conforme a lo dispuesto en los artículos precedentes, será el promedio de lo que haya percibido el trabajador en los tres (3) meses inmediatamente anteriores al accidente o a la fecha en que quedó imposibilitado para asistir al trabajo por razón de la enfermedad profesional". (Enfasis de la Sala)

Teniendo como base lo anteriormente señalado el Juez Marítimo consideró que al señor LASSO, contrario a lo argumentado por éste, le correspondía como indemnización el equivalente a la remuneración de cuatro mareas, que es el promedio de mareas que se realizan en un año, calculando el salario de cada una de ellas en cuatro mil quinientos dólares (U.S.$4,500.00) total que asciende a la suma de dieciocho mil dólares (U.S.$18,000.00) a la que fue condenada la nave demandada.

En vista de ello, la Sala estima que el fallo impugnado no violó el artículo 573 de la Ley Orgánica de Trabajo de Venezuela, toda vez que tratándose de un trabajador eventual como el señor LASSO, para obtener la indemnización correspondiente debía aplicarse no sólo dicha norma, sino también el artículo 576 de esa misma ley al que ya hicimos referencia.

Por último, la parte recurrente alega que el Tribunal Marítimo aplicó indebidamente la primera parte del artículo 434 del Código de Procedimiento Marítimo que a la letra dice:

> "Artículo 434. Si el demandante hubiere pedido más de lo que se le debía, y el demandado tuviere que hacer gastos para defenderse del

pago de ese exceso, aquel será condenado al pago de las costas que tal defensa involucre, a menos que haya procedido por un justo motivo de error, al juicio del Tribunal. En este evento cabe la compensación de costas..."

En cuanto a este punto la Corte observa que la parte demandante fijó en el libelo de la demanda una cuantía de trescientos ochenta y cinco mil ochenta y nueve dólares (U.S.$385,089.00). Igualmente, advierte que la cuantía original fue reducida luego de la celebración de la audiencia preliminar, a la suma de sesenta mil setecientos cincuenta dólares (U.S.$60,750.00) tal como consta en el escrito consultable a foja 187, cantidad que fue calculada erróneamente con base en lo establecido en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de la República de Venezuela, que contempla que en el caso de que un trabajador sufra de una incapacidad parcial permanente, se le deberá pagar una indemnización equivalente al salario de tres años.

Esta corporación de justicia estima que si bien la reducción de la cuantía antes de la realización de la audiencia ordinaria disminuyó de manera considerable los gastos, incluyendo las costas por el trabajo en derecho que debía desplegar la demandada para su defensa, este hecho no constituye razón suficiente para imponerle al demandante una condena en costas, como hizo la resolución impugnada; situación que, a juicio de la Sala, contraviene el artículo 434 del Código de Procedimiento Marítimo.

En estas circunstancias, debe reformarse la sentencia apelada únicamente en cuanto a las costas, las cuales deben ser compensadas, al tenor de lo dispuesto en la citada disposición legal, en vista del error de apreciación en que incurrió el demandante. En relación con los gastos, la Sala considera justo que cada parte cubra el cincuenta por ciento de los mismos, como señaló la resolución de primera instancia.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REFORMA la Sentencia N 11 dictada por el Tribunal Marítimo de Panamá el 18 de mayo de 1998, complementada mediante resolución fechada 3 de enero de 2000, ambas proferidas dentro del proceso de ejecución de crédito marítimo privilegiado instaurado por el señor MARCELINO LASSO contra M/N FALCON, únicamente en el sentido de que se compensan las costas por el trabajo en derecho y se CONFIRMA en todo lo demás.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) ELIGIO MARIN C.

Secretario Encargado de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO APELADO

APELACION INTERPUESTA POR LOS LICENCIADOS ELIGIO ANDERSON ALLEN Y DARIO E. CARRILLO CONTRA EL AUTO DE 4 DE OCTUBRE DE 1999 DICTADO POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL INCIDENTE DE NULIDAD POR FALTAS DE COMPETENCIA E ILEGITIMIDAD PRESENTADO POR LA PARTE DEMANDADA DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO (RECONVENCIÓN) INCOADO POR ISAAC DAVID MIZRACHI Y PROYECCIONES DE ULTRAMAR, S. A. CONTRA JOSUE LEVY LEVY, RUBEN LEVY LEVY Y DOV BINDER. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, TRES (3) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado DARIO EUGENIO CARRILLO GOMILA, actuando en condición de apoderado judicial de JOSUE LEVY LEVY y RUBEN LEVY LEVY, ha promovido apelación contra el Auto de 4 de octubre de 1999, dictado por el Primer Tribunal Superior de Justicia, en el Incidente de Nulidad por Falta de Competencia e Ilegitimidad promovido por DOV BINDER, dentro del proceso ordinario de mayor cuantía con llamamiento a terceros y reconvención incoado por ISAAC DAVID MIZRACHI y PROYECCIONES DE ULTRAMAR, S. A. contra JOSUE LEVY LEVY, RUBEN LEVY LEVY y DOV BINDER.

La fundamentación fáctica del recurso se plasma en las siguientes pretensiones:

> "(1) Que el estado de quiebra declarado por el Juzgado Tercero del Circuito Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, que afectaba a ISAAC DAVID MIZRACHI, ABRAHAM DAVID MIZRACHI, DESARROLLO VIZCAYA, S. A., SELLY DAYAN DE MIZRACHI y YOLANDA MADURO DE MIZRACHI determinaba la incompetencia del Tribunal en el presente proceso singular.
>
> (2) Que los efectos de la reposición de los quebrados, producida en el curso de la tramitación de la incidencia quedaron suspendidos por disposición del Primer Tribunal Superior de Justicia, del Primer Distrito Judicial de Panamá, el 2 de marzo del 2000, al admitir recurso de amparo de garantías constitucionales promovido por nuestros mandantes.
>
> (3) Que no se ha acreditado otorgamiento de poder a RUBIO, ALVAREZ, SOLIS Y ABREGO, en la causa;
>
> (4) Que el artículo 10 de la Ley 9 del 8 de abril de 1994 prohibía a los servidores públicos permitir el ejercicio ilegal de la profesión de abogado.
>
> (5) Que se ha probado la incidencia promovida.
>
> (6) Que se revoca en todas sus partes el auto de 4 de octubre de 1999, dictado por el Primer Tribunal Superior de Justicia, del Primer Distrito Judicial de Panamá;
>
> (7) Que existe nulidad de todo lo actuado, en virtud de las violaciones al procedimiento de quiebra que se sigue a ISAAC DAVID MIZRACHI, DESARROLLO VIZCAYA, S. A., ABRAHAM DAVIR MIZRACHI, SELLY DAYAN DE MIZRACHI y YOLANDA MADURO DE MIZRACHI.
>
> (8) Que se declara la nulidad de todo lo actuado y se ordena al A Quo reponer la actuación del presente expediente" (f.1,133)

SINTESIS DE LA RESOLUCION DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR

La Sala se referirá al criterio del juzgador en cuanto a los puntos señalados por el recurrente, y que han sido resumidos por el TRIBUNAL SUPERIOR así:

> "1) Incompetencia de este Primer Tribunal Superior de Justicia para conocer la presente causa en virtud de la acumulación que debía existir entre el presente proceso y el de la quiebra. (Artículos 752, No.2 y 1815 del Código Judicial).
>
> 2) Ilegitimidad de personería de ISAAC DAVID MIZRACHI, ABRAHAM DAVID MIZRACHI, SELLY DAYAN DE MIZRACHI, YOLANDA MADURO DE MIZRACHI y DESARROLLO VIZCAYA, S, A., para comparecer por sí solos al presente proceso cuando en realidad es el Curador del proceso de quiebra

> quien ostenta la legitimación activa y pasiva en las causas donde estén involucrados los quebrados. (Artículos 722 No.3 y 1879 del Código Judicial).
>
> 3) Incumplimiento por parte de la firma forense RUBIO, ALVAREZ, MIZRACHI & DIAZ de los artículos 609 del Código Judicial y 16 de la Ley 9 de fecha 18 de abril de 1994.
>
> 4) Notificación indebida de la resolución de fecha 19 de junio de 1998, dictada por esta Superioridad (ver foja 236 y reverso del cuaderno principal), al no serle notificada la misma a la firma forense RUBIO, ALVAREZ, MIZRACHI & DIAZ ni al Curador de la quiebra (artículos 515 y 1013 del Código Judicial." (sic).

La resolución recurrida indica que esa Superioridad conoció, en alzada, el Auto N°752 de fecha 28 de febrero de 1996, dictado por el Juez Tercero del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, en virtud del recurso de apelación propuesto contra dicha resolución por el licenciado DARIO CARRILLO, quien ostentaba la representación de los tres demandados.

En cuanto a la falta de competencia del Tribunal Superior, para el conocimiento en la declaratoria de quiebra y acumulación de los procesos singulares al proceso universal de quiebra, advierte este cuerpo colegiado que tal circunstancia fue alegada anteriormente por el licenciado CARRILLO GOMILA, Inclusive, que esta Corporación de Justicia ya se pronunció, por lo que considera innecesario examinar dicho tema, sobre el cual ya ha dicho:

> "Es de anotarse, por último, en torno a la alzada que se comenta que tampoco tiene cabida el otro argumento que trae la representación judicial en el escrito de sustentación de que no procede el levantamiento de la medida cautelar de que se ha hecho mérito por razón de que los secuestrados han sido declarados previamente en estado de quiebra por el propio juzgado de origen, por cuanto que, mientras no se decida por resolución judicial la acumulación del presente proceso ordinario al proceso de quiebra que hace mención el Licenciado DARIO EUGENIO CARRILLO GOMILA es totalmente independiente".
>
> (Subraya el Tribunal, véase Auto de fecha 18 de marzo de 1997, dictado en la acción de secuestro promovida dentro de la demanda de reconvención presentada por JOSUE LEVY LEVY y RUBEN LEVY LEVY contra ISAAC DAVID MIZRACHI, ABRAHAM DAVID MIZRACHI, SELLY DAYAN DE MIZRACHI, YOLANDA MADURO DE MIZRACHI y DESARROLLO VIZCAYA, S.A., pág.5)."

Advierte el Tribunal Superior que al momento de la presentación del Incidente de Nulidad por Falta de Competencia e Ilegitimidad, (3 de agosto de 1998), el Juez de la Quiebra, Juez Tercero del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, quien también tenía, en primera instancia, el conocimiento del proceso ordinario con reconvención a que accede este incidente, no sólo había declarado improcedente la quiebra comentada, sino que ordenó, entre otras cosas, la publicación de la reposición de los fallidos, mediante Sentencia N°35 de fecha 24 de abril de 1997. Además, para esa fecha, el Primer Tribunal Superior de Justicia CONFIRMO la resolución apelada, en sentencia de 29 de abril de 1998.

La alegada ilegitimidad de personería de los señores ISAAC DAVID MIZRACHI, ABRAHAM DAVID MIZRACHI, SELLY DAYAN DE MIZRACHI, YOLANDA MADURO DE MIZRACHI y DESARROLLO VIZCAYA, S. A., para comparecer por sí solos al juicio, sin la intervención del Curador, según el juzgador, dependería necesariamente de la declaratoria de la quiebra y de la acumulación del presente proceso al de la quiebra. En consecuencia, estimó el tribunal de la causa que los argumentos formulados no eran válidos para decretar la nulidad solicitada a través de la vía

incidental. Aclara el juzgador que únicamente se hubiese podido alegar la ilegitimidad de personería del señor ISAAC DAVID MIZRACHI, en virtud de que los señores ABRAHAM DAVID MIZRACHI, SELLY DAYAN DE MIZRACHI, YOLANDA MADURO DE MIZRACHI y DESARROLLO VIZCAYA, S. A., no fueron parte en el proceso ordinario qwe generó el pronunciamiento del Auto N°754 de 28 de febrero de 1996, visible a fojas 153-156; Auto de 20 de noviembre de 1996, proferido por el Primer Tribunal Superior de Justicia (fs.209-214); así como la Resolución de 7 de febrero de 1996, dictado por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (fs.224-227). Dichas resoluciones guardan relación con la demanda de reconvención.

Aprecia también la Sala que la resolución impugnada hace referencia al Auto N°752 de 28 de febrero de 1996, obrante a foja 145-150, cuya decisión fue impugnada y "que se constituye en el objeto de esta alzada, pero que no fue sustentada por la parte apelante (véase foja 255 del expediente principal)". (foja 1098).

En cuanto a la tercera causal alegada, esto es, la supuesta ilegitimidad de personería de la representación judicial que ostenta la firma forense RUBIO, ALVAREZ, MIZRACHI & DIAZ, por no cumplir con lo preceptuado en el artículo 609 del Código Judicial y el artículo 16 de la Ley 9 de 18 de abril de 1994, hace referencia a las constancias procesales que acreditan que la firma forense tiene plena facultad legal para representar a sus poderdantes, dentro del meritado proceso y, que lo que ocurre es el cambio de nombre de la sociedad civil de abogados, lo que se ha realizado conforme a la Ley. Al respecto, cita el fallo, las certificaciones expedidas por el Registro Público (f.1083); constancia de la Secretaría del Juzgado Tercero de Circuito de lo Civil (f.57); copias autenticas de las escrituras públicas visibles a fojas 29-45, donde consta el poder otorgado por los señores ABRAHAM DAVID, MIZRACHI, SELLY DAYAN DE MIZRACHI, YOLANDA MADURO DE MIZRACHI y DESARROLLO VIZCAYA, S. A., a la firma forense RUBIO, ALVAREZ, MIZRACHI & DIAZ, denominada actualmente RUBIO, ALVAREZ, SOLIS & ABREGO, consultable a foja 141-142.

En cuanto a la última causal, referente a la falta de notificación de la resolución de 19 de junio de 1998, el Tribunal Superior la rechaza por cuanto la misma tiene como fundamento el mismo planteamiento de las causales primera, segunda y tercera, que fueron desestimadas.

POSICION DE LA CORTE

En el escrito que contiene la alzada se involucran varias situaciones que se han dado en diferentes procesos y en el dicho escrito el recurrente destaca, primordialmente la ilegitimación por parte del Tribunal Superior, así como de las partes demandadas en los procesos, para actuar en sus propios nombres. De igual forma, cuestiona la supuesta legitimación de los apoderados judiciales de los demandados, recaída en la firma forense RUBIO, ALVAREZ, SOLIS & ABREGO.

Lo que debe abordar esta Sala en primer lugar es si resulta procedente conforme a nuestra legislación procesal la interposición de un Incidente de Nulidad por Falta de Competencia e Ilegitimidad.

De conformidad con el Código Judicial, son incidentes las controversias o cuestiones accidentales que la ley dispone que se debatan en el curso de los procesos, requiriendo los mismos una decisión especial (art.686 del Código Judicial).

Todo incidente que se origine de un hecho que acontezca durante el proceso, deberá promoverse tan pronto como el hecho lleque a conocimiento de la parte respectiva, estableciendo el término de dos días siguientes al vencimiento.

La situación que se ha dado en el presente caso, resulta de la apelación interpuesta por el hoy recurrente contra el Auto N° 752 de 28 de febrero de 1998, dentro del proceso ordinario con llamamiento de terceros y reconvención, como así lo ha expuesto el licenciado ELIGIO ANDERSON ALLEN, quien representa los

intereses de DOV BINDER. Es importante aclarar que los señores JOSUE Y RUBEN LEVY LEVY, fueron representados por el licenciado DARIO EUGENIO CARRILLO GOMILA, No encuentra la Sala justificación para concluir que el TRIBUNAL SUPERIOR no esté legitimado para aprehender el conocimiento de dicha apelación, siendo éste el superior jerárquico que deberá conocer de las apelaciones contra las resoluciones que dicten los tribunales de circuito civil, máxime que fue el propio recurrente que propicio la alzada, lo que, de otro lado fue sustentada.

Sobre la segunda causal alegada, sobre la ilegitimidad de personería de ISAAC DAVID MIZRACHI, ABRAHAM DAVID MIZRACHI, SELLY DAYAN DE MIZRACHI, YOLANDA MADURO DE MIZRACHI y DESARROLLO VIZCAYA, S. A., para comparecer por sí solos, sin la intervención del Curador de la Quiebra, ya existe un pronunciamiento de la Sala, en que se confirma que dichos señores no son parte del proceso ordinario que nos ocupa y que guardan relación con el Auto N°. 754 de 28 de febrero de 1996, que dió origen a este incidente. (Registro Judicial Febrero 1996, páginas 227 y 228 y Registro Judicial de Septiembre de 1998, páginas 176-179).

Por último, la representación judicial de los demandados, se encuentra plenamente comprobada en las constancias procesales (f.1083).

Las nulidades procesales deben reservarse exclusivamente en los procesos donde el vicio es de tal magnitud, que pudiere poner en estado de indefensión a algunas de las partes o que afecte los derecho de terceros, lo que obviamente no se ha producido en este caso.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la resolución de 4 de octubre de 1999, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE MANUEL FAÚNDES
(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN CIVIL

DILIAM BEATRIZ SYRES CAROL RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO QUE LE SIGUE A FINANCIERA METRO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMA, DOS (2) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado RANDOLPH A. LAWSON R., en su condición de apoderado especial de DILIAM BEATRIZ SYRES CAROL, ha interpuesto recurso de casación contra la resolución de 3 de mayo de 2000 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia dentro del Proceso Sumario de Daños y Perjuicios que se sigue contra FINANCIERA METRO, S. A.

Cumplidas las reglas de reparto, el negocio se fijó en lista para que las partes alegaran sobre la admisibilidad del recurso, término que no fue utilizado ya que ninguna presentó el escrito correspondiente.

La Sala procede al examen del recurso conforme a los presupuestos legales, contenidos en los artículos 1148, 1149, 1165 y concordantes del Código Judicial.

Según se observa, la resolución objeto del recurso es de aquellas contra

las cuales lo concede la ley y el recurso ha sido interpuesto en tiempo. Sin embargo, el escrito de casación no ha sido estructurado y desarrollado de acuerdo a los presupuestos de formalilización que consignan la ley y la jurisprudencia para este medio de impugnación. Veamos:

En el escrito de formalización del recurso, que corre de fojas 297 a 308, se invoca como única causal de fondo la "INFRACCION DE NORMAS SUSTANTIVAS DE DERECHO POR ERROR DE HECHO SOBRE LA EXISTENCIA DE LA PRUEBA, lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida" (fs. 297).

Se establecen seis motivos como fundamentos de esta causal, que constan de fojas 297 a 303. El contenido de estos motivos no guarda relación con la forma en que deben ser estructurados, conforme a la técnica establecida para el extraordinario recurso de casación. Los mismos han sido desarrollados en forma de alegatos, donde se plantean extensas argumentaciones sobre distintos aspectos analizados en el fallo impugnado y el criterio opuesto que al respecto tiene el casacionista, manifestando cómo, a su juicio, debió haber resuelto el tribunal los puntos controvertidos. También cita normas jurídicas, lo cual no es propio de este apartado, y realiza una serie de operaciones aritméticas sobre los cálculos que, a su entender, tendría que haber hecho el sentenciador para arribar a una decisión acertada.

En ningún motivo se expresa un cargo debidamente estructurado y congruente con la causal. Por tanto, la redacción de los llamados "motivos" no se asemeja al contenido que se exige para esta parte del recurso de casación.

La misma situación de incongruencia se aprecia en el siguiente apartado del recurso, pues se cita una serie de normas sustantivas de derecho, sin que en el concepto de su infracción se establezca el obligante vínculo con el yerro probatorio, conforme a la causal invocada. La alegada infracción de las disposiciones legales, según se desprende de lo que explica el recurrente, se produce de manera autónoma e independiente al error probatorio, lo cual, como es sabido, es propio de las otras causales de fondo.

También se observa que previa a la invocación de las normas sustantivas, no se citan los preceptos probatorios violados; en este caso, los que consagran los diferentes medios de prueba, para efectos de demostrar el error de hecho sobre la existencia de la prueba en que incurrió el ad-quem.

Finalmente, se cita como violado el artículo 1265 del Código Judicial, relativo a la omisión del trámite de práctica de pruebas sin culpa del proponente, lo cual, se dice, no fue tomado en consideración por el Tribunal Superior "al no conceder los términos señalados en los Artículos 794 y 1265 ...". Vemos que el artículo 794, se refiere al otorgamiento del término extraordinario para practicar pruebas fuera de la jurisdicción de la República, circunstancia que no parece relacionarse con este caso.

Sin embargo, la Sala debe señalar, en cuanto a la situación antes descrita sobre la vulneración del artículo 1265 ibídem., que solo sería impugnable a través de una causal de forma y no de fondo, en este caso, mediante la que consagra el numeral 1 del artículo 1155, consistente en haberse omitido algún trámite o diligencia considera esencial por la ley, ya que entre estas diligencias el Código Judicial menciona en su artículo 1136, como formalidades indispensables para fallar, entre otras, "...la omisión de la apertura del proceso o incidente a pruebas, en los casos en que esté indicado este requisito o el no haberse practicado estas pruebas, sin culpa del proponente" (Subrayado de la Corte - Cfr. Jorge Fábrega P. "CASACION",1995, fs.177).

Debido a las múltiples deficiencias señaladas, el escrito de casación resulta ininteligible y no puede ser admitido.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el

recurso de casación interpuesto por el apoderado judicial de DILIAM BEATRIZ SYRES CAROL contra la resolución de 3 de mayo de 2000, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia dentro del proceso sumario seguido contra FINANCIERA METRO, S. A.

Las obligantes costas se fijan en la suma de CIEN BALBOAS CON 00/100 (B/.100.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario de la Sala Civil, Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

LA FISCALIA TERCERA SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMA CONSORCIO VAN DAM SOSA Y BARBERO RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ARBITRAL PRESENTADO POR LA NACION Y CONSORCIO VAN DAM SOSA Y BARBERO. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMA, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Dentro del proceso arbitral promovido por CONSORCIO VAN DAM SOSA Y BARBERO contra LA NACION, los apoderados de ambas partes han presentado recursos de casación en la forma contra el laudo arbitral de fecha 20 de mayo de 1999.

Cumplido el reparto correspondiente, el negocio se fijó en lista para que las partes alegaran sobre la admisibilidad de los recursos, presentando ambas sus respectivos escritos como consta de fojas 344 a 352 (alegato presentado por La Nación); de fojas 354 a 358 (oposición al recurso de casación presentado por La Nación); y de fojas 359 a 360 (alegato en favor de la admisibilidad del recurso presentado por el consorcio).

Posteriormente se le corrió traslado del expediente a la Procuraduría General de la Nación, a fin de que emitiera concepto en cuanto a la admisibilidad. Esa entidad, luego de realizar el análisis correspondiente, manifestó su opinión en la Vista que corre de fojas 362 a 366, solicitando que se admitan los recursos de casación en la forma presentados por la parte demandante y la parte demandada dentro del presente proceso arbitral.

Seguidamente esta Corporación pasa al examen de este caso, de conformidad con los presupuestos que establece el artículo 1165 del Código Judicial.

Según se aprecia, la resolución objeto de los recursos es de aquellas contra las que la ley lo permite, pues se trata de un laudo arbitral dictado por árbitros, al cual se aplica el artículo 1151 del Código Judicial. Ambos recursos se interpusieron en tiempo. Veamos entonces si los respectivos escritos de formalización cumplen los requisitos que exige el artículo 1160 del citado Código.

Inicialmente examinaremos el recurso de casación interpuesto por CONSORCIO VAN DAM - SOSA Y BARBERO.

Se invocan dos de las causales de forma que especialmente establece el Código Judicial para la impugnación de los laudos arbitrales, específicamente, las contenidas en los numerales 2 y 3 del artículo 1151.

La primera causal es enunciada en los siguientes términos: "por haber resuelto sobre puntos no sometidos a decisión de los árbitros"(énfasis y

subrayado de la Corte). Como es sabido, esta causal es análoga a la prevista en el numeral 7 (literal a) del artículo 1155 del Código Judicial, es decir, "Por no estar la sentencia en consonancia con las pretensiones de la demanda o con las excepciones del demandado" (a- se resuelve sobre punto que no ha sido objeto de controversia). Se trata del vicio conocido como extra-petita o de incongruencia al resolver cuestiones no planteadas ni discutidas en el pleito (Cfr. CASACION, Jorge Fábrega P. 1995, p.218 y 1985 p. 394).

Esta causal ha sido fundamentada en nueve motivos que corren de fojas 295 a 298. A juicio de la Sala, del propio contenido de estos motivos se desprende la improcedencia de la causal invocada. Veamos lo que, en síntesis, se plantea como cargo de injuridicidad contra el laudo:

Se acusa al laudo arbitral de haber resuelto reconocer a la Nación la facultad de compensar la suma de US$12.278.222.16, que ha de deducirse del pago que ésta debe hacer al Consorcio, "a pesar de que el tema de la referida compensación nunca se planteó como punto del conflicto que debían decidir los árbitros" (primer motivo). Se alega que el Fiscal Primero, en representación de la Nación, no promovió la reconvención ni la excepción de compensación en la contestación de la demanda, ni en ninguna de las defensas o alegatos que presentara ante el Tribunal Arbitral, por lo que ese tema no constituía alguno de los puntos sometidos a conocimiento y decisión de los árbitros (motivo sexto).

Esta Corporación ha podido apreciar que todos los motivos giran en torno al aludido cargo (es decir, que la compensación no es un punto sometido a decisión). En opinión de la Sala, el propio casacionista se encargó de contradecirse al expresar en el motivo segundo lo siguiente:

> "... Esta facultad de compensar la infiere EL LAUDO IMPUGNADO de la existencia de un anticipo que EL CONSORCIO aceptó haber recibido en el hecho 36 de la demanda, que fuera desembolsado por el Banco Central de Venezuela en Bolívares con autorización del Gobierno de la República de Panamá, por la suma equivalente de US$ 15.000.000.00, de acuerdo a lo dispuesto en el Contrato de Financiamiento que las partes han celebrado el mismo 2 de octubre de 1980". (primer motivo) "El saldo de este anticipo que, según EL LAUDO ARBITRAL, no ha sido amortizado en su totalidad por EL CONSORCIO, constituye el monto de la compensación que se reconoce a favor de la Nación,...". (segundo motivo) (subraya la Sala)

De acuerdo a lo que sostiene la censura, en el laudo arbitral se llegó a la conclusión de que había lugar a una COMPENSACION al examinar y entrar a decidir lo concerniente a uno de los hechos que fundamentan la demanda. Ese planteamiento por sí solo desdice el cargo fundamental sobre el cual se erige la causal de haberse resuelto sobre puntos no sometidos a la decisión de los árbitros, aduciendo la razón de que ese tema no fue expresamente mencionado por la parte demandada - la Nación- en la contestación de la demanda, en el incidente presentado antes de la práctica de pruebas (de previo y especial pronunciamiento) o en la advertencia de inconstitucionalidad que también fue instaurada en el curso de este proceso. Si como bien lo señala el casacionista, "Los términos de la controversia los delimitan las partes" (dentro de lo cual también se incluyen los puntos objeto de pronunciamiento por razón de lo que adujo el demandante en las pretensiones formuladas en la demanda), el cargo formulado no es congruente con la causal invocada y hace imposible discernir su significado.

Por otro parte, debido a que el laudo arbitral fue dictado por dos árbitros (uno en representación de la Nación y otro en representación del Consorcio) y un dirimente, la Sala no tiene otra opción que la de presumir que el tema de la compensación a favor de la Nación tuvo que haber sido sometido al tribunal por el árbitro representante de los intereses de ésta, entendiéndose, como lo reconoció el propio casacionista, "que la potestad de los árbitros para conocer y decidir una controversia entre terceros, constituye una excepción a la potestad jurisdiccional normalmente atribuida a los tribunales de justicia ordinaria"

(Cfr. motivo séptimo).

En consecuencia de lo expuesto, no cabe admitir la causal aducida.

Como segunda causal se invoca la prevista en el numeral 3 del artículo 1151 idem., de la siguiente manera: "por haberse infringido la regla fundamental de la congruencia".

En primer lugar, hay que hacer notar que esta no es la forma en que se encuentra expresada la causal en la norma citada que está definida en los siguientes términos: "Cuando se haya infringido las reglas fundamentales de actuación establecidas en la ley o acordadas por las partes en el instrumento de compromiso".

Como consecuencia de haberse invocado indebidamente la causal, se ha creado el efecto de que el contenido de los motivos no sea acorde con lo que deben expresar como fundamento de la causal establecida en el numeral 3 de artículo 1151.

Lo perseguido por esta causal es obligar al Tribunal Arbitral a someterse a las reglas establecidas por las partes en el instrumento de compromiso, a sabiendas de que, si el procedimiento no se hubiese establecido, se aplicará supletoriamente el artículo 1434 del Código Judicial que dice: "Si no se hubiese establecido procedimiento se procederá conforme a los trámites del proceso oral, con arreglo al capítulo II, Título XII, Libro II de este Código". (Cfr.CASACION, Jorge Fábrega P., p.215).

Al revisar el contenido de los motivos expresados por el recurrente vemos que, entre diversas alegaciones, ellos se refieren a los mismos cargos en que se apoya la primera causal. En este sentido se observa que, del primer motivo al cuarto, se acusa al laudo impugnado de haber reconocido una compensación a favor de la Nación, a pesar de que el representante de la misma no alegó tal excepción. Desde el motivo quinto hasta el octavo se le imputa al laudo el cargo de haber reconocido la terminación del contrato de obra, pese a que no existe declaración expresa en tal sentido por parte de la Nación y, como consecuencia de esa decisión, se le acusa de haber reconocido una utilidad insuficiente a favor del consorcio y haber omitido considerar gastos que fueron hechos por el consorcio exclusivamente para la obra. En estos motivos, además de contener las mismas imputaciones que se encuentran en los que fundamentan la primera causal, se incluye una serie de alegatos y opiniones del casacionista que, lejos de plantear los aspectos del procedimiento acordado que fueron supuestamente ignorados por los árbitros, aluden a cuestiones de fondo sobre hechos o pruebas que, se asegura, no fueron tomados en cuenta, conforme al criterio de la censura.

Dentro del siguiente apartado del recurso, además de las normas citadas como infringidas, se incluye en el concepto de su infracción la cita de normas pertenecientes a los Códigos de Procedimiento Civil Colombiano y Español, transcribiéndose, además, el criterio doctrinal de autores de ambos países, siendo que estas consideraciones no debieron incluirse en esta sección del recurso de casación, sino, en todo caso, en el escrito de alegatos que puede presentar el recurrente en el término que establece la ley.

En base a los señalamientos previamente expuestos, a juicio de la Sala, la segunda causal no puede ser admitida por ininteligible.

Procederemos al examen del recurso de casación propuesto por la Fiscalía Tercera Superior en representación de LA NACION.

Como causal única de forma se invoca "Por haberse infringido las reglas fundamentales de actuación establecidas en la ley".

Esta causal ha sido fundamentada en tres motivos (fs.316 a 317), de los cuales no se desprende cargo alguno de injuridicidad debidamente estructurado y

acorde con la causal. Además, en los motivos primero y tercero se citan normas de derecho lo que no es propio de este apartado del recurso. Así mismo, se aprecia que en el primer motivo se hace un extenso relato de los antecedentes del caso, señalando que la demandante promovió demanda declarativa contra la Nación para que mediante proceso arbitral se le reconozca indemnización por el incumplimiento del contrato No.97 de 2 de octubre de 1980 para la construcción de un puente y una autopista; que el contrato tiene su origen en la Resolución 71 y 72 de agosto de 1980 del Consejo de Gabinete, que eximió dicha contratación del requisito de licitación pública; que mediante fallo de 20 de junio de 1991 la Sala Tercera de la Corte se declaró nula por ilegal tal resolución, lo que incide en la validez del contrato en referencia.

A manera de ilustración y acerca del asunto de la supuesta nulidad del mencionado contrato, la Sala debe hacer constar que el problema fue realmente debatido por la Sala Tercera de la Corte cuando conoció de la demanda de nulidad de las resoluciones N°71 y N°72, ambas de fecha 19 de agosto de 1980 expedidas por el Consejo de Gabinete que sirvieron para aprobar el contrato N°97 de 2 de octubre de 1980 celebrado entre la Nación y Constructora Metalúrgica VAN DAM y SOSA Y BARBERO. La Sala Tercera, mediante resolución de 15 de diciembre de 1983, resolvió no admitir la demanda de nulidad interpuesta contra las mencionadas resoluciones, basándose en que, en esa oportunidad, El Estado había contratado en calidad de particular y no como un ente administrativo, razón por la cual el contrato no podía ser recurrible ante la jurisdicción contencioso administrativa, sino ante la jurisdicción civil ordinaria (ver Reg. Judiciales de diciembre 1983, pág. 23, y de mayo de 1994, pág. 76).

En cuanto a la resolución dictada por la Sala Tercera de la Corte el 20 de junio de 1991, ésta se limitó a declarar la nulidad de los numerales 1° y 3° de la Resolución N°71 de 19 de agosto de 1980 dictada por el Consejo de Gabinete, pero, sin pronunciarse acerca de la ilegalidad o nulidad del contrato cuya validez se cuestiona ahora en casación. (ver R.J. de junio 1991, pág. 42).

Así mismo, es conveniente apuntar que el problema también fue objeto de pronunciamiento por parte del Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, corporación de justicia que, a propósito de la integración del Tribunal de Arbitraje de este caso, procedió a revocar una decisión del Juez Primero del Circuito de Panamá, Ramo Civil, a partir, entre otras, de la consideración de que "el contrato en mención cumple con los requisitos formales exigidos a los contratos con La Nación" (auto de 1 de febrero de 1996).

Por último, la inconstitucionalidad de ese auto del Tribunal Superior, de fecha 1 de febrero de 1996, fue demandada ante el Pleno de la Corte y esa instancia suprema de la justicia panameña, mediante sentencia dictada el 20 de diciembre de 1996, decidió que dicha resolución no había incurrido en ningún vicio contra la Constitución. (ver Reg. Jud. diciembre de 1996, pág. 117 y ss.).

El segundo motivo se limita a señalar que el Fiscal Primero de Circuito informó al Tribunal de Arbitraje sobre la nulidad del contrato, por motivo del citado fallo de la Sala Tercera de la Corte Suprema de 20 de junio de 1991.

Finalmente, el tercer motivo expresa que el Tribunal de Arbitraje tiene la obligación de observar el procedimiento dispuesto para la justicia ordinaria, debido a que debe fallar conforme a derecho como lo requieren los artículos 1418 y 1432 del Código Judicial.

Precisamente, los artículos antes citados son los que posteriormente el recurrente aduce como infringidos. En la respectiva explicación el recurrente simplemente repite el concepto general que consagran estas disposiciones: que "los árbitros deben fallar conforme a derecho" y que "se asimilarán a los jueces en cuanto a la manera de proceder", pero sin definir o precisar cuáles son los procedimientos, actuaciones o etapas procesales de carácter fundamental dispuestos para la justicia ordinaria que fueron vulnerados por el laudo

arbitral.

A juicio de la Sala, ya que en este recurso no se observa la debida congruencia entre la causal y los otros apartados (motivos y normas de derecho), incumple el recurrente con su obligación de especificar en los motivos los cargos que se le endilgan al laudo y que sirven de sustento a la causal de forma alegada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación interpuesto por CONSORCIO VAN DAM - SOSA Y BARBERO; y, NO ADMITE el recurso de casación interpuesto por LA NACION contra el Laudo Arbitral de 20 de mayo de 1999.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) ROBERTO GONZALEZ R.
(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario de la Sala Civil, Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

LUIS B. PIMENTEL MARIN RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO DE OPOSICION QUE LE SIGUE A LETICIA E. PIMENTEL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMA, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense RUIZ & ASOCIADOS (Abogados), actuando como apoderados judiciales de LUIS B. PIMENTEL, ha interpuesto recurso de casación contra la Sentencia de 19 de mayo de 2000 dictada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial dentro del proceso ordinario de oposición seguido contra LETICIA DEL C. PIMENTEL.

Cumplidas las reglas de reparto, el negocio se fijó en lista para que las partes alegaran sobre la admisibilidad del recurso, término que, una vez vencido, no fue utilizado por ninguna de ellas.

La Sala procede al examen del recurso de conformidad con los presupuestos establecidos por los artículos 1148, 1149, 1160, 1165, entre otros del Código Judicial.

En este caso, la resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley, el recurso ha sido interpuesto en tiempo, sin embargo, el escrito de formalización presenta importantes omisiones que conllevan su inadmisión. Veamos:

Como causal única de fondo se invoca la "INFRACCION DE NORMAS SUSTANTIVAS DE DERECHO, POR EL CONCEPTO DE ERROR DE DERECHO EN CUANTO A LA APRECIACION DE LA PRUEBA".

Esta causal ha sido fundamentada en tres motivos, visibles a fojas 156. En los dos primeros se repite el mismo cargo, consistente en la indebida valoración de pruebas testimoniales que figuran a fojas 125, 126, 127, 128 y 129 del expediente. Sin embargo, este cargo no se expresa en forma completa, pues se limita a señalar que a dichas pruebas no se les atribuyó el valor ni la eficacia que les correspondía de acuerdo a la ley. Sin embargo, no se alude cuál es ese valor consignado en la ley.

El tercer motivo no contiene ningún cargo, bien sea probatorio o bien

acerca de la infracción de algún derecho sustantivo como consecuencia del error probatorio que se atribuye a la sentencia. Sólo se alega que si se hubiesen valorado las pruebas debidamente, el Tribunal Superior hubiese revocado el fallo de primera instancia.

Aunado a lo expuesto, en el siguiente apartado concerniente a la cita y explicación de las normas de derecho infringidas, se observa que el recurrente cita una norma propia de otra causal de fondo (la de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba), pues invoca el artículo 769 del Código Judicial, donde se hace mención de los medios de prueba. Adicionalmente, omite citar alguna norma de carácter sustantivo violada por razón del yerro probatorio que se atribuye al sentenciador de segunda instancia.

En tal sentido, la Corte ha reiterado que cuando se invoca una causal probatoria, además de las normas legales sobre valoración probatoria, el casacionista debe citar las normas sustantivas que sirvan de fundamento al derecho que se reclama, puesto que de no hacerse así, "el recurso queda trunco, porque se impide a la Corte el examen de la infracción jurídica más importante, para la decisión" (Ver: CASACION, Jorge Fábrega P., 1995, fs.120, Sentencia de 4 de agosto de 1982).

Consecuentemente, aún cuando en los motivos de este recurso se señala el cargo de injuridicidad su formulación resulta incompleta. Era necesario explicar en qué consistieron los errores del sentenciador al apreciar la prueba, algo de lo que se abstuvo el recurrente. Estos errores constituyen los medios por los cuales puede arribarse al motivo principal que consiste justamente en la infracción de la norma de derecho sustantivo.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación interpuesto por el apoderado judicial de LUIS B. PIMENTEL MARIN contra la Sentencia de 19 de mayo de 2000 dictada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial dentro del proceso de oposición seguido contra LETICIA E. PIMENTEL.

Las obligantes costas se fijan en la suma de SETENTA Y CINCO BALBOAS CON 00/100 (B/75.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario de la Sala Civil, Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JULIO CESAR MORALES LINCK RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE SUCESIÓN TESTADA DE JULIO CESAR MORALES SAENZ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado DIENER VINDA, actuando como apoderado especial de JULIO CESAR MORALES LINCK, ha solicitado Aclaración de la Sentencia de 25 de julio de 2000, dictada por esta Sala de lo Civil de la Corte en virtud del recurso de casación interpuesto por JULIO CESAR MORALES LINCK dentro del proceso de sucesión testada de JULIO CESAR MORALES SAENZ.

La solicitud de aclaración consiste en lo siguiente:

"1. En el segundo párrafo de la página de la sentencia, se expresa lo siguiente: "Para situar adecuadamente en qué consiste la verdadera controversia que debe dilucidar la Sala, es ante todo necesario identificar cuál es el contenido de la petición formulada por el recurrente que fue negada y cuya descripción no aparece claramente expresada en ninguno de los apartados del recurso de casación propuesto por la censura".

La sentencia da a entender que el casacionista debe describir la petición del recurso de casación, situación que no se explica, ya que ni la técnica de casación o el Código Judicial exigen este requisito, por lo que la Sala debe extraer el vicio de la sentencia, de los motivos y del concepto de la infracción de las normas invocadas como infringidas, de lo contrario, el recurso hubiese sido considerado ininteligible y por lo tanto no se habría admitido. Además, la petición en un recurso de casación es que se CASE LA SENTENCIA RECURRIDA, de lo contrario, por vía de la jurisprudencia o por reforma del Código Judicial en este sentido, debe exigírsele al casacionista que se aclare su petición en casación y por ende, en este caso, que se pida expresamente que se acceda a la celebración del inventario adicional solicitado por el legatario y que se le exija al juez de primera instancia que agote todos los medios que la Ley pone a su disposición para que determine la existencia de otros bienes que puedan ingresar e inventariase en esta sucesión, peticiones que están claramente expuestas en el recurso y en el alegato de fondo, razón por la que la sentencia de la referencia crea dudas al respecto.

En el segundo párrafo de la página cinco (5) de la sentencia cuya aclaración se solicita, se alude a una nota que reposa a fojas 162 del expediente, consistente en una nota del Banco General, donde esta institución bancaria informa que los honorarios profesionales por la tramitación del proceso ejecutivo hipotecario de este banco en contra de PASHITORE CORPORATION, HIKARU UNO DE GRACIA Y ANTONIO UNO, fue pagado a la firma de abogados denominada BUFETE MORALES SAENZ y no a la persona del Dr. JULIO CESAR MORALES SAENZ, y la aclaración que se pide de la sentencia consiste en que la Sala deje claramente establecido si una nota o documento privado proveniente de un banco es una prueba más idónea que las copias autenticadas del Juzgado Séptimo de Circuito Ramo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá y que demuestran que el causante JULIO CESAR MORALES SAENZ quien tramitó el proceso hipotecario al Banco General, y lo que se pretendía con el recurso de casación era que se agotaran todas las vías para que dicho Banco indique quién cobró dichos honorarios y por qué se pagaron a una persona diferente del causante, (Ver fojas 172 a 181 del expediente).

El último punto que se desea que se aclare en la resolución emitida por esta Sala consiste en que se explique por qué siendo el legatario casacionista, la parte más débil y desfavorecida en esta sucesión, se le ha castigado con una condena en costas exorbitantes.

Respetuosamente, opinamos que lo procedente es que se elimine la condena de costas debido a que el casacionista actuó con evidente buena fe. (fs.334,335)

Como se puede apreciar en lo expresado dentro del escrito previamente transcrito, solamente el último párrafo guarda relación con lo dispuesto por el artículo 986 del Código Judicial, en cuanto a los aspectos de una sentencia que pueden ser aclarados, pues se refiere al tema de las costas.

Sobre este particular se solicita a esta Sala que aclare porqué razón se ha condenado en costas al casacionista, si es la parte más débil y desfavorecida

en la sucesión.

La Sala debe recordar que el artículo 1058 del Código Judicial establece que habrá lugar a la imperativa imposición de costas cuando se interponga un recurso por una sola de las partes y la resolución respectiva sea mantenida o confirmada. Como se puede apreciar, en el presente caso se resolvió NO CASAR la sentencia del Tribunal Superior, por lo que la aplicación de esta normas es pertinente. Adicionalmente, entre los preceptos que regulan el recurso de casación, el artículo 1181 del Código Judicial, se refiere específicamente al tema de las costas, en los siguientes términos:

> "ARTICULO 1181. Si la Corte no encontrare justificada ninguna causal, declarará que no es el caso invalidar la resolución materia del recurso y devolverá el expediente al Tribunal de su procedencia.
>
> En este caso, el recurrente será condenado al pago de costas. No habrá lugar a costas cuando el recurrente lo sea el agente del Ministerio Público.
>
> La sentencia de la Corte que niegue la casación una vez surtida la tramitación, no es susceptible de recurso alguno, ni de reforma en cuanto a costas." (Enfasis de la Corte)

Debido a que el texto de la ley es claro en cuanto al tema de la imposición de costas al litigante-recurrente, contra quien se pronuncie la resolución, a juicio de la Sala en este caso no existe ningún aspecto que aclarar o reformar respecto a la sentencia dictada por esta Corporación.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrado justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ACCEDE a la solicitud de Aclaración de Sentencia formulada por el licenciado DIENER VINDA.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE ANDRES TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario de la Sala Civil, Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ISAÍAS MARISCAL MEDINA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A ELICENIA MARISCAL DE KIRSCH, EFIGENIA MARISCAL DE CEDEÑO, SILVIA MARISCAL DE RIVERA, ELENA MARISCAL DE PÉREZ, PEDRO MARISCAL MEDINA, ANGELA MARISCAL MEDINA, ISIDRO MARISCAL MEDINA, JUAN MARISCAL DE PÉREZ Y FELIPE MARISCAL M. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado FRANCISCO ZALDÍVAR S., apoderado judicial de ISAÍAS MARISCAL MEDINA, interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo contra la Sentencia de 29 de octubre de 1999 proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia dentro del proceso ordinario propuesto por ISAÍAS MARISCAL MEDINA contra ELICENIA MARISCAL DE KRISCH, EFIGENCIA MARISCAL DE CEDEÑO, SILVIA MARISCAL DE RIVERA, ELENA MARISCAL DE PÉREZ, PEDRO MARISCAL MEDINA, ANGELA MARISCAL MEDINA, ISIDRO MARISCAL MEDINA, JUANA MARISCAL DE PÉREZ Y FELIPE MARISCAL MEDINA.

En vista de que mediante resolución de 2 de mayo del 2000, esta Sala declaró admisible el recurso de casación en la forma y en el fondo propuesto por ISAÍAS MARISCAL MEDINA, mediante apoderado judicial, así como concluido el término de alegatos que fue aprovechado sólo por el demandante, se procede a

decidir los méritos del mismo, previas las siguientes consideraciones.

ANTECEDENTES

El proceso ordinario se inició ante el Juzgado Primero de Circuito Civil del Tercer Circuito Judicial de Panamá por el señor ISAÍAS MARISCAL MEDINA para que en sentencia en firme se disponga las siguientes declaraciones:

> "a) Que ISAÍAS MARISCAL MEDINA, edificó con dinero y esfuerzo económico propio, de buena fe, sobre la Finca N°3446, inscrita al Tomo 216, Folio 242 de la Sección de Propiedad, Provincia de Panamá, ubicada en el Corregimiento de Caimito, Distrito de Capira, una casa con más de 160 metros cuadrados, de cuatro recámaras, sala, comedor, portal, cocina y dos baños con piso de cemento y techo de zinc.
>
> b) Que los demandados ELICENIA MARISCAL DE KIRSCH, EFIGENIA MARISCAL DE CEDEÑO, SILVIA MARISCAL DE RIVERA, ELENA MARISCAL DE PÉREZ, PEDRO MARISCAL MEDINA, ANGELA MARISCAL MEDINA, ISIDRO MARISCAL MEDINA, JUANA ELIDA MARISCAL DE PÉREZ Y FELIPE MARISCAL MEDINA como dueños del terreno donde ISAÍAS MARISCAL MEDINA edificó, tienen derecho a hacer suya la obra, previa indemnización de su valor que será fijado conforme a lo que dispongan peritos en este proceso.
>
> c) En el caso de que los demandados no se acojan a la opción de pago de indemnización de la obra, están obligados a recibir de ISAÍAS MARISCAL MEDINA el valor del terreno que forma la Finca N°3446, inscrita al Tomo 216, Folio 248, de la Sección de Propiedad, Provincia de Panamá.
>
> d) Que ISAÍAS MARISCAL MEDINA, en caso de no prosperar las pretensiones alternativas de compra de la obra o venta de los demandados, tienen derecho a inscribir en el Registro Público su dominio sobre la edificación.
>
> e) Que en caso de oposición los demandados deberán ser condenados a pagar las costas del juicio, que se calcularán conforme al valor de lo edificado, según peritos y los gastos del proceso".

La Juez Primera de Circuito Civil del Tercer Circuito Judicial de Panamá, dictó la Sentencia N°13 de 28 de abril de 1999 (véase fojas 294-304), en la cual no accedió a realizar las declaraciones vertidas en los puntos b), d) y e); y, declaró lo siguiente:

> "a) Que ISAÍAS MARISCAL MEDINA, edificó con dinero y esfuerzo económico propio, de buena fe, sobre la Finca N°3446, inscrita al Tomo 216, Folio 248 de la sección de propiedad, Provincia de Panamá, ubicada en el Corregimiento de Caimito Distrito de Capira, una casa de más de 160 metros cuadrados, de cuatro recámaras, sala, comedor, portal, cocina y dos baños con piso de cemento y techo de zinc.
>
> c) Debido a que los demandados no se acogieron a la opción de pago de indemnización de la obra, están obligados a recibir de ISAÍAS MARISCAL MEDINA el valor del terreno que forma la Finca N°3446, inscrita al tomo 216, folio 248, de la sección de propiedad, Provincia de Panamá, el cual es de B/.7,046.07, según el dictamen pericial. (Foja 261)."

Esa decisión fue apelada por los demandados, por lo que el Primer Tribunal Superior de Justicia mediante Resolución de 29 de octubre de 1999, impugnada en casación, modificó la sentencia de primera instancia (véase fojas 322-332), en el sentido de fijar el valor a la edificación por la suma de B/.11,909.97 y negando las declaraciones formuladas por la parte demandante y descrita en los literales b, c, d y e del libelo de la demanda corregida.

CONTENIDO DEL RECURSO

El recurso de casación es en la forma y en el fondo, en el que fueron admitidas dos causales en la forma, consistente la primera: "por no estar la sentencia en consonancia con las pretensiones de la demanda, porque se dejó de resolver un punto", y, la segunda: "por contener la decisión del Tribunal Superior en su parte resolutiva declaraciones contradictorias que subsisten después de haberse pedido en tiempo aclaración de ella".

Y respecto a la casación en el fondo, fue admitida la única causal consistente en "infracción de normas sustantivas de derecho, por concepto de interpretación errónea de la norma de derecho". Seguidamente pasa la Sala al examen de las distintas causales invocadas con la debida separación.

PRIMERA CAUSAL DE FORMA:

La primera causal de forma consiste en: "por no estar la sentencia en consonancia con las pretensiones de la demanda, porque se dejó de resolver un punto".

Dicha causal fue sustentada en un motivo único, que a continuación se transcribe:

"MOTIVO ÚNICO.

El Tribunal sentenciador al reformar la sentencia del A-quo, en la segunda pretensión del libelo de la demanda corregida declaró, menos de lo pedido, con lo que se configura el supuesto de incongruencia conocido como minus petita".

En adición, el recurrente cita como disposiciones legales infringidas y explica cómo lo han sido, los artículos 470, 978 del Código Judicial; y el artículo 374, 1018 y 1019 del Código Civil.

CRITERIO DE LA SALA EN LA PRIMERA CAUSAL DE FORMA

De acuerdo al casacionista, el cargo de injuridicidad que le atribuye a la sentencia consiste en que el Tribunal Ad-quem al reformar la sentencia de primera instancia, en la segunda declaración que se pretende con la demanda ordinaria, declaró menos de lo pedido.

Señaló el recurrente que el Tribunal Superior al reformar la sentencia de primera instancia dio valor económico a la obra edificada en terreno de los demandados, infringiendo directamente por omisión el artículo 470 del Código Judicial, en cuanto que en la segunda pretensión, se pedía como parte de un todo, la valorización de la obra por peritos, de ésta manera se deja de resolver sobre el derecho del demandado de hacer suya la obra, previa indemnización del valor de lo edificado.

Conviene analizar si en el proceso se planteó el valor económico de la obra edificada en terreno de los demandados, como alega el recurrente, en cuyo caso la condena decretada en la sentencia no podría ser menor de esa suma, si se le considerase que le asiste razón al demandante. Asimismo, hay que analizar el derecho de los demandados de hacer suya la obra, previa previa indemnización del valor de lo edificado.

En primer término, observa la Sala que el Tribunal A-quem le dio valor económico a la obra edificada en terreno de los demandados en la suma de ONCE MIL NOVECIENTOS NUEVE BALBOAS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (B/.11,909.97), ya depreciado, conforme al peritaje visible a fojas 261-263.

Respecto a la inconformidad del recurrente con la sentencia de segunda instancia, en el hecho de que el Tribunal a-quem omitió el pronunciamiento sobre

el derecho de los dueños del terreno a hacer suya la obra pagando la indemnización que valdría lo que se dijo que era en la sentencia del A-quem, es decir, los ONCE MIL NOVECIENTOS NUEVE BALBOAS CON NOVENTA Y SIETE CENTÉSIMOS (B/.11, 909.97), esta Corporación Judicial advierte que el segundo punto que pretende el actor que se declare es una pretensión alternativa. La sentencia, por lo tanto, no viola el principio de la congruencia, al cual se refieren los artículos 470 y 978 del Código Judicial, invocado por el recurrente.

Por consiguiente, tanto en el petitum de la demanda, en la primera y segunda declaración que se pide, como en el cuerpo de la misma, queda claro que el demandante no fijó una cuantía fija y determinada, por cuanto sus pretensiones, en razón de su naturaleza, no eran susceptibles de ser fijadas de manera precisa, en virtud de que a las alturas del proceso, se desconocían; más bien son pretensiones alternativas y la acumulación de pretensiones realizadas, como pretensiones alternativas, tienen cobertura jurídica con arreglo al artículo 665 del Código Judicial.

Por las razones que anteceden, esta Sala debe desestimar la primer a causal invocada.

SEGUNDA CAUSAL DE FORMA:

La segunda causal de forma consiste en: "contener la decisión del Tribunal Superior en su parte resolutiva declaraciones contradictorias que subsisten después de haberse pedido en tiempo aclaración de ella".

Dicha causal fue sustentada en un motivo único, que a continuación se transcribe:

"MOTIVO ÚNICO.

> El Tribunal sentenciador negó la segunda pretensión contenida en el libelo de demanda corregida, considerando que el derecho correspondía al dueño del terreno y de manera contradictoria, existiendo en esta pretensión un elemento integral de valoración de lo construido, explicando en la parte motiva que no procedía la declaración, en la resolutiva le atribuye el valor de once mil novecientos nueve balboas con noventa y siete centavos (B/.11, 909.97) a lo edificado, que correspondía a la primera pretensión, habiendo el Tribunal Superior denegado el derecho de aclaración y corrección que implicaba un supuesto de reclamo de costas en referencia a la segunda pretensión."

En adición, el recurrente cita como disposición legal infringida y explica cómo lo ha sido, el artículo 470 del Código Judicial.

CRITERIO DE LA SALA EN LA SEGUNDA CAUSAL DE FORMA

De acuerdo al casacionista, el cargo de injuridicidad que le atribuye a la sentencia consiste en que el tribunal de segunda instancia violó por omisión el artículo 470 del Código Judicial, ya que esta disposición consagra el principio de la congruencia que ordena que las sentencias sean consistentes con las pretensiones y las excepciones.

Señaló el recurrente que el Tribunal Superior al reformar la sentencia de primera instancia infringió por omisión el artículo 470 del Código Judicial, referente al principio de la congruencia que ordena que las sentencias sean conforme a lo pedido y fallado: al fallarse se dice en la parte considerativa que no procede la pretensión, pero sin embargo despacha en la resolutiva la fijación del valor del terreno.

La Sala considera que, tal como se analizó en la causal anterior, la sentencia no viola el principio de la congruencia, al cual se refiere el artículo

470 del Código Judicial, toda vez que las declaraciones que el fallo es consistente con las pretensiones que el actor solicita en el libelo de demanda corregida. Al no encontrarse el presente proceso ante disconformidad de la decisión con las pretensiones ensayadas, en evidente que no se ha producido un vicio de incongruencia, como sin razón alguna señala el recurrente. De las pretensiones ensayadas, el fallo decidió con arreglo a una de ellas, es decir, la pretensión alternativa individualizada bajo el literal b) de la demanda corregida.

CASACIÓN EN EL FONDO

La única causal de fondo consiste en: "infracción de norma sustantiva de derecho por interpretación errónea de la norma de derecho".

Dicha causal fue sustentada en dos motivos, que a continuación se transcriben:

"MOTIVOS

Primero: La sentencia del Tribunal Superior que reforma la del A-quo y niega las pretensiones dos y tres del libelo de demanda corregida, que se presentaron de manera alternativa y subsidiaria interpreta el derecho sustancial de manera erróneo en cuanto que expresa, que el derecho de pedir corresponde al demandado y se lo niega al actor que acude a la jurisdicción en busca de decisión sobre un conflicto que requiere pronunciamiento de fondo, en el que se decidan los derechos de demandante y demandados.

Segundo: El Tribunal Superior, falló negando las pretensiones dos y tres del libelo de demanda corregida al estimar erróneamente que a la actora no le correspondía exigir al dueño del terreno que ejerza el derecho alternativo que le concede el artículo 376 del Código Civil, y con ello interpretó de manera errónea la ley sustancial aplicable al caso."

En adición, el recurrente cita como disposiciones legales infringidas y explica cómo lo han sido, los artículos 373, 376, 374, 1018,1019 y 2 del Código Civil.

CRITERIO DE LA SALA EN LA CAUSAL DE FONDO

De acuerdo al casacionista, el cargo de injuridicidad que le atribuye a la sentencia consiste en que el tribunal de segunda instancia infringió por interpretación errónea el artículo 373 del Código Civil, cuando no se le da el alcance que le corresponde, ya que hace derivar inexistencia de derechos que realmente contiene a favor del demandante.

Continúa expresando el recurrente que la norma citada le concede al que edificó de buena fe el derecho a ser indemnizado, es decir, que el Tribunal sentenciador ha desconocido por interpretación errónea el derecho a resarcimiento, que según el casacionista, implica alternativas, las cuales fueron ofrecidas en los puntos a) y b) de las declaraciones del libelo de demanda corregida que pretende el actor que haga el tribunal en firme, y que las desconoció el Tribunal A.-quem.

Por otro lado, el casacionista invocó como infringido el artículo 376 del Código Civil, párrafo segundo, en el sentido de que la condición de mala fe del dueño del terreno, es el que crea el derecho del actor a ejercitar el derecho alternativo de compra del terreno o venta de las mejoras sobre el demandado.

La Sala advierte que se ha demostrado en el proceso que el señor ISAÍAS MARISCAL MEDINA construyó a su costo una casa, que se realizó dicha obra con la aceptación de los dueños (demandados), al ejecutarse la misma a su vista, ciencia

y paciencia, sin oponerse, conforme lo establece el artículo 376, párrafo 2 del Código Civil. Es evidente, por lo expresado, que los demandados actuaron de mala fé al tolerar, con ciencia y paciencia, la obra realizada en su fundo, y es esa actuación de mala fé por parte de los propietarios lo que faculta a quien edificó las mejoras a reclamar la indemnización. A su turno, los propietarios podrán ejercitar el derecho de opción que les confiere el artículo 373 del Código civil, pero tal opción tendrán necesariamente que hacerlo dentro del proceso, lo que no hicieron.

Para una adecuada interpretación de una de las normas impugnadas, el artículo 373, es importante su reproducción por la Sala. Dice así la citada disposición legal:

> "El dueño del terreno en que se edificare, sembrare o plantare de buena fe, tendrá derecho a hacer suya la obra, siembra o plantación, previa indemnización, o a obligar al que fabricó o plantó a pagar el precio del terreno, y al que sembró, la renta correspondiente."

Siendo así, el Primer Tribunal Superior, señaló en su momento, que las facultades que confiere esta norma constituyen derechos que se le confiere exclusivamente al dueño del terreno, es decir, es al dueño del terreno en que se edificare, sembrare o plantare, a quien le confiere los derechos o facultades allí consagradas; y no es la persona que edifica o siembra en terreno ajeno, quien con fundamento en el artículo citado puede obligar al dueño del terreno a indemnizarle o exigirle que acepte el precio del terreno.

El derecho de accesión sobre las mejoras realizadas por un tercero constituye un derecho potestativo que el ordenamiento civil le confiere al propietario, previa obligación de indemnizar al que edifica o que éste adquiera la finca sobre la que se encuentra ubicada la mejora, sin que el hecho de no realizar la opción tenga la consecuencia, para el tribunal, que éste pueda ejercer la opción que le corresponde al propietario. En todo caso, es evidente que el que edificó bien puede solicitar al tribunal la indemnización, quedando a opción del propietario, dentro del proceso, ejercitar el derecho potestativo que le confiere el artículo 373 del Código Civil, cosa que no hizo. Admitir otra interpretación sería patrocinar un enriquecimiento injustificado.

Esta Sala no comparte el criterio de interpretación restrictiva del artículo 373 del Código Civil que le ha dado el Tribunal Superior, tal como lo ha dicho la sentencia recurrida, en la que la opción de indemnización o adquisición del terreno, constituye una alternativa del propietario de la finca y no una opción que puede ejercitar el autor de la obra, como erróneamente parece concluir el demandante.

No obstante, como ha quedado dicho, una interpretación restrictiva del artículo 373 debe ceder ante aquella que el derecho del que edifica a demandar como indemnización en el pago de las obras edificadas, sin perjuicio de que, en el proceso así instaurado, el propietario o los propietarios puedan ejercer la opción que le confiere el artículo 373 del Código Judicial, en cuyo caso, y dependiendo de la opción ejercida, se harán las anotaciones correspondientes en el Registro Público, es decir, la transferencia de la propiedad o, en su caso, la declaratoria de mejoras por los propietarios que cubrieron la indemnización por las edificaciones realizadas.

Por las razones, que anteceden es menester casar la sentencia y dictar una decisión en su reemplazo actuando como Tribunal Superior.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la Sentencia de 29 de octubre de 1999, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, y actuando como Tribunal de instancia, y REVOCA la Sentencia No.13, de 28 de abril de 1999, dictada por el JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA, De la Chorrera, y

EN SU LUGAR dicta la sentencia de reemplazo, por la cual declara:

PRIMERO: Que ISAÍAS MARISCAL MEDINA, edificó con dinero y esfuerzo económico propio, de buena fe, sobre la Finca N°3446, inscrita al Tomo 216, Folio 242 de la Sección de Propiedad, Provincia de Panamá, ubicada en el corregimiento de Caimito, Distrito de Capira, una casa con más de 160 metros cuadrados, de cuatro recámaras, sala, comedor, portal, cocina y dos baños con piso de cemento y techo de zinc.

SEGUNDO: CONDENAR a los demandados ELICENIA MARISCAL DE KIRSCH, EFIGENIA MARISCAL DE CEDEÑO, SILVIA MARISCAL DE RIVERA, ELENA MARISCAL DE PÉREZ, PEDRO MARISCAL MEDINA, ANGELA MARISCAL MEDINA, ISIDRO MARISCAL MEDINA, JUANA MARISCAL DE PÉREZ y FELIPE MARISCAL MEDINA a pagar al demandante, ISAÍAS MEDINA MARISCAL la suma de ONCE MIL NOVECIENTOS NUEVE BALBOAS CON NOVENTA Y SIETE CENTÉSIMOS (B/.11,909.97), conforme el dictamen pericial, con fundamento en la pretensión distinguida con el literal b) de la demanda corregida.

Las costas se fijan en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.250.00).

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INMOBILIARIA SITTON, S. A., RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A INVERSIONES PUEBLA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense GRIMALDO Y TEJEIRA, en nombre y representación de INMOBILIARIA SITTON, S. A., interpone recurso extraordinario de casación en el fondo contra la resolución de 23 de febrero de 2000, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia dentro del Proceso Ordinario Declarativo de Nulidad de INMOBILIARIA SITTON, S. A., -vs- INVERSIONES PUEBLA, S. A., y mediante la cual se reformó la Sentencia No. 7 de 4 de febrero de 1998 dictada en primera instancia por el Juzgado Segundo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, en el sentido de imponer costas a la parte actora, confirmando en todo lo demás la sentencia apelada.

Surtido el reparto de rigor, se ordenó la fijación en lista del negocio por el término de seis (6) días para que dentro de los tres (3) primeros la parte opositora al recurso presente su respectivo escrito en torno a la admisibilidad; y dentro de los tres (3) días siguientes el recurrente replique. Dicho término fue aprovechado sólo por la parte recurrente, visible a foja 172 del expediente.

Cumplidos los trámites correspondiente a esta clase de recurso, pasa esta Sala a pronunciarse con respecto a la admisibilidad del mismo, tomando en consideración los requisitos contemplados en los artículos 1160 y 1165 del Código de Procedimiento Civil.

Consta en autos que el recurso se anunció y formalizó en tiempo. El recurso procede por razón de su naturaleza, así como también por la resolución que es objeto del recurso.

Se presenta una sola causal de fondo: "INFRACCIÓN DE NORMAS SUSTANTIVAS DE DERECHO, POR CONCEPTO DE VIOLACIÓN DIRECTA DE LA NORMA DE DERECHO, QUE HA

INFLUIDO SUSTANCIALMENTE EN LO DISPOSITIVO DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA", se encuentra invocada correctamente, al igual que sus motivos y citaciones de normas de derecho.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el recurso de casación en el fondo interpuesto por INMOBILIARIA SITTON, S. A., mediante apoderada judicial.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SUPLIDORA PANAMERICANA, S. A., MARQUELA DE BALLESTEROS, CONRADO OTTO R. JIMENEZ Y FELICIANO BALLESTEROS RECURREN EN CASACION EN LA EXCEPCION DE PAGO PRESENTADA POR LA PARTE DEMANDADA DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO QUE EMMA, S. A. LE SIGUE A SUPLIDORA PANAMERICANA, S. A., MARQUELA DE BALLESTEROS, CONRADO OTTO R. JIMENEZ Y FELICIANO BALLESTEROS. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, NUEVE (9) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante Resolución de fecha 15 de julio de 1999 y de fecha 3 de agosto de 1999, la Sala admitió la primera y segunda causal, respectivamente, del recurso de casación en el fondo interpuesto por el apoderado judicial de SUPLIDORA PANAMERICANA, S. A. Y OTROS en la excepción de pago que presentó dentro del proceso ejecutivo hipotecario que en su contra interpuso la sociedad EMMA, S. A.

Finalizada la fase de alegatos de fondo, la cual fue atendida por las partes, se procede a dictar sentencia de fondo, previa las siguientes consideraciones:

ANTECEDENTES

De acuerdo a las constancias procesales, el día 5 de abril de 1995 la sociedad EMMA, S. A., presentó demanda Ejecutiva Hipotecaria en contra de SUPLIDORA PANAMERICANA, S. A.; MARQUELA DE BALLESTEROS; CONRADO OTTO R. JIMENEZ Y FELICIANO BALLESTEROS, a fin de que previo los trámites correspondientes a este tipo de procesos, los demandados fuesen obligados a pagarles la suma de B/.43,745.78, en concepto de capital e intereses, más costas y gastos de la acción.

Cumpliendo con los trámites se decretó embargo a favor de EMMA, S. A. y en contra de los demandados, sobre la Finca N 17.209, inscrita al Rollo 974, Documento 1, Sección de la Propiedad Horizontal, Provincia de Panamá y la Finca N 2772 inscrita al Tomo 73, Folio 212 de la Sección de Propiedad Horizontal, Provincia de Panamá, pertenecientes a la demandada SUPLIDORA PANAMERICANA, S. A., hasta la concurrencia de la suma de B/.51,005.84, en concepto de capital, costas y gastos, después de corregida dicha suma mediante auto N 3267 de fecha 22 de septiembre de 1995 (fs.40 del expediente principal).

A petición de las partes, mediante Auto N 1120 de 29 de marzo de 1996, el Juez decreta la suspensión del proceso, suspensión que es levantada a solicitud de la demandante, quien a la vez solicita se señale fecha para el remate de los bienes embargados.

Ordenado el remate, dentro del término legal, los ejecutados presentaron Excepción de Pago de la obligación reclamada por EMMA, S. A. mediante proceso ejecutivo, excepción que fue resuelta por el Juez Tercero del Circuito de lo Civil mediante sentencia N 12 de 27 de febrero de 1998, declarando el a-quo "NO PROBADA LA EXCEPCION DE PAGO propuesta por SUPLIDORA PANAMERICANA Y OTROS...", condenando además al ejecutado a pagar la suma de B/.5,100.58 en concepto de costas y ordenándose la continuación del proceso ejecutivo. (Fs. 24-31 del cuaderno de excepción).

Por apelada la sentencia anterior por parte de los ejecutados, le correspondió al Primer Tribunal Superior conocer del recurso y en virtud de ello expidió la sentencia de fecha 7 de septiembre de 1998, mediante la cual CONFIRMA la sentencia N 12 de 27 de febrero de 1998, razón por la que fue impugnada mediante el recurso de casación que ahora nos ocupa.

CONTENIDO DEL RECURSO

Se trata de un recurso de casación en el fondo en el que se invocan dos causales, siendo la primera de ellas la de "infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba".

Los motivos en que se fundamenta la causal son los que a continuación se transcriben:

> "Primero: El Tribunal Superior, para confirmar la Sentencia de primera instancia, le negó a la prueba documental consistente en documento privado que corre a fojas 6 del expediente de excepción, que contiene dos cheques con los que se acredita un pago de $13,677.08 y otro por $6,000.00, respectivamente, el valor legal que tienen para demostrar el pago de la obligación de la parte demandada.
>
> Segundo: Al hacer lo anterior, el falló violó disposiciones legales relativas al pago y a la extinción de las obligaciones, influyendo este error sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.
>
> Tercero: La resolución recurrida expresa erróneamente que el documento valorado no demuestra que el pago fue hecho porque los cheques, si bien fueron pagados a la acreedora, Emma, S.A., los mismos fueron expedidos por otra persona jurídica distinta, y que por tanto dichos cheques no acreditan que el pago haya sido hecho por la demandada, sino que dan lugar a una suposición del Tribunal Superior de que dichos cheques podrían ser para pagar una obligación que Inversiones Casco Viejo mantiene con la ejecutante; omitiendo con este análisis equivocado la aplicación de la norma sustantiva que indica que el pago puede hacerlo cualquiera persona.
>
> Cuarto: La resolución recurrida valoró erróneamente el documento de marras al desconocer el valor legal del mismo para comprobar un pago, basándose en una mera suposición de que ese pago podría ser de otra obligación de la persona que libró los cheques, confundiendo tal circunstancia supuesta, con el hecho cierto y el derecho de que una persona distinta puede efectuar el pago de la deuda de otro, y con más razón aún meramente librar el cheque para el pago; y tal documento al ser endosado al cobro por los ejecutantes, como se observa al dorso de los de marras, se convierte en prueba legalmente válida contra ella, para comprobar el pago." (Fs.91-92)

Como disposiciones legales infringidas y explicación de dichas infracciones, el casacionista cita los artículos 845 y 823 del Código Judicial y los artículos 1045 y 1043 del Código Civil.

De los motivos transcritos se infiere que el cargo de injuricidad que las recurrentes le formulan a la sentencia del Tribunal Superior, radica concretamente en que se dejó de aplicar o fueron desconocidas disposiciones que regulan el pago y la extinción de obligaciones y en especial las relativas al pago realizado por un tercero a la deuda de otra persona, disposiciones estas que de haberse tomado en cuenta, la controversia se hubiese resuelto en forma distinta, pero al confirmarse la sentencia que declara no probada la excepción de pago, se violó la ley.

De la sentencia impugnada en casación se observa que el Tribunal Superior niega la excepción de pago total de la obligación por cuanto que "Los cheques que argumenta el ejecutado acreditan el pago de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE BALBOAS CON OCHO CENTESIMOS (B/.19,677.08), son expedidos por la sociedad INVERSIONES CASCO VIEJO, S. A. (sic), sin que se demuestre el hecho de que ese monto sea para acreditarlo de la cuenta que mantiene la sociedad ejecutada para con la ejecutante; puesto que no se adjunta recibo alguno, lo que podría incluso suponer que se trata de una obligación de la sociedad INVERSIONES CASCO ANTIGUO, S. A. mantiene con la sociedad ejecutante". (fs.54)

En primer lugar, la Sala considera importante aclarar que en el proceso ejecutivo hipotecario al que accede la presente excepción, se tiene como demandados o ejecutados, ahora excepcionantes, a las siguientes personas jurídicas y naturales: SUPLIDORA PANAMERICANA, S. A.; MARQUELA DE BALLESTEROS; CONRADO OTTO R. y FELICIANO BALLESTEROS.

Por otro lado se observa, a fojas 6 del expediente de excepciones, los dos cheques girados a favor de la ejecutante EMMA, S. A., y cobrados por esta sociedad, por la suma de B/13,677.08 y B/.6,000.00, y en ellos se observa muy claramente el nombre de INVERSIONES CASCO ANTIGUO, S. A. como la propietaria de la cuenta bancaria contra la cual se giraron los referidos cheques.

Como queda claro, INVERSIONES CASCO ANTIGUO, S. A., no es demandada ni parte en el presente proceso, ni consta en el mismo la causa o razón jurídica, por la cual esta empresa giró los cheques, así como tampoco consta prueba alguna que con los referidos cheques, la giradora estaba cancelando obligaciones de un tercero, es decir, de alguno de los cuatro demandados, situación esta que no se compagina con lo dispuesto en el artículo 1768 del Código Judicial al indicar que en las excepciones de pago, en los procesos ejecutivos hipotecarios, la prueba del pago debe aparecer de manera clara, que el mismo se ha realizado. Es decir, debe quedar probado, sin lugar a dudas, que el deudor o un tercero, pagó la obligación que por vía judicial se reclama, lo que no ha quedado demostrado ya que ni siquiera del arreglo de pago celebrado entre las partes y que se supone se originaron los pagos que se dicen efectuados, se desprende que los mismos serían realizados por un tercero (fs. 45).

No se trata, como pretende el recurrente de que el Tribunal Superior le restó valor probatorio a los cheques como documento idóneo para extinguir obligaciones, desconociendo con ello la posibilidad de que el pago de una deuda pueda ser realizado por una tercera persona, tal cual lo permite nuestra legislación al tenor de lo dispuesto en el artículo 1045 del Código Civil. De lo que se trata es que con fundamento en el referido artículo, el tercero, tenga o no interés en el cumplimiento, pague por el deudor específicamente la obligación que se reclama y no otra, situación que de acuerdo a la sentencia del Tribunal Superior no quedó demostrada, conclusión con la que la Sala está de acuerdo por lo que no prospera la causal invocada al haberse valorado debidamente por el ad-quem las pruebas analizadas.

La segunda causal invocada por el impugnante es la "infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de error de hecho sobre la existencia de la prueba".

Los motivos fundamentales son tres que transcribimos seguidamente:

> **Primero:** El Tribunal Superior, para resolver la apelación interpuesta, y confirmar la sentencia impugnada, ignoró varias pruebas documentales existentes en el expediente, las cuales eran básicas para la comprobación de la excepción planteada, y las que consisten en: el arreglo de pago suscrito entre las partes, que corre a foja 4 y 5 del cuadernillo, así como las actuaciones judiciales de la ejecutante después de hecho el arreglo de pago, que militan como pruebas a fojas 7, 8 y 9; así como la carta bancaria promesa irrevocable de pago por $10,000 que milita a foja 10; así como la carta emitida por la ejecutante, de acuse de recibo de la carta de promesa bancaria, que está a foja 11; así como la Minuta de Cancelación Parcial de la obligación emitida por la ejecutante, y que milita a foja 12, con medias firmas del representante legal de Ema, S.A., Agustin Chiari (ARCH); al igual que la Diligencia de Consignación # 126 de la suma de $5,891.01 hecha ante el propio Juzgado de la Primera Instancia, y que está a foja 86 del expediente principal.
>
> **Segundo:** Al omitir toda consideración de las pruebas aludidas en el hecho anterior, la sentencia impugnada violó disposiciones legales sobre las obligaciones y la extinción de las mismas, así como las referidas al pago, influyendo este error sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia recurrida.
>
> **Tercero:** La resolución recurrida expresa erróneamente que los ejecutados no cumplen con las exigencias de nuestro ordenamiento en cuanto a la comprobación del pago, puesto que este debe aparecer de manera clara sin estar sujeto a interpretaciones, incurriendo en la falla de llegar a semejante conclusión sin haber observado y ni siquiera analizado los elementos probatorios aportados al proceso, los que si hubiese visto o analizado se hubiese percatado de que en dichos documentos sí está consignado de manera clara y en cifras y con un documento mercantil (carta bancaria irrevocable) y con la consignación en efectivo hecha ante el tribunal de primera instancia el pago alegado. De haberlos observado y considerado, el tribunal se hubiese percatado de que nada había que interpretar de los mismos y que en ellos se consignaban obligaciones claras y líquidas, y los pagos de las mismas, en líquido y con documentos mercantiles o bancarios aceptados incluso por la ejecutante. De haberlos considerado, otro sería su fallo." (Fs.96-97)

Como normas de derecho infringidas y su concepto, el casacionista cita los artículos 821, 681 y 848 del Código Judicial y el artículo 1057 del Código Civil.

En esta ocasión el casacionista señala como cargo en contra de la sentencia del Tribunal Superior, el haber ignorado varias pruebas documentales existentes en el expediente y que comprueban la excepción de pago alegada, ya que en dichos documentos se consigna de manera clara el pago alegado, documentos que de haber sido observados y considerados, otro habría sido el fallo ya que en ellos se consignaban obligaciones claras y líquidas y los pagos de las mismas.

De la lectura de la sentencia impugnada se observa que el razonamiento del ad-quem no hace referencia alguna, de manera específica, a la documentación probatoria que mediante esta causal se estima no fueron consideradas. Tal como quedó claro al analizar la causal anterior, el Tribunal Superior consideró no probada la excepción de pago por cuanto los pagos realizados a la ejecutante mediante los cheques girados por una tercera persona, por sí solos, no son prueba suficiente de que con ellos se cancelaba o pagaba precisamente la obligación que mediante el proceso ejecutivo hipotecario se le exige de pago a los ejecutados, tal cual lo dispone el artículo 1768 del Código Judicial de manera clara y sin lugar a interpretaciones.

Por ello la Sala, de acuerdo con el razonamiento del Tribunal Superior,

coincide en que la documentación que se dice fue desconocida por el ad-quem, no es prueba suficiente de que el pago total de la obligación reclamada, haya sido satisfecha por los deudores de manera clara, razón por la cual no puede ser considerada como prueba del pago que se dice efectuado, sino del pago a realizar como se desprende del arreglo de pago firmado por las partes (fs. 4-5); al que hace alusión la impugnante.

Lo anterior no implica, como opina el impugnante, que el ad-quem no consideró o desconoció por completo las referidas pruebas ya que hasta donde observa la Sala, las mismas fueron consideradas en su conjunto pero no con los propósitos ni eficacia perseguidos por la casacionista, por no permitirlo el tantas veces mencionado artículo 1768 del Código Judicial al no desprenderse de ellas, "de manera clara que se ha efectuado el pago" y que como se vio en la causal anterior, quedó la incertidumbre respecto a si el pago efectuado por INVERSIONES CASCO ANTIGUO, S. A., lo fue en cumplimiento de una obligación propia o de una obligación ajena, en este caso a la reclamada a las ejecutadas para que de ello pudiera reconocerse, como pretende la casacionista, la excepción de pago.

Es evidente pues, que no le asiste razón al recurrente y lo procedente es declarar que no se ha configurado la causal alegada.

Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia recurrida de fecha 7 de septiembre de 1998, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Las obligantes costas de casación, a cargo de la parte recurrente, se fijan en la suma de DOSCIENTOS BALBOAS (B/.200.00).

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ELIGIO MARIN C.
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INVERSIONES VADY, S. A. Y ARIEL ARMANDO FACEY RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO QUE LE SIGUEN A ASAMBLEA GENERAL DE COPROPIETARIOS DE P.H. APARTHOTEL COSTA DEL SOL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, DIEZ (10) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado VÍCTOR LUIS CASTILLO ORTEGA, ha interpuesto recurso de casación contra la Sentencia de 3 de mayo del 2000 proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro del proceso sumario que han instaurado INVERSIONES VADI, S. A., ARMANDO FACEY y JOSÉ GARCÍA QUINTERO contra la ASAMBLEA GENERAL DE COPROPIETARIOS DE P.H. APARTHOTEL COSTA DEL SOL.

Transcurrido el término que se le concedió a las partes para que dejaran oír sus puntos de vista acerca de la admisibilidad del recurso, siendo aprovechado sólo por la parte recurrente, corresponde a la Sala decidir sobre su admisibilidad, a lo que se procede, tomando en consideración para ello, los requisitos establecidos en los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial.

La resolución y la cuantía se enmarcan dentro de lo establecido por la ley para la concesión del recurso. Además, en cuanto a la exigencia establecida en el artículo 1165 del Código Judicial, en relación con el artículo 1159 de ese cuerpo de leyes, en materia de interposición oportuna del recurso, esto es, por

el término improrrogable de diez (10) días, se observa que el mismo se formalizó en tiempo.

Se presenta una única causal de casación en el fondo, la cual es: "infracción de norma sustantiva de derecho en concepto de error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia de segunda instancia". Observa la Sala que dicha causal aparece recogida como tal, en el artículo 1154 del Código Judicial.

Los motivos que sustentan la causal son tres y en ellos aparece expuesto, grosso modo, el vicio de ilegalidad que se formula contra la sentencia impugnada. Se refiere a ellos, el recurrente, en que la sentencia del A-quem no le dio un valor probatorio a la prueba trasladada del peritaje, consistente en fotocopias de Actas de Asamblea General de PH APARTHOTEL COSTA DEL SOL al momento de resolver, desconociendo derechos sustantivos que autorizaban a los demandantes a exigir la nulidad de las decisiones de esta Asamblea General.

Considera la Sala que estos motivos han sido redactados en forma de cargos de injuricidad contra la sentencia de segunda instancia, en los que se deja especificados los medios probatorios supuestamente mal valorados por el A-quem y la forma cómo dichos errores probatorios influyeron en lo dispositivo de la resolución recurrida.

Dentro de las normas que se citan como infringidas, aparecen tanto las de naturaleza probatoria como las de carácter sustantivo. Respecto de cada una, en términos generales, se expone el concepto de infracción, cumpliéndose de esta manera con las pautas que, al respecto, tiene dispuesta la Ley y esta Sala, por vía de jurisprudencia.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación en el fondo, interpuesto por INVERSIONES VADI, S. A., ARMANDO FACEY y JOSÉ GARCÍA QUINTERO.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

YAPELO, S. A., RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A LEONARDO CIPPONERI MARTINICO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, DIEZ (10) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense BRAVO, DUTARY Y ASOCIADOS, en su carácter de apoderada judicial de la sociedad YAPELO, S. A., ha interpuesto recurso de casación, contra la resolución de 1 de marzo de 2000, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Surtido el reparto de rigor, se ordenó la fijación en lista del negocio por el término de seis (6) días para que dentro de los tres (3) primeros la parte opositora al recurso presente su respectivo escrito en torno a la admisibilidad; y dentro de los tres (3) días siguientes el recurrente replique. Dicho término fue aprovechado por ambas partes. (fs. 1202-1205 y 1207-1209)

Cumplidos los trámites correspondiente a esta clase de recurso, pasa la

Sala a pronunciarse con respecto a la admisibilidad del mismo, tomando en consideración los requisitos contemplados en los artículos 1160 y 1165 del Código de Procedimiento Civil.

Según el artículo 1160 se deben cumplir los siguientes requisitos formales al momento de presentar un recurso de casación:

1. Determinación de la causal o causales que invoque;
2. Motivos que sirven de fundamento a la causal;
3. Citación de las normas de derecho infringidas y explicación de cómo lo han sido.

Aprecia la Sala que en el escrito contentivo del recurso extraordinario de casación, no aparece la determinación de la causal que se pretende invocar, significa ello que no cumple con el primer requisito indicado en el artículo 1160 antes transcrito.

El recurso de casación es un recurso extraordinario, que sólo procede en determinados supuestos, aquéllos expresamente consagrados en la ley, y constituye una estructura orgánica en virtud de la cual, la causal o causales, que han de venir separadamente estructuradas, debe revestir la forma que expresamente consagra la ley procesal, concretamente el artículo 1154 para la causal de fondo, que es única, y las causales de forma previstas en el artículo 1155, todos del Código Judicial.

De lo dicho se desprende que frente al recurso de casación, como recurso extraordinario, las causales (que en otras legislaciones se denominan los motivos) son imprescindible exponerlas, no solamente por las razones ya dichas, sino porque la Corte de Casación, frente a las causales, se encuentra en una situación de limitación, en el sentido de que no puede pronunciarse sino por las causales que han sido introducidas en la estructuración del recurso extraordinario, como se desprende del primer párrafo del artículo 1180 del Código Judicial. Es decir, las causales cumplen la misión de enmarcar la actividad jurisdiccional de la Corte, por lo que, en su ausencia, no tiene la Corte marco alguno sobre el cual pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de la sentencia recurrida.

El procesalista panameño JORGE FABREGA P., en su obra "Casación" se ha pronunciado sobre esta característica en la forma que la Corte considera oportuno transcribir:

> "...
> C) Mientras que los recursos ordinarios confieren amplia competencia al tribunal, en la casación la competencia de la Corte se contrae a los cargos formulados en el recurso. Los parámetros del fallo de la Corte los fija el recurrente en casación y la decisión impugnada. Las razones que se pueden invocar han de ser inminentes al proceso. La Corte no puede reconocer causal no invocada. No son admisibles incidentes en casación -salvo impedimento. (Art.1176 C.J.)"
>
> (FABREGA P, Jorge, "Casación", Impreso en San José de Costa Rica, Panamá, 1995, p.35)

En consecuencia, resulta a todas luces ininteligible el mismo conforme a lo previsto en el artículo 1167 de la referida excerta legal, que nos permitimos transcribir:

> "ARTÍCULO 1167: Por razones formales, sólo causará la inadmisibilidad del recurso la falta de uno de los requisitos previstos en el artículo 1160 y que haga ininteligible el recurso."

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de casación interpuesto por YAPELO, S. A.,, mediante apoderados

judiciales.

Las obligantes costas, a cargo de la parte recurrente, se fijan por la suma de SETENTA Y CINCO BALBOAS (B/.75.00).

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MIGUEL AMADOR DUQUE RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO QUE LE SIGUE A CONFEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO (COLAC). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, DIEZ (10) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado MARCOS TULIO LONDOÑO A., ha interpuesto recurso de casación contra la Resolución de 26 de mayo del 2000 proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro del proceso ordinario declarativo que ha instaurado MIGUEL AMADOR DUQUE contra la CONFEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO (COLAC).

Transcurrido el término que se le concedió a las partes para que dejaran oír sus puntos de vista acerca de la admisibilidad del recurso, siendo aprovechado sólo por la parte recurrente, corresponde a la Sala decidir sobre su admisibilidad, a lo que se procede, tomando en consideración para ello, los requisitos establecidos en los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial.

La resolución y la cuantía se enmarcan dentro de lo establecido por la ley para la concesión del recurso. Además, en cuanto a la exigencia establecida en el artículo 1165 del Código Judicial, en relación con el artículo 1159 de ese cuerpo de leyes, en materia de interposición oportuna del recurso, esto es, por el término improrrogable de diez (10) días, se observa que el mismo se formalizó en tiempo.

El primer error que observa la Sala en el presente recurso de casación es que el mismo es dirigido a los Magistrados de la Sala Civil de la Corte Suprema, cuando debió hacerse a los Magistrados del Primer Tribunal Superior. El recurso de casación es en la forma y en el fondo. El recurrente invocó una única causal en la forma, la cual es: "Por haberse omitido algún trámite o diligencia considerado esencial por la Ley, la cual ha influido substancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida". Observa la Sala que dicha causal aparece recogida como tal, en el artículo 1154 del Código Judicial. Los motivos que sustentan la causal son dos y en ellos aparece expuesto, grosso modo, el vicio de ilegalidad que se formula contra la sentencia impugnada. La Sala considera que los mismos reúnen, de manera general, los requisitos establecidos en la Ley.

Dentro de las normas que se citan como infringidas, aparecen tanto las de naturaleza probatoria como las de carácter sustantivo. Respecto de cada una, en términos generales, se expone el concepto de infracción. No obstante en la causa de forma, que trata de enmendar errores in procedendo, las disposiciones sustantivas no tienen cabida, por lo que debe corregirse la misma.

El recurrente invoca dos causales de casación en el fondo. La primera de ellas es: "infracción de normas sustantivas de derecho, por error en cuanto a la apreciación de la prueba, la cual ha influido substancialmente en lo dispositivo

de la Resolución recurrida". Esta causal se encuentra invocada erróneamente, toda vez que el casacionista no señala cuál es el concepto del error, si es de derecho o de hecho en la apreciación de la prueba, tal como lo establece el artículo 1154 del Código Judicial, en cuanto a su existencia.

En los motivos se refiere la parte recurrente a una serie de pruebas supuestamente mal valoradas por el juzgador a-quem, lo que incidió en lo dispositivo de la resolución recurrida, y cita en el motivo cuarto una disposición legal, lo que no es compatible con la técnica del recurso de casación. Además, cita normas probatorias y de carácter sustantivas como infringidas, por lo que procede la corrección de esta primera causal de fondo examinada.

La segunda causal de fondo invocada es: "infracción de la norma sustantiva de derecho por interpretación errónea de la norma de derecho, lo cual ha influido substancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida". Dicha causal se enuncia conforme lo dispuesto en el artículo 1154 supra citado.

Al entrar al análisis de los cuatro motivos que sirven de fundamento a la causal esgrimida, la Sala observa que dentro de los mismos no se concretan cargos de injuricidad contra la sentencia, más bien se realizan recuentos del proceso y alegaciones impropias del formal recurso de casación. Sin embargo, se cita y explica de forma adecuada la disposición infringida. Se dan los presupuestos del artículo 1167 del Código Judicial para declarar inadmisible esta causal por ininteligible.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA INADMISIBLE segunda causal de fondo; y ORDENA LA CORRECCIÓN del recurso de casación en la causal de forma y en la primera causal de fondo, interpuesto por MIGUEL AMADOR DUQUE, para lo cual concede el término de cinco (5) días establecidos en el artículo 1166 del Código Judicial.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JORGE LUIS DE PUY GARCIA RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A ANDRES FERNANDO DE PUY FARUGIA, SUCESION DE ANDRES FERNANDO DE PUY FARRUGIA Ó SUCESORES DE ANDRES FERNANDO DE PUY FARRUGIA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, ONCE (11) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante resolución de 25 de julio de 2000, la Sala Civil ordenó la corrección del recurso de casación interpuesto por el licenciado ALVARO MUÑOZ FUENTES, apoderado judicial del demandante JORGE LUIS DE PUY GARCIA, contra la resolución de 28 de abril de 2000, en el proceso seguido contra ANDRES FERNANDO DE PUY FARRUGIA.

Vencido el término para la corrección del recurso, y habiéndose efectuado en tiempo oportuno, la Sala procede al examen del nuevo escrito que corre de fojas 321 a 327 del expediente, para decidir en forma definitiva su admisibilidad.

Se observa que el defecto señalado al recurrente fue debidamente subsanado,

por lo que la Sala considera pertinente admitir el recurso corregido.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación propuesto por el licenciado ALVARO MUÑOZ FUENTES, apoderado judicial de JORGE LUIS DE PUY GARCIA contra la resolución de fecha 28 de abril de 2000, dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial dentro del proceso ordinario seguido contra ANDRES FERNANDO DE PUY FARRUGIA.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario de la Sala Civil, Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MIGUEL ANGEL RIGGS RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO (SECUESTRO) QUE KE SIGUE A DIONISIO SAKIS LIMBEROPULOS KARNAKIS Y/O CAROL CITY INVESTMENT, S. A. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, CATORCE (14) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El apoderado judicial del señor MIGUEL ANGEL RIGGS interpuso recurso de casación contra la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 25 de noviembre de 1998, dentro del proceso ordinario instaurado por el recurrente contra el señor DIONISIO SAKIS LIMBEROPULOS KARNAKIS y CAROL CITY INVESTMENT, S. A.

El recurso de casación fue admitido por esta Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, razón por la cual se procede a decidir los méritos del mismo, previas las siguientes consideraciones.

El señor MIGUEL ANGEL RIGGS presentó demanda ordinaria que le correspondió al Juzgado Séptimo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, con el objeto de que DIONISIO SAKIS LIMBEROPULOS y la sociedad CAROL CITY INVESTMENT, S. A. fueran condenados solidariamente al pago de la suma de treinta mil balboas (B/30,000.00), más costas, gastos e intereses.

Igualmente, el demandado solicitó el secuestro de cuatro fincas de propiedad de la sociedad demandada, medida cautelar que fue decretada por el Juez Séptimo mediante Auto N 265 de 3 de febrero de 1998, adicionado por el Auto N 574 de 5 de marzo de 1998.

Luego de admitida la demanda mediante Auto N 82 de 9 de enero de 1998, el 26 de junio de 1998 el apoderado especial de CAROL CITY INVESTMENT, S. A., además de presentar su escrito de contestación a la misma, interpuso escrito que identificó como "Incidente de previo y especial pronunciamiento de extinción de la pretensión por caducidad de la instancia".

El Juzgado Séptimo, mediante Auto N 1815 fechado 8 de julio de 1998, "DECRETA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA, en el presente proceso ordinario propuesto por MIGUEL ANGEL RIGGS contra DIONISIO SAKIS LIMBEROPULOS KARNAKIS y CAROL CITY INVESTMENT, S. A., en consecuencia se LEVANTA el secuestro decretado mediante Auto N 265 de 3 de febrero de 1998 y adicionado mediante Resolución N 574 de 5 de marzo de 1998": (F. 55)

El apoderado judicial del demandante apeló de esta decisión que fue confirmada por el Primer Tribunal Superior de Justicia en la resolución fechada

25 de noviembre de 1998, contra la cual se interpuso el presente recurso de casación.

Dicho recurso es en la forma y en el fondo, razón por la cual se procede a analizar con la debida separación.

La única causal de forma que se invoca es "Por haberse omitido un trámite o diligencia considerado esencial por la ley", la cual se encuentra consagrada en el numeral 1 del artículo 1155 del Código Judicial.

Los motivos que le sirven de fundamento expresan lo siguiente:

> "PRIMERO: El Primer Tribunal Superior de Justicia, con relación al escrito que se lee a fs. 38 relativo al "Incidente de Previo y Especial pronunciamiento de Extinción de la Pretensión por Caducidad de la Instancia" presentado por el apoderado de la parte demandada señaló, a fs. 86, que dicho escrito no requería ser tramitado como incidente, ni requería ser corrido en traslado ni ser abierto a pruebas, sino que debía ser tramitado como una mera solicitud. Y con ese criterio el Ad-Quem exoneró al Juez de Instancia del deber procesal, pretermitido, de cumplir con el trámite de traslado del incidente a la parte actora.
>
> SEGUNDO: A pesar de que el apoderado de la parte demandada denominó a su escrito legible a fs. 38 Incidente, y que la naturaleza del mismo corresponde a un incidente, el Primer Tribunal Superior lo consideró como una "mera solicitud" contrariando nuestra legislación procesal; y con ese criterio no saneó el proceso ni ordenó el traslado del incidente a la parte que represento, no obstante que, sin excepción alguna, el traslado de todo incidente es un trámite considerado esencial por la ley, en los procesos de conocimiento, y cuya omisión es causal de nulidad.
>
> TERCERO: El demandado no formuló una excepción de caducidad como artículo de previo y especial pronunciamiento, como correspondía, sino un Incidente de caducidad como artículo de previo y especial pronunciamiento. Sin embargo se pretermitió el trámite del traslado a la contraparte que represento, a pesar de que dicho trámite es considerado esencial por la ley.
>
> CUARTO: No obstante que la parte demandada en este proceso interpuso un incidente, y que nuestra la (sic) ley procesal le ordena al Juzgador dar traslado a la contraparte de todo incidente, así como abrir el incidente a pruebas en los procesos de conocimiento, el Tribunal entró a fallar sorpresivamente el incidente y pretermitió este trámite dejando en la indefensión a mi representada, a pesar de nuestras reclamaciones (fs. 64-69)." (Fs. 102-103)

Como consecuencia de los cargos expuestos en los motivos transcritos, el recurrente considera que se incurrió en la violación de los artículos 693 y 722, numeral 8 del Código Judicial, que a la letra dicen:

> "ARTICULO 693. Todo incidente se correrá en traslado a la contraparte por tres días y si hubiere pruebas que practicar, se concederá para ello un término de ocho días.
> ....."
>
> "ARTICULO 722. Son causales de nulidad comunes a todos los procesos:
> .....
>
> 8. No abrir el proceso o incidente a prueba en los procesos de conocimiento, o no señalar audiencia en los casos en que la Ley exija este trámite."

En esta causal de forma el recurrente sostiene que el Tribunal Superior concluyó erróneamente que la solicitud de caducidad de la instancia interpuesta por la sociedad CAROL CITY INVESTMENT, S. A. no requería ser tramitada como un incidente, razón por la cual no declaró la nulidad que correspondía en vista de que el Juez de primera instancia no la corrió en traslado ni abrió el negocio a prueba, a pesar de que dichos trámites son considerados esenciales por la ley.

La Sala advierte que la caducidad de la instancia es un medio excepcional de terminación del proceso, que constituye una sanción a la inactividad de las partes dentro del mismo, la cual, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1089 del Código Judicial, será decretada por el Juez, de oficio o a solicitud de parte, cuando el proceso se encuentre paralizado por más de tres meses, aclarando el artículo 1091 ibidem que cuando se decreta por primera vez "no entraña la extinción del derecho a formular la pretensión".

Bajo estas mismas circunstancias, el artículo 1098 del Código Judicial señala que también se decretará la caducidad si la demanda no es notificada en el término de tres meses y existe alguna medida cautelar en el proceso.

La Corte observa que de acuerdo con las disposiciones anteriormente citadas, a la solicitud de caducidad de la instancia no se le debe dar el trámite de incidente como alega la parte recurrente, ya que no existe ninguna norma que así lo prescriba e, incluso, la ley señala que puede ser decretada de oficio por el tribunal.

Ahora bien, el artículo 1092 del Código Judicial establece que si por segunda vez, entre las mismas partes y en ejercicio de la misma pretensión, ocurrieren las circunstancias mencionadas en el artículo 1089, se declarará extinguido el derecho pretendido. Además, señala que todo lo relacionado con esta declaratoria de extinción se tramitará por la vía de incidente de previo y especial pronunciamiento o como excepción en el proceso.

De lo anteriormente expuesto se colige que es en este último caso, es decir, cuando se ha decretado la caducidad de la instancia por segunda vez en un mismo proceso, que dicha extinción de la pretensión se puede hacer valer como incidente de previo y especial pronunciamiento, que no es el que se ha presentado en el caso que nos ocupa, en el que se ha solicitado la caducidad de la instancia con fundamento en el artículo 1098 del Código Judicial, solicitud que, como ya se señalara anteriormente, no requiere del trámite de incidente.

En vista de lo expuesto, la Sala concluye que no se ha incurrido en la causal de forma invocada ni, por tanto, en la infracción de los artículos 693 y 722, numeral 8 del Código Judicial.

En el recurso de casación en el fondo se invoca como única causal la infracción de normas sustantivas de derecho por error de hecho sobre la existencia de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

En los motivos que le sirven de fundamento, la parte recurrente sostiene que el Tribunal Superior no tomó en consideración los documentos que aparecen de fojas 26 a 51, en los cuales constan todas las gestiones realizadas por la parte actora con el objeto de notificar a la parte demandada, las cuales, en su opinión, interrumpieron el término de la caducidad cuya declaratoria no procedía.

Igualmente, alega que el fallo impugnado ignoró por completo que la solicitud de caducidad de la instancia fue presentada el mismo día, pero después de la contestación de la demanda por parte de la sociedad CAROL CITY INVESTMENT, S. A., situación que produjo la interrupción del término de caducidad.

En vista de estos cargos, el recurrente alega que se han violado los artículos 769, 823, 537, numeral 2, 1089 y 1098 del Código Judicial; 1107 y 1109 del Código Civil; y 214 del Código de Comercio.

Por su parte, la Sala advierte que la resolución recurrida concluyó que en el presente caso se habían dado los presupuestos necesarios de la caducidad especial de la instancia que consagra el artículo 1098 del Código Judicial, por las siguientes razones:

> "Como hemos dicho, existen bienes secuestrados de uno de los demandados, y sabido es que el secuestro es una medida cautelar. También como hemos expuesto, la demanda fue admitida desde el día 9 de enero de 1998, el secuestro se practicó desde el día 13 de marzo de 1998, y aun a la fecha la demanda no ha sido notificada a uno de los demandados, por lo que el día 26 de junio de 1994, (sic) fecha en que se tuvo por notificada una de las demandadas y fecha en que esa demandada solicitó la caducidad de la instancia, había transcurrido el término de tres meses sin notificar la demanda, término que exige la norma para decretar la caducidad de la instancia.
> .....
>
> Debe reiterar esta Superioridad que la caducidad contemplada en el artículo 1098 del Código Judicial es una caducidad especial y novedosa y que sólo exige que no se haya dado la notificación de la demanda dentro de los tres meses y que exista medida cautelar. Es decir, que para que proceda dicha caducidad sólo se exige que no se haya notificado la demanda en el término señalado, sin tomar en consideración si hubo o no gestiones por parte de la actora y sin tomar en consideración a quien es imputable la falta de notificación, por lo que queda descartado el referido argumento del actor". (Fs. 92-93) (Enfasis de la Sala)

De acuerdo con lo expuesto se puede concluir que el fallo impugnado consideró que a la caducidad especial consagrada en el artículo 1098 del Código Judicial, como la que se solicita en el presente caso, no le son aplicables los supuestos de interrupción del plazo de caducidad ordinaria que establece el artículo 1089 ibidem.

No obstante, se debe aclarar que ya esta corporación judicial se ha pronunciado en relación con este mismo punto en resoluciones fechadas 18 de marzo de 1994, 16 de julio de 1999 y 5 de octubre de 1999. En esta última decisión, la Corte manifestó lo siguiente:

> "Del texto transcrito se colige que aún cuando se trate de la caducidad especial consagrada en el artículo 1098 del Código Judicial, en principio y dependiendo de la situación de cada caso en particular que debe ser analizada cuidadosamente, se pueden aplicar los supuestos de interrupción del plazo de caducidad ordinaria que contempla el artículo 1089 ibidem, siempre y cuando la caducidad no haya sido declarada por el Juez, declaración que se hace imprescindible solicitarla y realizarla antes de que se dé algún acto o gestión que la interrumpa, tal cual lo dispone el artículo 1095 del Código Judicial, que en opinión de la Sala, es de aplicación a todo tipo de caducidad."

De la resolución anteriormente citada se desprende que no le asiste razón al Tribunal Superior cuando señala que a la caducidad especial consagrada en el artículo 1098 del Código Judicial, no le son aplicables los supuestos de interrupción de la caducidad ordinaria que prescribe el artículo 1089 ibidem, puesto que esta corporación de justicia ha señalado que sí lo son, siempre y cuando la parte actora haya realizado actos y gestiones para notificar a la parte demandada, antes de la declaratoria de caducidad.

Aclarado este punto, la Sala debe determinar, entonces, si en el presente proceso la parte recurrente interrumpió el término de caducidad antes de su declaratoria por el Juzgado Séptimo, como alega en esta causal de casación.

De acuerdo con lo que dispone el artículo 1098 del Código Judicial, para que se produzca la caducidad especial de la instancia es preciso que concurran los siguientes presupuestos: 1) Que transcurran tres meses sin que la demanda haya sido notificada; y, 2) Que se haya practicado alguna medida cautelar en el proceso.

En cuanto al momento en que debe empezar a computarse dicho término, la Corte ha manifestado que se cuenta a partir de la fecha en que se admite la demanda y se ordena su traslado, siempre y cuando la medida cautelar se haya practicado antes o al mismo tiempo que la presentación de la demanda.

En el caso que nos ocupa, la demanda fue admitida mediante Auto N 82 de 9 de enero de 1998, consultable a foja 25. No obstante, se observa que el secuestro decretado por Auto N 265 de 3 de febrero de 1998 y adicionado por el Auto N 574 de 5 de marzo de 1998, quedó debidamente inscrito el 13 de marzo de 1998, como consta en la Nota DG-586-98 de la Dirección General del Registro Público, fechada 23 de marzo de 1998, consultable a foja 18 del cuaderno de secuestro.

Consecuentemente, debe entenderse que el término de tres meses al que se refiere el artículo 1098 del Código Judicial debe contarse en el presente caso a partir del 23 de marzo de 1998, en atención a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 526 ibidem.

Al revisar las constancias procesales se advierte que el apoderado judicial del recurrente solicitó las boletas de citación para notificar a la parte demandada, mediante escrito fechado 14 de abril de 1998, visible a foja 26. También consta a foja 27 informe de notificación suscrito por el Citador del Juzgado Séptimo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, en el que manifiesta que no pudo notificar al representante legal de la sociedad CAROL CITY INVESTMENT, S. A.

A continuación, a foja 28 es consultable el escrito presentado por el apoderado judicial del señor MIGUEL ANGEL RIGGS el 3 de junio de 1998, en el que solicita el emplazamiento de los demandados, en vista de que no se les había podido notificar de la demanda interpuesta en su contra.

Por último, a foja 51 se encuentra la certificación expedida por la Secretaria del Juzgado Séptimo en la que hace constar que "...en el día de hoy, TREINTA (30) de JUNIO de 1998, han sido presentados en este Despacho las publicaciones del EDICTO EMPLAZATORIO N 92 dictado dentro del proceso ORDINARIO (SECUESTRO) promovido por MIGUEL ANGEL RIGGS contra DINISIO SAKIS LIMBEROPULOS KARNAKIS y/o CAROL CITY INVESTMENT, S. A.", las cuales aparecieron en el Diario El Universal de Panamá los días 10, 11, 12, 13 y 16 de junio de 1998.

De lo anteriormente expuesto se concluye que al momento en que el apoderado judicial de la sociedad demandada CAROL CITY INVESTMENT, S. A. interpuso solicitud de caducidad de la instancia y contestación a la demanda el 26 de junio de 1998 (fs. 38-43), no procedía la declaratoria de caducidad, puesto que el término de la misma había sido interrumpido por la parte demandante recurrente, con la solicitud de emplazamiento que presentó el 3 de junio de 1998 y con la presentación al Juzgado de los periódicos en que se publicó dicho emplazamiento el 30 de junio de 1998, los cuales constituyen gestiones realizadas antes de decretarse la caducidad que precluyen la oportunidad para su declaración, en atención a lo dispuesto en el artículo 1095 del Código Judicial.

Cabe aclarar también que si bien sólo se emplazó a la sociedad demandada, ello se hizo por omisión imputable al tribunal de primera instancia, puesto que el demandante recurrente solicitó el emplazamiento de ambos demandados, tal como consta en el escrito consultable a foja 28 del expediente.

En estas circunstancias, la Sala concluye que la resolución impugnada incurrió en error de hecho en cuanto a la existencia de las pruebas visibles de

fojas 26 a 28 y 46 a 51, puesto que el Tribunal Superior no las tomó en cuenta cuando consideró que no eran idóneas para interrumpir el término de caducidad de la instancia, infringiendo así los artículos 769, 823, 1089 y 1098 del Código Judicial; razón por la cual procede casar el fallo de segundo grado.

En su lugar, la Corte, convertida en tribunal de instancia como lo prescribe el artículo 1180 del Código Judicial, debe declarar que no procede decretar la caducidad de la instancia solicitada por la sociedad CAROL CITY INVESTMENT, S. A., porque no se dieron los presupuestos establecidos en el artículo 1098 del Código Judicial, en vista de que se interrumpió el término de caducidad con las gestiones realizadas por la parte actora, para tratar de notificar a los demandados.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 25 de noviembre de 1998; REVOCA el Auto N 1815 dictado por el Juzgado Séptimo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil el 8 de julio de 1998; y, en su lugar, DECLARA QUE NO SE HA PRODUCIDO LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA solicitada por CAROL CITY INVESTMENT, S. A., dentro del proceso ordinario instaurado por el señor MIGUEL ANGEL RIGGS contra dicha sociedad y el señor DIONISIO SAKIS LIMBEROPULOS KARNAKIS y, en consecuencia, ORDENA continuar el trámite de dicho proceso, manteniendo el secuestro decretado dentro del mismo.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ELIGIO MARIN C.
Secretario Encargado de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

BANCO GENERAL, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO EJECUTIVO (EXCEPCIONES) QUE LE SIGUE A GLORIA GONZALEZ RODRIGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense MARQUEZ & PRECIADO, actuando como apoderados judiciales de BANCO GENERAL, S. A., ha interpuesto Recurso de Casación contra la sentencia de 27 de abril de 2000 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro del proceso ejecutivo instaurado contra GLORIA GONZALEZ RODRIGUEZ.

Cumplidas las reglas de reparto, el negocio se fijó en lista para que las partes alegaran sobre la admisibilidad del recurso, término que aprovecharon ambos apoderados, quienes presentaron los escritos que constan a fojas 231 a 235 (oposición) y 236 a 238 (réplica del recurrente).

La Sala procede al examen del recurso, a fin de determinar si cumple con los requisitos que establece el artículo 1165 del Código Judicial.

En tal sentido vemos que la resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley y que el recurso ha sido interpuesto en tiempo. Sin embargo, el escrito de formalización del mismo contiene una serie de defectos que imposibilitan su admisión. Veamos:

La causal invocada es la "INFRACCION DE NORMAS SUSTANTIVAS DE DERECHO POR CONCEPTO DE ERROR DE DERECHO EN CUANTO A LA APRECIACION DE LA PRUEBA".

Esta causal ha sido fundamentada en tres motivos, en los cuales no se

establece un cargo debidamente estructurado contra la sentencia de segunda instancia. En el primer motivo se alude a que el demandante interpuso demanda ejecutiva, presentando como recaudo un certificado de saldo revisado por contador. En el segundo se señala que el juzgado de primera instancia la admitió y libró mandamiento de pago. El tercer motivo es el único que se refiere al fallo de segunda instancia y se limita a señalar: "El Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, determinó en la sentencia recurrida que el documento aportado como recaudo ejecutivo no representa una obligación clara".

Como se tiene dicho, los motivos deben ser expuestos en forma metódica y pormenorizada, de manera que cada uno contenga un cargo contra la sentencia de segunda instancia. En casos como el presente, donde se acusa al sentenciador de haber incurrido en errores probatorios, se debe consignar: 1- el error y su demostración; 2- la consiguiente infracción de la ley sustantiva; y, 3- la incidencia del cargo sobre la parte dispositiva de la resolución recurrida.

En los motivos de este recurso no se señala específicamente cuál fue la prueba mal valorada y en qué consiste el error en que incurrió el sentenciador al apreciarla. Tampoco se alude al derecho sustantivo infringido como consecuencia del yerro probatorio, ni la incidencia que el cargo tuvo en lo dispositivo de la resolución.

En cuanto al siguiente apartado, donde deben citarse en primer lugar las normas que establecen el valor de las pruebas y posteriormente las normas de derecho sustancial violadas por el error de probatorio, se observa que el casacionista cita inicialmente el artículo 1639 del Código Judicial, el cual enumera los títulos ejecutivos y, luego, el artículo 967 del mismo Código, que establece cómo debe ser valorado el dictamen pericial. Sobre la primera norma la Sala se permite adelantar que es incongruente con la causal invocada de error en la apreciación de la prueba, la cual supone que el juzgador meritó erróneamente una prueba frente a la disposición legal que la valora. De manera que lo procedente era aludir a las normas que establecen reglas de valoración probatoria y no a las que consagran la existencia de medios de prueba, ya que éstas son pertinentes cuando se trata de la causal de error de hecho sobre la existencia de la prueba.

A lo anterior se adiciona la irregularidad de haber realizado en forma conjunta la explicación de cómo fueron infringidos ambos artículos. Sobre este particular la Corte ha reiterado que, cuando el recurrente señala como infringidas varias disposiciones legales, debe expresar separadamente el concepto de infracción de cada una de ellas.

Finalmente, como norma sustantiva infringida a consecuencia de la violación de la ley procesal se cita el artículo 244 del Código de Comercio. Sin embargo, esta es una disposición perteneciente a las llamadas "normas probatorias", pues establece los diferentes medios idóneos para probar las obligaciones mercantiles y sus excepciones. Es decir, es un precepto enumerativo de los medios de prueba.

Consecuentemente, es claro que no se han invocado las normas sustantivas que sirven de fundamento al derecho que se reclama o a la excepción que se alega, lo que da como resultado que el recurso se encuentre incompleto, impidiéndole a la Corte el examen de la infracción jurídica para quedar en condiciones de adoptar una decisión de fondo.

Debido a todas las deficiencias anteriormente mencionadas el recurso de casación es improcedente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación interpuesto por el apoderado judicial de BANCO GENERAL, S. A. contra la sentencia de 27 de abril de 2000, proferida por el Primer Tribunal Superior dentro del proceso ejecutivo seguido contra GLORIA GONZALEZ RODRIGUEZ.

Las obligantes costas a cargo de la parte recurrente, se fijan en la suma de CIEN BALBOAS CON 00/100 (B/.100.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala de lo Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADRIAN E. CASTILLERO LANGE RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A MARTA NEMESIA CASTILLERO Y LOS SUCESORES DE MANUELA CASTILLERO PIMENTEL Y LIBRADA CASTILLERO PIMENTEL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Esta Sala de lo Civil de la Corte, mediante resolución de fecha 31 de julio de 2000, ordenó la corrección del recurso de casación presentado por la firma MORENO Y FABREGA, apoderada judicial del señor ADRIAN E. CASTILLERO LANGE, en el proceso ordinario de mayor cuantía interpuesto contra MARTA NEMESIA CASTILLERO, los sucesores de la señora MANUELA CASTILLERO PIMENTEL (q.e.p.d.) y los sucesores de la señora LIBRADA CASTILLERO PIMENTEL (q.e.p.d.).

Vencido el tiempo para la corrección del recurso y habiéndose efectuado oportunamente, la Sala procede al examen del nuevo escrito que corre de fojas 798 a 812 del expediente, para decidir en forma definitiva su admisibilidad.

según se observa, el defecto señalado a la recurrente fue debidamente subsanado, por lo que la Sala considera pertinente admitir el recurso corregido.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación presentado por la firma forense MORENO Y FABREGA, apoderada judicial del señor ADRIAN E. CASTILLERO LANGE en el proceso ordinario de mayor cuantía interpuesto contra MARTA NEMESIA CASTILLERO, los sucesores de la señora MANUELA CASTILLERO PIMENTEL (q.e.p.d.) y los sucesores de la señora LIBRADA CASTILLERO PIMENTEL (q.e.p.d.).

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IVONNE FABREGA DE SUCRE RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE LE SIGUE A DELSA LORENA FABREGA DE DOWELL, LUMY FABREGA DE ARIAS E INES MARIA FABREGA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

.0CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma de abogados MOLINO Y MOLINO, en su condición de apoderada judicial de la señora IVONNE FABREGA DE SUCRE en el proceso sumario de rendición de

cuentas que su representada le sigue a DELSA LORENA FABREGA DE DOWELL, LUMY FABREGA DE ARIAS e INES MARIA FABREGA, interpuso recurso de casación para impugnar la sentencia dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial que decidiera la causa en segunda instancia.

Como quiera que el recurso fue admitido y se han surtidos los trámites previos indicados en la ley, le corresponde a la Sala resolver lo de lugar, tarea que se emprenderá a continuación.

El recurso de casación invoca como causal de fondo la violación de normas sustantivas de derecho en concepto de error de hecho sobre la existencia de la prueba, lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

El casacionista formula los cargos que le endilga a la sentencia en once motivos sobre los cuales hace descansar su inconformidad. En los seis primeros explica que el error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba atribuible al Tribunal Superior consistió en no haberse tomado en consideración las pruebas documentales representadas por las Escrituras Públicas N°8803, N°8804, N°8805, N°8806, N°8807 y N°8808, todas de fecha 19 de julio de 1988, por medio de las cuales fueron protocolizadas, ante la Notaría Tercera del Circuito de Panamá, las respectivas Actas de las Asambleas Generales de Accionistas de las sociedades anónimas que se indican a continuación: RADIO SUAVE, S. A.; POLICLÍNICA DENTAL, S. A.; HACIENDA RÍO LARGO, S. A.; RADIO INFORMACIÓN, S. A.; LIDI, S. A.; Y CORPORACION AMERICA, S. A. Asegura el recurrente que esas documentales sirven para acreditar que su representada, IVONNE FABREGA DE SUCRE, además de Directora de las mencionadas sociedades, es la propietaria de la cuarta parte de las acciones de cada una de ellas. En el motivo séptimo el casacionista acusa al tribunal de alzada de violar la ley por haber ignorado la prueba documental representada por el Contrato de Fideicomiso mediante el cual CARLOS ERNESTO FABREGA VILLAMARIN, como fideicomitente, les otorgó a sus hijas IVONNE FABREGA DE SUCRE, DELSA LORENA FABREGA DE DOWELL, LUMY FABREGA DE ARIAS e INES MARIA FABREGA la condición de beneficiarias del fideicomiso, por partes iguales, siendo que, de acuerdo a ese contrato, entre los bienes fideicomitidos se encuentra la titularidad de las acciones de las sociedades LIDI, S. A.; POLICLINICA DENTAL, S. A.; CORPORACION AMERICA, S. A.; RADIO SUAVE, S. A.; HACIENDA RIO LARGO, S. A. y RADIO INFORMACION, S. A.

Afirma el recurrente en los cuatro restantes motivos del recurso que el Tribunal Superior, en la sentencia, se apartó de los principios generales de la unidad de las pruebas, los que le imponen al juzgador la obligación de examinar cada prueba de manera aislada y apreciarlas en relación con su valor objetivo. Agrega que, no haberlas considerado, le impidió reconocerle a la parte demandante su calidad de accionista y, por tanto, de mandataria, respecto a la Junta Directiva de las mencionadas sociedades, lo cual condujo a que se desconociese el principio de que todo mandatario está obligado a rendir cuentas de su administración a sus mandantes.

En el apartado dedicado a la cita de las disposiciones legales violadas por la sentencia se hace mención de las siguientes:

-Artículo 769 del Código Judicial que enuncia los medios de prueba a través de los cuales el juez debe formarse el criterio o convicción para decidir el juicio, entre los que se encuentran incluidos los documentos.

-Artículo 50 de la Ley 32 de 1927 sobre sociedades Anónimas, donde se expresa que la Junta Directiva de dichas entidades tendrá el control absoluto y la dirección plena de sus negocios.

-Artículo 1411 del Código Civil, donde se establece que todo mandatario está obligado a dar cuentas de sus operaciones al mandante.

Con la finalidad de situar el marco dentro del cual se desarrolla esta

controversia y para poder precisar la cuestión sometida a la consideración de la Sala, conviene hacer un recuento de los aspectos principales del proceso.

Los autos informan que IVONNE FABREGA DE SUCRE inició proceso sumario de rendición de cuentas, actuando en su calidad de Directora de las sociedades que ya conocemos, contra DELSA LORENA FABREGA DE DOWELL, LUMY FABREGA DE ARIAS e INES MARIA FABREGA, para que a esas personas naturales, en su calidad de directoras de las sociedades anónimas, se les ordenase judicialmente rendir cuentas de la administración ejercida por ellas y se les condenase a pagar las costas y gastos de la acción impetrada.

En la contestación de la demanda se rechazó lo pretendido por la parte actora, sosteniéndose que los directores de las sociedades anónimas sólo están obligados a rendir cuentas a la Asamblea General de Accionistas, conforme el artículo 444 del Código de Comercio.

La primera instancia de este juicio culminó con la sentencia dictada por el Juez Tercero del Circuito de Panamá en que se declaró probada la excepción de ilegitimidad de la personería activa de IVONNE FABREGA DE SUCRE, y, por tanto, se absolvió de las pretensiones de la demandante a todas las demandadas.

La sentencia fue impugnada en apelación ante el Primer Tribunal Superior de Justicia, corporación que, mediante fallo calendado el 24 de marzo de 2000, modificó la resolución del inferior en la cuantía de las costas fijadas, pero la confirmó en todo lo demás.

En esencia, estimó el juzgador de segunda instancia que era acertada la decisión del primer nivel jurisdiccional al declarar absueltas a las demandadas, por carecer la parte actora de legitimidad activa para demandar en este juicio. Para explicar su posición en la sentencia se formularon básicamente los razonamientos que a continuación se transcriben:

> "Lo anterior nos lleva afirmar que la acción denominada Rendición de Cuentas, en el Derecho privado, así tenga origen en la ley Civil o Comercial, es propia del que poseyendo una determinada relación sustancial con otro por virtud de un contrato, por ministerio de la Ley o por el solo hecho de haber existido una determinada gestión, es capaz de exigir a otro que le rinda cuentas.
>
> En el caso subjúdice, la Actora desde su condición de Directora, no se encuentra facultada ni por el Código de Comercio, ni por la Ley de sociedades anónimas para reclamar cuentas a un igual y sobre su argumento de ser la titular del 25% de las acciones de la(sic) sociedades administradas por las demandadas, queda por señalar que tal afirmación no tiene ningún sustento probatorio que amerite mayor comentario, que en el caso de ser cierta, coloca a la demandante en una posición distinta a la plasmada en su libelo de demanda.
>
> En opinión de este Tribunal Colegiado, los reparos que endilga la censura a lo resuelto por el Juez de la causa no encuentra justificación legal, puesto que, contrario a lo que pretende, el interés o disconformidad que pueda tener la demandante con respecto al manejo de la(sic) sociedades que administran las demandadas, no la legítima para requerir judicialmente la rendición de cuentas que se estudia, puesto que cualquier reclamo respecto de las cuentas y balances de las sociedades debe hacerlo la Asamblea General de Accionista si a bien lo tiene.
>
> Cabe anotar, en relación a lo antes dicho, que el Artículo 425 del Código de Comercio, en concordancia con el 444, citado este último por el Juez de la Causa, contempla la posibilidad de que sea la Asamblea General de Accionista por medio de acuerdo, quien exija responsabilidad de su gestión a los directores, permitiendo incluso

> las referidas normas que un grupo de accionista que representen un vigésimo del capital social, pidan a un Juez sin más trámites, el nombramiento de revisores para el examen del balance o gestión social de la sociedad."
> (págs. 255,256)

Cuando se efectúa la necesaria confrontación de los errores probatorios que se le imputan en el recurso a la sentencia con el contenido de ésta, se puede apreciar que el cuestionamiento del recurrente se reduce y se circunscribe al hecho de que, en su opinión, determinadas pruebas, con las cuales se acreditó la condición de accionista de la parte actora, resultaron ignoradas por el juzgador, pues del contenido de esas pruebas se desprende que IVONNE FABREGA DE SUCRE es accionista de tales sociedades, y, en consecuencia, se encuentra plenamente legitimada para demandar en esta causa, contrario a lo decidido por la resolución atacada.

Así las cosas, ha de ser abordado el estudio de las piezas probatorias señaladas por la censura como no tomadas en cuenta por la sentencia, a fin de poder determinar si el pretendido error de hecho influyó o no en lo dispositivo de la resolución recurrida.

Ya hemos visto que el primer grupo de pruebas documentales calificadas por la censura como ignoradas en el fallo consisten en las Escrituras Públicas de las que, en su opinión, el juzgador debió desprender que la parte actora de este juicio era, en efecto, accionista de las sociedades anónimas, y, en consecuencia, estaba legitimada para ejercer la acción incoada en el proceso.

En cada una de esas Escrituras Públicas, y para lo que interesa en este juicio, aparece una frase en donde se expresa que los miembros de la Junta Directiva de las sociedades, entre los que se encuentra la parte demandante, son dueños por partes iguales del 100% de las acciones de cada una de ellas.

En su esfuerzo por rebatir el argumento de la actora, en relación con el extremo en cuestión, la representación de la parte demandada ensaya la tesis de que, el hecho acerca de si la señora IVONNE FABREGA DE SUCRE era o no accionista de las sociedades nunca fue materia de debate en este proceso. Añade que, en cualquier caso, la titularidad que se tenga sobre las acciones nominativas de una sociedad anónima hay que acreditarla a través del registro especial de ellas en los libros de la sociedad -en especial en el de Registro de Acciones- que de manera obligatoria deben ser llevados por estas entidades de Derecho Mercantil. A su juicio, al no producirse esa prueba, la señora DE SUCRE no ha demostrado su calidad de accionista.

Para valorar la fuerza probatoria de las Escrituras Públicas no tomadas en cuenta por la sentencia será necesario examinar lo que esos documentos concretamente representan. Se trata de escrituras extendidas para protocolizar las actas de las asambleas generales extraordinarias de accionistas de cada una de las sociedades, en donde se tomaron los acuerdos de designar nuevos directores, dignatarios y agente residente. Así mismo, en esas reuniones se reiteró el poder general otorgado al presidente de la sociedad y se manifestó que las faltas de éste serían llenadas por el vicepresidente, agregándose que determinadas facultades serían ejercidas por la junta directiva, cuyos miembros son, según se indica también, los dueños del total de las acciones.

Como puede apreciarse, el acto contenido en las Escrituras Públicas tiene como móvil principal o determinante asuntos que son ajenos al tema de la titularidad de las acciones de las sociedades. Los propósitos que se deseaban alcanzar con esos actos perseguían, en realidad, certificar o dejar constancia de hechos distintos al tema relacionado con la propiedad accionaria. Las resoluciones tomadas en las asambleas generales extraordinarias de accionistas eran atinentes, sobre todo, a la designación de nuevos directores y dignatarios de las sociedades. Lo otro, lo que tiene que ver con la identidad de los accionistas no puede ser estimado más allá del carácter incidental que posee

dentro de esos documentos la alusión formulada de manera indirecta. No se puede afirmar que la calidad de accionista de cualquier persona en las sociedades haya quedado fehacientemente acreditada a través de las Escrituras Públicas que son objeto de examen en virtud de este recurso de casación. Para probar ese extremo se requería acudir a pruebas mucho más seguras y categóricas. En este caso, ni siquiera nos encontramos ante actos cuya consecuencia sea la de producir efectos inter-partes, pues, si bien en la elaboración de las actas de las asambleas generales que fueron escrituradas participó la parte demandante (IVONNE FABREGA DE SUCRE) en su condición de secretaria de las mismas, ninguna constancia existe de que las demandadas intervinieran como partes en su elaboración ni que hubiesen hecho manifestaciones respecto a su contenido que representase la aceptación correspondiente. Lo cierto es que del contenido de esas escrituras no se puede deducir que las partes de este proceso (demandante y demandadas) hubiesen consignado manifestación conjunta que sirviese para acreditar la calidad de accionista de todas o de alguna de ellas en particular.

Por otro lado, atendible le parece a la Sala el razonamiento de la parte demandada acerca de la forma en que debe acreditarse la titularidad de las acciones nominativas, haciendo énfasis en el empleo, para ese propósito, de lo que conste en el Libro de Registro de Acciones de las sociedades. Al margen de no compartir el criterio de la parte demandada en el sentido de que esa sea la única forma eficaz de acreditar tal hecho -nada se opone a que la titularidad de las acciones se demuestre con el propio certificado de acciones, por ejemplo-, no deja de ser verdad, por otro lado, que la propiedad sobre esos títulos (las acciones) se encuentra, en el caso de las sociedades anónimas, sujeta a una considerable posibilidad de cambios en razón de la movilidad mercantil de esta clase de entidades. Por esa razón, el hecho de que este juicio de rendición de cuentas se hubiese iniciado en octubre de 1994 y las Escrituras Públicas, cuyo valor probatorio se reclama, se hubiesen otorgado seis años antes (junio de 1988) también impide que estas últimas se tomen como prueba incuestionable de que la demandada es accionista y de que debido a ello gozaba de legitimidad para demandar.

La otra prueba aducida como ignorada por la sentencia (la fotocopia simple del Contrato de Fideicomiso visible a fojas 139 y 140) es un documento privado que se otorgó sin la intervención de las partes de este proceso. Cuando el documento se examina no es dable desprender de su contenido datos que indiquen que la señora IVONNE FABREGA DE SUCRE fuese ciertamente accionista de las sociedades envueltas en esta controversia. El contrato de fideicomiso detalla prolijamente la información relativa al fideicomitente, al fiduciario, al fideicomisario principal, a los fideicomisarios sustitutos, a los bienes fideicomitidos, a los beneficiarios y a la gestión fiduciaria. Pero en ninguna parte de ese documento se establece o se acredita que la señora IVONNE FABREGA DE SUCRE fuese accionista de dichas sociedades.

En atención a las consideraciones anteriores la Sala está obligada a manifestar que no encuentra justificados los cargos que el recurrente le ha formulado a la sentencia, ya que con las pruebas denunciadas como ignoradas por el tribunal no es posible acreditar que la parte actora tuviese la legitimidad en causa para demandar en este proceso por ser accionista de las sociedades anónimas administradas por los directores demandados en juicio.

Por las consideraciones anteriores, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia del 24 de marzo de 2000 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial en el proceso sumario de rendición de cuentas propuesto por IVONNE FABREGA DE SUCRE contra DELSA LORENA FABREGA DE DOWELL, LUMY FABREGA DE ARIAS e INES MARIA FABREGA.

Las costas de casación se fijan en la suma de TRESCIENTOS BALBOAS (B/.300.00).

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EMMA PORCEL DE TEJEIRA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO QUE LE SIGUE JAVIER TEJEIRA MUÑOZ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Esta Sala de la Corte, mediante resolución de fecha 17 de julio de 2000, ordenó la corrección del recurso de casación presentado por la licenciada RUFINA LAMBRAÑO, apoderada judicial de EMMA PORCELL DE TEJEIRA, contra la sentencia de 28 de enero de 2000 dictada por el Tribunal Superior de Familia, en el proceso de divorcio que le sigue a JAVIER TEJEIRA MUÑOZ.

Vencido el término para la corrección del recurso y habiéndose efectuado en tiempo oportuno, la Sala procede al examen del nuevo escrito que corre de fojas 244 a 250 del expediente, para decidir en forma definitiva su admisibilidad.

Según se ha observado, el defecto señalado a la recurrente fue debidamente subsanado, por lo que la Sala considera pertinente proceder a su admisibilidad.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el recurso de casación propuesto por la licenciada RUFINA LAMBRAÑO, apoderada judicial de EMMA PORCELL DE TEJEIRA, contra la sentencia de 28 de enero de 2000 dictada por el Tribunal Superior de Familia, en el proceso de divorcio que se le sigue a JAVIER TEJEIRA MUÑOZ.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MARIA BAGATELAS DE PAPADIMITRIU (HEREDERA AB-INTESTATO DE BASILIO BAGATELAS O BASILIO GEORGE BAGATELA) RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A CONSTANTINO JUAN LEKAS Y MANUEL GRAVILIDES O MANUEL GAVRILIDES. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMA, DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma de abogados AGUILERA FRANCESCHI, actuando en condición de apoderada judicial de MARIA BAGATELAS DE PAPADIMITRIU, ha interpuesto Recurso de Casación contra la sentencia de 20 de marzo de 2000 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro del proceso ordinario que la casacionista le sigue a CONSTANTINO LEKAS Y MANUEL GAVRILIDES.

Cumplidas las reglas de reparto el negocio se fijó en lista para que las partes alegaran en cuanto a la admisibilidad del recurso, derecho del cual hicieron uso el opositor(2075 a 2076) y el recurrente (2077 a 2080).

Así las cosas, la Sala procede a determinar si el recurso reúne los requisitos establecidos por el artículo 1165 del Código Judicial. En ese sentido observa que han sido invocadas una causal de forma y tres de fondo.

La resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley y el recurso ha sido interpuesto en tiempo. No obstante, al revisar el escrito de formalización se observa que no cumple con ciertos requisitos propios de este extraordinario recurso. Veamos:

Señala el recurrente que la causal de forma es la consagrada por el artículo 1155, ordinal 1o., del Código Judicial y la expresa en los siguientes términos: "Por haberse omitido el trámite y el deber imperativo consistente en tomar en cuenta, antes de dictar la sentencia, la decisión o decisiones de otra u otras jurisdicciones, que guarden relación con los hechos de este proceso".

En los tres motivos que fundamentan esta causal se señala que dentro del expediente consta la existencia de tres procesos, uno penal y dos laborales, los que guardan relación con los hechos o pretensiones de este proceso, sin embargo, ni el juez de primera instancia ni el tribunal de segunda instancia consideraron las decisiones finales de los mismos al momento de fallar.

En cuanto a las causales de forma, el artículo 1179 dispone lo siguiente:

> "ARTICULO 1179. El recurso de casación en cuanto a la forma no será admisible si no se hubiere reclamado la reparación de la falta en la instancia en que se haya cometido y también en la siguiente, si se cometió en la primera, salvo si el reclamante hubiere estado legítimamente impedido para hacerlo se tratare de un vicio insubsanable o no convalidable.
>
> Si la causa que motiva el recurso ha tenido lugar en la última instancia y no ha habido posibilidad de reclamar contra ella, se admitirá el recurso."

Según se ha podido verificar, en el escrito de sustentación del recurso de apelación de la parte actora-casacionista, que corre a fojas 1996 a 2007, no se hizo la reclamación de la falta que se alega como fundamento de la causal, consistente en no tomar en cuenta la resolución final de los procesos que se ventilaron en otras jurisdicciones. Tampoco se aprecia que se haya hecho referencia a esta circunstancia en el escrito de alegato de conclusión presentado previo al fallo de primera instancia que reposa de fojas 1922 a 1953 del expediente.

Por lo anterior y en atención al precepto legal antes citado, la causal de forma no puede ser admitida.

Se procederá enseguida a revisar el contenido de las causales de fondo.

I- PRIMERA CAUSAL DE FONDO: "Infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia recurrida".

Esta causal ha sido fundamentada en tres motivos que contienen dos cargos de injuridicidad contra la sentencia de segunda instancia, ya que en los motivos segundo y tercero uno solo es el cargo formulado. La técnica de este recurso indica que en cada motivo se debe señalar un cargo, siempre distinto al aludido en los otros. Se observa, por otro lado, que en este apartado el recurrente no expresa cuál fue el derecho sustantivo violado por razón del error probatorio denunciado, ni en qué forma la acusada violación influyó en lo dispositivo del fallo.

En el apartado referente a la cita y explicación de las normas de derecho infringidas, tenemos que el recurrente menciona, en ese orden, los artículos 310,

315, 1755 del Código Civil; el artículo 17 de la Ley 100 de 30 de diciembre de 1974; y, finalmente, los artículos 821, 823, 896 y 1534 del Código Judicial.

Al revisar el contenido y concepto de infracción del primer grupo de normas (las del Código Civil y la de la Ley 100 de 1974), vemos que se alega, en todos los casos, que han sido violadas en forma directa por omisión y no como consecuencia de la violación de normas que encierren reglas de valoración probatoria, desconociéndose que las citadas, por su carácter sustantivo, sólo serán susceptibles de ser violadas, conforme a la causal probatoria alegada, en forma indirecta, o sea, a consecuencia de la infracción de las normas adjetivas que regulan la valoración de las pruebas. Además, al explicar la violación de estas disposiciones, se insiste y se repite lo siguiente: "El fallo recurrido ha señalado que no se ha probado que el mandatario LEKAS tenía conocimiento de la muerte de BAGATELAS, dando un valor probatorio a la certificación de defunción expedida por el Registro Civil que consta en autos, distinto al que establece la norma en mención ...".

Lo anterior también se repite en el concepto de infracción de las normas del Código Judicial (las adjetivas) que se dicen violadas, entre las cuales se invoca el artículo 821, que sólo cabría ser citado en caso de alegarse la causal de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba. Adicionalmente, entre los preceptos del Código Judicial citados, al final del apartado, se incluyen tres artículos adicionales a los que fueron citados inicialmente, siendo que los dos primeros (artículos 988 y 1004) nada tienen que ver con la valoración de pruebas, sin que se comprenda cuál es el último, pues el escrito es ilegible en razón de varias líneas que aparecen borradas. (Cfr. fs.2047).

En suma, a juicio de la Sala, la forma en que ha sido estructurado y presentado el recurso es muy confusa, fuera del grave error de no haberse planteado con precisión y claridad porqué las normas sustantivas se infringieron como consecuencia del error probatorio que se le endilga al fallo. En este sentido, la Corte ha manifestado en reiteradas ocaciones que, tratándose de las causales probatorias, es necesario e imprescindible que se mencionen las disposiciones civiles sustantivas violadas con motivo de la errada apreciación de la prueba, debido a que son dichos preceptos sustantivos los que consagran derechos y obligaciones y determinan los agravios sufrido por el recurrente.

Por tanto, esta causal tampoco puede ser admitida por ininteligible.

II- SEGUNDA CAUSAL DE FONDO: "Infracción de normas sustantivas de derecho por violación directa, por omisión, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución".

En los dos motivos que se establecen como fundamento de esta causal el recurrente expresa lo siguiente:

> "b) Motivos.
> 1- La resolución recurrida considera que la prescripción de la acción de la demandante, MARIA BAGATELAS DE PAPADIMITRIU, empieza a correr desde que la obligación se hizo exigible desde el momento en que MARIA BAGATELAS DE PAPADIMITRIU fue declarada heredera; y al hacer esta apreciación viola directamente, por omisión, la norma civil que establece que el término de prescripción de las acciones para exigir la rendición de cuentas corre desde el día en que cesa el mandato y, en consecuencia, el término de prescripción de la acción para reclamar el saldo corre, por temprano, de ese momento en adelante y no antes, violándose así, de manera directa, por omisión, claras normas sustantivas que establecen cuando inicia el término de prescripción de las acciones derivadas del mandato, violación que ha influido sustancialmente en la parte dispositiva de la resolución. Lo anterior, si es que se considera que la relación entre la sucesión de BAGATELAS Y LEKAS, de 1980 a 1991 era una relación de mandato.

2- La resolución recurrida considera que la prescripción de la acción de la demandante, MARIA BAGATELAS DE PAPADIMITRIU, empieza a correr desde que la obligación se hizo exigible y esta se hizo exigible desde que MARIA BAGATELAS DE PAPADIMITRIU fue declarada heredera; y al hacer esta apreciación viola directamente, por omisión la norma civil que establece que el término de prescripción de las acciones para exigir los daños derivados de la responsabilidad civil extracontractual corren desde que la persona agraviada supo de la existencia del daño y mal podía la señora MARIA BAGATELAS DE PAPADIMITRIU saber si se había perjudicado el patrimonio de la sucesión por parte de LEKAS de 1980 a 1990, si los bienes y sus documentos no estaban en su poder- sino en poder de LEKAS, quien ha confesado en sus dos alegatos considerarse como copropietario de los bienes. La señora MARIA BAGATELAS DE PAPADIMITRIU supo del daño cuando los bienes le fueron adjudicados y entregados en 1991, no antes. Producto de esta estimación se viola de manera directa, por omisión, claras normas sustantivas que establecen cuando inicia el término de prescripción de las acciones derivadas de la responsabilidad civil extracontractual, violación que ha influido sustancialmente en la parte dispositiva de la resolución. Lo anterior, si es que se considera que la relación entre la sucesión de BAGATELAS Y LEKAS, de 1980 a 1991 era una relación extracontractual, porque se dio noticia a LEKAS de la muerte de BAGATELAS, dándose, así por terminado el mandato."
(fs. 2048)

Como se puede apreciar, estos motivos no han sido estructurados conforme a la técnica requerida para el recurso de casación, pues no se limitan a señalar el obligante cargo de injuridicidad contra la sentencia, si no que incluyen una serie de consideraciones y alegaciones del recurrente que dificultan precisar cuál es el cargo en concreto. Además dichas argumentaciones, sobre situaciones que se produjeron dentro del proceso, como las apreciadas en el segundo motivo, dan lugar a la incongruencia de su contenido con la causal aducida, ya que ésta sólo se produce, cuando entendida directa y claramente una norma, sin ser objeto de análisis interpretativo, deja de ser aplicada al caso pertinente o se aplica desconociendo un derecho en ella contenido, siempre con independencia de toda cuestión de hecho o probatoria, ya que el tribunal de casación, en la primera fase, debe tener como hechos los reconocidos en la sentencia. (ver FABREGA P., Jorge, CASACION -1995-, P.128-129).

Consecuentemente, el recurrente debe corregir esta causal de fondo, de manera que haya congruencia, así como y la debida estructuración en su contenido.

III- TERCERA CAUSAL DE FONDO: "Infracción de normas sustantivas de derecho, por error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, lo que ha influido sustancialmente en la parte dispositiva de la sentencia recurrida".

El defecto principal que se evidencia en esta causal es que la norma probatoria que se cita como violada no es pertinente, pues el artículo 770 del Código Judicial citado determina cómo deben ser valoradas las pruebas por el sentenciador, materia propia de la causal de error de derecho en la apreciación de la prueba que es distinta a la invocada. Para efectos de la causal de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba se deben invocar las normas enumerativas de los medios de pruebas, para, posteriormente, citar las de carácter sustantivo infringidas como consecuencia del error probatorio.

Se advierte a lo largo del escrito que éste trae partes borrosas e indescifrables que hacen imposible su completa lectura.

No obstante, a juicio de la Corte, en caso de la tercera causal de fondo cabe la posibilidad de su corrección.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la causal de forma y la primera causal de fondo y ORDENA LA CORRECCION de la segunda y tercera causales de fondo invocadas en el recurso de casación interpuesto por MARIA BAGATELAS DE PAPADIMITRIU contra la sentencia de 20 de marzo de 2000 citada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro del proceso ordinario que ésta le sigue a CONSTANTINO LEKAS y MANUEL GAVRILIDES.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

LEONIDAS ABREGO TORRES RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A RAFAEL ANGEL CASTRELLON R. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FABREGA Z. PANAMA, VEINTIDOS (22) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma de abogados MURGAS & MURGAS, apoderada judicial del señor LEONIDAS ABREGO TORRES, en su nombre y representación ha presentado recurso extraordinario de casación, en la forma, contra la resolución de 30 de mayo de 2000, expedido por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, en el proceso ordinario que la parte recurrente le sigue a RAFAEL ANGEL CASTRELLON R..

Repartido el recurso, se fijó en lista por el término de ley para que las partes presentasen sus alegatos de admisibilidad. Vencido el término anterior, procede la Sala a decidir la admisibilidad del mismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial.

El recurso cumple con la formalidades inherentes a la cuantía, formalización oportuna del recurso y, además, la resolución que se impugna es de las que admite recurso de casación en contra.

En cuanto a los requisitos del escrito contentivo del recurso, advierte la Sala que el recurrente invoca una sola causal de forma, cual es, "Por haberse omitido algún trámite o diligencia considerado esencial por la Ley". Seguidamente señala el casacionista, "esta causal ha influido substancialmente en lo dispuesto en el Auto Civil impugnado", frase que no obstante, no constituir formalidad estricta de las causales de forma, pues el artículo 1154 del Código Judicial la reserva para la causal de fondo, la misma, por si sola, no causa la inadmisión del recurso.

Los motivos que sustentan la causal, que son cinco, se refieren a la omisión en la notificación del oficio girado por el Juzgado de la causa a los juzgados Cuarto y Tercero del Circuito de Chiriquí, Ramo Penal, para conocer el estado del incidente de daños y perjuicios promovido en el proceso penal respectivo. También señala el recurrente como trámite omitido, el traslado de la solicitud de litispendencia y rechazo de la demanda formulado por la parte opuesta al recurso en el presente proceso, en virtud de la cual declaró el ad-quem la existencia de litispendencia y rechazo de la demanda.

En cuanto a las disposiciones infringidas y la correspondiente explicación de las violaciones a las normas que se citan como tal, señala el casacionista el artículo 687 y 698. Dichas normas, se refieren, la primera a la tramitación como incidente de las cuestiones accesorias al proceso, lo cual deberá llevarse a efecto con la audiencia de las partes lo que se incumplió al omitirse la comparecencia de las partes, señala el casacionista.. La segunda disposición,

establece la corrección de las peticiones que se presenten al proceso, a las cuales corresponda el trámite de incidente, cuando no se formulen como tal. Según el recurrente se violó la norma comentada al no ordenarse la corrección de la solicitud, para darle el trámite de incidente y en consecuencia darle traslado de la misma.

En virtud de lo que viene expuesto, esta Superioridad estima que en el presente recurso se dan los presupuestos de ley para la admisión del recurso de casación que se presenta, por lo que, actuando en consecuencia, debe admitírsele.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA CIVIL, actuando en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación en la forma presentado por el señor LEONIDAS ABREGO TORRES, mediante apoderado legal, contra la resolución expedida el 30 de mayo de 2000 por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MARIA LUISA BRAVO ZUÑIGA RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A SUCESIÓN TSETADA Y/O INTESTADA DE LUISA SANCHEZ SAMPERO Y LOS DEMÁS HEREDEROS DECLARADOS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, VEINTIDOS (22) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

En la resolución que expidiera la Sala Civil el 31 de julio de 2000, se ordenó al licenciado EDWIN ALBERTO MEDINA, apoderado legal de MARIA ISABEL BRAVO ZUÑIGA, corregir el recurso de casación en el fondo que había interpuesto contra la sentencia proferida el 9 de noviembre de 1999, por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.

Para corregir, el recurrente contó con los cinco (5) días que la ley confiere para tales efectos. De foja 307 a 312 del expediente, reposa el escrito de corrección presentado oportunamente; procede la Sala, entonces a pronunciarse respecto a la viabilidad del mismo, teniendo como referencia los presupuestos establecidos en los artículos 1165 y 1160 del Código Judicial.

La Sala, luego de revisar el escrito de corrección, encuentra que en el mismo se han corregido adecuadamente todos los defectos que le habían sido señalados, de manera que en esta oportunidad el recurso aparece expuesto en completo apego a lo que las disposiciones legales exigen para la procedencia de este tipo de recurso, por consiguiente, debe la Corte admitirlo.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación en el fondo interpuesto por MARIA ISABEL BRAVO ZUÑIGA, mediante apoderado legal, contra la resolución del PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE PANAMA.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO

Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

NONAME CORP., S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE SECUESTRO PRESENTADO POR LA PARTE DEMANDADA DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO INCOADO POR NONAME CORP., S. A. Y/O JAIME CUCALÓN D`ANELLO CONTRA PATRICIO CLERECI. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, VEINTITRES (23) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado JOSÉ HERRERO VICTORIA, apoderado judicial de la sociedad anónima NONAME CORP., S. A., ha interpuesto recurso de casación contra la Resolución de 31 de mayo de 2000 proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, en el cuadernillo de incidente de levantamiento de secuestro presentado por la parte demandada dentro del proceso ordinario propuesto por NONAME CORP., S. A. y/o JAIME CUCALÓN D`ANELLO contra PATRICIO CLERECI.

Transcurrido el término que se le concedió a las partes para que dejaran oír sus puntos de vista acerca de la admisibilidad del recurso, el cual fue aprovechado por ambas partes, corresponde a la Sala decidir sobre su admisibilidad, a lo que se procede, tomando en consideración para ello, los requisitos establecidos en los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial.

Se está en presencia de un auto que decide el levantamiento en procedimiento cautelar, así como versa el proceso en una cuantía superior a los B/.10,000.00, por lo cual la resolución dictada por el Tribunal Superior, en segunda instancia, es de aquellas resoluciones que admiten el recurso de casación.

En cuanto a la exigencia establecida en el artículo 1165 del Código Judicial, en relación con el artículo 1159 de ese cuerpo de leyes, en materia de interposición oportuna del recurso, esto es, por el término improrrogable de diez (10) días, se observa que el mismo se formalizó en tiempo.

Como causal de fondo se invoca infracción de normas sustantivas de derecho, en base a: 1.-Error de hecho sobre la existencia de la prueba; y 2.-Error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba.

La primera de las causales aparece mal enunciada, siendo que el casacionista la invoca de la siguiente manera: "error de hecho sobre la existencia de la prueba", cuando conforme al artículo 1154 del Código Judicial ha debido enunciarla así: Infracción de normas sustantivas de derecho por error de hecho sobre la existencia de la prueba que ha influído sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

En cuanto a los motivos expuestos, la Sala observa que en el primero se hace un pequeño recuento del proceso, en el segundo motivo se señalan una serie de pruebas, y en el tercero, el recurrente invoca otros elementos ajenos a este apartado del recurso e, incluso, alude a otro concepto distinto: el de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba; todo lo cual resulta contradictorio y apartado de la técnica del recurso de casación, sin que ninguno contenga un cargo de injuricidad contra la resolución impugnada.

Con respecto a la citación de las normas de derecho infringidas, la Sala considera que los mismos reúnen, de manera general, los requisitos exigidos por la ley. Sin embargo, al estudiar la explicación de las normas de derecho supuestamente infringidas y su respectivo concepto de violación, la Sala advierte que el casacionista sólo menciona y explica las normas adjetivas de procedimiento, pero sin citar y emitir concepto respecto a las disposiciones

sustantivas violadas a consecuencia del posible error probatorio.

La segunda causal invocada es: "error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba"; por lo que no ha sido expresada en los términos exactos que establece el artículo 1154 citado. La manera apropiada es: Infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

En el primer motivo, así como en el segundo, el recurrente se limita a señalar que dentro del cuadernillo de incidente de levantamiento de secuestro, las partes han presentado múltiples pruebas las cuales son contradictorias las unas con las otras, pero sin aclarar o señalar cuáles son dichas pruebas, en qué fojas se encuentran y cómo pudieron influir en la decisión atacada.

Asimismo, la Sala observa que los motivos sexto, séptimo y octavo se hace en ellos un recuento del proceso, como si se tratara de un alegato de instancia, sin que se haga un cargo de injuricidad contra la resolución impugnada.

Con respecto a la citación de las normas infringidas y la explicación de cómo lo han sido, el recurrente no incluyó la norma que establece el valor de la prueba documental, así como también las violaciones a las disposiciones sustantivas como consecuencia del error probatorio.

De manera general, aprecia la Sala que el presente recurso extraordinario de casación, ha sido configurado de una forma errónea, aunado al no cumplimiento de una serie de requisitos indispensables para la admisión del mismo, lo cual lo hace ininteligible y por tanto inadmisible.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación en el fondo presentado por el Licenciado JOSÉ HERRERO VICTORIA contra la Sentencia de 31 de mayo de 2000, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Las costas de casación se fijan en setenta y cinco balboas (B/.75.00).

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SUSANA HERNÁNDEZ RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A LUISA GUEVARA DE BECERRA Y ALEJANDRO BECERRA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA Z. PANAMA, VEINTITRES (23) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado WALDO SUÁREZ PÉREZ, en nombre y representación de la señora SUSANA LUZMILA HERNÁNDEZ, ha presentado recurso de casación contra la resolución de 3 de abril de 2000, expedida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial en el proceso ordinario que la recurrente le sigue a los señores LUISA DE BECERRA y ALEJANDRO BECERRA.

El recurso fue repartido y fijado en lista para los alegatos de admisibilidad, tanto de la parte recurrente como de la opuesta al recurso, vencido el cual procede la Sala a determinar si el escrito de casación propuesto

cumple con los requisitos que los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial establecen para su viabilidad.

El artículo 1165 se refiere a las formalidades del recurso para su concesión, estableciendo como tales las siguientes:

1. Que la resolución objeto del recurso sea de aquellas contra las cuales lo concede la ley;
2. Que el recurso haya sido interpuesto en tiempo;
3. Que el escrito por medio del cual se interpone reúna todos los requisitos ordenados por el artículo 1160; y
4. Que la causal expresada sea de las señaladas por la ley.

En el presente caso se impugna, mediante el recurso que se propone, una sentencia de segunda instancia proferida en proceso de conocimiento, la que, a tenor de lo previsto en el artículo 1149, numeral 1° del Código Judicial, admite recurso de casación en contra. Además, consta en el expediente que el mismo fue interpuesto en tiempo.

En cuanto a los requisitos que debe cumplir el escrito establece el artículo 1160 referido, los siguientes:

1. Determinación de la causal o causales que invoque;
2. Motivos que sirven de fundamento a la causal; y
3. Citación de las normas de derecho infringidas y explicación de cómo lo han sido.

En el escrito de casación que se examina, se invoca una sola causal de fondo. El casacionista la enuncia en los términos siguientes, "infracción de normas sustantivas de derecho en cuanto a la aplicación indebida, y en cuanto a la apreciación de la prueba existe violaciones de derecho". Como se aprecia, la causal ha sido enunciada de manera errónea, por cuanto se citan de manera conjunta dos conceptos de infracción de la causal de fondo que se invoca.

Debe recordar el casacionista, que cuando se invocan varias causales, éstas deben presentarse separadamente, lo cual concuerda con lo dispuesto en el artículo 1177 del Código Judicial el cual establece:

> "La Corte, en la decisión que pronuncie, examinará con la debida separación cada una de las causales y sus fundamentos".

Con relación al primer requisito del artículo 1160 antes citado, apreciamos que se invocan dos causales en el fondo. No obstante incurre el recurrente en el error de invocarlas de manera conjunta, es decir, una a continuación de la otra, lo cual contradice la estructura misma del recurso. La Corte, en cuanto a ello, ha sido enfática al sostener, que cuando se invoque más de una causal, cada una debe ser invocada por separado y a continuación de la misma, exponer los motivos en los que se apoya la mencionada causal y citar, luego, las normas de derecho infringidas, con sus respectivas explicaciones de cómo lo han sido.

Debe expresarse que la Sala en reiterados pronunciamientos ha dejado sentado el criterio de que el artículo 1154, en realidad, consagra una sola causal de fondo, cual es, la "infracción de normas sustantivas de derecho". Que, la violación directa, aplicación indebida o interpretación errónea de la norma de derecho, error de hecho sobre la existencia de la prueba y de derecho en cuanto a la apreciación de la misma, constituyen conceptos de violación, es decir, manera o formas de configuración de la causal indicada.

De manera, entonces, que cuando se invoque la causal de fondo consagrada en el artículo 1154 citado, deberá enunciarse, en primera instancia, la causal, "infracción de normas sustantivas de derecho" y a continuación indicar el concepto de infracción, por lo que no cabe citar varios conceptos de infracción en una misma causal, como ocurre en el presente caso, sino que, como se dijo,

cada concepto de infracción debe estructurarse en causal separada de la misma manera que se ha dejado expuesto

La Sala estima que el error en que se ha incurrido en el presente recurso, en cuanto a la enunciación de la causal, al tenor del artículo 1167 del Código Judicial ocasiona su inadmisión, toda vez que el mismo resulta ininteligible.

Con respecto a los motivos y a las normas de derecho consideradas infringidas por el recurrente, se invocan en forma conjunta, respecto de las dos causales, cuando lo que ha debido hacer es, como se dijo antes, exponer cada causal con sus motivos y las normas citadas como infringidas, separadamente.

Advierte la Sala que debido a la redacción tan confusa que elabora el recurrente no se puede entrar a examinar el presente recurso. Reitera esta Sala, que las normas infringidas deben citarse respecto de cada causal por separado, a continuación de la causal y los motivos; además cada norma debe citarse con su respectivo concepto de la infracción. Ello es así, toda vez que al enunciarse dos conceptos de infracción en una misma causal, no puede determinarse respecto de cual concepto de infracción se formulan cada uno de los cargos contenidos en los motivos que sustentan la causal, así como tampoco, respecto de que concepto de infracción se citan las normas legales que se indican como infringidas y la respectiva explicación de tales infracciones.

Además, debe indicarse que las causales de fondo, que son conceptos distintos de producirse una infracción a la ley, no pueden encerrar dos conceptos que se excluyen, como lo son la aplicación de la norma en la forma indebida, que se produce, con abstracción de toda cuestión de hecho, y las denominadas causales probatorias, en que la violación a la ley se produce por haber valorado en forma indebida una prueba o haber desconocido una probanza que operaba en el expediente, es decir, ataca distintamente a la actitud del tribunal frente a la prueba.

La importancia de fundar el recurso en la causal que corresponde es de la esencia misma de este recurso extraordinario, que sólo cabe por motivos determinadas en ley, motivo que opera como una limitación a la competencia de la Sala.

Lo anterior evidencia que el escrito contentivo del recurso de casación que se formula contra la sentencia que se impugna no cumple con los requisitos dispuesto en el artículo 1160 del Código Judicial, por lo que debe esta Superioridad, actuando en consecuencia, declararle inadmisible.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación en el fondo propuesto por SUSANA HERNÁNDEZ, mediante apoderado judicial, contra la resolución expedida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, el 3 de abril de 2000.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO

(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

KAREN MARCELA SIERRA RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO DE FILIACION QUE LE SIGUE JUAN CARLOS SILVA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FABREGA Z. PANAMA, VEINTITRES (23) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado RAFAEL RODRIGUEZ A., apoderado judicial de la señora KAREN MARCELA SIERRA, ha interpuesto recurso extraordinario de casación contra la sentencia expedida por el Tribunal Superior de Familia de Panamá el 20 de octubre de 1999, dentro del proceso de filiación que a la parte recurrente le sigue JUAN CARLOS SILVA.

Del recurso se cumplió la fase de admisibilidad y, habiéndose admitido el mismo, la de alegatos de fondo con la participación de las partes, inclusive, del Ministerio Público. Vencido el término de alegatos, procede la Sala a resolver el recurso, para lo cual resulta conveniente dejar expuesto los antecedentes procesales que sirven de marco al recurso que se examina.

ANTECEDENTES

JUAN CARLOS SILVA QUIJADA, mediante apoderado judicial interpuso demanda de filiación en favor de la menor ANA MARIA SIERRA, hija de KAREN MARCELA SIERRA CASTRELLON, para que, cumplidos los trámites procesales inherente a este tipo de proceso, se declarase que es el padre de la menor de edad en cuyo favor se promueve el presente proceso.

La demanda presentada quedó radicada en el Juzgado Tercero Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá y le fue corrida en traslado al Ministerio Público y a la parte demandada, KAREN MARCELA SIERRA, la cual al darle contestación, negó en el escrito respectivo haber tenido relaciones íntimas con el demandante JUAN CARLOS SILVA y, además, afirma haber quedado embarazada encontrándose en Estados Unidos.

Contestada la demanda, procedió el juzgado de la causa a fijar la fecha de celebración de la audiencia oral, la cual se verificó a la hora y fecha acordada. En el acto de audiencia, tuvieron las partes la oportunidad de aducir pruebas de carácter documental, pericial y testimonial, las cuales fueron posteriormente evacuadas.

Cumplidas con todas las fases procesales previstas para este tipo de proceso, procedió el juzgado de la causa a resolver el negocio, mediante sentencia N° 500, expedida el 12 de noviembre de 1998 y en la que se declara no probada la filiación interpuesta por JUAN CARLOS SILVA QUIJADA contra KAREN MARCELA SIERRA CASTRELLON.

De la resolución anterior apeló la parte demandante, correspondiéndole, en segunda instancia, el conocimiento al Tribunal Superior de Familia. Previo a la resolución de fondo, se ordenaron la práctica de algunas pruebas, de carácter testimonial y otra de carácter científico, la prueba de ácido Desoxirribunocleico o A.D.N., no habiéndose podido practicar ésta última, por no estar disponible en el Ministerio Público en ese momento.

Mediante resolución de 20 de octubre de 1999 decidió el ad-quem el recurso vertical propuesto, revocando la resolución recurrida y, en su lugar, declara al señor JUAN CARLOS SILVA padre legal de la menor ANA MARIA SIERRA. Es esta, la resolución que impugna la parte demandada en el proceso, a través del recurso de casación que se examina y que pasa la Sala a resolver.

RECURSO DE CASACION
Y
DECISION DE LA SALA

En el recurso de casación que se examina se invoca la causal de fondo única, "infracción de normas sustantivas de derecho, en el concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida."

Los cargos de injuricidad han sido expuestos por el apoderado judicial en trece motivos, consistentes en objeciones o censuras a la valoración de las pruebas que le sirvieron de fundamento al juzgador de segunda instancia para llegar a la conclusión de que la paternidad reclamada por el demandante, declarada en la resolución que se recurre, se había dejado acreditada. Los motivos del recurso son los que se dejan transcritos:

"PRIMERO: La sentencia de segunda instancia fechada 20 de octubre de 1999, incurre en error de derecho en valoración de la prueba, consistente en el recibo N° 31897 de 22 de abril de 1994 del Laboratorio Clínico Fanilla, que se encuentra visible a foja 26 del expediente. El error consiste en que el Tribunal Superior de Familia le confirió a ese documento privado el valor de plena prueba, según la regla de la sana crítica en el sentido de que por el nombre de KAREN SILVA se infirió que había ido acompañada del joven JUAN CARLOS SILVA A PRACTICARSE LA PRUEBA DE EMBARAZO Y QUE POR HABER UTILIZADO EL APELLIDO SILVA consideró que él era el responsable del embarazo de la joven KAREN MARCELA SIERRA.

SEGUNDO: La sentencia impugnada erróneamente valora el documento privado que reposa a fojas 29, 30 y vuelta del expediente que consiste en una carta enviada por la joven KAREN SIERRA a un tal "JUAN K", infiriendo que al ella decir que iba al nuevo ginecólogo y le escribiría a ese "JUAN K" si era niño o niña, ser refería a JUAN CARLOS SILVA y no sólo eso, sino que al informarle de esa circunstancia era porque este tenía que ver con el embarazo de la joven KAREN SIERRA.

TERCERO: La sentencia de segunda instancia incurre en violación a las normas sustantivas de derecho como consecuencia de error en la valoración probatoria de la declaración rendida por RUBEN OSCAR SARRIA RIVERA, visible de foja 90 a 94, quien es un testigo de referencia y se ha atrevido a afirmar que sabe que el padre de la menor ANA MARIA, el señor JUAN CARLOS SILVA, por que JUAN CARLOS SILVA se lo confesó quien es su amigo.

CUARTO: El tribunal de segunda instancia valora erróneamente el resultado del examen suscrito por el Dr. IVAN VILLARREAL, ginecólogo obstetra del Laboratorio Fanilla, que se observa a foja 60 del expediente, pues como quiera que dicho documento está a nombre de KAREN SILVA, deduce que se utilizó el apellido SILVA porque el señor JUAN CARLOS SILVA, era el responsable del embarazo, a pesar de que la joven KAREN SILVA explicó en su declaración, porque razón ese documento aparecía con ese apellido y fue porque este era su amigo que la estaba apoyando en la situación difícil para ella que en ese momento una joven inexperta en asuntos de esa naturaleza.

CUARTO (sic): Se ha valorado erróneamente la certificación expedida y firmada por el Dr. JUAN FELIPE WONG Jr., visible a foja 62 en la cual manifiesta que el período fértil de la joven KAREN SIERRA, comprendió desde el 26 de febrero de 1994 hasta el 2 de marzo de ese mismo año, pues su última fecha de período menstrual fue el 15 de febrero de 1994; el error en la valoración probatoria consiste en que la sentencia de segunda instancia al analizar este documento estima que el mismo estaba realizado en datos subjetivos proporcionados por la joven KAREN SILVA y que por ello tendría mayor credibilidad probatoria.

QUINTO: Se ha valorado erróneamente y de manera aislada la certificación de la Dirección Nacional de Migración sobre el reporte migratoria de KAREN MARCELA SIERRA CASTRELLON, que se observa de foja 88 y 89 y donde se deja constancia que la misma salió del país por el Aeropuerto de Tocumen, el 21 de febrero de 1994, hacia

Estados Unidos de América y regresó el 7 de abril de ese mismo año. El error consiste en la violación de la reglas de la sana crítica, en la valoración de esta prueba pues el tribunal de segunda instancia no analizó en conjunto con las otras pruebas del proceso, si lo hubiese hecho, hubiera inferido que al mismo momento de la concepción, es decir, del embarazo de la joven KAREN SILVA esta se encontraba fuera del país.

SEXTO: La sentencia del Tribunal Superior valora erróneamente la declaración rendida por el doctor JUAN FELIPE WON Jr., varón, panameño, de 43 años de edad, residente en Castilla de Oro, quien es médico cirujano, ginecólogo obstetra y que a través de esa declaración se ratificó del documento visible a foja 62 del expediente donde se deja constancia que el período fértil de la joven KAREN SIERRA, comprende del 28 de febrero de 1994 hasta el 2 de marzo de ese mismo año. La sentencia de segunda instancia no aplicó las reglas de la sana crítica en la valoración probatoria de esta declaración ya que el doctor WONG Jr. dijo que ese documento fue expedido a solicitud de la interesada y basado exclusivamente en los datos objetivos obtenidos del expediente clínico que reposa en nuestra clínica así como los datos subjetivos proporcionados por la interesada, olvidándose la sentencia también que el doctor declarante, fue el que atendió todo el período prenatal de la menor ANA MARIA SIERRA. También se valoró erróneamente el aspecto referente a que la joven KAREN MARCELA SIERRA, tenía 34 semanas de gestación el día 7 de octubre de 1994, cuando se produjo el parto prematuro de la menor ANA MARIA SIERRA. Esta declaración se observa de foja 357 a 372 del expediente.

SEPTIMO: Otra prueba erróneamente valorada consiste en la declaración y reconocimiento de documento por parte del doctor IVAN VILLARREAL que se observa de foja 376 a 379 del expediente. El Tribunal Superior de Familia no aplicó su experiencia y la lógica como regla de la sana crítica a esta declaración de carácter técnico pues el Dr. IVAN VILLARREAL, además de ratificarse del documento visible a foja 60 del expediente, explicó que las iniciales "F.U.M.", las utiliza como fecha de la última menstruación y que en el caso de la joven KAREN SILVA correspondía al 15 de febrero de 1994, además, señala el Dr. VILLARREAL que el período de ovulación debió ser más o menos el 28 febrero, pero que era difícil decir un día exacto de fertilidad por lo que la paciente pudo haberse embarazado del 21 de febrero al 3 de marzo de ese mismo año.

OCTAVO: La declaración rendida por el Dr. ELIO ADRIANO ARROCHA ARROCHA, quien es especialista en pediatría; también resultó valorada erróneamente, pues él dijo que al recibir la niña producto del parto del 7 de octubre de 1994 esta presentaba características físicas y neurológicas que aparentaban una edad de treinta y seis (36) a treinta y siete (37) semanas y agregó el Dr. ARROCHA que a pesar de ellos pueden determinar la edad cronológica, eso tiene un margen de error de una semana. No obstante, el Tribunal Superior le dio mayor énfasis en la valoración probatoria al hecho de que el Dr. ARROCHA manifestó en su declaración que la niña ANA MARÍA SIERRA, no era prematura porque un producto de treinta y seis a treinta y siete semanas es viable y que de treinta y siete (37) semanas en adelante se considera un producto a término, aun cuando lo óptimo sea cuarenta semanas; aspecto este que fue tomado por el Tribunal Superior para decir que existía divergencia entre lo declarado por los ginecológos que dijeron que el parto había sido prematuro, cuando lo que se discutía era el tiempo de gestación que había realizado la joven señora KAREN SIERRA. Esta declaración se observa desde la parte final de la foja 379 a la foja 382 del expediente.

NOVENO: Se ha incurrido en error de derecho en la valoración probatoria al analizarse la declaración del Dr. JUAN FELIPE WONG CHONG, (padre) quien es panameño, con cédula 3-20-683 visible de foja 400 a 402 del expediente quien dijo bajó (sic) la gravedad de juramento que atendió el parte de la joven KAREN SIERRA, el 7 de octubre de 1994 y que ella tenía treinta y cuatro semana (sic) pues según la historia clínica estaba programada para el alumbramiento para el día 22 de noviembre de 1994, esta era la fecha probable del parto y que el embarazo se produjo entre el 27 y 28 de febrero de ese año. Esta declaración fue valorada erróneamente por el Tribunal Superior pues dejó de tomar en consideración que es una declaración técnico, fundamentada en la historia clínica de KAREN SIERRA, y por el contrario le dio mayor valor probatorio a pruebas testimoniales que no revestían esa calidad.

DECIMO: De foja 412 a 418, se observa el dictamen pericial rendido por el doctor ERIC MUÑOZ, realizado sobre la historia clínica de la señora KAREN SIERRA que finalizó el 7 de octubre de 1994, el cual ha sido valorado erróneamente, a nuestro juicio.

El error en la valoración probatoria consiste en que a pesar de que este peritaje analiza los datos de la última mestruación de la joven KAREN y las cuatro consultas subsiguientes es decir de la 25 de abril de 1994, la del 11 de junio de 1994, la del 8 de agosto de 1994 y la del 8 de septiembre de 1994 además del ultrasonido del 12 de septiembre de ese mismo año, calcula el tiempo de amenorrea o sea sin periodo mestrual en 33.3/7 semanas pues argumenta que el mes de febrero es un mes de solo 28 días aspecto que también debe ser valorado.

DECIMOPRIMERO: Se ha valorado erróneamente el certificado médico expedido por la dra. MERCEDES DE CLUA a nombre de KAREN MARCELA SIERRA y que se observa a fojas 527 del expediente, que incapacita a la paciente del 5 de junio al 5 de julio de 1999. El error consiste en que se ha tomado dicho certificado para inferir indicios en contra de la joven KAREN MARCELA SIERRA cuando ella ha estado anuente a cooperar con el tribunal para la práctica de pruebas, pero por razones de salud no ha podido asistir a algunos requerimientos del tribunal.

DECIMOSEGUNDO: También se ha valorado erróneamente, para inferir indicios contra KAREN MARCELA SIERRA, el certificado de incapacidad visible a foja 562 del expediente que la incapacita del 15 de agosto al 23 de agosto de ese mismo año.

DECIMOTERCERO: Se ha incurrido en error de derecho en valoración de la prueba consistente en la declaración de KAREN MARCELA SIERRA CASTRELLON, visible de foja 544 a 548 del expediente. El error consiste en que el tribunal de segunda instancia ha hecho una interpretación de dicho testimonio, contrario a lo manifestado por la declarante pues ella señala que su embarazo se dio en Estados Unidos cuando visitó a sus hermanos y salió con unos amigos de ella y que el padre de la menor se llama ALEXIS YURUBI.

El error del tribunal se da porque desconoce la explicación que da la joven KAREN SIERRA, a las cartas que ella le envió al señor JUAN CARLOS SILVA y a la existencia de una relación sentimental que ella nunca ha negado no obstante, dijo que ella utilizó al señor SILVA pero que él no era el padre y que no podía hacer nada para cambiar esto a estas alturas.” (Fs.593-598)

De los motivos transcritos se advierte que el vicio de ilegalidad que le atribuye la parte recurrente al juzgador de segundo grado consiste en no haber

valorado las pruebas señaladas, conforme a las reglas de la sana crítica, lo que lo llevó a violar las normas contenidas en los artículos 770, 775, 822, 891, 904, 907, 967, 971 del Código Judicial y, 238, 239, 252, 279 del Código de Familia.

Las pruebas indicadas en los motivos son de naturaleza documental, testimonial y pericial. La prueba señalada en el primer motivo, es el recibo expedido por Laboratorio Clínico Fanilla, visible a foja 26, a nombre de la demandada, por exámenes que le fueron practicados en dicho laboratorio. En dicho recibo la demandada utiliza el apellido del demandante, JUAN CARLOS SILVA. Esta circunstancia es similar a la que se denuncia en el motivo cuarto, respecto a la prueba, recibo, que consta a foja 60, por lo que conviene analizarlas juntas. De acuerdo al Tribunal ad-quem, las prueba señaladas resultan idóneas para acreditar la relación amorosa existente entre el demandante y demandado antes y durante el embarazo, apreciación que comparte la Sala, lo que además corroboran otras pruebas del expediente, como lo son, las que se indican en los motivos segundo y tercero, en los que se refiere la recurrente en el motivo segundo, a una carta que reposa a foja 29-30, enviada por la demandada al demandante, lo que admite la propia demandada en el acto de su declaración jurada; y a la declaración rendida por el testigo RUBEN OSCAR SARRIA R., en el motivo tercero.

En la carta antes indicada, le informa la demandada KAREN MARCELA SIERRA CASTRELLON al demandado, JUAN CARLOS SILVA que iba al ginecólogo y le escribiría si era niño o niña. Además de ésta, obran en el expediente otras cartas enviadas por la demandada al demandante, las cuales conviene considerar en la medida que, tal como lo destaca la resolución impugnada a foja 577, por la fecha en que fueron escritas resultan idóneas para acreditar la existencia de la relación amorosa entre demandante y demandada antes, durante y en fecha posterior al embarazo de la demandada. Al respecto señala la resolución impugnada:

> "Llama la atención cuando en declaración señala respecto a lo escrito a fs. 30 reverso, "Mañana voy al nuevo ginecólogo, así que te escribiré contándote que me dijo, a parte de por fin decirte si es niño o niña. Hazme el favor de decidirte pronto por un nombre, sino se lo va a poner mi mamá", ... Vemos que la carta es fechada el 20 de septiembre de 1994, antes de que naciera la niña y ella hace alusión a la existencia de una relación sentimental antes de esta fecha y después." (f. 577)

La anterior conclusión viene a ser reforzada por el testimonio del señor RUBEN OSCAR SARRIA (f.90-94) y el de los otros dos testigos, ANA LORENA CAUSADILLA (fs.95-99) y JAIME DOMINGUEZ (fs.100-102), quienes son contestes en sus afirmaciones respecto a la relación amorosa entre el demandante y la demandada, madre de la menor, cuya paternidad se reclama, de lo cual tienen conocimiento por percepción propia, tal como se desprenden de los testimonios examinados.

De manera, pues, que en base a las pruebas razonadas, no cabe duda para la Sala la existencia de la relación amorosa entre demandante y demandada, relación que además, la propia demandada admite en el acto de la declaración indagatoria que rinde a foja 544, de donde se derivan indicios respecto a la paternidad reclamada por el demandante.

Por otro lado, en el motivo cuarto, que corresponde en realidad al quinto, y siguientes del recurso se refiere el recurrente a pruebas que guardan relación al período de fertilidad de la demandada, dentro del cual concibió a su hija ANA MARIA SIERRA, que según alega la representación judicial de la demandada, en oposición a la pretensión del demandante, ocurrió encontrándose la demandada en los Estados Unidos, por lo que mal pudo tener relaciones sexuales con el demandado durante el período de la concepción.

En torno a lo anterior, se refiere la parte recurrente a la prueba visible a foja 62, consistente en certificación expedida por el doctor JUAN FELIPE WONG, Jr. en la que indica que el período fértil de KAREN MARCELA SIERRA CASTRELLON

estuvo comprendido entre el 28 de febrero y el 2 de marzo de 1994. Respecto a dicha certificación, el doctor WONG Jr., en declaración que rinde a foja 367-372, prueba cuya valoración objeta la recurrente en el motivo sexto, manifiesta haber atendido a la demandada, KAREN MARCELA SIERRA CASTRELLON, solamente en control prenatal y sobre la fecha de fertilidad de la demandada indicada en el mismo, señala que fue estimada en base a "los datos objetivos obtenidos del expediente clínico que reposa en la clínica, así como por los datos subjetivos proporcionados por la interesada" (f.369).

Sobre el período de fertilidad de la demandada, también conviene considerar, las declaraciones de los doctores IVAN VILLARREAL (f.376) y JUAN F. WONG (padre) (f.400-402), cuyas valoraciones se cuestionan en los motivos séptimo y noveno. Ambos galenos coinciden con el doctor WONG (hijo), en lo pertinente a la fecha de fertilidad de la señora SIERRA, para lo cual toman como base la fecha de la última menstruación. Partiendo del hecho anterior, considera el doctor WONG (padre) que teóricamente para el 7 de octubre, momento en que ocurre el nacimiento de la menor, la edad gestacional de la misma era de treinta y cuatro a treinta y cinco semanas, puesto que el parto se esperaba para el 22 de noviembre.

En virtud de las pruebas anteriores se tiene que, sobre la base del expediente clínico de la demandada, la fecha de fertilidad en la cual concibió la demandada a su hija, pudiera haber ocurrido entre el 21 de febrero y 3 de marzo de 1994, de donde pudiera concluirse con la demandada que la concepción de su hija, ANA MARIA SIERRA, se produjo después del 21 de febrero de 1994, fecha para la cual se encontraba en los Estados Unidos, según lo confirma la certificación de migración que aparece a foja 89 y que cita la recurrente como mal valorada en el motivo quinto, país a donde viajó sola y en el cual mantuvo relaciones sexuales con otra persona de nombre ALEXIS YORUBI, según lo afirma la demandada en el acto de su declaración.

Los resultados clínicos de la recurrente arriba referidos, convienen contrastarlos con los resultados intra y pos-parto, que también sirven de base para establecer la fecha probable de gestación de la menor, esto es, el período de fertilidad dentro del cual fue concebida, toda vez que según dichos resultados, la fecha de fecundación de la casacionista ocurrió antes del 21 de febrero, es decir, previo al viaje que la misma realizara fuera del país, lo que obra en favor de la paternidad reclamada por el demandante. En tal sentido, conviene considerar la declaración rendida por el doctor ELIO ADRIANO ARROCHA (f.379-382), a la que se refiere la casacionista en el motivo octavo. El doctor ARROCHA, manifiesta haber recibido a la niña al momento de nacer y considera que la misma, de acuerdo a las características físicas y neurológicas presentaba una edad gestacional de treinta y seis a treinta y siete semanas. De manera, que si se parte de los resultados intra y pos parto, se llegaría a la conclusión de que el embarazo de la demandada se produjo a principio del mes de febrero, vale decir, antes de que la misma hubiera salido del país.

Lo anterior, aprecia la Sala, refleja una contradicción entre los resultados que arrojan los hallazgos prenatales y el ultrasonido y los que arrojan los intra y pos-parto, de donde resulta que la fecha de fertilidad de la demandada, dentro de la cual concibió a su hija, no es posible determinarla con la certeza que la naturaleza de este tipo de proceso lo requiere. Ello es así, toda vez que de tomarse como referencia los resultados clínicos de la demandada, la fecha de concepción de la menor se habría producido después del 21 de febrero de 1994, fecha para la cual se hallaba de viaje la demandada; no obstante, los hallazgos intra y pos parto, indican que la concepción se pudo haber producido antes de que la casacionista hubiera realizado aquel viaje.

A lo anterior, cabe agregar, los márgenes de error que en términos de semanas, anterior o posteriormente a la fecha de parto, puede derivarse de uno u otro método empleado en la determinación de la fecha de fertilidad, de donde resulta aún más imprecisa la conclusión a que pueda llegarse a partir de uno u otro resultado, por lo que la Sala considera que las pruebas examinadas no

producen por si solas el grado de certeza requerida para la determinación de la relación filial que se reclama.

No considera la Sala, por otra parte, que se haya valorado indebidamente los resultados del examen pericial de foja 412 a 418, al cual se refiere la parte recurrente en el motivo décimo como mal valorado, toda vez que advierte la Sala que el perito, el doctor ERIC MUÑOZ, basa su conclusión en apreciaciones puramente subjetivas e hipotéticas, al suponer que en la anotación de los resultados intra y pos parto pudieran haber incurrido el pediatra que recibió a la menor, ANA MARIA SIERRA, en errores, lo cual ni consta que hayan ocurrido, ni el peritaje explica en que consisten. Cabe acotar que el valor de los dictámenes periciales debe estimarse en base a los principios científicos que se sustenta, lo que a juicio de la Corte no se cumplen en el presente caso, razón por lo cual no resulta idóneo para precisar la existencia de la paternidad reclamada.

Por razón de lo expuesto, no comparte esta Sala la valoración que realiza el Tribunal ad-quem de los medios de prueba examinados, en la medida que considera que los medios probatorios examinados acreditan la existencia de la relación filial natural que se reclama, particularmente, el expediente clínico de la demanda. Al respecto consideró el ad-quem en la resolución impugnada:

> "Al realizar un análisis de lo expuesto por los doctores, nos permite reafirmar aún más nuestra postura, a que la señora Sierra concibió a su hija antes de trasladarse al extranjero. A dicha conclusión llegamos por lo siguiente:
>
> Si bien, los doctores no son contestes al determinar con exactitud el período de gestación de Karen Sierra, al presentar ciertas discrepancias, permite verificar del expediente Clínico el tiempo de gestación, o un cálculo aproximado y que al ser estudiado con los demás elementos se concluye que quedó embarazada antes del 21 de febrero." (f.581-582)

El juzgador ad-quem, como se advierte, sustenta su razonamiento en los resultados intra y pos parto, en detrimento de los hallazgos clínicos de la demandada, por cuanto los doctores WONG (padre e hijo), en sus respectivas declaraciones recomiendan recurrir a las resultados intra y pos parto para determinar con precisión la edad gestacional de la niña. Para la Sala, si bien ello es así, al respecto hay que considerar la declaración del propio pediatra de la niña que le atribuye a tales resultados un margen de error de una semana. Tal inexactitud, desde luego que afecta el grado de certidumbre que la Sala requiere a fin de externar la decisión del caso.

Dicha certeza jurídica, reviste particularmente importancia en el presente proceso, por cuanto es una imposición de la misma ley de familia, que viene dada en el artículo 278, en el cual ordena al juzgador a reconocer la relación filial reclamada sólo cuando en el proceso se encuentre debidamente acreditada, por cuanto la misma ley pauta en el artículo 280 que una vez que la paternidad es reconocida judicialmente, no podrá reclamarse otra paternidad que la contradiga. El artículo 278 es del tenor siguiente:

> "Artículo 278. El Juez deberá declarar la paternidad cuando se encuentre acreditada en el proceso."
>
> En tanto que el artículo 28 señala:
>
> "Artículo 280. No podrá reclamarse una paternidad que contradiga otra, determinada en virtud de sentencia firme."

Ahora, el hecho de que esta Superioridad, tal como se ha destacado, sea del criterio de que los medios probatorios examinados no resultan concluyentes para la determinación de la paternidad que el demandante reclama, puesto que dichos medios probatorios no permiten establecer con certeza la paternidad referida, no

significa que la Sala comparta la opinión de la parte casacionista, respecto a que las pruebas citadas como mal valoradas acrediten la inexistencia de la relación paterno filial que se reclama, puesto que esta Superioridad considera que de los medios probatorios examinados se derivan, por lo menos indicios acerca de la paternidad referida.

En efecto, no puede obviar la Sala los indicios que se derivan de la relación amorosa sostenida entre el demandante y la demandada durante el tiempo anterior al embarazo, incluso posterior al mismo; así como de la posibilidad de que la demandada, contrario a lo que afirma, haya podido embarazarse antes de haber salido del país, lo que se deriva de los resultados intra y post parto y, también, los indicios que el tribunal ad-quem deduce de la conducta procesal de la demandada y que esta Superioridad plenamente comparte, muy a pesar de la objeción que el apoderado judicial de la parte recurrente formula en los motivos décimo primero y décimo segundo, por considerar que por razón de ello incurrió el ad-quem en la mala valoración de los certificados de incapacidad que obran en el expediente a foja 527 y 562.

Conviene advertir en torno a este último aspecto, que para esta Superioridad resulta en extremo sospechoso, tal como lo destaca la sentencia impugnada, la ausencia reiterada de la demandada a la práctica de las pruebas de carácter científicos y testimonial ordenados en el proceso, justificando su ausencia con los certificados de incapacidad señalados como mal valorados.

Advierte la Sala que en el proceso se ordenó en reiteradas ocasiones la práctica de la prueba de HLA y ADN, así como la comparecencia de la demandada para rendir declaración testimonial y el careo con la parte demandante, pruebas éstas que hubieren aportado contundencia en la determinación de la relación filial lo que, desde luego, no sólo debe interesar esclarecer a la parte demandante, que siempre estuvo anuente a cooperar, sino también a la parte demandada, que se opone a la paternidad reclamada, pero, que, sin embargo; no muestra interés en cooperar, como lo señala el ad-quem en la resolución que se impugna, para dejar ello esclarecido señaló:

> "Se advierte que en reiteradas ocasiones se intentó la práctica de prueba de HLA y ADN, siendo infructuoso su ejercicio, ante las constantes certificaciones de incapacidad que al efecto presentara el Licdo. Rafael Rodríguez, llamando poderosamente la atención que las fechas determinadas como las de la incapacidad fueran las mismas asignadas tanto para su práctica como para la comparecencia de la señora Sierra al Tribunal a rendir declaración de parte y participar del careo al que se le sometiera con el señor Silva. No es sino después de varios intentos que se logra obtener declaración de la demandada, con la penosa suerte que el día que se apersona, no asiste el demandante, mas es de señalar que éste si asistió a las anteriores fechas programadas.
>
> La actitud evasiva y de no cooperación hacia el Tribunal es percibida, provocando la dilación del proceso, a pesar, de manifestar la contraparte que estaba anuente a que se le hiciera el examen de sangre ordenado." (f.570)

Además, es menester tomar en cuenta que el presente proceso recae sobre el reconocimiento de una menor de edad, razón por lo cual priva en este caso el interés superior de la menor, tal como lo dispone la Ley de Familia en sus disposiciones generales. De manera que en este caso tiene prioridad, para esta Sala, garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de la menor, a conocer quienes son sus padres, usar los apellidos de sus progenitores y disfrutar de los demás derechos de la filiación, razón por lo cual se considera conveniente establecer de manera cierta si el demandante, JUAN CARLOS SILVA, es el padre de la menor ANA MARIA SIERRA, dados los claros indicios que se derivan del examen de los medios probatorios sopesados en favor de dicha paternidad, como se dejó establecido, y que no permiten, tampoco, establecer la violación de las

normas legales imputada por la parte recurrente al juzgador de alzada.

En relación con lo anterior, esta Superioridad ha considerado que cuando de los medios probatorios obrantes en el proceso no se derive la certeza necesaria para la determinación de la existencia de la paternidad, pero sí indicios de la misma, es aconsejable emplear la facultad que otorga el artículo 1180 del Código Judicial, en relación a la práctica de las pruebas de oficio que permitan al juzgador formar la convicción material del caso para expedir la decisión judicial respectiva. Mediante sentencia de 27 de febrero de 1998 lo expuso la Sala:

> "Considera esta Corporación de Justicia que no hay certeza de la paternidad del recurrente sobre la menor CRYSTEL BELLIDO, por lo que la Sala no puede establecer de modo claro, el cumplimiento de las normas expuestas; por lo que existe un marco de posibilidades de que se hayan violado ambas normas, lo que justifica casar la sentencia impugnada y dictar una medida para mejor proveer en base a lo normado por el artículo 1180 del Código Judicial, con el fin de lograr la obtención de las pruebas necesarias para lograr la convicción final de esta Superioridad, de la paternidad del demandado." (Sentencia de la Sala de 27 de febrero de 1998)

Por razón de lo anterior, debe esta Superioridad casar la sentencia recurrida a fin de que se practiquen las pruebas del caso que permitan determinar con certeza la veracidad de la paternidad que el demandante, JUAN CARLOS SILVA, reclama respecto de la menor ANA MARIA SIERRA.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia de 20 de octubre de 1999, expedida por el Tribunal Superior de Familia, en el proceso de filiación que a la señora KAREN MARCELA SIERRA le sigue JUAN CARLOS SILVA; y en consecuencia, convertida en Tribunal de Instancia, ORDENA para mejor resolver, la práctica de la prueba hematológica de filiación HLA o de Histocompatibilidad entre las partes.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

BANCO FEDPA, S. A. y EDILBERTO B. ESQUIVEL MOLTO RECURREN EN CASACION EN LA EXCEPCIÓN DE INEXSISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN QUE SE DEMANDA, PRESENTADA POR LA PARTE DEMANDADA EN EL PROCESO EJECUTIVO INCOADO POR BANCO FEDPA, S. A. CONTRA EDILBERTO ESQUIVEL MOLTO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, VEINTITRES (23) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante resolución de 26 de julio de 2000, esta Sala declaró admisible la causal de forma; y ordenó la corrección con respecto a la causal de fondo del recurso de casación presentado por el licenciado VIRGILIO VASQUEZ PINTO; apoderado judicial de EDILBERTO B. ESQUIVEL MOLTO, contra la resolución de 4 de febrero de 2000 proferida por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL.

Para corregir el recurrente contó con los cinco (5) días que la ley confiere para tales efectos. De foja 377 a 380 del expediente, reposa el escrito

de corrección presentado oportunamente. Procede la Sala, entonces a pronunciarse respecto a la viabilidad del mismo, teniendo como referencia los presupuestos establecidos en los artículos 1165 y 1160 del Código Judicial.

Aprecia la Sala que el casacionista, a pesar que no se le ordenó corrección alguna con respecto a los motivos, adiciona nuevas pruebas, específicamente con respecto al primer y tercer motivo en los cuales considera que no ha sido adecuadamente apreciado el informe pericial de los peritos, no atendiendo lo ordenado en la resolución que dictara esta superioridad el 26 de julio del año en curso.

Al recurrente solamente se le ordenó que corrigiera el recurso de casación en el fondo con respecto al artículo 769 del Código Judicial, debido a que dicha norma no es congruente con la causal invocada, ya que la misma no establece regulaciones sobre valoraciones de pruebas, sino en cuanto a la existencia de ellas, sin embargo, constata la Sala que el casacionista adiciona el artículo 967 del Código Judicial, el que no se encontraba originalmente en el recurso que se ordenó corregir, y por tanto, la Sala no ordenó la corrección adicionando dicha disposición legal.

La Sala, en reiteradas ocasiones, ha señalado que las órdenes de corrección deben circunscribirse a los extremos del recurso que se mandó a corregir, y no para que adicionen nuevos elementos en los motivos, con nuevas disposiciones legales, así sean consistentes con la causal.

Sobre esta situación, la Corte se ha pronunciado en los siguientes términos:

> "... Sin embargo, respecto a la casación en el FONDO, se ha podido constatar luego del examen de ambas causales, no cumplió con los señalamientos precisos de la Sala sobre las definiciones o defectos que debía corregir. Sino que además, alteró el contenido de otros apartados del recurso creando en el mismo otras deficiencias no contenidas en el escrito original".
>
> (Sentencia de 3 de diciembre de 1992, R.J. Diciembre 1992, p.15).

Advierte la Sala que al no cumplir el casacionista con lo ordenado en la resolución dictada por esta Corporación, se dan los presupuestos contemplados en el artículo 1167 del Código Judicial, por tanto, procede la inadmisibilidad del presente recurso.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación, en el fondo, propuesto por EDILBERTO B. ESQUIVEL MOLTO, mediante apoderado judicial.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TEODORA ROBLES DE LEON, INDALECIA ROBLES DE CHICO, JOSE ZACARIAS ROBLES LEON, FELICIDAD ROBLES LEON, ALBERTO ROBLES DE LEON, ENRIQUEZ ROBLES DE LEON, MARIA CLAUDINA ROBLES DE VASQUEZ, SIXTA ROBLES DE ZURITA, RECURREN EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUEN A JOSE CORNELIO ROBLES DE LEON. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FABREGA Z. PANAMA, VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado LEOVIGILDO CASTILLO, apoderado legal de los señores INDALENCIA ROBLES DE CHICO, JOSE ZACARIAS ROBLES DE LEON, TEODORA ROBLES DE LEON, FELICIDAD ROBLES DE LEON, ALBERTO ROBLES DE LEON, LUIS ENRIQUE ROBLES DE LEON, MARIA CLAUDINA ROBLES DE VASQUEZ y SIXTA ROBLES DE ZUBIETA, ha interpuesto recurso de casación en el fondo y la forma contra la resolución expedida el 12 de mayo de 2000 por el Primer Tribunal Superior de Justicia, en el proceso ordinario de prescripción adquisitiva de dominio que al señor JOSE CORNELIO ROBLES DE LEON le siguen los recurrentes.

Repartido el negocio, ordenó el sustanciador fijarle en lista para los alegatos de admisibilidad tanto de los recurrentes, como de la parte opuesta al recurso. Vencido el término anterior, procede la Sala a decidir la admisibilidad del recurso, de conformidad con lo que para tales efectos dispone el Código Judicial en los artículos 1160 y 1165.

En el presente caso se cumple con las formalidades inherentes al recurso, por cuanto la resolución que se impugna admite casación, fue propuesto en tiempo en proceso con cuantía superior a la mínima legal exigida.

En cuanto a los requisitos del escrito contentivo del recurso, el apoderado legal de los recurrentes invoca dos causales, la primera de forma y la segunda de fondo. Respecto a la causal de forma, se enuncia "por haberse omitido algún trámite o diligencia considerado esencial por la Ley. La causal ha sido enunciada de conformidad con lo establecido en el artículo 1155 del Código e Procedimiento Civil.

Los motivos que sustentan la causal son catorce, en los cuales, advierte la Sala, no aparece expresado el o los cargos de injuricidad que se le imputan al ad-quem, es decir, en el mismo no aparece expuesto de manera específica el trámite o diligencia que según la parte casacionista fue desconocido por el Tribunal de apelación, que por demás, debe estar establecido en la ley con carácter esencial.

Los motivos, por el contrario, tienen contenido argumentativo y se incurre en ellos en relatos procesales. Además, se citan fragmentos de resoluciones expedidas dentro del proceso, lo que la Sala en extensa jurisprudencia ha dicho, resulta extraño a la naturaleza de los motivos, en los cuales sólo deben ir contenidos los cargos de injuricidad formulados contra la sentencia recurrida, es decir, la infracción legal que se le atribuye al ad-quem:

> "Aunado a lo anterior, los motivos presentan, en su exposición defectos formales, tales como la incorporación en los motivos quinto, sexto y séptimo de extractos de la resolución de segunda instancia y de recuentos procesales en la mayoría de los motivos.
>
> Ha dicho la Sala que los motivos que sustentan las causales de forma deben constituir en cargos contra la sentencia recurrida, que resulten compatibles con la causal invocada y que conduzcan a la injuricidad de la actividad procesal. En este sentido, la Sala observa que los motivos no contienen cargos que constituyan el soporte fáctico de la causal invocada, sino algunos de ellos se limitan a exponer situaciones fácticas sin establecer la razón por la cual censura la sentencia recurrida y, en todo caso, inidóneas para sustentar la causal invocada." (resolución de 21 de enero de 1998).

Se citan como infringido los artículos 981 y 1014 del Código Judicial, normas estas que resultan incongruentes con la causal que se invoca, puesto que las misma no se refieren a trámites o diligencia del proceso de carácter

esencial.

En base a lo expuesto anteriormente, considera la Sala que la causal de forma que se enuncia resulta ininteligible, lo que al tenor de lo dispuesto en el artículo 1167 de la ley citada, constituye causal de inadmisión de la misma, por lo que debe desestimarse la causal examinada.

La segunda causal que se enuncia en el recurso presente, es la de fondo, denominada "infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba". La causal se halla recogida en el artículo 1154 del Código Judicial.

Los motivos que sustentan la causal son seis. En el primero se refiere la parte recurrente, como mal apreciadas, a las pruebas consistentes en certificaciones del Registro Público, pero sin especificar las fojas del expediente en las que pueden ser consultadas las referidas certificaciones. Además, se incurre en el error de hacer citas dentro del motivo, lo que, como se dejó establecido respecto de la causal anterior, no es propio de los motivos en los que sólo deben dejarse expuestos los cargos de injuricidad que se formulan contra la sentencia recurrida.

El segundo motivo presenta una redacción confusa, lo que impide comprender el cargo o infracción legal que se formula contra la sentencia recurrida y, nuevamente incurre la parte recurrente en el error de hacer citas dentro del motivo.

Advierte la Sala que tanto el tercer motivo, como el cuarto, no contienen cargos de injuricidad concretos, en la medida en que no se mencionan en ellos, como mal valorada, prueba alguna. Tales motivos tienen contenido subjetivo, además de que en ellos se incurre en recuento procesal y citas, que conforme se ha dicho, no son de la naturaleza de los motivos.

Por otra parte, en los dos últimos motivos de la causal, el quinto y sexto, se refiere la recurrente a pruebas de carácter testimonial y pericial como mal valoradas y expone la manera como el error probatorio afectó la parte resolutiva de la resolución que se impugna. Sin embargo, aprecia la Sala, no menciona la parte recurrente la foja del expediente en que se ubican las pruebas indicadas antes referidas.

Puntualizando, debe señalar la Sala que en las causales probatorias, como la que ocupa a la Sala, no solamente debe individualizarse la prueba erróneamente valorada, sino analizarse en que forma se incurrió en la valoración equivocada y de que manera ha incidido dicho error valorativo en la parte resolutiva de la sentencia recurrida. Las consideraciones anteriores, son aplicables a todos los motivos, por cuanto, los mismos deben ser corregidos en lo indicado.

Como normas infringidas se citan en el recurso examinado, los artículos 769, 770, 904, 772, 967, 966 y 910 del Código Judicial; del Código Civil, se cita el artículo 1696. En cuanto los artículos 769 y 772 citados como infringidos, debe señalarse que los mismos no hacen relación a la valoración de medios probatorios, sino, más bien, a la existencia de la prueba, por lo que dichas normas no resultan congruentes con la causal que se invoca.

Como ha quedado expuesto, el recurso, en cuanto a la causal que se examina, adolece de defectos de forma que, no obstante, no ocasiona la inadmisión del recurso, lo que deben ser subsanados en la forma que la Sala lo ha dejado señalado, para su respectivo examen. De manera que esta Superioridad, atendiendo al tenor de lo normado en el artículo 1166 del Código Judicial, ordena la corrección de la presente causal, para lo cual se concede el término de cinco días.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación en la forma presentado por el Licenciado LEOVIGILDO CASTILLO, contra la resolución 12 de mayo de 2000, expedido por el Primer Tribunal Superior de Justicia; y ORDENA LA CORRECCION, de la causal de fondo, para lo cual se concede el término de cinco días.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A CONSTRUCCIONES CASTRO, S. A. Y CONSTRUCTORA NOVA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense RIVERA, BOLIVAR Y CASTAÑEDAS, actuando como apoderada especial de BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S. A., ha interpuesto recurso de casación contra la resolución de 22 de mayo de 2000, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia dentro del proceso ordinario seguido por la casacionista contra CONSTRUCCIONES CASTRO, S. A.(CONCA) y CONSTRUCTORA NOVA, S. A.

Cumplidas las reglas de reparto, el negocio se fijó en lista, para que las partes alegaran sobre la admisibilidad del recurso, término que sólo aprovechó la parte recurrente, como consta en el escrito visible de fojas 416 a 420.

La Corte procede al examen del recurso de conformidad con presupuestos que determinan los artículos 1148, 1149, 1165 y concordantes del Código de Procedimiento Civil.

A juicio de esta Corporación en este caso se llenan las exigencias que determina la ley, puesto que:

1- La resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley;

2- El recurso ha sido interpuesto en tiempo;

3- El escrito por medio del cual fue interpuesto el recurso, que consta de fojas 396 a 409, reúne todos los requisitos ordenados por el artículo 1160 del Código Judicial;y,

4- Las causales expresadas son de las señaladas por la ley.

Por las consideraciones expuestas, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación interpuesto por BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S. A. contra la sentencia de 22 de mayo de 2000, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia dentro del proceso ordinario que le sigue a CONSTRUCCIONES CASTRO, S. A. y CONSTRUCTORA NOVA, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.

(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario de la Sala Civil, Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PRESBÍTERO JENKINS GÓNDOLA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE FILIACIÓN QUE LE SIGUE ALBA ESTHER CEBALLOS ROMERO, A FAVOR DEL MENOR HENRY ANTONIO CEBALLOS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado ABDIEL GONZÁLEZ ACOSTA, ha interpuesto recurso de casación contra la Sentencia N°5-F. R. de 10 de mayo del 2000 proferida por el Tribunal Superior de Menor y Adolescencia, mediante la cual se confirma la Sentencia N°311-99-S.F. de 12 de octubre de 1999, dictada por el Juzgado Segundo de Niñez y Adolescencia de Panamá.

Transcurrido el término que se le concedió a las partes para que dejaran oír sus puntos de vista acerca de la admisibilidad del recurso, siendo aprovechado sólo por la parte opositora, así como la Vista emitida por el Procurador General de la Nación, corresponde a la Sala decidir sobre su admisibilidad, a lo que se procede, tomando en consideración para ello, los requisitos establecidos en los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial.

La resolución se enmarca dentro de lo establecido en los artículos 1148 y 1149 del Código Judicial para la concesión del recurso. Además, en cuanto a la exigencia establecida en el artículo 1165 del Código Judicial, en relación con el artículo 1159 de ese cuerpo de leyes, en materia de interposición oportuna del recurso, esto es, por el término improrrogable de diez (10) días, se observa que el mismo se formalizó en tiempo.

Se presenta una causal única de casación en el fondo, la cual es: "infracción de norma sustantiva de derecho por concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida". Observa la Sala que dicha causal aparece recogida como tal, en el artículo 1154 del Código Judicial.

Los motivos, que son tres, aparecen estructurados mas o menos correctamente, reflejándose los cargos que le formulan a la sentencia e indicando las pruebas que han sido, en apreciación del recurrente, valoradas en forma no adecuada.

Las disposiciones legales aparecen expuestas en forma satisfactoria, pues señala las normas probatorias que han sido vulneradas por el fallo, y, como su consecuencia, la disposición sustantiva, el artículo 272 del Código de la Familia.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación en el fondo, interpuesto por el Licenciado ABDIEL GONZÁLEZ ACOSTA, contra la Sentencia N°5-F. R. de 10 de mayo de 2000 proferida por el Tribunal Superior de Menor y Adolescencia.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RANCHO MODELO, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA QUE LE SIGUE A LETICIA REBOLLEDO DE QUINTERO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense BERRÍOS Y BERRÍOS, han interpuesto recurso de casación contra la Sentencia de 8 de mayo del 2000, proferida por el Cuarto Tribunal Superior de Justicia, mediante la cual se confirma la Sentencia N°37 D.C. de 26 de marzo de 1999, proferida por el Juez Primero de Circuito de Herrera, Ramo Civil, en la que se declara "denegar la demanda, desistir el incidente de ilegitimidad de la personería y condenar en costas al demandante por la suma de cuatrocientos balboas (B/.400.00).

El recurso se encuentra pendiente de decidir sobre su admisibilidad, a lo cual procede la Sala, teniendo en cuenta para ello lo establecido en los artículos 1160 y1165 del Código Judicial.

Al revisar las constancias procesales se ha podido constatar que el recurso fue anunciado y formalizado en tiempo oportuno y por persona hábil.

No obstante, la Sala observa que el recurso no cumple con el requisito de la cuantía que establece el ordinal 2 del artículo 1148 del Código Judicial, reformado mediante Ley 31 de 28 de mayo de 1998, cuyo tenor es el siguiente:

> "Artículo 1148: Para que el recurso de casación pueda ser interpuesto es indispensable que concurran las siguientes circunstancias:
>
> 1. Que la resolución contra la cual se interpone se funde o se haya debido fundarse en preceptos jurídicos que rijan o hayan regido en la República; y,
>
> 2. Que la resolución verse sobre intereses particulares, siempre que la cuantía del proceso respectivo no sea menor de diez mil balboas (B/.10,000.00)..."

De lo anterior, esta Sala considera conveniente transcribir el artículo 32 del Código Civil, respecto a la aplicación de las leyes, que establece:

> "Artículo 32: Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación."

La disposición citada contempla el principio general de que las leyes sobre sustanciación y ritualidad de los juicios, se aplican a todos los procesos una vez entren a regir, independientemente de que se hayan iniciado antes o después de la entrada en vigencia de la nueva ley. Por excepción, no se aplicará la nueva ley a los términos que estuviere corriendo ni a las diligencias y actuaciones ya iniciadas, a la entrada en vigencia de la misma.

Advierte esta Sala que el proceso dentro del cual se recurre, quedó resuelto en primera instancia, mediante Sentencia N°37 D.C. del 26 de marzo de 1999 y, en segunda instancia, por la Sentencia de 8 de mayo del 2000. Lo anterior evidencia, tal como ha sostenido esta corporación de justicia reiteradamente (véase fallos de 3 de mayo de 1999, 26 de abril de 1999 y 25 de enero del 2000)

que en el caso del recurso de casación, el principio que como excepción contempla la segunda parte del artículo 32 del Código Civil, solamente es aplicable cuando la resolución de segunda instancia que se pretenda recurrir en casación, haya sido dictada antes de la entrada en vigor de la nueva ley procesal.

En el presente caso se observa que la cuantía que se fijó en la demanda era de B/.5,142.86 (fs.6). La Ley 31 de 1998 que aumentó en diez mil balboas (B/.10,000.00) la cuantía de los procesos recurribles en casación, entró en vigencia a partir de su promulgación, la cual tuvo lugar el 29 de mayo de 1999; y, la resolución que se recurre en casación fue dictada el 8 de mayo del 2000; es decir, cuando ya estaba vigente la nueva ley.

Siendo así, debe entenderse que el trámite del recurso de casación se inició bajo la vigencia de la Ley 31 de 28 de mayo de 1998, que es, en consecuencia, la ley que regula lo concerniente a la sustanciación y ritualidad, conforme lo dispone el artículo 32 del Código Civil.

Por lo anterior, el presente recurso es inadmisible, en virtud de que la resolución que se pretende impugnar en casación no cumple con el requisito de la cuantía que prescribe el ordinal 2 del artículo 1148 del Código Judicial.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación en el fondo, interpuesto por la firma forense BERRÍOS Y BERRÍOS.

Las costas de casación se fijan en setenta y cinco balboas (B/.75.00).

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO

(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HORACIO MARQUEZ NUÑEZ RECURRE EN CASACION EN LA EXCEPCIÓN DE PAGO PARCIAL QUE PROPONE DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO INCOADO POR FERTILIZANTES DE CENTRO AMERICA (PANAMA), S. A. CONTRA HORACIO MARQUEZ NUÑEZ, ERICK OMAR MARQUEZ VILLARREAL Y MAGDALENA VILLARREAL DE MARQUEZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FABREGA Z. PANAMA, VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado TOMAS VEGA CADENA, apoderado judicial del señor HORACIO MARQUEZ, ha interpuesto recurso de casación en la forma y en el fondo contra la sentencia de 29 de mayo de 2000, expedida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial en la excepción de pago parcial interpuesta por el recurrente, dentro del proceso Ejecutivo Hipotecario que a la parte casacionista le sigue FERTILIZANTES DE CENTROAMERICA, S. A. (FERTICA).

Repartido el negocio, se ordenó ponerla en lista para los alegatos de admisibilidad, tanto de la parte casacionista como de la opuesta al recurso. Vencido el término anterior, pasa la Sala a decidir la admisibilidad del recurso examinado, de conformidad con lo establecido en los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial.

El recurso cumple con las formalidades inherentes al recurso, por cuanto ha sido propuesto contra resolución que admite casación, con una cuantía superior a la mínima legal y dentro del término de ley.

Respecto a los requisitos que debe cumplir el escrito contentivo del recurso, se advierte, que el recurrente invoca dos causales, la primera de forma y la otra de fondo. En cuanto a la causal de forma, toda vez que el artículo 1179 del Código Judicial establece, como condición imprescindible para la admisibilidad de la misma que la reparación de la falta haya sido reclamada en la instancia correspondiente y en la siguiente si se ha producido en primera instancia, se considera oportuno examinar que en el presente caso se haya observado dicho requisito.

El recurrente en los motivos del recurso, aduce como vicio de ilegalidad cometido por el ad-quem, la omisión en la notificación de la resolución de 25 de septiembre de 1998, expedida por el Juzgado de primera instancia. Significa lo anterior, que la falta que se reclama se produjo en la primera instancia, por lo que la reparación de la misma debió solicitarse ante esta instancia y la siguiente, lo que no ocurrió.

Al defecto anterior, que por si sólo causa la inadmisión del recurso, conforme lo establece el artículo 1179 referido, hay que agregar la defectuosa enunciación de la causal, al invocarse dos causales de manera conjunta.

En efecto, el recurrente invoca la causal en los términos siguientes, "por haberse omitido algún trámite o diligencia considerado esencial por la Ley o cualquier otro requisito cuya omisión cause nulidad." La Sala, de manera reiterada ha venido sosteniendo el criterio que, en el numeral 1° del artículo 1155 del Código Judicial, se recogen tres causales de forma y no una. Estas causales son: "por haberse omitido algún trámite o diligencia considerado esencial por la ley"; "por haberse omitido cualquier otro requisito cuya omisión cause nulidad"; y "por haberse anulado, mediante la sentencia impugnada, un proceso sin que hubiesen concurrido los supuestos legales".

De manera, entonces, que cuando se sustente el recurso de forma en el numeral 1° del artículo 1155 antes referido, deberá el casacionista especificar en el recurso, cuál de las causales contenidas en la disposición citada es la que se invoca, de lo contrario el examen de la misma se hace imposible.

De oto lado, se advierte también, que incurre el recurrente en el error de formular cargos de injuricidad contra la sentencia que se impugna, dentro de la causal. Esta Superioridad, en resolución de 21 de enero de 1998, dejó claramente señalado que cuando se hagan señalamientos en forma de cargos de injuricidad contra la sentencia recurrida, los mismos deben aparecer formulados en los motivos del recurso, que es el aparte del recurso donde deben aparecer formulados los mismos y no en otro distinto. En virtud de lo que viene expuesto, concluye la Sala que respecto de la causal de forma examinada no se cumplen los requisitos básicos para ser admitida, por lo que debe desestimársele.

La segunda causal invocada por la parte recurrente, lo es, la infracción de normas sustantivas de derecho, por interpretación errónea de la norma de derecho", causal de fondo que recoge el artículo 1154 del Código Judicial.

La interpretación errónea de las normas sustantivas de derecho en que incurrió el ad-quem, señala la parte recurrente en los motivos primero y segundo que sustentan la causal, consistió en haber interpretado aisladamente la cláusula primera de la Escritura Pública N° 516 de 26 de julio de 1996, en virtud de la cual se establecía el plazo para el pago de la obligación contraída por la parte recurrente frente a la demandante, en el proceso que se recurre. El vicio de ilegalidad que se denuncia en los motivos indicados es cónsono con la causal que se enuncia.

Sin embargo, advierte la Sala, que el cargo de injuricidad formulado en el motivo tercero no resulta congruente con la causal que se invoca, toda vez que se refiere el casacionista en el mismo, a un error de carácter probatorio. La impugnación de los vicios probatorios, sólo resultan impugnables mediante las causales probatorias contenidas en el artículo 1154 del Código de Procedimiento

Civil, estas son, error de hecho en la existencia de la prueba y, de derecho en la valoración de la prueba.

Debe darse, por tanto, la corrección del motivo, conforme ha sido expuesto.

En lo relativo a la citación de las normas de derecho infringidas, se citan como tal, normas inherentes a la interpretación de los contratos, lo que resulta congruente con la causal que se citan y los cargos contenidos en los motivos primero y segundo.

Conforme se señala, en la causal de fondo que se examina se incurre en el defecto de forma indicado, al examinarse los motivos, por lo que de acuerdo al artículo 1166 del Código Judicia, debe ordenarse la corrección de la misma, para lo cual se concede el término de cinco (5) días dispuesto en la norma citada.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación en la forma interpuesto por el señor HORACIO MARQUEZ, mediante apoderado judicial, contra la resolución de 29 de mayo de 2000, expedida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial; y ORDENA LA CORRECCION de la causal de fondo, para lo cual se concede el término de cinco (5) días dispuestos en la Ley.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MIGUEL AMADOR DUQUE RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO QUE LE SIGUE A CONFEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO (COLAC). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante resolución de 10 de agosto del 2000, esta Sala de la Corte ordenó la corrección del recurso de casación propuesto por el Licenciado MARCOS TULIO LONDOÑO A., apoderado judicial del señor MIGUEL AMADOR DUQUE, contra la resolución de 26 de mayo del 2000 proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro del proceso ordinario declarativo que ha instaurado MIGUEL AMADOR DUQUE contra la CONFEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO (COLAC).

Para corregir se le concedieron al recurrente los cinco días que dispone el artículo 1166 del Código Judicial, aprovechando oportunamente el mismo según consta en el informe secretarial visible a foja 626, por lo que debe la Corte pronunciarse en forma definitiva en torno a la admisibilidad del recurso presentado.

Previo al examen del escrito de corrección, debe indicarse que la corrección se ordenó exclusivamente, sobre la única causal de forma y la primera causal de fondo enunciada. Al respecto, para una mejor ilustración de la Sala, se reproducen de la respectiva resolución, consultable de fojas 614-616 del expediente, los aspectos cuya corrección se ordenó:

> "Dentro de las normas que se citan como infringidas, aparecen tanto las de naturaleza probatoria como las de carácter sustantivo.

Respecto de cada una, en términos generales, se expone el concepto de infracción. No obstante en la causa de forma, que trata de enmendar errores in procedendo, las disposiciones sustantivas no tienen cabida, por lo que debe corregirse la misma.

El recurrente invoca dos causales de casación en el fondo. La primera de ellas es: infracción de normas sustantivas de derecho, por error en cuanto a la apreciación de la prueba, la cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la Resolución recurrida. Esta causal se encuentra invocada erróneamente, toda vez que el casacionista no señala cuál es el concepto del error, si es de derecho o de hecho en la apreciación de la prueba, tal como lo establece el artículo 1154 del Código Judicial, en cuanto a su existencia.

En los motivos se refiere la parte recurrente a una serie de pruebas supuestamente mal valoradas por el juzgador a-quem, lo que incidió en lo dispositivo de la resolución recurrida, y cita en el motivo cuarto una disposición legal, lo que no es compatible con la técnica del recurso de casación. Además, cita normas probatorias y de carácter sustantivas como infringidas, por lo que procede la corrección de esta primera causal de fondo examinada."

El escrito de corrección presentado por la parte recurrente corre de fojas 618-625 del expediente. Al examinar el mismo la Sala arriba a la conclusión que la causal de forma así como la de fondo se ajustan a lo ordenado, por lo que procede la declaratoria de admisibilidad.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación en la causal de forma y la de fondo, interpuesto por MARCOS TULIO LONDOÑO A., en representación de MIGUEL AMADOR DUQUE.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JOSE MARIA LOPEZ Y JUDI ESTHER SERRANO DE LOPEZ RECURREN EN CASACION EN EL PROCESO SUMARIO DE INTERDICTO POSESORIO DE PERTURBACION DE LA POSESION QUE LE SIGUE A TODOS LOS COPROPIETARIOS DEL EDIFICO P.H. GLAMOUR TOWER. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMA, TREINTA (30) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado BENEDICTO DE LEON FUENTES, en su condición de apoderado judicial de JOSE MARIA LOPEZ DIAZ y JUDY ESTHER SERRANO DE LOPEZ, ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de 12 de mayo de 2000 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia en el proceso sumario de interdicto posesorio de perturbación de la posesión que los casacionistas le siguen a todos los COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO P.H. GLAMOUR TOWER.

Cumplido el reparto de rigor, el negocio se fijó en lista por seis días para que dentro de los tres primeros la parte opositora alegara sobre la admisibilidad del recurso y dentro de los tres siguientes el recurrente presentara su réplica al respecto. En este sentido, sólo la opositora presentó escrito, el cual corre de fojas 193 a 198.

La Sala procede al examen de recurso de casación, visible de fojas 180 a 186, conforme a los requerimientos que establece los artículos 1165 y concordantes del Código Judicial.

Realizado el examen de rigor, esta Sala considera que el recurso cumple a cabalidad con las exigencias que establece el artículo 1165 del Código Procesal, es decir:

1) La resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley;

2) El recurso ha sido interpuesto en tiempo;

3) El escrito por medio del cual fue interpuesto reúne todos los requisitos ordenados por el artículo 1160; y,

4) La causal expresada es de las señaladas por la ley.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación interpuesto por JOSE MARIA LOPEZ Y JUDI ESTHER SERRANO DE LOPEZ contra la resolución de 12 de mayo de 2000, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia en el proceso sumario seguido contra TODOS LOS PROPIETARIOS DEL EDIFICIO P.H. GLAMOUR TOWER.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario General, Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CATALINO RODRIGUEZ GONZALEZ RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A NESTOR BONILLA CEDEÑO. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado JULIO ANTONIO CANDANEDO actuando en nombre y representación de CATALINO RODRIGUEZ GONZALEZ, parte actora en el proceso ordinario seguido contra NESTOR DARIO BONILLA CEDEÑO, ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de 23 de mayo de 2000 dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial.

Luego de verificarse el reparto correspondiente, el negocio se fijó en lista para que las partes presentaran alegatos sobre la admisibilidad del recurso, término que sólo aprovechó el representante de la parte demandada, como consta de fojas 280 a 282.

La Sala procede a determinar si el recurso cumple con los presupuestos que determinan los artículos 1165 y 1160, entre otros, del Código Judicial.

Vemos que la causal objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley y que el recurso ha sido interpuesto en tiempo. Sin embargo, el escrito de formalización (visible de fojas 264 a 270) presenta defectos que no permiten la admisión del recurso.

El recurrente invoca una causal de forma y otra de fondo.

La causal de forma la expresa en los siguientes términos: "Por haberse omitido trámite o diligencia considerada esencial en la ley lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución impugnada".

Como es sabido, esta causal la establece el artículo 1155 en su primer ordinal y, en relación a la misma, la Corte ha dicho que no debe enunciarse en el grado de abstracción en que lo hace la Ley, tiene que especificarse el trámite o diligencia omitido, como por ejemplo, señalando alguna de las formalidades indispensables para falla, contempladas en el artículo 1136 del Código Judicial. (Cfr. Fallo de la Sala Civil de 21 de octubre de 1994, R.J. p.200-201)

En el único motivo que se establece como fundamento de esta causal se expresa lo siguiente:

> "El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial omitió y por tanto desconoció contenido de ley que le hace obligante practicar las pruebas que fueran necesarias para aclarar puntos oscuros o dudosos en el proceso; y es que tal actitud se implementa desde primera instancia al no prestar, el Juez Quinto del Circuito de Chiriquí atención a las argumentaciones respecto a la comparecencia de NESTOR DARIO BONILLA CEDEÑO, (fojas 75,90 y 91), el demandado, para rendir declaración de parte; y con respecto al Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial al obviar la importancia de lo que NESTOR DARIO BONILLA CEDEÑO, podía aclarar lo concerniente a la temática expuesta en el debate judicial contenido en el juicio a que se refiere el memorial; la obligación procesal que deviene de ley al Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, al no ser implementada, configura una omisión de un trámite o diligencia considerada esencial por la ley, por cuanto que no efectuó, siendo imperativo hacerlo, la práctica de los elementos de convicción que fueran necesarios para aclarar puntos oscuros o dudosos en el proceso, y es en razón de tal omisión que se ha llegado a la conclusión que resalta de la Sentencia de 23 de mayo del año 2000 proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial dentro del negocio jurídico propuesto por CATALINO RODRIGUEZ GONZALEZ contra NESTOR DARIO BONILLA CEDEÑO".
> (fojas 264 a 265)

De lo expuesto en este motivo se desprende que el trámite o diligencia omitido fue el no haberse practicado una prueba aducida en primera instancia, consistente en la declaración de parte, en este caso del demandado NESTOR DARIO BONILLA, según consta a fojas 75, 90 y 91 del expediente. En tal sentido, se acusa al Juez de primera instancia de no prestar atención a la solicitud de comparecencia de dicha parte y, en cuanto al Tribunal Superior, se aduce que no efectuó "la práctica de los elementos de convicción que fueran necesarios para aclarar puntos oscuros o dudosos en el proceso".

Al revisar las fojas 75, 90 y 91 del expediente, citadas en el motivo, se observa que, en efecto, la aludida prueba (declaración del demandado) fue solicitada ene primera instancia. Sin embargo, en segunda instancia no se reclama la reparación de dicha falta, ya que no se vuelve a solicitar que se practique la citada prueba sino otras como la declaración de testigos y una inspección judicial pericial. Esto se puede verificar a fojas 124 (escrito de presentación de pruebas), 143 (sustentación de la apelación) y 232 (alegato de conclusión), en las que ni siquiera se menciona la prueba no practicada a la que se alude en el motivo de la causal.

Debido a esta circunstancia, el recurso de casación en la forma no puede ser admitido, conforme lo dispone el artículo 1179 del Código Judicial.

Se procede, entonces, al examen de la causal de fondo.

Como única causal se invoca la "Infracción de normas sustantivas de

derecho, por error de hecho sobre la existencia de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución impugnada".

Para efectos de esta casual debe invocarse como norma probatoria violada aquella que consagra la existencia de la prueba. Sin embargo, en este caso el recurrente omitió citar la norma del Código Judicial pertinente a la causal de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba.

Por tanto, se concede al casacionista la oportunidad de corregir esta causal del recurso, en el sentido de citar las normas congruentes con la causal invocada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la causal de forma y ORDENA LA CORRECCION de la causal de fondo, contenidas en el recurso de casación interpuesto por CATALINO RODRIGUEZ GONZALEZ contra la resolución de 23 de mayo de 2000 dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, dentro del proceso seguido contra NESTOR BONILLA CEDEÑO.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA

(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO

Secretario de la Sala Civil, Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CONFLICTO DE COMPETENCIA

CONFLICTO DE COMPETENCIA SUSCITADO ENTRE EL JUZGADO SEPTIMO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMA, RAMO DE LO CIVIL Y EL JUZGADO DECIMO DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA, RAMO CIVIL EN EL PROCESO ORDINARIO DE MENOR CUANTÍA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR INSTAURADO POR PAN YU CUAN CONTRA DISTIRBUIDORA YALE, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, CATORCE (14) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Ha ingresado al conocimiento de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Séptimo Municipal del Distrito de Panamá, Ramo de lo Civil, y el Juzgado Décimo de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, que guarda relación con la demanda de protección al consumidor propuesta por PAN YU CUAN contra DISTRIBUIDORA YALE, S. A.

La remisión del expediente deberá ser atendido por esta Sala, en base al numeral 3 del artículo 93 del Código Judicial, por tanto, se procede a ello, previo el análisis de los argumentos vertidos por la Juez Séptima Municipal del Distrito de Panamá y el señor Juez Décimo de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil.

La Juez Séptima Municipal, Ramo Civil del Primer Distrito Judicial de la Provincia de Panamá, mediante Auto N°45-99 de 26 de octubre de 1999, admitió, en primera instancia, la demanda ordinaria de menor cuantía presentada ante su despacho, por el señor PAN YU CUAN contra DISTRIBUIDORA YALE, S. A. Posteriormente, dictó el Auto N°53-99 de 15 de diciembre de 1999. por el cual DECLINA la competencia del presente proceso de protección al consumidor, al Juzgado de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá (f.24-26).

Dentro de las consideraciones externadas por la juzgadora, señala que constan pruebas de la relación contractual existente entre FERRETERIA Y MATERIALES PAN Y DISTRIBUIDORA YALE, S. A., y que el vehículo que iba a adquirir el primero nombrado, sería utilizado en el establecimiento comercial del señor PAN YU CUAN, por tanto, no podría ser considerado como consumidor, citando al respecto el artículo 29 de la Ley 29 de 1° de febrero de 1996:

> "Artículo 29: Definiciones. Para efectos de este título, los siguientes términos se entenderán así:
> 1.-...
> 2.-Consumidor: Persona natural o jurídica que adquiera de un proveedor bienes o servicios finales de cualquier naturaleza"... (el subrayado es nuestro).

Por su parte, el Juzgado Décimo de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, al recibir el expediente que nos ocupa, dictó Auto N°305 de 15 de febrero de 2000, en el que advierte que antes de avocarse al conocimiento o declinatoria del mismo, conforme lo prevé el artìculo 703 del Código Judicial, se ha podido percatar de "ciertas omisiones de tipo formal que hace improcedente la declinatoria en esos términos declarada por la Juez Séptima Municipal del Distrito de Panamá, Ramo Civil" (f.29) señalando en su parte medular lo siguiente:

> "1. Si bien es cierto que por disposición de la ley procesal "La Jurisdicción civil ordinaria conocerá de todo asunto que no esté atribuído por la Ley o jurisdicciones especiales" (art.228 C.J.), tampoco deja de ser cierto que la excepción a la regla expuesta la representa el hecho de que la jurisdicción especial sólo conoce de los casos que por ley le están expresamente atribuidos a ella.
>
> 2. Que la declinatoria de competencia es procedente en la medida que quien la declare no sea competente, por las razones contenidas en el artículo 234 del Código Judicial, para conocer de un caso determinado.
>
> 3, La falta de jurisdicción y la falta de competencia son figuras jurídicas que, en lo procesal, producen la nulidad absoluta de lo actuado, con la distinción de que la primera de ella no puede ser subsanada por las partes, mientras que la segunda sí.
>
> 4. La declinatoria de competencia, para que opere debe originarse dentro de Juzgado de Circuito o Municipales de la misma jurisdicción y de la misma jerarquía, siendo improcedente e inoperante cuando un Juez Municipal, ensaya la figura descrita hacia un Juez de Circuito." (fs. 31-32).

Después de haber planteado los argumentos vertidos por ambos juzgadores, pasa la Sala a resolver el conflicto surgido entre ellos y dada su naturaleza, es menester referirnos a la Ley N°29 de 1° de febrero de 1996, "Por la cual se dictan normas sobtre la defensa de la competencia y se adoptan otras medidas", especialmente en los artículos 28 y 29, numeral 2, que ha invocado la Juez Séptima Municipal, fundamentos legales que citamos textualmente:

> "Artículo 28. Beneficiarios. Son beneficiarios de las normas de este título, todos los consumidores de bienes y servicios finales,y quedan obligados a su cumplimiento todos los proveedores.
>
> Los contratos o transacciones, para la compra de bienes muebles destinados al consumidor, y la prestación de servicios profesionales o técnicos, se sujetarán a las disposiciones de este título.
>
> Artículo 29. Definiciones. Para efectos de este título, los siguientes términos se entenderán así:

1. ...
2. Consumidor. Persona natural o jurídica que adquiera de un proveedor bienes o servicios finales de cualquier naturaleza.
..."

Se colige de las normas antes transcritas que, para los efectos de la Ley N°29 de 1996, el concepto de "CONSUMIDOR", es la persona natural o jurídica que adquiere de un proveedor bienes o servicios finales. Esta definición contempla el destino de los bienes o servicios adquiridos, especificando que debe tratarse únicamente de bienes o servicios finales, entendiéndose que los mismos no tengan un uso ulterior, sino que será el único beneficio al consumidor.

Al analizar los hechos que constituyen la demanda, aprecia la Sala que la transacción celebrada entre el demandante y la empresa demandada versaba sobre la adquisición o compra de un equipo mini cargador frontal, Marca BOBCAT. Que para el financiamiento bancario, el demandante aportó la licencia industrial del negocio denominado FERRETERIA Y MATERIALES PAN,, tal como consta en la nota de 14 de octubre de 1998, por la cual la empresa DISTRIBUIDORA YALE, S. A., devolvió a la empresa FERRETERIA Y MATERIALES PAN, los siguientes documentos: Licencia Industrial, Declaración de renta y copia de cédula de identidad personal del señor PAN YU CUAN, señalando que dicha devolución se hacía, "ya que su solicitud no fue aprobada por el banco" (f.4).

Sin lugar a dudas, el equipo que iba a ser adquirido por el demandante iba a formar parte de la actividad comercial que el mismo desempeña y no para su uso personal, razón por la cual la presente controversia se encuentra excluída del ámbito de aplicación de la Ley N°29, de 1° de febrero de 1996, al tenor de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 29 de la referida excerta legal.

Esta Corporación de Justicia se ha pronunciado sobre esta materia, en resoluciones de 26 de mayo y 6 de julio de 2000, sobre las cuales nos permitimos transcribir su parte medular:

> "En este caso en particular, de las constancias procesales se desprende que la parte actora compró el vehículo Mitsubichi, modelo Canter, año 1999, tipo volquete, no para su uso personal o familiar, sino para emplearlo en el desarrollo de actividades empresariales (transporte de materiales de construcción como parte de la empresa CONSTRUCCIONES R.R. RUIZ -ver fs.22), a tal punto que, habiendo sufrido el vehículo desperfectos mecánicos, tuvo que alquilar otro camión para hacerle frente a sus compromisos profesionales.
>
> Todo indica que el demandante al adquirir el vehículo lo introdujo al mercado, integrándolo al proceso productivo, razón por la que no puede considerársele como consumidor de un bien final, conforme se define en la Ley 29 de 1996. El bien adquirido, al ser utilizado en el desarrollo de una actividad profesional, fue introducido en un proceso económico, pues se dedicó a satisfacer una necesidad empresarial y, desde ese punto de vista, no puede afirmarse que se le haya destinado al uso personal o familiar dentro del entorno social inmediato del comprador. (El énfasis es de la sentencia citada).
>
> Según lo establece el numeral 2 del artículo 141 de la Ley 29 de 1 de febrero de 1996, los tribunales especiales de la competencia que en ella se crean, conocerán exclusiva y privativamente de las causas en materia de protección al consumidor. Como hemos visto, no es esa la condición en que se encuentra la parte demandante en este proceso, o sea que el demandante no es un consumidor; realidad que nos obliga a llegar a la conclusión de que el Juzgado Octavo de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, no es el competente para conocer de la demanda presentada."

(Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Octavo de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá y el Juzgado Decimoquinto de Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá en el proceso de protección a los derechos del consumidor incoado por RICAUTER RENE RUIZ MIRANDA contra MOTORES DE LA GUARDIA, S. A.)."

Por tal motivo, la Sala concluye que el presente negocio es competencia de la jurisdicción ordinaria civil y, en consecuencia, debe remitirse al Juzgado Décimo de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FIJA LA COMPETENCIA del proceso ordinario de menor cuantía, de protección del consumidor, interpuesto por PAN YU CUAN contra la empresa DISTRIBUIDORA YALE, S. A., en el Juzgado Décimo de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IMPEDIMENTO

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO JOSÉ A. TROYANO DENTRO DEL RECURSO DE CASACIÓN EN EL PROCESO DE QUIEBRA QUE LE SIGUE A BANCO AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PANAMÁ, S. A. (BANAICO). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, OCHO (8) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Magistrado JOSÉ A. TROYANO ha solicitado a la Sala Primera de la Corte Suprema, se le declare impedido y, en consecuencia, se le separe del conocimiento del recurso de casación formulado por el licenciado DARIO EUGENIO CARRILLO GOMILA, en su condición de apoderado judicial de la sociedad FIESTA VENTURE, S. A., contra la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del 16 de mayo de 2000, dentro de la solicitud de quiebra presentada por dicha sociedad contra BANCO AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PANAMÁ, S. A., (BANAICO).

El Magistrado TROYANO fundamenta su impedimento en el hecho siguiente:
"...
Hago esta solicitud en virtud de que se publicó en los periódicos de la localidad, que el Licenciado DARIO CARRILLO GOMILA interpuso una denuncia en mi contra, ante la Asamblea Legislativa; situación que considero configura la causal de impedimento contenida en el numeral 11 del artículo 749 del Código Judicial...."

La circunstancia alegada por el Magistrado TROYANO, tiene amparo jurídico como causal de impedimento, por lo tanto, se procede acceder a lo pedido.

Por lo antes expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL el impedimento presentado por el Magistrado JOSÉ A. TROYANO para conocer del recurso de casación interpuesto por FIESTA VENTURE, S. A., mediante apoderado judicial, contra la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 16 de MAYO de 2000, lo separa del conocimiento del mismo y DISPONE llamar al Magistrado de la Sala Segunda, de lo Penal, que le corresponda, de acuerdo al

orden alfabético respectivo.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CARLA MIGDALIA REGNO FRANCUCCI RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A THE CHASE MANHATTAN BANK. CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAG. FÁBREGA ZARAK. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

En Honorable Magistrado ROGELIO A. FABREGA Z. solicita que se le declare impedido en este negocio, mediante escrito que es del tenor siguiente:

> "Respetuosamente solicito a los Honorables Magistrados de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, se me separe del conocimiento del expediente contentivo del recurso de casación formulado por CARLA MIGDALIA REGNO FRANCUCCI contra THE CHASE MANHATTAN BANK.
>
> Las razones de mi solicitud obedece al hecho de que fui denunciado ante la Asamblea Legislativa por la señora CARLA MIGDALIA REGNO FRANCUCCI, con motivo de que fungí como Magistrado Sustanciador en el recurso de casación propuesto por SWISS BANK CORPORATION (OVERSEAS), S. A. dentro del proceso ordinario que le siguió CORPORACION ANADE, S. A., cuyo representante legal de dicha empresa, era la señora CARLA MIGDALIA REGNO, hoy demandante en el presente proceso.
>
> Por las consideraciones expuestas, baso mi impedimento en el numeral 11 del artículo 749 del Código Judicial.
>
> (fdo.)
> ROGELIO FABREGA ZARAK
> Magistrado"

La razón anotada por el Magistrado FABREGA ZARAK, como motivo para que se le excluya del conocimiento de este asunto, en efecto, se adecua a uno de los supuestos establecidos en el numeral 11 del artículo 749 del Código Judicial como causal de impedimento para que el resto de la Sala acceda a la presente solicitud.

Por las consideraciones anteriores, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por el Magistrado ROGELIO A. FABREGA Z., lo separa del conocimiento del presente negocio y, DISPONE que se llame al Magistrado de la Sala Segunda que le corresponda, conforme al orden alfabético de apellidos.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario de la Sala Civil, Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HECHO

DARIO E. CARRILLO RECURRE DE HECHO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 31 DE MAYO DE 2000 DEL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN LA EJECUCIÓN DEL LAUDO ARBITRAL PROPUESTO POR INVERSIONES FATIMA, S. A. CONTRA PROYECTOS URBANISTICOS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, CATORCE (14) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado DARIO EUGENIO CARRILLO GOMILA, actuando en calidad de apoderado judicial de INVERSIONES FATIMA, S. A., en el proceso arbitral promovido contra PROYECTOS URBANISTICOS, S. A., ha promovido recurso de hecho contra la resolución de 31 de mayo de 2000, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, la cual CONFIRMA, en fase de ejecución el Auto N°2752 de 30 de septiembre de 1999, dictado por el Juez Sexto del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Dada la naturaleza del proceso, la SALA deberá determinar, en primer lugar, si la resolución recurrida puede ser objeto de impugnación, por medio del recurso extraordinario de casación. Por ello resulta necesario hacer un recuento del origen del proceso arbitral.

De la revisión de los expedientes que conforman los antecedentes del caso, se ha podido constatar la existencia de un Laudo Arbitral pactado entre INVERSIONES FATIMA, S. A. y PROYECTOS URBANISTICOS, S. A., el cual fue constitído, a petición del apoderado judicial de INVERSIONES FATIMA, S. A., mediante Auto N°940 de 30 de mayo de 1995 en el Juzgado Sexto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, y modificado por el Primer Tribunal Superior de Justicia, sólo en cuanto a la designación del secretario del tribunal, en el sentido que deberá hacerse "una vez quede formalmente constituído CONFIRMANDOLO en todo lo demás" (f.100).

Cumplidos los requisitos y formalidades de instalación del Tribunal de Arbitraje, el cual quedó integrado por los siguientes profesionales: Ingeniero LAURENCIO GUARDIA CONTE, Ingeniero RAMON A. YOUNG A. y el Ingeniero RENE ORILLAC, dicho tribunal se pronunció en el Laudo Arbitral, el día 11 de octubre de 1996. (fs.118 y siguientes).

Observa también la SALA que contra la resolución dictada en el Laudo Arbitral, el apoderado judicial de INVERSIONES FATIMA, S. A., recurrió en casación, en la forma, siendo inadmitido el mismo por la Sala de lo Civil, mediante resolución de 9 de abril de 1999. (fs.135-137).

Aclaradas las circunstancias que se dieron en el proceso arbitral, la SALA advierte que la resolución que se pretende sea recurrida en casación, trata de la fase de ejecución del proceso arbitral, en el cual el Primer Tribunal Superior de Justicia en resolución de 15 de mayo de 2000 (fs.139 y ss.), CONFIRMA Auto N°2752 de 20 de septiembre de 1999, dictado por el Juzgado Sexto de Circuito Civil, por el cual se aprueba la liquidación preparada por la Secretaría del Tribunal, en el proceso arbitral propuesto por INVERSIONES FATIMA, S. A. contra PROYECTOS URBANISTICOS, S. A.

En el presente caso, el recurrente ha promovido recurso de casación contra la orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia, que confirmó la liquidación de perjuicios estimada por el juzgador de primera instancia.

Estima la Sala que carece de total sustento jurídico el fundamento legal invocado por el recurrente, es decir, ordinal 8 del artículo 1149 del Código Judicial, dado que no estamos en presencia de una resolución que confirme,

modifique o revoque las que aprueben o imprueben las liquidaciones de perjuicios, con fundamento en el artículo 983 del Código Judicial.

No obstante lo anterior, el auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia, puede ser recurrido en casación, ya que se encuentra dentro de las resoluciones previstas en el numeral 2 del artículo 1149, que nos permitimos transcribir:

> "ARTICULO 1149. El recurso de casación tendrá lugar contra las resoluciones de segunda instancia proferidas por los Tribunales Superiores de Justicia en los siguientes casos:
> ...
> 2. Cuando se trate de autos que pongan término a un proceso o que por cualquier causa extingan o entrañen la extinción de la pretensión o imposibiliten la continuación del proceso;
> ..."

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONCEDE EL RECURSO DE HECHO formulado por INVERSIONES FATIMA, S. A.. mediante apoderado judicial y, en su lugar, ORDENA al PrimerTribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, que conceda el término para la formalización del recurso de casación.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

LEOVIGILDO CASTILLO RECURRE DE HECHO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL 11 DE JULIO DE 2000 DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL PROCESO ORDINARIO PROPUESTO POR GOTCHA SPORT COMPANY, S. A. CONTRA TOBIAS TURGMAN GRSTMAN. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado LEOVIGILDO CASTILLO JR., en nombre y representación de TOBIAS TURGMAN, parte demandada en el proceso ordinario que le sigue GOTCHA SPORT COMPANY, S. A., ha interpuesto recurso de hecho contra la resolución de 11 de julio de 2000 con la cual le fue negado el término para la formalización del recurso de casación que persigue impugnar auto del Primer Tribunal Superior de Justicia.

En lo sustancial, aduce el recurrente que el recurso de casación tendrá lugar, según lo prescrito en la Ley procesal, contra la resolución de segunda instancia que ponga término a un negocio o cuando la misma extinga o entrañe la extinción de la pretensión del proceso, cayendo la resolución dictada dentro de esas circunstancias.

No obstante, al examinarse la resolución contra la que se recurre de hecho, es dable advertir que la negativa del Tribunal Superior a conceder el recurso de casación se basó en que el negocio o proceso no alcanza la cuantía mínima que, de conformidad con el ordinal 2 del artículo 1148 del Código Judicial, reformado por el artículo 7 de la Ley N°31 de 28 de mayo de 1998, se requiere para que ese remedio procesal extraordinario pueda interponerse.

En efecto, la cuantía del negocio fue cifrada en la demanda en la suma de

B/.8,000.00, cantidad a la que resultó condenada la parte demandada mediante la resolución que se aspira impugnar en casación. Como quiera que, de acuerdo con la disposición invocada por el Tribunal Superior, para que una resolución sea recurrible en casación es indispensable que la cuantía del negocio no sea menor de B/.10,000.00, la Sala encuentra correcta la decisión dictada en la que no se concede ese recurso.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA el recurso de hecho propuesto contra la resolución dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 11 de julio de 2000, en el proceso ordinario propuesto por GOTCHA SPORT COMPANY, S. A. contra TOBIAS TURGMAN GRSTMAN, mediante apoderado judicial.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA SEGUNDA DE LO PENAL

AGOSTO 2000

ACLARACIÓN DE SENTENCIA

SOLICITUD PARA QUE SE ACLARE LA SENTENCIA DE 26 DE JUNIO DE 2000, PROFERIDA POR SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, ONCE (11) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La licenciada Damarys Itzel Caballero de Almengor, apoderada judicial de Pablo Constantino Moreno, Director Ejecutivo de Cuarentena Agropecuaria, solicitó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que corrija o aclare la parte resolutiva de la sentencia fechada 26 de junio de 2000, por medio de la cual se sobreseyó de manera definitiva a Pablo Constantino Moreno, Director Ejecutivo de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en las sumarias iniciadas por medio de querella presentada por Dov Binder.

Dicha solicitud se fundamenta en el hecho de que la resolución en comento incurrió en un error de escritura, toda vez que se dictó un sobreseimiento de carácter personal a favor de Pablo Constantino Moreno y lo que procedía era un sobreseimiento objetivo e impersonal. Ello es así porque Constantino no fue indagado, en consecuencia, nunca adquirió la calidad de imputado dentro del proceso (fs.931-932).

Observa la Corte, que la meritada resolución judicial expedida por esta Corporación de Justicia, explica claramente en su parte motiva los fundamentos jurídicos que se utilizaron para sustentar el fallo que dio como resultado la decisión adoptada por esta Sala. Por lo tanto, un cambio en la parte resolutiva significaría modificar los argumentos utilizados, situación que no se puede entrar a considerar mediante una aclaración de sentencia.

Como quiera que esta Superioridad no encuentra fundada la solicitud de la apoderada judicial de Constantino, lo procedente es confirmar la sentencia de 26 de junio de 2000.

En virtud de lo anteriormente expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA la solicitud de aclaración de la sentencia de 26 de junio de 2000.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO APELADO

AUTO APELADO PRESENTADO POR EL LICDO. ALDO AYALA M. EN SU CONDICIÓN DE APODERADO DEL SEÑOR GUILLERMO ANTONIO BULA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, TRES (3) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Aldo A. Ayala M., en su condición de apoderado judicial de Guillermo Antonio Bula, ha presentado recurso de apelación contra la resolución de 14 de abril de 2000, expedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que rechaza de plano el recurso de hecho contra la negación del Juez Décimotecero

de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del sumario seguido a su patrocinado.

ARGUMENTO DEL RECURRENTE

Señala el apelante que el Segundo Tribunal Superior de Justicia acogió la decisión del tribunal A-quo, y negó el recurso de hecho basado en que no se encontraba la nulidad acusada dentro de los supuestos de los artículos 2297 y 2298 del Código Judicial (f. 27). Anota que también acusaba de nulo el hecho que se le tomó declaración indagatoria a su cliente sin estar compronbado el hecho punible (f.28).

Por otro lado, sostiene que el el artículo 2201 del Código Judicial sólo permite al agente del Ministerio Público al concluir el sumario peticionar llamamiento a juicio o sobreseimiento provisional o definitivo (f.29).

Concluye solicitando la nulidad del proceso por contrariarse el artículo 2115 del Código Judicial (f. 30).

ARGUMENTO DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR

El Segundo Tribunal Superior de Justicia rechazó el recurso presentado por el recurrente, en virtud de que no se verifica ninguno de los supuestos de nulidad previstos en nuestro ordenamiento procesal y que de conformidad con el artículo 2207-C del Código Judicial solamente pueden recurrirse los sobreseimientos.

ANALISIS DE LA CORTE

La Corte advierte que el Segundo Tribunal Superior de Justicia, otorgó término para sustentación (f. 31) y concedió recurso de apelación contra una resolución en la cual no se han pronunciado como tribunal de primera instancia (f. 33) contrariando lo dispuesto por el artículo 1146 del Código Judicial.

Se le atribuye a esta Colegiatura el conocimiento de un medio de impugnación que expresamente la ley no establece su conocimiento (Ver artículo 97 del Código Judicial), ello es censurable dado que refleja la poca atención que el Magistrado Sustanciador le ha prestado al presente negocio, incurriendo en la irregularidad de enviarnos el mismo.

Por otro lado, es necesario indicarle al letrado Ayala que los medios de impugnación revisten la característica de ser numerus clausus, ello supone que en el ejercicio de la defensa de su patrocinado, no es pertinente atacar los actos jurisdiccionales con incidentes no reconocidos por la ley para tratar de evitar que el juzgado de la causa cumpla con el artículo 1965 del Código Judicial a fin de obtener la verdad material del hecho investigado.

Toda vez que la Corte no puede emitir pronunciamiento respecto del recurso de apelación presentado procede rechazarlo de plano por improcedente.

Por lo anteriormente expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA DE PLANO POR IMPROCEDENTE el recurso de apelación presentado por el Licenciado Aldo A. Ayala M. contra la resolución proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Devuelvase y Notifiquese

(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES R.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ROBERTO GONZÁLEZ R.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO DE ENJUICIAMIENTO APELADO

AUTO DE PROCEDER APELADO POR LA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD Y EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, (UNO) 1 DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de Panamá, mediante auto calendado 30 de marzo de 2000, sobreseyó provisionalmente y de manera impersonal las sumarias en averiguación, en las que está presuntamente involucrado el Fiscal Segundo de Circuito de Chiriquí, Rolando Rodríguez Cedeño, por la comisión de los delitos de abuso de autoridad, extralimitación de funciones públicas, falsificación de documentos públicos, encubrimiento y asociación ilícita para delinquir en perjuicio de Noemí Aguilar Corella. Contra esa decisión jurisdiccional anunció y sustentó en tiempo oportuno recurso de apelación el apoderado judicial de la querellante Aguilar y la defensa técnica de Rodríguez, los cuales fueron concedidos en el efecto suspensivo.

El apoderado judicial de la querellante Noemí Aguilar Corella se muestra disconforme con la resolución atacada, ya que en el cuaderno penal se encuentran fehacientemente comprobados los delitos imputados a Rodríguez que comprometen su responsabilidad penal. En consecuencia, debe dictarse un auto de llamamiento a juicio en su contra (fs.611-621).

En cuanto al recurso de apelación interpuesto a favor de Rolando Rodríguez, el apelante solicita que se dice un sobreseimiento definitivo, toda vez "que no existe delito alguno en la conducta desplegada por el Licenciado ROLANDO RODRÍGUEZ,...sino que, por el contrario, su actuación se ajusta a Derecho" (fs.622-629).

Conocidos los argumentos de los apelantes, corresponde a la Sala decidir las alzadas sólo sobre los aspectos objetados en el auto de sobreseimiento provisional, conforme lo establece el artículo 2428 del Código Judicial.

Para llegar a la decisión que ahora se censura, el ad-quem, entre otras consideraciones, manifestó que no existen suficientes elementos probatorios para demostrar la comisión de los hechos punibles que se le endilgan a Rodríguez, por lo que decretó un sobreseimiento provisional e impersonal en base al artículo 2211 del Código Judicial. En tal sentido, desestima el delito de falsificación de documento público, porque el mismo "consiste en la inserción en un documento público de declaraciones o hechos deliberadamente inexactos o contrarios a la verdad, lo cual no ocurre en este caso, donde el funcionario acusado sólo certificó lo que le constaba en su despacho de instrucción, razón por la cual consideramos que no se prueba el delito de falsedad acusado" (f.603).

También desestima la comisión del delito de abuso de autoridad y extralimitación de funciones, ya "que ni el rechazo de un poder, ni el rechazo de una acusación particular, ni el haber iniciado el funcionario acusado una investigación penal a instancia de un particular, ni el haber expedido una certificación por sí sola constituyen dichos delitos" (f.603).

Continúa expresando el juzgador de segunda instancia que no existe prueba dentro de expediente que demuestre la comisión del delito de encubrimiento, porque no se probó que Rodríguez "haya asegurado su provecho o haya ayudado a eludir las investigaciones de las autoridades, o sustraerse de la acción de ésta

(sic) y mucho menos al cumplimiento de la condena (f.605). Por último, el ad-quem indicó que con respecto al delito de asociación ilícita para delinquir, el mismo requiere como requisitos la concurrencia de tres o más personas que se asocien con el ánimo de cometer delitos y que exista un acuerdo previo entre ellos. Esto indica que tampoco se comprobó la comisión de este delito, toda vez que en esta causa sólo se acusó a Rodríguez y no existen otras personas vinculadas con el supuesto ilícito (f.606).

Observa la Corte, que del análisis realizado a los elementos probatorios obrantes en el cuaderno penal no se encuentra fehacientemente demostrado que Rodríguez haya cometido o participado en la comisión de los delitos que le endilga la querellante. En consecuencia, no se puede acceder a la petición de la defensa técnica de Aguilar, ni a la del apoderado judicial de Rodríguez. Así las cosas, lo factible en estos momentos es confirmar la decisión del tribunal superior a efectos de que se incorporen nuevas pruebas y pueda ser decidido el fondo del proceso.

En virtud de lo anteriormente expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el auto de 30 de marzo de 2000, proferido por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de Panamá, en el sentido de dictar un sobreseimiento provisional e impersonal en las sumarias en averiguación, en las que está presuntamente involucrado el Fiscal Segundo de Circuito de Chiriquí, Rolando Rodríguez Cedeño.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ROBERTO GONZALEZ R. (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO APELADO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A CHEN WAI KUIN CHEN SINDICADO POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante resolución de 4 de enero de 2000, el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial llamó a responder en juicio criminal a WAI KUIN (usual) WEI JUN CHEN CHEN CHEN, de generales conocidas en autos, como supuesto infractor de disposiciones legales contenidas en el Capítulo I, Título I, Libro II del Código Penal, en relación a las normas contenidas en el Capítulo VI, Título II, Libro I de ese mismo código, o sea por el delito de Tentativa de Homicidio en perjuicio de Manuel Hulcombe Marte (fs.449-454).

Tal decisión fue apelada al momento de notificarse tanto el imputado como su abogada defensora, licenciada Mayra Gaviria Ruíz, quien presentó el escrito respectivo en tiempo oportuno, concediéndose el recurso en el efecto suspensivo (f.540).

DISCONFORMIDAD DE LA APELANTE

La licenciada Gaviria Ruíz solicita se revoque el auto apelado en el sentido que se sobresea definitivamente a su defendido de los cargos endilgados.

Del extenso escrito presentado por la defensa técnica (fs.511-528) se extrae que su petición esta fundada en las siguientes consideraciones:

-Manifiesta que su representado sostuvo que disparó contra Hulcombe Marte por un accidente, dado que en el momento tenía "ira temporal" porque se trataba de la misma persona que había intentado meterse en su vivienda en reiteradas ocasiones, y que todo ocurrió en un momento de autodefensa al ver que el hoy lesionado se levantó del suelo y que al tratar de intimidarlo se salió el tiro de la escopeta. Y que en ningún momento su defendido tuvo la intención de causarle daño alguno al señor Hulcombe Marte y que lo ocurrido se debió al estado de enojo o de arrebato del señor Chen Wei Kuin.

Añade que prueba de que existió una "ira temporal" lo es que en el momento que se presentaron los agentes policiales, el señor Chen Wei Kuin entregó el arma de fuego, su cedula y de buena manera se trasladó a la estación de Policía.

-Por otra parte, indica que reposa en el expediente que el señor Hulcombe Marte es una persona indocumentada, que tiene un aspecto de indigente y que ha sido reconocido por el hoy acusado Wei Jun Chen y por el hermano de éste, señor Wai Pain Chen, como la persona que un día de carnaval se metió en la vivienda N° L-4 y que en reiteradas ocasiones ha intentado meterse en la vivienda donde residen.

-La recurrente advierte que existen varias contradicciones en las declaraciones de los testigos, en cuanto a la hora y el día en que ocurrió el hecho; que el testigo Abdel Edmundo Romero González sostuvo que sólo estaban Luis Castillo, Patricia Escobar y él, sin embargo reposan en autos declaraciones de personas que alegan haber estado en el local comercial al momento de los hechos.

-Otro punto que estima la recurrente como dudoso, es el hecho que los testigos afirman que el disparo se dio a una distancia de un metro y que el sujeto estaba sentado, en tanto, el lesionado como el imputado, concuerdan que estaban a una distancia de cinco metros.

También señala, que de los ocho cartuchos sólo fue detonado uno, por lo que en su opinión, el testimonio del imputado tiene veracidad porque de haber querido matarlo tenía tiempo suficiente porque sólo estaban ellos dos, lo que demuestra que en el momento en que Hulcombe Marte se levantó de la acera, su representado al reaccionar se le salió el tiro de la escopeta.

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El licenciado Dimas E. Guevara, Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, es de la opinión que se debe confirmar el auto apelado emitido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Explica que si bien el sindicado Wei Jun Chen al presentar los descargos afirma que disparó contra Manuel Hulcombe Marte porque en diversas ocasiones había intentado introducirse en su residencia, de la diligencia de Inspección Ocular y reconstrucción de los Hechos se infiere que el sindicado recorrió una distancia considerable, armado, al punto que afirma haber observado a un sujeto introducirse a su residencia hasta el lugar en que logra observar al sujeto Manuel Hulcombe y le dispara con as consecuencias gravosas conocidas.

Por lo que se infiere que el sindicado tuvo el tiempo suficiente para dar cuenta a las autoridades del supuesto hecho que se intentó perpetrar en su residencia y no tomarse la justicia por sus propias manos. Señala además, que de tales elementos se infiere que concurre la premeditación en el actuar del sindicado, dado que transcurrió un lapso considerable desde el momento en que supuestamente observa a un sujeto intentando introducirse a la residencia, cuando toma la decisión de buscarlo provisto de un arma, hasta el momento que ejecuta la acción ilícita.

En cuanto a la manifestación de la defensa técnica de que el sindicado actuó por un sentimiento de ira, advierte la representación fiscal que ello en ningún momento constituye un elemento de justificación en su actuar; y que

incluso se puede deducir que con ello se buscaba dar rienda suelta a un sentimiento de venganza por parte del sindicado, la cual hizo recaer sobre un sujeto sobre el cual -en su opinión-, no tenía la plena certeza de que era la persona que supuestamente se había intentado introducir a su residencia.

Agrega el señor Fiscal, que contrario a lo afirmado por la defensa técnica, no se puede actuar en forma accidental y señalar que también concurre la ira, la cual se caracteriza por la presencia de los elementos cognoscitivo y volitivo, es decir, que la persona actúa con la intención de causar daño.

Señala también que aducir que no se tenía la intención de matar, por el hecho de que el imputado no efectuó otro disparo, no compagina con la doctrina penal, toda vez que la sola lesión que se le efectúa al señor Hulcombe Marte era por si misma suficiente para causarle la muerte. En ese sentido señala que el médico forense dictaminó que la lesión puso en peligro la vida, y si la víctima salva su vida fue por la intervención de los galenos que en un esfuerzo médico le proporcionan la asistencia necesaria para ello.

Finalmente concluye, que las pruebas insertas en el expediente demuestran que el sindicado Wei Jun Chen actuó en forma dolosa, al disparar sobre la persona de Hulcombe, sin estar acreditado dentro del expediente ninguna causal de justificación como lo pretende aducir la defensa técnica, causándole lesiones graves que pusieron en peligro su vida, y que ha dejado secuelas graves en la anatomía y salud del afectado (fs.530-532).

OPINIÓN DEL QUERELLANTE

El licenciado Aristides B. Figueroa G., actuando como apoderado judicial del querellante, solicita a esta Sala desestime el recurso incoado debido a la ausencia de sustanciación de técnica jurídica en la elaboración del mismo, ya que la defensa técnica se ha limitado a hacer un alegato de fondo de la instrucción sumarial, pasando por alto el aspecto esencial del auto impugnado. Es del criterio que la defensa técnica no puede objetar con contenido jurídico el auto impugnado debido a los elementos probatorios contundentes que reposan en el proceso y que en modo alguno contravienen lo normado en el artículo 2222 del Código Judicial, que es lo que prevalece en esta etapa intermedia del proceso.

Sin embargo, en cuanto al señalamiento que hace la defensa técnica en el sentido de que su mandante es un piedrero e indigente, ladrón acostumbrado a causarle daño a los demás, indica que de ser así, no le da derecho a nadie a hacerse justicia por sus propias manos.

Opina que es un hecho probado que Chen Wei Kuin actuó en forma delictiva contra su mandante, por venganza, por lo tanto el sobreseimiento definitivo que se pide vulneraría de manera directa el contenido del artículo 2222 del Código Judicial.

Finalmente señala que su mandante es de nacionalidad panameña, es una persona decente que trabaja en un taller que quedaba al frente del negocio "Automotriz del Continente", porta la cédula de identidad personal N° 8-955-1698 y no tiene antecedentes penales ni por delitos ni por faltas (fs.537-538).

ANÁLISIS DE LA SALA

Corresponde resolver el recurso de apelación interpuesto contra el auto encausatorio emitido el 4 de enero de 2000 por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

En primer lugar, llama la atención que en toda la resolución ni siquiera se mencione la fecha en que fue presentada la denuncia, como tampoco cuando aconteció el ilícito investigado, siendo éste un dato fáctico de interés.

Examinado el expediente judicial, se advierte que el auto apelado trata

sobre las sumarias seguidas contra Chen Wai Kuin ó Wei Jun Chen sindicado por el delito de tentativa de homicidio en perjuicio de Manuel Hulcombe Marte, a quien hirió con arma de fuego el día 4 de junio de 1999 en calle séptima, Parque Lefevre, específicamente en la entrada del local comercial "Auto Casa N° 2" ubicado frente al Banco General.

Como consecuencia de la herida recibida, el señor Hulcombe Marte mediante Oficio 96-16320 de 18 de junio de 1999, el Dr. Aquiles H. Espino C., Médico Forense, otorgo una incapacidad provisional de 45 días a partir del día del incidente al señor Manuel Hulcombe Marte y con respecto a la herida con arma de fuego que recibiera determinó "Hemiabdomen izquierdo. Lesión del intestino delgado, grueso, factis necrotijante, nefrectomía y colostomía. Paciente grave" (f.146).

En septiembre de ese año, el Dr. Eric S. Aguirre S., luego de examinar al señor Hulcombe Marte aumentó la incapacidad provisional sesenta días mas, haciendo un total de 105 días a partir del día del incidente. Indica que presenta cicatriz de laparotomía y colostomía en hemiabdomen izquierdo; que el paciente manifestó que no camina, que tiene mucho dolor en la región lumbo-sacra y adormecimiento del miembro inferior izquierdo. Se refiere a la radiografía que se le efectuara en el hospital Santo Tomás el 21 de ese mes, señalando que muestra ocho objetos radiopacos en columna lumbar. Solicita evaluación por neurocirugía al hospital Santo Tomás (f.375).

Constan vistas fotográficas donde se aprecia el estado físico actual del señor Manuel Hulcombe Marte luego de la herida con arma de fuego que recibiera en su anatomía (fs.281-283 y 393).

El A-Quo como fundamento a su decisión plasmada en el auto de 4 de enero de 2000 señaló lo siguiente:

> "... consideramos que se reúnen los requisitos indispensables para encausar a WAI O WIJUN CHEN CHEN, pues el hecho punible se encuentra acreditado con los certificados médicos legales que brindan detalles de las lesiones sufridas por HULCOMBE, con la diligencia de reconstrucción de los hechos y con las distintas vistas fotográficas.
>
> El elemento subjetivo se acredita con el señalamiento directo de la víctima, con la deposición de los agentes policiales OMAR MORALES y ÁNGELES MENDOZA SAMUDIO, quienes señalaron haber visto al investigado con el arma de fuego en la mano, además con las deposiciones de NAPOLEÓN PERALTA y ABEL ROMERO, quienes observaron cuando el imputado disparó al hoy lesionado.
>
> Como quiera que se reúnen los requisitos establecidos en el segundo párrafo del artículo 2222 del Código Judicial, es por lo que procederemos a abrir causa criminal contra el investigado" (f.453).

Ahora bien, sostiene la defensa técnica en su escrito de apelación que su representado no niega haberle disparado al señor Hulcombe Marte pero que ello se debió a "un accidente involuntario, por tener en el momento una ira temporal".

Al remitirnos a la declaración indagatoria rendida por Wai Kuin o Wei Jun Chen Chen (fs. 123-130), señala que el día 4 de junio de 1999 al llegar a su casa ubicada en calle novena con el propósito de almorzar observó que su hermano Carlos Cheng estaba afuera cerca de un muro mojandose con el aguacero, y al preguntarle que hacía, aquel le contestó que había recibido una llamada donde le informaban que un sujeto estaba dentro de la casa, y que ello era cierto, y se trataba del mismo sujeto que se les había introducido en la residencia para los carnavales del año anterior. Señala el indagado, que fue a ver donde estaba el sujeto y logró verle cuando saltaba el muro de la casa de la vecina, dirigiéndose hacia Vía España, por lo que decidió ir a buscarlo en el automóvil.

Afirma que el llegó a un local donde venden pintura y se agachó detrás de un carro y él (indagado) se bajo del auto con su escopeta 12, y textualmente manifiesta: "cuando yo lo vi el sujeto levantó de repente de ahí se me soltó el disparo" (f.126).

Agrega que no interpuso denuncia contra el sujeto cuando se introdujo a su propiedad para la fecha de los carnavales de 1998, pero su vecina si lo denunció ante las autoridades en aquella época.

Contrario a lo afirmado por el imputado Wai Kuin o Wei Jun Chen Chen, se tiene el testimonio del señor Napoleón Alfonso Peralta Suarez quien labora en la empresa de venta de pintura denominada "Comercial Auto Casa #2". Señala que el día de los hechos caía un fuerte aguacero y aproximadamente las 2:35 p. m. cuando se encontraba conversando con Luis Castillo quien es tinturador y Patricia Escobar administradora del negocio, observó que llegó un asiático con una escopeta y se paró frente a un joven que estaba frente al local sentado en el piso comiéndose un pan y que se había quitado las zapatillas y la camiseta empapado por la lluvia; el chino le apuntó y el joven le dijo no me mates, y que al ellos ver la situación le gritaron que no lo hiciera, que el joven se paró del piso y el chino le dijo "Te dije que te iba a matar" y le disparó (fs.19-21).

En el mismo sentido declara Abdel Edmundo Romero González, quien también labora en el local comercial Auto Casa # 2. Agrega que el muchacho que hirieron llegó caminando y vestía un pantalón corto sin camisa, con un suéter en el hombro mojado, ya que caía un fuerte aguacero y se sentó al lado de la puerta del almacén y se agachó a comerse un pedazo de pan, cuando llegó el chino y le dijo te dije que te iba a matar y le disparó (fs.22-23)

Consta el acta de la diligencia de Inspección Ocular y reconstrucción de los Hechos (fs.334-374) con las respectivas vistas fotográficas (fs.383-426 y 488-509).

De conformidad con lo expuesto, esta Sala no advierte ninguna causa que excluya la antijuridicidad de la acción típica realizada por el imputado o alguna causa de inimputabilidad o inculpabilidad por lo que se avala la decisión adoptada por el Tribunal A-Quo de encausar penalmente al señor Wai Kuin o Wei Jun Chen Chen por el delito de tentativa de homicidio en perjuicio de Manuel Hulcombe Marte, toda vez que se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 2222 del Código Judicial, esto es, hay plena prueba de la existencia del hecho punible y graves indicios contra el imputado.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el auto apelado.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO DE SOBRESEIMIENTO APELADO

AUTO APELADO EN PROCESO QUE SE LE SIGUE A ESTEBAN ANTONIO LASSO GUEVARA Y OTROS POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE GABINO JARAMILLO QUINTANAR. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, TRES (3) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

A través de resolución calendada 1 de marzo de 1999, el Segundo Tribunal Superior de Justicia sobreseimiento provisional a favor de Esteban Antonio Lasso Vergara, Reynaldo Antonio Rodríguez Nieto y de Edwin Pacheco Grajales, dentro de las sumarias seguidas por delito Contra la Vida y la Integridad personal en perjuicio de Gabino Jaramillo Quintanar.

ARGUMENTO DE LA RECURRENTE

La Agente del Ministerio Público, Fiscal Segunda Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, Licenciada Geomara Guerra de Jones, discrepa del auto del Segundo Tribunal Superior, por encontrarse reunidos los requisitos para vertir un auto de enjuiciamiento contra los sindicados Rodríguez Nieto y Pacheco Grajales, en virtud de que los elementos probatorios apuntaban la existencia de serios indicios de credibilidad de acuerdo a las reglas de la sana crítica (f. 486).

Subraya como hecho indiscutible el que los sindicados antes mencionados se encontraban en posesión del vehículo, el día de autos y resultó observado y anotada su matrícula, por uno de los vecinos del lugar, el cual vio salir el mismo luego de darse las detonaciones con arma de fuego (f. 487).

ARGUMENTO DEL OPOSITOR

El Defensor de Oficio, Danilo Montenegro, representando los intereses de su patrocinado Pacheco Grajales, al sustentar la oposición al recurso ordinario presentado, considera que el mismo es extemporáneo por haberse presentado fuera de término y debe declararse desierto (fs. 489-490).

Por otra parte, anota que no se da el sustento legal para el enjuiciamiento por carecer las pruebas de fuerza para entablar un proceso penal, al no haber sido reconocidos los imputados y la negación por parte de los mismos del ilícito endilgado.

ANALISIS DE LA CORTE

Observa esta Superioridad que la representante del Ministerio Público se dio por notificada el día 9 de marzo del año en curso, de la resolución impugnada y anunció recurso de apelación contra la misma.

En virtud de ello, el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante providencia de 21 de marzo del presente año, fija en lista el negocio para que la recurrente sustente el recurso.

Consta al reverso de la foja 481 que el día 23 de marzo la Fiscalía Segunda Superior recibió el negocio para la notificación y sustentación del recurso.

El artículo 2305 del Código Judicial en su segundo párrafo señala que el funcionario se considerará legalmente notificado transcurrida cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del ingreso del expediente a su despacho.

Advierte la Sala que la señora Fiscal no llenó el sello el día 27 de marzo, fecha límite según la norma antes citada, sino que lo llenó el día 29 de marzo y devolvió el negocio al Tribunal con la sustentación de su recurso el día 30 de marzo. Dicha irregularidad, si bien no influyó en la sustentación del recurso y en la preclusión del término para hacerlo; nos obliga a hacerle un llamado de atención a fin que cumpla lo preceptuado por la norma antes citada ya que de conformidad con el numeral 2 del artículo 217 de la Constitución Política, el Ministerio Público debe: "Promover el cunplimiento o ejecución de las Leyes, sentencias judiciales y disposiciones administrativas

Consta en el sumario que el día 18 de octubre de 1997, en horas de la madrugada, en el Distrito de San Miguelito, corregimiento José Domingo Espinar, resultó muerto a consecuencias de disparos con armas de fuego el ciudadano Gabino Jaramillo Quintana.

Yara Yaneth Aldeano Vásquez residente en el apartamento donde se atacó al difunto, expresó que los sujetos no dijeron nada al difunto solamente le dispararon y se fueron. Que uno era de tez clara, facciones finas y joven, y el otro era de tez morena, alto y más fornido que el anterior (f. 32).

Jagehiry García, afirma que se encontraba en el lugar el día de autos, que se levantó por el disparo y no vio bien a los 2 sujetos que salían de la habitación de su tía por ir estos muy apresurados (f. 34).

A través de su declaración Omar A. Wright señala haber alquilado el vehículo que fue visto cerca del lugar de los hechos el dí0a de autos, a solicitud de su amigo "Coco" quien no podía hacerlo por no cumplir los requisitos exigidos por la arrendadora (fs. 76-79).

Omar Figueroa Morales indica que el vio el día de autos a dos sujetos bajando del edificio en el cual se escucharon los disparos, que uno de ellos era de tez blanca y estos abandonaron el lugar en un vehículo de color vino con placa N°113348 (f. 82).

Esteban Antonio Lasso Vergara en su declaración detalla que el vehículo vino, él ayudó a alquilarlo con su amigo Omar Wright, para su compadre Reynaldo Rodríguez que lo requería para pasear; después que su amigo Wright había llenado los papeles en la arrendadora se retiró de la misma con éste y el vehículo lo recibieron Reynaldo y Edwin quienes se quedaron esperando la entrega. (fs. 113-114).

Al rendir declaración indagatoria Reynaldo Rodríguez sostiene que alquiló el vehículo Mitsubishi Lancer a petición de su amigo Edwin Pacheco, que renovó el contrato de alquiler atendiendo la solicitud de Edwin quien pagó todos los gastos. Precisa lo siguiente: "...el día viernes diecisiete (17) de octubre del año en curso, porque ese día, yo no podía manejar el carro, ya que tenía que ir a mi casa a cobrar es decir, estuve con el vehículo como hasta la seis de la tarde del diecisiete, le entregué el vehículo a EDWIN, por los alrededores de la mueblería ANCON, le dejé el carro porque él me dijo que tenía unos amigos que andaban con él, que sabían manejar, fue entonces que tomé un taxi y me fuí a mi casa,..." (f. 133).

Consta a 139 a 142 acto sumarial de 27 de octubre de 1997, en el cual se decreta la detención preventiva del imputado Rodríguez Nieto.

Vista fotográfica de la copia de la cédula de identidad del imputado Pacheco Grajales reposa a foja 215 del expediente.

La diligencia de levantamiento de cádaver efectuada por el Instituto de Medicina Legal enuncia como causa probable de la muerte del ofendido "Heridas penetrantes por proyectil de arma de fuego abdominal (2) facio-craneal (#3)." (f. 222).

Argelis Bethancourt Quintanar esposa del occiso ante la División de Homicidios de la Policía Técnica Judicial sostuvo:

> "...la noche del jueves veintitre (sic) (23) como a las nueve aproximadamente, recibí una llamada teléfonica (sic) de voz másculina (sic) en donde me decian (sic) que ya estaban contento, y sólo les dí las gracias como para seguirle el juego, el sábado a (sic) manecer (sic) domingo me llamaron nuevamente, en esta ocación sólo me pusieron música, pero no me dijeron nada, tambien (sic) que señalar de que recibí una llamada el día viérnes (sic) de voz

> masculina donde me preguntaba que si yo había sido investigada y le contesté que sí pero que tenía que regresar denuevo (sic), fuen (sic) entonces que me dijo investigaran a un sujeto de nombre EDWIN PACHECO (a) "EL TIGRE", quien reside por los lado (sic) de la piquera de Nuevo Veranillo, que se mantiene siempre en el kiosco de una muchacha clarita, posteriormente le pregunte que si él era panameño y me dijo que no era colombiano pero que este había arreglado sus papeles, y me dijo que este (sic) es bajo de estatura, agarradito, moreno liso,posteriormente le pregunte que quien hablaba y me contesto que tranquila, que él me iba a seguir informando." (f.260)

El Departamento de Criminalística de la Policía Técnica Judicial a través de su Sección de Inspección Técnica Ocular y Requisa de la Escena del delito, analizó las huellas dactilares del occiso comprobando en los archivos que el mismo anteriormente había sido detenido por tráfico ilícito de drogas (fs. 266-267).

El certificado del Registro Civil acredita que el ofendido falleció a raíz de politraumas por proyectiles balísticos (f. 278). Ello lo corrobora el protocolo de necropsia visible de foja 325 a 328.

Doris Nieto y Marcos Rodríguez Saénz, en su calidad de padres del imputado Rodríguez Nieto aseveran que el día de autos su hijo estaba en casa y no salió a ninguna parte (fs. 312-313 y 314-315). En el mismo sentido se expresan Vicente Montilla Polo, Doris Cristina Rodríguez Nieto y José Amet Barría Sánchez (fs. 316-317 y 318-320).

Se encuentra debidamente probado en el cuaderno penal el hecho punible, homicidio de Gavino Jaramillo Quintanar a consecuencia de politraumas ocasionados por proyectiles balísticos disparados por armas de fuego de diferente calibre.

Los indicios del sumario, apunta la representante de la Vindicta Pública, que son graves y suficientes para el enjuiciamiento de ambos imputados, la Corte no comparte totalmente esta tesis pues los familiares y un amigo de Rodríguez Nieto coinciden en señalar que la noche de autos lo vieron.

Tenemos que la investigación realizada inicialmente solo se ciño al examen de los álbumes de fotografía de la Policía Técnica Judicial y a la confección de retratos hablados de los sospechosos. Sin embargo, una vez que surgieron los nombres de los imputados y resultó aprehendido uno de ellos, la agente de instrucción no ordena siquiera la diligencia de reconocimiento en rueda de detenidos; pese a que existía una testigo presencial de la agresión y otro testigo que vio a uno de los posibles autores de la misma salir del edificio, sino que únicamente le basta con que el imputado Rodríguez Nieto haya alquilado el carro junto con Edwin Palacios Grajales para mantener su detención preventiva.

El artículo 2071 obliga al funcionario de instrucción a esclarecer la verdad sobre el hecho punible y la personalidad de su autor, el no considerar la declaración de Argelis Bethancourt visible de foja 260 a 261, tal vez le hubiera servido para localizar siquiera al otro imputado de paradero desconocido y porqué no a otros posibles partícipes del grave ilícito cometido.

Resulta importante considerar lo que el tratadista argentino Cafferata apunta sobre el indicio: "...la eficacia probatoria de la prueba indiciaria dependerá, en primer lugar, de que el hecho constitutivo del indicio esté fehacientemente acreditado; en segundo término del grado de veracidad, objetivamente comprobable, de la enunciación general con la cual se lo relaciona con aquél; y por último, de la corrección lógica del enlace entre ambos términos." (CAFFERATA NORES, José. La prueba en el proceso penal, Segunda edición actualizada, Ediciones De Palma, Buenos Aires, 1994, p. 181.

La Corte observa que si el imputado Rodríguez Nieto fue a la agencia de

alquiler a conseguir el vehículo junto con los señores Wright, Lasso y Grajales, y las declaraciones vertidas por sus familiares y amigos (testigos sospechosos) lo ubicaban en su casa el día de autos. Por el sólo hecho que en el acto de defensa, como lo es la declaración indagatoria, manifestó que pasó cerca del sitio en días anteriores con el señor Edwin, pero igualmente indica que le dejó el día viernes el vehículo en la mueblería Ancón a éste y no lo volvió a ver, estos elementos así planteados no poseen la suficiente veracidad para enjuiciarlo de conformidad con las reglas de la sana crítica.

Por otro lado, de haberse intentado localizar al imputado Palacios por los alrededores de Nuevo Veranillo, se despejarían las dudas en torno a su presunta participación criminal en el presente negocio y si la realización de la misma obedecía o no a un posible ajuste de cuentas, dado que todos los elementos recabados señalan ese móvil delictivo.

Todo esto nos lleva a mantener la decisión del tribunal de primer grado, dado que la misma se ajusta a las constancias procesales.

La Corte desea hacerle un llamado de atención al Magistrado Sustanciador en la primera instancia, en virtud de que el presente negocio reingreso al Tribunal el día 30 de noviembre de 1998 y no es hasta el día 23 de febrero del presente año que se somete el proyecto de resolución a lectura, lo que significa que el examen de dicho negocio demoró un año dos meses y 23 días. Ello es de cuidado, encontrándose vigente una orden de detención preventiva sobre un ciudadano que se presume inocente según la Constitución Política.

Entre los deberes de los juzgadores está el contenido en el artículo 440 del Código Judicial de administrar justicia en forma rápida e inescrupulosa (numeral 2) esto contrasta con lo que obra en autos que desde el día 27 de octubre de 1997 se decretó la detención preventiva del imputado Rodríguez Nieto y no es hasta el día 2 de marzo de 2000 que logra recuperar su libertad. El Magistrado sustanciador debe hacer un mayor esfuerzo en casos como éste para salvaguardar el principio constitucional de justicia expedita e ininterrumpida, recordando que la detención preventiva si bien, en nuestro ordenamiento positivo no tiene un límite, tampoco debe ser excesiva, desproporcionada e ilimitada en el tiempo.

Por lo antes expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución venida en grado de apelación expedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia el día 1 de marzo de 2000.

Devúelvase y Notifíquese

(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES R.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ROBERTO GONZÁLEZ R.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN PENAL

RECURSO DE CASACION INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A MARTIN CANO CHAVEZ POR DELITO DE CONTRA EL PUDOR Y LA LIBERTAD SEXUAL EN PERJUICIO DE LA MENOR KHRIS TATIANA NAVARRO H. MAGISTRADO PONENTE: JOSE MANUEL FAUNDES. PANAMÁ, PRIMERO (1) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado FEDERICO ISMAEL PONCE, en su condición de apoderado judicial

de KHRIS TATIANA NAVARRO H., interpuso recurso de casación en el fondo contra la resolución de 25 de febrero de 2000 expedida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, que revoca la sentencia N 54 de 16de julio de 1999, y en su lugar absuelve a MARTIN CANO CHAVEZ de los cargos formulados en su contra.

Vencido el término de lista que dispone el artículo 2443 del Código Judicial, corresponde a esta Superioridad examinar el escrito de formalización del recurso, a los efectos de determinar si cumple con los requerimientos legales que exige nuestro ordenamiento jurídico para su admisión.

El numeral tercero del artículo 2443 del Código Judicial establece los requisitos que deben concurrir en el escrito mediante el cual se formaliza el recurso de casación, enunciándolos así:

a. Historia concisa del caso,
b. Que se determine la causal o causales que se invocan,
c -Que se especifiquen los motivos, disposiciones legales infringidas y concepto de la infracción.

Cada uno de los requisitos mencionados deben presentarse con sujeción a los principios establecidos por la doctrina jurisprudencial, relativa al recurso de casación penal, porque sólo mediante su concurrencia, en forma adecuada, se dota de sustento lógico jurídico a la iniciativa procesal extraordinaria.

En cuanto a la historia concisa del caso, el recurrente incluye algunos detalles de declaraciones y de situaciones que se alejan del concepto de síntesis objetiva de los hechos que se exige a propósito de este apartado del recurso.

La causal invocada se refiere al "error de derecho en la apreciación de la prueba, que ha influido en lo dispositivo de la sentencia de segunda instancia y que implica violación de la ley sustancial penal". No obstante, prima facie se advierte que el censor la enuncia en forma deficiente, al punto que se aparta de los parámetros que sobre este particular exige la técnica casacionista.

Con relación a los motivos, se observa que en el primero y segundo el casacionista expone argumentos planteados en forma de alegatos y además, en el segundo motivo afirma que el tribunal "Comete error de hecho en la existencia de la prueba porque ....." y sigue arguyendo de manera subjetiva su percepción de los hechos. Asimismo, en los motivos 3 y 4 afirma que "El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial comete error de hecho en la existencia de la prueba cuando señala que ....." (Motivo 3) y que "El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial comete error de hecho en la existencia de la prueba, cuando no toma en cuenta ....." (Motivo 4), argumentando posteriormente alegaciones subjetivas; todo lo cual es incongruente y no guarda relación con la causal invocada, pues cuando se estima que un medio de prueba no ha sido considerado o tomado en cuenta por el juzgador, se estaría frente a uno de los supuestos en que se genera la causal de error de hecho sobre la existencia de la prueba, causal distinta a la invocada en este caso.

En torno a las disposiciones legales infringidas, el censor aduce la violación directa por omisión del artículo 905 del Código Judicial, pero al explicar el concepto de infracción vuelve a manifestarse subjetivamente. En este mismo sentido, omite citar la disposición sustantiva que resulta infringida como consecuencia de la violación de la norma adjetiva, situación que deja sin sustento lógico jurídico el recurso.

La doctrina jurisprudencial de esta Sala en innumerables precedentes ha establecido que las causales de casación penal en el contexto del libelo del recurso son autónomas y por ello cada una debe acompañarse de los motivos que la fundamentan y las disposiciones legales que resultan infringidas, pues el tribunal de casación debe realizar su examen con la debida separación, conforme lo dispone el artículo 2450 del Código Judicial. Además, tratándose de causales de naturaleza probatoria, es esencial que a continuación de las disposiciones

legales adjetivas que se aducen como infringidas, se exprese la norma sustantiva que resulta violada como consecuencia del yerro probatorio.

Los errores en que ha incurrido el casacionista hace que la iniciativa procesal bajo examen carezca de sustento lógico jurídico y en consecuencia, procede declarar su inadmisibilidad.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el presente recurso de casación.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES R.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ROBERTO GONZÁLEZ R.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN INTERPUESTO A FAVOR DE EDGAR SOLÍS GARCÍA, SINDICADO POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE VENTA ILÍCITA DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, DIEZ (10) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial con sede en la provincia de Los Santos mediante sentencia fechada 1° de marzo de 2000, reformó la sentencia de 10 de diciembre de 1999, proferida por el Juzgado Segundo, Ramo Penal del Circuito de Herrera, en el sentido de que declaró penalmente responsable a Edgar Leonel Solís García por la comisión del delito de venta ilícita de drogas y lo condenó a cinco años de prisión. Contra esa decisión judicial la defensa técnica de Solís anunció y sustentó en tiempo oportuno recurso extraordinario de casación en el fondo, el cual fue concedido por el Tribunal Superior por cumplir con los requisitos del artículo 2441 del Código Judicial.

En esta oportunidad corresponde a la Sala examinar el escrito de formalización del recurso de casación anunciado, con el objeto de comprobar si cumple con los requisitos exigidos por los artículos 2434 y 2443 del Código Judicial.

El casacionista invoca una sola causal de casación en el fondo: error de derecho en la apreciación de la prueba, consagrada en el numeral 1 del artículo 2434 del Código Judicial.

Dicha causal es sustentada con cuatro motivos, en los cuales el recurrente señala que el ad-quem confirió pleno valor probatorio a los informes de los agentes Dolores de Corro, Manuel A. Reyes y Jaime Antonio Rodríguez, así como también a las declaraciones de Zuleika Roxana Vásquez, Pablo Epifanio Vásquez Cano, y al operativo de compra vigilada de drogas (fs.469-470). Nótese que el casacionista no explica de qué manera la falta de apreciación del material probatorio por parte del tribunal influyó en lo dispositivo del fallo impugnado, para que diera como resultado una sentencia condenatoria.

En lo que respecta a las disposiciones legales infringidas, el recurrente alega que el ad-quem vulneró en concepto de violación directa por omisión, el artículo 904 del Código Judicial, y el 258 del Código Penal, por indebida aplicación (fs.470-471). Sin embargo, se incurre en el mismo error que en los motivos, toda vez que se utilizan similares argumentos, y ya se manifestó que los mismos carecían de cargos de injuricidad. Así las cosas, esta Superioridad no

encuentra fundado el recurso de casación interpuesto, por lo que resulta improcedente acceder a su admisión.

En virtud de lo anteriormente expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 1° de marzo de 2000, proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN PRESENTADO POR LA DEFENSA TÉCNICA DE AMINTA ITZEL CORCHO MONTEMAYOR, SINDICADA POR EL DELITO DE ROBO. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Para decidir sobre su admisibilidad, conoce la Sala Penal de la Corte Suprema del recurso de casación presentado por el licenciado Carlos Herrera Morán, en su condición de apoderado judicial de Aminta Itzel Corcho Montemayor, sindicada por delito contra el patrimonio. El recurso extraordinario en cuestión impugna la sentencia de 23 de febrero del 2000, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, la cual confirma el reemplazo de la pena de 30 meses de prisión por la de 75 días multa.

El recurrente invoca una causal de casación en el fondo, que se refiere al supuesto en que la sentencia de segunda instancia incurre en error de derecho en la apreciación de la prueba. Esta causa se apoya en un único motivo en el cual el recurrente plantea que el "cargo de injuridicidad que le endilgamos a la sentencia proferida por el ad-quem es haberle negado valor probatorio a las facturas visibles a fojas 34 a 35 y de 328 a 338... Así como también haberle desconocido el valor probatorio al informe de novedad suscrito por el Sargento ARAUZ visibles a fojas 25..." (f.547). Denegarle valor a un medio probatorio reconocido por la ley, es uno de los supuestos en que una sentencia proferida en segunda instancia por Tribunal Superior puede incurrir en error de derecho en la apreciación de la prueba. Pero anunciarlo resulta insuficiente para formalizar esa causal de casación. Debe apreciarse un debate entre el argumento con el cual el ad-quem denegó la prueba y el razonamiento a la que, según el casacionista, debió llegar el Tribunal Superior, si hubiere ponderado correctamente la prueba. Sin embargo, ese ejercicio intelectivo no se vislumbra en el único motivo que apoya la causal, por lo que resulta carente de cargo de injuridicidad.

Por lo que hace al requisito concerniente a las disposiciones legales infringidas, el casacionista expone que el artículo 970 del Código Judicial ha sido infringido en concepto de violación directa "por acción" (f.548), concepto que resulta extraño a la técnica de casación.

También plantea la infracción del artículo 845 del Código Judicial en concepto de violación directa por omisión (f.548). Al leer el argumento que apoya la supuesta violación normativa, no se observa que el casacionista tenga el propósito de comprobar que la sentencia atacada no le otorgó a unos recibos y facturas auténticas (documentos privados) el mismo valor probatorio que tiene un documento público,

Para concluir, advierte la Corte que cada norma legal que se cite

infringida, debe sustentarse de manera separada. Por esa razón, resulta deficiente la alegada vulneración de los artículos 185 y 186 del Código Penal (f.548-549).

Toda vez que el argumento que expone el motivo y las disposiciones legales infringidas no son congruentes con la causal que se invoca, corresponde entonces no admitir el recurso de casación.

Por lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO ADMITE el recurso de casación contra la sentencia de 23 de febrero del 2000, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, la cual confirma el reemplazo de la pena de 30 meses de prisión por la de 75 días multa impuesta a de Aminta Itzel Corcho Montemayor, condenada por el delito de robo cometido en perjuicio de Miguel Vergara Martínez.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) JOSE M. FAÚNDES
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO EN EL PROCESO SEGUIDO A LEIDY ISELDA ARROYO GONZÁLEZ, IMPUTADA POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, DIECISEIS (16) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Para decidir sobre su admisibilidad, conoce la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de recurso extraordinario de casación interpuesto por el Ministrio Público, contra la sentencia fechada 4 de febrero de 2000, proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial con sede en la provincia de Los Santos, el cual revocó la sentencia de 30 de agosto de 1999, emitida por el Juzgado Segundo de lo Penal, del Circuito de Herrera, en el sentido que absolvió a Leydi Iselda Arroyo González, de la comisión del delito de hurto con abuso de confianza, en detrimento de el Machetazo, S. A. de Chitré.

Corresponde en esta oportunidad examinar el escrito de formalización del recurso de casación, a efectos de comprobar si cumple con los requisitos que señala la ley para su admisibilidad.

Con respecto a la historia del caso, se advierte que el casacionista la expone de manera deficiente, ya que presenta declaraciones de personas que intervinieron en el proceso y culmina con alegaciones tendientes a demostrar la procedencia del recurso, y no efectúa una cronología del caso (fs.136-138).

El casacionista invoca una sola causal de casación en el fondo: error de hecho en cuanto la existencia de la prueba, la cual está contemplada en el numeral 1 del artículo 2434 del Código Judicial.

La causal alegada está sustentada con cuatro motivos. En ellos, básicamente el recurrente censura que el ad-quem no valoró las declaraciones de Erasmo Vigil, Zulay Mercedes Arjona de Herrera, Lisbeth Inés Mendoza de Barrios y de Beibis Edith Poveda Pinilla, así como tampoco la prueba documental referente al arqueo de caja realizado a Arroyo, el cual demostró un faltante de dinero (fs.138-139). Estos planteamientos no contienen cargos de injuricidad que pongan de manifiesto los supuestos errores en los que incurrió el tribunal, porque no explica de qué manera esas omisiones afectaron el criterio del Tribunal Superior.

En lo concerniente al requisito de las disposiciones legales infringidas, el casacionista señala como vulnerados los artículos 769, 770, 819 del Código Judicial y el artículo 183 del Código Penal, todos en concepto de violación directa por omisión. El argumento que sustenta cada infracción coincide con el que se aprecia en los motivos. En tal sentido, el recurrente señala que el tribunal no valoró el informe de arqueo realizado a la caja registradora de Arroyo, la denuncia interpuesta por Erasmo Vigil, así como las declaraciones que comprometen la responsabilidad penal de Arroyo, que dieron como consecuencia que el ad-quem no la sancionara (fs.139-143). Ya se manifestó que esa afirmación no contienen cargos de injuricidad, toda vez que no demuestran la supuesta violación alegada.

Como quiera que el recurso de casación interpuesto presenta deficiencias en cuanto a coherencia lógica y jurídica, ello imposibilita a esta Superioridad acceder a su admisión.

Por las consideraciones anteiores, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso extraordinario de casación presentado contra la sentencia de 4 de febrero de 2000, emitida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, con sede en la provincia de Los Santos.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS

(fdo.) GRACIELA J. DIXON (Con Salvamento de Voto)

(fdo.) JOSE MANUEL FAÚNDES

(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

SALVAMENTO DE VOTO
MAGISTRADA GRACIELA J. DIXON C.

Como lo expresé en las observaciones que en su momento presenté, con el mayor de los respetos me permito disentir con la decisión de los Magistrados que integran la Sala penal de este cuerpo colegiado, por cuanto soy del criterio que, si bien no debe admitirse el recurso de Casación Penal en el Fondo, no comparto las razones contenidas en la resolución que decide su improcedencia.

Comparto las observaciones que se formulan en cuanto a la historia concisa del caso como ha sido presentada por el recurrente, ya que incurre en defectos de forma que si bien pudieran ser subsanables por vía de corrección del libelo, ordenada en los términos que establece el artículo 2444 del Código Judicial, al existir otros errores de carácter sustancial, como es el caso de algunas de las disposiciones legales que se citan como infringidas, dicho procedimiento resulta inaplicable.

En tal sentido, mi discrepancia se centra en el hecho que a mi juicio los motivos han sido adecuadamente presentados y resultan cónsonos con la causal que se propone, la cual es el error de hecho cuanto a la existencia de la prueba, contenida en el numeral 1 del artículo 2434 de Código Judicial.

Sin embargo, en cuanto a las disposiciones legales que se enuncian como vulneradas, considero que el error en que incurre el recurrente estriba en haber citado el artículo 770 del Código Judicial, ya que siendo la causal aducida el error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, esta disposición no resulta cónsona, pues la misma se refiere al método de apreciación que ha de aplicar el juzgador al momento de valorar la prueba, (la sana crítica) lo cual supone por tanto, que la prueba ha debido ser valorada, lo que según el recurrente, no ha ocurrido en el presente caso. Lo anterior, es igualmente aplicable al artículo 2144 del Código Judicial, también acusado de violación directa por omisión.

En lo relativo a la acusada violación del artículo 819 del Código Judicial, estimo que resulta incongruente con la causal aducida por cuanto que dicha norma se limita a definir el concepto de documento, identificando la variedad de elementos que han de tenerse como tales, por lo que en consecuencia, y para los efectos de la causal aducida (error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba), no constituye una norma susceptible de ser transgredida en el concepto de violación directa por omisión.

Como el resto de los Magistrados que integran la Sala Penal no comparten mi criterio, con todo respeto, Salvo mi Voto.

Fecha: Ut Supra.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A FRANCISCO CHÁVEZ PINEDA SINDICADO POR DELITO CONTRA EL PUDOR Y LA LIBERTAD SEXUAL EN PERJUICIO DE FÉLIX ROQUE ACOSTA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia conoce de la admisión del recurso de casación en el fondo presentado por Licdo. RODRIGO MIRANDA MORALES, en calidad de apoderado judicial de FRANCISCO CHÁVEZ PINEDA, contra sentencia de 23 de marzo del año en curso, proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, que revoca la de primera instancia y codena a su poderdante por el delito de estupro.

Corresponde examinar el libelo del recurso a efectos de determinar si se cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 2443 del Código Judicial.

En primer lugar, se observa que el recurso fue dirigido a los "HONORABLES MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL", siendo inadecuada la designación del Tribunal toda vez que debió dirigir el escrito al Magistrado Presidente de la Sala Penal, tal cual lo establece el artículo 102 del Código Judicial.

Por otra parte, el recurso ha sido interpuesto por persona hábil, promovido dentro del término establecido por las normas de procedimiento penal, contra una resolución que admite este tipo de recurso extraordinario, y por delito cuya sanción es superior a 2 años de prisión.

En lo referente a la historia concisa del caso, se advierte que es un relato subjetivo de la posición que ha defendido el casacionista durante el desarrollo del caso en estudio, obviando que este apartado debe circunscribirse a proporcionar solamente los hechos objetivos más importantes del proceso a través de los cuales se desprendan prima facie los cargos de injuridicidad contra la sentencia que se impugna pero sin entrar a su desarrollo.

El recurrente expresa que son dos las causales que sustentan el recurso extraordinario de casación:

Primeramente, se refiere a la causal contenida en el numeral 1 del artículo 2434 del Código Judicial "Infracción de la ley sustancial penal por error de derecho en la apreciación de la prueba".

Cabe destacar que la denominación correcta de esta casual es "error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica violación de la ley sustancial".

A continuación, el recurrente desarrolla un motivo en el que, si bien se distingue el vicio de injuridicidad que se atribuye al fallo objetado, no menos cierto es que ha sido formulado a manera de alegato.

La Sala considera oportuno indicar al casacionista que los motivos deben contener una relación objetiva en la cual se distinga el cargo de injuridicidad que le endilga a la sentencia del Tribunal A-quem y no deben contener apreciaciones subjetivas.

Con relación a las disposiciones legales infringidas y el concepto de la infracción, se tiene que el recurrente cita y transcribe en forma íntegra los artículo 2223, 969, 970, 971, 948, 972, 973 del Código Judicial, preceptos que estima fueron violado en forma directa por omisión.

No obstante lo anterior, el casacionista yerra al no citar la norma sustantiva que fue infringida a consecuencia del error de derecho en la valoración de las normas adjetivas antes citadas, mención que es esencial cuando se aducen causales de naturaleza probatoria.

Seguidamente, el recurrente enuncia y desarrolla nuevamente la historia concisa del caso. A este respecto, cabe señalar que aun cuando el casacionista invoque más de una causal no debe volver a plantear la historia del caso, sino que debe indicar la o las causales, los motivos y las disposiciones legales infringidas, así como el concepto de la infracción.

Ahora bien, en relación a la segunda causal, se tiene que el casacionista invoca el ordinal 7 del artículo 2434 del Código Judicial "Infracción de la ley sustancial penal por haberse procedido por delito que requiere acusación particular, denuncia o querella de persona determinada, sin la previa acusación, denuncia o querella que requiere la ley".

Salta a la vista que el recurrente aduce dos causales, pues se refiere a la infracción de la ley sustancial penal, establecida en el numeral 1 del citado artículo 2434, y a la causal contenida en el numeral 7°, lo que dificulta el análisis del recurso al no haberse invocado la causal que más se adecue al caso concreto.

Seguidamente, se desarrollan dos motivos que sustentan la causal, los que han sido redactados en forma subjetiva y cita disposiciones legales, desatendiendo los criterios jurisprudenciales que han establecido la forma correcta de presentar los motivos, tal como se ha señalado en las líneas que anteceden.

En lo concerniente a las disposiciones legales infringidas y el concepto de la infracción, el recurrente cita y transcribe el artículo 1978 del Código Judicial, señalando que fue transgredida en forma directa por omisión.

Seguidamente, explica el concepto de infracción en el cual señala que se violó el artículo 219 del Código Penal que tipifica el delito de estupro, configurándose la "violación directa por indebida aplicación".(Las negritas son nuestras)

Sobre el particular, se debe indicar que el recurrente debió individualizar la norma sustantiva que fue violada, citando y explicando el concepto de infracción a continuación.

Por otra parte, cabe indicar que el concepto de infracción citado por el recurrente no existe en nuestra legislación. La violación de la norma, de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, puede darse en tres formas distintas, a saber:

1. violación directa que puede darse en dos sentidos: a. Por omisión, en el caso que el Tribunal ha realizado la estimación probatoria de los hechos inobjetablemente, pero al decidir la causa hace un exclusión evidente de la norma aplicable al caso; y, b. Por comisión, cuando el Tribunal aplica la norma correcta pero sin tomar en cuenta su claro contenido.

2. Interpretación errónea; e

3. Indebida Aplicación.

En virtud de los errores señalados, la Sala concluye que el recurso en examen no cumple con los requisitos establecidos en el numeral 3, literales a, b y c, y numeral 4 del artículo 2443 del Código Judicial, así como los establecidos por la jurisprudencia de esta Corte, lo que hace improcedente su admisión.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación en el fondo promovido por la defensa técnica de FRANCISCO CHÁVEZ PINEDA.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAUNDES
MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A JOSE JORGE AGUIRRE SALDAÑA, SINDICADO POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN PERJUICIO DE CHONG KEE KAM. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Licdo. ROUMMEL G. SALERNO C., en su condición de defensor de oficio de JOSÉ JORGE AGUIRRE SALDAÑA, anunció y formalizó oportunamente recurso de casación en el fondo contra la sentencia fechada 20 de agosto de 1999 proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, que confirma la resolución emitida por el Juzgado Cuarto del Circuito Penal de Chiriquí.

Corresponde en este momento procesal, determinar si el escrito de formalización del recurso extraordinario de casación presentado, cumple con las exigencias normativas que contiene el artículo 2443 del Código Judicial que permiten su admisibilidad y consiguiente sustanciación.

Al examinar los folios correspondientes se advierte que el recurso de casación en estudio fue dirigido al Magistrado Presidente de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con el texto del artículo 102 del Código Judicial.

El escrito reúne los requisitos de oportunidad, legitimación activa y material, por tratarse de un negocio penal por delito cuya pena privativa de libertad es superior a los dos años.

En cuanto a la historia concisa, se aprecia que el recurrente redacta una relación breve, objetiva y precisa, destacando los puntos más relevantes del

negocio penal.

En el escrito se enuncia una sola causal: error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica violación de la ley sustancial penal", contenida en el numeral 1, artículo 2434 del Código Judicial.

La causal única se sustenta en dos motivos. En el primer motivo se expone en forma clara, breve y concisa, indicando las fojas en que aparecen las pruebas cuya valoración se reputa errada, infiriendose el cargo de injuridicidad.

El segundo motivo ha sido desarrollado en igual manera, pero se obvia indicar las fojas donde se ubican las pruebas que se estiman mal valoradas, exigencia que ha establecido la jurisprudencia cuando se aducen causales de naturaleza probatoria.

El recurrente cita textualmente las disposiciones legales infringidas, considerando como tales el artículo 905 y 891 del Código Judicial, e indica y explica el concepto de infracción que para ambas normas es la violación directa por omisión.

Sin embargo, se observa que el recurrente omite mencionar la norma sustantiva penal que resultó violada a causa de la transgresión de la norma adjetiva, invocación que de acuerdo a nuestra jurisprudencia es fundamental cuando se aducen causales de naturaleza probatoria.

Como se puede apreciar, aún cuando la omisión de las fojas en que aparecen las pruebas se dicen mal valoradas, habría podido ser subsanada por vía de la corrección en los términos que establece el artículo 2444 del Código Judicial, ello no procede en esta ocasión por cuanto que existe otro error sustancial en el cual ha incurrido el casacionista y que, dada la naturaleza eminentemente formal de este recurso, impiden su admisión.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación presentado contra la sentencia 20 de agosto de 1999 proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A HOLMI GUERRA PITTY Y OTROS, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA (DROGAS). MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado ALCIBIADES CAJAR AMADOR, ha presentado recurso de Casación en el Fondo contra la sentencia de 31 de agosto de 1999, proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, en la que se reformó la sentencia No. 99 de 9 de octubre de 1998, emitida por el Juzgado Segundo del Circuito de Coclé, Ramo Penal y se absuelve al señor ANDRES GUEVARA VILLARREAL de la comisión de delitos Contra la Salud Pública.

Considera el casacionista que el fallo proferido por la segunda instancia contiene errores de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba y de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, que influyeron en lo dispositivo del fallo, constituyendo estas causales de naturaleza probatoria, la razón de ser del recurso de Casación.

HISTORIA CONCISA:

Los hechos que originaron la sentencia absolutoria a favor de ANDRÉS GUEVARA VILLARREAL, guardan relación con la investigación iniciada el 24 de junio de 1994, en la que las autoridades policivas incautaron dentro del vehículo Toyota Dina que conducía JUAN BAUTISTA GOMEZ 2,086.710.00 gramos de cocaína.

JUAN BAUTISTA GÓMEZ al rendir declaración indagatoria manifestó, que la droga era propiedad de los señores PLINIO TRUJILO y GILBERTO TORAL MALEK, indicó además, que en la comunidad de Rambala, provincia de Chiriquí existía otra cantidad similar de droga. Con esta información las autoridades policivas incautaron 1,334,095.99 gramos más de cocaína en esa provincia.

Informa el casacionista que se receptaron declaraciones juradas e indagatorias a los señores ROSAURA MÁRQUEZ LÓPEZ, JORGE LUIS SÁNCHEZ, ERIC ALONSO VALDÉS CEBALLOS, ISMAEL SÁNCHEZ y ALEXIS MORALES, pero esas pruebas fueron indebidamente valoradas por el Ad-Quem.

Manifiesta el recurrente, que para establecer la identidad de ANDRÉS GUEVARA VILLARREAL se incorporó al proceso una prueba documental vencido el período probatorio, la que fue valorada indebidamente por el Ad-Quem.

Concluye indicando el casacionista, que la primera instancia sentenció a GUEVARA VILLARREAL a 120 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, sin embargo fue absuelto en segunda instancia a consecuencia de una valoración incorrecta de las pruebas testimoniales y documentales arriba indicadas, aunado al hecho que la deposición de RICARDO ARAÚZ GUERRA no fue estimada por el Ad-Quem.

CAUSALES INVOCADAS:

El recurrente fundamenta este recurso de Casación en dos causales de fondo de carácter probatoria.

PRIMERA CAUSAL

"Error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica violación de la ley sustantiva penal" (Artículo 2434, numeral 1, inciso segundo del Código Judicial).

MOTIVOS

Se sustenta la causal en dos motivos, los cuales se explican a continuación:

PRIMERO: Expresa el recurrente que el Ad-Quem absolvió a ANDRéS GUEVARA VILLARREAL por la duda existente en la identidad de ANDY, no obstante las apreciaciones de la segunda instancia carecen de fundamento, si se observan los testimonios de ROSAURA MARQUEZ LOPEZ (fojas 616-620 y 3118-3119), JORGE LUIS SANCHEZ (fojas 621-625 y 3120-3121), ERIC ALONSO CEBALLOS (fojas 631-635), ISMAEL HERNÁNDEZ (folios 644-653 y 707-716) y ALEXIS MORALES CHAVARRÍA (fojas 814-823), toda vez que, de esas declaraciones se colige, que ANDRÉS GUEVARA VILLARREAL es ANDY y por ende, tenía conocimiento y participaba de las actividades relativas al trasiego de estupefacientes con GILBERTO TORAL MALEK.

SEGUNDO: Indica el casacionista que la segunda instancia "... le confirió un excesivo valor probatorio al documento de folios (sic) 6460, el que fue

incorporado fuera de período..." probatorio, toda vez que, de ese escrito se genera la confusión entre ANDRÉS GUEVARA VILLARREAL y LUCIANO SAMUDIO HERNÁNDEZ, ya que los dos se apodan ANDY.

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCION

El casacionista expresa que fueron vulnerados los artículos 904 y 823 del Código Judicial; 255 del Código Penal, así como el artículo 1 de la Ley 23 de 30 de diciembre de 1986, reformado por la Ley 13 de 27 de julio de 1994.

Expone el casacionista que el artículo 904 fue infringido de manera directa por omisión, por cuanto que, el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial disminuyó la fuerza de los testimonios de ROSAURA MARQUEZ LÓPEZ, JORGE LUIS SÁNCHEZ, ERIC ALONSO CEBALLOS, ISMAEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ y ALEXIS MORALES, por lo que se alejó de lo expresado en la norma, relativa a las reglas de la Sana Crítica, ya que esas deposiciones fueron categóricas al aseverar, que ANDRÉS GUEVARA VILLARREAL era uno de los colaboradores de GILBERTO TORAL MALEK en el tráfico de drogas.

El licenciado CAJAR AMADOR al referirse al artículo 823, indicó que fue vulnerado en forma directa por omisión, ya que, si la segunda instancia hubiese aplicado la norma "... no le hubiese dado el excesivo valor probatorio que le reconoció al documento de folio 6460 ...", puesto que esa certificación no demerita el grado de participación de ANDRÉS GUEVARA con GILBERTO TORAL en el tráfico de drogas.

Con respecto a las normas sustantivas, indica el recurrente, que el artículo 255 del Código Penal fue lesionado de manera directa por omisión, por cuanto que, los testimonios de ROSAURA MÁRQUEZ, JORGE LUIS SÁNCHEZ, ERIC ALONSO CEBALLOS, ISMAEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ y ALEXIS MORALES señalaron que ANDRÉS GUEVARA VILLARREAL coadyuvaba con GILBERTO TORAL MALEK en el tráfico ilícito de drogas.

Finalmente, respecto al artículo 1 de la Ley 23 de 30 de diciembre de 1986, reformado por la Ley 13 de 27 de julio de 1994, manifiesta el recurrente, fue transgredido de manera directa por omisión, puesto que, las deposiciones de ROSAURA MARQUEZ, JORGE LUIS SÁNCHEZ, ERIC ALONSO CEBALLOS, ISMAEL SÁNCHEZ y ALEXIS MORALES dan fe de la asociación ilícita para el tráfico de drogas a nivel internacional por parte de ANDRÉS GUEVARA VILLARREAL y GILBERTO TORAL MALEK.

SEGUNDA CAUSAL

"Error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica violación de la ley sustancial penal." (Artículo 2434, numeral 1, inciso segundo del Código Judicial).

MOTIVOS

Igualmente, para fundamentar esta segunda causal, se exponen dos motivos:

PRIMERO: Indica el recurrente que el Ad-Quem "no valoró el testimonio del señor Ricardo Araúz Guerra (Fs. 861-876) ..." quien efectúo señalamientos contra ANDRES GUEVARA VILLARREAL, ni la vinculación de éste con GILBERTO TORAL MALEK en el tráfico ilícito de drogas.

SEGUNDO: Expresa el casacionista que la segunda instancia tampoco valoró los documentos visibles en el folio 1792, de los que surgen indicios de la relación existente entre ANDRÉS GUEVARA VILLARREAL y GILBERTO TORAL MALEK.

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCION:

El licenciado CAJAR AMADOR identifica como disposiciones legales infringidas los artículos 904 y 972 del Código Judicial; 255 del Código Penal y el artículo 1 de la Ley 23 de 30 de diciembre de 1986.

En tal sentido, con respecto al artículo 904, refiere que, fue transgredido en concepto de violación directa por omisión, toda vez que, al no valorar la segunda instancia el testimonio de RICARDO ARAÚZ GUERRA conforme a las reglas de la sana crítica no pudo apreciar la vinculación de ANDRÉS GUEVARA VILLARREAL con GILBERTO TORAL MALEK en el tráfico ilícito de drogas.

Refiere el casacionista, que el artículo 972 del Código Judicial fue vulnerado en concepto de violación directa por omisión, puesto que no fueron considerados los indicios emanados de los documentos visibles a foja 1792 del expediente, consistentes en cheques que GUEVARA VILLARREAL girara a favor de TORAL MALEK y en los que se acredita la relación existente entre ambos.

Con respecto a las normas sustantivas, indica el recurrente, que el artículo 255 del Código Penal fue transgredido en concepto de violación directa por omisión, por cuanto que, de haber considerado el Ad-Quem el testimonio de ARAÚZ GUERRA, así como los indicios que emanan de los documentos de la foja 1792, hubiera deducido la responsabilidad de ANDRÉS GUEVARA VILLARREAL en el tráfico ilícito de drogas y en la asociación ilícita con TORAL MALEK.

Al citar el artículo 1 de la Ley 23 de 30 de diciembre de 1986, el casacionista manifestó, que fue lesionado en concepto de violación directa por omisión al no aplicar la segunda instancia lo consignado en el referido artículo a los hechos planteados en el proceso, puesto que, de haber aplicado la norma "..se habría percatado de la relación existente entre GUEVARA VILLARREAL y TORAL MALEK".

OPINION DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

El Señor Procurador General de la Nación es del criterio, que la sentencia de 31 de agosto de 1999, proferida por el Tribunal Superior de Justicia del Segundo Distrito Judicial debe ser casada.

Con relación a la primera causal, "error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica violación de la ley sustantiva penal", expresó que los motivos aducidos en el recurso contienen cargos de injuridicidad, ya que conforme a los testimonios de ROSAURA MÁRQUEZ LÓPEZ, JORGE LUIS SÁNCHEZ, ERIC ALONSO CEBALLOS, ISMAEL SÁNCHEZ y ALEXIS MORALES se acreditó la existencia de dos personas identificadas como "ANDY" a saber: LUCIANO "ANDY" SAMUDIO y ANDRES "ANDY" GUEVARA VILLARREAL, no obstante, las pruebas del expediente indican que la persona que colaboraba con TORAL MALEK en el tráfico de drogas era ANDRÉS GUEVARA VILLARREAL.

En tal sentido, considera el Señor Procurador General de la Nacional, que se ha producido la vulneración de los artículos 904 y 823 del Código Judicial en concepto de violación directa por omisión, ya que el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial no aplicó las reglas de la sana crítica para estimar el caudal probatorio contenido en el proceso, además el Ad-Quem le otorgó un excesivo valor probatorio al documento de la foja 6460 "... a fin de establecer que se producía una confusión en cuanto a la participación en los hechos de la persona que respondía al apelativo de "ANDY" ".

Al proferir sus consideraciones jurídicas sobre la segunda causal alegada, "error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica violación de la ley sustancial penal" indicó, que los motivos aducidos sustentan la causal invocada y contienen cargo de injuridicidad, ya que el Ad-Quem no estimó la declaración de RICARDO ARAÚZ GUERRA, ni los documentos de la foja 1792.

Al citar las disposiciones legales infringidas, a saber, los artículos 904 y 972 del Código Judicial en concepto de violación directa por omisión, la representación social es del criterio, que se ha producido la transgresión aludida por cuanto que, si el Ad-Quem hubiese considerado la declaración de RICARDO ARAÚZ GUERRA y los cheques contenidos en la foja 1792, habría concluido

que ANDRÉS GUEVARA VILLARREAL participaba con TORAL MALEK en el tráfico de drogas.

Concluye indicando el Señor Procurador General de la Nación, JOSE ANTONIO SOSSA R., que en las normas sustantivas, artículos 255 del Código Penal y 1 de la Ley 23 de 30 de diciembre de 1986, la infracción se materializa al producirse la violación de la ley adjetiva, puesto que "... al haberse probado los vicios de injuridicidad en los que incurrió el Tribunal Superior, al omitir la valoración de las pruebas antes aludidas, trae como resultado la infracción de las normas contenidas en los artículos 255 del Código Penal y 1 de la Ley 23 de 1986 ..."

FUNDAMENTO DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN

El licenciado ALCIBIADES CAJAR AMADOR expresó que la sentencia de 31 de agosto de 1999, proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial incurrió en "error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica violación de la ley sustantiva penal".

Indicado lo anterior, corresponde a la Sala delimitar, por razones técnicas, en que momento se configura esta causal.

Esta causal, de naturaleza probatoria, se configura cuando se le dispensa a la prueba una fuerza determinada que la ley no le atribuye, o se desconoce la que la ley le asigna, o se permite su producción sin llenar los requisitos legales, aplicándoles luego una fuerza estatuida sólo para elementos probatorios que reúnan todas las cualidades exigidas por la ley.

El error debe ser manifiesto o "protuberante" de tal forma que de no haberse cometido el fallo sería distinto.

Procede, en consecuencia examinar cada uno de los motivos que sustentan la causal anotada.

Con relación al primer motivo el casacionista sostiene que el cargo de injuridicidad radica en que el Ad-Quem valoró incorrectamente los testimonios de ROSAURA MÁRQUEZ LÓPEZ (fojas 616-620 y 3118-3119); JORGE LUIS SÁNCHEZ (fojas 621-625 y 3120-3121); ERIC ALONSO CEBALLOS (fojas 631-635), ISMAEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ (fojas 644-653 y 707-716) y ALEXIS MORALES CHAVARRIA (fojas 814-823), ya que esos testimonios analizados en conjunto indican, que el sujeto apodado ANDY, que laboraba con GILBERTO TORAL MALEK en el tráfico de drogas corresponde a ANDRES GUEVARA VILLARREAL y no a LUCIANO "ANDY" SAMUDIO, como lo indica la sentencia de segunda instancia.

Al cotejar lo afirmado por el recurrente con la sentencia de 31 de agosto de 1999, la Sala observa que el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial sólo valoró los testimonios de ROSAURA MARQUEZ LÓPEZ e ISMAEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ.

La sentencia a foja 6480 razonó de la siguiente manera:

> "Sin embargo, refiriéndose a la foja 618 del expediente, observamos que si bien es cierto que la mencionada señora hace señalamientos contra un tal "ANDY" las generales que da de él son completamente distintas de las de ANDRÉS GUEVARA VILLARREAL, que consta en el expediente"

Posteriormente a foja 6481, la sentencia se expresó en estos términos:

> "Tenemos entonces que, verdaderamente y en realidad, el fundamento para implicar a ANDRÉS GUEVARA VILLARREAL surge no de la declaración de la señora Rosaura Márquez López, tal como aparece en la sentencia, si no (sic) de la segunda declaración indagatoria de Ismael Sánchez (foja 713), la cual discrepa de su primera

> declaración indagatoria (644), que está en contradicción con lo dicho por su concubina, quien identifica claramente a el tal "ANDY" y, sobre todo y sorprendentemente, jamás se investigó esta discrepancia."

De lo expresado en la transcripción pertinente, la Sala observa que, efectivamente, la segunda instancia concluyó que las generales que suministró ROSAURA MARQUEZ LÓPEZ de ANDY no corresponden a ANDRÉS GUEVARA VILLARREAL; por su parte, el esposo de MARQUEZ LÓPEZ, ISMAEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ coincide con ella en el sentido que, la persona conocida como la mano derecho de TORAL MALEK de apodo "Andy" corresponde a LUCIANO SAMUDIO y no a ANDRES GUEVARA VILLARREAL.

Al confrontar este Tribunal Colegiado, lo expresado en el fallo absolutorio con el testimonio de ROSAURA MÁRQUEZ LÓPEZ, visible a folios 616-620 la Sala observa que la testigo fue diáfana al describir al ANDY que ella conoce, así señaló a foja 618 que "... hay otro cómplice (sic) en esto que le dicen Andi (sic), que es gordo, cholito, claro trigueño, de estatura baja, tiene bozos y barba escasa, el es estudiante en la Universidad en la Tecnológica estudia Refrigeración ..."

Al ampliar la testigo su declaración juramentada a foja 3119 expresó, que ella no conoce a ANDRÉS GUEVARA VILLARREAL, que el ANDY que ella conoce "... es gordito y vive por Las Guías de Oriente, y no me estaba refiriendo al señor ANDRÉS GUEVARA VILLARREAL porque yo no lo conocía ..."

Analizado el testimonio y la ampliación de ROSAURA MÁRQUEZ LÓPEZ, la Sala observa que la sentencia de segunda instancia recoge lo expresado por la testigo, ya que el "ANDY" que ella conoce, no es ANDRÉS GUEVARA VILLARREAL.

En consecuencia no tiene cabida lo manifestado por el casacionista al expresar que el testimonio de ROSAURA MÁRQUEZ LÓPEZ fue valorado incorrectamente por el Ad-Quem.

Con relación al testimonio del procesado ISMAEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, la sentencia a folio 6481 expresó que:

> "... Ismael Sánchez, a fojas 644 identifica a "ANDY" con el apellido Samudio y da las generales del él (sic) en las Guías de Oriente y como estudiante de la Universidad Tecnológica, lo que concuerda exactamente con lo declarado por su concubina. Sin embargo, sin razón alguna y ahora puede considerarse sospechosamente, en la ampliación de indagatoria a foja 713, el mismo implicado y declarante en la indagatoria, Ismael Sánchez, varios días después declara en contrario con las generales del tal "ANDY", identificando a ANDRES GUEVARA VILLARREAL".

Al revisar la pieza probatoria aducida por el casacionista, visible a foja 646 del proceso, este Tribunal Colegiado constata que el agente instructor cuestionó a ISMAEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ de la siguiente manera:

> "INTERROGADO: Diga el indagado si puede manifestar al Despacho cual (sic) es el apellido del ciudadano que conoce usted como ANDY (sic) a qué se dedica y donde puede ser localizado". CONTESTO: El vive en Las Guías, su apellido es Samudio, se llama LUCIANO SAMUDIO HIJO, él estudia en la Universidad aquí en Penonomé".

Posteriormente al ampliar su indagatoria SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, a foja 713 a pregunta formulada por el agente instructor se expresó de la siguiente manera:"INTERROGADO: Diga el indagado si usted conoce al sujeto conocido como ANDY GUEVARA y le unen las generales de ley CONTESTO: Yo lo llegué a ver una sola vez, un día que llegaron allá a la playa que yo estaba ahí el señor Toral me dijo "este es Andy", pero no se sí es el mismo apellido".

Seguidamente a foja 714 continuó manifestando que ANDY es bastante claro, de pelo negro, agarrado y gordito.

Confrontada la sentencia con la prueba que se señala incorrectamente valorada, la Sala observa que el procesado ISMAEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ identificó al sujeto apodado ANDY como LUCIANO SAMUDIO Hijo, y cuando el agente instructor le cuestionó sobre ANDY GUEVARA, él manifestó conocerlo, pero aclara, que no sabe si es el mismo apellido, lo que permite a la Sala aseverar que el fallo, en lo que respecta a este motivo, no se aleja de la realidad probatoria existente en el proceso, ya que con la declaración juramentada de ROSAURA MÁRQUEZ LÓPEZ y la ampliación de indagatoria de ISMAEL SANCHEZ HERNÁNDEZ, que fue ratificada posteriormente, el ANDY a quienes ellos se refieren es LUCIANO SAMUDIO. En esos términos se expresó la sentencia de 31 de agosto de 1999.

Con relación al resto de los testimonios que aduce el casacionista fueron incorrectamente valorados por el Ad-Quem en su sentencia de 31 de agosto de 1999, a saber: JORGE LUIS SÁNCHEZ (fojas 621-625 y 3120-3121), ERIC ALONSO CEBALLOS (fojas 631-635) y ALEXIS MORALES CHAVARRIA (fojas 814-823) debe la Sala indicar, que esas pruebas testimoniales no fueron valoradas por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, en el fallo impugnado, por lo que no tiene cabida la aseveración del recurrente al indicar que se produjo su errónea estimación por parte del Ad-Quem.

Por otra parte, si el casacionista tenía interés que la Sala valorara los testimonios de SÁNCHEZ, CEBALLOS y MORALES la causal de fondo de carácter probatoria apropiada es: error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo.

En consecuencia, la Sala concluye que el casacionista no logró acreditar el cargo de injuridicidad indicado en el primer motivo de este recurso de Casación.

En lo relativo al segundo motivo, el recurrente manifiesta que el cargo de injuridicidad radica en que la segunda instancia le confirió un excesivo valor probatorio al documento de foja 6460 incorporado fuera del período probatorio, "... ya que, si bien existe el señor SAMUDIO HERNÁNDEZ ese sólo documento no acredita la no participación y relación ilícita de GUEVARA VILLARREAL con el tráfico de drogas ..."

Al confrontar la sentencia de 31 de agosto de 1999, con lo aseverado por el casacionista, la Sala constata a fojas 6481-6482 que el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial efectuó el siguiente razonamiento:

> "... la constancia agregada al expediente a fojas 6460 y 6457 sobre la existencia de LUCIANO "ANDY" SAMUDIO HERNÁNDEZ quien vive en Río Hato y asistió a la Universidad Tecnológica entre 1991 -1994, cuando sucedieron los hechos bajo estudio, es evidente que la duda se convierte en certeza, que hubo error y ANDRÉS GUEVARA VILLARREAL residente en Bugaba y relacionado con los negocios de caballos y de campeonatos de lazos, no es el tal "ANDY" residente en Las Guías y estudiante de la Universidad Tecnológica de Penonomé."

De lo transcrito se colige claramente que el Ad-Quem concluyó, luego de revisadas las pruebas documentales contenidas a folios 6457 y 6460, que el ANDY que participó en el tráfico de drogas es LUCIANO SAMUDIO y no ANDRÉS GUEVARA VILLARREAL, por cuanto que, la información suministrada por ROSAURA MÁRQUEZ LÓPEZ e ISMAEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ coincide con la información contenida en los documentos de fojas 6457 y 6460, ya que en el sector de las Guías de Oriente reside un sujeto de apodo ANDY que asistía a la Universidad Tecnológica de Panamá durante los años 1991 - 1994.

Al revisar el documento del folio 6460, aducido por el casacionista como valorado excesivamente por la segunda instancia, la Sala observa que se trata de

la Nota No. SGUT/N/672-99 de 26 de julio de 1999, remitida por la Secretaria General de la Universidad Tecnológica de Panamá, Doctora Tisla M. de Destro al Magistrado del Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, licenciado Relly Sierra Goytía en el que informa lo siguiente:

> "En atención a su nota con fecha 23 de julio de 1999, le informamos que el estudiante LUCIANO SAMUDIO con cédula 2-144-129, estuvo matriculado en la Universidad Tecnológica desde el Segundo Semestre de 1991 hasta el Segundo Semestre de 1994 en la Facultad de Ingienería Industrial, obtuvo el título de Técnico en Tecnología Administrativa el 30 de enero de 1995, lo cual consta en sus créditos oficiales.
> ..."

Por otro lado el documento de folio 6457 corresponde a información suministrada por el Tribunal Electoral, en el que manifiesta, que LUCIANO "ANDY" SAMUDIO HERNÁNDEZ reside en Río Hato, Antón, provincia de Coclé y su centro de votación es la escuela Las Guías de Oriente.

En consecuencia este Tribunal Colegiado no constata un exceso de valoración en el documento de la foja 6460, ya que lo aseverado en la sentencia corresponde a lo certificado en las Nota No. SGUT/N/672/99 de 26 de julio de 1999, proferida por la Universidad Tecnológica de Panamá, por lo que no tiene cabida las aseveraciones del casacionista con respecto al excesivo valor probatorio dispensado por el Ad-Quem a esa prueba, ya que lo externado se ajusta a las apreciaciones lógicas que se deducen del documento, con apoyo a los testimonios de MÁRQUEZ y SÁNCHEZ, respectivamente.

En tal sentido, la Sala concluye, que el casacionista no logró acreditar los cargos de injuridicidad endilgados a la sentencia a través de los motivos primero y segundo de este recurso de Casación.

En cuanto a las disposiciones legales infringidas y el concepto de la infracción, el casacionista señala que los artículos 904 y 823 del Código Judicial, así como los artículos 255 del Código Penal y 1 de la Ley 13 de 27 de julio de 1994 fueron vulnerados en concepto de violación directa por omisión.

El licenciado CAJAR AMADOR al referirse al artículo 904 del Código Judicial manifiesta que fue vulnerado en concepto de violación directa por omisión por cuanto que, el Ad-Quem disminuyó la fuerza probatoria de los testimonios de ROSAURA MÁRQUEZ LÓPEZ, JORGE LUIS SÁNCHEZ, ERIC ALONSO CEBALLOS, ISMAEL SÁNCHEZ HERNAÁDEZ y ALEXIS CHAVARRÍA, pese a que fueron enfáticos al indicar que ANDRÉS GUEVARA VILLARREAL era uno de los colaboradores en el tráfico de drogas.

El artículo 904 establece el sistema de valoración que utiliza nuestro país, la Sana Crítica. La Sana Crítica permite que el juez al efectuar el análisis valorativo del caudal probatorio del proceso utilice su experiencia, la lógica y la psicología.

El Ad-Quem estimó las declaraciones de ROSAURA MÁRQUEZ LÓPEZ e ISMAEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ conforme a los parámetros que consagra el artículo 904, puesto que ambos testimonios coincidieron al identificar al sujeto apodado ANDY, indicando entre otros aspectos, el lugar donde vive y la clase de estudios que realizaba.

Por otra parte, como bien indica la sentencia de la segunda instancia a foja 6481, ISMAEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ varía en alguna medida su versión y manifiesta conocer a ANDY GUEVARA. No obstante, debe la Sala enfatizar que el procesado ISMAEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, indicó que no le constaba que el apellido de ANDY fuese GUEVARA, por lo que las valoraciones realizadas por el Ad-Quem fueron efectuadas en conjunto, de allí que no se constata la disminución en la fuerza de los testimonios de ROSAURA MÁRQUEZ LÓPEZ e ISMAEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ.

Con relación a los testimonios de JORGE LUIS SÁNCHEZ, ERIC ALONSO CEBALLOS y ALEXIS MORALES CHAVARRIA, estos no fueron objeto de análisis por el juzgador de segunda instancia en la sentencia, por lo que mal se puede aducir que existe una vulneración directa por omisión del artículo 904 del Código Judicial. La transgresión se produce cuando el caso concreto reclama la aplicación de la norma y ésta no es aplicada por el juzgador. En esta oportunidad el fallo no consideró los testimonios de SÁNCHEZ, CEBALLOS y MORALES, por lo que mal se puede invocar una violación directa por omisión del artículo 904 del Código Judicial.

Finalmente, la Sala concluye que el artículo 904 del Código Judicial no fue vulnerado en concepto de violación directa por omisión, toda vez que la segunda instancia realizó el análisis valorativo correcto para concluir que existen serias dudas sobre la identidad de ANDY que benefician irrefutablemente al procesado ANDRÉS GUEVARA VILLARREAL.

En lo relativo al artículo 823 del Código Judicial el recurrente expresa, que fue vulnerado en concepto de violación directa por omisión por cuanto que, de haber aplicado la norma el Ad-Quem no le hubiese dado excesivo valor probatorio al documento de foja 6460 y por ende no habría concluido en la existencia de una confusión entre ANDRÉS "ANDY" GUEVARA VILLARREAL y LUCIANO "ANDY" SAMUDIO HERNÁNDEZ.

El artículo 823 determina los parámetros de valoración de los documentos públicos, indicando la norma procesal que al estimar el juez los documentos públicos considerará las otras pruebas del expediente y las apreciará conforme a la Sana Crítica.

Considera la Sala, que el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial valoró la nota No.SGUT/N/672/99 de 26 de julio de 1999, proferida por la Universidad Tecnológica de Panamá conforme los lineamientos procesales contenidos en el artículo 823 y luego, como lo indica la Sana Crítica, conjugó todo el universo probatorio del proceso y reafirmó el hecho que existen graves dudas con respecto a la participación de GUEVARA VILLARREAL en el ilícito de tráfico de drogas y asociación ilícita.

Para la Sala ello es así, por cuanto que las estimaciones probatorias que realiza el juzgador se fundamentan en el caudal probatorio del expediente, de allí que, si en el proceso no se acredita la identidad del imputado de manera fehaciente y clara las dudas que pudieran emerger contra determinado procesado lo favorecen.

El Ad-Quem estimó el documento de foja 6460 en conjunto con los testimonios de ROSAURA MARQUEZ e ISMAEL SÁNCHEZ y al apreciar la ampliación de indagatoria de este último en base a la Sana Crítica (experiencia, lógica y psicología) la consideró como sospechosa, ya que primeramente indicó que LUCIANO "ANDY" SAMUDIO era partícipe en el tráfico de drogas, pero posteriormente le formula cargos a ANDRÉS "ANDY" GUEVARA.

Siendo ello así, la Sala estima que la segunda instancia apreció el documento de foja 6460 conforme lo establece el artículo 823 del Código Judicial, lo cual lleva a concluir que tampoco ha sido vulnerada esta norma procedimental.

En lo relativo a las normas sustantivas, artículo 255 del Código Penal y 1 de la Ley 13 de 27 de julio de 1994, la Sala de lo Penal ha vertido profusa jurisprudencia en la que indica que, la trasgresión de las normas sustantivas en las causales de naturaleza probatoria, se produce cuando ha tenido lugar la infracción de la norma adjetiva, no obstante, como esto último no ha ocurrido no se configura la acusada violación de las normas sustantivas, como tampoco la causal de error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo.

SEGUNDA CAUSAL

En cuanto a la segunda causal que sustenta el casacionista "error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica violación de la ley sustancial penal", se presenta cuando el Ad-Quem sustenta su decisión en pruebas que no figuran en el proceso o que encontrándose acreditada omite considerarla o cuando el juzgador tiene la creencia equivocada de que un hecho ha ocurrido cuando en autos no se encuentra acreditado.

Señalado lo anterior corresponde analizar la sección del recurso denominada MOTIVOS:

El cargo de injuridicidad en el primer motivo consiste, de acuerdo al casacionista, en que la segunda instancia no valoró el testimonio del señor RICARDO ARAÚZ GUERRA visible a fojas 861-876, y él le formulaba cargos a ANDRÉS GUEVARA y a su vinculación con GILBERTO TORAL MALEK en el tráfico de drogas.

Al confrontar el fallo visible a fojas 6473-6482 del proceso la Sala observa, que no se realizaron valoraciones con relación al testimonio de RICARDO ARAÚZ GUERRA.

Al analizar la declaración indagatoria de ARAÚZ GUERRA, de folios 862-876 éste narra su participación en el tráfico de drogas indicando nombres, fechas y lugares, además de otras circunstancias que rodearon el ilícito investigado.

El procesado RICARDO ARAÚZ GUERRA manifestó conocer a GILBERTO TORAL MALEK, ISMAEL SÁNCHEZ, ALEXIS MORALES, ANDRÉS GUEVARA, así como a los sujetos llamados PLINIO y LUCIANO.

Con relación a ANDRÉS GUEVARA VILLARREAL, RICARDO ARAÚZ GUERRA indicó a foja 872 lo siguiente:

> "INTERROGADO: Diga el indagado, en cuántas ocasiones oudo (sic) observar usted al señor ANDRÉS GUEVARA mejor conocido como Andy en la residencia de GILBERTO TORAL Ubicada (sic) en la Playa Sol y Mar jurisdicción de Antón. CONTESTO: Solamente en una ocasión lo vi en esa casa, la primera vez que fui a esa casa, el señor ANDRÉS GUEVARA ESTABA AHI (sic), que iba con nosotros en el camión y que fue la única vez que yo estuve, ya que siempre que ellos hablaban estaban en chiriquí (sic), pero personalmente entre ellos dos, o las veces que el señor Andy salía para Panamá, no le podría si viniera a la asa (sic) del señor Toral a dialogar."

Posteriormente a foja 875, antes de finalizar su declaración indagatoria, manifestó lo que a continuación se expresa:

> "Quiero agregar algo sobre algo que yo vi, es que siempre el que andaba anuente con el señor TORAL y más apegado a él es el señor ANDY GUEVARA, no se por qué motivos se aferraba tanto a esa persona porque como aclaro anteriormente (sic) porque como el es discreta (sic) de confesarle algo a alguien, además de eso que se me quedaba sin decir que la primera vez que me fueron a buscar Andy me preguntó si me atrevía a trabajar o no, sus palabras fueron "te atreves o no te atreves ", yo (sic) yo le pregunté a qu'(sic) entonces me dijo "alo (sic) que sea", a lo cual no me contestó más nada."

Por otra parte, la Sala constata que los cargos formulados por RICARDO ARAÚZ GUERRA a ANDRÉS GUEVARA VILLARREAL fueron ratificados a través de la respectiva declaración juramentada tal cual reposa a fojas 885-887 del proceso, por lo que este testimonio debió ser apreciado por el Ad-Quem, junto al resto del caudal probatorio para determinar o no la participación de ANDRES GUEVARA VILLARREAL en el ilícito de tráfico de drogas, debiendo considerar la segunda instancia, entre otros criterios valorativos, que no se acreditó el ánimo de mentir o faltar a la verdad por parte de ARAUZ GUERRA, y que los cargos fueron

formulados en la primera declaración de descargos.

En consecuencia, este Tribunal Colegiado concluye que el casacionista acreditó el cargo de injuridicidad endilgado a la sentencia de 31 de agosto de 1999, ya que el error cometido por la segunda instancia tiene la calidad de "protuberante", pues de haber sido considerado este testimonio, habría influido en lo dispositivo del fallo.

De acuerdo al segundo motivo el yerro jurídico se cometió por parte del Ad-Quem al no valorar los documentos del folio 1792, por cuanto que de ellos surgen indicios de la relación existente entre ANDRÉS GUEVARA VILLARREAL y GILBERTO TORAL MALEK.

Luego de cotejar la sentencia, en especial los folios 6480-6482 la Sala no constata que la segunda instancia valorara esas pruebas para sustentar su fallo, por lo que procede revisar la prueba enunciada por el recurrente.

El folio 1792 del proceso contiene 84 cheques girados por ANDRÉS GUEVARA VILLARREAL y GILBERTO TORAL MALEK contra varias cuentas corrientes en el Banco del Istmo.

Con respecto a los cheques girados por ANDRÉS GUEVARA VILLARREAL, (foja 1792), la Sala observa que se han incorporado tres cheques que éste girara a favor de GILBERTO TORAL MALEK los días 25 de febrero, 28 de febrero y 12 de marzo de 1994, por montos de B/3,000.00, B/1,500.00 y B/4,000.00 dólares respectivamente.

La emisión de estos documentos negociables vincula a ANDRÉS GUEVARA VILLARREAL con GILBERTO TORAL MALEK, ya que resulta lógico considerar que ambos se conocían y existía algún tipo de actividad que originaba el desembolso de esas sumas de dinero en cortos periodos de tiempo.

Estas afirmaciones se emiten a consecuencia del resultado lógico de los indicios, ya que al acreditarse en el expediente que ANDRÉS GUEVARA VILLARREAL le giraba cheques a GILBERTO TORAL MALEK, es indicativo que ambos se conocían y que incluso, existían transacciones u obligaciones pecuniarias por parte de GUEVARA VILLARREAL para con TORAL MALEK que ameritaba la emisión de estos cheques, no obstante la sola existencia de esos cheques no acredita la existencia de negocios ilícitos, ni de ganancias no justificadas.

Sin embargo, al confrontar los citados documentos negociables con los cargos que le formula RICARDO ARAÚZ GUERRA a ANDRÉS GUEVARA VILLARREAL en el que narra la forma en que se realizaba el tráfico de drogas y la participación de éste en esas actividades ilícitas, así como al hecho que, "ANDY GUEVARA" era considerado "la mano derecho" de TORAL MALEK en las actividades de narcotráfico; la Sala concluye indicando que emergen indicios suficientes para considerar que el error cometido por la segunda instancia en la valoración de esta prueba tiene el carácter de "protuberante", por lo que finaliza esta sección del recurso indicando, que el recurrente acreditó el cargo de injuridicidad en este segundo motivo.

Con respecto a las disposiciones legales infringidas y el concepto de la infracción el recurrente señala que los artículos 904 y 972 del Código Judicial, 255 del Código Penal y 1 de la Ley 23 de diciembre de 1986 fueron infringidos en concepto de violación directa por omisión.

Al citar el artículo 904 del Código Judicial expresa el licenciado CAJAR AMADOR, fue vulnerado en concepto de violación directa por omisión, toda vez que, al no valorar el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial el testimonio de RICARDO ARAÚZ GUERRA no apreció los vínculos existentes entre ANDRÉS GUEVARA VILLARREAL y GILBERTO TORAL MALEK en las actividades ilícitas de tráfico de drogas.

El artículo 904 indica que "El juez apreciará, según las reglas de la sana crítica, las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones".

Ello significa, que los lineamientos en la estimación de las pruebas lo proporciona el sistema denominado sana crítica (lógica, experiencia y psicología del juez), por lo que el juzgador debió estimar el testimonio de ARAUZ GUERRA conforme a estos parámetros valorativos.

Sobre el particular la doctrina se ha manifestado en los siguientes términos:

> "Se debe analizar la prueba en conjunto, esto es, la valoración de cada medio en función de todos los otros medios.
>
> Comparar las testificaciones con los documentos, los documentos con los resultados de las inspecciones judiciales y relacionar éstas a su vez con los dictámenes de los peritos, etc., a fin de comprobar si el conjunto forma un todo unitario y coherente". (CABRERA ACOSTA, Benigno Humberto. Teoría General del proceso, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañes, sexta edición).

Siendo ello así, estima la Sala que el Ad-Quem debió apreciar el testimonio de RICARDO ARAÚZ GUERRA, visible a fojas 861-876, conforme a la Sana Crítica; ya que de sus descargos, que posteriormente fueron ratificados bajo la gravedad del juramento, se deduce que conoce a ANDRES "ANDY" GUEVARA, quien participaba activamente junto a TORAL MALEK en el tráfico de drogas.

A través de este testimonio se colige claramente la participación de ISMAEL SÁNCHEZ en el ilícito, lo que conlleva a la Sala a concluir, que éste último también conocía a ANDRÉS GUEVARA VILLARREAL. De allí que de haber valorado este testimonio con el resto de las pruebas el Ad-Quem habría apreciado la participación de ANDRÉS GUEVARA VILLARREAL en el tráfico de drogas.

Por lo expresado, este Tribunal de Casación comparte el criterio esbozado por el casacionista y concluye consecuentemente que el artículo 904 del Código Judicial fue vulnerado en concepto de violación directa por omisión.

Manifestó el recurrente que el artículo 972 del Código Judicial fue violentado en concepto de violación directa por omisión, toda vez que el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial no valoró los indicios que se originaron de los cheques visibles a foja 1792, en el que se determina la relación existente entre ANDRÉS GUEVARA VILLARREAL y GILBERTO TORAL MALEK en el tráfico de drogas.

La norma procesal (artículo 972) consigna que: "El Juez apreciará los indicios teniendo en cuenta su gravedad, concordancia y convergencia y las demás pruebas que obren en el proceso".

Los indicios nacen de un hecho conocido "... del cual a través de un juicio lógico que se inserta en el esquema característico del silogismo probatorio, se puede argumentar la existencia de otro hecho desconocido que constituye el "thema probandum" "(GIANTURCO, Vito, Loa indicios en el Proceso Penal).

Consecuentemente, resulta obligante para el juzgador utilizar los medios lógicos y racionales para valorar la prueba y los indicios que de ella surjan. Bajo estos criterios valorativos la Sala considera, que los cheques que ANDRÉS GUEVARA VILLARREAL giró a favor de GILBERTO TORAL MALEK indican que ambos se conocían, así como la existencia de algún tipo de obligación o transacción entre ambos, por cuanto que en cortos períodos (25 de febrero, 28 de febrero y 12 de marzo de 1994) GILBERTO TORAL MALEK recibió de GUEVARA VILLARREAL la suma de B/8,5000.00 dólares. Ver foja 1792 del proceso.

Estos indicios se acentúan al considerar los señalamientos de RICARDO ARAÚZ

GUERRA, cuando expresó a fojas 861-862 del proceso, que ANDRÉS GUEVARA VILLARREAL y TORAL MALEK fueron juntos a su casa para que trabajara para este último transportando mercancía desde Chiriquí a Panamá; indicó además el procesado ARAÚZ GUERRA que en ocasiones dejaba el carro "donde el señor ANDY" (foja 863) agregando, que quien "siempre andaba anuente al señor TORAL y más apegado a él era ANDRES GUEVARA VILLARREAL". Ver foja 875 del proceso.

Por otra parte, la Sala constata que se originan graves indicios de responsabilidad sobre ANDRÉS GUEVARA VILLARREAL por los cheques girados por éste a favor de TORAL MALEK. En un lapso de 16 días GUEVARA VILLARREAL giró B/8,500.00,tal cual se constata a foja 1792 del expediente, pese a que los ingresos mensuales del señor ANDRÉS GUEVARA VILLARREAL no lo permitían.

En este orden de ideas, debe la Sala indicar que ante la aparición de nuevas modalidades delictivas en el tráfico de drogas, la doctrina ha enfatizado el principio de unidad de la prueba, ya que frente a este tipo de ilícito sus partícipes ejecutan determinadas funciones, de allí que el juzgador, luego de evaluar las pruebas y los indicios de manera aislada e individual, debe englobarlas todas y valorarlas en su conjunto para determinar la participación o no de los procesados en el delito investigado.

Así en jurisprudencia de 20 de enero de 2000, la Sala se expresó en los siguientes términos:

> "En tal sentido, dada la complejidad y diversidad de formas que adquieren los delitos relacionados con drogas, tanto en lo relativo a la elaboración de la droga, su tráfico, blanqueo de capitales, así como el tráfico y fabricación de precursores entre otros aspectos, las modernas legislaciones en materia procesal han hecho énfasis en el concepto doctrinal que establece el deber del juez de analizar los medios de pruebas de manera aislada, pero procurando comprobar el grado de vinculación y correspondencia entre los mismos, estableciendose a partir de éste mecanismo, la coherencia que exista entre unas y otras pruebas, para finalmente apreciarlas globalmente". (Registro Judicial de enero de 2000)

Por consiguiente, este Tribunal Colegiado es del criterio que se produjo la transgresión del artículo 972 del Código Judicial.

Con relación a la transgresión de las normas sustantivas la jurisprudencia de la Sala ha indicado, que en las causales de naturaleza probatoria la vulneración de la norma sustantiva se produce indirectamente, es decir, a consecuencia de la norma adjetiva. En esta oportunidad el Tribunal de Casación observa, que fueron infringidos en concepto de violación directa por omisión los artículos 904 y 972 del Código Judicial, toda vez, que la sentencia de 31 de agosto de 1999, proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial obvió valorar pruebas documentales y testimoniales que determinaban la participación de ANDRÉS GUEVARA VILLARREAL en el tráfico ilícito de drogas, por lo que fueron lesionados los artículos 255 del Código Penal y 1 de la Ley 23 de 30 de diciembre de 1986 conforme fue modificada por la Ley 13 de 27 de julio de 1994.

Ante las circunstancias expuestas procede casar la sentencia.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, a CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley CASA la sentencia de 31 de agosto de 1999, proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, en el sentido de condenar a ANDRES GUEVARA VILLARREAL, portador de la cédula No. 4-140-231 por el delito de Trafico Internacional de Drogas y lo sanciona a 120 meses de prisión e inhabilitación para le ejercicio de funciones públicas por igual término.

Notifiquese,

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAUNDES (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA PRESENTADO POR LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO CONTRA LA SENTENCIA DE 20 DE JULIO DE 1999, PROFERIDA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

la licenciada Argentina Barrera Flores, en su condición de Fiscal Octava del Primer Circuito Judicial de Panamá, formalizó recurso de casación en la forma contra sentencia de 20 de julio de 1999, mediante la cual el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, previa reforma de la sentencia de primera instancia, absolvió a Oscar Stanziola Calderón del delito de apropiación indebida cometido en perjuicio del Banco de Desarrollo Agropecuario.

HISTORIA DEL CASO

El proceso penal dio inició en 1990, cuando la Contraloría General de la República solicitó a la Procuraduría General de la Nación que investigara la irregularidad ocurrida en el Banco de Desarrollo Agropecuario que consistió en la entrega de 6.000 quintales de arroz en cáscara por la suma de B/.90.000.00 en favor de Oscar Stanziola, quien supuestamente amparó la transacción con una letra de cambio por esa cantidad.

Tras concluida la fase sumarial, el Juzgador de la causa llamó a juicio a Stanziola, y luego de surtida la práctica de pruebas, dictó sentencia condenatoria contra Stanziola en el sentido de imponerle 2 años de prisión, 100 días de multa e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por la comisión del delito de apropiación indebida. La sentencia del a-quo fue recurrida en apelación por el Ministerio Público, toda vez que había disconformidad con la dosificación de la pena. Al momento de resolver la alzada, explica la recurrente, el Tribunal Superior, mediante sentencia de 20 de julio de 1999, absolvió a Oscar Stanziola del delito de apropiación indebida, razón por la que considera que el ad-quem incurre en falta de competencia, porque analizó hechos no debatidos en el recurso de apelación del Ministerio Público (fs.677-678).

CAUSAL INVOCADA

La casación es en la forma -in procedendo- implica la vulneración de alguna formalidad esencial en el procedimiento. El efecto de un eventual reconocimiento de una causal de forma sería el de anular y retrotraer el proceso hasta el momento en que se suscitó el vicio procesal que reconoce la sentencia de casación, con la consecuencia de que se debe devolver el proceso al Tribunal competente para que le imprima el trámite que corresponda conforme a derecho.

La causal que anuncia la recurrente se refiere al caso en que la sentencia atacada incurre en "Falta de competencia del Tribunal", consagrada en el artículo 2437, numeral 1°, del Código Judicial.

MOTIVO

Para fundamentar esta causal, la casacionista aduce un motivo. Advierte que el Ministerio Público fue la única parte que había presentado recurso de

apelación contra la sentencia condenatoria proferida por el juez de la causa, que condenaba a Stanziola por la comisión del delito de apropiación indebida. En el libelo de apelación, explica la recurrente, solamente cuestionaba el quantum de la pena impuesta a Stanziola, pero el Tribunal Superior, al momento de resolver la alzada, absolvió a Stanziola "incurriendo ...en... falta de competencia, toda vez que se pronunció sobre hechos no recurridos en apelación. La competencia del... Ad Quem, estaba única y exclusivamente delimitada por los planteamientos formulados en el recurso de apelación presentado por ésta Fiscalía" (fs.678-679).

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS

Con base en ese motivo, la casacionista alega la infracción del artículo 2428 del Código Judicial que plantea lo siguiente:

> "El recurso legalmente concedido atribuirá al Tribunal de alzada el conocimiento del proceso, solo sobre los puntos de la resolución a que se refiere el recurrente"

Considera violado la norma legal mencionada en concepto de violación directa por omisión, porque el Tribunal Superior absolvió a Stanziola, pese a que la responsabilidad penal de este no era objeto del recurso de apelación, sino el quantum de la pena impuesta por el juez natural (f.679).

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

A. Con relación al motivo.

Es un hecho conocido que la jurisdicción, en sentido estricto, es la función pública de administrar justicia, que se confía, en primer orden, al Organo Judicial. Todos los jueces ejercen jurisdicción, pero algunos pueden intervenir en determinadas causas y en otras no. Esa aptitud para juzgar determinados asuntos es la competencia, la cual es auxiliada con los criterios o factores de competencia, entre los que podemos mencionar el del territorio, la naturaleza del asunto, la cuantía, la calidad de las partes. La legislación vigente también incluye la competencia funcional, la que, a su vez, comprende la competencia por grado (cf. Art. 1104, 2428 C.J). Plantea la doctrina que ese criterio guarda relación con el principio de la doble instancia, el cual "Persigue que funcionarios de diversa categoría, y que se presumen superiores en conocimiento, revisen determinaciones del inferior buscando ofrecer el máximo acierto en la decisión". Y agrega que "la tarea que cumple el juzgador en cada grado es diferente. Así a) el primer grado es el que tiene la plenitud de las atribuciones para aplicar la norma que, según su análisis, resulte más apropiada; b) el de segundo grado o instancia se limita en su decisión a los argumentos o glosas de la parte vencida" (QUINTERO, Beatriz. PRIETO, Eugenio. Teoría General del Proceso. Tomo I.Editorial. Temis. Bogotá. 1992. pág. 210-211).

Con lo anterior podemos manifestar que surge el factor de competencia aludido por razón de la cualidad del cargo, de la jerarquía de los jueces, y en la que solamente pueden pronunciarse sobre los agravios que conoce por razón de la petición o del medio impugnativo que corresponda por ley (principio de congruencia).

Ahora bien, observa la Corte que la sentencia de 24 de abril de 1997, dictada por el Juzgado Décimo del Primer Circuito Penal de Panamá, condenó a Oscar Stanziola Calderón a la pena de 2 años de prisión, 100 días multa e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período, por ser responsable del delito de apropiación indebida (cf.587). De esa resolución proferida en primera instancia, el Ministerio Público fue la única parte que anunció y sustentó oportunamente recurso de apelación (cf.589. vlta). En el libelo de apelación, la representante del Ministerio Público expresó que "Nuestra disconformidad con la decisión radica en que no estamos de acuerdo con el quantum de la pena impuesta, tanto de prisión como de días multa" (f.631), por lo que solicitó al Tribunal Superior que "eleve a un monto cónsono", la pena impuesta

por a-quo (f.634).

En la parte medular de la resolución de 20 de julio de 1999, el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial expresó lo siguiente:

> "No se coincide con lo concluido por el Juez degrado, ya que se ha procedido a imponer al procesado STANZIOLA CALDERON una pena principal de nada menos que DOS (2) años de prisión y CIEN (100) DIAS MULTA, a razón de B/3.00 diarios, como responsable del delito de APROPIACION INDEBIDA, cuando no se percibe por ningún lado que este se haya apropiado de manera ilícita, de los referidos quintales de arroz, ya que ha quedado claramente explicado que todo fue producto de una actividad comercial, que si bien se realizó sobre la base de meras expectativas de cobro, no deja de tener carácter comercial"(f.650).

En otra parte de la resolución, el Tribunal Superior se manifestó así:

> "De otro lado, el delito imputado y por el cual resulta sancionado STANZIOLA CALDERON, exige el apoderamiento de bienes muebles, que le hayan sido confiados o entregados a una persona, por un título no traslaticio de dominio... Bajo este prisma, tenemos que, como se dijo antes, los motivos que originaron la entrega de 6,000 quintales de arroz al señor STANZIOLA CAlDERON, fueron eminentemente comerciales, dados en venta y amparados en una letra de cambio firmada por éste... por lo que mal puede sostenerse que se configura el delito de apropiación indebida..." (F.650).

Y concluye el Tribunal Superior con esta sentencia:

> " Luego de todas estas consideraciones, resolviendo en estricto Derecho, sin otras motivaciones, estima esta Sala que proceda la absolución del inculpado STANZIOLA CALDERON, lo que así se hará, previa revocatoria del fallo impugnado" (f.651).

Como se observa, no existe congruencia entre lo demandado por la representante del Ministerio Público y lo resuelto por el Tribunal Superior. Resulta claro que en la sentencia proferida en segunda instancia existe una incongruencia entre lo pedido y lo otorgado. En síntesis, la sentencia traspasó la competencia o los límites comprendidos en el libelo de apelación presentado por la representante del Ministerio Público (extra petita); resolvió absolver a Stanziola, pese a que era la penalidad y no la responsabilidad penal de éste la que era objeto de controversia.

Considera la Corte que la casacionista ha comprobado el error in procedendo cometido por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial mediante sentencia de 20 de julio de 1999.

B. Con relación a la disposición legal infringida:

La Corte estima fundada la infracción del artículo 2428 del Código Judicial, toda vez que la resolución atacada absolvió al imputado Stanziola, sin tener la competencia para pronunciarse sobre su responsabilidad penal, por considerar que el medio de impugnación presentado por la agente del Ministerio Público no autorizaba para que se enmendara esa calificación. Resulta así fundado el reclamo que se formula por violación del artículo 2428 del Código Judicial.

Es preciso señalar que no resulta comprensible que el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial hubiese resuelto absolver a Stanziola, pese a que el libelo de apelación de la recurrente expuso con claridad que su disconformidad estaba dirigida a la dosificación de la pena. Tanto era el conocimiento de los Magistrados sobre la pretensión de la recurrente, que en la primera página de la resolución impugnada expresaron que "Una atenta lectura del

libelo impugnativo presentado por la Fiscal apelante, permite colegir que su disconformidad se dirige a la cuantía de la multa impuesta a STANZIOLA CALDERON..." (F.644). Carece de sentido entonces que el Tribunal Superior, de manera oficiosa, se haya pronunciado de una manera totalmente opuesta a lo pedido por la recurrente.

Realizadas estas anotaciones, la Corte considera justificada la causal de casación en la forma que sustentó la representante del Ministerio Público, por lo que es del caso invalidar el fallo atacado.

Con fundamento en el artículo 2456 del Código Judicial, la Corte determina que el presente proceso debe ser devuelto al Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, para que se pronuncie, como tribunal de segunda instancia, sobre los argumentos que expuso la agente del Ministerio Público en el libelo de apelación, cual es visible a fojas 630-634 del expediente.

Por lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 20 de julio de 1999, mediante la cual el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, previa reforma de la sentencia de primera instancia, absolvió a Oscar Stanziola Calderón del delito de apropiación indebida cometido en perjuicio del Banco de Desarrollo Agropecuario, y ORDENA devolver la causa al Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial para que proceda de acuerdo con la parte motiva de esta sentencia.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS

(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) JOSE M. FAUNDES

(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN FORMULADO POR LA DEFENSA TÉCNICA DE LUIS PLÁCIDO ARIZALA ARANGO, SINDICADO POR EL DELITO DE POSESIÓN AGRAVADA DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTITRES (23) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Para decidir sobre su admisibilidad, conoce la Sala Penal de la Corte Suprema del recurso de casación en el fondo contra la sentencia de 10 de mayo de 1999, dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que condena a Luis Plácido Arizala Arango a la pena de 60 meses de prisión, como responsable del delito de posesión agravada de drogas.

La defensa técnica de Arizala invoca una causal de casación de fondo, que se refiere al caso en que la sentencia proferida en segunda instancia por Tribunal Superior incurre en error de derecho en la apreciación de la prueba. El libelo de casación también permite apreciar que esa causal es apoyada con tres motivos. En el primer motivo, el recurrente plantea que la sentencia atacada valoró de menara errada la declaración de Lourdes Johana Arrocha Cáceres, porque esa deposición no fue "recibida en debida forma" (f.311). No obstante, el casacionista no explica cuál o cuales son esas deficiencias que vician la declaración a la que hace mención. En el segundo motivo, el recurrente señala que el Tribunal Superior le otorga a la declaración de Marcelino Martínez "un valor que no tiene" (f.311); pero, nuevamente, no ilustra a la Sala porqué esa deposición carece de valor según los términos que dicta la ley. En otras palabras, no se aprecia un debate probatorio del cual se desprenda que la declaración de Martínez carece de fuerza para ser utilizada como pieza

fundamental para mantener la condena de este.

En cuanto al tercer motivo, señala el recurrente que el Tribunal Superior incurre en error de derecho en la apreciación de la prueba, porque Arizala "nunca fue interrogado..." (f.311) sobre lo afirmado por los agentes de policía captores Tomás Armuelles y Reynaldo Quintana, quienes señalan que el imputado les había ofrecido B/3.000.00 con la condición de que estos le restituyeran la libertad corporal.

Según se infiere de ese motivo, el sumariado no tuvo oportunidad de presentar sus descargos sobre el alegado ofrecimiento monetario al que se refirieron los agentes de policía. Sin embargo, en la declaración indagatoria de Arizala, se lee con claridad el cuestionamiento que, sobre ese tema, le hizo el funcionario de instrucción (cf.40). Lo anterior puede parecer un pronunciamiento de fondo. Pero se trata de un razonamiento propio de un examen de admisibilidad del libelo de casación, porque deben desestimarse aquellos motivos que contienen falsos errores de ponderación que pueden llevar a la Corte a realizar una innecesaria labor de análisis de las piezas que obran en autos. Por lo anterior, en reiteradas oportunidades la Corte ha señalado que debe ser manifiesto el error de valoración probatoria incurrido por el Tribunal Superior.

En cuanto a las disposiciones legales infringidas, el recurrente advierte que la sentencia impugnada vulnera el artículo 973 del Código Judicial en concepto de violación directa por omisión (f.312). La norma legal en cuestión, autoriza al juzgador a examinar la prueba indiciaria con arreglo a la sana crítica. La doctrina más autorizada entiende que indicio es "un hecho conocido del cual se induce otro hecho desconocido, mediante un argumento probatorio que de aquel se obtiene, en virtud de una operación lógica-crítica basada en normas generales de la experiencia o en principios científicos o técnicos" (DEVIS ECHANDIA, Hernando. Teoría General de la prueba judicial. Tomo II. Primera edición. pág.601). Según el argumento del recurrente, el hecho conocido consiste en que el sentenciado Gómez Blandón era el que portaba la droga. Sin embargo, la Corte no observa cual es el hecho desconocido que, con esa afirmación, se pretende comprobar. Es decir, el recurrente omite exponer, según su parecer, hacia donde nos debe conducir esas pruebas directas (testimoniales). Lo comentado nos lleva a la conclusión de que la explicación del concepto de la infracción de la norma legal encuentre deficiencias, toda vez que el recurrente no indica la significación o la conexión lógica que existe entre el hecho conocido y el desconocido.

Observa la Corte que el argumento que sustenta la violación del artículo 770 del Código Judicial es el mismo que puede se aprecia en el tercer motivo que sustenta la causal de casación que invoca el recurrente (f.314). Es necesario reiterar que se encuentra formulado de manera deficiente , ya que se trata de una opinión muy particular del apoderado judicial que no encuentra apoyo fáctico en el expediente.

Para concluir, la Sala advierte al casacionista que la norma sustantiva debió citarla de manera integra.

Por lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO ADMITE el recurso de casación presentado contra la sentencia de 10 de mayo de 1999, dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que condena a Luis Plácido Arizala Arango a la pena de 60 meses de prisión, como responsable del delito de posesión agravada de drogas.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS

(fdo.) JOSE M. FAUNDES (fdo.) GRACIELA J. DIXON

(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSOS DE CASACION INTERPUESTOS DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JOSE MANUEL DE LEON FLORES Y JAVIER HILARIO DE ARRIBA SAMUDIO SINDICADOS POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN PERJUICIO DE FULVIA RIOS DE FIERRO Y MILAGROS DEL CARMEN RIOS FIERRO. MAGISTRADO PONENTE: JOSE MANUEL FAUNDES. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Con motivo de la presentación de tres recursos de casación, ingresó a esta Corporación Judicial el expediente que contiene el proceso penal seguido a JOSE MANUEL DE LEON FLORES y JAVIER HILARIO DE ARRIBA SAMUDIO por delito contra el patrimonio en perjuicio de FULVIA RIOS DE FIERRO y MILAGROS DEL CARMEN FIERRO RIOS, procediéndose de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2443 del Código Judicial, a la fijación en lista del proceso, con la finalidad de que las partes interesadas tuvieran conocimiento del ingreso del expediente al tribunal de casación.

A esta fecha, una vez vencido el término de lista es necesario resolver sobre la admisibilidad de los recursos de casación presentados oportunamente en este caso y con esa finalidad expresa lo siguiente:

RECURSO DE CASACION PRESENTADO POR EL LICENCIADO RICAUTER GONZALEZ GONZALEZ, FISCAL DE CIRCUITO DE HERRERA.

Con relación a los requisitos externos que deben cumplirse en la presentación de este medio de impugnación extraordinario, la Sala está de acuerdo con el criterio del Segundo Tribunal Superior en el sentido de que la sentencia de segunda instancia impugnada es suceptible del recurso, en virtud de que se trata de delito sancionado con pena privativa de libertad mayor de dos (2) años. También consta que el anuncio y formalización del recurso se hizo oportunamente y por persona hábil para ello.

En cuanto a los requisitos establecidos de manera clara y precisa por el artículo 2443 del Código Judicial, la Corte advierte que en cuanto a la historia concisa del caso, lejos de hacer una historia concreta de la cual surjan cargos de injuridicidad formulados contra la sentencia, procede a realizar una historia extensa en la que parafrasea declaraciones de varias personas y detalles del caso, todo lo cual es inconciliable con la técnica del recurso.

La única causal aducida por el señor Fiscal es la contemplada en el numeral 1 del artículo 2434 del Código Judicial. Sin embargo, ninguno de los 2 motivos responden a las exigencias de la causal probatoria esgrimida, toda vez que la misma requiere que el casacionista presente de manera clara, argumentos que demuestren que el juzgador erró en la valoración de la prueba.

En cuanto a las disposiciones legales infringidas, señalamos que el recurrente no explica claramente el concepto de la infracción de los artículos aducidos y además, procede a hacer planteamientos confusos y con un toque personal. Cuando se refiere al artículo 184 del Código Penal, suponemos que se trata de la norma sustantiva penal infringida, no especifica el numeral que guarda relación con el caso en particular, por lo que resulta confusa su explicación con respecto a en que consiste la violación del artículo.

De lo expuesto se desprende que la Corte considera que el recurso no fue presentado de acuerdo a los requerimientos exigidos, por lo que entonces debe declararse inadmisible.

RECURSO DE CASACION PRESENTADO POR EL LICENCIADO ESTEBAN RAMON POVEDA HUERTAS, APODERADO JUDICIAL DE MILAGROS DEL CARMEN FIERRO RIOS.

En cuanto al recurso presentado por el licenciado ESTEBAN RAMON POVEDA HUERTAS, apoderado judicial de MILAGROS DEL CARMEN FIERRO RIOS, la Sala advierte que el mismo se ajusta a los requisitos externos referidos al principio de oportunidad, a la legitimación material y objetiva y a la presentación del recurso por persona hábil.

Ahora bien, respecto al cumplimiento de los requisitos formales establecidos en la ley se advierte que el recurrente ha cometido errores en la formalización del recurso, pero debemos hacer la salvedad de que no haremos el análisis de los mismos, toda vez que el recurso presentado por el licenciado Esteban Ramón Poveda Huertas en representación de MILAGROS DEL CARMEN FIERRO RIOS es similar al presentado por el Fiscal de Circuito de Herrera, y a consecuencia de esto los errores son los mismos.

RECURSO PRESENTADO POR EL DOCTOR RONALD MARTIN HURLEY NOVILLE, APODERADO JUDICIAL DE JOSE MANUEL DE LEON FLORES.

Con respecto al recurso presentado por el doctor RONALD HURLEY, la Sala considera que se ajusta a los requisitos externos y fue presentado por persona hábil. Con relación a los requisitos formales establecidos en la ley, la Corte advierte que el recurrente ha cometido errores en la formalización del mismo.

PRIMERA CAUSAL

Con relación a la historia concisa del caso, se observa que omite el relato sucinto de los hechos que dieron lugar al proceso. El recurrente hace una narración detallada de los hechos con apreciaciones subjetivas de los mismos, lo que es ajeno a concepto jurisprudencial que establece que la historia concisa del caso debe ser lacónica, objetiva y precisa y debe tener la virtud de indicar el vicio. En este acápite el recurrente no cumple con el propósito del recurso.

En el único motivo aducido, el recurrente manifiesta su inconformidad con el contenido y la forma de la valoración hecha por el tribunal, además de que presenta su argumento con apreciaciones subjetivas sin presentar claramente el cargo de injuridicidad atribuible a la sentencia impugnada.

Con relación a las disposiciones legales infringidas, el recurrente no explica el concepto de infracción de ninguna de las disposiciones aducidas, transcribe las normas, dice en que concepto fueron violentadas según su parecer, pero no explica claramente en que consiste la violación.

En este mismo sentido, el recurrente omite señalar la norma sustantiva penal infringida. Cuando se invocan causales probatorias la norma sustantiva penal es infringida de manera indirecta a consecuencia de la violación de las normas procesales, es decir, de las que contienen el medio probatorio mal valorado. El recurrente cometió un yerro grave al omitir la norma sustantiva penal porque es un requisito indispensable en la presentación de un recurso de casación cuando la causal que se invoca es de índole probatoria.

SEGUNDA CAUSAL

La segunda causal invocada es la contemplada en el numeral 11 del artículo 2434 del Código Judicial que el recurrente enuncia de la siguiente manera: "Cuando se haya cometido error de derecho, al determinar la participación y correspondiente responsabilidad del imputado, en los hechos que la Sentencia dé por aprobados, lo cual ha influenciado en lo dispositivo del fallo...". En primer lugar, la causal ha sido enunciada en forma inapropiada debió haberlo hecho de la siguiente manera: "Cuando se haya cometido error de derecho, al determinar la participación y correspondiente responsabilidad del imputado en lo s hechos que la sentencia dé por aprobados".

Con relación al único motivo aducido, carece de cargo de injuridicidad atribuible a la sentencia del Tribunal Superior. El recurrente considera que el

tribunal estableció de "manera errónea, una vinculación objetiva y grave entre el mismo y los hechos dados por probados en la Sentencia", argumento que no guarda relación con la causal invocada. Aquí no se cuestiona la vinculación del imputado con el hecho probado, sino el grado de participación criminal (autor mediato, autor inmediato, cómplice primario, secundario, instigador). Además, en el párrafo final del motivo aducido el recurrente señala que el fallo viola de manera directa algunos artículos del Código Judicial lo cual constituye un yerro grave porque para esto hay una sección específica destinada a la exposición de las disposiciones legales infringidas y concepto de la infracción.

Con relación a las disposiciones legales infringidas, el recurrente pone de seguido 2 artículos, 904 y 2144 del Código Judicial y un sólo concepto de infracción, lo cual es incorrecto porque debe transcribir la norma pertinente y luego, después de cada transcripción se explique el concepto en que según su parecer ha sido infringido el precepto. Lo mismo hace con respecto de los artículos 181 y 184 del Código Penal, por lo que vale las consideraciones hechas en anteriormente.

Con respecto al artículo 2135 ibídem, al momento de explicar el concepto de infracción manifiesta que "El tribunal Superior, incurre en una violación directa por omisión, al dar por un hecho probado, el reconocimiento de los 'Testigos' a mi representado ..." argumento incongruente con la causal invocada ya que la jurisprudencia tiene establecido que cuando se invoca la causal bajo examen (numeral 11 del artículo 2434 del Código Judicial), el recurrente no objeta la evaluación probatoria de la causa pues se presume que esta se ha hecho inobjetablemente; además de que la argumentación es totalmente subjetiva. Con relación a las restantes disposiciones aducidas, vemos que la argumentación utilizada para explicar el concepto de infracción, además de subjetivas, parecen alegatos de instancia ordinaria lo cual es incongruente con la técnica del recurso.

Los defectos antes anotados dejan sin sustento lógico jurídico el recurso de casación penal bajo examen; en consecuencia hay lugar a declararlo inadmisible.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE los recursos presentados por los licenciados Ricauter González González, Fiscal de Circuito de Herrera; Esteban Ramón Poveda Huertas, apoderado judicial de Milagros Del Carmen Fierro Ríos y el doctor Ronald Martín Hurley Noville apoderado judicial de JOSE MANUEL DE LEON FLORES, contra la sentencia proferida el 15 de junio de 1999 por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, dentro del proceso seguido a JOSE MANUEL DE LEON FLORES y JAVIER HILARIO DE ARRIBA SAMUDIO sindicados por delito contra el patrimonio.

Toda vez que se advierte que el imputado JOSE MANUEL DE LEON FLORES ha cumplido la pena impuesta de treinta (30) meses de prisión, ya que su detención preventiva se decretó el 19 de febrero de 1998, se ORDENA su inmediata libertad siempre y cuando no tenga otra causa pendiente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES R.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario Sala de lo Penal

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ROLANDO EVARISTO CLARKE Y OTROS, SINDICADOS POR EL DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La Doctora ASUNCIÓN ALONSO DE MONTALVO interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo a favor de ROLANDO EVARISTO CLARKE, sancionado como autor del delito de posesión ilícita de droga, mediante sentencia de 4 de febrero de 2000, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

Vencido el término de lista, a fin de que las partes tuvieran conocimiento del ingreso del caso al Tribunal de Casación, corresponde ahora examinar el escrito mediante el cual se formaliza este medio de impugnación extraordinario, para los fines de resolver su admisibilidad, al tenor de lo previsto por el artículo 2443 del Código Judicial.

El recurso fue presentado por persona hábil, promovido dentro del término establecido por las normas de procedimiento penal, contra una resolución que efectivamente admite este tipo de recurso extraordinario y por delito cuya sanción es superior a 2 años de prisión.

Con relación a la historia concisa, se aprecia que la casacionista hace una relación breve y concreta de los hechos de la cual surgen los cargos de injuridicidad que se le formulan a la sentencia.

La jurista invoca dos causales que fundamentan el recurso extraordinario:

La primera causal es "la falta de competencia del Tribunal", establecida en el numeral 1 del artículo 2437 del Código Judicial.

Siguiendo la estructura del recurso, la casacionista desarrolla el motivo que sustenta la causal, el cual ha sido formulado en forma precisa, clara y concreta, en congruencia con la causal invocada y se observa el cargo de injuridicidad que se endilga al fallo del A-quem.

Con relación a las disposiciones legales infringidas, la recurrente transcribe los artículos 1133 y 2428 del Código Judicial, desarrollando a continuación de cada excerta legal el concepto en que han sido transgredidas y explicando en que consiste dicha infracción, de conformidad con lo establecido en la técnica casacionista.

La segunda causal aducida por la jurista es "cuando se haya incurrido en error de derecho al calificar el delito, si la calificación ha debido influir en el tipo" contenida en el numeral 3 del artículo 2434 del Código Judicial.

A renglón seguido, se plantea un motivo único que sustenta la causal en la cual la casacionista manifiesta que el fallo del A-quem califica la conducta del procesado ROLANDO EVARISTO CLARKE como posesión ilícita de Drogas Agravada, bajo la premisa de que éste ejecutó un acto ilícito relacionado con drogas en un centro carcelario, lo cual es erróneo porque de los elementos probatorios llegados a la investigación, como lo es el informe de novedad, de la declaración jurada del subteniente ERASMO GÓMEZ y la certificación del Laboratorio Técnico Especializado en Drogas, se puede concluir que estamos en presencia de una posesión simple para el consumo.

Antes de proseguir con el análisis del libelo de casación, es preciso hacer algunas anotaciones con relación a la causal aducida.

La jurisprudencia de la Corte ha sentado que el numeral 3 del artículo 2434 del Código Judicial contiene dos supuestos por los cuales se puede incurrir en error de derecho al calificar el delito: a) cuando la calificación ha influido en el tipo, b) cuando la calificación ha influido en la extensión de la pena aplicable.

El primer supuesto se produce cuando el sindicado ha sido sancionado por un delito distinto por el cual fue llamado a juicio. En tanto que se incurre en el segundo supuesto cuando el juez de la causa sanciona al procesado con base en un tipo penal que, si bien se encuentra en el capítulo o título que preceptúa el delito genérico por el cual fue llamado a juicio, no corresponde a la situación jurídica del procesado (Cfr. Fallo de 14 de febrero de 1996).

En el caso que nos ocupa, la casacionista manifiesta que el A-quem incurrió en el error de derecho al calificar la conducta del procesado ROLANDO EVARISTO CLARKE como posesión ilícita de Drogas Agravada, cuando los elementos probatorios llegados a la investigación permiten concluir que estamos en presencia de una posesión simple para el consumo.

Se debe tener presente que el artículo 260 del Código Penal, el cual tipifica la posesión de drogas, contiene dos tipos penales, los cuales tutelan el mismo bien jurídico -la salud pública- y se diferencian en los aspectos fácticos que describen.

Así, en el primer párrafo establece el tipo penal básico o simple, relacionado con la posesión de droga con fines ilícitos, que se aplica sin sujeción a ningún otro tipo. Mientras tanto, en el segundo párrafo se regula un tipo penal subordinado, el cual se refiere al tipo básico, pero señala determinadas circunstancias o aspectos que agravan la posesión de drogas con fines ilícitos.

En ese orden de ideas, la Corte ha sostenido que a través de la causal bajo examen "lo que se discute es la calificación del delito, bajo la premisa de que el ad quem ubicó el hecho en un tipo que no corresponde"(Fallo de 21 de julio de 1998), de allí que se concluye que existe congruencia entre el motivo y la causal aducida.

No obstante lo anterior, se observa que la casacionista, en la sección de las disposiciones legales infringidas, expresa que se ha violado en concepto de indebida aplicación el artículo 258 del Código Penal, que tipifica el tráfico de droga (venta, compra y traspaso a cualquier título) con fines ilícitos. Sin embargo, observa la Sala que ésta disposición no guarda relación con el motivo en el cual se ha sustentado el recurso de casación, toda vez que a lo largo del razonamiento desplegado en el citado motivo la casacionista argumenta en torno a la disyuntiva de la calificación del delito de posesión de drogas, materia regulada en el artículo 260 del Código Penal, de allí la incongruencia entre el motivo y la norma invocada.

Otra norma que se estima transgredida es el artículo 260 de la excerta legal citada, en concepto de violación directa por omisión, transcribiendo en forma íntegra el texto de la norma y explicando cómo se ha producido.

Como quiera que no existe armonía entre el motivo y las disposiciones legales infringidas, el Tribunal de Casación no puede admitir la segunda causal, por lo que se limitará a admitir únicamente la primera casual.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 4 de febrero de 2000, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, solamente en la primera causal, y DISPONE, correr traslado del expediente al señor Procurador General de la Nación, para que emita concepto en el término de cinco días, tal cual lo establece el artículo 2445 del Código Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SE ADMITE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO A FAVOR DE ARIEL ACEVEDO, PROCESADO POR EL DELITO DE LESIONES PERSONALES. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante resolución de veintisiete (27) de julio de dos mil (2000), ésta Sala ordenó la corrección del recurso de casación interpuesto por la licenciada MIRIAM H. JAÉN DE SALINAS, a favor del señor ARIEL ACEVEDO, y contra la sentencia calendada 27 de octubre de 1999, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que revocó la resolución de primera instancia, y en su defecto condenó al prenombrado ACEVEDO, a la pena de 30 meses de prisión, por el delito de Lesiones Personales.

Una vez cumplido el término establecido en el artículo 2444 del Código Judicial, que ordena la corrección del recurso anunciado, se procede a examinarlo, con la finalidad de decidir sobre su admisibilidad.

En tal sentido, observamos que la recurrente cumple con lo dispuesto en resolución de 27 de julio de 2000, expedida por ésta Sala, en donde se ordena la corrección del recurso en lo siguiente:

> "... debido a que en el presente recurso extraordinario, se evidencia un solo defecto, que es en cuanto a la historia concisa del caso; procede ordenar la corrección del escrito, en el sentido de que dicha sección debe ser estructurada de una forma sucinta y breve de los hechos que dieron origen al proceso, y del cual se puedan desprender cargos de injuridicidad contra la resolución impugnada." (fs.267-269)

Dado lo anterior, esta Sala concluye, en admitir el recurso interpuesto por la licenciada MIRIAM H. JAÉN DE SALINAS, defensora de oficio del señor ARIEL ACEVEDO.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, representada por la suscrita Magistrada Sustanciadora en Sala Unitaria, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación interpuesto por la licenciada MIRIAM H. JAÉN DE SALINAS, y DISPONE correr traslado del negocio al señor Procurador General de la Nación por el término de cinco (5) días para que emita concepto de conformidad a lo establecido en el artículo 2445 del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL INCIDENTE DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A DAVID SIMMONS, ROGELIO DE GRACIA Y MIGUEL PEÑALBA POR DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ,

TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El día veintisiete (27) de junio de 2000, se celebró la audiencia oral y pública del recurso de casación interpuesto por el licenciado RICARDO STEVENS, en representación de los señores DAVID SIMONS, ROGELIO DE GRACIA y MIGUEL PEÑALBA, contra el auto calendado 28 de enero de 1999, proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, que revocó la resolución de 18 de septiembre de 1998, emitida por el Juzgado Segundo de Circuito Judicial de Colón, Ramo Penal, y en consecuencia ordenó continuar el proceso penal contra los prenombrados por la supuesta comisión de Delito de Falsificación de Documento Público.

Nos corresponde como tribunal de casación decidir sobre el fondo del recurso interpuesto.

HISTORIA CONCISA DEL CASO

El presente proceso se inicia con la denuncia presentada por AMADO BRUNETTE, contra los señores DAVID SIMONS, ROGELIO DE GRACIA y MIGUEL PEÑALBA, por la supuesta comisión de un Delito Contra la Fe Pública.

Los cargos contra los señores SIMONS, DE GRACIA y PEÑALBA, se infieren de los hechos suscitados el día 23 de diciembre de 1991, cuando en una escritura pública, mencionan datos falsos.

La resolución que se cuestiona, niega la existencia de prescripción de la acción penal, pese a que había transcurrido más del tiempo requerido, que es de seis (6) años, para que se produjera, siendo el día 23 de diciembre de 1991, fecha en que se cometió el hecho, hasta la dictación del auto de enjuiciamiento el 17 de diciembre de 1997, el cual es notificado en junio de 1998.

CAUSAL INVOCADA Y MOTIVO QUE LA SUSTENTA

El recurrente invoca como única causal, la "Infracción de un texto legal expreso", la cual se encuentra contenida en el numeral 1 del artículo 2435 del Código Judicial. Dicha causal es sustentada por un solo motivo.

ÚNICO MOTIVO: Señala el recurrente, que el Tribunal A-Quo en la resolución que se impugna, sostiene un criterio contrario al señalado expresamente en la ley, toda vez que indicó que la resolución que llamó a juicio a sus patrocinados, no requirió ser notificada a las partes, para que interrumpiera la prescripción de la acción penal.

DISPOSICIONES LEGALES Y CONCEPTO EN QUE HAN SIDO INFRINGIDAS

El abogado casacionista señala como norma infringida el artículo 2304 del Código Judicial, en concepto de violación directa, debido a que el Tribunal A-Quo ignoró por completo lo señalado en el numeral 1° de la excerta mencionada, por cuanto que el auto de enjuiciamiento debe ser notificado personalmente al imputado y a su defensor.

Como segunda disposición legal, se señala el artículo 1008 del Código Judicial en concepto de violación directa, toda vez, que una resolución para que surta sus efectos debe ser notificada.

Dado lo anterior solicita, se case la resolución de 28 enero de 1999, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia. (fs. 77-79)

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El licenciado JOSÉ ANTONIO SOSSA R., en su calidad de Procurador General de la Nación, mediante Vista Fiscal No. 27 de 26 de abril de 2000, solicita no se case la sentencia de 28 de enero de 1999, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, toda vez que no se ha logrado demostrar el vicio de injuridicidad de que adolece la resolución recurrida en casación por el licenciado RICARDO STEVENS, dentro del proceso seguido a DAVID SIMONS, ROGELIO DE GRACIA y MIGUEL PEÑALBA.

Manifiesta el representante del Ministerio Público, que en cuanto al único motivo señalado por el abogado casacionista, no se ha logrado configurar el vicio de injuridicidad que se le endilga al fallo recurrido, dado que a raíz de la Ley 1 de 1995, se estableció en el artículo 2207-B del Código Judicial, que los autos de enjuiciamiento son inapelables con relación a causas penales que conozcan los juzgados municipales y de circuito. Lo anterior significa, que con su sola dictación, queda ejecutoriado, de conformidad a lo previsto en el artículo 982 del Código Judicial, el cual se refiere a que una resolución queda en firme o ejecutoriada cuando no admite recurso alguno, ya sea porque no proceda o porque no haya sido interpuesto oportunamente.

En consecuencia, señala el representante de la vindicta pública, que el auto de enjuiciamiento dictado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, el 17 de diciembre de 1997, al ser inapelable, quedó ejecutoriado en el acto, lo cual interrumpió el término de prescripción de la acción penal.

Por lo anotado, señala, que éste único motivo no prospera.

En cuanto a la sección de las disposiciones legales que se dicen infringidas, manifiesta, que el abogado casacionista no logra explicar por qué se produce la alegada violación del artículo 2304 del Código Judicial, sino que se limita a señalar lo indicado en el numeral 1 de la norma citada.

Con respecto al artículo 1008 del Código Judicial, reitera lo argumentado cuando se examinó el cargo de ilicitud del único motivo aludido por el recurrente. Por lo que concluye, que no se produce la infracción de los artículos referidos.

Dadas las consideraciones expuestas, solicita, no se case la resolución de 28 de enero de 1999, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial. (fs. 81-91)

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El abogado casacionista, licenciado RICARDO STEVENS, invoca como única causal "Infracción de un texto legal expreso". Dicha causal de naturaleza genérica, permite ubicar dentro de la misma, los tres supuestos de infracción de la ley, es decir, violación directa, indebida aplicación e interpretación errónea.

El abogado casacionista, señalada en su único motivo, que el Segundo Tribunal Superior de Justicia:

> "sostiene un criterio contrario al establecido de manera expresa en la ley, cuando afirmó que la resolución de segunda instancia, que llamó a juicio y tomó otras medidas, no requirió ser notificada a las partes para que pudiera surtir sus efectos, entre ellos el de interrumpir la prescripción de la acción penal". (f. 78)

En el presente proceso, observamos que el punto del conflicto estriba, en que si con la sola dictación del auto de llamamiento a juicio se interrumpe la prescripción de la acción penal (Posición del Ministerio Público), o si por el contrario, dicha resolución requiere ser notificada a las partes para quedar ejecutoriada a fin de interrumpir la prescripción (Posición del recurrente).

En primer lugar debemos indicar, que el artículo 95 del Código Penal, se refiere, a que la prescripción de la acción penal se interrumpe con el auto de enjuiciamiento; no obstante, dicha norma de naturaleza procesal, aunque está ubicada dentro de un Código de contenido sustantivo, no indica si tal resolución debe estar ejecutoriado o no.

El Código Penal de 1922, en su artículo 88 derogado, señalaba, que no era necesario que el auto de llamamiento a juicio debía estar ejecutoriado para que se interrumpiera la prescripción. Sin embargo, con el nuevo Código adoptado por la República de Panamá mediante Ley No. 18 de 22 de septiembre de 1982, el legislador no hace referencia a ello, sino que se limita a señalar que "la prescripción de la acción penal se interrumpe por el auto de enjuiciamiento"; dejando sin suficientes bases la determinación del alcance y sentido de la norma en estudio.

Por lo que ante esta situación, se aplican reglas y principios de orden procesal, puesto que como mencionamos en líneas anteriores, el artículo 95 del Código Penal, es de naturaleza procesal, debido a que la resolución que se alude en dicho precepto legal -auto de proceder-, es un acto jurídico que tiende a producir efectos jurídicos en el proceso.

En este orden de ideas, debemos manifestar, que el auto de llamamiento a juicio, es una resolución de los que la doctrina a denominado auto interlocutorio, que son aquellas decisiones que se emiten en el curso del proceso con la finalidad de resolver un asunto incidental o accesorio. (art. 974 del C.J.)

Ahora bien, el presente proceso surge a consecuencia de los hechos suscitados el día 23 de diciembre de 1991, y no es hasta el día 17 de diciembre de 1997 (fs. 8-15), que el Segundo Tribunal Superior revoca la resolución de primera instancia que había sobreseido a los señores DAVID SIMONS, ROGELIO DE GRACIA Y MIGUEL PEÑALBA, y en consecuencia abrió causa criminal contra los mismos, por la supuesta comisión de Delito Contra La Fe Pública.

Obsérvese, que habían transcurridos aproximadamente seis (6) años desde que se originó el hecho hasta que se emitió el auto de proceder, sin embargo, el tribunal de origen -Juzgado Segundo de Circuito de Colón, Ramo Penal- a través de resolución de 29 de diciembre de 1997, pone en conocimiento a las partes de lo resuelto por el Tribunal Superior, de lo cual si se observa al reverso de la foja 16, la última notificación se efectúa en junio de 1998 y es a partir de esta fecha cuando el auto de proceder queda ejecutoriado.

En este sentido debemos manifestar, que una resolución judicial para que pueda surtir efectos jurídicos requiere de su notificación, sin embargo se señalan las excepciones a esta regla general, como son las resoluciones de secuestro, suspensión de término y otras similares señaladas por la ley, que no requieren audiencia de la parte y que son notificadas después de cumplidas (artículo 1008 del Código Judicial). No obstante, de manera expresa en el numeral 1 del artículo 2304 del Código Judicial, se señala que el auto de enjuiciamiento debe ser notificado personalmente al imputado y a su defensor, por lo que este tipo de resolución queda claramente excluida de las excepciones que consagra el artículo 1008 del Código Judicial.

Al respecto debemos señalar, que en fallo de 30 de diciembre de 1997, ésta Sala de lo Penal expresó:

> "De lo expuesto hasta aquí se deduce que los requisitos para la eficacia de una resolución judicial son los siguientes:
>
> 1. Que se trate de una resolución existente;
>
> 2. Que trate de una resolución válida, es decir que no esté viciada de nulidad;

3. Que después de haber sido expedida se haya notificado a las partes;

4. Que la misma esté ejecutoriada, lo que ocurre cuando;

a. contra la misma no proceda recurso alguno, ya sea porque es irrecurrible o porque no se ejerció oportunamente un recurso que tuviese la virtud de suspender los efectos de la resolución incumplida; o

b. que en el evento de que proceda en su contra un recurso, éste se conceda en el efecto devolutivo."

(Omar Cadul Rodríguez - Rigoberto González Montenegro. Jurisprudencia Penal, pág. 320)

Igualmente, cabe advertir, que la Ley 1 de 3 de enero de 1995, que adicionó los artículo 2207-B y 2528-L al Código Judicial, expresa que el auto de proceder es irrecurrible y que por tanto se notifica instantáneamente, pero ello es así, por cuanto que esto ocurre en los negocios penales que conocen los juzgados municipales y de circuito, en su fase de audiencia preliminar en donde las partes están presentes, y la decisión adoptada por el juez tiene efecto de notificación.

Sobre este asunto de orden procesal, nuestra jurisprudencia ha dejado sentado que:

"... Se requiere que el auto de enjuiciamiento esté ejecutoriado para interrumpir la prescripción de la acción penal, porque es sabido que ninguna resolución judicial es eficaz es decir, puede surtir efectos jurídicos, si no está ejecutoriada, salvo que la ley disponga otra cosa.

... el artículo 95 antes mencionado no establece expresamente, como excepción a la regla general de derecho procesal comentada, que el auto de enjuiciamiento no debe estar ejecutoriado para interrumpir el plazo de la prescripción de la acción. Por lo anterior y porque las normas procesales se deben interpretar de acuerdo a los principios generales del derecho procesal, se concluye que no basta que se dicte el auto de enjuiciamiento para que se interrumpa la prescripción de la acción penal." (Fallo de 30 de diciembre de 1997, Reg. Judicial Dic. 1997, pág. 169)

En consecuencia, estima este tribunal de casación, que en el presente caso se da la prescripción de la acción penal, toda vez que transcurrieron más de seis (6) años, desde la fecha en que ocurrió el hecho, hasta la fecha en que el auto de proceder, dictado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, fue notificado a las partes.

Dado que el cargo de injuridicidad atacado contra la resolución recurrida en casación, ha sido demostrado, procede casar la sentencia y en consecuencia declarar prescrita la acción penal en el presente proceso y ordenar el archivo del expediente.

PARTE RESOLUTIVA

Por lo anteriormente expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA el auto de 17 de diciembre de 1997, proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, y en consecuencia, DECLARA PRESCRITA LA ACCIÓN PENAL EN EL PRESENTE PROCESO, y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CONFLICTO DE COMPETENCIA

SOLICITUD DE DECLARATORIA DE CONFLICTO DE COMPETENCIA, ENTRE EL JUZGADO TERCERO NOCTURNO DE PANAMÁ Y EL JUZGADO UNDÉCIMO DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA, FORMULADA POR JOSÉ E. DUTARY PUGA Y TEOFANES LOPEZ ROJAS. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado José E. Dutary Puga, en representación de Teófanes López Rojas ha presentado escrito solicitando a esta Sala Penal resolver el conflicto de competencia existente entre el Juzgado Tercero Nocturno de Policía del distrito de Panamá y el Juzgado Undécimo del Circuito, ramo Penal del Primer Distrito Judicial de Panamá.

FUNDAMENTO DEL PETICIONARIO

El licenciado Dutary Puga manifiesta que el 22 de junio de 1999 en horas de la noche en compañía de Teófanes López se encontraban en la "Gruta Azul" y que luego de una discusión con la administración del local fueron agredidos salvajemente, robados y dañados en sus propiedades por el administrador Landy Guillen y sus testaferros.

Respecto a ello, el Juzgado Tercero Nocturno expidió la resolución N° 662-99 del 11 de agosto de 1999 mediante la cual se inhibió de conocer el presente negocio remitiéndolo a la Fiscalía de turno, quien sin hacer investigaciones, expidió el 31 de agosto la Vista N° 212 solicitándole al Tribunal la inhibición de la causa.

Indica que posteriormente el Juzgado Undécimo Penal sin mayor razonamiento intelectual, mediante resolución de 12 de octubre de ese mismo año se inhibe de conocer el fondo de la controversia penal y declina lo actuado al Juzgado Nocturno.

Concluye el recurrente que ante la inhibición del Juzgado Nocturno y del Juzgado Penal y la no investigación de la Fiscalía, el presente negocio penal ha quedado en un limbo jurídico dejando en total indefensión jurídica a la parte agraviada.

Estima que ante la duda surgida tanto la Fiscalía como el Juzgado Undécimo debieron darle cumplimiento a los artículos 702,703,704,705 y s.s. del Código Judicial que resuelve el conflicto de competencia.

Por tales razones solicita a la Sala Penal con base al numeral 3° del artículo 95 del Código Judicial determine el tribunal competente, que a su juicio son los tribunales penales (fs.1-2).

OPINIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

Mediante Vista N° 54 el licenciado José Antonio Sossa R., da respuesta al traslado ordenado mediante proveído de 17 de julio de este año.

La máxima representación del Ministerio Público, luego de reseñar los

hechos que motivan la solicitud, así como la posición del Juzgado Tercero Nocturno de Policía del Distrito de Panamá en la resolución N° 662-99 de 11 de agosto de 1999 por la cual se inhibe del conocimiento y remite la actuación a la Fiscalía de Turno del Primer Circuito Judicial; y la posición del Juzgado Undécimo de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, el cual decide también inhibirse del conocimiento y declinarlo al Juzgado tercero Nocturno de Policía del Distrito de Panamá, manifiesta lo siguiente:

> "... de las constancias procesales se logra inferir que concluida la instrucción del sumario, no se logró acreditar la existencia de los delitos contra el patrimonio, cuya cuantía supere los mil balboas o que por la sanción penal correspondiente, sea de competencia de los juzgados ordinarios penales, determinándose, únicamente, la posible comisión del delito de lesiones personales y que producto de la reyerta se extraviaron varios objetos.
>
> Por otra parte, las sumas reclamadas por los denunciantes en concepto de los gastos médicos incurridos en razón de las lesiones sufridas, no deben ser confundidas con los hechos denunciados como delitos contra el patrimonio, sino que se constituirán, de así comprobarse y requerirse, como los daños y perjuicios productos del ilícito, pudiendo ser reclamados como una indemnización civil derivada del delito.
>
> En atención a lo expuesto, se observa que a JOSÉ DUTARY PUGA, producto de las lesiones sufridas, se le otorgó una incapacidad definitiva de 18 días, y a TEÓFANES LÓPEZ de 10 días, por lo que al tenor de lo dispuesto en el artículo 175 del Código Judicial, modificado por la Ley 53 de 12 de diciembre de 1995, son de competencia de las autoridades de policía "los procesos por delitos dolosos o culposos contra la vida y la integridad personal, con resultado de lesiones, cuando la incapacidad no exceda de 30 días", coincidiendo con el pronunciamiento emitido por la Juez Undécima de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá".

De conformidad con lo expuesto, el señor Procurador General de la Nación recomienda a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que fije la competencia en el Juzgado Tercero Nocturno del Distrito de Panamá, indicando que ello no es óbice para que si en el transcurso de las investigaciones se incorporen nuevas pruebas que determinen la comisión de un delito que sea competencia de los juzgados ordinarios penales, el proceso sea remitido a la esfera correspondiente (fs.17-23).

ANÁLISIS DE LA SALA

De conformidad con el contenido de las resoluciones 11 de agosto de 1999 (f.3) y 12 de octubre de 1999 (fs.8-9), emitidas por el Juzgado Tercero Nocturno de Policía y el Juzgado Undécimo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, respectivamente, por medio de las cuales ambas autoridades se inhiben de conocer la investigación sobre las acusaciones penales que presentaran los señores José Manuel Dutary Puga y Teófanes López Rojas contra Landy Edgardo Guillén Estrada y Alfonso Mosley Martínez por agresión física y de éstos contra aquellos por el delito de daños, se advierte lo siguiente:

El Juzgado Tercero Nocturno de Policía estimó que dado que los señores Dutary Puga y López Rojas plantearon lo acontecido en el local denominado "Gruta Azul" como un robo, ello le impide conocer el caso en ese Tribunal Administrativo por lo que remitió la actuación a la Fiscalía de Turno del Primer Circuito Judicial del Primer Distrito Judicial (f.3).

Por su parte, el Juzgado Undécimo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá como fundamento a su decisión de inhibirse y declinar la encuesta penal al Juzgado Tercero Nocturno de Policía del Distrito de Panamá,

indicó:

> "que se colige que inicialmente ambas partes se hacen cargos ante la esfera administrativa relacionado con una riña tumultuaria ocurrida en la Gruta Azul, Corregimiento de Río Abajo, donde Teófanes López y José Dutary resultaron lesionados, otorgándoles incapacidades inferiores a treinta (30) días, sin embargo posteriormente los afectados hacen alusión a un robo de un collar y dinero en efectivo, ocurridosimultáneamente en la trifulca, lo cual fue expuesto con claridad al inicio de presentar los cargos, señalando además que se vieron afectados por los delitos de Daños y Estafa.
>
> Tenemos pues que los afectados inician una investigación por Lesiones Personales, posteriormente mencionan la ocurrencia de los delitos de Robo, Daños y estafa, considerando la suscrita que no utilizaron los medios adecuados para hacer valer sus derechos, por cuanto que lo que se advierte con claridad es un delito Contra la Vida y la Integridad Personal (Riña Tumultuaria) el cual por la incapacidad asignada, corresponde su competencia a las autoridades administrativas" (f.9).

Ahora bien, en la resolución del Juzgado Undécimo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá se consignó que el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público otorgó incapacidad definitiva a Teófanes López Rojas y a José Emanuel Dutary por 10 y 18 días, respectivamente, a partir del incidente.

Lo anterior demuestra, de manera provisoria, que los mencionados señores recibieron lesiones de tipo dolosas en su anatomía cuya incapacidad no excedió de los 30 días, situación que le atribuye la competencia a las autoridades de policía, de conformidad con el artículo 175 del Código Judicial.

Por tanto, siendo que las pruebas presentadas hasta el momento sólo logran acreditar un delito contra la integridad personal cuya incapacidad es inferior a los 30 días, corresponde la competencia del presente caso al Juzgado Tercero Nocturno de Policía del Distrito de Panamá.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DETERMINA que la competencia en el presente negocio penal corresponde al JUZGADO TERCERO NOCTURNO DE POLICÍA DEL DISTRITO DE PANAMÁ.

Notifíquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN PROFERIDA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL QUE RECHAZA POR IMPROCEDENTE EL INCIDENTE DE NULIDAD PRESENTADO POR EL DEFENSOR DE OFICIO DE DULIO ULISES CEBALLOS CÓRDOBA, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE HUMBERTO GARIBALDI. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Danilo Montenegro, en su condición de defensor de oficio de Dulio Ulises Ceballos Góndola, ha presentado recurso de apelación contra el auto de 14 de abril de 2000, dictado por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial. La meritada resolución rechaza la solicitud de nulidad de los vicios incurridos a partir de la foja 318 del expediente, y la extemporaneidad del recurso de apelación presentado por la funcionaria de instrucción contra la sentencia de 14 de mayo de 1999, mediante la cual la Sala Penal de la Corte Suprema, en segunda instancia, reformó la dictada en primera instancia en el sentido de imponer a Ceballos la pena de 18 años y 7 meses de prisión, como responsable del delito de homicidio.

Señala el recurrente que el Magistrado Sustanciador del Segundo Tribunal Superior emitió la resolución que fijaba el negocio en lista por el término de tres días, para que la funcionaria de instrucción sustentara el recurso de apelación anunciado contra la sentencia condenatoria proferida contra su mandante. No obstante, señala el recurrente, esa resolución no fue notificada a la defensa técnica además de que el recurso de apelación de la funcionaria de instrucción es extemporánea, ya que el libelo de apelación fue presentado antes de que comenzara a correr el termino de los tres días.

Con ese razonamiento, solicita que se declare la nulidad de lo actuado a partir de la foja 318 y se ordenen la reposición del proceso o en su lugar, se declare desierto el recurso de apelación del Ministerio Público por ser extemporáneo (cf.58-63).

Los incidentes son trámites que se proponen durante el proceso. La ley procesal conceptúa que el incidente es aquella controversia o cuestión accidental que la ley dispone que se debatan en el curso de los procesos (art.686. C.J)

Aún cuando el recurrente advierte de un supuesto vicio ocurrido al momento en que la causa se encontraba activa, no podemos soslayar el hecho de que el incidente de controversia fue presentado cuando la sentencia condenatoria había quedado ejecutoriada, tras surtirse la alzada ante la Sala Penal de la Corte Suprema, e incluso, cuando la causa ya se encontraba archivada (cf. 26, 31).En otras palabras, mediante un incidente de controversia el recurrente pide que se vulnere la inmutabilidad de una decisión, de una causa que ha sido resuelta mediante sentencia de fondo firme y definitiva.

Con los antecedentes anotados, la Corte debe confirmar la improcedencia de la iniciativa de la defensa técnica de Dulio Ulises Ceballos Góndola, ya que el incidente de controversia pierde eficacia una vez cerrada la causa.

Por lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley CONFIRMA la resolución de 14 de abril del 2000, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que rechaza, por improcedente, el incidente de nulidad presentado por la defensa oficiosa de Dulio Ulises Ceballos Góndola, reo del delito de homicidio cometido en perjuicio de Humberto Garibaldi Bethancourt.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS

(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES

(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

QUERELLA

QUERELLA PRESENTADO POR EL LICENCIADO DIÓGENES AROSEMENA GRIMALDO, CONTRA EL

DOCTOR GUSTAVO GARCÍA DE PAREDES, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, POR LA COMISIÓN DE DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD E INFRACCIÓN DE LOS DEBERES DE SERVIDORES PÚBLICOS. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, VEINTIDOS (22) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PENAL.

VISTOS:

Ha ingresado a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia el cuaderno penal que contiene la querella interpuesta por el licenciado Diógenes Arosemena Grimaldo contra el doctor Gustavo García De Paredes, Rector de la Universidad de Panamá, por la supuesta comisión de delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidor público.

El querellante fundamenta la imputación en el hecho de que el doctor Gustavo García De Paredes "dictó la Resolución No.99-15-D, fechada el 20 de julio de 1999, por medio de la cual, prescindiendo de la Ley Orgánica de la Universidad que debía aplicar, me aplica la Ley No.61 de 20 de agosto de 1998, apodada LEY FAUNDES y me separa, sumariamente, de la cátedra de DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO II que desempeño en la FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS de la UNIVERSIDAD" (f.2).

En la vista remisoria de la encuesta, el Procurador General de la Nación solicita poner término al proceso con un sobreseimiento definitivo de carácter impersonal, por considerar que la documentación presentada por el querellante "no alcanza a descubrirnos, en ese acto de aplicación de una ley, los rasgos típicos de una conducta dolosa. No puede admitirse, contrario al criterio del querellante, que un funcionario se convierte en un delincuente al aplicar como parte del ejercicio de sus funciones, las normas y leyes que necesariamente debe cumplir" (fs.31-32).

En este momento procesal, procede la Corte a realizar algunas consideraciones sobre el mérito de la iniciativa propuesta.

En primer lugar se advierte que, según los términos del artículo 2468 del Código Judicial, la presente causa guarda relación con los procesos especiales contra servidores públicos, por lo que debe cumplirse con la exigencia establecida en el artículo 2471 de la misma excerta legal, referente a la presentación de la prueba sumaria del relato, es decir, de "cualquier medio probatorio que acredite el hecho punible".

Un análisis de la encuesta penal permite conocer que con el libelo de la querella se aducen varios elementos probatorios. No obstante, a juicio de esta Superioridad, lo aportado no satisface el mencionado requerimiento de la prueba sumaria. En primer término, la documentación visible de fojas 14 a 15 y de 18 a 19, no se encuentra debidamente autenticada y, en segundo lugar, los documentos que poseen valor probatorio (fojas 16 a 17 y 20 a 23) ni siquiera se refieren a la situación laboral del querellante; mucho menos permiten precisar si en efecto, el funcionario acusado ejecutó alguna conducta delictiva.

De la mano con la anterior comprobación corre otra, cual es la de que el comportamiento del Rector de la Universidad de Panamá se circunscribió en aplicar una ley de la República. Lejos de catalogarse como un acto doloso con carácter ilícito, constituye en realidad el fiel acatamiento y cumplimiento del contenido de un artículo consagrado en una ley que, dicho sea de paso, el Pleno de esta Corporación de Justicia, mediante sentencia de 16 de julio de 1999, consideró que no viola ningún precepto de la Constitución Nacional (Cfr. Registro Judicial, julio de 1999, págs.196-200).

Finalmente, esta Sala debe resaltar que el nombramiento de los profesores universitarios se realiza, generalmente, por un período indeterminado, lo que indica que puede finalizar en cualquier momento, si se dan los presupuestos

establecidos en la ley.

Por lo antes expuesto, la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, SOBRESEE DEFINITIVAMENTE, DE MANERA IMPERSONAL, en esta causa, con base en lo que establece el numeral 2 del artículo 2210 del Código Judicial, y ORDENA el archivo de las sumarias.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

QUEJA PRESENTADA POR ELIAS SAMUEL SOLIS DOMINGUEZ EN CONTRA DEL LIC. DULIO ARROCHA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante Oficio No. 513 de 28 de junio de 2000, el licenciado MANUEL BATISTA S., Magistrado Presidente del Cuarto Distrito Judicial, remite a la Sala Penal de esta Corporación de Justicia, copia de la Nota No. 686 de 26 de junio de 2000 suscrita por el Juez Segundo de Circuito de Herrera, licenciado HERNANDO VELASCO C., y copia autenticada de la declaración del señor ELÍAS SAMUEL SOLÍS DOMÍNGUEZ, la cual contiene afirmaciones contra el licenciado DULIO ARROCHA, por su supuesta conducta irregular.

Al llegar esta documentación, la Secretaría de la Sala Penal, le otorga el trámite de Proceso de Queja; por lo que cabe advertir, que de conformidad a lo establecido en los artículos 88 numeral 2 y 288 del Código Judicial, le corresponde al Pleno de esta Corporación de Justicia, conocer de las faltas disciplinarias cometidas por sus subalternos, es decir, Magistrados de Tribunales Superiores.

Los artículos mencionados señalan lo siguiente:

"Artículo 88. También corresponde al Pleno:
...

2. Elegir los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito judicial y a sus respectivos suplentes;"

"Artículo 288. La jurisdicción disciplinaria sobre Jueces y Magistrados será ejercida por el respectivo superior jerárquico."

Es por lo anterior, que procede inhibirse del presente cuadernillo, y en consecuencia declinar la competencia al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, para que proceda en derecho.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO PENAL, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se INHIBE del conocimiento del cuadernillo que contiene la Queja interpuesta contra el Magistrado DULIO ARROCHA, y DECLINA la competencia al Pleno de esta Corporación de Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR JOSÉ DEL CARMEN RAMOS SMITH, SANCIONADO POR DELITO DE HOMICIDIO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el recurso de revisión solicitado por el señor JOSÉ DEL CARMEN RAMOS SMITH, actualmente recluido en el Centro Penitenciario La Joya, luego de haber sido condenado por delito de homicidio.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2050 del Código Judicial, esta Sala corrió traslado del presente negocio al Licenciado Gabriel Fernández, defensor de oficio distrital, a fin de que formalizara adecuadamente el recurso, de existir causal para ello.

El Licenciado Arosemena, en su escrito visible a fs. 9 del expediente, expresa que "...luego de conversar en el Centro Penitenciario La Joya, y explicarle detalladamente en que consiste el Recurso de Revisión, además de efectuar un estudio minucioso al caso in comento, llegamos a la conclusión, que no se cuentan con los requisitos exigidos en el artículo 2458 del Código Judicial, a efecto de sustentar dicho recurso".

Ante esa manifestación negativa, opina esta Superioridad que no es posible ordenar la revisión del proceso señalado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DESESTIMA la solicitud de revisión formulada por JOSÉ DEL CARMEN RAMOS SMITH y por consiguiente, ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES R.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR CELESTINO PÉREZ DE GRACIA, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, NUEVE (9) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Conoce la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de solicitud que hizo llegar Celestino Pérez De Gracia para que se revise el proceso iniciado en su

contra por la comisión del delito de homicidio en perjuicio de Gerardo Pérez Santos, que lo condenó a once años y ocho meses de prisión.

Como quiera que esta iniciativa procesal requiere ser formalizada mediante abogado, el 27 de junio de 2000 el magistrado sustanciador designó a la licenciada Gloria Conte de Quiroz, en su condición de defensora de oficio, a fin de que asumiera la representación del condenado "y lo asista en cuanto a la correcta formalización del recurso interpuesto, si se registra causal legal que lo fundamente" (f.4).

Para cumplir con esa tarea, la defensora de oficio remitió escrito en el cual señala que "del estudio realizado al expediente ..., somos del criterio que no se dan los presupuestos que señala el artículo 2458 del Código Judicial, para que se pueda formalizar el Recurso de revisión solicitado..."(f.8).

Así las cosas, esta Corporación de Justicia considera que lo que corresponde es desestimar la solicitud del recurso extraordinario de revisión, toda vez que el mismo está supeditado al cumplimiento de los requisitos que para tales efectos establecen los artículos 2458 y 2459 del Código Judicial.

Por las consideraciones anteriores, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DESESTIMA la solicitud de revisión que, en su propio nombre, formuló Celestino Pérez De Gracia y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SEGUNDO ANTONIO MENDOZA SOLICITA SE REVISE LA SENTENCIA CONDENATORIA CALENDADA 9 DE DICIEMBRE DE 1998, PROFERIDA POR EL JUZGADO DE CIRCUITO PENAL DE BOCAS DEL TORO. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El reo Segundo Antonio Mendoza hizo llegar a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia manuscrito en el cual solicita la revisión de la sentencia de 9 de diciembre de 1998, la cual fue proferida por el Juzgado de Circuito de la provincia de Bocas del Toro, que lo condenó a la pena 8 años de prisión, como responsable del delito de tráfico de drogas.

Para determinar la viabilidad de la petición del reo, se designó al licenciado Henry Bryan, defensor de oficio de circuito de la provincia de Bocas del Toro, con el fin de que lo representara y lo asistiera ante esta Superioridad, en el supuesto de que se acreditara causal que fundamente la formalización del recurso de revisión (f.5).

Para dar cumplimiento al mandato de la Corte, el defensor de oficio remitió libelo en el cual manifiesta que en el expediente no se encuentra justificada alguna de las causales de revisión que prevé el artículo 2458 del Código Judicial, por lo que estima que no existe causa legal para promover el recurso de revisión que solicita el reo (fs. 8-9).

Tras comprobarse que la formalización del recurso de revisión carece de sustento legal, la Sala concluye de que debe desestimarse la iniciativa formulada

por el reo Mendoza.

Por lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DESESTIMA la solicitud de revisión formulada por Segundo Antonio Mendoza contra la sentencia de 9 de diciembre de 1998, la cual fue proferida por el Juzgado de Circuito de la provincia de Bocas del Toro, que condenó a Mendoza a la pena 8 años de prisión, como responsable del delito de tráfico de drogas.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) JOSE M. FAUNDES
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PEDRO ANGEL ORTEGA SOLICITA RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO QUINTO DE CIRCUITO PENAL. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Conoce la Sala Penal de la Corte Suprema del recurso de revisión formulado por la licenciada Beatriz Herrera Peña en su condición de defensora de oficio de Pedro Angel Ortega, condenado a la pena de 24 meses por el Juzgado Quinto del Primer Circuito Judicial de Panamá.

La Corte observa que el libelo de revisión carece de los requisitos de procedibilidad que exige el artículo 2459 del Código Judicial. En tal sentido, la licenciada Herrera Peña no indica la sentencia cuya revisión se demanda, ni el delito que causó dicha sentencia. Además, el requisito concerniente a la prueba de los hechos fundamentales resulta deficiente, porque la recurrente no establece que en la causa que se siguió a Ortega, se dictó una sentencia condenatoria ejecutoriada. Además, no aporta prueba que permita apreciar la actuación que el tribunal de la causa para localizar a Ortega durante el plenario.

La Corte llama la atención a la defensora de oficio sobre las notorias fallas que presenta el libelo de revisión, porque diligencias de ese naturaleza menoscaban una defensa completa y eficaz.

Por las anteriores consideraciones, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO ADMITE el recurso de revisión formulado por la licenciada Beatriz Herrera Peña, defensora de oficio de Pedro Angel Ortega.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR JORGE LUIS GARCIA SANCIONADO POR DELITO DE ROBO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El señor JORGE LUIS GARCÍA, mediante manuscrito remitido vía fax, desde Bocas del Toro, y recibido el 30 de mayo de 2000 en la Sala Penal de esta Corporación de Justicia, solicitó revisión de la sentencia condenatoria, proferida por el Juzgado de Circuito de Bocas del Toro, que lo condenó a la pena de 48 meses de prisión por el Delito de Robo.

Cumplidos los trámites de reparto, se dispuso mediante proveído de doce (12) de junio de 2000, correr traslado del negocio al licenciado HENRY BRIAN, Defensor de Oficio del Circuito de Bocas del Toro, para que asistiera al recurrente en la correcta formalización del recurso interpuesto, si hubiera causa legal que lo fundamente. (f. 4)

Al respecto, el Defensor de Oficio, mediante informe calendado 25 de julio de los corrientes expresó lo siguiente:

> "...el expediente, del Señor; JORGE LUIS GARCIA, el cual me fue enviado, en virtud de la solicitud de revisión solicitada, se encuentra, en trámite de casación, presentada por su apoderado Judicial, el LICENCIADO, ARTURO AQUILINO ORDOÑEZ." (f. 6)

Para corroborar lo transcrito, el Juzgado de Circuito de Bocas del Toro nos informa vía teléfono, que mediante Oficio No. 531-P de 31 de mayo de 2000, remite al Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, el expediente contentivo de las sumarias seguidas a JORGE LUIS GARCÍA, en virtud de un recurso de casación anunciado a su favor.

Observa esta Sala de lo Penal, que nos encontramos frente a una sentencia que no está ejecutoriada, debido a que la misma está siendo de conocimiento de un recurso extraordinario de casación.

Nuestro Código Judicial en su artículo 2458, señala entre uno de sus requisitos de admisión, que la sentencia contra la cual se recurre esté ejecutoriada, es decir, que no admita ningún otro recurso, ya sea porque no proceda o porque no haya sido interpuesto dentro del término legal.

En vista de lo anterior, procede desestimar la solicitud de revisión formulada por el señor JORGE LUIS GARCÍA, toda vez que no cumplió con uno de los requisitos indispensables establecidos en el artículo 2458 del Código Judicial.

PARTE RESOLUTIVA

Por los motivos anteriormente expuestos, la SALA SEGUNDA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DESESTIMA la solicitud de revisión presentada por el señor JORGE LUIS GARCÍA.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR CARLOS SUÁREZ GONZÁLEZ, SINDICADO POR DELITO DE ROBO AGRAVADO COMETIDO EN PERJUICIO DE GUILLERMO WONG MARTINELLI. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el recurso de revisión interpuesto por la firma forense MURGAS Y MURGAS, a través del licenciado José Del Carmen Murgas A., en representación de CARLOS ALFONSO SUÁREZ GONZÁLEZ, contra la sentencia de 18 de agosto de 1998, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que revocó la sentencia de 18 de marzo de 1998, proferida por el Juzgado Noveno de Circuito Penal y condenó a CARLOS ALFONSO SUÁREZ GONZÁLEZ, a la pena principal de sesenta (60) meses de prisión, así como a la accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual período, por el delito de robo agravado cometido en perjuicio de GUILLERMO WONG MARTINELLI.

Mediante resolución de 4 de abril del año en curso (fs. 40-41), esta Superioridad admitió el recurso de revisión propuesto en este caso, abrió el negocio a pruebas por el término de treinta (30) días; y mediante resolución de 6 de julio pasado (fs. 24-25), se admitieron las pruebas documentales presentadas por el licenciado Javier Antonio Quintero R. a quien, según escrito visible a fs. 42 del expediente, le fue substituido el poder conferido al Licenciado Murgas.

Al momento de la presentación de los alegatos, el recurrente reiteró las alegaciones de su escrito inicial (fs. 83-85) donde fundamenta su solicitud en el hecho de que la sentencia del Segundo Tribunal Superior, que revocó el fallo absolutorio dictado por el Juzgado Noveno de Circuito Penal, "se apoyó erradamente en que la vinculación de SUÁREZ GONZÁLEZ se acreditó con la denuncia de GUILLERMO WONG MARTINELLI y sus ampliaciones donde hace señalamientos directos; y se consideró también que constituía grave indicio en su contra el hecho que él no pudo probar que el día del robo, estuviera en su casa". También hace alusión el recurrente, a las consideraciones expresadas por esta Sala en el auto de 4 de agosto de 1999, a propósito de la vinculación de SUÁREZ GONZÁLEZ con el homicidio del empresario FRANK STUART ; e invoca como causal la contenida en el numeral 5to. del artículo 2458 del Código Judicial, que es del siguiente tenor:

> **"ARTICULO 2458. Habrá lugar a la revisión contra las sentencias ejecutoriadas, cualesquiera que sean los tribunales que las hubieren dictado, en los casos siguientes:**
> **...**
> **5. Cuando después de la condenación se descubran nuevos hechos que, por sí mismo o combinados con las pruebas anteriores, puedan dar lugar a la absolución del acusado o a una condena menos rigurosa, por la aplicación de una disposición menos severa;**
> **... .".**

Por su parte, el Procurador General de la Nación, mediante vista No. 47 de 7 de julio de 2000 (fs. 71-81), solicita que se ordene la revisión de la sentencia, en virtud de que:

> **"Diáfanamente, se infiere de lo anterior que el revisionista cuestiona la valoración efectuada por el Tribunal Superior, argumento que no se adecua a ninguna de las causales previstas en la Ley, y que no es susceptible de ser alegada a través del recurso de revisión, como quiera que no constituye un hecho nuevo, pretendiéndose un reexamen del compendio penal que ya fuere objeto de valoración por el juzgador, lo que significaría convertir a la Sala de lo Penal en una tercera instancia.**
> **...**
> **Sin embargo, descartar la posibilidad de revisar los posibles yerros cometidos por el Tribunal Superior al resolver la alzada sería apresurado, si consideramos que de haberse incurrido en los advertidos errores in iudicando, se estarían cometiendo vejaciones**

que violentan garantías procesales constitucionales.

En anteriores ocasiones, esta Procuraduría ha manifestado su favorabilidad para que en situaciones específicas y excepcionales, pueda interpretarse la causal de nuevos hechos de forma amplia, en observancia del principio de *favor libertatis*, que desarrolla el respeto máximo a la libertad individual, que nos indica que todos los instrumentos procesales deben ir dirigidos a lograr la restitución rápida de la libertad de la persona del sindicado o procesado, privado de ella, si no se reúnen nos requisitos y elementos que legitiman el estado de privación de la libertad.

Siendo la finalidad del recurso de revisión la corrección de los errores judiciales de excepción, que no pueden subsanarse de otra manera, toda vez que se cometieron en un proceso que culminó con una sentencia definitiva con fuerza de cosa juzgada, nuestra recomendación va dirigida a cumplir con dicho objetivo". (El resaltado es de la Procuraduría).

Para resolver la procedencia del presente recurso, la Sala estima conveniente manifestar que con la petición de revisión que se ha presentado, se aprecia que la misma viene acompañada de copias debidamente autenticadas de las sentencias de primera y segunda instancia, además del auto de 4 de agosto de 1999, dictado por esta Superioridad cuya finalidad es comprobar el nuevo hecho que pudiera dar lugar a la absolución de CARLOS ALFONSO SUÁREZ GONZÁLEZ.

En ese orden de ideas, advierte esta Sala y tal como lo señala el señor Procurador en su Vista, que el revisionista cuestiona en su escrito, principalmente, la valoración probatoria efectuada por el Segundo Tribunal Superior al resolver recurso de apelación interpuesto por la representante del Ministerio Público, contra la sentencia dictada por el Juzgado Noveno de Circuito Penal, que absolvía a SUÁREZ GONZÁLEZ de los cargos endilgados en su contra por delito de robo agravado cometido en perjuicio de GUILLERMO WONG MARTINELLI. Dicho argumento, ciertamente, no constituye un "hecho nuevo", tal y como lo plantea el revisionista, susceptible de ser alegado en este tipo de recurso.

En ese sentido, nuestra jurisprudencia se ha pronunciado en innumerables ocasiones indicando que este recurso extraordinario, que pretende debilitar o anular el principio de cosa juzgada, y seguridad jurídica que emana de las decisiones jurisdiccionales, no es una tercera instancia, "... de allí que sólo proceda la revisión cuando se plantea y presenta un hecho auténticamente novedoso, no analizado ni considerado por los Tribunales en las instancias correspondientes". (Fallo de 30 de abril de 1997).

Sin embargo, no se puede pasar por alto, en este caso, las graves observaciones que esta Sala, en auto de 4 de agosto de 1999, realizó a propósito de la vinculación de CARLOS SUÁREZ GONZÁLEZ con el homicidio del señor STUART HILTON, las cuales transcribimos a continuación para mayor ilustración:

"... En contraste con la motivada resolución del Juzgado Noveno, el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, en fallo de 18 de agosto de 1998 (ver fojas 1855-1859), carente de toda motivación probatoria y jurídica, modificó la sentencia de primera instancia en el sentido de condena (sic) también a SUÁREZ GONZÁLEZ por el robo del vehículo del señor GUILLERMO WONG, sin siquiera detenerse a considerar la (sic) evidentes contradicciones en que incurre ROSA ISABEL DE WONG e ignorar que el propio propietario del vehículo robado, GUILLERMO WONG, no logró reconocer a CARLOS SUÁREZ GONZÁLEZ en rueda de detenidos como sí lo hizo con el otro imputado REYNALDO JORGE QUIÑONEZ VALOY.

De otro modo preocupa el hecho de que la señora SOLÍS DE WONG haya realizado, por su propia insistencia, reconocimientos informales de

> SUÁREZ GONZÁLEZ, sin la presencia de autoridad competente y sin autorización para ello: primero, en unas fotografías que tenía personal del DIIP y que nunca debieron mostrársele sin la presencia de una autoridad u orden de un fiscal y sin dejar constancias al respecto; y la segunda vez en las oficinas del Departamento de Operaciones del DIIP, cuando, si bien estaba presente el Capitán FRANCO, no existía orden del Fiscal para llevar a cabo un reconocimiento tras el vidrio de la puerta de una oficina donde llevaron al sospechoso SUÁREZ GONZÁLEZ que, con toda probabilidad, no se dio por enterado de lo que estaba haciendo y quien además se encontraba detenido por la posible comisión de otro hecho delictivo, proceso que culminó con la dictación de un sobreseimiento provisional a su favor (robo del Toyota Tercel de EDGAR DE LEÓN). (El resaltado es nuestro).

De las consideraciones transcritas, se desprende la posibilidad, sin lugar a dudas, que en la tramitación del proceso seguido a SUÁREZ GONZÁLEZ se hayan conculcado garantías procesales de rango constitucional, como el principio de presunción de inocencia de todo imputado, y el derecho al debido proceso penal -en este caso- mismas que, de negarse la revisión del proceso, serían la base sobre la cual se condene, posiblemente, a una persona inocente.

En cuanto al contenido del debido proceso penal, el destacado catedrático Carlos Muñoz Pope, en su obra Proceso Debido y Justicia Penal, expresa lo siguiente:

> "Para que la decisión emanada de la autoridad judicial tenga legitimidad, es preciso que la misma sea el resultado de un proceso seguido con respeto a las reglas de procedimiento previamente impuestas por el Legislador, de modo que la decisión final (sentencia de fondo) producida en el proceso se haya logrado luego de permitir que el sujeto se haya opuesto a la misma y que se le haya vencido en el juicio correspondiente.
>
> Sólo en la medida en que el sujeto haya sido juzgado según las reglas establecidas en el ordenamiento procesal penal podrá el Estado tener la autoridad legitimada para imponer, incluso coactivamente, la pena que resulte del proceso respectivo.
>
> De lo expuesto anteriormente se deduce, por tanto, que el Estado no tiene derecho de imponer ninguna sanción si la misma no se produce luego de un proceso que le haya asegurado o permitido al sujeto ejercer todos los derechos y garantías establecidas en su contra, así como para ejercer válidamente su derecho de defensa en los términos que estime conveniente". (MUÑOZ POPE, CARLOS ENRIQUE. Proceso Debido y Justicia Penal, Ediciones Panamá Viejo, Panamá 1999. Págs: 28-29).

Ahora bien, cierto es que la vía adecuada para subsanar estos errores lo es el recurso de casación, el cual fue presentado por el defensor de SUÁREZ GONZÁLEZ ante esta Sala, pero que no fuera admitido por defectos de forma. Ante esa situación, tomando en cuenta los principios de justicia y el descubrimiento de la verdad material que constituyen la plataforma sobre la cual se desenvuelve el derecho procesal penal, y dadas las condiciones excepcionales que se presentan en este caso, la Sala estima que se debe ordenar la revisión del proceso en cuestión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE PROCEDE LA REVISION de la sentencia ejecutoriada de 18 de agosto de 1998, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, por delito de robo agravado, DISPONE que la revisión de la causa la haga el Juzgado de Circuito de lo Penal que le sigue en turno, según lo establecido en el artículo 2461 del Código Judicial, y ORDENA

inmediata libertad de CARLOS ALFONSO SUÁREZ GONZÁLEZ conforme con lo preceptuado por el artículo 2462 del Código Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES R.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A FRANCISCO ELÍAS ATENCIO FLORES, SANCIONADO POR UN DELITO CONTRA EL PUDOR Y LA LIBERTAD SEXUAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Dentro del período señalado para aducir y practicar pruebas, el Licdo. RAÚL ALFREDO SEJAS QUINTERO, apoderado judicial de FRANCISCO ELÍAS ATENCIO FLORES, presentó en la Secretaría de la Sala Penal escrito en el que manifiesta formalmente que se ratifica de las pruebas presentadas con el libelo de revisión, a saber:

1. Fotocopia certificada del expediente N° 138/96, que se tramitó en el Juzgado Segundo de Niñez y Adolescencia.
2. El expediente que se encuentra en el Juzgado Décimo Cuarto de Circuito Penal, por el cual se condenó al señor FRANCISCO ATENCIO FLORES.
3. Oficio N° 780/96 del 6 de agosto de 1996, por el cual el Juzgado de la Niñez y Adolescencia, remite a la Fiscalía Octava de Circuito, copias autenticadas de 43 fojas útiles que constan en el expediente que tuvo el Juzgado Decimocuarto para declarar culpable a FRANCISCO ATENCIO FLORES.
4. Documentación que nunca se remitió:
a) Declaración de CARMEN ANTONIA HIDALGO GORDÓN del 18 de diciembre de 1996 (Fs.61-63)
b) Declaración de JUDITH ELENA GORDÓN, del 18 de diciembre de 1996 (Fs.64)
c) Declaración de CARMEN ANTONIA HIDALGO GORDÓN del 20 de enero de 1997(Fs.75-76)
d) Declaración de JUDITH ELENA GORDÓN del 20 de enero de 1997(Fs.65-66)
5. Copia debidamente certificada de la Sentencia N°80 del Juzgado Decimocuarto de Circuito, de fecha 18 de octubre de 1999. (Fs.6-10)

Examinadas las pruebas que se aducen como sustento al recurso de revisión interpuesto por el Licdo. SEJAS QUINTERO, en representación del señor ATENCIO FLORES, no encuentra esta sustanciadora motivo alguno para no admitirlas.

Por lo anteriormente expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Penal, representada en Sala Unitaria por la Suscrita Magistrada Sustanciadora, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE las pruebas presentadas por la defensa técnica de FRANCISCO ELÍAS ATENCIO FLORES.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA

Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO A FAVOR DE ROSENDO ANTONI MORALES PLANES. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS

El sancionado ROSENDO ANTONIO MORALES PLANES envió a esta Colegiatura manuscrito solicitando la revisión de la sentencia que le fuere impuesta por la comisión del delito de homicidio en perjuicio de EDWARD AROSEMENA y de BERENICE LISET RUÍZ.

Atendiendo a dicha solicitud, se le designó un Defensor de Oficio, para que le asistiera en cuanto a la correcta formalización del recurso.

Realizada la gestión encomendada, el Licenciado LUIS CARLOS AROSEMENA analizó el expediente del sancionado y concluyó que "... no se desprende ninguna causal de las que contiene el artículo 2458 del Código Judicial, como para que pueda mi persona, en esta oportunidad, formalizar el recurso de marras". (f.12).

La Corte concuerda con lo manifestado por el Defensor de Oficio, toda vez que este es un medio extraordinario que tiene cabida al verificarse alguna de las causales que establece la ley, por ello, en atención a que la petición no se ajusta a los presupuestos legales, procede desestimar la misma y ordenar su archivo.

Por lo antes expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DESESTIMA el memorial de revisión presentado por ROSENDO ANTONIO MORALES PLANES sancionado por delito de homicidio en perjuicio de EDWARD AROSEMENA y de BERENICE LISET RUÍZ y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES R.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA APELADA

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA A FAVOR DE DANIEL DÍAZ DE LEÓN, SINDICADO POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA EN DETRIMENTO DE RANFIS JAÉN CHALMER. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, 1 (UNO) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Conoce la Sala Penal de la Corte Suprema de recurso de apelación propuesto contra la sentencia No.19 de 9 de marzo de 2000, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, que condenó a Daniel Díaz De León a la pena de cinco años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período que la pena principal, como responsable del delito de homicidio simple en grado de tentativa en perjuicio de

Ramfis Abdiel Jaén Chalmers.

La defensa técnica de Díaz se muestra disconforme con la sentencia apelada, ya que el tribunal de la causa al momento de dosificar la pena debió partir de la pena mínima de 20 meses, tal como lo establece el artículo 60 del Código Penal, y en atención a los parámetros que para tal efecto señala el artículo 56 del mismo texto. Aunado a ello, el apelante censura que no se tomó en cuenta que su patrocinado no era reincidente (fs.243-244).

Una vez conocidos los argumentos del recurrente, la Sala pasa a decidir la pretensión interpuesta, sólo sobre los aspectos objetados en el libelo de apelación, de conformidad con el artículo 2428 del Código Judicial. Cabe señalar que la culpabilidad de Díaz fue decretada por jurados de conciencia, según consta a foja 216 del expediente, por lo que esa decisión no está sujeta a reparo alguno.

El Segundo Tribunal Superior al momento dictar el fallo, tomó en consideración los artículos 44 y 60 del Código Penal. Al revisar lo establecido en el artículo 56 de la misma exerta legal, decidió fijar la pena base en cinco años de prisión, toda vez que en atención al modo y lugar en que se dio el hecho, se desprende "que el escenario de la agresión fue un sitio de acceso público y, que la ocurrencia del hecho representó peligro no solamente para el afectado sino también para otras personas, al punto de que existe evidencia en el expediente de que un tercero...resultó afectado..."(fs.232-233). Agregó el tribunal que no le eran aplicables al imputado circunstancias agravantes o atenuantes y tampoco las disposiciones sobre reincidencia, quedándose la pena a imponer en cinco años de prisión (fs.231-234).

Observa la Corte, que no le asiste la razón al recurrente en cuanto a la pretensión que formula. Ello es así, por cuanto que para cada delito la ley penal establece un mínimo y un máximo para fijar la pena base a imponer, dentro del cual el juez debe tomar en consideración las circunstancias en las que se haya dado el hecho punible. En consecuencia, "la ley no impone al juzgador reglas fijas para dosificar el quantum de la pena base, al contrario, lo enviste de discrecionalidad dentro de los presupuestos contemplados en el artículo 56 del Código Penal" (Sentencia de 13 de septiembre de 1999).

En el caso que nos ocupa, se advierte que para el delito de homicidio simple en grado de tentativa el mínimo de la pena a imponer es de 20 meses y el máximo de 96 meses. La sanción impuesta a Díaz, cinco años, corresponde a 60 meses, por lo que el tribunal fijó la pena líquida dentro de los parámetros que para tales efectos establece la ley.

Como quiera que la sanción impuesta a Díaz es proporcional a los límites señalados por la ley y que se tomó en consideración que el condenado no era reincidente (fs.233), lo procedente es confirmar la decisión apelada.

En virtud, de lo anteriormente expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia No.19 de 9 de marzo de 2000, emitida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que condenó a Daniel Díaz De León a cinco años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funiones públicas por igual período que la pena principal, como autor del delito de homicidio simple en grado de tentativa en perjuicio de Ramfis Abdiel Jaén Chalmer.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS

(fdo.) ROBERTO GONZALEZ R. (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES

(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO APELADO EN PROCESO QUE SE LE SIGUE A ELIADES EVELIO CEDEÑO VERA POR DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE JUSTA VALDES DE MARTÍNEZ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, PRIMERO (1) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante sentencia de 4 de febrero de 2000, condenó al imputado Eliades Evelio Cedeño Vera a las penas de 15 años de prisión y 2 años de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas una vez cumplida la pena principal.

La resolución fue apelada por el imputado y por su Defensor de Oficio, presentado éste último la sustentación dentro del término legal.

El Ministerio Público emitió su opinión al correrle traslado del recurso incoado.

Se concedió el recurso en el efecto suspensivo y corresponde a esta Colegiatura pronunciarse sobre el mismo de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 2428 del Código Judicial.

ARGUMENTO DEL RECURRENTE

El licenciado Luis Carlos Arosemena Ramos, Defensor de oficio del sindicado, en su escrito de apelación apunta que su patrocinado desde el día de autos aceptó su responsabilidad; que el Tribunal A-quo fijó la pena sin reconocer ninguna circunstancia atenuante a su favor como la delincuencia primaria, su entrega voluntaria a las autoridades, su condición física y mental, las peculiares condiciones del ambiente, su confesión y el arrepentimiento (fs. 214-217).

ARGUMENTO DEL MINISTERIO PUBLICO

La Fiscalía Tercera Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, al oponerse al recurso impetrado expresa: "Al analizar los elementos de prueba que aparecen en el expediente se concluye que no concurre ninguna causal de justificación en el actuar del sindicado al lesionar mortalmente a la señora JUSTA VALDES DE MARTINEZ, tal como lo conceptuó el Tribunal de primera instancia al emitir la sentencia de rigor." (f.220).

ANALISIS DE LA SALA

Las piezas procesales permiten conocer que en horas de la mañana del día 16 de julio de 1998, en la población Unión de Azuero del distrito de Chepo, se cometió un homicidio en perjuicio de la ciudadana Justa Valdés de Martínez, la cual resultó: "...POR CAUSA TRAUMÁTICA DEBIDO A MULTIPLES HERIDAS POR ARMA BLANCA ENE L CUELLO, QUE LE PRODUJERON HEMORRAGIA EXTERNA E INTERNA MASIVA, CON EL CONSIGUIENTE SHOCK HEMORRAGICO." (f. 80)

Florentino Martínez Vega en declaración jurada manifestó que el imputado estaba molesto porque la señora Justa Valdés de Martínez había vuelto a la casa con sus hijos y con él. Que el día de autos antes de irse a su trabajo le dijo a la señora que le pusiera el candado a la puerta y ésta no se lo puso (fs. 14-17).

Al rendir declaración indagatoria Eliades Evelio Cedeño Vera aceptó la comisión del hecho punible (f. 37).

El menor Edgar Williams Díaz Rodríguez rinde declaración jurada afirmando que el día de autos al dirigirse a la escuela junto con su hermana encontraron:

"...primero una franela sangrada, más adelanta taba (sic) l cubierta del cuchillo, más alante (sic) taba (sic) un pañuelo también con sangre y cerca de la toalla taba el cuchillo ,..." (f. 91). Igualmente, reconoce el instrumento empleado por el imputado para cometer el ilícito (f.92).

Domingo Espino Pérez aporta su testimonio indicando: "Yo le pregunté que cuál era el problema y me dijo que había golpia (sic) a la mujer, que no sabía si la había matao (sic), yo le dije que bajara a entregarse que qué iba hacer (sic) huyendo, él bajó ese mismo día de una vé (sic) (f. 97).

Consta a fojas 105 y 117 el historial penal y policivo del imputado el cual evidencia que no registra antecedentes.

El Certificado del Registro Civil en el cual se acredita la defunción de la ofendida consta a foja 130 en el cual se estableció que la causa de la misma fue a consecuencia de shock hemorrágico por arma blanca.

Informe de Evaluación sicológica efectuado al imputado Cedeño Vera refleja en las conclusiones lo siguiente:

> "1. EL EVALUADO ACEPTA LA COMISION DEL HECHO COMETIDO.
> 2. EL EVALUADO MANIFIESTA SU ARREPENTIMIENTO DE SU ACCION, NIEGA QUE TUVIERA INTENCION DE CAUSARLE DAÑO A JUSTA VALDES YA QUE LA QUERIA MUCHO.
> 3. EL EVALUADO NO EVIDENCIA TRASTORNO ALGUNO DE SU PERSONALIDAD." (f. 143).

Examen siquiátrico forense establece que el señor Cedeño Vera no se enmarca en las prerrogativas de los artículos 24 y 25 del Código Penal y se puede considerar un sujeto imputable (f. 170).

En cuanto al reclamo que se formula respecto a que no se partió de la pena mínima, el juzgador tiene de acuerdo a nuestro ordenamiento sustantivo, artículo 56 del Código Penal, facultad de fijar la pena dentro de los límites señalados para cada delito. El hecho que un imputado sea delincuente primario no es óbice para que el tribunal fije la pena superior a la mínima.

Por otra parte, la aceptación de haber cometido el hecho y haberse entregado a las autoridades voluntariamente no puede constituir circunstancia atenuante de responsabilidad penal a favor de Cedeño Vera, pues el arrepentimiento emerge si él hubiera intentado disminuir siquiera las consecuencias del ataque inferido a su víctima auxiliándola y no dejándola herida como la dejó.

Respecto a su condición física y mental al momento del hecho tenemos que no constituye circunstancia alguna no preestablecida por la ley, que a juicio de la Corte deba apreciarse por su analogía con las circunstancias atenuantes. Esto por acreditarse que el imputado es plenamente imputable y no tenía justificación alguna para actuar produciendo el resultado muerte.

La peculiares condiciones del ambiente tampoco constituyen circunstancia alguna que considerar, toda vez que las consecuencias de su actuar ilícito eran previsibles por la forma como ejecutó el mismo y en nada influyeron en él, es más, aprovechando las mismas (soledad de la víctima en su domicilio y confianza de ésta en él) comete la agresión que le priva de la vida.

Si bien es cierto, la Corte está clara que el imputado no forma parte de pandilla alguna ni participó del ilícito de robo, no deja de ser cierto que la víctima era madre, tenía hijos que cuidar y había vuelto a la residencia conyugal a cumplir con su rol. Aquí lo relevante no es si su actuar fue menos grave que otros casos que vemos a diario, sino la importancia del bien jurídico vida, el cual es el bien más preciado del hombre.

Comprobado que los reclamos formulados por el recurrente no prosperan, ello nos lleva concluir que la sentencia impugnada debe ser confirmada.

Por las consideraciones que anteceden, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el fallo de 4 de febrero de 2000, expedido por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que condena Eliades Evelio Cedeño Vera a la pena de 15 años de prisión, como responsable del delito de homicidio en perjuicio de Justa Valdés de Martínez.

Devuélvase y Notifíquese,

(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES R.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ROBERTO GONZÁLEZ R.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A DARINEL MORENO HIDALGO Y OTROS, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL. MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO GONZALÉZ. PANAMÁ, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Procedente del Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, se recibe en la Secretaría de la Sala Penal, escrito de apelación contra la sentencia de 10 de diciembre de 1999, por la cual se condena a DARINEL MORENO HIDALGO (A) "Large" a la pena de 11 años y nueve meses de prisión. Accesoriamente se inhabilitó al procesado para el ejercicio de funciones públicas por un lapso de cuatro (4) y a la medida de seguridad de abstenerse de la ingesta de alcohol por igual período, ambas a cumplir luego de finiquitar la pena de principal.

La pena impuesta tiene su fundamento en la responsabilidad penal que le cabe al procesado por el delito de homicidio doloso agravado en perjuicio de OMAR ALCIDES ABREGO RUÍZ.

Al darse el trámite procesal de la notificación, el imputado anunció que apelaba la resolución citada, por tanto, el Licdo. GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ, Abogado Defensor de Oficio de MORENO HIDALGO, presentó escrito de sustentación de la apelación en tiempo oportuno, concediéndose el recurso y se le dio el efecto suspensivo con el fin de ser resuelta la alzada.

Al corrérsele en traslado el escrito de apelación al representante del Ministerio Público, Licdo. ROLANDO A. RODRÍGUEZ CHONG, Fiscal Tercero Superior del Primer Distrito Judicial, éste presentó escrito de objeciones al recurso impetrado.

DISCONFORMIDAD DEL APELANTE

El Licdo. FERNÁNDEZ señala que el Tribunal A-quo al momento de establecer la sanción aplicable a su patrocinado fijó la pena base en 14 años (168 meses) de prisión y determinó que a favor de éste concurren las atenuantes contenidas en los numerales 5 y 8 del artículo 66 del Código Penal, reconociéndole la rebaja de la sanción en una 1/6 parte por cada una de las atenuantes. (F.518)

No obstante, se cometió un error aritmético al momento de sumar las rebajas de la pena, pues se aplicó una disminución de 36 meses, es decir 18 meses por cada atenuante, quedando la pena líquida en 11 años de prisión, cuando lo que procedía era atenuar la sanción en 52 meses (26 meses por cada atenuante), siendo la pena líquida aplicable de 9 años, 3 meses y cuatro días. (F.518)

Aunado a lo anterior, el apelante solicita a la Sala que le reconozca a su patrocinado la atenuante genérica del estado de embriaguez al momento de la comisión del hecho, pues la misma fue reconocida al coprocesado GAMAL ABDIEL MARÍN ROBINSON, quien estaba en igual circunstancia de ebriedad que MORENO HIDALGO.

Finalmente, solicita el Licdo. FERNÁNDEZ que se tase debidamente la pena, de manera que se subsane los errores aritméticos en que incurrió el Tribunal de primera instancia. (F.519)

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Fiscal Tercero Superior manifestó que el Segundo Tribunal Superior de Justicia, resolviendo solicitud de aclaración de sentencia impetrada por el defensor de oficio del justiciable GAMAL MARÍN, determinó como válida la corrección del error pura y manifiestamente aritmético de la sentencia recurrida.

Por otra parte, señala el Fiscal que está en desacuerdo con el planteamiento del apelante quien solicitó que se reconozca a favor del señor MORENO HIDALGO, la atenuante genérica del estado de embriaguez, con fundamento en el numeral 5° del artículo 56 del Código Penal, pues esta norma establece los factores que el Juez debe tomar en cuenta al momento de fijar la pena, los que no se pueden considerar como una atenuante genérica de las contenidas en el artículo 66 del Código Penal, por lo que solicita que se confirme al sentencia apelada. (Fs.535-536)

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Primeramente, la conducta típica en la cual fue subsumida el actuar ilícito del señor DARINEL MORENO HIDALGO lo es el artículo 132, numeral 6 del Código Penal, es decir el homicidio doloso ejecutado inmediatamente después de haberse cometido otro delito, para asegurar su ocultación, su ventaja o la impunidad para sí o para un tercero o porque no se pudo alcanzar el fin propuesto.

En cuanto a la sanción, el Tribunal de primera instancia señaló que estimaba adecuado partir de la pena media de 14 años (168 meses) de prisión y de las atenuantes aducidas por la defensa técnica reconoció la confesión espontánea y oportuna del agente, así como las peculiares condiciones del ambiente, contenidas en los numerales 5 y 8 del artículo 66 del Código Penal, respectivamente. La disminución de la pena fue establecida en una sexta parte por cada una de las atenuantes.

Ahora bien, tanto la defensa técnica como el Ministerio Público coinciden en que el Tribunal A-quo incurrió en un error aritmético, lo que corrobora la Sala al observar que la sexta parte de 168 es 28 y no 18 como estableció el Tribunal Superior, de allí que la disminución de la sanción debe ser de 52 meses, por lo que la pena líquida a imponer es 9 años y 8 meses de prisión.

En lo referente a la atenuante invocada por el recurrente, se debe indicar que en la jurisprudencia se ha señalado que la embriaguez voluntaria, total, sin predisposición en la ingesta de alcohol, puede considerarse como una eximente incompleta, pero ello debe ser probado por el medio idóneo que es la prueba de alcoholemia. (Cfr. Fallo de 12 de febrero de 1999)

Sin embargo, en el expediente no se incluye prueba de alcoholemia practicada al procesado, medio idóneo que nos permitiría valorar esa circunstancia y ante la ausencia de esa evidencia que compruebe que el señor DARINEL MORENO HIDALGO estaba totalmente ebrio al momento de la comisión del hecho punible, no podemos pronunciarnos al respecto en el caso en concreto.

PARTE RESOLUTIVA

Por lo que antecede, la Corte Suprema, Sala de lo Penal, administrando

justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, REFORMA la sentencia 10 de diciembre de 1999, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, solamente en el sentido de condenar a DARINEL MORENO HIDALGO (A) "Large" a la pena de nueve (9) años y ocho (8) meses de prisión por el delito de homicidio doloso agravado en perjuicio de OMAR ALCIDES ABREGO RUÍZ y CONFIRMA en lo demás.

Notifíquese.

(fdo.) ROBERTO GONZÁLEZ R.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A LUCY MARLENY BATISTA SOLANO, SINDICADA POR DELITO DE HOMICIDIO. MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO GONZÁLEZ R. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, mediante sentencia de 20 de marzo de 2000, condenó a LUCY MARLENY BATISTA SOLANO a la pena de 10 años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período, como autora Delito de Homicidio Doloso simple en perjuicio de BETZABÉ PAULINA HUERTAS SOLÍS.

La resolución fue apelada por el Licdo. CARLOS EUGENIO CARRILLO GOMILA, abogado defensor de LUCY MARLENY BATISTA SOLANO, y el Licdo. JULIO LU OSORIO, abogado querellante particular.

Una vez sustentadas las apelaciones, se corrió traslado a la Fiscal Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial, Licda. NEDELKA DÍAZ DE CASTILLO, quien presentó escrito de contestación.

Así, los recursos fueron concedidos en el efecto suspensivo, por lo que corresponde a esta Sala, constituida en Tribunal de alzada, entrar a resolver las pretensiones de los recurrentes.

DISCONFORMIDAD DE LA DEFENSA TÉCNICA

Primeramente, el defensor de la procesada manifiesta que el Tribunal Superior apreció contrario a derecho las circunstancias de hecho y de derecho existentes en autos y, producto de este yerro, se ha omitido la adecuación del intervalo penal a las previsiones jurídicas.

Seguidamente, el apelante desarrolla cada uno de los factores de individualización judicial de la pena -contenidos en el artículo 56 del Código Penal- esgrimiendo aspectos que a su criterio no consideró el A-quo. (Fs.1954-1959)

Igualmente, sostiene que el Tribunal de primera instancia no reconoció la existencia de circunstancias modificadoras de la responsabilidad penal, a pesar de que existen pruebas en autos, señalando que concurren las atenuantes comunes contenidas en los numerales 2, 3, 4, 5, 7 y 8, artículo 66 del Código Penal. (Fs. 1959-1965).

Finalmente, el abogado defensor cuestiona la fijación de la pena, indicando que si bien el juzgador de primera instancia dispuso que el hecho punible se enmarca en el homicidio simple, las circunstancias personales y objetivas que

rodearon el acto demuestran una existencia de circunstancias establecidas por la Ley que conllevan la disminución de la pena impuesta por lo que solicita que, previa revocatoria de la sentencia apelada, se cuantifique la pena a imponer, de acuerdo a los parámetros legales y las circunstancias atenuantes establecidas en la ley. (Fs.1966-1967)

EL QUERELLANTE

El Licdo. JULIO LU OSORIO señala que su inconformidad con el fallo recurrido estriba en que la procesada ha sido sancionada por delito de homicidio simple, previsto en el artículo 131 del Código Penal, cuando las pruebas acopiadas en el cuaderno penal indican de manera objetiva que la conducta punible desplegada por la acusada se subsume en el numeral 2 del artículo 132 de la excerta legal antes citada, que dosifica la pena de 12 a 20 años de prisión, cuando el delito de homicidio se ejecuta con premeditación, lo que se desprende de la declaración jurada de JEREMÍAS BATISTA, padre de la procesada, FITA HEREDIA QUINTERO, JORGE LUIS FLORES, SAMUEL CORRO y ELIZABETH MATILDE VILLALOBOS. (Fs.1968-1969)

Expresa el recurrente que en el caso subjúdice concurren dos factores que constituyen la agravación del delito: el primero, es el aspecto motivacional del autor.

En ese orden de ideas, expresa el apelante que BATISTA SOLANO es una persona agresiva, lo que se infiere del examen psiquiátrico forense practicado por la Dra. OLGA BOUCHE DE ROMERO, aunado a lo declarado por los testigos ALFREDO SANDOVAL HURTADO y EMIBEL BURGOS, quienes indican que fueron víctimas de la conducta violenta de la procesada, ya que ésta los amenazó de muerte si se acercaban a BETZABÉ PAULINA HUERTAS SOLÍS.

De igual manera, el recurrente manifiesta que existen constancias procesales que evidencian que antes del lamentable hecho de sangre, HUERTAS SOLÍS fue víctima de una agresión física por parte de BATISTA SOLANO, producto de los celos desaforados que indiscutiblemente es lo que genera el deceso de la joven HUERTAS SOLÍS. (F.1969-1970)

En cuanto al segundo elemento que conlleva a la agravación del delito, refiere el apelante que se trata de la forma o modalidad delictiva, que en el caso en examen no solo se configura a través de la premeditación sino que también concurre la ventaja y alevosía, pues la procesada sabía que BETZABÉ PAULINA HUERTAS no usaba ningún tipo de armas, y por tanto mal podría adoptar una postura defensiva ante cualquier ataque. (F.1970)

Por último, el abogado se refiere a la figura del homicidio agravado por premeditación en la doctrina y señala por qué motivos considera que la actuación de BATISTA SOLANO se subsume en esa conducta, por lo que solicita a esta Sala que reforme la sentencia impugnada en el sentido de sancionar a la procesada como infractora del numeral 2 del artículo 132 del Código Penal, es decir el Delito de Homicidio Agravado en perjuicio de BETZABÉ PAULINA HUERTAS SOLÍS. (Fs.1970-1971)

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Fiscal Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial señaló que al ser legamente notificada de la sentencia de 20 de marzo de 2000 en la cual se condena a LUCY MARLENY BATISTA SOLANO a la pena de 10 años de prisión, no apeló de la misma, puesto que es del criterio que dicha sanción fue aplicada de conformidad con los parámetros establecidos por nuestra legislación, para la dosificación e individualización de las penas privativas de libertad y no emitió concepto alguno en relación a lo pedido por la defensa técnica y la parte ofendida. (Fs.1985-1986)

FUNDAMENTO DE LA SALA

Corresponde centrar nuestro análisis sólo en los puntos disentidos por los recurrentes, de conformidad con las reglas de procedimiento que regulan el recurso de apelación (art.2428 del Código Judicial).

El Tribunal de Primera Instancia subsumió la acción, típica, antijurídica y culpable perpetrada por LUCY MARLENY BATISTA SOLANO en calidad de autora, en el tipo penal contemplado en el artículo 131 del Código Punitivo que tipifica el homicidio doloso en su forma simple, y que castiga a sus transgresores con pena de prisión que oscila entre 5 a 12 años. En el fallo objeto de impugnación, se indicó lo siguiente:

> "la muerte de BETZABÉ PAULINA HUERTAS SOLÍS ocasionada por la acción dolosa de LUCY MARLENY BATISTA SOLANO se produjo dentro de circunstancias de celos en una relación de pareja que existía entre ambas, siendo producto de la ira, debiéndose enmarcar dentro de un crimen pasional, pues quedó demostrado en autos que dicha relación de pareja era un hecho público notorio, además consta en autos que BATISTA SOLANO ya había agredido a HUERTAS SOLÍS, propinándole unos azotes, de acuerdo a declaración rendida por ELIZABETH MATILDE VILLALOBOS." (Fs.1943-1944)

Ahora bien, el Licdo. JULIO LU OSORIO manifestó que disiente de la adecuación típica realizada por el Tribunal Superior, pues considera que en el caso en examen se está ante el delito de homicidio doloso agravado, por lo que pasamos a examinar el contenido de las constancias procesales a efectos de determinar si hay lugar a lo pedido por el querellante.

ELIZABETH MATILDE VILLALOBOS FLORES sostiene que LUCY MARLENY BATISTA SOLANO llegó a su casa y le dijo que quería hablar con "BECHY", que le dijera a ésta que fuera a la casa de su mamá (de LUCY)que quedaba en frente, pero refiere la testigo que BETZABÉ dijo que no iba para allá porque LUCY, al estar en su casa, le podía hacer algo.

La testigo continúa señalando que LUCY le pidió permiso para entrar a conversar con "BECHY" en la casa, a lo que accedió indicándole que no formara escándalo. Luego escuchó a LUCY decirle a BETZABÉ que no fuera mas a París porque se estaban burlando de ella, a lo que ésta le respondió que no le estaba faltando el respeto a nadie, y que no iba a dejar la amistad que tenía con ellos (SAMUELITO y ELY), porque entre ellas ya no había nada. (Fs.15-16)

Textualmente afirma la declarante "luego LUCY se metió la mano en el bolsillo y "BECHY" le dijo estoy cansada que me amenaces, me vas a matar, matame pues, y LUCY le contestó quieres ver, quieres ver, y sacó la pistola y le disparó a mi comadre "BECHY"." (F.16)

De igual manera, se refirió a un incidente ocurrido el domingo 11 de mayo de 1997 cuando LUCY dejó marcada a BETZABÉ al golpearla con un rejo, afirmando que el motivo fueron los celos. (fs.23)

De otro lado, SAMUEL ERNESTO CORRO BATISTA, esposo de la señora ELIZABETH VILLALOBOS, manifiesta que se encontraba en la cocina preparando la comida de los animales, mientras BETZABÉ, LUCY y ELIZABETH estaban conversando en la sala, cuando escuchó a LUCY decir "tu quieres que te mate, quieres ver, quieres ver y disparó de una vez"; que al ir a la Sala su comadre estaba herida y LUCY se estaba disparando (fs. 165-172).

Si bien las declaraciones que anteceden fueron las únicas pruebas que el A-quo tomó en consideración al momento de calificar la conducta ilícita desarrollada por BATISTA SOLANO, el Licdo. LU OSORIO se refiere a otras declaraciones juradas de las que infiere que hubo premeditación en el hecho punible; siendo éstas la de: JEREMÍAS BATISTA PÉREZ, padre de la señora LUCY MARLENY BATISTA SOLANO (Fs.44-51); FITA HEREDIA QUINTERO DÍAZ (Fs.156-160); EMIBEL ARGELYS BURGOS QUINTERO (fs.750-765); JORGE LUIS FLORES SANTANA (Fs.191-

203 y 903-910).

Al examinar el cuaderno penal, al igual que las objeciones que el Licdo. LU OSORIO formula a la sentencia de primera instancia, esta Superioridad concluye que la acción de la señora LUCY MARLENY BATISTA SOLANO se enmarca en lo que se conoce en la doctrina como el dolo de ímpetu, es decir, aquel que "se presenta cuando el hecho antijurídico es ejecutado por el agente como fruto de una acción irreflexiva e inmediata". (Alfonso Reyes Echandía, Diccionario de Derecho Penal, Obras Completas, Volumen III, Editorial Temis, Santa fé de Bogotá, 1998. p.328)

La procesada LUCY MARLENY BATISTA SOLANO y BETZABÉ PAULINA HUERTAS SOLÍS mantenían una relación de pareja, no obstante existen pruebas de que la hoy occisa deseaba poner fin a dicha relación en virtud de que era víctima de maltrato y de los celos de LUCY tal como refieren ELIZABETH MATILDE VILLALOBOS FLORES, EMIBEL ARGELYS BURGOS QUINTERO y JORGE LUIS FLORES SANTANA.

Lo anterior lleva a este Tribunal de Apelación a concluir que el hecho punible no fue premeditado sino que BATISTA SOLANO, en medio de una discusión y por motivo de los celos, utilizó el arma de fuego que portaba y le infirió un disparo a HUERTAS SOLÍS, produciendose el lamentable deceso.

Así, la Sala coincide con el criterio del Tribunal A-quo al calificar el hecho punible como homicidio doloso simple, por lo que no procede lo señalado por el Licdo. LU OSORIO.

En cuanto a la pretensión del Licdo. CARRILLO GOMILA, se tiene que éste no cuestiona el tipo penal en que se subsumió la acción delictiva desplegada por su defendida, pero sí disiente de la aplicación de los factores de la individualización judicial de la pena contenidos en el artículo 56 del Código Penal, que permite al juzgador imponer la pena entre el mínimo y el máximo contenido en el tipo penal infringido, pero sujeto a los criterios que la citada normativa penal contempla.

Ante el planteamiento de la defensa técnica, la Sala debe señalar que en jurisprudencia reiterada de la Corte se ha indicado que "corresponde al Tribunal del conocimiento tomar en cuenta las circunstancias del artículo 56 del Código Penal al fijar la pena base en abstracto, y que la misma debe ser respetada por el Tribunal de alzada en aras de la independencia judicial y la discrecionalidad que tienen los jueces de instancia al momento de la dosificación de la pena, sin perjuicio de que existan otras circunstancias modificativas de la responsabilidad penal que deben ser aplicadas al momento de la concretización de la pena." (Agosto 2 de 1996)

En ese orden de ideas, también se ha señalado que por la interpretación del artículo 56, la pena base impuesta no es modificable cuando no se observen visos de ilegalidad manifiesta. (Junio 18 de 1999)

Así las cosas, la Corte advierte que el Tribunal Superior al momento de fijar la pena base a la procesada LUCY MARLENY BATISTA SOLANO, que fue juzgada por jurado de conciencia, señaló en forma diáfana que la norma penal vulnerada lo era el artículo 131 del Código Penal, que regula el homicidio doloso simple, lo que es coherente con los hechos que constan en el cuaderno penal en examen y se tuvo en cuenta los aspectos de que trata el artículo 56 citado, aplicándose la pena base de 10 años de prisión, dentro del intervalo penal señalado para ese hecho punible. (Fs.1942 y 1945)

Por otra parte, el Licdo. CARRILLO GOMILA sostiene que a favor de la procesada BATISTA SOLANO concurren circunstancias atenuantes que el Tribunal Superior no tomó en cuenta pese a que se evidencian en el expediente, a saber:

La procesada no tuvo la intención de causar un mal de tanta gravedad como el que produjo, atenuante contenida en el numeral 2 el artículo 66 del Código Penal.

Explica el apelante que BATISTA SOLANO aceptó ser la persona que tuviera el arma cuando se ejecutara el disparo, elemento que tomó en cuenta el jurado de conciencia para emitir el veredicto de culpabilidad en su contra, y la procesada no estaba determinada a cometer el ilícito. (F.1960)

Ahora bien, la Sala no puede soslayar que la herida inferida a HUERTAS SOLÍS se produjo con un instrumento letal, como lo es un arma de fuego, y BATISTA SOLANO tenía conocimiento del manejo de dicha arma, razón por la cual sabía que podía causar un gran daño corporal o por lo menos aceptarlo como posible, lo que a juicio de esta Colegiatura es razón suficiente para descartar la circunstancia contemplada en el precitado numeral 2, dada la presencia del dolo en la conducta llevada a cabo por la procesada.

Respecto a la atenuante contenida en el numeral 3 del artículo 66 del Código Penal, referente a las condiciones físicas o psíquicas que colocaron al agente en situación de inferioridad, manifiesta la defensa técnica que las acciones de la víctima, de reto e indiferencia, ante la personalidad psicológica de su representada con relación a las circunstancias ocasionadas por la víctima la condujeron a una situación de inferioridad.

En la doctrina se ha indicado en cuanto a la condición de inferioridad psíquica del agente al momento de la comisión del hecho punible, que "se trata de verdaderos casos de trastorno mental transitorio derivados de condiciones orgánicas de la persona, atribuibles o no a su edad...piénsese en los procesos liminares de demencia senil, arteriosclerosis cerebral, menopausia o alteración del ciclo menstrual de la mujer, traumatismos craneanos, fiebres e infecciones, etc." (Fernando Velásquez, Velásquez, Derecho Penal Parte General, 2ª edición, Editorial Temis, Santa Fe de Bogotá, 1995. p.640)

Lo anterior nos hace remitirnos a la experticia psiquiátrica forense practicada por la Dra. OLGA BOUCHE del Instituto de Medicina Legal, quien dictaminó que LUCY MARLENY BATISTA SOLANO:

> "El día del hecho de sangre no había consumido sustancia alguna que alterara su mente y/o comportamiento y dice estaba normal. El relato del hecho, con secuencia lógica y detalles indican que en ese momento no presentó alteración en sus facultades mentales; aunque hubo ocasión que intentó insinuarlo. No padece enfermedad mental enajenante; tiene capacidad de discernir, de determinarse de comprender y responder por sus actos". (F.952) (Lo subrayado es nuestro)

Del examen psiquiátrico se concluye que la procesada estaba en pleno uso de sus facultades mentales, lo que descarta la aplicación de la atenuante.

En cuanto al arrepentimiento, regulado en el numeral 4 del citado artículo 66 del Código Penal, debemos expresar que nuestra legislación es clara al establecer que esta atenuante común se configura cuando se dan actos posteriores a la ejecución del delito con los cuales el agente haya disminuido o intentado disminuir sus consecuencias.

El Licdo. CARRILLO GOMILA expresa que BATISTA SOLANO no podía ni minimizar las consecuencias, ni tan siquiera explicarse el por qué de lo sucedido, pero al tener conciencia de los efectos de la acción, producto de una reacción propia, intenta matarse.

Cabe señalar que La jurisprudencia patria ha sentado el criterio que "en el caso de homicidio el arrepentimiento del agente se traduce en hacer menos gravosas las consecuencias de su acto, por ejemplo proporcionando a la víctima atención médica, quirúrgica o asistencial después de consumado el delito. Esos actos 'post delicti' deben ir encaminados a disminuir las consecuencias del delito o por lo menos intentar disminuirlas." (Fallos de 7 de junio de 1993 y 20 de junio de 1997)

Teniendo en cuenta el anterior criterio jurisprudencial, frente a las pruebas allegadas al sumario, se observa que la procesada después de herir a la víctima, intenta quitarse la vida, no le presta ningún auxilio, no hubo de su parte ninguna acción de la cual se desprenda siquiera la intención de disminuir las consecuencias del hecho, de allí que no se configura la atenuante.

Por otra parte, la defensa técnica considera que debió reconocerse una disminución de la pena base por la confesión, espontánea y oportuna del agente, regulada en el numeral 5 del artículo 66, ya que la procesada, aun estando hospitalizada, rindió declaración indagatoria en la que manifestó ser la persona que tenía en su mano el arma que hirió de muerte a BETZABÉ PAULINA HUERTAS SOLÍS.

Con respecto a dicha atenuante, la Sala ha manifestado en sentencias de 15 de mayo de 1998 y 9 de marzo de 1999, lo siguiente:

> "para que la confesión pueda ser considerada como atenuante en favor de algún condenado, precisa que sea espontánea y oportuna. Sobre lo que debe entenderse por espontaneidad y oportunidad esta Corporación se ha pronunciado en innumerables ocasiones en el sentido de que la confesión es espontánea cuando el sindicado comparece por sus propios medios ante la autoridad competente para poner en conocimiento que ha infringido la ley penal y es oportuna cuando no se ha dado antes otros elementos probatorios que lo vinculen con el delito realizado. Ambas circunstancias deben encontrarse paralelamente en el acto de la confesión."

De igual manera, se ha señalado que la confesión es espontánea y oportuna cuando "se ha hecho en el momento procesal adecuado, cuando la confesión es la única forma de conocer la verdad material del hecho, y por tanto deviene en una colaboración importante para el funcionario de instrucción". (Sentencias de 13 de septiembre de 1996 y 12 de febrero de 1999, 19 de mayo de 1999).

Al observar el contenido de la indagatoria, no se evidencian los elementos que señala la jurisprudencia patria, pues la procesada no manifestó ser la responsable del hecho, sino que señaló que la hoy occisa le agarró la pistola y se soltó el tiro. (F.252)

Por otra parte, cabe destacar que la declaración indagatoria fue rendida el 10 de junio de 1997, 13 días después de la comisión del ilícito, cuando ya se había iniciado la instrucción sumaria y recabado las declaraciones juradas de los testigos presenciales, existiendo elementos suficientes para ordenar la indagatoria de LUCY MARLENY BATISTA SOLANO.

En otro orden de cosas, el Licdo. CARRILLO GOMILA sostiene que concurre la atenuante contenida en el numeral 7 del artículo 66 del Código Penal, las eximentes incompletas, indicando que BATISTA SOLANO nunca le haría daño consciente a BETZABÉ PAULINA HUERTAS SOLÍS, sino que su acción ilícita se debió a la reacción psicológica frente a los actos de presión y reto declarado por la hoy occisa.

Añade que aun cuando la psiquiatra forense consideró que BATISTA SOLANO era imputable para enfrentar el proceso, ello no es óbice para valorar que al momento de ejecutarse los actos, adicional a otras consideraciones, su representada tenía la capacidad de entender disminuida, por circunstancias imputables a la víctima. (F.1963)

A este respecto, se debe señalar que el Código Penal preceptúa que actúa con imputabilidad disminuida "quien en el momento de la acción u omisión, posea incompletamente la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho en razón de grave perturbación" (Artículo 25).

Si bien el Código Penal hace referencia a esa condición psíquica del sujeto al momento de la comisión del hecho punible, que en el caso que nos ocupa es el

homicidio, corresponde al psiquiatra forense, a través de la evaluación del sindicado, dictaminar si se está ante un sujeto imputable o inimputable, o bien si se está ante un caso de imputalibidad disminuida, conceptos utilizados para traducir a la semántica jurídica el estado mental investigado al momento de la comisión del delito. Posteriormente, el dictamen psiquiátrico forense ha de ser considerado por el Juzgador al momento de dosificar la pena.

En el caso subjúdice, como se indicó "ut supra", la psiquiatra forense concluyó que LUCY MARLENY BATISTA SOLANO al momento de la comisión del hecho punible no presentó alteración en sus facultades mentales; aunque hubo ocasión que intentó insinuarlo (F.952)

Como quiera que la procesada tenía capacidad de comprender su ilicitud, ya que estaba en pleno goce de sus facultades mentales, se le consideró como un sujeto imputable, por lo que no procede el argumento esgrimido por el apelante.

Finalmente, el recurrente aduce la atenuante del numeral 8 del artículo 66 del Código Penal, referente a cualquier otra circunstancia no preestablecida por la ley, que a juicio del Tribunal deba ser apreciada por su analogía con las anteriores o por peculiares condiciones del ambiente.

Sobre el particular, manifiesta el apelante que la procesada es una joven dedicada a las actividades agrícolas y que durante muchos años se desempeñó como servidora pública; producto de su vocación de servicio fue electa como representante de corregimiento en París de Parita, Provincia de Herrera, también señala que se hizo un estudio por una trabajadora social en el que se ha plasmado el concepto social de la sindicada, su desempeño de trabajo y sus antecedentes personales y familiares. (F.1965)

Es menester indicar a la defensa técnica que si bien la jurisprudencia ha sostenido que la atenuante del numeral 8 esta delimitada a aspectos relacionados con el sujeto del agente, no menos cierto es que la norma preceptúa que el reconocimiento de la atenuante está reservado a la discreción del juzgador. Por ende, carece de sustento jurídico la exigencia en comento.

De lo que se deja dicho, se concluye que no existen méritos para proceder a una reforma de la sentencia apelada al cumplir ésta con los requerimientos necesarios para adecuarla al caso subjúdice.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA en todas sus partes la sentencia apelada.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA DENTRO DEL PROCESO QUE SE LE SIGUE A EVERARDO BROCE GARCÍA POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL COMETIDO EN PERJUICIO DE ORLANDO CAMPOS PÉREZ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ingresó, en grado de apelación, a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la sentencia de 9 de marzo del año en curso, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, en el proceso que por delito de homicidio se le sigue a EVERARDO BROCE GARCÍA, cometido en perjuicio de ORLANDO CAMPOS PÉREZ, conforme hecho ocurrido en horas de la madrugada del día 11 de mayo de 1997, en el sector de Las Margaritas, Corregimiento de Chepo.

A petición del imputado, la audiencia se celebró en derecho y en el acto correspondiente, al preguntársele si se declaraba culpable o inocente del cargo de homicidio en perjuicio de ORLANDO CAMPOS PÉREZ, contestó "que se consideraba culpable y arrepentido" (fs. 559), procediendo el Tribunal Superior con posterioridad a dictar sentencia condenatoria en su contra calificando el delito como homicidio simple y en ese entendimiento, tomando en consideración los parámetros del artículo 56 del Código Penal, fijó la pena base en ocho (8) años de prisión, y como accesoria la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término que la pena principal. (fs. 569-574).

Al notificarse de la sentencia pronunciada, el imputado BROCE GARCÍA, anunció recurso de apelación que fue sustentado en tiempo oportuno por el Licenciado Ernesto Muñoz Gamboa, Defensor de Oficio Distrital. En el escrito respectivo solicita a esta Sala reforme la sentencia recurrida, puesto que, a su juicio, la misma resulta "excesiva, ya que no se tomaron en cuenta algunos elementos que deben ser valorados al momento de dosificar la pena impuesta". (fs. 581-585).

El Licenciado Juan Antonio Tejada, Hijo, Fiscal Primero Superior del Primer Distrito Judicial, en su escrito de objeción a la apelación, visible a fs. 589-593 del expediente, luego de hacer un análisis de los puntos alegados por el Licenciado Muñoz Gamboa, solicita a esta Superioridad confirme el fallo venido en apelación por considerar que la pena impuesta "es la más ajustada a derecho, después de las consideraciones realizadas por el magistrado sustanciador en la sentencia condenatoria correspondiente".

Luego de exponer los argumentos presentados por el apelante, la Sala pasa a decidir la alzada, en los términos previstos en el artículo 2428 del Código Judicial, es decir, que tendrá conocimiento del proceso únicamente sobre los puntos de la resolución a los que se refiere el recurrente.

En ese orden de ideas, en cuanto a la circunstancia atenuante de la confesión alegada por el Licenciado Muñoz, estima la Sala que no es posible su reconocimiento, por cuanto que ello requiere la concurrencia de los requisitos de oportunidad y espontaneidad, elementos que no se aprecian en la presente situación, puesto que a pesar que el imputado reconoce la autoría del hecho en su primera declaración, para ese momento ya existían elementos probatorios en su contra indicativos que era el autor del ilícito, así se desprende del informe de comisión presentado por el Cabo Segundo de Servicio en la Sub DIIP de la Zona de Policía de Chepo, cuando señala "... se logra conocer los nombres de dos personas, que participaron directamente en el caso siendo estos los señores de nombre JORGE BROCE y EREVARDO (sic) BROCE...". (f. 31).

Por otro lado, y en lo referente a la espontaneidad, consta en autos que el sindicado no comparece a las autoridades sino que fue aprehendido por unidades del SUB-DIIP de la Zona de Policía de Panamá Este-Chepo, según consta a foja 31 del expediente.

En fallo de veintisiete (27) de junio de 1997 esta Sala sobre el particular indicó:

> "Reiteradamente se ha sostenido, que la confesión es espontánea, cuando el sindicado comparece por sus propios medios ante la autoridad competente para poner en conocimiento que ha infringido la ley penal y es oportuna cuando no se han dado antes otros elementos probatorios que lo vinculan con el delito realizado.

> Al analizar las circunstancias que rodean la supuesta confesión del imputado, advierte la Sala que no reúne los requisitos señalados, pues en primer lugar, el sindicado no se entregó voluntariamente a las autoridades, sino que fue capturado (ver foja 63) y en segundo lugar, cuando rindió declaración indagatoria aceptando haber participado en el ilícito, ya que existían en su contra indicios graves suficientes que lo vinculaban en el hecho y que resultaban de las declaraciones de varios testigos entre los cuales se encontraba ELISEO VALDÉS DUTARY quien también resultó herido en la fecha en que se produjo el hecho".

En cuanto a la existencia de la eximente incompleta de culpabilidad causada por la embriaguez a que se refiere el Defensor de Oficio, la Sala coincide con el criterio esbozado en la sentencia por el Tribunal A-Quo. En ese sentido, el Segundo Tribunal Superior expresó:

> "También se alega la existencia de una eximente incompleta dimanante obviamente por la ingesta de alcohol por parte del sujeto activo antes del hecho, mas no obstante, en el expediente el propio imputado señala no haber estado del todo ebrio, indica en sus propias palabras que se encontraba "más o menos mareado" (fs. 87). Por otro lado, la narrativa del imputado y la claridad secuencial con que explica el suceso, resulta indicativo de su estado de conciencia durante el evento, lo que descarta la presencia de la alegada eximente incompleta". (fs. 572).

Por último, señala el Licenciado Muñoz, en su escrito de apelación, que el Segundo Tribunal Superior, al dosificar la pena, debió partir de la pena mínima, puesto que su representado renunció a ser juzgado por un jurado de conciencia y es delincuente primario. A este respecto, precisa señalar que en reiteradas ocasiones esta Superioridad ha manifestado que la condición de delincuente primario no constituye una atenuante común de las contempladas en el artículo 66 del Código Penal, como también se ha señalado que dicha situación tampoco es determinante para que necesariamente se fije la pena partiendo del mínimo del tipo infringido, pues para ello precisa atender a los demás factores que rodearon la comisión del hecho punible.

Cabe agregar que nuestro Código Penal en su artículo 57 determina que "no se pueden aumentar ni disminuir las penas, sino de conformidad con una disposición expresa de la ley" y de otro modo el Capítulo I del Título IV del Libro III del Código Judicial, denominado Juicios con Intervención de Jurados en ninguna de sus normas establece como atenuante que dé lugar a reducción de la pena base la circunstancia de que el procesado se haya acogido a esa alternativa establecida en el precepto legal.

Siendo esta la realidad procesal, la Sala estima que no existen méritos para proceder a una reforma de la sentencia apelada, pues ésta cumple con los requerimientos necesarios para ser adecuada al caso sub-júdice.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de 9 de marzo del año en curso, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que condenó a EVERARDO BROCE GARCÍA a la pena de ocho (8) años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por delito de homicidio cometido en perjuicio de ORLANDO CAMPOS PÉREZ.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES R.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) GRACIELA J. DIXON

(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.

Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA APELADA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A FRANCISCO LOUBON LANDECHO, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL, EN PERJUICIO DE JORGE LUIS ACOSTA SÁNCHEZ. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, ONCE (11) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante sentencia de 30 de septiembre de 1999, declaró penalmente responsable a FRANCISCO LOUBON LANDECHO (A) "Ploky" o "Junito" y lo condenó a la pena de 12 años de prisión y 2 años de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, a partir del cumplimiento de la pena privativa de libertad, como autor del delito de Homicidio Agravado en perjuicio de JORGE LUIS ACOSTA SÁNCHEZ.

La resolución fue apelada por el procesado, sustentando el recurso de apelación el Licdo. ERNESTO MUÑOZ GAMBOA, Defensor de Oficio Distrital.

Por su parte, el Licdo. ROLANDO A. RODRÍGUEZ CHONG, Fiscal Tercero Superior del Primer Distrito Judicial, presentó escrito de oposición a la apelación.

Así, el recurso fue concedido en el efecto suspensivo y corresponde a esta Sala, constituida en Tribunal de alzada, entrar a resolver la pretensión del recurrente.

EL APELANTE

La defensa técnica del procesado LOUBON LANDECHO manifestó que su disconformidad con el fallo apelado radica en que el Tribunal A-quo al momento de dosificar la pena no tomó en consideración que dentro del cuaderno penal no existen suficientes elementos probatorios que vinculen a su patrocinado como autor del hecho punible, lo que se aprecia en las diferentes declaraciones que éste rindiera donde admite desde un principio haber estado en el lugar de la comisión del hecho; aunado a ello, el otro implicado que es menor de edad acepta su vinculación con el hecho punible. (F.437)

Agrega el apelante que al momento de dosificar la pena no se tomó en cuenta que LOUBON LANDECHO no tiene antecedentes penales y solicitó que el proceso se surtiera bajo los trámites de la Audiencia en Derecho, hecho que debe ser tomado en cuenta por los beneficios que conlleva para la administración de justicia. (F.437)

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Fiscal Tercero Superior indicó que está de acuerdo con la sentencia proferida por el Tribunal A-quo, por cuanto recoge la verdad procesal de autos y se adecua a la conducta desplegada por el procesado en la comisión del hecho punible, pues, la valoración de las pruebas aportadas al proceso, conforme a la sana crítica, sin lugar a dudas llevan al convencimiento, no sólo de que se cometió el homicidio de JORGE LUIS ACOSTA SÁNCHEZ, sino que vinculado a este hecho como co-autor se tiene al procesado FRANCISCO LOUBON LANDECHO, cuya conducta refleja claramente que existía acuerdo en obtener el resultado punible, portando arma de fuego, que disparó, y quedó corroborado con las pruebas periciales y la deposición del menor apodado "Maradona". (F.443)

Respecto de la delincuencia primaria, el Fiscal señala que no es cierto que el Tribunal de primera instancia no la consideró en el fallo impugnado, ya que a foja 433 se observa que el Magistrado Sustanciador, al momento de individualizar judicialmente la pena, tomó este factor como parámetro, entre otros, para fijar la pena base, ya que la delincuencia primaria no es un elemento

susceptible de ser apreciado como atenuante de responsabilidad criminal. (F.443)

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Consta en las sumarias que el 8 de junio de 1997, JORGE LUIS ACOSTA SÁNCHEZ fue herido por proyectil de arma de fuego en el muslo, hecho ocurrido en Calle 15, Corregimiento de Santa Ana, Distrito de Panamá. El agredido fue trasladado al Hospital Santo Tomás donde fue intervenido quirúrgicamente, pero murió a consecuencia de la masiva hemorragia producto de las secciones vasculares femorales (vasos femorales). (Fs.72-75)

El Tribunal A-quo sentenció como responsable del hecho punible al señor FRANCISCO LOUBON LANDECHO, calificando la conducta desplegada por el agente como autor del delito de homicidio agravado, establecido en el numeral 5 del artículo 132 del Código Penal, es decir, cuando se cause la muerte a una persona para preparar, facilitar o consumar otro hecho punible aún cuando éste último no se realice, cuya sanción es de 12 a 20 años de prisión, toda vez que el Tribunal estimó que se encuentra plenamente acreditado que el procesado ultimó a ACOSTA SÁNCHEZ para robarle, por lo que le impuso la pena de 12 años de prisión. (Fs.424-435)

Corresponde a la Sala examinar el contenido de la sentencia objeto de impugnación, observando solamente los puntos a que se ha referido el recurrente en el libelo de apelación, tal como lo preceptúa el artículo 2428 del Código Judicial.

Primeramente, el Licdo. MUÑOZ GAMBOA manifiesta que no existe en la encuesta penal elemento probatorio alguno que determine que LOUBON LANDECHO es el autor del homicidio en perjuicio de ACOSTA SÁNCHEZ.

A ese respecto, la Sala debe señalar que al analizar las constancias procesales, se tiene que LOUBON LANDECHO admitió que estuvo en compañía del joven JAVIER ENRIQUE NARANJO SALADO (A) "Maradona" en el lugar de los hechos, pero niega que haya efectuado el disparo que le causó la muerte a JORGE LUIS ACOSTA SÁNCHEZ (F.63)). Igualmente, manifestó que el arma de fuego era de su propiedad (F.87) y se la dio a NARANJO SALADO para que la guardara y además aclara que éste se la pidió (F.209).

Posteriormente, se realizó la diligencia de inspección ocular y reconstrucción de los hechos, en la cual los implicados dieron sus versiones de los hechos (Fs.288-290) y con base en ello se emitió un dictamen de la Sección de Balística Forense de la Policía Técnica Judicial, suscrito por el Inspector DAVID O. VILLARREAL, jefe de dicha sección, en el cual se expresa lo siguiente:

> "...la versión narrada y explicada por el joven NARANJO SALADO, se asemeja a las características y observaciones hechas por el médico forense en su protocolo de necropsia, ya que el médico hace mención...que el orificio de entrada del proyectil es en el muslo izquierdo, que no presenta ni tatuaje ni ahumamiento, que según el médico es un disparo hecho a distancia y que la dirección del disparo es de atrás hacia adelante. Estas características indican que la persona que dispara se encontraba a distancia mayor a los fenómenos de tatuaje y ahumamiento, y en un nivel inferior con respecto al orificio de entrada, lo que nos indica que la persona que dispara posiblemente se encontraba donde se coloca FRANCISCO LOUBON LANDECHO.
>
> CONCLUSIÓN: de las versiones expuestas y demostradas por NARANJO SALADO y LOUBON LANDECHO, la que más se aproxima a la ocurrencia del hecho en el momento de producirse el disparo, es la de NARANJO SALADO, ya que es coincidente con lo descrito por el médico forense en su protocolo de necropsia".". (F.381)

Lo anterior lleva a este Tribunal de Alzada a concluir- al igual que el Tribunal de primera instancia- que LOUBON LANDECHO fue quien efectuó el disparó que causó el lamentable deceso de ACOSTA SÁNCHEZ, siendo correcta la adecuación típica de la conducta desplegada por el procesado como autor del homicidio doloso agravado, por lo que no procede lo señalado por el Licdo. MUÑOZ GAMBOA.

En cuanto al argumento esgrimido por la defensa técnica en lo referente a la renuncia del procesado al derecho a ser juzgado por Jurado de Conciencia lo que estima "debe ser tomado en cuenta por los beneficios que conlleva para la administración de justicia", la Sala debe indicar que ello no constituye una circunstancia que conlleve la disminución de la pena impuesta, sino que es una apreciación que se hace analógicamente con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 1 del 3 de enero de 1995 que adiciona el Capítulo VIII, al Título IX del Libro II del Código Judicial integrado por varios artículos dentro de los cuales se encuentra el 2528-D que dispone que los casos que se sigan mediante el proceso abreviado si resulta pena de prisión, ésta puede ser disminuida entre 1/6 y una 1/3 parte.

A criterio de esta Corporación de Justicia, la solicitud del apelante resulta inaceptable, porque el artículo 57 del Código punitivo de manera clara determina que "No se pueden aumentar ni disminuir las penas, sino de conformidad con una disposición expresa de la ley". Además, la materia regulada por la citada ley va dirigida específicamente al Juicio Abreviado, que se sigue en la esfera circuital y municipal, que no es el caso presente.

En ese orden de ideas, la jurisprudencia de la Corte ha señalado lo siguiente:

> "En tal sentido, el Título IV del Libro III del Código Judicial que denominado Juicios con Intervención de Jurado, en ninguna de sus normas establece que si el imputado renuncia al derecho de ser juzgado por jurados (art. 2331), ello le beneficiará para rebajarle la pena de prisión en caso de resultar culpable de alguno de los delitos que son competencia de los jurados de conciencia (art. 2320). Al respecto no existe norma dentro de dicho título que permita disminuirle al procesado la pena si se acoge al juicio en derecho. Lo que sería un contrasentido que el ejercicio de un derecho pueda ocasionarle perjuicio a su titular." (Ver Fallos de 12 de junio de 1998 y 9 de noviembre de 1999)

Por otra parte, el recurrente plantea que el Tribunal de primera instancia no tomó en cuenta que su patrocinado no cuenta con antecedentes penales, es decir que se trata de un delincuente primario y, partiendo de esa premisa, solicita que se disminuya la pena impuesta a su patrocinado.

Se debe señalar que a foja 433, tal como refiere el Fiscal, está plasmada la individualización judicial de la pena en la que el Magistrado Sustanciador señaló que el procesado "no tiene antecedentes penales ni policivos", lo que evidencia que sí tomó en cuenta dicho aspecto.

De otro lado, cabe destacar que no existe en nuestro ordenamiento jurídico norma alguna que preceptué que la condición de delincuente primario implica que al procesado se le deba aplicar una sanción menos severa y en todo caso no figura entre las atenuantes comunes del artículo 66 del Código Penal, sino que esa calidad del agente debe ser tomada en cuenta por el juzgador para individualizar la pena que el legislador fijó en abstracto para la figura delictiva que se trate.

Así, el carácter de delincuente primario sólo es utilizado por el juzgador, según lo dispone el artículo 56 del Código Penal, en el numeral 6 para determinar la pena concreta en el caso que corresponde teniendo como punto de referencia los términos mínimos y máximo que señale el delito en particular, lo que hizo el Tribunal de primera instancia en el caso subjúdice al haber aplicado la pena

mínima para el delito de homicidio doloso agravado que es 12 años de prisión, por lo que se debe desestimar la pretensión del apelante.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de 30 de septiembre de 1999, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA A FAVOR DE INDALECIO RUDAS TOCAMO Y FÉLIX CASTELLANO APARICIO, SINDICADOS POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ROBINSON MOSQUERA VIVEROS. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, DIECISEIS (16) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante sentencia calendada 3 de febrero de 2000, condenó a Indalecio Rudas Tócamo y Félix Castellano Aparicio a la pena de quince (15) años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período que la pena principal, por la comisión del delito de homicidio agravado en perjuicio de Robinson Mosquera Viveros. Contra esa decisión judicial los apoderados judiciales de Rudas y Castellano anunciaron y sustentaron en tiempo oportuno recurso de apelación, el cual fue concedido en el efecto suspensivo.

La defensa oficiosa de Indalecio Rudas Tócamo se muestra disconforme con la sentencia recurrida en el sentido de que no existen suficientes elementos probatorios en contra de su patrocinado, por lo que se le debe absolver o rebajar la pena, además de que el tribunal no tomó en consideración que Rudas carecía de antecedentes penales (fs.444-446).

Por otro lado, la defensa técnica de Félix Castellano Aparicio solicita que se revoque el fallo impugnado y se absuelva a su defendido o, en su defecto, se condene a Castellano por homicidio simple, ya que el homicidio no ocurrió con premeditación (fs.449-456).

Conocidos los argumentos de los recurrentes, la Sala pasa a resolver las pretensiones formuladas, sólo sobre los puntos objetados en el fallo, de conformidad con el artículo 2428 del Código Judicial.

Cabe señalar que la culpabilidad de Indalecio Rudas Tócamo fue decidida mediante jurados de conciencia, por lo que esa decisión no está sujeta a cuestionamiento alguno (f.410), mientras que Félix Castellano Aparicio presentó escrito en el cual renunció al derecho de ser juzgado mediante jurados de conciencia. En consecuencia, la audiencia se surtió en derecho (f.347).

La Sala desestima los argumentos que plantean que Indalecio Rudas Tócamo es inocente del delito de homicidio, toda vez que esa circunstancia fue decidida por jurados de conciencia quienes, como ya se manifestó, lo encontraron culpable del delito de homicidio. Con respecto a la pena impuesta, esta Corporación de Justicia considera que la misma es cónsona con los factores que establece el

artículo 56 del Código Penal y fue impuesta dentro de los parámetros que establece la ley.

En cuanto a Félix Castellano Aparicio, es necesario examinar ciertos elementos probatorios obrantes en el cuaderno penal. En tal sentido, la vinculación de Castellano con el hecho criminoso se desprende, al igual que la de Rudas, de los testimonios de Roni Walter Murillo (fs.12-15; 79-81), Israel Rengifo Murillo (fs.203-205), y de Ericson Caicedo Viveros (fs.20-21;), quienes coinciden en señalar que Castellano y Rudas portaban armas de fuego con las cuales le disparon al occiso causándole la muerte.

La defensa técnica de Castellano también manifiesta que el homicidio en perjuicio de Mosquera no fue premeditado. En reiterada jurisprudencia la Corte ha manifestado que la premeditación "consiste en el propósito firme, reflexivo y bien meditado tendiente a la ejecución de la prohibición penal. Tal propósito se caracteriza por mantenerse persistente durante el lapso que sea necesario hasta realizar todos los actos encaminados a procurar el resultado criminal" (Sentencia de 8 junio de 1995, Sentencia de 26 de junio de 2000).

Ahora bien, en el caso que nos ocupa los testimonios a los cuales hemos hecho referencia, nos indican que el homicidio de Mosquera fue premeditado, toda vez que también concuerdan en expresar que Castellano, tras discutir en un primer momento con Mosquera, se retiró del lugar y luego, en compañía de Rudas, regresó con un arma de fuego y le efectuó varias detonaciones a Mosquera, lo que nos indica que volvió con la intención de causarle la muerte.

Ante tales circunstancias resultan improcedentes las pretensiones de los recurrentes, por lo que esta Superioridad estima conveniente confirmar la sentencia atacada.

En virtud de lo anteriormente expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia fechada 3 de febrero de 2000, emitida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA APELADA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ISMAEL URRIOLA RODRÍGUEZ, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante sentencia de 19 de mayo de 2000, el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, luego de realizada audiencia en derecho, DECLARÓ CULPABLE a ISMAEL URRIOLA RODRÍGUEZ por el delito de homicidio en perjuicio de Salustiano Pardo Vásquez, y lo CONDENÓ a la pena principal de DOCE (12) AÑOS CON SEIS (6) MESES DE PRISIÓN y a la pena accesoria de CUATRO (4) AÑOS DE INHABILITACIÓN PARA EJERCER FUNCIONES PÚBLICAS UNA VEZ CUMPLIDA LA PENA PRINCIPAL.

Tal decisión jurisdiccional fue impugnada al momento de notificarse, por la licenciada Matilde Alvarenga de Apolayo, Defensor de Oficio, quien en tiempo oportuno presentó el escrito respectivo, por lo que el recurso de apelación fue concedido en el efecto que determina el Código Judicial.

HECHOS

En horas de la noche del 7 de marzo de 1998 se dio la muerte violenta del señor Salustiano Pardo Vásquez ocasionada por heridas con arma blanca en momentos que se encontraba en una fiesta en la comunidad de Pedregoso Arriba, corregimiento de Santa Fe, distrito de Santa Fe, provincia de Veraguas. Vinculado a ese homicidio fue llamado a juicio criminal el señor Ismael Urriola Rodríguez, quien renunció al derecho de ser juzgado por un Jurado de Conciencia, siendo celebrada la audiencia en derecho el 18 de enero de 2,000.

FUNDAMENTO DE LA APELANTE

La licenciada Alvarenga de Apolayo centra su disconformidad en cuanto a la ubicación de la conducta penal de su representado en la figura tipificada en el artículo 132 del Código Penal del homicidio agravado por motivo fútil y no en el homicidio de homicidio simple; y al hecho que no se le aplicó el beneficio otorgado en el artículo 2112 del Código Judicial.

En cuanto a la primera objeción, sostiene que su representado se encontraba ebrio, y que de las pruebas que hay en el expediente, existen las declaraciones de Silverio Duarte (f.261), Luis Alba Rodríguez (f.26), Evelio Rodríguez Pardo (f.285) Juan Marcelo Rodríguez (f.288), Teodoro Urriola (f.472) y José Angel Mendoza (f.476), quienes dicen que entre Salustiano Pardo e Ismael Urriola la noche de marras se dio una pelea, que como no tenían luz sino una pequeña guaricha no se podían ver quienes eran, pero que esas personas se empujaron, se golpearon y luego se vio que se fueron en persecución.

Advierte la apelante, que si hubo pelea, confrontación provocada o no por el sindicado no se puede decir que no hubo una motivación o que tal motivación es insignificante, dado que en una discusión o pelea se dicen cosas ofensivas o se dan golpes que hacen que aflore el machismo o tal vez sentimientos de responder a ese hecho. Por lo que estima se está ante un homicidio simple.

Por otro lado señala que Ismael Urriola Rodríguez, quien no tenía cédula de identidad personal, declaró ante el Personero sin la asistencia de abogado y confiando en esa autoridad, quien le leyó el beneficio contemplado en el artículo 2112 del Código Judicial, colaboró al aceptar haber cometido el ilícito y explicó cómo se dio el enfrentamiento con el hoy occiso.

Por lo que afirma la licenciada Alvarenga de Apolayo que si su defendido no hubiese confesado, no se hubiese sabido con seguridad, quien lo hizo y cómo lo hizo, ya que los testigos declaran en la encuesta que vieron un "revulú" y que no distinguieron a ninguna persona en la oscuridad.

Por tales razones solicita se valore la colaboración de su representado para esclarecer y sobre todo porque el sindicado le ha manifestado que confió en lo que le dijo el funcionario de instrucción de que toda esa confesión sería valorada por el juez al momento de dictar la sentencia y esa promesa no se cumplió (fs.591-595).

OPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El licenciado Rotman R. Tristan R., Fiscal Superior del Segundo Distrito Judicial, contrario a lo manifestado por la defensa técnica en su escrito de apelación, indica que se encuentra debidamente acreditado en el expediente las declaraciones de los testigos José Ángel Mendoza, quien identifica a Ismael Urriola, correteando al occiso; de Teófilo Urriola quien le ve empuñando un cuchillo y correteando al hoy occiso; y Seferino Rodríguez Urriola (hermano del sindicado) quien manifestó al despacho instructor, que su hermano Ismael le había confesado que le había propinado tres puñaladas a Salustiano Pardo Vásquez. Tales declaraciones emitidas bajo la gravedad de juramento, fueron hechas ante el despacho de la causa, el 8 de marzo de 1998 entre las seis y cuarenta y cinco de la mañana y la una de la tarde. En tanto, el sindicado se entrega el mismo día,

pero a las cuatro de la tarde.

Por otra parte, manifiesta la representación fiscal, su acuerdo con lo expresado en la sentencia por el Tribunal A-Quo en cuanto a que se está ante un homicidio agravado por motivo fútil.

Por tales razones solicita se mantenga en todas sus partes la sentencia apelada (fs.597-598).

ANÁLISIS DE LA SALA

Se advierte que la recurrente no disiente respecto al juicio de culpabilidad emitido contra su defendido, sino en cuanto a la calificación llevada a cabo por el juzgador de la conducta realizada por aquel y por el hecho que no se le reconoció el beneficio contemplado en el artículo 2112 del Código Judicial.

El Tribunal A-Quo al momento de encuadrar penalmente la conducta desplegada por el señor Ismael Urriola Rodríguez manifestó lo siguiente:

> "Las declaraciones de Ceferino Urriola Rodríguez, Víctor Urriola Rodríguez, Teófilo Urriola Rodríguez, Damián Mendoza, Teodoro Urriola Pardo, Javier Urriola Rodríguez y Graudencio Quiróz Urriola dan cuenta del hecho de sangre, unos por su propia percepción u otros de viva voz del imputado. Se apunta que en el mostrador de la cantina se encontraban, entre otros, Salustiano Pardo, Ismael Urriola, Isidro Abrego, Ceferino Urriola, Abelino Pardo y Pedrito Urriola, que por una discusión entre Pedrito Urriola e Ismael Urriola, Salustinao le dijo a Ismael que se quedara quieto y lo empujó, lo que motivó que el imputado sacara de la pretina un cuchillo y le hiriera.
>
> Ismael Urriola Rodríguez rindió su primera declaración indagatoria visible a fojas 59 a 70, admitiendo que él fue quien le dio varias puñaladas por la espalda y hombro a Salustiano, persona a quien no conocía, debido a que este sujeto lo empujó y le dijo que era un novelero por tomar guarapo, dándole rabia, por lo que sacó su cuchillo de la pretina del pantalón pero Salustiano intento huir, pero logró darle en la espalda y hombro. Posteriormente, a fojas 386 a 389 amplía su indagatoria y en esta oportunidad niega los señalamientos de los testigos de que su hermano Ceferino le dio el cuchillo y se ratifica de su versión original".

Es así que ante tales elementos de prueba, consideró plenamente probada la responsabilidad penal de Ismael Urriola Rodríguez, y consideró que la conducta desplegada del imputado encaja en el tipo penal del homicidio agravado por motivo fútil tipificado en el artículo 132 numeral 3 del Código Penal. En ese sentido manifiesta:

> "Arribamos a esta conclusión debido a que dentro del proceso no se ha demostrado motivos o razones de peso para que el imputado cometiera el hecho de sangre contra Salustiano Pardo. Porque una persona lo empuje y le diga algo que no le gustó, no es motivo de peso para sacar enseguida un arma mortal e incluso corretearlo para darle por la espalda y hombro, no una sola vez, sino en tres ocasiones".

Al remitirnos a la declaración indagatoria rendida por Ismael Urriola Rodríguez al día siguiente de los hechos en horas de la tarde, se expresó así:

> "Señor Personero, la verdad es que yo fui quien le dio varias puñaladas por la espalda a Salustiano al cual yo no conocía y todo pasó así: Yo estaba parado tomándome el tercer vaso de guarapo de

> caña fuerte que vendían en esa actividad y en eso el muchacho que corté me empujó y me quiso regañar, al decirme que yo era un novelero por tomar guarapo, eso a mi me dio rabia me agaché y puse el vaso cerca a la entrada del mostrador de la cantina, me levanté me saqué el cuchillo que cargaba en la pretina del pantalón que es de cacha de madera y acero filo cortante es su hoja, cuando el muchacho y que ahora sé que se llama Salustiano, yo le saqué el cuchillo, trató de salir huyendo y frente a un tronco de eucalipto le tiré tres o cuatro puñaladas, de las cuales tres fueron fuertes en la espalda, costado y en el hombro, allí él salió huyendo para atrás del barranco, entonces en ese momento mi primo Teófilo me agarró y me iba a quitar el cuchillo, pero no lo dejé y Salustiano fue agarrado por un muchacho que se llama Damián Mendoza ..." (fs.62-63).

Tal versión no es negada al ampliar su declaración indagatoria el 25 de agosto de 1998 (fs.386-389).

Como se puede apreciar del contenido de su declaración indagatoria, el señor Ismael Urriola Rodríguez señala el motivo que lo llevó a herir de muerte al señor Pardo Vásquez, explicando de manera detallada los pormenores de su actuar reprochable.

Esta superioridad, al igual que el Tribunal de Primera Instancia advierte que la razón de la conducta homicida del imputado Urriola Rodríguez está carente de un motivo real atendible, siendo insignificante la causa que le motivó a cometer un acto tan reprochable como lo es, quitarle la vida dolosamente a un semejante. Por tanto, estamos ante un homicidio agravado por motivo fútil.

En cuanto al otro punto objetado por la recurrente, se advierte que en su oportunidad procesal le peticionó al Tribunal de Primera Instancia el reconocimiento de la atenuante contemplada en el artículo 2112 del Código Judicial. Es así que en el fallo apelado el Tribunal A-Quo indicó:

> "... Ese precepto lo que contempla es la cooperación del imputado revelando la identidad de autores, cómplices y encubridores y amerita una rebaja si aporta indicios suficientes para un enjuiciamiento, por lo cual no accederemos a ese petitum" (f.578).

Queremos sin embargo indicarle a la defensa técnica, que el contenido de su solicitud está cimentada en la confesión rendida por su defendido, lo que es distinto a la causa que motiva el reconocimiento de rebaja de pena a que se refiere el artículo 2112 del Código Judicial, como se puede apreciar en el párrafo anteriormente transcrito.

Por otra parte, le indicamos a la letrada que el Tribunal de Primera Instancia impuso al señor Urriola Rodríguez la pena base de 15 años de prisión y le rebajó una sexta parte por la atenuante de la confesión quedando la pena a imponer en 12 años con seis meses de prisión (fs.579).

Por las consideraciones expuesta, la Sala no accede a las pretensiones de la parte recurrente y procede a confirmar el fallo del Tribunal de Primera Instancia.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia apelada.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR EL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO Y POR LA DEFENSA DE HILARIO JAVIER PEÑALOZA, CONTRA LA SENTENCIA NO. 18 DEL 9 DE MARZO DE 2000, PROFERIDA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante Sentencia No.18 del 9 de marzo de 2000, impuso a Hilario Javier Peñaloza la pena de 7 años de prisión, e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo periodo, como autor del delito de homicidio en perjuicio de Liseth Del Carmen Ford.

En el acto de notificación de la decisión condenatoria anunciaron recurso de apelación tanto el representante del Ministerio Público como el defensor del sentenciado, quienes sustentaron sus respectivas alzadas oportunamente.

El Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá se manifiesta en desacuerdo con la sentencia condenatoria, por considerar que la imposición de la pena debe ser conforme a las modalidades agravadas previstas en el numeral 2 del artículo 132 del Código Penal. En tal sentido advierte que debe atenderse que"...hubo un acuerdo de voluntades entre el sindicado Hilario Javier Peñaloza y el menor de edad Marcos Antonio Martínez para realizar el ilícito...(f. 801). Agrega que el imputado Hilario Javier Peñaloza, esperó a la víctima escondido en un hueco que habia sobre la escalera "...lo que demuestra que el sindicado estaba plenamente consciente de lo que pretendía hacer..."(Cfr. f. 802).

Por otro lado, demanda que se consigne que el sentenciado actuó conforme al numeral 1 del artículo 67 del Código Penal toda vez que, Liseht Del Carmen Ford "...se encontraba desarmada al momento en que es atacada por el sindicado, y que no presenta que podia ser objeto de un ataque contra su vida, aunado al hecho evidente de la superioridad física del sindicado PEÑALOZA, con respecto a su víctima..."(Cfr. f. 804).

Finalmente, el funcionario de instrucción, sostiene que "...otro de los aspectos que sirve para configurar la agravante de superioridad del victimario, "...es el hecho de que el victimario atacó a la víctima luego de haberse ocultado, acechando el paso de la hoy occisa, tendiente a emplear a su favor el factor sorpresa que representa una ventaja del victimario, ya que la afectada no tuvo tiempo de reaccionar y emplear algun mecanismo de defensa que pudiera haber salvado su vida..."(Cfr. f. 805).

El defensor del imputado, solicita que se le imponga una penalidad menor a su defendido por el delito señalado ya que "...al no tenerse demostrado ninguna de las condiciones facticas para tener como agravado el homicidio estudiado (f. 823)...y ante la serie de contradicciones antagónicas e inconsistentes se debió fijar la pena mínima señalada para el delito en su forma simple como la dosis penal adecuada para nuestro representado..."(Cfr. f. 822).

De otra parte, advierte que el principio In dubio pro reo debe atenderse a las contradicciones del imputado cuando señala a folio 17 del sumario Marcos Alberto Martínez "... al ir saliendo de la Avenida Herrera Bubucito me llamo que subí a su casa y estando en el balcón, él Bubucito me pregunto que si yo tenia

cuhillo encima yo le conteste que sí...". A fojas 19 Marcos Alberto Martínez se contradice cuando señala "...yo fui a decirle que si él andaba con esa guial, entonces él me preguntó, con que guial y le dije que con Caché y él me dijo que donde está ella y le dije que estaba donde Polita...", por lo que esta situación hace reprochable y dudosa la versión de Martínez pues no puede ser que Hilario Peñaloza lo llamó y a la vez él fue a decirle, esto es algo ilógico y carente de toda razón valedera alguna (Cfr. f. 810-811).

Las constancias procesales permiten conocer que el viernes 18 de agosto de 1995, aproximadamente a las 10:30 de la noche, en calle No. 12 y Justo Arosemena ciudad de Colón, provincia de Colón la joven Liseth Del Carmen Ford, recibió un disparo que le causó la muerte. En el hecho resultaron implicados Hilario Javier Peñaloza y el menor de edad Marcos Antonio Martínez.

El Informe de necropsia revela que la occisa presentaba:

> "...herida de ingreso de proyectil de más o menos 0.8 cm. En parietal derecho.
>
> Al exámen interno se observa fractura redonda por ingreso del proyectil del parietal derecho, con borde afilado más sobre su derecho, que ingresa a cráneo y macera cerebro, en borde inferior posterior del agujero auditivo izquierdo del temporal, se observa fractura y hemorragia. Se retira calota y se reconoce ingreso de proyectil de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y casi oblicua al eje mayor del cuerpo.
>
> El proyectil pasa por fosa occipital izquierda y se incrusta en roca del temporal izquierdo, fracturando todo. Se retira proyectil de plomo, todo deformado..." (Cfr. f. 143).
>
> La Causa de Muerte se da por:
> a. Maceración Cerebral
> b. Fractura de Cráneo
> c. Herida por Arma de Fuego (Cfr. 150).

El Tribunal de la causa, al momento de tomar su decisión, tipificó la conducta del sindicado bajo la adecuación del artículo 131 del Código Penal, que sanciona con un intervalo de cinco a doce años de prisión la acción de causarle la muerte a otro toda vez que el a-quo "...ha considerado que no resulta aplicable el artículo 132 del Código Penal, al no tenerse por demostradas ninguna de las condiciones fácticas para tener como agravado el homicidio..."(Cfr. f. 795).

Se pasa a resolver las alzadas sobre los puntos a que se refiere cada recurrente, en cumplimiento del mandato del artículo 2428 del Código Judicial. La culpabilidad del imputado por el delito de homicidio, fue resuelta por un jurado de conciencia, razón por la que el examen de la sentencia está limitada a la pena recaída sobre el autor (f. 746).

Pasa la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a examinar ciertos elementos probatorios que constan en el cuaderno penal. En tal sentido, Hilario Javier Peñaloza al rendir declaración indagatoria manifiesta que se encontraba en una fiesta en calle 12 y 13 Herrera, en la cual se encontraba con Ricardo Kam, Cinthia de Murillo, Rene Donaldson hasta que le informaron de la muerte de Liseth del Carmen Ford (f. 132). Hecho corroborado por Sinthia Loreta Best de Murillo (f. 182), Rosa Evelia Sánchez (f. 186), Kitosh Leonardo Thompson (f. 187) y Ricardo Carr (f. 192).

Agrega que el "...joven MARCO dijo en su declaración que yo estaba con él el día de los hechos, cuando es mentira. Cuándo estabamos en la Policía Técnica Judicial el me dijo que él había dicho eso porque le habían dicho que yo lo estaba acusando a él..."(Cfr. f. 131).

Apolonia Del Carmen Noel Domínguez manifiesta que "...GABRIEL no me dijo nada, y cuando yo le pregunté me dijo que él se había quedado atrás. y (sic) también le preguntó a JESSICA y la misma le dijo que piensa que pudo ser también un sujeto llamado BENJAMIN, porque le reconoció la voz, cuando dijo "ASI ERA QUE TE QUERIA AGARRAR"..."(Cfr. f. 180-181).

Por su parte, Jessica Solís A. quien acompañaba a la víctima al momento de los hechos señala que "...ibamos caminando de pronto paró un carro blanco, recuerdo, ella conversó con la persona del ca o (sic) blanco, era un hombre recuerdo terminó de hablar me dijo, mira como soy le dije a él que voy a estar aquí y voy a estar allá...cuando veniamos saliendo yo venia a (sic) lado de ella y sale una persona debajo de la escalera y le dice "ASI ERA QUE TE QUERIA AGARRAR", yo salí gritando le estan robando a CACHET...luego escuché el disparo...la persona antes de dispararle, la persona salió y la agarrar (sic) por el cabello y la persona estaba cubierta tenía algo negro por la cabeza y tenía la cara cubierto (sic) y no pude reconocer quien fue..."(Cfr. f. 272).

Gabriel Mack asegura que estando en camino "...se aproximó el vehículo no sé que hablaron, luego ella miró el reloj, cuandoella (sic) miró el reloj le hiso (sic) señas hacia adelante,..." (Cfr. f. 59). Al salir de la casa de Wino en esos momentos "...salió BUBUCITO de un hueco que se encuentra abajo de la escalera, el mismo la agarró por las manos, la agachó en el piso, la tomó por el cabello y le díjo QUEDATE QUIETA QUE ASI ERA QUE TE QUERIA AGARRAR, yo no oí queella (sic) dijo nada, en esos momentos salió MARCOS, corriendodel (sic) hueco hacia afuera, en esos momentos yo oí que BUBUCITO disparó el arma que tenía en las manos, cuando yo caminé hacia adelante ya ellos se habían ido..."(Cfr. f. 59).

No obstante a fojas 195 Gabriel Mack expone otra versión cuando afirma que "...salió un muchacho del hueco de la escalera y la agarró por la mano y la arrodilló y le dijo "QUEDATE QUIETA, QUE ASI ERA QUE TE QUERIA AGARRAR", al yo ver la persona el mismo era clarito, de estatura mediana, tenía un sombrero como eso (sic) que usan los guardia era negra, estilo boinita, tenía un sweter color crema manga corta, y pantalón crema oscuro, zapatilla pero no la recuerdo, el cabello no lo pude ver ya que estaba cubierto con el sombrero, cuando yo lo ví así me vino a la mente que era BUBUCITO, como ese era el novio de ella me vino a la mente que era él, pero no lo pude ver bien porque al verlo la primera vez lo vi, pero despues (sic) me tapé la cara,...antes de que él disparara salió otro pelao del mismo hueco...cuando lo ví era MARCO..."(Cfr. f. 195, subraya la Sala).

El menor de edad Marcos Martínez, asegura que Hilario Javier Peñaloza fue quien le disparó a Liseth Del Carmen Ford, ya que "...al ir saliendo para la avenida Herrera, BUBUCITO me llamó así que subí a su casa y estando en el balcón, él BUBUCITO me preguntó que si yo tenía un cuchillo encima y le contesté que si (sic) y el me preguntó que para donde yo iba y le explique, entonces le pregunté que para qué él queria saber si yo tenía cuchillo y él me cotestó que para robarle a un pelao que tenía un par de cadenas de oro...entonces nos metimos en un hueco que se encuentra a mano derecha...al ver que venían las personas me dijo "SUAVE AHI VIENEN AHI VIENEN" asi... el salió y la agarró por el cabello y ella voltio (sic) a ver y él le dijo "ASI ES QUE TE QUERIA AGARRAR" y ella al verlo dijo "NO BUBUCITO NO" entonces yo sali del hueco y me fui caminando con el cuchillo en la mano y al escuchar el disparo...sali (sic) corriendo...."(Cfr. f. 17).

Por otro lado, Marcos Martínez, al ser cuestionado de cómo sabía Hilario Javier Peñaloza dónde se encontraba Liseth del Carmen Ford, manifestó "...yo fui a decirle que si él andaba con esa guial, entonces él me preguntó, con qué guial, y le die (sic) con CACHE, y él me dijo dónde esta ella y le dije que estaba donde Polita que se iba a peinar...y el me dijo que no le hiciera nada si ella de (sic) ponía dura...(Cfr. f. 19). Por otra parte Marcos Martínez manifiesta que "...no se quien disparó en contra de Liseth, según lo que dicen la gente fue Bubucito... y deseo agregar, que en ningún momento estuve en la noche deldía (sic) viernes 18 de los corrientes con BUBUCITO..."(Cfr. f. 81).

No obstante, señala otra situación cuando expone que "...yo salí y me dirigí hacia la casa de BUBUCITO, le dije que ella había regresado y me preguntó que a donde se encontraba ahí fue cuando caminamos hacíael (sic) balcón de avenida Amador Guerrero,...ahí fue donde yo (sic) le dije "QUE SOPA, ESA GUIAL ESTA HACIENDO VAINA", VEN PARA RECOGERLA, luego el dijo "CHUCHA", NO LE HAGA NADA..."(Cfr. f. 515). Agregó que "...mi intención no era puyarla sino robarle la cadena de que yo salí de la oscuridad de repente cuando yo iba a salir él se me adelantó y la garró (sic) y al salir quedó a un costado al lado de ella, luego yo salí bravo y escuchaba cuando ella le decía NO BUBU, NO BUBU, luego al ratito sonó el disparo..."(Cfr. f. 515).

Para la doctrina la premeditación "...es una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal es aquella que se realiza con serenidad de ánimo para el mal, revelada por la decisión reflexiva, manifestada continuada y persistente, y a condición de que, entre la premeditación del hecho y su ejecución, transcurra un lapso suficiente para que el autor haya tenido tiempo de hacerse cargo, con fría razón, de las ulteriores consecuencias, demostrando así una perseverancia tenaz en su resolución..."(Manuel Osorio. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta, Argentina, 2000. pág. 786).

Observa la Corte, Sala de lo Penal que de las diferentes declaraciones vertidas no resulta fehacientemente acreditado en el proceso que haya existido premeditación para perpetrar el hecho reprochable. Sobre el particular es posible consultar sentencias de la Sala Penal del 26 de junio de 2000 y 8 de junio de 1995.

En cuanto a la segunda causa a pedir por el representante de la Vindicta Pública, establecida en el númeral 1 del artículo 67 del Código Penal, que es del tenor siguiente:

> "Artículo 67: Son circunstancias agravantes ordinarias comunes, cuando no estén previstas como elemento constitutivo o como agavante específica de un determinado hecho punible, las siguientes:
>
> 1. Abusar de superioridad o emplear medios que debiliten la defensa del ofendido;..."

En relación a este reclamo profusa jurisprudencia de la Corte, ha reiterado que la superioridad física o moral atiende a "...que el agente activo del delito emplea sobre el ofendido, que no la superioridad jerárquica de aquel. También se configura en los casos de notable diferencia de edad entre la víctima y el agresor, en los del varón sobre la mujer, de la persona sana sobre el enfermo..."(Cfr. Sentencia de 8 de junio de 1993, R.J. pág, 220). De allí que no se encuentre configurada la alegación de que el autor se valió de la superioridad física sobre la víctima, conforme a las declaraciones de Marcos Martínez (f. 17,19, 81, 515), Gabriel Mack (f. 59, 195) y Apolonia del Carmen Noel Domínguez (f. 180-181).

En cuanto a que la víctima se encontraba en estado de indefensión y que el victimario actuó con "acechanza" alegadas por el agente del Ministerio Público adecuadas al numeral 1 del artículo 131, es de conocer que de acuerdo al caudal probatorio que militan en el cuaderno penal debe atenderse que no está demostrada fehacientemente ésta causal, por lo que quedan descartadas estas agravantes.

En cuanto a la solicitud del defensor de Hilario Javier Peñaloza, a que debe tomarse en consideración las modalidades del delito simple, dada las contradicciones de los testigos del homicidio, la Sala Penal le recuerda al defensor de Peñaloza, que el Jurado de Conciencia determinó la culpabilidad del imputado (f. 746) y que el Tribunal Superior fijó la pena de acuerdo al artículo 131 precisamente por no quedar demostrado que se cumplieran las modalidades del homicidio agravado, por lo que resulta descartada la solicitud.

Sobre el particular, la Sala Penal, al referirse al homicidio simple

manifestó "...que la destrucción de la vida humana por la acción u omisión de otra persona, lesiona uno de los bienes jurídicos de mayor importancia para toda la sociedad, más aún, cuando se trata de elementos valiosos de la juventud de los que el país espera grandes aportaciones para su desarrollo..."(Cfr. Sentencia de la Sala Penal de 30 de enero de 1995).

Por consiguiente la Corte Suprema, comparte el criterio externado por el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial en el sentido que no queda demostrado en el cuaderno penal que Hilario Javier Peñaloza haya actuado conforme a las modalides del artículo 132 del Código Penal y se configura la actuación tipíca, antijurídica y culpable conforme al artículo 131 del Código Penal.

Confrontada la resolución apelada con los argumentos expuestos en los recursos de apelación, la Sala concluye que la medida jurisdiccional atacada se encuentra fundada en las constancias procesales, por lo que procede a confirmarla.

Por las razones anteriores, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de 9 de marzo de 2000 proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial que impone a Hilario Javier Peñaloza la pena de 7 (siete) años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo período, como autor del delito de homicidio en perjuicio de Lizeth del Carmen Ford.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN INICIADAS EN VIRTUD DE QUERELLA PRESENTADA POR RAYMOND ARTHUR BUITRAGO, CONTRA ELITZA A. CEDEÑO, OSCAR CEVILLE Y MARIBLANCA STAFF WILSON. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, DIEZ (10) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Para decidir sobre su mérito legal, el Procurador General de la Nación ha enviado a la Sala Penal de la Corte Suprema, las sumarias iniciadas en virtud de querella presentada por la licenciada María Elvira Muñoz, apoderada judicial de Raymond Arthur Hermenet Buitrago, contra Elitza A. Cedeño, Oscar Ceville y Mariblanca Staff Wilson, quienes ocupaban el cargo de Magistrados de la Sala Quinta de Instituciones de Garantía de la Corte Suprema de Justicia, por la supuesta violación del numeral 1 del artículo 215 C, del Código Penal.

De manera preliminar, se resalta que esta Sala sólo tiene competencia para conocer de la situación procesal de Elitza A. Cedeño, quien actualmente ocupa el cargo de Magistrada del Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, toda vez que mediante Ley No. 49 de 24 de octubre de 1999, quedó derogada la Ley No. 32 de 23 de julio de 1999, por medio de la cual se había designado a Elitza A. Cedeño, Oscar Ceville y Mariblanca Staff como magistrados de la Sala Quinta de Instituciones de Garantía de la Corte Suprema de Justicia.

El Procurador General de la Nación, mediante vista fiscal No. 42 de 26 de junio de 2000, solicitó a esta Corporación de Justicia que dicte a favor de

Cedeño un sobreseimiento definitivo de carácter objetivo e impersonal, conforme el artículo 2210 del Código Judicial, toda vez que la actuación de la misma se ajustó a derecho conforme a lo que la Constitución y la Ley establece (fs.164-168).

Un análisis detenido de los elementos probatorios que constan en el cuaderno penal, permite concluir que, en efecto, la conducta desplegada por Cedeño en el proceso que motivó la querella penal presentada por el apoderado judicial de Hermenet se ajustó a derecho, ya que sólo se limitó a participar, como funcionaria jurisdiccional, en la solución de una acción de amparo de garantías constitucionales que, precisamente, Hermenet había interpuesto ante la Sala Quinta a fin de que se dirimiera una controversia que este mantenía en el Tribunal Superior de Menores, con el objeto de que se mantuviera la suspensión de las medidas de supervisión y restricción de visitas impuestas a Rosmary Oderay García con respecto al menor Raymond Hermenet García. Por lo tanto, al encontrarse agotadas las investigaciones y no haberse comprobado el delito que se le imputaba a Cedeño, debe decretarse un sobreseimiento definitivo a su favor, en base al numeral 2 del artículo 2210 del Código Judicial.

En cuanto al status procesal de Ceville y Staff, como se expresó en líneas anteriores, la Sala carece de competencia para conocer del presente negocio penal. En consecuencia, lo procedente es acceder a la solicitud del Procurador General de la Nación, en el sentido de inhibirse del conocimiento del proceso y remitirlo a los jueces de circuito del Distrito de Panamá (f.168).

Por las consideraciones anteriores, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, SOBRESEE de manera definitiva a Elitza A. Cedeño y, SE INHIBE de conocer el proceso con respecto a Oscar Ceville y Mariblanca Staff Wilson en las sumarias en averiguación, iniciadas por medio de querella presentada por Raymond Arthur Hermenet Buitrago y DECLINA el conocimiento del mismo al Juzgado de Circuito del Distrito de Panamá en turno.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS

(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES

(fdo.) MARIANO E. HERRERA

Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA TERCERA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y LABORAL

AGOSTO 2000

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE INTERPRETACIÓN

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE INTERPRETACION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DONATILO BALLESTEROS EN REPRESENTACION DEL TESORERO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMA, PARA QUE LA SALA SE PRONUNCIE SOBRE EL SENTIDO Y ALCANCE DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN EL OFICIO NO. 959 DE 22 DE OCTUBRE DE 1999, EXPEDIDO POR EL ALCALDE DEL DISTRITO DE PANAMA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado DONATILO BALLESTEROS actuando en representación del TESORERO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMA, ha presentado solicitud para que se interprete el sentido y alcance del Oficio No. N-D.A.-959 de 22 de octubre de 1999 expedido por el Alcalde del Distrito de Panamá.

Observa esta Corporación de Justicia, que la solicitud de Interpretación cumple con los requisitos previstos en el texto del artículo 98 numeral décimo primero del Código Judicial, a saber:

1- la consulta recae específicamente en la interpretación de un acto administrativo: El Oficio N-D.A.-959 de 22 de octubre de 1999;

2- fue elevada por parte de la autoridad administrativa que debe ejecutar el acto en cuestión; y

3- el objetivo de la petición es obtener un pronunciamiento prejudicial definitivo sobre el alcance y sentido del acto administrativo bajo análisis.

La Sala procede en consecuencia, en ejercicio de las facultades constitucionales que le confiere el artículo 203 numeral 2° de la Constitución Nacional, a examinar los diversos aspectos de la pretensión formulada por el Tesorero Municipal de Panamá.

I. El acto administrativo objeto de la petición de interpretación.

El acto cuya interpretación ha sido requerida, fue expedido por el Alcalde del Distrito de Panamá, Señor Juan Carlos Navarro, y está contenido en Nota dirigida al licenciado Ventura Vega, Tesorero Municipal del Distrito de Panamá, que es del tenor siguiente:

> "A través de la presente devuelvo a usted un número plural de cheques, toda vez que a pesar de haber realizado las gestiones legales para aclarar que efectivamente es el Alcalde, en virtud de la facultad contenida en el artículo 240 de la Constitución Política, quien ordena los gastos de la administración local, observamos la renuencia del Despacho a su cargo de aceptar este mandato constitucional.
>
> En consecuencia, hemos solicitado a la Procuradora de la Administración su participación para dirimir este diferendo; y hasta tanto el mismo subsista nos abstendremos de firmar los cheques girados para pagar compromisos adquiridos, si dicho pago no ha sido ordenado por este Despacho.
>
> Ello es así, pues somos concientes, en nuestra calidad de servidor público, que sólo podemos hacer lo que la Ley expresamente señala, así como responsables por la omisión en el ejercicio de nuestras

funciones."

II. La Solicitud de Interpretación.

La petición de interpretación prejudicial ha sido expuesta a la Sala por el Tesorero Municipal, en los siguientes términos:

> "Solicito que previo el trámite correspondiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, interprete y establezca el sentido y alcance del Acto Administrativo contenido en el Oficio No. N-D.A. 959 de 22 de octubre de 1999, del Sr. Alcalde del Distrito de Panamá, referido a su facultad de Ordenar los Gastos de la Administración Municipal, frente a la atribución del Sr. Tesorero Municipal de Recaudar y Pagar para determinar:
>
> 1) Que la atribución del Alcalde de: Ordenar los Gastos de la administración local ajustándose al Presupuesto, y a los reglamentos de contabilidad, no le discierne la atribución de pagar, que corresponde al Tesorero.
> 2) Que la facultad de ordenar los gastos de la administración local, implica la de solicitar los pagos que deba hacer el Municipio, en razón de su funcionamiento administrativo y operaciones.
> 3) Que la atribución de RECAUDAR Y PAGAR, conforme lo dispone el Numeral 1, del Art. 57 de la Ley 106 de 1973, está concedida al TESORERO MUNICIPAL, aún cuando los cheques deba firmarlos conjuntamente con el Alcalde.
> 4) Que el Acto Administrativo contenido en el Oficio NDA-959 de 22 de octubre de 1999, mediante el cual se rechazan pagos hechos por el Tesorero Municipal, obedece a la confusión sobre el contenido y alcance de sus atribuciones de Ordenar los Gastos, siendo el mismo oscuro y confuso, pues se pretende subsumir las facultades de Pagar que corresponden al Tesorero Municipal."

El señor Tesorero manifiesta además, que el error y confusión que existe en este caso obedece a que el artículo 45 numeral 3 de la Ley 106 de 1973 sobre Régimen Municipal, establece que es atribución del Alcalde ordenar los gastos de la administración local, ajustándose al presupuesto y a los reglamentos de contabilidad, mientras que el artículo 57 numeral 1° de la misma Ley, fija como atribución del Tesorero Municipal hacer los pagos del Municipio.

Concluye la petición, señalando lo siguiente:

> "La necesidad de la Interpretación sobre el sentido y alcance de las precitadas disposiciones, obedece a que los vocablos gastos y pagos, no son la misma cosa.
>
> Los gastos representan el compromiso económico, monetario etc., generados en el funcionamiento de la administración e inversiones, por una obligación contraída, o por el funcionamiento de la institución, mientras que el pago es la forma de dar cumplimiento a ese compromiso. Ordenar los gastos no es lo mismo que pagar los gastos.
>
> El objeto de éste proceso es dilucidar el diferendo existente para adecuar las funciones de cada cual y su desempeño, al estricto sentido de las normas cuestionadas."

III. Informe rendido por el Alcalde del Distrito de Panamá.

El señor Juan Carlos Navarro, en su condición de Alcalde del Distrito de Panamá y responsable del acto cuya interpretación se ha requerido, compareció ante la Sala Tercera señalando que este asunto había sido consultado con

anterioridad a la Procuraduría de la Administración, agencia del Ministerio Público que con base a la atribución conferida por el artículo 346 del Código Judicial, emitió dictamen favorable a la posición que mantiene la Alcaldía, en relación a la forma en que ha de proceder el Tesorero a realizar los pagos por compromisos municipales.

Conforme a las directrices sentadas en la consulta absuelta, el Alcalde Municipal ha inferido que la legislación existente reconoce y faculta al Alcalde para planificar, decidir y ordenar los gastos de la Administración Municipal, mientras que al Tesorero Municipal le corresponde, entre otras funciones, cancelar las cuentas de los gastos del municipio, una vez recibidas las instrucciones del Alcalde.

El señor Alcalde señala no obstante, que el Tesorero Municipal ha desconocido la opinión emitida, por lo que se hace necesario un pronunciamiento definitivo de la Sala Tercera en el asunto ventilado.

IV. Concepto de la Procuradora de la Administración

De la petición de interpretación se corrió traslado a la señora Procuradora de la Administración, quien ha emitido concepto a través de Vista Fiscal No. 194 de 4 de mayo de 2000, reiterando el dictamen previamente esbozado en relación a este asunto.

En opinión de la letrada, el Tesorero Municipal se encuentra investido de delicadas e importantes atribuciones dentro de la administración municipal. Sin embargo aclara, que Alcalde y Tesorero tienen bien definidas sus funciones en materia de gastos municipales, de forma tal que si bien el Tesorero es el encargado del pago de los compromisos municipales, para tal fin debe cumplir con las instrucciones ordenadas por el Alcalde, Jefe de la administración municipal.

El dictamen de la señora Procuradora recoge en lo medular, los siguientes razonamientos:

> "El Alcalde es el Jefe del Ejecutivo Municipal, y como tal le corresponde dirigir la administración general de la Comuna, pues es él, el único legitimado política y jurídicamente para ejercer esta función pública; por tanto, ordenar los gastos de la Administración Local, ajustándose al Presupuesto y a los reglamentos de contabilidad, y determinar en última instancia los pagos que deban hacerse en esos conceptos, es parte de las atribuciones que de manera exclusiva corresponden al Alcalde como Jefe de la Administración. Aceptar una interpretación contraria es dar al Tesorero la categoría de Administrador Municipal, lo que contraría totalmente nuestro régimen legal y constitucional municipal.
>
> Precisamente por esta razón, el artículo 45, numeral 14, de la Ley 106 de 1973, establece como una atribución de control y administración propia del Alcalde del Distrito, firmar, conjuntamente con el Tesorero, los cheques girados en contra del Tesoro Municipal.
>
> Esta interpretación es acorde con el sentido etimológico de los términos gastos y pagos, contenidos en el artículo 45, numeral 3, de la Ley 106 de 1973, que indica es una atribución del Alcalde ordenar los gastos de la administración local, ajustándose al presupuesto y a los reglamentos de contabilidad, y en el artículo 57, el numeral 1, de la misma Ley, que establece corresponde al Tesorero Municipal efectuar las recaudaciones y hacer los pagos del Municipio.
>
> Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia

Española, "gasto" es la acción de gastar y sobre este verbo dice: "Emplear el dinero en una cosa". Sobre la palabra "pago" se expresa: "Entrega de un dinero o especie que se debe". Además, la palabra o vocablo "ordenar" constituye un mandato de carácter imperativo que atañe una disposición forzosa u obligatoria.

Así pues, corresponde al Alcalde, Jefe de la Administración Municipal en los términos del artículo 248 de la Constitución Nacional, decidir como (sic) se deben emplear los dineros de las arcas municipales, cuando (sic) y a quien (sic) pagar, siempre de acuerdo al presupuesto y a los reglamentos de contabilidad, debidamente fiscalizado por la Contraloría General de la República. El acto operativo de pago, una vez ordenado por el Alcalde, corresponde al Jefe de Recaudación y Pago: el Tesorero Municipal."

DECISION DE LA SALA TERCERA

El Oficio N-D.A.-959 de 22 de octubre de 1999 fue sometido ante esta jurisdicción, para que se determinara su correcto sentido y alcance. No obstante, la Sala advierte que la consulta también pretende dirimir un conflicto de competencias que ha surgido en la Comuna del Distrito de Panamá, en lo relativo a la autoridad municipal que ha de ordenar los gastos y los pagos que ha de realizar el Municipio, como parte de su funcionamiento.

Así observamos, que en la Consulta elevada por el señor Alcalde Juan Carlos Navarro a la Procuraduría de la Administración a este respecto, el día 6 de octubre de 1999, le planteaba en concreto la siguiente interrogante: quién ordena el pago para cubrir compromisos originados en las dependencias municipales, el Alcalde o el Tesorero?

Para dirimir lo pertinente, se hace necesario analizar las atribuciones que se encuentran legalmente conferidas, tanto al Alcalde como al Tesorero Municipal.

El Alcalde, concebido como una especie de "Poder Ejecutivo" a nivel distrital, es el Jefe de la Administración Municipal (Art. 238 de la Constitución Política y 43 de la Ley 106 de 1973), encargado entre otras atribuciones, de elaborar el proyecto de presupuesto y ordenar los gastos de la Administración local. (Art. 240 de la Constitución Política y 45 numeral 3° de la Ley 106 de 1973)

Entre sus funciones destaca, además de las dos principales antes mencionadas, la de presentar al Concejo Municipal los planes de desarrollo del distrito, promover el progreso de la comunidad, vigilar las labores y a los funcionarios municipales, cumplir y hacer cumplir lo resuelto por el Concejo Municipal, firmar con el Tesorero los cheques girados contra el Tesoro Municipal, etc. (cfr. Artículo 45 de la Ley 106 de 1073)

Como se desprende de lo anotado, al Alcalde Municipal corresponde, como Jefe de la Administración Distrital, la iniciativa, preparación y ejecución de todos los planes hacendatarios del distrito, en vías de lograr los cometidos que vislumbre el gobierno local, en beneficio de la comunidad.

Por su parte, el Tesorero Municipal es un funcionario designado por el Concejo Municipal por período fijo de dos años y medio, para constituirse -según lo prevé el artículo 239 de la Constitución Política-, en el Jefe de la oficina de Recaudación de las rentas municipales y de Pagaduría del Municipio. En desarrollo de la norma constitucional, el artículo 57 numeral 1° de la Ley 106 de 1973 establece, entre las numerosas atribuciones del Tesorero Municipal, la de efectuar recaudaciones y hacer los pagos del Municipio.

Al Tesorero Municipal le están atribuidas por ende, dos importantes

categorías de funciones: 1- las que atañen al Jefe de recaudación de ingresos municipales lo que se logra a través de facultades concretas, como el cobro de impuestos y el ejercicio de la jurisdicción coactiva (cfr. artículos 57, 80 y 95 de la Ley 106 de 1973 y artículos 32, 57 y 67 de la Ley 55 de 1973); y 2- las de Jefe de pagaduría del Municipio, correspondiéndole registrar las órdenes de los pagos que haya de efectuarse por compromisos municipales, y realizar la acción operativa de pago. (cfr. artículo 239 de la Constitución Nacional y artículo 57 numerales 1° y 4° de la Ley 106 de 1973)

Estas atribuciones otorgan al Tesorero la calidad de funcionario de manejo de fondos públicos dentro del Municipio, sometido a la fiscalización de la Contraloría General de la República, por ser el encargado de la cobranza impuestos, contribuciones y demás ingresos del Municipio, y constituirse en el custodio de la entrada de dichos fondos.

El Tesorero Municipal es en definitiva, el colector de los fondos que permite el funcionamiento del Municipio, y el "Contador" de la empresa municipal, encargado de llevar control de ingresos y gastos, y pagar los compromisos que adquiere el municipio.

Se consulta a la Corte, si al momento de cumplir con dichos pagos, el Tesorero, como jefe de pagaduría, tiene autonomía y liberalidad en la gestión de pago, o debe proceder según las instrucciones que le gire el Alcalde.

Al efecto, la Sala Tercera participa de la opinión ofrecida por la colaboradora de la instancia en esta consulta, en el sentido de que el Tesorero Municipal ha de seguir en los procesos de pago, las instrucciones que dicte el Alcalde, quien como Jefe de la Administración Municipal es el encargado de ordenar los gastos del Municipio de Panamá, y decidir sobre los aspectos de: qué, cuándo y cómo pagar los compromisos municipales.

Esta conclusión encuentra sustento en las normas constitucionales y legales que regulan el funcionamiento de la municipalidad a las que hemos venido haciendo referencia, especialmente aquellas que dicen relación con las atribuciones específicas de Alcalde y Tesorero (Título I Capítulos II y III de la Ley 106 de 1973, respectivamente), y las que atañen a la Hacienda Municipal, los Gastos Municipales y el Presupuesto Municipal (Título II Capítulos VII y IX de la Ley 106 de 1973).

En efecto, se observa que el Alcalde, como Jefe de la Administración Municipal, tiene las atribuciones de:

-prever: concebir las política de gestión y programas de la municipalidad,

-proponer: elaborando el plan anual operativo del presu puesto municipal; y

-ejecutar: desarrollar la forma en que serán utilizados los recursos del municipio.

El Tesorero Municipal mientras tanto, ha de recaudar los fondos que permita el funcionamiento de la comuna municipal y llevar el control de sus ingresos y egresos, sin convertirse en promotor de los gastos del municipio. Toda iniciativa en esta materia -entiéndase gastos y pagos-se encuentra restringida al Tesorero, mientras el Alcalde, único legitimado para decidir en qué se utiliza el caudal del Municipio, gire instrucciones concretas al respecto.

Sin perjuicio de lo establecido en las normas examinadas, la lógica jurídica también indica, que si la intención legislativa hubiese sido que el Tesorero Municipal procediera de manera autónoma a cancelar compromisos y obligaciones sin consultar al Jefe de la Administración Municipal, no hubiese previsto el mecanismo de control establecido en el artículo 45 numeral 14 de la Ley 103

de 1976, según el cual corresponde al Alcalde firmar junto al Tesorero, los cheques que se giren contra el Tesoro Municipal.

La controversia que existe en la Comuna del Distrito de Panamá puede obedecer, a la intención del Tesorero Municipal de realizar su gestión contable de manera ágil y eficiente, cancelando aquellos compromisos en que incurre el gobierno local. No obstante, por saludable que fuese el propósito que anima al Tesorero, el Alcalde es quien debe decidir cómo se destinan los recursos del Municipio, por ser el encargado de la ejecución presupuestaria.

Nótese que si bien es cierto, el artículo 57 numeral 1° de la Ley 106 de 1973 establece que al Tesorero le corresponde hacer los pagos del Municipio, esta atribución viene complementada con el numeral 4° de la norma ibídem, que claramente establece que le corresponde al Tesorero "registrar las órdenes de los pagos que hayan de efectuarse y presentarlos a la firma del Alcalde ..." lo que evidencia una vez más, que los pagos que realiza el Tesorero han de haber sido previamente ordenados por el Alcalde Municipal.

Este es el sentido en que se orientan las disposiciones legales que regentan en esta materia, y el contexto en que ha de entenderse el contenido de la Nota de 22 de octubre de 1999.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, INTERPRETA prejudicialmente el Oficio No. N-D.A.-959 de 22 de octubre de 1999 expedido por el Alcalde del Distrito de Panamá y DECLARA que los pagos que realiza el Tesorero Municipal deben ser ordenados previamente por el Alcalde del Municipio de Panamá, siendo ésta la correcta interpretación, sentido y alcance que debe darse al acto administrativo objeto de la solicitud de pronunciamiento.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JORGE FÁBREGA P. (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PETICIÓN DE PRONUNCIAMIENTO, INTERPUESTA POR EL LCDO. VÍCTOR ALDANA EN REPRESENTACIÓN DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, PARA QUE LA SALA SE PRONUNCIE Y ESTABLEZCA LA VALIDEZ JURÍDICA DE LA RESOLUCIÓN N°15-105-97-J.D. DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 1997, EXPEDIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Lcdo. Víctor Aldana, actuando en representación de la Caja de Seguro Social, ha presentado petición de pronunciamiento para que la Sala se pronuncie y establezca la validez jurídica de la Resolución N°15-105-97-J.D. de 1 de septiembre de 1997, expedida por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social.

I. El acto administrativo objeto de la petición de pronunciamiento de la Caja de Seguro Social.

La Caja de Seguro Social, a través de su apoderado judicial el Lcdo. Víctor Aldana, solicita a la Sala que se pronuncie y establezca la validez jurídica de la Resolución N° 15-105-97-J.,D. de 1 de septiembre de 1997, expedida por la

Junta Directiva de la Caja de Seguro Social.

El Lcdo. Aldana sostiene que debido a acciones judiciales emprendidas por la Caja de Seguro Social en el año 1982, en contra de las empresas promotoras del Programa Colectivo de Viviendas, la institución asumió a través de administraciones judiciales, la venta y elaboración de escrituras públicas contentivas del contrato de compraventa y préstamos hipotecarios y anticréticos de las viviendas construidas sobre las fincas embargadas, así como su inscripción en el Registro Público. Según el Lcdo. Aldana un número significativo de personas favorecidas con los préstamos para la adquisición de viviendas, no han atendido los llamados que ha realizado la institución para que suscriban las escrituras y se perfeccione la hipoteca, ocasionando ello severos perjuicios a la Caja, pues, convino en que los beneficiarios de tales préstamos, ocuparan las viviendas sin que se estableciera una disposición que impusiera el pago de rentas durante el período en que se perfeccionaba la hipoteca, lo que derivó en altas morosidades. Por ello se emitió la Resolución cuya ilegalidad y validez se pide se interprete, basada en que la vivienda fue abandonada con una alta morosidad, o simplemente, porque quienes la ocupan han incurrido en morosidades excesivas. No obstante, a criterio del Lcdo. Aldana, la disposiciones legales contenidas en la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, que sirven de apoyo para la expedición del acto administrativo, no parecen justificar la medida, mismas que se citan a continuación:

"ARTICULO 22: Son atribuciones y deberes del Director General:
a) Asistir a las sesiones de la Junta Directiva;
b) Ejecutar y hacer ejecutar las resoluciones y acuerdos de la Junta Directiva. Deberá, sin embargo, objetar por escrito y dentro de los quince (15) días siguientes a su aprobación, las resoluciones y acuerdos que considere contrarios a la Constitución, las leyes o los reglamentos de la Caja de Seguro Social o los intereses de la misma. Si la Junta Directiva insistiere en su decisión, el Director General le dará cumplimiento, pero excento de toda responsabilidad;
c) Ordenar gastos hasta Veinte Mil Balboas (B/.20,000.00) en cada caso dentro de los límites del respectivo presupuesto. Si tuviese que hacer gastos adicionales deberán ser aprobados por la Junta Directiva, a la cual deberá presentar un informe mensual de los gastos;
d) Vigilar el buen funcionamiento de las dependencias de la Caja, expedir las resoluciones pertinentes y dictar las normas e instrucciones que considere conveniente en ejercicio de sus facultades;
e) Nombrar, trasladar y remover a los empleados, determinar sus deberes e imponerles sanciones;
f) Conceder vacaciones y licencias a los empleados de la Caja;
g) Celebrar sujeto a la aprobación de la Junta Directiva, acuerdos y arreglos tendientes a la eficiencia y economía de los beneficios por riesgo de Enfermedad y Maternidad;
h) Resolver en primera instancia, reclamos y consultas e imponer sanciones;
i) Velar por la correcta administración de las inversiones;
j) Presentar un informe a la Asamblea Nacional cada año, en el mes de octubre, de las actividades de la Caja de Seguro Social. Asimismo deberá presentar a la Junta Directiva, el 31 de enero de cada año un informe sobre las actividades del año anterior, acompañado del respectivo balance;
k) Presentar a la Junta Directiva a más tardar el primero (1°) de agosto, el presupuesto de ingresos y egresos de la Institución y el plan de inversiones para el año siguiente;
l) Las demás atribuciones y deberes que le señale la Ley y los Reglamentos de la Caja."

> "ARTICULO 30: Todas la solicitudes de préstamos hipotecarios requerirán la recomendación previa del Comité de Crédito y de la Dirección General y la autorización de la Junta Directiva."

Por su parte el Lcdo. Aldana plantea la tesis que la aprobación del préstamo para adquisición de la vivienda y la autorización de descuento voluntario no tuvo como finalidad el uso y ocupación de la vivienda, sino la adquisición de su dominio, para lo cual se requería de la celebración de un contrato de préstamo con garantía hipotecaria y anticrética que debió formalizarse tal como lo ordena el artículo 38-A, en concordancia con el apartado b) del artículo 37 de la Ley Orgánica vigente, que autorizan a la Junta Directiva a otorgar préstamos a asegurados para compra o adquisición de casa propia mediante la constitución de préstamos con garantía hipotecaria y anticrética de la siguiente manera:

> "ARTICULO 37: Los fondos de la Caja de Seguro Social podrán invertirse en lo siguiente:
> a)...
> b) Préstamos con garantía hipotecaria y anticrética a los asegurados para la construcción o adquisición de vivienda propia con seguro colectivo de vida."

> "ARTICULO 38-A: Autorízase a la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social con el propósito de que pueda hacer préstamos a los asegurados para la compra de terrenos y casas de tipo residencia construidas sobre esos terrenos, que sean de propiedad de la Nación, de los Municipios o de las Instituciones Autónomas del Estado."

También señala que el compromiso asumido por la Caja de Seguro Social de formalizar el traspaso de las viviendas y de los préstamos hipotecarios y anticrético, con la elaboración de escrituras públicas y su inscripción en el Registro Público, se adoptó contrariando lo que para tal efecto establecía el Reglamento de Préstamos Hipotecarios que regía entonces, donde se disponía que le correspondía al prestatario la formalización del préstamo en un plazo de 30 días, texto que se repite en el artículo 33 que rige en la actualidad que dice:

> "ARTICULO 33: El Departamento de Préstamos Hipotecarios notificará al asegurado la resolución de la Junta Directiva.
> El asegurado deberá formalizar su préstamo, a más tardar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha en que se le ha indicado que su solicitud de préstamos fue aprobada.
> Transcurrido este plazo, la aprobación se deja sin efecto, salvo que el interesado pida una prórroga justificada.
> Los gastos de escritura, registro y peritaje será pagados por el prestatario."

El Lcdo. Aldana afirma que la Caja de Seguro Social se enfrente a una situación muy compleja con respecto a los dineros adeudados por los prestatarios durante el tiempo que usufructuaron las viviendas, puesto que al permitírsele el ingreso a las viviendas por el solo hecho de haber sido favorecidos con la aprobación de los préstamos y a su vez firmar una autorización de descuento voluntario, se omitió un requisito esencial para hacer válido o justificable el cobro de rentas mensuales a los ocupantes o prestatarios mientras se perfeccionaba el contrato hipotecario. Finalmente plantea algunas consideraciones jurídicas en torno al acto administrativo bajo examen, donde destaca que la adopción de este mecanismo produciría efectos categóricos tanto para el prestatario como para la Institución. Entre los efectos para el prestatario figuran: quedar privado de la posesión de la vivienda, perder los abonos efectuados, se extingue la deuda producida durante el tiempo que usufructuó la vivienda si no se procede al cobro de la misma; y, entre los efectos para la institución señala: recuperación del inmueble, que permitiría la libre

disposición del mismo y por consiguiente podrá ser vendido o arrendado, y también sería posible la obtención de los dineros abonados para adquirir la propiedad o cualesquiera otros que hubiese pagado el prestatario o deudor con ocasión del trámite de obtención de la vivienda.

II. Contestación de la solicitud de pronunciamiento prejudicial sobre la validez jurídica de la Resolución N° 15,105-97 J.D de 1 de septiembre de 1997, por parte del apoderado legal de la Caja de Seguro Social y la Vista Fiscal de la Procuradora de la Administración.

Mediante escrito fechado el 8 de abril de 1999, el apoderado legal de la Caja de Seguro Social, Lcdo. Fernando López Alba, contestó la petición de pronunciamiento presentada ante esta Sala Tercera.

En el escrito se niegan los hechos en que se fundamenta la petición y se señala que desde 1982 hasta la actualidad se han realizado y realizan las diligencias administrativas y judiciales para recuperar los bienes de la institución, luego que algunos prestatarios por diversas causas no lograron finiquitar sus compromisos recíprocos con la Caja de Seguro Social, aunado a la complejidad derivada del Programa Colectivo de Vivienda. En relación a ello afirma el Lcdo. López Alba, que de conformidad a lo previsto en el artículo 47 del Reglamento de Préstamos Hipotecarios de la Caja de Seguro Social, la falta de pago de seis (6) mensualidades dará derecho a la institución a declarar vencido el contrato y demandar judicialmente al deudor, y, en el caso de la familia Quintana Soriano, se presentaron los presupuestos que señala la norma reglamentaria, se procedió conforme a ella y se dejó sin efecto el contrato de préstamo hipotecario luego de haber iniciado el correspondiente juicio ejecutivo por jurisdicción coactiva para el cobro de las sumas adeudadas.

Destaca que el Lcdo. López Alba que el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, como el artículo 30 del Reglamento de Préstamos Hipotecarios de la Caja de Seguro Social, señala a la Junta Directiva como la encargada de realizar los préstamos hipotecarios. Finalmente reitera que la formalización de las escrituras públicas contentivas de los contratos de préstamos hipotecarios no pudieron efectuarse dentro del período de treinta (30) días hábiles como lo establecía el Reglamento por las razones antes anotadas, lo cual no significa que la Caja de Seguro Social incumplió las obligaciones originadas en el contrato de préstamo hipotecario, ya que al prestatario se le dio la posesión del bien objeto del contrato y éste asumió los derechos y obligaciones pactados.

Por otro lado, la Procuradora de la Administración, mediante la Vista Fiscal N° 243 de 2 de junio de 1999, que es visible de fojas 17 a 26 del expediente, emitió concepto con relación a la petición de interpretación presentada ante esta Sala Tercera. Según la Procuradora de la Administración, en el proceso que nos ocupa, se colige que los prestatarios infringieron el texto del artículo 22 del Reglamento de Préstamos Hipotecarios, porque no cumplieron con el requisito de entregar a la institución la Escritura contentiva del Contrato de Préstamo con Garantía de Primera Hipotecaria y Anticresis debidamente inscrita en el Registro Público, situación que implica, a su criterio, que la ejecución del mismo no se supeditó a las normas jurídicas de las que se deriva, por lo que no es un documento que pueda darse por terminado al igual que los contratos que rigen plenamente entre las partes. Por ello, también señala la Procuradora, no es aplicable el artículo 47 del Reglamento de Préstamos Hipotecarios que cita el Lcdo. Fernado López Alba en representación de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, porque dicha norma se refiere al derecho de la institución de previsión social, para declarar vencido el contrato y demandar judicialmente al deudor cuando se incurra en la falta de seis (6) mensualidades.

Finalmente la Procuradora de la Administración destaca que de conformidad

a lo previsto en los artículo 25 y 26 del Reglamento de Préstamos Hipotecarios, si no se cumpliere con la entrega de documentos en el plazo estipulado, la Caja de Seguro Social a través de la Dirección de Ingeniería y Arquitectura, ordenará la preparación de un informe que refleje la disconformidad y justificación de prestatario, para que la Dirección General resuelve lo pertinente. En este caso, según la Procuradora de la Administración, la Caja de Seguro Social no concedió el plazo de quince días, contados a partir del levantamiento del Acta de Inspección Final de que trata el artículo 25 del Reglamento, para que entregaran la Escritura de declaración de mejoras debidamente inscrita en el Registro Público, para que luego de transcurrido ese plazo, se ordenara a la Dirección de Ingeniería y Arquitectura la preparación del mencionado informe. A criterio de la Procuradora, se surtió, pues, un procedimiento distinto al consignado en la norma.

III. Decisión de la Sala.

Evacuados los trámites legales, la Sala procede a resolver el asunto sometido a su consideración.

Se trata de una petición de interpretación y apreciación de validez a fin de que la Sala se pronuncie prejudicialmente sobre el contenido de la Resolución N°15-105-97-J.D. de 1 de septiembre de 1997, expedida por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, que resuelve dejar sin efecto la aprobación por parte del Director General de la Caja de Seguro Social, en Acta N°06-84 del Comité de Crédito del Programa Colectivo de Vivienda de esa Institución y la Resolución N° 9423-94-JD en lo que concierne al otorgamiento del préstamo N°23-0514 de los señores Rogelio Alexis Quintana y Jacinta Soriano de Quintana, para la adquisición de la vivienda N°55, ubicada en la Urbanización La Luz de Veraguas. El fundamento de derecho para la expedición del acto en mención, se ubica en lo previsto en el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social y el artículo 30 del Reglamento Interno de Préstamos Hipotecarios, disposiciones que a juicio de quien recurre, no parecen justificar la medida.

Antes de adentrarnos a conocer el asunto sometido a la consideración de esta Sala, es importante destacar que la pretensión de apreciación de validez presentada por el apoderado judicial de la Caja de Seguro Social, no le es factible proponerla ya que carece de legitimación de conformidad con las disposiciones legales vigentes al momento en que se presentó la demanda. Ello es así, porque de conformidad a lo previsto en el artículo 98 numeral 12 del Código Judicial, la Sala Tercera está facultada para conocer prejudicialmente sobre la validez de los actos administrativos que deberán servir de base a una decisión jurisdiccional, por consulta que al efecto formule la autoridad encargada de administrar justicia, y el apoderado judicial de la Caja de Seguro Social, evidentemente no es una autoridad encargada de administrar justicia. Por ello, la Sala sólo entra al conocimiento del proceso contencioso administrativo de interpretación, que según el numeral 11 de la misma disposición legal, tiene como objeto un pronunciamiento acerca del sentido y alcance de un acto administrativo, cuando la autoridad administrativa encargada de su ejecución lo solicite de oficio antes de ejecutar el acto.

Para resolver, es oportuno recordarle a la Procuradora de la Administración que todas la disposiciones reglamentarias dictadas en relación a esta materia y cualesquiera otras que le sean contrarias, quedaron derogadas con la expedición de la Resolución N° N°10,564-95-J.D. de 27 de julio de 1995, "por la que se aprueban las modificaciones al Reglamento de Préstamos Hipotecarios, de conformidad con lo que establece el artículo 17, literal B, de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social", publicada en la G.O. N° 22,838 de 1 de agosto de 1995, razón por la que a criterio de la Sala, el marco jurídico se circunscribe a lo previsto en la Resolución N° 10,564-95-J.D. de 27 de julio de 1995, en la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social y demás disposiciones legales que complementan la materia.

En relación a la viabilidad jurídica del acto administrativo objeto de este negocio, la Sala considera hacer ciertas observaciones preliminares. En el Capítulo VI del Reglamento de Préstamos Hipotecarios, se prevé entre otros aspectos, que la Dirección General es la encargada de la ejecución de las inversiones que en materia de préstamos hipotecarios allí se especifica, y es a través del Departamento de Préstamos Hipotecarios, que se hace responsable de la ejecución de esos programas. En cuanto a las solicitudes de los préstamos hipotecarios, se señala que requerirán la recomendación previa del Comité de Crédito y de la Dirección General, además de la autorización de la Junta Directiva, cuya resolución deberá ser notificada al asegurado por parte del Departamento de Préstamos Hipotecarios. Según el artículo 33 del Reglamento, el asegurado cuenta con treinta (30) días hábiles para formalizar su préstamo, contados desde el primer día hábil siguiente a la fecha en que se le ha indicado que su solicitud de préstamo fue aprobada, y, una vez transcurrido el plazo la aprobación se deja sin efecto, salvo que el interesado pida una prórroga justificada; para los efectos formales, según la misma disposición reglamentaria, el prestatario correrá con los gastos de escritura, registro y peritaje, de lo cual no existe constancia en el expediente.

Ante lo expuesto, y conforme a lo que se aprecia en la documentación que reposa en el expediente, es evidente que el contrato no se perfeccionó al omitirse aspectos de forma que claramente contemplan las normas previstas para tal fin, aunque existiese, en el caso de los señores Rogelio y Jacinta Quintana, un compromiso de pago que no fue cumplido en 40 meses, una vez fue aprobada la solicitud de préstamo. Por esa razón, a juicio de la Sala, no son aplicables las normas que regulen situaciones alusivas al contrato, como lo es el artículo 47 del Reglamento de Préstamos Hipotecarios, que según el representante de la Junta Directiva sería aplicable ante la mora de los prestatarios.

La Sala considera que para la expedición de la Resolución N°15-105-97-J.D. de 1 de septiembre de 1997, además de las normas invocadas como fundamento de derecho, es decir, el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro y el artículo 30 del Reglamento de Préstamos Hipotecarios, se debió invocar en el artículo 33 del reglamento en mención. Esta norma prevé que en el evento de que no se formalice el préstamo una vez aprobada la solicitud en el plazo de 30 días, se dejará sin efecto la aprobación de la solicitud de préstamo, salvo que el interesado pida una prórroga, lo cual no sucedió en este caso. Pese a ello, la Sala estima que la Resolución N° 15-105-97-J.D. de 1 de septiembre de 1997, es jurídicamente viable, dado que tiene sustento legal en el artículo 33. No obstante, la Sala advierte a la Caja de Seguro Social que en actos que expedida en el futuro, de contenido similar al que nos ocupa, debe fundamentarlos especialmente en el artículo 33 del Reglamento Interno, que es la norma que regula expresamente esos casos.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA prejudicialmente que es viable jurídicamente el acto administrativo contenido en la Resolución N°15-105-97-J.d. de 1 de septiembre de 1997, expedida por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social.

Notifiquese y Cumplase

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN

DEMANDA DE INDEMNIZACIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. BORIS BARRIOS, EN REPRESENTACIÓN DE CRISTOBAL A. CAÑIZALES MONTOTO, POR LA SUMA DE B/.28,886.66,

CORRESPONDIENTE DESDE LA FECHA DE SU SEPARACIÓN DEL CARGO COMO ALCALDE DEL DISTRITO DE ARRAIJÁN, HASTA LA FECHA DE SU REINTEGRO. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FABREGA P. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Boris Barrios, actuando en nombre y representación de CRISTOBAL A. CAÑIZALES MONTOTO, ha interpuesto demanda plena jurisdicción para que se le indemnice por la suma de B/.28,886.66, correspondiente desde la fecha de su separación del cargo como Alcalde del Distrito de Arraiján, hasta la fecha de su reintegro.

Advierte el Magistrado Sustanciador que el licenciado Barrios en el apartado de lo que se demanda sólo solicita que se ordene al Municipio de Arraiján el pago por indemnización del señor Cristóbal A. Cañizales por la suma de veintiocho mil ochocientos ochenta y seis balboas con sesenta y seis centésimos (B/.28,886.66), monto éste correspondiente desde su fecha de separación del cargo, hasta la fecha en que se hizo efectivo su reintegro como Alcalde del Distrito de Arraiján, sin pedir que se declare la nulidad de ningún acto administrativo.

Por otro lado, quien suscribe observa que en la parte final de la demanda el licenciado Barrios indica en un apartado titulado "lo que se solicita" que se decrete la nulidad de la resolución No. 14 de 4 de abril de 2000 y que se ordene la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la separación injusta del cargo del Distrito de Arraiján del señor Cristóbal A. Cañizales M.. Además en el apartado del concepto de la infracción señala que la resolución No. 14 de 4 de abril de 2000 es nula al infringir el artículo 29 de la ley 135 de 1943, por lo que se colige que lo que persigue la actora es la declaratoria de nulidad de la resolución No. 14 de 4 de abril de 2000.

Si bien es cierto que se presentó copia autenticada de la resolución No. 14 de 4 de abril de 2000, en la misma no hay constancia de que la misma le haya sido notificada a la actora. Por lo tanto, la demanda no cumple con el requisito establecido en el artículo 44 de la Ley 135 de 1943, debido a que no se ha acreditado la notificación del acto impugnado. La notificación del acto que se impugna es un requisito de suma importancia exigido por la Ley. Todo acto administrativo impugnado requiere no sólo su autenticación sino la constancia de la notificación del mismo para demostrar el agotamiento de la vía gubernativa y si se ha propuesto dentro de los dos meses siguientes, por lo que el libelo de la demanda deberá ser acompañado de estas constancias, pues, de no ser así, dicha demanda se encontrará deficientemente propuesta. En relación con lo anterior, el artículo 46 del mismo cuerpo legal estipula que de encontrarse imposibilitado de cumplir con lo establecido en dicha norma, el demandante podrá optar por enunciar las oficinas donde se encuentra ubicado el original para que sea el Magistrado Sustanciador quien la solicite previo a la admisión de la demanda. Tampoco se observa en el expediente contentivo de la demanda, documento alguno que demuestre que el demandante o su apoderado judicial solicitaran en algún momento, la copia autenticada del acto impugnado y la constancia de la notificación a la institución correspondiente.

En virtud de lo anterior, como la parte actora omitió los requisitos mencionados, su demanda no debe admitirse, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Boris Barrios, actuando en nombre y representación de CRISTOBAL A. CAÑIZALES MONTOTO, para que se le indemnice por la suma de B/.28,886.66, correspondiente desde la fecha de su separación del

cargo como Alcalde del Distrito de Arraiján, hasta la fecha de su reintegro.

Notifiquese,

(fdo.) JORGE FABREGA P.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JULIO JOVANÉ DEL CID, EN REPRESENTACIÓN DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y GEOTÉCNICA, S. A. (INEG, S. A.) PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 790- 98 D.G. DE 30 DE DICIEMBRE DE 1998, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN NO. 546-99 D.G. DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 1999, AMBAS EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, SU ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA LÓPEZ. PANAMÁ, TRES (3) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Julio Jované Del Cid, actuando en nombre y representación de INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y GEOTÉCNICA, S. A. (INEG, S. A.), ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 790-98 D.G. de 30 de diciembre de 1998, modificada por la Resolución No. 546-99 D.G. de 15 de septiembre de 1999, ambas emitidas por la Dirección General de la Caja de Seguro Social y su acto confirmatorio.

La parte actora solicita al Magistrado Sustanciador que, previa a la admisión de la demanda, pida a la Secretaría General de la Caja de Seguro Social copia autenticada de los siguientes documentos:

1. Resolución No. 790-98 D.G. de 30 de diciembre de 1998, emitida por la Directora General de la Caja de Seguro Social, con constancia de su notificación.

2. Recurso de reconsideración con apelación en subsidio, promovido el 1° de febrero de 1999, con sello de recibo.

3. Resolución No. 546-99 D.G. de 15 de septiembre de 1999, dictada por la entonces Directora General de la Caja de Seguro Social, con constancia de su notificación.

4. Sustentación del recurso de apelación, de 12 de noviembre de 1999, con sello de recibo.

5. Resolución No. 18,969-00 J.D. de 11 de abril de 2000 de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, con constancia de notificación.

El apoderado judicial de la sociedad demandante manifiesta que las copias autenticadas requeridas le fueron denegadas, y como prueba de ello, aportó el escrito que milita a foja 17, donde solicita al Secretaría General de la Caja de Seguro Social la expedición de copia autenticada de los documentos antes listados.

Observa el Magistrado Sustanciador que dicha solicitud fue recibida por la Secretaría General de la Caja de Seguro Social el 18 de julio de 2,000, a las 12:30 p. m. y la demanda cuya revisión nos ocupa, fue recibida por la Secretaría de la Sala el 18 de julio de 2,000, a las 3:43 p. m.

El artículo 46 de la Ley 33 de 1946 señala que si el acto no ha sido publicado, o se deniega la expedición de copia o la certificación sobre la

publicación, se expresará así en la demanda, con indicación de la oficina donde se encuentre el original, o del periódico donde se hubiere publicado, para que el sustanciador lo solicite antes de admitir la demanda.

Considera el Magistrado Sustanciador que en este caso no se ha acreditado la denegación de las copias de los documentos enumerados, pues la expedición de dichas copias autenticadas fue requerida el mismo día que fue confeccionada y presentada la demanda, según se desprende claramente de los escritos a folios 17 y 26.

Por otro lado, se percata de igual forma el suscrito, que el apoderado judicial de la sociedad demandante cita como violados el artículo 2, literal b), del Decreto Ley 14 de 1954 y el artículo 62 del Código de Trabajo, sin embargo, no transcribe estas normas. La Sala ya ha explicado la importancia de la transcripción literal de las normas que se consideran infringidas por el acto acusado.

> "La expresión de las disposiciones que se estiman violadas y el concepto de la violación de las mismas, constituyen requisito esencial para la admisión de las demandas contencioso-administrativas de plena jurisdicción, tal como lo establece el numeral 4, del artículo 43 de la Ley 135 de 1943 y lo ha indicado la Sala de lo Contencioso-Administrativo en reiterados pronunciamientos.
>
> La Sala ha expresado, que para cumplir con los requisitos anteriores, deben transcribirse las disposiciones legales que se estiman violadas, para que de la confrontación con el acto administrativo impugnado, con la norma que se considera violada, se pueda apreciar la violación aducida. Además, debe explicarse el concepto en que se considera que la norma ha sido violada por el acto impugnado y señalar por cuál de los motivos de ilegalidad que establece el artículo 26 de la Ley 135 de 1943, considera el demandante que se ha consumado la violación." (Registro Judicial de febrero de 1997, pág. 258).

Por las razones expuestas, no debe dársele curso a la presente demanda, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

En consecuencia, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, representada por el Magistrado que suscribe, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Julio Jované Del Cid, en representación de INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y GEOTÉCNICA, S. A. (INEG, S. A.) para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 790-98 D.G. de 30 de diciembre de 1998, modificada por la Resolución No. 546-99 D.G. de 15 de septiembre de 1999, ambas emitidas por la Dirección General de la Caja de Seguro Social, su acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO SERGIO GONZÁLEZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE MARÍA MIRANDA DE AGUILAR, PAR QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL NO. 4, DE 2 DE FEBRERO DE 2000, DICTADO POR EL MINISTRO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL, ACTO CONFIRMATORIO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE:

MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRES (3) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Sergio González, actuando en nombre y representación de la señora María Miranda de Aguilar, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto de Personal No. 4, de 2 de febrero del 2000, emitido por el Ministerio de Desarrollo Laboral, acto confirmatorio, y para que se hagan otras declaraciones.

A través del acto originario impugnado se destituyó a la señora María Miranda de Aguilar del cargo de analista financiera, en la Dirección General de Trabajo, planilla No. 1, empleada No. 382, al cual correspondía un salario de B/.400.00 mensuales. Este acto fue confirmado mediante Resuelto No. 32/2000, fechado el 5 de junio del presente año, emitido por el Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral.

La Sala al proceder a revisar la demanda para determinar si cumple con los requisitos que establecen las leyes vigentes que regulan el régimen de lo contencioso administrativo, así como las normas del Código Judicial aplicables, se percata que con la misma no se han aportado copias debidamente autenticadas de los actos acusados, con la constancia de su notificación. Asimismo, el actor omite solicitar a la Sala que requiera tales copias a la Administración, ya sea porque le han sido denegadas o ha sido infructuosa su obtención.

El artículo 820 del Código Judicial establece las formas como los documentos deben ser aportados al proceso. Tratándose de copias, esta norma preceptúa que "Las reproducciones deberán ser autenticadas por el funcionario público encargado de la custodia del original ..." A fojas 1, 2-4 del expedidente, se aprecia que el demandante ha adjuntado copia simple de los actos administrativos acusados, lo cual incumple con el requisito que establece el artículo del Código Judicial copiado.

Por otra parte, la demandante omite solicitar a la Sala que requiera a la oficina competente del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral copia autenticada de los actos cuya ilegalidad pretende, como una petición previa antes de admitir la demanda, conforme lo prescribe el artículo 46 de la Ley 136 de 1943.

En mérito de lo expuesto, la Magistrada Ponente, estima que no debe dársele curso a la demanda con fundamento en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

De consiguiente, la Magistrada Sustanciadora, en representación de la Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción presentada por la señora María Miranda de Aguilar, por medio de apoderado judicial, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto de Personal No. 4, de 2 de febrero de 2000, proferido por el Ministerio de Desarrollo Laboral, acto confirmatorio, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTARTIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA

FIRMA BERRÍOS Y BERRÍOS, EN REPRESENTACIÓN DE VIRGINIA BURGOS GUERRA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL RESUELTO N°1-205 DE 30 DE OCTUBRE DE 1999, DICTADO POR EL GERENTE GENERAL DEL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Berríos y Berríos ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema recurso de apelación contra la resolución de 20 de junio de 2000 que no admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por la firma Berríos y Berríos, en representación de VIRGINIA BURGOS GUERRA, para que se declare nulo, por ilegal, el Resuelto N°1-205 de 30 de octubre de 1999, dictada por el Gerente General del Banco de Desarrollo Agropecuario, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador no admitió la demanda porque el actor no presentó copia autenticada del acto impugnado con la correspondiente constancia de su notificación y tampoco aportó copia de la resolución que resuelve el recurso de reconsideración con apelación en subsidio. Por otro lado, si bien es cierto que el recurrente le solicitó al Gerente General del Banco de Desarrollo Agropecuario, mediante escrito fechado 11 de mayo de 2000, que certificara si sobre el recurso de reconsideración con apelación en subsidio había recaído decisión alguna, no le solicitó al Magistrado Sustanciador la obtención de dicha documentación.

La recurrente considera que la demanda debe ser admitida, ya que la institución demandada no tiene el original del resuelto y por tanto no puede certificar copia alguna. Además dicho resuelto nunca le fue notificado, pero que al presentar el recurso de reconsideración con apelación en subsidio se dio por notificado en base al principio de conducta concluyente. Por otro lado, señala que no puede aportar la copia de la resolución que resuelve el recurso de reconsideración con apelación en subsidio, pues nunca fue fallado y la institución demandada se niega a certificar este hecho.

El resto de los Magistrados que componen la Sala Tercera consideran que no le asiste la razón a la actora, toda vez que la demanda no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 44 y 46 de la Ley 135 de 1943, debido a que la recurrente no presenta copia autenticada del acto acusado, ni tampoco hay constancia en la misma de que se formuló la petición a la cual se refiere el artículo 46 de la mencionada Ley. Esta Sala ha sido constante en mantener el criterio de que toda demanda requiere la copia del acto administrativo impugnado con las constancias de la autenticación y la notificación del mismo para demostrar el agotamiento de la vía gubernativa, por lo que el libelo de la demanda deberá acompañarse de estas constancias, pues, de no ser así, dicha demanda se encontrará deficientemente propuesta.

Por otro lado, la parte actora no ha demostrado el agotamiento de la vía gubernativa. Esto es así, toda vez que la Sala ha señalado en distintas ocasiones que es requisito sine qua non, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, que el actor no sólo solicite ante la entidad demandada que certifique si se ha producido el silencio o negativa tácita de su pretensión, sino que además es necesario, si la administración no se pronuncia, que el demandante le solicite al Magistrado Sustanciador que requiera al funcionario demandado la información antes descrita. Es necesario advertir que si la actora no hace esta solicitud, la Corte no puede pedirle a esta información al ente demandado, toda vez que la misma solamente se hace a petición de parte.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN la resolución de 20 de junio de 2000 que NO ADMITE

la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por la firma Berríos y Berríos, en representación de VIRGINIA BURGOS GUERRA, para que se declare nulo, por ilegal, el Resuelto N°1-205 de 30 de octubre de 1999, dictada por el Gerente General del Banco de Desarrollo Agropecuario, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Notifiquese y Cumplase,

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA EN REPRESENTACIÓN DE ABEL RAMÍREZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO CONTENIDO EN LA NOTIFICACIÓN NO. 09269, DE 25 DE SEPTIEMBE DE 1997, EFECTUADA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CUATRO (4) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Ayala, quien actúa en nombre y representación del señor Abel Ramírez, ha presentado escrito de desistimiento del presente proceso de plena juridicción, que promovió para que se declare nulo, por ilegal, el acto administrativo contenido en la notificación No. 09269, fechada el 25 de septiembre de 1997, hecha a su poderdante por la Directora Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, según aprecia a foja 59 de los autos.

El documento por medio del cual se desiste del proceso fue corrido en traslado a la Procuradora de la Administración, mediante providencia de 21 de julio de los corrientes, quien se notificó de la misma, tal como se aprecia a fojas 60.

De acuerdo con el artículo 66 de la Ley 135 de 1943, "En cualquier estado del juicio es admisible por declaración expresa, el desistimiento del recurso". Esta disposición legal agrega que "El desistimiento será siempre notificado a la parte contraria".

A juicio de la Sala, la presente solicitud expresa de desistimiento es viable, por lo que cabe admitirla y ordenar el consecuente archivo del expediente.

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el desistimiento del proceso de plena jurisdicción instaurado por el licenciado Carlos Ayala, en representación del señor Abel Ramírez, contra el formulario de notificación No. 09269, fechado el 25 de septiembre de 1997, emitido por la Dirección Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, actos confirmatorios, y para que se hagan otras declaraciones. Consecuentemente, se ORDENA el archivo del respectivo expediente.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ERNESTO CEDEÑO ALVARADO, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE JOSEFA MARÍA ALVARADO DE CEDEÑO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 088-98, DE 24 DE JUNIO DE 1998, EXPEDIDA POR EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS, ACTO CONFIRMATORIO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CUATRO (4) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Ernesto Cedeño Alvarado, actuando en nombre y representación de la señora Josefa María Alvarado de Cedeño, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 088-98, de 24 de junio de 1998, emitida por el Ministro de Obras Públicas, acto confirmatorio, y para que se hagan otras declaraciones.

I. Contenido del acto impugnado.

Mediante la Resolución acusada de ilegal, el Ministerio de Obras Públicas resolvió, entre otras cosas, acceder a la petición de la demandante de exoneración del pago del gravamen de contribución de mejoras por valorización, asignado a la finca de su propiedad No. 61380 Bis, Lote No. 73, inscrita en el Registro Público al Tomo No. 1440, Folio No. 116, Sección de la Propiedad de la Provincia de Panamá, por cumplir la peticionaria con los requisitos de la Ley 6, de 16 de junio de 1987, modificada, que establece un conjunto de beneficios y derechos en favor de los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social y en favor de las personas de la tercera y cuarta edad.

La referida resolución también dispuso que esa exoneración en concepto de tasa de valorización debe ser computada sobre los intereses y recargos generados a partir del día 19 de septiembre de 1990, en que la contribuyente formalizó su solicitud de exoneración ante la Dirección General de Valorización. Por estimarse parte central de la presente demanda, trancribimos los puntos segundo y tercero de la citada Resolución No. 088-98, de 24 de junio de 1998.

> "SEGUNDO: Que la suma adeudada por la contribuynete en concepto del gravamen de Contribución de Mejoras por Valorización de la Finca No. 61380, más los recargos e intereses hasta el día 18 de septiembre de 1990 (un día antes de formalizada la solicitud de exoneración), ascienden a la suma de B/. 613.40, la cual deberá la contribuyente cancelar en su totalidad, al contado o mediante Compromiso de Arreglo de Pago.
> TERCERO: No se admite el descuento o rebaja del gravamen de Contribución de Mejoras por Valorización que le fuera asignado a la Finca No. 6130 Bis, por no contar este descuento con la autorización de la Comisión de Valorización, a quien corresponde exclusivamente esta facultad, al tenor de lo establecido en el literal d) del Artículo 1 de la Ley No. 18 de 26 de junio de 1980, que modificó el Artículo 4 de la Ley No. 94 de 4 de octubre de 1973". (fojas 3-4)

Esta Resolución, a su vez, fue confirmada por la No. 10-99, de 27 de mayo de 1999, agotándose así la vía administrativa.

II. Disposiciones legales que se estiman violadas y su concepto, según la parte actora.

El demandante afirma que los actos administrativos que reprocha por ilegales han violado los artículos 1, numeral 17, de la Ley 6, de 16 de junio de 1987, y el numeral 1, artículo 98, del Código Judicial.

La primera norma señalada establece lo siguiente:

"Artículo 1. Todos los panameños o extranjeros residentes en el territorio nacional con cincuenta y cinco (55) o más si son mujeres y con sesenta años (60) o más si son hombres, y los pensionados por invalidez de menor edad, gozarán de los siguientes beneficios:
...
...
...
17. La exoneración del pago de la tasa de valorización a su propiedad siempre que ésta sea única y constituya su vivienda.
Se iniciará el cobro de la tasa de valorización cuando sea transferida la propiedad.
...
...
..."

En el extracto central del argumento que expone la actora afirma que este precepto legal ha sido violado por interpretación errónea, puesto que el acto administrativo interpreta que la exoneración debe darse sólo desde el momento en que el petente la solicite en adelante. A su juicio, la exoneración ha de otorgarse "... desde el momento en que la Ley salió debidamente formalizada en la Gaceta Oficial" (Cfr. foja 95).

El apoderado judicial de la demandante agrega, respecto de este cargo, que no es correcto acceder únicamente a lo impetrado por su patrocinada a partir del día 19 de septiembre de 1990, fecha en que hizo su solicitud de exoneración, porque con ello se le está cobrando B/.613.40, es decir, la deuda que existía antes de esa petición, lo que no honra los presupuestos de la Ley 6 de 1987 modificada. Asegura que los derechos que concede la citada Ley son derechos adquiridos de los jubilados "... independientemente del momento en que se roguen", para lo que cita como ejemplo el criterio que se sigue ante la exoneración del pago del impuesto de inmueble en el Ministerio de Economía y Finanzas. (foja 95).

La segunda disposición legal ivocada es del siguiente tenor literal:

"Artículo 98: A la Sala Tercera le están atribuidos los procesos que se originen por actos, omisiones, prestaciones defectuosas o deficientes de los servicios públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones que ejecuten, adopten, expidan o en que incurran en ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas, los funcionarios públicos o autoridades nacionales, provinciales, municipales y de las entidades públicas autónomas o semiautónomas.

En consecuencia la Sala Tercera conocerá en materia administrativa de lo siguiente:
1. De los decretos, órdenes, resoluciones o cualesquiera actos, sean generales o individuales, en materia administrativa, que se acusen de ilegalidad.
...
...
..."

El actor asegura que esta norma ha sido conculcada de manera directa por omisión, porque "... a través de ella, el Ministerio de Obras Públicas anuló el descuento o rebaja del gravamen de contribución de mejoras por valorización que le fuera asignado a la finca de mi Poderdante, y esto lo hizo de oficio", según el punto tercero del acto administrativo impugnado (foja 97).

En su exposición, agrega que la rebaja del tributo que se le hizo a su representada se confirma en los varios recibos o avisos de cobros emitidos por la Dirección de Valorización del Ministerio que, a su juicio, "... contenían en firme dicha rebaja a cobrar". Estos recibos que menciona son: el No. 22007, hasta el 31 de diciembre de 1987; No. 14140, hasta el 31 de diciembre de 1998; y el No. 1602, hasta el 31 de diciembre de 1990, todos por monto de B/. 207.90; sin embargo, el acto demandado eliminó de oficio esta cantidad y aumentó la tasa a B/. 613.40, luego de considerar que el mecanismo para dicha rebaja "no se ajustaba a derecho".

Según el apoderado judicial de la actora, la resolución objeto de la demanda viola el principio de irrevocabilidad de los actos administrativos, y cita una sentencia de la Sala sobre dicho principio, que a su entender significa que los actos administrativos que reconocen derechos a favor de los particulares, como es el caso de su poderdante, no pueden ser desconocidos mientras no los anule la Sala. De allí que, "no es potestad del Ministerio de Obras Públicas anular lo concretizado por la administración anterior" (Cfr. foja 99).

III. El Informe explicativo de conducta de la entidad pública demandada.

El Ministro de Obras Públicas, por medio de Nota No. DM-555, de 28 de octubre de 1999, rindió el informe explicativo de conducta que esta Sala le requirió, con fundamento en el artículo 57 de la Ley 135 de 1943.

Este documento puede ser resumido en sus partes esenciales, como a continuación se hace:

Mediante Resolución No. 17, de 10 de abril de 1979, se aprobó la contribución por valorización del ensanche de la Vía Tocumen o Domingo Díaz, según lo permite la Ley 94 de 1973.

Con fundamento en la Ley 6 de 1987, la señora Josefa María Alvarado de Cedeño hizo una solicitud de exoneración de esta tasa por su finca No. 61380, según memorial fechado el 19 de septiembre de 1990, en el que también solicitó la exoneración de los recargos e intereses de la mencionada finca.

El Informe explicativo transcribe el artículo 17 de la Ley 6 de 1987, referente a la entrada en vigor de dicha Ley, y el artículo 43 de la Constitución Política de la República sobre la irretroactividad de la Ley y las excepciones a este principio constitucional.

Considera la entidad demandada que como la demandante fue pensionada a partir del 17 de noviembre de 1988, es desde esa fecha que se podría acoger a los beneficios de la Ley 6 de 1987. Además, mediante la Resolución No. 1,311, de 6 de diciembre de 1979, la Dirección General de Valorización modificó el gravamen de los objetantes de las barriadas Altos de San Pedro y San Pablo No. 2. Esta resolución no constituye una rebaja sino que aplica un ajuste que establece un precio de pago al contado y un precio de pago a plazo por cuatrimestres.

Según opina, lo que pide el demandante excede lo que permite la Ley, porque las leyes sólo pueden tener efectos retroactivos por causales específicas cuando en ellas así se exprese. (Cfr. fojas 105-106)

IV. Opinión jurídica de la Procuraduría de la Administración.

La Señora Procuradora de la Administración emitió su criterio legal acerca del asunto bajo examen, mediante Vista Fiscal No. 581, fechada el 3 de diciembre de 1999, que se aprecia de fojas 106 hasta la 122, del expediente principal, en la que se opone a la pretensión de la demandante, tal cual lo prevé en este tipo de demanadas el numeral 2, artículo 348, del Código Judicial.

El Ministerio Público, luego de hacer una reseña de los antecedentes de este proceso, afirma que el apoderado de la actora se ha equivocado en sus

aseveraciones, porque la Administración se ajustó a derecho al conferirle a la señora Alvarado de Cedeño exoneración de la tasa de valorizacióna desde la fecha en que ésta "formalizó su solicitud de exención" (sic).

La Procuraduría conviene en que la señora Josefa María Alvarado de Cedeño cumplió con los requisitos de exoneración que establece la Ley 6 de 1987, tal cual ha sido adicionada y modificada, requisitos de los que dicha funcionaria hace reseña; empero, en lo que respecta al numeral 17 del artículo 1 de la referida Ley que se considera violado, el mismo no establece desde cuándo debe aplicarse su contenido, lo que debe ser complementado con el artículo 17 ibídem, que regula lo atinente a la entrada en vigencia de la Ley. Agrega que en este asunto debe estimarse el principio de irretroactividad de la Ley contenido en el artículo 43 de la Carta Magna.

A su juicio, es incongruente aplicar la norma que se afirma violada desde que la demandante optó por la pensión de vejez, porque si bien la Ley 6 de 1987 fue promulgada antes de que la actora adquiriera este último derecho, es insoslayable que el funcionario administrativo no está facultado para actuar de oficio, sino a instancia de parte interesada, porque de lo contrario incurriría en extralimitación de funciones y desviación de poder, tomando en cuenta lo que dispone el artículo 4 de la Ley 94 de 1973, tal cual ha sido modificado (Cfr. fojas 114-117).

En relación con el segundo cargo de infracción alegado contra el numeral 1 del artículo 98 del Código Judicial, la Señora Procuradora discrepa de la afirmación de la demandante, ya que sin la intervención de la Comisión de Valorización del Ministerio de Obras Públicas, para la aprobación de la disminución del tributo de marras que fue concedido a la administrada mediante Resolución No. 1,311, de 6 de diciembre de 1979, la rebaja de dicho gravamen es ilegal, según el literal d), artículo 4, de la Ley 18 de 1980.

En función de lo anterior, la Procuradora de la Administración solicita a la Sala que deniegue todas las peticiones de la demandante.

V. Consideraciones y decisión de la Sala.

Considera la Sala que el acto administrativo que causa estado, o sea, la Resolución No. 088-98, de 24 de junio de 1998, emitida por el Ministro de Obras Públicas, es violatoria del artículo 1, numeral 17, de la Ley 6 de 1987.

En el presente asunto resulta importante determinar el momento del nacimiento del derecho de la señora Josefa María Alvarado de Cedeño a gozar de exoneración del tributo, en concepto de tasa de valorización, que prevé la Ley 94, de 4 de octubre de 1973, por la cual se establece y reglamenta la "Contribución de Mejoras por Valorización", tal como ha sido modificada.

A juicio de la Sala, este derecho para la demandante no surge cuando la Ley que lo crea fue promulgada en la Gaceta Oficial, como equivocadamente afirma su apoderado legal; y tampoco es correcta la tesis de la Administración y de la Procuraduría de la Administración que señalan como punto de partida para el reconocimiento de la exoneración tributaria, la fecha en que la demandante presentó la solicitud de exoneración.

Considera la Sala que debe estimarse como el punto de referencia correcto para la determinación del derecho de exoneración, que según la Ley pueda asistirle a la demandante, la fecha en que ésta adquirió la condición de jubilada o pensionada de la Caja de Seguro Social, o bien al ser persona de la tercera o cuarta edad, a tenor del artículo 1, numeral 17, que se estima violado.

En autos reposa copia debidamente autenticada de un "listado de jubilados o pensionados" de la Caja de Seguro Social, expedido a petición del Ministerio de Obras Públicas, en el que consta que Josefa María Alvarado, con cédula de identidad personal No. 4-43-384, recibe una prestación de dicha institución por

riesgo de vejez normal, el "17/11/88", fecha en que se otorgó la citada prestación (Cfr. foja 41).

Es verdad inconcusa que una vez adquirido este derecho de pensión por vejez, previsto por las leyes de seguridad social vigentes, nace coetáneamente el derecho de la señora Josefa María Alvarado de Cedeño de gozar de la exoneración tributaria contenida en el artículo 1, numeral 17, de la Ley 6 de 1987. Esta Ley si bien fue promulgada y entró a regir antes de que la administrada adquiriera el referido derecho de exoneración, ello no significa que la aplicación de sus efectos, en el específico caso planteado, revista carácter retroactivo, sino que una vez cumplidos por la interesada los presupuestos de la Ley que permite el derecho de exoneración, desde o partir de entonces opera el citado beneficio.

Vale aclarar que la tasa de valorización que grava el inmueble de la señora Alvarado de Cedeño, o sea, la finca No. 61380 Bis, por causa del ensanche de la Vía Tocumen o Domingo Díaz, fue fijada a la demandante y a otros particulares en el año 1979, mediante Resolución 1,311, de 6 de diciembre de ese año, según así lo afirma su apoderado legal y es reconocido por la Administración en su Informe de Conducta (foja 105). Como la demandante adquirió el derecho de exoneración a partir del 17 de noviembre de 1988, fecha en que fue pensionada por la Caja de Seguro Social, es a partir de esta fecha que goza del beneficio de la citada exoneración y por tanto está obligada a pagar el tributo de valorización antes del 17 de noviembre de 1988.

Estiman los suscritos Magistrados que no puede reconocerse el derecho de exoneración reclamado por la demandante desde antes de la vigencia de la Ley 6, de 16 de junio de 1987, porque ello implicaría una aplicación retroactiva de dicha Ley. Consecuentemente, subsiste la obligación tributaria para la señora Alvarado de Cedeño, en el período comprendido entre la fecha en que fue generado el hecho imponible y establecida la respectiva tasa por valorización y el día 16 de noviembre de 1988, fecha anterior al día en que efectivamente ella adquiere, por haber sido pensionada (foja 41). En adelante, debe estimarse exonerada del mencionado tributo con independencia del momento en que haga la respectiva solicitud, la cual una vez formulada debe concederse a partir de la fecha en que adquirió el derecho de exoneración, porque no hay norma alguna que señale un término para solicitar la exoneración.

La Sala no comparte el criterio de la Administración que desconoció el contenido de la Resolución No. 1,311, de 6 de diciembre de 1979, dictada por la Dirección General de Valorización, mediante la cual atendiendo objeción presentada por los interesados, se modificó la tasa de valorización fijada inicialmente mediante Resolución No. 17, de 10 de abril de 1979, señalando el monto de la tasa por valorización a un conjunto de personas, entre ellas a Josefa A. de Cedeño propietaria de la finca 61380 Bis, en B/. 345.45, como contribución total de 30 cuatrimestres de B/. 11.55 cada uno, y B/. 204.69, al contado. No se trata de una tasa de descuento sino de una modificación del gravamen original que fue objetado por los usuarios, dentro del término legal, y que fue atendido por la Administración.

El literal d) del artículo 4, de la Ley 94 de 1973, que fue invocado por la Administración como norma aplicable al caso, establece como algunas de las atribuciones de la Comisión de Valorización del Ministerio de Obras Públicas, la de "Reglamentar el método para fijar el grado de influencia, la parte del costo, la cuantía de la contribución por Valorización que afectarán a cada finca beneficiada por una obra u obras, los plazos para su pago y las tasas de descuento" (Subraya el Tribunal).

Como se aprecia, por un lado, este precepto emplea la expresión "reglamentar", es decir, "Sujetar a reglamento" o dictar las disposiciones jurídicas para regular los rubros a que se refiere la norma legal ut supra, no "autorizar", función que es distinta y que equivale a aprobar o "Confirmar una cosa con autoridad (Cfr. Diccionario Ilustrado Sopena, Edit. Ramón Sopena,

Barcelona, España, 1981, pp.142 y 853). Por otro lado, es la Comisión de Valorización la que modifica la tasa cuya aplicación reclama la demandante. Por tanto, el artículo tercero de la parte resolutiva del acto administrativo impugnado (Resolución No. 088-98, de 24 de junio de 1998), aplica erradamente la citada norma y la señora Josefa María de Cedeño tiene derecho a que se le aplique la tasa de valorización reformada por medio de la Resolución No. 1,311, de 6 de diciembre de 1979, ante el reclamo formulado por varios interesados.

Como el acto impugnado deviene nulo en lo medular, por ilegal, es inconducente analizar los otros cargos de violación.

Con fundamento en las consideraciones expuestas, lo que procede es declarar parcialmente nula la Resolución No. 088-98, de 24 de junio de 1998, y a ello se aboca la Sala.

Por tanto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA PARCIALMENTE NULA la Resolución No. 088-98, de 24 de junio de 1998, emitida por el Ministero de Obras Públicas, en consecuencia:

1. La Administración está obligada a reconocer la exoneración que prevé la Ley 6 de 1987, artículo 1, numeral 17, en favor de la señora Josefa María Alvarado de Cedeño, a partir del día 17 de noviembre de 1988, fecha en que fue pensionada por riesgo de vejez.

2. La demandante está obligada a pagar la tasa de mejoras por valorización correspondiente al período anterior al día 17 de noviembre de 1988, cuyo monto debe ser liquidado con base lo decidido en la Resolución No. 1,311, de 6 de diciembre de 1979, que modificó la tasa de valorización mediante objeción de varios interesados.

3. En lo que no contradiga la presente decisión, queda igual el acto impugnado.

4. Se niega las demás pretensiones de la demandante.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA, EN REPRESENTACIÓN DE ANTONIO SAMANIEGO, PARA QUE SE DECLARE NULOS, POR ILEGALES, EL DECRETO EJECUTIVO N° 71 DE 11 DE ABRIL DE 2000 Y EL ACTO CONFIRMATORIO, DICTADOS POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CUATRO (4) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Ayala, en representación de ANTONIO SAMANIEGO, interpuso demanda contenciosa-administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulos, por ilegales, el Decreto Ejecutivo N° 71 de 11 de abril de 2000 y el acto confirmatorio, dictados por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y para que se haga otras declaraciones.

El licenciado Ayala pidió al Magistrado Sustanciador que, antes de admitir la demanda, requiera al funcionario demandado copia autenticada de los actos impugnados, las cuales le fueron negadas a pesar de haberlas pedido mediante el escrito que reposa a foja 8.

Como la petición del licenciado Ayala cumple los presupuestos establecidos en el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, la Sala debe acceder a lo pedido.

De consiguiente, la Magistrada Sustanciadora, en representación de la Sala Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley ORDENA que, por Secretaría de la Sala, se pida al señor Ministro de Desarrollo Agropecuario copia autenticada del Decreto Ejecutivo N° 71 de 11 de abril de 2000 y de la Resolución N° ALP-106-ADM-00 de 22 de mayo de 2000, ambas con la respectiva constancia de la notificación.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA, EN REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORA CARMEN SÁNCHEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO CONTENIDO EN LA NOTFICACIÓN NO. 09318, DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, EFECTUADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CUATRO (4) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Ayala, quien actúa en nombre y representación de la señora Carmen Sánchez, ha presentado escrito de desistimiento del presente proceso de plena jurisdicción que promovió para que se delare nulo, por ilegal, el acto administrativo contenido en la notificación No. 09318, fechada el 25 de septiembre de 1997, hecha por la Dirección Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, según aprecia a foja 83 de los autos.

El documento por medio del cual se desiste del proceso fue corrido en traslado a la Procuradora de la Administración, mediante providencia de 21 de julio de los corrientes, quien se notificó de la misma, conforme se aprecia a foja 84.

La Sala se percata que el apoderado judicial tiene facultad expresa para desistir en el poder especial a él conferido por la señora Carmen Sánchez (Cfr. foja 5).

Según el artículo 66 de la Ley 135 de 1943, "En cualquier estado del juicio es admisible por declaración expresa, el desistimiento del recurso". Esta disposición legal agrega que "El desistimiento será siempre notificado a la parte contraria".

A juicio de la Sala, la presente solicitud expresa de desistimiento es viable, por lo que cabe admitirla y ordenar el consecuente archivo del expediente.

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el desistimiento del proceso de plena

jurisdicción instaurado por el licenciado Carlos Ayala, en representación de la señora Carmen Sánchez, contra el formulario de notificación No. 09318, fechado el 25 de septiembre de 1997, emitido por la Dirección Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, y para que se hagan otras declaraciones. Consecuentemente, se ORDENA el archivo del respectivo expediente.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE VALDÉS, MIRANDA, LEZCANO BASO, EN REPRESENTACIÓN DE D.R.D. ENTERPRISES, INC., PARA QUE SE DECLARE NULAS, POR ILEGALES, LA RESOLUCIÓN N° 108-98-DSL-MCH DE 1° DE JUNIO DE 1998, DICTADA POR LA ALCALDESA DEL DISTRITO DE PANAMÁ Y LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CUATRO (4) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Valdés, Miranda, Lezcano Baso, en representación de D.R.D. ENTERPRISES, INC., interpuso demanda contenciosa-administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulas, por ilegales, las Resoluciones N° 108-98-DSL-MCH de 1° de junio de 1998 y N° 221-98-DSL de 10 de septiembre de 1998, dictadas por la Alcaldesa del Distrito de Panamá y el Alcalde Encargado, respectivamente, y para que se haga otras declaraciones.

I. LOS ACTOS ACUSADOS

Por medio de la primera de estas resoluciones, la entonces Alcaldesa del Distrito de Panamá negó el permiso de expendio de bebidas alcohólicas presentada por el representante legal de la sociedad demandante por considerar que la documentación con la cual éste acompañó su solicitud estaba incompleta, pues, no aportó la Resolución numerada de la Junta Comunal que otorga el visto bueno para el expendio de bebidas alcohólicas, ni la certificación actualizada de la Corregiduría de San Francisco en la que conste la distancia existente entre el respectivo local y el templo religioso y el hospital más cercano. Además, señala el acto impugnado, que dicho permiso no se puede otorgar debido a la desproporción que existe entre la cantidad de establecimientos de venta de bebidas alcohólicas y el número de habitantes (f. 1).

A través de la Resolución N° 221-98-DSL ibídem, el Alcalde Encargado del Distrito de Panamá declaró agotada la vía gubernativa por silencio administrativo, en virtud de que ese despacho, por razón del gran volumen de negocios que allí se ventilan, no se pudo pronunciar oportunamente sobre el recurso de reconsideración instaurado contra la Resolución N° 108-98-DSL-MCH ibídem. Consecuentemente, se ordenó el archivo del aludido recurso de reconsideración (f. 2).

II. LAS NORMAS SUPUESTAMENTE VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

Como normas violadas se cita los artículos 2, 9, 10, 11 y 31 de la Ley 55 de 10 de julio de 1973 y el artículo 29 de la Ley 135 de 1943, cuyos textos transcribimos a continuación:

"ARTÍCULO 2.- La venta de bebidas alcohólicas sólo podrá efectuarse

mediante licencia expedida por el Alcalde del respectivo distrito, previa autorización de la Junta Comunal y para poder operar deberá obtenerse licencia comercial otorgada por el Ministerio de Comercio e Industrias a nombre del interesado.
..."
"ARTICULO 9.- No se concederá Licencia para el funcionamiento de nuevas cantinas en los barrios de los Distritos de Panamá y Colón y en los demás Distritos de la República cuando el número de cantinas existentes en dichas áreas exceda la proporción de una por cada mil habitantes según el último censo oficial de población."

"ARTICULO 10.- No obstante el artículo anterior, podrán expedirse nuevas licencias para el funcionamiento de cantinas en hoteles, moteles, restaurantes y balnearios en ríos y playas que reúnan las condiciones exigidas en el Decreto 132 de 14 de noviembre de 1963, expedido por el Organo Ejecutivo y las condiciones aprobadas por el Instituto Panameño de Turismo."

"ARTICULO 11.- Para los efectos del artículo anterior, las licencias deberán ser solicitadas ante el Alcalde por conducto del Instituto Panameño de Turismo y ajustándose estrictamente a los reglamentos del mismo, para esta clase de negocios.

Las inversiones de este tipo de establecimientos no podrán ser menos de treinta mil balboas (B/.30,000.00) en las ciudades de Panamá y Colón y de quince mil balboas (B/.15,000.00) en el resto de la República.

Para este efecto, se entiende por restaurante los establecimientos comerciales que se dediquen primordial y permanentemente al expendio de comidas preparadas acogiéndose a las reglamentaciones del Instituto Panameño de Turismo."

"ARTICULO 31.- Los Alcaldes del Distrito conocerán las infracciones a las disposiciones del presente Capítulo y aplicarán las sanciones correspondientes. Las resoluciones de los Alcaldes serán apelables en efecto suspensivo ante la Gobernación respectiva.
..."
"ARTICULO 29. Las resoluciones que ponen término a un negocio o actuación administrativa de carácter nacional deben notificarse personalmente al interesado o a su representante o apoderado, dentro de los cinco días siguientes a su expedición, debiendo expresarse los recursos que por vía gubernativa procedan y el término dentro del cual deban interponerse, todo bajo la responsabilidad del funcionario correspondiente."

Según la apoderada judicial de la actora, la Resolución N° 108-98-DSL-MCH de 1° de junio de 1998 infringió los preceptos que se cita como violados en cuanto no accedió a la solicitud del permiso de expendio de bebidas alcohólicas elevada ante la Alcaldía de Panamá por su representada y la y N° 221-98-DSL de 10 de septiembre de 1998, en cuanto "no admite el recurso de apelación interpuesto". Concretamente, la infracción se dio porque su representado cumplió los requisitos señalados en los artículos 2, 10 y 11 de la Ley 55 de 1973, desarrollados en la "Guía para la obtención de licencia para el expendo de bebidas alcohólicas", al aportar los documentos que esta Guía enumera, tal como consta en el respectivo expediente administrativo.

La firma forense Valdés, Miranda, Lezcano Baso alega que en la parte resolutiva de la Resolución N° 108-98-DSL-MCH de 1° de junio de 1998, la Alcaldía de Panamá ubica a su representada en un domicilio diferente al consignado por su patrocinada, creando de este modo una situación de incertidumbre para la misma.

De igual modo, dicha resolución menciona en su parte resolutiva que sólo

cabe el recurso de reconsideración, violentando así el artículo 31 de la Ley 55 de 1973, que establece que las resoluciones de los Alcaldes serán apelables en efecto suspensivo ante la Gobernación respectiva.

Con relación al artículo 29 de la Ley 135 de 1943, la apoderada judicial de la actora estima que ha sido violado porque la precitada resolución no expresó los recursos a los que su patrocinada tenía derecho, específicamente, el recurso de apelación ante la Gobernación de la Provincia de Panamá (fs. 36-41).

La funcionaria demandada, por su parte, rindió su informe de conducta mediante Nota N° 775/98 DLYJ de 4 de diciembre de 1998, mientras que la señora Procuradora de la Administración contestó la demanda mediante Vista N° 265 de 15 de junio de 1999, en la cual pidió a la Sala que niegue las pretensiones de la actora (Cfr. fs. 46-50 y 68-78, respectivamente).

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

A juicio de los Magistrados que integran la Sala, las pretensiones de la actora deben negarse, pues, tal como consta en autos, la actora no cumplió con todos los requisitos legales necesarios para solicitar el permiso de expendió de bebidas alcohólicas en el local comercial denominado IL GELATIERI.

Lo anterior es así, en primer lugar, porque la autorización previa al permiso de expendio de bebidas alcohólicas regulada en el artículo 2 de la Ley 55 de 1973, no fue otorgada por la Junta Comunal del Corregimiento de San Francisco, sino únicamente por el señor Juan Hernández Morales, quien para el mes de abril de 1989, era el Representante de ese Corregimiento. Para apreciar este hecho basta leer el texto del citado documento:

> "El suscrito Honorable Representante de San Francisco de la Caleta, en uso de sus Facultades Legales.
>
> CERTIFICA:
>
> Que dá (sic) Autorización al señor GIORGIO BARTOT CARIBONI, para abrir el Local llamado "BENTLEY'S GRILL, ubicado en Vía Porras, para que venda bebidas alcohólicas ya que reune (sic) todos los requisitos exigidos por a ley.
>
> Dado en San Francisco de la Caleta a los cuatro días del mes de abril de mil novecientos ochenta y nueve.
>
> Atentamente,
>
> H. R. JUAN HERNANDEZ MORALES" (Fdo.)

Considera la Sala, que aun cuando el aludido funcionario era el representante legal de la Junta Comunal (según el artículo 7, numeral 1, de la Ley 105 de 1973), ello no lo facultaba para expedir por sí solo dicha autorización, pues, el artículo 2 de la Ley 55 ibídem alude expresamente a la "previa autorización de la Junta Comunal ...", que es un organismo integrado por el Representante de Corregimiento, el Corregidor y 5 ciudadanos designados por el primero de estos funcionarios, según el artículo 10 de la Ley 105 de 8 de octubre de 1973. En opinión de la Sala, lo que este precepto procura es que un tema tan importante y trascendental para la vida de la comunidad, como es la autorización para la venta de bebidas alcohólicas, sea examinado y decidido por un cuerpo colegiado del cual forman parte autoridades y miembros representativos de la misma y no tan sólo por uno de sus siete miembros. En todo caso, esa decisión del pleno de la Junta Comunal, en la que se niega o concede la autorización previa, debe materializarse a través de una resolución debidamente motivada, la cual sí puede y debe estar firmada por el Representante de Corregimiento, como representante legal de la Junta, y por el Secretario o Secretaria de la misma.

Sin perjuicio de lo expresado, la Sala observa otras dos graves anomalías en la autorización previa dada por el Representante de San Francisco. Por un lado, está el hecho de que esa autorización se expidió el 4 de abril de 1989 y la solicitud de la licencia se presentó ante la Alcaldía capitalina el día 25 de marzo de 1998, es decir, que para obtener dicha licencia la demandante pretendió utilizar una supuesta certificación o autorización expedida hacía más nueve años (Cfr. f. 7 vuelta del expediente administrativo y 4-7 de los autos, respectivamente). Por otra parte, está el hecho de que la mencionada autorización previa se expidió para la venta de bebidas alcohólicas en el local comercial denominado (restaurante) "Bentley's Grill" y la solicitud de la licencia negada mediante la Resolución N° 108-98-DSL-MCH de 1° de junio de 1998 se refiere expresamente al local comercial (restaurante) "IL GELATIERI".

Por todos estos motivos la Sala llega a la conclusión de que la demandante no cumplió el requisito establecido en el artículo 2 de la Ley 55 de 1973, relativo a la autorización previa de la Junta Comunal de San Francisco. Consecuentemente, descarta la infracción de esta norma.

La Sala observa, por otra parte, que la apoderada judicial de la actora no formuló ninguna objeción en cuanto a lo afirmado en la Resolución N° 108-98 ibídem, en el sentido de que la certificación de la Corregiduría de San Francisco aportada el señor Bartot Cariboni para probar el cumplimiento de requisito establecido en el artículo 12 de la Ley 55 de 1973, no está actualizada. Al respecto, es pertinente indicar que dicha certificación, que pretende probar que el restaurante IL GELATIERI está ubicado a una distancia de más de 500 metros de la escuela, iglesia y hospital más cercanos, ni siquiera expresa la fecha en que fue expedida y, además, se extendió para la venta de bebidas alcohólicas en el restaurante "Bentley's Grill", antes mencionado.

La apoderada judicial de la actora también estima violados los artículos 9 y 10 de la Ley 55 de 1973. La interpretación conjunta de estas normas lleva a afirmar, que los Alcaldes pueden otorgar licencias para la venta de bebidas alcohólicas en hoteles, moteles, restaurantes y balnearios, ubicados en aquellos barrios en que el número de cantinas existentes excede la proporción de una por cada mil habitantes según el censo oficial de población, siempre y cuando, tales establecimientos (hoteles, moteles, restaurantes y balnearios), cumplan las condiciones exigidas en el Decreto 132 de 14 de noviembre de 1963. La actora ciertamente probó el cumplimiento de estas condiciones ante la Alcaldía de Panamá, no obstante, tal y como sostuvo la funcionaria demandada, el artículo 10 de la Ley 55 de 1973 no obliga al Alcalde a otorgar dicho permiso o licencia si éste considera, por razones debidamente sustentadas, que el permiso solicitado debe negarse. En este caso, la negativa de la entonces Alcaldesa del Distrito de Panamá, entre otros motivos, se fundamentó en la desproporción existente entre el número de habitantes y la cantidad de cantinas existentes en el Corregimiento de San Francisco. La apoderada judicial de la actora alega que "últimamente se han extendido permisos iguales al requerido" por su patrocinada, sin embargo, omite probar dicha afirmación. Por estas razones, la Sala desestima los cargos de infracción de los artículos 9, 10 y 11 de la precitada Ley.

A juicio de la Sala, la infracción del artículo 31 de la Ley 55 de 1973 tampoco se ha producido. Una detenida y exhaustiva lectura de este precepto permite apreciar que el mismo faculta a los Alcaldes de Distrito para conocer las infracciones de las disposiciones del Capítulo Primero de esa Ley y aplicar las sanciones correspondientes y al Gobernador de la respectiva provincia, para conocer las apelaciones que se interpongan contra las resoluciones sancionatorias que en estos casos expidan los Alcaldes. Como bien sostuvo la funcionaria demandada, en estos casos el Alcalde actúa como "Jefe de Policía", porque conoce y sanciona típicas faltas administrativas, cuyo conocimiento, en segunda instancia, corresponde a los Gobernadores de provincias, como superiores jerárquicos.

En el negocio bajo estudio, sin embargo, nos encontramos ante una situación sustancialmente distinta porque la Resolución N° 108-98-DSL-MCH de 1° de junio

de 1998 no sanciona ninguna de las faltas administrativas reguladas en el Capítulo Primero de la Ley 55 de 1973 (artículos 23 y siguientes), sino que niega una licencia para la venta de bebidas alcohólicas. De lo que se trata, entonces, es de un acto dictado por la entonces Alcaldesa del Distrito de Panamá en ejercicio de funciones administrativas, esto es, como Jefa de la Administración Municipal. De allí que, al no ser la aludida resolución un acto de carácter sancionatorio, dictado en ejercicio de las funciones de policía que el citado artículo 31 ibídem le confiere a los Alcaldes de Distrito, mal podría impugnarse mediante el recurso de apelación que esta norma prevé. El artículo 51 de la Ley 106 de 1973 corrobora este razonamiento de la Sala al establecer lo siguiente:

> "ARTICULO 51. Las resoluciones y demás actos de los Alcaldes, cuando se relacione con la gestión administrativa municipal, son impugnables ante los tribunales competentes.
>
> Contra las multas y sanciones disciplinarias que impongan los Alcaldes, cuando actúen como Jefe de Policía del Distrito, cabrá el recurso de apelación ante el Gobernador de la Provincia."

Por los motivos expuestos, la Sala descarta la violación del artículo 31 de la Ley 55 de 1973 y, consecuentemente, la infracción del artículo 29 de la Ley 135 de 1943.

Como la demandante no ha probado ninguno de los cargos de ilegalidad que alega, procede declarar legales los actos administrativos impugnados.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO SON ILEGALES las Resoluciones N° 108-98-DSL-MCH de 1° de junio de 1998 y N° 221-98-DSL de 10 de septiembre de 1998, dictadas por la Alcaldesa del Distrito de Panamá y el Alcalde Encargado, respectivamente, y NIEGA, por tanto, el resto de las declaraciones pedidas.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RICARDO RAMIRO ARANGO, EN REPRESENTACIÓN DE R & R ARANGO Y ASOCIADOS, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN ADMR-PM-011-00, DE 26 DE ABRIL DE 2000, DICTADA POR LA ADMINISTRADORA REGIONAL DE PANAMÁ METROPOLITANA, DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE, SU ACTO CONFIRMATORIO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Ricardo Ramiro Arango, en calidad de apoderado judicial de R & R ARANGO Y ASOCIADOS, S. A., ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución ADMR-PM-01-00, de 26 de abril de 2000, dictada por la Administradora Regional de Panamá Metropolitana, de la Autoridad Nacional del Ambiente, su acto confirmatorio, y para que se hagan otras declaraciones.

Mediante la Resolución ADMR-PM-011-00, la funcionaria demandada sancionó a R & R ARANGO Y ASOCIADOS, S. A. con multa de diez mil balboas (B/.10,000.00),

por haber iniciado las actividades de movimiento de tierra en el sector de Ojo de Agra, sin contar con la resolución de aprobación del estudio de impacto ambiental para el proyecto de nivelación de terreno. Además, ordenó la paralización de las obras del proyecto, hasta la aprobación del estudio de impacto ambiental, según corresponda, y se encuentre a paz y salvo con la institución.

En su demanda pide a la Sala ordenar la suspensión provisional de dicho acto, para poder ser notificados personalmente de la resolución que aprueba el estudio de impacto ambiental y se levante la paralización de los trabajos, con fundamento en lo siguiente:

> "En consideración a que desde el 11 de enero de 2000 a la empresa R & R ARANGO Y ASOCIADOS, S. A. se le notificó en el INFORME DE INSPECCIÓN, que debería suspender todos los trabajos hasta dar cumplimiento con la obtención de una Resolución de Impacto Ambiental aprobada; a que la suspensión de los trabajos de la empresa lleva aproximadamente seis (6) meses y a que desde el 24 de abril del 2000 la AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE no ha notificado personalmente a la empresa favorecida con la aprobación de la Declaración o el Estudio de Impacto Ambiental, manteniendo de esta forma, un largo impasse que causará graves perjuicios económicos, laborales y administrativos a la empresa R & R ARANGO Y ASOCIADOS, S. A. por razón de que mantiene en peligro y zozobra la planilla laboral de los trabajadores de la empresa, no pudiendo generar los ingresos correspondientes a su actividad."

Conforme lo establece el artículo 73 de la Ley 135 de 1943, pueden suspenderse los efectos de un acto, resolución o disposición, si, a juicio de la Sala, ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave (periculum in mora) de difícil o imposible reparación.

En reiterados fallos se ha manifestado que para que se decrete la suspensión de los efectos del acto impugnado es necesario que la parte actora esté amparada por el fumus boni iuris o apariencia del buen derecho.

Del examen preliminar de los cargos que se formulan en la demanda, al igual que del análisis de la documentación incorporada a los autos, esta Sala estima que no se desprenden, prima facie, violaciones ostensibles de las normas que se citan como infringidas, por lo cual la petición de suspensión provisional carece hasta el momento de la apariencia de buen derecho, que, tal como se explicó en párrafos anteriores, es necesario que exista para la viabilidad de esa medida cautelar.

Por su parte, en cuanto a los graves perjuicios económicos alegados, (periculum in mora), a consecuencia de la medida de paralización de la obra, esta Superioridad considera que no existen suficientes evidencias probatorias que den sustento a este argumento.

Por tanto, la Sala considera que hasta el momento no existe justificación para adoptar la medida de suspensión solicitada.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA la solicitud de suspensión provisional de los efectos de la Resolución ADMR-PM-011-00, de 26 de abril de 2000, dictada por la Administradora Regional de Panamá Metropolitana, de la Autoridad Nacional del Ambiente.

Notifiquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL

Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ORLANDO RAMOS, EN REPRESENTACIÓN DE SONIA BALLESTEROS, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA NO. 03-2000, DE 6 DE ENERO DE 2,000, DICTADA POR EL GERENTE GENERAL DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, SU ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Orlando Ramos, en nombre y representación de SONIA BALLESTEROS, ha incoado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución de Gerencia No. 03-2000, de 6 de enero de 2,000, dictada por el Gerente General del Banco Hipotecario Nacional y sus actos confirmatorios.

En el libelo de la demanda, el apoderado judicial de la actora solicita la suspensión provisional de los efectos del acto acusado hasta tanto se resuelva su pretensión, sin embargo se observa que la demanda adolece de una serie de defectos que la hacen inadmisible.

En primer lugar, en el documento contentivo de la presente acción no se designan a las partes y a sus representantes, incumpliendo así con lo estipulado en el numeral 1 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943.

Observa el suscrito que la demandante omitió de igual forma, transcribir el texto de la disposición legal que considera infringida. Copiosa es la jurisprudencia de la Sala sobre la importancia de transcribir las disposiciones que se consideran transgredidas con la expedición del acto impugnado.

> "La Sala ha expresado, que para cumplir con los requisitos anteriores, deben transcribirse las disposiciones legales que se estiman violadas, para que de la confrontación con el acto administrativo impugnado, con la norma que se considera violada, se pueda apreciar la violación aducida. Además, debe explicarse el concepto en que se considera que la norma ha sido violada por el acto impugnado y señalar por cuál de los motivos de ilegalidad que establece el artículo 26 de la Ley 135 de 1943, considera el demandante que se ha consumado la violación." (Registro Judicial de febrero de 1997, pág. 258).

En vista de que la demanda presentada no cumple con los postulados legales y jurisprudenciales para su admisión, no debe dársele curso, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el Licenciado Orlando Ramos, en representación de SONIA BALLESTEROS, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución de Gerencia No. 03-2000, de 6 de enero de 2,000, dictada por el Gerente General del Banco Hipotecario Nacional, su acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL

Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA, EN REPRESENTACIÓN DE WILFREDO ARIAS, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO CONTENIDO EN LA NOTIFICACIÓN N° 04010 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, REALIZADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Ayala, actuando en nombre y representación de WILFREDO ARIAS, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema, demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, el acto contenido en la Notificación No. 04010 de 25 de septiembre de 1997, realizada por la Directora Nacional de Administración y Finanzas de la Contraloría General de la República y para que se hagan otras declaraciones.

Encontrándose el proceso en estado de decidir, la Sala observa que obra a foja 47 del expediente, escrito de desistimiento de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción en relación al caso que nos ocupa. En el mismo, señala la parte actora que desiste de la presente demanda de plena jurisdicción.

Al considerar la Sala dicho escrito, se tiene que a la luz del artículo 66 de la Ley 135 de 1943, la parte demandante puede desistir de su acción en cualquier estado del proceso, produciéndose así la terminación del mismo.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso-Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el desistimiento interpuesto por el licenciado Carlos Ayala, actuando en nombre y representación de WILFREDO ARIAS, y ORDENA el archivo del expediente.

Notifiquese y Cumplase,

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA, EN REPRESENTACIÓN DE ERIC SANCHEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO CONTENIDO EN LA NOTIFICACIÓN N° 03170 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, EMITIDO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Ayala, actuando en nombre y representación de ERIC SANCHEZ, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema, demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo, por

ilegal, el acto contenido en la Notificación No. 03170 de 25 de septiembre de 1997, realizada por la Directora Nacional de Administración y Finanzas de la Contraloría General de la República y para que se hagan otras declaraciones.

Mediante escrito fechado el 13 de julio del 2000, visible a foja 47 del expediente, la parte actora presentó desistimiento de la acción contencioso administrativa interpuesta contra el mencionado acto administrativo, por lo que la Sala procede a determinar su admisibilidad.

A juicio de la Sala el desistimiento presentado por la parte actora es procedente y debe acogerse, conforme a lo preceptuado en el artículo 66 de la Ley 135 de 1943, que permite el desistimiento en cualquier estado del proceso, y los artículos 1073 y 1080 del Código Judicial que recogen el mismo principio.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso-Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el desistimiento interpuesto por el licenciado Carlos Ayala, actuando en nombre y representación de ERIC SANCHEZ, y ORDENA el archivo del expediente.

Notifiquese y Cumplase,

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA, EN REPRESENTACIÓN DE MAIRA RUIZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO CONTENIDO EN LA NOTIFICACIÓN N° 09305 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, REALIZADA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Ayala, actuando en nombre y representación de MAIRA RUIZ, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema, demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, el acto contenido en la Notificación No. 09305 de 25 de septiembre de 1997, realizada por la Directora Nacional de Administración y Finanzas de la Contraloría General de la República y para que se hagan otras declaraciones.

Mediante escrito visible a foja 80 del expediente, la actora desiste de la acción contencioso administrativa interpuesta contra el mencionado acto administrativo, por lo que la Sala procede a determinar su admisibilidad.

En virtud de que el artículo 66 de la Ley 135 de 1943 señala que la parte demandante puede desistir en cualquier momento del proceso, procede la Sala a admitir el desistimiento y dar por terminado el proceso.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso-Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el desistimiento interpuesto por el licenciado Carlos Ayala, actuando en nombre y representación de MAIRA RUIZ, DECLARA que ha terminado el proceso contencioso administrativo y ORDENA el archivo del expediente.

Notifiquese y Cumplase,

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA, EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS RODRIGUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO CONTENIDO EN LA NOTIFICACIÓN N° 09286 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, REALIZADA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Ayala, actuando en nombre y representación de CARLOS RODRIGUEZ, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema, demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, el acto contenido en la Notificación No. 09286 de 25 de septiembre de 1997, realizada por la Directora Nacional de Administración y Finanzas de la Contraloría General de la República y para que se hagan otras declaraciones.

Mediante escrito visible a foja 86 del expediente, la actora desiste de la acción contencioso administrativa interpuesta contra el mencionado acto administrativo, por lo que la Sala procede a determinar su admisibilidad.

En virtud de que el artículo 66 de la Ley 135 de 1943 señala que la parte demandante puede desistir en cualquier momento del proceso, procede la Sala a admitir el desistimiento y dar por terminado el proceso.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso-Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el desistimiento interpuesto por el licenciado Carlos Ayala, actuando en nombre y representación de CARLOS RODRIGUEZ, DECLARA que ha terminado el proceso contencioso administrativo y ORDENA el archivo del expediente.

Notifiquese y Cumplase,

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA, EN REPRESENTACIÓN DE JACINTO GONZALEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO CONTENIDO EN LA NOTIFICACIÓN N° 09142 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, REALIZADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Ayala, actuando en nombre y representación de JACINTO GONZALEZ, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema, demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, el acto contenido en la Notificación No. 09142 de 25 de septiembre de 1997, realizada por la Directora Nacional de Administración y Finanzas de la Contraloría General de la República y para que se hagan otras declaraciones.

Encontrándose el proceso en estado de decidir, la Sala observa que obra a foja 81 del expediente, escrito de desistimiento de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción en relación al caso que nos ocupa, por lo que la Sala procede a determinar su admisibilidad.

A juicio de la Sala el desistimiento presentado por la parte actora es procedente y debe acogerse, conforme a lo preceptuado en el artículo 66 de la Ley 135 de 1943, que permite el desistimiento en cualquier estado del proceso, y los artículos 1073 y 1080 del Código Judicial que recogen el mismo principio.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso-Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el desistimiento interpuesto por el licenciado Carlos Ayala, actuando en nombre y representación de JACINTO GONZALEZ, y ORDENA el archivo del expediente.

Notifiquese y Cumplase,

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA, EN REPRESENTACIÓN DE ARACELY HOO, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO CONTENIDO EN LA NOTIFICACIÓN N° 04086 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, REALIZADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Ayala, actuando en nombre y representación de ARACELY HOO, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema, demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, el acto contenido en la Notificación No. 04086 de 25 de septiembre de 1997, realizada por la Directora Nacional de Administración y Finanzas de la Contraloría General de la República y para que se hagan otras declaraciones.

Por medio de escrito fechado el 13 de julio del 2000, visible a foja 73 del expediente, la parte actora presentó desistimiento de la acción contencioso administrativa interpuesta contra el mencionado acto administrativo, por lo que la Sala procede a determinar su admisibilidad.

A juicio de la Sala el desistimiento presentado por la parte actora es procedente y debe acogerse, conforme a lo preceptuado en el artículo 66 de la Ley 135 de 1943, que permite el desistimiento en cualquier estado del proceso, y los artículos 1073 y 1080 del Código Judicial que recogen el mismo principio.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso-Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la Ley, ADMITE el desistimiento interpuesto por el licenciado Carlos Ayala, actuando en nombre y representación de ARACELY HOO, y ORDENA el archivo del expediente.

Notifiquese y Cumplase,

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA, EN REPRESENTACIÓN DE JOSE MANUEL FIGUEROA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO CONTENIDO EN LA NOTIFICACIÓN N° 50156 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, REALIZADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Ayala, actuando en nombre y representación de JOSE MANUEL FIGUEROA, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema, demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, el acto contenido en la Notificación No. 50156 de 25 de septiembre de 1997, realizada por la Directora Nacional de Administración y Finanzas de la Contraloría General de la República y para que se hagan otras declaraciones.

Encontrándose el proceso en estado de decidir, la Sala observa que obra a foja 81 del expediente, escrito de desistimiento de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción en relación al caso que nos ocupa, por lo que la Sala procede a determinar su admisibilidad.

A juicio de la Sala el desistimiento presentado por la parte actora es procedente y debe acogerse, conforme a lo preceptuado en el artículo 66 de la Ley 135 de 1943, que permite el desistimiento en cualquier estado del proceso, y los artículos 1073 y 1080 del Código Judicial que recogen el mismo principio.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso-Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el desistimiento interpuesto por el licenciado Carlos Ayala, actuando en nombre y representación de JOSE MANUEL FIGUEROA, y ORDENA el archivo del expediente.

Notifiquese y Cumplase,

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS MOSQUERA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO CONTENIDO EN LA NOTIFICACIÓN N° 03124 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, EMITIDO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE

DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Ayala, actuando en nombre y representación de LUIS MOSQUERA, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema, demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, el acto contenido en la Notificación No. 03124 de 25 de septiembre de 1997, realizada por la Directora Nacional de Administración y Finanzas de la Contraloría General de la República y para que se hagan otras declaraciones.

Mediante escrito fechado el 13 de julio del 2000, visible a foja 49 del expediente, la parte actora presentó desistimiento de la acción contencioso administrativa interpuesta contra el mencionado acto administrativo, por lo que la Sala procede a determinar su admisibilidad.

A juicio de la Sala el desistimiento presentado por la parte actora es procedente y debe acogerse, conforme a lo preceptuado en el artículo 66 de la Ley 135 de 1943, que permite el desistimiento en cualquier estado del proceso, y los artículos 1073 y 1080 del Código Judicial que recogen el mismo principio.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso-Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el desistimiento interpuesto por el licenciado Carlos Ayala, actuando en nombre y representación de LUIS MOSQUERA, y ORDENA el archivo del expediente.

Notifiquese y Cumplase,

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS R. AYALA EN REPRESENTACIÓN DE JUAN B. ABREGO, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA DP-DOPA 341 DEL PRIMERO DE FEBRERO DE 2000, DICTADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Secretaría de la Sala Tercera, a través del Oficio N° 686 de 27 de junio de 2000 y en cumplimiento de los ordenado en el Auto de 15 de junio de 2000, solicitó al Director de Personal del Ministerio de Educación copia autenticada de la Nota DP-DOPA-341 de 1° de febrero de 2000, con la respectiva constancia de notificación, mediante la cual se dispuso el cese de labores del señor JUAN ÁBREGO. También pidió el envío de una certificación en la que se hiciese constar si fue o no resuelto el recurso de reconsideración interpuesto por el señor ÁBREGO contra la aludida Nota.

En respuesta al Oficio citado, el Subdirector Nacional de Asesoría Legal y no el Director Nacional de Personal de ese Ministerio, remitió copia autenticada del acto impugnado sin la debida constancia de la notificación y omitió indicar si el recurso de reconsideración impetrado contra la Nota DP-DOPA-

341 de 1° de febrero de 2000 fue o no resuelto. También remitió una certificación de 28 de julio de 2000, en la cual indica que con posterioridad a la expedición de la aludida Nota se expidió el Decreto Ejecutivo N° 95 de 15 de mayo de 2000, por medio del cual se dejó sin efecto el nombramiento del señor ÁBREGO; que el afectado se notificó de ese Decreto y no interpuso recurso alguno.

Ante las circunstancias anotadas la Magistrada Sustanciadora, con fundamento en el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, estima necesario ordenar que, por Secretaría de la Sala, se pida al Director Nacional de Personal del Ministerio de Educación lo siguiente:

1. Copia autenticada, con la debida constancia de la notificación, de la Nota DP-DOPA-341 de 1° de febrero de 2000; 2. Copia autenticada del recurso de reconsideración interpuesto por el señor ÁBREGO contra la aludida Nota; 3. Certificación en la que conste si dicho recurso de reconsideración fue o no resuelto; 4. Copia autenticada del Decreto N° 95 de 15 de mayo de 2000, con la respectiva constancia de la notificación.

De consiguiente, la suscrita Magistrada Sustanciadora, en representación de la Sala Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA que por Secretaría de la Sala se pida al Director Nacional de Personal del Ministerio de Educación lo siguiente:

1. Copia autenticada, con la debida constancia de la notificación, de la Nota DP-DOPA-341 de 1° de febrero de 2000, de la cual se le envía fotocopia;

2. Copia autenticada del recurso de reconsideración interpuesto por el señor ÁBREGO contra la aludida Nota, del cual se le envía fotocopia;

3. Certificación en la que conste si dicho recurso de reconsideración fue o no resuelto;

4. Copia autenticada del Decreto N° 95 de 15 de mayo de 2000, con la respectiva constancia de su notificación.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICDO. CARLOS AYALA EN REPRESENTACIÓN DE CARMEN C. DE CASTILLO, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL ACTO CONTENIDO EN LA NOTIFICACIÓN N° 50406 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, REALIZADA POR EL DIRECTOR NACIONAL DE CONTROL FISCALDE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Ayala, en representación de CARMEN C. DE CASTILLO, ha promovido proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción, para que se declare nulo por ilegal el acto contenido en la Notificación N° 50406 de 25 de septiembre de 1997, realizada por el Director Nacional de Control Fiscal de la Contraloría General de la República y para que se hagan otras declaraciones.

Posteriormente, el demandante presentó escrito de desistimiento, el cual fue recibido en la Secretaría de la Sala el 17 de julio de 2000.

De dicho escrito de desistimiento se le corrió traslado a la Procuradora de la Administración, quien se notificó sin oponerse el 24 de julio de 2000.

Como quiera que con fundamento en el artículo 66 de la Ley 135 de 1943 modificada por la Ley 33 de 1946, en cualquier estado del proceso es admisible el desistimiento de la pretensión contencioso administrativa, y el apoderado tiene facultad para desistir (foja 6), su petición debe acogerse.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley ADMITE EL DESISTIMIENTO del proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción interpuesto por el Licenciado Carlos Ayala, en representación de CARMEN C. DE CASTILLO para que se declare nulo por ilegal el acto contenido en la Notificación N° 50406 de 25 de septiembre de 1997, realizada por el Directora Nacional de Control Fiscal de la Contraloría General de la República y para que se hagan otras declaraciones.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA LICENCIADA SOFIA J. COHEN EN REPRESENTACIÓN DE JAIME FABREGA QUELQUEJEU, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° AR-OR-04-317 DE 14 DE ABRIL DE 1997, EXPEDIDA POR EL ADMINISTRADOR REGIONAL DE ADUANAS, ZONA ORIENTAL DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, Y LA RESOLUCIÓN NO. 704-04-23 DE 14 DE ENERO DE 1998, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada SOFIA J. COHEN, actuando en representación de JAIME FABREGA QUELQUEJEU, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declaren nulas, por ilegales, la Resolución No. AR-OR-04-317 de 14 de abril de 1997 dictada por el Administrador Regional de Aduanas, Zona Oriental de la Provincia de Panamá, y la Resolución No. 704-04-23 de 14 de enero de 1998 expedida por el Director General de Aduanas.

I. LOS ACTOS IMPUGNADOS

a) La Resolución No. AR-OR-04-317 de 14 de abril de 1997.

Este acto, dictado por el Administrador Regional de Aduanas de la Provincia de Panamá, decide una discrepancia de valor y aforo surgida por la importación al país de productos aeronáuticos que fueron liquidados por el consignatario JAIME FABREGA a través de la Declaración Liquidación de Aduanas No. 017704 de 24 de marzo de 1997.

En dicha liquidación se declaraba la introducción al país de "Partes para Helicóptero" bajo la partida arancelaria 8803.90.00. Sin embargo, luego de la inspección física realizada en el recinto aduanero de salida, la mercancía fue aforada como "Helicóptero incompleto" bajo la partida arancelaria 8802-11.00 con sus correspondientes gravámenes y derechos aduaneros.

La Administración Regional de Aduanas decidió, que la mercancía importada era, en efecto, un helicóptero incompleto, y autorizó al contribuyente JAIME

FABREGA a confeccionar la Declaración Liquidación Adicional de Aduanas, clasificando correctamente la mercancía, y tomando como base el valor F.O.B. de treinta mil balboas.
b) La Resolución No. 704-04-23 de 14 de enero de 1998

Al momento de conocer en grado de apelación sobre la valoración de la mercancía, la Dirección General de Aduanas modifica la Resolución dictada por la Administración Regional de Aduanas, y declara que el valor sobre el cual debían calcularse los impuestos de importación en este caso era de veintitrés mil novecientos noventa y nueve balboas con cuarenta centésimos, aceptando el aforo de la mercancía en la categoría de helicóptero incompleto.

II. CARGOS DE ILEGALIDAD DEL RECURRENTE

El punto medular de la impugnación consiste en que a criterio del demandante, tanto la Administración Regional de Aduanas como la Dirección General de Aduanas, han violentado las normas establecidas en el Decreto de Gabinete No. 26 de 1996 sobre los métodos de valoración de mercancías importadas, normas éstas que en concreto establecen un orden de criterios para valorar mercancías para los efectos de calcular los derechos e impuestos de importación.

Alega el actor que si este orden de criterios se hubiese cumplido estrictamente, no se hubiese valorado la mercancía por él introducida (inicialmente con valor FOB de 30 mil balboas), conforme al "criterio razonable" establecido en el artículo 8 del Decreto de Gabinete ibídem, cuando existían seis criterios anteriores que debieron guiar la valoración de la mercancía de manera más inmediata, incluyendo el primer método de valoración que es el del "valor de la transacción", mismo que quedaba claramente establecido con las facturas presentadas.

En detrimento de ello, el demandante señala que se valoró la mercancía conforme a un "criterio razonable" basado en valores arbitrarios y ficticios, lo que llevó a dictar un alcance adicional final, en concepto valor FOB para efectos aduaneros, por más de veintitrés mil balboas.

Señala además, que los funcionarios aduaneros realizaron un aforo incorrecto de la mercancía, por no tratarse de un "helicóptero incompleto", sino de "Partes de helicóptero", lo que incidió en el cálculo de los derechos y gravámenes que hacen parte de la liquidación adicional que se dictó en este caso.

A juicio de la parte actora, los actos administrativos expedidos por la Dirección de Aduanas infringen las siguientes disposiciones legales:

1- el artículo 6 de la Ley 41 de 1996;
2- los artículos 1° (incisos primero y segundo); 2 (inciso primero); 8 en sus literales c) e) y f); 9 en su último inciso, y el artículo 19, todos del Decreto de Gabinete No.26 de 1° de agosto de 1996; y
3- la Sección XXI numeral 3, literal a) y c) y numeral 4 de las Reglas Generales para la interpretación del sistema armonizado del Decreto de Gabinete 21 de 12 de julio de 1994 por medio de la cual se modifica el Arancel de Importación y el cual adopta la nomenclatura Arancelaria del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.

En lo atinente a la presunta violación del artículo 6 de la Ley 41 de 1996, así como de los artículos 1° inciso primero, 2, 8, y 9 del Decreto de Gabinete No. 26 de 1996, y de la Sección XXI de las Reglas Generales para la interpretación del sistema armonizado del Decreto de Gabinete 21 de 12 de julio de 1994, esta Superioridad se inhibe de su conocimiento, toda vez que el actor no sustenta los cargos endilgados con el señalamiento concreto del concepto en que se ha producido dicha infracción legal.

Las restantes violaciones debidamente sustentadas, se presentan de la siguiente manera:

a) La violación del inciso segundo del artículo 1° del Decreto de Gabinete No.26 de 1° de agosto de 1996

El Decreto de Gabinete No. 26 de 1996 dicta "disposiciones concernientes al régimen de aduanas respecto al sistema de valoración de las mercancías en las Aduanas".

Su artículo primero, inciso segundo preceptúa:

> "Artículo 1. Fundamento legal y aplicación de la valoración en Aduanas.
> ...
> El valor será determinado por el funcionario técnico aduanero habilitado para tal efecto, en la forma que indiquen los reglamentos, el estado en que se presente las mercancías que se valoren y con base en los antecedentes y documentos acompañados. Este deberá usar los diferentes métodos de valoración en el orden establecido en el presente decreto y cuando sea necesario deberá inspeccionar físicamente las mercancías, debiendo el interesado proporcionar las explicaciones o antecedentes complementarios que se requieran."

La norma se dice violada de manera directa, puesto que los funcionarios de aduanas debieron utilizar los documentos que acompañaban la declaración, y usar en estricto orden los diferentes métodos de valoración establecidos en el Decreto de Gabinete No. 26 de 1996. En este sentido alega, que debió aceptarse el valor de la transacción (compra de la mercancía) constatable en las facturas comerciales que se presentaron.

Manifiesta además, que no se le solicitó al interesado explicación u otros antecedentes complementarios para despejar las dudas del funcionario de aduanas en relación a la mercancía inspeccionada.

b) la violación del artículo 19 del Decreto de Gabinete No. 19 de 26 de agosto de 1996.

Esta norma preceptúa lo siguiente:

> "Artículo 19. Derogación Total. Déjase sin efecto todas las normas anteriores sobre valoración de mercancías en Aduanas y remítase copia autenticada del presente decreto a la Asamblea Legislativa, en cumplimiento del numeral 7 del artículo 195 de la Constitución Política."

El recurrente considera que esta norma ha resultado vulnerada, toda vez el Decreto de Gabinete No. 26 de 1996 no fue utilizado como fundamento de derecho para la expedición de los actos administrativos demandados.

III. INFORME DE ACTUACION DEL FUNCIONARIO DEMANDADO

De la demanda incoada se corrió traslado al Director General de Aduanas, funcionario que una vez reseñados los hechos fundamentales acaecidos en este caso, ilustró a la Sala sobre las razones que llevaron a dictar los actos impugnados.

El pormenorizado informe, además de reiterar la conformidad legal de la actuación de la Dirección de Aduanas en este caso, destacó entre otros aspectos, lo siguiente:

> "Dadas las circunstancias de la indebida clasificación arancelaria surge, para el funcionario inspector, la duda de si se debe o no tenerse (sic) como válido el Valor de Transacción como valor sobre el cual se fijará la tarifa impositiva. Tal duda surge del hecho que la mercancía debió declararse como HELICOPTERO incompleto ...

Conforme al formulario de discrepancia levantado en el acta de despacho de la mercancía, se procedió, por parte de la Administración Regional de Aduanas, Zona Oriental a dictar la Resolución No. AR-OR-04-317 de 14 de abril de 1997.

La Resolución No. AR-OR-04-317 concluye determinando, por razones similares a las anotadas anteriormente, que la mercancía debe ser clasificada como un HELICOPTERO incompleto y que el valor de la mercancía se establecerá conforme al Método de Criterio Razonable, consagrado en el Artículo 8 del Decreto No. 26 de 1° de agosto de 1996.

...

...

Es importante anotar que en materia de AFORAMIENTO la competencia está dividida por materia. De manera tal que todo lo relativo a la Clasificación (designación de partida arancelaria y monto impositivo) corresponde su conocimiento en apelación a la Comisión de Aranceles (Arts. 649 y 657 del Código Fiscal). En cambio en el tema de Valoración le corresponde actuar como funcionario de alzada, a la Dirección General.

...

La Dirección General de Aduanas en funciones de segunda instancia en materia de Valoración, emite la resolución N° 704-04-23, de 14 de enero de 1998 y pasa a resolver el recurso considerando que tratándose de una unidad integral "HELICOPTERO" al cual le faltan unas piezas, debía tenerse como base los valores de referencia, disminuyendo una porción sobre el dicho valor, es así que se ordena preparar una declaración adicional sobre la base de un valor de B/.23,999.40. Esto significa que la Liquidación adicional debe hacerla por la diferencia de lo declarado en la Liquidación 017704.

...

Los 5 primeros métodos de valoración contemplados en el mencionado Decreto de Gabinete [No. 26 de 1996] tienen como presupuesto la existencia de una factura comercial válida, que sea aceptable para Aduanas, pese a que exista alguna circunstancia o consideración que cause que no pueda determinarse a través de valor de transacción el valor de aduanas. De los siguientes métodos el único aplicable al caso particular que nos ocupa es el de Valoración conforme a Criterios Razonables. El punto medular es que no existía factura, ya que no era válida por no ajustarse a los requerimientos de la Ley fiscal."

IV. OPINION DE LA PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACION

La representante del Ministerio Público, a través de Vista Fiscal No.264 de 14 de julio de 1998 visible a fojas 41-53 del expediente, solicitó a esta Superioridad que se negara la pretensión del demandante, por considerar que los actos impugnados no infringen el ordenamiento legal.

Al analizar los cargos de violación planteados, la colaboradora de la instancia destacó básicamente, que el aforo de la mercancía como "Helicóptero Incompleto" se realizó debidamente, siguiendo los parámetros que permitieron al personal fiscalizador determinar que la mercancía no debía aforarse como partes de helicóptero.

En lo que atañe a la valoración de la mercancía, la Procuradora de la Administración indicó, que tal proceso se realizó conforme al criterio razonable de valoración de mercancías establecido en el artículo 8 del Decreto de Gabinete No. 26 de 1996, toda vez que los criterios anteriores no le eran aplicables, por no haberse presentado facturas comerciales válidas ante las autoridades aduaneras. En este sentido señala, que las facturas presentadas no cumplían con los requisitos establecidos en el artículo 448 del Código Fiscal, pues se trataba de facturas comerciales sin firma, ni refrendo.

De esta forma se reitera que los actos impugnados no infringen el ordenamiento legal, y se solicita la denegación del derecho solicitado por el demandante.

V. EXAMEN DE LA SALA TERCERA

Una vez surtidos todos los trámites pertinentes, se procede a decidir sobre el mérito de la demanda.

De manera preliminar hemos de señalar, que el acto principalmente demandado tiene la peculiaridad de decidir sobre dos materias (aforo y valoración) que si bien son del conocimiento en primera instancia del mismo ente, entiéndase Administración Regional de Aduanas, el conocimiento en segunda instancia de aquellas materias se divide, asignándose competencia objetiva, según la materia, a la Comisión Arancelaria para decidir sobre el tema de la clasificación arancelaria de la mercancía, y a la Dirección General de Aduanas para decidir en alzada en relación a la valoración de la mercancía.

Conforme lo expresara el señor Director General de Aduanas, y según consta en el expediente administrativo, el aspecto concerniente a la clasificación arancelaria de la mercancía "Partes de Helicóptero" -vs- "Helicóptero Incompleto", no debe ser objeto de discusión en este proceso contencioso, toda vez que aquella materia, después de ventilada ante la Administración Regional de Aduanas, era del conocimiento de la Comisión Arancelaria en grado de apelación (Art.657, Sección Segunda ordinal 1° del Código Fiscal), alzada que sin embargo no se surtió por haberse interpuesto de manera extemporánea (cfr. fs. 60 y 61 del expediente administrativo).

En ello conviene la Corte, toda vez que obra en autos la documentación que evidencia que el interesado no agotó el recurso establecido en la vía gubernativa para impugnar este aspecto de su disconformidad con la actuación del Administrador Regional de Aduanas, por lo que no es procedente su examen ante esta Superioridad, ni hemos de referirnos a las pruebas o alegaciones esgrimidas por el demandante a este respecto.

Añadimos, que si bien el Director General de Aduanas en la Resolución No. 704-04-23 de 14 de enero de 1998 hace alusión al aforamiento de la mercancía, se refería al reconocimiento y valoración que de la mercancía había hecho el Departamento de Operaciones de la Administración Regional de Aduanas. El aforamiento es en este sentido, el acto de acertamiento tributario a fin de establecer el monto de los gravámenes que afectarían la mercancía introducida por el consignatario JAIME FABREGA, aforo éste que la Dirección General de Aduanas debía utilizar para valorar la mercancía y establecer los derechos aduaneros a pagar, no así para su clasificación arancelaria, que correspondía definir como hemos visto, a otra instancia administrativa, y así ha de entenderse la Resolución No. 704-04-23 de 14 de enero de 1998.

Resta por ende, referirnos al aspecto de la valoración del "Helicóptero Incompleto", materia cuya discusión sí quedó agotada en la vía gubernativa, y a partir de la cual fueron calculados los derechos y gravámenes aduaneros causados. Sobre el particular hemos de externar lo siguiente:

De acuerdo a las constancias que reposan en autos, al momento de la entrada al país de la mercancía importada por el consignatario JAIME FABREGA QUELQUEJEU, surgió la discrepancia de valor y aforo, a la que nos hemos referido en párrafos anteriores. Esta discrepancia fue resuelta por la Administración Regional de Aduanas en primera instancia, señalando que se trataba de un helicóptero incompleto, y siendo que los derechos aduaneros habían sido liquidados en base a la declaración de "partes de helicópetro" era preciso realizar una liquidación adicional.

Para tal fin, se hacía necesario calcular el valor en aduanas de la mercancía, a lo que se procedió utilizando el "criterio razonable de valoración",

que permitió establecer un valor FOB de treinta mil balboas.

Conforme al Decreto de Gabinete No. 26 de 1994, la primera regla o criterio para establecer el valor de una mercancía, es "el valor de la transacción". Sólo en caso de que este parámetro no pueda ser utilizado, se procede a aplicar el siguiente método de valoración, hasta llegar al criterio "valor razonable".

Se advierte que el primer criterio "valor de la transacción", no pudo ser utilizado en este caso, al venir éste definido como el valor que corresponde al precio realmente pagado o por pagar por las mercancías. Para determinar dicho valor, era necesario contar con la documentación comercial válida que exige la legislación fiscal aduanera, a fin de establecer el precio que había pagado el importador JAIME FABREGA al momento de adquirir la mercancía en los Estados Unidos.

En este caso no existía certeza en cuanto a este aspecto, siendo que conforme se detalla en la Nota suscrita por el Jefe de la Sección de Valoración de la Administración Regional de Aduanas (cfr. fs. 9-11 del expediente administrativo), la documentación que amparaba la transacción no cumplía con los requisitos mínimos que exige el Código Fiscal, dado que la factura comercial no había sido presentada en papel membretado que estipulara el logo de la empresa proveedora, su dirección, números de teléfono y fax, etc. Dicha factura tampoco venía firmada o refrendada por el proveedor, comisionista, fabricante o intermediario, sino por el propio consignatario JAIME FABREGA, y en ella no se establecía la marca del producto, o si éste era nuevo o usado.

Tratándose de un documento deficiente, a la luz del artículo 448 del Código Fiscal, se procedió a establecer un método de valoración que fuese el más adecuado, hasta llegar a la valoración según el "criterio razonable", que se sirvió a su vez del precio en el mercado de mercancías similares, lo que arrojó el valor inicial FOB de 30 mil balboas.

No obstante, la Sala advierte que la Dirección General de Aduanas modificó este valor en la resolución de segunda instancia, al aceptar como válida otra factura presentada por el importador "Proforma No. 1658" que establecía un valor FOB de veintitrés mil novecientos noventa y nueve balboas con cuarenta centésimos. Ello, con fundamento en lo previsto en el Decreto de Gabinete No. 26 de 1996, que permite al interesado proporcionar las explicaciones o antecedentes complementarios que se requieran para la correcta valoración de la mercancía, y a la Dirección de Aduanas requerir tal documentación a fin de comprobar el valor real de la misma (Arts 1° y 17 del Decreto de Gabinete no. 26 de 1996).

La Corte descarta por ende, el cargo de ilegalidad presentado por el recurrente en relación al artículo 1° inciso segundo del Decreto de Gabinete No. 26 de 1996, toda vez que contrario a lo esbozado por el actor, la administración sí respetó el orden de valoración consignado en dicho instrumento legal.

Inicialmente, ante la falta de documentación válida para utilizar el "valor de la transacción" como criterio, se utilizó el que mejor podía establecer el valor de las mercancías, y posteriormente se le brindó oportunidad al importador de comprobar los datos que sirvieran de manera más certera para este fin, aceptándose como valor criterio,la nueva factura presentada por el consignatario, y sobre la cual se ordenó confeccionar la liquidación adicional.

En lo que atañe a la supuesta violación del artículo 19 del Decreto de Gabinete No. 26 de 1996, este Tribunal conceptúa que la transgresión alegada carece de sustento jurídico, toda vez que contrario a lo señalado por el demandante, el Decreto de Gabinete No. 26 de 1996 fue aplicado por todos los entes administrativos competentes para conocer de este negocio, como se desprende palmariamente del contenido de las Resoluciones AR-OR-04-317 de 14 de abril de 1997 y 704-04-23 de 14 de enero de 1998.

De esta forma, una vez atendidas las argumentaciones de las partes, la Sala

concluye que la actuación demandada no infringe el ordenamiento legal, por lo que ha de negarse la pretensión invocada.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO SON ILEGALES, la Resolución No. AR-OR-04-317 de 14 de abril de 1997 dictada por el Administrador Regional de Aduanas, Zona Oriental de la Provincia de Panamá, ni la Resolución No. 704-04-23 de 14 de enero de 1998 expedida por el Director General de Aduanas, y NIEGA las demás declaraciones solicitadas por el recurrente.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. CARLOS AYALA EN REPRESENTACIÓN DE FABIAN POLANCO, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO S/N° NOTIFICADO MEDIANTE NOTA N°OIRH-316 DE 15 DE FEBRERO DE 2000, SUSCRITO POR LA JEFA DE LA OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, OCHO (8) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Carlos Ayala, en nombre y representación de FABIAN POLANCO, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto Ejecutivo S/N° notificado mediante Nota N°OIRH-316 de 15 de febrero de 2000, suscrito por la Jefa de la Oficina Institucional de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede a la revisión del libelo incoado, y se percata que la parte actora ha incluido dentro del mismo, una solicitud previa a la admisión de la demanda.

Sin embargo, por razones de economía procesal, es procedente determinar si la demanda instaurada ha cumplido con los requisitos formales que hagan admisible la misma.

Advierte el suscrito, que el libelo de demanda presentado adolece de un defecto que impide imprimirle el trámite legal correspondiente, el cual se le indica al actor a continuación.

En primer término, observa esta Superioridad, que el actor omitió presentar copia autenticada del acto impugnado con su correspondiente constancia de notificación, requisito previsto en el artículo 44 de la Ley 135 de 1943, que a la letra dice:

> "Artículo 44. A la demanda deberá acompañar el actor una copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, según los casos."

En este sentido, en el expediente contentivo del presente caso, obra a foja 11, solicitud de certificación con fecha 1° de agosto de 2000, mediante la cual el demandante requirió al Ministro de Desarrollo Agropecuario, copia autenticada

del Decreto Ejecutivo S/N, notificado mediante Nota N°OIRH-316 de 15 de febrero de 2000, y de la Resolución N°ALP-072-ADM-2000 del 1° de abril de 2000, ambos actos con constancias de notificación. Sin embargo, desafortunadamente, el actor al momento de presentar dicha solicitud de certificación en la demanda, no hace referencia a la copia autenticada con constancia de notificación del acto principal, es decir, del Decreto Ejecutivo S/N, sino que tan sólo requiere copia autenticada de la Nota N°OIRH-316 de 15 de febrero de 2000, mediante la cual simplemente se le notifica a la parte del contenido del decreto supra citado. (Ver foja 18 del expediente)

Es menester destacar que la presentación tanto del acto impugnado como de cualquier otro documento de valor probatorio debidamente autenticados, es importante a fin de que esta Corporación de Justicia pueda admitir dichos documentos como verdaderas constancias de los hechos a que aluden las partes.

Ante tales circunstancias, y dado que la demanda promovida no cumple con las exigencias de ley, lo pertinente es negarle la admisión a la misma, en cumplimiento de lo contemplado en el artículo 31 de la Ley 33 de 1946, que dispone lo siguiente:

> "Artículo 31. No se dará curso legal a la demanda que carezca de alguna de las anteriores formalidades y su presentación no interrumpe los términos señalados para la prescripción de la acción."

En mérito de lo expuesto, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción promovida por el Lcdo. Carlos Ayala en representación de FABIAN POLANCO.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICDO. CARLOS AYALA MONTERO, EN REPRESENTACIÓN DE PEDRO RODRIGUEZ PARDO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA DP-DOPA-339 DEL 1° DE FEBRERO DEL 2000, DICTADA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, OCHO (8) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Ayala Montero, actuando en nombre y representación de PEDRO RODRIGUEZ PARDO, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Nota DP-DOPA-339 del 1° de febrero del 2000, dictada por la Directora Nacional de Personal del Ministerio de Educación y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda a fin de determinar si la misma cumple con los requisitos mínimos para su admisión.

Observa quien suscribe que la demanda es inadmisible, ya que la parte actora en el apartado de lo que se demanda solicita que se declare nula, por ilegal, la Nota DP-DOPA-339 de 1° de febrero del 2000, dictada por la Directora

Nacional de Personal del Ministerio de Educación, aduciéndolo como acto principal, en vez del Decreto Ejecutivo No.95 de 15 de mayo de 2000. Este último documento para los efectos de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción constituye el acto principal, pues el mismo contiene la decisión de destitución del señor Pedro Rodríguez Pardo y no la Nota No. DP-DOPA-339 de 1°de febrero de 2000, toda vez que la misma sólo representa la notificación de dicha decisión dictada por la autoridad administrativa.

En virtud de que la actora omitió los requisitos mencionados su demanda no debe admitirse, según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Carlos Ayala Montero, actuando en nombre y representación de PEDRO RODRIGUEZ PARDO, para que se declare nula, por ilegal, la Nota No. DP-DOPA-339 de 1° de febrero de 2000, dictada por la Dirección Nacional de Personal del Ministerio de Educación, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifiquese,

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICDO. CRISTÓBAL GARRIDO, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA ORDEN VERBAL EMITIDA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL DE CHITRÉ, PROVINCIA DE HERRERA, EL LUNES 13 DE MARZO DEL 2000, EL ACTO CONFIRMATORIO Y LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO DE EDUACCIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, OCHO (8) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Cristóbal Garrido, actuando en su propio nombre y representación, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la orden verbal emitida por la Directora de la Escuela Secundaria Oficial de Chitré, Provincia de Herrera, el lunes 13 de marzo del 2000, el acto confirmatorio y la negativa tácita, por silencio administrativo, del Ministerio de Educación, y para que se hagan otras declaraciones.

El actor solicita en el apartado de lo que se demanda que se declare nula, por ilegal, la orden verbal de la profesora Edda Rodríguez de Díaz, Directora de la Escuela Secundaria Oficial de Chitré, emitida el día lunes 13 de marzo del año 2000, comunicándole, al profesor Cristóbal Garrido Romero, que durante el año lectivo del 2000, debía impartir la asignatura contabilidad, correspondiente al cuarto nivel, sin presentar prueba de dicho acto.

Al resolver sobre la admisibilidad de la demanda, quien suscribe observa que la misma es inadmisible, ya que no hay constancia en el expediente de por lo menos dos testimonios hábiles que prueben la existencia del acto verbal impugnado, tal como lo dispone exige el artículo 48 de la Ley 135 de 1943, el cual es del tenor siguiente:

> "Artículo 48. Si se trata de un acto, orden, o disposición de que no hay constancia escrita por haberlo dictado verbalmente la autoridad

respectiva, el interesado o perjudicado deberá presentar en abono de la demanda dos testimonios hábiles por lo menos."

Por otro lado, si bien es cierto que el actor aporta copia autenticada de la Resolución AL N°0010 de 28 de marzo de 2000, dictado por la Dirección Regional de Herrera del Ministerio de Educación, que resuelve el recurso de apelación interpuesto por el actor, último recurso que agota la vía gubernativa, en la misma no hay constancia de que la misma le haya sido notificada a la actora. Por lo tanto, la demanda no cumple con el requisito establecido en el artículo 44 de la Ley 135 de 1943, debido a que no se ha acreditado la notificación del acto impugnado. La notificación del acto que se impugna es un requisito de suma importancia exigido por la Ley. Todo acto administrativo impugnado requiere no sólo su autenticación sino la constancia de la notificación del mismo para demostrar el agotamiento de la vía gubernativa y si se ha propuesto dentro de los dos meses siguientes, por lo que el libelo de la demanda deberá ser acompañado de estas constancias, pues, de no ser así, dicha demanda se encontrará deficientemente propuesta. En relación con lo anterior, el artículo 46 del mismo cuerpo legal estipula que de encontrarse imposibilitado de cumplir con lo establecido en dicha norma, el demandante podrá optar por enunciar las oficinas donde se encuentra ubicado el original para que sea el Magistrado Sustanciador quien la solicite previo a la admisión de la demanda. Tampoco se observa en el expediente contentivo de la demanda, documento alguno que demuestre que el demandante o su apoderado judicial solicitaran en algún momento, la copia autenticada del acto impugnado y la constancia de la notificación a la institución correspondiente.

En virtud de que la actora omitió los requisitos mencionados su demanda no debe admitirse, según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Cristóbal Garrido, actuando en su propio nombre y representación, para que se declare nula, por ilegal, la orden verbal emitida por la Directora de la Escuela Secundaria Oficial de Chitré, Provincia de Herrera, el lunes 13 de marzo del 2000, el acto confirmatorio y la negativa tácita, por silencio administrativo, del Ministerio de Educación, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifiquese,

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA LCDA. MARLENE B. DE FÁBREGA, EN REPRESENTACIÓN DE JAIME E. BETEGON, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 98-02.021 EXPEDIDA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Lcda. Marlene B. de Fábrega, actuando en representación de JAIME BETEGON, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, con el objeto de que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 98-02-021 expedida por la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social, los actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones..

En la Resolución N° 98-02-021 expedida por la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social se resuelve no acceder a la solicitud de subsidio por enfermedad formulada por JAIME ENRIQUE BETEGON SANTAMARIA, correspondiente a las incapacidades comprendidas del 8 al 27 de noviembre de 1997, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 42-D de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social.

I. La pretensión y su fundamento.

En la demanda se formula pretensión para que la Sala Tercera declare que es nula por ilegal la Resolución N° 98-02-021 sin fecha expedida por la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social y que como resultado de ello queden revocadas en todas sus parte la Resolución N° 98-04-08 de 23 de abril de 1998 emitida por la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social y la Resolución N° 16,257-98 J.D. de 2 de julio de 1998 expedida por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Como consecuencia de las declaraciones anteriores, se solicita que el señor Jaime Enrique Betegón Santamaría se le reconozca el pago de subsidio por incapacidad correspondiente al período comprendido entre el 30 de octubre de 1997 al 15 de abril de 1998 y por lo tanto se le adeuda dicho subsidio.

Entre los hechos u omisiones fundamentales de la acción, se señala que el señor Jaime E. Betegón al ocurrir su lesión llevaba más de 12 continuos de cotización a la Caja de Seguro Social, como empleado de la Comisión del Canal, por lo que cumplía ampliamente el requisito del artículo 42C de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social para tener derecho a subsidio por enfermedad. La lesión que produjo la incapacidad, según quien recurre, se produjo el 30 de octubre de 1997 a las 12 de la noche, entre calle 9na y Central de Colón, cuando el señor Betegón fue asaltado por 2 hombres en momentos en que se bajaba de su carro, y, aún cuando trató de evitar que le robaran, fue herido de un machetazo en la mano izquierda. En ese estado manejó hasta el Hospital Amador Guerrero, en el cual fue atendido e ingresado, mas no le pidieron que escribiera con su mano derecha la versión de los hechos, ni le dieron a leer ni a firmar lo que ellos transcribieron de la versión que él les dio sobre los sucesos. A su juicio, el médico o enfermera que escribió la supuesta historia de la lesión, no fue testigo de la misma e incurre en falso testimonio al omitir parte de la declaración e interpretarla subjetivamente. También señala que cuando el señor Betegón solicitó el subsidio por enfermedad por el período de su incapacidad, al llenar el formulario "entrevista del asegurado", relató que la lesión la causaron 2 asaltantes en momentos que le robaban, y, la Comisión de Prestaciones Económicas al resolver la solicitud, en vez de tomar como cierta la totalidad de su declaración, solo toma parte de ella y al citar el artículo 42D de la Ley Orgánica en los considerandos de la Resolución acusada, omite la palabra "voluntariamente" después de la palabra partícipe, lo que cambia totalmente el sentido de la norma. Finalmente aclara que nunca se le debió negar el subsidio a su representado, pues, no participó en una riña voluntariamente, sino que trató de defenderse de un asalto, por lo que es ilegal aplicarle la causal contenida en el artículo 42-D de la Ley Orgánica.

Como disposiciones legales infringidas, se señalan los artículos 42-C, 42-D y 83 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social que en su texto expresan:

> "ARTICULO 42-C: Cuando la enfermedad produzca incapacidad para el trabajo y siempre que el trabajador hubiere acreditado por lo menos, seis (6) meses de cotizaciones en los últimos 9 meses calendarios anteriores a la incapacidad, tendrá derecho a un subsidio diario de enfermedad, en cuantía igual al setenta por ciento (70%) del salario diario correspondiente a los dos (2) últimos meses de cotizaciones debidamente acreditados en la cuenta Individual."
>
> "ARTICULO 42-D: La Caja no pagará el subsidio a que se refiere el artículo anterior mientras subsista la obligación patronal de cubrirlos de acuerdo con las disposiciones pertinente del Código

> Laboral y del Código Administrativo. Tampoco se pagará el subsidio cuando el asegurado haya provocado intencionalmente la lesión o enfermedad; cuando ésta provenga de reyerta en que participe voluntariamente o tenga origen en el uso inmoderado de alcohol o se trate de toxicomanías...".
>
> "ARTICULO 83: Las prestaciones reconocidas por el presente Decreto-Ley y sus reglamentos, son de orden público e interés social, por consiguiente es nula toda disposición u orden que les sean contrarias. Los derechos y beneficios del Seguro Social son de carácter irrenunciables y personalísimo, pero están sujetos a los plazos de prescripción que se establezcan en el presente Decreto-Ley".

En opinión de la representante de la parte actora, el artículo 42-C se violó al dejarse de aplicar, pues, el señor Betegón reunía los requisitos que dicho artículo establece para poder recibir el subsidio de enfermedad, por lo que se le desconoce a su representado, un derecho sin fundamento legal ni pruebas de que haya incurrido en alguna causal de las que el Decreto-Ley contiene para negar la prestación.

En cuanto al artículo 42-D de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, se afirma que se violó por indebida aplicación, toda vea que se aplicó a un supuesto distinto no contemplado en la norma. Según la Lcda. Marlene de Fábrega, el señor Betegón se defendió de un asalto y no participó de una riña voluntariamente, por lo que se ignoró el requisito establecido en el artículo 42D, de que para negar el subsidio por enfermedad en caso de lesión producto de riña o reyerta, el asegurado tiene que haber participado voluntariamente.

FInalmente, con relación a la violación que se alega al artículo 83 del Decreto Ley 14 de 1954, opina quien recurre que se violó de modo directo por omisión, puesto que es claro al manifestar que las prestaciones otorgadas a los asegurados mediante la Ley, son de orden público e interés social, sin embargo, la Caja de Seguro Social niega el derecho a Jaime Betegón a recibir el subsidio por enfermedad por su incapacidad comprendida del 30 de octubre al 15 de abril de 1998, muy a pesar que el artículo 42C del Decreto Ley 14 de 1954 así lo estipula.

II. EL informe explicativo de conducta rendido por la Presidenta Encargada de la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social y la Vista Fiscal de la Procuradora de la Administración.

Mediante nota de 24 de septiembre de 1998, la Presidenta Encargada de la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social, rindió el respectivo informe explicativo de conducta mismo que es visible de fojas 23 a 26 del expediente. La Presidenta Encargada de la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social, destacó en su informe que la norma legal básica en la cual se fundamenta el proceder de la institución, es el artículo 42-D de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, pues, a foja 29, 30 y 34 del expediente, se indica que el asegurado al momento de ser admitido en el Hospital de la Caja de Seguro Social, expresó al médico tratante que fue agredido por su esposa con un machete y que el paciente aparentaba estado de ebriedad, lo que también señaló la enfermera en sus notas. Luego en la Sección de Incapacidad Prolongada, afirma la funcionaria que el asegurado cambió la versión y señala que fue agredido por menores que lo atacaron con un machete ocasionándole la lesión. Tanto la Comisión de Prestaciones, en primera instancia, como la Junta Directiva en etapa de apelación, consideraron que el caso del asegurado se enmarcaba dentro de los casos descritos por el artículo 42-D de la Ley Orgánica.

Por su parte, la Procuradora de la Administración, mediante la Vista Fiscal N°508 de 22 de diciembre de 1998, que es visible de fojas 27 a 34 del expediente, se opone a los criterios expuestos por el recurrente, razón por la que solicita a la Sala que desestime sus pretensiones. Según la Procuradora de la

Administración, ante los hechos que reposan en el expediente, es claro que el caso del señor Betegón se enmarca dentro del supuesto previsto en el artículo 42-D de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, el cual dispone que la Caja no pagará el subsidio por enfermedad cuando ésta provenga de reyerta en que participe voluntariamente.

III. Decisión de la Sala.

Evacuados los trámites legales, la Sala pasa a resolver la presente controversia.

Mediante el acto demandado se resuelve no acceder a la solicitud de subsidio por enfermedad formulada por JAIME ENRIQUE BETEGON, correspondiente a las incapacidades comprendidas del 8 al 27 de noviembre de 1997, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 42-D de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social. Entre los considerandos expuestos para la expedición del acto en mención, se señala que al efectuarse las investigaciones del caso, se determinó que las lesiones en razón de las que el asegurado solicitó el subsidio, fueron producto de una riña sostenida con dos sujetos y que cuando tenía en el piso a uno de ellos, el otro hirió con arma blanca (machete) en la muñeca izquierda. En razón de ello, según lo que allí se sostiene, se procedió a aplicar el artículo 42-D de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, que dispone que la Caja no pagará el subsidio por enfermedad, cuando la lesión que padezca el asegurado provenga de reyerta en que éste participe.

Al analizar las violaciones alegadas y los argumentos que las sustentan, la Sala estima que no le asiste la razón a la parte actora, por lo que la Resolución N° 98-02-021 sin fecha, expedida por la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social, se ajusta a derecho. Es claro, según consta en autos, que el demandante se contradijo en la versión de los hechos que ocasionaron la lesión que lo incapacitó por el período ya mencionado. Ello es así, puesto que, tal como lo señala la Procuradora de la Administración, a fojas 29, 30 y 34 del expediente administrativo, aparece que el paciente al ser admitido en el Hospital de la Caja de Seguro Social, dijo al médico tratante que fue agredido con un machete por su esposa, y el médico también dejó constancia del aparente estado de ebriedad del asegurado. De igual manera en las Notas de Enfermería, fueron señalados esos mismos hechos.

Pese a que el asegurado al sustentar los recursos de reconsideración con apelación en subsidio señala otros hechos, como que fue asaltado por dos sujetos en el momento que se decidía entrar a su vehículo y al tratar de defenderse, uno de los asaltantes le propinó un machetazo dirigido a su cuello y el puso su mano izquierda para protegerse, recibiendo el machetazo en la muñeca, e incluso presenta una denuncia en la Policía Técnica Judicial que es visible a foja 73, la Sala es del criterio que no se logra desvirtuar de manera fehaciente lo hechos que según el documento llenado al momento de su admisión y en la Caja de Seguro Social y las Notas de Enfermería antes mencionados, fueron los que ocasionaron la lesión del asegurado. Como tales hechos evidentemente indicaban que la lesión en el asegurado, fue producto de una riña, la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social dispuso aplicar lo previsto en el artículo 42-D de la Ley Orgánica, que para los efectos de estos casos, dispone que la Caja no pagará el subsidio por enfermedad cuando la lesión que padezca el asegurado provenga de reyerta en que éste participe.

En virtud de lo anotado, lo procedente es, no acceder a las pretensiones formuladas en la demanda.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Resolución N° 98-02-021 expedida por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, como tampoco lo son sus actos confirmatorios.

Notifiquese y Cumplase

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA FIRMA ALEMÁN, CORDERO, GALINDO & LEE, EN REPRESENTACIÓN DE CABLE & WIRELESS, S. A., PARA QUE SE DECLAREN NULOS, POR ILEGALES, LOS ARTÍCULOS PRIMERO Y SEGUNDO DE LA RESOLUCIÓN NO. JD-1824 DE 8 DE FEBRERO DE 2000, DICTADA POR EL ENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Alemán, Cordero, Galindo y Lee, actuando en nombre y representación de CABLE & WIRELESS, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declaren nulos, por ilegales, los artículos primero y segundo de la Resolución No. JD-1824 de 8 de febrero de 2000, dictada por el Ente de los Servicios Públicos.

La firma Alemán, Cordero, Galindo & Lee solicitó la suspensión provisional de los efectos del acto impugnado. En dicha solicitud de suspensión la parte actora señala que el perjuicio que se le causaría es grave, actual e inminente, ya que en base a lo estipulado en la ley y en el anexo E del Contrato de Concesión No. 134 de 1997 la empresa tiene el derecho de aumentar las tarifas acordadas para el año 2000. De igual forma, indica que en el "Dictamen sobre Información Financiera Proyectada", presentada por la firma de auditores independientes KPMG, se estima que la empresa tendrá una reducción en sus ingresos mensuales de un millón ochocientos cuarenta y dos mil seiscientos cincuenta balboas (B/1,842,650.00) que resultan de restar los ingresos que hubiere percibido de estar en vigencia los topes pactados en el contrato de concesión menos los ingresos a percibir con base a los topes de precios conforme a la Resolución impugnada. También advierte que se ha producido una ostensible violación de numerosas normas legales, pues el Ente Regulador aceptando que no se han dado ninguno de los supuestos establecidos en el propio contrato para modificarlo, quiere fundamentar la Resolución impugnada en el artículo 19 de la Ley No.26 de 29 de febrero de 1996, el artículo 38 de la Ley No.31 de 8 de febrero de 1996 y los artículos 44 y 232 del Decreto Ejecutivo No.73 de 9 de abril de 1997, pero que estas normas no le otorgan al Ente Regulador de los Servicios Públicos un poder absoluto en materia tarifaria que les permita rebasar los límites y mecanismos establecidos en la Constitución, en la Ley o en el Contrato de Concesión, pues les da a estas normas un sentido y alcance mucho más allá de su letra y de su espíritu. Finalmente, manifiesta que la violación directa de los artículos 976 y 1134 del Código Civil es evidente porque el Ente Regulador violó el texto del Contrato, al interpretarlo ilegalmente para comprender dentro del mismo cosas distintas y casos diferentes de aquellas pactadas por las partes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 135 de 1943, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia puede suspender los efectos del acto, resolución o disposición acusada si, a su juicio, ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave.

Por medio de los artículos primero y segundo de la Resolución No. JD-1824 de 8 de febrero de 2000, dictada por el Ente de los Servicios Públicos, se deja sin efecto la Resolución No.1681 de 24 de noviembre de 1999, solamente con

respecto a los topes de precios establecidos para el servicio de telecomunicación básico local que entrarían a regir a partir del 1° de enero de 2000 y se mantiene para los años 2000 y 2001 los topes de precios correspondientes al año 1999 para el servicio de telecomunicación básica local, tal como fueron ajustados mediante la resolución No.JD-1096 de 20 de noviembre de 1998.

La Sala observa que el artículo 232 del Decreto Ejecutivo No.73 de 9 de abril de 1997, "por el cual se reglamenta la Ley No.31 de 8 de febrero de 1996, por la cual se dictan normas para la regulación de telecomunicaciones en la República de Panamá", dispone lo siguiente:

> "Artículo 232. El Ente Regulador podrá establecer un determinado régimen tarifario al concecionario o a modificar el ya existente, según lo previsto en el Artículo 38 de la Ley. En consecuencia, el referido régimen tarifario formará parte integrante del respectivo contrato de concesión, incorporándose como un anexo al mismo. En caso de modificación del régimen tarifario existente, se procederá a la modificación del contrato de concesión conforme al mecanismo establecido en el mismo." (El subrayado es de la Sala)

En este orden de ideas, la cláusula 64 del contrato No. 134 de 29 de mayo de 1997 de concesión para la prestación de servicio de telecomunicaciones dispone que "este contrato sólo podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las partes y con las formalidades señaladas en las leyes vigentes."

No obstante lo anterior, la Sala considera que no es clara la infracción de dichas normas, pues el artículo 71 de la Ley No. 56 de 27 de diciembre de 1995 (Ley de Contratación Pública) prevé que los contratos públicos pueden ser modificados unilateralmente por parte del Estado. De igual forma, el artículo 76 de la misma ley contempla que los contratos públicos pueden ser modificados unilateralmente y pueden ser adicionados en base al interés público.

La Sala considera apropiado señalar que el punto relativo a la potestad del Ente Regulador de introducir modificaciones al contrato objeto de discusión, es un tema que demanda un análisis exhaustivo y que debe ser objeto de la sentencia de fondo correspondiente. Por lo tanto, la Sala estima que la complejidad de este asunto exige contar con mayores elementos de juicio, y, debido la incipiente etapa procesal en la que nos encontramos, no es prudente anticipar un juicio categórico al respecto.

Cabe advertir que en vista de la naturaleza jurídica del contrato en discusión y de las normas de la Ley 56 de 1995 citadas, la posibilidad de que si el mismo puede ser modificado o no unilateralmente y cuál es la entidad estatal para hacerlo y el alcance de los cambios o modificaciones que podrían introducirse al contrato son puntos que, como se ha indicado, deberán ser dilucidados al emitir la sentencia de fondo correspondiente.

Si bien es cierto que la empresa demandante ha acreditado, mediante un dictamen pericial de la firma de auditores independientes KPMG, que podría sufrir una reducción en sus ingresos mensuales de un millón ochociento cuarenta y dos mil seiscientos cincuenta balboas (B/.1,842, 650.00), no es menos cierto que esos perjuicios potenciales no son de difícil o imposible reparación, razón por la cual la Sala estima que no debe acceder a la petición de suspender el acto administrativo impugnado.

Es necesario señalar que esta medida precautoria no debe considerarse un pronunciamiento anticipado de esta Sala en relación a la pretensión de fondo del recurrente, ya que sólo al resolverse la controversia se determinará la legalidad o ilegalidad del acto impugnado.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ACCEDE a la petición de suspender los artículos primero

y segundo de la Resolución No. JD-1824 de 8 de febrero de 2000, dictada por el Ente de los Servicios Públicos.

Notifiquese,

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LCDO. ERICK NORMAN BARRIOS, EN REPRESENTACIÓN DE CALEB ORTEGA SOLIS, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N°02-99 DE 28 DE JULIO DE 1999, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARRENDAMIENTO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Erick Norman Barrios, actuando en nombre y en representación de CALEB ORTEGA SOLIS, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N°02-99 de 28 de julio de 1999, dictada por la Dirección General de Arrendamiento del Ministerio de Vivienda, actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

El licenciado Erick Norman Barrios solicitó la suspensión provisional de los efectos del acto impugnado. No obstante, por razones de economía procesal se procede a examinar la demanda con el objeto de determinar si la misma cumple con los requisitos procesales mínimos.

Observa quien suscribe que la demanda es inadmisible, toda vez que la parte actora al exponer su pretensión, únicamente solicita que se declare la nulidad de la Resolución N° 02-99 de 28 de julio de 1999, dictada por la Dirección General de Arrendamiento del Ministerio de Vivienda y de sus actos confirmatorios, obviando solicitar el restablecimiento o reparación del derecho subjetivo lesionado. Con respecto a lo anterior, la Sala ha señalado en diversas ocasiones que en las acciones de plena jurisdicción es un requisito formal solicitar, además de la declaratoria de nulidad del acto acusado, el restablecimiento del derecho subjetivo lesionado, tal como lo establece el artículo 43a de la Ley 135 de 1943.

Como el demandante omitió el requisito mencionado, su demanda no debe admitirse, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del mismo cuerpo legal.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por el licenciado Erick Norman Barrios, actuando en nombre y en representación de CALEB ORTEGA SOLIS, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N°02-99 de 28 de julio de 1999, dictada por la Dirección General de Arrendamiento del Ministerio de Vivienda, actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

Notifiquese y Cumplase,

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL

Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCI0SO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LCDO. TOMÁS VEGA CADENA EN REPRESENTACIÓN DE REFORESTADORA MADRID, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° DN-030-96 DE 3 DE MAYO DE 1996, DICTADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Lcdo. Tomás Vega Cadena, actuando en representación de REFORESTADORA MADRID, S. A., ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, con el objeto de que se declare nula por ilegal, la Resolución N° DN-030-96 de 3 de mayo de 1996, dictada por la Dirección Nacional de Reforma Agraria, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Mediante el acto demandado se resuelve negar la solicitud de adjudicación N°4-570-95 de 16 de noviembre de 1995, formulada por la sociedad anónima REFORESTORA MADRID, S. A, inscrita a la ficha 306012, rollo 47100, imagen 0055, Sección de Micropelícula Mercantil del Registro Público, representada por el señor TOMAS VEGA CADENA, cedulado 8-396-474, sobre un globo de terreno con un área de 17 has + 2019,61 mt2. ubicado en LAS GUIAS, Corregimiento de RIO HATO, Distrito de Antón, Provincia de Coclé.

I. La pretensión y su fundamento.

En la demanda se formula pretensión para que la Sala Tercera declare que es nula por ilegal la Resolución N° DN-030-96 de 3 de mayo de 1996, expedida por la Dirección Nacional de Reforma Agraria, así como la Resolución N° ALP-008-rR.A. de 16 de enero de 1998, emitida por el Ministro de Desarrollo Agropecuario. Como consecuencia de las declaraciones anteriores, se solicita se restituya el derecho subjetivo de su representada, el cual fue violentado tanto por la Dirección Nacional de Reforma Agraria como el Ministro del Remo, al prohijar la decisión del A-quo. Finalmente se solicita que se condene al señor Ministro de Desarrollo Agropecuario y/o Estado, al pago de los perjuicios ocasionados a la empresa Reforestadora Madrid, S. A., pues no se le ha permitido a su cliente la utilización oportuna de la tierra solicitada en compra, después de haber incurrido ella en una serie de gastos hasta por un monto aproximado de B/.75.000.00 por honorarios, estudios topográficos, mano de obra, plantones etc..

Entre los hechos u omisiones fundamentales de la acción, se destaca que la sociedad Reforestadora Madrid, S. A., formuló solicitud de adjudicación de un globo de terreno de 17 Has. 2,919.61 M2, ubicado en el sector de Las Guías, Corregimiento de Río Hato, Distrito de Antón, Provincia de Coclé, en la Comisión de Reforma Agraria, Distrito de Penonomé, Región 4, el 16 de noviembre de 1995, distinguida con el N° 4-570-95. Esa Dirección, según quien recurre, aprobó el Plano N°201-07-6344, a favor de Reforestadora Madrid, S. A., no obstante, se resolvió negar la solicitud de adjudicación N° 4-570-95 y anular el plano en referencia en la Resolución N° DN-030-96 de 3 de mayo de 1996. También señala que al notificarse de la resolución acusada, solicitó la reconsideración con apelación en subsidio y pidió práctica de pruebas, petición que fue ignorada por la Dirección Nacional de Reforma Agraria, cuando estaba obligada por mandato expreso de la Ley a practicarlas.

Como disposiciones legales infringidas, se invoca el artículo 464 del Código Judicial, el artículo 851 del Código Administrativo, los artículos 722, 1212 y 1136 del Código Judicial y el artículo 19 del Código Agrario que en su texto expresan:

Código Judicial:

"ARTICULO 464: El Juez al proferir sus decisiones, debe tener en cuenta que el objeto del proceso es el reconocimiento de los derechos consignados en la Ley sustancial y con este criterio se deben interpretar las disposiciones del presente Código. Las dudas que surjan en la interpretación de este Código; deberán aclararse mediante la aplicación de los principios constitucionales y generales del Derecho Procesal de manera que se observe le debido proceso, la igualdad procesal de las partes, la economía y la lealtad procesal."

Código Administrativo:
"ARTICULO 851: El Poder Ejecutivo reglamentará la manera de proceder en los Asuntos Administrativos de Carácter Nacional, sobre las bases siguientes:

1. Que no se eluda el derecho de petición, ni se demore indefinidamente el despacho de los asuntos;
2. Que cuando la naturaleza del caso lo requiera, se haga una averiguación prolija de los hechos, para que la decisión no lastime los derechos legítimos de los asociados;
3. Que se definan bien los casos de impedimento, a fin de asegurar la imparcialidad de los empleados y se disponga claramente la manera de reemplazar los impedidos; y
4° Que se definan claramente los casos de apelación y el procedimiento que debe seguirse en ellos, haciendo que no se vulneren los derechos de los particulares ni se eluda la Ley."

Código Judicial:

"ARTICULO 722: Son causales de nulidad comunes a todos los procesos:
1...
...
8. No abrir el proceso o incidente a prueba, en los procesos de conocimiento, o no señalar audiencia en los casos que la Ley exija ese trámite.

"ARTICULO 1212: Son comunes en los procesos de conocimiento, las siguientes disposiciones:
1...
2. No se podrá dictar sentencia si el Juez observa que existe alguna causal de nulidad. En ese caso deberá proceder el trámite que corresponda o a declarar la nulidad si fuere insaneable..."

"ARTICULO 1136: Una vez que el expediente llegue en apelación, o en consulta ante el Tribunal Superior, éste examinará los procedimientos y si encontrase que no se ha omitido alguna formalidad o trámite o se ha incurrido en alguna causal de nulidad que haya causado efectiva indefensión a las partes o se han violado normas imperativas de competencia, decretará la nulidad y ordenará que se reasuma el curso normal del proceso.
En caso de que sea absolutamente indispensable devolverá el expediente al juez de conocimiento, con indicación precisa de las omisiones que deban subsanarse y de la corrección disciplinaria que imponga si hubiere mérito.
Se consideran como formalidades indispensables para fallar, entre otras, la omisión del traslado de la demanda, en los procesos que se requiere este trámite, la falta de notificación del auto ejecutivo, la omisión de la apertura del proceso o incidente a pruebas, en los casos en que esté indicado este requisito o el no haberse practicado estas pruebas, sin culpa del proponente."

Código Agrario:

"ARTICULO 19: El Estado establecerá las medidas necesarias para lograr una coordinación efectiva entre todas sus dependencias, agencias y organismos autónomos de tal manera que los objetivos y disposiciones del Código Agrario sean cumplidos con toda amplitud; para lo cual todos los Ministerios, dependencias oficiales e Instituciones autónomas, mantendrán una unidad integral de planificación y trabajo con miras a la incorporación definitiva de los medios rurales y del hombre del campo a la economía nacional."

La parte actora sostiene que la infracción a las normas del Código Judicial que invoca como infringidas, se produjo en el concepto de quebrantamiento de las formalidades legales, toda vez que al no practicarse las pruebas solicitadas que favorecían a la empresa Reforestadora Madrid, S. A., se produjo un desconocimiento del principio de igualdad procesal y el derecho a defensa que tienen las partes, lo que acarreba una nulidad procesal.

En cuanto al artículo 851 del Código Administrativo, sostiene que la violación también fue por quebrantamiento de las formalidades legales, ya que no se investigaron los hechos de forma que la decisión no lesionara el derecho de la adjudicataria de ser oída, de tener igualdad de oportunidad procesal y al medio de defensa que significaba la práctica de pruebas que le favorecían.

Finalmente, con respecto a la violación que se aduce al artículo 19 del Código Agrario, la parte actora es del criterio que de igual manera se produjo en el concepto de quebrantamiento de las formalidades legales, toda vez que "la norma en sí es un principio rector de la Jurisdicción Agraria encaminada al cumplimiento, en forma amplia, de los preceptos legales contenidos en la legislación agraria, definiendo y estableciendo objetivos que deben cumplirse para la finalidad propuesta en la Ley, y al no aceptar las pruebas propuestas y su práctica, se está limitando que se cumpla los objetivos propuestos en su forma integral."

II. El informe explicativo de conducta rendido por el Director Nacional Encargado de la Dirección Nacional de Reforma Agraria y la Vista Fiscal de la Procuradora de la Administración.

El Director Nacional Encargado de la Reforma Agraria, rindió el respectivo informe explicativo de conducta el 26 de junio de 1998, mismo que es visible de fojas 34 a 40 del expediente. Allí se destaca que luego de la solicitud de adjudicación que formula Reforestadora Madrid S. A., sobre una parcela con una superficie aproximada de 25 hectáreas, ubicada en la Las Guías, Corregimiento de Río Hato, Distrito de Antón, Provincia de Coclé, se efectuó mesura sobre el terreno solicitado, y resultó ser dos parcelas con una superficie total de 17 hectáreas con 2919.61 metros cuadrados. Según el funcionario de acuerdo con el plano demostrativo de los terrenos solicitados, distinguido con el número 201-07-6344 de 11 de diciembre de 1995, las parcelas solicitadas en adjudicación formaban parte de la finca N° 4035, inscrita en el Registro Público al Tomo 366, Folio 10, Sección de Propiedad, Provincia de Coclé, propiedad del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

También se destaca que al evaluar la actuación de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, se advirtió algunas deficiencias formales en los trámites, como es el caso de que la misma solicitud no fue firmada por la peticionaria, no la formuló el Representante Legal de la sociedad peticionaria o el representante legal a quien se le había otorgado poder, ni se acreditó el certificado de la existencia legal de la Sociedad, sino una copia fotostática de la Escritura Pública mediante la cual se constituyó la misma. Se afirma que en el proceso administrativo de adjudicación, se comprobó mediante estudio técnico, que las parcelas solicitadas no tenían categoría de terrenos libres adjudicables, sino terrenos que estaban asignados para uso del "Asentamiento Las Guías de Oriente", y los derechos posesorios asignados habían sido dados en garantía a favor del

Banco de Desarrollo Agropecuario, relacionado con operaciones crediticias identificadas con el número 195.77. 231-79-20-2 y 42-74 de la Sucursal de Antón, adeudando este Asentamiento, hasta febrero de 1996, saldo a capital e intereses, la suma de B/.116,016.24 (ciento dieciséis mil dieciséis balboas con veinticuatro centésimos. Esta operación crediticia contraída por el asentamiento sobre las tierras involucradas según el Director Encargado, no permitía legalmente la adjudicación pretendida por Reforestadora Madrid S. A., por representar un perjuicio a los intereses del Banco de Desarrollo Agropecuario, por ello la medida administrativa que procedía era negar la solicitud de adjudicación formulada por Reforestadora Madrid S. A.

Por su parte, la Procuradora de la Administración mediante la Vista Fiscal N° 345 de 28 de agosto de 1998, que es visible de fojas 42 a 533 del expediente, se opone a los criterios expuestos por el recurrente, razón por la que solicita a la Sala que desestime sus pretensiones. En opinión de la Procuradora de la Administración, la Resolución N° DN-030-96 de 3 de mayo de 1996, emitida por la Dirección Nacional de Reforma Agraria, fue dictada conforme a los parámetros legales, toda vez que el globo de terreno solicitado por Reforestadora Madrid S. A., no tenía la categoría de terreno libre inadjudicable, sino que por el contrario, se trataba de terrenos que estaban destinados para el uso del Asentamientos Las Guías de Oriente, el cual otorgó derechos posesorios al Banco de Desarrollo Agropecuario que financió diferentes programas pecuarios. Con relación a ello destaca que con la Resolución N° ALP-029-ADM-96 de 19 de septiembre de 1996, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, con el fin de amortizar los saldos de dichas operaciones, aprobó el procedimiento para la venta de los derechos posesorios de los Asentamientos Campesinos que mantienen cuentas pendientes con el Banco de Desarrollo Agropecuario, procedimiento que evidentemente no cumplió la empresa Reforestadora Madrid, S. A..

En cuanto a la infracción que se alega al numeral 2 del artículo 851 del Código Administrativo, la Procuradora de la Administración es del criterio que la violación no se configuró puesto que las autoridades de la Dirección Nacional de Reforma Agraria llevaron a cabo todas las diligencias pertinentes a fin de corroborar la localización y dimensiones del globo de terreno solicitado por la empresa Reforestadora Madrid, S. A., y a través de la cual se determinó que el mismo pertenecía al Asentamiento Las Guías de Oriente. Lo mismo sucede con el artículo 19 del Código Agrario, pues, con la resolución impugnada se busca preservar los derechos y obligaciones pactadas del Asentamiento Las Guías de Oriente con el Banco de Desarrollo Agropecuario.

III. Decisión de la Sala.

Evacuados los trámites de ley, la Sala pasa a resolver la presente controversia.

El acto demandado es la Resolución N° DN-030-96 de 3 de mayo de 1996, dictada por la Dirección Nacional de Reforma Agraria, en la que se resuelve negar la solicitud de adjudicación N° 4-570-95 de 16 de noviembre de 1995, formulada por la sociedad anónima REFORESTADORA MADRID, S. A., inscrita a la ficha 306012, rollo 47100, imagen 0055, Sección de Micropelícula Mercantil del Registro Público, representada por el señor TOMAS VEGA CADENA, cedulado 8-396-474, sobre un globo de terreno con un área de 17 has + 2919.61 mts2, ubicado en Las Guías, Corregimiento de Río Hato, Distrito de Antón, Provincia de Coclé. También se resuelve anular el plano N° 201-07-6344 aprobado el 11 de diciembre de 1995 a favor de REFORESTADORA MADRID, S. A..

Para resolver, la Sala estima oportuno destacar aspectos de hecho y de derecho tomados en consideración para la expedición del acto que se demanda. Siendo ello así, se advierte que el objeto de la Resolución N° DN-030-96 de 3 de mayo de 1996, lo es la solicitud N° 4-570-95 de 16 de noviembre de 1995, presentada por Reforestadora Madrid, S. A., para la adjudicación de una parcela con una superficie aproximada de 25 hectáreas, ubicada en el lugar antes detallado, misma que fue negada. Entre las consideraciones expuestas para negar

la solicitud de adjudicación, se señala que hubo deficiencias formales en los trámites para la adjudicación del terreno, tales como que la solicitud fue presentada por el apoderado legal de la empresa y en el expediente no consta el poder otorgado a éste por quien ostenta la representación de la misma, y, aunado a ello en el expediente únicamente reposa copia simple de la Escritura Pública N° 9940 de 25 de agosto de 1995, por la cual se constituye la Sociedad anónima denominada Reforestadora Madrid, S. A.. En otro orden se señala que al momento de efectuar mesura, resultó que el terreno solicitado lo constituyen dos parcelas con una superficie total de 17 has + 21919.61 mts 2, y, al efectuar inspección ocular el Inspector señaló que el terreno estaba ubicado dentro de lo que fue el Asentamiento Las Guías de Oriente. Ello también se comprobó, según la Resolución acusada, mediante el Croquis N°2-78A de ocupantes y suelos del Departamento de Catastro Rural, que señala que el terreno se traslapa en su totalidad con el predio N°20 cuya ocupación mantiene el Asentamiento Guías de Oriente, que le otorgó en garantía al Banco de Desarrollo Agropecuario el derecho posesorio reconocido, avalando las operaciones 195-77, 231-76, 128-79-20-2 y 42-74 de la Sucursal de Antón, los cuales mantenían a febrero de 1996 saldo a capital e intereses por la suma de B/.116,016.24.

La parte actora por su parte esencialmente alega que no se investigaron los hechos de forma que la decisión no lesionara el derecho de la adjudicataria de ser oída, de tener igualdad procesal y el medio de defensa que significa la práctica de pruebas.

Al examinar las violaciones alegadas y los argumentos que las sustentan conjuntamente con el resto de las constancias que reposan en el expediente, la Sala es del criterio que la razón le asiste a la parte actora, pues, demuestra en el expediemte que no existe "el traslape" alegado por la Institución, y que el terreno solicitado para su adjudicación determinados por los planos 201-07-6343 y 201-07-6344 anulados en el acto demandado, corresponde a la Finca N° 4.035, inscrita al Tomo 366, Folio 10, propiedad de la Reforma Agraria. En efecto, dentro del expediente figuran pruebas testimoniales, el resultado de la inspección judicial a los libros de adjudicación de tierras de la Reforma Agraria de Penonomé y un dictamen pericial que así lo demuestran.

De fojas 83 a 87 del expediente, aparece la declaración jurada del Ingeniero Tomás Alva Noriega Quintero quien en su condición de Director Nacional de Reforma Agraria firmó en diciembre de 1995, el Plano N° 201-07-6344 por un poco más de 17 hectáreas (parcelas A y B) y el Plano N° 201-07-6343, parcela D, por un poco más de 11 de hectáreas, a nombre de Reforestadora Madrid, S. A.. El ingeniero Tomás Alva Noriega Quintero reconoció su firma que aparecía en los planos, y sostuvo que "estaban correctamente confeccionados" de acuerdo con el Código Agrario y también negó que la Finca N° 4035 estuviese traslapada en ese momento.

De fojas 102 a 105 del expediente aparece la declaración jurada de Abdiel Nieto, quien para el mes de diciembre de 1995, fungía como Funcionario Sustanciador de la Reforma Agraria de la Provincia de Coclé. En su declaración, el señor Nieto sostuvo que firmó los planos pues, a su criterio, éstos se ajustaban con los requisitos previstos para tal fin. También señaló que en el tiempo que estuvo en el Departamento Regional, nunca tuvo conocimiento de anulación de planos por traslape.

El testigo Boris Omar Pinzón también rindió declaración jurada la cual es visible de fojas 106 a 109 del expediente. El señor Boris Omar Pinzón es Agrimensor de profesión y para el mes de diciembre de 1995, trabajaba en la Reforma Agraria de Coclé, y fue a quien le correspondió inspeccionar los terrenos que pertenecen a la Finca N° 4,035. A pregunta formulada sobre el significado de "traslape", contestó que "es cuando un plano se pone encima de una finca que ya ha sido aprobada", y no era el caso de los Planos de Reforestadora Madrid, S. A., pues, hubiesen sido rechazados.

En cuanto a la inspección judicial a los libros de adjudicación de tierras

de la Reforma Agraria de Penonomé, cuya acta figura de fojas 119 a 121 del expediente, se pudo constatar en el Libro de Registro de Solicitudes de Compra, que Reforestadora Madrid, para el mes de noviembre de 1995, solicitó la compra de aproximadamente 25 hectáreas de terreno, sin que existiera restricción para la solicitud formulada, ni existía persona o entidad que estuviese solicitando esas mismas áreas.

De fojas 137 a 138 figura el informe pericial de la diligencia ordenada por el Tribunal, rendido por Concepción Valderrama, quien en la diligencia de entrega del mismo señaló que la Finca N°4035 es propiedad de la Comisión de Reforma Agraria y que los lotes representados por los Planos 201-07-6343 y 201-07-6344 están dentro de esa finca. También manifestó, en cuanto a los mencionados planos, que no encontró que se traslapara con ninguna otra finca.

Finalmente, la Sala advierte que el perito del Tribunal, el señor Concepción Valderrama, adjuntó al expediente copia de la Certificación expedida por el Registro Público el 3 de agosto de 1999, en la que se hace constar que, en efecto, la Finca N° 4035, inscrita en el Tomo 366 de Reforma Agraria, Folio 10 de la Sección de la Propiedad de la Provincia de Coclé, es de propiedad de la Comisión de Reforma Agraria y que sobre esta finca no constan gravámenes inscritos ni vigentes a la fecha (A foja 139).

Por todo lo antes expuesto, la Sala estima que, en efecto, se demostró que el procedimiento para la adjudicación de los terrenos solicitados por Reforestadora Madrid, S. A., evidentemente no fue cónsono con las formalidades previstas para tal fin, en la medida que al practicar las pruebas solicitadas en el proceso que nos ocupa, la parte actora logró desvirtuar los fundamentos señalados por la Administración como sustento para la expedición del acto que se demanda. Por ello, a juicio de la Sala es dable acceder a las pretensiones solicitadas, salvo el pago de los perjuicios ocasionados a la empresa Reforestadora Madrid, S. A., pues, sólo los alega mas no los sustenta ni los demuestra.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES ILEGAL, la Resolución N° DN-030-96 de 3 de mayo de 1996, dictada por la Dirección Nacional de Reforma Agraria, ORDENA la adjudicación a título oneroso de la solicitud N°4-570-95 de 16 de noviembre de 1995, formulada por la Sociedad Reforestadora Madrid, S. A., de un globo de terreno con un área aproximada de 25 hectáreas, ubicado en Las Guías, Corregimiento de Río Hato, Distrito de Antón, Provincia de Coclé, al precio que se determine de acuerdo con las normas legales pertinentes.

Notifiquese y Cumplase

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTARTIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO OVIDIO GÓMEZ, EN REPRESENTACIÓN DE PROYECTOS MORALES, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLCUIÓN N° 721-99 D.G. DE 6 DE DICIEMBRE DE 1999, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CAJA DE SEGUROS SOCIAL, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Ovidio Gómez, actuando en nombre y representación de PROYECTOS MORALES, S. A. (PROMOSA), ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 721-99 D.G. de 6 de diciembre de 1999, dictada por la Dirección General de la Caja de Seguro Social, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Observa el Magistrado Sustanciador que la demanda adolece de varios defectos que la hacen inadmisible.

En primer lugar, se advierte que la parte actora dirige equivocadamente su acción contra la Resolución No. 721-99 D.G. de 6 de diciembre de 1999, dictada por la Dirección General de la Caja de Seguro Social, pues, la misma mantiene en todas sus partes la Resolución No.207-99-D.G. de 13 de abril de 1999, que condena a la empresa PROYECTOS MORALES, S. A. a pagar la suma de veintiocho mil cuatrocientos treinta y nueve balboas con veinticinco centésimos (B/28,439.25), en concepto de pago íntegro de las prestaciones que resulten del accidente de trabajo ocurrido al trabajador Claudio González González el día 27 de agosto de 1998. Al respecto, el artículo 29 de la Ley 33 de 1946 dispone que no solamente no es necesario dirigir la demanda contra los actos confirmatorios, sino que es un requisito sine qua non para la admisibilidad de la demanda dirigirla contra el acto administrativo original, que a juicio de la parte actora, es ilegal.

En segundo lugar, la demanda no cumple con el requisito previsto en el numeral 4 del artículo 28 de la Ley 33 de 1946, que requiere que en aquélla se exprese el concepto de la violación. En este caso, el demandante no expresa las modalidades en que se ha producido la infracción literal de los preceptos legales la cual puede darse por violación directa, interpretación errónea o indebida aplicación, tal como lo ha señalado esta Sala en jurisprudencia constante.

En virtud de que la actora omitió los requisitos mencionados su demanda no debe admitirse, según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Ovidio Gómez, actuando en nombre y representación de PROYECTOS MORALES, S. A. (PROMOSA), para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 721-99 D.G. de 6 de diciembre de 1999, dictada por la Dirección General de la Caja de Seguro Social, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Notifiquese,

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LCDO. MANUEL SALVADOR HERRERA, EN REPRESENTACIÓN DE EDILBERTO FONSECA CHAVEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 758-06 SIN FECHA, EXPEDIDA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Lcdo. Manuel Salvador Herrera, actuando en representación de EDILBERTO FONSECA CHAVEZ, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena

jurisdicción, con el objeto de que se declare nula por ilegal, la Resolución N°758-06 sin fecha, expedida por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social y para que se hagan otras declaraciones.

Mediante el acto demandado se resuelve reintegrar al Fondo Complementario de Prestaciones Sociales la suma mensual de Ciento Veinticinco Balboas con 16/100 (B/.125.16) en concepto de pensión parcialmente permanente que le fue concedida al asegurado EDILBERTO FONSECA CHAVEZ, con seguro social N° 93-8668, por razón de la Jubilación Especial con cargo al mismo de que goza el asegurado.

I. La pretensión y su fundamento.

En la demanda se formula pretensión para que la Sala Tercera declare que es nula por ilegal, la Resolución N°758-06, sin fecha expedida por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, y, como consecuencia de esa declaración, se ordene el pago de todas las mensualidades dejadas de pagar desde la fecha en que se hizo efectiva la Resolución impugnada hasta el momento en que dicho pago se haga efectivo.

Entre los hechos u omisiones fundamentales de la acción se destaca que la decisión contenida en la acto administrativo que se demanda, fue adoptada por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social con fundamento en el artículo 17 de la Ley 16 de 31 de marzo de 1975, mismo que no es aplicable al caso de su cliente, toda vez que está amparado en la excepción establecida en el acápite b, del artículo 22 de la Ley 15 de 31 de marzo de 1975.

Como disposiciones legales alegadas como infringidas, figuran los artículos 17 y 22 de la Ley 15 de 31 de marzo de 1975 y los artículos 44 y 83 del Decreto de Gabinete N° 68 de 31 de marzo de 1970 que en su texto señalan:

Ley 16 de 31 de marzo de 1976:

"ARTICULO 17: En los casos de jubilaciones especiales de servidores públicos del Estado, que se otorguen con cargo a este Fondo Complementario, las sumas a que se refiere el artículo 53-D del Decreto Ley 14 de 1954, adicional en virtud de lo dispuesto en el Decreto de Gabiente N°167 de 12 de junio de 1969, serán reintegradas por parte de la Caja de Seguro Social al Fondo Complementario de Prestaciones Sociales. A estos efectos, los peticionarios suscribirán las solicitudes correspondientes para hacerlas efectivas al momento que lleguen a la edad de retiro normal por la Caja de Seguro Social y cumplan con los demás requisitos."

"ARTICULO 22: Es incompatible la percepción de más de una prestación en dinero por un mismo beneficiario, concedida de conformidad con la legislación especial que sobre esta materia rige la Caja de Seguro Social.
En caso de concurrencia, se pagará a la que sea más beneficiaria.
No obstante lo dispuesto en este artículo, se permitirá el pago simultáneo de prestaciones en dinero en los casos siguientes:

a) El goce de un subsidio por enfermedad o por riesgo profesional y el goce de una pensión de viudez;
b) El del pensionado por incapacidad parcial permanente por riesgo profesional que posteriormente llegase al goce de una pensión de vejez.
La suma de ambas prestaciones no podrá exceder la cantidad de mil balboas (B/. 1,000.00) mensuales.
c) El goce de una pensión por incapacidad parcial permanente y el goce de un subsidio por maternidad."

Decreto de Gabinete N°68 de 31 de marzo de 1970.

"Articulo 44: Los subsidios o pensiones a que tenga derecho el trabajador o sus beneficiarios en caso de riesgo profesional no podrán cederse, compensarse, no gravarse, ni son susceptibles de embargo. No obstante, las mismas podrán ser afectadas hasta la mitad por concepto de pensiones alimenticias. Los Tribunales denegarán de plano toda reclamación contraria a lo que aquí se dispone."

"Artículo 83: Las prestaciones dispuestas en el presente Decreto de Gabinete podrán ser modificadas solamente cuando las modificaciones impliquen beneficios para los asegurados y sus beneficiarios."

Según quien recurre, el artículo 17 de la Ley 16 de 31 de marzo de 1975, se aplicó a un supuesto no contemplado en la norma. A su criterio, la pensión por incapacidad parcial permanente de que goza su representado no es de la percepciones comunes a que se refiere el artículo 53-D del Decreto Ley 14 de 1954, sino que constituye un beneficio derivado de un Seguro Obligatorio de Riesgos Profesionales cuyo establecimiento, administración y reglamentación está consignada en el Decreto de Gabinete N° 68 de 31 de marzo de 1970. Aclara el Lcdo. Herrera que si bien el Seguro Obligatorio de Riesgos Profesionales es administrado por la Caja de Seguro Social, lo cierto es que el mismo tiene financiamiento y contabilidad propios, por lo que no forma parte de las percepciones normales a que se refiere el artículo 53-D del Decreto Ley 14 de 1954. De ello también concluye, que la norma no es pertinente al caso del señor Fonseca, por ser su pensión el resultado de un accidente de trabajo cubierto por un seguro obligatorio con financiación y contabilidad propia. Pretender reintegrar esa suma al Fondo Complementario, constituye una vulneración de un derecho adquirido, máximo que como jubilado especial su cliente no podrá percibir del Fondo Complementario suma adicional o reintegro al llegar a la edad normal de retiro.

El artículo 22 de la Ley 15 de 31 de marzo de 1975, se afirma que se violó de manera directa por omisión, en la medida que se desconoce el derecho consagrado a favor de su mandante, cuyo caso cae dentro de la esfera de la excepción establecida en el literal b, del artículo en mención.

Con respecto al artículo 44 del Decreto de Gabinete N° 68 de 31 de marzo de 1970, se sostiene que se violó por omisión o falta de aplicación, dado que desconoce la garantía allí prevista, consistente en que las pensiones derivadas de riesgo profesional no podrán cederse ni compensarse. La Resolución que se impugna no solamente elimina la pensión a su mandante, sino que además promete compensarlo al llegar a la edad normal de retiro, cosa que expresamente prohíbe la mencionada disposición.

Finalmente, se aduce la violación directa por omisión del artículo 83 del Decreto de Gabinete N° 68 de 31 de marzo de 1970, pues, se desconoce el principio consagrado en la norma en cuanto a que las prestaciones, llámese pensiones dispuestas en ese Decreto, que sean el resultado de un Riesgo Profesional, sólo pueden ser modificadas cuando tales modificaciones impliquen beneficios para el asegurado. A su criterio, la resolución impugnada no se conforma con una simple modificación, sino que va más allá y de hecho la elimina, lo que jamás podrá interpretarse como un beneficio al asegurado, todo lo contrario, le causa un perjuicio directo al lesionar su patrimonio.

II. <u>El informe explicativo de conducta expedido por el Presidente de la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social y la Vista Fiscal de la Procuradora de la Administración.</u>

En nota de 16 de marzo de 1998, el Presidente de la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, rindió el informe explicativo de conducta.

En el informe se señala que la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social concedió al señor Edilberto Fonseca Chavez, una pensión por

incapacidad parcial permanente con carácter definitivo, por la cantidad mensual de ciento veinticinco balboas con 16/100 (B/.125.16) por el accidente de trabajo ocurrido el 12 de febrero de 1989, mientras laboraba con el patrono MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. A través de Resolución N° C.f.C. 1767 de 6 de octubre de 1993, la Comisión del Fondo Complementario de Prestaciones Sociales resolvió otorgar a EDILBERTO FONSECA CHAVEZ una jubilación especial por antigüedad de servicios, como subteniente - 13 de la Fuerza Pública por la suma mensual de quinientos sesenta y cinco balboas con 32/100 (B/.565.32). Mediante Resolución N° 768-06 sin fecha, la Comisión de Prestaciones resolvió reintegrar al Fondo Complementario de Prestaciones Sociales de los Servidores Públicos la cantidad mensual de ciento veinticinco balboas con 16/100 (B/.125.16), concedida al señor Edilberto Fonseca Chávez en concepto de pensión por incapacidad permanente por riesgo profesional, por razón de la jubilación especial por antigüedad de servicios que percibe.

Sostiene el Presidente de la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, que no debe confundirse las pensiones de vejez que concede la Caja de Seguro Social, en virtud de la legislación que rige a la Institución, con las jubilaciones especiales por antigüedad de servicios que otorga el Fondo Complementario de Prestaciones Sociales de los Servidores Públicos, en base a lo preceptuado en la legislación que crea y reglamenta el Fondo Complementario o en las leyes especiales de jubilación, las cuales tienen un régimen de regulación autónomo, cuya legislación, ingresos, requisitos y métodos de cálculo son distintos e independientes de las pensiones que concede la Caja por riesgo de vejez normal. De ese modo afirma que la situación específica del señor Edilberto Fonseca Chávez consiste en que la Caja de Seguro Social le ha otorgado una pensión por riesgo profesional y el Fondo Complementario de Prestaciones Sociales de los Servidores Públicos, una jubilación especial por antigüedad de servicios, por lo que a su caso no es procedente aplicar el artículo 22 de la Ley 15 de 1975, así como tampoco el artículo 16 de la Ley 16 de 1975, ya que no se trata de la concurrencia de dos (2) prestaciones concedidas por la Caja ni de dos (2) prestaciones otorgadas por el Fondo Complementario. Finalmente afirma que las cantidades a que hace referencia el artículo 53-D son todas aquellas que un jubilado o pensionado tenga derecho a recibir por parte de la Caja de Seguro Social en cualquier concepto, con la única excepción del subsidio de funeral.

Por su parte, la Procuradora de la Administración (suplente), mediante la Vista Fiscal N° 149 de 17 de abril de 1998, se opone a los criterios expuestos por el recurrente, motivo por el que solicita a la Sala que desestime sus pretensiones. La Procuradora de la Administración también señala que no debe confundirse la incompatibilidad de recibir dos prestaciones económicas otorgadas por la Caja de Seguro Social, con la incompatibilidad de recibir dos prestaciones en dinero con cargo al Fondo Complementario de Prestaciones Sociales de los servidores públicos. Según la Procuradora de la Administración (suplente), en la presente situación al demandante le fue concedida una pensión por incapacidad parcial permanente por la Caja de Seguro Social y posteriormente le fue otorgada una jubilación especial por antigüedad de servicios por el Fondo Complementario, corroborándose entonces que no se trataba de la concurrencia de dos (dos) prestaciones otorgadas por la Caja, ni de dos (2) prestaciones otorgadas por el Fondo Complementario, por tanto, no era aplicable ni el artículo 22 de la Ley 15 de 1975, ni el artículo 16 de la Ley 16 de 1975. De allí que se le aplicó el procedimiento que para estos casos expresamente señala el artículo 17 de la Ley 16 de 1975, el cual establece que en los casos de jubilaciones especiales de servidores públicos otorgadas con cargo al Fondo Complementario, las sumas a que se refiere el artículo 53-D del Decreto Ley 14 de 1954, serán reintegrados por parte de la Caja de Seguro Social al Fondo Complementario.

III. Decisión de la Sala.

Evacuados los trámites de rigor, procede la Sala a resolver la presente controversia.

El acto demandado es la Resolución N°758-06 sin fecha, expedida por la

Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, en la que se resuelve reintegrar al Fondo Complementario de Prestaciones Sociales, la suma mensual de ciento veinticinco con 16/100 (B/.125.16) en concepto de pensión parcial permanente que le fue concedida al asegurado Edilberto Fonseca Chávez, por razón de la Jubilación Especial con cargo al mismo de que goza el asegurado. Entre las consideraciones expuestas para la expedición del acto que se demanda, se señala que con fundamento en el artículo 73 del Decreto Ley 14 de 27 de agosto de 1954, la Caja de Seguro Social procedió a revisar la prestación en dinero concedida al asegurado, y detectó que disfrutaba de una jubilación por antigüedad de servicios desde el 11 de octubre de 1995, fecha en que le fue reconocido ese beneficio por un monto mensual de quinientos balboas con 32/100, por lo que se le aplicó lo previsto en el artículo 17 de la Ley N°16 de marzo de 1975. La parte actora por su parte, alega que la antes mencionada disposición no le es aplicable, ya que está amparado en la excepción establecida en el acápite b) del artículo 22 de la Ley 15 de 31 de marzo de 1975.

Previo al análisis de las normas invocadas como infringidas con los argumentos que las sustentan y demás documentación que reposa en el expediente, es oportuno señalar que a foja 69 del expediente administrativo consta que mediante la Resolución N°489 de 30 de junio de 1993, la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social resolvió conceder a Edilberto Fonseca Chávez una pensión por incapacidad parcial permanente con carácter definitivo, por la suma mensual de ciento veinticinco balboas con 16/100 a consecuencia del accidente laboral ocurrido el 12 de febrero de 1989, mientras que trabajaba con el patrono Ministerio de Gobierno y Justicia. Posteriormente, mediante Resolución N° C.F.C. 1767 de 6 de octubre de 1993, la Comisión del Fondo Complementario de Prestaciones Sociales resolvió conceder a Edilberto Fonseca Chávez, una jubilación especial por antigüedad de servicios, por la cantidad mensual de quinientos sesenta y cinco balboas con 32/100 (B/.565.32) a partir del cese de labores. Es por ello que la Comisión de Prestaciones Económicas procedió aplicar debidamente el artículo 17 de la Ley N°16 de 31 de marzo de 1975, el cual establece que en los casos de jubilaciones especiales de servidores públicos otorgadas con cargo al Fondo Complementario, las sumas a que se refiere el artículo 53-D del Decreto Ley 14 de 1954, será reintegradas por parte de la Caja de Seguro Social a ese Fondo. El artículo 53-D del Decreto Ley 14 de 1954, señala que la Caja de Seguro Social reintegrará al Tesoro Nacional la totalidad de las sumas que tengan derecho a percibir de la Caja, en concepto de invalidez y de vejez, de sobrevivientes, de devolución de capitales constitutivos, de indemnización, de asignaciones familiares, de rentas vitalicias, y en cualquier concepto, con la única excepción del subsidio de funeral, y de aquellas personas jubiladas, pensionadas o declarados empleados supernumerarios del Estado, que no es el caso del demandante.

El artículo 22 de la Ley 15 de 1975, no es, pues, aplicable al caso que nos ocupa, toda vez que de conformidad con lo señalado en líneas precedentes, no se trata de la concurrencia de dos prestaciones otorgadas por la Caja de Seguro Social, ni de dos prestaciones otorgadas por el Fondo Complementario, sino que se trata de la concurrencia de una pensión por incapacidad parcial permanente otorgada por la Caja de Seguro Social y una jubilación especial por antigüedad de servicios concedida por el Fondo Complementario, de manera que la situación planteada no se ubica, como señala el recurrente, dentro de las excepciones que contempla la norma que permite el pago simultáneo de prestaciones en dinero. En ese sentido la Sala coincide con lo que afirma el Presidente de la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social y la Procuradora de la Administración, en cuanto a que no debe confundirse la incompatibilidad de recibir dos prestaciones económicas otorgadas por la Caja de Seguro Social, con la incompatibilidad de recibir dos prestaciones en dinero con cargo al Fondo Complementario de Prestaciones Sociales de los Servidores Públicos. No proceden estos cargos.

Tampoco coincide la Sala con los argumentos que sustentan la violación de los artículos 44 y 83 del Decreto de Gabinete N° 68 de 31 de marzo de 1970. En cuanto al artículo 44, a criterio de la Sala evidentemente se refiere a actos de

cesión, compensación y gravamen de carácter privado que se pretendan ejercer sobre esos beneficios, salvo cuando se trate de pensiones alimenticias, y, en cuanto al artículo 83, no se configura su violación ya que de ningún modo elimina ni modifica la pensión de incapacidad parcial permanente otorgada al señor Fonseca Chávez otorgada por la Caja de Seguro Social, sino que resuelve reintegrarla al Fondo Complementario en razón de la jubilación especial que el Fondo concede al demandante. No proceden estos cargos.

En virtud de lo señalado, lo procedente es, no acceder a las pretensiones formuladas en la demanda.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, la Resolución N°768-06 sin fecha, expedida por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, como tampoco lo son sus actos confirmatorios.

Notifiquese y Cumplase

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCEASCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION INTERPUESTA POR EL LICDO. CARLOS AYALA EN REPRESENTACION DE SANTIAGO MORALES, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA NO. 042-2000 DE 7 DE ABRIL DE 2000, DICTADA POR EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado CARLOS AYALA, actuando en representación del señor SANTIAGO MORALES, ha presentado demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 042-2000 de 7 de abril de 2000, dictada por el Administrador General de la Autoridad Nacional del Ambiente, y para que se hagan otras declaraciones.

Al examinar el libelo, la Magistrada Sustanciadora advierte que consta a foja 10 del expediente, una solicitud especial que debe ser atendida de manera previa a la admisión de la demanda, consistente en una petición de documentos.

La parte actora ha motivado el petitorio en los siguientes términos:

> "Solicito a la Honorable Sala que antes de admitir la demanda se ordene a ANAM hacer llegar al expediente copia auténtica del acto impugnado con constancia de su notificación, toda vez que lo hemos solicitado de manera infructuosa."

Los documentos que se adjuntan al libelo evidencian, tal como lo requiere el artículo 44 de la ley 135 de 1943 para hacer viable estas solicitudes previas, que el actor gestionó ante la autoridad demandada la obtención de la copia idónea del acto acusado con las constancias de su notificación, gestión que resultó infructuosa (cfr. foja 6 del expediente)

Por esta razón, se considera que el recurrente cumplió con la exigencia de emprender las diligencias necesarias para obtener el documento, y ante su imposibilidad, ha solicitado al Tribunal que proceda a requerir la copia

auténtica del acto, conforme lo prevé el artículo 46 de la Ley 135 de 1943.

De consiguiente, la Magistrada Sustanciadora actuando en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DISPONE: Solicitar por Secretaría al Administrador Regional de la Autoridad Nacional del Ambiente que en el término de cinco (5) días, remita a esta Máxima Corporación Judicial, copia auténtica de la Resolución N° 042-2000, de 7 de abril de 2000, con las constancias de su notificación respectiva.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION INTERPUESTA POR EL LICDO. CARLOS AYALA EN REPRESENTACION DE TIRSO SOLIS DE LEON, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO NO. 71 DE 11 DE ABRIL DE 2000, DICTADA POR EL MINISTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado CARLOS AYALA, actuando en representación del señor TIRSO SOLIS DE LEON, ha presentado demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto Ejecutivo N° 71 de 11 de abril de 2000, dictado por el Ministro de Desarrollo Agropecuario, y para que se hagan otras declaraciones.

Al examinar el libelo, la Magistrada Sustanciadora advierte que consta a foja 11 del expediente, una solicitud especial que debe ser atendida de manera previa a la admisión de la demanda, consistente en una petición de documentos.

La parte actora ha motivado el petitorio en los siguientes términos:

> "Solicito al Tribunal que ordene al MIDA copia del Decreto Ejecutivo No. 71 de 11 de abril de 2000 y de la resolución No. ALP 100ADM-2000 del 22 de mayo de 2000, con constancia de la notificación, y certificación del silencio administrativo, toda vez que lo hemos peticionado pero hasta la fecha no se nos han entregado dichos documentos."

Los documentos que se adjuntan al libelo evidencian, tal como lo requiere el artículo 44 de la ley 135 de 1943 para hacer viable estas solicitudes previas, que el actor gestionó ante la autoridad demandada la obtención de la documentación a que hace referencia en la petición transcrita, gestión que resultó infructuosa (cfr. foja 5 del expediente)

Por esta razón, se considera que el recurrente cumplió con la exigencia de emprender las diligencias necesarias para obtener la documentación, y ante su imposibilidad, ha solicitado al Tribunal que proceda a requerirla, conforme lo prevé el artículo 46 de la Ley 135 de 1943.

De consiguiente, la Magistrada Sustanciadora actuando en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DISPONE: Solicitar por Secretaría al Ministro de Desarrollo Agropecuario que, en el término de cinco (5) días, remita al Tribunal la siguiente documentación:

1. Copia debidamente autenticada del Decreto Ejecutivo No. 71 de 11 de abril de 2000, con la constancia de su notificación.

2. Copia de la Resolución No. ALP-100-ADM-2000 de 22 de mayo de 2000 con la constancia de su notificación.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ENOCH RODRIGUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE RICAURTE SAUL POLANCO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA DE 17 DE DICIEMBRE DE 1999, SUSCRITA POR LA JEFA DE LA OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado ENOCH RODRIGUEZ, actuando en representación de RICAURTE SAUL POLANCO, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Nota de 17 de diciembre de 1999, dictada por la Jefa de la Oficina Institucional de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, su acto confirmatorio, y para que se hagan otras declaraciones.

Por medio del acto administrativo impugnado, se destituyó al señor RICAURTE POLANCO del cargo que ejercía como Asistente Agropecuario I en la citada entidad gubernamental.

La Magistrada Sustanciadora procede a revisar el libelo, en vías de determinar si cumple con los requisitos formales indispensables para su admisión, y se percata que la demanda adolece de varios defectos que impiden su curso legal.

Se observa en primer término, que el actor no acompaña su demanda con la copia debidamente autenticada del acto impugnado, tal como exige el artículo 44 de la Ley 135 de 1943. Si bien es cierto, que en la parte final del libelo el recurrente solicita al Tribunal que peticione al Ministerio de Desarrollo Agropecuario la copia auténtica de dicho acto administrativo, no existe constancia alguna en el expediente de que el actor hubiese gestionado la obtención de dicha documentación, y que su gestión resultase infructuosa.

Al efecto hemos de indicar que la facultad conferida a la Sustanciadora, por el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, para peticionar documentos a los entes demandados, tiene el propósito de auxiliar a los administrados a los que se le haya negado la expedición de copias o de certificación sobre el acto demandado. La norma no está diseñada para suplir la actividad del recurrente de gestionar y presentar toda la documentación que requieren estos procesos, para su viabilidad.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sustanciadora advierte que la Resolución ALP-009-ADM-2000 que resuelve el último recurso del interesado, agotando la vía gubernativa, fue notificado al señor POLANCO el día 19 de abril del 2000 (cfr. foja 2 del expediente), razón por la cual la acción contencioso administrativa se encontraba prescrita al momento de su presentación ante la Sala Tercera, el

día 28 de julio de 2000.

En vista de las deficiencias anotadas, lo procedente es negarle curso legal al libelo, al tenor de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

De consiguiente, la Magistrada Sustanciadora, actuando en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el Licenciado ENOCH RODRIGUEZ en representación del señor RICAURTE SAUL POLANCO.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA DE ABOGADOS PADILLA Y ASOCIADOS, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE SOLI ESTER PÉREZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 102-2000 (D), DE 14 DE ENERO DE 2000, DICTADA POR EL GERENTE GENERAL DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, ACTOS CONFIRMATORIOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma de abogados Padilla y Asociados, actuando en nombre y representación de la señora Soli Ester Pérez, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 102-2000 (D), fechada el 14 de enero del 2000, emitida por el Gerente General del Banco Hipotecario Nacional, actos confirmatorios, y para que se hagan otras declaraciones.

A través de la Resolcuión citada en el párrafo anterior, el Gerente General del Banco Hipotecario Nacional, dispuso, entre otros asuntos, destituir a la demandante Soli Ester Pérez, con cédula de identidad personal No.8-361-674 y seguro social No. 139-7292, quien ejercía funciones públicas adscrita a dicha institución del Estado.

La Magisttrada Sustanciadora, al proceder a revisar la demanda en cuestión, se percata que ésta presenta varias deficiencias que imposibilitan su admisión. En primer lugar, no se aporta constancia de notificación de la Resolución por medio de la cual se agotó la vía administrativa, es decir, de la Resolución de Junta Directiva No. 7-8, de 18 de mayo del 2000.

Este es un requisito importante en las demandas de plena jurisdicción no sólo para comprobar que se han ejercido en la esfera administrativa los recursos que la Ley establece, sino también para determinar si la acción de plena jurisdicción, que se ejerce ante la Sala, ha sido presentada dentro del término de dos (2) meses que para este tipo de recurso prevé el artículo 42 de la Ley 135 de 1943, cuyo propósito es el restablecimiento de un derecho subjetivo que se alega violado.

El segundo reparo a esta demanda es que los documentos que contienen los actos administrativos impugnados (fojas 1 hasta la 5) son copias que han sido autenticadas por un Notario Público Especial, y no por el funcionario encargado de la custodia del documento original. Al respecto, el artículo 820 del Código Judicial establece las formas como deben ser aportados los documentos al proceso,

preceptuando que "Las reproducciones deberán ser autenticadas por el funcionario público encargado de la custodia del original ...".

El tercer defecto de la demanda analizada consiste en que el poder presentado no está firmado por la poderdante. Sobre este punto el artículo 616, inciso primero del Código Judicial, expresa lo siguiente:

> "Artículo 616: Además de la firma del poderdante, puede llevar el poder la del apoderado como una prueba de que éste lo acepta. ..." (Destaca la Sala).

De lo que se sigue que la poderdante debió suscribir con su firma el poder especial otorgado a su abogado, firma que no existe en el "poder especial administrativo", dirigido al "Señor Gerente General del Banco Hipotecario Nacional", que reposa a fojas 6 de los autos.

Por último, la Sala desea reseñar que la firma forense que patrocina los intereses de la señora Soli Ester Pérez, cometió un error al indicar, a fojas 8 del expediente, que la Procuraduría de la Administración debe intervenir en este proceso en interés de la Ley, cuando lo correcto y ajustado a la Ley es que represente y abogue por los intereses de la Administración, defendiendo el acto administrativo que se acusa de ilegal, tal como lo ordena el artículo 348, numeral 2, del Código Judicial.

Las deficiencias de la demanda antes anotadas impiden que se le dé curso a la misma, con fundamento en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

En mérito de lo expuesto, la Magistrada Ponente, en representación de la Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda de plena jurisdición presentada por la señora Soli Ester Pérez, por medio de apoderado judicial, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 102-2000 (D), de 14 de enero de 2000, emitida por el Gerente General del Banco Hipotecario nacional, actos confirmatorios, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO SIMEÓN GONZÁLEZ, EN REPRESENTACIÓN DE ALEJANDRO GAITAN JUSTAVINO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO.001 DEL JURADO DE ELECCIONES DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE COCLÉ. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, ONCE (11) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Doctor Simeón González, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, en representación de ALEJANDRO GAITAN JUSTAVINO, para que se declaren nulos, por ilegales, los siguientes actos:

a) La Resolución No. 001 expedida por el Jurado de Elecciones del Centro Regional Universitario de Coclé, mediante la cual se declaran los resultados de las elecciones para Director y Subdirector del Centro Regional Universitario de Coclé y se proclama oficialmente al profesor Fulgencio Alvarez director electo del mismo.

b) La Resolución s/n, expedida por el Organismo Electoral Universitario con fecha 5 de julio de 2000, la cual decide el recurso de Impugnación de las Elecciones y autoriza la proclamación del profesor Fulgencio Alvarez como Director Electo del Centro Regional Universitario de Coclé.

La parte actora ha presentado además, una solicitud especial con el fin de que sean suspendidos provisionalmente, los efectos de las resoluciones impugnadas, basándola en los siguientes términos:

> "En razón de los perjuicios para mi representado que podrían surgir de la aplicación de las Resoluciones impugnadas, solicito respetuosamente a la Honorable Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, de la Honorable Corte Suprema de Justicia suspenda los efectos de las Resoluciones No. 001 del Jurado de Elección del Centro Regional Universitario de Coclé, y la del Organismo Electoral Universitario, que declaran ganador de las elecciones en el Centro Regional Universitario de Coclé al Profesor Fulgencio Alvarez y autorizan su proclamación como Director electo."

La Sala, al examinar el material incorporado al proceso, advierte que hasta el momento no se han acreditado motivos o circunstancias que justifiquen decretar con carácter de urgencia la citada medida cautelar.

Así en primer término, se aprecia que el señor ALEJANDRO GAITAN JUSTAVINO interpuso recurso de impugnación del resultado de la Elección para Director del Centro Regional Universitario de Coclé, realizada el 15 de junio de 2000. Este recurso fue presentado antes de que el Jurado de Elecciones determinara el resultado final y procediera a la proclamación del profesor Alejandro Gaitán.

Cabe destacar, que dicha impugnación fue resuelta por el Organismo Electoral Universitario, por medio de resolución de 5 de julio de 2000. Como consecuencia, el Jurado de Elección del Centro Regional Universitario de Coclé, mediante la Resolución No. 001 de 6 de julio 2000, proclamó oficialmente al profesor Fulgencio Alvarez como Director Electo del mismo Centro.

A juicio de este Tribunal, en esta etapa previa el accionante no ha comprobado adecuadamente la existencia de vicios de ilegalidad manifiestos y evidentes en la actuación del Jurado de Elecciones y del Organismo Electoral Universitario, que conlleven a la necesidad urgente de adoptar la suspensión impetrada.

Por otro lado, no se observa la presencia de una prueba sumaria que de modo claro y ostensible compruebe las alegaciones presentadas por el recurrente con relación a las supuestas irregularidades en las mencionadas elecciones. En suma, el actor no ha acreditado en su favor, la existencia del "fumus bonis iuris", o apariencia de buen derecho, que permitiría al Tribunal acceder a lo pedido.

Con respecto al llamado "periculum in mora" (peligro o amenaza que puede afectar los intereses en conflicto por la demora natural de los procesos judiciales), la Sala ha manifestado que no basta con enunciar que se puede sufrir un perjuicio notoriamente grave. Es necesario que se detalle en forma sistemática y específica en qué consiste o pueden consistir los perjuicios, acompañado a su vez, de las pruebas fehacientes que demuestren la gravedad del daño invocado.

Del análisis efectuado, esta Superioridad concluye que hasta el momento no existen pruebas que justifiquen decretar con carácter de urgencia la medida cautelar requerida, por lo que conforme a la facultad discrecional conferida a esta Magistratura por el artículo 73 de la Ley 135 de 1943, se procede a negar lo pedido.

No obstante lo anterior, cabe destacar que las consideraciones que preceden en nada comprometen o afectan el fondo de la cuestión controvertida, la cual en su momento será analizada ampliamente por este Tribunal al estudiar y decidir

sobre los cargos de ilegalidad alegados por el promotor de la presente demanda de plena jurisdicción.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ACCEDE a la solicitud de suspensión provisional de la Resolución No. 001 del Jurado de Elecciones del Centro Regional Universitario de Coclé.

Notifiquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA LICENCIADA VELVITT SALMON, EN REPRESENTACIÓN DE FABIAN POLANCO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. ALP-072-2000 DE 15 DE FEBRERO DE 2000, DICTADA POR EL MINISTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, ONCE (11) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada VELVITT SALMON, actuando en representación de FABIAN POLANCO, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. ALP-072-2000 de 15 de febrero de 2000 (sic), dictada por el Ministro de Desarrollo Agropecuario, y para que se hagan otras declaraciones.

La Magistrada Sustanciadora procede a revisar el libelo, en vías de determinar si cumple con los requisitos formales indispensables para su admisión, y se percata que la demanda adolece de varios defectos que impiden su curso legal.

En efecto, se advierte de inmediato, que la demanda se encuentra dirigida a obtener la ilegalidad de la Resolución ALP-072-2000 de 10 de abril del 2000, cuando dicho acto es en realidad, un acto confirmatorio de la decisión de destituir al Ingeniero POLANCO, del cargo que ocupaba en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

El acto que realmente decide la situación jurídica del prenombrado en el ente ministerial, es el Decreto Ejecutivo NO. 49 de 23 de febrero del 2000 (cfr. foja 1 del expediente), acto que no fue impugnado, ni aportado al proceso en copia auténtica, como lo exige esta Superioridad, a tenor de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 135 de 1943. Este Corporación Judicial ha reiterado, de manera inveterada y uniforme, que si bien es cierto no es necesario encaminar las acciones contencioso administrativas contra los actos simplemente confirmatorios, sí es requisito de admisibilidad, dirigir el libelo contra el acto que principalmente produce los efectos jurídicos que se pretende anular, toda vez que la eventual declaratoria de ilegalidad de un acto meramente confirmatorio, deja incólume el acto principal, y todos sus efectos.

De cualquier forma, el acto que se impugnaba en este proceso, tampoco había sido presentado de manera idónea, al no encontrarse revestido de sello de autenticidad.

Observamos por otra parte, que el libelo no cumple adecuadamente con los requisitos formales contenidos en el artículo 43 de la Ley 135 de 1943, al no

categorizar ni exponer ordenadamente, las menciones que ha de contener la demanda. Se omite por completo la designación del funcionario demandado, y la mención de la Procuradora de la Administración, quien actúa en este proceso como defensora del acto acusado. Tampoco se expresa de manera clara, en qué concepto se produce la violación de la única disposición con rango legal que se dice infringida, y se dirige la demanda de manera global, a todos los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema y no a la Magistrada Presidenta del Tribunal, como prevé el artículo 102 del Código Judicial.

En vista de las deficiencias anotadas, lo procedente es negarle curso legal al libelo, al tenor de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

De consiguiente, la Magistrada Sustanciadora, actuando en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por la Licenciada VELVITT SALMON en representación del señor FABIAN POLANCO.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DARÍO E. CARRILLO G. EN REPRESENTACIÓN DE UNIVERSAL PLYWOOD INC., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N°477-DGT-00 DE 5 DE MAYO DE 2000, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO LABORAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, CATORCE (14) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Darío E. Carrillo G., ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, en representación de UNIVERSAL PLYWODD INC., para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N°477-DGT-00 de 5 de mayo de 2000, dictada por la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Desarrollo Laboral, y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda incoada a fin de determinar si la misma cumple con los requisitos legales y jurisprudenciales que hagan procedente su admisión.

Al entrar a conocer el caso subjúdice, el suscrito se percata que el actor acusa de ilegal un acto que a todas luces no es definitivo o que cause estado, defecto este que contradice lo que taxativamente estatuye el artículo 42 de la Ley 135 de 1943, que a la letra dispone:

> "Artículo 42. Para ocurrir en demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es necesario que se haya agotado la vía gubernativa, lo que se entenderá cuando los actos o resoluciones respectivos no son susceptibles de ninguno de los recursos establecidos en los artículos 33, 38, 39 y 41 o se han decidido, ya se trate de actos o resoluciones definitivas, o de providencias de trámite, si estas últimas deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, de modo que le pongan término o hagan imposible su continuación."

Resulta importante aclarar que un acto definitivo es aquel que pone fin a

la actuación administrativa, es decir, aquellos que deciden el fondo de un asunto, ya sea creando, modificando o extinguiendo una situación jurídica.

En estas condiciones podemos agregar que, el acto contenido en la Nota N°477-DGT-00 de 5 de mayo de 2000, constituye simplemente un acto de comunicación, por medio del cual el Director General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, le comunica a la empresa UNIVERSAL PLYWOOD, INC. que en atención a la solicitud presentada por el Sindicato Industrial de Trabajadores de Procesamiento de la Madera y Afines de Panamá mediante la cual requieren que el conflicto colectivo sea sometido a arbitraje, seleccione el árbitro que los representará en dicho proceso de acuerdo a lista de árbitros representativa del sector empleador, dando cabal cumplimiento a lo que al respecto señala el artículo 452 y ss. del Código de Trabajo.

En atención al defecto señalado, el suscrito estima procedente negarle el curso legal a la presente demanda en atención al artículo 50 de la Ley 135 de 1943, que a la letra dispone:

> "Artículo 50. No se dará curso a la demanda que carezca de alguna de las anteriores formalidades, y su presentación no interrumpe los términos señalados para la prescripción de la acción."

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción promovida por el Lcdo. Darío E. Carrillo G. en representación de UNIVERSAL PLYWOOD INC.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA BOTELLO, APARICIO Y ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE MELVIN TORRES MÉNDEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N°29-99 DE 21 DE JULIO DE 1999, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Botello, Aparicio y Asociados, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, en representación de MELVIN TORRES MÉNDEZ, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N°29-99 de 21 de julio de 1999, dictada por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

El Sustanciador procede a la revisión del libelo incoado a efectos de determinar si el mismo cumple con las exigencias legales y jurisprudenciales que hagan viable su admisión.

En este sentido, quien suscribe se percata que la demanda presentada adolece de un defecto que impiden darle el trámite legal correspondiente.

Se observa, a prima facie, que el actor si bien es cierto, aporta copia de la Resolución N°29-99 de 21 de julio de 1999 (acto impugnado) y de la Resolución N°127-2000 de 8 de mayo de 2000 (acto confirmatorio) debidamente autenticadas,

ambas carecen de las respectivas constancias de notificación, lo que está en evidente contradicción con la exigencia prevista en el artículo 44 de la Ley 135 de 1943, que preceptúa lo siguiente:

> "Artículo 44. A la demanda deberá acompañar el actor una copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, según los casos."

Es menester aclarar, que este dato es necesario, a efecto de que esta Superioridad puede determinar si la demanda bajo estudio fue presentada oportunamente o si por el contrario, el recurrente dejó de precluir el término de formalización de la acción contencioso administrativa de plena jurisdicción, que es de dos (2) meses contados a partir de la publicación, notificación o ejecución del acto recurrido. Este requisito sine qua non está recogido en el artículo 42b de la Ley 135 de 1943, el cual es del tenor siguiente:

> "Artículo 42b. La acción encaminada a obtener una reparación por lesión de derechos subjetivos prescribe, salvo disposición legal en contrario, al cabo de dos meses, a partir de la publicación, notificación o ejecución del acto de realizado el hecho o la operación administrativa que causa la demanda."

Ante tal deficiencia, el suscrito conceptúa que la demanda incoada no puede ser admitida en vista de que no reúne las exigencias legales necesarias para su admisibilidad, por tanto, no queda otra alternativa que negarle la admisión a la misma, en atención a lo que estatuye el artículo 50 de la Ley 135 de 1943, que a la letra dice:

> "Artículo 50. No se dará curso a la demanda que carezca de alguna de las anteriores formalidades, y su presentación no interrumpe los términos señalados para la prescripción de la acción."

En mérito de lo expuesto, el Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción promovida por la firma Botello, Aparicio y Asociados en representación de MELVIN TORRES MÉNDEZ.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LCDO. RAMÓN DE LA O. FERNÁNDEZ, EN REPRESENTACIÓN DE JORGE EDGARDO QUINTERO QUIROS, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N°ADM050 DE 14 DE FEBRERO DE 2000, DICTADA POR EL ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISEIS (16) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Cinthya Camargo Saavedra, actuando en nombre y representación de JORGE EDGARDO QUINTERO QUIROS, ha interpuesto recurso de apelación contra la Resolución de 5 de junio de 2000 que no admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por el licenciado Ramón De la O Fernández, en representación de Jorge Edgardo Quintero Quirós, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N°ADM050 de 14 de febrero de 2000,

dictada por el Ente Regulador de los Servicios Públicos, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador no admitió la demanda, toda vez que la parte actora omitió señalar en su escrito el concepto de la violación, exigencia prevista en el numerla 4 del artículo 43 de la Ley 33 de 1946.

Por su parte, la licenciada Camargo fundamenta su apelación en los siguientes términos:

> "PRIMERO: Según la Resolución impugnada, en el libelo se omitió señalar el concepto de la violación, según lo establecido en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943 modificada por la Ley 33 de 1946.
> En este sentido es preciso señalar, que tal como se deduce de lo establecido en el INCISO IV-NORMAS INFRINGIDAS, se realizó un enjuiciamiento lógico jurídico del caso concreto y una explicación de las circunstancias de hecho y de derecho que dieron lugar a la violación del ordenamiento jurídico. En este sentido, se determinó que el Ente Regulador de los Servicios públicos había infringido por omisión y comisión los artículos 102 y 103 del Reglamento Interno de la precitada Institución aprobados mediante Resolución No. JD 1368 de 29 de mayo de 1999, respectivamente, puesto que la sanción disciplinaria de destitución contenida en la Resolución objeto del proceso contencioso administrativo que nos ocupa fue aplicada y ejecutada sin darle la oportunidad procesal a nuestro representado de defenderse y presentar las pruebas que, en derecho procedieran.
> SEGUNDO: La creación jurisprudencial (interpretación errónea, indebida aplicación, etc.) a la que alude la Resolución de 5 de junio de dos mil (2000) tiene como finalidad esclarecer las posibles violaciones al orden jurídico y desvirtuar la presunción de la legalidad de los actos de la administración. En vista de lo anterior, a nuestro juicio, la explicación de la violación alegada tuvo legar según lo señalado en el precitado artículo 43 por lo que se colige claramente que se ha cumplido con las formalidades exigidas por la Ley Contencioso Administrativa que le permitan al juzgador un conocimiento "claro y organizado" de las violaciones alegadas y que de lugar a un juicio de valor sobre la situación jurídica planteada."

El resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera consideran que no le asiste la razón a la parte actora, toda vez que la demanda no cumple con el requisito previsto en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, que requiere que en aquélla se exprese el concepto de la violación. Esto es así, pues en este caso, el demandante no expresa las modalidades en que se ha producido la infracción literal de los preceptos legales la cual puede darse por violación directa, interpretación errónea o indebida aplicación, tal como lo ha señalado esta Sala en jurisprudencia constante.

En consecuencia, el resto de los magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN la Resolución de 5 de junio de 2000 que NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por el licenciado Ramón De la O Fernández, en representación de Jorge Edgardo Quintero Quirós, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N°ADM050 de 14 de febrero de 2000, dictada por el Ente Regulador de los Servicios Públicios, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Notifiquese y Cumplase,

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL

Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LCDO. ALEX GONZÁLEZ FRANCO, EN REPRESENTACIÓN DE TEONILO SANTAMARIA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 1 DE 22 DE FEBRERO DE 1999, DICTADA POR LA DIRECTORA ENCARGADA DE LA ESCUELA DE NUEVO VEDADO, DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ, ACTO CONFIRMATORIO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISEIS (16) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada María Cristina Chen Stanziola, actuando en nombre y representación de TEONILO SANTAMARIA, ha interpuesto recurso de apelación contra la resolución de 5 de octubre de 1999 que no admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 1 de 22 de febrero de 1999, dictada por la Directora Encargada de la Escuela de Nuevo Vedadao, Dirección Regional de Educación de Chiriquí, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

La Magistrada Sustanciadora no admitió la demanda por considerar que los actos administrativos no causan estado, es decir, que no son definitivos, tal como lo exige el artículo 25 de la Ley 33 de 1946.

El resto de los Magistrados que integran la Sala, observan que el apoderado judicial del apelante luego de notificarse de la Resolución anunció recurso de apelación.

A foja 40 del expediente, obra informe secretarial en el cual se señala que vencido el término de apelación, no se presentó escrito de sustentación de la misma.

En virtud de lo anterior, como se trata de un recurso de apelación contra un auto y el mismo no fue sustentado, lo procedente es declarar desierto el recurso de apelación, tal como lo dispone el artículo 1122 del Código Judicial.

En consecuencia, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera (Contencioso-Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARAN DESIERTO el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Alex González Franco, actuando en nombre y representación de TEONILO SANTAMARIA.

Notifiquese,

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA EN REPRESENTACIÓN DE EMMA VALDERRAMA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTIFICACIÓN NO. 09345 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, REALIZADA POR EL DIRECTOR DE ESTADÍSTICA Y CENSO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Carlos Ayala, actuando en representación de EMMA VALDERRAMA, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el acto contenido en la Notificación No. 09345 de 25 de septiembre de 1997, realizado por el Director de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, y para que se hagan otras declaraciones.

I. EL ACTO IMPUGNADO

Mediante el acto impugnado, la Contraloría General de la República informó a la funcionaria EMMA VALDERRAMA, que en virtud de los resultados del Proceso de Clasificación de Cargos efectuado por dicha entidad, le había sido asignado el cargo de SUPERVISOR DE ESTADISTICA I GRADO 10, en la Dirección de Estadística y Censo, siendo el objetivo de este cargo: supervisar trabajos de nivel técnico, relacionados con la recolección, cálculo, estimación, análisis, interpretación y presentación de datos estadísticos.

El Acto de Notificación 09345 contenía además, un listado de las tareas que debía desempeñar la funcionaria EMMA VALDERRAMA, en el ejercicio de su cargo. (f. 1 del expediente).

II. CARGOS DE ILEGALIDAD DEL RECURRENTE

a) La pretensión del demandante

El punto medular de la impugnación sostiene, que al momento de clasificarse la posición de la funcionaria EMMA VALDERRAMA, no se tomaron en cuenta algunas tareas que desempeñaba, ni sus funciones fueron equiparadas a la de otros funcionarios que realizan labores semejantes dentro de la Institución, por lo que se violaron normas que rigen el proceso de clasificación de cargos.

Agrega el actor, que las autoridades de la Contraloría General de la Nación no evaluaron correctamente las tareas realizadas por la funcionaria, lo que trajo como consecuencia que no fueran conscientes de la realidad de su labor y por ende, le clasificaran inadecuadamente, cuando el cargo que le correspondía era de Supervisor de Estadística II.

b) Cargos de ilegalidad

Los cargos de ilegalidad que sustentan el recurso, son los siguientes:

En primer término, se dice violado en concepto de interpretación errónea, el artículo 8 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, que es del tenor siguiente:

> "Artículo 8: La selección y promoción del personal de la Contraloría General se realizará tomando en consideración los méritos personales y profesionales. Para los fines señalados en este artículo, se instituirá en el Reglamento Interno de dicho organismo un sistema de clasificación de cargos y uno de selección que garantice que el escogido es idóneo para desempeñar el cargo respectivo ..."

La infracción se produce, en concepto del demandante, al describir el cargo de EMMA VALDERRAMA y asignarle un grado específico, sin considerar funciones que ésta realiza, y que le colocarían en una posición superior. Por ende, estima que corresponde colocar a la funcionaria, en la clasificación de Supervisor de Estadística II.

La segunda disposición infringida, recae en la supuesta infracción del artículo primero del Decreto No. 195 del 17 de septiembre de 1997, en virtud del cual se ordena la actualización e institución, del Sistema de Clasificación de Cargos del personal no directivo de la Contraloría General de la República.

El actor sostiene, que la norma resulta infringida en concepto de interpretación errónea, toda vez que la Notificación No. 09345 no actualiza las funciones, cargo, ni el grado de **EMMA VALDERRAMA**.

Seguidamente, el recurrente considera transgredido el subpunto 3.2 del Manual Descriptivo de Cargos de la Dirección de Recursos Humanos de la Contraloría General de la República, que establece los factores que deben ser evaluados en la clasificación de cargos de los empleados de esta dependencia estatal. Estos factores son: conocimientos y experiencia adquirida; complejidad de las tarea; guías de procedimiento disponibles; responsabilidad e impacto de errores; suspensión recibida y ejercida; contactos personales; propósito de los contactos; ambiente y exigencias físicas del puesto.

La infracción se explica en los siguientes términos:

> "La norma transcrita se ha violado de forma directa por falta de aplicación ya que la clasificación del cargo de mi cliente no consideró algunos de los aspectos que describe dicha norma, entre ellos el relativo a la complejidad de las tareas y el grado de responsabilidad o impacto de los errores. Es obvio que de haberse ponderado estos factores se hubiera clasificado a mi cliente realmente en el cargo que en la práctica desempeña."

Por último, se dice transgredido el artículo 24 del Reglamento Interno de la Contraloría General de la República, conforme al cual corresponde al superior inmediato de cada servidor, comunicarle por escrito las funciones básicas e instrucciones específicas del cargo a desempeñar. Se aduce que la autoridad demandada incurrió en errónea interpretación de esta norma reglamentaria, toda vez que la descripción que se hace en el acto impugnado, de las funciones que desempeña **EMMA VADERRAMA**, omite algunas tareas que ésta había venido ejecutando en el cargo.

III. INFORME RENDIDO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA

Corre a fojas 13-17 del expediente, la Nota No. 2146-Leg de 17 de septiembre de 1998, contentiva del informe explicativo de conducta suscrito por el Director de Estadística y Censo, autoridad responsable de la emisión del acto impugnado.

Este documento detalla, de manera minuciosa, la metodología utilizada en el Proceso de Clasificación de Cargos al que fueron sometidos los funcionarios de la dependencia estatal, procedimiento que se inició en 1986, fue interrumpido en 1989, y luego reactivado el 18 de mayo de 1995.

En lo que atañe a la funcionaria **EMMA VALDERRAMA**, se señalan las diversas etapas de su proceso evaluativo, que culminó con la clasificación de la servidora pública, en el cargo de Supervisor de Estadística I, el 25 de septiembre de 1997, según Formulario de Notificación 09345.

Señala además, que la funcionaria propuso recursos administrativos contra el acto impugnado, los que luego de analizados cuidadosamente, fueron rechazados, por considerar que la clasificación y tareas descritas para el cargo de **EMMA VALDERRAMA**, eran inherentes al cargo de Supervisor de Estadística I Grado 10.

Por ende concluye, que no se ha violentado derecho alguno a la recurrente, dado que en su caso se cumplieron todas las etapas y procedimientos, contemplados en el Sistema de Clasificación de Cargos.

IV. OPINION DE LA PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACION

La representante del Ministerio Público, a través de Vista Fiscal No. 421 de 13 de noviembre de 1998, visible a fojas 20-42 del expediente, solicitó a esta Superioridad que se negara la pretensión de la demandante, por considerar que el

acto impugnado, no es violatorio del ordenamiento legal.

La colaboradora de la instancia acoge los planteamientos de la autoridad responsable del acto demandado, en el sentido de que la clasificación y descripción del cargo impugnado, fue el resultado de un cuidadoso proceso en que participó la demandante, por lo que mal puede aseverar que fueron conculcados sus derechos subjetivos.

Al examinar los cargos de violación endilgados, destacó que el artículo 8 de la Ley No. 32 de 8 de noviembre de 1984 que se dice infringido, constituye el fundamento legal del Proceso de Clasificación de Cargos llevado a cabo por la Contraloría General de la República, siendo precisamente por mandato de aquella norma, que se inició el proceso de clasificación.

Desestima los restantes cargos de ilegalidad presentados, al señalar que el acto recurrido es congruente con los resultados del proceso de Clasificación de Cargos del personal no directivo de la Contraloría General de la República, y que la descripción del cargo se ajusta a las funciones que desempeña la demandante.

La señora Procuradora manifiesta finalmente, que el proceso que nos ocupa no se origina en la clasificación o descripción del cargo de **EMMA VALDERRAMA**, sino que se encuentra motivado, como otros presentados con idénticas pretensiones por funcionarios de la Contraloría General de la República, en la circunstancia de que paralelo al proceso de clasificación, la Contraloría había iniciado el trámite de ajuste y equiparación salarial de sus funcionarios, de forma tal que a cada cargo y grado, correspondería un salario determinado.

En este contexto sugiere, que la disconformidad de los servidores públicos se produce por razón del salario que les corresponde en virtud del cargo clasificado, y no a la descripción del cargo asignado, o las funciones inherentes al mismo.

V. EXAMEN DE LA SALA TERCERA

Una vez surtidos todos los trámites pertinentes, se procede a decidir sobre el mérito de la demanda.

Es preciso señalar en primer término, que según consta en la documentación remitida por la Contraloría General de la República (fojas 1-3 del expediente administrativo), concretamente en el Formulario de Actualización de Descripción del Cargo presentado para la revisión de cada funcionario, por la Contraloría General de la República, la señora **EMMA VALDERRAMA colaboró en la descripción de sus funciones en el cargo**, añadiendo las tareas que hacían falta en dicha descripción, observaciones que fueron aceptadas por sus evaluadores, arribando a la conclusión de que el cargo debía ser clasificado como Supervisor de Estadística I.

Pese a ello, luego de notificada la clasificación, impugna la misma, argumentando que se omitieron tareas y que ha sido desfavorablemente clasificada.

Esta circunstancia, parece confirmar el planteamiento de la Procuraduría de la Administración, en el sentido de que la motivación de este proceso radica en la consecuencia económica de la clasificación, y no en el aspecto objetivo del acto recurrido, que asigna y describe las tareas de la funcionaria clasificada. Así también parece admitirlo la recurrente, cuando en su alegato final manifiesta: "la clasificación en un grado y categoría superior significa un ajuste económico salarial ..." (cfr. 58 del expediente)

No obstante, y siendo que la acción presentada, cualesquiera sus motivaciones, es formalmente viable, el Tribunal procede al análisis de rigor de los cargos de ilegalidad presentados, y al efecto hemos de señalar lo siguiente:

El primer cargo de ilegalidad, dice relación con la supuesta violación del artículo 8 de la Ley 32 de 1984. Por confrontada la norma, con el argumento del demandante, la Sala comparte el criterio externado por la Procuraduría de la Administración, en el sentido de que esta excerta legal sólo establece los parámetros para llevar a cabo la escogencia y movimiento de personal idóneo en la Contraloría General de la República, y constituye el fundamento jurídico del Proceso de Clasificación de Cargos, por lo que no representa una conculcación a los derechos del demandante.

En relación a la supuesta violación del artículo 1 de Decreto No. 195 del 17 de septiembre de 1997, que ordena la actualización del sistema de clasificación de cargos del personal no directivo de la Contraloría, la Sala estima procedente negar el cargo invocado, pues contrario a lo señalado por el actor, la Notificación No. 09345 de 25 de septiembre de 1997 sí contiene una descripción y clasificación del cargo de un funcionario no directivo de la Contraloría General, esto es, la señora **EMMA VALDERRAMA**, detallando los objetivos y las tareas inherentes al cargo asignado, en forma diáfana y concreta.

De acuerdo a lo anterior, también procede desestimar el cargo de ilegalidad aducido en relación al artículo 24 del Reglamento Interno de la Contraloría General de la República, que dispone la obligatoriedad, para el superior inmediato de un servidor público, de suministrarle por escrito, las funciones básicas e instrucciones del cargo a desempeñar.

Sobre el particular, la Corte advierte que el acto impugnado se ajusta a la exigencia reglamentaria, toda vez que se le comunicó por escrito, a **EMMA VALDERRAMA**, las tareas y labores que le correspondería desempeñar en ejercicio del cargo de Supervisor de Estadística I (cfr. foja 1 del expediente)

Finalmente, en lo que concierne a la alegada violación del subpunto 3.2 del Manual para la aplicación del Sistema de Clasificación de Cargos, mismo que establece la metodología a seguir en la evaluación de cada funcionario para clasificar el cargo y grado que le corresponde, la Sala conceptúa que no se ha producido la infracción alegada.

Ello obedece, a que las constancias que se adjuntaron al expediente principal, revelan que el ente demandado calificó a la señora **EMMA VALDERRAMA** conforme a los criterios, método y sistema de ponderación legalmente establecidos, asignándole a cada aspecto evaluado, un porcentaje acorde con los parámetros previstos en dicha disposición, concluyéndose que el título, objetivo y tareas que desempeñaba la señora **EMMA VALDERRAMA**, correspondían al cargo de Supervisor de Estadística I, y que la complejidad y responsabilidad del cargo, habían sido efectivamente evaluadas, para los efectos de la clasificación.

Por estas razones, descartamos la violación aducida.

La Corte estima oportuno reiterar, antes de concluir su examen de legalidad, que los elementos probatorios que obran en el expediente, relacionados con el Proceso de Clasificación de Cargos adelantado por la Contraloría General de la República, son constancia de que la información que sirvió de base para la clasificación y descripción del cargo impugnado, fue suministrada por la propia funcionaria clasificada, **EMMA VALDERRAMA**, al completar el Formulario de Actualización para Supervisor de Estadística I, por lo que mal podía aducirse en esta etapa, que no le fueron tomadas en consideración sus funciones, al momento de clasificarla.

Similar observación se dejó consignada, en la sentencia de 13 de diciembre de 1999, en que este Tribunal resolvió un cúmulo de procesos provenientes de la Contraloría General de la Nación, por razón de las clasificaciones realizadas a sus funcionarios.

Al desestimarse los cargos de ilegalidad aducidos, procede negar la pretensión invocada por el recurrente.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, el Acto de Notificación 09345 de 25 de septiembre de 1997, dictado por el Director de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA EN REPRESENTACIÓN DE BENJAMIN RODRIGUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTIFICACIÓN NO. 09285 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, REALIZADA POR EL DIRECTOR DE ESTADÍSTICA Y CENSO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Carlos Ayala, actuando en representación de BENJAMIN RODRIGUEZ, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el acto contenido en la Notificación No. 09285 de 25 de septiembre de 1997, realizado por el Director de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, y para que se hagan otras declaraciones.

I. EL ACTO IMPUGNADO

Mediante el acto impugnado, la Contraloría General de la República informó al funcionario BENJAMIN RODRIGUEZ, que en virtud de los resultados del Proceso de Clasificación de Cargos efectuado por dicha entidad, le había sido asignado el cargo de COMUNICADOR SOCIAL GRADO 9, en la Dirección de Estadística y Censo, siendo el objetivo de este cargo: brindar información, orientación y divulgación de actividades y eventos que programa y ejecuta la Dirección de Estadística y Censo; utilizando todos los medios de comunicación disponible.

El Acto de Notificación 09285 contenía además, un listado de las tareas que debía desempeñar el funcionario BENJAMIN RODRIGUEZ, en el ejercicio de su cargo. (f. 1 del expediente).

II. CARGOS DE ILEGALIDAD DEL RECURRENTE

a) La pretensión del demandante

El punto medular de la impugnación sostiene, que al momento de clasificarse la posición del funcionario BENJAMIN RODRIGUEZ, no se tomaron en cuenta algunas tareas que desempeñaba, ni sus funciones fueron equiparadas a la de otros funcionarios que realizan labores semejantes dentro de la Institución, por lo que se violaron normas que rigen el proceso de clasificación de cargos.

Agrega el actor, que las autoridades de la Contraloría General de la Nación no evaluaron correctamente las tareas realizadas por el funcionario, lo que trajo como consecuencia que no fueran conscientes de la realidad de su labor y por ende, le clasificaran inadecuadamente, cuando el cargo que le correspondía era de Oficial de Información de Relaciones Públicas II.

b) Cargos de ilegalidad

Los cargos de ilegalidad que sustentan el recurso, son los siguientes:

En primer término, se dice violado en concepto de interpretación errónea, el artículo 8 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, que es del tenor siguiente:

> "Artículo 8: La selección y promoción del personal de la Contraloría General se realizará tomando en consideración los méritos personales y profesionales. Para los fines señalados en este artículo, se instituirá en el Reglamento Interno de dicho organismo un sistema de clasificación de cargos y uno de selección que garantice que el escogido es idóneo para desempeñar el cargo respectivo ..."

La infracción se produce, en concepto del demandante, al describir el cargo de BENJAMIN RODRIGUEZ y asignarle un grado específico, sin considerar funciones que éste realiza, y que le colocarían en una posición superior. Por ende, estima que corresponde colocar al funcionario, en la clasificación de Oficial de Información de Relaciones Públicas II.

La segunda disposición infringida, recae en la supuesta infracción del artículo primero del Decreto No. 195 del 17 de septiembre de 1997, en virtud del cual se ordena la actualización e institución, del Sistema de Clasificación de Cargos del personal no directivo de la Contraloría General de la República.

El actor sostiene, que la norma resulta infringida en concepto de interpretación errónea, toda vez que la Notificación No. 09285 no actualiza las funciones, cargo, ni el grado de BENJAMIN RODRIGUEZ.

Seguidamente, el recurrente considera transgredido el subpunto 3.2 del Manual Descriptivo de Cargos de la Dirección de Recursos Humanos de la Contraloría General de la República, que establece los factores que deben ser evaluados en la clasificación de cargos de los empleados de esta dependencia estatal. Estos factores son: conocimientos y experiencia adquirida; complejidad de las tarea; guías de procedimiento disponibles; responsabilidad e impacto de errores; suspensión recibida y ejercida; contactos personales; propósito de los contactos; ambiente y exigencias físicas del puesto.

La infracción se explica en los siguientes términos:

> "La norma transcrita se ha violado de forma directa por falta de aplicación ya que la clasificación del cargo de mi cliente no consideró algunos de los aspectos que describe dicha norma, entre ellos el relativo a la complejidad de las tareas y el grado de responsabilidad o impacto de los errores. Es obvio que de haberse ponderado estos factores se hubiera clasificado a mi cliente realmente en el cargo que en la práctica desempeña."

Por último, se dice transgredido el artículo 24 del Reglamento Interno de la Contraloría General de la República, conforme al cual corresponde al superior inmediato de cada servidor, comunicarle por escrito las funciones básicas e instrucciones específicas del cargo a desempeñar.

Se aduce que la autoridad demandada incurrió en errónea interpretación de esta norma reglamentaria, toda vez que la descripción que se hace en el acto impugnado, de las funciones que desempeña BENJAMIN RODRIGUEZ, omite algunas tareas que éste había venido ejecutando en el cargo.

III. INFORME RENDIDO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA

Corre a fojas 13-17 del expediente, la Nota No. 2140-Leg de 17 de septiembre de 1998, contentivo del informe explicativo de conducta suscrito por

el Director de Estadística y Censo, autoridad responsable de la emisión del acto impugnado.

Este documento detalla, de manera minuciosa, la metodología utilizada en el Proceso de Clasificación de Cargos al que fueron sometidos los funcionarios de la dependencia estatal, procedimiento que se inició en 1986, fue interrumpido en 1989, y luego reactivado el 18 de mayo de 1995.

En lo que atañe al funcionario BENJAMIN RODRIGUEZ, se señalan las diversas etapas de su proceso evaluativo, que culminó con la clasificación del servidor público, en el cargo de Comunicador Social Grado 9, el 25 de septiembre de 1997, según Formulario de Notificación 09285.

Se señala además, que el funcionario propuso recursos administrativos contra el acto impugnado, los que luego de analizados cuidadosamente, fueron rechazados, por considerar que la clasificación y tareas descritas para el cargo de BENJAMIN RODRIGUEZ, eran inherentes al cargo de Comunicador Social II Grado 9.

Por ende concluye, que no se ha violentado derecho alguno al recurrente, dado que en su caso se cumplieron todas las etapas y procedimientos, contemplados en el Sistema de Clasificación de Cargos.

IV. OPINION DE LA PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACION

La representante del Ministerio Público, a través de Vista Fiscal No. 452 de 27 de noviembre de 1998, visible a fojas 45-60 del expediente, solicitó a esta Superioridad que se negara la pretensión de la demandante, por considerar que el acto impugnado, no es violatorio del ordenamiento legal.

La colaboradora de la instancia acoge los planteamientos de la autoridad responsable del acto demandado, en el sentido de que la clasificación y descripción del cargo impugnado, fue el resultado de un cuidadoso proceso en que participó el demandante, por lo que mal puede aseverar que fueron conculcados sus derechos subjetivos.

Al examinar los cargos de violación endilgados, destacó que el artículo 8 de la Ley No. 32 de 8 de noviembre de 1984 que se dice infringido, constituye el fundamento legal del Proceso de Clasificación de Cargos llevado a cabo por la Contraloría General de la República, siendo precisamente por mandato de aquella norma, que se inició el proceso de clasificación.

Desestima los restantes cargos de ilegalidad presentados, al señalar que el acto recurrido es congruente con los resultados del proceso de Clasificación de Cargos del personal no directivo de la Contraloría General de la República, y que la descripción del cargo se ajusta a las funciones que desempeña el demandante.

La señora Procuradora manifiesta finalmente, que el proceso que nos ocupa no se origina en la clasificación o descripción del cargo de BENJAMIN RODRIGUEZ, sino que se encuentra motivado, como otros presentados con idénticas pretensiones por funcionarios de la Contraloría General de la República, en la circunstancia de que paralelo al proceso de clasificación, la Contraloría había iniciado el trámite de ajuste y equiparación salarial de sus funcionarios, de forma tal que cada cargo y grado, correspondería un salario determinado.

En este contexto sugiere, que la disconformidad de los servidores públicos se produce por razón del salario que les corresponde en virtud del cargo clasificado, y no a la descripción del cargo asignado, o las funciones inherentes al mismo.

V. EXAMEN DE LA SALA TERCERA

Una vez surtidos todos los trámites pertinentes, se procede a decidir sobre el mérito de la demanda.

Es preciso señalar en primer término, que según consta en la documentación remitida por la Contraloría General de la República (fojas 43-44 del expediente administrativo) concretamente en el Formulario de Actualización de Descripción del Cargo presentado para la revisión de cada funcionario, por la Contraloría General de la República, el señor BENJAMIN RODRIGUEZ colaboró en la descripción de sus funciones en el cargo, añadiendo las tareas que hacían falta en dicha descripción, observaciones que fueron aceptadas por sue evaluadores, arribando a la conclusión de que el cargo debía ser clasificado como Comunicador Social II.

Pese a ello, luego de notificada la clasificación, impugna la misma, argumentando que se omitieron tareas y que ha sido desfavorablemente clasificado.

Esta circunstancia, parece confirmar el planteamiento de la Procuraduría de la Administración, en el sentido de que la motivación de este proceso radica en la consecuencia económica de la clasificación, y no en el aspecto objetivo del acto recurrido, que asigna y describe las tareas del funcionario clasificado. Así también parece admitirlo el recurrente, cuando en su alegato final manifiesta: "la clasificación en un grado y categoría superior significa un ajuste económico salarial ..." (cfr. 76 del expediente)

No obstante, y siendo que la acción presentada, cualesquiera sus motivaciones, es formalmente viable, el Tribunal procede al análisis de rigor a los cargos de ilegalidad presentados, y al efecto hemos de señalar lo siguiente:

El primer cargo de ilegalidad, dice relación con la supuesta violación del artículo 8 de la Ley 32 de 1984. Por confrontada la norma, con el argumento del demandante, la Sala comparte el criterio externado por la Procuraduría de la Administración, en el sentido de que esta excerta legal sólo establece los parámetros para llevar a cabo la escogencia y movimiento de personal idóneo en la Contraloría General de la República, y constituye el fundamento jurídico del Proceso de Clasificación de Cargos, por lo que no representa una conculcación a los derechos del demandante.

En relación a la supuesta violación del artículo 1 de Decreto No. 195 del 17 de septiembre de 1997, que ordena la actualización del sistema de clasificación de cargos del personal no directivo de la Contraloría, la Sala estima procedente negar el cargo invocado, pues contrario a lo señalado por el actor, la Notificación No. 09285 de 25 de septiembre de 1997 sí contiene una descripción y clasificación del cargo de un funcionario no directivo de la Contraloría General, esto es, el señor BENJAMIN RODRIGUEZ, detallando los objetivos y las tareas inherentes al cargo asignado, en forma diáfana y concreta.

De acuerdo a lo anterior, también procede desestimar el cargo de ilegalidad aducido en relación al artículo 24 del Reglamento Interno de la Contraloría General de la República, que dispone la obligatoriedad, para el superior inmediato de un servidor público, de suministrarle por escrito, las funciones básicas e instrucciones del cargo a desempeñar.

Sobre el particular, la Corte advierte que el acto impugnado se ajusta a la exigencia reglamentaria, toda vez que se le comunicó por escrito, a BENJAMIN RODRIGUEZ, las tareas y labores que le correspondería desempeñar en ejercicio del cargo de Comunicador Social II (cfr. foja 1 del expediente)

Finalmente, en lo que concierne a la alegada violación del subpunto 3.2 del Manual para la aplicación del Sistema de Clasificación de Cargos, mismo que establece la metodología a seguir en la evaluación de cada funcionario para clasificar el cargo y grado que le corresponde, la Sala conceptúa que no se ha producido la infracción alegada.

Ello obedece, a que las constancias que se adjuntaron al expediente

principal, revelan que el ente demandado calificó al señor BENJAMIN RODRIGUEZ conforme a los criterios, método y sistema de ponderación legalmente establecidos, asignándole a cada aspecto evaluado, un porcentaje acorde con los parámetros previstos en dicha disposición, concluyéndose que el título, objetivo y tareas que desempeñaba el señor RODRIGUEZ, correspondían al cargo de Comunicador Social II Grado 9, y no al cargo de Oficial de Información y Relaciones Públicas II, ya que este último pertenece a la estructura de la Dirección Superior, mien-tras que la labor de BENJAMIN RODRIGUEZ se circunscribía a la Dirección de Estadística y Censo solamente.

Por estas razones, descartamos la violación aducida.

La Corte estima oportuno reiterar, antes de concluir su examen de legalidad, que los elementos probatorios que obran en el expediente, relacionados con el Proceso de Clasificación de Cargos adelantado por la Contraloría General de la República, son constancia de que la información que sirvió de base para la clasificación y descripción del cargo impugnado, fue suministrada por el propio funcionario clasificado, BENJAMIN RODRIGUEZ, al completar el Formulario de Actualización, por lo que mal podía aducirse en esta etapa, que no le fueron tomadas en consideración sus funciones, al momento de clasificarlo.

Similar observación se dejó consignada, en la sentencia de 13 de diciembre de 1999, en que este Tribunal resolvió un cúmulo de procesos provenientes de la Contraloría General de la Nación, por razón de las clasificaciones realizadas a sus funcionarios.

Al desestimarse los cargos de ilegalidad aducidos, procede negar la pretensión invocada por el recurrente.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, el Acto de Notificación 09285 de 25 de septiembre de 1997, dictado por el Director de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA EN REPRESENTACIÓN DE ESMERALDA VERGARA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTIFICACIÓN NO. 09358 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, REALIZADA POR EL DIRECTOR DE ESTADÍSTICA Y CENSO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Carlos Ayala, actuando en representación de ESMERALDA VERGARA, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el acto contenido en la Notificación No. 09358 de 25 de septiembre de 1997, realizado por el Director de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, y para que se hagan otras declaraciones.

I. EL ACTO IMPUGNADO

Mediante el acto impugnado, la Contraloría General de la República informó a la funcionaria ESMERALDA VERGARA, que en virtud de los resultados del Proceso de Clasificación de Cargos efectuado por dicha entidad, le había sido asignado el cargo de JEFE DE CAPTURA DE INFORMACION ESTADISTICA GRADO 11, en la Dirección de Estadística y Censo, siendo el objetivo de este cargo: coordinar y administrar los servicios que presta la Sección en la captura de información proveniente de censos, encuestas y registros administrativos, al igual que la mecanografía de las publicaciones estadísticas y de otra índole, que implican especificaciones especiales de formatos, diseños y presentación que requieren de una impresión original para un tiraje de gran volumen.

El Acto de Notificación 09358 contenía además, un listado de las tareas que debía desempeñar la funcionaria VERGARA, en el ejercicio de su cargo. (fs. 1-2 del expediente).

II. CARGOS DE ILEGALIDAD DEL RECURRENTE

a) La pretensión del demandante

El punto medular de la impugnación sostiene, que al momento de la clasificarse la posición de la funcionaria VERGARA, no se tomaron en cuenta algunas tareas que ésta desempeñaba, ni sus funciones fueron equiparadas a la de otros funcionarios que realizan labores semejantes dentro de la Institución, por lo que se violaron normas que rigen el proceso de clasificación de cargos.

Agrega el actor, que ninguna de las autoridades de la Contraloría General de la Nación realizó las técnicas de auscultación en el puesto, de las tareas realizadas por la prenombrada funcionaria, lo que trajo como consecuencia que no fueran conscientes de la realidad de su labor y por ende, le clasificaran inadecuadamente.

b) Cargos de ilegalidad

Los cargos de ilegalidad que sustentan el recurso, son los siguientes:

En primer término, se dice violado en concepto de interpretación errónea, el artículo 8 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, que es del tenor siguiente:

> "Artículo 8: La selección y promoción del personal de la Contraloría General se realizará tomando en consideración los méritos personales y profesionales. Para los fines señalados en este artículo, se instituirá en el Reglamento Interno de dicho organismo un sistema de clasificación de cargos y uno de selección que garantice que el escogido es idóneo para desempeñar el cargo respectivo ..."

La infracción se produce, en concepto del demandante, al describir el cargo de la señora ESMERALDA VERGARA y asignarle un grado específico, sin considerar funciones que ésta realiza, y que la colocarían en una posición distinta a la asignada en el acto impugnado. Por ende, estima que corresponde colocar a la funcionaria, en una clasificación o grado superior.

La segunda disposición infringida, recae en la supuesta infracción del artículo primero del Decreto No. 195 del 17 de septiembre de 1997, en virtud del cual se ordena la actualización e institución del Sistema de Clasificación de cargos del personal no directivo de la Contraloría General.

El actor sostiene, que la norma resulta infringida en concepto de interpretación errónea, toda vez que la Notificación No. 09358 no actualiza las funciones, cargo, ni el grado de ESMERALDA VERGARA.

Seguidamente, el recurrente considera transgredido el subpunto 3.2 del Manual Descriptivo de Cargos de la Dirección de Recursos Humanos de la

Contraloría General de la República, que establece los factores que deben ser evaluados en la clasificación de cargos de los empleados de esta dependencia estatal. Estos factores son: conocimientos y experiencia adquirida; complejidad de las tarea; guías de procedimiento disponibles; responsabilidad e impacto de errores; suspensión recibida y ejercida; contactos personales; propósito de los contactos; ambiente y exigencias físicas del puesto.

La infracción se explica en los siguientes términos:

> "La norma transcrita se ha violado de forma directa por falta de aplicación ya que la clasificación del cargo de mi cliente no consideró algunos de los aspectos que describe dicha norma, entre ellos el relativo a la complejidad de las tareas y el grado de responsabilidad o impacto de los errores. Es obvio que de haberse ponderado estos factores se hubiera clasificado a mi cliente realmente en el cargo que en la práctica desempeña."

Por último, se dice transgredido el artículo 24 del Reglamento Interno de la Contraloría General de la República, conforme al cual corresponde al superior inmediato de cada servidor, comunicarle por escrito las funciones básicas e instrucciones específicas del cargo a desempeñar.

Se aduce que la autoridad demandada incurrió en errónea interpretación de esta norma reglamentaria, toda vez que la descripción que se hace en el acto impugnado de las funciones que a desempeña ESMERALDA VERGARA, omite algunas tareas que ésta había venido ejecutando en el cargo.

III. INFORME RENDIDO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA

Corre a fojas 14-18 del expediente, la Nota No. 2145-Leg de 17 de septiembre de 1998, contentivo del informe explicativo de conducta suscrito por el Director de Estadística y Censo, autoridad responsable de la emisión del acto impugnado.

En este documento se detalla de manera minuciosa, la metodología utilizada en el Proceso de Clasificación de Cargos al que fueron sometidos los funcionarios de la dependencia estatal, procedimiento éste que se inició en 1986, fue interrumpido en 1989, y luego reactivado el 18 de mayo de 1995.

En lo que atañe a la funcionaria ESMERALDA VERGARA, se señalan las diversas etapas que se surtieron en su proceso evaluativo, que culminó con la clasificación de esta servidora pública, en el cargo de Jefe de Captura de Información Estadística Grado 11, el 25 de septiembre de 1997, según Formulario de Notificación 09358.

Se señala además, que la funcionaria propuso recursos administrativos contra el acto impugnado, lo que llevó al Subdirector de la Contraloría General de la Nación, encargado de resolver el recurso de apelación contra el Acto de Notificación 09358, a modificar la clasificación del Cargo de ESMERALDA VERGARA, incrementando de 11 a 12, el grado del cargo Jefe de Captura de Información Estadística.

Por ende concluye, que no se ha violentado derecho alguno a la recurrente, dado que se cumplieron todas las etapas contempladas en el Sistema de Clasificación de Cargos, e incluso se aceptó su disconformidad con la clasificación inicial, incrementándole un grado a su clasificación.

IV. OPINION DE LA PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACION

La representante del Ministerio Público, a través de Vista Fiscal No. 461 de 27 de noviembre de 1998 visible a fojas 48-63 del expediente, solicitó a esta Superioridad que se negara la pretensión de la demandante, por considerar que el acto impugnado no es violatorio del ordenamiento legal.

La colaboradora de la instancia acoge los planteamientos de la autoridad responsable del acto demandado, en el sentido de que la clasificación y descripción del cargo impugnado, fue el resultado de un cuidadoso proceso en que participó la demandante, por lo que mal puede aseverar que fueron conculcados sus derechos subjetivos.

Al examinar los cargos de violación endilgados, destacó que el artículo 8 de la Ley No. 32 de 8 de noviembre de 1984 que se dice infringido, constituye el fundamento legal del Proceso de Clasificación de Cargos llevado a cabo por la Contraloría General de la República, siendo precisamente por mandato de aquella norma, que se inició el proceso de reclasificación.

Desestima los restantes cargos de ilegalidad presentados, al señalar que el acto recurrido es congruente con los resultados del proceso de Clasificación de Cargos del personal no directivo de la Contraloría General de la República, y que la descripción del cargo se ajusta a las funciones que desempeña la demandante.

La señora Procuradora manifiesta finalmente, que el proceso que nos ocupa no se origina en la clasificación o descripción del cargo de ESMERALDA VERGARA, sino que se encuentra motivado, como otros presentados con idénticas pretensiones por funcionarios de la Contraloría General de la República, en la circunstancia de que paralelo al proceso de clasificación, la Contraloría había iniciado el tramite de ajuste y equiparación salarial de sus funcionarios, de forma tal que cada cargo y grado, correspondería un salario determinado.

En este contexto se sugiere, que la disconformidad de los servidores públicos se produce por razón del salario que les corresponde en virtud del cargo clasificado, y no a la descripción del cargo asignado, o las funciones inherentes al mismo.

V. EXAMEN DE LA SALA TERCERA

Una vez surtidos todos los trámites pertinentes, se procede a decidir sobre el mérito de la demanda.

Es preciso señalar en primer término, que según consta en la documentación remitida por la Contraloría General de la República, la funcionaria ESMERALDA VERGARA no se mostró inicialmente inconforme con las funciones que se le atribuyeron en la clasificación del cargo, ni con la descripción del mismo, sino con el grado (Grado 11), en que se había clasificado su cargo, ya que aspiraba a que se le asignara, como mínimo, un Grado 12.

En este sentido, se observa a fojas 45-47 el expediente, que la señora VERGARA participó en la descripción de sus funciones en el cargo, consignando las tareas que realizaba, en el Formulario de Actualización. Es por ello, que a foja 41 del legajo, consta que la funcionaria declaró expresamente "estoy de acuerdo con la Descripción del Cargo, no así con el Grado 11 otorgado a este cargo".

Esta disconformidad de la funcionaria fue aceptada en la vía gubernativa, al momento de surtirse recurso de apelación ante el Sub-Contralor General de la República, según consta en Resolución No. 353-DDRH de 12 de junio de 1998 (visible a foja 5 del expediente), en que se reconoce que las funciones que desempeña ESMERALDA VERGARA correspondía a Jefe de Captura de Información Estadística, Grado 12.

Pese a la aceptación de la Contraloría General de la República, de mejorar la clasificación de ESMERALDA VERGARA, dicha funcionaria persiste en su inconformidad, y acude ante esta Máxima Corporación de Justicia, impugnando el acto de clasificación y la descripción de las tareas de su cargo, planteando la aspiración de ser clasificada en grado y categoría superior a la existente. (cfr. foja 80 del expediente)

Esta circunstancia, parece confirmar el planteamiento de la Procuraduría de la Administración, en el sentido de que la motivación de este proceso radica en la consecuencia económica de la clasificación, y no en el aspecto objetivo del acto recurrido, que asigna y describe las tareas de la funcionaria clasificada.

Nótese, que a la funcionaria VERGARA se le reconoció en la etapa gubernativa, un incremento de Grado 11 a Grado 12, y sin embargo, persistió en su reclamación ante la Sala Tercera, entre otras razones, por el argumento claramente consignado por su apoderado judicial, de que "la clasificación en un grado y categoría superior significa un ajuste económico salarial ..." (cfr. 80 del expediente)

Siendo que la acción presentada, cualesquiera sus motivaciones, es formalmente viable, el Tribunal procede al análisis de rigor a los cargos de ilegalidad presentados, y al efecto hemos de señalar lo siguiente:

El primer cargo de ilegalidad, dice relación con la supuesta violación del artículo 8 de la Ley 32 de 1984. Por confrontada la norma, con el argumento del demandante, la Sala comparte el criterio externado por la Procuraduría de la Administración, en el sentido de que esta excerta legal sólo establece los parámetros para llevar a cabo la escogencia y movimiento de personal idóneo en la Contraloría General de la República, y constituye el fundamento jurídico del Proceso de Clasificación de Cargos, por lo que no representa una conculcación a los derechos de la demandante.

En relación a la supuesta violación del artículo 1 de Decreto No. 195 del 17 de septiembre de 1997, que ordena la actualización del sistema de clasificación de cargos del personal no directivo de la Contraloría, la Sala estima procedente negar el cargo invocado, pues contrario a lo señalado por el actor, la Notificación No. 09358 de 25 de septiembre de 1997 sí contiene una descripción y clasificación del cargo de un funcionario no directivo de la Contraloría General, esto es, la señora VERGARA, detallando los objetivos y las tareas inherentes al cargo asignado, en forma diáfana y concreta.

De acuerdo a lo anterior, también procede desestimar el cargo de ilegalidad aducido en relación al artículo 24 del Reglamento Interno de la Contraloría General de la República, que dispone la obligatoriedad, para el superior inmediato de un servidor público, de suministrarle por escrito, las funciones básicas e instrucciones del cargo a desempeñar.

Sobre el particular, la Corte advierte que el acto impugnado se ajusta a la exigencia reglamentaria, toda vez que se le comunicó por escrito a ESMERALDA VERGARA, las tareas y labores básicas que le correspondería desempeñar, en ejercicio del cargo de Jefe de Captura de Información Estadística. (cfr. foja 1-2 del expediente)

Finalmente, en lo que concierne a la alegada violación del subpunto 3.2 del Manual para la aplicación del Sistema de Clasificación de Cargos, mismo que establece la metodología a seguir en la evaluación de cada funcionario, para clasificar el cargo y grado que le corresponde, la Sala conceptúa que no se ha producido la infracción alegada, puesto que las constancias que se adjuntaron al expediente principal, revelan que el ente demandado calificó a ESMERALDA VERGARA conforme a los criterios, método y sistema de ponderación legalmente establecidos, asignándole a cada aspecto evaluado, un porcentaje acorde con los parámetros previstos en dicha disposición.

Esta Corporación Judicial estima oportuno reiterar, antes de concluir el examen de legalidad, que los elementos probatorios que obran en el expediente, relacionados con el Proceso de Clasificación de Cargos adelantado por la Contraloría General de la República, son constancia de que la información que sirvió de base para la clasificación y descripción del cargo impugnado, fue suministrada por la propia funcionaria clasificada, ESMERALDA VERGARA, al completar el Formulario de Actualización que le fue entregado, en el que detalló

las tareas que realizaba, por lo que mal puede aducirse en esta etapa, que no le fueron tomadas en consideración sus funciones, al momento de clasificarla.

Similar observación se dejó consignada, en la sentencia de 13 de diciembre de 1999, en que este Tribunal resolvió un cúmulo de procesos provenientes de la Contraloría General de la Nación, por razón de las clasificaciones realizadas a sus funcionarios.

Al desestimarse los cargos de ilegalidad aducidos, procede negar la pretensión invocada por el recurrente.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, el Acto de Notificación 09358 de 25 de septiembre de 1997, dictado por el Director de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA EN REPRESENTACIÓN DE MIRIAM DE RANGEL, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTIFICACIÓN NO. 09273 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, REALIZADA POR EL DIRECTOR DE ESTADÍSTICA Y CENSO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Carlos Ayala, actuando en representación de MIRIAM DE RANGEL, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el acto contenido en la Notificación No. 09273 de 25 de septiembre de 1997, realizado por el Director de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, y para que se hagan otras declaraciones.

I. EL ACTO IMPUGNADO

Mediante el acto impugnado, la Contraloría General de la República informó a la funcionaria MIRIAM DE RANGEL, que en virtud de los resultados del Proceso de Clasificación de Cargos efectuado por dicha entidad, le había sido asignado el cargo de CAPTURADOR DE INFORMACION ESTADISTICA GRADO 6, en la Dirección de Estadística y Censo, siendo el objetivo de este cargo: levantar y diagramar textos, publicaciones estadísticas, formularios y cuestionarios casuales; capturar y verificar información estadística procedente de censos, encuestas, series estadísticas y registros administrativos, utilizando microcomputadoras.

El Acto de Notificación 09273 contenía además, un listado de las tareas que debía desempeñar la funcionaria MIRIAM DE RANGEL, en el ejercicio de su cargo. (f. 19 del expediente).

II. CARGOS DE ILEGALIDAD DEL RECURRENTE

a) La pretensión del demandante

El punto medular de la impugnación sostiene, que al momento de la

clasificarse la posición de la funcionaria MIRIAM DE RANGEL, no se tomaron en cuenta algunas tareas que ésta desempeñaba, ni sus funciones fueron equiparadas a la de otros funcionarios que realizan labores semejantes dentro de la Institución, por lo que se violaron normas que rigen el proceso de clasificación de cargos.

Agrega el actor, que las autoridades de la Contraloría General de la Nación no evaluaron correctamente las tareas realizadas por la prenombrada funcionaria, lo que trajo como consecuencia que no fueran conscientes de la realidad de su labor y por ende, le clasificaran inadecuadamente.

b) Cargos de ilegalidad

Los cargos de ilegalidad que sustentan el recurso, son los siguientes:

En primer término, se dice violado en concepto de interpretación errónea, el artículo 8 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, que es del tenor siguiente:

> "Artículo 8: La selección y promoción del personal de la Contraloría General se realizará tomando en consideración los méritos personales y profesionales. Para los fines señalados en este artículo, se instituirá en el Reglamento Interno de dicho organismo un sistema de clasificación de cargos y uno de selección que garantice que el escogido es idóneo para desempeñar el cargo respectivo ..."

La infracción se produce, en concepto del demandante, al describir el cargo de la señora MIRIAM DE RANGEL y asignarle un grado específico, sin considerar funciones que ésta realiza, y que la colocarían en una posición distinta a la asignada en el acto impugnado. Por ende, estima que corresponde colocar a la funcionaria, en una clasificación y grado superior.

La segunda disposición infringida, recae en la supuesta infracción del artículo primero del Decreto No. 195 del 17 de septiembre de 1997, en virtud del cual se ordena la actualización e institución del Sistema de Clasificación de Cargos del personal no directivo de la Contraloría General de la República.

El actor sostiene, que la norma resulta infringida en concepto de interpretación errónea, toda vez que la Notificación No. 09273 no actualiza las funciones, cargo, ni el grado de MIRIAM DE RANGEL.

Seguidamente, el recurrente considera transgredido el subpunto 3.2 del Manual Descriptivo de Cargos de la Dirección de Recursos Humanos de la Contraloría General de la República, que establece los factores que deben ser evaluados en la clasificación de cargos de los empleados de esta dependencia estatal. Estos factores son: conocimientos y experiencia adquirida; complejidad de las tarea; guías de procedimiento disponibles; responsabilidad e impacto de errores; suspensión recibida y ejercida; contactos personales; propósito de los contactos; ambiente y exigencias físicas del puesto.

La infracción se explica en los siguientes términos:

> "La norma transcrita se ha violado de forma directa por falta de aplicación ya que la clasificación del cargo de mi cliente no consideró algunos de los aspectos que describe dicha norma, entre ellos el relativo a la complejidad de las tareas y el grado de responsabilidad o impacto de los errores. Es obvio que de haberse ponderado estos factores se hubiera clasificado a mi cliente realmente en el cargo que en la práctica desempeña."

Por último, se dice transgredido el artículo 24 del Reglamento Interno de la Contraloría General de la República, conforme al cual corresponde al superior inmediato de cada servidor, comunicarle por escrito las funciones básicas e

instrucciones específicas del cargo a desempeñar. Se aduce que la autoridad demandada incurrió en errónea interpretación de esta norma reglamentaria, toda vez que la descripción que se hace en el acto impugnado, de las funciones que desempeña MIRIAM DE RANGEL, omite algunas tareas que ésta había venido ejecutando en el cargo.

III. INFORME RENDIDO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA

Corre a fojas 14-18 del expediente, la Nota No. 2265-Leg de 23 de noviembre de 1998, contentivo del informe explicativo de conducta suscrito por el Director de Estadística y Censo, autoridad responsable de la emisión del acto impugnado.

Este documento detalla, de manera minuciosa, la metodología utilizada en el Proceso de Clasificación de Cargos al que fueron sometidos los funcionarios de la dependencia estatal, procedimiento que se inició en 1986, fue interrumpido en 1989, y luego reactivado el 18 de mayo de 1995.

En lo que atañe a la funcionaria MIRIAM DE RANGEL, se señalan las diversas etapas de su proceso evaluativo, que culminó con la clasificación de la servidora pública, en el cargo de Capturador de Información Estadística Grado 6, el 25 de septiembre de 1997, según Formulario de Notificación 09273.

Se señala además, que la funcionaria propuso recursos administrativos contra el acto impugnado, los que luego de analizados cuidadosamente, fueron rechazados, por considerar que la clasificación y tareas descritas para el cargo de MIRIAM DE RANGEL, eran inherentes al cargo que desempeñaba.

Por ende concluye, que no se ha violentado derecho alguno a la recurrente, dado que en su caso se cumplieron todas las etapas y procedimientos, contemplados en el Sistema de Clasificación de Cargos.

IV. OPINION DE LA PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACION

La representante del Ministerio Público, a través de Vista Fiscal No. 514 de 23 de diciembre de 1998, visible a fojas 29-44 del expediente, solicitó a esta Superioridad que se negara la pretensión de la demandante, por considerar que el acto impugnado no es violatorio del ordenamiento legal.

La colaboradora de la instancia acoge los planteamientos de la autoridad responsable del acto demandado, en el sentido de que la clasificación y descripción del cargo impugnado, fue el resultado de un cuidadoso proceso en que participó la demandante, por lo que mal puede aseverar que fueron conculcados sus derechos subjetivos.

Al examinar los cargos de violación endilgados, destacó que el artículo 8 de la Ley No. 32 de 8 de noviembre de 1984 que se dice infringido, constituye el fundamento legal del Proceso de Clasificación de Cargos llevado a cabo por la Contraloría General de la República, siendo precisamente por mandato de aquella norma, que se inició el proceso de clasificación.

Desestima los restantes cargos de ilegalidad presentados, al señalar que el acto recurrido es congruente con los resultados del proceso de Clasificación de Cargos del personal no directivo de la Contraloría General de la República, y que la descripción del cargo se ajusta a las funciones que desempeña la demandante.

La señora Procuradora manifiesta finalmente, que el proceso que nos ocupa no se origina en la clasificación o descripción del cargo de MIRIAM DE RANGEL, sino que se encuentra motivado, como otros presentados con idénticas pretensiones por funcionarios de la Contraloría General de la República, en la circunstancia de que paralelo al proceso de clasificación, la Contraloría había iniciado el trámite de ajuste y equiparación salarial de sus funcionarios, de forma tal que cada cargo y grado, correspondería un salario determinado.

En este contexto sugiere, que la disconformidad de los servidores públicos se produce por razón del salario que les corresponde en virtud del cargo clasificado, y no a la descripción del cargo asignado, o las funciones inherentes al mismo.

V. EXAMEN DE LA SALA TERCERA

Una vez surtidos todos los trámites pertinentes, se procede a decidir sobre el mérito de la demanda.

Es preciso señalar en primer término, que según consta en la documentación remitida por la Contraloría General de la República (foja 01 del expediente administrativo), la funcionaria MIRIAM DE RANGEL colaboró en la descripción de sus funciones en el cargo, para entonces clasificado como Mecanógrafa Especializada II, aceptando sin objeciones, las tareas que quedaron consignadas en el Formulario de Actualización de Descripción del Cargo, presentado para su revisión por la Contraloría General de la República, durante el proceso de clasificación. Nótese que incluso se le brindó la oportunidad a la funcionaria, de consignar en un renglón específicamente destinado para ello, si hacían falta tareas, lo que no hizo, manifestándose de acuerdo con el contenido de dicho formulario, para luego de notificada la clasificación, impugnar la misma, argumentando que se omitieron tareas y que ha sido desfavorablemente clasificada.

Esta circunstancia, parece confirmar el planteamiento de la Procuraduría de la Administración, en el sentido de que la motivación de este proceso radica en la consecuencia económica de la clasificación, y no en el aspecto objetivo del acto recurrido, que asigna y describe las tareas de la funcionaria clasificada.

No obstante, y siendo que la acción presentada, cualesquiera sus motivaciones, es formalmente viable, el Tribunal procede al análisis de rigor a los cargos de ilegalidad presentados, y al efecto hemos de señalar lo siguiente:

El primer cargo de ilegalidad, dice relación con la supuesta violación del artículo 8 de la Ley 32 de 1984. Por confrontada la norma, con el argumento del demandante, la Sala comparte el criterio externado por la Procuraduría de la Administración, en el sentido de que esta excerta legal sólo establece los parámetros para llevar a cabo la escogencia y movimiento de personal idóneo en la Contraloría General de la República, y constituye el fundamento jurídico del Proceso de Clasificación de Cargos, por lo que no representa una conculcación a los derechos de la demandante.

En relación a la supuesta violación del artículo 1 de Decreto No. 195 del 17 de septiembre de 1997, que ordena la actualización del sistema de clasificación de cargos del personal no directivo de la Contraloría, la Sala estima procedente negar el cargo invocado, pues contrario a lo señalado por el actor, la Notificación No. 09273 de 25 de septiembre de 1997 sí contiene una descripción y clasificación del cargo de un funcionario no directivo de la Contraloría General, esto es, la señora MIRIAM DE RANGEL, detallando los objetivos y las tareas inherentes al cargo asignado, en forma diáfana y concreta.

De acuerdo a lo anterior, también procede desestimar el cargo de ilegalidad aducido en relación al artículo 24 del Reglamento Interno de la Contraloría General de la República, que dispone la obligatoriedad, para el superior inmediato de un servidor público, de suministrarle por escrito, las funciones básicas e instrucciones del cargo a desempeñar.

Sobre el particular, la Corte advierte que el acto impugnado se ajusta a la exigencia reglamentaria, toda vez que se le comunicó por escrito, a MIRIAM DE RANGEL, las tareas y labores que le correspondería desempeñar en ejercicio del cargo de Capturador de Información Estadística. (cfr. foja 19 del expediente)

Finalmente, en lo que concierne a la alegada violación del subpunto 3.2 del Manual para la aplicación del Sistema de Clasificación de Cargos, mismo que

establece la metodología a seguir en la evaluación de cada funcionario para clasificar el cargo y grado que le corresponde, la Sala conceptúa que no se ha producido la infracción alegada, puesto que las constancias que se adjuntaron al expediente principal, revelan que el ente demandado calificó a MIRIAM DE RANGEL conforme a los criterios, método y sistema de ponderación legalmente establecidos, asignándole a cada aspecto evaluado, un porcentaje acorde con los parámetros previstos en dicha disposición, por lo que descartamos la violación aducida.

Sin perjuicio del análisis que precede, hemos advertido que la Contraloría General de la República tiene proyectado una futura reestructuración del Departamento de Estadística y Censo, lo que implica una eventual reevaluación del cargo de MIRIAM DE RANGEL (cfr. foja 27 del expediente), en la que tendrá nuevamente oportunidad de colaborar con el proceso evaluativo, y hacer las recomendaciones u objeciones que estime procedentes.

En este orden de ideas, la Corte estima oportuno reiterar, antes de concluir su examen de legalidad, que los elementos probatorios que obran en el expediente, relacionados con el Proceso de Clasificación de Cargos adelantado por la Contraloría General de la República, son constancia de que la información que sirvió de base para la clasificación y descripción del cargo impugnado, fue suministrada por la propia funcionaria clasificada, MIRIAM DE RANGEL, al completar el Formulario de Actualización, por lo que mal podía aducirse en esta etapa, que no le fueron tomadas en consideración sus funciones, al momento de clasificarla.

Similar observación se dejó consignada, en la sentencia de 13 de diciembre de 1999, en que este Tribunal resolvió un cúmulo de procesos provenientes de la Contraloría General de la Nación, por razón de las clasificaciones realizadas a sus funcionarios.

Al desestimarse los cargos de ilegalidad aducidos, procede negar la pretensión invocada por el recurrente.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, el Acto de Notificación 09273 de 25 de septiembre de 1997, dictado por el Director de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA EN REPRESENTACIÓN DE ARIEL RUIZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTIFICACIÓN NO. 09307 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, REALIZADA POR EL DIRECTOR DE ESTADÍSTICA Y CENSO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISEIS (16) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Carlos Ayala, actuando en representación de ARIEL RUIZ, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el acto contenido en la Notificación No. 09307 de 25

de septiembre de 1997, realizado por el Director de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, y para que se hagan otras declaraciones.

I. EL ACTO IMPUGNADO

Mediante el acto impugnado, la Contraloría General de la República informó al funcionario ARIEL RUIZ, que en virtud de los resultados del Proceso de Clasificación de Cargos efectuado por dicha entidad, le había sido asignado el cargo de SUPERVISOR DE ESTADISTICA GRADO 10, en la Dirección de Estadística y Censo, siendo el objetivo de este cargo: supervisar trabajos de nivel técnico, relacionados con la recolección, cálculo, estimación, análisis, interpretación y presentación de datos estadísticos.

El Acto de Notificación 09307 contenía además, un listado de las tareas que debía desempeñar el funcionario ARIEL RUIZ, en el ejercicio de su cargo. (fs. 15-16 del expediente).

II. CARGOS DE ILEGALIDAD DEL RECURRENTE

a) La pretensión del demandante

El punto medular de la impugnación sostiene, que al momento de clasificarse la posición del funcionario ARIEL RUIZ, no se tomaron en cuenta algunas tareas que desempeñaba, ni sus funciones fueron equiparadas a la de otros funcionarios que realizan labores semejantes dentro de la Institución, por lo que se violaron normas que rigen el proceso de clasificación de cargos.

Agrega el actor, que las autoridades de la Contraloría General de la Nación no evaluaron correctamente las tareas realizadas por el funcionario, lo que trajo como consecuencia que no fueran conscientes de la realidad de su labor y por ende, le clasificaran inadecuadamente, cuando el cargo que le correspondía era de Supervisor II, Grado 11.

b) Cargos de ilegalidad

Los cargos de ilegalidad que sustentan el recurso, son los siguientes:

En primer término, se dice violado en concepto de interpretación errónea, el artículo 8 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, que es del tenor siguiente:

> "Artículo 8: La selección y promoción del personal de la Contraloría General se realizará tomando en consideración los méritos personales y profesionales. Para los fines señalados en este artículo, se instituirá en el Reglamento Interno de dicho organismo un sistema de clasificación de cargos y uno de selección que garantice que el escogido es idóneo para desempeñar el cargo respectivo ..."

La infracción se produce, en concepto del demandante, al describir el cargo de ARIEL RUIZ y asignarle un grado específico, sin considerar funciones que éste realiza, y que le colocarían en una posición superior. Por ende, estima que corresponde colocar al funcionario, en la clasificación de Supervisor II Grado 11.

La segunda disposición infringida, recae en la supuesta infracción del artículo primero del Decreto No. 195 del 17 de septiembre de 1997, en virtud del cual se ordena la actualización e institución, del Sistema de Clasificación de Cargos del personal no directivo de la Contraloría General de la República.

El actor sostiene, que la norma resulta infringida en concepto de interpretación errónea, toda vez que la Notificación No. 09307 no actualiza las funciones, cargo, ni el grado de ARIEL RUIZ.

Seguidamente, el recurrente considera transgredido el subpunto 3.2 del Manual Descriptivo de Cargos de la Dirección de Recursos Humanos de la Contraloría General de la República, que establece los factores que deben ser evaluados en la clasificación de cargos de los empleados de esta dependencia estatal. Estos factores son: conocimientos y experiencia adquirida; complejidad de las tarea; guías de procedimiento disponibles; responsabilidad e impacto de errores; suspensión recibida y ejercida; contactos personales; propósito de los contactos; ambiente y exigencias físicas del puesto.

La infracción se explica en los siguientes términos:

> "La norma transcrita se ha violado de forma directa por falta de aplicación ya que la clasificación del cargo de mi cliente no consideró algunos de los aspectos que describe dicha norma, entre ellos el relativo a la complejidad de las tareas y el grado de responsabilidad o impacto de los errores. Es obvio que de haberse ponderado estos factores se hubiera clasificado a mi cliente realmente en el cargo que en la práctica desempeña."

Por último, se dice transgredido el artículo 24 del Reglamento Interno de la Contraloría General de la República, conforme al cual corresponde al superior inmediato de cada servidor, comunicarle por escrito las funciones básicas e instrucciones específicas del cargo a desempeñar.

Se aduce que la autoridad demandada incurrió en errónea interpretación de esta norma reglamentaria, toda vez que la descripción que se hace en el acto impugnado, de las funciones que desempeña ARIEL RUIZ, omite algunas tareas que éste había venido ejecutando en el cargo.

III. INFORME RENDIDO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA

Corre a fojas 24-28 del expediente, la Nota No. 2256-Leg de 17 de noviembre de 1998, contentivo del informe explicativo de conducta suscrito por el Director de Estadística y Censo, autoridad responsable de la emisión del acto impugnado.

Este documento detalla, de manera minuciosa, la metodología utilizada en el Proceso de Clasificación de Cargos al que fueron sometidos los funcionarios de la dependencia estatal, procedimiento que se inició en 1986, fue interrumpido en 1989, y luego reactivado el 18 de mayo de 1995.

En lo que atañe al funcionario ARIEL RUIZ, se señalan las diversas etapas de su proceso evaluativo, que culminó con la clasificación del servidor público, en el cargo de Supervisor de Estadística I Grado 10, el 25 de septiembre de 1997, según Formulario de Notificación 09307.

Se señala además, que el funcionario propuso recursos administrativos contra el acto impugnado, los que luego de analizados cuidadosamente, fueron rechazados, por considerar que la clasificación y tareas descritas para el cargo de ARIEL RUIZ, eran inherentes al cargo de Supervisor de Estadística I Grado 10.

Por ende concluye, que no se ha violentado derecho alguno al recurrente, dado que en su caso se cumplieron todas las etapas y procedimientos, contemplados en el Sistema de Clasificación de Cargos.

IV. OPINION DE LA PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACION

La representante del Ministerio Público, a través de Vista Fiscal No.509 de 22 de diciembre de 1998, visible a fojas 29-44 del expediente, solicitó a esta Superioridad que se negara la pretensión de la demandante, por considerar que el acto impugnado, no es violatorio del ordenamiento legal.

La colaboradora de la instancia acoge los planteamientos de la autoridad responsable del acto demandado, en el sentido de que la clasificación y descrip-

ción del cargo impugnado, fue el resultado de un cuidadoso proceso en que participó el demandante, por lo que mal puede aseverar que fueron conculcados sus derechos subjetivos.

Al examinar los cargos de violación endilgados, destacó que el artículo 8 de la Ley No. 32 de 8 de noviembre de 1984 que se dice infringido, constituye el fundamento legal del Proceso de Clasificación de Cargos llevado a cabo por la Contraloría General de la República, siendo precisamente por mandato de aquella norma, que se inició el proceso de clasificación.

Desestima los restantes cargos de ilegalidad presentados, al señalar que el acto recurrido es congruente con los resultados del proceso de Clasificación de Cargos del personal no directivo de la Contraloría General de la República, y que la descripción del cargo se ajusta a las funciones que desempeña el demandante.

La señora Procuradora manifiesta finalmente, que el proceso que nos ocupa no se origina en la clasificación o descripción del cargo de ARIEL RUIZ, sino que se encuentra motivado, como otros presentados con idénticas pretensiones por funcionarios de la Contraloría General de la República, en la circunstancia de que paralelo al proceso de clasificación, la Contraloría había iniciado el trámite de ajuste y equiparación salarial de sus funcionarios, de forma tal que cada cargo y grado, correspondería un salario determinado.

En este contexto sugiere, que la disconformidad de los servidores públicos se produce por razón del salario que les corresponde en virtud del cargo clasificado, y no a la descripción del cargo asignado, o las funciones inherentes al mismo.

V. EXAMEN DE LA SALA TERCERA

Una vez surtidos todos los trámites pertinentes, se procede a decidir sobre el mérito de la demanda.

Es preciso señalar en primer término, que según consta en la documentación remitida por la Contraloría General de la República (fojas 07-09 del expediente administrativo), el funcionario ARIEL RUIZ colaboró en la descripción de sus funciones en el cargo, aceptando sin objeciones, las tareas que quedaron consignadas en el Formulario de Actualización de Descripción del Cargo, presentado para su revisión por la Contraloría General de la República, durante el proceso de clasificación. Nótese que incluso se le brindó la oportunidad de consignar en un renglón específicamente destinado para ello, si hacían falta tareas, lo que no hizo, marcando el renglón que establecía que las funciones descritas correspondían al cargo, para luego de notificada la clasificación, impugnar la misma, argumentando que se omitieron tareas y que ha sido desfavorablemente clasificado.

Esta circunstancia, parece confirmar el planteamiento de la Procuraduría de la Administración, en el sentido de que la motivación de este proceso radica en la consecuencia económica de la clasificación, y no en el aspecto objetivo del acto recurrido, que asigna y describe las tareas del funcionario clasificado. Así también parece admitirlo el recurrente, cuando en su alegato final manifiesta: "la clasificación en un grado y categoría superior significa un ajuste económico salarial ..." (cfr. 62 del expediente)

No obstante, y siendo que la acción presentada, cualesquiera sus motivaciones, es formalmente viable, el Tribunal procede al análisis de rigor a los cargos de ilegalidad presentados, y al efecto hemos de señalar lo siguiente:

El primer cargo de ilegalidad, dice relación con la supuesta violación del artículo 8 de la Ley 32 de 1984. Por confrontada la norma, con el argumento del demandante, la Sala comparte el criterio externado por la Procuraduría de la Administración, en el sentido de que esta excerta legal sólo establece los

parámetros para llevar a cabo la escogencia y movimiento de personal idóneo en la Contraloría General de la República, y constituye el fundamento jurídico del Proceso de Clasificación de Cargos, por lo que no representa una conculcación a los derechos del demandante.

En relación a la supuesta violación del artículo 1 de Decreto No. 195 del 17 de septiembre de 1997, que ordena la actualización del sistema de clasificación de cargos del personal no directivo de la Contraloría, la Sala estima procedente negar el cargo invocado, pues contrario a lo señalado por el actor, la Notificación No. 09307 de 25 de septiembre de 1997 sí contiene una descripción y clasificación del cargo de un funcionario no directivo de la Contraloría General, esto es, el señor ARIEL RUIZ, detallando los objetivos y las tareas inherentes al cargo asignado, en forma diáfana y concreta.

De acuerdo a lo anterior, también procede desestimar el cargo de ilegalidad aducido en relación al artículo 24 del Reglamento Interno de la Contraloría General de la República, que dispone la obligatoriedad, para el superior inmediato de un servidor público, de suministrarle por escrito, las funciones básicas e instrucciones del cargo a desempeñar.

Sobre el particular, la Corte advierte que el acto impugnado se ajusta a la exigencia reglamentaria, toda vez que se le comunicó por escrito, a ARIEL RUIZ, las tareas y labores que le correspondería desempeñar en ejercicio del cargo de Supervisor de Estadística I (cfr. fojas 15-16 del expediente)

Finalmente, en lo que concierne a la alegada violación del subpunto 3.2 del Manual para la aplicación del Sistema de Clasificación de Cargos, mismo que establece la metodología a seguir en la evaluación de cada funcionario para clasificar el cargo y grado que le corresponde, la Sala conceptúa que no se ha producido la infracción alegada, puesto que las constancias que se adjuntaron al expediente principal, revelan que el ente demandado calificó al señor ARIEL RUIZ conforme a los criterios, método y sistema de ponderación legalmente establecidos, asignándole a cada aspecto evaluado, un porcentaje acorde con los parámetros previstos en dicha disposición, concluyéndose que el título, objetivo y tareas que desempeñaba el señor RUIZ correspondían al cargo de Supervisor de Estadística I, por lo que descartamos la violación aducida.

La Corte estima oportuno reiterar, antes de concluir su examen de legalidad, que los elementos probatorios que obran en el expediente, relacionados con el Proceso de Clasificación de Cargos adelantado por la Contraloría General de la República, son constancia de que la información que sirvió de base para la clasificación y descripción del cargo impugnado, fue suministrada por el propio funcionario clasificado, ARIEL RUIZ, al completar el Formulario de Actualización, por lo que mal podía aducirse en esta etapa, que no le fueron tomadas en consideración sus funciones, al momento de clasificarlo.

Similar observación se dejó consignada, en la sentencia de 13 de diciembre de 1999, en que este Tribunal resolvió un cúmulo de procesos provenientes de la Contraloría General de la Nación, por razón de las clasificaciones realizadas a sus funcionarios.

Al desestimarse los cargos de ilegalidad aducidos, procede negar la pretensión invocada por el recurrente.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, el Acto de Notificación 09307 de 25 de septiembre de 1997, dictado por el Director de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA EN REPRESENTACIÓN DE STELLA EVANS, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTIFICACIÓN NO. 09225 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, REALIZADA POR EL DIRECTOR DE ESTADÍSTICA Y CENSO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Carlos Ayala, actuando en representación de STELLA EVANS, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el acto contenido en la Notificación No. 09225 de 25 de septiembre de 1997, realizado por el Director de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, y para que se hagan otras declaraciones.

I. EL ACTO IMPUGNADO

Mediante el acto impugnado, la Contraloría General de la República informó a la funcionaria STELLA EVANS, que en virtud de los resultados del Proceso de Clasificación de Cargos efectuado por dicha entidad, le había sido asignado el cargo de SUPERVISOR DE CAPTURA DE INFORMACION ESTADISTICA GRADO 9, en la Dirección de Estadística y Censo, siendo el objetivo de este cargo: supervisar el levantamiento y diagramación de textos, publicaciones estadísticas, formularios y cuestionarios censales; supervisar la captura de información procedentes de censos, encuestas, series estadísticas y registros administrativos.

El Acto de Notificación 09225 contenía además, un listado de las tareas que debía desempeñar la funcionaria STELLA EVANS, en el ejercicio de su cargo. (f. 1 del expediente).

II. CARGOS DE ILEGALIDAD DEL RECURRENTE

a) La pretensión del demandante

El punto medular de la impugnación sostiene, que al momento de clasificarse la posición de la funcionaria STELLA EVANS, no se tomaron en cuenta algunas tareas que desempeñaba, ni sus funciones fueron equiparadas a la de otros funcionarios que realizan labores semejantes dentro de la Institución, por lo que se violaron normas que rigen el proceso de clasificación de cargos.

Agrega el actor, que las autoridades de la Contraloría General de la Nación no evaluaron correctamente las tareas realizadas por la funcionaria, lo que trajo como consecuencia que no fueran conscientes de la realidad de su labor y por ende, le clasificaran en un cargo y grado inferior al que le correspondía.

b) Cargos de ilegalidad

Los cargos de ilegalidad que sustentan el recurso, son los siguientes:

En primer término, se dice violado en concepto de interpretación errónea, el artículo 8 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, que es del tenor siguiente:

"Artículo 8: La selección y promoción del personal de la Contraloría General se realizará tomando en consideración los méritos personales

> y profesionales. Para los fines señalados en este artículo, se instituirá en el Reglamento Interno de dicho organismo un sistema de clasificación de cargos y uno de selección que garantice que el escogido es idóneo para desempeñar el cargo respectivo ..."

La infracción se produce, en concepto del demandante, al describir el cargo de STELLA EVANS y asignarle un grado específico, sin considerar funciones que ésta realiza, y que le colocarían en una posición superior.

La segunda disposición que se dice infringida, recae en el artículo primero del Decreto No. 195 del 17 de septiembre de 1997, en virtud del cual se ordena la actualización e institución, del Sistema de Clasificación de Cargos del personal no directivo de la Contraloría General de la República.

El actor sostiene, que la norma resulta transgredida en concepto de interpretación errónea, toda vez que la Notificación No. 09225 no actualiza las funciones, cargo, ni el grado de STELLA EVANS.

Seguidamente, el recurrente considera transgredido el subpunto 3.2 del Manual Descriptivo de Cargos de la Dirección de Recursos Humanos de la Contraloría General de la República, que establece los factores que deben ser evaluados en la clasificación de cargos de los empleados de esta dependencia estatal. Estos factores son: conocimientos y experiencia adquirida; complejidad de las tarea; guías de procedimiento disponibles; responsabilidad e impacto de errores; suspensión recibida y ejercida; contactos personales; propósito de los contactos; ambiente y exigencias físicas del puesto.

La infracción se explica en los siguientes términos:

> "La norma transcrita se ha violado de forma directa por falta de aplicación ya que la clasificación del cargo de mi cliente no consideró algunos de los aspectos que describe dicha norma, entre ellos el relativo a la complejidad de las tareas y el grado de responsabilidad o impacto de los errores. Es obvio que de haberse ponderado estos factores se hubiera clasificado a mi cliente realmente en el cargo que en la práctica desempeña."

Por último, se dice violado el artículo 24 del Reglamento Interno de la Contraloría General de la República, conforme al cual corresponde al superior inmediato de cada servidor, comunicarle por escrito las funciones básicas e instrucciones específicas del cargo a desempeñar.

Se aduce que la autoridad demandada incurrió en errónea interpretación de esta norma reglamentaria, toda vez que la descripción que se hace en el acto impugnado, de las funciones que desempeña STELLA EVANS, omite algunas tareas que ésta había venido ejecutando en el cargo.

III. INFORME RENDIDO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA

Corre a fojas 13-17 del expediente, la Nota No. 2155-Leg de 17 de septiembre de 1998, contentiva del informe explicativo de conducta suscrito por el Director de Estadística y Censo, autoridad responsable de la emisión del acto impugnado.

Este documento detalla, de manera minuciosa, la metodología utilizada en el Proceso de Clasificación de Cargos al que fueron sometidos los funcionarios de la dependencia estatal, procedimiento que se inició en 1986, fue interrumpido en 1989, y luego reactivado el 18 de mayo de 1995.

En lo que atañe a la funcionaria STELLA EVANS, se señalan las diversas etapas de su proceso evaluativo, que culminó con la clasificación de la servidora pública, en el cargo de Supervisor de Captura de Información Estadística, el 25 de septiembre de 1997, según Formulario de Notificación 09225.

Señala además, que la funcionaria propuso recursos administrativos contra el acto impugnado, los que luego de analizados cuidadosamente, fueron rechazados, por considerar que la clasificación y tareas descritas para el cargo de STELLA EVANS, eran inherentes al cargo de Supervisor de Captura de Información Estadística Grado 9.

Por ende concluye, que no se ha violentado derecho alguno a la recurrente, dado que en su caso se cumplieron todas las etapas y procedimientos, contemplados en el Sistema de Clasificación de Cargos.

IV. OPINION DE LA PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACION

La representante del Ministerio Público, a través de Vista Fiscal No. 472 de 30 de noviembre de 1998, visible a fojas 45-61 del expediente, solicitó a esta Superioridad que se negara la pretensión de la demandante, por considerar que el acto impugnado, no es violatorio del ordenamiento legal.

La colaboradora de la instancia acoge los planteamientos de la autoridad responsable del acto demandado, en el sentido de que la clasificación y descripción del cargo impugnado, fue el resultado de un cuidadoso proceso en que participó la demandante, por lo que mal puede aseverar que fueron conculcados sus derechos subjetivos.

Al examinar los cargos de violación endilgados, destacó que el artículo 8 de la Ley No. 32 de 8 de noviembre de 1984 que se dice infringido, constituye el fundamento legal del Proceso de Clasificación de Cargos llevado a cabo por la Contraloría General de la República, siendo precisamente por mandato de aquella norma, que se inició el proceso de clasificación.

Desestima los restantes cargos de ilegalidad presentados, al señalar que el acto recurrido es congruente con los resultados del proceso de Clasificación de Cargos del personal no directivo de la Contraloría General de la República, y que la descripción del cargo se ajusta a las funciones que desempeña la demandante.

La señora Procuradora manifiesta finalmente, que el proceso que nos ocupa no se origina en la clasificación o descripción del cargo de STELLA EVANS, sino que se encuentra motivado, como otros presentados con idénticas pretensiones por funcionarios de la Contraloría General de la República, en la circunstancia de que paralelo al proceso de clasificación, la Contraloría había iniciado el trámite de ajuste y equiparación salarial de sus funcionarios, de forma tal que a cada cargo y grado, correspondería un salario determinado.

En este contexto sugiere, que la disconformidad de los servidores públicos se produce por razón del salario que les corresponde en virtud del cargo clasificado, y no a la descripción del cargo asignado, o las funciones inherentes al mismo.

V. EXAMEN DE LA SALA TERCERA

Una vez surtidos todos los trámites pertinentes, se procede a decidir sobre el mérito de la demanda.

Es preciso señalar en primer término, que según consta en la documentación remitida por la Contraloría General de la República (fojas 1-3 del expediente administrativo), concretamente en el Formulario de Actualización de Descripción del Cargo presentado para la revisión de cada funcionario, por la Contraloría General de la República, la señora STELLA EVANS colaboró en la descripción de sus funciones en el cargo, añadiendo las tareas que hacían falta en dicha descripción, observaciones que fueron aceptadas por sus evaluadores, arribando a la conclusión de que el cargo debía ser clasificado como Supervisor de Captura de Información Estadística.

Pese a ello, luego de notificada la clasificación, impugna la misma, argumentando que se omitieron tareas y que ha sido desfavorablemente clasificada.

Esta circunstancia, parece confirmar el planteamiento de la Procuraduría de la Administración, en el sentido de que la motivación de este proceso radica en la consecuencia económica de la clasificación, y no en el aspecto objetivo del acto recurrido, que asigna y describe las tareas de la funcionaria clasificada. Así también parece admitirlo la recurrente, cuando en su alegato final manifiesta: "la clasificación en un grado y categoría superior significa un ajuste económico salarial ..." (cfr. 78 del expediente)

No obstante, y siendo que la acción presentada, cualesquiera sus motivaciones, es formalmente viable, el Tribunal procede al análisis de rigor de los cargos de ilegalidad presentados, y al efecto hemos de señalar lo siguiente:

El primer cargo de ilegalidad, dice relación con la supuesta violación del artículo 8 de la Ley 32 de 1984. Por confrontada la norma, con el argumento del demandante, la Sala comparte el criterio externado por la Procuraduría de la Administración, en el sentido de que esta excerta legal sólo establece los parámetros para llevar a cabo la escogencia y movimiento de personal idóneo en la Contraloría General de la República, y constituye el fundamento jurídico del Proceso de Clasificación de Cargos, por lo que no representa una conculcación a los derechos del demandante.

En relación a la supuesta violación del artículo 1 de Decreto No. 195 del 17 de septiembre de 1997, que ordena la actualización del sistema de clasificación de cargos del personal no directivo de la Contraloría, la Sala estima procedente negar el cargo invocado, pues contrario a lo señalado por el actor, la Notificación No. 09225 de 25 de septiembre de 1997 sí contiene una descripción y clasificación del cargo de un funcionario no directivo de la Contraloría General, esto es, la señora STELLA EVANS, detallando los objetivos y las tareas inherentes al cargo asignado, en forma diáfana y concreta.

De acuerdo a lo anterior, también procede desestimar el cargo de ilegalidad aducido en relación al artículo 24 del Reglamento Interno de la Contraloría General de la República, que dispone la obligatoriedad, para el superior inmediato de un servidor público, de suministrarle por escrito, las funciones básicas e instrucciones del cargo a desempeñar.

Sobre el particular, la Corte advierte que el acto impugnado se ajusta a la exigencia reglamentaria, toda vez que se le comunicó por escrito, a STELLA EVANS, las tareas y labores que le correspondería desempeñar en ejercicio del cargo de Supervisor de Captura de Información Estadística (cfr. foja 1 del expediente)

Finalmente, en lo que concierne a la alegada violación del subpunto 3.2 del Manual para la aplicación del Sistema de Clasificación de Cargos, mismo que establece la metodología a seguir en la evaluación de cada funcionario para clasificar el cargo y grado que le corresponde, la Sala conceptúa que no se ha producido la infracción alegada.

Ello obedece, a que las constancias que se adjuntaron al expediente principal, revelan que el ente demandado calificó a la señora STELLA EVANS conforme a los criterios, método y sistema de ponderación legalmente establecidos, asignándole a cada aspecto evaluado, un porcentaje acorde con los parámetros previstos en dicha disposición, concluyéndose que el título, objetivo y tareas que desempeñaba la señora STELLA EVANS, correspondían al cargo de Supervisor de Captura de Información Estadística, y que la complejidad y responsabilidad del cargo, habían sido efectivamente evaluadas, para los efectos de la clasificación.

De igual forma se determinó, que las tareas que según la recurrente no le habían sido tomadas en cuenta, sí habían quedado comprendidas dentro de la

descripción del cargo, razón por la cual no había lugar a la impugnación.

Por estas razones, descartamos la violación aducida.

Sin perjuicio del análisis que precede, hemos advertido que la Contraloría General de la República tiene proyectado una futura reestructuración del Departamento de Estadística y Censo, lo que implica una eventual reevaluación del cargo de STELLA EVANS (cfr. foja 73 del expediente), en la que tendrá nuevamente oportunidad de colaborar con el proceso evaluativo, y hacer las recomendaciones u objeciones que estime procedentes.

La Corte estima oportuno reiterar, antes de concluir su examen de legalidad, que los elementos probatorios que obran en el expediente, relacionados con el Proceso de Clasificación de Cargos adelantado por la Contraloría General de la República, son constancia de que la información que sirvió de base para la clasificación y descripción del cargo impugnado, fue suministrada por la propia funcionaria clasificada, STELLA EVANS, al completar el Formulario de Actualización para Supervisor de Captura de Información Estadística, por lo que mal podía aducirse en esta etapa, que no le fueron tomadas en consideración sus funciones, al momento de clasificarla.

Similar observación se dejó consignada, en la sentencia de 13 de diciembre de 1999, en que este Tribunal resolvió un cúmulo de procesos provenientes de la Contraloría General de la Nación, por razón de las clasificaciones realizadas a sus funcionarios.

Al desestimarse los cargos de ilegalidad aducidos, procede negar la pretensión invocada por el recurrente.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, el Acto de Notificación 09225 de 25 de septiembre de 1997, dictado por el Director de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA EN REPRESENTACIÓN DE GLADYS FIGUEROA DE ARONATEGUI, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTIFICACIÓN NO. 50641 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, REALIZADA POR EL DIRECTOR NACIONAL DE CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Carlos Ayala, actuando en representación de GLADYS FIGUEROA DE ARONATEGUI, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el acto contenido en la Notificación No. 50641 de 25 de septiembre de 1997, realizado por el Director Nacional de Control Fiscal, de la Contraloría General de la República, y para que se hagan otras declaraciones.

I. EL ACTO IMPUGNADO

Mediante el acto impugnado, la Contraloría General de la República informó a la funcionaria GLADYS FIGUEROA, que en virtud de los resultados del Proceso de Clasificación de Cargos efectuado por dicha entidad, le había sido asignado el cargo de FISCALIZADOR II GRADO 9, en la Dirección de Nacional de Control Fiscal de dicha entidad, siendo el objetivo de este cargo: fiscalizar el manejo de fondos y bienes públicos a fin de que los mismos se ajusten a las dispsosciones administrativas, fiscales y legales que rigen la materia.

El Acto de Notificación 50641 contenía además, un listado de las tareas que debía desempeñar la funcionaria GLADYS DE ARONATEGUI, en el ejercicio de su cargo. (fs. 20-21 del expediente).

II. CARGOS DE ILEGALIDAD DEL RECURRENTE

a) La pretensión del demandante

El punto medular de la impugnación sostiene, que al momento de clasificarse la posición de la funcionaria GLADYS DE ARONATEGUI, no se tomaron en cuenta algunas tareas que desempeñaba, ni sus funciones fueron equiparadas a la de otros funcionarios que realizan labores semejantes dentro de la Institución, por lo que se violaron normas que rigen el proceso de clasificación de cargos.

Agrega el actor, que las autoridades de la Contraloría General de la Nación no evaluaron correctamente las tareas realizadas por la funcionaria, lo que trajo como consecuencia que no fueran conscientes de la realidad de su labor y por ende, le clasificaran en un cargo y grado inferior al que le correspondía.

b) Cargos de ilegalidad

Los cargos de ilegalidad que sustentan el recurso, son los siguientes:

En primer término, se dice violado en concepto de interpretación errónea, el artículo 8 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, que es del tenor siguiente:

> "Artículo 8: La selección y promoción del personal de la Contraloría General se realizará tomando en consideración los méritos personales y profesionales. Para los fines señalados en este artículo, se instituirá en el Reglamento Interno de dicho organismo un sistema de clasificación de cargos y uno de selección que garantice que el escogido es idóneo para desempeñar el cargo respectivo ..."

La infracción se produce, en concepto del demandante, al describir el cargo de GLADYS DE ARONATEGUI y asignarle un grado específico, sin considerar funciones que ésta realiza, y que la colocarían en la posición de FISCALIZADOR III.

La segunda disposición que se dice infringida, recae en el artículo primero del Decreto No. 195 del 17 de septiembre de 1997, en virtud del cual se ordena la actualización e institución, del Sistema de Clasificación de Cargos del personal no directivo de la Contraloría General de la República.

El actor sostiene, que la norma resulta transgredida en concepto de interpretación errónea, toda vez que la Notificación No. 50641 no actualiza las funciones, cargo, ni el grado de GLADYS DE ARONATEGUI.

Seguidamente, el recurrente considera transgredido el subpunto 3.2 del Manual Descriptivo de Cargos de la Dirección de Recursos Humanos de la Contraloría General de la República, que establece los factores que deben ser evaluados en la clasificación de cargos de los empleados de esta dependencia estatal. Estos factores son: conocimientos y experiencia adquirida; complejidad de las tarea; guías de procedimiento disponibles; responsabilidad e impacto de errores; suspensión recibida y ejercida; contactos personales; propósito de los contactos; ambiente y exigencias físicas del puesto.

La infracción se explica en los siguientes términos:

"La norma transcrita se ha violado de forma directa por falta de aplicación ya que la clasificación del cargo de mi cliente no consideró algunos de los aspectos que describe dicha norma, entre ellos el relativo a la complejidad de las tareas y el grado de responsabilidad o impacto de los errores. Es obvio que de haberse ponderado estos factores se hubiera clasificado a mi cliente realmente en el cargo que en la práctica desempeña."

Por último, se dice violado el artículo 24 del Reglamento Interno de la Contraloría General de la República, conforme al cual corresponde al superior inmediato de cada servidor, comunicarle por escrito las funciones básicas e instrucciones específicas del cargo a desempeñar.

Se aduce que la autoridad demandada incurrió en errónea interpretación de esta norma reglamentaria, toda vez que la descripción que se hace en el acto impugnado, de las funciones que desempeña GLADYS DE ARONATEGUI, omite algunas tareas que ésta había venido ejecutando en el cargo.

III. INFORME RENDIDO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA

Corre a fojas 25-29 del expediente, la Nota No. 2267-Leg de 24 de noviembre de 1998, contentiva del informe explicativo de conducta suscrito por el Director Nacional de Control Fiscal, autoridad responsable de la emisión del acto impugnado.

Este documento detalla, de manera minuciosa, la metodología utilizada en el Proceso de Clasificación de Cargos al que fueron sometidos los funcionarios de la dependencia estatal, procedimiento que se inició en 1986, fue interrumpido en 1989, y luego reactivado el 18 de mayo de 1995.

En lo que atañe a la funcionaria GLADYS FIGUEROA DE ARONATEGUI, se señalan las diversas etapas de su proceso evaluativo, que culminó con la clasificación de la servidora pública, en el cargo de FISCALIZADOR II GRADO 9, el 25 de septiembre de 1997, según Formulario de Notificación 50641.

Señala además, que la funcionaria propuso recursos administrativos contra el acto impugnado, los que luego de analizados cuidadosamente, fueron rechazados, por considerar que la clasificación y tareas descritas para el cargo de GLADYS DE ARONATEGUI, eran inherentes al cargo de FISCALIADOR II.

Por ende concluye, que no se ha violentado derecho alguno a la recurrente, dado que en su caso se cumplieron todas las etapas y procedimientos, contemplados en el Sistema de Clasificación de Cargos.

IV. OPINION DE LA PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACION

La representante del Ministerio Público, a través de Vista Fiscal No.480 de 3 de diciembre de 1998, visible a fojas 30-43 del expediente, solicitó a esta Superioridad que se negara la pretensión de la demandante, por considerar que el acto impugnado, no es violatorio del ordenamiento legal.

La colaboradora de la instancia acoge los planteamientos de la autoridad responsable del acto demandado, en el sentido de que la clasificación y descripción del cargo impugnado, fue el resultado de un cuidadoso proceso en que participó la demandante, por lo que mal puede aseverar que fueron conculcados sus derechos subjetivos.

Al examinar los cargos de violación endilgados, destacó que el artículo 8 de la Ley No. 32 de 8 de noviembre de 1984 que se dice infringido, constituye el fundamento legal del Proceso de Clasificación de Cargos llevado a cabo por la Contraloría General de la República, siendo precisamente por mandato de aquella

norma, que se inició el proceso de clasificación.

Desestima los restantes cargos de ilegalidad presentados, al señalar que el acto recurrido es congruente con los resultados del proceso de Clasificación de Cargos del personal no directivo de la Contraloría General de la República, y que la descripción del cargo se ajusta a las funciones que desempeña la demandante.

La señora Procuradora manifiesta finalmente, que el proceso que nos ocupa no se origina en la clasificación o descripción del cargo de GLADYS DE ARONATEGUI, sino que se encuentra motivado, como otros presentados con idénticas pretensiones por funcionarios de la Contraloría General de la República, en la circunstancia de que paralelo al proceso de clasificación, la Contraloría había iniciado el trámite de ajuste y equiparación salarial de sus funcionarios, de forma tal que a cada cargo y grado, correspondería un salario determinado.

En este contexto sugiere, que la disconformidad de los servidores públicos se produce por razón del salario que les corresponde en virtud del cargo clasificado, y no a la descripción del cargo asignado, o las funciones inherentes al mismo.

V. EXAMEN DE LA SALA TERCERA

Una vez surtidos todos los trámites pertinentes, se procede a decidir sobre el mérito de la demanda.

Es preciso señalar en primer término, que según consta en la documentación remitida por la Contraloría General de la República (fojas 01-05 del expediente administrativo), concretamente en el Formulario de Actualización de Descripción del Cargo presentado para la revisión de cada funcionario, por la Contraloría General de la República, la señora GLADYS DE ARONATEGUI colaboró en la descripción de sus funciones en el cargo. Nótese que incluso se le brindó la oportunidad a la funcionaria, de consignar en un renglón específicamente destinado para ello, si hacían falta tareas, lo que no hizo, manifestándose de acuerdo con el contenido de dicho formulario y con las tareas consignadas en dicha descripción, para luego de notificada la clasificación, impugnar la misma, argumentando que se omitieron tareas y que ha sido desfavorablemente clasificada.

Esta impugnación fue rechazada en la etapa gubernativa, considerándose que no había lugar a colocar a la señora DE ARONATEGUI en el cargo de FISCALIZADOR III, toda vez que la funcionaria no había adicionaba tareas distintas a las descritas en el cargo asignado.

Esta circunstancia, parece confirmar el planteamiento de la Procuraduría de la Administración, en el sentido de que la motivación de este proceso radica en la consecuencia económica de la clasificación, y no en el aspecto objetivo del acto recurrido, que asigna y describe las tareas de la funcionaria clasificada.

Así también parece admitirlo la recurrente, cuando en su alegato final manifiesta: "la clasificación en un grado y categoría superior significa un ajuste económico salarial ..." (cfr. 60 del expediente)

No obstante, y siendo que la acción presentada, cualesquiera sus motivaciones, es formalmente viable, el Tribunal procede al análisis de rigor de los cargos de ilegalidad presentados, y al efecto hemos de señalar lo siguiente:

El primer cargo de ilegalidad, dice relación con la supuesta violación del artículo 8 de la Ley 32 de 1984. Por confrontada la norma, con el argumento del demandante, la Sala comparte el criterio externado por la Procuraduría de la Administración, en el sentido de que esta excerta legal sólo establece los parámetros para llevar a cabo la escogencia y movimiento de personal idóneo en la Contraloría General de la República, y constituye el fundamento jurídico del Proceso de Clasificación de Cargos, por lo que no representa una conculcación a

los derechos del demandante.

En relación a la supuesta violación del artículo 1 de Decreto No. 195 del 17 de septiembre de 1997, que ordena la actualización del sistema de clasificación de cargos del personal no directivo de la Contraloría, la Sala estima procedente negar el cargo invocado, pues contrario a lo señalado por el actor, la Notificación No. 50641 de 25 de septiembre de 1997 sí contiene una descripción y clasificación del cargo de un funcionario no directivo de la Contraloría General, esto es, la señora GLADYS DE ARONATEGUI, detallando los objetivos y las tareas inherentes al cargo asignado, en forma diáfana y concreta.

De acuerdo a lo anterior, también procede desestimar el cargo de ilegalidad aducido en relación al artículo 24 del Reglamento Interno de la Contraloría General de la República, que dispone la obligatoriedad, para el superior inmediato de un servidor público, de suministrarle por escrito, las funciones básicas e instrucciones del cargo a desempeñar.

Sobre el particular, la Corte advierte que el acto impugnado se ajusta a la exigencia reglamentaria, toda vez que se le comunicó por escrito, a GLADYS DE ARONATEGUI, las tareas y labores que le correspondería desempeñar en ejercicio del cargo de FISCALIZADOR II (cfr. fojas 20-21 del expediente)

Finalmente, en lo que concierne a la alegada violación del subpunto 3.2 del Manual para la aplicación del Sistema de Clasificación de Cargos, mismo que establece la metodología a seguir en la evaluación de cada funcionario para clasificar el cargo y grado que le corresponde, la Sala conceptúa que no se ha producido la infracción alegada.

Ello obedece, a que las constancias que se adjuntaron al expediente principal, revelan que el ente demandado calificó a la señora DE ARONATEGUI conforme a los criterios, método y sistema de ponderación legalmente establecidos, asignándole a cada aspecto evaluado, un porcentaje acorde con los parámetros previstos en dicha disposición, concluyéndose que el título, objetivo y tareas que desempeñaba la señora GLADYS DE ARONATEGUI, correspondían al cargo de Fiscalizador II, y que la complejidad y responsabilidad del cargo, habían sido efectivamente evaluadas, para los efectos de la clasificación.

Por estas razones, descartamos la violación aducida.

La Corte estima oportuno reiterar, antes de concluir su examen de legalidad, que los elementos probatorios que obran en el expediente, relacionados con el Proceso de Clasificación de Cargos adelantado por la Contraloría General de la República, son constancia de que la información que sirvió de base para la clasificación y descripción del cargo impugnado, fue suministrada por la propia funcionaria clasificada, al completar el Formulario de Actualización para el cargo Fiscalizador II, sin que en las etapas posteriores se hayan adicionado tareas no descritas en el perfil de dicho cargo, y consignadas en el acto de Notificación 50641.

Cabe agregar, que en sentencia de 13 de diciembre de 1999, este Tribunal resolvió, en igual sentido, un cúmulo de procesos provenientes de la Contraloría General de la Nación, por razón de las clasificaciones realizadas a sus funcionarios.

Al desestimarse los cargos de ilegalidad aducidos, procede negar la pretensión invocada por el recurrente.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, el Acto de Notificación 50641 de 25 de septiembre de 1997, dictado por el Director Nacional de Control Fiscal de la Contraloría General de la República.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA EN REPRESENTACIÓN DE MARLENIS DE QUIÑONES, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTIFICACIÓN NO. 50330 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, REALIZADA POR EL DIRECTOR NACIONAL DE CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DEL AÑO DOSMIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Carlos Ayala, actuando en representación de MARLENIS DE QUIÑONES, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el acto contenido en la Notificación No. 50330 de 25 de septiembre de 1997, realizado por el Director Nacional de Control Fiscal, de la Contraloría General de la República, y para que se hagan otras declaraciones.

I. EL ACTO IMPUGNADO

Mediante el acto impugnado, la Contraloría General de la República informó a la funcionaria MARLENIS DE QUIÑONES, que en virtud de los resultados del Proceso de Clasificación de Cargos efectuado por dicha entidad, le había sido asignado el cargo de SECRETARIA EJECUTIVA I GRADO 9, en la Dirección de Nacional de Control Fiscal de dicha entidad, siendo el objetivo de este cargo: responder por la labor secretarial en un Departamento compuesto de varias Secciones formalmente establecidas, las cuales cuentan con secretarias de menor nivel o en las oficinas que mantiene la Contraloría General en la sede principal (Panamá) de otras instituciones públicas.

El Acto de Notificación 50330 contenía además, un listado de las tareas que debía desempeñar la funcionaria MARLENIS DE QUIÑONES, en el ejercicio de su cargo. (fs. 1-2 del expediente).

II. CARGOS DE ILEGALIDAD DEL RECURRENTE

a) La pretensión del demandante

El punto medular de la impugnación sostiene, que al momento de clasificarse la posición de la funcionaria MARLENIS DE QUIÑONES, no se tomaron en cuenta algunas tareas que desempeñaba, ni sus funciones fueron equiparadas a la de otros funcionarios que realizan labores semejantes dentro de la Institución, por lo que se violaron normas que rigen el proceso de clasificación de cargos.

Agrega el actor, que las autoridades de la Contraloría General de la Nación no evaluaron correctamente las tareas realizadas por la funcionaria, lo que trajo como consecuencia que no fueran conscientes de la realidad de su labor y por ende, le clasificaran en un cargo y grado inferior al que le correspondía.

b) Cargos de ilegalidad

Los cargos de ilegalidad que sustentan el recurso, son los siguientes:

En primer término, se dice violado en concepto de interpretación errónea, el artículo 8 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, que es del tenor

siguiente:

> "Artículo 8: La selección y promoción del personal de la Contraloría General se realizará tomando en consideración los méritos personales y profesionales. Para los fines señalados en este artículo, se instituirá en el Reglamento Interno de dicho organismo un sistema de clasificación de cargos y uno de selección que garantice que el escogido es idóneo para desempeñar el cargo respectivo ..."

La infracción se produce, en concepto del demandante, al describir el cargo de MARLENIS DE QUIÑONES y asignarle un grado específico, sin considerar funciones que ésta realiza, y que la colocarían en la posición de Secretaria Ejecutiva II.

La segunda disposición que se dice infringida, recae en el artículo primero del Decreto No. 195 del 17 de septiembre de 1997, en virtud del cual se ordena la actualización e institución, del Sistema de Clasificación de Cargos del personal no directivo de la Contraloría General de la República.

El actor sostiene, que la norma resulta transgredida en concepto de interpretación errónea, toda vez que la Notificación No. 50330 no actualiza las funciones, cargo, ni el grado de MARLENIS DE QUIÑONES.

Seguidamente, el recurrente considera transgredido el subpunto 3.2 del Manual Descriptivo de Cargos de la Dirección de Recursos Humanos de la Contraloría General de la República, que establece los factores que deben ser evaluados en la clasificación de cargos de los empleados de esta dependencia estatal. Estos factores son: conocimientos y experiencia adquirida; complejidad de las tarea; guías de procedimiento disponibles; responsabilidad e impacto de errores; suspensión recibida y ejercida; contactos personales; propósito de los contactos; ambiente y exigencias físicas del puesto.

La infracción se explica en los siguientes términos:

> "La norma transcrita se ha violado de forma directa por falta de aplicación ya que la clasificación del cargo de mi cliente no consideró algunos de los aspectos que describe dicha norma, entre ellos el relativo a la complejidad de las tareas y el grado de responsabilidad o impacto de los errores. Es obvio que de haberse ponderado estos factores se hubiera clasificado a mi cliente realmente en el cargo que en la práctica desempeña."

Por último, se dice violado el artículo 24 del Reglamento Interno de la Contraloría General de la República, conforme al cual corresponde al superior inmediato de cada servidor, comunicarle por escrito las funciones básicas e instrucciones específicas del cargo a desempeñar.

Se aduce que la autoridad demandada incurrió en errónea interpretación de esta norma reglamentaria, toda vez que la descripción que se hace en el acto impugnado, de las funciones que desempeña MARLENIS DE QUIÑONES, omite algunas tareas que ésta había venido ejecutando en el cargo.

III. INFORME RENDIDO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA

Corre a fojas 14-18 del expediente, la Nota No. 2159-Leg de 17 de septiembre de 1998, contentiva del informe explicativo de conducta suscrito por el Director Nacional de Control Fiscal, autoridad responsable de la emisión del acto impugnado.

Este documento detalla, de manera minuciosa, la metodología utilizada en el Proceso de Clasificación de Cargos al que fueron sometidos los funcionarios de la dependencia estatal, procedimiento que se inició en 1986, fue interrumpido en 1989, y luego reactivado el 18 de mayo de 1995.

En lo que atañe a la funcionaria MARLENIS DE QUIÑONES, se señalan las diversas etapas de su proceso evaluativo, que culminó con la clasificación de la servidora pública, en el cargo de Secretaria Ejecutiva I Grado 9, el 25 de septiembre de 1997, según Formulario de Notificación 50330.

Señala además, que la funcionaria propuso recursos administrativos contra el acto impugnado, los que luego de analizados cuidadosamente, fueron rechazados, por considerar que la clasificación y tareas descritas para el cargo de MARLENIS DE QUIÑONES, eran inherentes al cargo de Secreataria Ejecutiva I.

Por ende concluye, que no se ha violentado derecho alguno a la recurrente, dado que en su caso se cumplieron todas las etapas y procedimientos, contemplados en el Sistema de Clasificación de Cargos.

IV. OPINION DE LA PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACION

La representante del Ministerio Público, a través de Vista Fiscal No.490 de 3 de diciembre de 1998, visible a fojas 19-32 del expediente, solicitó a esta Superioridad que se negara la pretensión de la demandante, por considerar que el acto impugnado, no es violatorio del ordenamiento legal.

La colaboradora de la instancia acoge los planteamientos de la autoridad responsable del acto demandado, en el sentido de que la clasificación y descripción del cargo impugnado, fue el resultado de un cuidadoso proceso en que participó la demandante, por lo que mal puede aseverar que fueron conculcados sus derechos subjetivos.

Al examinar los cargos de violación endilgados, destacó que el artículo 8 de la Ley No. 32 de 8 de noviembre de 1984 que se dice infringido, constituye el fundamento legal del Proceso de Clasificación de Cargos llevado a cabo por la Contraloría General de la República, siendo precisamente por mandato de aquella norma, que se inició el proceso de clasificación.

Desestima los restantes cargos de ilegalidad presentados, al señalar que el acto recurrido es congruente con los resultados del proceso de Clasificación de Cargos del personal no directivo de la Contraloría General de la República, y que la descripción del cargo se ajusta a las funciones que desempeña la demandante.

La señora Procuradora manifiesta finalmente, que el proceso que nos ocupa no se origina en la clasificación o descripción del cargo de MARLENIS DE QUIÑONES, sino que se encuentra motivado, como otros presentados con idénticas pretensiones por funcionarios de la Contraloría General de la República, en la circunstancia de que paralelo al proceso de clasificación, la Contraloría había iniciado el trámite de ajuste y equiparación salarial de sus funcionarios, de forma tal que a cada cargo y grado, correspondería un salario determinado.

En este contexto sugiere, que la disconformidad de los servidores públicos se produce por razón del salario que les corresponde en virtud del cargo clasificado, y no a la descripción del cargo asignado, o las funciones inherentes al mismo.

V. EXAMEN DE LA SALA TERCERA

Una vez surtidos todos los trámites pertinentes, se procede a decidir sobre el mérito de la demanda.

Es preciso señalar en primer término, que según consta en la documentación remitida por la Contraloría General de la República (fojas 01-03 del expediente administrativo), concretamente en el Formulario de Actualización de Descripción del Cargo presentado para la revisión de cada funcionario, por la Contraloría General de la República, la señora MARLENIS DE QUIÑONES colaboró en la descripción de sus funciones en el cargo, añadiendo dos tareas que a su juicio, hacían

falta en dicha descripción, observaciones fueron tomadas en cuenta por sus evaluadores, aunque haciendo la salvedad que se trataba de tareas propias del cargo de Secretaria Ejecutiva I y no adicionales, por lo que la posición fue efectivamente clasificada como Secretaria Ejecutiva I Grado 9.

Luego de notificada la clasificación, la señora DE QUIÑONES impugna la misma, argumentando que se omitieron tareas y que ha sido desfavorablemente clasificada. Sin embargo, en la etapa de alzada administrativa, el Comité de Apelación consideró que no había lugar a colocar a la señora DE QUIÑONES en el cargo de Secretaria Ejecutiva II, toda vez que la funcionaria no adicionaba tareas distintas a las descritas en el cargo de Secretaria Ejecutiva I. (cfr. f.13 del expediente administrativo)

Esta circunstancia, parece confirmar el planteamiento de la Procuraduría de la Administración, en el sentido de que la motivación de este proceso radica en la consecuencia económica de la clasificación, y no en el aspecto objetivo del acto recurrido, que asigna y describe las tareas de la funcionaria clasificada.

Así también parece admitirlo la recurrente, cuando en su alegato final manifiesta: "la clasificación en un grado y categoría superior significa un ajuste económico salarial ..." (cfr. 49 del expediente)

No obstante, y siendo que la acción presentada, cualesquiera sus motivaciones, es formalmente viable, el Tribunal procede al análisis de rigor de los cargos de ilegalidad presentados, y al efecto hemos de señalar lo siguiente:

El primer cargo de ilegalidad, dice relación con la supuesta violación del artículo 8 de la Ley 32 de 1984. Por confrontada la norma, con el argumento del demandante, la Sala comparte el criterio externado por la Procuraduría de la Administración, en el sentido de que esta excerta legal sólo establece los parámetros para llevar a cabo la escogencia y movimiento de personal idóneo en la Contraloría General de la República, y constituye el fundamento jurídico del Proceso de Clasificación de Cargos, por lo que no representa una conculcación a los derechos del demandante.

En relación a la supuesta violación del artículo 1 de Decreto No. 195 del 17 de septiembre de 1997, que ordena la actualización del sistema de clasificación de cargos del personal no directivo de la Contraloría, la Sala estima procedente negar el cargo invocado, pues contrario a lo señalado por el actor, la Notificación No. 50330 de 25 de septiembre de 1997 sí contiene una descripción y clasificación del cargo de un funcionario no directivo de la Contraloría General, esto es, la señora MARLENIS DE QUIÑONES, detallando los objetivos y las tareas inherentes al cargo asignado, en forma diáfana y concreta.

De acuerdo a lo anterior, también procede desestimar el cargo de ilegalidad aducido en relación al artículo 24 del Reglamento Interno de la Contraloría General de la República, que dispone la obligatoriedad, para el superior inmediato de un servidor público, de suministrarle por escrito, las funciones básicas e instrucciones del cargo a desempeñar.

Sobre el particular, la Corte advierte que el acto impugnado se ajusta a la exigencia reglamentaria, toda vez que se le comunicó por escrito, a MARLENIS DE QUIÑONES, las tareas y labores que le correspondería desempeñar en ejercicio del cargo de SECRETARIA EJECUTIVA I (cfr. fojas 1-2 del expediente)

Finalmente, en lo que concierne a la alegada violación del subpunto 3.2 del Manual para la aplicación del Sistema de Clasificación de Cargos, mismo que establece la metodología a seguir en la evaluación de cada funcionario para clasificar el cargo y grado que le corresponde, la Sala conceptúa que no se ha producido la infracción alegada.

Ello obedece, a que las constancias que se adjuntaron al expediente principal, revelan que el ente demandado calificó a la señora MARLENIS DE

QUIÑONES conforme a los criterios, método y sistema de ponderación legalmente establecidos, asignándole a cada aspecto evaluado, un porcentaje acorde con los parámetros previstos en dicha disposición, concluyéndose que el título, objetivo y tareas que desempeñaba la señora DE QUIÑONES, correspondían al cargo de Secretaria Ejecutiva I, y que la complejidad y responsabilidad del cargo, habían sido efectivamente evaluadas, para los efectos de la clasificación.

De igual forma se determinó, que las tareas que según la recurrente no le habían sido tomadas en cuenta, sí habían quedado comprendidas dentro de la descripción del cargo, razón por la cual no había lugar a la impugnación.

Por estas razones, descartamos la violación aducida.

La Corte estima oportuno reiterar, antes de concluir su examen de legalidad, que los elementos probatorios que obran en el expediente, relacionados con el Proceso de Clasificación de Cargos adelantado por la Contraloría General de la República, son constancia de que la información que sirvió de base para la clasificación y descripción del cargo impugnado, fue suministrada por la propia funcionaria clasificada, al completar el Formulario de Actualización para el cargo Secretaria Ejecutiva I, sin que en las etapas posteriores se hayan adicionado tareas no descritas en el perfil de dicho cargo, y consignadas en el acto de Notificación 50330.

Cabe agregar, que en sentencia de 13 de diciembre de 1999, este Tribunal resolvió, en igual sentido, un cúmulo de procesos provenientes de la Contraloría General de la Nación, por razón de las clasificaciones realizadas a sus funcionarios.

Al desestimarse los cargos de ilegalidad aducidos, procede negar la pretensión invocada por el recurrente.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, el Acto de Notificación 50330 de 25 de septiembre de 1997, dictado por el Director Nacional de Control Fiscal de la Contraloría General de la República.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA EN REPRESENTACIÓN DE MARIBEL DE PEREZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTIFICACIÓN NO. 50058 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, REALIZADA POR EL DIRECTOR NACIONAL DE CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DEL AÑO DOSMIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Carlos Ayala, actuando en representación de MARIBEL DE PEREZ, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el acto contenido en la Notificación No. 50058 de 25 de septiembre de 1997, realizado por el Director Nacional de Control Fiscal, de la Contraloría General de la República, y para que se hagan otras declaraciones.

I. EL ACTO IMPUGNADO

Mediante el acto impugnado, la Contraloría General de la República informó a la funcionaria MARIBEL DE PEREZ, que en virtud de los resultados del Proceso de Clasificación de Cargos efectuado por dicha entidad, le había sido asignado el cargo de FISCALIZADOR II GRADO 9, en la Dirección de Nacional de Control Fiscal de dicha entidad, siendo el objetivo de este cargo: fiscalizar el manejo de fondos y bienes públicos a fin de que los mismos se ajusten a las dispsosciones administrativas, fiscales y legales que rigen la materia.

El Acto de Notificación 50058 contenía además, un listado de las tareas que debía desempeñar la funcionaria MARIBEL DE PEREZ, en el ejercicio de su cargo. (fs. 1-2 del expediente).

II. CARGOS DE ILEGALIDAD DEL RECURRENTE

a) La pretensión del demandante

El punto medular de la impugnación sostiene, que al momento de clasificarse la posición de la funcionaria MARIBEL DE PEREZ, no se tomaron en cuenta algunas tareas que desempeñaba, ni sus funciones fueron equiparadas a la de otros funcionarios que realizan labores semejantes dentro de la Institución, por lo que se violaron normas que rigen el proceso de clasificación de cargos.

Agrega el actor, que las autoridades de la Contraloría General de la Nación no evaluaron correctamente las tareas realizadas por la funcionaria, lo que trajo como consecuencia que no fueran conscientes de la realidad de su labor y por ende, le clasificaran en un cargo y grado inferior al que le correspondía.

b) Cargos de ilegalidad

Los cargos de ilegalidad que sustentan el recurso, son los siguientes:

En primer término, se dice violado en concepto de interpretación errónea, el artículo 8 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, que es del tenor siguiente:

> "Artículo 8: La selección y promoción del personal de la Contraloría General se realizará tomando en consideración los méritos personales y profesionales. Para los fines señalados en este artículo, se instituirá en el Reglamento Interno de dicho organismo un sistema de clasificación de cargos y uno de selección que garantice que el escogido es idóneo para desempeñar el cargo respectivo ..."

La infracción se produce, en concepto del demandante, al describir el cargo de MARIBEL DE PEREZ y asignarle un grado específico, sin considerar funciones que ésta realiza, y que le colocarían en la posición de Fiscalizador III.

La segunda disposición que se dice infringida, recae en el artículo primero del Decreto No. 195 del 17 de septiembre de 1997, en virtud del cual se ordena la actualización e institución, del Sistema de Clasificación de Cargos del personal no directivo de la Contraloría General de la República.

El actor sostiene, que la norma resulta transgredida en concepto de interpretación errónea, toda vez que la Notificación No. 50058 no actualiza las funciones, cargo, ni el grado de MARIBEL DE PEREZ.

Seguidamente, el recurrente considera transgredido el subpunto 3.2 del Manual Descriptivo de Cargos de la Dirección de Recursos Humanos de la Contraloría General de la República, que establece los factores que deben ser evaluados en la clasificación de cargos de los empleados de esta dependencia estatal. Estos factores son: conocimientos y experiencia adquirida; complejidad de las tarea; guías de procedimiento disponibles; responsabilidad e impacto de

errores; suspensión recibida y ejercida; contactos personales; propósito de los contactos; ambiente y exigencias físicas del puesto.

La infracción se explica en los siguientes términos:

> "La norma transcrita se ha violado de forma directa por falta de aplicación ya que la clasificación del cargo de mi cliente no consideró algunos de los aspectos que describe dicha norma, entre ellos el relativo a la complejidad de las tareas y el grado de responsabilidad o impacto de los errores. Es obvio que de haberse ponderado estos factores se hubiera clasificado a mi cliente realmente en el cargo que en la práctica desempeña."

Por último, se dice violado el artículo 24 del Reglamento Interno de la Contraloría General de la República, conforme al cual corresponde al superior inmediato de cada servidor, comunicarle por escrito las funciones básicas e instrucciones específicas del cargo a desempeñar.

Se aduce que la autoridad demandada incurrió en errónea interpretación de esta norma reglamentaria, toda vez que la descripción que se hace en el acto impugnado, de las funciones que desempeña MARIBEL DE PEREZ, omite algunas tareas que ésta había venido ejecutando en el cargo.

III. INFORME RENDIDO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA

Corre a fojas 14-18 del expediente, la Nota No. 2171-Leg de 22 de septiembre de 1998, contentiva del informe explicativo de conducta suscrito por el Director Nacional de Control Fiscal, autoridad responsable de la emisión del acto impugnado.

Este documento detalla, de manera minuciosa, la metodología utilizada en el Proceso de Clasificación de Cargos al que fueron sometidos los funcionarios de la dependencia estatal, procedimiento que se inició en 1986, fue interrumpido en 1989, y luego reactivado el 18 de mayo de 1995.

En lo que atañe a la funcionaria MARIBEL DE PEREZ, se señalan las diversas etapas de su proceso evaluativo, que culminó con la clasificación de la servidora pública, en el cargo de Fiscalizador II Grado 9, el 25 de septiembre de 1997, según Formulario de Notificación 50058.

Señala además, que la funcionaria propuso recursos administrativos contra el acto impugnado, los que luego de analizados cuidadosamente, fueron rechazados, por considerar que la clasificación y tareas descritas para el cargo de MARIBEL DE PEREZ, eran inherentes al cargo de Fiscalizador II Grado 9.

Por ende concluye, que no se ha violentado derecho alguno a la recurrente, dado que en su caso se cumplieron todas las etapas y procedimientos, contemplados en el Sistema de Clasificación de Cargos.

IV. OPINION DE LA PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACION

La representante del Ministerio Público, a través de Vista Fiscal No.489 de 3 de diciembre de 1998, visible a fojas 19-32 del expediente, solicitó a esta Superioridad que se negara la pretensión de la demandante, por considerar que el acto impugnado, no es violatorio del ordenamiento legal.

La colaboradora de la instancia acoge los planteamientos de la autoridad responsable del acto demandado, en el sentido de que la clasificación y descripción del cargo impugnado, fue el resultado de un cuidadoso proceso en que participó la demandante, por lo que mal puede aseverar que fueron conculcados sus derechos subjetivos.

Al examinar los cargos de violación endilgados, destacó que el artículo 8

de la Ley No. 32 de 8 de noviembre de 1984 que se dice infringido, constituye el fundamento legal del Proceso de Clasificación de Cargos llevado a cabo por la Contraloría General de la República, siendo precisamente por mandato de aquella norma, que se inició el proceso de clasificación.

Desestima los restantes cargos de ilegalidad presentados, al señalar que el acto recurrido es congruente con los resultados del proceso de Clasificación de Cargos del personal no directivo de la Contraloría General de la República, y que la descripción del cargo se ajusta a las funciones que desempeña la demandante.

La señora Procuradora manifiesta finalmente, que el proceso que nos ocupa no se origina en la clasificación o descripción del cargo de MARIBEL DE PEREZ, sino que se encuentra motivado, como otros presentados con idénticas pretensiones por funcionarios de la Contraloría General de la República, en la circunstancia de que paralelo al proceso de clasificación, la Contraloría había iniciado el trámite de ajuste y equiparación salarial de sus funcionarios, de forma tal que a cada cargo y grado, correspondería un salario determinado.

En este contexto sugiere, que la disconformidad de los servidores públicos se produce por razón del salario que les corresponde en virtud del cargo clasificado, y no a la descripción del cargo asignado, o las funciones inherentes al mismo.

V. EXAMEN DE LA SALA TERCERA

Una vez surtidos todos los trámites pertinentes, se procede a decidir sobre el mérito de la demanda.

Es preciso señalar en primer término, que según consta en la documentación remitida por la Contraloría General de la República (fojas 01-04 del expediente administrativo), concretamente en el Formulario de Actualización de Descripción del Cargo presentado para la revisión de cada funcionario, por la Contraloría General de la República, la señora MARIBEL DE PEREZ colaboró en la descripción de sus funciones en el cargo, añadiendo las tareas que a su juicio, hacían falta en dicha descripción, observaciones que fueron aceptadas por sus evaluadores, arribando a la conclusión de que el cargo debía ser clasificado como Fiscalizador II Grado 9.

Pese a ello, luego de notificada la clasificación, impugna la misma, argumentando que se omitieron tareas y que ha sido desfavorablemente clasificada. Sin embargo, no adiciona nuevas tareas que no hubiesen sido previamente consideradas en el Formulario de Notificación 50058.

Esta circunstancia, parece confirmar el planteamiento de la Procuraduría de la Administración, en el sentido de que la motivación de este proceso radica en la consecuencia económica de la clasificación, y no en el aspecto objetivo del acto recurrido, que asigna y describe las tareas de la funcionaria clasificada.

Así también parece admitirlo la recurrente, cuando en su alegato final manifiesta: "la clasificación en un grado y categoría superior significa un ajuste económico salarial ..." (cfr. 50 del expediente)

No obstante, y siendo que la acción presentada, cualesquiera sus motivaciones, es formalmente viable, el Tribunal procede al análisis de rigor de los cargos de ilegalidad presentados, y al efecto hemos de señalar lo siguiente:

El primer cargo de ilegalidad, dice relación con la supuesta violación del artículo 8 de la Ley 32 de 1984. Por confrontada la norma, con el argumento del demandante, la Sala comparte el criterio externado por la Procuraduría de la Administración, en el sentido de que esta excerta legal sólo establece los parámetros para llevar a cabo la escogencia y movimiento de personal idóneo en la Contraloría General de la República, y constituye el fundamento jurídico del

Proceso de Clasificación de Cargos, por lo que no representa una conculcación a los derechos del demandante.

En relación a la supuesta violación del artículo 1 de Decreto No. 195 del 17 de septiembre de 1997, que ordena la actualización del sistema de clasificación de cargos del personal no directivo de la Contraloría, la Sala estima procedente negar el cargo invocado, pues contrario a lo señalado por el actor, la Notificación No. 50058 de 25 de septiembre de 1997 sí contiene una descripción y clasificación del cargo de un funcionario no directivo de la Contraloría General, esto es, la señora MARIBEL DE PEREZ, detallando los objetivos y las tareas inherentes al cargo asignado, en forma diáfana y concreta.

De acuerdo a lo anterior, también procede desestimar el cargo de ilegalidad aducido en relación al artículo 24 del Reglamento Interno de la Contraloría General de la República, que dispone la obligatoriedad, para el superior inmediato de un servidor público, de suministrarle por escrito, las funciones básicas e instrucciones del cargo a desempeñar.

Sobre el particular, la Corte advierte que el acto impugnado se ajusta a la exigencia reglamentaria, toda vez que se le comunicó por escrito, a MARIBEL DE PEREZ, las tareas y labores que le correspondería desempeñar en ejercicio del cargo de Fiscalizador II (cfr. fojas 1-2 del expediente)

Finalmente, en lo que concierne a la alegada violación del subpunto 3.2 del Manual para la aplicación del Sistema de Clasificación de Cargos, mismo que establece la metodología a seguir en la evaluación de cada funcionario para clasificar el cargo y grado que le corresponde, la Sala conceptúa que no se ha producido la infracción alegada.

Ello obedece, a que las constancias que se adjuntaron al expediente principal, revelan que el ente demandado calificó a la señora MARIBEL DE PEREZ conforme a los criterios, método y sistema de ponderación legalmente establecidos, asignándole a cada aspecto evaluado, un porcentaje acorde con los parámetros previstos en dicha disposición, concluyéndose que el título, objetivo y tareas que desempeñaba la señora MARIBEL DE PEREZ, correspondían al cargo de Fiscalizador II, y que la complejidad y responsabilidad del cargo, habían sido efectivamente evaluadas, para los efectos de la clasificación.

De igual forma se determinó, que las tareas que según la recurrente no le habían sido tomadas en cuenta, sí habían quedado comprendidas dentro de la descripción del cargo, lo que fue confirmado por el Divisionario, Fernando Arcia, razón por la cual no había lugar a la impugnación.

Por estas razones, descartamos la violación aducida.

La Corte estima oportuno reiterar, antes de concluir su examen de legalidad, que los elementos probatorios que obran en el expediente, relacionados con el Proceso de Clasificación de Cargos adelantado por la Contraloría General de la República, son constancia de que la información que sirvió de base para la clasificación y descripción del cargo impugnado, fue suministrada por la propia funcionaria clasificada, MARIBEL DE PEREZ, al completar el Formulario de Actualización para Fiscalizador II, y las tareas adicionadas en la etapa de apelación, se encuentran descritas en el perfil de dicho cargo y consignadas en el acto de Notificación 50058.

Cabe agregar, que en sentencia de 13 de diciembre de 1999, este Tribunal resolvió, en igual sentido, un cúmulo de procesos provenientes de la Contraloría General de la Nación, por razón de las clasificaciones realizadas a sus funcionarios.

Al desestimarse los cargos de ilegalidad aducidos, procede negar la pretensión invocada por el recurrente.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, el Acto de Notificación 50058 de 25 de septiembre de 1997, dictado por el Director Nacional de Control Fiscal de la Contraloría General de la República.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA EN REPRESENTACIÓN DE NIDIA DE VEGA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTIFICACIÓN NO. 50250 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, REALIZADA POR EL DIRECTOR NACIONAL DE CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Carlos Ayala, actuando en representación de NIDIA DE VEGA, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el acto contenido en la Notificación No. 50250 de 25 de septiembre de 1997, realizado por el Director Nacional de Control Fiscal, de la Contraloría General de la República, y para que se hagan otras declaraciones.

I. EL ACTO IMPUGNADO

Mediante el acto impugnado, la Contraloría General de la República informó a la funcionaria NIDIA DE VEGA, que en virtud de los resultados del Proceso de Clasificación de Cargos efectuado por dicha entidad, le había sido asignado el cargo de JEFE DE CONTROL FISCAL GRADO 13, en la Dirección de Nacional de Control Fiscal de dicha entidad, siendo el objetivo de este cargo: planificar, coordinar, dirigir, supervisar, analizar y ejecutar controles de fiscalización presupuestarios y financieros; realizar investigaciones contables y administrativas en Institución o dependencias con un grado de mediana dificultad, manteniendo los principios y procedimientos de control preventivo de los fondos de la Entidad en la que fue designado. Además, debía brindar asesoría técnica y docente en materia fiscal a funcionarios de diferentes jerarquías en la Institución en la que fuera designada.

El Acto de Notificación 50250 contenía además, un listado de las tareas que debía desempeñar la funcionaria DE VEGA, en el ejercicio de su cargo. (fs. 1-2 del expediente).

II. CARGOS DE ILEGALIDAD DEL RECURRENTE

a) La pretensión del demandante

El punto medular de la impugnación sostiene, que al momento de clasificarse la posición de la funcionaria NIDIA DE VEGA, no se tomaron en cuenta algunas tareas que desempeñaba, ni sus funciones fueron equiparadas a la de otros funcionarios que realizan labores semejantes dentro de la Institución, por lo que se violaron normas que rigen el proceso de clasificación de cargos.

Agrega el actor, que las autoridades de la Contraloría General de la Nación

no evaluaron correctamente las tareas realizadas por la funcionaria, lo que trajo como consecuencia que no fueran conscientes de la realidad de su labor y por ende, le clasificaran en un cargo y grado inferior al que le correspondía.

b) Cargos de ilegalidad

Los cargos de ilegalidad que sustentan el recurso, son los siguientes:

En primer término, se dice violado en concepto de interpretación errónea, el artículo 8 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, que es del tenor siguiente:

> "Artículo 8: La selección y promoción del personal de la Contraloría General se realizará tomando en consideración los méritos personales y profesionales. Para los fines señalados en este artículo, se instituirá en el Reglamento Interno de dicho organismo un sistema de clasificación de cargos y uno de selección que garantice que el escogido es idóneo para desempeñar el cargo respectivo ..."

La infracción se produce, en concepto del demandante, al describir el cargo de NIDIA DE VEGA y asignarle un grado específico, sin considerar funciones que ésta realiza, y que la colocarían en la posición de JEFE DE CONTROL FISCAL 11 GRADO 14.

La segunda disposición que se dice infringida, recae en el artículo primero del Decreto No. 195 del 17 de septiembre de 1997, en virtud del cual se ordena la actualización e institución, del Sistema de Clasificación de Cargos del personal no directivo de la Contraloría General de la República.

El actor sostiene, que la norma resulta transgredida en concepto de interpretación errónea, toda vez que la Notificación No. 50250 no actualiza las funciones, cargo, ni el grado de NIDIA DE VEGA.

Seguidamente, el recurrente considera transgredido el subpunto 3.2 del Manual Descriptivo de Cargos de la Dirección de Recursos Humanos de la Contraloría General de la República, que establece los factores que deben ser evaluados en la clasificación de cargos de los empleados de esta dependencia estatal. Estos factores son: conocimientos y experiencia adquirida; complejidad de las tarea; guías de procedimiento disponibles; responsabilidad e impacto de errores; suspensión recibida y ejercida; contactos personales; propósito de los contactos; ambiente y exigencias físicas del puesto.

La infracción se explica en los siguientes términos:

> "La norma transcrita se ha violado de forma directa por falta de aplicación ya que la clasificación del cargo de mi cliente no consideró algunos de los aspectos que describe dicha norma, entre ellos el relativo a la complejidad de las tareas y el grado de responsabilidad o impacto de los errores. Es obvio que de haberse ponderado estos factores se hubiera clasificado a mi cliente realmente en el cargo que en la práctica desempeña."

Por último, se dice violado el artículo 24 del Reglamento Interno de la Contraloría General de la República, conforme al cual corresponde al superior inmediato de cada servidor, comunicarle por escrito las funciones básicas e instrucciones específicas del cargo a desempeñar.

Se aduce que la autoridad demandada incurrió en errónea interpretación de esta norma reglamentaria, toda vez que la descripción que se hace en el acto impugnado, de las funciones que desempeña NIDIA DE VEGA, omite algunas tareas que ésta había venido ejecutando en el cargo.

III. INFORME RENDIDO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA

Corre a fojas 14-18 del expediente, la Nota No. 2179-Leg de 29 de septiembre de 1998, contentiva del informe explicativo de conducta suscrito por el Director Nacional de Control Fiscal, autoridad responsable de la emisión del acto impugnado.

Este documento detalla, de manera minuciosa, la metodología utilizada en el Proceso de Clasificación de Cargos al que fueron sometidos los funcionarios de la dependencia estatal, procedimiento que se inició en 1986, fue interrumpido en 1989, y luego reactivado el 18 de mayo de 1995.

En lo que atañe a la funcionaria NIDIA DE VEGA, se señalan las diversas etapas de su proceso evaluativo, que culminó con la clasificación de la servidora pública, en el cargo de JEFE DE CONTROL FISCAL I GRADO 13, el 25 de septiembre de 1997, según Formulario de Notificación 50250.

Señala además, que la funcionaria propuso recursos administrativos contra el acto impugnado, los que luego de analizados cuidadosamente, fueron rechazados, por considerar que la clasificación y tareas descritas para el cargo de NIDIA DE VEGA, eran inherentes al cargo asignado.

Por ende concluye, que no se ha violentado derecho alguno a la recurrente, dado que en su caso se cumplieron todas las etapas y procedimientos, contemplados en el Sistema de Clasificación de Cargos.

IV. OPINION DE LA PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACION

La representante del Ministerio Público, a través de Vista Fiscal No.484 de 3 de diciembre de 1998, visible a fojas 19-34 del expediente, solicitó a esta Superioridad que se negara la pretensión de la demandante, por considerar que el acto impugnado, no es violatorio del ordenamiento legal.

La colaboradora de la instancia acoge los planteamientos de la autoridad responsable del acto demandado, en el sentido de que la clasificación y descripción del cargo impugnado, fue el resultado de un cuidadoso proceso en que participó la demandante, por lo que mal puede aseverar que fueron conculcados sus derechos subjetivos.

Al examinar los cargos de violación endilgados, destacó que el artículo 8 de la Ley No. 32 de 8 de noviembre de 1984 que se dice infringido, constituye el fundamento legal del Proceso de Clasificación de Cargos llevado a cabo por la Contraloría General de la República, siendo precisamente por mandato de aquella norma, que se inició el proceso de clasificación.

Desestima los restantes cargos de ilegalidad presentados, al señalar que el acto recurrido es congruente con los resultados del proceso de Clasificación de Cargos del personal no directivo de la Contraloría General de la República, y que la descripción del cargo se ajusta a las funciones que desempeña la demandante.

La señora Procuradora manifiesta finalmente, que el proceso que nos ocupa no se origina en la clasificación o descripción del cargo de NIDIA DE VEGA, sino que se encuentra motivado, como otros presentados con idénticas pretensiones por funcionarios de la Contraloría General de la República, en la circunstancia de que paralelo al proceso de clasificación, la Contraloría había iniciado el trámite de ajuste y equiparación salarial de sus funcionarios, de forma tal que a cada cargo y grado, correspondería un salario determinado.

En este contexto sugiere, que la disconformidad de los servidores públicos se produce por razón del salario que les corresponde en virtud del cargo clasificado, y no a la descripción del cargo asignado, o las funciones inherentes al mismo.

V. EXAMEN DE LA SALA TERCERA

Una vez surtidos todos los trámites pertinentes, se procede a decidir sobre el mérito de la demanda.

Es preciso señalar en primer término, que en el caso de la señora DE VEGA, como en el de otros funcionarios sometidos al proceso de clasificación iniciado en 1996 por la Contraloría General de la República, se le brindó oportunidad a los propios funcionarios de colaborar en la descripción de los cargos que ocupaban, en vías de clasificar la posición de manera adecuada.

Según consta en los antecedentes remitidos a esta Superioridad, la señora DE VEGA, luego de clasificada en el cargo de Jefe de Control Fiscal I, presentó recursos impugnativos contra dicha clasificación, solicitando que se le ubicara en la posición de Jefe de Control Fiscal II, lo que fue negado por el Comité Reconsideración y por el Comité de Apelación, señalándose: "el recorrido de la funcionaria como Jefe de Control Fiscal es insuficiente para llevarla a un cargo de nivel superior. Por otro lado, carece de la experiencia necesaria en instituciones con grado de dificultad considerable." (f. 78)

Ante esta Sala, la interesada presentó como parte del acervo probatorio, el testimonio de otra funcionaria de la Contraloría General de la Nación, señora MARIBEL DE JAEN (fs. 50-51), y un peritaje rendido por la señora ARGELIA ZAMBRANO, Administradora Pública con Especialización en Recursos Humanos.

La declaración testimonial consiste en la apreciación subjetiva, de una colega de la señora DE VEGA, en el sentido de que las funciones de NIDIA DE VEGA tienen cierto grado de dificultad. Por su parte, en el peritaje se señala básicamente, que se había realizado una inadecuada ponderación de los factores de evaluación, por lo que sugería variar el método de análisis del cuestionario informativo del cargo, realizar observación directa del puesto, entrevistar tanto al ocupante como al jefe inmediato, y finalmente, colocar a la funcionaria en el cargo de Jefe de Control Fiscal II.

Al efecto, la Corte observa que la declaración testimonial aportada no contiene ningún elemento objetivo que evidencie que la señora DE VEGA fue mal clasificada. El informe pericial tampoco establece, de manera concreta, de qué manera fueron indebidamente ponderados los factores evaluados, y cómo podría producirse, cuantitativamente, un aumento en la ponderación que llevara a la señora DE VEGA a la posición de Jefa de Control Fiscal II.

Es de anotar, que contrario a lo sugerido por el perito, las opiniones de personas vinculadas a la evaluación de la funcionaria NIDIA DE VEGA sí fueron atendidas por el Comité de Apelación, quienes señalaron que "según entrevista realizada la Servidora Pública no tiene suficiente recorrido y experiencia para ser clasificada como Jefe de Control Fiscal II. La institución tiene complejidad por lo tanto, la Divisionaria manifestó que será necesario trasladarla a otra de menor complejidad" (cfr. foja 79)

En cuanto al examen de legalidad de los cargos invocados, la Corte ha de externar lo siguiente:

El primer cargo de ilegalidad, dice relación con la supuesta violación del artículo 8 de la Ley 32 de 1984. Por confrontada la norma, con el argumento del demandante, la Sala comparte el criterio externado por la Procuraduría de la Administración, en el sentido de que esta excerta legal sólo establece los parámetros para llevar a cabo la escogencia y movimiento de personal idóneo en la Contraloría General de la República, y constituye el fundamento jurídico del Proceso de Clasificación de Cargos, por lo que no representa una conculcación a los derechos del demandante.

En relación a la supuesta violación del artículo 1 de Decreto No. 195 del 17 de septiembre de 1997, que ordena la actualización del sistema de clasificación de cargos del personal no directivo de la Contraloría, la Sala estima procedente negar el cargo invocado, pues contrario a lo señalado por el

actor, la Notificación No. 50250 de 25 de septiembre de 1997 sí contiene una descripción y clasificación del cargo de un funcionario no directivo de la Contraloría General, esto es, la señora NIDIA DE VEGA, detallando los objetivos y las tareas inherentes al cargo asignado, en forma diáfana y concreta.

De acuerdo a lo anterior, también procede desestimar el cargo de ilegalidad aducido en relación al artículo 24 del Reglamento Interno de la Contraloría General de la República, que dispone la obligatoriedad, para el superior inmediato de un servidor público, de suministrarle por escrito, las funciones básicas e instrucciones del cargo a desempeñar.

Sobre el particular, la Corte advierte que el acto impugnado se ajusta a la exigencia reglamentaria, toda vez que se le comunicó por escrito, a NIDIA DE VEGA, las tareas y labores que le correspondería desempeñar en ejercicio del cargo de JEFE DE CONTROL FISCAL I (cfr. fojas 1-2 del expediente)

Finalmente, en lo que concierne a la alegada violación del subpunto 3.2 del Manual para la aplicación del Sistema de Clasificación de Cargos, mismo que establece la metodología a seguir en la evaluación de cada funcionario para clasificar el cargo y grado que le corresponde, la Sala conceptúa que no se ha producido la infracción alegada.

Ello obedece, a que las constancias que se adjuntaron al expediente, revelan que el ente demandado calificó a la señora DE VEGA conforme a los criterios, método y sistema de ponderación legalmente establecidos, asignándole a cada aspecto evaluado, un porcentaje acorde con los parámetros previstos en dicha disposición, concluyéndose que el título, objetivo y tareas que desempeñaba NIDIA DE VEGA, correspondían al cargo de Jefe de Control Fiscal I, y que la complejidad y responsabilidad del cargo, habían sido efectivamente evaluadas, para los efectos de la clasificación.

Como ha quedado expuesto en párrafos anteriores, las pruebas aportadas por la demandante, no invalidan la ponderación realizada por la Contraloría General en este caso, ni evidencian una evaluación incorrecta de la complejidad de sus funciones, siendo que en opinión de los evaluadores de la señora DE VEGA, debía ser clasificada como Jefe de Control Fiscal I, por carecer de la experiencia necesaria para desempeñar el cargo de Jefe de Control Fiscal II.

Al desestimarse los cargos de ilegalidad aducidos, procede negar la pretensión invocada por el recurrente.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, el Acto de Notificación 50250 de 25 de septiembre de 1997, dictado por el Director Nacional de Control Fiscal de la Contraloría General de la República.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA EN REPRESENTACIÓN DE ONILDA DE HENRIQUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTIFICACIÓN NO. 04083 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, REALIZADA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE CONTABILIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Carlos Ayala, actuando en representación de ONILDA DE HENRIQUEZ, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el acto contenido en la Notificación No. 04083 de 25 de septiembre de 1997, realizado por la Directora Nacional de Contabilidad, de la Contraloría General de la República, y para que se hagan otras declaraciones.

I. EL ACTO IMPUGNADO

Mediante el acto impugnado, la Contraloría General de la República informó a la funcionaria ONILDA DE HENRIQUEZ, que en virtud de los resultados del Proceso de Clasificación de Cargos efectuado por dicha entidad, le había sido asignado el cargo de OFICIAL DE PAGOS II GRADO 9, en la Dirección de Nacional de Contabilidad de dicha entidad.

El Acto de Notificación 04083 contenía además, un listado de las tareas que debía desempeñar la funcionaria DE HENRIQUEZ, en el ejercicio de su cargo. (fs. 1-2 del expediente).

II. CARGOS DE ILEGALIDAD DEL RECURRENTE

a) La pretensión del demandante

El punto medular de la impugnación sostiene, que al momento de clasificarse la posición de la funcionaria ONILDA DE HENRIQUEZ, no se tomaron en cuenta algunas tareas que desempeñaba, ni sus funciones fueron equiparadas a la de otros funcionarios que realizan labores semejantes dentro de la Institución, por lo que se violaron normas que rigen el proceso de clasificación de cargos.

Agrega el actor, que las autoridades de la Contraloría General de la Nación no evaluaron correctamente las tareas realizadas por la funcionaria, lo que trajo como consecuencia que no fueran conscientes de la realidad de su labor y por ende, le clasificaran en un cargo y grado inferior al que le correspondía.

b) Cargos de ilegalidad

Los cargos de ilegalidad que sustentan el recurso, son los siguientes:

En primer término, se dice violado en concepto de interpretación errónea, el artículo 8 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, que es del tenor siguiente:

> "Artículo 8: La selección y promoción del personal de la Contraloría General se realizará tomando en consideración los méritos personales y profesionales. Para los fines señalados en este artículo, se instituirá en el Reglamento Interno de dicho organismo un sistema de clasificación de cargos y uno de selección que garantice que el escogido es idóneo para desempeñar el cargo respectivo ..."

La infracción se produce, en concepto del demandante, al describir el cargo de ONILDA DE HENRIQUEZ y asignarle un grado específico, sin considerar funciones que ésta realiza, y que la colocarían en una posición superior.

La segunda disposición que se dice infringida, recae en el artículo primero del Decreto No. 195 del 17 de septiembre de 1997, en virtud del cual se ordena la actualización e institución, del Sistema de Clasificación de Cargos del personal no directivo de la Contraloría General de la República.

El actor sostiene, que la norma resulta transgredida en concepto de

interpretación errónea, toda vez que la Notificación No. 04083 no actualiza las funciones, cargo, ni el grado de ONILDA DE HENRIQUEZ.

Seguidamente, el recurrente considera transgredido el subpunto 3.2 del Manual Descriptivo de Cargos de la Dirección de Recursos Humanos de la Contraloría General de la República, que establece los factores que deben ser evaluados en la clasificación de cargos de los empleados de esta dependencia estatal. Estos factores son: conocimientos y experiencia adquirida; complejidad de las tarea; guías de procedimiento disponibles; responsabilidad e impacto de errores; suspensión recibida y ejercida; contactos personales; propósito de los contactos; ambiente y exigencias físicas del puesto.

La infracción se explica en los siguientes términos:

> "La norma transcrita se ha violado de forma directa por falta de aplicación ya que la clasificación del cargo de mi cliente no consideró algunos de los aspectos que describe dicha norma, entre ellos el relativo a la complejidad de las tareas y el grado de responsabilidad o impacto de los errores. Es obvio que de haberse ponderado estos factores se hubiera clasificado a mi cliente realmente en el cargo que en la práctica desempeña."

Por último, se dice violado el artículo 24 del Reglamento Interno de la Contraloría General de la República, conforme al cual corresponde al superior inmediato de cada servidor, comunicarle por escrito las funciones básicas e instrucciones específicas del cargo a desempeñar.

Se aduce que la autoridad demandada incurrió en errónea interpretación de esta norma reglamentaria, toda vez que la descripción que se hace en el acto impugnado, de las funciones que desempeña ONILDA DE HENRIQUEZ, omite algunas tareas que ésta había venido ejecutando en el cargo.

III. INFORME RENDIDO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA

Corre a fojas 14-18 del expediente, la Nota No. 2154-Leg de 17 de septiembre de 1998, contentiva del informe explicativo de conducta suscrito por la Directora Nacional de Contabilidad, autoridad responsable de la emisión del acto impugnado.

Este documento detalla, de manera minuciosa, la metodología utilizada en el Proceso de Clasificación de Cargos al que fueron sometidos los funcionarios de la dependencia estatal, procedimiento que se inició en 1986, fue interrumpido en 1989, y luego reactivado el 18 de mayo de 1995.

En lo que atañe a la funcionaria ONILDA DE HENRIQUEZ, se señalan las diversas etapas de su proceso evaluativo, que culminó con la clasificación de la servidora pública, en el cargo de OFICIAL DE PAGOS II GRADO 9, el 25 de septiembre de 1997, según Formulario de Notificación 04083.

Señala además, que la funcionaria propuso recursos administrativos contra el acto impugnado, los que luego de analizados cuidadosamente, fueron rechazados, por considerar que la clasificación y tareas descritas para el cargo de ONILDA DE HENRIQUEZ, eran inherentes al cargo asignado.

Por ende concluye, que no se ha violentado derecho alguno a la recurrente, dado que en su caso se cumplieron todas las etapas y procedimientos, contemplados en el Sistema de Clasificación de Cargos.

IV. OPINION DE LA PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACION

La representante del Ministerio Público, a través de Vista Fiscal No. 436 de 19 de noviembre de 1998, visible a fojas 19-29 del expediente, solicitó a esta Superioridad que se negara la pretensión de la demandante, por considerar que el

acto impugnado, no es violatorio del ordenamiento legal.

La colaboradora de la instancia acoge los planteamientos de la autoridad responsable del acto demandado, en el sentido de que la clasificación y descripción del cargo impugnado, fue el resultado de un cuidadoso proceso en que participó la demandante, por lo que mal puede aseverar que fueron conculcados sus derechos subjetivos.

Al examinar los cargos de violación endilgados, destacó que el artículo 8 de la Ley No. 32 de 8 de noviembre de 1984 que se dice infringido, constituye el fundamento legal del Proceso de Clasificación de Cargos llevado a cabo por la Contraloría General de la República, siendo precisamente por mandato de aquella norma, que se inició el proceso de clasificación.

Desestima los restantes cargos de ilegalidad presentados, al señalar que el acto recurrido es congruente con los resultados del proceso de Clasificación de Cargos del personal no directivo de la Contraloría General de la República, y que la descripción del cargo se ajusta a las funciones que desempeña la demandante.

La señora Procuradora manifiesta finalmente, que el proceso que nos ocupa no se origina en la clasificación o descripción del cargo de ONILDA DE HENRIQUEZ, sino que se encuentra motivado, como otros presentados con idénticas pretensiones por funcionarios de la Contraloría General de la República, en la circunstancia de que paralelo al proceso de clasificación, la Contraloría había iniciado el trámite de ajuste y equiparación salarial de sus funcionarios, de forma tal que a cada cargo y grado, correspondería un salario determinado.

En este contexto sugiere, que la disconformidad de los servidores públicos se produce por razón del salario que les corresponde en virtud del cargo clasificado, y no a la descripción del cargo asignado, o las funciones inherentes al mismo.

V. EXAMEN DE LA SALA TERCERA

Una vez surtidos todos los trámites pertinentes, se procede a decidir sobre el mérito de la demanda.

Es preciso señalar en primer término, que en el caso de la señora DE HENRIQUEZ, como en el de otros funcionarios sometidos al proceso de clasificación reiniciado en 1995 por la Contraloría General de la República, se le brindó oportunidad a los propios funcionarios de colaborar en la descripción de los cargos que ocupaban, en vías de clasificar la posición de manera adecuada, y así lo hizo la recurrente, al señalar en el Formulario de Actualización de Descripción del Cargo, que las tareas descritas correspondían al cargo, sin añadir nuevas tareas. (cfr. foja 33 del expediente administrativo)

Según consta en los antecedentes remitidos a esta Superioridad, la señora DE HENRIQUEZ, luego de clasificada en el cargo de Oficial de Pagos II, presentó recursos impugnativos contra dicha clasificación, aduciendo que en la descripción del cargo se habían omitido tareas, y que debía ser clasificada en cargo y grado superior, lo que fue negado por el Comité Reconsideración y por el Comité de Apelación, señalándose: que la funcionaria no presentaba tareas adicionales, y que sus argumentaciones podían ser en todo caso utilizadas para la evaluación de desempeño y crecimiento horizontal, no vertical. (f. 20 de los antecedentes)

Ante esta Sala, la interesada presentó como parte del acervo probatorio, un peritaje rendido por la señora ARGELIA ZAMBRANO, Administradora Pública con Especialización en Recursos Humanos (cfr. fojas 56-58), en que se señala básicamente, que se había realizado una inadecuada ponderación de los factores de evaluación, por lo que sugería variar el método de análisis del cuestionario informativo del cargo, realizar observación directa del puesto, entrevistar tanto al ocupante como al jefe inmediato, y finalmente, colocar a la funcionaria en el

cargo de Oficial de Pagos III.

Al efecto, la Corte observa que el informe pericial no establece, de manera concreta, de qué manera fueron indebidamente ponderados los factores evaluados, y cómo podría producirse, cuantitativamente, un aumento en la ponderación que llevara a la señora DE HENRIQUEZ a la posición de Oficial de Pagos III.

En cuanto al examen de legalidad de los cargos invocados, la Corte ha de externar lo siguiente:

El primer cargo de ilegalidad, dice relación con la supuesta violación del artículo 8 de la Ley 32 de 1984. Por confrontada la norma, con el argumento del demandante, la Sala comparte el criterio externado por la Procuraduría de la Administración, en el sentido de que esta excerta legal sólo establece los parámetros para llevar a cabo la escogencia y movimiento de personal idóneo en la Contraloría General de la República, y constituye el fundamento jurídico del Proceso de Clasificación de Cargos, por lo que no representa una conculcación a los derechos del demandante.

En relación a la supuesta violación del artículo 1 de Decreto No. 195 del 17 de septiembre de 1997, que ordena la actualización del sistema de clasificación de cargos del personal no directivo de la Contraloría, la Sala estima procedente negar el cargo invocado, pues contrario a lo señalado por el actor, la Notificación No. 04083 de 25 de septiembre de 1997 sí contiene una descripción y clasificación del cargo de un funcionario no directivo de la Contraloría General, esto es, la señora ONILDA DE HENRIQUEZ, detallando los objetivos y las tareas inherentes al cargo asignado, en forma diáfana y concreta.

De acuerdo a lo anterior, también procede desestimar el cargo de ilegalidad aducido en relación al artículo 24 del Reglamento Interno de la Contraloría General de la República, que dispone la obligatoriedad, para el superior inmediato de un servidor público, de suministrarle por escrito, las funciones básicas e instrucciones del cargo a desempeñar.

Sobre el particular, la Corte advierte que el acto impugnado se ajusta a la exigencia reglamentaria, toda vez que se le comunicó por escrito, a ONILDA DE HENRIQUEZ, las tareas y labores que le correspondería desempeñar en ejercicio del cargo de OFICIAL DE PAGOS II (cfr. fojas 1-2 del expediente)

Finalmente, en lo que concierne a la alegada violación del subpunto 3.2 del Manual para la aplicación del Sistema de Clasificación de Cargos, mismo que establece la metodología a seguir en la evaluación de cada funcionario para clasificar el cargo y grado que le corresponde, la Sala conceptúa que no se ha producido la infracción alegada.

Ello obedece, a que las constancias que se adjuntaron al expediente, revelan que el ente demandado calificó a la señora DE HENRIQUEZ conforme a los criterios, método y sistema de ponderación legalmente establecidos, asignándole a cada aspecto evaluado, un porcentaje acorde con los parámetros previstos en dicha disposición, concluyéndose que el título, objetivo y tareas que desempeñaba ONILDA DE HENRIQUEZ, correspondían al cargo de Oficial de Pagos II, y que la complejidad y responsabilidad del cargo, habían sido efectivamente evaluadas, para los efectos de la clasificación.

Como ha quedado expuesto en párrafos anteriores, la prueba aportada por la demandante, no invalida la ponderación realizada por la Contraloría General en este caso, ni evidencia una evaluación incorrecta de la complejidad de sus funciones, constatándose que el perfil del cargo Oficial de Pagos II, encaja en las tareas que realiza la funcionaria.

Al desestimarse los cargos de ilegalidad aducidos, procede negar la pretensión invocada por el recurrente.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, el Acto de Notificación 04083 de 25 de septiembre de 1997, dictado por la Directora Nacional de Contabilidad de la Contraloría General de la República.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LCDA. ALMA L. CORTÉS EN REPRESENTACIÓN DE PROCESADORA MARPESCA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA N°DM-1069-2000 DE 29 DE MAYO DE 2000, EMITIDA POR EL MINISTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE 2000.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Licenciada Alma L. Cortés, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, en representación de PROCESADORA MARPESCA, S. A., para que se declare nula, por ilegal, la Nota N°DM-1069-2000 de 29 de mayo de 2000, emitida por el Ministro de Desarrollo Agropecuario, y para que se hagan otras declaraciones.

En la parte final del libelo de demanda, la parte actora ha incluido una solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto impugnado. Sin embargo, por razones de economía procesal, es procedente determinar si la demanda instaurada ha cumplido con los requisitos formales que hagan admisible la misma.

El Magistrado Sustanciador advierte que la presente demanda no puede ser admitida por las consideraciones que se exponen a continuación.

Observa el suscrito que, la pretensión formulada por la apoderada judicial de la empresa en su demanda, fue objeto de pronunciamiento por parte de esta Sala, mediante Auto de 27 de julio de 2000, en el sentido de que no se admitió la acción de nulidad incoada. Las razones expuestas, en esa Resolución Judicial, por el Sustanciador se circunscribieron a que la vía utilizada por el recurrente no era la idónea para que se reconocieran sus pretensiones. De allí que, el demandante presenta el día 2 de agosto de 2000, recurso de apelación contra el auto supra citado. Sin embargo, luego de presentado dicho recurso, PROCESADORA MARPESCA, S. A. interpone otra demanda contencioso administrativa, en esta ocasión de plena jurisdicción, pero con las mismas partes, iguales pretensiones y sobre los mismos hechos contenidos en la primera demanda.

Es criterio de este Tribunal que la nueva demanda presentada por la empresa es a todas luces improcedente, en vista de que la primera acción aún está pendiente de decisión por esta Superioridad, en atención al recurso de apelación interpuesto por el actor. Lo antes expuesto nos indica que se ha producido la figura conocida como "Litispendencia", la cual se encuentra contemplada en el artículo 663 del Código Judicial, que a la letra dispone lo siguiente:

> "Artículo 663. Propuesta una demanda no podrá iniciarse un nuevo proceso entre las mismas partes, sobre la misma pretensión y los mismos hechos, cualquiera que sea la vía que se elija, mientras está pendiente la primera.

El Juez ordenará de oficio o a petición de parte el rechazo de la segunda demanda, comprobada la existencia de la anterior y que en ésta figuran las mismas partes y versa sobre la misma causa y sobre los mismos hechos."

El Sustanciador conceptúa, que comprobada la existencia de los preceptos señalados en el artículo, no queda otra alternativa que negarle curso legal a la demanda incoada.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera (Contencioso Administrativo), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción promovida por la Licenciada Alma L. Cortés en representación de PROCESADORA MARPESCA, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA MONTERO EN REPRESENTACIÓN DE ANGEL ALBERT VANELA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA DP-DOPA-1094 DEL 7 DE FEBRERO DE 2000, DICTADA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.

VISTOS:

El licenciado Carlos Ayala Montero, en nombre y representación de ANGEL ALBERT VANELA, ha instaurado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, el acto administrativo contenido en la Nota DP-DOPA-1094 del 7 de febrero de 2000, dictada por la Directora Nacional de Personal del Ministerio de Educación y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda, con la finalidad de determinar si, efectivamente, la misma cumple con los requisitos legales y jurisprudenciales para que pueda ser admitida.

Se advierte que, el libelo incoado adolece de un defecto que impide darle el trámite legal correspondiente, y que a continuación se le indica al actor.

Observa esta Superioridad que el recurrente no agotó la vía gubernativa, lo cual constituye, en nuestro medio, requisito sine qua non para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. Esto lo decimos en virtud de que, como se ha podido colegir de las constancias procesales, la parte actora solicitó en su demanda que, previo el trámite de admisión se requiriera a la entidad demandada certificación en la cual se acreditara que no había recaído decisión alguna sobre el recurso de reconsideración interpuesto. En este sentido, a foja 15 del expediente, consta certificación fechada 1° de agosto de 2000, por medio de la cual la entidad demandada respondió la petición suscrita por el Magistrado Sustanciador.

Al examinarse los documentos remitidos, aprecia esta Corporación que el Subdirector Nacional de Asesoría Legal del Ministerio de Educación certificó que el Decreto Ejecutivo 87 de 15 de mayo de 2000, mediante el cual se perfeccionó

el contenido de la Nota DP-DOPA-1094 del 7 de febrero de 2000, en la cual se le comunica al señor ANGEL ALBERT VANELA sobre el cese de sus labores, fue debidamente notificado mas no fue objeto de recurso alguno por el demandante.

Se desprende de la documentación que milita en el expediente, que la parte interesada no interpuso recurso de reconsideración, tal como lo expresa en el escrito de demanda, lo que se traduce a que no se agotó de manera efectiva la vía gubernativa, requisito indispensable para acudir ante esta Sala, de acuerdo a lo preceptuado en el Artículo 42 de la Ley 135 de 1943, modificado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1946, que a la letra dispone:

> "Artículo 42. Para ocurrir en demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es necesario que se haya agotado la vía gubernativa, lo que se entenderá cuando los actos o resoluciones respectivos no son susceptibles de ninguno de los recursos establecidos en los artículos 33, 38, 39 y 41 o se han decidido, ya se trate de actos o resoluciones definitivas, o de providencias de trámite, si estas últimas deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, de modo que le pongan término o hagan imposible su continuación." (Lo subrayado del Ponente)

La finalidad que persigue el agotamiento de la vía gubernativa, es ofrecerle a la Administración la oportunidad de corregir o enmendar sus propios errores, es decir, su objetivo es que la propia Administración Pública pueda revocar el acto administrativo que afecte al administrado o le cause graves perjuicios.

En atención a la deficiencia señalada, quien sustancia no tiene otra alternativa que negarle curso legal a la demanda interpuesta, en atención a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 33 de 1946, que dice:

> "Artículo 31. No se dará curso legal a la demanda que carezca de alguna de las anteriores formalidades, y su presentación no interrumpe los términos señalados para la prescripción de la acción".

En mérito de lo expuesto, el Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativo de plena jurisdicción promovida por el licenciado Carlos Ayala Montero en representación de ANGEL ALBERT VANELA.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA MONTERO EN REPRESENTACIÓN DE OSCAR CONCEPCIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, LA NOTA DP-DOPA-346 DEL 20 DE ENERO DE 2000, DICTADA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.

VISTOS:

El licenciado Carlos Ayala Montero, en nombre y representación de OSCAR CONCEPCIÓN, ha instaurado demanda contencioso administrativa de plena

jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, la Nota DP-DOPA-346 del 20 de enero de 2000, dictada por la Directora Nacional de Personal del Ministerio de Educación y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda, con la finalidad de determinar si, efectivamente, la misma cumple con los requisitos legales y jurisprudenciales para que pueda ser admitida.

Se advierte que, el libelo incoado adolece de un defecto que impide darle el trámite legal correspondiente, y que a continuación se le indica al actor.

Observa esta Superioridad que el recurrente no agotó la vía gubernativa, lo cual constituye, en nuestro medio, requisito sine qua non para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. Esto lo decimos en virtud de que, como se ha podido colegir de las constancias procesales, la parte actora solicitó en su demanda que, previo el trámite de admisión se requiriera a la entidad demandada certificación en la cual se acreditara que no había recaído decisión alguna sobre el recurso de reconsideración interpuesto. En este sentido, a foja 18 del expediente, consta certificación fechada 1° de agosto de 2000, por medio de la cual la entidad demandada respondió la petición suscrita por el Magistrado Sustanciador.

Al examinarse los documentos remitidos, aprecia esta Corporación que el Subdirector Nacional de Asesoría Legal del Ministerio de Educación certificó que el Decreto Ejecutivo 42 de 21 de marzo de 2000, mediante el cual se perfeccionó el contenido de la Nota DP-DOPA-346 del 20 de enero de 2000, en la cual se le comunica al señor OSCAR CONCEPCIÓN sobre el cese de sus labores, fue debidamente notificado mas no fue objeto de recurso alguno por el demandante.

Se desprende de la documentación que milita en el expediente, que la parte interesada no interpuso recurso de reconsideración, tal como lo expresa en el escrito de demanda, lo que se traduce a que no se agotó de manera efectiva la vía gubernativa, requisito indispensable para acudir ante esta Sala, de acuerdo a lo preceptuado en el Artículo 42 de la Ley 135 de 1943, modificado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1946, que a la letra dispone:

> "Artículo 42. Para ocurrir en demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es necesario que se haya agotado la vía gubernativa, lo que se entenderá cuando los actos o resoluciones respectivos no son susceptibles de ninguno de los recursos establecidos en los artículos 33, 38, 39 y 41 o se han decidido, ya se trate de actos o resoluciones definitivas, o de providencias de trámite, si estas últimas deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, de modo que le pongan término o hagan imposible su continuación." (Lo subrayado del Ponente)

La finalidad que persigue el agotamiento de la vía gubernativa, es ofrecerle a la Administración la oportunidad de corregir o enmendar sus propios errores, es decir, su objetivo es que la propia Administración Pública pueda revocar el acto administrativo que afecte al administrado o le cause graves perjuicios.

En atención a la deficiencia señalada, quien sustancia no tiene otra alternativa que negarle curso legal a la demanda interpuesta, en atención a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 33 de 1946, que dice:

> "Artículo 31. No se dará curso legal a la demanda que carezca de alguna de las anteriores formalidades, y su presentación no interrumpe los términos señalados para la prescripción de la acción".

En mérito de lo expuesto, el Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la

República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativo de plena jurisdicción promovida por el licenciado Carlos Ayala Montero en representación de OSCAR CONCEPCIÓN.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA MONTERO EN REPRESENTACIÓN DE MARQUISELDA ONEYRA GARCÍA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA DP-DOPA-345 DEL 1° DE FEBRERO DE 2000, DICTADA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.

VISTOS:

El licenciado Carlos Ayala Montero, en nombre y representación de MARQUISELDA ONEYRA GARCÍA, ha instaurado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, el acto administrativo contenido en la Nota DP-DOPA-345 del 1° de febrero de 2000, dictada por la Directora Nacional de Personal del Ministerio de Educación y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda, con la finalidad de determinar si, efectivamente, la misma cumple con los requisitos legales y jurisprudenciales para que pueda ser admitida.

Se advierte que, el libelo incoado adolece de un defecto que impide darle el trámite legal correspondiente, y que a continuación se le indica al actor.

Observa esta Superioridad que el recurrente no agotó la vía gubernativa, lo cual constituye, en nuestro medio, requisito sine qua non para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. Esto lo decimos en virtud de que, como se ha podido colegir de las constancias procesales, la parte actora solicitó en su demanda que, previo el trámite de admisión se requiriera a la entidad demandada certificación en cual se acreditara que no había recaído decisión alguna sobre el recurso de reconsideración interpuesto. En este sentido, a foja 14 del expediente, consta certificación fechada 1° de agosto de 2000, por medio de la cual la entidad demandada respondió la petición suscrita por el Magistrado Sustanciador.

Al examinarse los documentos remitidos, aprecia esta Corporación que el Subdirector Nacional de Asesoría Legal del Ministerio de Educación certificó que el Decreto Ejecutivo 95 de 15 de mayo de 2000, mediante el cual se perfeccionó el contenido de la Nota DP-DOPA-345 del 1° de febrero de 2000, en la cual se le comunica a la señora MARQUISELDA GARCÍA sobre el cese de sus labores, fue debidamente notificado mas no fue objeto de recurso alguno por el demandante.

Se desprende de la documentación que milita en el expediente, que la parte interesada no interpuso recurso de reconsideración, tal como lo expresa en el escrito de demanda, lo que se traduce a que no se agotó de manera efectiva la vía gubernativa, requisito indispensable para acudir ante esta Sala, de acuerdo a lo preceptuado en el Artículo 42 de la Ley 135 de 1943, modificado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1946, que a la letra dispone:

> "Artículo 42. Para ocurrir en demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es necesario que se haya agotado la vía gubernativa, lo que se entenderá cuando los actos o resoluciones respectivos no son susceptibles de ninguno de los recursos establecidos en los artículos 33, 38, 39 y 41 o se han decidido, ya se trate de actos o resoluciones definitivas, o de providencias de trámite, si estas últimas deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, de modo que le pongan término o hagan imposible su continuación." (Lo subrayado del Ponente)

La finalidad que persigue el agotamiento de la vía gubernativa, es ofrecerle a la Administración la oportunidad de corregir o enmendar sus propios errores, es decir, su objetivo es que la propia Administración Pública pueda revocar el acto administrativo que afecte al administrado o le cause graves perjuicios.

En atención a la deficiencia señalada, quien sustancia no tiene otra alternativa que negarle curso legal a la demanda interpuesta, en atención a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 33 de 1946, que dice:

> "Artículo 31. No se dará curso legal a la demanda que carezca de alguna de las anteriores formalidades, y su presentación no interrumpe los términos señalados para la prescripción de la acción".

En mérito de lo expuesto, el Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativo de plena jurisdicción promovida por el licenciado Carlos Ayala Montero en representación de MARQUISELDA ONEYRA GARCÍA.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA, EN REPRESENTACIÓN DE MAURA SANTANDER DE CAMARENA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA NO. DNP-DOPA-1080 DE 7 DE FEBRERO DE 2000, DICTADA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIDOS (22) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Ayala, actuando en nombre y representación de MAURA SANTANDER DE CAMARENA, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, la Nota No. DNP-DOPA-1080 de 7 de febrero de 2000, dictada por la Dirección Nacional de Personal del Ministerio de Educación, y para que se hagan otras declaraciones.

Al resolver sobre la admisibilidad de la demanda, quien suscribe observa que la misma es inadmisible, ya que la demandante en el apartado de lo que se demanda solicita que se declare nula, por ilegal, la Nota DNP-DOPA-1080 de 7 de febrero de 2000, dictada por la Directora Nacional de Personal del Ministerio de Educación, aduciéndolo como acto principal, en vez del Decreto Ejecutivo No.87 de 15 de mayo de 2000, por medio del cual se dejó sin efectos a partir del 7 de

febrero de 2000 el Decreto Ejecutivo 25 de 14 de febrero de 1995, en lo que respecta al nombramiento que se le hizo a Maura de Camarena, tal como lo certifica el Subdirector Nacional de Asesoría Legal en la certificación visible a foja 15 del expediente. Este Decreto Ejecutivo para los efectos de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción constituye el acto principal, ya que el mismo contiene la decisión de destitución del señor Angel Martínez y no la Nota No. DOPA-1080 de 7 de febrero de 2000, puesto que la misma es sólo la notificación de dicha decisión dictada por la autoridad administrativa.

En virtud de que la actora omitió los requisitos mencionados su demanda no debe admitirse, según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Carlos Ayala, actuando en nombre y representación de MAURA SANTANDER DE CAMARENA, para que se declare nula, por ilegal, la Nota No. DNP-DOPA-1080 de 7 de febrero de 2000, dictada por la Dirección Nacional de Personal del Ministerio de Educación, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifiquese,

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA, EN REPRESENTACIÓN DE ANGEL MARTINEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA NO. DNP-DOPA-1017 DE 7 DE FEBRERO DE 2000, EXPEDIDA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIDOS (22) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Ayala, actuando en nombre y representación de ANGEL MARTINEZ, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, el acto administrativo contenido en la Nota No. DNP-DOPA-1017 de 7 de febrero de 2000, dictado por la Dirección Nacional de Personal del Ministerio de Educación, y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda a fin de determinar si la misma cumple con los requisitos mínimos para su admisión.

Observa quien suscribe que la demanda es inadmisible, toda vez que la parte actora en el apartado de lo que se demanda solicita que se declare nula, por ilegal, el acto administrativo contenido en la Nota DNP-DOPA-1017 de 7 de febrero de 2000, dictado por la Directora Nacional de Personal del Ministerio de Educación, aduciéndolo como acto principal, en vez del Decreto Ejecutivo No.87 de 15 de mayo de 2000. Este último documento para los efectos de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción constituye el acto principal, pues el mismo contiene la decisión de destitución del señor Angel Martínez y no la Nota No. DOPA-1017 de 7 de febrero de 2000, dado que la misma sólo representa la notificación de dicha decisión dictada por la autoridad administrativa.

En virtud de que la actora omitió los requisitos mencionados su demanda no debe admitirse, según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Carlos Ayala, actuando en nombre y representación de ANGEL MARTINEZ, para que se declare nulo, por ilegal, el acto administrativo contenido en la Nota No. DP-DOPA-1017 de 7 de febrero de 2000, dictado por la Dirección Nacional de Personal del Ministerio de Educación, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifiquese,

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LCDO. CÉSAR RUILOBA, EN REPRESENTACIÓN DE EDUARDO SMALL, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 78-99 DE 6 DE OCTUBRE DE 1999, DICTADA POR EL COMANDANTE PRIMER JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE PANAMÁ Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIDOS (22) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Procuradora de la Administración ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema recurso de apelación contra la Resolución de 22 de febrero de 2000 que admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por el licenciado César Rubiola, en representación de EDUARDO SMALL, para que se declare nula, por ilegal, la Orden General No. 78-99 de 6 de octubre de 1999, dictada por el Comandante Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos de Panamá y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador admitió la demanda por considerar que la misma reunía todos los requisitos para su admisión.

La Procuradora de la Administración considera que la demanda no debe ser admitida, ya que la misma adolece de varios defectos formales que la hacen inadmisible. En primer lugar, señala que si bien la actora presenta copia autenticada de la Resolución No. 78-99 de 6 de octubre de 1999, dictada por el Comandante Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos de Panamá y de su acto confirmatorio, en las mismas no existe constancia de su notificación al señor Eduardo Small o a su representante judicial. En segundo lugar, indica que la actora al realizar la designación de las partes, señala como parte demandada a CHRISTIAN ARNHEITHER como Director de la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos de Panamá en vez de Comandante Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos de Panamá. En tercer lugar, manifiesta que el demandante no enuncia ni desarrolla el concepto de la violación de las normas legales que estima conculcadas con el acto impugnado.

En cuanto a lo señalado por la parte actora en el sentido de que si bien es cierto que las copias tanto la resolución impugnada como su acto confirmatorios se encuentran autenticadas, pero que en las mismas no hay constancia de su notificación, el resto de los Magistrados que componen la Sala Tercera consideran que no le asiste la razón a la Procuradora de la Administración, toda vez que se observa que la Orden General No.96-99, la cual reitera la Orden General No. 78-99 y agota la vía gubernativa, fue expedida el 15 de diciembre de 1999 y la demanda contencioso administrativa fue presentada el 15 de febrero de 2000, por lo que se considera que la Orden General No.78-99 de 15 de diciembre de 1999 le fue notificada a la actora en base al artículo 1007

del Código Judicial que establece que surtirá los mismos efectos que una notificación personal "si la persona a quien debe notificarse una resolución se refiere a dicha resolución en escrito suyo o en otra forma se manifiesta sabedora o enterada de ella por cualquier medio escrito, o hace gestión con relación a la misma..."

No obstante lo anterior, tiene razón la Procuradora de la Administración al señalar que la demanda incumple el numeral 1 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, pues el actor al hacer la designación de las partes, designó al señor CHRISTIAN ARNHEITHER como Director de la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos de Panamá en vez de Comandante Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

Por otro lado, tal como lo indica la Procuradora de la Administración, la demanda no cumple con el requisito previsto en el numeral 4 del artículo 28 de la Ley 33 de 1946, que requiere que en aquélla se exprese el concepto de la violación. En el presente caso, el demandante no expresa las modalidades en que se ha producido la infracción literal de los preceptos legales la cual puede darse por violación directa, interpretación errónea o indebida aplicación, tal como lo ha señalado esta Sala en jurisprudencia constante.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, PREVIA REVOCATORIA de la resolución de 22 de febrero de 2000, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por el licenciado César Rubiola, en representación de EDUARDO SMALL, para que se declare nula, por ilegal, la Orden General No. 78-99 de 6 de octubre de 1999, dictada por el Comandante Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos de Panamá y para que se hagan otras declaraciones.

Notifiquese y Cumplase,

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA EN REPRESENTACIÓN DE SIBILA DE BENJAMIN, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTIFICACIÓN NO. 04021 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, REALIZADA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE CONTABILIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Carlos Ayala, actuando en representación de SIBILA DE BENJAMIN, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el acto contenido en la Notificación No. 04021 de 25 de septiembre de 1997, realizado por la Directora Nacional de Contabilidad, de la Contraloría General de la República, y para que se hagan otras declaraciones.

I. EL ACTO IMPUGNADO

Mediante el acto impugnado, la Contraloría General de la República informó a la funcionaria SIBILA DE BENJAMIN, que en virtud de los resultados del Proceso de Clasificación de Cargos efectuado por dicha entidad, le había sido asignado

el cargo de SUPERVISOR DE DEDUCCIONES VARIAS, GRADO 10, en la Dirección de Nacional de Contabilidad de dicha entidad.

El Acto de Notificación 04021 contenía además, un listado de las tareas que debía desempeñar la funcionaria DE BENJAMIN, en el ejercicio de su cargo. (fs. 1-2 del expediente).

II. CARGOS DE ILEGALIDAD DEL RECURRENTE

a) La pretensión del demandante

El punto medular de la impugnación sostiene, que al momento de clasificarse la posición de la funcionaria SIBILA DE BENJAMIN, no se tomaron en cuenta algunas tareas que desempeñaba, ni sus funciones fueron equiparadas a la de otros funcionarios que realizan labores semejantes dentro de la Institución, por lo que se violaron normas que rigen el proceso de clasificación de cargos.

Agrega el actor, que las autoridades de la Contraloría General de la Nación no evaluaron correctamente las tareas realizadas por la funcionaria, lo que trajo como consecuencia que no fueran conscientes de la realidad de su labor y por ende, le clasificaran en un cargo y grado inferior al que le correspondía.

b) Cargos de ilegalidad

Los cargos de ilegalidad que sustentan el recurso, son los siguientes:

En primer término, se dice violado en concepto de interpretación errónea, el artículo 8 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, que es del tenor siguiente:

> "Artículo 8: La selección y promoción del personal de la Contraloría General se realizará tomando en consideración los méritos personales y profesionales. Para los fines señalados en este artículo, se instituirá en el Reglamento Interno de dicho organismo un sistema de clasificación de cargos y uno de selección que garantice que el escogido es idóneo para desempeñar el cargo respectivo ..."

La infracción se produce, en concepto del demandante, al describir el cargo de SIBILA DE BENJAMIN y asignarle un grado específico, sin considerar funciones que ésta realiza, y que la colocarían en una posición superior.

La segunda disposición que se dice infringida, recae en el artículo primero del Decreto No. 195 del 17 de septiembre de 1997, en virtud del cual se ordena la actualización e institución, del Sistema de Clasificación de Cargos del personal no directivo de la Contraloría General de la República.

El actor sostiene, que la norma resulta transgredida en concepto de interpretación errónea, toda vez que la Notificación No. 04021 no actualiza las funciones, cargo, ni el grado de SIBILA DE BENJAMIN.

Seguidamente, el recurrente considera transgredido el subpunto 3.2 del Manual Descriptivo de Cargos de la Dirección de Recursos Humanos de la Contraloría General de la República, que establece los factores que deben ser evaluados en la clasificación de cargos de los empleados de esta dependencia estatal. Estos factores son: conocimientos y experiencia adquirida; complejidad de las tarea; guías de procedimiento disponibles; responsabilidad e impacto de errores; suspensión recibida y ejercida; contactos personales; propósito de los contactos; ambiente y exigencias físicas del puesto.

La infracción se explica en los siguientes términos:

> "La norma transcrita se ha violado de forma directa por falta de aplicación ya que la clasificación del cargo de mi cliente no

consideró algunos de los aspectos que describe dicha norma, entre ellos el relativo a la complejidad de las tareas y el grado de responsabilidad o impacto de los errores. Es obvio que de haberse ponderado estos factores se hubiera clasificado a mi cliente realmente en el cargo que en la práctica desempeña."

Por último, se dice violado el artículo 24 del Reglamento Interno de la Contraloría General de la República, conforme al cual corresponde al superior inmediato de cada servidor, comunicarle por escrito las funciones básicas e instrucciones específicas del cargo a desempeñar.

Se aduce que la autoridad demandada incurrió en errónea interpretación de esta norma reglamentaria, toda vez que la descripción que se hace en el acto impugnado, de las funciones que desempeña SIBILA DE BENJAMIN, omite algunas tareas que ésta había venido ejecutando en el cargo.

III. INFORME RENDIDO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA

Corre a fojas 14-18 del expediente, la Nota No. 2151-Leg de 17 de septiembre de 1998, contentiva del informe explicativo de conducta suscrito por la Directora Nacional de Contabilidad, autoridad responsable de la emisión del acto impugnado.

Este documento detalla, de manera minuciosa, la metodología utilizada en el Proceso de Clasificación de Cargos al que fueron sometidos los funcionarios de la dependencia estatal, procedimiento que se inició en 1986, fue interrumpido en 1989, y luego reactivado el 18 de mayo de 1995.

En lo que atañe a la funcionaria SIBILA DE BENJAMIN, se señalan las diversas etapas de su proceso evaluativo, que culminó con la clasificación de la servidora pública, en el cargo de SUPERVISOR DE DEDUCCIONES VARIAS, GRADO 10, el 25 de septiembre de 1997, según Formulario de Notificación 04021.

Señala además, que la funcionaria propuso recursos administrativos contra el acto impugnado, los que luego de analizados cuidadosamente, fueron rechazados, por considerar que la clasificación y tareas descritas para el cargo de SUBILA DE BENJAMIN, eran inherentes al cargo asignado.

Por ende concluye, que no se ha violentado derecho alguno a la recurrente, dado que en su caso se cumplieron todas las etapas y procedimientos, contemplados en el Sistema de Clasificación de Cargos.

IV. OPINION DE LA PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACION

La representante del Ministerio Público, a través de Vista Fiscal No.435 de 19 de noviembre de 1998, visible a fojas 19-28 del expediente, solicitó a esta Superioridad que se negara la pretensión de la demandante, por considerar que el acto impugnado, no es violatorio del ordenamiento legal.

La colaboradora de la instancia acoge los planteamientos de la autoridad responsable del acto demandado, en el sentido de que la clasificación y descripción del cargo impugnado, fue el resultado de un cuidadoso proceso en que participó la demandante, por lo que mal puede aseverar que fueron conculcados sus derechos subjetivos.

Al examinar los cargos de violación endilgados, destacó que el artículo 8 de la Ley No. 32 de 8 de noviembre de 1984 que se dice infringido, constituye el fundamento legal del Proceso de Clasificación de Cargos llevado a cabo por la Contraloría General de la República, siendo precisamente por mandato de aquella norma, que se inició el proceso de clasificación.

Desestima los restantes cargos de ilegalidad presentados, al señalar que el acto recurrido es congruente con los resultados del proceso de Clasificación

de Cargos del personal no directivo de la Contraloría General de la República, y que la descripción del cargo se ajusta a las funciones que desempeña la demandante.

La señora Procuradora manifiesta finalmente, que el proceso que nos ocupa no se origina en la clasificación o descripción del cargo de SUBILA DE BENJAMIN, sino que se encuentra motivado, como otros presentados con idénticas pretensiones por funcionarios de la Contraloría General de la República, en la circunstancia de que paralelo al proceso de clasificación, la Contraloría había iniciado el trámite de ajuste y equiparación salarial de sus funcionarios, de forma tal que a cada cargo y grado, correspondería un salario determinado.

En este contexto sugiere, que la disconformidad de los servidores públicos se produce por razón del salario que les corresponde en virtud del cargo clasificado, y no a la descripción del cargo asignado, o las funciones inherentes al mismo.

V. EXAMEN DE LA SALA TERCERA

Una vez surtidos todos los trámites pertinentes, se procede a decidir sobre el mérito de la demanda.

Es preciso señalar en primer término, que en el caso de la señora DE BENJAMIN, como en el de otros funcionarios sometidos al proceso de clasificación reiniciado en 1995 por la Contraloría General de la República, se le brindó oportunidad a los propios funcionarios de colaborar en la descripción de los cargos que ocupaban, en vías de clasificar la posición de manera adecuada, y así lo hizo la recurrente en el Formulario de Actualización de Descripción del Cargo. Las tareas que adicicionó la señora DE BENJAMIN al completar el formulario, fueron no obstante consideradas como relacionadas o comprendidas en el perfil del cargo. (cfr. fojas 01-04 del expediente administrativo)

Según consta en los antecedentes remitidos a esta Superioridad, la señora DE BENJAMIN, luego de clasificada en el cargo de Supervisora de Deducciones Varias, presentó recursos impugnativos contra dicha clasificación, que fueron negados por el Comité Reconsideración y por el Comité de Apelación, señalándose que las tareas adicionadas estaban contenidas en la descripción genérica del cargo.

Ante esta Sala, la interesada presentó como parte del acervo probatorio, un peritaje rendido por la señora ARGELIA ZAMBRANO, Administradora Pública con Especialización en Recursos Humanos (cfr. fojas 54-56), en que se señala básicamente, que se había realizado una inadecuada ponderación de los factores de evaluación, por lo que sugería variar el método de análisis del cuestionario informativo del cargo, realizar observación directa del puesto, entrevistar tanto al ocupante como al jefe inmediato, y finalmente, colocar a la funcionaria en el cargo de Supervisora Grado 11.

Al efecto, la Corte observa que el informe pericial no establece, de manera concreta, de qué manera fueron indebidamente ponderados los factores evaluados, y cómo podría producirse, cuantitativamente, un aumento en la ponderación que llevara a la señora DE BENJAMIN a una posición distinta a la asignada, máxime cuando la Directora Nacional de Contabilidad ha señalado, que en la sección de Deducciones Varias sólo existe, según la Clasificación de Cargos, un nivel de Supervisión, titulado Supervisor de deducciones varias, Grado 10.

En cuanto al examen de legalidad de los cargos invocados, la Corte ha de externar lo siguiente:

El primer cargo de ilegalidad, dice relación con la supuesta violación del artículo 8 de la Ley 32 de 1984. Por confrontada la norma, con el argumento del demandante, la Sala comparte el criterio externado por la Procuraduría de la Administración, en el sentido de que esta excerta legal sólo establece los

parámetros para llevar a cabo la escogencia y movimiento de personal idóneo en la Contraloría General de la República, y constituye el fundamento jurídico del Proceso de Clasificación de Cargos, por lo que no representa una conculcación a los derechos del demandante.

En relación a la supuesta violación del artículo 1 de Decreto No. 195 del 17 de septiembre de 1997, que ordena la actualización del sistema de clasificación de cargos del personal no directivo de la Contraloría, la Sala estima procedente negar el cargo invocado, pues contrario a lo señalado por el actor, la Notificación No. 04021 de 25 de septiembre de 1997 sí contiene una descripción y clasificación del cargo de un funcionario no directivo de la Contraloría General, esto es, la señora SIBILA DE BENJAMIN, detallando los objetivos y las tareas inherentes al cargo asignado, en forma diáfana y concreta.

De acuerdo a lo anterior, también procede desestimar el cargo de ilegalidad aducido en relación al artículo 24 del Reglamento Interno de la Contraloría General de la República, que dispone la obligatoriedad, para el superior inmediato de un servidor público, de suministrarle por escrito, las funciones básicas e instrucciones del cargo a desempeñar.

Sobre el particular, la Corte advierte que el acto impugnado se ajusta a la exigencia reglamentaria, toda vez que se le comunicó por escrito, a SIBILA DE BENJAMIN, las tareas y labores que le correspondería desempeñar en ejercicio del cargo de SUPERVISORA DE DEDUCCIONES VARIAS (cfr. fojas 1-2 del expediente)

Finalmente, en lo que concierne a la alegada violación del subpunto 3.2 del Manual para la aplicación del Sistema de Clasificación de Cargos, mismo que establece la metodología a seguir en la evaluación de cada funcionario para clasificar el cargo y grado que le corresponde, la Sala conceptúa que no se ha producido la infracción alegada.

Ello obedece, a que las constancias que se adjuntaron al expediente, revelan que el ente demandado calificó a la señora DE BENJAMIN conforme a los criterios, método y sistema de ponderación legalmente establecidos, asignándole a cada aspecto evaluado, un porcentaje acorde con los parámetros previstos en dicha disposición, concluyéndose que el título, objetivo y tareas que desempeñaba SIBILA DE BENJAMIN, correspondían al cargo de SUPERVISOR DE DEDUCCIONES VARIAS, y que la complejidad y responsabilidad del cargo, habían sido efectivamente evaluadas, para los efectos de la clasificación.

Como ha quedado expuesto en párrafos anteriores, la prueba aportada por la demandante, no invalida la ponderación realizada por la Contraloría General en este caso, ni evidencia una evaluación incorrecta de la complejidad de sus funciones, constatándose que el perfil del cargo asignado, encaja en las tareas que realiza la funcionaria.

Al desestimarse los cargos de ilegalidad aducidos, procede negar la pretensión invocada por el recurrente.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, el Acto de Notificación 04021 de 25 de septiembre de 1997, dictado por la Directora Nacional de Contabilidad de la Contraloría General de la República.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.

(fdo.) JANINA SMALL

Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CANDELARIO SANTANA, EN REPRESENTACIÓN DE JUAN DOMÍNGUEZ BATISTA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 1-46-99 DE 1 DE JUNIO DE 1999, DICTADO POR EL GERENTE GENERAL DEL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO EN QUE INCURRIÓ EL COMITÉ EJECUTIVO DE DICHO BANCO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La señora Procuradora de la Administración interpuso recurso de apelación contra la Resolución de 21 de enero de 2000, mediante la cual el Magistrado Sustanciador admitió la demanda contenciosa-administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Candelario Santana, en representación del señor JUAN DOMÍNGUEZ BATISTA.

Según la recurrente, la resolución impugnada debe revocarse porque a través de ella se admitió la aludida demanda a pesar de que el apoderado judicial del actor no pidió al Magistrado Sustanciador que, antes de admitirla, requiriera del funcionario demandado una certificación en la que conste si el recurso de apelación interpuesto ante el Comité Ejecutivo del Banco de Desarrollo Agropecuario fue o no resuelto (fs. 30-33).

Al oponerse al recurso de apelación impetrado, el licenciado Santana alegó que el artículo 46 de la Ley 135 de 1943 lo que exige es que se pida al Magistrado Sustanciador que requiera del funcionario demandado "copia del acto acusado" cuando se niegue la expedición de la misma, no siendo así cuando se aporta la certificación en que se ha pedido a dicho funcionario que indique si se ha resuelto o no el recurso de reconsideración o de apelación, ya que ello significaría compeler al sustanciador a suplir las deficiencias del silencio administrativo. Indicó también dicho letrado, que en el informe de conducta rendido por el Director General del Banco de Desarrollo Agropecuario, éste no da respuesta que indique que exista decisión ni constancia de que se haya resuelto la apelación incoada; además, la jurisprudencia citada no es exactamente aplicable al caso sub-júdice y no se trata de una doctrina probable (fs. 38-39).

CONSIDERACIONES DEL RESTO DE LOS MAGISTRADOS DE LA SALA TERCERA

El agotamiento de la vía gubernatrativa es presupuesto procesal indispensable para acceder a la jurisdicción contenciosa-administrativa y como tal, debe probarse plenamente por parte del interesado, mediante la presentación de copia autenticada del acto que pone fin al negocio o actuación administrativa, tal como se desprende de los artículos 22 y 25 de la Ley 33 de 1946.

Siendo el silencio administrativo uno de los medios a través de los cuales se agota la vía administrativa, quien lo alegue debe probarlo plenamente. Ello significa que la carga de la prueba de este hecho recae en la persona del demandante. La jurisprudencia de la Sala ha establecido que para probar el silencio administrativo es necesario aportar copia de la certificación del funcionario demandado en que conste que el recurso interpuesto no ha sido resuelto y, en caso de que esta certificación también haya sido negada, el actor debe aportar copia del escrito en que la solicitó y, adicionalmente, pedir al Magistrado Sustanciador que a su vez requiera del funcionario demandado la certificación previamente negada.

La jurisprudencia de la Sala, interpretando el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, en concordancia con los artículos 22 y 25 de la Ley 33 de 1946, ha considerado que el requerimiento que ha de hacer el Magistrado Sustanciador al funcionario demandado a fin de obtener la certificación antes aludida, opera a instancia de la parte demandante y no de oficio, toda vez que sobre ésta última recae la carga de la prueba del silencio administrativo. Al respecto existen

abundantes pronunciamientos de la Sala, entre ellos, la Resolución de 9 de abril de 1996, en cuya parte medular se dijo:

> "... es requisito sine qua non tal como lo estatuye el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, que el actor no solamente solicite ante la administración que certifique el silencio o negativa tácita de su pretensión para que ésta se acredite debidamente, sino que además es indispensable, si dicho ente no se pronuncia, que a su vez el demandante requiera a esta Corporación de Justicia para que solicite al ente demandado la información antes descrita ...
>
> De obviarse y por tanto no efectuarse esta última solicitud por parte del actor, la Corte no puede proceder a requerir esta información de la institución demandada, ya que la misma se realiza únicamente a petición de parte; y por consiguiente, el demandante no comprueba fehacientemente el agotamiento de la vía gubernativa como se ha expresado con anterioridad."

Más recientemente, son consultables las resoluciones de 31 de marzo de 2000 (Mirka Morán contra el Banco Hipotecario Nacional); 31 de marzo de 2000 (Argelis Aguilar contra el Banco Hipotecario Nacional) y 27 de julio de 2000 (Saúl Quiróz contra la Asamblea Legislativa).

Por los motivos expuestos, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, PREVIA REVOCATORIA de la Resolución de 21 de enero de 2000, NO ADMITE la demanda contenciosa-administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Candelario Santana, en representación de JUAN DOMÍNGUEZ BATISTA, para que se declare nulo, por ilegal, el Resuelto N° 1-46-99 de 1 de junio de 1999, dictado por el Gerente General del Banco de Desarrollo Agropecuario y la negativa tácita por silencio administrativo en que incurrió el Comité Ejecutivo de dicho Banco y para que se haga otras declaraciones.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA, EN REPRESENTACIÓN DEL YIRABEL DE FLORES, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 152 DE 16 DE DICIEMBRE DE 1999, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Ayala, en representación de la señora YARIBEL DE FLORES, promovió recurso de apelación contra la Resolución de 16 de junio de 2000, por medio de la cual el Magistrado Sustanciador no admitió la demanda contenciosa-administrativa de plena jurisdicción por él interpuesta, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 152 de 16 de diciembre de 1999, dictada por el Director General de Carrera Administrativa y para que se haga otras declaraciones.

Como el recurrente no sustentó su alzada a pesar de habérsele concedido el término legal respectivo, el resto de los Magistrados que integran la Sala, con

fundamento en el artículo 1122 del Código Judicial, proceden a declarar desierto el recurso impetrado.

De consiguiente, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARAN DESIERTO el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Carlos Ayala, en representación de la señora YARIBEL DE FLORES, contra la Resolución de 16 de junio de 2000, expedida por el Magistrado Sustanciador.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA EN REPRESENTACIÓN DE ECBERTO MORALES, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN EL RESUELTO N° 035-99 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1999, EMITIDO POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La señora Procuradora de la Administración, mediante su Vista Fiscal N° 257 de 29 de mayo de 2000, ha interpuesto recurso de apelación contra el auto de 13 de abril de 2000, mediante el cual el Magistrado sustanciador admitió la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Carlos Ayala, en representación de Ecberto Morales, para que se declare nulo, por ilegal, el acto administrativo contenido en el Resuelto N° 035-99 de 15 de noviembre de 1999, emitido por el Gerente General del Instituto de Seguro Agropecuario y para que se haga otras declaraciones.

En su escrito de apelación la señora Procuradora de la Administración, indicó que Ecberto Morales dejó precluir la oportunidad procesal de ser escuchado en segunda instancia y consecuentemente de agotar la vía gubernativa, porque mediante un escrito dirigido al Gerente General del Instituto de Seguro Agropecuario de 18 de noviembre de 1999 se notificó de la Resolución N° 035-99 de 15 de noviembre de 1999, invocando recurso de reconsideración con apelación en subsidio (fs. 2 y 13 del cuadernillo judicial), el cual fue contestado por el funcionario demandado mediante el Resuelto R.R.-002 de 21 de febrero de 2000, manteniendo en todas sus partes el acto impugnado y advirtiendo al recurrente que contra aquélla resolución procede recurso de apelación. Agrega la señora Procuradora que el señor Ecberto Morales se notificó el 23 de marzo de 2000 de la resolución que resuelve la reconsideración, sin que al 31 de marzo de 2000 hubiera sustentado el recurso de apelación (fs. 20 a 26).

El licenciado Carlos Ayala Montero, representante judicial de Ecberto Morales, presentó escrito de oposición al recurso de apelación y en el mismo indicó lo siguiente:

> "... mi cliente fue notificado el día 23 de marzo de 2000 del resuelto N° RR-002-2000 del 21 de febrero de 2000, por el cual el señor Gerente General del Instituto de Seguro Agropecuario mantiene su destitución y le advierte que puede ejercer recurso de apelación ante la Junta Directiva del I.S.A. pero para esa fecha, 23 de marzo de 2000, YA LA INSTITUCIÓN HABÍA INCURRIDO EN SILENCIO ADMINISTRATIVO.

> En autos consta que mi cliente presentó recurso de reconsideración en contra de su destitución el día 18 de noviembre de 1999, dentro de los cinco días que le otorga la ley para interponer dicho recurso. Este hecho además es reconocido por la resolución de 21 de febrero que le sirve a la Procuradora para promover su apelación, cuando en el hecho segundo de los considerandos de la misma se describe que mi cliente presentó oportunamente recurso de reconsideración.
> ...
> Mi cliente solicitó que se certificara la existencia del silencio administrativo en fecha 24 de febrero del presente, tal como consta en autos, lo cual no fue tampoco certificado por la Institución demandada, de donde se colige que para esa fecha, 24 de febrero de 2000, aún no se había producido la respuesta a la solicitud de reconsideración de mi cliente.
>
> ... Obsérvese que nuestra demanda fue ingresada a este despacho el día 15 de marzo, y para esa fecha, aún no se había notificado a mi cliente de la resolución que resuelve su reconsideración, lo cual ocurrió el 23 de marzo, por lo que en el libelo de la demanda se alega que se incurrió en silencio administrativo y consecuentemente con ese hecho se agotó la vía gubernativa." (fs. 30 a 32).

El resto de los Magistrados que integran la Sala consideran que no le asiste la razón a la señora Procuradora de la Administración, puesto que tal como lo indicó la parte demandante en su escrito de oposición al recurso de apelación, el 18 de noviembre de 1999 el señor Ecberto Morales se notificó del Resuelto N° 035-99 de 15 de noviembre de 1999 y a la vez presentó recurso de reconsideración con apelación en subsidio, posteriormente, el 17 de marzo de 2000, interpuso la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción cuya admisión ahora se impugna, en la cual (f. 9) pidió a la Sala que oficiara la constancia o certificación del silencio administrativo, por haberle sido infructuosa la solicitud que a este efecto hizo ante el funcionario demandado.

El 12 de abril de 2000 el Gerente General del Instituto de Seguro Agropecuario remitió a esta Sala Tercera copias debidamente autenticadas de varios documentos que le fueron solicitados, entre los que se encuentra el Resuelto N° 002-2000 de 21 de febrero de 2000, mediante el cual se resuelve el recurso de reconsideración.

Como se observa, la resolución del recurso de reconsideración fue emitida mucho después del silencio administrativo necesario para agotar la vía gubernativa.

Desde que se interpuso oportunamente el recurso de reconsideración con apelación en subsidio el 19 de noviembre de 1999 (f. 13), comenzaron a correr los dos meses del silencio administrativo, el cual quedó debidamente configurado el 19 de enero de 2000, a partir de esa fecha, el demandante contaba con dos meses para interponer la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción ante esta Superioridad, lo cual hizo a tiempo el 17 de marzo de 2000 (f. 9 y reverso). Fue con posterioridad a la configuración del silencio administrativo que la autoridad demandada resolvió el recurso de reconsideración, o sea el 21 de febrero de 2000, y notificó al señor Ecberto Morales el 23 de marzo de 2000 (f. 12), luego que ya el mismo había recurrido ante la Sala Tercera.

No está de más señalar que el señor Ecberto Morales probó en autos a foja 3, mediante memorial con sello de recibido de 24 de febrero de 2000 que solicitó, tres días después de resuelto el recurso de reconsideración, copia autenticada de dicho recurso y "sobre el cual aún no ha recaído fallo", y el funcionario demandado no ha presentado constancia que expidió las copias solicitadas ni que certificó si el recurso había sido o no resuelto.

Así las cosas, observa el resto de la Sala que no procede lo alegado por

la señora Procuradora de la Administración en su recurso de apelación y como la demanda fue interpuesta luego de agotada la vía gubernativa en virtud de la negativa tácita por silencio administrativo (artículo 36 de la Ley 135 de 1943), es conforme a derecho su admisión, y por ello debe confirmarse al auto apelado.

En mérito de lo expuesto, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, CONFIRMA el auto de 13 de abril de 2000, mediante el cual el Magistrado sustanciador admitió la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Carlos Ayala, en representación de Ecberto Morales, para que se declare nulo, por ilegal, el acto administrativo contenido en el Resuelto N° 035-99 de 15 de noviembre de 1999, emitido por el Gerente General del Instituto de Seguro Agropecuario y para que se haga otras declaraciones.

Notifíquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JERÓNIMO MEJÍA, EN REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORA BALBANEDA MEJÍA DE PÉREZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN C.F.C. N° 3532 DE 24 DE DICIEMBRE DE 1999, DICTADA POR LA COMISIÓN DE FONDO COMPLEMENTARIO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Jerónimo Mejía, en representación de la señora BALBANEDA MEJÍA DE PÉREZ, interpuso demanda contenciosa-administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución C.F.C. N° 3532 de 24 de diciembre de 1999, dictada por la Comisión de Fondo Complementario de Prestaciones Sociales de los Servidores Públicos de la Caja de Seguro Social.

A solicitud de parte interesada y mediante Auto de 12 de julio de 2000, la Magistrada Sustanciadora pidió a la entidad demandada que certificara si los recursos de reconsideración y de apelación interpuestos contra el acto acusado fueron o no resueltos, a fin de comprobar el agotamiento de la vía gubernativa por silencio administrativo. En su contestación, mediante Nota de 16 de agosto de 2000, la demandada indicó que el recurso de reconsideración interpuesto por la asegurada MEJÍA DE PÉREZ fue resuelto mediante Resolución N° 1859 de 15 de junio de 2000, mientras que el de apelación está pendiente de decisión, ya que fue sustentado el 20 de julio de 2000 (Cfr. f. 28).

Estima la Magistrada Sustanciadora que la presente demanda contenciosa-administrativa de plena jurisdicción fue interpuesta prematuramente, esto es, antes de que se hubiese agotado de la vía gubernativa. Ello es así porque como consta a fojas 17, 24 y 28, respectivamente, la aludida demanda fue interpuesta el 22 de junio de 2000 y el recurso de apelación, que está pendiente de decisión según la certificación de la entidad demandada, fue sustentado el 20 de julio de 2000, es decir, después de la presentación de la precitada demanda ante la Sala Tercera.

De acuerdo con el artículo 25 de la Ley 33 de 1946, el agotamiento de la vía gubernativa es un presupuesto procesal indispensable para acudir a la jurisdicción contenciosa-administrativa y como en este caso la actora no ha

cumplido con el mismo, lo procedente es inadmitir su demanda.

De consiguiente, la Magistrada Sustanciadora, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contenciosa-administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Jerónimo Mejía, en representación de la señora BALBANEDA MEJÍA DE PÉREZ, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución C.F.C. N° 3532 de 24 de diciembre de 1999, dictada por la Comisión de Fondo Complementario de Prestaciones Sociales de los Servidores Públicos.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA LICENCIADA VELVITT SALMON, EN REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORA EVILA CANDANEDO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA N° 307-2000 DE 15 DE FEBRERO DE 2000, DICTADA POR LA JEFA DE LA OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Velvitt Salmon, en representación de la señora EVILA G. de CANDANEDO, interpuso demanda contenciosa-administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Nota N° 307-2000 de 15 de febrero de 2000, suscrita por la Jefa de la Oficina Institucional de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y para que se haga otras declaraciones.

Estima la Magistrada Sustanciadora que la aludida demanda no debe admitirse, en primer lugar, porque la apoderada judicial de la actora presentó copia sin autenticar de la Nota N° 307-2000 de 15 de febrero de 2000 y pidió su nulidad. En ésta simplemente se transcribe el Decreto a través del cual fue destituida la funcionaria demandante, tal como se aprecia en el contenido de dicha Nota visible a foja 5. Por tanto, este documento, que es una copia simple, no contiene el acto impugnado. Como la demandante no aportó copia autenticada del Decreto de destitución, conforme establece el artículo 44 de la Ley 135 de 1943, la demanda no debe admitirse.

Pero además, la actora no identificó adecuadamente a las partes del proceso ni a sus representantes, como ordena el numeral 1 del artículo 43 del cuerpo legal citado; ni cumplió cabalmente los requisitos formales contemplados en los numerales 3 y 4 del mismo precepto, pues, se refirió de forma conjunta y confusa a los hechos de la demanda, a las normas supuestamente violadas y al concepto de la infracción de las mismas.

Cabe anotar, finalmente, que ni el poder supuestamente otorgado por la señora de CANDANEDO a la licenciada Salmon ni la demanda contenciosa-administrativa están dirigidos a la Magistrada Presidenta de la Sala Tercera, incumpliéndose así lo estipulado en el artículo 102 del Código Judicial. Dicho poder adolece de otra grave deficiencia, que consiste en que en él se omite indicar con precisión "la pretensión o proceso para el cual se otorga", tal cual exige el numeral 2 del artículo 614 del Código Judicial.

Por las razones expuestas y con fundamento en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943, quien suscribe considera que la demanda interpuesta por la licenciada

Velvitt Salmon resulta totalmente inadmisible.

Por los motivos expuestos, la Magistrada Sustanciadora, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contenciosa-administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la licenciada Velvitt Salmon, en representación de la señora EVILA G. de CANDANEDO, para que se declare nula, por ilegal, la Nota N° 307-2000 de 15 de febrero de 2000, dictada por la Jefa de la Oficina Institucional de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y para que se haga otras declaraciones.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA EN REPRESENTACIÓN DE LUZMILA HERRERA DE CUBILLA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTIFICACIÓN NO. 03042 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, REALIZADA POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.

VISTOS:

El Licenciado Carlos Ayala, actuando en representación de LUZMILA DE CUBILLA, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el acto contenido en la Notificación No. 03042 de 25 de septiembre de 1997, realizado por el Director de Administración y Finanzas de la Contraloría General de la República, y para que se hagan otras declaraciones.

I. EL ACTO IMPUGNADO

Mediante el acto impugnado, la Contraloría General de la República informó a la funcionaria LUZMILA DE CUBILLA, que en virtud de los resultados del Proceso de Clasificación de Cargos efectuado por dicha entidad, le había sido asignado el cargo de ASCENSORISTA, GRADO 3, en la Dirección de Administración y Finanzas de dicha entidad.

El Acto de Notificación 03042 contenía además, un listado de las tareas que debía desempeñar la funcionaria DE CUBILLA, en el ejercicio de su cargo. (fs. 1 del expediente).

II. CARGOS DE ILEGALIDAD DEL RECURRENTE

a) La pretensión del demandante

El punto medular de la impugnación sostiene, que al momento de clasificarse la posición de la funcionaria LUZMILA DE CUBILLA, no se tomaron en cuenta algunas tareas que desempeñaba, ni sus funciones fueron equiparadas a la de otros funcionarios que realizan labores semejantes dentro de la Institución, por lo que se violaron normas que rigen el proceso de clasificación de cargos.

Agrega el actor, que las autoridades de la Contraloría General de la Nación no evaluaron correctamente las tareas realizadas por la funcionaria, lo que trajo como consecuencia que no fueran conscientes de la realidad de su labor y por ende, le clasificaran en un cargo y grado inferior al que le correspondía.

b) Cargos de ilegalidad

Los cargos de ilegalidad que sustentan el recurso, son los siguientes:

En primer término, se dice violado en concepto de interpretación errónea, el artículo 8 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, que es del tenor siguiente:

> "Artículo 8: La selección y promoción del personal de la Contraloría General se realizará tomando en consideración los méritos personales y profesionales. Para los fines señalados en este artículo, se instituirá en el Reglamento Interno de dicho organismo un sistema de clasificación de cargos y uno de selección que garantice que el escogido es idóneo para desempeñar el cargo respectivo ..."

La infracción se produce, en concepto del demandante, al describir el cargo de LUZMILA DE CUBILLA y asignarle un grado específico, sin considerar funciones que ésta realiza, y que la colocarían en una posición superior.

La segunda disposición que se dice infringida, recae en el artículo primero del Decreto No. 195 del 17 de septiembre de 1997, en virtud del cual se ordena la actualización e institución, del Sistema de Clasificación de Cargos del personal no directivo de la Contraloría General de la República.

El actor sostiene, que la norma resulta transgredida en concepto de interpretación errónea, toda vez que la Notificación No. 03042 no actualiza las funciones, cargo, ni el grado de LUZMILA DE CUBILLA.

Seguidamente, el recurrente considera transgredido el subpunto 3.2 del Manual Descriptivo de Cargos de la Dirección de Recursos Humanos de la Contraloría General de la República, que establece los factores que deben ser evaluados en la clasificación de cargos de los empleados de esta dependencia estatal. Estos factores son: conocimientos y experiencia adquirida; complejidad de las tarea; guías de procedimiento disponibles; responsabilidad e impacto de errores; suspensión recibida y ejercida; contactos personales; propósito de los contactos; ambiente y exigencias físicas del puesto.

La infracción se explica en los siguientes términos:

> "La norma transcrita se ha violado de forma directa por falta de aplicación ya que la clasificación del cargo de mi cliente no consideró algunos de los aspectos que describe dicha norma, entre ellos el relativo a la complejidad de las tareas y el grado de responsabilidad o impacto de los errores. Es obvio que de haberse ponderado estos factores se hubiera clasificado a mi cliente realmente en el cargo que en la práctica desempeña."

Por último, se dice violado el artículo 24 del Reglamento Interno de la Contraloría General de la República, conforme al cual corresponde al superior inmediato de cada servidor, comunicarle por escrito las funciones básicas e instrucciones específicas del cargo a desempeñar.

Se aduce que la autoridad demandada incurrió en errónea interpretación de esta norma reglamentaria, toda vez que la descripción que se hace en el acto impugnado, de las funciones que desempeña LUZMILA DE CUBILLA, omite algunas tareas que ésta había venido ejecutando en el cargo.

III. INFORME RENDIDO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA

Corre a fojas 14-18 del expediente, la Nota No. 2215-Leg de 16 de octubre de 1998, contentiva del informe explicativo de conducta suscrito por el Director de Administración y Finanzas, autoridad responsable de la emisión del acto impugnado.

Este documento detalla, de manera minuciosa, la metodología utilizada en el Proceso de Clasificación de Cargos al que fueron sometidos los funcionarios de la dependencia estatal, procedimiento que se inició en 1986, fue interrumpido en 1989, y luego reactivado el 18 de mayo de 1995.

En lo que atañe a la funcionaria LUZMILA DE CUBILLA, se señalan las diversas etapas de su proceso evaluativo, que culminó con la clasificación de la servidora pública, en el cargo de ASCENSORISTA, GRADO 3, el 25 de septiembre de 1997, según Formulario de Notificación 03042.

Señala además, que la funcionaria propuso recursos administrativos contra el acto impugnado, los que luego de analizados cuidadosamente, fueron rechazados, por considerar que la clasificación y tareas descritas para el cargo de LUZMILA DE CUBILLA, eran inherentes al cargo asignado.

Por ende concluye, que no se ha violentado derecho alguno a la recurrente, dado que en su caso se cumplieron todas las etapas y procedimientos, contemplados en el Sistema de Clasificación de Cargos.

IV. OPINION DE LA PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACION

La representante del Ministerio Público, a través de Vista Fiscal No.428 de 19 de noviembre de 1998, visible a fojas 19-29 del expediente, solicitó a esta Superioridad que se negara la pretensión de la demandante, por considerar que el acto impugnado, no es violatorio del ordenamiento legal.

La colaboradora de la instancia acoge los planteamientos de la autoridad responsable del acto demandado, en el sentido de que la clasificación y descripción del cargo impugnado, fue el resultado de un cuidadoso proceso en que participó la demandante, por lo que mal puede aseverar que fueron conculcados sus derechos subjetivos.

Al examinar los cargos de violación endilgados, destacó que el artículo 8 de la Ley No. 32 de 8 de noviembre de 1984 que se dice infringido, constituye el fundamento legal del Proceso de Clasificación de Cargos llevado a cabo por la Contraloría General de la República, siendo precisamente por mandato de aquella norma, que se inició el proceso de clasificación.

Desestima los restantes cargos de ilegalidad presentados, al señalar que el acto recurrido es congruente con los resultados del proceso de Clasificación de Cargos del personal no directivo de la Contraloría General de la República, y que la descripción del cargo se ajusta a las funciones que desempeña la demandante.

La señora Procuradora manifiesta finalmente, que el proceso que nos ocupa no se origina en la clasificación o descripción del cargo de LUZMILA DE CUBILLA, sino que se encuentra motivado, como otros presentados con idénticas pretensiones por funcionarios de la Contraloría General de la República, en la circunstancia de que paralelo al proceso de clasificación, la Contraloría había iniciado el trámite de ajuste y equiparación salarial de sus funcionarios, de forma tal que a cada cargo y grado, correspondería un salario determinado.

En este contexto sugiere, que la disconformidad de los servidores públicos se produce por razón del salario que les corresponde en virtud del cargo clasificado, y no a la descripción del cargo asignado, o las funciones inherentes al mismo.

V. EXAMEN DE LA SALA TERCERA

Una vez surtidos todos los trámites pertinentes, se procede a decidir sobre el mérito de la demanda.

Es preciso señalar en primer término, que en el caso de la señora DE

CUBILLA, como en el de otros funcionarios sometidos al proceso de clasificación reiniciado en 1995 por la Contraloría General de la República, se le brindó oportunidad a los propios funcionarios de colaborar en la descripción de los cargos que ocupaban, en vías de clasificar la posición de manera adecuada. En el caso de la señora DE CUBILLA, una vez analizadas sus funciones, se le clasificó como Ascensorista Grado 3.

Posteriormente, la prenombrada impugnó dicha clasificación, señalando en lo medular que se había omitido considerar algunas de las tarea que realiza, y que debía ser reclasificada, en consecuencia. Las impugnaciones fueron negadas por el Comité Reconsideración y por el Comité de Apelación, señalándose que las tareas adicionadas estaban contenidas en la descripción genérica del cargo.

Ante esta Sala, la interesada presentó como parte del acervo probatorio, un peritaje rendido por la señora ARGELIA ZAMBRANO, Administradora Pública con Especialización en Recursos Humanos (cfr. fojas 57-59), en que se señala básicamente, que se había realizado una inadecuada ponderación de los factores de evaluación, por lo que sugería variar el método de análisis del cuestionario informativo del cargo, realizar observación directa del puesto, entrevistar tanto al ocupante como al jefe inmediato, y finalmente, colocar a la funcionaria en el cargo de Oficinista I Grado 4.

Al efecto, la Corte observa que el informe pericial no establece, de manera concreta, de qué manera fueron indebidamente ponderados los factores evaluados, y cómo podría producirse, cuantitativamente, un aumento en la ponderación que llevara a la señora DE CUBILLA a una posición distinta a la asignada.

En cuanto al examen de legalidad de los cargos invocados, la Corte ha de externar lo siguiente:

El primer cargo de ilegalidad, dice relación con la supuesta violación del artículo 8 de la Ley 32 de 1984. Por confrontada la norma, con el argumento del demandante, la Sala comparte el criterio externado por la Procuraduría de la Administración, en el sentido de que esta excerta legal sólo establece los parámetros para llevar a cabo la escogencia y movimiento de personal idóneo en la Contraloría General de la República, y constituye el fundamento jurídico del Proceso de Clasificación de Cargos, por lo que no representa una conculcación a los derechos del demandante.

En relación a la supuesta violación del artículo 1 de Decreto No. 195 del 17 de septiembre de 1997, que ordena la actualización del sistema de clasificación de cargos del personal no directivo de la Contraloría, la Sala estima procedente negar el cargo invocado, pues contrario a lo señalado por el actor, la Notificación No. 03042 de 25 de septiembre de 1997 sí contiene una descripción y clasificación del cargo de un funcionario no directivo de la Contraloría General, esto es, la señora LUZMILA DE CUBILLA, detallando los objetivos y las tareas inherentes al cargo asignado, en forma diáfana y concreta.

De acuerdo a lo anterior, también procede desestimar el cargo de ilegalidad aducido en relación al artículo 24 del Reglamento Interno de la Contraloría General de la República, que dispone la obligatoriedad, para el superior inmediato de un servidor público, de suministrarle por escrito, las funciones básicas e instrucciones del cargo a desempeñar.

Sobre el particular, la Corte advierte que el acto impugnado se ajusta a la exigencia reglamentaria, toda vez que se le comunicó por escrito, a LUZMILA DE CUBILLA, las tareas y labores que le correspondería desempeñar en ejercicio del cargo de ASCENSORISTA (cfr. foja 1 del expediente)

Finalmente, en lo que concierne a la alegada violación del subpunto 3.2 del Manual para la aplicación del Sistema de Clasificación de Cargos, mismo que establece la metodología a seguir en la evaluación de cada funcionario para clasificar el cargo y grado que le corresponde, la Sala conceptúa que no se ha

producido la infracción alegada.

Ello obedece, a que las constancias que se adjuntaron al expediente, revelan que el ente demandado calificó a la señora DE CUBILLA conforme a los criterios, método y sistema de ponderación legalmente establecidos, asignándole a cada aspecto evaluado, un porcentaje acorde con los parámetros previstos en dicha disposición, concluyéndose que las tareas que desempeñaba LUZMILA DE CUBILLA, correspondían al cargo de ASCENSORISTA, y que las responsabilidades del cargo, habían sido efectivamente evaluadas, para los efectos de la clasificación.

Como ha quedado expuesto en párrafos anteriores, la prueba aportada por la demandante, no invalida la ponderación realizada por la Contraloría General en este caso, ni evidencia una evaluación incorrecta de sus funciones, constatándose que el perfil del cargo asignado, encaja en las tareas que realiza la funcionaria.

Al desestimarse los cargos de ilegalidad aducidos, procede negar la pretensión invocada por el recurrente.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, el Acto de Notificación 03042 de 25 de septiembre de 1997, dictado por el Director de Administración y Finanzas de la Contraloría General de la República.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE ROSAS Y ROSAS, EN REPRESENTACIÓN DE MARINO PALACIOS Y JORGE CARRILLO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO DE LA VICE-MINISTRA DE ECONOMÍA Y FINANZAS AL NO ORDENAR EL PAGO DE 12 PARTIDAS DEL XIII MES CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 1983 A 1988 Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Rosas y Rosas interpuso recurso de apelación contra el Auto de 2 de julio de 2000, mediante el cual el Magistrado Sustanciador no admitió como terceros coadyuvantes a los señores Ricardo Maldonado, Pedro Jiménez y dentro de la demanda contenciosa-administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la precitada firma forense, en representación de MARINO PALACIOS y JORGE CARRILLO, para que se declare nula, por ilegal, la negativa tácita por silencio administrativo en que incurrió la Vice-Ministra de Economía y Finanzas al no ordenar el pago de 12 partidas del XIII mes, correspondientes a los años 1983 a 1988.

La decisión del Magistrado Sustanciador se fundamenta en el hecho de que quienes solicitan que se les tenga como "terceros coadyuvantes" de la demanda también han sido afectados por la negativa tácita de la funcionaria demandada, por lo cual no podían recurrir a esta Sala en calidad de terceros interesados, sino como parte demandante dentro del proceso (fs. 104-106).

La apoderada judicial de los recurrentes estima que la resolución apelada

debe revocarse, primero, porque en ésta se confunde el rol de "coadyuvante" en un proceso contencioso-administrativo de plena jurisdicción con el rol de demandante, que tiene un tratamiento jurídico distinto en la Ley 135 de 1943. De acuerdo con el inciso segundo del artículo 43b de esta Ley, en los procesos contencioso-administrativos de plena jurisdicción únicamente se condiciona la intervención de personas diferentes al demandante a que se acredite un interés directo en las resultas del juicio, tal como lo hicieron sus representados.

Por su parte, lo atinente al ejercicio de la acción de plena jurisdicción a través de una demanda ante la Sala Tercera está contemplado los artículos 42 y 43b de l mismo cuerpo legal y los presupuestos que contemplan estas normas sólo son exigibles a quienes tienen la condición de demandantes, pero no a quienes, después de instaurada la demanda, se presentan al proceso a coadyuvar o a oponerse a las pretensiones del demandante. De ser cierto lo argumentado por el Magistrado Sustanciador, no tendría razón de ser la norma contenida en el inciso segundo del artículo 43-b antes citado, que es posterior y especial para la figura del coadyuvante.

CONSIDERACIONES DEL RESTO DE LOS MAGISTRADOS QUE INTEGRAN LA SALA

A juicio de los Magistrados que integran el resto de la Sala, no le asiste razón a la apoderada judicial del los recurrentes.

De acuerdo con el artículo 43B de la Ley 135 de 1943, en los procesos contencioso-administrativos de plena jurisdicción ciertamente pueden intervenir como terceros quienes demuestren un interés directo en el resultado del proceso. Del alcance de esta norma, sin embargo, se entienden excluidos quienes ocupan la posición de "titulares del derecho subjetivo" supuestamente lesionado, los cuales no pueden intervenir en el proceso como terceros, sino que han de reclamar el restablecimiento de ese derecho a través de la acción contenciosa-administrativa de plena jurisdicción o de reparación de derechos, que es el medio procesal idóneo previsto en nuestra legislación para tales fines.

En el negocio sub-júdice, quienes piden que se les admita en el proceso como terceros coadyuvantes de la demanda afirman que tienen interés directo en el resultado de este proceso, porque "ocupan una posición idéntica a los demandantes originales", tal como "consta en autos, y especialmente en la planilla para el pago de la (sic) cuotas del décimo tercer mes respectivas" (Cfr. f. 92). Estos hechos, llevan a la Sala a la indudable conclusión de que los peticionarios no son simples terceros interesados en la decisión de fondo, sino "titulares de derechos subjetivos" supuestamente vulnerados por la funcionaria demandada, quien no dio trámite a la planilla relativa al XIII Mes que se le remitió para su debido pago. De ello se infiere, entonces, que la vía procesal idónea para reclamar el restablecimiento de tales derechos es la acción contenciosa-administrativa de plena jurisdicción, de conformidad con los razonamientos arriba expuestos.

En opinión de la Sala, carece de sentido jurídico y es contrario a la economía procesal, que los peticionarios, encontrándose en "una posición idéntica a la de los demandantes originales" no procuren o hayan procurado el restablecimiento de derechos que al parecer también estiman lesionados, sobretodo, si se considera que por la naturaleza de la acción impetrada, la sentencia que emita la Sala, en caso de ser favorable a los señores PALACIOS y CARRILLO, sólo podría beneficiarlos exclusivamente a ellos, por haber pedido, en calidad de demandantes, el restablecimiento de derechos que estiman vulnerados.

El resto de los Magistrados que integran la Sala consideran, por otra parte, que en autos no existe constancia o prueba relacionada con el agotamiento de la vía gubernativa por parte de que quienes intentan que se les admita como terceros coadyuvantes, ni de que la acción contencioso-administrativa de plena jurisdicción hubiese prescrito con respecto a ellos, porque, como consta a fojas 10 y 11, la petición formulada mediante Nota de 23 de febrero de 1999 y negada tácitamente por la funcionaria demandada, fue suscrita exclusivamente por los

precitados MARINO y PALACIOS.

De consiguiente, el resto de los Magistrados que integran la Sala, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN el Auto de Auto de 2 de julio de 2000, mediante el cual el Magistrado Sustanciador no admitió como terceros coadyuvantes a los señores Ricardo Maldonado, Pedro Jiménez, Israel Suira, Abdiel Sanjur, Oliver Ortiz y otros, dentro del presente negocio contencioso-administrativo de plena jurisdicción.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN PRESENTADA POR EL LICENCIADO BASILIO CHONG GÓMEZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR SAÚL QUIROZ PACHECO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO, LA RESOLUCIÓN NO. 222, DE 1O. DE ABRIL DE 2000, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Basilio Chong Gómez, actuando en nombre y representación del señor Saúl Quiroz Pacheco, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la negativa tácita por silencio administrativo, la Resolución No. 222, de 1o. de abril de 2000, emitida por el Presidente de la Asamblea Legislativa, y para que se hagan otras declaraciones.

La demanda descrita fue corregida según escrito que corre de fojas 18 a la 21 de los autos, al igual que se sustituyó el poder especial otorgado en la persona del licenciado Miguel González, conforme se aprecia foja 17.

Mediante el acto administrativo acusado de ilegal se destituyó del cargo de Jefe de Imprenta I, al señor Saúl Quiroz Pacheco, con cédula de identidad personal No. 8-456-351 y seguro social No. 050-1317, planilla No, 2, posición No. 197, a la que coresponde un sueldo mensual de B/.975.00 más B/.100.00, en concepto de sobresueldo.

El demandante en su escrito de demanda corregida hace una solicitud previa que consiste en que la Sala requiera a la autoridad demandada copia autenticada del acto impugnado y del recurso de reconsideración interpuesto contra el mismo en la esfera administrativa. Igualmente, pide que el despacho competente certifique si el recurso de reconsideración ha sido o no resuelto con el propósito de probar el silencio administrativo.

El artículo 44 de la Ley 135 de 1943 establece, entre otras cosas, que a la demanda deberá acompañar el actor una copia del acto acusado, con las constancias de su notificación; y el artículo 46 ibídem, faculta a la Sala, a instancia de parte, y antes de admitir la demanda, para que requiera de la autoridad que emitió el acto administrativo copia autenticada del mismo cuando al particular le haya sido denegada la misma.

A fojas 7 reposa una solicitud del demandante hecha al Presidente de la Asamblea Legislativa para obtener copia autenticada de la Resolución No. 222, de 1o. de abril del presente año, y a fojas 8, obra otra similar, esta vez para que

se certifique si el recurso de reconsideración contra dicho acto fue resuelto o no.

A juicio de la Sala, las gestiones de la demandante en la vía administrativa demuestran que intentó conseguir las certificaciones y copias de los documentos mencionados, por lo que la petición previa cumple con los requisitos legales y debe accederse a la misma.

En mérito de lo expuesto, la Magistrada Sustanciadora, en representación de la Sala, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA que, antes de admitir la demanda, se requiera de la Asamblea Legislativa lo siguiente:

1. Copia autenticada de la Resolución No. 222, de 1o. de abril de 2000, expedida por el Presidente de esa Corporación Legislativa, mediante la cual se destituyó al señor Saúl Quiroz Pacheco, con constancia de su notificación.

2. Si el recurso de reconsideración contra el acto administrativo descrito en el punto anterior fue resuelto o no; en caso afirmativo, que se remita una copia autenticada de la resolución o acto respectivo con la constancia de su notificación.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION INTERPUESTA POR EL LICDO. MIGUEL GONZALEZ EN REPRESENTACION DE AMERICA FOOD INDUSTRIES CORP., PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, LA RESOLUCION NO. ADMR-PM-016-00 DE 26 DE ABRIL DE 2000, DICTADA POR LA ADMINISTRACION NACIONAL DEL AMBIENTE PANAMA METROPOLITANA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado MIGUEL GONZALEZ, actuando en nombre de AMERICA FOOD INDUSTRIES CORP., ha presentado demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. ADMR-PM01600 de 26 de abril de 2000, dictada por la Administración Regional de la Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá Metropolitana, y para que se hagan otras declaraciones.

Al examinar el libelo, la Magistrada Sustanciadora advierte que consta a foja 18 del expediente, una solicitud especial, consistente en una petición de documentos.

Sin embargo, por razones de economía procesal, lo procedente en estos casos es determinar de manera previa, si la demanda instaurada ha cumplido con los requisitos formales que hagan admisible la misma.

En este punto observa la suscrita, que la personería jurídica de la sociedad AMERICA FOOD INDUSTRIES CORP. no ha sido acreditada, como procede en estos casos, con la certificación del Registro Público que deje constancia de su existencia, y de quién ostenta su Representante Legal.

Esta Superioridad ha reiterado, en número plural de ocasiones (v.g. resolución de 9 de diciembre de 1998), que toda persona jurídica que comparezca

al proceso, debe hacerlo por medio de su Representante Legal y dejar claramente acreditar su personería, a través de Certificación del Registro Público, conforme lo disponen los artículos 582, 583, 585 y 626 del Código Judicial, aplicables a este proceso por mandato del artículo 99 ibídem.

La omisión comentada impide el curso legal de la demanda presentada, a tenor de lo previsto en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

De consiguiente, la Magistrada Sustanciadora en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE, la demanda contencioso administrativa presentada por el licenciado MIGUEL GONZALEZ.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAÚL MONTENEGRO, EN REPRESENTACIÓN DE DANIA JUANA LANDAU DE LOKEE, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 877, DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 1998, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACIÓN ESPECIAL (I.P.H.E.), ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Raúl Montenegro, en nombre y representación de DANIA JUANA LANDAU DE LOKEE, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 877, de 7 de septiembre de 1998, dictada por el Director General del Instituto Panameño de Habilitación Especial (I.P.H.E.) y actos confirmatorios.

El funcionario demandado en su Nota No. 150-99 D.G., de 20 de febrero de 1999, sostiene que en este caso se observó lo dispuesto en el Acuerdo suscrito en 1979 entre el Ministerio de Planificación y Política Económica, el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social y en el Acuerdo celebrado por el Ministerio de Salud y la Asociación Panameña de Kinesiólogos en 1992.

Agotados los trámites procesales previos a la etapa decisoria, los Magistrados de la Sala consideran necesario, para mejor proveer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de la Ley 135 de 1943, y los artículos 782, 880 y 1712 del Código Judicial, solicitar a la Dirección General del Instituto Panameño de Habilitación Especial envie copia autenticada de los Acuerdos suscritos entre el Ministerio de Planificación y Política Económica, el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social en 1979 y entre el Ministerio de Salud y la Asociación Panameña de Kinesiólogos en 1992.

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA que por Secretaría se requiera a la Dirección General del Instituto Panameño de Habilitación Especial, que en el término de cinco (5) días extienda y envíe copia autenticada del Acuerdo suscrito en 1979 entre el Ministerio de Planificación y Política Económica, el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social y en el Acuerdo celebrado por el Ministerio de Salud y la Asociación Panameña de Kinesiólogos en 1992.

Notifíquese y Cúmplase

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA MONTERO EN REPRESENTACIÓN DE LUIS ALBERTO CARRERA GONZÁLEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA DP-DOPA-2411 DEL 22° DE MARZO DE 2000, DICTADA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.

VISTOS:

El licenciado Carlos Ayala Montero, en nombre y representación de LUIS ALBERTO CARRERA GONZÁLEZ, ha instaurado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, el acto administrativo contenido en la Nota DP-DOPA-2411 del 22 de febrero de 2000, dictada por la Directora Nacional de Personal del Ministerio de Educación y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda, a fin de determinar si, efectivamente, la misma cumple con los requisitos legales y jurisprudenciales para que pueda ser admitida.

Se advierte que, el libelo incoado adolece de un defecto que impide darle el trámite legal correspondiente, y que a continuación se le indica al actor.

Observa esta Superioridad que el recurrente no agotó la vía gubernativa, lo cual constituye, en nuestro medio, requisito sine qua non para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. Esto lo decimos en virtud de que, como se ha podido colegir de las constancias procesales, la parte actora solicitó en su demanda que, previo el trámite de admisión se requiriera a la entidad demandada certificación en la cual se acreditara que no había recaído decisión alguna sobre el recurso de reconsideración interpuesto. En este sentido, a foja 15 del expediente, consta certificación fechada 9 de julio de 2000, por medio de la cual la entidad demandada respondió la petición suscrita por el Magistrado Sustanciador.

Al examinarse los documentos remitidos, aprecia esta Corporación que el Subdirector Nacional de Asesoría Legal del Ministerio de Educación certificó que el Decreto Ejecutivo 141 de 2 de junio de 2000, mediante el cual se perfeccionó el contenido de la Nota DP-DOPA-2411 del 22 de marzo de 2000, en la cual se le comunica al señor LUIS ALBERTO CARRERA GONZÁLEZ sobre el cese de sus labores, fue debidamente notificado mas no fue objeto de recurso alguno por el demandante.

Se desprende de la documentación que milita en el expediente, que la parte interesada no interpuso recurso de reconsideración, tal como lo expresa en el escrito de demanda, lo que se traduce a que no se agotó de manera efectiva la vía gubernativa, requisito indispensable para acudir ante esta Sala, de acuerdo a lo preceptuado en el Artículo 42 de la Ley 135 de 1943, modificado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1946, que a la letra dispone:

> "Artículo 42. Para ocurrir en demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es necesario que se haya agotado la vía gubernativa, lo que se entenderá cuando los actos o resoluciones

> respectivos no son susceptibles de ninguno de los recursos establecidos en los artículos 33, 38, 39 y 41 o se han decidido, ya se trate de actos o resoluciones definitivas, o de providencias de trámite, si estas últimas deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, de modo que le pongan término o hagan imposible su continuación." (El subrayado es nuestro)

La finalidad que persigue el agotamiento de la vía gubernativa, es ofrecerle a la Administración la oportunidad de corregir o enmendar sus propios errores, es decir, su objetivo es que la propia Administración Pública pueda revocar el acto administrativo que afecte al administrado o le cause graves perjuicios.

En atención a la deficiencia señalada, quien sustancia no tiene otra alternativa que negarle curso legal a la demanda interpuesta, en atención a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 33 de 1946, que dice:

> "Artículo 31. No se dará curso legal a la demanda que carezca de alguna de las anteriores formalidades, y su presentación no interrumpe los términos señalados para la prescripción de la acción".

En mérito de lo expuesto, el Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativo de plena jurisdicción promovida por el licenciado Carlos Ayala Montero en representación de LUIS ALBERTO CARRERA GONZÁLEZ.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LCDO. CARLOS AYALA, EN REPRESENTACIÓN DE JULIO SANTAMARIA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN R. L.C.S. NO. 027 DE 27 DE OCTUBRE DE 1999, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Procuradora de la Administración ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema recurso de apelación contra la Resolución de 19 de mayo de 2000 que admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por el licenciado Carlos Ayala, en representación de JULIO SANTAMARIA, para que se declare nulo, por ilegal, el acto administrativo contenido en la Resolución R. L.C.S. N°027 de 27 de octubre de 1999, dictada por el Director General del Instituto de Investigación Agropecuaria y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador admitió la demanda por considerar que la misma reunía todos los requisitos para su admisión.

La Procuradora de la Administración considera que la demanda no debe ser admitida, ya que el apoderado legal del demandante no aporta copia del acto acusado con constancia de su notificación.

Por su parte, el licenciado Carlos Ayala en su escrito de oposición al recurso de apelación sostiene que la Procuradora no reconoce el auto de 27 de marzo de 2000 en el que el Magistrador Sustanciador peticionó que se le remitiera copia autenticada de la Resolución R. L.C.S. N°027 de 27 de octubre de 1999, así como el recurso de reconsideración interpuesto y la certificación del silencio administrativo.

El resto de los Magistrados que componen la Sala Tercera consideran que no le asiste la razón a la Procuradora de la Administración, puesto que el recurrente solicitó, en base a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, que se le pidiera al Director General del Instituto de Investigación Agropecuaria, las copias autenticadas tanto del acto impugnado como de la certificación, por parte de esa dirección, de que no había contestado el recurso de reconsideración interpuesto por el actor. Es en atención a esta petición que el Magistrado Sustanciador dictó el auto de 27 de marzo de 2000 en la que disponía solicitar dichos documentos y es por esta razón que la Dirección General del Instituto de Investigación Agropecuaria le mandó a la Sala la copia autenticada de la Resolución R. L.C.S. N°027 de 27 de octubre de 1999 y la copia autenticada de la Resolución N°020-99 de 15 de noviembre de 1999, la cual resuelve el recurso de reconsideración interpuesta por la actora y que agota la vía gubernativa. Por lo tanto, lo señalado por la Procuradora de la Administración no tiene razón de ser puesto que la parte actora solicitó debidamente que se autenticara el acto impugnado y que se le solicitara a dicha institución que certificara si se había resuelto el recurso de reconsideración interpuesto.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN la resolución de 19 de mayo de 2000, que ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por el licenciado Carlos Ayala, en representación de JULIO SANTAMARIA, para que se declare nulo, por ilegal, el acto administrativo contenido en la Resolución R. L.C.S. N°027 de 27 de octubre de 1999, dictada por el Director General del Instituto de Investigación Agropecuaria y para que se hagan otras declaraciones.

Notifiquese y Cumplase,

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION INTERPUESTA POR LA LICDA. SONIA ALMENGOR EN REPRESENTACION DE RICAURTER NOEL PITTI MORALES, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCION NO. 80 DE 30 DE MARZO DE 2000, DICTADA POR EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA REGION INTEROCEANICA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada SONIA ALMENGOR, actuando en representación de RICAURTER NOEL PITTI, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 080 de 30 de marzo de 2000, dictada por el Administrador General de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), su acto confirmatorio, y para que se hagan otras declaraciones.

Al examinar el libelo, la suscrita advierte que consta a foja 24 del

expediente, una solicitud especial que debe ser atendida de manera previa a la admisión de la demanda, consistente en una petición de documentos.

Dicho petitorio recae, entre otros documentos, en la autenticación del recurso de reconsideración y del recurso de apelación, presentados por el señor RICAURTER PITTI ante la Administración General de la Autoridad de la Región Interocéanica, contra la Resolución 080 de 30 de marzo de 2000, que dispuso su destitución. De igual forma solicita al Tribunal, se sirva requerir al ente demandado, que certifique si ha recaído pronunciamiento alguno en relación al recurso de apelación presentado por el señor PITTI, el día 12 de mayo del 2000.

Tal como lo requiere el artículo 44 de la ley 135 de 1943 para hacer viable estas solicitudes previas, consta que el actor gestionó ante la autoridad demandada, la obtención de la documentación a que hace referencia en esta petición, gestión que resultó infructuosa (cfr. fojas 13 y 15 del expediente).

Por esta razón, se considera que el recurrente cumplió con la exigencia de emprender las diligencias necesarias para obtener la documentación, y ante su imposibilidad, ha solicitado al Tribunal que proceda a requerirla, conforme lo prevé el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, por lo que se hace viable acceder a lo pedido.

Es pertinente aclarar no obstante, que los restantes documentos que hacen parte de la solicitud presentada por la licenciada ALMENGOR (cfr. reverso de foja 24 del expediente), constituyen material probatorio que deberá ser obtenido, aportado o aducido por la parte actora en su etapa correspondiente, toda vez que la facultad de documentación conferida a la Magistrada Sustanciadora por el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, previo a la admisión de la demanda, se circunscribe a la obtención de copias del acto impugnado, o de aquellos que permitan evidenciar el agotamiento de la vía gubernativa.

De consiguiente, la Magistrada Sustanciadora, actuando en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DISPONE: Solicitar por Secretaría al Administrador General de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) que, en el término de cinco (5) días, remita al Tribunal la siguiente documentación:

1. Copia debidamente autenticada del Recurso de Reconsideración y del Recurso de Apelación presentados ante dicha entidad, por RICAURTER NOEL PITTI MORALES, contra la Resolución 080 de 30 de marzo del 2000.

2. Certificación sobre la existencia o no, de pronunciamiento en relación al recurso de apelación propuesto por el señor RICAURTER NOEL PITTI MORALES, contra la Resolución No. 080 de 30 de marzo del 2000, expedida por el Administrador General de la Autoridad de la Región Interocéanica.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURIDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CÉSAR RODRÍGUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LEOVIGILDO BERROA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. C.F.C.2040 DE 27 DE JULIO DE 1999, DICTADA POR LA COMISIÓN DEL FONDO COMPLEMENTARIO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado César Rodríguez, actuando en nombre y representación de LEOVIGILDO BERROA, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la resolución No. C.F.C.2040 de 27 de julio de 1999, dictada por la Comisión de Prestaciones Sociales de los Servicios Públicos de la Caja de Seguro Social, el acto confirmatorio, y para que se hagan otras declaraciones.

Mediante escrito fechado el 10 de agosto del 2000, el licenciado César Rodríguez presentó desistimiento de la acción contencioso administrativa interpuesta contra el mencionado acto administrativo, por lo que la Sala procede a determinar su admisibilidad.

En virtud de que el artículo 66 de la Ley 135 de 1943 señala que la parte demandante puede desistir en cualquier momento del proceso, procede la Sala a admitir el desistimiento y dar por terminado el proceso.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso-Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el desistimiento interpuesto por el licenciado César Rodríguez, actuando en nombre y representación de LEOVIGILDO BERROA, y ORDENA el archivo del expediente.

Notifiquese y Cumplase,

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. CARLOS A. ESPINOSA EN REPRESENTACIÓN DE EVILA G. DE CANDANEDO, PARA QUE DE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA N°OIRH-307 DE 15 DE FEBRERO DE 2000 SUSCRITA POR LA JEFA DE LA OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Carlos A. Espinosa, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, en representación de EVILA G. DE CANDANEDO, para que se declare, nula por ilegal, la Nota N°OIRH-307 de 15 de febrero de 2000, suscrita por la Jefa de la Oficina Institucional de Recursos humanos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

En la parte final del libelo de demanda, la parte actora ha incluido una solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto impugnado. Sin embargo, por razones de economía procesal, es procedente determinar si la demanda instaurada cumple con los requisitos formales que hagan admisible la misma.

Observa el suscrito, que la demanda incoada adolece de una serie de defectos que impiden darle el trámite legal correspondiente, los cuales se exponen a continuación:

En primer término se aprecia que el acto acusado no constituye el acto principal que causa perjuicio a la señora CANDANEDO. Esto lo decimos en virtud

de que, la Nota N°OIRH-307 de 15 de febrero de 2000, es simplemente un acto de comunicación por medio del cual se le notifica que mediante Decreto se le destituyó del cargo que ocupaba, el cual es a todas luces el acto principal.

En estos términos, el artículo 42 de la Ley 135 de 1943, es claro al establecer que sólo son recurribles ante la Sala Tercera (Contencioso Administrativa), los "actos o resoluciones definitivas", o "providencias de trámite, si estas últimas deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, de modo que le pongan término o hagan imposible su continuación". Por tanto, es imperativo que la parte recurrente impugne de manera expresa y principal, el acto original que le afecta y cause perjuicios.

En este sentido, el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, prevé que el Magistrado Sustanciador tiene la facultad de solicitar, antes de admitir la demanda, y cuando así lo requiera el recurrente con la debida indicación de la oficina correspondiente, copia del acto impugnado o certificación de su publicación, en aquellos casos en los cuales el acto no ha sido publicado, o se deniega la expedición de la copia, previa comprobación de haber realizado todas las gestiones tendientes a obtener dicha documentación. No obstante, de la documentación que milita en el expediente, no consta gestión alguna por parte del demandante que aluda a un despliegue de esfuerzos encaminados a superar cualquier dificultad en aportar la copia autenticada del acto que dio origen a este negocio.

Por otro lado, como segundo defecto, resulta necesario destacar, que la señora EVILA G. DE CANDANEDO, en virtud de su presunta calidad de Servidora Pública de Carrera Administrativa, obtenida bajo Resolución N°021 de 9 de diciembre de 1998, interpuso recurso de apelación contra la Nota N°OIRH-307 de 15 de febrero de 2000. Por su parte, el Ministro de Desarrollo Agropecuario, mediante Resolución N°ALP-049-ADM-2000 de 22 de marzo de 2000, resolvió declarar extemporáneo el recurso interpuesto, basándose en el hecho de que la señora CANDANEDO, propuso tal recurso un (1) día después de haber vencido el término para su presentación.

El artículo 159 de la Ley de Carrera Administrativa señala claramente que el funcionario posee 8 días hábiles contados a partir de la notificación de la destitución, para incoar el recurso de apelación. En el caso que nos ocupa, la parte actora presentó dicho recurso el día 28 de febrero de 2000, es decir, que el recurso fue presentado oportunamente. No obstante lo anterior, la demandante al presentar dicho recurso equivocó la instancia, pues lo dirigió al Ministro de Desarrollo Agropecuario y no, a la Junta de Apelación y Conciliación, tal como lo preceptúa el artículo supra citado.

Lo arriba expuesto nos indica que no se agotó la vía gubernativa, lo que constituye, en nuestro medio, requisito indispensable para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, tal como lo conceptúa el artículo 42 de la Ley 135 de 1943, que a la letra dispone lo siguiente:

> "Artículo 42. Para ocurrir en demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es necesario que se haya agotado la vía gubernativa,..."

La finalidad que persigue el agotamiento de la vía gubernativa, es ofrecerle a la Administración la oportunidad de corregir o enmendar sus propios errores. En otras palabras, con el agotamiento de la vía gubernativa se busca que dentro de la propia Administración Pública se pueda revocar el acto administrativo que afecte al administrado o le cause perjuicios.

También se puede observar que, el demandante omitió lo contemplado en el numeral 4 del artículo 28 de la Ley 33 de 1946, al no precisar el concepto de la violación, con la claridad y el detalle que la ley exige, a fin de que esta Superioridad pueda analizar el fondo de las causales de ilegalidad que deben ser invocadas por el recurrente.

En atención a los defectos descritos en párrafos precedentes, el Magistrado Sustanciador conceptúa que la demanda in examine, no puede ser admitida, en atención a lo que consagra el artículo 31 de la Ley 33 de 1946, que a la letra dice:

> "Artículo 31. No se dará curso legal a la demanda que carezca de algunas de las anteriores formalidades y su presentación no interrumpe los términos señalados para la prescripción de la acción."

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el Lcdo. Carlos A. Espinosa en representación de EVILA G. DE CANDANEDO.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAÚL ADRARE, EN REPRESENTACIÓN DE RAHAMIN R. PRETTO, PARA QUE SE DECLARE NULOS, POR ILEGALES, EL RESUELTO N° 306 DE 10 DE JUNIO DE 1999, DICTADO POR EL DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DEL NIÑO Y LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Raúl Andrade, en representación de RAHAMIN R. PRETTO, interpuso demanda contenciosa-administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulos, por ilegales, el Resuelto N° 306 de 10 de junio de 1999, expedido por el Director Médico del Hospital del Niño, y la negativa tácita por silencio administrativo y para que se haga otras declaraciones.

El licenciado Andrade pidió al Magistrado Sustanciador que, antes de admitir la demanda, requiera al funcionario demandado copia autenticada del Resuelto impugnado, con la respectiva constancia de su notificación; así como una certificación en la que conste si los recursos de reconsideración y de apelación interpuestos contra el Resuelto N° 306 ibídem, fueron o no resueltos.

Como el actor probó que hizo las gestiones pertinentes ante el funcionario demandado para obtener la documentación requerida, la Magistrada Sustanciadora, con fundamento en el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, estima que debe acceder a lo pedido.

De consiguiente, la Magistrada Sustanciadora, en representación de la Sala Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley ORDENA que, por Secretaría de la Sala, se pida al Director Médico del Hospital del Niño copia autenticada del Resuelto N° 306 de 10 de junio de 1999, con la respectiva constancia de su notificación y, además, que certifique si fueron o no decididos los recursos de reconsideración y de apelación interpuestos contra el aludido Resuelto y en caso afirmativo enviar copia autenticada de la resolución emitida con la constancia de su notificación.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. MANUEL E. BERMÚDEZ MEANA EN REPRESENTACIÓN DE GABRIEL ENRIQUE CARRILLO CARRILLO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N°7198 DEL 20 DE MAYO DE 1998, DICTADA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, TREINTA (30) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Manuel E. Bermúdez Meana, en representación de GABRIEL ENRIQUE CARRILLO CARRILLO, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N°7198 de 20 de mayo de 1998, dictada por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

El Sustanciador procede a examinar la demanda instaurada, a fin de comprobar si la misma cumple con los requisitos legales y jurisprudenciales exigidos para su admisión.

En este sentido, se advierte que el libelo incoado adolece de un defecto que impide darle el trámite legal correspondiente.

A fojas 22 y 23 del expediente, se observa que el actor omitió dar cumplimiento a la exigencia prevista en el numeral 4 del artículo 28 de la Ley 33 de 1946, toda vez que no precisó el concepto de la violación de la norma alegada como infringida. Es necesario indicar que, no basta con citar textualmente los artículos que se estimen transgredidos, sino que también es indispensable explicar claramente en qué concepto han sido presuntamente quebrantados los mismos. Esta afrenta a la norma o normas jurídicas puede configurarse en diversas formas, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 26 de la Ley 135 de 1943, a saber:

1. Infracción literal de los preceptos legales que a su vez puede producirse por violación directa por comisión, o violación directa por omisión o falta de aplicación; por interpretación errónea o por indebida aplicación;

2. la falta de competencia o de jurisdicción del funcionario o entidad que haya dictado el acto administrativo;

3. Quebrantamiento de las formalidades legales; y

4. Desviación de poder.

Ha sido constante la jurisprudencia de este Tribunal de Justicia al sostener que, este es un requisito indispensable que debe cumplir toda demanda contencioso administrativa a fin de que esta Superioridad pueda analizar el fondo de las causales o motivos de ilegalidad invocados por el actor.

En atención al defecto señalado, el Sustanciador conceptúa que no queda otra alternativa que negar la admisión de la presente demanda, para dar cabal cumplimiento a lo que claramente estatuye el artículo 31 de la Ley 33 de 1946, que a la letra dice:

> "Artículo 31. No se dará curso legal a la demanda que carezca de alguna de las anteriores formalidades, y su presentación no

> interrumpe los términos señalados para la prescripción de la acción."

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera (Contencioso-Administrativa), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción promovida por el licenciado Manuel E. Bermúdez Meana, en representación de GABRIEL ENRIQUE CARRILLO CARRILLO.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO NIBARDO ELÍAS CABRERA, EN REPRESENTACIÓN DE JORGE EDING PALIS, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 015-98 DE 3 DE JUNIO DE 1998, EXPEDIDA POR LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Nibardo Elías Cabrera, actuando en nombre y representación de JORGE EDING PALIS, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 015-98 de 3 de junio de 1998, expedida por la Directora General del Instituto Nacional de Recursos Humanos Naturales Renovables, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Mediante escrito fechado el 28 de julio de 2000, visible a foja 32 del expediente, la parte actora presentó desistimiento de la acción contencioso administrativa interpuesta contra el mencionado acto administrativo, por lo que la Sala procede a determinar su admisibilidad.

A juicio de la Sala el desistimiento presentado por el demandante es procedente y debe acogerse, conforme a lo consagrado en el artículo 66 de la Ley 135 de 1943, el cual es del tenor siguiente:

> "Artículo 66. En cualquier estado del juicio es admisible por declaración expresa, el desistimiento del recurso contencioso-administrativo."

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el desistimiento interpuesto por el licenciado Nibardo Elías Cabrera, en representación de JORGE EDING PALIS , y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR ALVARADO, LEDEZMA & DE SANCTIS, EN REPRESENTACIÓN DE OCTAVIO GARCÍA, PATRICK DILLON, ALLAN BAITEL, TETEL DE CONTRERAS, SHANINA CONTRERAS, JULIO CONTRERAS, JOSÉ CHIRINO, MARÍA DE CHIRINO, SOUHAILA CHIRINO, LUIS CHIRINO, FRANCISCO ALVARADO, MARIELA CALDERÓN, AVELINA DE CALDERÓN, RICARDO SOTO, CECILIA ALMENGOR, ROSA ELVIRA DE ROMERO, JAVIER ROMERO, ANNETTE DE ROMERO, YOLANDA MARCO SERRA, LUIS CASCANTE Y RAQUEL DE CASCANTE, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL RESUELTO NO. 122 DE 20 DE MAYO DE 1998, DICTADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, Y PARA SE DICTEN OTRAS DISPOSICIONES EN SU REEMPLAZO. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Dentro de la demanda de nulidad presentada por Alvarado, Ledezma & De Sanctis, en representación de Octavio García, Patrick Dillon, Allan Baitel, Tetel de Contreras, Shanina Contreras, Julio Contreras, José Chirino, María de Chirino, Souhaila Chirino, Luis Chirino, Francisco Alvarado, Mariela Calderón, Avelina de Calderón, Ricardo Soto, Cecilia Almengor, Rosa Elvira de Romero, Javier Romero, Annette de Romero, Yolanda Marco Serra, Luis Cascante y Raquel de Cascante, para que se declare nulo, por ilegal, el Resuelto No. 122 de 20 de mayo de 1998, dictado por el Director General de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, y para se dicten otras disposiciones en su reemplazo, han concurrido la licenciada Haydée Espinosa, solicitando que le tenga como parte y la firma forense Rosas & Rosas, como apoderada judicial de VIPASA, S. A. Ambas, con el objeto de impugnar la demanda presentada.

En el libelo presentado por la licenciada Haydée Espinosa solicita a la Sala "autorizar la ejecución del Resuelto No. 122 de 20 de mayo de 1998, emitido por la Dirección General de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, cuyos efectos fueron suspendidos mediante Resolución de 23 de marzo del 2000." (fs. 156).

En igual sentido, la apoderada judicial de VIPASA, S. A., pidió a la Sala "considerar la posibilidad de autorizar la ejecución del Resuelto No. 122 de 20 de mayo de 1998, proferidos por la Dirección General de Desarrollo Urbano, cuyos efectos fueron suspendidos mediante resolución de 23 de marzo del año que transcurre." (fs. 186).

DECLARATORIA DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL

Legible de folios 116 a 122, reposa la Resolución de 23 de marzo de 2000, por la cual la Sala de lo Contencioso-Administrativo suspendió provisionalmente los efectos del Resuelto No. 122 de 20 de mayo de 1998, que autoriza el cambio de código de zona de RM2 a RM3, con un 49.8% de tolerancia en densidad de la finca 22341, inscrita la folio 464 del Tomo 527 de la Sección de la Propiedad del Registro Público, ubicada en la Avenida 3B Norte (Ave. José Martí), Urbanización El Cangrejo, Corregimiento de Bella Vista.

HECHOS QUE SUSTENTAN LAS PETICIONES DEL LEVANTAMIENTO

En sustento a su petición de levantamiento de la medida cautelar, tanto la licenciada Haydée Espinosa, como los apoderados de VIPASA, S. A. argumentaron, en síntesis, lo siguiente:

1. Que la mayoría de las fincas ubicadas en la misma calle están clasificadas con el código RM2.

2. Que el cambio de zonificación aprobado en el caso de la finca 22341, no constituye un cambio abrupto de zonificación, porque RM2 y RM3, son subcategorías

de alta densidad.

3. Que este cambio de zonificación puede ser soportado por la infraestructura existente.

4. Que ya han sido otorgados a varias fincas del área otros cambios de zonificación a la categoría RM3.

5. Que los funcionarios que suscribieron el documento que figura en el Anexo, presuntamente carecen de competencia para aprobar un cambio de zonificación.

VIPASA, S. A. invoca en apoyo de su pretensión que experimenta una serie de perjuicios derivados de la suspensión provisional del acto.

SOLICITUD DE ALVARADO, LEDEZMA & DE SANCTIS

Por otro parte, concurrió ante la Sala, la firma forense Alvarado, Ledezma & De Sanctis, representante judicial de los demandantes, mediante escrito de oposición a las pretensiones de VIPASA, S. A.

En contraposición al argumento expuesto por los petentes para que se levante la medida cautelar, de que RM2 y RM3 son subcategorías de alta densidad, los opositores señalan que existe una considerable diferencia entre el número de personas que permite cada uno de los código de alta densidad, y que además, en menos de dos años se cambió la zonificación de la finca de RM1 a RM3. En cuanto al señalamiento que se hace de los funcionarios suscriptores del Informe, agregan, que se trata de profesionales que laboran en la Dirección de Desarrollo Urbano, y como tales, les compete, entre otras funciones, hacer inspecciones y levantar informes.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala ha ponderado de manera responsable las alegaciones invocadas por los impugnantes, para justificar el levantamiento de la suspensión provisional decretada por este despacho respecto del acto impugnado, y luego de efectuada esta reflexión, ha arribado a la convicción de que la naturaleza de dichas alegaciones integran justamente cuestiones relativas al proceso de revisión de legalidad que corresponde decidir a esta Corporación. Bajo estas circunstancias, en este momento procesal, no resulta posible justipreciar con la profundidad y detalle que este delicado caso amerita, los argumentos invocados para dejar sin efecto dicha medida cautelar.

Un somero análisis de los argumentos de réplica expuestos por quienes adversan la medida cautelar, revela que éstos plantean complejas cuestiones jurídicas y fácticas, que vienen a ser, indudablemente, temas que tienen que ser forzosamente decididos en la sentencia de mérito que en su oportunidad dicte la Sala, después de que todas las partes en el proceso hayan incorporado los elementos probatorios y las alegaciones en favor de sus pretensiones.

Las circunstancias indicadas, impiden que esta Sala se adentre, desde ahora, al examen prolijo de las presuntas violaciones jurídicas que son el objeto principal de este proceso contencioso-administrativo. No resulta jurídicamente factible que esta alta Corporación, con mira en la decisión de un aspecto incidental de la controversia como es el de la subsistencia de la medida cautelar provisional, adelante, esto es, juzgue en forma anticipada y prematura una serie de aspectos de gran trascendencia y complejidad que propiamente corresponden a la sentencia final que decida la causa.

En esta línea de pensamiento, parece lógico concluir que hasta tanto no se surtan las fases probatorias respectivas y se haya ofrecido a todas las partes la oportunidad de exponer a plenitud sus correspondientes alegaciones, no es prudente ni razonable, que la Sala se pronuncie sobre los hechos constitutivos

de la pretensión de ilegalidad de los actos atacados; puesto que de hacerlo, prácticamente ya no tendría sentido examinar los mismos temas en la sentencia de fondo, porque, dicho análisis se habría adelantado a través del auto interlocutorio que decidió la petición del levantamiento de la suspensión provisional.

Dicho en otro giro, la argumentación que presentan los impugnantes en punto al tema concreto de la suspensión provisional decretada por esta Corporación, guarda directa y estrecha relación con la discusión de legalidad, que es el objeto medular de este proceso contencioso, la cual, por las razones explicadas, no puede ser examinada en esta fase incipiente, ya que ello constituye la materia principal que tiene que ser decidida en la sentencia de fondo.

Por las razones expuestas, la Sala estima que no es posible acceder al levantamiento de la medida cautelar decretada.

En consecuencia, los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGAN EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSION PROVISIONAL del Resuelto No. 122 de 20 de mayo de 1998, de la Dirección General de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, decretada mediante la Resolución de 23 de marzo del 2000, solicitado por la licenciada Haydée Espinosa, en su propio nombre, y por la firma forense Rosas & Rosas, en representación de VIPASA, S. A.

Notifiquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) JORGE FABREGA P.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ELIO CAMARENA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE MARGARITA RODRÍGUEZ BÁRCENAS O LUZ MARGARITA BÁRCENAS DE JOHNSON, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 4-9, DE 21 DE MAYO DE 1999, EMITIDA POR EL MUNICIPIO DE ARRAIJÁN, EL CONTRATO NO. 22-99, DE 28 DE ENERO DE 1999, Y LA ESCRITURA PÚBLICA NO. 8823, DE 19 DE AGOSTO DE 1999. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Elio Camarena, en su condición de apoderado judicial de la señora Luz Margarita Rodríguez Bárcenas de Johnson, ha presentado demanda contencioso administrativa de nulidad, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 4-99, de 21 de mayo de 1999, emitida por el Alcalde Municipal del Distrito de Arraiján, el Contrato No. 22-99, de 28 de enero de 1999, y la Escritura Pública No. 8823, de 19 de agosto de 1999.

La demanda descrita contiene dos solicitudes, la primera es una petición previa para que por medio de Secretaría, esta Sala requiera al Municipio de Arraiján que expida y envíe copia autenticada de varios documentos que aparecen detallados a fojas 32 de los autos. El actor afirma que estas copias fueron pedidas al Municipio en cuestión, mediante memorial de 3 de mayo del presente año, sin obtener hasta la fecha una respuesta favorable.

Mediante la segunda petición la parte actora solicita a la Sala que decrete la suspensión provisional tanto de la Resolución No. 4-99, de 21 de mayo de 1999, a través de la cual, entre otras cosas, la Comuna de Arraiján adjudicó a Melcinia Castillero de Delgado, de manera definitiva, un lote de terreno ubicado en la cabecera de ese distrito, el cual segregó de su finca No. 4375 inscrita en el

Registro Público; así como la suspensión del Contrato No. 22-99, fechado el 28 de enero del mismo año, suscrito entre ese Municipio y la señora Melcinia Castillero de Delgado, sobre la venta del referido lote que tiene un aproximado de 413.3160 m2.

La Sala se percata al hacer una lectura atenta del escrito de damanda, que el actor reclama la violación de un derecho subjetivo de su representada, cual es el derecho de propiedad que él estima fue conculcado por el Municipio de Arraiján al emitir y sucribir los documentos cuya nulidad pide.

Esta pretensión no es cónsona con el objeto de las demandas de nulidad, en las que se pide la anulación de un acto administrativo de contenido general y no individual como lo ha hecho indebidamente el demandante. El propósito principal de este tipo de acciones es la tutela del orden jurídico en abstracto, lo que evidencia su típica función nomofiláctica.

La Magistrada Ponente considera que la presente acción de nulidad no es procedente, porque el establecimiento del derecho subjetivo que se afirma lesionado por el acto administrativo contenido en la Resolución No. 4-99, fechada el 21 de mayo de 1999, sólo puede pedirse a través de una acción contencioso administrativa de plena jurisdicción. Una muestra de lo que viene dicho es que el demandante, al expresar las disposiciones que se estiman violadas, cita el artículo 338 del Código Civil referente a la protección de la propiedad privada y algunas de las circunstancias y requisitos por las que la autoridad puede privar de ésta a su dueño.

Ahora bien, si en el presente caso el acto impugnado ya fue recurrido por la vía gubernativa y está inscrito en el Registro Público, mediante un acto de adjudicación o venta en la que el Municipio no se compromete al saneamiento, estamos ante dos fincas cuyas medidas, linderos y/o posibles traslapes pueden esclarecerse por la jurisdicción ordinaria civil.

Por las razones esbozadas, la suscrita Magistrada considera que no debe dársele curso a la presente demanda, al tenor de lo que dispone el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

De consiguiente, la Magistrada Ponente, en representación de la Sala Tercera Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda de nulidad interpuesta por la señora Margarita Rodríguez Bárcenas o Luz Margarita Bárcenas de Johnson, a través de apoderado judicial, contra la Resolución No. 4-99, de 21 de mayo de 1999, emitida por el Municipio de Arraiján, el Conntrato No. 22-99, de 28 de enero de 1999, y la Escritura Pública No. 8823, de 19 de agosto de 1999, de la Notaría Octava de Panamá.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ALEJANDRO FERRER, EN REPRESENTACION DE ELEKTRA NORESTE S. A. PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACUERDO NO. 101-40-32 DE 1 DE DICIEMBRE DE 1998, DICTADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLON. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CUATRO (4) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado ALEJANDRO FERRER, actuando en su calidad de apoderado legal de ELEKTRA NORESTE S. A., presentó ante la Sala Tercera de la Corte Suprema, demanda contencioso administrativa de nulidad, a fin de que se declarase nulo, por ilegal, parte del artículo primero del Acuerdo No. 101-40-32 de 1 de diciembre de 1998, dictado por el Consejo Municipal del Distrito de Colón.

El Acuerdo Municipal, en su parte impugnada, adicionó el Código 1.1.2.5.35.01 APARATOS DE MEDIR ENERGIA, al régimen impositivo de dicho distrito.

A juicio de la parte actora, el acto administrativo en mención infringía los artículos 17 numeral 8; 21 numeral 6, 74 y 79 de la Ley 106 de 1973 sobre Régimen Municipal, toda vez que el Acuerdo expedido creaba un tributo no contemplado en la Ley, y establecía una doble tributación para las empresas dedicadas a la distribución y generación de energía eléctrica.

Como cuestión preliminar, la parte actora solicitó a la Sala Tercera que se ordenara la suspensión provisional de los efectos del acto impugnado, petición que fue aceptada por esta Superioridad, cautelándose el Acuerdo Municipal demandado mediante auto de 30 de junio de 1999.

En dicha resolución judicial, este Tribunal consideró, prima facie, que las constancias procesales indicaban que el Ente Municipal había rebasado las atribuciones conferidas por la Ley 106 de 1973, al establecer un gravamen sobre las actividades lucrativas que realizaban las empresas de distribución de energía eléctrica, pese a que dichas actividades tenían un alcance extradistrital.

De la demanda incoada se corrió traslado a la autoridad responsable del acto acusado, así como a la Procuradora de la Administración para que emitiese concepto legal en relación a los cargos de ilegalidad presentados.

La representante del Ministerio Público, a través de Vista Fiscal No. 413 de 25 de agosto de 1999 solicitó a esta Superioridad que se accediera a la pretensión de los demandantes, manifestando que en su concepto, el Acuerdo Municipal impugnado resultaba efectivamente violatorio del ordenamiento legal.

DECISION DE LA SALA TERCERA

Una vez cumplidos todos los trámites procesales correspondientes, y encontrándose la Sala Tercera en estado de decidir sobre el mérito de la demanda, se percata que el proceso instaurado carece de materia justiciable, toda vez que el acto administrativo impugnado, esto es, la parte del artículo primero del Acuerdo Municipal No. 101-40-32 de 1 de diciembre de 1998, expedido por el Concejo Municipal de Colón, que introducía el Código 1.1.2.5.35.01 APARATOS DE MEDIR ENERGIA, al régimen impositivo de dicho distrito, ha sido declarado inconstitucional por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, a través de sentencia de 25 de noviembre de 1999.

Como lo ha reiterado esta Corporación Judicial en un número plural de ocasiones, la declaratoria de incons-titucional produce la nulidad ex-nunc del acto examinado, y conlleva por ende, su desaparición del mundo jurídico.

La Sala debe en consecuencia, abstenerse de todo pronunciamiento de fondo en este negocio, siendo que por causas exógenas al proceso, se ha producido la pérdida del objeto litigioso sobre el que habría de recaer la decisión jurisdiccional, extinguiéndose la pretensión por obsoles-cencia procesal.

De consiguiente, la Sala Tercera Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA SE HA PRODUCIDO EL FENOMENO JURIDICO DE SUSTRACCION DE MATERIA, razón por la que ordena el archivo del expediente.

Notifiquese y Publiquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL DOCTOR LUIS A. PALACIOS, EN REPRESENTACION DE VICTOR WEIGANDT BECKMANN PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES, LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION DE 8 DE MARZO DE 1990 Y DE 22 DE DICIEMBRE DE 1994 OTORGADOS EN FAVOR DE FELIX BERROCAL, POR EL INGENIERO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PENONOME. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CUATRO (4) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Doctor LUIS A. PALACIOS, actuando en su calidad de apoderado legal de VICTOR WEIGANDT BECKMANN, presentó ante la Sala Tercera de la Corte Suprema, demanda contencioso administrativa de nulidad, a fin de que se declaren nulos, por ilegales, los Permisos de Construcción de 8 de marzo de 1990 y de 22 de diciembre de 1994, otorgados por el Ingeniero Municipal del Distrito de Penonomé, en beneficio de Félix Berrocal.

I. ACTOS IMPUGNADOS

Los permisos impugnados concedieron autorización al señor Berrocal, para lo siguiente:

1. Permiso de 8 de marzo de 1990: Se autoriza a Félix Berrocal para introducir mejoras a un local que operaba en la Barriada Pueblo Nuevo, ciudad de Penonomé.

2. Permiso de 22 de diciembre de 1994: Se autoriza a Félix Berrocal para construir un local comercial sobre el mismo terreno ubicado en la Barriada Pueblo Nuevo, ciudad de Penonomé.

II. CARGOS DE ILEGALIDAD DEL RECURRENTE

A juicio de la parte actora, los permisos de construcción otorgados infringen las siguientes disposiciones legales:

1- Los literales b) y ch) del artículo 2 del Acuerdo Municipal No. 21 de 23 de diciembre de 1992

Dicho Acuerdo, reglamenta y dicta disposiciones concernientes a la aprobación de planos, solicitudes y permisos de construcción en el Distrito de Penonomé. Los puntos que se dicen conculcados, establecen la exigencia, para solicitar un permiso de construcción, de aportar documentos que comprueben la titularidad u ocupación del lote de terreno sobre el cual se va a construir, así como tener la aprobación del Departamento de Saneamiento Ambiental.

2- Los puntos 1 y 2 del Manual sobre Clasificación y Ubicación de Industrias del Ministerio de Salud

El citado Manual establece un listado comprensivo de dos categorías de industrias: las que se clasifican como Industrias Inofensivas o Livianas (Punto 1), y las Industrias Molestas (punto 2) entre las que se encuentran listados Talleres Mecánicos.

3- El punto (b) de la Resolución 89-94 del Ministerio de Vivienda que aprobó el Plan Normativo para la ciudad de Penonomé.

Se establece en el literal citado, los usos permitidos para las zonas clasificadas como Comercial Urbano C-2, señalándose que se permite básicamente, tres categorías de usos para dicha zona: 1- las construcciones de instalaciones comerciales en general relacionados con actividades mercantiles y profesionales del Centro Urbano; 2- el uso residencial multifamiliar independiente o combinado con comercios, y 3- el uso industrial liviano y aquellos usos comerciales que por su naturaleza no constituyan peligro o perjudiquen el carácter comercial urbano y residencial de la zona.

En concepto de la parte actora, las normas en cuestión resultaron infringidas con el otorgamiento de los permisos de construcción antes descritos, toda vez que éstos autorizaron la construcción de un establecimiento comercial dedicado a reparaciones mecánicas denominado "Taller Chapo", que causa numerosas molestias a los residentes del area, infringiendo lo dispuesto en el Plan Normativo para la ciudad de Penonomé aprobado en 1994, y el Manual sobre Clasificación y Ubicación de Industrias del Ministerio de Salud que clasifica a las reparaciones de vehículos y talleres mecánicos como industrias molestas.

Se aduce además, que los permisos fueron expedidos pese a que el interesado no presentó ante Ingeniería Municipal, documento alguno que acreditara la propiedad u ocupación del bien sobre el cual se construiría la mencionada obra, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 2° del Acuerdo Municipal No. 21 de 1992.

Ello se agrava, en concepto del actor, al constatarse que la finca sobre la cual se construyó el local comercial es propiedad del Municipio de Penonomé, lo que implicaría un comportamiento fraudulento en perjuicio del patrimonio del citado Municipio.

III. INFORME DE ACTUACION DEL FUNCIONARIO DEMANDADO

Una vez admitida la demanda, se corrió traslado al funcionario responsable del acto acusado, para que rindiese un informe explicativo de su actuación en este caso.

El actual Ingeniero Municipal de Penonomé, señor Rafael Eduardo Moreno, contesta el traslado de la demanda a través de informe visible a fojas 70-72 del expediente, manifestando que si bien no ejercía el cargo al momento en que ocurrieron los hechos que originan este proceso, las constancias que reposan en los archivos técnicos de Ingeniería Municipal le permitían explicar lo siguiente:

Al momento de otorgarse el primer permiso de construcción a Félix Berrocal en el año 1990, para introducir mejoras a un local comercial, no se había aprobado el Plan Normativo de Penonomé (aprobado mediante Acuerdo Municipal No. 9 de 8 de junio de 1994) que establecía los usos permitidos para las zonas clasificadas como Comercial Urbano (C-2). Por ende, el funcionario señala que el referido plan no era aplicable al permiso solicitado por el señor Berrocal en el año 1990.

No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, aclara que el permiso concedido en 1990 fue para construir paredes para una galera estilo depósito, por lo que mal podría considerarse que el permiso otorgado en aquel momento, fue concedido para un uso indebido.

Lo mismo puede decirse en relación al permiso otorgado el 22 de diciembre de 1994, al que sí le era aplicable el Plan Normativo de Penonomé, toda vez que se trata de un permiso concedido para la ampliación de la galera (no para la operación de un taller mecánico), y prueba de ello es que en dicho local han funcionado varias clases de establecimientos, albergando desde instalaciones de la Caja de Seguro Social hasta un supermercado, usos perfectamente permitidos a tenor de lo dispuesto en el Plan Normativo para la ciudad de Penonomé. Por ende, no puede argumentarse que el permiso fue otorgado por Ingeniería Municipal de manera indebida, o que la construcción no cumplía con las normas de saneamiento

ambiental.

En lo concerniente al otorgamiento de los permisos de construcción sin que el interesado acreditara la propiedad u ocupación del terreno sobre el cual se proyectaba la edificación, el Ingeniero Municipal indica, que el Municipio de Penonomé no exige que exista título de propiedad inscrito previo al otorgamiento de un permiso de construcción. Se reconoció además, la ocupación que ejercía el señor Berrocal sobre el bien, y consta en los archivos de la Municipalidad que a la fecha, Félix Berrocal ha recibido el título de propiedad sobre la finca en cuestión, pagando los derechos correspondientes, por lo que carecen de sustento los argumentos presentados por el actor a este respecto.

IV. CRITERIO DE LA PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACION

La señora Procuradora de la Administración, encargada de emitir concepto legal en este proceso, emite opinión a través de Vista Fiscal No. 265 calendada 14 de julio de 1998, visible a fojas 74-80 del expediente de marras.

En lo medular del referido dictamen, la colaboradora de la instancia solicita al Tribunal que se acceda a la declaratoria de ilegalidad de los permisos otorgados, por considerar que el tipo de construcción que se edificó en el area comercial urbana C-2, desarrolla una actividad que perjudica el carácter urbano y residencial de la zona.

Se resalta que al tratarse de un taller de mecánica, emana ruidos nocivos y olores tóxicos que afectan e influyen en la tranquilidad que toda zona residencial urbana debe conservar.

IV. DECISION DE LA CORTE

Una vez surtidos todos los trámites establecidos para este proceso, la Sala pasa a examinar el mérito de la pretensión contenida en la demanda.

Como cuestión preliminar el Tribunal ha de resaltar, que al momento de presentarse la acción contenciosa, la parte actora solicitó que se ordenara la suspensión provisional de los efectos de los actos impugnados, petición que fue negada por esta Sala a través de auto de 31 de marzo de 1998.

En la resolución comentada, esta Superioridad señaló que no se apreciaba una ostensible violación al ordenamiento jurídico, toda vez que no se había comprobado que los permisos otorgados autorizaran al señor Berrocal para darle un uso no permitido al terreno, en violación de las reglamentaciones vigentes.

Se señaló además, que no constaba en autos que el Taller de Mecánica Chapo estuviese ubicado en una finca que pertenecía al Municipio de Penonomé, ni se había acreditado que las obras de construcción a las que aludían los permisos impugnados no hubiesen concluido, lo que resultaba fundamental, porque la medida cautelar sólo podría tener eficacia antes del agotamiento de los efectos de los actos que se impugna.

Los conceptos adelantados en aquella etapa preliminar tienen vigencia al momento de conocer del mérito del asunto, toda vez que esta Superioridad, una vez examinados todos los elementos que hacen parte del negocio, advierte que los permisos impugnados autorizaban la construcción de obras que a todas luces han concluido, lo que evidencia el agotamiento de todos los efectos jurídicos de los actos impugnados.

Sin perjuicio de ello, la Corte ha avanzado en el examen de los cargos de ilegalidad presentados, arribando a la conclusión de que los permisos de construcción otorgados no infringen el ordenamiento legal.

Este razonamiento se sustenta de principio, en el hecho de que tal como se refleja en autos, los permisos otorgados autorizaban mejoras a un inmueble y la

construcción de un local comercial cónsono con las especificaciones vigentes al momento en que se otorgaron, puesto que en el terreno de Félix Berrocal se construyó una galera tipo depósito, que fue ocupada en su momento, por la Caja de Seguro Social y por un supermercado.

Se trataba en ambos casos, de usos perfectamente permitidos en el area comercial urbana donde se ubica la finca en cuestión; de allí, lo imperativo de distinguir entre el permiso de construcción otorgado de acuerdo a las reglamentaciones vigentes en 1990 y 1994, y el uso que a la fecha tiene el local construido. Evidentemente, no fueron los permisos de construcción de la galera los que han causado las molestias aducidas por los residentes del area, sino la operación del taller mecánico que más recientemente viene funcionando en el lugar.

Es oportuno señalar que la Sala Tercera, en el comentado auto de 31 de marzo de 1998, indicaba entre otros puntos, que no se había probado que el Taller de Mecánica Chapo estuviese ubicado dentro de una zona residencial en la que su operación estuviese prohibida por las reglamentaciones sobre zonificación, vigentes en el Distrito de Penonomé. Este señalamiento se sustentó en la certificación expedida por el Jefe de Ingeniería Municipal de Penonomé (f. 12 del expediente) que indicó que el globo de terreno donde actualmente está ubicado el TALLER CHAPO tiene en uso, suelo según plan normativo de uso comercial existente.

No obstante, las personas que se dicen afectadas por la operación del mencionado establecimiento, y que consideren que el uso al que se ha destinado contraviene las normas de desarrollo urbano que regulan la zonificación y uso del suelo, se encuentran en perfecta capacidad de solicitar, por la vía correspondiente, el cese de la actividad u operación del comercio que opera en la edificación construida.

Para los efectos del negocio que nos ocupa, lo fundamental es destacar que los permisos de construcción impugnados, son independientes del uso que en la actualidad tenga el bien construido.

Esta Corporación Judicial ha de señalar por otra parte, que el Plan Normativo para la ciudad de Penonomé, que establece los usos de la zona comercial urbana C-2, no fue aprobado sino hasta el año 1994, es decir, que es posterior al primer permiso de construcción otorgado.

En lo que atañe al permiso de construcción concedido en diciembre de 1994, hemos aclarado que se autorizaba la construcción de una galera tipo depósito, uso compatible con la clasificación imperante en el area "Comercial C-2".

Por último, en lo que respecta a la titularidad del bien inmueble, Ingeniería Municipal reconoce que el señor Berrocal ejercía la ocupación efectiva del lote de terreno al momento de los hechos, y en la actualidad funge como propietario de la misma, según documento visible a fojas 63-69 del expediente, por lo que carecen de sustento las violaciones endilgadas a los literales b) y ch) del artículo 2 del Acuerdo No. 21 de 1992 expedido por el Concejo Municipal de Penonomé, relativo a la reglamentación de los permisos de construcción.

Se reitera que dicho Acuerdo tenía aplicación sólo en lo que concierne al permiso otorgado en 1994, mas no así al expedido en el año 1990, fecha para la cual no había sido promulgada la referida reglamentación.

En estas condiciones se concluye, que los cargos de ilegalidad presentados carecen de fundamento jurídico, razón por la cual ha de negarse la pretensión invocada.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO SON ILEGALES, los permisos de construcción de 8 de marzo de 1990 y de 22 de diciembre de 1994 expedidos por el Ingeniero Municipal del Distrito de Penonomé.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. JOSE ANTONIO HERNANDEZ, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLAREN NULOS, POR ILEGALES, LOS ACUERDOS NOS.8 DE 4 DE FEBRERO DE 1998 Y EL NO. 28 DE 13 DE MAYO DE 1998, AMBOS DICTADOS POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE DAVID. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, ONCE (11) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Procuradora de la Administración ha interpuesto recurso de apelación contra el auto de 3 de febrero de 2000 que admite la demanda contencioso administrativa de nulidad interpuesta por el licenciado José Antonio Hernández, actuando en su propio nombre y representación, para que se declaren nulos, por ilegales, los Acuerdos Municipales N°8 de 4 de febrero de 1998 y N°28 de 13 de mayo de 1998, ambos dictados por el Consejo Municipal del Distrito de David, provincia de Chiriquí.

El Magistrado Sustanciador admitió la demanda por considerar que la misma cumplía con los requisitos procesales para su admisión.

La Procuradora de la Administración, mediante la Vista N°283 de 6 de junio de 2000, fundamenta el recurso de apelación señalando que los actos impugnados no tienen el carácter de definitivo, pues sólo son autorizaciones concedidas por el Consejo del Municipio de David para que dicho ayuntamiento celebre un contrato de concesión con la empresa Estacionómetros de Chiriquí.

El resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema consideran que no le asiste la razón a la Procuradora de la Administración, toda vez que los Acuerdos Municipales N°8 de 4 de febrero de 1998 y el N°28 de 13 de mayo de 1998, ambos dictados por el Consejo Municipal del Distrito de David, mediante los cuales se otorga una concesión administrativa por contratación directa para la empresa Estacionómetros de Chiriquí, S. A., para que realice la explotación del servicio de Estacionamientos de la ciudad de David por un período de 20 años, causan estado porque son actos que tienen el carácter de definitivos y son impugnables por esta vía, al tenor de lo establecido en el artículo 42 de la Ley 135 de 1943 que preceptúa que para ocurrir en demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo, es necesario que los actos administrativos impugnados sean actos o resoluciones definitivas o providencias de mero trámite si estas últimas deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, de modo que pongan término o hagan imposible su continuación.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución de 3 de febrero de 2000 que ADMITE la demanda contencioso administrativa de nulidad, interpuesta por el licenciado José Antonio Hernández, actuando en su propio nombre y representación, para que se declaren nulos, por ilegales, los Acuerdos Municipales N°8 de 4 de febrero de 1998 y N°28 de 13 de mayo de 1998, ambos dictados por el Consejo Municipal del Distrito de David, provincia de Chiriquí.

Notifiquese y Cumplase,

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. BENEDICTO DE LEÓN, EN REPRESENTACIÓN DE OCTAVIO LUSIA Y OTROS, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN DE 1° DE AGOSTO DE 1999, DICTADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE BARÚ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Benedicto De León, actuando en nombre y representación de OCTAVIO LUSIA y OTROS, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de nulidad para que se declare nula, por ilegal, la Resolución de 1° de agosto de 1999, dictada por el Alcalde Municipal de Barú, mediante la cual se adjudica un título de plena propiedad Municipal, a favor de HOUSSAN KURBAJ.

El licenciado Benedicto De León solicitó la suspensión provisional de los efectos de la Resolución de 1° de agosto de 1999, dictada por el Alcalde Municipal de Barú, en los siguientes términos:

> "En virtud de que el acto demandado está causando y puede causar graves perjuicios a una colectividad, esto es a los habitantes del Distrito del Barú, porque el comprador está actualmente exigiendo que se le otorguen permisos para realizar construcción en el lugar lo que agravaría la situación, y además por ser dicho Acto manifiestamente contrario a la Ley, solicitamos respetuosamente al Honorable Magistrado Presidente que con carácter de urgencia SUSPENDA de manera provisional el acto acatado hasta tanto se decida el fondo de la demanda." (f.30)

El artículo 73 de la Ley 135 de 1943 faculta a la Sala Tercera para suspender los efectos de un acto, resolución o disposición, cuando, a su juicio, sea necesario para evitar un perjuicio "notoriamente grave". Esta medida cautelar tiene carácter provisional, motivo por el cual la Sala Tercera puede modificar la resolución judicial por medio de la cual se decrete dicha medida siempre y cuando la Sala considere que existen razones suficientes para evitar aquella medida. En los procesos de nulidad, procede la suspensión del acto administrativo como medida cautelar para evitar no sólo perjuicios patrimoniales sino, sobre todo, cuando puede producirse una violación ostensible o manifiesta al ordenamiento jurídico.

Una vez analizados los argumentos esgrimidos por el demandante, la Sala considera que no le es posible acceder a la petición de suspensión provisional, puesto que las infracciones legales invocadas no aparecen como ostensibles, claras e incontrovertibles. Aunado a esto, el recurrente no ha logrado demostrar los perjuicios graves e irreparables que causarían los efectos del acto impugnado.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA la petición de suspensión provisional de los efectos de la Resolución de 1° de agosto de 1999, dictada por el Alcalde Municipal de Barú.

Notifiquese y Cumplase,

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTARTIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA GUERRA Y GUERRA, EN REPRESENTACIÓN DE JORGE ALEXIS LASSO, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACUERDO N°39 DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 1999, DICTADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE REPRESENTANTES DE CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE LA CHORRERA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Guerra y Guerra, actuando en nombre y representación de JORGE ALEXIS LASSO, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema demanda contencioso administrativa de nulidad para que se declare nulo, por ilegal, el Acuerdo N°39 de 28 de septiembre de 1999, dictado por el Consejo Municipal de Representantes de Corregimiento del Distrito de la Chorrera.

En la parte final de la demanda la firma Guerra y Guerra solicita que se suspenda provisional de los efectos del Acuerdo N°39 de 28 de septiembre de 1999, mediante el cual el Consejo Municipal de Representandes de Corregimiento del Distrito de la Chorrera acuerda derogar el Acuerdo Municipal No. 24 del 20 de julio de 1999 y ordenar al Departamento Municipal, que paralice los trámites de dicho Acuerdo, hasta tanto laa comisión de Tierras realice el estudio respectivo y la evaluación correspondiente en el Departamento de Catastro Municipal, para determinar el precio exacto de las tierras en el Sector que fue otorgado a la Familia Lasso, quienes mantendrán en primera instancia el derecho a compra.

Dicha solicitud de suspensión fue formulada en los siguientes términos:

> "Señor Magistrado Presidente, con fundamento en lo establecido en el artículo 73 de la Ley 135 de 1943 y en atención al perjuicio que se ha generado en detrmento de nuestro patrocinado, toda vez que, como hemos señalado, en el Acuerdo impugnado se ordena al Departamento de Ingeniería Municipal paralizar los trámites de adjudicación onerosa; es que, respetuosamente, solicitamos se ordene la suspensión de los efectos jurídicos del Acuerdo Número 39 de 28 de septiembre de 1999, proferido por el Concejo Municipal de Representante de Corregimientos del Distrito de la Chorrera, anotando al respecto que dada la clara y evidente violación a la norma precitada y, además de ello, la inseguridad jurídica que con la entrada en vigencia de tal Acuerdo se genera, es que solicitamos se ordene, de manera previa y mientras se sustancie el proceso que hemos planteado, la suspensión del acto impugnado. Esto es viable, además, para que se eviten, no por parte de la persona cuyos derechos e intereses litigamos, sino de terceros e inescrupulosos, vías de vioencia (sic) que sólo traerían profundización de una crisis que no tiene razón de ser frente a un problema de tierras que ha generado el actual Concejo Municipal de la Chorrera."

El artículo 73 de la Ley 135 de 1943 faculta a la Sala Tercera para suspender los efectos de un acto, resolución o disposición, cuando, a su juicio, sea necesario para evitar un perjuicio "notoriamente grave". Esta medida cautelar tiene carácter provisional, motivo por el cual la Sala Tercera puede modificar la resolución judicial por medio de la cual se decrete dicha medida siempre y cuando la Sala estime que existen razones suficientes para evitar aquella medida. En los procesos de nulidad, procede la suspensión del acto administrativo como medida cautelar para evitar no sólo perjuicios patrimoniales sino, especialmente,

cuando puede producirse una violación ostensible o manifiesta al ordenamiento jurídico.

Una vez efectuado un análisis de los argumentos esgrimidos por el recurrente, la Sala considera que no le es posible acceder a la petición de suspensión provisional, ya que las infracciones legales invocadas no aparecen como claras, ostensibles e incontrovertibles. Por otra parte, el demandante no ha logrado probar los perjuicios graves e irreparables que ocasionarían los efectos del acto impugnado.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA la petición de suspensión provisional de los efectos del Acuerdo N°39 de 28 de septiembre de 1999, dictado por el Consejo Municipal de Representantes de Corregimiento del Distrito de la Chorrera

Notifiquese y Cumplase,

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA ROSAS & ROSAS, EN REPRESENTACIÓN DE DIANA ROSA CARLES ROVIRA Y RUY CARLOS RIBA CARLES, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL RESUELTO NO. 205, DE 9 DE JULIO DE 1999, PROFERIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Rosas & Rosas, actuando en nombre y representación de DIANA ROSA CARLES ROVIRA y RUY CARLOS RIBA CARLES, dentro de la demanda contencioso-administrativa de nulidad para que se declare nulo, por ilegal, el Resuelto No. 205, de 9 de julio de 1999, proferido por la Dirección General de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, ha presentado escrito solicitando a la Sala la suspensión provisional de los efectos del acto impugnado.

Básicamente los peticionarios reiteran las razones expuestas en la demanda original en sustento a su solicitud; además de señalar que existe una clara demarcación entre la zona residencial y la zona industrial en la Urbanización Los Angeles, área donde se construye el Proyecto Los Querubines, y que en esta área predominan las viviendas de una sola planta, por lo cual el edificio antagoniza con la estructura urbanística de la zona.

Aseguran los promotores de la presente solicitud que la construcción del Edificio Los Querubines en la finca adyacente a su vivienda, les ocasiona serios perjuicios, puesto que la obra invade su propiedad. Para respaldar esta afirmación, acompañaron las fotos, visibles de fojas 95 a 101 y la certificación a foja 104, que comprueban que los puntales y formaletas para la loza de la edificación se proyectan dentro de la línea de la propiedad de los demandantes. Esta situación los ha llevado en más de una ocasión a presentar denuncias ante la Corregiduría de Betania.

En el libelo de demanda original los actores solicitaron la suspensión provisional de los efectos del Resuelto No. 205, de 9 de julio de 1999 y la Sala, mediante la Resolución de 4 de abril de 2,000, no accedió a decretar la medida (fs. 24 a 27).

Es evidente que en esta ocasión, los demandantes, a través de la presente solicitud, persiguen la cesación de la perturbación que sobre su propiedad aparentemente le ocasiona la construcción del Edificio Los Querubines.

La suspensión provisional en una acción de nulidad es una respuesta a una grave perturbación del orden jurídico y no a la salvaguarda y tutela de intereses subjetivos particulares, como se evidencia en este caso.

Estima la Sala que en esta oportunidad tampoco procede la adopción de la medida cautelar, porque los efectos que persiguen los peticionarios, de que sea suspendida la obra que les afecta, no se obtienen de forma inmediata con la declaratoria de la medida cautelar solicitada, máxime que se trata solamente de la suspensión provisional del acto que aprueba un cambio de zonificación en la finca donde se construye el Edificio Los Querubines.

Nuestra legislación contempla de manera precisa para la tutela de los derechos de aquellos afectados con una construcción, como en este caso, la figura de la denominada denuncia de obra nueva, consagrada en los artículos 1364 y 1365 del Código Judicial.

La denuncia de obra nueva procede contra su dueño o encargado, cuando dicha construcción afecta algún inmueble, donde la legitimación activa para entablarla la ostenta el propietario del bien afectado. Este proceso se rige por los principios establecidos en el artículo 1365 del Código Judicial, cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción civil ordinaria.

En esas condiciones, resulta evidente que el mecanismo de denuncia de obra nueva ofrece el dispositivo cautelar idóneo para considerar los requerimientos de tutela que expresan los demandantes.

Por las razones expuestas, la Sala considera que las pretensiones de los demandantes deben ser atendidas, vía el proceso de obra nueva, por la jurisdicción civil ordinaria.

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA la suspensión provisional de los efectos del Resuelto No. 205, de 9 de julio de 1999, proferido por la Dirección General de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda.

Notifíquese

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.

(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS

JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA LCDA. ALMA L. CORTÉS, EN REPRESENTACIÓN DE PROCESADORA MARPESCA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA N° DM-1060-2000 DE 29 DE MAYO DE 2000, DICTADA POR EL MINISTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RELACIONADA CON LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS FITO-ZOOSANITARIAS DE IMPORTACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Alma L. Cortés, actuando en nombre y representación de PROCESADORA MARPESCA, S. A., ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, demanda contencioso administrativa de nulidad, para que se

declare nula, por ilegal, la Nota N° DM-1069-2000 de 29 de mayo de 2000, dictada por el Ministro de Desarrollo Agropecuario, relacionada con las solicitudes de licencias Fito-Zoosanitarias de Importación.

La presente demanda fue objeto de decisión mediante auto de 27 de julio de 2000, en el cual el Magistrado Sustanciador, decidió no admitirla. Por su parte, la parte actora interpuso recurso de apelación contra dicho auto mediante escrito fechado 2 de agosto de 2000. (Ver foja 66 del expediente)

A foja 68 del expediente, se colige que el demandante presentó memorial con fecha de 22 de agosto de 2000, en el cual desiste del recurso de apelación instaurado, por lo que la Sala procede a determinar su admisibilidad.

A juicio de la Sala el desistimiento presentado por el demandante es procedente y debe acogerse, conforme a lo consagrado en el artículo 1073 del Código Judicial, el cual es del tenor siguiente:

> "Artículo 1073. Toda persona que haya entablado una demanda, promovido un incidente o interpuesto un recurso, puede desistir expresa o tácitamente. ..."

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el desistimiento interpuesto por la licenciada Alma L. Cortés, en representación de PROCESADORA MARPESCA, S. A., y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE

INCIDENTE DE NULIDAD, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO MIGUEL QUIROZ EN REPRESENTACIÓN DE TRANSPORTE Y EQUIPO BARRERA, S. A., DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR JURISDICCIÓN COACTIVA QUE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE COCLÉ LE SIGUE. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CUATRO (4) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Miguel Quiroz actuando en nombre y representación de la compañía TRANSPORTE Y EQUIPO BARRERA, S. A., ha interpuesto incidente de nulidad contra el Auto de Secuestro N° 015-98 proferido por el Juzgado Ejecutor de la Caja de Seguro Social de la Provincia de Coclé.

El incidentista solicita que se declare la nulidad del Auto N° 015-98 fechado 8 de octubre de 1998 mediante el cual la Caja de Seguro Social decretó formal secuestro contra la Empresa de Transporte y Equipos Barrera, S. A. Como fundamento de la incidencia propuesta, alega que el Juzgado Ejecutor de la Caja de Seguro Social carece de competencia por falta de jurisdicción para hacer cobros coactivos relacionados con riesgos profesionales así como también para decidir la sustitución patronal, siendo que la competencia privativa de ambas materias corresponde a los Tribunales Ordinarios de Trabajo.

Afirma el incidentista que según la jurisprudencia de la Corte Suprema de

Justicia "la Caja de Seguro Social no es competente por falta de jurisdicción para hacer cobros coactivos de cantidades que corresponden al trabajador", en materia de riesgos profesionales. Cuando la Caja de Seguro Social no está obligada a cubrir los riesgos profesionales, los trabajadores deben reclamar las prestaciones económicas correspondientes a través de los Tribunales Ordinarios de Trabajo.

Según argumenta, se han violado los artículos 301 y 302 del Código de Trabajo referentes a la responsabilidad en materia de riesgos profesionales y lo procedente es declarar la nulidad del Auto N° 015-98 de 8 de octubre de 1998 de conformidad con lo establecido en el numeral 1° de los artículos 90 y 91 de la Ley 33 de 1946 y el artículo 722 del Código Judicial.

Admitido el incidente se corrió en traslado al Juez Ejecutor de la Caja de Seguro Social de la Provincia de Coclé y a la señora Procuradora de la Administración por el término de la Ley.

El Juez Ejecutor de la Caja de Seguro Social no hizo uso del término concedido, sin embargo la señora Procuradora de la Administración contestó el incidente y solicitó a la Sala declarar la nulidad del proceso ejecutivo por cobro coactivo, seguido por la Caja de Seguro Social de la Provincia de Coclé, contra Transporte y Equipo Barrera, S. A.

La Agente del Ministerio Público considera que la Caja de Seguro Social "no tiene competencia para cobrar, vía coactiva, el pago íntegro de las prestaciones económicas que resultaron del accidente de trabajo ocurrido el día 23 de noviembre de 1993, donde falleciera el señor Paulo Ernesto Ledezma Vásquez, toda vez que el "artículo 43 del Decreto de Gabinete N° 68 de 31 de marzo de 1970, "por el cual se centraliza en la Caja de Seguro Social la cobertura obligatoria de los Riesgos Profesionales para todos los trabajadores del Estado y de las Empresas particulares que operen en la República", fue derogado por el artículo 1067 del Decreto de Gabinete N° 252 de 1971 (Código de Trabajo).

Agrega la representante de la administración que "los deudos del señor Paulo Ernesto Ledezma Vásquez (q.e.p.d.) deben concurrir ante la Jurisdicción Laboral Ordinaria", para que le sean reconocidas las prestaciones dejadas de pagar por el patrono a la Caja de Seguro Social, en concepto de Riesgos Profesionales", pues es su obligación reconocerlas de conformidad con lo preceptuado en el artículo 304 del Código de Trabajo.

La señora Procuradora de la Administración también coincide con el incidentista en que los artículos 301 y 302 del Código de Trabajo le reservan a la Jurisdicción Laboral Ordinaria el cobro de sumas de dinero adeudadas en concepto de riesgos profesionales porque el patrono TRANSPORTE Y EQUIPOS BARRERA, S. A. omitió inscribirlo en el programa de riesgos profesionales de la Caja de Seguro Social.

Por lo expuesto, afirma la representante del Ministerio Público que la Caja de Seguro Social "ha usurpado la competencia que tiene la Jurisdicción Laboral Ordinaria ..." incurriendo en lo contemplado en los artículos 90, numeral 1° y 91, numeral 1° de la Ley 135 de 1943 modificada por la Ley 33 de 1946.

En el expediente que contiene el proceso ejecutivo por cobro coactivo consta la solicitud de pensión de sobreviviente que hiciera la señora Carmen Gisela Canto Villalobos al Director General de la Caja de Seguro Social, luego de que su compañero, Paulo Antonio Ledezma, falleciera a causa de un accidente de trabajo el 23 de noviembre de 1993 (fs. 31-34, 40-42, 44/tomo I).

De fojas 22 a 27 (tomo I del expediente por jurisdicción coactiva) constan las declaraciones extrajudiciales de los señores Luis Jaén Jaén, Luis Antonio Sandoval Ortega e Israel López De León quienes, afirman que desde mayo de 1993 hasta el momento de su muerte, el señor Paulo Ledezma laboró en la empresa MARBABO, S. A. como conductor de camiones.

La solicitud de la señora Canto Villalobos fue canalizada por el programa de riesgos profesionales, como consecuencia del informe patronal legible a foja 43. En consecuencia, la Caja de Seguro Social pudo determinar que el señor Paulo Ledezma, no estaba inscrito en la Caja de Seguro Social (fs. 53-56/tomo I).

Ahora bien, ante esta situación la Caja de Seguro Social mediante Resolución N° 8075-95 D.G de 21 de junio de 1995 condenó a la empresa MARBABO, S. A. con número patronal 20-7140020 a pagar la suma de B/.66.697.74 en concepto de pago íntegro de las prestaciones que resulten del accidente de trabajo ocurrido al señor Paulo Ernesto Ledezma Vásquez (q.e.p.d.) con seguro social N° 103-2999, el día 23 de noviembre de 1993 (f.98 tomo I). El 3 de julio de 1995 el señor Marcos Barrera como representante de la empresa se notificó de la anterior resolución y 3 días después presentó recurso de apelación ante la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, afirmando que esa institución no ha comprobado que el señor Ledezma era empleado de su empresa en condiciones de subordinación jurídica o dependencia económica (f. 112-114 tomo I).

La Caja de Seguro Social se pronunció sobre el recurso interpuesto mediante Resolución N° 11,955-96-J.D. de 22 de febrero de 1996, confirmando el acto impugnado (fs. 119-120 tomo I).

Esta institución a fin de hacer efectivo el pago íntegro de las prestaciones que resultaron del accidente de trabajo en donde falleció el señor Ernesto Ledezma Vásquez, por medio del Juez Ejecutor, Área de Azuero, dictó Auto de Mandamiento de Pago el 18 de junio de 1996, contra la empresa MARBABO, S. A. por la suma de B/.66,697.74 (fs. 16-17 del tomo II) y el 28 de octubre de 1996 decretó secuestro contra esta empresa por igual cantidad de dinero (fs. 16-17, 34 tomo II).

Consta en el expediente del proceso ejecutivo que la empresa MARBABO, S. A., mediante Escritura Pública N° 1050 de 3 de octubre de 1994, protocoliza el acta de sesión extraordinaria de la Junta General de Accionistas en la cual se acuerda la disolución de la misma (fs. 78-81 /tomo I y 83-84, 108/tomo II). Los bienes de esta empresa fueron vendidos por su representante legal, el señor Marco Felipe Barrera Botello al señor Ricardo Barrera el 1 de agosto de 1995 (f. 88/tomo I).

El 17 de enero de 1995 se constituyó la sociedad anónima denominada TRANSPORTE & EQUIPOS BARRERA, S. A. mediante escritura pública N° 60, siendo sus dignatarios Ricardo Barrera Castillo (Presidente y Secretario), Ileana Yaneth Barrera (Vice-presidente), y Eudocia Castillo de Barrera (Tesorera) (fs. 83-85 Tomo I).

En vista de que la empresa MARBABO, S. A. había sido disuelta y había vendido todos sus bienes al representante legal de la sociedad TRANSPORTE & EQUIPOS BARRERA, S. A., la Caja de Seguro Social no pudo hacer efectivo el dinero correspondiente a las prestaciones que resultaron del accidente de trabajo en donde falleció Ernesto Ledezma. Sin embargo, como esta institución considera procedente declarar la sustitución patronal entre las empresas MARBABO, S. A. y TRANSPORTE Y EQUIPO BARRERA, S. A., luego de recibir el informe N° AI-M-97-167 de la Dirección Nacional de Auditoría (fs. 39-43/tomo II), mediante Resolución N° 886-97 D.G. fechada 8 de mayo de 1997 resolvió aplicar la "sustitución patronal al patrono TRANSPORTE Y EQUIPOS BARRERA, S. A. con número patronal 20-714-0038, por haber adquirido según lo establece el Artículo 61-A del Decreto-Ley 14 de 1954, parte o la totalidad de los bienes afectados a la explotación del negocio que operaba el patrono MARBABO, S. A., con número patronal 20-714-0020 y lo CONDENA solidariamente a pagar la suma de B/.66,697.74 en concepto de las prestaciones íntegras que resultaron del accidente de trabajo ocurrido el 23 de noviembre de 1993 al trabajador Paulo Ernesto Ledezma Vásquez ..." (fs. 78-79/tomo II).

El licenciado Sebastián Castro en representación de TRANSPORTE Y EQUIPOS BARRERA, S. A, interpuso recurso de apelación contra la Resolución mediante la

cual se le aplicó la sustitución patronal a esta empresa y se le condenó a pagar solidariamente la suma de B/.66,697.74. Sin embargo, dicho recurso fue declarado extemporáneo por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social mediante Auto fechado 5 de marzo de 1998 (f. 77/II tomo).

El 12 de mayo de 1998, el Juez Ejecutor de la Caja de Seguro Social, Provincia de Coclé, a quien se le había declinado la competencia del presente negocio (f. 95/II tomo), libró mandamiento de pago contra TRANSPORTE Y EQUIPOS BARRERA, S. A. mediante Auto N° 004-98. El señor Ricardo Barrera como representante legal de esta empresa se notificó de este Auto, el 18 de septiembre de 1998 anunciando recurso de apelación, pero sin sustentarlo (f. 112, 161, 166/ tomo II).

El Juez Ejecutor de la Caja de Seguro Social, el 8 de octubre de 1998, por medio del Auto N° 015-98 decretó formal secuestro contra la empresa TRANSPORTE Y EQUIPOS BARRERA, S. A. y, sobre todos los bienes muebles e inmuebles, dineros, créditos, valores, cuentas por cobrar, registros y la administración judicial y que son afectos a la explotación del negocio, hasta la suma de B/.66,697.74. en concepto de pago íntegro de las prestaciones resultantes del accidente sufrido el día 23 de noviembre de 1993 por el señor Paulo Ernesto Ledezma Vásquez, asegurado N° 103-2999, que le causó la muerte (f. 173/tomo II).

Luego de un detallado análisis de los hechos que conforman el expediente por jurisdicción coactiva y de los argumentos planteados por el incidentista, la Sala observa que tal como lo dijo la propia Caja de Seguro Social en sus resoluciones N° 8075-95 D.G. (f. 98/tomo I del expediente por jurisdicción coactiva) y N° 11,955-96 J.D. (fs. 119-120/tomo II del expediente por jurisdicción coactiva), el trabajador Paulo Ledezma Vásquez no estaba cubierto por el régimen de seguro de riesgos profesionales de la Caja de Seguro Social.

Ahora bien, ante la falta de cobertura del seguro de riesgos profesionales, regulada en el Decreto N° 68 de 31 de marzo de 1970, la Caja de Seguro Social no podía asumir el pago de las prestaciones que contempla dicho ordenamiento legal y tampoco conocer o determinar la indemnización por riesgo profesional que deberá pagar el empleador.

Es importante señalar, que el Decreto de Gabinete N° 68 de 1970 es aplicable a aquellos trabajadores que sí están inscritos en la Caja de Seguro Social, y es esta institución la que deberá asumir el riesgo, siempre que el empleador esté al día en el cumplimiento de sus obligaciones de pago de las cuotas de seguridad social destinadas a este rubro.

En cuanto a la vigencia del artículo 42 del Decreto de Gabinete N° 68 de 1970 en que se fundamenta el proceso coactivo iniciado contra las empresas MARBABO, S. A. Y TRANSPORTES Y EQUIPOS BARRERAS, S. A., la Sala ha expresado que fue derogado por el Capítulo III del Título II del Libro II (Riesgos Profesionales) del Código de Trabajo vigente.

Así en fallo fechado 18 de diciembre de 1998, la Sala expuso lo siguiente:

> "... a pesar de que el artículo 42 del Decreto de Gabinete N° 68 de 1970 faculta a la Caja de Seguro Social para ejercer la jurisdicción coactiva para recuperar lo que se le adeude en los casos en que se omiten efectuar los pagos de las cuotas obrero patronales, así como también en los casos en que por culpa del empleador, el trabajador no pudiera hacer efectivo las prestaciones que le corresponden por riesgo profesional, el Código de Trabajo establece las normas aplicables a las situaciones emanadas de las relaciones de trabajo, específicamente a lo referente a los riesgos profesionales y su forma de pago.
>
> ... esta Sala mediante Resolución de 2 de septiembre de 1994, se pronunció al respecto de la siguiente forma:

"Sin embargo, el Código de Trabajo que establece los preceptos aplicables a las situaciones derivadas de las relaciones de trabajo, y específicamente lo atinente a los riesgos profesionales y su forma de pago, advino al mundo jurídico mediante el Decreto de Gabinete N° 252 de 39 de diciembre de 1971, con la finalidad de regular las relaciones entre el capital y el trabajo, y su vigencia se inició el 2 de abril de 1972; derogando además, la Ley 67 de 1947, el Decreto de Gabinete N° 191 de 2 de septiembre de 1971 y todas las disposiciones que le sean contrarias. Por lo tanto, de acuerdo a las reglas de hermenéutica legal, las disposiciones del Código de Trabajo priman sobre las de la Caja de Seguro Social en este caso en concreto por tratarse de normas posteriores y de carácter especial en materia de competencia y de riegos profesionales.

..." (Registro Judicial de diciembre de 1998, Págs. 434-437)

Las normas aplicables al caso en estudio, son las contenidas en el Capítulo III del Título II del Libro II del Código de Trabajo sobre riesgos profesionales, cuyo artículo 305, establece que se regirán por las disposiciones de ese capítulo, los trabajadores que no estén cubiertos por el régimen obligatorio del Seguro Social, por ello la Sala considera que es aplicable lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 304 del Código de Trabajo, el cual establece que "en cualquier caso en que por mora u omisión del empleador la Caja de Seguro Social no se encuentre obligada a reconocer las prestaciones a que se refiere dicha legislación especial, tales prestaciones correrán íntegramente a cargo del empleador".

Como el señor Paulo Ledezma no estaba cubierto por el régimen obligatorio del Seguro Social, por omisión del empleador MARBABO, S. A. de inscribirlo en dicha institución, la norma aplicable es el inciso final del artículo 304 del Código de Trabajo de conformidad con el cual el empleador debe correr íntegramente con las prestaciones correspondientes.

Por tanto, es competencia de los Tribunales Ordinarios de Trabajo y no de la Caja de Seguro Social, el cobro de las prestaciones sobre riesgos profesionales que esta institución de seguridad social no está obligada a reconocer por mora u omisión del empleador, a los sobrevivientes del señor Paulo Ledezma Vásquez.

En el presente caso, de acuerdo con el expediente que contiene el proceso por cobro coactivo, están ejecutoriadas las siguientes resoluciones:

1- Resolución N° 8075-95 D.G de 21 de junio de 1995 mediante la cual el Director General de la Caja de Seguro Social, condenó a la empresa MARBABO, S. A. con número patronal 20-7140020 a pagar la suma de B/.66.697.74 en concepto de pago íntegro de las prestaciones que resulten del accidente de trabajo ocurrido el 23 de noviembre de 1993 y donde falleciera el señor Paulo Ernesto Ledezma Vásquez con seguro social N° 103-2999.

2- Resolución N° 11,955-96-J.D. de 22 de febrero de 1996 por medio de la cual la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social confirma la Resolución anterior.

3- Auto fechado 18 de junio de 1996 mediante el cual el Juez Ejecutor de la Caja de Seguro Social, Área de Azuero, libra mandamiento de pago contra la empresa MARBABO, S. A. por la suma de B/.66,697.74 en concepto de pago íntegro de las prestaciones que resulten del accidente de trabajo que le causó la muerte al señor Paulo Ernesto Ledezma Vásquez con seguro social N° 103-2999, el 23 de noviembre de 1993.

4- Auto fechado 28 de octubre de 1996 por medio del cual el Juez Ejecutor de la Caja de Seguro Social, Área de Azuero, decretó secuestro contra la empresa MARBABO, S. A. por la suma de B/.66,697.74.

5- Resolución N° 886-97 D.G. de 8 de mayo de 1997 mediante la cual la Directora General de la Caja de Seguro Social aplica la sustitución patronal al patrono TRANSPORTE Y EQUIPOS BARRERA, S. A., por haber adquirido según lo establece el Artículo 61-A del Decreto Ley 14 de 1954, parte o la totalidad de los bienes afectos a la explotación del negocio que operaba el patrono MARBABO, S. A. y lo condena solidariamente a pagar la suma de B/.66,697.74, en concepto de las prestaciones íntegras que resultaron del accidente de trabajo ocurrido el 23 de noviembre de 1993 y donde falleciera el trabajador Paulo Ernesto Ledezma Vásquez.

6- Auto fechado 5 de marzo de 1998 mediante el cual la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social declara extemporáneo el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución N° 886-97 D.G. fechada 8 de mayo de 1997.

7- Auto N° 004-98 fechado 12 de mayo de 1998 mediante el cual el Juez Ejecutor de la Caja de Seguro Social, Provincia de Coclé, libra mandamiento de pago contra la empresa TRANSPORTE Y EQUIPOS BARRERA, S. A. por la suma de B/.66,697.74 por haber sido condenada solidariamente mediante Resolución N° 886-97 D.G. fechada 8 de mayo de 1997.

Aún cuando el auto de secuestro cuya nulidad se pide fue dictado para que no resulte ilusoria la ejecución del auto N° 004 que está ejecutoriado, este auto de secuestro ha sido dictado por una autoridad que no tiene jurisdicción y por ello está viciado de nulidad absoluta, cuya declaratoria ha sido pedida, pero que también hubiera podido ser declarada de oficio conforme el artículo 722 del Código Judicial.

En consecuencia, de conformidad con el numeral 1 de los artículos 90 y 91 de la Ley 135 de 1943 en concordancia con el artículo 722 del Código Judicial, lo procedente es declarar la nulidad del Auto N° 015-98 mediante el cual el Juez Ejecutor de la Caja de Seguro Social de la Provincia de Coclé decretó formal secuestro contra la empresa TRANSPORTE Y EQUIPOS BARRERA, S. A. y, sobre todos los bienes muebles e inmuebles, dineros, créditos, valores, cuentas por cobrar, registros y la administración judicial y que son afectos a la explotación del negocio, hasta la suma de B/.66,697.74. en concepto de pago íntegro de las prestaciones resultantes del accidente sufrido el día 23 de noviembre de 1993 por el señor Paulo Ernesto Ledezma Vásquez, asegurado N° 103-2999, que le causó la muerte.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia DECLARA NULO el Auto N° 015-98 fechado 8 de octubre de 1998 proferido por el Juzgado Ejecutor de la Caja de Seguro Social de la Provincia de Coclé, dentro del Juicio Ejecutivo por Jurisdicción Coactiva que esa institución le sigue a la empresa TRANSPORTE Y EQUIPOS BARRERA, S. A.

Notifíquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JURISDICCIÓN COACTIVA

INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE SECUESTRO, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO FRANCISCO ESPINOSA CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE INVERSIONES TANYA, S. A., DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL LE SIGUE A INVERSIONES TANYA, S. A., Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Francisco Espinosa Castillo en nombre y representación de INVERSIONES TANYA, S. A., ha interpuesto Incidente de Levantamiento de Secuestro dentro del juicio ejecutivo por cobro coactivo que el BANCO HIPOTECARIO NACIONAL le sigue a INVERSIONES TANYA, S. A., y OTROS.

I. PRETENSION DEL INCIDENTISTA

El apoderado judicial de la sociedad INVERSIONES TANYA, S. A. solicita que con fundamento en el artículo 537 numeral 1 y 2 del Código Judicial, se ordene levantar el secuestro decretado por el Juzgado Ejecutor del BANCO HIPOTECARIO NACIONAL mediante Auto de 31 de agosto de 1994, las ampliaciones realizadas mediante Autos de 5 y 12 de septiembre de 1994, y el embargo decretado mediante auto de fecha 18 de marzo de 1997.

II. HECHOS EN QUE SE FUNDAMENTA EL INCIDENTISTA

La parte actora manifiesta que ha sido afectada por una medida cautelar de secuestro decretada en su contra por el Juzgado Ejecutor del BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, mediante Resolución de 31 de agosto de 1994, sobre treinta y dos (32) fincas de su propiedad, hasta la concurrencia de DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE BALBOAS CON VEINTE CENTESIMOS (B/.202,879.20). De igual manera, se le ha afectado con ampliaciones de suspensión y correcciones, mediante Autos de fecha 5 de septiembre de 1994 y 12 de septiembre de 1994, y por último con la elevación a grado de Embargo del secuestro decretado mediante auto de 18 de marzo de 1997.

Continúa exponiendo el accionante, que la sociedad INVERSIONES TANYA, S. A. no se le ha notificado en ninguna forma del proceso que en la jurisdicción coactiva se ventila, causándole graves perjuicios. Alega que no es parte en el presente proceso, ya que no ha sido demandada ni tampoco se le ha hecho ningún tipo de requerimiento, sino un secuestro en su contra y sin fundamento.

La referida medida cautelar, según el incidentista, fue comunicada al Registro Público afectando bienes de su propiedad, y desde ese entonces han pasado más de seis días, sin que se haya presentado proceso alguno en contra de INVERSIONES TANYA, S. A. Agrega además, que han transcurrido más de tres meses, sin que se le haya notificado de la demanda ejecutiva, al igual que no se le ha emplazado.

De acuerdo a estas circunstancias y a lo dispuesto en el artículo 537 numeral 1 y 2 del Código Judicial, el recurrente solicita levantar el secuestro decretado mediante Auto de 31 de agosto de 1994, al igual que las ampliaciones realizadas mediante Autos de 5 y 12 de septiembre de 1994; y el embargo decretado mediante Auto de fecha 18 de marzo de 1997.

Por último, la parte actora solicita en base al artículo 979 del Código Judicial, que se declare Sustracción de Materia dentro del presente incidente fundamentándose en la Resolución que resuelve el recurso de apelación presentado consta los autos antes descritos, por considerar lo siguiente:

> "La Resolución de 22 de diciembre de 1999, dictada por esta Sala, es clara y no deja dudas, ella indicó que Inversiones Tanya, S. A. no es parte, y ordenó también el levantamiento de las medidas cautelares, los cuales se consideran hechos extintivos de las pretensiones que se discuten en el expediente y en el incidente presentado." (F.29)

III. INFORME DE LA ENTIDAD EJECUTANTE

De la acción encausada se le dio traslado al Juzgado Ejecutor del BANCO HIPOTECARIO NACIONAL para que contestara el Incidente de Levantamiento de

Secuestro presentado. La licenciada Aura E. Arosemena, Juez Ejecutora del BANCO HIPOTECARIO NACIONAL se opuso a la pretensión de la parte actora de la siguiente manera:

En primer término, alega que el Juzgado Ejecutor del BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, mediante Resolución de 31 de agosto de 1994, determinó ordenar formal secuestro sobre treinta y dos (32) lotes que guardan relación con la Finca No. 48508, inscrita al Tomo 1134, Folio 404, de la Sección de Propiedad, Provincia de Panamá.

Señala que la acción precautoria de secuestro contra INVERSIONES TANYA, S. A. se determinó a solicitud del Gerente de la Institución y obedece a los siguientes hechos:

a) La sociedad VISTAMAR, S. A. en el año de 1980 traspasó mediante permuta a la PRIMERA ASOCIACION AHORROS Y PRESTAMOS PARA LA VIVIENDA (CENTRAL DE AHORROS) treinta y dos (32) lotes segregados de la finca madre No. 48508, por la suma de DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE BALBOAS CON VEINTE CENTESIMOS (B/.202,879.20), ubicados en La Chorrera, Provincia de Panamá;

b) VISTAMAR, S. A. a su vez traspasa a PERLAM, S. A. mediante una acción de permuta a cambio acciones por igual valor, sin embargo esta acción fue reservada a VISTAMAR, S. A.;

c) Los treinta y dos (32) lotes aparecen inscritos a nombre de INVERSIONES TANYA, S. A.

A juicio de la Juez Ejecutora, lo antes descrito pudo ser posible debido a que los accionistas y directores de estas tres sociedades traspasaron estos treinta y dos (32) lotes de una sociedad a otra sociedad en evidente acción dolosa para evitar pagar lo adeudado a la sociedad Central de Ahorros, quedando así el Banco Hipotecario Nacional afectado en su crédito.

Por este motivo la entidad ejecutante fundamenta la acción precautoria de Secuestro contra INVERSIONES TANYA, S. A. sobre los treinta y dos (32) lotes de los cuales resulta propietaria. Que lo que se persigue es garantizar el pago de lo que se adeuda a CENTRAL DE AHORROS por parte de las sociedades antes citadas, crédito que le fue cedido al BANCO HIPOTECARIO NACIONAL.

Afirma la Juez Ejecutora que la sociedad INVERSIONES TANYA, S. A. forma parte del presente proceso y fue debidamente notificada, como prueba de ello puede apreciarse a foja 171 del expediente escrito de notificación y apelación presentado por el poderdante, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1671 y s.s.; 1801 y s.s. del Código Judicial.

Concluye la entidad precitada indicando que, ha cumplido con todos los trámites en proceso por jurisdicción coactiva establecidos por ley, para lograr el pago del crédito adeudado al BANCO HIPOTECARIO, razón por la cual elevó a la categoría de embargo la acción de secuestro decretada por el Auto de 31 de agosto de 1994. Y agrega, que la misma sólo podrá ser levantada una vez le sea satisfecha el pago de la dicha suma adeudada.

IV. CRITERIO DE LA PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACION

Por otro lado, también se le corrió traslado a la Procuradora de la Administración para que contestara el presente incidente. Dicha funcionaria, mediante Vista Fiscal No.230 de 25 de mayo de 1999, solicitó que no se declare probado el mismo.

La Procuradora indica que el incidente de Levantamiento de Secuestro es una solicitud improcedente en la presente etapa del proceso ejecutivo por cobro coactivo que se surte ante el Juzgado Ejecutor del BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, ya que las treinta y dos (32) fincas han superado la condición cautelar de

secuestro, y actualmente poseen el carácter de bienes inmuebles embargados debidamente inscritos en el Registro Público.

V. ANTECEDENTES DEL CASO

Para un mejor entendimiento de la litis sometida a decisión de este Tribunal, la Sala considera imperativo realizar un recuento de las actuaciones del Juzgado Ejecutor del BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, hasta el pronunciamiento emitido por esta Sala con relación al dicho proceso.

1. El Juzgado Ejecutor del BANCO HIPOTECARIO NACIONAL mediante el Auto de 31 de agosto de 1994, visible a fojas 115 a 118 de los antecedentes, decretó formal medida precautoria de secuestro sobre treinta y dos (32) fincas de propiedad de INVERSIONES TANYA, S. A., por la suma de DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE BALBOAS CON VEINTE CENTESIMOS (B/.202,879.20).

2. Las fincas No. 72090, No. 72110, No. 72130, No. 72150, No.72170, No. 72190, No. 72210, No. 72230, No. 72250, No. 72270, No. 72290, No. 72310, No. 72330, No. 72350, No. 72370, No. 72390, No. 72410, No. 72430, No. 75768, No. 75788, No. 75808, No. 75828, No. 75848, No. 75868, No. 75888, No. 75908, No. 75928, No. 75948, No. 75968, No. 75988, No. 76008, No. 76048, todas de la Provincia de Panamá, pertenecían a CENTRAL DE AHORROS, quien cedió en pago de créditos adeudados al BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, estas treinta y dos (32) fincas. No obstante lo anterior, dichas fincas fueron transferidas por PERLAM, S. A. a VISTA MAR, S. A. y en la actualidad pertenecen a INVERSIONES TANYA, S. A.

3. El secuestro fue extendido por el Juzgado Ejecutor a los bienes de la sociedad PERLAM, S. A., mediante Auto de 5 de septiembre de 1994, y se ordenó a la Dirección del Registro Público que se abstuviera de autorizar la inscripción de cualquier transacción entre las sociedades PERLAM, S. A., VISTAMAR, S. A. e INVERSIONES TANYA, S. A. (Ver fojas 120, 121).

4. Consta a foja 125, el Auto de 12 de septiembre de 1994, por el cual se corrige el auto de 5 de septiembre de 1994, en el sentido de citar el nombre completo y los datos de inscripción de las sociedades antes citadas.

5. Seguidamente el Juzgado Ejecutor, por medio de los Autos fechados 6 de septiembre y 25 de octubre de 1994, libró mandamiento de pago contra la sociedad VISTAMAR, S. A. y a su vez, ordenó el secuestro de sus bienes, títulos, valores, bonos y cuentas bancarias hasta la concurrencia de DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE BALBOAS CON VEINTE CENTESIMOS (B/.202,879.20) (Fs. 122-123, 131-132).

6. Posteriormente, por medio del Auto de 18 de marzo de 1997, se elevó a la categoría de embargo, el secuestro decretado por este Juzgado Ejecutor mediante Auto de 31 de agosto de 1994 sobre las treinta y dos (32) fincas pertenecientes a INVERSIONES, TANYA, S. A. (Fs. 155-157).

7. Inscripción en el Registro Público de dicho auto, el 21 de abril de 1998 (foja 162).

8. Por otro lado, el día 9 de marzo de 1999, el apoderado judicial de INVERSIONES TANYA, S. A. se notificó de todas las diligencias que necesitaban tener su conocimiento y a la vez anunció que apelaba de las mismas.

9. La Resolución de 22 de diciembre de 1999 resuelve el recurso de apelación presentado, cuya parte resolutiva expresa que:

> "REFORMA los autos apelados fechados 5 y 12 de septiembre de 1994, y 30 de marzo de 1995, dictados por el Juez Ejecutor del Banco Hipotecario Nacional, en el sentido de eliminar a la sociedad INVERSIONES TANYA, S. A. de estos autos por no ser parte ejecutada, y levantar las medidas cautelares decretadas en su contra por medio

de los autos reformados.

Se niega el recurso de apelación promovido por Tanya, S. A. contra los autos fechados el 31 de agosto de 1994, el 5 y 12 de septiembre de 1994 y 12 de marzo de 1997 en los cuales Tanya, S. A. no aparece como ejecutada."

VII. CONTROVERSIA A DILUCIDAR

Determinar el levantamiento del secuestro elevado a la categoría de embargo sobre treinta y dos (32) fincas de propiedad de INVERSIONES TANYA, S. A., medidas decretadas por el BANCO HIPOTECARIO NACIONAL por considerar que el traspaso de dichas fincas fue en acción fraudulenta, para evitar su derecho a crédito.

VIII. DECISION DE LA SALA

Una vez evacuados los trámites legales, la Sala procede a resolver la presente controversia, previa las siguientes consideraciones:

1. Mediante Fallo de 22 de diciembre de 1999, la Sala dispuso excluir a la sociedad INVERSIONES TANYA, S. A. como parte ejecutada dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo, seguido por el BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, razón por la cual se reformaron los autos apelados.

2. Del hecho que INVERSIONES TANYA, S. A. no forme parte del proceso mencionado, se deriva como consecuencia natural que no puedan mantenerse las medidas cautelares decretadas contra los bienes de su propiedad.

3. El fallo en mención hace referencia además, que el levantamiento del secuestro y el embargo decretado sobre las treinta y dos (32) fincas de propiedad de la sociedad recurrente, tenia que ser decidido en el presente incidente.

4. La alegada situación de fraude en el traspaso de los bienes secuestrados y embargados, en que se fundamenta el BANCO HIPOTECARIO NACIONAL para justificar estas medidas cautelares, evidentemente no es competencia de esta Sala sino de la justicia ordinaria.

5. Como consecuencia de lo expresado, es claro que la determinación de la legalidad de los traspasos de los inmuebles embargados, constituye una materia propia de la denominada Acción Pauliana que representa justamente el mecanismo adecuado para obtener la anulación de aquellos actos de disposición patrimonial que se hayan realizado en fraude de los derechos de un acreedor. (Cfs. inciso 2, artículo 996 del Código Civil) De acuerdo a las circunstancias descritas, la Sala observa que no tiene otra alternativa que levantar la medida cautelar de secuestro contra las treinta y dos (32) fincas de propiedad del incidentista, ya que se cumple con lo dispuesto en el artículo 544 del Código Judicial, cuyo texto legal es el siguiente:

"ARTICULO 544: Si al darse al Registrador la orden de que trata el artículo 525 informare que el inmueble denunciado como de propiedad del demandado o presunto demandado está inscrito a nombre de otro o que haya sido secuestrado por otro tribunal, se revocará el secuestro decretado.

En estos casos, y cuando fuere depositada cosa ajena, el interesado podrá reclamarla mediante incidente, siguiéndose, en cuanto fueren aplicables, las reglas establecidas para las tercerías de dominio en los procesos ejecutivos; pero la apelación se concederá en efecto devolutivo."

En lo referente al embargo decretado mediante el Auto de 18 de marzo de 1997 que afecta las fincas ya señaladas, cabe aplicar lo dispuesto en el párrafo final del artículo 1705 del Código Judicial, el cual dice así:

"ARTICULO 1705: ...
Si al darse al registrador la orden de que trata el artículo 1676 informare que el inmueble denunciado como de propiedad del ejecutado está inscrito a nombre de otro o que haya sido embargado o secuestrado por otro Tribunal, se revocará el embargo decretado."

En mérito de todo lo expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA RESCINDIR el Secuestro decretado por medio del Auto de 31 de agosto de 1994 y por ende, RESCINDIR el Embargo decretado mediante el Auto de 18 de marzo de 1997, ambos dictados por el Juzgado Ejecutor del BANCO HIPOTECARIO NACIONAL.

Notifiquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) JORGE FABREGA P.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCION DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION, FALTA DE IDONEIDAD DE TITULO EJECUTIVO Y DE PRESCRIPCION ACUMULADAS, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO FRANCISCO ESPINOSA, EN REPRESENTACIÓN DE INVERSIONES TANYA, S. A., DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado FRANCISCO ESPINOSA actuando en representación de INVERSIONES TANYA, S. A., ha interpuesto excepciones de inexistencia de la obligación, falta de idoneidad del título ejecutivo, prescripción, dentro del juicio ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el BANCO HIPOTECARIO NACIONAL a INVERSIONES TANYA, S. A. Y OTROS.

Por razones de economía procesal y de conformidad con los artículos 709, 710, 711 del Código Judicial, mediante resolución de 16 de abril de 1999 se ordenó la acumulación de las excepciones presentadas, en virtud que se fundamentan en los mismos hechos y su objeto es idéntico.

FUNDAMENTO DEL EXCEPCIONISTA

El proponente de las excepciones bajo estudio señala que el Juzgado Ejecutor del BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, mediante Resolución de 31 de agosto de 1994, decreto formal secuestro sobre 32 fincas de propiedad de INVERSIONES TANYA, S. A., hasta la concurrencia de DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE BALBOAS CON VEINTE CENTESIMOS (B/.202,879.20). De igual manera, el Juzgado Ejecutor mediante los Autos de fecha 5 de septiembre de 1994 y 12 de septiembre de 1994, decretó ampliaciones y por último elevó a la categoría de Embargo el secuestro decretado mediante auto de 18 de marzo de 1997.

Destaca el recurrente, que la sociedad INVERSIONES TANYA, S. A. se ha visto afectada por la mencionada medida cautelar y embargo, a pesar de no adeudar suma alguna ni al BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, ni a la CENTRAL DE AHORROS.

Fundamenta su pretensión argumentando que, para que exista un proceso por cobro coactivo, o un proceso ejecutivo, es necesario que exista un título ejecutivo o un documento de recaudo ejecutivo. Que en el presente expediente de marras no existe título ejecutivo válido, máxime aún que INVERSIONES TANYA, S.

A. ni siquiera es parte demandada.

En cuanto a la prescripción de la acción, según la parte actora han transcurrido más de quince años, sin que a la fecha se haya realizado gestión alguna, que de manera efectiva interrumpa la prescripción del supuesto derecho de la CENTRAL DE AHORROS, y actualmente del BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, en contra de INVERSIONES TANYA, S. A.

Aunado a lo anterior, expresa que la demanda nunca fue notificada a la sociedad INVERSIONES TANYA, S. A., ni publicada en periódico de gran circulación nacional. Por tanto, a juicio del accionante, la prescripción nunca fue interrumpida de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 658 del Código Judicial.

La parte actora solicita que se declaren probadas las presentes excepciones y se ordene levantar las medidas de Secuestro y Embargo decretados.

CRITERIO DE LA ENTIDAD EJECUTANTE

De conformidad al trámite procesal se corrió traslado al Juez Ejecutor del BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, para que rindiera informe de conducta.

El Juez Ejecutor indicó que no se ha afectado los intereses de la Excepcionista, toda vez que se ha promovido una medida cautelar sobre varias fincas conforme a derecho.

Según la entidad ejecutante, INVERSIONES TANYA, S. A. si le adeuda una suma de dinero al BANCO HIPOTECARIO NACIONAL y existe en el expediente los correspondientes títulos que prestan mérito ejecutivo para promover el referido proceso por jurisdicción coactiva.

Por todo lo anterior, solicita el Juez Ejecutor que sea negada la pretensión del excepcionista.

OPINION DE LA PROCURADORIA DE LA ADMINISTRACION

De igual manera se le corrió traslado a la Procuradora de la Administración, quien mediante Vista Fiscal No. 470 de 21 de septiembre de 1999, se opuso a las excepciones presentadas en los siguientes términos:

En cuanto a la excepción de inexistencia de la obligación considera que la misma carece de todo sustento jurídico, porque es evidente que sí existe la obligación la cual fue objeto de una medida cautelar de secuestro, que ha sido elevada a la categoría de embargo.

Igual criterio sustenta la representante del Ministerio Público para oponerse a la excepción de falta de idoneidad del título ejecutivo, ya que indica que las circunstancias descritas constituyen una prueba irrefutable de que la obligación existe, es líquida y exigible.

Con relación a la excepción de prescripción, señala que la misma es infundada en razón que en el proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el BANCO HIPOTECARIO NACIONAL a INVERSIONES TANYA, S. A., se han cumplido todos los trámites legales pertinentes.

CONCLUSIONES DE ESTA SUPERIORIDAD

Una vez cumplidos los trámites correspondientes, la Sala procede a resolver la presente controversia.

Dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el BANCO HIPOTECARIO NACIONAL a INVERSIONES TANYA, S. A. Y OTROS, es preciso acotar que la parte actora presentó recurso de apelación e incidente de levantamiento de secuestro y embargo, los cuales guardan relación con las excepciones acumuladas.

La sociedad INVERSIONES TANYA, S. A. solicita que se levanten las medias cautelares de secuestro y embargo decretadas en su contra, en razón que no le adeuda suma alguna al BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, por lo cual no forma parte del presente proceso.

Con relación a lo anterior, en la Resolución de 22 de diciembre de 1999, esta Sala reformó los autos fechados el 5 y 12 de septiembre de 1994 y de 30 de marzo de 1995, dictados por el Juzgado Ejecutor del BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, en el sentido de eliminar a la sociedad INVERSIONES TANYA, S. A. de estos autos por no ser parte ejecutada.

Adicionalmente se advierte que, mediante resolución de 2 de agosto de 2000, la Sala ordenó rescindir el secuestro decretado por medio del Auto de 31 de agosto de 1994 y el embargo decretado mediante Auto de 18 de marzo de 1997, ambos dictados por el Juzgado Ejecutor del BANCO HIPOTECARIO NACIONAL.

Por lo expuesto la Sala, al analizar el negocio planteado estima que en este proceso se pone de relieve claramente la pérdida o desaparición del objeto procesal ya que la pretensión del actor, consistente en el levantamiento del secuestro y embargo, ha sido resuelto a través de los autos antes mencionados.

De las circunstancias expresadas resulta aplicable el artículo 979 del Código Judicial, el cual establece lo siguiente:

> "ARTICULO 979. En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo de las pretensiones objeto del proceso ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que haya sido probado oportunamente."

En atención al texto transcrito, es evidente que lo procedente es declarar sustracción de materia en el presente caso.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que se ha producido el fenómeno jurídico de SUSTRACCION DE MATERIA y, en consecuencia, ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDUARDO SUERO CASTRO, EN REPRESENTACIÓN DE ANGELA COLLADO BAEZ, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO QUE POR COBRO COACTIVO LE SIGUE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Eduardo Suero Castro, en representación de ANGELA COLLADO BAEZ, ha interpuesto excepción de prescripción, dentro del juicio ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el MUNICIPIO DE PANAMÁ.

La parte actora solicita a este Tribunal que deje sin efecto el Auto de 26 de agosto de 1999, mediante el cual el MUNICIPIO DE PANAMÁ libró mandamiento de pago contra ANGELA COLLADO BAEZ, hasta la concurrencia de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES BALBOAS CON 70/100 (B/.2,553.70), en concepto de impuestos

municipales morosos.

Fundamenta su pretensión en los argumentos que se aprecian a continuación:

"Primero: Con fecha 31 de agosto de 1999 la señora Angela Collado Baez fue notificada del auto de mandamiento de pago del señor Juez Ejecutor del Municipio de Panamá de fecha 26 de agosto de 1999.

Segundo: El referido Auto se refiere a una morosidad de mi representada en el pago de los impuestos municipales que asciende a la suma de B/.2,553.70.

Tercero: La suma expuesta es el resultado de impuestos municipales causados entre 1988 y 1992 y entre esta fecha y la notificación en mención han transcurrido más de siete años.

Cuarto: La Ley 106 del 8 de octubre de 1978, expresa en su artículo 966: "Las obligaciones resultantes de los impuestos municipales prescriben a los cinco (5) años de haberse causado."

Del libelo de la excepción se procedió a darle traslado al Juzgado Ejecutor del MUNICIPIO DE PANAMÁ el cual en su informe de conducta, solicitó que se declare negada la excepción.

Por su parte, la Procuradora de la Administración al contestar la presente excepción mediante Vista Fiscal No.335 de 16 de noviembre de 1999, consideró que en el caso subjúdice procede declarar parcialmente probada la excepción presentada.

Señala la Procuradora de la Administración que la excepcionante mantiene una morosidad desde el día 28 de febrero de 1988, pero a la fecha de emisión del auto ejecutivo que libra mandamiento de pago de 26 de agosto de 1999, notificado el 31 de agosto de 1999 han transcurrido más de cinco (5) años, desde que se causaron los impuestos, lo que significa que el Municipio de Panamá únicamente puede reclamar a la señora Angela Collado Baez los impuestos municipales y recargos causados con posterioridad al 31 de agosto de 1994, tal como lo establece el artículo 96 de la Ley 106 de 1973.

CONSIDERACIONES DE ESTA SALA

Cumplidos los trámites de rigor, los Magistrados que integran la Sala entran a resolver el presente negocio.

Esta Superioridad advierte, que una vez examinadas las constancias que obran en el expediente, coincide con lo expuesto por la Procuradora de la Administración, ya que considera que la excepción de prescripción se encuentra parcialmente probada.

Consta de la foja 2 a la 6 del expediente administrativo, el estado de cuenta de la señora COLLADO BAEZ, el cual comprende los impuestos generados desde el 28 de febrero de 1998 hasta 31 de julio de 1992, con un monto total de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES BALBOAS CON 70/100 (B/.2,553.70).

Como consecuencia, mediante Auto de 26 de agosto de 1999 el Juzgado Ejecutor del MUNICIPIO DE PANAMÁ libró mandamiento de pago contra la excepcionante por el monto antes señalado. Dicho auto fue notificado el 31 de agosto de 1999 (f. 11).

El artículo 96 de la Ley 106 de 1973 sobre el Régimen Municipal textualmente estatuye:

"Las obligaciones resultantes de los impuestos municipales prescriben a los cinco (5) años de haberse causado."

Del alcance de la norma transcrita se desprende que desde la fecha en que se inicia el período de morosidad (1988) hasta el momento en que la excepcionante se notifica del auto que libra mandamiento de pago, es decir el 30 de agosto de 1994, han transcurridos más de cinco (5) años. Por esta razón los impuestos y recargos exigidos por el Juzgado Ejecutor del MUNICIPIO DE PANAMÁ durante este período se encuentran prescritos.

No obstante, la Sala advierte que no le asiste la razón a la excepcionante en cuanto a la solicitud de declarar prescritas las obligaciones generadas con posterioridad al 31 de agosto de 1994, siendo que al momento de notificarse del auto de mandamiento de pago se interrumpe la prescripción.

Con apoyo de las circunstancias expresadas, es que esta Corporación de Justicia concluye que no puede declararse totalmente probada la excepción de prescripción bajo estudio.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA PARCIALMENTE PROBADA la excepción de prescripción, presentada por el licenciado Eduardo Suero Castro, en representación de ANGELA COLLADO BAEZ, sólo en cuanto a los impuestos Municipales comprendidos entre el año de 1988 al 30 de agosto de 1994, y NIEGA el resto de las pretensiones del excepcionante.

Notifiquese

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE SECUESTRO, INTERPUESTO POR LA FIRMA CASTRO & CASTRO EN REPRESENTACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO, S. A., DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL LE SIGUE A LA EMPRESA ADMINISTRADORA DE RESTAURANTE, S. A. (RESTAURANTE CHINA TOWN EXPRESS). MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Castro & Castro actuando en nombre y representación de Equipo y Mobiliario, S. A., ha interpuesto incidente de levantamiento de secuestro dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que la Caja de Seguro Social le sigue a la Empresa Administradora de Restaurante, S. A. (Restaurante China Town Express).

El apoderado judicial de la incidentista fundamenta su solicitud alegando que su representada es la propietaria de los bienes muebles que se encuentran en el local comercial denominado Restaurante Chinatown Express, que fueron objeto de medida cautelar ordenada por el juzgado ejecutor de la Caja de Seguro Social contra los bienes de la sociedad Administradora de Restaurante, S. A., mediante resolución de 3 de junio de 1998, en la cual decretó formal secuestro hasta la concurrencia de B/.27,847.48, sobre todos los bienes muebles, dinero, créditos, cuentas por cobrar, valores, registros y sobre la administración de la empresa incluyendo los bienes que se adquieran durante ésta.

Señala el incidentista que el 4 de junio de 1998, se llevó a cabo la diligencia de inventario y avalúo de los bienes que fueron objeto de secuestro y que fueron encontrados en el local comercial denominado Restaurante Chinatown Express de propiedad de Administradora de Restaurante, S. A. Expresó que dichos

bienes no pertenecen a esta sociedad, sino a Equipo y Mobiliario, S. A., quien los arrienda a Administradora de Restaurante, S. A. desde el 10 de enero de 1995, por un canon mensual de B/.4,500.00, que fue pagado todos los meses mediante cheques girados contra sus cuentas en Pribanco y Credicorp Bank (fs. 59 y 60).

Esta Superioridad ordenó correrle traslado del incidente interpuesto al Juzgado Ejecutor de la Caja de Seguro Social y a la Procuradora de la Administración por el término de ley.

En el expediente sólo consta la Vista Fiscal de la señora Procuradora de la Administración, identificada con el N° 267 de 15 de junio de 1999 (fs. 67 a 70), en la cual manifestó que no le asiste la razón al incidentista, porque no demostró que le pertenezcan los bienes secuestrados por el Juez Ejecutor de la Caja de Seguro Social que fueron encontraron en el local donde funcionaba la sociedad Administradora de Restaurante, S. A.

Agregó que consta en el expediente el supuesto contrato de arrendamiento de equipos y mobiliarios de cocina, depósitos, áreas de descanso, salón y oficina del restaurante y su anexo, suscrito entre Equipo y Mobiliario, S. A. y la empresa Administradora de Restaurante, S. A., así como también una serie de copias de comprobantes de cheques expedidos a favor del incidentista, pero a su juicio, no es suficiente para acreditar fehacientemente que todos los bienes secuestrados pertenezcan a la empresa Mobiliario y Equipo, S. A., ya que el contrato de arrendamiento presentado por la actora, no ha sido formalizado por escrito en los formatos suministrados por la Dirección General de Arrendamientos como lo exige la ley, y por ello la prueba aportada es irrelevante e insuficiente para sustentar la solicitud de levantamiento del secuestro.

Observa esta Superioridad que la parte actora fundamenta su solicitud de levantamiento de secuestro afirmando que los bienes muebles secuestrados dentro del local comercial en el que funcionaba la empresa ejecutada son de su propiedad.

A foja 9 del expediente del proceso ejecutivo consta el auto de 3 de junio de 1998, que libra mandamiento de pago por la vía ejecutiva a favor de la Caja de Seguro Social y contra Administradora de Restaurante, S. A., por la suma de B/.27,847.48 en concepto de cuotas obrero patronales no pagadas durante el período comprendido entre diciembre de 1996 a abril de 1998, más los recargos e intereses legales que se causen hasta el completo pago de la obligación.

A foja 10 del expediente del proceso ejecutivo consta el auto de secuestro de todos los bienes muebles, dineros, créditos, cuentas por cobrar, valores, registros y la administración de la empresa Administradora de Restaurante, S. A. que se adquieran durante esta gestión, hasta la suma de B/.27,847.48, en concepto de cuotas obrero patronales dejadas de pagar a la institución, más los recargos e intereses legales que resulten a la fecha de la cancelación.

Conforme al artículo 544 del Código Judicial, en los casos en que el bien inmueble denunciado como propiedad del demandado esté inscrito en el Registro Público a nombre de otro o haya sido secuestrado por otro tribunal, y en los casos en que fuere depositada cosa ajena, el interesado podrá reclamarla mediante incidente. Para ello se seguirán, en lo que fueren aplicables, las reglas establecidas para las tercerías de dominio en los procesos ejecutivos.

El artículo 1788 del Código Judicial establece las reglas antes citadas y en su numeral 2 señala que sólo puede promoverse tercería excluyente fundándose en un título de dominio o derecho real cuya fecha sea anterior al auto ejecutivo o al auto de secuestro que haya precedido el embargo; mientras que el numeral 4 de dicho artículo indica que si se trata de bienes muebles, la anterioridad del título debe referirse a la fecha del auto ejecutivo o de secuestro según el caso; para ello son admisibles todas las pruebas con que pueda acreditarse los derechos reales en bienes de esa clase.

Observa esta Superioridad que las pruebas presentadas por la incidentista para demostrar su título de propiedad sobre los bienes muebles que han sido secuestrados, inventariados y avaluados por el juzgado ejecutor de la Caja de Seguro Social, consisten en un original del contrato de arrendamiento firmado por los representantes legales de las sociedades Administradora de Restaurantes, S. A. y Mobiliario y Equipo, S. A., del anexo en el que se detallan los bienes muebles dados en arrendamiento y copias al carbón de los cheques y talonarios mediante los cuales se hacían los pagos del arrendamiento de los bienes muebles.

Los documentos privados presentados en original y copias al carbón no fueron admitidos en el auto de pruebas, porque las copias no están autenticadas y además, el contrato de arrendamiento, aún siendo original, no puede ser considerado como prueba válida en el proceso para levantar el secuestro ordenado por la Caja de Seguro Social a su favor. Dicha institución no puede verse afectada desfavorablemente por este documento privado, que no es auténtico ni de fecha cierta anterior al auto de secuestro, porque no reúne los requisitos señalados en el artículo 854 del Código Judicial para ser considerado como tal. Aún cuando los documentos privados tienen el mismo valor que los documentos públicos respecto a su contenido para quienes lo hubiesen suscrito, respecto a terceros sólo son auténticos y de fecha cierta aquellos que reúnen los requisitos del citado artículo 854 del Código Judicial.

Este no ha sido el caso del contrato de arrendamiento de bienes muebles y de su anexo en el que se describen los mismos, puesto que las firmas no fueron reconocidas ante Notario y además, sólo ha sido reconocida en autos por el signatario del representante legal de la incidentista, más no así por el signatario del representante legal del arrendatario quien es el ejecutado en el proceso por cobro coactivo.

Así las cosas, y luego del estudio del expediente del incidente y del expediente contentivo del proceso ejecutivo por cobro coactivo, la Sala llega a la conclusión que no existe prueba idónea que demuestre el título de propiedad del incidentista sobre los bienes muebles cuyo secuestro pide sea levantado, y por ello procede declarar no probado el incidente presentado.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO PROBADO el incidente de levantamiento de secuestro presentado por la firma Castro & Castro, en nombre y representación de EQUIPO Y MOBILIARIO, S. A. dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la Caja de Seguro Social a EMPRESA ADMINISTRADORA DE RESTAURANTE, S. A.

Notifíquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL PRESENTADO POR EL LICENCIADO FELIPE WAISOME, ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LUIS CÓRDOBA, CONTRA LA SENTENCIA DE 31 DE MAYO DE 2000, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: VENTAS Y MERCADEO, S. A. Y COCA COLA DE PANAMÁ, CÍA. EMBOTELLADORA, S. A. VS. LUIS CÓRDOBA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, ONCE (11) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. LABORAL.

VISTOS:

El abogado Felipe Wisome, actuando en nombre y representación del señor Luis Córdoba, ha promovido recurso de casación laboral contra la sentencia de 31 de mayo del 2000, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso laboral de autorización de despido instaurado por las empresas Ventas y Mercadeo, S. A. y Coca Cola de Panamá, Cía. Embotelladora, S. A., contra el señor Luis Córdoba.

La Sala se percata, previa revisión del escrito que contiene el presente recurso extraordinario, que el mismo cumple con los requisitos que establecen los artículos 925 y 926 del Código de Trabajo, y que se hizo el emplazamiento que ordena el artículo 927 ibídem.

Mediante la sentencia recurrida el Tribunal Superior de Trabajo decidió confirmar la sentencia No. 8, de 29 de marzo de 2000, emitida por el Juzgado Tercero de Trabajo de la Primera Sección, a través de la cual se autorizó a la empresa solicitante para despedir al trabajador Luis Córdoba. El fallo de segunda instancia consideró en su decisión que hubo falta de probidad u honradez por parte del trabajador al retener dinero de la empresa producto de las ventas de gaseosas, sin estar autorizado para ello, conducta que está prohibida por el artículo 38, numeral 13, del Reglamento Interno de la empresa, que forma parte de la Convención Colectiva.

La falta de honradez, según el fallo impugnado, se aprecia en la conducta del trabajador porque éste el día 27 de octubre de 1999 recibió la cantidad de B/.252.30 en pago de la venta de gaseosas, únicamente reportó a la empleadora B/.131.30, y cuando fue cuestionado ante el Comité de Empresa acerca del hecho, se limitó a no contestar.

Agrega la resolución que nada indica que el trabajador estuviera facultado para disponer libremente del dinero de la empresa, ocasionando con ello un relajamiento en la disciplina, además de un perjuicio a la misma. (Cfr. foja 93).

El casacionista afirma que la sentencia del ad-quem es violatoria de los artículos 181, y 213, literal A, numeral 5, del Código Laboral.

En cuanto al primer cargo, el actor asegura que la infracción del artículo 181 es directa porque aplica una norma del Reglamento Interno de la empresa (artículo 38, numeral 13) a una situación que no corresponde. Agrega que la norma invocada prohibe a los vendedores retener dinero de la empresa, o suspender u omitir su entrega rápida y efectiva al culminar la jornada de trabajo; así como proscribe la sustitución del dinero por vales o de cualquier otra forma; sin embargo, en el caso de su representado no se produjo ninguna de estas circunstancias; y que si Luis Córdoba entregó a su empleador la suma de B/.132.30 en vez de B/.252.30, esto fue resultado directo de la operación de "devolución de producto que hizo con Alexander Saucedo, la cual constituye una operación normal y rutinaria para los vendedores de la empresa, tal como fue reconocido claramente por Enrique Escalona C. en sus declaraciones observables a página 6 del Acta de Audicencia" (Cfr. foja 3).

En cuanto al segundo cargo de infracción contra el artículo 213, literal A, numeral 5, del Código Laboral, el casacionista asegura que se produjo de modo directo, porque a su juicio ni la entrega de B/.131.30 en lugar de B/.252.30, ni afirmar que no se recuerda un hecho ocurrido mes y medio antes puede ser calificado como falta de probidad o conducta desleal con la empresa (Cfr. foja 4).

El apoderado judicial de la empleadora se opuso a la pretensión del casacionista, en escrito que corre de fojas 9 hasta la 12 de los autos, expresando que su poderdante acreditó la conducta irregular del trabajador Luis Córdoba, conducta que este último no pudo justificar, porque el trabajador en el acto de audiencia dijo que tuvo la necesidad de hacer una devolución de la cual no existe prueba, y otros testigos expresaron que debe existir documentos que respalden la entrada y salida de mercancía.(foja 12).

El patrono arguye que el abogado del empleado pretende acuerpar que cuando un trabajador reciba dinero de un cliente y no entregue la totalidad de éste, ello no es falta de probidad u honradez, opinión que en su concepto es inaceptable, porque de aceptarse produciría el rompimiento de la disciplina en la empresa, y se perderían los controles que tienden a evitar faltantes de producto o dinero (Cfr. foja 12).

Expuestos los antecedentes del proceso, la Sala procede a decidir el presente recurso extraordinario.

Este Tribunal considera que no le asiste la razón al casacionista cuando afirma que la sentencia de 31 de mayo del 2000, expedida por el Tribunal Superior de Trabajo viola de manera directa tanto el artículo 181, como el 213, Acápite A, numeral 5, del Código de trabajo. La primera de estas disposiciones invocadas en el recurso se refiere al Reglamento Interno de Trabajo, como instrumento jurídico que tiene por objeto "precisar las condiciones obligatorias a que deben someterse el empleador y sus trabajadores con motivo de la ejecución o prestación de servicio"; mientras que la segunda, prevé la falta de probidad u honradez, como una de las causales de naturaleza disciplinaria contenida en el Acápite A enunciado, que faculta al empledor para dar por terminada la relación de trabajo.

En el expedediente principal reposan pruebas testimoniales y documentales que demeritan los cargos de infración argumentados por el recurrente. En efecto, carece de fundamento la presunta infracción del artículo 181 del Código de Trabajo porque las empresas Ventas y Mercadeo, S. A. y Coca Cola de Panamá, Compañía Embotelladora S. A., al solicitar autorización para despedir al trabajador Luis Córdoba lo hicieron fundamentándose en el Reglamento Interno de la Empresa, que es parte de la Convención Colectiva pactada con sus trabajadores, específicamente en su artículo 38, acápite 13, ya que la conducta del señor Luis Córdoba se ajusta a lo que establece esta norma reglamentaria aplicable en la empresa.

Ha quedado demostrado en el proceso que el señor Luis Córdoba, quien prestaba sus servicios como vendedor, el 27 de octubre de 1999, retuvo parte de dinero producto de las ventas del día del rubro gaseosas. El día en cuestión este empleado entregó B/.131.30 resultante de las ventas de esa fecha, en vez de la suma de B/.252.30, que era lo correcto, sin dar a la empresa una justificación válida respaldada con pruebas al respecto.

El artículo 38 del Reglamento de las citadas empresas, consultable a fojas 18 del expediente principal, contiene un conjunto de prohibiciones a sus empleados, y particularmente el numeral 13 prohíbe a éstos, lo siguiente:

> "En especial a los vendedores, les está prohibido retener dinero de la Empresa, o suspender u omitir su entrega pronta y efectiva al fin de su jornada de trabajo, sustituyéndolos por vales o en cualquier otra forma".

El casacionista afirma que el día de los hechos él tuvo que entregar dinero a un cliente porque éste devolvió gaseosas, para ello, por no contar con dinero en efectivo en la cantidad exacta, cambió el cheque No. 2079506, del sector público girado a nombre de Manuel Ureña, que reposa a fojas 11 del expediente, según él mismo declara a fojas 49 y 50.

Luis Córdoba afirmó que en esa operación devolvió B/.121.00 al señor Alexander Saucedo, pero que no tiene ninguna constancia documental de ese hecho. (foja 51).

Por su parte, los señores Enrique Escalona (foja 44) y Héctor Donado Saavedra (foja 46), quienes laboran para la empresa, en sus respectivas deposiciones niegan que un trabajador pueda hacer efectivo con otro vendedor un cheque cobrado a un cliente producto de la venta del día.

El señor Alexander Saucedo quien labora en el bar Darling, fue la persona a la que Luis Córdoba hizo la devolución de dinero por el monto mencionado y declaró que es cierto este hecho. En dicho bar no se puede vender "Coca cola", y que esa devolución se debió a que el "licor fuerte" se vende mejor con "Pepsi", y los clientes no quieren "Coca cola". Además, asegura que esa actividad la hacía a espaldas de los dueños. (foja 52).

El abogado del señor Luis Córdona niega que su representado haya incurrido en la conducta que describe el artículo 38, numeral 13, del Reglamento Interno, y menos aún que le ocasionó perjuicios a la empresa; sin embargo, Enrique Escalona Cárdenas, ante pregunta formulada por el abogado de la empresa acerca del procedimiento que deben seguir los vendedores con el dinero producto de las ventas una vez éstos regresen de cumplir su ruta, respondió que el trabajador debe entregar todos "los documentos a liquidación y el efectivo producto de la venta o de algún o alguna devolución de crédito debe ser entregado en caja" (foja 43).

A juicio de la Sala, no existe violación por indebida aplicación del artículo 181 del Código de Trabajo, tal como afirma el casacionista, toda vez que el artículo del Reglamento Interno es aplicable a la conducta del trabajador porque éste retuvo indebidamente dinero de la empresa. La Sala considera que el comportamiento de Luis Córdoba se subsume en el precepto en cuestión. El testimonio con el cual pretende justificar su actuación rendido por el señor Alexander Saucedo, quien declaró que estaba adquiriendo dosas "Coca cola" a escondidas de los dueños del Bar Darling para el cual laboraba, a pesar de que esto estaba prohibido, a juicio de la Sala, carece de confiabilidad y credibilidad. En consecuencia, se desestima el cargo examinado.

En relación con la presunta violación del numeral 5, Acápite A, del artículo 213 del Código Laboral, la Sala coincide con el criterio expuesto por el Tribunal Superior de Trabajo, en fallo que confirmó el de primera instancia, en cuanto a que la conducta de Luis Córdoba, antes descrita, constituye falta grave de probidad u honradez, además de incumplimiento de normas expresas contenidas en el Reglamento Interno. En autos no existe prueba alguna que justifique esta conducta del trabajador, que en el caso concreto le ha irrogado un perjuicio económico a la empresa. Consecuentemente, no debe prosperar el cargo de infracción contra el numeral 5, Acápite A, artículo 213 del Código de Trabajo, alegado por el casacionista.

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia -Casación Laboral-, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 31 de mayo del 2000, emitida por el Tribunal Superior de Trabajo, dentro del proceso de autorización de despido incoado contra Luis Córdoba por las empresas Ventas y Mercadeo, S. A. y Coca Cola de Panamá, Cía. Embotelladora, S. A.

Sin costas.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO HERNANDO CORNO EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS ESCARTIN CONTRA LA SENTENCIA DE 2 DE DICIEMBRE DE 1999, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: ACERO PANAMA, S. A. -VS- CARLOS ESCARTIN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISEIS (16) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

VISTOS:

El licenciado Hernando Corno, ha presentado recurso de casación laboral contra la sentencia de 2 de diciembre de 1999, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial dentro del proceso ACERO PANAMA, S. A. -VS- CARLOS ESCARTIN.

El casacionista persigue con este recurso que la Sala revoque la sentencia recurrida.

La parte demandante presentó oposición al recurso de casación por considerar, entre otras cosas, "que el mismo se sustenta en normas relativas a la apreciación de la prueba, lo cual no es materia de casación".

Se trata de un proceso abreviado en el cual se solicita autorización judicial previa para despedir. El juzgador de primer grado accedió a la solicitud de autorización de despido del trabajador Carlos Escartín, presentada por la empresa ACERO PANAMA, S. A., y el juzgador de segundo grado la confirmó.

La Sala pasa a examinar los cargos que se le imputan a la sentencia de segundo grado.

El actor señala que la sentencia recurrida ha infringido los artículos 152, 735, 764, 765, 776, 969 y 991 del Código de Trabajo.

Observa la Sala que los argumentos centrales del recurrente se enmarcan en que el juzgador no valoró el material probatorio en debida forma.

Dentro de este contexto, esta Corporación de Justicia considera que las infracciones señaladas no proceden puesto que no han sido formuladas en relación con una norma de carácter sustancial o material que consagre un derecho a favor del trabajador. Además, la Sala ha manifestado en reiteradas ocasiones que el recurso de casación no es una tercera instancia y que este recurso en materia laboral sólo procede para corregir errores in judicando en que haya incurrido el juzgador de segundo grado, pero que dicho cargo no procede al tratarse de la valoración de pruebas según la sana crítica que le dé el juzgador, como el que se endilga en este caso a la sentencia recurrida si no está acompañado con infracciones a una norma sustancial o material.

Se colige entonces que sólo en ocasiones excepcionales la Sala puede entrar a juzgar la valoración que el juez le dé a las pruebas, y es en los casos en que dicho tribunal haya incurrido en un error manifiesto, un error que salte a la vista sin mayor dificultad, o haya infringido la regla de la sana crítica basado en un equivocado razonamiento apreciativo de las pruebas que conduce a dar por establecido un hecho sin estarlo o al contrario.

"Las normas adjetivas que tratan sobre pruebas, valoración de pruebas y presunciones pueden servir de medio para demostrar la violación de disposiciones sustantivas. Estas últimas establecen los derechos, que de no haber sido reconocidos, pueden ser reclamados. En ese sentido, las normas adjetivas deben incidir en las sustantivas, para que puedan ser revisables ante esta Superioridad, en caso de que se considere que aquéllas han sido violetandas. Esto significa que el Tribunal de Casación conoce sólo de errores in judicando y no de errores in procedendo" (Cfr. Sentencias de 7 de julio de 2000, 18 de abril de 1996 y 12 de junio de 1995).

Cuando la acusación se sustenta sobre la base exclusiva de normas de carácter adjetivo, como en el caso in examine, los cargos endilgados quedan incompletos y por lo tanto, no alcanzan a producir los resultados que persigue el recurso de casación, tal como se infiere de lo dispuesto en el artículo 928 del Código de Trabajo.

Como corolario de lo antes expresado, la Sala Tercera (LABORAL) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECHAZA DE PLANO el recurso de casación laboral interpuesto por el licenciado Hernando Corno contra la sentencia de 2 de diciembre de 1999, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial dentro del proceso ACERO PANAMA, S. A. -VS- CARLOS ESCARTIN.

Notifíquese,

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL INTERPUESTA POR EL LCDO. FERNANDO STAPF GÓMEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LAZARO ARCIA CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EL 25 DE MAYO DE 2000, POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: LAZARO ARCIA VS IBETH MENDOZA RODRIGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. (LABORAL).

VISTOS:

El licenciado Fernando Stapf Gómez en nombre y representación de LÁZARO GARCIA ha propuesto recurso de casación laboral contra la Resolución de 25 de mayo de 2000, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, dentro del Proceso Laboral: LAZARO ARCIA -vs- IBETH MENDOZA RODRÍGUEZ.

Del recurso se le corrió traslado a la parte trabajadora de acuerdo a lo previsto en el artículo 927 del Código de Trabajo, y la misma no hizo uso de su derecho de oposición a este medio de impugnación extraordinario.

ANTECEDENTES DE ESTE RECURSO

La génesis de este recurso de casación descansa en un proceso de reintegro por fuero de maternidad incoado por Ibeth Mendoza Rodríguez, reintegro que fue impugnado por el señor LÁZARO ARCIA, presuntamente parte empleadora en este proceso laboral. Mediante Sentencia N°3 de 11 de febrero de 2000, el Juez de primera instancia resolvió declarar la caducidad del derecho de la actora dentro del proceso de reintegro por despido en violación del fuero de maternidad, transformado en proceso abreviado por LAZARO ARCIA.

La parte trabajadora al notificarse de la Resolución N°3 de 11 de febrero de 2000, no propuso recurso alguno, por lo que al ser contraria a las pretensiones de la señora Mendoza Rodríguez, el Juez Tercero elevó su decisión en consulta al Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, de acuerdo a lo previsto en el artículo 938 del Código de Trabajo.

DECISION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO

El Tribunal Colegiado de Segunda Instancia al conocer de la consulta, emitió la Sentencia de 25 de mayo de 2000 por medio de la cual revocó totalmente la Decisión del Juez Tercero de Trabajo de Bugaba considerando lo siguiente:

> "De los documentos que reposan en el expediente y de las afirmaciones hechas por los testigos que ambas partes han propuesto, es dable concluir dos puntos básicos. En primer lugar estamos frente al rompimiento de una relación de diversos contenidos, asunto propio de las relaciones existentes en la campiña de nuestro país. El rompimiento de esa relación produjo la intervención de otras

jurisdicciones para tratar de dirimir la controversia reinante. Así pues, la orden de desalojo dictada por la autoridad competente, en contra de IBETH MENDOZA, supone de hecho una situación a la que el Derecho del trabajo difícilmente puede abstraerse. Así pues, cual sea la solución que para el caso en estudio ordene este Tribunal debe tomar en cuenta la existencia de una relación social más amplia que trasciende la esfera del Derecho del trabajo.

En segundo caso, para este Tribunal es evidente la existencia de la relación laboral existente entre la señora IBETH MENDOZA y el señor LAZARO ARCIA; relación laboral sujeta a peculiaridades de nuestro medio. El hecho probado de que la señora IBETH MENDOZA resida en el lugar donde prestaba el servicio, por varios años, es un indicio claro de una relación laboral en la que el empleador le proporciona vivienda al trabajador como parte del acuerdo laboral al que llegan. Obviamente, al terminar el acuerdo laboral entre las partes, la circunstancia accesoria que representa el aprovisionamiento de vivienda, también finalizará, asuntos que al parecer fue resistido por la trabajadora y que motivó el proceso por lanzamiento del que se valió el señor ARCIA.

La relación de trabajo, ha sido puesta en evidencia por un número plural de testigos (Diógenes Cabrera p. 126, 127), incluido un testigo de la parte que niega la relación laboral (Mirta Rodríguez, hoja 125 del expediente). Dichas declaraciones, aunadas a la falta de explicación del motivo por el que la señora IBETH MENDOZA vivía en el lugar donde aduce que trabajaba, llevan a concluir al Tribunal que efectivamente estamos frente a una relación con contenido laboral".

Este discernimiento jurídico, ha sido señalado como ilegal por parte del señor LAZARO ARCIA, por medio de su procurador judicial, al considerar que el Tribunal Superior de Trabajo quebrantó el mandato contenido en los artículos 62, 106 y 732 del Código de Trabajo, supuesto éste que lo condujo a proponer el presente recurso de casación.

Encontrándose el recurso en este estado los Magistrados que integran la Sala proceden a resolver lo pertinente.

DECISION DE LA SALA
Cuestiones Previas

Antes de adentrarnos al conocimiento de fondo de este asunto laboral, esta Corporación de Justicia deja claro que el recurso extraordinario de casación, en concordancia con el artículo 924 del Código de Trabajo, tiene como objeto enmendar los agravios inferidos a las partes en las resoluciones judiciales de segunda instancia que hacen tránsito de cosa juzgada y en las que sin esta última circunstancia pueden acarrear graves e irreparables perjuicios.

También cabe reiterar que para la formalización del referido medio de impugnación extraordinario, el escrito delcasacionista debe cumplir con ciertas formalidades estatuidas en los artículos 925, 926, y 928 ibídem, con los cuales cumple parcialmente el interesado.

Sostenemos que parcialmente se ha dado cumplimiento a las precitada exigencias, en vista de que el demandante ha señalado que la Sentencia de 25 de mayo de 2000 presuntamente quebranta una norma, que ha sido calificada por la doctrina como disposición adjetiva o de procedimiento, como lo es el artículo 732 (sana crítica) del Código de Trabajo, y que no es revisable individualmente en esta vía procesal. Sobre este punto, la Corte ha manifestado en innumerables ocasiones, que las normas adjetivas, pueden servir de medio para demostrar la violación de disposiciones sustantivas. Estas últimas establecen los derechos, que de no haber sido reconocidos, pueden ser reclamados. En este sentido, las

normas adjetivas deben incidir en las sustantivas, para que puedan ser revisables ante esta Superioridad, en caso de que se considere que aquellas han sido quebrantadas.

Cuando la acusación se refiere exclusivamente a normas de carácter adjetivo, como en el presente caso, el cargo o los cargos quedan incompletos y no alcanzan a producir los resultados que persigue el recurso de casación, ya que así lo dispone el párrafo final del artículo 928 ibídem. Esta disposición recoge lo siguiente:

> "Artículo 928. Recibido el expediente, el Tribunal de Casación Laboral rechazará de plano el recurso si se ha interpuesto contra lo que dispone el artículo 925. Lo mismo hará cuando el recurso se pida únicamente la corrección, reposición o práctica de trámites procesales". (subrayado es nuestro)

El Tribunal de Casación conoce de errores in judicando y no de errores in procedendo (Ver Sentencias de 25 de enero de 2000, 28 de junio de 1999, 3 de marzo de 1998, 27 de febrero de 1998, de 24 de junio de 1997, 12 de junio de 1995, 19 de mayo de 1995 y 6 de julio de 1994).

Como corolario de la explicación vertida en párrafos anteriores, el análisis de los cargos planteados serán ponderados con los artículos 106 y 62 del Código de Trabajo.

Fondo

La primera norma que estima infringida el casacionista es el artículo 106 del Código de Trabajo

> "Artículo 106. La mujer que se encuentre en estado de gravidez sólo podrá ser despedida de su empleo por causa justificada, y previa autorización judicial.
>
> Cuando el empleador quiera despedir a una trabajadora que se encuentre en estado de gravidez, por haber incurrido en causa justificada de despido, solicitará previamente autorización a la autoridad jurisdiccional de trabajo correspondiente, ante la cual deberá comprobarse fehacientemente que existe causa justificada de despido.
>
> La autorización se tramitará como proceso abreviado de trabajo.
>
> En cualquier caso en que una trabajadora en estado de gravidez reciba notificación de despido o de terminación de su relación de trabajo, sin que medie la autorización previa de la autoridad judicial competente, la trabajadora deberá presentar al empleador o a cualquier autoridad de trabajo un certificado médico sobre su gravidez, dentro de los veinte días siguientes al de la notificación mencionada. Si así lo hiciere, la trabajadora tiene derecho a ser reintegrada inmediatamente a su empleo y al pago de su remuneraciones a partir de la fecha del despido. Vencido el plazo de veinte días de que trata esta norma y hasta por el término de tres meses siguientes, la trabajadora podrá exigir el reintegro pero con derecho a percibir salarios caídos, solamente desde la presentación del certificado médico correspondiente. En caso de renuencia del trabajador, la trabajadora podrá solicitar el reintegro, mediante los trámites del procesdo correspondiente".

La infracción la sustenta el casacionista argumentando que, el criterio adoptado en la Resolución emitida por el Tribunal ad-quem se contrapone a lo establecido en el artículo 106, dado que los juzgadores no reconocieron los supuestos de caducidad que contempla la norma. Que el término de la señora Ibeth

Mendoza Rodríguez para presentar el certificado médico es de veinte días siguientes a la notificación del despido o de la terminación de la relación de trabajo. Agrega el presunto empleador, que la señora Mendoza nunca presentó dicha certificación. Adicionalmente agrega el recuerrente que del artículo 106 del Código de Trabajo derivan dos momentos distintos: 1. el derecho de reintegro mediante la presentación del empleador o de cualquier autoridad de trabajo, con el consiguiente pago de salarios caídos; y 2. el de la acción judicial ante la renuencia del empleador de reintegrar. Finalmente estima la parte afectada que, ni dentro del plazo de los veinte días, ni dentro de los tres mesese se produjeron los momentos distintos antes citados, por lo que independientemente de su alegación o no el Tribunal de Primera Instancia declaró la caducidad y en consecuencia revocó la orden de reintegro, porque a su parecer, era lo procedente.

Frente al argumento del casacionista, entiende este Tribunal de toda la actuación que deriva de este proceso de impugnación de reintegro varias situaciones:

Observa que evidentemente existe una confusión en relación a lo que entrañan jurídicamente las figuras de la caducidad y de la prescripción. En este sentido es dable deternenos en este punto dada la importancia que reviste la dilucidación de este tema. La prescripción, en palabras sencillas, es el término de tiempo establecido en la Ley, en apoyo a la seguridad jurídica, para ejercer y conservar derechos, que deben ser reconocidos a quien alegue tenerlos, mediante la concurrencia a los Tribunales de Justicia competente. Al no ejercitarse la reclamación judicial oportuna, el derecho queda relegado a una simple expectativa, que por inercia del interesado no pudo ser reconocida plenamente. En este caso, es obvio que la pretensión se extingue. No obstante lo anterior, la prescripción debe ser alegada oportunamente para que el juzgador la reconozca en su decisión, puesto que la comparecencia a los tribunales no es lo que prescribe, sino el derecho como lo señalamos, lo que se traduce a que no puede ser invocada de oficio por el juez. Señala el Doctor Jorge FÁBREGA PONCE es "la facultad o el derecho a provocar la actividad jurisdiccional es imprescriptible. Una vez se presenta la demanda, aunque contenga una pretensión prescrita, el Juez la substancia y pronuncia un fallo" (FABREGA PONCE, Jorge. Derecho Procesal de Trabajo (individual y colectivo) Panamá 1982. Pág 492)

En lo que respecta a la caducidad en los aspectos generales, es el término de tiempo que prevé la Ley, y con que cuenta una persona para ejercitar derechos potestativos, como bien lo subrayó el Tribunal Ad-quem. Estos derechos potestativos están circunscritos en el terreno de aquellos derechos de hacer o no hacer algo, y que modifican una situación jurídica preexistente, y de la cual emergen consecuencias para la persona contra la cual se ejercita dichos derechos facultativos. Esto no impide la intervención de Tribunales, y la ejercitación directa y concreta de un derecho reconocido en la Ley o en sentencia judicial supone el inmediato sometimiento de quien debe responder en consecuencia a dicha pretensión. La caducidad, a diferencia de la prescripción, puede ser reconocida de oficio por el juzgador o ser invocada en juicio por la parte interesada. Al propósito del tema en el Derecho del Trabajo, el Magistrado Arturo HOYOS, señala que "la caducidad se refiere a un término de tiempo que otorga el legislador bien sea al trabajador o al empleador para que puedan ejercitar válidamente un derecho potestativo, con el efecto de que si no se ejerce dicho derecho dentro el término previsto en la ley aquél se extingue" (HOYOS, Arturo. Derecho Panameño del Trabajo. Volúmen I. Panamá 1982. Pág. 454).

Dilucidados los efectos jurídicos que emanan de las figuras jurídicas antes estudiadas, coincide este Tribunal de Casación con el discernimiento jurídico emitido por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial en el sentido de que, el artículo 106 del Código Laboral no prevé términos de caducidad, pues por un lado, la Ley lo contempla el artículo 12, numeral 3 del Código de Trabajo es elocuente al precisar que "la acción del trabajador para solicitar reintegro prescribirá en tres meses. Lo dispuesto en este ordinal es sin perjuicio de las reglas sobre prescripción de las demás acciones derivadas

de la terminación de la relación de trabajo" (Subrayado es de la Sala). Por el otro, cabe agregar que, en ambas situaciones en que se ha concebido un tiempo determinado para la presentación del certificado médico que acredite el estado de gravidez, el hecho de que se aporte tal documento en ese lapso, no obliga al empleador a reintegrar a la grávida, salvo que medie orden judicial. El Tribunal Superior de Trabajo lo dijo de esta manera:

> "Siguiendo el razonamiento del párrafo anterior ; el reintegro no está sujeto a término de caducidad como bien lo establece el artículo 12.3 del CT- pues la concresión del mismo no depende de la exclusiva voluntad del accionante, sino antes, por el contrario, precisa la decisión de la autoridad competente. No hay pues un derecho potestativo"... (Subrayado es de la Sala)

Vista la explicación anterior mal puede argüir el casacionista que se configuró una caducidad en perjuicio de la trabajadora grávida, porque no presentó el certificado de embarazo en el tiempo estipulado por la disposición, ya que tanto la Ley, como la realidad de los hechos apuntan, en todo caso, a la presunta configuración de una prescripción.

La prescripción por su lado, no debe reconocerse en este proceso de impugnación de reintegro por fuero de maternidad, dado que la parte, presuntamente empleadora, no invocó en su momento la excepción, tal como lo exije el artículo 576 del Código de Trabajo. Veámos que dice esta disposición:

> "Artículo 576. Cuando el juez considere justificados los hechos que constituyen una excepción, aunque ésta no se haya invocado ni alegado, deberá reconocerla en la sentencia y fallar el pleito en consonancia con la excepción reconocida; sin embargo, respecto a la excepción de prescripción es preciso que se alegue expresamente antes de la ejecutoria de la primera providencia que señale fecha de audiencia" (Subrayado es de la Sala)

Por lo señalado en líneas anteriores esta Superioridad Judicial Laboral arriba a la conclusión, que no se ha producido el quebrantamiento del contenido del artículo 106 del Código de Trabajo, por parte de la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial.

El artículo 62 del Código de Trabajo de igual manera se considera violentado por la Sentencia de de 25 de mayo de 2000, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, sin embargo a pesar de que esta disposición trata sobre la subordinación jurídica y la dependencia económica, el casacionista, en la exposición de su disconformidad tiende básicamente a tratar de convencer a esta Corporación Judicial de cómo debieron valorarse las pruebas aportadas en el proceso, incluyendo los testimonios de los testigos de ambas partes para la comprobación de la inexistencia de la relación de trabajo. En este sentido hay que recordarle al recurrente que el ejercicio valorativo de la prueba es sostenido por el principio de sana crítica, recogido en el artículo 732 del Código de Trabajo. La sana crítica, conforme definió COUTURE, constituye `una categoría intermedia entre la prueba legal (tarifa legal) y la libre convicción. Sin la excesiva rigidez de la primera y sin la excesiva incertidumbre de la última, configura una feliz fórmula, de regular la actividad intelectual del Juez frente a la valoración de la prueba. Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del Juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos, de peritos, de inspección judicial, de confesión en los casos en que no es lisa y llana) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. El Juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. La sana crítica es la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el

más certero y eficaz razonamiento.' (COUTURE, Eduardo. citado por Jorge Fábrega en Estudios Procesales. Tomo I. Editora Jurídica Panameña. Panamá 1988 pág. 129) (subrayado es nuestro).

Lo anterior, confrontado con la actividad judicial del Tribunal Superior de Trabajo, supone ineludiblemente que, el juzgador no valoró aisladamente el contenido de prueba, sino, integró de manera equilibrada su experiencia, su lógica y las evidencias y extrajo de ellas una conclusión lo más apegada posible a la realidad de los acontencimientos que dieron lugar a la solicitud de reintegro y la consecuente impugnación de reintegro. De cara a este escenario, mal puede este Tribunal de Casación evaluar el juicio del Tribunal Superior de Trabajo, bajo el prisma personal del recurrente. Salvo que se verifique un error de hecho en la valoración de las pruebas, en este caso, la Sala si estaría en condiciones de reevaluar el criterio externado por el Tribunal Superior deTrabajo, tal como lo ha reiterado la jurisprudencia nacional de esta manera:

> "En este sentido, las normas adjetivas deben incidir en las sustantivas, para que puedan ser revisables ante esta Superioridad, en caso de que se considere que aquellas han sido violentadas. Esto significa que el Tribunal de Casación conoce sólo de errores in judicando y no de errores in procedendo, salvo que se desprenda de las actuaciones, error de hecho en la valoración de pruebas que llevó a cabo el juez del conocimiento (Ver Sentencias de 24 de junio de 1997, 18 de abril de 1996, 12 de junio de 1995, 19 de mayo de 1995 y 6 de julio de 1994), que en este caso serían los Magistrados del Tribunal Superior de Trabajo". (subrayado es de la Sala- ver Sentencia de 16 de junio de 1998)

Hilvanadas todas las circunstacias fácticas y de derecho en este proceso laboral, concluye este Tribunal Superior que la Sentencia de 25 de mayo de 2000 no quebranta el contenido mandatorio de los artículos 106 y 62 del Código de Trabajo.

Por las razones expuestas, los Magistrados que integran la Sala Tercera (CASACION LABORAL) administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO CASAN la Sentencia de 25 de mayo de 2000, dictada por Tribunal Superior de Trabajo, dentro del Proceso laboral: LAZARO ARCIA -vs- IBETH MENDOZA RODRÍGUEZ.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO HOMERO IVAN COPARROPA, EN REPRESENTACIÓN DE EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA METRO OESTE, S. A. CONTRA LA SENTENCIA DE 7 DE FEBRERO DE 2000, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL. EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA METRO OESTE, S. A. -VS- JUAN MANUEL DIAZ SAUCEDO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTITRES (23) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

VISTOS:

Los licenciados Homero Ivan Coparropa y Candelario Santana Vásquez, apoderados judiciales de la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S. A. y del señor Juan Manuel Díaz Saucedo, respectivamente, han presentado

desistimiento del recurso de casación laboral interpuesto contra la sentencia de 7 de febrero de 2000 proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, dentro del proceso laboral EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA METRO OESTE S. A. -VS- JUAN MANUEL DIAZ SAUCEDO.

Los apoderados judiciales declaran lo siguiente:

> "...manifestamos que aceptamos los DESISTIMIENTOS presentados dentro del proceso laboral enunciado al margen superior y en virtud de ello solicitamos a usted tenga a bien ordenar el archivo del expediente, de la misma manera nos damos por notificado y nos allanamos de la resolución que admite los presentes desistimientos."

A juicio de la Sala, el desistimiento presentado por las partes es procedente y debe acogerse, dado que los artículos 941 y 942 del Código de Trabajo señalan que se puede desistir en cualquier estado del proceso, siempre que medie facultad expresa para ello y se cuente con la conformidad de la otra parte, requisitos que se cumplen en el presente caso.

Como corolario de lo antes expresado, la Sala Tercera (LABORAL) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República, y por autoridad de la ley, ADMITE el desistimiento del recurso de casación laboral interpuesto contra la sentencia de 7 de febrero de 2000, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, dentro del proceso laboral EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA METRO OESTE, S. A. -VS- JUAN MANUEL DIAZ SAUCEDO.

Notifíquese,

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR LA FIRMA VILLALAZ Y ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS EDUARDO DUQUE ZERR, CONTRA LA SENTENCIA DE 27 DE DICIEMBRE DE 1999, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: CARLOS EDUARDO DUQUE -VS- THE STAR AND HERALDO CO. Y/O ERCINA, S. A. Y/O DUTIGRAFIA IMPRESORES, S. A. Y/O DUALTY HOLDING THE COMPANY. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTITRES (23) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

VISTOS:

La firma Villalaz y Asociados, actuando en representación del señor CARLOS EDUARDO DUQUE ZEER, ha presentado recurso de casación laboral contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial el 27 de diciembre de 1999, dentro del proceso laboral promovido por el señor CARLOS EDUARDO DUQUE ZEER -VS- THE STAR AND HERALD, CO. Y/O ERCINA, S. A. Y/O DUTIGRAFIA IMPRESORES, S. A. Y/O DUALTY HOLDING THE COMPANY.

Se trata de un proceso común laboral promovido por el señor Duque Zeer contra las mencionadas empresas, a fin de que sean condenadas a pagarle la indemnización prevista en el artículo 223 del Código de Trabajo, en virtud de renuncia con causa imputable al empleador, presentada el 3 de junio de 1994.

El juzgador de primer grado condenó a la sociedad THE STAR AND HERALD CO. INC. al pago de la suma de B/.35,919.86, en favor de CARLOS EDUARDO DUQUE ZEER, correspondiente a la indemnización por renunciar con causa imputable al empleador, y el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial revocó

dicha sentencia y absolvió a la empresa demandada de las reclamaciones incoadas en su contra.

La Sala pasa a examinar los cargos que se le endilgan a la sentencia de segundo grado.

La casacionista sostiene que la sentencia por ella impugnada ha infringido los artículos 13 y 740 del Código de Trabajo.

La Sala tratará los cargos de forma conjunta, toda vez que los cargos de violación del artículo 13 (norma sustantiva) del Código de Trabajo, guardan relación con el artículo 740 (norma de procedimiento) que se dice violada.

La parte actora afirma que "el artículo 13 ha sido violado en el concepto de interpretación errónea, ya que el Tribunal Superior de Trabajo al revocar la sentencia del Juzgado Primero de Trabajo, aplicó indebidamente esta norma. El trabajador enumeró 15 hechos que motivaron su renuncia y en la demanda describió como los mismos en su gran mayoría, duraron hasta el momento en que se presentó su carta ante el empleador. Las pruebas aportadas demostraron que era evidente que la causal segunda del artículo 223 del Código de Trabajo persistió aún después de la renuncia"(Cfr. foja 3). Agrega además, que "no en vano, el Empleador trató de cancelar la parte del salario que no le había pagado y que había motivado su renuncia. Lo anterior desvirtúa la caducidad alegada, ya que esas pruebas, que se pidió su cotejo, queda comprobado en los informes del Ministerio de Trabajo, la actitud de mala fe y deslealtad de la empresa, para ocultar las mismas y dilatar todo este proceso laboral, que no cabe duda tuvo con evidentes connotaciones de tipo político-partidista".

En ese sentido, el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial estimó que "en cuanto a la carta de renuncia de que la empresa le redujo el pago del décimo tercer mes, podemos apreciar que en el libelo de demanda se señala que esta situación se dio a partir del 15 de agosto de 1993, si esto es así también, también le había caducado el derecho para renunciar por este hecho" (Cfr. foja 421).

Dentro de ese orden de ideas, el juzgador de segunda instancia advirtió que en cuanto "a la no emisión del cheque a favor de Darmar Zambrano y Carlos Agüero Calmet, la eliminación de la facultad de solicitar a la Junta Directiva los ajustes salariales del personal de la empresa y efectuar ajustes en la estructura de la empresa, que se le atribuyó a personal subalterno como el Auditor Interno, la facultad de impartir instrucciones y órdenes de tipo administrativo por encima de la Sub Gerencia General y el que miembros de la Junta Directiva intervienen directamente en la Administración de la empresa, el trabajador no indica a partir de qué fecha estas situaciones se venían dando".

Observa la Sala que gran parte del caudal probatorio presentado por la parte actora dentro del proceso son copias simples, pues no se encuentran autenticadas y las mismas no han sido aceptadas por la contraparte; nos referimos a los documentos que reposan de fojas 53 a 114 y de fojas 126 a 159 del proceso.

En el caso bajo estudio el recurrente presentó demanda laboral para exigir el pago de la indemnización correspondiente a la terminación de la relación de trabajo por renuncia por causas que atribuye al empleador.

En su carta de renuncia fechada 3 de junio de 1994, el trabajador enumera quince hechos de los cuales sólo cuatro indican la fecha en que los mismos ocurrieron, y éstos los constituyen:

-La supuesta agresión por parte del Presidente de la empresa en diciembre de 1993.

-Alteración de las condiciones de trabajo en mayo de 1994, consistente en que ordenó el pago de 2 cheques y los mismos no fueron elaborados.

-La reducción de los montos a pagar en concepto de décimo tercer mes, situación que se dio a partir del 15 de agosto de 1993 y en abril de 1994.

-En el mes de mayo de 1994 se introdujeron a sus oficinas revisando los

documentos que allí se encontraban.

Dentro de este contexto, observa la Sala que en el resto de los hechos, la parte actora no indica la fecha en la cual ocurrieron los restantes hechos que señala en su carta de renuncia.

En cuanto a la agresión por parte del Presidente de la empresa, hecho ocurrido, según el recurrente, en diciembre de 1993, resulta pa0lmario que le había caducado el derecho para renunciar por este hecho.

En cuanto a que no se cumplió la orden impartida por el señor Duque Zeer de que se confeccionaran dos cheques, esta Superioridad comparte el criterio del Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, en el sentido de que esta situación no constituye una alteración de la condiciones de trabajo lo cual vaya a justificar su renuncia en la empresa.

En lo atinente a la reducción del pago del décimo tercer mes señalado por el demandante en el hecho 3 de la renuncia, advierte que este hecho se dio a partir de agosto de 1993, y se repitió en abril de 1994. Sobre este punto es preciso externar las siguientes consideraciones.

"El Décimo Tercer Mes: Aunque la Ley no lo señala expresamente generalmente se ha entendido que las sumas que recibe el trabajador en concepto de la prestación denominada Décimo Tercer mes no constituyen salario. Esta prestación especial, en nuestra opinión, no debe ser considerada como salario para los efectos laborales, pues, ella está sometida a un régimen especial en el Decreto de Gabinete No. 221 de 1971. Dicho pago es una prestación "adicional" al salario del trabajador, que por norma expresa se asimila a éste en cuanto a que está sujeta a las mismas normas protectoras que el salario, lo cual no hubiese sido necesario plasmar en el Decreto de Gabinete No.221 de 1971 si el legislador hubiera entendido que el Décimo Tercer Mes era parte del salario. Por otra parte el Décimo Tercer Mes está sujeto a un régimen tributario diferente al de las sumas que integran el salario." (Hoyos Arturo, Derecho Panameño del Trabajo, Volumen I, Litografía e Imprenta LIL, Panamá, 1982, pág. 298).

En ese orden de ideas, tenemos entonces que si el décimo tercer mes no se considera como salario, el demandante no puede invocar su falta de pago como causal de renuncia justificada, toda vez que el artículo 223, numeral 2 es del tenor siguiente:

> "Artículo 223: Son justas causa que facultan al trabajador para dar por terminada la relación de trabajo, con derecho a percibir el importe de la indemnización por despido justificado, las siguientes:
> 1...
> 2. La falta de pago por parte del empleador del salario completo que legalmente le corresponda, en las condiciones convenidas o acostumbradas"

En cuanto a que en mayo de 1994 se introdujeron a su oficina para revisar documentación que ahí reposaba, en el presente proceso no hay constancia de estos hechos.

La Sala ha manifestado en múltiples ocasiones que "si bien el artículo 740 del Código de Trabajo señala que el Tribunal se segunda instancia puede practicar pruebas, éstas serán las necesarias para aclarar puntos oscuros o dudosos del proceso y no para probar los hechos que debe probar el demandante cuando sobre él recae la carga probatoria" (Cfr. sentencia de 29 de enero de 1999).

En cuanto al resto de los hechos, el demandante no probó la fecha en que los mismos ocurrieron, ni las causales, de tal forma que no se pudo determinar, la fecha en que se incumplió con las supuestas obligaciones y de esa forma ponderar si dicha omisión se produjo dentro de los dos meses anteriores a la presentación de la carta de renuncia del trabajador.

Ante este escenario jurídico, la Sala considera que el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial aplicó el artículo 13 del Código de

Trabajo, valorando debidamente los elementos probatorios contentivos del proceso laboral, razón por la cual no prosperan los cargos de violación de los artículos 13 y 740 del Código de Trabajo que se le endilgan a la sentencia de segundo grado.

Como corolario de lo antes expuesto, la Sala Tercera (LABORAL) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial el 27 de diciembre de 1999, dentro del proceso laboral promovido por el señor CARLOS EDUARDO DUQUE ZEER -VS- THE STAR AND HERALD, CO. Y/O ERCINA, S. A. Y/O DUTIGRAFIA IMPRESORES, S. A. Y/O DUALTY HOLDING THE COMPANY.

Notifíquese,

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.

(fdo.) JANINA SMALL

Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES

AGOSTO 2000

EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA

EUSEBIO MUÑOZ SHOEEN SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA DICTADA POR EL JUZGADO DE LA TERCERA VARA DE FAMILIA DE LA CAPITAL, ESTADO DE PRENAMBRUCO, BRASIL, POR LA CUAL SE DECLARA DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE LO MANTIENE UNIDO A LA SEÑORA COSETE LOURDES LEAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, ONCE (11) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El señor EUSEBIO MUÑOZ SHOEEN, mediante apoderado especial Lic. Mauricio Salinas, solicitó a la Sala, el reconocimiento y la ejecución de la Sentencia Extranjera dictada por el Juzgado de la Tercera Vara de la Familia de la Capital del Estado de Prenambruco, Brasil, por la cual se declara disuelto el vínculo matrimonial que lo mantenía unido a la señora COSETE LOURDES LEAL.

ANTECEDENTES

El proponente basa su solicitud en los siguientes hechos:

> **"1. El señor Muñoz Shoeen contrajo matrimonio con la señora Cosete Lourdes Lean de Muñoz en la ciudad de Panamá, República de Panamá el 1° de agosto de 1968 ante la entonces Juez Tercera Municipal Alma Montenegro de Fletecher (sic.). El matrimonio consta en el tomo setenta (70), folio 116, partida 232 de matrimonio de la Provincia de Panamá.**
>
> **2. Posteriormente la pareja se mudó al Brasil.**
>
> **3. El matrimonio se disolvió judicialmente mediante sentencia judicial dictada por el juez de derecho de la Tercera Vara de la Familia de la capital el día 16 de enero de 1989 en Brasil. El juez que dictó la sentencia fue) (sic.)**
>
> **4. El consulado de Panamá en Brasil les dado su visto bueno (sic) en cuanto a la autenticidad y debido trámite de estos documentos se refiere."**

Admitida la solicitud, se corrió traslado al señor Procurador General de la Nación para que emitiera su opinión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1410 del Código Judicial. El señor Procurador opinó:

> **"...Ante esa situación, es procedente considerar que estamos ante el fenómeno de la rebeldía en los términos expresados por la norma transcrita, por lo que considero que no debe accederse a la presente solicitud de exequátur. Así os solicito."**

Considerada la opinión del señor Procurador General de la Nación y luego de encontradas otras deficiencias, la Sala, mediante Resolución de 28 de septiembre de 1999, concedió, al solicitante, un término de cuarenta y cinco (45) días para subsanar las anomalías y presentar una certificación, del tribunal de la causa, donde conste que la señora COSETE LOURDES LEAL, fue notificada, personalmente, de la demanda de divorcio propuesta en su contra.

CONSIDERACIONES

Transcurrido el término concedido, corresponde, a la Sala, decidir sobre lo pedido. Como se desprende del análisis de las piezas que forman el expediente, el solicitante presentó los documentos necesarios para que le fuera acogida la petición; pero, la sentencia dictada por las autoridades brasileñas deja establecido que la señora COSETE LOURDES LEAL fue declarada en rebeldía; más, no

hace la aclaración, si la condición de rebeldía fue declarada por no comparecer al proceso, luego de haber sido notificada personalmente de la demanda o por no comparecer luego de haber sido emplazada y haber vencido el término para su comparecencia.

Por otro lado, la Sala en la resolución de 28 de septiembre de 1999, también señaló que, algunos de los documentos presentados, se encontraban en portugués, sin la correspondiente traducción oficial al español; por lo que, en el mismo término concedido, el solicitante debía aportar dichos documentos, con su correspondiente traducción.

DECISIÓN

Llegado el momento de decidir, encuentra la Sala que ha transcurrido, con creces, el término concedido al solicitante para subsanar los defectos de que adolecen las pruebas presentadas y la certificación solicitada, sin que lo hubiese hecho; por lo que, debemos negar la solicitud presentada por el señor EUSEBIO MUÑOZ SHOEEN.

En consecuencia, la SALA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA la solicitud de reconocimiento y ejecución de la Sentencia Extranjera, dictada por el Juzgado de la Tercera Vara de la Familia de la Capital, Estado de Prenambruco, Brasil, presentada por el señor EUSEBIO MUÑOZ SHOEEN; y, se ORDENA el archivo del expediente, previa anotación de su salida en libro respectivo.

Notifíquese y Cúmplase,

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

LA FIRMA FORENSE BOUTIN LAW FIRM, SOLICITA LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA DEL 8 DE JUNIO DE 1999, PROFERIDA POR EL COMITÉ DEL TRIBUNAL DE DISTRITO DE MALOJA, CH-7503, SUIZA, COMO REPRESENTANTES LEGALES DE KPMG FIDES DEL DR. IUR HUBERT ACHERMAN Y DORIS SUSSI. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA Z. PANAMÁ, ONCE (11) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Dr. iur. Hubert Acherman y Doris Russi en nombre y representación de KPMG Fides mediante poder especial otorgado a la Firma Forense BOUTIN LAW FIRM, solicita a la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia para que se declare ejecutable en la República de Panamá la Sentencia de 28 de enero de 1999 -EXEQUATUR- proferida por la Comisón Tutelar de Engandina Alta, ubicada en Chesa Ruppanner, CH-7503 Samedan, Cantón Grisones, Siuza, confirmada por la Sentencia de 8 de junio de 1999 proferida por el Comité del Tribunal de Distrito de Maloja, CH-7503, Suiza.

El petente sustentó su solicitud en el hecho de que la sentencia versa sobre una pretensión personal. Señaló que la sentencia no fue dictada en rebeldía y cumple con la regularidad del trámite del proceso evacuado en el extranjero. Además indicó que el objeto de la demanda de su proceso en Maloja, Suiza es lícito y conforme al derecho del foro y no viola el orden público.

El señor Procurador, a través de su Vista No.30 de 26 de julio del año en curso, vertió su criterio arribando a la conclusión de que "lo procedente es reconocer eficacia jurídica a la resolución comentada y autorizar que se

compulsen las copias de toda la actuación, de manera que los documentos originales puedan ser devueltos al peticionario, con la finalidad que pueda gestionar con ellos ante el juez competente en los términos expresados por la ley, por lo que solicito así sea declarado en su oportunidad" (cfr. foja 28).

Observa la Sala que, de conformidad con el artículo 864 del Código Judicial, los documentos aportados en el presente negocio cumplen con el requisito de la legalización o Apostilla, requerimiento importante para todo documento extendido en país extranjero cuya ponderación va ha ser sometida a los tribunales panameños.

Dentro de este contexto, una vez expuestas las opiniones del petente y del señor Procurador, procede la Sala al análisis de la solicitud.

El exequátur constituye un mero control, se limita a verificar la forma de la sentencia, razón por la cual no tiene por finalidad hacer una revisión del fondo del proceso. El ejercicio del control va dirigido exclusivamente a verificar la competencia y la notificación del demandado o de las partes afectadas, así como su legalidad formal, constituida por los requisitos previstos por la ley local.

Siguiendo este orden de ideas procedemos a confrontar el caso bajo estudio con la normativa establecida por la lex fori.

El Código Judicial, a través de su artículo 1409, establece en lo atinente al reconocimiento y ejecución de Sentencias Extranjera lo siguiente:

> "ARTICULO 1409: Las sentencias pronunciadas por Tribunales extranjeros y los fallos arbitrales extranjeros tendrán en la República de Panamá la fuerza que establezcan los convenios o tratados respectivos.
> Si no hubiere tratados especiales con el Estado en que se haya pronunciado la sentencia, ésta podrá ser ejecutada en Panamá, salvo prueba de que en dicho estado no se da cumplimiento a las dictadas por los Tribunales panameños.
> Si la sentencia procediere de un Estado en que no se dé cumplimientos a las dictadas por los Tribunales panameños no tendrá fuerza en Panamá.
> Sin perjuicio de lo que se dispone en tratados especiales, ninguna sentencia dictada en país extranjero podrá ser ejecutada en Panamá, si no reúne los siguientes requisitos:
> 1. Que la sentencia haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una pretensión personal, salvo lo que la ley disponga especialmente en materia de sucesiones abiertas en países extranjeros.
> 2. Que no haya sido dictada en rebeldía, entendiéndose por tal, para los efectos de este artículo, el caso en que la demanda no ha sido personalmente notificada al demandado, dentro de la jurisdicción del Tribunal de la causa, a menos que el demandado rebelde solicite la ejecución;
> 3. Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en Panamá; y,
> 4. Que la copia de la sentencia sea autentica.
> Se entiende por sentencia la decisión que decide la pretensión."

Un requisito indispensable que debe reunir una sentencia extranjera para que sea ejecutada en nuestro territorio es que posea carácter de cosa juzgada. Esta afirmación se fundamenta en la naturaleza vinculante y obligatorio que contienen las decisiones extranjeras y que, por tanto, requieren una autorización por parte de este Tribunal a fin de poder tener esos efectos dentro del territorio nacional, lo cual conlleva una revisión de cada caso de tal forma que se verifique de antemano si las resoluciones de que se trate vulneran principios considerados de orden público dentro de nuestro país. Cuando a una resolución se

le otorga exequátur, significa que la misma adquiere el carácter de cosa juzgada dentro de la República de Panamá y que, de ser el caso, tal ponderación de la resolución da derechos en nuestro país.

Al respecto la lex fori establece una serie de requisitos y procedimientos cuando se trata de autos de declaratoria de herederos o de resolución de adjudicación dictada en el extranjero, con el objeto de que surta efectos en nuestro país. Para mayor ilustración, transcribiremos el artículo 1549 del Código judicial:

> "Artículo 1549: Cuando el auto de declaratoria de herederos o la resolución de adjudicación haya sido dictada por Tribunal extranjero y el causante hubiere dejado bienes en el país, se fijarán y publicarán los edictos y seguirá el procedimiento establecido en el artículo 1534 y siguientes."

Se infiere de la norma antes citada, que nuestro Código Judicial le da igual tratamiento el auto de adjudicación y al auto de declaratoria de herederos cuando proceden del extranjero: Posteriormente, ambos seguirán el procedimiento que se adelanta luego de dictado el auto de declaratoria de herederos, de conformidad con lo establecido en los artículos 1534 y siguientes del Código Judicial.

La decisión en cuestión tiene como punto central servir de prueba en la administración de la propiedad de una hija.

Dentro de este contexto, advierte esta Corporación que el auto está revestido de carácter probatorio, ya que trata sobre la destitución del Órgano Rector constituido por cinco miembros el derecho de administración de la propiedad de una hija de Athina Roussel como se providencia en el testamento de Christina Onasis del 12 de octubre de 1988 por lo que resulta procedente conferirle eficacia probatoria a la documentación presentada, con el propósito de que sea presentada ante la instancia judicial competente.

De conformidad con lo normado en el artículo 101 numeral 2, del Código Judicial, la Sala es competente para mantener el control previo sobre toda resolución judicial proveniente de otro Estado cuya eficacia se requiere en nuestro país.

En virtud de esa facultad conferida procedemos a otorgarle eficacia probatoria al auto que se pronuncia sobre la propiedad de Athina Hélene Roussel bajo estudio.

Como corolario de todo lo expuesto, LA SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA:

I. Que la presente sentencia NO REQUIERE el trámite de exequátur, por no tratarse de una sentencia ni de auto que pone fin al proceso, en virtud de que según el orden público panameño, dicha resolución no puede hacer tránsito a cosa juzgada respecto de los bienes que se encuentran en territorio de la República de Panamá.

II. SE AUTORIZA que la presente resolución tenga eficacia en la República de Panamá en los términos previstos por el Artículo 1549 del Código Judicial, ya que su contenido no violenta los principios generales del orden pública panameño.

III. COMPULSENSE copias de todas las actuaciones, de forma tal que los documentos originales pueden ser devueltos al recurrente, con la finalidad de que pueda gestionar con ellas ante el juez competente, en los términos de esta resolución.

Notifíquese y Cumplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ELEUTERIO SANTOS ROSALES, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO DICTADA POR EL JUGADO TERCERO DE FAMILIA DE MANIZALES, COLOMBIA, POR LA CUAL SE DECLARA DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE MANTIENE CON LA SEÑORA MARIA NOHELIA BERRIO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El licenciado JOSÉ HERBERT CARVALHO ha presentado en su calidad de Apoderado Especial del señor ELEUTERIO SANTOS ROSALES, solicitud a la Sala Cuarta de Negocios Generales para el reconocimiento y ejecución de la sentencia de divorcio proferida por El Juzgado Tercero de Familia de Manizales, Colombia, dictada el ocho (8) de mayo de mil novecientos noventa y ocho (1998), mediante la cual se declara disuelto el vínculo matrimonial existente entre su persona y la señora MARÍA NOHELIA BERRIO.

ANTECEDENTES DEL CASO

Los señores ELEUTERIO SANTOS ROSALES y MARÍA NOHELIA BERRIO, contrajeron matrimonio en la República de Panamá el veintitrés (23) de junio de mil novecientos noventa y dos (1992). Dicho matrimonio se encuentra inscrito al tomo número 254 de matrimonios de la Provincia de Panamá, Asiento 1140, de la Dirección del Registro Civil del Tribunal Electoral.

Posteriormente se produce la disolución del vínculo matrimonial mediante sentencia de ocho (8) de mayo de mil novecientos noventa y ocho (1998) dictada por el Juzgado Tercero de Familia de Manizales, Colombia.

En base a lo anterior el apoderado judicial solicita que se reconozca y se ejecute en la República de Panamá, la sentencia extranjera en estudio toda vez, que la misma cumple con lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial.

OPINIÓN DEL PROCURADOR

Admitida la solicitud presentada ante esta Corporación, se corrió traslado al señor Procurador General de la Nación, quien en su Vista No. 31 de 26 de julio de 2000 señala que hace falta el certificado de autenticación de legitimidad del funcionario consular acreditado en el extranjero y que frente a ésta omisión solicita a la Honorable Sala de Negocios Generales le conceda a la parte peticionaria un lapso razonable para que presente la aludida certificación.

DECISIÓN DE LA SALA

Vista la opinión del señor Procurador General de la Nación, se observa además, que el apoderado ha presentado como prueba los siguientes documentos: Certificado de matrimonio de los señores ELUTERIO SANTOS ROSALES y MARÍA NOHELIA BERRIO CORTES expedido por la Dirección General del Registro Civil de Panamá visible a foja 3; Copia íntegra de la sentencia extranjera de 8 de mayo de 1998 dictada por el Juzgado Tercero de Familia de Manizales, Colombia debidamente autenticada por nuestras autoridades en la ciudad de Santafe de Bogotá, sin embargo en el reverso de la aludida sentencia no consta la certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá que indique que efectivamente, si la Señora ARACELI CISNEROS BENJAMÍN ejercía el cargo de Encargada De Asuntos Consulares en Santafé de Bogotá Colombia el 1 de junio de

2000, por lo que no se estima debidamente cumplido el requisito de legalización del documento en cuestión.

En este punto se debe destacar que la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia es el ente idóneo para "Examinar las resoluciones judiciales pronunciadas en el país extranjero incluso las arbitrales, para el efecto de decidir si pueden ser o no ejecutadas en la República de Panamá sin perjuicio de lo estipulado en los tratados públicos" en atención a lo establecido en el artículo 101 numeral 2 del Código Judicial.

Toda vez que dentro de las pruebas aportadas no se observa la certificación expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá que acredite quien ejercía el cargo de Encargado de Asuntos Consulares en Santafé de Bogotá el 1 de junio de 2000, esta Corporación de Justicia coincide con la opinión del Señor Procurador de la Nación, en cuanto a que la aludida sentencia debe poseer la certificación expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA y por autoridad de la Ley, CONCEDE al recurrente ELEUTERIO SANTOS ROSALES, un término de siete (7) días hábiles para que presente ante esta Superioridad la certificación expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá acreditando quien ejercía el cargo de Encargado de Asuntos Consulares en Santafé de Bogotá el 1 de junio de 2000.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRNCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

LINDA TARAZI HARARI, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DICTADA POR EL JUGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE SAN JOSÉ, REPÚBLICA DE COSTA RICA, POR LA CUAL SE DECLARA DISUELTO EL MATRIMONIO QUE LA MANTIENE UNIDA AL SEÑOR LUIS SCHACHTEL KAVER. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS.

El licenciado CARLOS JESÚS PÉREZ ha presentado en su calidad de Apoderado Especial de la señora LINDA TARAZI HARARI, solicitud a la Sala Cuarta de Negocios Generales para el reconocimiento y ejecución de la sentencia de divorcio No.553 de 19 de junio de 1997 proferida por el Juzgado Segundo de Familia de San José, República de Costa Rica, mediante la cual se declara disuelto el vínculo matrimonial existente entre su persona y el señor LUIS SCHACHTEL KAVER.

ANTECEDENTES DEL CASO

Los señores LUIS SCHACHTEL KAVER y la señora LINDA TARAZI HARARI, contrajeron matrimonio en la Ciudad de San José, República de Costa Rica, el día 21 de junio de 1986. Dicho matrimonio se encuentra inscrito al tomo número 12 de matrimonios en el extranjero, asiento 77, de la Dirección del Registro Civil del Tribunal Electoral de Panamá.

Posteriormente se produce la disolución del vínculo matrimonial mediante sentencia de diecinueve (19) de junio de mil novecientos noventa y siete (1997) dictada por el Juzgado Segundo de Familia de San José de Costa Rica.

En base a lo anterior el apoderado judicial solicita que se reconozca y se ejecute en la República de Panamá, la sentencia extranjera en estudio toda vez, que la misma cumple con lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial.

OPINIÓN DEL PROCURADOR

Admitida la solicitud presentada ante esta Corporación, se corrió traslado al Señor Procurador General de la Nación, quien en su Vista No. 33 de 11 de agosto de 2000 señala que en atención a lo expresado, es válido considerar que en el presente caso se han cumplido los requisitos que la normativa aplicable exige para adjudicarle reconocimiento y ejecución a las sentencias extranjeras.

DECISIÓN DE LA SALA

Vista la opinión del la señora Procuradora General de la Nación, se observa además, que el apoderado ha presentado como prueba los siguientes documentos: Certificado de matrimonio de los señores Luis Schachtel Kaver y Lynda Tarazi Harari expedido por la Dirección General del Registro Civil de Panamá visible a foja 6; Copia íntegra de la sentencia extranjera de 19 de junio de 1997 proferida por el Juzgado Segundo de Familia de San José, República de Costa Rica, debidamente autenticada por nuestras autoridades en la ciudad de San José de Costa Rica, y posteriormente por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Panamá (f.5) que incluye el régimen de visitas, así como pensión alimenticia y guarda y crianza de los menores habidos en el matrimonio

Observa la Sala, en cuanto a la licitud de la sentencia que nos ocupa que efectivamente, la misma es conforme a lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial, ya que, dicha sentencia fue dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal. Se aprecia que toda la documentación proveniente del extranjero se encuentra debidamente autenticada por las autoridades consulares correspondientes, requisitos necesarios para que se declare su ejecutabilidad en la República de Panamá.

Además, esta Corporación de Justicia observa que la sentencia no fue dictada en rebeldía, pues los señores LUIS SCHACHTEL KAVER y LYNDA TARAZI HARARI participaron en el proceso toda vez, que la causal invocada fue el mutuo consentimiento.

Por lo antes expuesto, y en cumplimiento con lo establecido en los artículos 1409 y 1410 del Código Judicial, procede la Sala a declarar ejecutable la sentencia.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la sentencia de divorcio No. 553 dictada por el Juzgado Segundo de Familia de San José, República de Costa Rica, mediante la cual se declara disuelto el vínculo matrimonial existente entre los señores LUIS SCHACHTEL KAVER y LYNDA TARAZI HARARI.

Se autoriza a la Dirección General del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcios en los términos de la presente resolución.

Notifiquese y Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTOS

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL NO. 3 DE LA CAPITAL FEDERAL, DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA DENTRO DE LA CAUSA CARATULADA NO. 3412/00 "KORZIN MANUEL Y OTROS" S/EXTORSIÓN Y CON INTERVERNCIÓN DE LA FISCALÍA FEDERAL NO. 6. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, ONCE (11) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Nos ha sido remitido, a través de las Autoridades Diplomáticas correspondientes, el Exhorto Internacional librado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No.3 de la Capital Federal, de la República de Argentina dentro de la causa caratulada No.3412/00 "KORZIN MANUEL Y OTRO" s/extorsión y con intervención de la Fiscalía Federal No.6, para que esta Sala determine la viabilidad del mismo.

El tribunal de la causa argentino, solicita lo siguiente:

"1) se cite y reciba declaración testimonial, bajo juramento, de decir la verdad de todo cuanto supiere, al representante legal del estudio MOSSACK-FONSECA & CO., ubicado en el Edificio Arango-Orillac, 2do. Piso, calle 54 Este, Panamá, a fin de que aporte la totalidad de la documentación original existente en dicha firma, o en su defecto copias legibles debidamente autenticadas, en relación a las empresas Corporación América Sudamericana S.A., Birchtree Properties S.A., Sheenan Trading S.A., Chandler Holdings S.A., Gallomy enterprises S.A., Lakeson Enterprises Corp., Plever Development Inc., Guixo Lec Inc. y Rolika Inc.
2) se le requiera informar quien (sic) o quiénes son los clientes vinculados a las sociedades mencionadas. Específicamente en relación a la empresa Corporación América Sudamericana S.A., se informe qué persona o personas hicieron los trámites de constitución de la sociedad, quién retiró la documentación societaria-acciones y libros-, aportando al efecto, copia legible y debidamente certificada de los recibos correspondientes a dicha diligencia; si tiene conocimiento que fueran modificados los artículos 16 y 19 del Pacto Social original de aquella, mediante acta de fecha 27/3/97, protocolizada recién el 6/5/98 y que explique las razones por las que se concretaran distintos actos en el Uruguay. 3) Asimismo, indique si la firma que representa, ha tenido relación alguna, con lo Sres. Eduardo Eurnekian y/o Manuel Korzin y/o Marcelo Korzin y/o Raimundo Ortega Bianchi y/o Roberto Goldberg y/o Alfredo Ramírez Tejada Jr. 4) Se reciba declaración testimonial-bajo juramento de decir verdad de todo cuanto supiere- a Juan Mashburn, respecto a las actas 53 del 4/1/1996 y 4632 de 4/8/1997 de Chandler Holdings S.A., acta 4845 del 14/8/1997, acta 5209 del 6/5/1998 de Corporación América Sudamericana S.A.; Leticia Montoya, respecto al acta 53 de 4/1/1996 y 4632 del 4/8/1997 de Chandler Holdings S.A., acta 4845 del 14/8/1997, acta 5209 del 6/5/1998, acta 6446 del 28/5/1999, acta 2025 del 22/2/2000, acta 3370 del 29/2/2000 de Corporación América Sudamericana S.A.; Francis Pérez acta 53/ del 4/1/1996 de Chandler Holdings S.A. acta memorando of Association de Birchtree Properties, acta 6446 del 28/5/1999, acta 3370 del 29/2/2000 de Corporación América Sudamericana; Jazmín Taylor, acta 5209 del 6/5/1998, acta 6446 del 28/5/1999, acta 3370 del 29/2/2000, acta 2817 del 13/3/2000 de Corporación América Sudamericana S.A.; Ramsés Owens, acta 2817 del 13/3/2000 de Corporación América Sudamericana S.A.; Catalina Greenlaw actas 53 del 4/1/1996 y 4632 del 4/8/1997 de Chandler Holdings S.A., acta Memorando of Association de Birchtree Properties S.A., acta 4845 del 14/8/1997, acta 5209 del 6/5/1998 de Corporación América Sudamericana S.A., y Carlos Marimón, quien supuestamente inscribiera en el Registro Público de la República de Panamá, las

actas 3370 del 29/2/2000 y 2817 del 13/3/2000, a tenor del pliego de preguntas que al efecto se acompaña al presente, como así también copias certificadas de las actas referidas a efectos de su exhibición, quienes podrán ser citados al domicilio del estudio jurídico Mossack-Fonseca & Co. 5) Como última medida, se solicita, se requiera al Registro Público de Comercio de Panamá la remisión de copia certificada de los antecedentes registrales de las firmas Corporación América Sudamericana S.A., Birchtree Properties S.A., Shenan Trading S.A., Chandler Holdings, S.A., Gallomy Enterprises, S.A., Lakeson Enterprises Corp., Plever Development Inc., Guxio Lee Inc. y Rolika Inc."

Seguidamente encontramos el Pliego de Preguntas en Relación a la Causa Nro. 3412/2000 Caratulada "KORZIN MANUEL Y OTROS s/extorsión", en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro.3, Secretaría Nro.5.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

En base a lo establecido en el numeral 3 del artículo 101 del Código Judicial, corresponde a la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, determinar la viabilidad de los exhortos y comisiones rogatorias libradas por tribunales extranjeros; así como el funcionario o tribunal que debe cumplirlo.

Observa la Sala, que si bien es cierto, la República de Panamá y la República Federal Argentina, son suscriptores de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y de la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, las mismas no pueden ser invocadas en esta ocasión. Esto es así, ya que, el artículo 2 de ambas, circunscribe el alcance de las Convenciones a los procesos en materia civil y comercial.

El expediente, en el cual se libró el exhorto, trata materia penal; como se desprende de las piezas procesales enviadas con la solicitud de asistencia judicial internacional; lo cual, lo sustrae del alcance de las convenciones.

Por otro lado, las autoridades panameñas y argentinas, tampoco han suscrito convenios referentes a la asistencia judicial sobre recepción de pruebas en materia penal; por lo que procede la revisión de la petición incoada a través de la reciprocidad ofrecida, para casos similares, por el Estado Requirente; tomando como parámetros, el respeto al ordenamiento positivo interno y la costumbre internacional.

Se debe precisar que la inexistencia de tratados o convenios bilaterales entre la República de Panamá y el Estado Requirente no es motivo para rehusar la práctica de auxilio internacional, dado que la asistencia judicial tal como ha mencionado esta Sala de la Corte, en oportunidades anteriores, tiene su sustento en la buena fe de los Estados miembros de la Comunidad Internacional.

Luego de examinados los presupuestos legales para determinar la viabilidad de la solicitud, debemos considerar también los requisitos formales a tenor de nuestra legislación y el derecho internacional. Al respecto debemos indicar que la documentación aportada se encuentra debidamente legalizada a través de la "APOSTILLE"; convenio de legalización de documentos emitidos en el extranjero, al cual esta adherida la República de Panamá.

Examinadas las formalidades, pasamos a considerar la petición efectuada por el Juez Federal a Cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro.3 de la Capital Federal, de la República Argentina.

En primer lugar, la Autoridad Requirente solicita se cite y reciba declaración jurada al representante legal de la firma de abogados MOSSACK-FONSECA & CO. en relación a la constitución de un número plural de sociedades, en la cuales participó la firma mencionada. En este mismo sentido están dirigidos los

siguientes puntos del petitum.

Al respecto, la Sala debe advertir que, nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 170 del Código Penal, prohibe a los profesionales, que por razón de su oficio, tengan noticia de secretos cuya publicación pueda causar daño y los revele sin consentimiento del interesado o sin que la revelación fuere necesaria para salvaguardar un interés superior, la pena de privación de la libertad de 10 meses a 2 años e inhabilitación del ejercicio de la profesión.

Como se trata de hechos que se vinculan directamente a la relación abogado-cliente, la Sala no puede considerar viable la solicitud de asistencia judicial internacional dictada por las autoridades argentinas, en cuanto a los puntos 1), 2) y 3); por estar al margen de nuestro derecho.

Por otro lado, en el punto 4), se solicita recibir declaración a los señores JUAN MASHBURN, LETICIA MONTOYA, ANA MARÍA ESCOBAR, FRANCIS PÉREZ, JAZMÍN TAYLOR, RAMSÉS OWENS, CATALINA GREENLAW y CARLOS MARIMÓN; todas estas personas localizables, según el funcionario requirente, en el estudio de abogados Mossack-Fonseca & Co. Si bien es cierto, no se hace referencia a su calidad profesional, hemos de suponer que las personas, de quienes se solicita declaración, son abogados de la firma o empleados de la misma, toda vez que el domicilio denunciado, es el mismo que el del bufete mencionado. En consecuencia, les estaría vedado, declarar contra cliente o clientes, o revelar información sensitiva relacionada con la constitución de las sociedades en cuestión.

Aunado a lo antes señalado, a foja 7 del expediente encontramos que, dentro del pliego de preguntas, se hace mención a que se interrogue en relación a cada una de las actas especificadas en el exhorto y que "se acompañan al presente en copia". Las copias en mención, no fueron aportadas; lo que imposibilita, aún más, el que las personas mencionadas puedan declarar sobre dichos documentos.

Por último, se solicita que se requiera al Registro Público copia certificada de los antecedentes registrales de las firmas Corporación América Sudamericana S. A., Birchtree Properties, S. A., Shenan Trading S. A., Chandler Holdings, S. A., Gallomy Enterprises S. A., Lakeson Enterprises Corp., Plever Development Inc.,Guixo Lee Inc., y Rolika Inc. La Sala no encuentra objeción para acceder a este último requerimiento, por lo que se solicitará a la Dirección del Registro Público la información pedida por la autoridad argentina.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA PARCIALMENTE VIABLE, la solicitud de asistencia judicial internacional librada por el Juez Federal Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro.3 de La Capital Federal, de la República de Argentina y Ordena, que a través de la Secretaría de la Sala, se solicite la información requerida en el punto 5) de la carta rogatoria, mediante oficio dirigido a la Dirección General del Registro Público y en relación a las sociedades aquí mencionadas.

Una vez debidamente diligenciado, el presente exhorto, désele salida, previa anotación en el libro respectivo y remítanse las actuaciones a nuestra cancillería, para su posterior devolución a las autoridades correspondientes.

Notifíquese y Cúmplase

(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTO LIBRADO POR EL TRIBUNAL REGIONAL DE VADUZ, EN EL PRINCIPADO DE LIECHTENSTEIN DENTRO DE LA CAUSA PROPUESTA POR CENE BANKIERS NV. CONTRA LA

SOCIEDAD DICORY OVERSEAS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, ONCE (11) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Mediante resolución fechada once (11) de febrero del dos mil (2,000), esta Sala de la Corte Suprema declaró VIABLE el diligenciamiento en el territorio nacional la solicitud que nos remitiese el Ministerio de Relaciones Exteriores, nuevamente mediante nota A.J. N°. 1429 del 19 de julio de 2,000 suscrita por la Subdirectora General Encargada de Asuntos Jurídicos y Tratados, proveniente de la Embajada de Suiza en relación a la ubicación de la Sociedad DICORY OVERSEAS S. A. en Urbanización Obarrio, calle 53 este con apartado postal 7284, Panamá 5.

Como se señala en el Informe Secretarial visible a fojas 7 del presente cuaderno, la solicitud internacional no pudo ser diligenciada porque la dirección no resulta suficiente para localizar a la empresa en cuestión, además según copia autenticada visible a fojas 8 el Registro Público de Panamá no aparece inscrita ninguna sociedad con ese nombre.

No obstante, considera esta Superioridad que el haberla declarado VIABLE, y no lograr posteriormente realizar efectivamente la diligencia, no tiene repercusión alguna, dado que la documentación remitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, tal como se manifiesta a párrafo anterior, fue tramitada en esta Sala como un exhorto o carta rogatoria, y luego que se añadan las informaciones necesarias esta la Sala puede nuevamente a conocer sobre lo pedido.

En mérito de lo anteriormente expuesto, los Magistrados que integran la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN que en relación a la Resolución proferida por esta Sala fechada once (11) de febrero del dos mil (2000), dentro del expediente identificado con el número de entrada 669-99, fechada 26 de noviembre de 1999, puede ser solicitada nuevamente por las autoridades suizas, siempre y cuando se cumpla con los requisitos necesarios para cumplir con la solicitud reiterada.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AUGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, COSTA RICA, DENTRO DEL PROCESO PENAL, POR EL DELITO DE FALSEDAD IDEOLÓGICA EN PERJUICIO DE DANILO PALMA GÓMEZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Por conducto de la Subdirectora General Encargada de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores ha ingresado a la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, el cuaderno contentivo del Exhorto de 22 de marzo de 2000, librado por el Juzgado Penal Primer Circuito Judicial de San José, referente a la causa 99-010853-042- PE contra Stephen A. Drechsler y James Clayborne Edwards por el Delito de Falsedad Ideológica.

La petición formulada por el Estado Requirente es del tenor siguiente:

"Para efectos de determinar con certeza la existencia del ilícito denunciado , así como la participación y responsabilidad de cada uno de los imputados, las leyes violadas y procurar la recuperación de la pérdida sufrida por el ofendido se hace indispensable contar con el documento original, ubicado en el Banco Alemán-Platina, fechado 5 de abril de 1999, consistente en una orden de transferencia por setenta y siete mil dolares de los Estados Unidos de América, a debitar de la cuenta 63-01-033790-0, para acreditar en la cuenta No.. - 86-01-02039 del Banco BFA, Costa Rica, con el Banco Alemán Platina, Panamá, por orden de C.F.O. CAPITAL S.A., Costa Rica, esto con la finalidad de practicar el correspondiente estudio grafoscópico-comparativo."

En primer lugar, es preciso destacar que en atención a lo preceptuado en el artículo 101 numeral 3 del Código Judicial, es competencia de esta Sala de la Corte, "Recibir los exhortos y comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o tribunal que debe cumplirlo."

Pasa la Sala a verificar la existencia de convenios o tratados internacionales en materia de exhortos y de recepción de pruebas en el extranjero, suscritos entre Panamá y Costa Rica.

En este sentido, hemos constatado que los Estados de Panamá y de Costa Rica son suscriptores de la Convenciones Interamericanas sobre Exhortos o Cartas Rogatorias (Ley No. 12 de 23 de octubre de 1975) y Recepción de Pruebas en el Extranjero (Ley No. 13 de 23 de octubre de 1975).

Cabe advertir al respecto, que los citados instrumentos internacionales hacen mención expresa de que se aplicarán a los exhortos o cartas rogatorias expedidos en actuaciones y procesos en materia civil o comercial, no aplicándose los mismos a los procesos en materia penal como es el caso de la presente solicitud.

No obstante, es preciso tener presente que específicamente en materia penal la República de Panamá se reserva la potestad discrecional de acceder a las peticiones efectuadas por el suplicante, dadas las limitaciones que pudieran presentarse en nuestra legislación procesal sustantiva.

Observa la Sala que la documentación aportada cumple el requisito imperativo de la legalización tal como lo estatuye el artículo 864 del Código Judicial, estableciendo como corolario, el vínculo mínimo que debe relacionar la petición realizada por la vía de la comisión rogatoria, con el proceso que se surte en Costa Rica; por lo que seguidamente, procede al análisis del proceso in examine.

La colaboración judicial internacional solicitada por el Estado requirente, tiene su origen en un proceso que se adelanta contra los señores STEPHEN A. DRECHSLER Y JAMES CLAYBORNE EDWARDS, por el DELITO DE FALSEDAD IDEOLÓGICA, en perjuicio de DANILO PALMA GÓMEZ.

Esta Corporación de Justicia advierte que resulta imposible practicar la asistencia judicial solicitada en el sentido de secuestrar y decomisar la orden de transferencia por setenta y siete mil dolares de los Estados Unidos de América, a debitar de la cuenta 63-01-033790-0, para acreditar en la cuenta No. - 86-01-02039 del Banco BFA, Costa Rica, con el Banco Alemán Platina, Panamá, por orden de C.F.O. CAPITAL S. A., Costa Rica , puesto que ello sólo es posible cuando se ha presentado una acción exhibitoria y conforme a las normas y procedimientos que nuestro orden interno establece para tal finalidad; y es evidente que en el caso que ahora nos ocupa tal medida no se ha presentado, por lo tanto desestima pues este petitorio.

El artículo 89 del Código de Comercio dispone en su último párrafo lo

siguiente:

> "Ninguna autoridad está facultada para obligar al comerciante a suministrar copias o reproducciones de sus libros (o parte de ellos), correspondencia o demás documentos en su poder . Cuando procediera obtener algún dato al respecto , se decretará la acción exhibitoria correspondiente. El comerciante que suministrare copia o reproducciones del contenido de sus libros , correspondencia u otros documentos para ser usada en litigio en el exterior, en acatamiento a orden de autoridad que no sea de la República de Panamá , será penado con multa no mayor de cien balboas (B/. 100.00).

Ante la ausencia de un procedimiento judicial en un tribunal panameño que ordene una acción exhibitoria, resulta inadmisible acceder a la petición formulada.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE el exhorto librado por el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José, Costa Rica, dentro del proceso penal, por el delito de Falsedad Ideológica en perjuicio de DANILO PALMA GOMEZ y ordena Devolver el expediente contentivo de la presente documentación a la cancillería Panameña para los ulteriores trámites diplomáticos aplicables a esta materia.

Notifiquese y Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

DENUNCIA PRESENTADA POR LOS SEÑORES NURIA CONCHA BARRÍA, DESIDERIO ARROCHA G., ALFONSO ÁLVAREZ, ISIDORO RODRÍGUEZ, MARIO CASTILLO Y HERIBERTO QUIÑONEZ EN CONTRA DEL LICENCIADO ALPINO ZURITA SALCEDO POR FALTAS A LA ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ABOGADO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, ONCE (11) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Llevada a cabo la audiencia correspondiente a estos procesos disciplinarios, encuentra la Sala que el demandado ha manifestado, reiteradamente, su condición de candidato a puesto de elección para las contiendas electorales del año 1994; y, que la denuncia interpuesta en su contra, nunca debió ser recibida; ya que, gozaba de fuero electoral en ese momento.

La primera afirmación ha sido corroborada luego de la certificación expedida por el Subsecretario General del Tribunal Electoral, en donde hace constar que, el Licenciado ALPINO ZURITA SALCEDO, se constituyó oficialmente como candidato a Legislador (Segundo Suplente) para el Circuito 2-3, Provincia de Coclé, el día 29 de abril de 1994.

En cuanto a la segunda afirmación, la Sala debe señalar que, de acuerdo al artículo 128 del Código Electoral, los candidatos a puestos de elección no podrán ser detenidos, arrestados o procesados sin autorización del Tribunal Electoral, durante el proceso electoral. Como lo señala el Subsecretario General del Tribunal Electoral, el proceso electoral se declaró abierto mediante Acuerdo

No.30 de 7 de octubre de 1993 y el cierre del mismo, mediante Acuerdo No.64 de 11 de octubre de 1994.

Por consiguiente, el licenciado ALPINO ZURITA SALCEDO al haberse constituido como candidato a puesto de elección, gozaba del fuero electoral desde ese momento y hasta el 11 de octubre de 1994; período en el cual, según la ley, no podía ser detenido, arrestado o procesado, sin la autorización del Tribunal Electoral.

Ahora bien, la Sala debe determinar el alcance de lo establecido en el artículo 128 del Código Electoral, en cuanto a que: si en los procesos disciplinarios por faltas a la ética y responsabilidad profesional del abogado, se debe solicitar la autorización del Tribunal Electoral, para que el Tribunal de Honor del Colegio de Abogado inicie la investigación correspondiente a una denuncia.

Al respecto debemos dejar establecido que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 136 de nuestra Carta Magna, corresponde, privativamente, la interpretación de la ley electoral al Tribunal Electoral.

Siendo las cosas así, y como quiera que existe duda frente a la situación planteada, debemos invocar lo normado en el artículo 782 del Código Judicial; por lo que, consideramos oportuno solicitar a los Magistrados del Tribunal Electoral su opinión en cuanto al alcance del fuero electoral sobre los candidatos a elección, debidamente constituidos, en los procesos que se sigan en su contra por supuestas faltas a la ética y responsabilidad profesional del abogado.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA que, a través de la Secretaría de la Sala, se solicite al Tribunal Electoral opinión en relación al alcance del fuero electoral de los candidatos a puestos de elección, debidamente constituidos, en cuanto a las denuncias que por faltas a la ética y responsabilidad profesional del abogado, se interpongan en su contra.

Cúmplase,

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO DE MEJOR PROVEER DICTADO DENTRO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LAURA DE BARRIO CONTRA EL LICENCIADO LUCIO BERNAL POR FALTAS A LA ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ABOGADO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Realizada la audiencia el día 24 de julio del año en curso, encuentra oportuno la Sala que, en base a lo establecido en el artículo 782 del Código Judicial, debe aclarar algunos puntos tratados en el expediente. Para tal fin, requerimos el testimonio de la señora LAURA JARAMILLO DE BARRIO, con el objeto de que amplie el escrito de denuncia presentado el día 23 de junio de 1998.

Además se escuchará el testimonio de los señores SEVERINO BARRIO TERÁN, ANGÉLICA BARRIO y FLORIA JARAMILLO, aducidos como testigos por la denunciante.

Por otro lado, debemos solicitar a la Comisión de Arrendamiento de la

Provincia de Colón, Ministerio de la Vivienda, si ante dicho despacho, el licenciado LUCIO BERNAL, representando a la señora LAURA JARAMILLO DE BARRIO, ha realizado alguna gestión para el cobro de los arrendamiento vencidos; labor para la cual fueron solicitados sus servicios, según la demandante.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN SALA DE NEGOCIOS GENERALES, fija el día once (11) de septiembre del año en curso, a las nueve (9:00) de la mañana para que comparezca la señora LAURA JARAMILLO DE BARRIO a fin de que amplíe la denuncia interpuesta y el doce (12) de septiembre del presente año, a las ocho y treinta (8:30), nueve (9:00) y nueve y treinta (9:30) de la mañana para que comparezcan los señores SEVERINO BARRIO TERÁN, ANGÉLICA BARRIO y FLORIA JARAMILLO, a rendir testimonio.

Solicítese, por intermedio de la Secretaría de esta Sala, un informe, a la Comisión de Arrendamiento de la Provincia de Colón, del Ministerio de Vivienda, acerca de las gestiones realizadas o no, por el licenciado LUCIO BERNAL en representación de la señora LAURA JARMILLO DE BARRIO, para el cobro de arrendamiento vencidos en un edificio de su propiedad, ubicado en la ciudad de Colón.

Notifíquese y Cúmplase,

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN C.
Secretaria General, Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR ANTONIO DEL ROSARIO ACOSTA CONTRA EL LICENCIADO OMAR RODRÍGUEZ MUÑOZ POR FALTAS A LA ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ABOGADO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

A la Secretaría de la Sala Cuarta de Negocios Generales, de la Corte Suprema de Justicia, procedente del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, ingresó el cuadernillo contentivo de la denuncia por falta a la ética profesional presentada por ANTONIO DEL ROSARIO ACOSTA contra el licenciado OMAR RODRÍGUEZ MUÑOZ.

En nota remisoria en la que aparece como Sustanciador el licenciado Francisco Zaldívar S., se resuelve:

> Primero: Solicitar a la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, que declare la prescripción de la acción disciplinaria forense incoada contra el Licenciado OMAR RODRÍGUEZ MUÑOZ, con cédula de identidad personal No. 3-72-160 e idoneidad registrada al No. 2837 conforme el acuerdo No. 184 de 13 de septiembre de 1993. Segundo: Dispone se proceda a la salida del expediente en el libro de registro respectivo."

Observa la Sala que, como se desprende de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 8 de 16 de abril de 1993, por la cual se restituye con modificaciones el Capítulo V de la Ley 9 de 1984, que regula el ejercicio de la abogacía en Panamá, las acciones disciplinarias que se sigan contra los profesionales de la abogacía por faltas a la ética e infracción de la responsabilidad profesional de la abogacía prescriben en un año, y este lapso se ha cumplido, como consta a foja 1 del expediente, el señor ANTONIO DEL ROSARIO ACOSTA presentó la denuncia el 10 de agosto de 1995, sobre un hecho ocurrido en abril de 1994, es decir que han

transcurrido, luego de cometida la falta, cuatro (4) meses, por lo que a todas luces resulta prescrita la acción disciplinaria.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA PRESCRITA la acción disciplinaria promovida por el señor ANTONIO DEL ROSARIO ACOSTA contra el licenciado OMAR RODRÍGUEZ MUÑOZ, por faltas a la ética profesional y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Cúmplase,

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN C.
Secretaria General, Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

NIEVES HERNÁNDEZ INTERPONE DENUNCIA POR FALTAS A LA ÉTICA PROFESIONAL DE ABOGADO CONTRA EL LICENCIADO ARTURO MCTAGGART ESCARTIN. MAGISTRADO PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El día diecisiete (17) de julio de dos mil (2000) se llevó a cabo, ante la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, el debate oral establecido por la Ley dentro de la denuncia por faltas a la Ética y Responsabilidad del Abogado interpuesta por NIEVES HERNÁNDEZ. Habiéndose cumplido con esta instancia procesal, es deber de esta Superioridad pronunciarse sobre el presente negocio.

ANTECEDENTES DEL CASO

El denunciante, NIEVES HERNÁNDEZ, en denuncia presentada ante el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados el día 26 de febrero de 1998 y corroborada el 10 de marzo de 1998, en el formulario de denuncias del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados señaló que contrató los servicios del Licenciado McTAGGART para que lo representará en un caso de supuesto estupro. El señor NIEVES HERNÁNDEZ en su denuncia manifestó también que entregó la suma de doscientos balboas (B/.200.00) al Licenciado Mctaggart en concepto de los honorarios profesionales establecidos por el abogado para llevar a cabo tales servicios. Continua su relato el denunciante señalando que el licenciado McTAGGART no realizó los servicios para los cuales fue contratado y que desde el momento en que recibió el abono de doscientos balboas, no supo nada más del Licenciado McTAGGART ya que este evitó todo tipo de comunicación. Adicionalmente señaló que tampoco devolvió el dinero que le fue solicitado en su oportunidad por el incumplimiento del negocio jurídico a él encomendado.

A fojas 8-13 del expediente, se observa que el Tribunal de Honor abrió la investigación de los hechos denunciados y corrió traslado de la denuncia al Licenciado McTAGGART para que en el término de cinco días formulara sus descargos y presentará las pruebas que a bien tuviese y que el Licenciado McTAGGART no presentó ninguna contestación o prueba a su favor.

En virtud de lo preceptuado por el artículo 26 de la Ley 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley 8 de 16 de abril de 1993, El Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, mediante resolución visible de foja 15 a 16 del expediente, decidió solicitar a la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia el llamamiento a juicio del Licenciado ARTURO McTAGGART ESCARTÍN. Dicha solicitud estuvo basada en el hecho de que la conducta del Licenciado

McTAGGART ESCARTIN, se encontraba enmarcada en el ordinal cuarto del Artículo 24 de la Ley 8 de 1993.

Una vez ingresado el expediente a la Sala de Negocios Generales se le corrió traslado del mismo al denunciado quién no presentó escrito de oposición. Ante este escenario jurídico esta Superioridad procedió a evaluar todas y cada una de las piezas procesales a fin de determinar si existía alguna razón que obligara a esta Corporación de Justicia a ordenar la citación a juicio del Licenciado McTAGGART.

En resolución de once (11) de mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999), esta Superioridad decidió formular el llamamiento a juicio del Licenciado McTAGGART señalando en la misma que el Licenciado ARTURO McTAGGART ESCARTÍN se había apartado de los principios de Ética y Responsabilidad en el Ejercicio de la Abogacía.

LA AUDIENCIA

El día diecisiete (17) de julio del presente año se tenía como fecha para la celebración de la audiencia oral sin embargo, el Licenciado MCTAGGART no asistió a dicha audiencia.

En vista de lo acontecido, la Magistrada Sustanciadora señaló que la Sala pasaría oportunamente a resolver la presente denuncia por Faltas a la Etica y Responsabilidad Profesional del Abogado contra el Licenciado ARTURO McTAGGART ESCARTÍN.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El presente proceso se inició por razón de la denuncia por Faltas a la Ética Profesional interpuesta por el Señor NIEVES HERNÁNDEZ ABADÍA contra el Licenciado ARTURO McTAGGART ESCARTÍN. Esta denuncia se basa fundamentalmente en que el Licenciado McTAGGART fue contratado por el señor NIEVES HERNÁNDEZ para que lo representara en un proceso penal y que se le entregó al Licenciado McTAGGART ESCARTÍN una suma de dinero en concepto de los honorarios profesionales que se habían pactado y que este no realizó gestión alguna.

A foja 5 del expediente consta copia del recibo No. 4 de 20 de mayo de 1997 por la suma de doscientos balboas en concepto de Honorarios, sin embargo, el recibo No.4 de 20 de mayo de 1997 no esta a nombre del señor NIEVES HERNÁNDEZ, denunciante en el proceso que nos ocupa y el mismo no fue firmado por el Licenciado McTAGGART ESCARTIN, la aludida copia del recibo fue firmada por otra persona y sólo posee un sello que dice: ARTURO McTAGGART ESCARTÍN, ABOGADO, Reg. No. 2011.

También es preciso señalar que no consta en el expediente copia del poder otorgado al Licenciado McTAGGART para que representara al señor NIEVES HERNÁNDEZ ABADÍA en el proceso penal para el cual fuera contratado.

En consecuencia, resulta conveniente señalar que esta Corporación de Justicia arriba a la conclusión que no se ha probado plenamente en autos que el el Licenciado McTAGGART ESCARTÍN se haya apartado de los principios de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado y de la Ley No. 9 de 18 de Abril de 1984 por la cual se regula el ejercicio de la Abogacía (Reformado por la Ley 8 de 16 de Abril de 1993).

Sin embargo, en lo que respecta a la conducta procesal del Licenciado McTAGGART la Sala estima que no se ajusta a los principios de lealtad y probidad que deben regir la actuación de las partes en el proceso. Esto es así, porque, a pesar de haber sido notificado del proceso disciplinario que se tramitaba en su contra, en ningún momento, presentó escrito de oposición, ni aportó pruebas que lo eximieran de responsabilidad en los hechos que se le imputaban y no compareció a la Audiencia el 17 de julio de 2000 después de haberse notificado

de la resolución que fijaba la fecha y la hora de la misma. Como el Licenciado McTAGGAR incumplió el deber que tienen las partes y sus apoderados de comparecer al proceso, una vez que sean requeridos, y no concurrió a la vista oral de la causa actora para el cual fue citado, debe ser sancionado por esta Corporación de Justicia.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, AMONESTA PRIVADAMENTE al Licenciado ARTURO McTAGGART ESCARTÍN, varón, panameño, abogado en ejercicio, con cédula de identidad personal No. 8-163-285.

Notifiquese y Cúmplase.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

YADIRA JIMÉNEZ ORTEGA, INTERPONE DENUNCIA ANTE EL TRIBUNAL DE HONOR POR FALTAS A LA ETICA Y RESPONSABILIDAD DEL ABOGADO CONTRA LA LICENCIADA MARICELA CEBALLOS DE RUDAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Ha ingresado a la Secretaría de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, procedente del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, el cuaderno que contiene la denuncia por Falta a la Ética Profesional y Responsabilidad del abogado interpuesta por la señora YADIRA JIMÉNES ORTEGA contra la licenciada MARICELA CEBALLOS DE RUDAS.

La Sala estima pertinente reseñar los hechos que originaron la presente denuncia.

ANTECEDENTES

El Tribunal de Honor, en virtud de lo preceptuado por el artículo 26 de la ley 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley 8 de 16 de abril de 1993, emitió una relación de los hechos tenidos como falta a la ética (visible a fojas 29 a 31 del expediente), requiriendo a este Tribunal se DECRETE la CITACIÓN A JUICIO, a la licenciada MARISELA CEBALLOS DE RUDAS, mujer panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal No. 8-418-728, por violación de los literales ch y e del artículo 34 del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado.

La denuncia interpuesta por la señora YADIRA JIMÉNEZ ORTEGA, a través de nota fechada 29 de agosto de 1994, dirigida a los Miembros del Colegio de Abogados, y corroborada el día 2 de septiembre de 1994 en el formulario de denuncias del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, relata la falta de acuerdo en la fijación de honorarios y la retención de un cheque que le fuera entregado en calidad de apoderada legal, para así lograr la efectividad del saldo adeudado por la señora Jiménez Ortega.

El Tribunal de honor, mediante nota fechada 6 de septiembre de 1994, procedió con fundamento en lo establecido en el ordinal cuarto del artículo 24 de la Ley 8 de 1993, solicitar a la Licenciada Maricela Ceballos de Rudas, que en el término de cinco (5) días hábiles rindiera un informe, contestara y aportara las pruebas con relación a la denuncia por supuesta falta a la Ética, que fuera presentada en su contra.

ARGUMENTOS DE LA DENUNCIADA

La licenciada Ceballos mediante escrito recibido el día 3 de octubre de 1994, por el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, presentó el informe respectivo el cual nos permitimos transcribir textualmente:

> **"Primero: la señora Jiménez Ortega solicitó mis servicios profesionales para instaurar una Demanda de Divorcio en contra de su entonces esposo JUAN JOSÉ SILVA. Se presentó la demanda en el Juzgado de Circuito de San Miguelito. Acordando honorarios profesionales por la suma de trescientos cincuenta balboas B/. 350.00 mínimo fijado en la tarifa profesional en materia de divorcios. La señora Jiménez abonó la suma de cien balboas B/. 100.00.**
> **SEGUNDO: la señora Jiménez se le comunicó personalmente la existencia de la boleta de citación para el señor Silva y jamás se presentó.**
> **TERCERO: Transcurrió largo tiempo cuando se comunicó con mi persona solicitándome una investigación en el Banco Hipotecario si su persona se encontraba dentro del cuadro familiar. Trabajo que realizamos.**
> **CUARTO: luego fue citada en la Corregiduría de Belisario Porras por el señor Silva la cual acudimos en su representación y siempre fue asistida por mi persona en sus declaraciones. Estuvimos (sic) en tres ocasiones en dicha Corregiduría.**
> **QUINTO: la señora Jiménez llamaba a mi hogar a las 6:00 a. m. comunicándome reunión a las 8:00 a.m. le contesté que tenía compromisos para ese día que fijáramos nueva fecha lo cual le disgustaba.**
> **SEXTO: en cuanto que la reunión con el licenciado Tejeira no se efectuaba era que estaba sufriendo quebranto de salud ya que iba a ser intervenida quirúrgicamente el día 6 de mayo del presente año situación que le comuniqué a la señora Jiménez y al licenciado Tejeira. Le comuniqué que como le era urgencia resolver su problema solicitar los servicios de otro abogado aduciendo que me esperaría pues no contaba con dinero y mis honorarios lo cancelaría cuando recibiera el dinero pertinente a la venta de la casa.**
> **SÉPTIMO: la casa que compartía con el señor Silva no estaba cancelada totalmente y por su ubicación es muy difícil venderla y la señora exigía su dinero. La cual le ofrecieron B/. 1,500.00, lo cual solicita un aumento estableciéndose la suma de B/. 2,000.00 estando la señora presente se le preguntó delante de su esposo y el licenciado Tejeira, y ésta aceptó de lo contrario tendría que esperar que se realizara la venta. También se le entregaron todo los bienes muebles que se encontraban dentro del hogar.**
> **OCTAVO: Luego de acudir los esposos Silva Jiménez a presentar la solicitud de divorcio en esta oportunidad un mutuo consentimiento la señora Jiménez Ortega recibió delante de mi persona directamente del licenciado Tejeira la suma de B/. 1,500.00 luego informándome para mi sorpresa que le parecía muy raro alegando que no se había hecho nada. No le contesté y me retiré.**
> **NOVENO: Me ratifique de la solicitud de Divorcio como lo establece la ley de cumplir hasta el final con los procesos iniciados. Nunca más supe de la señor Jiménez hasta el día que recibí un cheque por el resto de lo acordado ese mismo día me llamo (sic) a mi casa le informé sobre mis honorarios y lo que recibí como respuesta fueron insultos hiriendo la moral de mi madre y la mía como profesional del derecho y amenazas" (visible a foja 16).**

El día 26 de junio de 1996 (visible a foja 27 del expediente), la señora Yadira Jiménez, presentó escrito anexo a su denuncia en la que señaló lo siguiente:

"Yo Yadira Jiménez con cédula 8-150-407, acuso a la licenciada Maricela Ceballos de Rudas de apropiación indebida y falsificación. El licenciado Aníbal Tejeira, le entregó mi cheque por la suma de B/. 500.00 ella se apoderó del cheque. He hablado con varios abogados para que me ayuden y lo que me dicen que son colegas. asi (sic) que eso significa que no me pueden ayudar. Quiero justicia por favor. Fuí donde el abogado Aníbal Tejeira para que me ayudara y eliminara ese cheque, y me hiciera otro cheque el averiguo (sic) y fue así como me entere,(sic) que falsificó mi firma, apoderándose del dinero". (visible a foja 30).

A este último escrito, la denunciante adjunta fotocopia del cheque girado a su favor endosado, hecho efectivo el 4 de mayo de 1995, (visible a foja 28).

VISTA DEL TRIBUNAL DE HONOR DEL COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS

El Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, mediante vista de 3 de mayo de 1999, resuelve requerir a este Tribunal que decrete la citación a juicio a la licenciada Maricela Ceballos de Rudas, portadora de la cédula de identidad personal 8-418-728, por falta a la ética cometida en el ejercicio de la profesión, sustentándose en los criterios siguientes:

"Considera que la licenciada Maricela Ceballos de Rudas, violó lo dispuesto en el capítulo II El Abogado y la Clientela, artículo 10 del Código de Ética y Responsabilidad del Abogado, cuando al presentar sus descargos, la denunciada no explicó que sucedió con el cheque certificado de la Caja de Ahorros, recibido por ella, como también considera ese Tribunal que si tenía derecho a recibir un pago razonable por sus servicios, pudo recurrir a la vía judicial correspondiente, a fin de hacer efectivo el pago de los mismos, constituyéndose grave indicio en su contra".

ESCRITO DE LA APODERADA LEGAL DE LA DENUNCIADA

La Licenciada Maricela Ceballos de Rudas, mediante apoderada legal, la licenciada Erayda Simiti, presentó en tiempo oportuno escrito de oposición de citación a juicio decretado por el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados de Panamá.

Transcribimos a continuación, la parte medular del escrito antes citado:

"...Quinto: Al concluir la fase de investigación, el Tribunal de Honor remite la causa con la recomendación de citación a juicio, sosteniendo que mi representada no explicó en su descargo que sucedió con el cheque, elemento éste que ha criterio del Tribunal violentó lo dispuesto en el capítulo II El Abogado y la Clientela, artículo 10 del Código de Ética y Responsabilidad del Abogado en los literales b y ch.
...
Consideraciones de Oposición y Excepción:
Iniciamos nuestra oposición señalando que, nuestra representada manifiesta el haberle entregado el cheque a la señora Yadira Jiménez, no obstante, como los hechos datan desde 1994, le ha sido difícil encontrar el recibo que ésta firmara el recibir el requerido cheque; pero en virtud de la recomendación del Tribunal de Ética nuestra representada se contactó con la señora Vivian Frain, con cédula de identidad personal No. 8-344-598, que estuvo presente al momento que se le entregó el cheque a la denunciante.
En este proceso sobresale el hecho que la señora denunciante tuvo y tiene problemas personales y familiares con mi representada.

Sobre las constancias hacemos algunas reflexiones como el por qué la

señora Jiménez Ortega, pese a los supuestos maltratos verbales de la licenciada Ceballos de Rudas, continuó requiriendo los servicios profesionales de la licenciada si según ella era mal atendida.
...
Los hechos existentes demuestran la animaversión de la señora Jiménez Ortega, hacia nuestra representada, como también el seguimiento preciso que le ha dado al cheque, observándose que fue de gerencia".

POSICIÓN DE LA SALA

Una vez analizadas las constancias de autos , la Sala advierte que obra a foja 7 del expediente, fotocopia del acuso de recibo de la licenciada Maricela Ceballos de Rudas, en que consta que recibió el cheque No. 653065-A a favor de Yadira Jiménez, el 19 de agosto de 1994; De igual forma (visible a foja 28 del expediente), observamos fotocopia del cheque en mención, endosado con fecha 4 de mayo de 1995.

Por su parte, la licenciada Marisela Ceballos de Rudas, en su escrito de oposición (visible a fojas 42), manifiesta no tener constancia de entrega del referido cheque a la señora Indira Jiménez, y para tal efecto, adjuntó a su escrito de oposición, declaración jurada de la señora VIVIAN FRAIN, con cédula de identidad personal No. 8-344-598, como prueba testimonial, para acreditar lo expuesto en su escrito. Para tales efectos esta Sala procedió de conformidad con lo previsto en el artículo 910 del Código Judicial, a dictar la providencia respectiva a objeto que sea ratificada la declaración extrajudicial rendida por Vivian Frain.

Como se observa a foja 55 del expediente, el informe preparado por el notificador de la Sala, no se pudo localizar a la señora Vivian Frain, quien debió ratificarse de sus declaraciones presentadas en la citada atestación notarial, ante tal situación, esta Sala se refiera al artículo 905 del Código de Procedimiento Civil, que en su defecto es aplicado como norma supletoria en este proceso, y que se refiere a la Fuerza de los Testimonios, que "UN TESTIGO NO PUEDE FORMAR POR SI SOLO PLENA PRUEBA; PERO SI GRAN PRESUNCIÓN CUANDO ES HÁBIL, SEGÚN LAS CONDICIONES DEL DECLARANTE Y SU EXPOSICIÓN".

En el mismo orden de ideas observamos que dentro del presente proceso, esta Sala no ha encontrado un hecho o circunstancia que indique que el cheque en cuestión haya sido entregado a su titular, ni indicios de fechas que coincidan con el tiempo en que el mismo fue endosado; siendo esto un aspecto relevante en el presente proceso.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA EL LLAMAMIENTO A JUICIO, de la licenciada MARISELA CEBALLOS DE RUDAS, con localización posible en Vía España, Perejil, Edificio Rafael, Primer Priso, Oficina No. 106, ciudad de Panamá, con fundamento en la ley 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley 8 de 16 de abril de 1993, denuncia interpuesta por la señora Indira Jiménez, por faltas a la ética y responsabilidad profesional del abogado, y establece que en fecha posterior se fijará el día y hora de la celebración del debate oral, en cuyo acto se practicarán las pruebas que presenten las partes.

Notifiquese y Cumplase,

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=